

TESE DE DOUTORAMENTO

**VIOLENCIA, CRIMEN Y SUS
INTERPRETACIONES EN LA
GALICIA CONTEMPORÁNEA (1840-
1936)**

Enrique Carballo Gende

ESCOLA DE DOUTORAMENTO INTERNACIONAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

2021

DECLARACIÓN DEL AUTOR DE LA TESIS

VIOLENCIA, CRIMEN Y SUS INTERPRETACIONES EN LA GALICIA

CONTEMPORÁNEA (1840-1936)

D./Dña.....Enrique Carballo Gende.....

Presento mi tesis, siguiendo el procedimiento adecuado al Reglamento, y declaro que:

- 1) *La tesis abarca los resultados de la elaboración de mi trabajo.*
- 2) *En su caso, en la tesis se hace referencia a las colaboraciones que tuvo este trabajo.*
- 3) *La tesis es la versión definitiva presentada para su defensa y coincide con la versión enviada en formato electrónico.*
- 4) *Confirmando que la tesis no incurre en ningún tipo de plagio de otros autores ni de trabajos presentados por mí para la obtención de otros títulos.*

En 19 de 01 de 2021

Fdo.....

D./Dña. **Miguel Cabo Villaverde**

En condición de: **Titor/a e director/a**

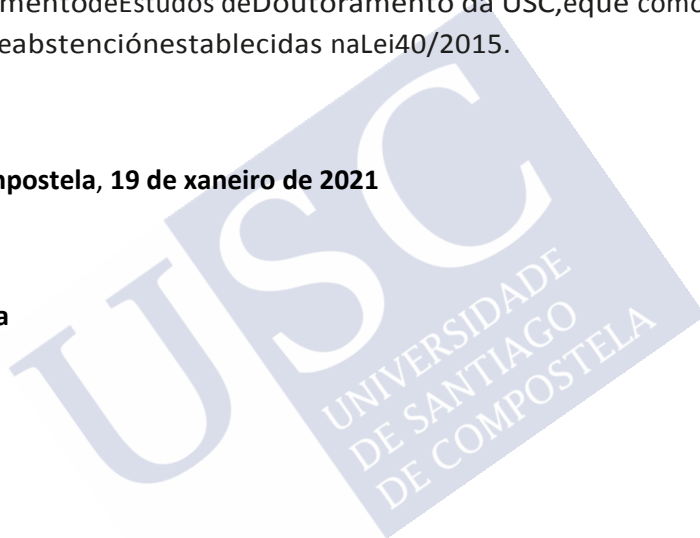
Título da tese: **Violencia, crimen y sus interpretaciones en la Galicia contemporánea (1840-1936)**

INFORMA:

Que a presente tese, correspóndese co traballo realizado por D/Dña Enrique Carballo Gende, baixo a miña dirección/titorización, e autoriza a súa presentación, considerando que reúne os requisitos esixidos no Regulamento de Estudos de Doutoramento da USC, e que como director/titor de tan non incorre nas causas de abstención establecidas na Lei 40/2015.

En **Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2021**

Sinatura electrónica



Resumen

La presente tesis doctoral investiga el crimen y la violencia en Galicia durante 1840 y 1936, un periodo delimitado por la Primera Guerra Carlista y la Guerra Civil y durante el cual este territorio no vivió episodios militares de significación. El trabajo trata de estudiar estos fenómenos y su significación en la vida cotidiana, las actitudes y las dinámicas sociales, así como insertarlos en las grandes tendencias a largo plazo. Por ello, se un parte de sustrato teórico holístico en el que se hace referencia a los modelos explicativos del crimen y la violencia en la historiografía, pero también en la biología, la sociología y la antropología.

Para contextualizar los objetos de estudio, y ante la ausencia de trabajos específicos, la tesis incluye un estudio de la evolución de la ley y de los modelos de aplicación de esta durante la etapa analizada, así como los periodos que la antecedieron. También del aparato de seguridad y la persecución de la delincuencia, tanto en lo referente a aparatos policiales y fuerzas privadas como a la participación ciudadana.

El propio estudio del crimen y la violencia se realiza tanto cuantitativa como cualitativamente. En el primero de los casos se ha echado mano del heterogéneo corpus estadístico producido por los contemporáneos y de un análisis parcial de la documentación jurídica que se conserva, complementada, en el caso de la violencia grave y política, por estudios sistemáticos de la prensa para determinados periodos.

En el aspecto cuantitativo se analizan en detalle muestras de delitos, proponiendo taxonomías para su análisis. Este enfoque se complementa con una aproximación a las actitudes y visiones acerca de los fenómenos echando mano de fuentes como la prensa o los libros de memorias, así como una recopilación comentada de las reflexiones de otros historiadores, sociólogos y antropólogos. La violencia política, y algunos tipos de violencia específicos, se estudian con más detalle.

Contenido

Dedicatoria	6
Contracciones frecuentes	6
1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN	8
1.1 Un crimen violento y algunas reflexiones sobre qué es un crimen y qué es la violencia	8
1.2 Factores biológicos en la violencia	10
1.3 Factores psicológicos y emotivos: el odio y la autoestima	12
1.4 Condiciones socioeconómicas en la violencia	16
1.5 Las tipologías de violencia en base a sus causas	18
1.6 Las tendencias a largo plazo en el crimen y la violencia	22
1.7 El proceso de la civilización y los procesos socioculturales de reducción de la violencia	25
1.8 Tendencias a largo plazo en España y Galicia	30
2. LAS MUTACIONES DE LA LEY	36
2.1 Quién dictaba la sentencia: la evolución de la estructura judicial y los jueces	36
2.2 La justicia local: alcaldes, jueces de paz y jueces municipales	49
2.3 Conclusiones sobre los cambios en la organización de la justicia convencional y municipal	53
2.4 Cambios en la legislación penal y en los delitos más frecuentes y aclaración de términos	54
2.4.1 Las lesiones corporales	55
2.4.2 Homicidio, parricidio, infanticidio, asesinato y aborto	56
2.4.3 Los delitos por lucro económico	59
3. FUERZAS POLICIALES	64
3.1 Profesionalidad y formación: algunos apuntes globales	65
3.2 Los (inexistentes) cuerpos policiales antes de nuestro periodo de estudio	67
3.3 La Guardia Civil	69
3.5 Los carabineros	84
4. POLICÍAS SIN UNIFORME: VIGILANTES, SOMATENES Y PEDÁNEOS	112
4.1 “El pueblo mata a dos gitanos”: linchamientos de criminales	112
4.2 “Le propinaron una monumental paliza”: el vigilantismo	115
4.3 Un policía por parroquia: pedáneos y alcaldes de barrio	118
4.4 Fusiles para impedir (o hacer) la revolución. Las guardias cívicas antes de 1923	121
4.5 Vida y muerte del Somatén Nacional	124
5. ESTUDIANDO EL CRIMEN EN EL PERIODO PRE-ESTADÍSTICO (1800-1859)	129

5.1 Metodología y sesgos en las fuentes de estudio del crimen. La serie de causas del Archivo del Reino de Galicia	129
5.2 “El hambre le impulsara”: proletariado y crímenes de hambre en la crisis de subsistencias	139
5.2.1 “Se le vendieron todos sus bienes”: las dinámicas de la represión del pequeño delito durante la crisis	149
5.2.2 Vecinos ladrones, vecinos delatores: la sociedad civil y la persecución del crimen	154
5.2.3 “Es de sospechar que este hombre Roba para sostenerse”. Actitudes populares hacia el robo y límites del sentimiento comunal	158
6. LAS TENDENCIAS CUANTITATIVAS DEL CRIMEN GALLEGO (1859-1926)	163
6.1 La estadística de Matrícula Criminal	163
6.2 Las Estadísticas oficiales entre 1859 y 1918	164
6.3 Homicidios a partir de las estadísticas isabelinas y los juicios por jurado	166
6.4 El crimen contra la persona	170
6.5 El delito contra la propiedad	181
6.6 El ciudadano contra el Estado: delitos contra el orden público y crímenes especiales	198
6.7 Otros delitos	207
6.8 Tras la Primera Guerra Mundial	224
7. EL HOMICIDIO COMÚN	228
7.1 Fuentes y metodología	228
7.2 Cuantificación, evolución y clasificación de las tasas de homicidio	230
7.3 Primacía masculina y cascada de la violencia: homicidas y muertos en base a su sexo y edad	233
7.4 El uso de armas	235
7.5 “Convencido de que iba a perderla, decidí asesinarla”: la violencia de pareja y ex pareja	238
7.6 “Un horrible parricidio se ha cometido”: las muertes en el seno de la familia	243
7.7 “Enemistados por cuestión de intereses”: los homicidios por disputas acerca de la propiedad	249
7.8 “Por cien pesetas matan a un hombre”: las muertes en la comisión de delitos, robos y atracos	251
7.9 “Entre el detenido y la víctima existían antiguos resentimientos”: homicidios por enemistades sin provocación previa	259
7.10 “Al repeler a los mozos, hizo dos disparos”: los muertos por fuerzas policiales	260
7.11 “Discutiendo con los demás mozos, dijo que no había hombre para él, y se cruzaron varios disparos”: los muertos en riñas y peleas	262
7.11.1 “Un grupo de mozos invadió el campo, empezando a disparar tiros”: los choques interparroquiales	267

7.12. “Salió dispuesto, a ser posible, a dar muerte a cuantos encontrase a su paso”: otros homicidios, locura y crímenes sexuales y pasionales	274
7.13 Con motivación desconocida	275
8. LA VIOLENCIA POLÍTICA HASTA EL FINAL DE LA RESTAURACIÓN	278
8.1 Amanecida de sangre: las convulsiones del nuevo siglo (1800-1840)	278
8.2 El legado de la violencia del inicio de siglo	285
8.3. Pronunciamientos y segunda y tercera guerra carlistas (1840-1875)	287
8.4 La Restauración	291
8.4.1 A la conquista del Estado: la violencia en las elecciones de carácter nacional	292
8.4.2 La batalla por el Ayuntamiento: violencia en las elecciones locales	298
8.4.3 La movilización universitaria durante la Restauración	304
8.5 Buscando el rostro del motín. Dinámicas violentas y pacíficas en la acción colectiva	305
8.5.1 ¿Por qué dispara el máuser? La frecuencia de la represión violenta y sus explicaciones	319
9. VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN EL DECLIVE DE LA RESTAURACIÓN, LA DICTADURA Y LA II REPÚBLICA (1920-1935)	322
9.1 Fuentes y metodología	322
9.2 Comparativa temporal	327
9.3 Huelgas y motines de subsistencia (1920)	344
9.4 Política, movilización y protesta durante el auge de la Dictadura (1925)	354
9.5 Violencia sociopolítica durante la caída de Primo de Rivera en Galicia (1930)	358
9.6 Tras la Revolución de Octubre (1935)	363
10. VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN 1936	371
10.1 Cinco meses de censura previa. Particularidades de las fuentes en 1935	371
10.2 Los inicios de año y la campaña electoral	372
10.3 Violencia en el periodo electoral	376
10.4 La violencia tras la victoria de las izquierdas y durante el gobierno de la coalición izquierdista	378
10.5 La pesadilla del exterminio. Niveles y características de la violencia sociopolítica	382
10.6 Huelgas, revoluciones y ansias. La movilización colectiva y el miedo a la revolución	386
11. DEBAJO DEL RADAR. DELINCUENCIA MENOR Y VIOLENCIA INVISIBLE	394
11.1 Justicia y castigo cotidianos: juicios de faltas, arrestos gubernativos, <i>quincenas</i> y algunos apuntes sobre los gitanos y el espigueo	394
11.2 “El Sr. Juez tiene por celebrado el acto sin avenencia”: Arrendatarios, deudores e insultos: los juicios de conciliación	404
11.3 El cuchillo, la pistola. Tendencias en el uso de armas	413

11.4 ¿Está bien regalar armas de juguete? Los cambios en la interpretación y aceptación cultural de la violencia	417
11.5 “El pegar tan bárbara e injustamente a los niños era entonces lo habitual”: recuerdos de la violencia en autobiografías	431
11.6 “Tenía cara de hostia, y como la estaba pidiendo, por eso se la di”. Violencia universitaria	435
11.7 “La ofensiva y agraviosa fiesta”. Las cencerradas	437
11.8 “La maltrató bajo el pretesto de que era Bruxa”. Crimen y violencia relacionados con las supersticiones	443
12. LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO: CONTRABANDO Y EVASIÓN DEL SERVICIO MILITAR	453
12.1 Fraude fiscal, contrabando y delitos contra el erario público	453
12.2 Prófugos y revoltosos: la resistencia al servicio militar	466
13. LAS CARAS DE LA DELINCUENCIA	478
13.1 ¿Una subcultura criminal?	478
13.2 Niños, mozos y mujeres pobres: crimen por diversión y por supervivencia	480
13.3 Carteristas, estafadores y ladrones	482
13.4 Matones y sicarios	485
13.5 Contrabandistas, matuteros y traficantes de personas	488
14. CONCLUSIONES	491
15. BIBLIOGRAFÍA	495
Obras anteriores a 1936	495
Obras posteriores a 1936	498
Documentación	538



Dedicatoria

Esta tesis va dedicada a José Carballo Vázquez, en paz descanse. Es fuente de los testimonios por tradición familiar que se encuentran en el texto y de buena parte de mi interés por la historia de la Galicia rural.

No hubiera podido hacerse tampoco sin el resto de mi familia, en especial mis padres, a quien les agradezco su paciencia con mis erráticas decisiones vitales, como empezar un doctorado en una disciplina que no era la mía a una edad en la que otros estarían dándoles nietos. Sirva este texto de disculpa.

En el ámbito académico, el director de este trabajo, Miguel Cabo, ha cumplido su papel de forma ejemplar y más allá de su obligación. No olvidaré su entusiasmo y sus correos con correcciones tras dedicarle el fin de semana a leer bocetos de capítulo. En los miembros del grupo Histagra y, en general, en los profesores de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela he encontrado también comprensión y apoyo cuando acudí a ellos con problemas y dudas.

He de agradecer también sus gestiones al personal de los archivos que he consultado, y en especial en aquellos en los que he pasado más horas, el Archivo Municipal de A Coruña (donde realicé mis primeras y modestas investigaciones allá por 2016) y el Archivo del Reino de Galicia (en el que el personal tuvo que realizar viajes una y otra vez para traerme legajos en los que “me he olvidado de mirar una cosa” y Dulce me introdujo a algunos cambios en la legislación). También al Archivo Municipal de Vigo, desde donde tuvieron la amabilidad de evitarme desplazamientos remitiéndome copias digitales de la documentación.

En el plano personal, quiero mencionar a Pablo por el piso y el aviso de cierta oferta laboral; a los dos Juanes el ejemplo de conseguir el doctorado; a Costa el de iniciarlo, como yo, cuando estábamos en trámites de vejez; a Malpica el de cómo hacerlo. A Abel, porque le debo disculpas por no haberlo citado en el TFM. Al resto de mis amigos, por tantas cosas que no sabría resumirlas.

A Alicia, por el futuro.

Contracciones frecuentes

LV: La Voz de Galicia

LR: La Región

FV: Faro de Vigo

EP: El Progreso

ARG: Archivo del Reino de Galicia



1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

1.1 Un crimen violento y algunas reflexiones sobre qué es un crimen y qué es la violencia

Se llamaban Antonio Sánchez y Jesús Blanco. Los dos de 28 años, molinero el primero, labrador el segundo, eran vecinos de Santa María de Mezonzo, una parroquia rural del municipio coruñés de Vilasantar conocida por su iglesia románica, resto de un monasterio milenario. No eran buenos vecinos el uno para el otro. Estaban enemistados, cuando se veían “se provocaban”, cruzándose los “insultos y amenazas”. El 29 de septiembre de 1935, que era domingo, volvieron a enzarzarse verbalmente, pero la cosa no acabó ahí, ya que esta vez Sánchez sacó un cuchillo. Blanco recibió una puñalada en el muslo y otra en la clavícula, que penetró seis centímetros y seccionó la arteria carótida, por la que transita el flujo de sangre entre el corazón y el cerebro. A la primera quizás pudo haber sobrevivido, la segunda lo dejó cadáver. La primera reacción del homicida fue darse a la fuga, aunque poco después, adelantándose a la Guardia Civil que lo estaba buscando, resolvió dirigirse al juez de partido para entregarse¹.

La muerte de Blanco nos sirve para plantear las preguntas que vamos a intentar resolver este trabajo. ¿Cómo de frecuentes eran los actos delictivos en la Galicia en la que vivían Sánchez y Blanco? ¿Cómo se relacionan las tasas de crimen de aquella época con la actual, y en sus tiempos, con el resto de España, Europa y el mundo? ¿Cuáles eran los protagonistas típicos y por qué actuaban? ¿Qué se consideraba crimen por parte de las autoridades y qué no? ¿Cómo lo veía la población? ¿Quién lo perseguía y juzgaba, y en base a qué marco normativo? Y sobre todo, ¿cómo evolucionaron el crimen y la violencia entre el final de la Primera Guerra Carlista y la Guerra Civil, entre 1840 y 1936, y por qué? Si tuviésemos que resumir el propósito de este trabajo en una oración, esta sería “determinar las tendencias a largo plazo del crimen y la violencia en Galicia en la Edad Contemporánea, así como los mecanismos formales e informales para perseguirlo y la percepción que tenía la población”.

Volvamos al homicidio. Lo que ocurrió ese domingo de 1935 fue un crimen y violencia, parece evidente. Pero resulta imprescindible acotar estos términos. Es relativamente sencillo hacerlo con “crimen”: aquello que está tipificado como delito por los códigos de justicia penal o legislación equivalente contemporánea². En el caso que hemos visto, el homicidio que cometió Sánchez fue un crimen. Los insultos y amenazas que intercambiaron los dos vecinos, aunque nadie los denunciara, eran también delito o falta. Aunque muchas veces las ofensas verbales no se denunciaban, y no se perseguían con fuerza (veremos más de ello en el capítulo 11), el Código Penal permitía hacer lo uno y lo otro. Puntualmente haremos referencia a conductas que no eran delito en el periodo de estudio pero sí en la actualidad, o viceversa, pero con carácter general dejaremos fuera del estudio acciones que no eran delictivas ni entonces ni ahora, como la prostitución o el suicidio.

Violencia es una palabra polisémica, pero la acepción que nos interesa para este trabajo es la de “cualidad de violento”, que es, a su vez, aquello que implica “el uso de la fuerza física o moral”. Puede entenderse como violencia un amplio rango de comportamientos, desde la agresión a la coacción, pasando por el chantaje, el empleo de la influencia debido a la posición social y la humillación. En el lenguaje actual encontramos conceptos como la “violencia económica”, “violencia patrimonial”, “violencia emocional”, y, siguiendo el famoso poema de Bertold Brecht, pueden

¹ La relación de los hechos está extraída de *La Voz de Galicia*, 03-10-1935, p. 1.

² De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, crimen es “Delito, sea o no grave”, si bien en algunos países, como Chile y Guatemala, se emplea para referirse a los delitos castigados por encima de determinada pena, y en el lenguaje coloquial a veces se emplea solo para referirse a los comportamientos más graves.

entenderse como violencia las circunstancias sociales que llevan a no tener recursos económicos o una vivienda digna.

En este sentido, Julio Aróstegui entiende que la definición de violencia en sus términos “más genéricos” y “más exactos” sería la de “toda resolución, o intento de resolución, por medios no consensuados de una situación de conflicto entre partes enfrentadas, lo que comporta esencialmente una acción de imposición, que puede efectuarse, o no, con presencia manifiesta de una fuerza física”³. Nos resulta imposible trabajar con una definición tan amplia⁴, en especial por la dificultad de definir qué es un medio consensuado y qué no lo es. Para los propósitos de este trabajo, consideraremos exclusivamente como violenta aquella interacción entre dos o más individuos en la que al menos uno cause daño físico a otro de manera voluntaria, lo intente o realice una amenaza cierta de llevarlo a la práctica. No es una definición perfecta, pero mantiene el campo de estudio dentro de límites manejables.

Volviendo al ejemplo de Sánchez y Blanco, los insultos y amenazas no serían violencia para los propósitos de este trabajo, las puñaladas sí. Por otra parte, queremos centrarnos en la violencia en tiempos de paz, que es la situación mayoritaria en el territorio gallego durante nuestro periodo de estudio, salvando alzamientos y algunas partidas en las dos últimas guerras carlistas, y por eso acabamos en julio de 1936.

Para responder a las preguntas que planteábamos en párrafos anteriores tendremos que intentar contabilizar, categorizar y ordenar los actos violentos. Estos son un marcador que nos indica dónde hay violencia, cuánta, con qué intensidad, de la misma manera que el crecimiento del mercurio en un termómetro nos sirve para inferir con seguridad absoluta que las moléculas del cuerpo se mueven más de lo habitual y, con seguridad relativa que estamos enfermos. Pero lo que entendemos por violencia, la “cualidad de violento”, es algo más elusivo. Comprende también los propósitos de los actores, sus sentimientos, ideas, estrategias sociales; en suma, sus motivaciones y contexto. El termómetro debiera ser leído holísticamente, con las aportaciones de diversas ciencias sociales, como la psicología, la neurología, la antropología y la neurología, sumadas a la criminología y la historia.

Intentaremos dejar fuera de las reflexiones sobre la violencia aquellas que se corresponden con posturas políticas, opiniones morales, o fuentes literarias que no nos hablan de cómo se comportan los individuos en la realidad, sino de cómo una persona se lo imagina⁵, a favor de investigaciones que se basan en observaciones experimentales o técnicas mensurables, o que extraen conclusiones a partir del análisis comparativo de otras en las que se han empleado estos procesos. Primaremos también los estudios que se han realizado teniendo en cuenta la perspectiva de los perpetradores, no de las víctimas. Aunque, según señalan Fernández Prieto y Míguez Macho para el contexto de la represión tras el golpe de Estado de 1936, las verdades de los perpetradores de la violencia sean más incómodas, no por ello son menos necesarias⁶. Como señala Gil Andrés⁷ son quienes cometen los actos y por lo tanto a los que debemos entender.

³ ARÓSTEGUI, J. (1994), p. 30.

⁴ Sobre la necesidad de acotar la definición de violencia para trabajar, SPIERENBURG, P. (2008-B).

⁵ No consideramos las fuentes literarias despreciables. Analizadas críticamente, pueden aportar información de interés sobre las percepciones sobre la violencia en determinada época. Pero no debemos olvidar que estamos intentando encontrar explicaciones a hechos que realmente ocurrieron y ocurren, y que estos deben tener prioridad (al menos en el marco de nuestra investigación) sobre las elucubraciones en base a ellos.

⁶ FERNÁNDEZ PRIETO, L., MÍGUEZ MACHO, A. (2018), p. 15.

⁷ GIL ANDRÉS, C. (2013), p. 49.

1.2 Factores biológicos en la violencia

¿Qué papel juega la biología en la violencia humana? Es un terreno espinoso, y las ciencias sociales actuales guardan reservas al abordarlo, algo que no es de extrañar. En el pasado se empleó ciencia (mala ciencia) para justificar mecanismos de dominación racistas, o para culpar a los genes de las clases más desfavorecidas de su situación, aunque no tuviesen un fenotipo típico diferente al de las dominantes⁸. También la popularización de términos científicos puede servir para justificar un determinado patrón de masculinidad en la actualidad, y de ahí términos que han surgido en las ciencias sociales como “hormonal folklore” o “biological ideology”⁹, aplicados a contextos en los que se presentan determinadas conductas como naturales o inevitables atendiendo a la testosterona.

Pero no podemos aceptar posturas como la planteada por Lorber: “I am not saying that physical differences between male and female bodies don’t exist, but that these differences are socially meaningless until social practices transform them in social facts”¹⁰. Los comportamientos y percepciones derivan de prácticas culturales, pero estas no podrían existir sin el soporte físico del cuerpo humano. Así pues, que la violencia tiene una raíz biológica es una tautología: no hay ningún comportamiento humano que no sea biológico, ninguna respuesta que no dependa de las características del sistema nervioso, y ningún conocimiento que no se almacene en las neuronas y se exprese como un impulso eléctrico. Todos los comportamientos humanos son parte de una interacción entre cultura, estímulos sensoriales y una biología que lleva evolucionando al menos 3,8 miles de millones de años¹¹. Así pues, a esta obra le corresponde explorar las aportaciones de la biología y la neurología en relación a la violencia, aunque lo sea, admitimos, con una visión parcial y centrada en obras de resumen y divulgación, para responder a unas pocas preguntas básicas.

¿Hay un órgano de la violencia? En los seres humanos, y en muchos otros animales, las conductas agresivas tienen relación con la química cerebral y con su estructura, en especial con la amígdala y el córtex prefrontal. La amígdala tiene relación con la agresión reactiva (así como el miedo y la ansiedad). De hecho, diferentes partes de la amígdala regulan diversos tipos de agresión¹². Esto es hasta cierto punto predecible: por ejemplo, los niveles bajos de serotonina generan irritabilidad. En los ratones, en los que es más factible realizar experimentos, es posible provocar la agresión estimulando con luz determinado conjunto de neuronas¹³.

Pero solo hasta cierto punto, ya que la violencia es un comportamiento contextual. Incluso en los ratones cuyas neuronas se estimulan para que agredan, la respuesta de los animales en estos experimentos depende de su entorno y experiencias previas¹⁴. No hay una respuesta universal de violencia, sino diversos comportamientos agresivos con los que el sistema nervioso responde a diversas circunstancias. Por ejemplo, la testosterona aumenta la competitividad por estatus y la impulsividad, lo que la relaciona con comportamientos agresivos. Pero un individuo puede atacar sin necesidad de testosterona, si es una respuesta que ha aprendido por su experiencia pasada. En

⁸ Sobre esta cuestión en Sudáfrica, WILLOUGHBY-HERARD, T. (2015), pp. 82-89.

⁹ Para una aplicación práctica de estos términos en un caso de estudio, MATTHEWS, C. R. (2014).

¹⁰ LORBER, J. (1993), p. 576.

¹¹ AKANUMA, S. (2019).

¹² En concreto: “(1) rivalry aggression is controlled by the medial amygdala; (2) predatory aggression is controlled by the central amygdala; (3) hypoarousal-associated violent aggression recruits both nuclei, (4) a specific upregulation of the medial amygdala was observed in hyperarousal-driven aggression”. HALLER, J. (2018).

¹³ HAN, W. et al (2017).

¹⁴ YANG, T. et al (2017).

circunstancias en las que la competencia por estatus se da en términos prosociales y pacíficos, mucha testosterona exagera precisamente estos rasgos del comportamiento¹⁵.

La cuestión se complica, sobre todo, en el caso de los seres humanos. Las agresiones entre animales responden a un conjunto limitado de esquemas, pero nuestra especie ha inventado un rango amplio de conductas violentas más allá del enfrentamiento directo físico, e incluso de la visión de la víctima (pensemos en disparar un rifle a distancia, o en pilotar un bombardero o un dron), para los que no son muy aclaratorios los comportamientos neuronales compartidos con otros animales en situaciones de estrés¹⁶. Estos siguen siendo útiles, sin embargo, para ayudar a entender los enfrentamientos físicos inmediatos.

¿En el ser humano la violencia es innata o adquirida? Estos términos inducen a una falsa dicotomía, ya que, según señalábamos antes, no existe nada innato cuya expresión no dependa de un determinado entorno. Es cierto que los seres humanos pueden desarrollar conductas agresivas sin que haya una fuerte aculturación para ello. Los niños en etapas muy tempranas de socialización muestran conductas violentas: “aggression typically peaks around ages two through four, after kids are reined in by adult’s punishment [...] and peers”¹⁷.

Pero la intensidad y los tipos de violencia varían tanto entre épocas y sociedades (más tarde lo veremos en otro apartado) que no podemos considerar que sea un fenómeno “innato” en el sentido de que se vaya a dar necesariamente por parte de seres humanos. Es necesario explicarlo por las diferencias ambientales. En palabras de Sapolsky, “it’s not meaningful to ask what a gene does, just what it does in a particular environment”¹⁸.

Pero, al menos, ¿pueden explicarse las diferencias en la agresividad entre individuos o poblaciones en base a la genética? En cuanto a diferencias étnicas, parece que no o al menos que las correlaciones son mínimas. Entre individuos, hay algunas relaciones con ciertos marcadores genéticos. Citando a un estudio reciente sobre el estudio de la violencia en la neurología, “antisocial behavioral generally, and violence specifically, is moderately heritable”, pero “given that effect sizes for individual genetic variants are so low, having a ‘risk’ allele provides little predictive information about whether a given individual is more or less likely to commit violence”¹⁹. Además, como venimos afirmando, su expresión es contextual; más que genes que generen agresividad, hay algunos genes que hacen más probable ciertas respuestas agresivas en determinados entornos y a partir de ciertas experiencias.

¿Es la violencia inevitable, independientemente de los estímulos? La respuesta a esto parece ser un no rotundo. No es un impulso que demande ser satisfecho periódicamente, como comer u orinar. Al menos en la mayoría de individuos, no es innato, irresistible ni indiscriminado, y depende de las

¹⁵ En términos de Sapolsky, “aggression is typically more about social learning than about testosterone”. Acerca de lo expuesto sobre esta hormona, SAPOLSKY, R. M. (2017), pp. 100-106.

¹⁶ “This more detached form of aggression differs dramatically from the aggression perpetrated by other animals and even our relatively recent human ancestors. It seems likely that the quantum leap in humans’ ability to aggress in more detached and emotionless ways represents a decoupling of aggressive actions from the neurochemical and neurophysiological processes that evolved to support functional aggression. Given such divergence, it would seem that understanding uniquely human forms of aggression and violence, such as mass shootings and acts of war, likely will be achieved primarily through human behavioral, neuropsychological and psychophysiological research”, BARTHOLOW, B. D. (2018), p. 62.

¹⁷ SAPOLSKY, R. M. (2017), p. 184.

¹⁸ El autor cita al neurobiólogo Donald Hebb, que lo expresa de manera bastante expresiva: “It is no more appropriate to say things like characteristic A is more influenced by nature than nurture than... to say that the area of a rectangle is more influenced by its length than its width”. SAPOLSKY, R. M. (2017), p. 248.

¹⁹ POLDRACK, R. A. et al (2017), p. 114.

experiencias previas. Hay individuos que extraen placer de la violencia sádica, pero parece tratarse de un hábito adquirido gradualmente (como la droga o el juego), no de un deseo innato que se reprime o expresa. Aún así, en la práctica los auténticos sádicos serían solo una minoría de los individuos que cometen violencia, si bien es posible que el individuo medio desarrolle comportamientos sádicos por el proceso descrito anteriormente²⁰.

¿La violencia se produce por una falta de empatía? Hay una cierta confusión terminológica con la empatía. Estrictamente se refiere a entender lo que otra persona está sintiendo, pero se ha ampliado a un significado similar al de la *sympátheia*, la comunidad de sentimientos. Es decir, sentir dolor cuando la otra persona lo sufre, y por lo tanto tratar de evitarlo. En realidad, este no es el mecanismo universal. Uno puede leer dolor en otra persona y sentir placer por ello, o simplemente usar ese conocimiento como un mecanismo eficaz para maximizar el daño que se le causa (como en el caso de los torturadores)²¹. También puede ser que la respuesta empática sea tan fuerte que cause aversión a la situación y no un comportamiento de ayuda²². Un término más adecuado en relación a lo que popularmente se conoce como empatía sería la compasión: “your resonance with someone’s distress leads you to actually help”²³.

Además, la relación entre los comportamientos prosociales, las hormonas y la violencia es compleja. La oxitocina, que en la prensa contemporánea aparece en ocasiones denominada “la hormona del amor”, estimula los comportamientos prosociales dentro del propio grupo, pero también la hostilidad extragrupal; nos hace preocuparnos más de los que percibimos como próximos, pero menos de los extraños²⁴.

¿Hay distintos niveles de agresión dependiendo del sexo? Sí, recurriendo a la historia. En las diversas fuentes que tenemos acerca de la violencia en las sociedades occidentales desde la Edad Media hasta nuestros días, los hombres aparecen siempre más representados en los homicidios, actos bélicos y formas de violencia grave²⁵. Esto no tiene por qué ser así en formas de agresión menores, o maltrato psicológico²⁶. En resumen, seguimos a Sapolsky: la violencia no se puede explicar sin la biología, ni solo con biología, y en la práctica los aspectos biológicos, psicológicos y culturales están “utterly intertwined”²⁷.

1.3 Factores psicológicos y emotivos: el odio y la autoestima

Hay una relación evidente entre buena parte de las agresiones que estudiaremos y sentimientos y percepciones de rechazo, ira, repugnancia o indignación, que enlazan con la definición de odio de la RAE: “Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”. Citando a Baumeister,

²⁰ BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 233-238, PINKER, S. (2012), pp. 723-725.

²¹ BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 245-248.

²² SAPOLSKY, R. M. (2017), p. 169, 545-546.

²³ SAPOLSKY, R. M. (2017), p. 523.

²⁴ SAPOLSKY, R. M. (2017), p. 117.

²⁵ En este apartado podrían citarse infinidad de estudios, puesto que lo que no hay son investigaciones sobre grupos en los que las mujeres lleven la voz cantante en cuanto a formas de violencia grave. Citamos algunos libros que funcionan como recopilaciones de estudios. MUCHEMBLED, R. (2008), pp. 26-27, 70, 80, 84, 167, 316, 338, 354, 369, SPIERENBURG, P. (2008), p. 34.

²⁶ Al menos en las culturas occidentales, los índices de maltrato en pareja son parecidos en uno y otro sexo, si bien los hombres cometen actos de violencia más grave. PINKER, S. (2012), pp. 540-545.

²⁷ El autor considera incluso que no se puede distinguir entre ellos, extremo que compartimos en un determinado sentido (es cierto que no existen en el vacío) pero no en otro (esto es, consideramos que se pueden identificar factores culturales relativos a la violencia sin constantes referencias a la neurología). SAPOLSKY, R. M. (2017), pp. 4-5.

sobre el que volveremos después, el odio “is a stable emotional pattern marked by severely negative feelings toward some person or group”, y “a significant source of violence”²⁸. A nivel de movilización colectiva, se ha relacionado al odio con la violencia: “movements which hate, destroy”; “hatred implies a destructive use of violence”, considera Flam²⁹.

Pero académicamente el odio es un concepto elusivo, sobre cuya definición no encontramos un consenso erudito. Diversos autores lo interpretan como una emoción, o como un síndrome, o como un estado patológico, o con una actitud derivada de un proceso cognitivo determinado. Tampoco hay una clara separación entre el odio y la ira³⁰, más allá de que el primero se relaciona con la vida psíquica interna y el segundo con manifestaciones externas³¹. Incluso aceptando una definición dada de odio (“enemistad extrema”), el concepto engloba realidades muy diversas³².

Sternberg relaciona el odio con tres componentes psicológicos, que no tienen por qué darse en conjunto. Uno es el distanciamiento: lo que odiamos nos provoca repulsión y repugnancia y deseo de alejarnos de él. También suscita pasiones de ira o miedo. Finalmente, cognitivamente devaluamos al objeto de nuestro odio, a través del desprecio. Si uno o más de estos factores está presente, encontramos diferentes reacciones, que no son mutuamente excluyentes: desde el deseo de alejarnos del objeto de nuestro odio y no tener nada que ver con él, a agresiones pasionales o, en casos en los que todos estos componentes actúan al mismo tiempo, y se dan otras circunstancias, masacres o genocidios. Así, enumera siete clases de odio³³.

El trabajo de Sternberg pertenece al ámbito de la psicología y no emplearemos su taxonomía en este texto, puesto que ni las fuentes ni nuestra metodología y formación acompañan. Pero enunciarla nos permite establecer tres aspectos relevantes para este trabajo. En primer lugar, el odio es una agrupación de diferentes aspectos psicológicos, tanto cognitivos como emocionales. En segundo lugar, estos aspectos pueden dar lugar a reacciones de hostilidad y episodios de violencia, pero también a otro tipo de respuestas. Por tanto, no hay una relación unívoca y causal entre odio y violencia, sino un conjunto extremadamente complejo de variables que deben estudiarse en relación a sus circunstancias. Ciertos procesos psicológicos y sociológicos de odio y hostilidad enlazan con formas concretas de violencia.

Por otra parte, excepto en algunas definiciones muy amplias de odio que caen en la tautología, se admite que no está presente en todos los actos de violencia entre seres humanos³⁴. Podemos encontrar actos violentos que no vienen acompañados de pulsiones emocionales extremas, pero también otros en los que el que los realiza siente indiferencia. Según señala Baumeister, las víctimas o los observadores externos pueden considerar que los autores de un hecho violento matan y hieren guiados por el odio o la rabia en ocasiones, cuando en realidad “perpetrators may feel little or no emotions at all”³⁵.

Para entender la dimensión pasional de la violencia conviene observar otras emociones a priori más triviales. Así, cuando hablamos de crímenes de “odio” contra los individuos de un determinado grupo, parecería que los autores actúan dominados por un fuerte sentimiento de aversión y la idea de que la víctima era intrínsecamente malvada. En algunos casos, los autores atacan llevados total o

²⁸ BAUMEISTER, R. F., BUTZ, D. A. (2005), p. 87.

²⁹ FLAM, H. (2005), p. 34, 37.

³⁰ Traducimos “anger” como “ira”.

³¹ ROYZMAN, E. B. MCCAULEY, C. ROZIN, P. (2005), p. 12.

³² OPOTOW, S. (2005), p. 121-122.

³³ STERNBERG, R. J. (2005), pp. 39-41.

³⁴ STAUB, E. (2005), p. 51.

³⁵ BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 9-10.

parcialmente por sentimientos de ira y prejuicios étnicos³⁶. Pero en otros muchos casos encontramos motivos más prosaicos, y de manera destacada una combinación de aburrimiento y deseo de “show off before one’s group”. En un estudio a partir de los archivos de la policía de Boston a finales del siglo XX solo encontramos un caso en el que el autor actuó en base a una idea fuertemente interiorizada de que el “otro” era inherentemente malvado o inferior y debía ser eliminado. El 66% de los autores actuaron “by a desire to escape boredom and get some quick thrills and bragging rights”³⁷; más que odio, hay falta de aprecio e indiferencia por el bienestar del otro. Si bien los procesos de deshumanización son importantes en la violencia contra un colectivo, el odio furibundo no parece ser en sí mismo el principal factor de los genocidios, que tendrían explicaciones multicausales, según señalan Gerlach³⁸, desde la historiografía, y Moshman, desde la psicología³⁹.

Por otra parte, debemos señalar que el odio tiende a asociarse con agresiones injustificadas, prejuicios negativos y en general comportamientos moralmente reprochables. Los sentimientos de aversión o ira que, desde el punto de vista del observador, resultan legítimos, tienden a definirse con términos más positivos⁴⁰. Esta es una categorización que, a nuestro parecer, resulta perniciosa para el estudio académico, ya que depende de la moral del observador, y está muy alejada de cómo perciben sus acciones los autores. Los responsables de un ataque motivado por odio ideológico pueden entender que están justificados⁴¹, y los agresores tienden a presentarse como víctimas⁴². “When indignation and resistance segue into hate-justified violence, they are indistinguishable from hate”, señala Opatow⁴³.

El odio no es una buena brújula para identificar situaciones de opresión. Puede surgir como respuesta a una injusticia real, o ficticia, dirigirse hacia el culpable o hacia otro objetivo. Los que han recibido humillaciones, los inferiores sociales que no pueden abiertamente a los retos y los grupos oprimidos parecen más propensos a tener sentimientos de odio⁴⁴; pero también los racistas que culpan a un colectivo de sus problemas cuando no hay una relación causal racional⁴⁵ o sienten amenazada la integridad de su grupo por amenazas simbólicas a su hegemonía⁴⁶.

³⁶ BERKOWITZ, L. (2005), p. 158-159.

³⁷ BOYZMAN, E. B. MCCAULEY, C. ROZIN, P. (2005), p. 25. Además de hacer referencia a las investigaciones de BAUNMEISTER, R. F. (1997), los autores contemplaron el estudio a partir de los ficheros de la policía de Boston de MCDEVITT, J., LEVIN, J., BENNET, S. (2002): “Hate crimen offenders: An extended typology”, en *Journal of Psychology*, nº 40, pp. 104-114.

³⁸ El autor apunta a que los genocidios (aunque rechaza el término y prefiere emplear el de “sociedades extremadamente violentas”) son procesos complejos y multicausales en los que actúan numerosos factores causales y hay diversidad en los grupos de autores y víctimas. GERLACH, Ch. (2010), pp. 144-146.

³⁹ Moshman apunta a otros factores, como la adquisición de riquezas, el patriotismo, la disciplina, la ideología o las animosidades personales: “genocide is advocated, supported, and practiced by people who, far from being creatures of genocidal hatred, act on a variety of nationalist, political, economic, religious, professional, and moral motives not so different from our own”. Al contrario que para otros autores, para Moshman, los sentimientos de desprecio y deshumanización (que entiende como un factor relevante) no constituyen odio, ya que este queda restringido a entes con agencia. MOSHMAN, D. (2005), pp. 194, 205-206.

⁴⁰ BOYZMAN, E. B. MCCAULEY, C. ROZIN, P. (2005), p. 9-11.

⁴¹ OPOTOW, S. (2005), pp. 126-127.

⁴² BECK, A. T., PRETZER, J. (2005), p. 74.

⁴³ OPOTOW, S. (2005), p. 123.

⁴⁴ BOYZMAN, E. B. MCCAULEY, C. ROZIN, P. (2005), pp. 19, 21-22. Sobre la mayor propensión de los negros norteamericanos a participar en actitudes y comportamientos de odio racial, BAUMEISTER, R. F., BUTZ, D. A. (2005), p. 89-90.

⁴⁵ Por ejemplo, los supremacistas blancos que se consideran perjudicados por otras razas o los participantes en acciones antisemitas. BERKOWITZ, L. (2005), p. 179.

⁴⁶ Sobre los crímenes de odio de blancos contra negros en los EEUU, DOVIDIO, J. F., GAERTNER, S. L., PEARSON, A. R. (2005), pp. 221-222.

Hay mecanismos psicológicos que actúan como inhibidores de las conductas violentas: la solidaridad o compasión, la culpa, los tabúes culturales y una aversión hasta cierto punto innata a causar dolor⁴⁷. También facilitadores: obligaciones morales contradictorias, un pensamiento que se centra en el momento y no en las implicaciones morales o las consecuencias a largo plazo, el estrés emocional o el consumo de alcohol⁴⁸.

¿Cuándo no funcionan las inhibiciones a causar daño a otro ser? En general, cuando consideramos que está justificado hacerle daño. Por ejemplo, si nos ha perjudicado previamente. Los experimentos sobre la actividad cerebral demuestran que las zonas del cerebro responsables de la empatía se estimulan cuando un sujeto observa a otro sufriendo dolor o daño, de manera que siente una sensación desagradable al recrear la experiencia observada de manera vicaria. Pero, si el dañado es alguien contra el que se desea la venganza, esta reacción espejo permanece inactiva y la experiencia puede ser agradable (algo que se da más en hombres)⁴⁹. Otro factor que influye es la proximidad emocional: cuanto más se preocupe una persona por otra a la que ha hecho daño, más probable e intenso será el sentimiento de culpa⁵⁰.

Una parte de la literatura académica ha postulado una relación entre la baja autoestima y la violencia. Pero la evidencia empírica, y en esto volvemos a los experimentos de Baumeister, apunta a que las personas con baja autoestima no son especialmente violentas. Por el contrario, tienden a dirigir las emociones negativas hacia sí mismos. En cambio, el perfil de individuo agresivo sería el de alguien con una alta opinión de sí mismo y que reacciona violentamente cuando percibe lo que considera que son críticas o insultos injustos: “the roots of violence lie in the gap between a highly favorable self-appraisal and a bad appraisal by somebody else”.

Si la alta visión que tienen de sí mismos es ilusoria o no es compartida por su entorno social, o si su autoestima es fluctuante⁵¹, las reacciones de otras personas que no reafirmen esta percepción les parecerán desafíos a su verdad personal⁵². Al mismo tiempo, las personas agresivas tenderían a interpretar como ataques comentarios u opiniones de otros⁵³. En especial, si hay gente observando⁵⁴.

En este sentido, la violencia conecta con el narcisismo⁵⁵. Garofalo, Dostoievsky y Salillas caracterizaban a los criminales como seres con “un sentimiento de amor propio exagerado”,

⁴⁷ PINKER, S. (2012), pp. 720-722.

⁴⁸ BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 264-271.

⁴⁹ PINKER, S. (2012), pp. 694-695, 719.

⁵⁰ BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 311-314.

⁵¹ Sobre esta cuestión, “across several studies using different measures, unstable high SEs appear specially likely to engage in self-protective (defensive) strategies that are externally directed (...) involve attacking the source of the threat or blaming factors beyond one’s control for one’s failure”. KERNIS, M. H., GREENIER, K. D., HERLOCKER, C. E., WHISENHUNT, C. R., ABEND, T. A. (1997), p. 853.

⁵² Además de repasar estudios sobre la autoestima de grupos violentos, como delincuentes, pandilleros y abusos de escuela, Baumeister realiza comparaciones entre grupos que difieren en cuanto a parámetros psiquiátricos, sexuales, raciales o de conducta; los que tienen autoestima más baja son consistentemente menos agresivos. BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 135-156. Para recopilaciones de investigaciones más recientes que la obra original de Baumeister, BAUMEISTER, R. F., BUTZ, D. A. (2005), p. 93. BERKOWITZ, L. (2005), p. 178. Sobre los egos frágiles de los hombres reiteradamente violentos, a los que percibe como individuos inmaduros emocionalmente, TOCH, H. (1993), p. 229.

⁵³ BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 43-45.

⁵⁴ BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 155-156.

⁵⁵ “La violence est activée par des frustrations ou des blessures narcissiques relevant de la sphère de l’amour-propre et de l’estime de soi”. MUCHEMBLED, R. (2008), p. 24.

“presuntosos”, “puntillosos”, con un sentimiento de la vanidad “muy exagerado”⁵⁶. El criminal José González de la Cámara, paradigma según Nerea Aresti de la “masculinidad mal entendida” que se pretendía combatir en los años 20, es “irascible, cruel y pendenciero”, con un “sentido desproporcionado del honor”⁵⁷. Ya en la actualidad, las investigaciones sobre la psicología de los delincuentes parecen apuntar a que “la violencia es un problema no de poca autoestima sino de demasiada, sobre todo cuando es inmerecida”⁵⁸.

El papel de la autoestima es, por tanto, muy importante si analizamos a los individuos que tienden a provocar peleas, sobre todo si pertenecen a una cultura que valore la violencia como modo de ganar estatus. Su disposición a pelear se manifestará externamente⁵⁹: actitudes combativas, exhibición de armas, provocaciones, quizás incluso determinados atuendos. Podría dársele una explicación evitativa: parecer peligroso puede proteger preventivamente de los ataques⁶⁰. Pero también puede provocarlos. Este teatro, en nuestra opinión, se explica más bien como un modo de realizarse personalmente, más que una estrategia de supervivencia. Sentirse valiente supone un extra de autoestima y confianza.

1.4 Condiciones socioeconómicas en la violencia

Una aproximación atractiva para el investigador de la violencia es ligarla a otro proceso o indicador cuyo estudio sea común en las ciencias sociales, como la desigualdad económica, el patriarcado o la anomia. A lo largo de este trabajo intentaremos huir de esta tentación. No porque los indicadores económicos, las desigualdades materiales o los sistemas sociales no puedan aportarnos pistas para entender la violencia; son factores importantes para explicarla. Pero no se pueden estudiar como un factor explicativo único o universal, y siempre deben estar relacionados con otras posibles explicaciones o con su contexto.

Lo podemos ver con un estudio clásico. En 1940, Hovland y Sears publicaron un estudio sobre el Sur de los Estados Unidos en el que llegaban a la conclusión de que, cuando caían los precios del algodón, aumentaban los linchamientos de negros acusados de cometer crímenes o molestar a mujeres blancas. Esto, desde su punto de vista, respondía a una respuesta a la frustración: en momentos de privación económica, los individuos serían más proclives a ejercer violencia contra gente que les resultaba desagradable⁶¹. En este modelo no vemos uno sino varios factores: la penuria económica, la relación tradicional de dominio racial, un modelo cultural de respuesta de justicia popular, ideas de protección del honor femenino. Además, afecta a un determinado tipo de violencia, sin que haya constancia de la misma relación, por ejemplo, en la violencia doméstica o el maltrato infantil.

Una aproximación popular entre los criminólogos a la hora de explicar teóricamente los cambios en las tasas de homicidios es la de la modernización propuesta por Durkheim; se trataría de un crimen que derivaría de la anomia, esto es, de la individualización alienante de los individuos en los países más desarrollados (o de los rápidos procesos de cambio en las naciones en vías de desarrollo). Esta

⁵⁶ GAROFALO, R. (1891), pp. 73, 75, 91, 324-325, SALILLAS, R. (1896), p. 112.

⁵⁷ ARESTI, N. (2010), pp. 128-132, 162-163, 170.

⁵⁸ PINKER, S. (2012), p. 679-681.

⁵⁹ VAQUINHAS, I-M. (1996), p. 468.

⁶⁰ PINKER, S. (2012), p. 673.

⁶¹ Sus métodos han sido revisados posteriormente con nuevas técnicas, pero parecen respaldar su modelo. HEPWORTH, J. T., WEST, S. G. (1988).

tesis no ha resistido el análisis cuantitativo en los estudios a largo plazo, por lo que no la recuperaremos en este trabajo⁶².

Exploraremos con más detalle la relación entre la pobreza y las crisis y el delito económico en el capítulo 5 en el contexto histórico estudiado. En lo relativo a la situación económica y la violencia, habría que distinguir entre varios tipos de violencia (de movilización colectiva, con fines criminales, cotidiana) dado que las privaciones económicas le pueden afectar de diferente manera, pero de cualquier forma hay que rechazar una identificación automática de pobreza y violencia, o empobrecimiento y rebelión. Según veremos en el capítulo 6, Tarrow, Tilly y otros estudiosos de los movimientos sociales han estudiado que la acción colectiva se desencadena en base a otros factores. En lo relativo a los homicidios por motivos económicos, “At first sight, the economic motivation of the offender may suggest that inequality and difficult economic conditions are the main drivers of property-related crimes, including property-related homicide; conclusive evidence for such a relationship remains essentially weak, however”⁶³.

En relación a otros tipos de violencia, no hay una correlación automática entre la pobreza y la falta de educación y los ataques terroristas⁶⁴, y tampoco ha sido establecido que haya una relación con la desestabilización social⁶⁵. Canter propone aplicar el concepto de “relative deprivation”, esto es, cómo un individuo compara su situación con respecto a otros. Y, en el caso de que se identifique fuertemente con un grupo, cómo percibe los agravios a los que se ve sometido su colectivo, aunque él no los experimente personalmente⁶⁶. La percepción colectiva subjetiva ha sido identificada por otros autores, con términos como “collective deprivation” o “fraternal deprivation”, como una causa más fiable de acción colectiva y de descontento de las minorías que la situación económica objetiva⁶⁷.

En este sentido, y con un enfoque que resulta pertinente para abordar los niveles de violencia cotidiana, Wilkinson y Pickett relacionan los índices de desigualdad económica y varios indicadores de violencia. La principal correlación, comprobada para una muestra de países y para los estados integrantes de los EEUU, es que las regiones menos igualitarias tienden a tener más homicidios. Su explicación es que en las zonas más desiguales económicamente hay una mayor competición por el estatus, lo que aumenta la propensión a pelear por este. Además, la desigualdad generaría otros factores de riesgo como la desestructuración familiar⁶⁸.

Hay dos críticas que hacer a los datos. En primer lugar, la volatilidad de los datos es muy alta, con un buen número de estados que no siguen el patrón, lo que explican parcialmente por la posesión de armas. En segundo lugar, la muestra de países solo incluye 23, de los que 18 están en Europa occidental. Todos se encuentran entre los más desarrollados del mundo; todos, menos Estados Unidos, se encuentran muy por debajo de la media mundial de homicidios; todos son democracias parlamentarias con sistemas policiales y judiciales que funcionan. La gráfica sería muy diferente si se incluyesen datos de otros países. Por ejemplo, el índice de Gini de El Salvador en 2018 era de 38,6 y el de Israel en 2016 de 39, lo que no supone una enorme diferencia, pero el nivel de homicidios

⁶² AEBI, M. F., LINDE, A. (2016), p. 76.

⁶³ *Global Study on Homicide. Booklet 3. Understanding homicide* (2019), p. 35.

⁶⁴ KRUEGER, A. B., MALECKOVA, J. (2009),

⁶⁵ Acerca del debate sobre esta cuestión, MERARI, A., FRIEDLAND, N. (2009), pp. 348-349.

⁶⁶ “When a person’s identity is closely associated with membership of a particular group then the belief that the group as a whole experiences certain deprivations can have a significant influence on that person’s levels of dissatisfaction beyond their own personal comparisons”. CANTER, A. (2009), pp. 5-6.

⁶⁷ MOGHADDAM, F. A. (2007), p. 71.

⁶⁸ WILKINSON, R., PICKETT, K. (2011), pp. 129-144.

del primer país es más de diez veces superior al segundo, y en 2015 llegó a tener más de 100 muertes violentas por 100.000 habitantes⁶⁹.

La desigualdad es un factor explicativo productivo a la hora de analizar la violencia, y uno que resultaría especialmente interesante, por ejemplo, a la hora de estudiar las diferencias entre regiones españolas en nuestro periodo de estudio. Pero no puede ser el único a tener en cuenta, y, en nuestra opinión, debe ser complementado con el marco interpretativo que hemos mencionado en el apartado 1.3 en relación con las percepciones de injusticia: cómo la desigualdad económica puede ser percibida por los desposeídos como algo injusto o estresante que desencadene agresividad.

1.5 Las tipologías de violencia en base a sus causas

Descartada la cómoda posibilidad de que la violencia tenga fuente en un único sentimiento o un único factor, debemos entender que tiene raíces heterogéneas. Esto obliga, para estudiarla, a basarnos en alguna clasificación o tipología de las motivaciones. Veamos qué nos puede aportar la literatura.

En *Violent Men*, una obra publicada originalmente en 1969 y revisada en los años 90, Hans Toch presenta los resultados de una investigación colectiva a través de entrevistas con hombres violentos extraídos de los ámbitos policiales y penitenciarios de California. Policías agredidos y agresores, delincuentes con historial de ataques a agentes y ciudadanos, presos violentos antes y después de entrar en prisión. Los motivos que los moldeaban como individuos conflictivos resultaron bastante heterogéneos: en algunos procesos catárquicos para desviar emociones negativas, en otros intentos de defender normas sociales o de proteger la integridad física. La mayoría tenían directamente que ver con la reputación o autoestima del autor.

Los perfiles de individuos recurrentemente violentos fueron organizados en una decena de categorías, que respondían a patrones de comportamiento en los juegos sociales en los que los autores se veían implicados. Seis de estas estrategias buscan preservar el ego del autor de la violencia, y otras cuatro aparecen a partir de la deshumanización de sus víctimas. Estos patrones de comportamiento se reiteran en el tiempo y explican por qué ciertos individuos se ven implicados una y otra vez en actos violentos. En un caso, por ejemplo, el sujeto actuaba constantemente de manera irritante o provocativa con sus parejas o con los agentes de policía que se encontraba, demostrándose a sí mismo que tenía el control de la situación; cuando estos respondían, estallaba en furia y los agredía⁷⁰. Otro de los entrevistados, policía, se veía implicado en peleas con sospechosos para mantener una imagen de sí mismo como un tipo duro, capaz de reducir físicamente a individuos peligrosos⁷¹.

La tipología resulta demasiado extensa en cuanto a tipos; además, no puede considerarse como suficiente para entender el conjunto de los actos violentos, ya que estudia exclusivamente a hombres de conducta violenta reiterada ubicados en un contexto relativamente pacífico (históricamente hablando). Algunas de las categorías, aunque interesantes para resaltar algunos matices en el estudio original, se confunden entre ellas y son de dudosa utilidad para su aplicación a

⁶⁹ Los datos de los índices de Gini han sido extraídos de la base de datos del Banco Mundial, <https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI>.

⁷⁰ TOCH, H. (1993), pp. 69-78.

⁷¹ TOCH, H. (1993), p. 87.

las fuentes historiográficas, y posteriormente se ha criticado por ser demasiado extensa⁷². De cualquier forma son interesantes porque, al contrario que la mayoría de categorías, hay una aproximación cuantitativa a la prevalencia en la muestra.

Tabla 1.5.1 Categorías de perfiles violentos señalados por Hans Toch

Estrategias de preservación del ego		Frecuencia porcentual
Rep-defending	El individuo ha sido colocado por su entorno en un rol que incluye el empleo de violencia agresiva	14,5
Norm-enforcing	El individuo utiliza la violencia para hacer respetar normas que considera patrones de conducta universales	4,3
Self-image defending	El individuo utiliza la violencia para vengarse de personas que, considera, lo difaman o calumnian y hacen peligrar su imagen de sí mismo	13
Self-image promoting	El individuo demuestra su valía a través de la violencia; su imagen de sí mismo está realcionada con nociones de dureza y estatus	27,5
Self-defending	El individuo tiende a percibir a los demás como una fuente de peligro físico que requiere de su neutralización	5,8
Pressure-Removing	El individuo, con habilidades sociales limitadas, tiende a explotar en situaciones que no es capaz de manejar	11,6
Deshumanización de otros		
Bullying	El individuo obtiene placer al aplicar violencia o aterrorizar a otros	5,8
Exploitation	El individuo trata persistentemente de emplear a otros como herramientas a su conveniencia, y recurre a la violencia para conseguirlo	10,1
Self-indulging	El individuo cree de “buena fe” que los demás existen para satisfacer sus necesidades, y emplea la violencia como castigo si no es así	4,3
Catharting	El individuo usa la violencia para liberar tensiones interiores, o en respuesta a ciertos estados de ánimo o sentimientos, porque ha aprendido que psicológicamente responde positivamente a ella	2,9

Fuente: Elaboración propia y traducción a partir de las categorías descritas por Hans Toch⁷³

A mayores de la tipología, la obra de Toch nos presenta algunas aproximaciones importantes para entender la violencia interpersonal. En primer lugar, muestra que los episodios violentos no responden a un solo modelo de comportamiento, a una emoción o a una personalidad, sino que pueden derivar de un número de estrategias sociales y personalidades muy amplio. En segundo lugar esta deriva de una interacción social en la que los individuos tratan de conseguir un objetivo,

⁷² BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 149.

⁷³ TOCH, H. (1993), pp. 136-168

aunque sus decisiones muchas veces no sean conscientes o racionales⁷⁴. Así, las peleas surgen normalmente después de una secuencia de interacciones⁷⁵.

En los 90 encontramos otra obra importante en el estudio de la violencia: *Evil. Inside human cruelty and violence*, del psicólogo social Roy F. Baumeister. Aunque estudia otras expresiones de la maldad humana⁷⁶, como la opresión o actos menores de crueldad, la mayor parte del libro se trata acerca de actos que se cumplen los requisitos de la violencia en nuestra definición. Nos interesa por tres cuestiones: primero, supone una labor de recopilación de los trabajos factuales sobre violencia humana hasta ese momento; segundo, pone el foco en las motivaciones de los verdugos y perpetradores de violencia y en sus justificaciones; tercero, propone una tipología de los actos violentos que ha sido desarrollada posteriormente.

De acuerdo con Baumeister, los autores de actos violentos tienden a considerar sus actos como justificados o al menos razonables, mientras que todos los implicados manipulan los hechos en su favor, de manera más o menos hipócrita. Los que hacen daño a otras personas suelen racionalizar y minimizar los actos, al tiempo que evaden la responsabilidad personal. Las víctimas les dan un peso mucho mayor y tienden a dos estrategias narrativas: o bien afirmar que los actos del perpetrador no estaban para nada justificados, o a considerar que este es malvado y extraía un placer sádico de perjudicarlos; es decir, a dividir la historia entre malvados y víctimas inocentes⁷⁷. A largo plazo, los perpetradores tienden a intentar olvidar; las víctimas, a recordar⁷⁸.

Hay casos claros de víctimas y verdugos, pero ambas categorías pueden combinarse. Que los actos violentos tienen siempre una explicación desde el punto de vista del autor es una pieza central de la obra de Baumeister. Frecuentemente los individuos que se sienten víctimas de una injusticia o ataque utilizan esta para justificar sus propios actos de violencia, y en casos de agresiones mutuas, ambos bandos generan narrativas en las que ellos son las víctimas. Hay, por tanto, una construcción subjetiva de los agravios, como señalábamos en el apartado 1.3 y 1.4. Experimentos de laboratorio corroboran estos sesgos en las interacciones personales, y las mismas pautas se encuentran en entrevistas con violadores, homicidas, asesinos en serie, colaboradores en genocidios o en el seno de familias de criminales nazis⁷⁹.

Un pequeño inciso por nuestra parte, para complementar al autor: pese a que la tendencia más o menos hipócrita a justificar las propias acciones sea universal, un mismo hecho se considera más o menos justificado dependiendo del individuo y de su entorno social, y las justificaciones no son solo una invención individual. Aquí, la historiografía tiene un papel que jugar en el estudio de la violencia, la de observar la evolución de los patrones colectivos de conducta.

En cuanto a la tipología, Baumeister plantea cuatro grandes clases de violencia en relación a su motivación. Resulta importante resaltar que son modelos teóricos: un acto puede tener componentes de varias categorías.

⁷⁴ Así, en ocasiones los implicados en una pelea escalan la situación porque consideran que el oponente es un peligro mayor de lo que en realidad es, o porque lo ven como una representación de un arquetipo de individuo indeseable o problemático. TOCH, H. (1993), pp. 107, 121.

⁷⁵ TOCH, H. (1993), pp. 35, 41-43, 130.

⁷⁶ Un concepto que liga a "actions that intentionally harm other people". BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 8.

⁷⁷ Esto se corresponde con los atributos de los personajes malvados en las representaciones de cultura popular y de masas. BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 72-73.

⁷⁸ Es pertinente señalar que ambos bandos tienden a distorsionar los hechos o a omitir los que no les convienen. Para una prueba experimental en condiciones de laboratorio sobre este particular, STILLWELL, A. M., BAUMEISTER, R. F. (1997).

⁷⁹ BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 38-56.

Instrumental: El autor de la violencia busca bien obtener poder o una ganancia material. Si creyese que puede conseguir su objetivo en las mismas condiciones y sin violencia no la emplearía, pues es un medio para un fin⁸⁰. No busca el sufrimiento de la víctima, aunque puede ser indiferente a este. Recurre a la violencia porque sus condiciones le impiden otras vías, lo considera una opción efectiva, y en general porque supone una ganancia a corto plazo. Los ladrones Juan Morgán y María Otero, que entraron implorando caridad en la casa de Andrés Rodríguez, lo mataron a golpes y ataron y maltrataron a su esposa para que les dijera dónde estaba el dinero, responden a este perfil⁸¹.

Autoestima⁸² y venganza: Para Baumeister, ambos conceptos se entrelazan en la mayoría de los casos reunidos en este apartado. El autor del acto violento responde a un ataque a su autoestima o a su imagen pública y emplea la violencia para hacer daño al responsable y así vengarse: un insulto, una crítica que entiende como injusta. El caso de Sánchez y Blanco que hemos visto en el apartado 1.1 sería un caso típico.

Idealismo: El autor de los actos violentos los comete impulsado por su ideología o religión, ya que entiende que el fin deseado justifica los medios y sus acciones son moralmente buenas, o, al menos, necesarias⁸³. El desconocido asesino de Domingo Ríos, un estibador esquirolo al que dispararon en la cabeza cuando paseaba con su familia en el marco de una huelga coruñesa en 1920, seguramente encajase aquí⁸⁴.

Sadismo: El autor del acto violento lo realiza porque extrae una sensación placentera de él (la cual no tiene por qué ser de naturaleza sexual). Para Baumeister, el placer sádico es “genuine, unusual, acquired only gradually, and responsible for only a minority of evil”⁸⁵, además de ser difícil de atestiguar. En este trabajo no hemos visto ningún caso de muerte de un ser humano en la que esta parezca ser la motivación principal; aunque no encaje con nuestra definición de violencia, limitada a los seres humanos, el caso de unos jóvenes que prendieron fuego a una perra por diversión en 1885 encajaría en el tipo descrito⁸⁶.

Pinker emplea una tipología derivada en la de Baumeister y muy semejante⁸⁷; nosotros incorporaríamos la violencia recreativa, en la que se extrae placer del riesgo de participar en una acción violenta, y no principalmente, como en el sadismo, de causar daño a otro.

Ya en el terreno de la historia, Spierenburg caracteriza la violencia a través de dos ejes. Uno, sencillo de explicar aunque muchas veces difícil de evaluar en la práctica, es el de actos impulsivos por oposición a los planificados. Otro es el de violencia instrumental, coincidente en esto con

⁸⁰ BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 101.

⁸¹ *El Progreso*, 04-08-1920, p. 2.

⁸² En el original, “egotism”, que el autor define como “thinking well of yourself (regardless of whether those thoughts are justified or not)”. Contendría tanto su vertiente considerada positiva (“self-esteem”) como la negativa (ser “conceited” o “arrogant”). Habríamos preferido traducirlo como “honra”, que en el lenguaje español arcaico reunía ambos matices, pero está fuera de uso en el lenguaje actual. BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 25, 132.

⁸³ En el original, Baumeister denomina al capítulo dedicado a este tipo de maldad como “True Believers and Idealists”; hemos optado para reducirlo a idealismo ya que él mismo emplea el término “idealistic” para referirse a este tipo de violencia. BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 176.

⁸⁴ La muerte de Ríos, en *La Voz de Galicia*, 29-08-1920, p. 1.

⁸⁵ BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 205.

⁸⁶ *La Voz de Galicia*, 13-11-1885.

⁸⁷ Distingue entre la violencia de dominación (para ganar la supremacía ante un rival), o de venganza (para devolver un mal real o percibido); instrumental o depredadora (para obtener una ganancia que se persigue intelectualmente); por ideología; por sadismo o placer de hacer daño. PINKER, S. (2012), 664-665.

Baumeister, por oposición a ritual: “the more that violence has a ritual character, the more it is done for its own sake. Violence with a highly instrumental nature is employed not for its own sake, but in order to attain something else”. Según el propio autor, estos ejes son tendencias y no absolutos, con lo que un acto puede ser en parte ritual y en parte instrumental.

Aunque Spierenburg es uno de los fundamentos de este trabajo, esta definición resulta poco razonable señalar la violencia en sí misma como el fundamento de la violencia; en todo caso lo será la defensa del ego, la respuesta ante sentimientos de rabia, etcétera. Tampoco nos parece afortunado el uso del término ritual, que puede inducir a confusión⁸⁸.

Finalmente, y fuera de las ciencias sociales, el “consenso” sobre la agresión en neurobiología pasa por la clasificación en la dicotomía de agresión impulsiva e instrumental: “La primera es una reacción abrupta, en “caliente”, como una respuesta a una percepción de provocación o amenaza, mientras que la instrumental es una respuesta premeditada, orientada a un objetivo y a “sangre fría””, aunque un caso concreto suele mostrar características de ambas; una tipología muy semejante a la que hemos visto para Spierenburg.

Otra clasificación emparentada es la de la proactiva y reactiva. La primera sería una respuesta a una frustración o provocación percibida, e “invariablemente” acompañada de una emoción de hostilidad, ira o rabia; la finalidad es mitigar este estado percibido desagradable atacando. Se relaciona con historiales de abuso, impulsividad, propensión a la ira y dureza emocional. La proactiva no tiene por qué estar acompañada por este estado emocional, suele estar provocada por el agresor, y responde al deseo de este de conseguir una recompensa. Una vez más, no se trata de una dicotomía, y rasgos de ambas pueden coexistir en una misma agresión⁸⁹.

De las expuestas, la tipología de Baumeister nos parece más útil para explicar los fines de la violencia, a la que podríamos añadir la modalidad de violencia recreativa, que tampoco es excluyente con otras formas de agresión más hostiles. Por otra parte las clasificaciones de proactiva y reactiva, e impulso y predeterminación, son útiles para describir el contexto emocional del acto. No para compartimentar los actos en categorías absolutas, pero sí para ser consciente de que no hay una violencia única. La violencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que los seres humanos emplean para diferentes fines, sean estos la consecución de un proyecto planificado o respuestas de naturaleza emocional e inmediata ante una situación.

1.6 Las tendencias a largo plazo en el crimen y la violencia

Según señalan Aebi y Linde en su artículo de 2016 sobre las tendencias a largo plazo en el crimen, los análisis con esta perspectiva están centrados en el homicidio; es un lugar común dentro de los estudios históricos sobre el crimen que se trata del delito más fácilmente identificable, universalmente perseguido y fácil de medir. Algunos autores consideran que la tasa de homicidios es un buen indicador de la presencia de otras formas de violencia, aunque no sea perfecta⁹⁰.

Spierenburg argumenta que es así partiendo de que la gran mayoría de los homicidios se originan a partir de situaciones de violencia menor, peleas y discusiones. Si en la Edad Moderna “moderate forms of violence were considered relatively normal”, y un porcentaje (que debemos suponer más o

⁸⁸ En tanto que evoca un acto sometido a una serie de normas y comportamientos típicos, que no tienen por qué estar presentes en los actos que no son instrumentales. Sobre un resumen de esta división en ejes, SPIERENBURG, P. (2008), pp. 6-7.

⁸⁹ ORTEGA-ESCOBAR, J., ALCÁZAR-CÓRCOLES, M. A. (2016).

⁹⁰ MUCHEMBLED, R. (2008), p. 75, VANDAL, G. (2000), p. 6.

menos fijo) producía muertes, “the frequency of these casualties is an indication of the frequency of relatively minor and common forms of violence”. Los homicidios serían un indicador proxy, al menos de la violencia con motivación de autoestima siguiendo la clasificación de Baumeister; podemos tener más reservas si el aumento de fallecimientos se produce por causas de violencia instrumental o ideológica⁹¹. En definitiva, si bien no hay una fuerte evidencia empírica de la correlación⁹², la tasa de homicidios sirve como un patrón de comparación universal, ya que estudiar comparativamente otros delitos resulta mucho más difícil.

No hay, en cambio, un marco teórico fuertemente comprobado para las tendencias a largo plazo en el delito contra la propiedad, aunque se haya propuesto. En 1962 Bernardette Boutelet publicó en los *Annales de Normandie* su *Etude par sondage de la criminalité dans le bailliage du Pont-de-l'Arche*. El subtítulo de su trabajo, *De la violence au vol: en marche vers l'escroquerie*, resume sus conclusiones, asumidas por autores posteriores: la violencia contra las personas dominaba el panorama delictivo europeo al inicio de la Edad Moderna, y, al tiempo que disminuyó en el tránsito a la Edad Contemporánea, se produjo un ascenso de los delitos contra la propiedad, que pasan a ser los más frecuentes⁹³. La transición entre el crimen violento y el económico se realizaría en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII y se asentaría en el XIX, con el auge del sistema liberal. Esta conexión entre modernización y cambio criminal ya se encuentra en autores del siglo XIX⁹⁴.

Seguimos encontrando autores actuales que ligan la transición de crimen violento a económico a la “modernización social”⁹⁵, pero la tesis parece haberse abandonado incluso en Francia, donde más se trabajó⁹⁶. No parece haberse producido en Galicia a lo largo del siglo XIX, si observamos el crimen menor en los partidos judiciales de A Coruña y Santiago⁹⁷, y tampoco para el conjunto de Galicia ni de España para el periodo estudiado, según veremos en el capítulo 6. En palabras de Johnson y Monkkonen, “the popular de la violence au vol ‘modernization’ thesis does not hold up to empirical verification (...). Whereas violence certainly did decrease over the centuries, there is no solid evidence that property crimes actually increased”⁹⁸.

Se suele señalar al artículo de Ted Gurr en 1981, citado centenares de veces, como el primero en el estudio sobre tendencias de homicidio a largo plazo. El autor comparó diversos estudios parciales sobre homicidios en Inglaterra desde el siglo XIII hasta el XX. También realizó una gráfica para diversos puntos de Estados Unidos a partir de 1850, si bien esta señalaba una estabilización o tendencia creciente, según la serie de datos, y para otros países europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Pero fue la gráfica inglesa la que popularizó un nuevo paradigma. Aunque había grandes huecos y oscilaciones, los datos mostraban, para Gurr, que el homicidio era diez veces más elevado en la Inglaterra del siglo XIII que en la contemporánea, con una tasa de homicidios en la época medieval sobre los 20 casos anuales por 100.000 habitantes (con casos extremos, como el Oxford del siglo XIV, por encima de los 100). En base a estos estudios parciales proyectó una curva de caída artificialmente continua⁹⁹ desde la Edad Media hasta el siglo XX¹⁰⁰.

⁹¹ SPIERENBURG, P. (2013), pp. 2122.

⁹² AEBI, M. F., LINDE, A. (2016), p. 66.

⁹³ BOUTELET, B. (1962).

⁹⁴ GIMENO AGIUS, J. (1885-A), p. 511. DURKHEIM, E. (1912), pp. 176-177.

⁹⁵ RAMÍREZ RUIZ, R. (2006), p., pero también IGLESIAS RODRÍGUEZ, J. J. (2012), p. 69.

⁹⁶ MUCHEMBLED, R. (2008), p. 31.

⁹⁷ CARBALLO GENDE, E. (), pp. 28-30.

⁹⁸ De su obra *The Civilization of Crime: Violence in Town and Country since the Middle Ages*. Citados en AEBI, M. F., LINDE, A. (2016), p. 77. Por poner un ejemplo, en Amsterdam la proporción de homicidios-crímenes contra la propiedad se movió poco en 1650-1810. SPIERENBURG, P. (1998), p. 121.

⁹⁹ Es decir, que responde a la tendencia de los datos y no a su unión en la gráfica.

¹⁰⁰ GURR, T. R. (1981), p. 313.

Dos décadas después, y con un cuerpo de estudios parciales mucho mayor, Manuel Eisner realizó un trabajo recopilatorio semejante para Inglaterra, Suiza-Alemania, los Países Bajos-Bélgica, Escandinavia e escandinavos e Italia, encontrando también un patrón decreciente y tasas de homicidio muy elevadas en la Edad Media (entre los 16 y los 73 casos anuales por 100.000 habitantes)¹⁰¹ y una gran caída que se produjo sobre todo antes del siglo XIX pero que continuó durante este. En un artículo de 2014 amplió los datos con otros de Francia y Córcega y Cerdeña y parcialmente España¹⁰², país del que veremos las especificidades en el apartado 1.8. En conjunto es apreciable una curva de descenso, aunque la tendencia se ve a largo plazo, a través de la agregación de muchos trabajos parciales y con un periodo de estudio de siglos, lo que encaja con un modelo de cambio de fondo y con resultados graduales. Esta tendencia sería compatible con diferencias entre regiones y reversiones temporales.

El modelo de disminución del homicidio es aceptado por buena parte de la comunidad académica, si bien ha recibido algunas críticas relevantes acerca de los sesgos que puede incluir, como que el número de homicidios puede haber sido mayor en tiempos pasados por los peores sistemas sanitarios, o las dificultades para contrastar cifras de países diferentes¹⁰³.

Habría más dificultades para exportar el modelo. Las tendencias numéricas medidas se basan en estudios realizados para Europa occidental y para un periodo que transcurre entre la baja Edad Media y la actualidad, y dentro de Europa, con énfasis en los países en los que se han hecho más estudios cuantitativos¹⁰⁴. De acuerdo con el estudio más reciente de las Naciones Unidas, Europa Occidental se encuentra entre las regiones más seguras del mundo, con una tasa de 1 homicidio al año por 100.000 habitantes, frente a la media mundial de 6,1¹⁰⁵. En Estados Unidos los niveles de violencia han sido histórica y actualmente más altos que Europa Occidental, en lo que Eric Monkkonen denominó “el excepcionalismo americano”¹⁰⁶. Otros estudios puntuales han empezado a explorar la criminalidad en lugares como China, India, Brasil, Rusia o Sudáfrica, pero el estado del arte está lejos de permitir un análisis al nivel europeo¹⁰⁷.

También resulta difícil remontarse hacia atrás en el tiempo más allá de la Edad Media, para ver si la tendencia provenía de antes. Esta proyección obligaría a reformular el modelo, puesto que estudia la violencia en tiempos de paz y deja fuera los conflictos armados y las grandes matanzas colectivas¹⁰⁸; y por tanto consideramos que habría que realizar adaptaciones para realizar comparaciones con sociedades de frontera o que viven en guerra endémica. Keeley mostró que al menos algunas sociedades sin estado (prehistóricas o actuales) presentaban índices altos de violencia, con tasas de homicidios muy superiores a las de las sociedades industriales modernas, incluyendo la guerra en ambos casos; y que, contra el criterio mayoritario en la antropología, las primeras eran bastante efectivas ejerciendo violencia colectiva¹⁰⁹.

¹⁰¹ EISNER, M. (2003), p. 99.

¹⁰² EISNER, M. (2014), pp. 80-81.

¹⁰³ Veanse MC MAHON, R., EIBACH, J., ROTH, R. (2013), SCHWERHOFF, G. (2013), MC MAHON, R. (2016).

¹⁰⁴ JOHNSON, E. A., SALVATORE, R. D. SPIERENBURG, P. (2012), pp. 237-239.

¹⁰⁵ Hay importantes variaciones entre regiones situadas en el mismo continente y entre países. Así, la media de homicidios en Europa es de 3 casos anuales por 100.000 habitantes, mayor que Asia y Oceanía, mientras que América Central y del Sur presentan índices mucho más elevados que América del Norte. , pp. 14-16.

¹⁰⁶ MONKKONEN, E. (2006).

¹⁰⁷ JOHNSON, E. A., SALVATORE, R. D. SPIERENBURG, P. (2012), pp. 241-244.

¹⁰⁸ Sobre estas distinciones, SPIERENBURG, P. (2014).

¹⁰⁹ Pueblos como los Kato o los Dani presentan, según las estadísticas elaboradas por Keeley, índices de muertes en conflicto muy superiores a la Rusia o Alemania del siglo XX, contando las guerras mundiales. KEELEY, L. H. (1997), pp. 29-30, 89-90.

Esta aproximación ha sido recogida por Pinker en su libro sobre la historia de la violencia *Los ángeles que llevamos dentro*, para identificar a las sociedades sin estado como las más violentas; el proceso de pacificación identificado en Europa, según este modelo, sería un paso más de una tendencia perceptible desde época prehistórica. Defiende, además, que las bajas por guerra están disminuyendo como parte del mismo proceso¹¹⁰. Esta interpretación está muy lejos de suscitar consenso¹¹¹. Brian Ferguson critica a Keeley y a Pinker por escoger los casos que más favorecerían su tesis, pero que el conjunto de la evidencia arqueológica muestra que “war was absent in entire prehistoric and for millenia”¹¹².

Por otra parte, la curva de descenso no es continuada o irreversible. Tras la Segunda Guerra Mundial, las tasas continúan siendo muy bajas en los años 50 y 60¹¹³, aunque vuelven a elevarse más tarde, con aumentos de la tasa de homicidios especialmente entre los años 70 y 90 (de hecho, fue este incremento el que originó el artículo de Gurr, que quería contextualizarlo)¹¹⁴. Estos aumentos, aunque llamativos porcentualmente, suponen incrementos sobre unas tasas de partida muy bajas y no revierten la tendencia general¹¹⁵; así mismo, volvió a haber una caída tras los años 90. La enorme variedad de tasas de homicidio entre los diversos países en la actualidad, desde los 0,2 casos anuales por 100.000 habitantes en Singapur o los 0,5 en Suiza a los 62,1 de El Salvador o los 56,8 de Venezuela, y los importantes cambios que hemos visto históricamente, prueban que se trata de un fenómeno altamente mutable.

1.7 El proceso de la civilización y los procesos socioculturales de reducción de la violencia

En 1939, el sociólogo alemán Norbert Elias publicó *Über den Prozeß der Zivilisation*, que ha sido traducido en español como el proceso de civilización o proceso de la civilización, un término conflictivo por cuanto entraña la idea de progreso o avance. Emplearemos proceso de civilización para referirnos al modelo propuesto por el alemán, y “proceso de pacificación” para referirnos a la disminución de las tasas de violencia que hemos visto en el apartado 1.6 o a otros procesos en los que haya la misma tendencia. Elias era un crítico de la sociología de su tiempo, que, en su opinión, no prestaba la suficiente atención a la investigación histórica, se centraba en procesos de corto alcance y caía por una parte en el monocausalismo y, por otra, el presentismo al estudiar el pasado¹¹⁶. En la obra, aplicando la visión de largo recorrido que ha venido a conocerse como sociología figuracionista, trata la evolución de la sociedad de Europa occidental en el largo plazo, entre la Edad Media y el siglo XX.

En tiempos medievales, defiende Elias, las emociones oscilaban más, había menos pensamiento en el futuro; las ideas se expresaban con “poco refinamiento” y “escasos matices psicológicos”; el comportamiento se caracterizaba, en relación a épocas posteriores, por su “ingenuidad y su candidez”¹¹⁷. Pero entre esta época hasta sus propios días se habría producido un proceso, iniciado en las clases altas europeas, de incremento del autocontrol emocional y la disciplina interna, así como la proliferación de los sentimientos de vergüenza y desagrado en el repertorio emocional.

¹¹⁰ Basándose en este sentido en Keeley, que ya defendió que las sociedades sin estado eran más violentas que las actuales contando las muertes en guerra. KEELEY, L. H. (1997), p. 29-30.

¹¹¹ Para una crítica, SPIERENBURG, P. (2014).

¹¹² FERGUSON, R. B. (2013-A), p. , FERGUSON, R. B. (2013-B).

¹¹³ Datos sobre el incremento en 14 países europeos, entre los que no se incluye España, en EISNER, M. (2008), p. 305.

¹¹⁴ GURR, T. R. (1981), pp. 295-296.

¹¹⁵ La tasa agregada de homicidios de siete países europeos subió de 0,7 a 1,3 homicidios por 100.000 habitantes entre los sesenta y los noventa. SPIERENBURG, P. (2008), p. 224.

¹¹⁶ ZABLUDOVSKY, G. (2007), pp. 48-50, 52.

¹¹⁷ ELIAS, N. (1939), pp. 108-115, 238-252.

Para el siglo XIX este proceso ya habría culminado en las clases altas (que equiparaban estos rasgos a lo que ellos consideraban civilizado y por tanto superior), a través de las cuales se extiende a las populares y a otros pueblos. Esto se refleja en patrones culturales, como la represión del desnudo, la ampliación del sentimiento del asco o el mayor refinamiento de los modales en la mesa, pero, para el caso que nos ocupa, también conlleva una disminución de la violencia. El rasgo de que el impulso violento es instintivo¹¹⁸, y por tanto, a falta de un contrainpulso que lo reprima, se manifestará.

Este proceso, según señala Elias, no es producto de una planificación racional¹¹⁹, sino de otros cambios de fondo. Sus comentaristas han añadido el concepto de “ofensiva civilizadora”, un “esfuerzo deliberado de sectores de una comunidad” para domar la violencia que se da en momentos puntuales¹²⁰. No es justo, de paso, acusar a la tesis de Elias de teleológica, ya que no afirma que el proceso sea necesario, esencial ni mejor. Como recuerda Ampudia de Haro, en el modelo de Elias “el estadio último de la civilización no existe”, sino que es un proceso “sin intención, ni propósito previo ni planificación” que evoluciona constantemente¹²¹.

¿Qué ha provocado el aumento del nivel del autocontrol? Para Elias, en lo esencial, el desarrollo del absolutismo (y las instituciones estatales que le suceden) y el paso a una economía más interrelacionada, más especializada y menos autárquica en relación a la medieval. En lo referente al primero, un poder central fuerte obliga a los seres humanos a contenerse. Mientras que en las sociedades poco diferenciadas pueden darse animosidades directas, en las más complejas estas amenazan el orden social. Además, manifestarlas deja de ser una ventaja para convertirse en un peligro¹²².

A lo largo del libro, Elias no fundamenta sus teorías en estudios cuantitativos acerca de la violencia, pero, como hemos visto, han sido validadas por los estudios empíricos; tampoco probó una relación entre la violencia y la falta de autocontrol, pero esta relación ha sido puesta de manifiesto por experimentos del campo de la Psicología, así como la posibilidad de aumentarlo a través de la práctica¹²³. El autocontrol, una vez más, no es una panacea para explicar la falta de violencia. Atacar es solo una de las dos reacciones (si se puede emplear la palabra) instintivas ante el estrés de una situación potencialmente violenta, junto con la huida¹²⁴. La experiencia y los valores aprendidos pueden inclinar la balanza hacia la primera, y las expectativas culturales pueden provocar agresiones que no sean una respuesta instintiva.

En el ámbito sociológico, su descripción del proceso de civilización (o su inverso) ha sido recuperado para analizar realidades como el conflicto de Irlanda del Norte o los ghettos de negros en los Estados Unidos¹²⁵. En el histórico, las teorías de Norbert Elias fueron rescatadas y actualizadas décadas después por su discípulo Pieter Spierenburg, que analizó las investigaciones historiográficas propias

¹¹⁸ ELIAS, N. (1989), pp. 240-241, 459.

¹¹⁹ ELIAS, N. (1989), pp. 449.

¹²⁰ Sobre su uso, basándose en aportaciones de Wiener y Spierenburg, PINKER, S. (2012), p. 139.

¹²¹ AMPUDIA DE HARO, F. (2007), p. 177.

¹²² ELIAS, N. (1989), pp. 398-399, 454-455.

¹²³ Sobre la inhibición de la violencia a través del autocontrol, en términos teóricos, BAUMEISTER, R. F. (1997), pp. 263-269. Sobre el agotamiento de la capacidad de autocontrol con el cansancio, y su refuerzo con la práctica continuada, BAUMEISTER, R.F. GAILLIOT, M. DEWALL, C.N. OATEN M. (2006).

¹²⁴ El modelo clásico de reacción ante el estrés de una situación potencialmente violenta, en humanos y animales es el de fight or flight, luchar o huir. Alguna literatura incorpora la posibilidad de recurrir a actitudes prosociales, el modelo tend-and-befriend. VON DAWANS, B. et al (2012).

¹²⁵ ZABLUDOVSKY, G. (2007), pp. 108-114.

y ajenas sobre la decadencia del homicidio para falsar las tesis de Elias y llegó a la conclusión de que “all the evidence combined provides powerful support for the theory of civilization”.

Entre la Edad Media y finales del siglo XX, defiende Spierenburg, hay un cambio cultural muy importante en relación a la violencia; si al inicio la población “often viewed homicide as an act of honorable defense or vengeance”, en la actualidad el homicidio genera ansiedad a la población. En la Edad Media todas las clases sociales empleaban la violencia física, y las élites lo hacían con particular frecuencia. Sin embargo, “physical force gradually became the exclusive domain of underprivileged groups”. La disminución del número de homicidios “points at an average increase of controls over aggressive impulses”¹²⁶. Hay que señalar que estas tendencias afectan sobre todo a la violencia impulsiva, de autoestima y venganza, para recuperar la tipología de Baumeister que vimos en el apartado 1.5. Pero, como también señala Spierenburg, entre otros autores, es la que suele predominar en todas las sociedades, en especial a través de peleas entre hombres jóvenes sin parentesco entre sí, como más tarde desarrollaremos teórica y empíricamente en el capítulo 7. Esto no es óbice para que haya periodos en los que se ve sumergida por la violencia ideológica o instrumental (por ejemplo por conflictos ideológicos y étnicos, o, aunque quede fuera del ámbito de nuestro trabajo, por la violencia relacionada con el tráfico de drogas).

Estos postulados fueron retomados por Pinker, que señala cinco factores exógenos para explicar el proceso. Añade al monopolio de la violencia por parte del Estado y el comercio la feminización de la sociedad, la expansión de la empatía de los individuos a grupos sociales cada vez más amplios y un proceso de perfeccionamiento moral basado en la racionalidad que llama “la escalera mecánica de la razón”¹²⁷. En un esfuerzo por cuantificar las tesis de Elias, Eisner ha comparado matemáticamente las tendencias del homicidio europeo con otros indicadores numéricos relacionados con las tesis del alemán. Por ejemplo, en relación al monopolio de la violencia por parte de estados estables, encuentra una correlación con la disminución de homicidios de reyes, en lo relativo al autocontrol, con el incremento de la lectura, el descenso del consumo de alcohol o la presencia de determinadas palabras clave en el índice de libros de Google, para la época contemporánea¹²⁸.

Una explicación influida por los trabajos de Spierenburg y Elias, aunque sea para su refutación parcial¹²⁹, es la de Randolph Roth en su obra sobre el homicidio en los Estados Unidos desde la época colonial hasta el siglo XXI. Rechaza una serie de explicaciones populares pero que, señala, a veces correlacionan con la tasa de muertes y otras no (leyes contra las armas, aborto, pobreza y desempleo, drogas, disuasión, inmigración, patriarcado). Para él, los homicidios entre adultos sin relación entre sí (los que contribuyen en mayor medida a las tasas finales) han permanecido relativamente elevados en Estados Unidos frente a Europa, especialmente en el siglo XX, porque falló el “nation building”; la pacificación europea sería el resultado de una mayor confianza en las instituciones del Estado y el resto de los ciudadanos. Esta se expresa en cuatro ejes, resumidos en: la creencia de que el Gobierno es estable y protege sin sesgos la vida y propiedad de los ciudadanos; hay confianza en el Gobierno y sus integrantes y se los ve como legítimos; hay patriotismo y solidaridad por motivos raciales, religiosos o políticos; los ciudadanos creen que la jerarquía es legítima, que su posición en ella es satisfactoria, y que puede conseguir el respeto de otros sin acudir a la violencia.

¹²⁶ SPIERENBURG, P. (2008), pp. 223-225.

¹²⁷ PINKER, S. (2012), pp. 885-899.

¹²⁸ EISNER, M. (2014), pp. 102-125.

¹²⁹ Sobre los intercambios de Spierenburg y Roth tras la publicación de *American Homicide*, en gran parte acerca de cuestiones técnicas en la medición de la violencia pero también de fondo, ROTH, R. (2011), SPIERENBURG, P. (2011-A), SPIERENBURG, P. (2011-B).

En términos de Roth, en los casos en los que la confianza en el Estado cae a niveles abismales, la ciudadanía no confía en que lo pueda proteger, y la violencia se convierte en un medio de conseguir el respeto, las tasas de homicidio se vuelven muy altas, pueden subir por encima de los 100 casos anuales por 100.000 habitantes. Si estas características se dan en gran medida, pueden caer por debajo de los 2 casos anuales por 100.000 habitantes, y este sería el caso de Europa occidental. Los procesos de nation building a medias también quedan a medias las tasas de homicidio, y sería el caso de Estados Unidos, con tasas por debajo de los 10 muertos por 100.000 habitantes pero superiores a las europeas¹³⁰.

La explicación de Elias-Spiereburg y Roth es muy parecida en sus efectos. Mayor presencia de un Estado con instituciones funcionales y sentimientos de interdependencia social conllevan menos violencia, aunque los primeros pongan énfasis en cómo el Estado aumenta el autocontrol de sus súbditos o ciudadanos y el segundo en la confianza que estos tienen en las instituciones. En nuestra opinión, la aportación de Roth complementa y desarrolla los planteamientos de Elias: en su modelo, se produciría un proceso de civilización derivado del Estado en tanto que este sea efectivo y genere confianza entre sus conciudadanos. También resulta pertinente su examen de la conflictividad y desconfianza entre grupos étnicos como fuente de violencia para observar si se pueden aplicar a marcos diferentes de los Estados Unidos.

Las tesis defendidas sobre Spierenburg no fueron universalmente aceptadas. Sin embargo, sí que vemos, incluso entre sus detractores, que perciben cambios culturales y de actitud ante la violencia como parte del proceso de pacificación. Schwerhoff acepta algunos puntos, señalando en especial que “the connection between the development and frequency of individual violence, on the one hand, and the development of a monopoly of power by the state, on the other hand, can hardly be dismissed”, pero desconfía de los datos anteriores al siglo XVII y considera que la teoría de Elias interpreta la violencia “only as a blind affect, which had to be controlled by external and internal constraint”¹³¹. Eibach y Shoemaker, críticos con la tesis del proceso de civilización, ligan el descenso de la violencia a cambios en la concepción de la masculinidad y el honor personal, ligados al desarrollo de la ciudad moderna¹³². Muchembled, en su libro sobre la historia del homicidio, habla de “un gigantesque effort occidental d’encadrement autoritaire des nouvelles générations masculines et féminines a partir de la Renaissance” que implica a los adultos de las comunidades, pero también a instituciones, y una sustitución de una cultura del honor por una no violenta¹³³.

Estos cambios de sensibilidades, de alejamiento de la violencia, no se pueden desligar del papel del estado. Para Vaquinhas, en la suavización de las costumbres (estudiada por ella para una región del norte de Portugal entre 1858 y 1918) intervino mucho más la represión que la asunción cultural¹³⁴. Aunque no enfocan directamente el tema de la violencia interpersonal, el Estado es relevante para explicar los procesos de imposición de disciplina en los planteamientos de Foucault¹³⁵, y, sobre todo, de Oestreich¹³⁶. En cuanto a la expansión del comercio, la idea es antigua: ya para Salillas, el “culto a la coacción” que a su entender predominaba en España se explicaba por un modelo económico

¹³⁰ ROTH, R. (2009), pp. 8-26.

¹³¹ Sobre la defensa de Spierenburg ante las críticas de Schwerhoff, SPIERENBURG, P. (2001), SCHWERHOFF, G. (2002), SPIERENBURG, P. (2002).

¹³² MC MAHON, R. (2016), p. 112.

¹³³ MUCHEMBLEMED, R. (2008), p. 19, 189, 192, 221-222.

¹³⁴ VAQUINHAS, I. M. (1996), p. 425.

¹³⁵ FOUCAULT, M. (1986), pp. 225-226.

¹³⁶ OESTREICH, G. (1982), pp. 265, 269, 271-272.

extractivo, en contraposición al productivo de los anglosajones¹³⁷, y posiblemente el propio Elias se inspiró en Smith, Ferguson y Hume¹³⁸.

Los estudios de percepciones culturales acerca de la violencia en periodos amplios resultan especialmente interesantes para evaluar las tesis presentes en este apartado. En este aspecto hay que mencionar a Wiener, que encontró patrones de dulcificación de las costumbres en el siglo XIX inglés, con una ofensiva civilizadora acusada en el periodo victoriano. El comportamiento violento se configuró cada vez más como una característica no respetable y, ya desde inicios de siglo, se dejó de entender la bebida y el honor como atenuantes de las agresiones y se persiguió activamente al duelo; “judges and juries were coming to expect men to exercise a greater degree of control over themselves”¹³⁹. En la violencia hacia la mujer, la más estudiada por este autor, se estableció el buen trato hacia las féminas como marca de civilización, aumentó la persecución de la violencia sexual a partir de 1820, se incrementó la lucha contra el maltrato doméstico por parte del Estado (y el rechazo popular hacia este) y se universalizaron los sentimientos de protección desde las damas de las clases altas a las integrantes de las populares¹⁴⁰.

Existe un análisis sobre el proceso de civilización centrado en España desde la Edad Media hasta la actualidad, pero no trata la violencia sino cuestiones como los códigos de cortesía y buenas maneras¹⁴¹. Sí que podemos ver, en trabajos más temporalmente limitados, cambios culturales de rechazo hacia la violencia. En la Restauración, siguiendo a Bascuñán Añoover, se produjo un cambio cultural y emotivo que rechazaba la pena capital: mientras que en la década de 1880 la población de Toledo fue a presenciar la ejecución de unos bandoleros, en otra en 1914 se manifestó en contra de la de un delincuente habitual que había matado a su mujer a sangre fría. El ajusticiamiento dejó de ser público con la ley Pulido de 1900, las cifras de ejecutados cayeron en las dos primeras décadas del nuevo siglo, y al final de la Restauración se habían convertido en un hecho controvertido¹⁴².

Otro indicador, si bien difícil de aprehender y evaluar, es la de una mayor exigencia con respecto al grado de seguridad. En su libro sobre la policía y orden público en los siglos XIX y XX, Nuño Negro señala que la idea de libertad ordenada ha tenido un “enorme éxito y define a la perfección la idea de seguridad y orden del liberalismo”, que sería la de una “utopía de la seguridad perpetua e infinita” que es a su vez “la fantasía ideal del burgués-empresario”¹⁴³. Veremos más ejemplos, y realizaremos análisis de fuentes con esta perspectiva, en el capítulo 11.

El modelo de partida con el que trabajaremos, en base a lo visto en los últimos apartados, es el de que Europa se encontraba en nuestro periodo de estudio dentro de una tendencia de descenso de las tasas de violencia cotidiana, una tendencia en la que es razonable pensar que intervenían tanto el desarrollo del Estado y la justicia como cambios en las costumbres y vida sentimental que disminuían la agresividad de la población. Este proceso no es continuado y no tiene sentido observarlo en marcos temporales o espaciales reducidos, pero sus efectos deberían notarse a lo largo del siglo que estudiamos, y también reflejar cambios en las competencias del aparato estatal, las percepciones acerca de este y las actitudes sociales hacia la agresividad.

¹³⁷ SALILLAS, R. (1896), pp. 146-149, 204-207.

¹³⁸ EISNER, M. (2014), p. 28.

¹³⁹ WIENER, M. J. (2006), pp. 11, 28.

¹⁴⁰ WIENER, M. J. (2006), pp. 31-35, 38, 86-87, 151-162, 228, 245-246.

¹⁴¹ AMPUDIA DE HARO, F. (2007).

¹⁴² BASCUÑÁN AÑOOVER, Ó. (2016), pp. 208, 211-221, 227.

¹⁴³ NEGRO, N. (2018), p. 52.

1.8 Tendencias a largo plazo en España y Galicia

La historia del homicidio en España, fuera de los periodos de represión y guerra, ha sido poco estudiada. Eisner contaba a España en 2003 como uno de los “blank spots on the geo-historical map of homicide in Europe”¹⁴⁴. Para el Antiguo Régimen disponemos de algunas estimaciones reunidas por Tomás Mantecón, que muestran tasas de homicidio en Cantabria inferiores a los dos casos por 100.000 habitantes entre 1690 y 1830¹⁴⁵. Iglesias Estepa, para la provincia de Santiago, calcula 1,5 casos entre 1700 y 1834 “para una población de aproximadamente 400.000 habitantes”, es decir, menos de 0,4 casos por 100.000 habitantes¹⁴⁶. Son tasas sensiblemente bajas en relación al contexto contemporáneo, y en el caso de Iglesias Estepa, incluso dentro del contexto europeo actual, y consideramos probable que estos índices se deban a sesgos de las fuentes.

Por otra parte, para Navarra, Mikel Berraondo contaba cinco muertos anuales por cada 100.000 habitantes para la Edad Moderna, a partir de datos judiciales¹⁴⁷. En Madrid, y a partir de las causas criminales, Alloza contabiliza algo menos de 10 causas anuales por homicidio por 100.000 habitantes en la primera mitad del Seiscientos, que van ascendiendo irregularmente durante el siglo hasta llegar a los 18 homicidios anuales por 100.000 habitantes en la última década. Tras la guerra de Sucesión la tendencia de casos anuales es decreciente, una docena en la década de 1710 y la mitad en la de 1750; en conjunto, señala que “en el transcurso de la época moderna la violencia criminal disminuyó en la Corte”¹⁴⁸.

En cuanto al siglo XIX y XX, los diversos autores y fuentes reflejan tasas sustancialmente más altas que las europeas y con un patrón de decrecimiento a lo largo del periodo estudiado, aunque las estadísticas dejan grandes espacios en blanco. En su artículo de 2014, Eisner incorpora para España un patrón decreciente de homicidios a partir de un indicador de elaboración propia: 8,8 para el periodo 1800-1849, 8,3 en 1850-1874, 5,5 en 1875-1899 y 4,5 en 1900-1925, con una caída muy importante a partir de ahí¹⁴⁹. En el apartado 6.2 observaremos cómo, a la vista de algunas estadísticas oficiales publicadas, la tasa era probablemente más alta en la primera mitad del siglo XIX.

En lo tocante a la segunda mitad del siglo XIX y en especial la Restauración, la existencia de series continuadas estadísticas oficiales, que describiremos en detalle en el capítulo 6, ha permitido a los autores trabajar las tendencias a medio plazo con más comodidad, aunque de manera parcial. Gómez Bravo calcula, a partir de estadísticas oficiales judiciales, que la tasa de homicidios en España era de 5,2 crímenes por 100.000 habitantes en el año 1900, de 3,9 en 1910 y de 2,5 en 1918¹⁵⁰. Carballo Gende cubre la segunda mitad del siglo XIX a partir de las estadísticas recogidas por los contemporáneos Gimeno Agius y Bernaldo de Quirós: calcula 9,13 homicidios por 100.000 habitantes para el periodo 1859-1862, incluyendo los infanticidios¹⁵¹, y de 5,4 en el periodo 1883-1900, con una

¹⁴⁴ EISNER, M. (2003), pp. 83-142.

¹⁴⁵ MANTECÓN, T. (2009), pp. 18, 30-31.

¹⁴⁶ IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), p. 69.

¹⁴⁷ BERRAONDO PIUDO, M. (2011), p. 96.

¹⁴⁸ ALLOZA, Á. (2000), pp. 129-132.

¹⁴⁹ Las fuentes son las estadísticas criminales recogidas por su equipo, a las que no hemos podido acceder y con el que no hemos podido comunicarnos. EISNER, M. (2014), p. 16.

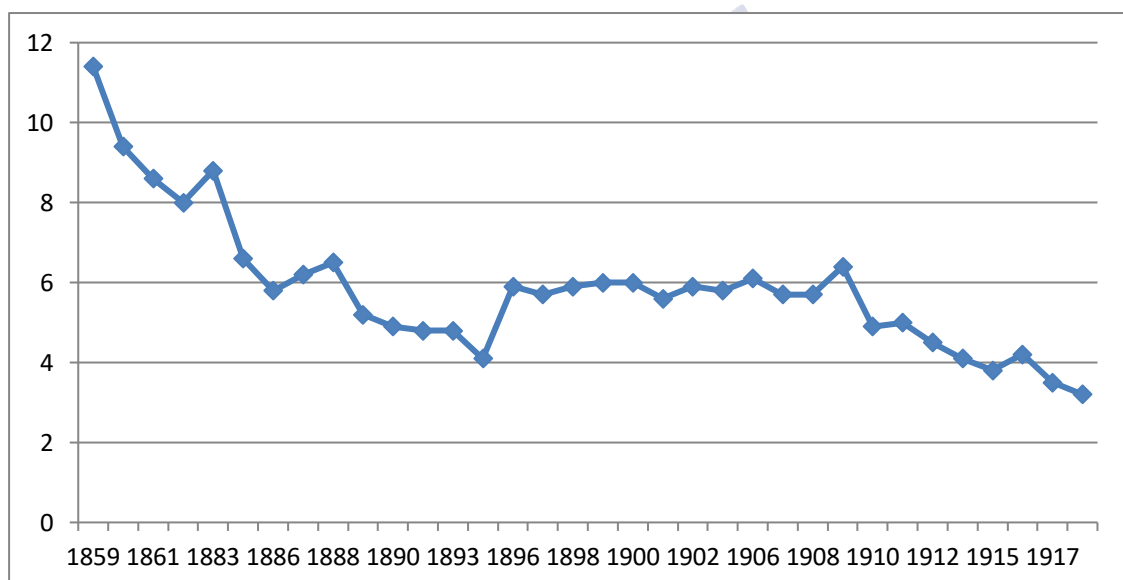
¹⁵⁰ GÓMEZ BRAVO, G. (2009).

¹⁵¹ En esto, utilizamos un criterio diferente al de otros autores. Para Monkkonen “infanticide and the murder of very young children has been treated so inconsistently and the cause of death so often poorly reported that most scholars exclude infanticide and the murder of young children from their counts”, MONKKONEN, E. (2001). Sin embargo, parece que Eisner apuesta por incluirlos, EISNER, M. (2014).

tendencia descendente; también sería a la baja la tasa de acusados anuales por homicidio, atendiendo a datos recogidos por Ferri¹⁵².

A este artículo puede achacársele que trabaja con datos de fuentes secundarias, que, si bien presentan algunas ventajas (Bernaldo de Quirós incorpora algunos datos de estadísticas judiciales que no se conservan o al menos no hemos podido encontrar) tiene también algunas deficiencias, entre las que destaca la falta de datos de infanticidios y errores materiales menores en los años 1890 y 1893, en comparación con las Estadísticas de la Administración de Justicia en lo Criminal, cuyas deficiencias exploraremos con más detalle en el capítulo 6. Una reelaboración de la estadística atendiendo a estas fuentes primarias, incorporando los infanticidios y ponderando el crecimiento de la población en los años en los que hay un censo arroja unas cifras algo más elevadas, pero la misma tendencia, que queda clara para el medio plazo si incorporamos todos los datos de Estadísticas de la Administración de Justicia en lo Criminal que podemos consultar directamente:

Gráfico 1.8.1 Tasa anual de homicidios por 100.000 habitantes en España, subsumiendo homicidios, infanticidios, parricidios y asesinatos (en los casos en los que la estadística los incluye)



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de la Administración de Justicia en lo Criminal¹⁵³

Además de las estadísticas a nivel nacional, también hay que señalar los estudios de detalle de algunos autores que han consultado fuentes distintas a las judiciales. Para la comarca castellana de Tierra de Campos en el periodo 1900-1923, Redondo Cardeñoso, que observó tanto la prensa como la actividad judicial calcula un índice de 4,9 homicidios por 100.000 habitantes, si bien cuenta

¹⁵² CARBALLO GENDE, E. (2020-A).

¹⁵³ La estadística incorpora los años que hemos podido consultar directamente: 1859, 1860, 1861, 1862, 1883, 1884, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918. En comparación con los resultados presentados en CARBALLO GENDE, E. (2020-A), faltan 1885 y 1891 (además de los años posteriores a 1900, que no se incluyeron), cuyas cifras presenta, aunque con la exclusión de parricidios e infanticidios, Bernaldo de Quirós; de cualquier manera, los datos de estos años encajan con la serie. Quirós también incorpora 1894, pero con unos datos que son tan bajos (19 homicidios y asesinatos frente a centenares en el resto de la década) que también se habían excluido en ese artículo.

muerter por imprudencia¹⁵⁴. Para un espacio mucho más restringido, Carballo Gende, a partir de fuentes hemerográficas, calcula una tasa de homicidio de 7,9 casos por 100.000 habitantes en el partido de A Coruña en 1882-1886 y de 3,1 por 100.000 habitantes en el de Santiago de Compostela, excluyendo casos dudosos, y de 8,1 en el de A Coruña para 1919-1921, coincidiendo con un repunte de violencia política¹⁵⁵.

En cuanto a la relación con su contexto, el mapa de la violencia europea a finales del siglo XIX elaborado por Eisner en su artículo de 2003 incluye a España en un anillo de países de la periferia de Europa en los que el homicidio sigue siendo elevado. Son más pacíficos que en siglos anteriores pero perviven costumbres violentas¹⁵⁶. Rodean a otros a otros en los que la violencia extrema estaba algo menos presente, como Suiza, Imperio Austrohúngaro, que a su vez, encierran a un núcleo de regiones muy seguras, de las que las más importantes son Francia, Alemania y el Reino Unido. En la segunda mitad del siglo XIX el sureste de Inglaterra tenía un homicidio por cada 100.000 habitantes¹⁵⁷. Las series de datos recopiladas por Bernaldo de Quirós la sitúan entre los países europeos con más homicidios, si bien emplea datos de segunda mano. Garofalo llega a las mismas conclusiones en la segunda edición de *La Criminología*¹⁵⁸. La bibliografía y las fuentes, en definitiva, probablemente nunca presentarán una cuantificación exacta del fenómeno del homicidio, pero sí apuntan a una tendencia a medio plazo de disminución del homicidio siguiendo el patrón ya explicado en el apartado 1.5, pero partiendo de cifras más altas que otros países de su entorno.

En cuanto a la producción académica sobre el delito para España, la historiografía se ha prodigado poco en su estudio cuantitativo y bajo la perspectiva del largo plazo. Hay varios trabajos regionales o locales sobre en la Edad Media o la Época Moderna¹⁵⁹. También una corriente de estudio, a partir de los años 80, de las instituciones punitivas y el control social entre el XVIII y el XX. El énfasis se ha puesto en los lugares de encierro. Un ejemplo de esta rama de estudio es Justo Serna, que a partir de concepciones marxistas, una perspectiva histórico estructural del control social e influencias de Foucault¹⁶⁰, relaciona “íntimamente” el régimen penitenciario de encierro en hospicios y prisiones y el surgimiento del capitalismo¹⁶¹. Las investigaciones en el ámbito de la prisión también han indagado acerca de la delincuencia. Fraile realizó una aproximación estadística parcial a la criminalidad del siglo XIX en su obra sobre la ciencia penitenciaria¹⁶², así como Trinidad Fernández¹⁶³.

¹⁵⁴ REDONDO CARDEÑOSO, J. A. (2010), p. 273.

¹⁵⁵ Aumentan respectivamente a 10,5 y 7,1 contando casos dudosos. CARBALLO GENDE, E. (2018).

¹⁵⁶ SPIERENBURG, P. (2008), p. 179-181.

¹⁵⁷ EMSLEY, C. (1997)

¹⁵⁸ GAROFALO, R. (1891), p. 343

¹⁵⁹ Entre las muestras de la Edad Media tenemos, un estudio sobre la violencia en la villa de Castellón en el siglo XV en VICIANO, P. (2006), y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R. (2004), que considera que los niveles de agresiones eran mayores en las villas medievales que en la actualidad, si bien no hay una demostración numérica. Como curiosidad, también existe una pequeña pieza sobre la delincuencia en el Camino de Santiago. FERNÁNDEZ ALBOR, A. (1983). En la Edad Moderna, destacamos el estudio para Cantabria de MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. (1997), para Navarra el de BERRAONDO PIUDO, M. (2012) y, para Madrid, el de ALLOZA, Á. (2000).

¹⁶⁰ Aprovechamos para hacer una referencia obligada al autor francés por su influencia en la historiografía criminal con su clásico *Vigilar y castigar*, si bien sus teorías han sido puestas en cuestión. FOUCAULT, M. (1986). Sobre las críticas a su modelo de imposición de la disciplina, MUCHEMBLE, R. (2008), p. 250, EMSLEY, C. (2007), pp. 92-93, 171, y, en contra de las tesis de Foucault de una mayor persecución del delito contra la propiedad, SPIERENBURG, P. (2013), p. 84.

¹⁶¹ SERNA ALONSO, J. (1988).

¹⁶² Empleando, aunque no de manera sistemática, las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal. FRAILE BALBÍN, P. (1987), pp. 71-86.

¹⁶³ Que presenta datos muy pertinentes sobre la reincidencia o el origen sociolaboral de los presos. TRINIDAD FERNÁNDEZ, P. (1991), pp. 203-235.

Otro ejemplo es Gómez Bravo, que, a partir de la cárcel de partido de Alcalá, explora otros aspectos como las percepciones sobre el criminal, el mantenimiento del orden público o los diversos tipos delictivos¹⁶⁴.

Fuera del enfoque punitivo y para la Edad Contemporánea, entre las obras que más han influido para plantear esta tesis se encuentra el ya clásico de Ruiz Martínez sobre la delincuencia en la época isabelina¹⁶⁵, y estudios regionales para la Restauración y periodos posteriores en los que, además del estudio de la movilización y protesta colectiva¹⁶⁶, se explora la criminalidad común en las zonas rurales, en parte como forma de resistencia ante las autoridades, con raíces interpretativas en Hobsbawn, Thompson y James Scott, así como de la tradición española previa sobre este enfoque¹⁶⁷.

Dentro de esta corriente se encuadra Bascuñán Añover en su trabajo sobre Castilla-La Mancha durante la Restauración, en el que analiza cómo las clases subordinadas rurales responden a las presiones sociales y económicas que le son perjudiciales (fiscalidad, falta de acceso a la propiedad, subordinación al sistema oligárquico, encarecimiento de las subsistencias). Pero además de las movilizaciones y organización colectiva y las huelgas y motines, estudia los delitos económicos y su evolución para analizarlos como estrategias de los desposeídos para conseguir recursos y resistirse a las restricciones sobre los recursos comunales, y también otros tipos criminales que muestran disputas por la propiedad o políticas, como los atentados contra el orden público, las acciones en defensa de la propiedad o los incendios. En palabras del autor, “las prácticas cotidianas y soterradas de resistencia y transgresión dirigidas contra la propiedad y el orden público contenían buenas dosis de enfrentamiento social por unos recursos amenazados y contra el nuevo orden social”¹⁶⁸.

Un planteamiento semejante es el de Redondo Cardeñoso, en este caso para la comarca de Tierra de Campos en 1900-1923. Al igual que Bascuñán, incorpora al estudio de las movilizaciones colectivas campesinas el del robo, el hurto y otros ataques contra la propiedad y del enfrentamiento individual contra las autoridades como formas de rebeldía y estrategias económicas; pero añade un amplio análisis cuantitativo y cualitativo de la violencia horizontal entre las clases populares, incluyendo cuestiones que veremos en este trabajo como las peleas juveniles y la apreciación cultural por las armas¹⁶⁹.

Con menos énfasis en la protesta colectiva, Martínez Carretero estudia el delito común en la provincia de Zaragoza desde el inicio de la Segunda República hasta 1945. Aunque escapa al periodo de estudio de nuestro trabajo, es salientable resaltar que encuentra un cambio en la dureza de los castigos en el periodo franquista en relación al republicano, con una reducción casi a la mitad de las absoluciones y un mayor empleo de la prisión preventiva y, pese a esto, un “notable incremento” de los delitos contra la propiedad, que achaca a la crisis económica bajo el nuevo régimen, en especial debido a la política autárquica¹⁷⁰.

En nuestro trabajo bebemos en parte de fuentes que ya emplearon para sus respectivos territorios, y que veremos con más detalle en los capítulos 5 y 6. Pero también pretendemos aportar una

¹⁶⁴ GÓMEZ BRAVO, G. (2004).

¹⁶⁵ MARTÍNEZ RUIZ, E. (1982).

¹⁶⁶ Un caso en el que el análisis se limita a la movilización colectiva sería LUCEA AYALA, V. (2009).

¹⁶⁷ Ejemplos para Andalucía en CRUZ ARTACHO, S. (2000) y CASANOVA, J. (2000). Sobre la obra de Scott, sus comentaristas y empleo en la historiografía, CABANA, A., CABO VILLAVARDE, M. (2013).

¹⁶⁸ BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008). Para una exposición resumida de aspectos de resistencia social ligados a la delincuencia, BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2005), y para una reflexión sobre la dificultad para diferenciar entre motivaciones de resistencia y de lucro en los delitos, BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2014).

¹⁶⁹ REDONDO CARDEÑOSO, J. A. (2010), REDONDO CARDEÑOSO, J. A. (2011).

¹⁷⁰ MARTÍNEZ CARRETERO, I. (2016), pp. 497-502.

perspectiva de análisis a más largo plazo y, sobre todo, poner en relación los datos gallegos con los españoles para dotarlos de contexto.

Para Galicia encontramos una producción académica relativamente rica en cuanto a la violencia y el delito de naturaleza sociopolítica y/o colectiva. En los capítulos 8 a 10 veremos la producción académica en relación a las guerras y levantamientos, la violencia política, la represión gubernamental o los actos de resistencia colectivos. Algunos autores han incluido análisis del crimen cuando tenían relación con su objeto de estudio, como Balboa López en relación al monte en Galicia¹⁷¹ en tanto que explora métodos de aprovechamiento o defensa de los comunales considerados delictivos por las autoridades, o Herminia Pernas, que en su trabajo sobre las clases trabajadoras en Santiago incluye referencias a los delitos comunes y su represión¹⁷².

Los actos de violencia sin ese carácter y la delincuencia, en cambio, suma muy pocas obras, por lo que merece la pena detenerse en sus autores. Beatriz López Morán, que defendió en los años 90 una tesis sobre el bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX¹⁷³, empleando las causas conservadas en el Archivo del Reino de Galicia. La obra sigue siendo de referencia para este tema concreto y la desarrollaremos con más detalle en el apartado 7.8. Otro fenómeno violento concreto que ha recibido atención concreta es el de las peleas interparroquiales de grupos de mozos, estudiado por Cabo Villaverde y Vázquez Varela y que comentaremos en el apartado 7.9.1¹⁷⁴. En el capítulo 12 veremos las obras acerca del contrabando y la evasión del servicio militar.

Para el siglo XVIII y la transición con el XIX, la gran referencia es Iglesias Estepa¹⁷⁵, que ha publicado una tesis, un libro y varios artículos¹⁷⁶ sobre el crimen gallego. Sus investigaciones se centran en el periodo 1700-1834 y la provincia de Santiago contemporánea, y, sobre todo, en dos catas de causas criminales y protocolos notariales para causas criminales en Santiago y Noia, junto con otras fuentes sobre normativa y represión. Su trabajo resulta también interesante porque estudia los modos de impartir justicia y mantener el orden público, y por el énfasis en la infrajusticia y los mecanismos parajudiciales de resolución de conflictos. A lo largo de este trabajo nos referiremos reiteradamente a su obra, si bien resulta muy difícil realizar comparaciones de naturaleza cuantitativa debido al carácter de sus fuentes y la ausencia de estadísticas exhaustivas para su época. En concreto, su obra no presenta tasas anuales de incidencia de los fenómenos en relación a la población, que será la fórmula preferente que emplearemos en este trabajo, aunque sí otras estadísticas (como el sexo de los participantes en los procesos judiciales) que permiten la comparación con nuestras aportaciones.

Otra aproximación cuantitativa es la de Sabela Taboada, en un artículo inédito y académicamente dirigido desde Histagra, el grupo de investigación en el que se encuadra este trabajo, en el que analiza de manera exhaustiva las sentencias de dos trimestres, en 1885 y 1920, de la Audiencia coruñesa. Constituye el único enfoque cuantitativo sobre la delincuencia común para Galicia en nuestro periodo de estudio. Cuenta con enfoques interesantes, como interpretar la disminución de la participación colectiva en los delitos como una tendencia hacia la individualización, pero adolece, en nuestra opinión, del mismo problema que el de Iglesias Estepa: sus estadísticas hacen referencia solo a la propia actividad judicial, y no intentan calcular la incidencia en relación a la población. En algunos aspectos este enfoque es útil (por ejemplo, para estudiar la adscripción sociolaboral de los

¹⁷¹ BALBOA LÓPEZ, X. (1990).

¹⁷² PERNAS OROZA, H. (2001).

¹⁷³ LÓPEZ MORÁN, B. (1995).

¹⁷⁴ CABO VILLAVERDE, M., VÁZQUEZ VARELA, J. M. (2015).

¹⁷⁵ Y prácticamente la única, junto con un artículo de Palop Ramos sobre la criminalidad a finales del siglo. PALOP RAMOS, J. M. (2000).

¹⁷⁶ IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), IGLESIAS ESTEPA, R. (2005), IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), IGLESIAS ESTEPA, R. (2008), IGLESIAS ESTEPA, R. (2012).

encausados) pero para evaluar algunas afirmaciones es necesario observar la indidencia, como a la hora de determinar si realmente se produjo, como señala la autora, un auge de los delitos contra la propiedad¹⁷⁷.

El análisis cuantitativo de la realidad criminal desde Galicia fue retomado por Carballo Gende en un trabajo académico en el que, además de las consideraciones sobre el homicidio que ya hemos señalado, intenta medir la violencia cotidiana en la ciudad de A Coruña a través de la prensa local de sucesos, así como sus aspectos sociales y culturales, señalando que la prevalencia del homicidio responde a causas relacionadas con la aceptación cultural de manifestaciones menores de violencia¹⁷⁸. Estas causarían, en el siglo XIX, menos ansias y sensación de peligro que la violencia social de inicios del XX, aunque la segunda fuese menos prevalente¹⁷⁹. Otro artículo, sobre el delito económico en la crisis de subsistencias de 1850¹⁸⁰, se expande y desarrolla en el capítulo 5.



¹⁷⁷ TABOADA GONZÁLEZ, S. (2006).

¹⁷⁸ CARBALLO GENDE, E. (2018). Sobre la aceptación de la violencia doméstica menor, CARBALLO GENDE, E. (2019).

¹⁷⁹ CARBALLO GENDE, E. (2020-A).

¹⁸⁰ CARBALLO GENDE, E. (2020-B).

2. LAS MUTACIONES DE LA LEY

Para el estudio del delito es preciso analizar, además del hecho criminal, la existencia de una estructura formal que lo considera como tal, lo persigue y lo castiga. En este capítulo y el próximo estudiaremos las corrientes legislativas y las instituciones judiciales y policiales; porque es esencial entenderlas para observar el crimen y porque, como veremos, sufrieron importantes mutaciones durante nuestro periodo de estudio.

2.1 Quién dictaba la sentencia: la evolución de la estructura judicial y los jueces

En el Antiguo Régimen la justicia en Galicia se estructuraba en dos niveles. El inferior era el de las diversas jurisdicciones y cotos, de tamaño muy diverso, que en el censo de Floridablanca suman algo más de 700¹⁸¹. Estaban ligados a una persona o institución, y eran fruto del proceso de parcelación de los dominios de justicia directa real durante la Edad Moderna, que a menudo pasaron a particulares a través de ventas o exacciones¹⁸². Al tiempo, y como una característica generalizada de la justicia del Antiguo Régimen, existía una confusión entre las competencias judiciales y administrativas.

En 1760 en torno al 48,9% de los gallegos vivían en jurisdicciones de señores seculares (en general, nobleza titulada), el 25,9% en señoríos episcopales y el 13% en otros señoríos eclesiásticos (incluidos monasterios). El 8,3% de los vecinos, concentrados en A Coruña y Betanzos, residía en señoríos de realengo, en los que la justicia correspondía a un corregidor nombrado por la Corona. Unos pocos miles de vecinos eran vasallos de órdenes militares, o vivían en poblaciones de justicia “por sus vecinos”, que votaban a sus propios jueces¹⁸³. No era el caso de otros territorios de la Monarquía Hispánica: tras la Guerra de Sucesión, Cataluña fue dividida en corregimientos, con alcaldes mayores asignados por el corregidor o por el monarca para los casos civiles y criminales¹⁸⁴. En la segunda mitad del siglo XVIII algunos ilustrados gallegos apostaron por un modelo similar para la región, pero no habrá una reforma profunda hasta el periodo liberal¹⁸⁵.

Fuera de las poblaciones de justicia por sus vecinos, las jurisdicciones estaban ligadas a un titular que se encargaba de nombrar a los jueces ordinarios, en algunas ocasiones contando con sus vasallos o consultando a los administradores locales¹⁸⁶. En el conjunto de la Corona de Castilla estos magistrados eran muy heterogéneos, en cuanto a denominaciones (alcalde¹⁸⁷ mayor, alcalde ordinario, juez de grado, etc), formación, duración del oficio, etcétera¹⁸⁸. Para simplificar, nos

¹⁸¹ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 329-331.

¹⁸² GARRIGA, C. (2007), pp. 68-69.

¹⁸³ EIRAS ROEL, A. (1989), p. 117.

¹⁸⁴ Si bien se encontraban con limitaciones de competencias por otros tribunales (reales, eclesiásticos, barones) o por las interferencias de la Audiencia correspondiente. CERRO NARGÁEZ, R. (2001), pp. 290-292, 297, 304.

¹⁸⁵ Entre estas propuestas destacan el *Discurso sobre la necesidad de que se establezcan corregimientos en el Reino de Galicia*, escrita por el abogado Herbell de Puga y publicada en Santiago en el año 1767, y el tratado del jurista coruñés Francisco Somoza, *Reforma de tribunales. La Justicia vestida de todas sus facultades augustas, por medio de un tribunal fundado y gobernado sobre las firmísimas columnas de la utilidad, razón y experiencia* (1773), que no llegó a publicarse. IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), pp. 92-93.

¹⁸⁶ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M. (1995), pp. 239.

¹⁸⁷ Alcalde viene, precisamente, del árabe para juez, al-caid. Sobre cómo se incorporó al léxico administrativo y judicial castellano, MOLAS, P. (2014), p. 27.

¹⁸⁸ GARRIGA, C. (2007), p. 74.

referiremos a ellos como jueces ordinarios. Nada obligaba a que tuviesen formación jurídica¹⁸⁹, y era frecuente que careciesen de ella. Esto ya se les criticaba en la época, y también la persecución desde su cargo de intereses particulares¹⁹⁰. En Galicia, según una fuente contemporánea, existían en 1775 un total de 833 jurisdicciones, con 6 corregidores regios y unos 20 jueces letrados¹⁹¹. A su vez, designaban a pedáneos en lugares o parroquias, que a veces tenían también la consideración de jueces¹⁹².

El papel de estas justicias era, en términos estrictamente legales, limitado: “en principio cualquier justicia ordinaria estaba facultada para sentenciar toda clase de causas criminales, en la práctica su autonomía se restringirá a los delitos de pequeña consideración”, esto es, hurtos, agresiones e insultos¹⁹³, si bien no se puede desdeñar el papel que los titulares pudieran ejercer en relación a delitos mayores de sus propias competencias, a la hora de identificar a los criminales, asistir con consejos a los pleiteantes en las instancias superiores, etcétera. También disponían de prisiones, de ínfima calidad y con fugas frecuentes¹⁹⁴.

La responsable de controlar a estas justicias menores y juzgar delitos de más cuantía era la Real Audiencia de Galicia, establecida en 1480. Sus magistrados juzgaban directamente los delitos que se cometieran en las cercanías de su sede (parece que en un determinado momento fueron cinco leguas, y en otro ocho) y los crímenes denominados de Corte, como violación, muerte segura, robos o latrocinios. Tenía, además, papel regulador, pues hacia la Audiencia se dirigían las apelaciones de las justicias señoriales, de manera que “conocía en todos los procesos en grado de vista y revista”¹⁹⁵ y poseía competencias para intervenir en procesos por vía sumaria o revisar las sentencias de delitos graves¹⁹⁶.

La Audiencia de Galicia carecía de la condición de Corte¹⁹⁷ y dependía de la Real Chancillería de Valladolid. Era una dependencia más teórica que práctica, puesto que no se podían apelar a ella todas las decisiones. En concreto, en lo relativo al derecho penal, solo se podían referir a la Real Chancillería sentencias que implicasen pena de muerte natural¹⁹⁸. A finales del Antiguo Régimen la Real Audiencia era en la práctica la máxima autoridad judicial de la región, a la que se referían los habitantes para solventar sus disputas y servía a los campesinos para litigar por lo civil contra sus señores en cuestiones de tasas y foros¹⁹⁹. Presidida por un capitán general desde Felipe II, desempeñaba también funciones de gobierno y administración del territorio²⁰⁰.

¹⁸⁹ “Llegado el caso, ni siquiera la condición letrada se consideraba imprescindible, y no ciertamente por una cuestión de oportunidad, como era la obligación que tenían los jueces legos [...] de contar con asesoramiento letrado, sino por la muy sustancial razón de que era en la *conciencia* —y no en la *ciencia*— donde se hacía radicar el conjunto de dispositivos que inclinaban a y permitían administrar rectamente la justicia”. GARRIGA, C., p. 83.

¹⁹⁰ IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), pp. 85-93.

¹⁹¹ ALONSO ROMERO, M. P. (2007). La fuente original es HERBELLA PUGA, B. *Derecho práctico y estilos de la Real Audiencia de Galicia*, 2ª ed. (1ª en 1876), Santiago, Imprenta Compañel, 1844-facs La Coruña Ilustre Colegio Provincial de Abogados, 1975, p. 228.

¹⁹² IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), pp. 65-70.

¹⁹³ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M. (1995), pp. 251.

¹⁹⁴ IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), pp. 146-154.

¹⁹⁵ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 119, 151, 239, 289-290.

¹⁹⁶ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M. (1995), pp. 237.

¹⁹⁷ GARRIGA, C. (2007), p. 73.

¹⁹⁸ IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), p. 81.

¹⁹⁹ SAAVEDRA, P. (1994), pp. 441-442.

²⁰⁰ Entre 1726 y 1800, parece, fue sustituido por un regente de naturaleza civil. MOLAS, P. (2014), pp. 20-22. Sobre su papel de gobierno y asesoramiento del capitán general, vease DE URTAZA, M. M. (2014), pp. 44-45.

Este es un esquema simplificado, ya que en ámbitos particulares actuaban jurisdicciones especiales (eclesiásticas, militares, de Marina, de Intendencia Real, de Cruzada y Encomienda, etcétera), y algunos de los juzgados menores eran dependientes de otros. A esto hay que añadir la inexistencia de un código normativo claro, preciso y universal, lo que proporcionaba un amplio margen de maniobra a la costumbre y la interpretación, una aproximación potenciada por una concepción trascendente de la justicia (en tanto que el juez era intérprete de un orden divino o moral, no solo un funcionario que aplicase un código creado por los hombres) y por la concepción corporativa de la sociedad. La del Antiguo Régimen era, por tanto, una justicia de jueces, en la que “el centro de gravedad en la determinación del derecho está en el momento de la interpretación (es decir, en la actividad de los magistrados) y no en las propiedades sistemáticas del campo normativo”²⁰¹.

Esta multiplicación de tribunales no era armónica, y llevaba a que los propios contemporáneos encontrasen difícil definir quién debía juzgar qué, o a quién. En palabras de González Fernández, el entramado jurisdiccional se caracterizaba “por una acentuada complejidad a causa de la proliferación o indefinición” sobre un mismo espacio de ámbitos de poder paralelos y jerárquicos²⁰². Por supuesto, la población de la época intentaba emplear esta indefinición e instrumentalizarla para hacer avanzar sus propios intereses. En el siglo XVIII, por ejemplo, los mareantes y armadores gallegos sacaban a relucir su condición de aforados militares de la Marina en sus pleitos contra el pago de diezmos eclesiásticos, de manera que, en vez de la Real Audiencia, el tribunal competente en estas reclamaciones pasó a ser el Juzgado del Departamento de la Marina, y, en apelación, el Consejo de Guerra²⁰³.

La invasión napoleónica supondrá una ruptura de este mundo. La administración de José I estableció entre 1808 y 1812 un nuevo esquema judicial que adelantaría las características del que se irá desarrollando durante el resto del siglo, de la misma manera la planta administrativa presagiaba la división en provincias y municipios que se implantaría en los años siguientes. Su influencia principal, por supuesto, es el Código Civil de los Franceses de 1804 (más conocido popularmente como Código Napoleónico), que “supuso un enorme impacto en la cultura jurídica francesa y universal”²⁰⁴. El código iba en la línea de someter la interpretación del juez a la voluntad del legislador; una pretensión que no era nueva, y ya se había buscado por los monarcas franceses a través de ordenanzas e intentos de supresión de las venalidades²⁰⁵.

El gobierno napoleónico apostó por la unidad legislativa, destituyó y dejó sin efecto las disposiciones de todas las justicias que no fuesen de designación real (si bien les permitió “solicitar de nuestra Persona por los Ministerios respectivos su acomodo y colocación”) y eliminó en 1809 los tribunales eclesiásticos²⁰⁶. En cuanto a las reformas positivas, dividió el territorio en juzgados de primera instancia y tribunales de apelación, suprimió el tribunal de la Inquisición y traspasó las capacidades judiciales del Consejo Real a juntas contenciosas. Entre las declaraciones de intenciones de su normativa y de los que la aplicaron encontramos planteamientos novedosos en la tradición española, como la separación de poderes, la independencia del judicial, reflejada en la Constitución, y la división entre policía y justicia.

Estas reformas pertenecen al ámbito de la teoría, más que el de la práctica, puesto que la implantación efectiva fue muy limitada y la vida en esos cuatro años transcurrió en estado de

²⁰¹ AGÜERO, A. (2007), en especial p. 34.

²⁰² GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M. (1995), pp. 236, 238.

²⁰³ DUBERT, I. (2016), p. 38-39.

²⁰⁴ IGLESIAS GARZÓN, A. (2012), p. 223.

²⁰⁵ IGLESIAS GARZÓN, A. (2012), pp. 71-114.

²⁰⁶ Cuestión relevante ya que, durante la Edad Moderna, retuvieron en los territorios de la monarquía hispánica potestad en cuestiones como el derecho de familia. GIL AMBRONA, A. (2009).

excepción. En el territorio josefista, los decretos que desarrollaban la organización de justicia no se proclamaron hasta junio de 1812, dos meses antes de la caída del gobierno, y los tribunales de apelación no parece que llegaron a funcionar. Incluso los órganos que sí tuvieron existencia real, las juntas contenciosas, tuvieron problemas para pagar los salarios de los jueces, y evidentemente sólo actuaron en el territorio controlado por las tropas josefinas. La separación de poderes tampoco llegó a ser efectiva²⁰⁷. En las zonas ocupadas, en cambio, actuaron juntas criminales extraordinarias, órganos de justicia sumaria para reprimir a sediciosos y guerrilleros²⁰⁸. En tanto que el Gobierno josefino apenas tuvo presencia en el territorio gallego (como veremos en el apartado 8.1), la aplicación de las reformas debió ser nula en la región.

Pero en paralelo, las Cortes de Cádiz desarrollaron un modelo de justicia con algunas rupturas de principios en relación al del Antiguo Régimen, del que el de la separación de poderes reflejada en la Constitución de 1812 no es el menos importante. El modelo de justicia doceañista se estructuraba en base a jueces de primera instancia (sin separación entre esta y la instrucción), una serie de Audiencias nacionales territoriales que veían casos en apelación (eliminando la distinción entre casos de Corte y comunes) y un Tribunal Supremo sobre estas²⁰⁹. La separación de poderes no era perfecta, ya que los alcaldes desarrollaban funciones contenciosas²¹⁰. Los diputados, además, desalojaron en verano de 1811 las justicias señoriales, que devolvieron “a la Nación”²¹¹, y en el artículo 258 de la Constitución se recoge la uniformidad legal para todo el territorio (aunque los diputados respetaron explícitamente la jurisdicción eclesiástica y la militar).

Los nuevos jueces, según el artículo 251 de la Constitución y el decreto del 3 de junio de 1812, estaban sometidos a un procedimiento de selección laxo en la formación pero riguroso en lo político: debían ser mayores de 25 años, haber nacido en territorio español y “ser letrados, gozar de buen concepto en el público, haberse acreditado por su ciencia, desinterés y moralidad, ser adictos a la Constitución de la Monarquía, y haber dado pruebas en las circunstancias actuales de estar por la independencia y libertad política de la Nación”²¹². El sistema daba flexibilidad al poder ejecutivo, por tanto, para purgar a los letrados desafectos a la autoridad y confirmar en sus puestos a los alcaldes y jueces ordinarios del Antiguo Régimen que resultasen ser adictos. Pero en nombre de la Nación. A partir de 1811 la justicia señorial desaparece formalmente en España.

Si bien la implantación de la legalidad constitucional tuvo dificultades en parte del territorio gallego²¹³, la justicia señorial desaparecerá en la práctica, tras la Guerra de la Independencia, con Fernando VII. Pues, pese a que eliminó las disposiciones judiciales constitucionales²¹⁴, con el

²⁰⁷ MUÑOZ DE BUSTILLO, C. (2007), pp. 143-155, 163-165.

²⁰⁸ MUÑOZ DE BUSTILLO, C. (2007), pp. 165-167.

²⁰⁹ Las disposiciones relativas a la organización de los tribunales y la administración de justicia pueden consultarse en los artículos 242 a 308 de la Constitución de Cádiz.

²¹⁰ MARTÍNEZ PÉREZ, F. (2007), pp. 194-200.

²¹¹ Los señoríos jurisdiccionales quedaron abolidos por el decreto 82, del 6 de agosto de 1811, en cuyo primer punto figura que “quedan incorporados a la Nación todos los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición que sean”. En el decimocuarto se aclara que “en adelante nadie podrá llamarse Señor de vasallos, ejercer jurisdicción, nombrar jueces”. *Colección de los decretos (...) (1811)*, pp. 193-196.

²¹² GÓMEZ RIVERO, R. (2006), p. 12.

²¹³ Sobre el retraso en realizar la jura constitucional en una parte de las jurisdicciones gallegas, y la posibilidad de que las élites ignoraran los decretos de las Cortes. Hay que señalar que en otras se acogió la Constitución. VEIGA ALONSO, X. R. (2017), pp. 99-101.

²¹⁴ El 15 de junio de 1814 se ordenó “que los jueces de primera instancia y de partido actuales continúen por ahora con el nombre de alcaldes mayores o corregidores, según corresponda”, y el 30 de julio otro restableció “los Ayuntamientos, corregimientos y alcaldes mayores en la planta que tenían en 1808”, y en sus puestos a los que los ocupaban en aquella fecha. ARTOLA GALLEGO, M. (2008), p. 426.

monarca “se modificó por entero el sistema de jurisdicción existente en 1808”²¹⁵, y los señoríos fueron perdiendo respaldo legal a favor de la centralización administrativa²¹⁶. Podemos suponer que lo hizo por los mismos motivos pragmáticos que llevaron a sus parientes Luis XVIII y Carlos X a mantener el organigrama judicial derivado de la Revolución en Francia: “it was in the interests of the restored monarchy to maintain the new codes and systems since these ensured that the royal authority was now the sole legal authority”²¹⁷. Así, mientras que una disposición de 1814 reintegra a los señores jurisdiccionales sus “rentas, frutos, emolumentos, prestaciones y derechos”²¹⁸, en los años siguientes se plantearon procesos competenciales entre la jurisdicción real y otras autoridades, que culminaron en la imposición de la autoridad real. En 1819 se estableció la designación regia de “los oficios de regidores, procuradores, alguaciles mayores y sus tenientes, y todos los demás que antes se proveían por los dueños jurisdiccionales en todos los pueblos del reino”²¹⁹. Tras 1823, las autoridades de cotos y jurisdicciones menores de Galicia parecen designarse desde las capitales de provincia²²⁰.

En el caso gallego, parece que tras la restauración fernandina los oficios señoriales pasaron a ser designados por la Audiencia del Reino, con lo que el régimen señorial quedó abolido “en su dimensión política”; que no en la económica, ya que se continuaron percibiendo rentas y foros²²¹, pese a los impagos de muchas comunidades campesinas que veremos con más detalle en el apartado 8.5. En Bouzas, antigua jurisdicción eclesiástica, se colocó como juez real (la nueva denominación) a un incondicional del Trono y del Altar, por lo que parece que al menos en algunas ocasiones primó “la indiscutible fidelidad política, y en menor medida otras consideraciones más “técnicas””²²². En Lugo y Mondoñedo, cargos como regidores, alcaldes ordinarios y escribanos pasaron de ser elegidos por los respectivos obispos a ser nombrados por la Audiencia, a partir de ternas propuestas por el Ayuntamiento²²³.

En cuanto a otros derechos señoriales, a partir de 1811 había cesado el pago de las rentas forales en algunas zonas de Galicia, y esta resistencia, por la vía de la acción o a través de reclamaciones legales, persistió tras la restauración absolutista. Sin embargo, los pleitos “antes o después se fallan en contra de los campesinos, que en ocasiones sólo se convencieron de su “sinrazón” bajo la amenaza de las tropas. Después del Trienio la paga de las rentas se restablece en todas partes”²²⁴.

Así llegamos a 1820, en el que la sublevación de Riego convence al 8 de marzo al rey Fernando VII de la idoneidad de jurar la Constitución de Cádiz, vuelve la legalidad establecida en el anterior periodo constitucional y su estructura judicial, y se avanza en la normativización: en 1822 se promulga el primer Código Penal español, con una implantación muy breve ya que empezó a regir el 1 de enero de 1823. Por el contrario, el cambio del personal judicial fue inmediato. En un primer momento se confirmó como interinos a todos los alcaldes mayores del periodo absolutista, siempre que formasen ayuntamientos constitucionales y jurasen la Constitución; pero los antiguos señoríos no coincidían con los partidos judiciales restablecidos. También se repuso a algunos jueces suspensos en 1814, pero fueron pocos, y ninguno, que sepamos, en Galicia²²⁵.

²¹⁵ ARTOLA GALLEGU, M. (2008), p. 428.

²¹⁶ Sobre el afán absolutista de Fernando VII en relación a esta cuestión, LUIS, J.-P. (2014), p. 109.

²¹⁷ EMSLEY, C. (2007), p. 93.

²¹⁸ *Gaceta de Madrid*, 08-10-1814, nº 136, p. 2026.

²¹⁹ ARTOLA GALLEGU, M. (2008), p. 430.

²²⁰ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 309.

²²¹ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 335-336.

²²² GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M. (2013), pp. 151-152.

²²³ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), pp. 169.

²²⁴ SAAVEDRA, P. (1994), pp. 448-449.

²²⁵ Los jueces interinos de la región fueron nombrados por la Junta Suprema en 1820. GÓMEZ RIVERO, R. (2006), pp. 74-75, 94-95.

Los magistrados definitivos fueron accediendo a sus cargos a lo largo del Trienio, por un procedimiento dominado por el poder político. Los aspirantes a una plaza de juez de instrucción presentaban un memorial con los méritos que consideraban oportunos (la “inmensa mayoría” eran abogados y jueces cesantes o en activo), ante el Consejo de Estado, que pedía certificados sobre su idoneidad a las Audiencias, las Diputaciones y los Ayuntamientos; en ocasiones se recababan informes a diputados, y gobernadores, jefes políticos, ayuntamientos o el mismo ministro de Gracia y Justicia emitían recomendaciones. Posteriormente se votaba sobre estas propuestas en la secretaría del Consejo de Estado, y el Rey elegía en base a ello al candidato elegido²²⁶. A partir de 1822 el Gobierno pudo nombrar jueces interinos de primera instancia cuando resultaban suspendidos²²⁷, y un tercio de los jueces fueron sometidos a traslados²²⁸.

Galicia volvió a quedar dividida en los 47 partidos que se habían establecido en 1813²²⁹. Las plazas fueron adjudicándose en propiedad entre 1821 y 1823, en varias convocatorias. El Consejo nombró a tres candidatos a cada puesto, y el rey eligió casi siempre al propuesto en primer lugar. Los hombres que las ocuparon muestran una continuidad con la tradición judicial anterior, si bien, de entre los letrados, se eligió a los que tenían adhesión política al nuevo Gobierno. Así, “de los 47 nuevos jueces propietarios de primera instancia de la provincia de Galicia, 14 ejercían la abogacía antes de su nombramiento y los 33 restantes eran o habían sido jueces interinos o cesantes”²³⁰. El juez elegido para el partido de Betanzos, Pedro González Nadela, había desempeñado cargos judiciales durante el Antiguo Régimen, antes de la entrada de los franceses había sido alcalde mayor nombrado por el marqués de Astorga, y había dirigido partidas en la lucha contra las tropas galas. En el momento de adquirir la propiedad de la plaza era juez interino en el juzgado.

Resulta interesante señalar un informe emitido por la Audiencia de Galicia, fechado el 12 de marzo de 1823, en la que evalúa la integridad, aptitud, adhesión a la Constitución y las leyes, y conducta de los jueces después de una consulta a los ayuntamientos de su circunscripción. De los 47 jueces da un veredicto en conjunto positivo en la mayoría de los casos, y en otros seis se informa de que las plazas están vacantes o no hay constancia de que tomasen posición los nombrados. Un séptimo lleva demasiado poco tiempo en el puesto para hacer un juicio de valor. En dos ocasiones la Audiencia defiende a magistrados contra los informes de Ayuntamientos, como en el caso del de Vimianzo, del que se refirió un informe “que la Audiencia se persuade sea efecto de alguna intriga”; en un tercero duda.

²²⁶ GÓMEZ RIVERO, R. (2006), pp. 22-70.

²²⁷ *Gaceta de Madrid*, 18-06-1822, nº 175, p. 939.

²²⁸ GÓMEZ RIVERO, R. (2006), p. 319.

²²⁹ En ninguno existía más de un juzgado. Estos eran (entre corchetes su denominación actual, cuando varía): “Rivadeo [Ribadeo], Mondoñedo, Vivero [Viveiro], Sta. Marta de Ortigueira, Ferrol, Puente de Hume [Pontedeume], Betanzos, Coruña [A Coruña], Santiago de Sisano [Sísamo, en el actual municipio de Carballo], S. Vicente de Vimianzo, S. Pedro de Outes, Noya [Noia], Padron, Cambados, Pontevedra, Redondela, Vigo, Tuy [Tui], Puente Areas [Ponteareas], la Cañiza [A Cañiza], Bande, Ginzo de Limia [Xinzo de Limia], Monterey [Monterrei], Viana del Bollo [Viana do Bolo], Barco de Valdeorras [O Barco de Valdeorras], Quiroga, Sta. María de Cruzus [Cruces, en el actual municipio de Padrón], Sta. María de la Fuensagrada [Fonsagrada], Villalba [Vilalba], Mellid [Melide], S. Julián de Poulou [San Xulián de Poulou, en el actual municipio de Ordes], Santiago, Sta. María la Mayor de Sar [en el actual municipio de Santiago de Compostela], S. Martín de Lalín, Bemposta (que no hemos localizado), Caldas de Reyes [Caldas de Reis], San Salvador de Lama [A Lama], Rivadavia [Ribadavia], Carvallino [Carballiño], Orense [Ourense], Celanova, Maceda de Limia, Castro de Caldelas [Castro Caldelas], Monforte de Lemos, Sarria, Lugo y Chantada. El listado puede consultarse en *Gaceta de Madrid*, 28/07/1821, nº 213, p. 1156.

²³⁰ GÓMEZ-RIVERO, R. (2006), pp. 147-162.

Otros informes son menos amables. Del juez propietario de Sarria se duda de su “conducta moral” y se recomienda, sin embargo, al interino que ocupaba antes el puesto; el de Viana do Bolo “tiene aptitud limitada” y poco celo al perseguir a los conspiradores, el de Maceda “está mal conceptuado en la administración de justicia, y en su conducta”. El de Carballiño “tiene poca aptitud, y no merece la aprobación del Ayuntamiento del partido”, y el de Cambados, además de poco apto, estaba procesado por estafas y suspendido por faltas procesales. También estaba suspenso por sus “desarreglados procedimientos” el juez interino de Celanova, al que “nada le favorece sino su adhesión al sistema constitucional”. González Nadela, del que ya hemos hablado, era “observante de la Constitución; pero su aptitud es limitada, y su conducta dudosa”²³¹. El documento nos dibuja una judicatura elegida con un gran peso de los informes de adhesión, en la que el futuro de los jueces dependía no solo de sus conocimientos sino de las relaciones políticas con las administraciones locales e informes subjetivos acerca de su conducta.

Con el fin del Trienio Liberal desaparecen de nuevo los partidos judiciales, y la situación de la justicia en la década absolutista parece guardar pocas diferencias con la del sexenio anterior²³², con la salvedad de que la Real Audiencia trasladó su sede tradicional de A Coruña por Santiago entre 1824 y 1832²³³, quizás por el perfil liberal de la ciudad herculina y las conspiraciones y asonadas que veremos en el capítulo 8. Pero tras la muerte de Fernando VII y en el periodo isabelino se concretarán una serie de normas que modificarán los modos de la justicia, y que se gestarán en los inicios de nuestro periodo de estudio. En palabras de Marta Lorente, se produjo “un proceso de estatalización y desapoderamiento” de la justicia “relativamente homogéneo” que “transformaría por completo” la “plurisecular comprensión e institucionalización de la justicia” del periodo anterior²³⁴.

Por una parte, se produjo la primera codificación efectiva de la justicia criminal, con los códigos de 1848 y 1850 que veremos más adelante y las respectivas leyes para su aplicación, que concretaron y simplificaron la pluralidad legislativa anterior y suponían una mayor subordinación al legislador. No fue una revolución completa. Enlazaba con un proceso de centralización judicial que tiene antecedentes en el Antiguo Régimen y con las iniciativas liberales ya señaladas. Además, existían lagunas que se llenaban con legislación precedente, o esta se aceptaba de facto en el argumentario de los juicios. En 1849, las reglas básicas de la prueba en procesos criminales seguían siendo las de las Partidas de Alfonso VII, y en un caso de ese año se hizo referencia y al parecer se aceptó una disposición del Fuero Real de 1255, si bien formalmente estaba extinta²³⁵. Al tiempo, los Códigos tenían algunas disposiciones paradójicas o al menos discutibles²³⁶.

Pero, con todas las matizaciones que se quiera, el cambio es relevante. Estudiando las sentencias de la Real Audiencia de Galicia comprobamos cómo los fallos anteriores a la implantación del Código

²³¹ El texto ha sido extraído de GÓMEZ RIVERO, R. (2006), pp. 162-164. El original se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo 89.

²³² Volviendo al ejemplo de Bouzas, parece que los jueces reales de los últimos años del absolutismo eran residentes en el distrito, algo que no era el patrón más habitual en el Antiguo Régimen. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J. M. (2013), p. 153.

²³³ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), p. 117.

²³⁴ La misma autora considera que a partir de 1845 se puede hablar en España de Administración en singular y de derecho administrativo. LORENTE SARIÑENA, M. (2007), p. 249-250, 275-276, p. 285.

²³⁵ VALLEJO, J. (2007), p. 350-353.

²³⁶ Entre ellas, un condenado que recibiese sentencia de cadena perpetua sería indultado a los 30 años, mientras que uno que en la misma circunstancia se escapase vería su sentencia prescribir a los 20 años de la fuga: “en España se castiga a los criminales, pero con mucha más dureza a los que, además de serlo, se dejan coger o no se saben escapar; en suma, los tontos”. VISLLÚ, E. (1886), p. 32.

Penal no aparecen motivados por los jueces²³⁷. A partir del Código, las sentencias se uniformizan obligatoriamente, y los fallos de los jueces de primera instancia que no se ajusten a la legislación son corregidos por sus superiores. La lógica liberal fijaba que el poder judicial “sólo podía aplicar de un modo tasado las leyes ya establecidas”, disminuyendo la capacidad discrecional o interpretativa de los jueces²³⁸. Dicho esto, aún en los años 70 del Novecientos encontramos a algún juez en Galicia que no motiva sus sentencias, pero es un hecho excepcional y corregido por una instancia superior²³⁹.

Por otra parte, se instauró un sistema de partidos judiciales y Audiencias de segunda instancia que se mantendría en lo esencial durante las siguientes décadas y se renovó la forma de acceso a la judicatura. Como entramos en nuestro periodo principal de estudio, lo veremos con más detalle.

Por Decreto del 21 de abril de 1834 se dividió el territorio español en partidos judiciales, manteniendo a las justicias existentes hasta que se proveyeran los nuevos cargos²⁴⁰. En el primer semestre de 1834 se estableció un Tribunal Supremo para España e Indias para “deslindar convenientemente la acción judicial y la administrativa” (esto es, para atribuirle las competencias judiciales que antes poseía el Consejo Real)²⁴¹. Entiéndase que no se trata de la creación de un contrapoder judicial, puesto que este tribunal seguía controlado por el poder político. En 1835 se promulga el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia en lo respectivo a la Real jurisdicción ordinaria²⁴². En 1838 se incorpora el Tribunal Supremo como órgano de casación²⁴³.

En Galicia se crearon 47 nuevos partidos, con importantes cambios en las sedes en relación a la propuesta de los periodos constitucionales, y sometidos a la Real Audiencia de Galicia. En 1835, según muestran los expedientes judiciales recogidos en el fondo histórico de este tribunal, el sistema de partidos ya estaba en marcha.

Tabla 2.1.1 Partidos judiciales y habitantes en las provincias de A Coruña y Lugo según la división de 1834

Provincia de A Coruña				Provincia de Lugo			
Partidos	Parroquias	Vecinos	Almas	Partidos	Parroquias	Vecinos	Almas
Arzúa	140	7.633	38.728	Fonsagrada	65	5.162	25.765
Betanzos	96	8.286	41.430	Lugo	268	9.048	45.005
Carballo	81	6.938	32.331	Mondoñedo	84	8.816	41.958

²³⁷ En la tradición jurídica castellana, la decisión de la sentencia era secreta y los magistrados no motivaban sus decisiones. En los años 70 del siglo XVIII, de hecho, se prohibió explícitamente hacerlo. GARRIGA, C. (2007), pp. 88-89, 100. En 1838 se obligó al Tribunal Supremo a motivar las sentencias, y la ley provisional para la aplicación del Código Penal de 1848 extendió esta condición a los tribunales menores. En 1855 se generalizó la prescripción de esta práctica entre los tribunales civiles LORENTE SARIÑENA (2007), p. 270, SOLLA, M. J. (2007), pp. 297-298.

²³⁸ SOLLA, M. J. (2007), p. 295.

²³⁹ BOUZADA GIL, M. T. (2017), p. 259.

²⁴⁰ *Gaceta de Madrid*, 23/04/1834, nº 63, p. 287. Para una visión más detallada del proceso, ORDUÑA REBOLLO, E. (2000), pp. XLII-XLV.

²⁴¹ Sobre su regulación puede consultarse la *Gaceta de Madrid*, 25-03-1834, nº 37, p. 1; 10-04-1834, nº 49, p. 225; 29-05-1832, nº 98, p. 443.

²⁴² *Gaceta de Madrid*, 04-10-1835, nº 282, pp. 1117-1118; 05-10-1835, nº 283, p. 1121; *Gaceta de Madrid* núm. 284, de 06/10/1835, páginas 1125 a 1126.; 07/10/1835, nº 285, p. 1129; 08/10/1835, nº 286, pp. 1133-1134; 09/10/1835, nº 287, pp. 1137-1138; 10/10/1835, nº 288, p. 1142; 11/10/1835, nº 289, pp. 1145-1146.

²⁴³ SOLLA, M. J. (2007), p. 318..

Corcubión	68	4.889	24.562	Monforte	127	7.817	39.004
A Coruña	61	8.106	38.911	Nogales	107	6.075	30.315
Ferrol	52	6.749	33.835	Quiroga	51	3.506	17.516
Muros	35	4.712	23.659	Ribadeo	33	5.078	25.518
Negreira	70	5.150	20.703	Sarria	163	5.901	29.935
Noia	42	7.417	35.736	Taboada	209	7.725	38.754
Ordes	89	5.556	27.760	Vilalba	99	5.311	23.730
Padrón	38	5.939	26.267	Viveiro	52	7.957	39.772
Pontedeume	59	6.579	32.892	Total	1258	72.396	357.272
Ortigueira	37	5.035	21.429	Media	114	6.581	32.479
Santiago	57	7.684	37.427				
Total	925	90.673	435.670				
Media	66	6.477	31.119				

Fuentes: Elaboración propia a partir de la subdivisión territorial de 1834

Tabla 2.1.2 Partidos judiciales y habitantes en las provincias de Ourense y Pontevedra según la división de 1834

Provincia de Ourense				Provincia de Pontevedra			
Partidos	Parroquias	Vecinos	Almas	Partidos	Parroquias	Vecinos	Almas
Allariz	69	5.934	29.656	Caldas de Reis	53	6.534	26.901
Bande	55	5.989	29.950	Cambados	56	8.508	36.260
Celanova	68	9.218	44.585	A Cañiza	41	8112	27.900
Xinzo de Limia	81	5.706	23.189	Lalín	164	8.866	44.454
Ourense	93	10.319	41.276	A Lama	31	5.087	23.400
Pobra de Trives	102	4.942	25.277	Pontevedra	43	9.955	47.603
Ribadavia	48	6.146	24.584	Ponteareas	66	6.339	25.920
O Carballiño (parroquia de Señorín)	78	8.207	33.036	Redondela	38	4.750	18.864
Verín	86	6.391	27.028	Tabeirós	72	6.083	30.415
Viana do Bolo	64	2.679	13.283	Tui	51	11.479	42.248
Vilamartín de Valdeorras	114	5.409	27.174	Vigo	43	8.968	36.037
Total	858	70.940	319.038	Total	658	84.681	360.002
Media	78	6.449	29.003	Media	60	7.698	32727

Fuentes: Elaboración propia a partir de la subdivisión territorial de 1834. En el original, las parroquias de Pontevedra y Ourense aparecen contabilizadas como “pueblos”

Si establecemos la comparación con el conjunto de España, vemos que los jueces de instrucción gallegos sí debían atender a un número de vecinos superior a la media. El número de habitantes por juzgado supera en casi un 27% la media nacional, y ninguna de las provincias se encuentra por

debajo de la esta. En cambio, los partidos judiciales gallegos son sustancialmente más pequeños que los de la media del país, en concreto, algo más de un 40%. Los juzgados de Pontevedra tienen un tamaño un 70% inferior a la media nacional, e incluso los juzgados de Lugo, donde el ratio de habitantes por tribunal es más desfavorable de toda Galicia, no llegan al 80% de la extensión media²⁴⁴. Siguiendo esta estadística, los gallegos vivirían más cerca de las instituciones judiciales que el resto de españoles, aunque es una medida en teoría y a vuelo de pájaro: el acceso real depende de otros factores, como la orografía, la dispersión de la población o las vías de comunicación.

No nos detendremos en las diferencias entre partidos individuales, que sería prolijo enumerar. La distribución de los nuevos partidos fue relativamente uniforme entre las diferentes provincias en atención a la población, que parece ser el criterio preferido para realizar las demarcaciones²⁴⁵. La provincia más beneficiada a este respecto es Ourense, con 29.003 habitantes por juzgado, algo menos de un 93% de la media gallega. A Coruña está muy cerca de la media, Lugo un 3,7% por encima de ella y Pontevedra un 4,5%. Las proporciones irían cambiando debido al crecimiento demográfico de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

La situación es sustancialmente más desigual en relación al territorio. Todas las provincias tienen más juzgados de los que les corresponderían por extensión, en especial Pontevedra, donde cada partido tiene poco más de la mitad de la extensión de la media gallega, pero también Ourense (con un 83% de la media) y A Coruña (con un 90,3%). En cambio, Lugo supera la media en un 42%, y resulta la provincia más perjudicada en jueces por habitantes y acceso territorial a los juzgados.

Tabla 2.1.3 Comparación de los partidos judiciales gallegos en cuanto a su población asignada y su extensión, en relación a las medias gallega y española

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia	España
Parroquias por partido	66	114	78	60	79	
Porcentaje en relación a la media gallega	83,54	144,3	98,73	75,95	100	
Almas por partido	31119	32479	29003	32727	31319	24679
Porcentaje en relación a la media gallega	99,36	103,7	92,61	104,5	100	
Porcentaje en relación a la media española	126,1	131,61	117,52	132,61	126,91	100
Media de kilómetros cuadrados de cada partido	568	896	661	409	629	1122
Porcentaje en relación a la media gallega	90,3	142,45	105,09	65,02	100	
Porcentaje en relación a la media española	50,62	79,86	58,91	36,45	56,06	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Subdivisión de 1834 y Orduña Rebollo²⁴⁶

²⁴⁴ En base a la extensión de los territorios en la actualidad, en kilómetros cuadrados: 7.950 la provincia de A Coruña, 9.856 Lugo, 7.273 Ourense, 4.495 Pontevedra.

²⁴⁵ No el único, por supuesto. Los partidos más pequeños con menos de 20.000 almas se hallan en las regiones orientales, de escasa población y montañosas: Quiroga, con un juez para menos de 18.000 habitantes, o Viana do Bolo, con uno para poco más de 13.000. La excepción es Redondela, que no llega a los 19.000 y se encuentra en una zona de más densidad de población.

²⁴⁶ ORDUÑA REBOLLO, E. (2000), pp. XLV, LI.

Cada uno de estos nuevos partidos tenía un juez que desempeñaba las funciones de primera instancia e instrucción, tanto para lo civil como para lo criminal, que es el que nos interesa. Las sentencias que emitía se remitían a la Real Audiencia de Galicia, que también recibían los recursos de los tribunales inferiores. Pero, ¿quiénes eran estos jueces, y cómo se elegían? La reina María Cristina endureció algo los requisitos en un Real Decreto del 6 de octubre de 1836: los jueces de primera instancia y promotores fiscales debían ser abogados con tres años de experiencia (art. 1)²⁴⁷. Pero, a semejanza de los periodos anteriores, los jueces seguían siendo designados por el poder ejecutivo, y no se concretaron mecanismos que permitiesen en la práctica la existencia de una carrera judicial independiente de las afinidades políticas, de manera que muchos jueces permanecían en la cuerda floja de la interinidad. Según explica Duñaiturria, en este periodo el Gobierno fiscalizaba el perfil y comportamiento de los jueces a través de informes pedidos a las Audiencias, que a su vez recababan información de diferentes fuentes. La Septembrina conllevó también procesos de depuración política²⁴⁸.

Entre 1834 y 1870, sintetiza Ortego Gil, “todos los gobiernos, todos los ministros de Gracia y Justicia [...] utilizaron los mecanismos normativos a su alcance para delimitar quiénes podrían acceder a la judicatura y, sobre todo, mantener la titularidad de los diferentes juzgados para los que habían sido designados o en servicio activo”. Tras cada alteración política se organizaban juntas de clasificación “siempre con fines políticos de colocación de los afines”²⁴⁹. A lo largo de la centuria se va desarrollando una normativa que legisla la práctica disciplinaria dentro del ámbito del derecho, adicional a la responsabilidad civil o criminal, que corrige a jueces, abogados y procuradores y que se estructura de manera jerárquica.

La Constitución de 1869 no unificó completamente las jurisdicciones; eliminó la de Hacienda y Comercio, pero mantuvo la eclesiástica y militar. Aunque contemplaba la oposición para la judicatura, reservaba una parte de los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo a la designación del ejecutivo, permitiéndole también a este deponer y trasladar jueces²⁵⁰. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 sienta las bases del ámbito jurídico en las décadas siguientes. Entre otras cuestiones, estructura la disciplina judicial: los jueces municipales y de instrucción eran corregidos por los tribunales de su partido; estos, por las Salas de Gobierno de las Audiencias, y los magistrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo (art. 732). En las décadas siguientes se emite más legislación relevante en nuestro ámbito: el Código Penal de 1870, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que regula los procedimientos en el derecho penal y el Código Civil de 1889 incluyó una jerarquía normativa²⁵¹, que disminuyó la incertidumbre sobre la aplicación y preferencia de las leyes que caracterizó a buena parte del Ochocientos español²⁵².

En lo referente al organigrama judicial, la ley de 1870 introduce cambios importantes, si bien su impacto real fue menor. Las Reales Audiencias pasan a denominarse Audiencias Territoriales; por lo demás, la de A Coruña siguió correspondiendo a las cuatro provincias gallegas (art. 39, 41, 47), con dos salas de justicia. En lo penal, contaba con una Sala de lo Criminal que conocería directamente, con o sin intervención del jurado, en causas por lesa majestad, sedición o rebelión, o aquellas con penas superiores a presidio correccional y diversas causas relacionadas con funcionarios o jueces

²⁴⁷ *Gaceta de Madrid*, 09/10/1835, nº 287, p. 1138.

²⁴⁸ DUÑAITURRIA LAGUARDIA, A. (2017), pp. 376-386.

²⁴⁹ ORTEGO GIL, P. (2018), p. 563. Sobre la situación de los jueces y su control ministerial hasta la revolución de 1868, pp. 21-237. Para López Gómez, antes de 1870 y el establecimiento de oposiciones la entrea y ascenso en la carrera judicial estaban marcadas “por el arbitrio ministerial”. LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), p. 488.

²⁵⁰ SERVÁN, C. (2007), pp. 369-378.

²⁵¹ Las consideraciones acerca de aplicación, prescripción y primacía de unas leyes sobre otras se encuentran en los artículos 1 a 16 del Código. El artículo 4.2 delimita específicamente la aplicación de las leyes penales.

²⁵² SOLLA, M. J. (2007), p. 296.

(art.276-278). En cuanto a los magistrados menores, la ley contemplaba también la creación de dos nuevos tribunales, los de partido y los de instrucción, que no llegaron a constituirse, por lo que la investigación y juicios por penas inferiores siguieron en manos de los jueces de primera instancia.

Su ley de acompañamiento no se promulga hasta el 14 de octubre de 1882, ya en la Restauración. Ésta crea un nuevo tribunal, las Audiencias de lo Criminal, que vienen a sumarse a las Salas de lo Criminal de las Audiencias Territoriales ya existentes, que a su vez podían, puntualmente, dividirse en secciones (art. 2-34). En Galicia se mantuvo la división en 47 partidos, y sobre estos se crearon seis órganos dedicados al derecho penal con las competencias descritas en el párrafo anterior²⁵³.

Tabla 2.1.4 Salas y Audiencias de lo Criminal en Galicia según la división de 1882

Provincia	Sede	Denominación	Juzgados que comprende
A Coruña	A Coruña	Sala de lo Criminal de la Audiencia Territorial	Betanzos, Carballo, Corcubión, A Coruña, Ferrol, Ortigueira, Pontedeume
A Coruña	Santiago de Compostela	Audiencia de lo Criminal	Arzúa, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Padrón, Santiago
Lugo	Lugo	Audiencia de lo Criminal	Becerreá, Chantada, Fonsagrada, Lugo, Monforte, Quiroga, Sarria
Lugo	Mondoñedo	Audiencia de lo Criminal	Mondoñedo, Ribadeo, Vilalba, Viveiro
Ourense	Ourense	Audiencia de lo Criminal	Allariz, Bande, Señorín de Carballiño, Celanova, Xinzo de Limia, Ourense, Pobra de Trives, Ribadavia, Valdeorras, Verín, Viana do Bolo
Pontevedra	Pontevedra	Audiencia de lo Criminal	Caldas de Reis, Cambados, A Cañiza, A Estrada, Lalín, Pontevedra, Pontearreas, Pontecaldelas, Redondela, Tui, Vigo

Fuente: Elaboración propia a partir del art. 1 de la Ley del 14 de octubre de 1882, adicional a la Órgánica del Poder Judicial

Este esquema fue efímero en términos históricos. Las Audiencias de lo Criminal que no se encontraban en capitales de provincia cesaron el 26 de julio de 1892, coincidiendo con una reducción de la dotación económica para el personal de justicia de 1,5 millones de pesetas, según el Real Decreto de 16 de julio de 1892²⁵⁴. En Galicia ello conllevó la extinción de las de Santiago y Mondoñedo, aunque, al contrario que en otras partes de España, no se suprimió ningún juzgado (art. 8). En virtud de este Real Decreto, y de la ley de presupuestos del 5 de agosto de 1893, las salas y audiencias de lo criminal cambiaron su nombre por Audiencias Provinciales, que mantendrán en lo sucesivo.

En lo tocante a las personas que aplicaban el Código Penal, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 la que configura al conjunto de los jueces como carrera, algo que ha llevado a algunos autores a afirmar que la “profesionalización” de la judicatura data de esta época²⁵⁵. La afirmación quizás es demasiado tajante, dado que en las épocas anteriores los jueces ya contaban con formación, especialización y dedicación, pero aún así supone un gran cambio con respecto al periodo anterior.

²⁵³ Para más detalles de la aplicación de esta legislación en Galicia, LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 123-124.

²⁵⁴ Vease la exposición y disposición transitoria primera del citado Real Decreto. *Gaceta de Madrid*, 20-07/1892, nº 202, pp. 277-278.

²⁵⁵ GONZÁLEZ PÉREZ, J. (2008), p. 18.

En el artículo 222 se establece que los jueces y magistrados no pueden ser “destituidos, suspensos, trasladados ni jubilados” sino por una serie de causas tasadas, desarrollando así el art. 95 de la Constitución del año precedente. El título segundo establece un procedimiento de acceso por oposición limitado a licenciados en derecho, estableciendo incompatibilidades con respecto a cargos públicos o incluso la participación en sociedades mercantiles (art. 119).

La separación entre poder ejecutivo y judicial dista de ser completa²⁵⁶, si bien esta legislación es importante porque marca una tendencia hacia la configuración de una judicatura no designada por simpatías de partido. Seguía existiendo un control del Ejecutivo que se mantendrá durante todo el periodo de estudio sobre los puestos clave de la cúpula judicial, que se trasladaba a los puestos inferiores a través de la política de ascensos y traslados que ejercía de elemento de presión sobre los jueces, añadido (aunque resulte sorprendente desde la perspectiva actual) a su penuria salarial²⁵⁷.

De acuerdo con los datos recuperados por Bouzada Gil para el periodo 1868-1900, en la provincia de A Coruña la Audiencia sancionó o suspendió a decenas de jueces de primera instancia, si bien en su gran mayoría las faltas se debían a negligencia, falta de celo, desidia judicial y falta de formación judicial, y los castigos eran multas leves. Hay, aunque de manera minoritaria, correcciones por expresión de simpatías políticas, intervención en las elecciones o choques de competencias con el poder político: “para el observador actual, hay una intervención política en lo judicial, particularmente de los Gobernadores Civiles”²⁵⁸. Puntualmente, también se evaluó su conducta personal, y encontramos correcciones por beber, jugar o practicar “vicios nefandos”.

El número de sanciones por año, sin embargo, va en descenso en el periodo citado, sobre todo a partir de 1874; algo que para esta autora, puede tener que ver, además de con cuestiones técnicas y de determinación jurídica, con la mejor formación de los jueces y la desaparición del juez mediatizado políticamente y del ambiente de confrontación ideológica²⁵⁹. Al tiempo, “la independencia, la inmovilidad y por lo tanto la responsabilidad del juez se harán más sólidas en los albores del siglo XX”²⁶⁰. Así, la inmovilidad judicial se hizo firme por el Real Decreto del 24 de septiembre de 1889, y en 1902 se abolió el “cuarto turno”, aunque seguirá estando presente en las instancias superiores.

La Dictadura de Primo de Rivera emitió una profusa cantidad de legislación con la intención declarada de mejorar el funcionamiento de la justicia. En palabras de De Benito Fraile, si bien el Directorio inició el periodo con la creación de una Junta organizadora del Poder Judicial que suponía un avance significativo en aras de su autonomía, “pronto estos buenos propósitos irán desapareciendo para dar paso a un mayor intervencionismo del Gobierno en los asuntos de justicia”, que fue creciente a medida que transcurría el tiempo, y que apuntaba al control ministerial sobre los puestos de la cúpula judicial. Así, en 1924 el Gobierno se arrogó la facultad de separar libremente a los presidentes de Audiencia Territorial y nuevas medidas fiscalizadoras²⁶¹, de las que la más impopular entre la judicatura fue la Junta Inspectora del Personal Judicial²⁶². Sin embargo, el número

²⁵⁶ El gobierno seguía teniendo competencias para fijar el número de aspirantes a la judicatura (art. 80), proponiendo a parte de los miembros del examen de oposición (art. 85), excluyendo candidatos (art. 100-101), seleccionando aspirantes (art. 123, 126) o ejerciendo labores de control (art. 84, 98, 99). Algunos cargos del Tribunal Supremo también aparecen ligados a la práctica política (art. 145-146). Sobre la discontinua labor de control e inspección de los jueces durante la Restauración, MADRID CRUZ, M. D. (2017), pp. 488-514.

²⁵⁷ MARZAL RODRÍGUEZ, P. (2005), p. 33-35. Para un estudio de caso del control ministerial sobre los jueces, ORTEGO GIL, P. (2017).

²⁵⁸ BOUZADA GIL, M. T. (2017).

²⁵⁹ BOUZADA GIL, M. T. (2017), pp. 292-293, 319.

²⁶⁰ DUÑAITURRIA LAGUARDIA, A. (2017), p. 352.

²⁶¹ DE BENITO FRAILE, E. J. (2017), pp. 405-411.

²⁶² DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 140-141.

de sanciones fue reducido, también en aquellos casos en los que se produjeron investigaciones con carácter ideológico. Para el autor ya citado, esto se debe a la asunción mayoritaria por parte de la judicatura de los valores sociales, culturales y políticos defendidos por la cúpula de su carrera²⁶³.

Otra modificación importante en el funcionamiento de la justicia fue la suspensión de todos los tribunales de jurado, pues, además de alegar motivos económicos, “es notorio que el Jurado ni ha fortalecido, ni ha simplificado, ni ha acreditado, ni ha dado independencia a la Administración de justicia” siendo “frecuente” la coacción sobre ellos y la delegación en algunos ciudadanos que “de ejercerlas sin la debida dignidad, han constituido modo de vivir”²⁶⁴.

En la Segunda República se disolvieron los mecanismos de control del poder judicial de la Dictadura, y se volvió al esquema de la Restauración para la fiscalización de los tribunales inferiores. Existieron, sin embargo, algunas novedades. Por el Real Decreto del 23 de agosto de 1932 se crearon los Comisarios Inspectores de Juzgados y Tribunales; funcionarios de la carrera judicial y fiscal elegidos por el Ministro de Justicia. Su figura, sin embargo, era “meramente informativa y sin facultades disciplinarias”²⁶⁵, y fueron eliminados en marzo de 1934²⁶⁶. De manera más relevante, la ley de jubilación de funcionarios conllevó el retiro forzoso de 114 magistrados, siete de ellos del Tribunal Supremo (otros tres se jubilaron voluntariamente)²⁶⁷. Las vacantes de este tribunal las designó el Gobierno, y con los gobiernos radical-cedistas también sufrió intromisiones políticas y ministeriales²⁶⁸. No se llegó a la unidad de fueros, con la “continuada aplicación del Código de Justicia Militar a paisanos en las colisiones con la Guardia Civil”²⁶⁹.

Al igual que en la Dictadura de Primo de Rivera, parece haber habido poca presión sobre los jueces de tribunales menores en base a su adscripción ideológica, siempre que no se viesan implicados en tentativas insurreccionales. Un reciente estudio sobre los expedientes de la Audiencia Territorial de Madrid a los jueces de su circunscripción entre 1931 y 1934 de García León es significativo en este aspecto. Solo el 9% de las investigaciones, un total de cinco, se deben a motivos políticos, y en general fueron archivadas o desestimadas, exceptuando al juez de Sacedón, complicado en la Sanjurjada y destituido por ausentarse de su lugar de residencia sin autorización previa. A esto debemos sumar un juez municipal apartado en 1932 de su puesto después de que se le instruyese un proceso penal por sedición; en su caso, se le acusaba de incitar a la población a amenazar a los propietarios del pueblo con las armas para redistribuir las tierras y enfrentarse a la Guardia Civil²⁷⁰.

2.2 La justicia local: alcaldes, jueces de paz y jueces municipales

En el apartado anterior nos hemos ocupado de los jueces, que, en el periodo de justicia liberal, se encargaron de juzgar los delitos del derecho común. Pero en paralelo al esquema de partidos

²⁶³ DE BENITO FRAILE, E. J. (2017), pp. 423-426.

²⁶⁴ *Gaceta de Madrid*, 22-09-1923, nº 265, p. 1178.

²⁶⁵ GARCÍA LEÓN, S. (2017), pp. 429-430. El artículo 99 de la Constitución republicana introducía también la creación de un jurado especial para inspeccionar a jueces, magistrados y fiscales que hubiesen incurrido en responsabilidad civil o criminal.

²⁶⁶ MADRID CRUZ, M. D. (2017), p. 529. Sobre posteriores servicios de inspección, pp. 530-536.

²⁶⁷ Ciento tres elevaron recursos de pública, de los que se admitieron 17. Algunos, entre ellos tres magistrados del Supremo, fueron readmitidos tras la promulgación de la ley del 13 de diciembre de 1934. MARZAL RODRÍGUEZ, P. (2005), pp. 76-89, especialmente 84.

²⁶⁸ MARZAL RODRÍGUEZ, P. (2005), pp. 64-65, 87-104.

²⁶⁹ CRUZ, R. (2013), p. 117.

²⁷⁰ GARCÍA LEÓN, S. (2017), pp. 457-458, 464-467.

judiciales, los diversos ordenamientos dejaron funciones judiciales a manos de alcaldes y jueces municipales. Las competencias concretas y los cargos que las desempeñaban fueron variando²⁷¹.

En la Constitución de 1812 encontramos una referencia a futuras leyes que determinarán las facultades de los alcaldes, “así en lo contencioso, como en lo económico” (art. 275). Sin embargo, no tiene facultades jurídicas como tales: le corresponde el papel de “conciliador”, y se obliga a que “el que tenga que demandar por negocios civiles, o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto” (art. 282). El Reglamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Instancia, aprobado por el Decreto de 9 de octubre de 1812, aclaraba sus competencias. Además de algunas en materia puramente civil (cap II, art. 14; cap. III), los alcaldes debían conocer las denuncias por injurias en primera instancia e intentar conciliar en ellas antes de que se admitiesen a trámite, y de “los negocios criminales sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna reprehensión o corrección ligera”, determinando sobre ellas en un juicio verbal auxiliado por “dos hombres buenos” (en el caso de injurias), cada uno de cada parte. Contra su decisión no cabían recurso ni apelación (cap II, art. 13, cap. III, art. 1-3, 5). Además, si sabían de un delito o en su pueblo se encontraba algún delincuente, debían instruir sumario y “prender a los reos” en caso de que los hechos mereciesen pena corporal o el criminal fuese cautivo *in fraganti*. Además, los jueces de partido estaban obligados a recurrir a los alcaldes para las diligencias en sus pueblos respectivos (cap. III, art. 8-10)²⁷². Este papel en la persecución del delito y la instrucción resulta, en nuestra opinión, muy importante para la aplicación de la ley en la práctica.

En 1835 se establece la figura del juez de paz a través del reglamento para la administración de justicia, en sus artículos 21 a 35. Los jueces de paz eran los alcaldes o sus tenientes (art. 22), y se encargaban de las conciliaciones en casos de injurias y de juzgar delitos leves como en el apartado anterior. Como conciliadores debían, expresamente, evitar pleitos, pues “mientras más juicios y querellas corten, mayor será el servicio que hagan al Estado” (art. 30). También estaban obligados a formar diligencias sobre cualquier delito y arrestar a los reos, y, si no había otro juez en el pueblo de su residencia, a los alcaldes o tenientes les correspondía “exclusivamente” realizar diligencias, salvo que el juez que instruyese la causa se lo encargase “a otra persona de su confianza” (art. 33-34). Las leyes de acompañamiento al Código Penal de 1848 y su reforma de 1850 aclararon las competencias de los alcaldes y tenientes, que quedaban encargados de juzgar las faltas.

Además, parece que siguieron ejerciendo labores jurisdiccionales en partidos en los que no había jueces letrados, y el reglamento de juzgados de primera instancia de 1844 permitía a alcaldes y tenientes a sustituirlos en caso de ausencia y enfermedad²⁷³, aunque no sabemos qué extensión tuvo el fenómeno.

En 1855 se produce un intento de desligar la figura del juez de paz del alcalde, creando nuevos puestos municipales de funcionarios judiciales que se encargarían de las competencias que estos venían desempeñando en lo civil²⁷⁴, y, dentro de lo que nos interesa, en los juicios de faltas y la

²⁷¹ Se ha seguido como guía para consultar la legislación relevante los capítulos dedicados a la evolución histórica del juez de paz en la obra de DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 29-157. En ella se explican con más detalle algunas cuestiones, como la corrección sobre los jueces de paz, que hemos obviado en este capítulo.

²⁷² Los alcaldes mantenían también las competencias en lo “gubernativo, económico y de policía de los pueblos” que tenían los alcaldes ordinarios según las leyes anteriores. El texto ha sido consultado en *Colección de los decretos y órdenes...* (1813), pp. 98-121.

²⁷³ DAMIÁN MORENO, J. (1987), p. 47. En las muestras de causas que hemos consultado, hemos encontrado al menos un caso en el que un alcalde segundo dictó sentencia, en Arzúa. Causa 1048, 11.

²⁷⁴ A través de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 13 de mayo, el Real Decreto del 22 de octubre y la Real Orden del 12 de noviembre.

instrucción²⁷⁵. Con la creación de estos nuevos cargos, designados por las Audiencias y para los que, aunque no era necesario, se prefirió a abogados y licenciados en Derecho, debían desvincular la labor gubernativa y judicial; de hecho, no podían ocupar cargos administrativos. Esta ley ha sido interpretada como “una manera centralizada de hacer justicia en espacios de jurisdicción hasta ese momento autónomos”²⁷⁶. Esta era considerada la figura idónea, al menos, por algunos de los gallegos contemporáneos: “todo lo que se roce con la administración de Justicia, por los gefes [sic] del ramo parece que deba dirigirse [...]. Lo contrario es tomar retazos de otras constituciones sociales que desfiguran enteramente la nuestra”, afirmaba en 1860 Antonio Santiago Somoza, que ligaba los jueces de paz a una tradición española ya existente en las partidas de gran “espíritu liberal”²⁷⁷.

Esta separación de poderes no inmediata, ni tan clara en la práctica como en la teoría. En los primeros años muchos tenientes y alcaldes continuaron desempeñando sus funciones en interinidad, o los nuevos puestos fueron desempeñados por antiguos concejales, y en algunos casos se permitió compatibilizar el puesto con un cargo político. Además, al poco se les retiraron las competencias en materia penal, que siguieron en manos de los alcaldes²⁷⁸.

Con la ley orgánica del poder judicial de 1870 hay un nuevo intento de separar el poder judicial del gubernativo²⁷⁹. Los jueces de paz fueron reorganizados y denominados jueces municipales, designados como en el periodo anterior por las Audiencias por un periodo de dos años e incompatibles con cargos políticos (art. 31-32). En material penal, les atribuyen las consabidas competencias de juicios de faltas en primera instancia, diligencias en causas criminales y auxilio de las comisiones judiciales (art. 271). La ley consiguió desligar la figura del alcalde de la del juez, pero no la despolitización del cargo, que se percibía dependiente a los partidos y las oligarquías locales²⁸⁰. En esta imbricación del juzgado en los intereses de las jerarquías locales cobró importancia la figura, supuestamente subordinada, del secretario de juzgado²⁸¹.

En 1907 una ley específica vino a reorganizar la justicia municipal²⁸², después de al menos trece intentos de actualización desde 1870 fracasados por cuestiones políticas o económicas²⁸³. Los jueces y fiscales municipales, y sus suplentes seguían siendo nombrados por las Audiencia Territoriales, con la asistencia de los colegios de abogados y notarios (art. 5), seguían siendo de desempeño obligatorio y continuaban sus tradicionales funciones de instrucción y juicio de faltas (art. 16 y 17). Los criterios de elección de los jueces y fiscales de la ley de 1907 primaban claramente a los letrados: se escogería preferentemente a los funcionarios de la carrera judicial o fiscal en excedencia, seguidos de los aspirantes a la carrera judicial que hubiesen conseguido plaza por oposición, los abogados, los universitarios y otros grados oficiales y los vecinos alfabetos con “prestigio” y “arraigo” (art. 3 y 4). Como novedad, las faltas criminales pasaban a ser juzgadas por una nueva institución, los tribunales municipales (art. 20, 25 y 29), constituidos por el juez y dos adjuntos,

²⁷⁵ Así figura en el artículo 8 de la RO del 12 de noviembre. *Gaceta de Madrid*, 13-11-1855, nº 1044, p. 1.

²⁷⁶ Solla, M. J. (2007), p. 316-317.

²⁷⁷ SANTIAGO SOMOZA, Antonio (1860), p. 88.

²⁷⁸ DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 65-72. El propio Mas y Abad, al que antes citábamos, se escribe en un periodo de indeterminación debido a la legislación contradictoria, en el que el autor se inclina a considerar que los jueces de paz son competentes en materia de faltas, pero en la cuarta edición de su libro, en 1857, ya da por hecho que los jueces de paz han sido privados de competencias criminales. MAS Y ABAD, C. (1857), p. 106.

²⁷⁹ Acerca del poder judicial y coercitivo de los alcaldes a través de las providencias gubernativas y las multas asociadas a ellas, SERRANO JIMÉNEZ, LL. (2016), p. 263.

²⁸⁰ DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 117-118.

²⁸¹ Esta estaba regulada por los artículos 494 a 497 de la ley de 1870, y era designado por el Tribunal de partido a propuesta de terna el juez municipal.

²⁸² *Gaceta de Madrid*, 7-08-1907, nº 219, pp. 533-535.

²⁸³ DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 104-114.

nombrados de forma similar a los jueces y con los mismos criterios (art. 11). En las grietas de la normativa encontramos las quejas de los contemporáneos por la orientación caciquil de los jueces municipales, miembros de facciones políticas locales que tendían a favorecer a sus allegados (o, al menos, eran criticados por ello por sus detractores)²⁸⁴.

La Dictadura de Primo de Rivera introdujo algunos cambios profundos. El 30 de octubre de 1923 eliminó los tribunales municipales. En diversas disposiciones durante los dos años siguientes se modificaron los requisitos de acceso para los jueces, negando las preferencias que la ley de 1907 prestaba a titulados universitarios y cesantes de la carrera judicial. Se constituyeron juntas depuradoras de la justicia municipal, y en 1925 se declaró la incompatibilidad de los funcionarios en activo o jubilados; sin embargo, durante los siguientes tres años se prorrogaron los que estaban en activo sin que hubiese renovación²⁸⁵. En diciembre de 1927 el Gobierno ordenó cesar a todos los jueces y fiscales municipales, a los que acusaba en parte de connivencia con “antiguos caciquismos” a través del Real Decreto Ley nº 2126. A la hora de renovarlos se establecieron en nuevas condiciones, que ampliaban el control discrecional de las Audiencias²⁸⁶. Estas pasaban a elegirlos directamente, prefiriendo a los licenciados y doctores en Derecho, pero sin tener en cuenta la jerarquía de 1907: “nunca serán necesarios aquellos títulos ni su posesión podrá ser apreciada como derecho de preferencia” (art. 3-5). Esta renovación, hecha forzosamente a toda prisa ya que el decreto se publicó el 15 de diciembre y los nuevos cargos se incorporaban el 1 de enero, tenía carácter de interinidad hasta que se estableciese una ley de justicia municipal que nunca llegó a concretarse. En 1930, con Berenguer, se produce una nueva renovación, pero esta vez en los términos de 1907 y prescindiendo de las modificaciones introducidas durante la Dictadura (art. 2-3)²⁸⁷.

La Segunda República muestra una experiencia curiosa, en tanto que en el primer bienio y tras la victoria electoral de las izquierdas de 1936 trató de volverse a sistemas en los que primaban la elección popular o gubernamental. En mayo de 1931 el Gobierno provisional modificó el sistema de nombramientos de los cargos de justicia municipal, ligando esta renovación a otorgar a las siguientes elecciones de “las garantías máximas de independencia y seguridad”; según la exposición de motivos del decreto que introducía estas novedades, los jueces municipales una “desviación frecuente de su actividad más bien política que judicial”. En las cabezas de partido y poblaciones de más de 12.000 habitantes seguían eligiéndose de una manera parecida a la de 1907, si bien con trámites simplificados: los cargos serían elegidos por los juzgados de primera instancia (art. 2-3). En cambio, en municipios menores, los jueces municipales serían elegidos directamente por los electores mayores de 25 años, en una votación celebrada el 7 de junio (art. 3-9)²⁸⁸. El sistema de elección popular fue duramente criticado ya en 1932 por Alcalá Zamora²⁸⁹ y sobrevivió poco al bienio social-azañista. Fue abolido por la ley del 27 de junio de 1934, volviéndose al sistema de 1907²⁹⁰.

Finalmente, y aunque no tiene vigor efectivo durante nuestro periodo de estudio, un decreto del decreto del 14 de julio de 1936 viene a cambiar una vez más el sistema de elección de jueces y fiscales municipales. En las capitales de provincia y municipios de más de 30.000 habitantes serían elegidos directamente por el ministro de Justicia; en los de más de 10.000 y sedes de cabeza

²⁸⁴ CANDEIRA MOSQUERA, F. (1990), pp. 35-36.

²⁸⁵ DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 141-143.

²⁸⁶ *Gaceta de Madrid*, 15-12-1927, nº 349, pp. 1587-1589.

²⁸⁷ *Gaceta de Madrid*, 20-02-1930, nº56, p. 1323-1324.

²⁸⁸ El Decreto que establece las modificaciones a las que hacemos referencia en el texto puede consultarse en *Gaceta de Madrid*, 09/05/1931, nº 129, pp. 616-617. Posteriormente se dictaron normas aclaratorias de algunos puntos en *Gaceta de Madrid*, 21/05/1931, nº 141, p. 843; 24/05/1931, nº 144, p. 907.

²⁸⁹ DAMIÁN MORENO, J. (1987), pp. 154-155.

²⁹⁰ *Gaceta de Madrid*, 01/07/1934, nº 182, pp. 8-10.

municipal, por las Audiencias Territoriales y colegios de abogados y notarios; en los restantes, por las Audiencias Provinciales y juez de primera instancia correspondiente²⁹¹. Aún en esta época, seguía habiendo algunos jueces poco preparados²⁹².

2.3 Conclusiones sobre los cambios en la organización de la justicia convencional y municipal

El repaso a la legislación y a la praxis de este apartado y la anterior nos permite establecer algunas tendencias. En el primer tercio del siglo XIX la organización de la justicia en Galicia había sufrido un proceso de centralización, pues la multitud de jurisdicciones señoriales pasaron a ser designadas por la Real Audiencia tras la Guerra de la Independencia. De manera efímera, en los periodos constitucionales, y definitivamente, en 1834, se implantaron 47 partidos judiciales que existirán durante todo nuestro periodo de estudio, y que desempeñarán las labores de primera instancia e instrucción, complementadas por la Real Audiencia. En 1870 se crean en Galicia seis salas de los criminal, con diferentes denominaciones, que una década después se refundirán en las cuatro audiencias provinciales que todavía existen.

Los jueces que los ocupaban durante el periodo isabelino, pese a las crecientes exigencias de conocimientos y preparación, son designados por mandato real y su puesto parece depender de las simpatías políticas y de partido. A partir de 1870 se sientan las bases para una judicatura y la fiscalía como carreras profesionales regidas con acceso a través de la oposición y garantías de inmovilidad.

Esto no implica una independencia del poder político, que seguía controlando las cúpulas y ejerciendo presión sobre los jueces a través de mecanismos como la política de ascensos o traslados. Pero en la Restauración, como en la Dictadura y la República, no parecen existir purgas políticas dirigidas hacia los tribunales inferiores. Al tiempo, perviven otras jurisdicciones que no hemos tratado en este capítulo, de la que la más importante es la militar.

A lo largo de todo el periodo existieron al menos dos escalones en la justicia, pues al tiempo que los delitos más graves eran juzgados en tribunales más o menos apartados de la comunidad, situadas en las sedes del partido, la provincia o la región, las faltas criminales (y buena parte de las cuestiones de índole civil) se solventaban en tribunales municipales, ligados a las élites locales.

Esto es importante a la hora de apreciar las continuidades a la hora de gestionar y demandar la asistencia judicial. Visto desde el punto de vista del pequeño infractor, si en el Antiguo Régimen sus ilícitos eran juzgadas por alguno de los algo más de 700 jueces ordinarios, con un grado muy desigual de preparación y competencia, en el periodo liberal se sentaría ante uno de los algo más de 300 jueces de paz o municipales y dos “hombres buenos”; la preparación y competencia de estos seguirían siendo heterogéneos. Si vivía en una aldea, lo más probable es que, en la época absolutista o la liberal, acudiese al pedáneo; veremos ejemplos en los capítulos 4 y 5. Estos cargos serían, además, los encargados de recibir denuncias y establecer diligencias en los lugares alejados de las sedes de partido y de las infrecuentes concentraciones de fuerzas del orden.

Las faltas penales fueron juzgadas por los alcaldes o tenientes de alcalde hasta 1870, con un breve periodo de confusión de competencias en 1855 y los años siguientes. A partir de ahí serán juzgadas por el juez municipal, una figura en teoría independiente e incompatible, y, sobre todo a partir de 1907, crecientemente profesionalizada, pero vinculada para los contemporáneos a la mala praxis y a los comportamientos caciquiles.

²⁹¹ DAMIÁN MORENO, J. (1987), p. 157.

²⁹² García León presenta algunos casos de jueces inhabilitados por deficiencias en su preparación; uno perdió el cargo porque apenas sabía escribir su nombre. GARCÍA LEÓN, S. (2017), p. 453.

Con la voluntad expresa de combatir el caciquismo, la Dictadura y dos gobiernos de la II República realizaron varias reformas de los juzgados municipales que los ligaban, de una u otra manera, a decisiones políticas. En época de Primo de Rivera se eliminaron los criterios de mérito establecidos en la Restauración y se centralizaron en las Audiencias. El Gobierno provisional de la II República se introdujo efímeramente, antes de las elecciones a Cortes, la elección directa de los cargos de justicia local en los municipios más pequeños.

A mayores de la manipulación y control políticos, debemos tener presente que los pleiteantes intentarían manipular a los jueces en función de sus intereses, y no solo en persecución de sus intereses legítimos. Como bien señala Desmars, la utilización de la justicia puede ser vengativa, para hacer daño a un rival²⁹³; las sanciones que podía imponer un juez municipal eran potencialmente un arma nada despreciable en las disputas locales.

2.4 Cambios en la legislación penal y en los delitos más frecuentes y aclaración de términos

En los primeros años de nuestro periodo de estudio no tenemos un Código Penal en vigor, sino una colección heterogénea de disposiciones emanadas de la Monarquía en relación al delito desde la Edad Media en las que se movían jueces amplias capacidades interpretativas, como hemos visto en el apartado 2.1. El primer Código Penal de la historia española se publicó en 1822, en el marco del Trienio Liberal, pero fue eliminado con la caída de este. Volvieron, por tanto, a regir las resoluciones judiciales las disposiciones legales que había ido dictando la Monarquía hasta el momento.

En 1848 se publica un Código Penal provisional, que entró en vigor el 1 de julio²⁹⁴, y que, tras algunas reformas, se asentaría como texto consolidado en 1850²⁹⁵, refundido con la ley para su aplicación, con algunas reformas, modificaciones y cambios en la numeración de los artículos. Para simplificar, y dado que el de 1848 estuvo tan poco tiempo en vigor, nos referiremos directamente al código de 1850 para realizar comparativas.

La ley criminal española vivió una nueva modificación de calado en 1870, cuando se publicó un nuevo texto que regiría durante el siguiente medio siglo, con una modificación reseñable en 1907. En 1928 la Dictadura de Primo de Rivera introduce un nuevo Código Penal a través del Real Decreto Ley del 8 de septiembre, de pervivencia efímera. Finalmente, en la Segunda República se introduce un nuevo texto en 1932, que permanecerá en vigor hasta un nuevo cambio en 1944, ya en el periodo franquista.

Analizar en detalle los cambios introducidos entre los diferentes códigos no nos interesa para los propósitos de este trabajo. A continuación examinaremos los crímenes más importantes para nuestra investigación, con un triple propósito: proporcionar al lector una definición de cada uno de los delitos y explicar qué hechos designan, explicar cómo evolucionó su tratamiento legislativo, y definir las posibles confusiones terminológicas entre el lenguaje puramente judicial y el de otras fuentes. Entiéndase que, para cada tipo de delito, estamos refiriéndonos a los realizados en circunstancias comunes, pues el homicidio o lesiones contra el jefe del Estado, o actos de naturaleza sediciosa o política, recibían tratamiento especial en capítulos aparte.

²⁹³ DESMARS, B. (2005), pp. 164-165.

²⁹⁴ *Gaceta de Madrid*, 21-03-1848, nº 4937, p. 1 y siguientes.

²⁹⁵ *Gaceta de Madrid*, 10-08-1850, nº 5823, p. 1 y siguientes.

2.4.1 Las lesiones corporales

Las lesiones son el delito más frecuente cometido contra la integridad física de las personas, y por tanto son el mejor indicador de la violencia moderada. Su definición no varía, son siempre daños físicos causados a sabiendas. Tienen, eso sí, una gran variedad interna, pues incluyen desde mutilaciones y heridas graves que reciben penas severas a golpes sin consecuencia que se juzgan como faltas.

La gradación en 1850 es aproximadamente la siguiente: la herida más grave es la castración “de propósito” (341), que puede conllevar incluso la pena de muerte, seguida por otras mutilaciones realizadas conscientemente (342). A continuación vienen golpes que conlleven impotencia, demencia, inutilidad, etcétera, y, en un rango inferior, las que produzcan inutilidad para trabajar o requieran tratamiento médico durante un mes o más (art. 343-344). El esquema se reproduce, con más gradación y detalle, en el Código de 1870 (art. 429-432), y en el de 1932 (art. 421-424), si bien con penas aligeradas en relación a 1850. En 1870 se incluyen dos artículos referentes a la mutilación voluntaria para evitar el servicio militar (art. 436-437); en 1932 tres, repitiendo la legislación precedente e incluyendo circunstancias atenuantes y agravantes (art. 428-430).

El tipo más liviano de lesiones consideradas delito se denomina “lesiones menos leves” en los tres códigos. Se trata de la categoría más frecuente de entre las que nos encontraremos, y es necesario hacer notar tres apreciaciones. Por una parte, las lesiones consideradas delito van teniendo una definición paulatinamente más restrictiva, por lo que, si comparamos épocas de aplicación de los diferentes códigos, la tasa de delitos contra la persona disminuirá en relación a los casos registrados debido a que cada vez más casos se reputan como falta. Por otra, la ley otorga una amplia capacidad de arbitrio a los tribunales a lo largo del periodo para decidir entre una pena de cárcel o una de multa y destierro²⁹⁶. Lo característico del castigo de las lesiones en relación a otros tipos de infracciones más graves es su arbitrariedad²⁹⁷. Si observamos las tasas de encarcelamiento en base a lesiones, es posible que las diferencias territoriales o temporales se deban a cambios en la tradición jurídica de los diferentes tribunales.

Finalmente, la ley no señala pautas para tomar la decisión de optar por prisión o por destierro y multa, lo que refleja, a nuestro parecer, la idea del legislador de que en los delitos contra la persona hay consideraciones morales en cuanto a su gravedad que requieren de un cierto margen de interpretación discrecional que se atribuye al juez. Por lo demás, este podría optar por la pena pecuniaria y el destierro o la prisión en base a diversas consideraciones, ya sean para evitar males futuros (como aplicar el destierro en los casos en los que el atacante sea un agresor reiterado y sea necesario apartarlo de la víctima), relacionadas con tolerancia consuetudinaria de diversos tipos de violencia (evitando las penas de cárcel para lesiones efectuadas en riñas más o menos aceptadas por ambas partes o consideradas justificadas) o prácticas (los delincuentes insolventes entrarían en prisión de cualquier manera como compensación de la multa).

En este caso hubo un cambio penal relevante entre la publicación de ambos códigos, a través de la reforma de 1907, por el que se reserva el arresto mayor a las lesiones que causen incapacidad para el trabajo, o necesidad de asistencia facultativa, durante más de quince días²⁹⁸.

²⁹⁶ El destierro, en el lenguaje jurídico del periodo que estudiamos, era una medida de alejamiento que implicaba la prohibición de residir en un lugar y un radio a su alrededor, y no debe asimilarse con la expulsión del país, que se contemplaba con otra definición. Sería en cierto modo equivalente a las actuales órdenes de alejamiento. Vease con más detalle en MOHAMED KAMEL AMIN HANZAL, N. e. D. (2008).

²⁹⁷ Entiéndase no como aleatoriedad, sino como sometida al arbitraje del magistrado.

²⁹⁸ *Gaceta de Madrid*, 10-02-1907, nº 41, p. 529.

Tabla 2.4.1 Evolución de las lesiones menos graves

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, art. 341-347 (en especial el 345)	Lesiones no comprendidas en otros supuestos que causen incapacidad para el trabajo por cinco días o más, o requieran tratamiento facultativo por igual tiempo, y menos de un mes	Arresto mayor, destierro, o multa de 20 a 200 duros, según "prudente arbitrio de los tribunales"
Código Penal de 1870, art. 429-436, especialmente 433	Lesiones no comprendidas en otros supuestos que causen incapacidad para el trabajo por ocho días o más, o requieran tratamiento facultativo por igual tiempo, y menos de un mes	Arresto mayor, o destierro y multa de 125 a 1.250 pesetas, según "prudente arbitrio de los tribunales"
Código Penal de 1932, art. 417-432 (en especial el 425)	Lesiones no comprendidas en otros supuestos que causen incapacidad para el trabajo por quince días o más, o requieran tratamiento facultativo por igual tiempo, y menos de un mes	Arresto mayor, o destierro y multa de 250 a 2.500 pesetas

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

2.4.2 Homicidio, parricidio, infanticidio, asesinato y aborto

El parricidio es el crimen contra la persona conceptualmente más grave en la legislación española de nuestro periodo, e implica la muerte de un ascendiente y descendiente o del cónyuge. Apenas cambia entre código penal, más allá de algunas limitaciones a partir de 1870.

Tabla 2.4.2.1 Evolución del parricidio en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, art. 332	Matar al padre, madre o hijo, sea legítimo, ilegítimo o adoptivo; a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, siempre que sean legítimos; o al cónyuge	Pena de muerte si hay premeditación o ensañamiento; en cualquier otra circunstancia, cadena perpetua a la de muerte
Código Penal de 1870, art. 417	Matar al padre, madre o hijo legítimo o ilegítimo; a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes; o al cónyuge	Cadena perpetua a la de muerte
Código Penal de 1932, art. 411	Ídem a 1870	Reclusión mayor

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

El asesinato no aparece como tal en el Código Penal de 1850, pero este castiga con una pena agravada al que mate a otro con alevosía, por precio o recompensa remuneratoria, por medio de

inundación, incendio o veneno, con premeditación o con ensañamiento²⁹⁹. En los códigos de 1870 y 1932 se denomina asesinato al que cometa un homicidio en estas circunstancias.

Tabla 2.4.2.2 Evolución del asesinato en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, art. 333	Matar a otro con alevosía, por precio o recompensa remuneratoria, por medio de inundación, incendio o veneno, con premeditación o con ensañamiento	Cadena perpetua a la de muerte
Código Penal de 1870, art. 418	Ídem	Cadena temporal en grado máximo a muerte
Código Penal de 1932, art. 412	Ídem	Reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

El infanticidio es un término en el que el lenguaje coloquial y jurídico divergen, y en el que el estudio de diversas fuentes induce a confusión. Etimológicamente, el infanticidio es la muerte provocada de un infante. Pero en el derecho español contemporáneo el infanticidio es una categoría legal más restringida, un tipo de delito cuya comisión depende no solo del muerto sino del causante de la muerte.

Así, el Código Penal de 1850 lo define como la muerte de un hijo “que no haya cumplido tres días” por parte de su madre o sus abuelos maternos, para ocultar la “deshonra”. El legislador castiga el hecho en estas circunstancias de manera significativamente más leve que el parricidio, que sería lo que correspondería. Los códigos posteriores mantienen este criterio, y, por supuesto, los jueces. Por ejemplo, en 1920 fueron detenidos José Pereira y Sabina Bouzada acusados de haber matado a su hijo; ella lo fue por infanticidio, él por asesinato (probablemente parricidio)³⁰⁰.

En las fuentes hemerográficas, sin embargo, vemos que el término no se emplea de manera restrictiva. Se usa genéricamente cuando una madre mata a un niño de tierna edad, cuando fallece un niño expósito, ante el hallazgo de cuerpos de bebés o incluso para designar a las apariciones de fetos no formados o abortados.

Tabla 2.4.2.3 Evolución del infanticidio en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, art. 336	Muerte de un menor de tres días por su madre o sus abuelos maternos	Prisión menor si lo comete la madre; prisión mayor si lo cometen los abuelos
Código Penal de 1870, art. 424	Ídem	Prisión correccional en grados medio y máximo si lo comete la madre, prisión mayor si lo cometen los abuelos
Código Penal de 1932, art. 416	Ídem	Prisión en sus grados mínimo y medio

²⁹⁹ Se entiende como ensañamiento aumentar de manera inhumana y deliberada el dolor del ofendido, no, como a veces se interpreta de manera popular, la agresión reiterada.

³⁰⁰ FV, 17-01-1925, p. 4.

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

El homicidio, finalmente, se refiere a la muerte dolosa de un ser humano, con lo que los infanticidios, parricidios y asesinatos pueden entenderse como subtipos. Dependiendo de la fuente, a veces se emplea el término para referirse las muertes no comprendidas en los apartados anteriores. En otras ocasiones, aparece incluyendo alguna de estas categorías, o como suma de ellas.

En nuestro caso emplearemos el término en su sentido más extenso. Emplearemos el término homicidio para referirnos a cualquier muerte dolosa, incluidas aquellas que no serían perseguidas como delitos en su momento (por ejemplo, la muerte de un manifestante por un disparo considerado justificado de las autoridades, o los crímenes cometidos por enfermos mentales).

Cuando elaboremos tasas de homicidio, subsumiremos en la cuenta los infanticidios, parricidios y asesinatos. La bibliografía actual no suele hacer distinciones relativas al parricidio y asesinato a la hora de elaborar tasas de muertes (y cuando se emplean los términos aproximadamente equivalentes en el ámbito anglosajón de murder y parricide no se tienen por qué estar hablando de exactamente lo mismo). Sin embargo, varios autores reputados consideran pertinente separar el infanticidio. A la hora de comparar sus resultados con los nuestros será necesario tenerlo en cuenta³⁰¹.

Tabla 2.4.2.4 Evolución del homicidio en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, art. 333.2	El que mate a otro, fuera de las circunstancias comprendidas en infanticidio, parricidio o asesinato	Reclusión temporal
Código Penal de 1870, art. 417	El que mate a otro, fuera de las circunstancias comprendidas en infanticidio, parricidio o asesinato	Reclusión temporal
Código Penal de 1932, art. 413	El que mate a otro, fuera de las circunstancias comprendidas en infanticidio, parricidio o asesinato	Reclusión menor

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

Todos los Códigos Penales castigan el aborto causado a través de violencia contra la embarazada por terceras personas, de la misma manera que otras lesiones y heridas. En este apartado nos interesa observar cómo se persigue el aborto provocado sin violencia y voluntario.

Tabla 2.4.2.5 Evolución del aborto en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, arts 337 y 339-340	Aborto consentido	Para la madre, prisión menor, correccional si es para evitar su deshonor. El que cause el aborto sin violencia, prisión mayor, el que lo haga sin violencia y con consentimiento de la mujer, prisión menor. En ambos casos, si es un facultativo se aplica en su grado máximo
Código Penal de 1870, art. 425, 427-428	Aborto consentido	Para la madre, prisión correccional en grados medio y máximo, o bien mínimo y medio si es para evitar la deshonor. El que lo cause y colabore, prisión mayor si actúa sin violencia ni el consentimiento de

³⁰¹ De cualquier manera, si hubiéramos excluido los infanticidios tal como los entiende la legislación española tampoco habríamos llegado a cifras homologables a las de la bibliografía, ya que los parámetros de esta (muertes cometidas por madres o abuelos, víctimas de hasta tres días de edad) no son iguales a las de los autores que excluyen el infanticidio de sus tasas.

		la madre, y correccional en grados medio y máximo si esta consiente. Si es facultativo se le aplica la pena máxima
Código Penal de 1932, art. 417-420	Aborto consentido	Para la madre, arresto mayor, en grado mínimo si es para ocultar su deshonor. Para el que lo cause, prisión menor si no hay violencia ni consentimiento, y arresto mayor si hay consentimiento. Si es facultativo se impone una multa de 2.500 a 5.000 pesetas, y el farmacéutico que expida un abortivo, una de 500 a 5.000 ptas

Fuente: Elaboración propia a partir de los Códigos Penales de 1850, 1870 y 1932. En el Código Penal de 1932 se contemplan penas adicionales para el que cause la muerte de la madre en un aborto voluntario

2.4.3 Los delitos por lucro económico

“Robo” es un término que induce a confusión, pues en el lenguaje popular se emplea para referirse a cualquier tipo de sustracción de lo ajeno³⁰². En el ámbito del derecho, sin embargo, el robo tiene una definición más restringida: es aquella sustracción que se produce con violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza sobre las cosas, por oposición al hurto, en el que no se dan ninguno de estos tres supuestos. A lo largo de este trabajo utilizaremos la definición jurídica, puesto que es más precisa. Los textos judiciales y las estadísticas suelen separar los robos en los que hay violencia e intimidación sobre las personas de aquellos en los que hay solo fuerza sobre las cosas, y así lo haremos nosotros.

Tabla 2.4.3.1 Evolución del robo con violencia e intimidación en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850 (art. 425-430)	No aparece definido el término robo	Cadena temporal en casos de violencia o intimidación "grave", de presidio mayor cuando no. Cadena perpetua a muerte cuando vaya acompañado de homicidio, violación, mutilación, y determinados robos en cuadrilla ³⁰³
Código Penal de 1870 (art. 515-521)	Apoderarse de cosas muebles ajenas con violencia o intimidación en las personas	Presidio mayor a cadena temporal mínima en casos de violencia o intimidación de gravedad "manifiestamente innecesaria" o si se causan ciertas lesiones; presidio correccional a mayor en casos menos graves. Cadena perpetua a muerte si se causa homicidio, cadena temporal media a perpetua en caso de violación, mutilación, ciertas lesiones o secuestro. Se considera agravante el robo en cuadrilla
Código Penal de 1932 (art. 493-496)	Apoderarse de cosas muebles ajenas con ánimo de lucro y ejerciendo violencia o intimidación sobre las personas	Presidio mayor a media a reclusión menor mínima en casos de violencia o intimidación de gravedad "manifiestamente innecesaria" o si se causan ciertas lesiones; presidio menor a presidio mayor en grado medio en casos menos graves. Pena de reclusión menor máxima a reclusión mayor si resulta homicidio, reclusión menor máxima reclusión mayor media en caso de violación, mutilación, secuestro o ciertas lesiones. Se considera agravante el robo en cuadrilla

³⁰² Así lo refleja la RAE, cuya segunda acepción de “robar” es “tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea”.

³⁰³ Definida como grupo superior a tres personas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

El robo con violencia e intimidación resulta especialmente castigado puesto que en él se suman un ataque contra la propiedad y otro contra la integridad personal, escalándose el castigo cuando más grave fuese el daño contra la persona³⁰⁴. La novedad más relevante del código de 1932 es la desaparición de la pena de muerte incluso en el supuesto más grave, el homicidio.

En todos los códigos se establecen penas agravadas para el robo en cuadrilla y en despoblado; una forma de perseguir al banditismo. A mediados del siglo XIX quizás fuese el fenómeno delictivo violento más preocupante. Los tres códigos establecían dos concesiones para perseguir a las bandas de ladrones, rebajando la carga de la prueba necesaria para imputar un hecho y llegando a invertirla. En el caso de los robos en despoblado y en cuadrilla, todos los presentes serían condenados por todos los atentados cometidos por cualquiera de ellos; y “se presume haber estado presente en los atentados cometidos por una cuadrilla, al malhechor que anda habitualmente en ella, salvo la prueba en contrario”.

Tabla 2.4.3.2 Evolución del robo con fuerza en lugar sagrado o habitado en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850 (art. 431-432)	No aparece definido, pero se contempla escalamiento, rompimiento de pared o techo, llaves falsas o ganzúas, nombres supuestos o simulación de autoridad, o en despoblado y en cuadrilla	Si se realiza con armas, presidio temporal medio a cadena temporal media, presidio mayor si no hay reincidencia y robado por menos de 100 duros. Sin armas, presidio menor en grado máximo a mayor en grado medio
Código Penal de 1870 (art. 521-524)	Robo con fuerza en las cosas, con escalamiento, rompimiento de pared o equivalente, llaves falsas o ganzúas, nombre supuesto o simulación de autoridad	Si se llevan armas y se roba más de 500 pesetas, presidio mayor medio a cadena temporal mínima. La pena queda atenuada por robos de valor inferior o el no empleo de armas, y agravada si se realiza en cuadrilla y despoblado. Arresto mayor en grado medio a presidio correccional mínimo, si solo se roban alimentos por valor de menos de 25 ptas y solo se salta un muro exterior
Código Penal de 1932 (art. 497-500)	Ídem al anterior	Si se llevan armas y se roba más de 1.000 pesetas, presidio mayor en grado mínimo. La pena queda atenuada por robos de valor inferior o el no empleo de armas, y agravada si se realiza en cuadrilla y despoblado. Arresto mayor en grado medio a presidio menor mínimo, si solo se roban alimentos por valor 100 pesetas o menos y similares y solo se salta un muro exterior

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

Tabla 2.4.3.3 Evolución del robo con fuerza en lugar no habitado en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de	No aparece definido, pero se	Presidio menor en grado máximo a

³⁰⁴ No hemos recogido todos los supuestos, por concreción.

1850 (art. 433-434)	contempla escalamiento, rompimiento de pared o techo, llaves falsas o ganzúas o fractura de objetos	presidio mayor en grado medio; un grado menor si lo robado no excede de 100 duros; presidio correccional, si lo robado no excede de cinco duros.
Código Penal de 1870 (art. 525-529)	Robo con fuerza en las cosas, con escalamiento, rompimiento de pared o equivalente, llaves falsas o ganzúas, fractura o sustracción de objetos. También se castiga la posesión de llaves falsas, ganzúas y similares	Presidio correccional en grados medio y máximo, si el valor de lo robado excede de 500 pesetas, en un grado menor si el valor excede de 25 ptas, arresto mayor en grados medio y máximo si no excede de 25 ptas, un grado menor si es de alimentos
Código Penal de 1932 (art. 501-504)	Robo con fuerza en las cosas, con escalamiento, rompimiento de pared o equivalente, llaves falsas o ganzúas, fractura o sustracción de objetos. También se castiga la posesión de llaves falsas, ganzúas y similares	Presidio menor si el valor no excede de 1.000 ptas, arresto mayor máximo a presidio menor mínimo si no excede de 1.000 ptas, arresto mayor si no excede de 100 ptas, arresto menor en grado mínimo si se roban alimentos

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

El hurto es, con mucho, el caso más frecuente de delito contra la propiedad, si bien su definición varía a medida que se incluyen o excluyen determinados supuestos. La definición básica, y que constituye el núcleo de los hurtos, es apropiarse de cosas muebles ajenas sin la voluntad del dueño y con ánimo de lucro: el mendigo que se lleva unas prendas puestas a secar, el carterista que roba un reloj en una aglomeración o los chicos que escamotean algunos dulces en una tienda son reos de hurto. Según el Código, como se ve en la tabla inferior, se incluyen o excluyen otros supuestos en esta categoría.

Este es un caso en el que su incidencia está ligada a su definición. Con el Código Penal de 1850 todos los hurtos son delito, mientras que en 1870 pasan a ser faltas, con carácter general, aquellos en los que no haya reincidencia y lo hurtado no pasase de diez pesetas. Esto es sin duda uno de los factores, aunque no el único, que explica la caída de delitos contra la propiedad en las estadísticas de la Restauración en relación al periodo isabelino. En 1932, con las actualizaciones debidas a la inflación, se mantiene ese criterio.

Pero incluso en los dos últimos códigos, la comparativa con las penas atribuidas a las lesiones y al hurto permite comprobar la importancia atribuida a la propiedad en relación a la integridad personal en todos los códigos, incluido el republicano. Es también notable que no se contemplen penas de multa para el hurto, seguramente porque el legislador entendía que muchos de los que los cometían eran insolventes a los que las penas pecuniarias poco podrían atemorizar.

Tabla 2.4.3.4 Evolución del hurto en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850, art. 437-439	Apoderarse de cosas muebles ajenas sin voluntad del dueño, con ánimo de lucrarse, y sin violencia o intimidación; negarse a devolver préstamos; aprovecharse de objetos o frutos recogidos tras un delito de daños	Presidio menor, si el valor de lo hurtado fuese de más de 500 duros; correccional, si pasara de 5; arresto mayor a correccional, si fuese inferior
Código Penal de	Apoderarse de cosas muebles ajenas sin voluntad del dueño, con ánimo de	Presidio correccional en grados medio y máximo, si lo hurtado vale más de 2.500 ptas; en

1870, art. 530-533 (vigente seis años, ver abajo)	lucrarse, y sin violencia o intimidación; quedarse con un objeto perdido para lucrarse y sabiendo quién es el dueño; aprovecharse de objetos o frutos recogidos tras un delito de daños (salvo casos previstos en faltas)	grado mínimo y medio, si vale más de 500; arresto mayor medio a presidio correccional mínimo, si pasase de 100; arresto mayor mínimo a máximo, si pasase de 10; casos inferiores no aparecen tipificados como delitos, excepto reincidencia
Código Penal de 1932, art. 505-508	Apoderarse de cosas muebles ajenas sin voluntad del dueño, con ánimo de lucrarse, y sin violencia o intimidación; negarse a devolver préstamos; aprovecharse de objetos o frutos recogidos tras un delito de daños	Presidio menor en grados mínimo y medio, si lo hurtado excediese de 5.000 ptas; arresto mayor máximo a presidio menor mínimo, si pasase de 1.000; arresto mayor, si pasase de 50. Los casos inferiores no se consideran delito, excepto reincidencia

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

En este caso, el Código Penal de 1870 resulta menos representativo porque su principal cambio normativo, el eliminar el carácter delictivo de los hurtos de menor cuantía, quedó anulado durante las tres primeras décadas de la Restauración. La ley del 17 de julio de 1876 restableció la consideración de delito para los hurtos inferiores a 10 pesetas³⁰⁵, y la del 3 de enero de 1907 volvió a considerarlos como faltas³⁰⁶. Antes de esta reforma, quedaba un hueco para las faltas tan solo en el caso de algunos hurtos cometidos en el campo: la tala de pequeñas cantidades de leña en una finca ajena, la recogida de espigas y otros restos de cosechas y entrar en una finca para coger frutos y comerlos en el acto (artículos 495.21, 495.23, 496, 497, 499.), disposiciones que se repiten en 1870 en términos semejantes.

Como se ve, durante buena parte del periodo casi cualquier tipo de hurto era considerado delito y castigado con una pena de prisión. En las cárceles de partido de A Coruña y Santiago podemos encontrar, en especial antes de 1870, abundantes ejemplos, como Domingo Moreira, sentenciado en 1860 a cuatro meses de cárcel por “hurto de un paraguas”. Antonio Robles Hurtado estuvo cuatro meses en prisión en 1858 por robar pan, y ese mismo año, Isabel Sanjurjo Aneiros recibió la misma pena por hacerse con unos zapatos. Hay que recordar que algunos condenados cumplían tiempo adicional por no poder pagar las multas impuestas, los honorarios del letrado o los gastos del juicio.

En la *Falcona*, la prisión compostelana, entra en 1865 un hombre condenado a seis meses de arresto mayor (y un día por impago de indemnización), por el “robo frustrado de herrajes” en una huerta, y a una mujer que cumple dos meses por robo frustrado de maíz (era reincidente). Josefa Sisto pasa dos meses en prisión en 1867 por robar un candelero y una vela de sebo. La sustracción de tejidos y vestido conllevaba penas severas: cuatro meses por el hurto de una pieza de terliz, doce meses por dos hurtos de ropa, diecisiete de meses de presidio correccional a María Carneiro por hacerse con “una sábana y una camisa” en 1868³⁰⁷. Coinciden en estos establecimientos penales con apuñaladores y agresores que sufren condenas sustancialmente menores.

La estafa los delitos en los que alguien se aprovecha de otra persona a través de algún tipo de engaño, trampa o abuso de confianza, pero muestra una gran variedad interna. Así, en 1850 se incluyen en el título “estafas y otros engaños” (art. 449-459) una gran variedad de comportamientos ilícitos. Los comportamientos quizás más típicos son defraudar a otro “en la sustancia, cantidad o

³⁰⁵ En base a la nueva redacción del apartado quinto del artículo 531. *Gaceta de Madrid*, 19-07-1876, nº 201, p. 147.

³⁰⁶ *Gaceta de Madrid*, 10-02-1907, nº 41, p. 529. Algunas reflexiones sobre esto en BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2008), pp. 237-238.

³⁰⁷ CARBALLO GENDE, E. (2018), pp. 57-58.

calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligado” o empleando engaños, y estos son los comportamientos que se incluyen en la tabla a modo de ejemplo.

Pero no debemos olvidar que también se considera estafadores a los que hagan trampas en el juego, simular contratos, fraudes en la propiedad literaria o industrial o abusar de la confianza de un menor, y existen penas agravadas, por ejemplo, para los tenderos que emplean pesos y medidas falsas (art. 451.2). También se considera estafa el delito que actualmente se clasifica como apropiación indebida (art. 452.1). Esta pluralidad se mantiene en el Código Penal de 1870, con pocos cambios en lo sustancial (art. 547 a 554), y también en el de 1932 (art. 522 a 528).

Tabla 2.4.3.5 Evolución de la estafa en los códigos legales

	Definición	Pena
Código Penal de 1850 (art. 449-450)	Defraudar en la "substancia, calidad o cantidad" que se entrega en virtud de un título obligatorio, o defraudar a otro valiéndose de engaño	Arresto mayor para defraudaciones inferiores a 20 duros; prisión correccional si es inferior a 500; prisión menor si es mayor
Código Penal de 1870	Defraudar en la "substancia, calidad o cantidad" que se entrega en virtud de un título obligatorio, o defraudar a otro valiéndose de engaño	Arresto mayor en grados mínimo y medio, si la defraudación no es superior a 100 pesetas; arresto mayor medio a presidio correccional mínimo, si no supera las 2.500; presidio correccional en grados mínimo y medio, si es mayor de 2.500
Código Penal de 1932	Defraudar en la "substancia, calidad o cantidad" que se entrega en virtud de un título obligatorio, o defraudar a otro valiéndose de engaño	Falta, si la defraudación no supera las 50 ptas; arresto mayor en grados mínimo y medio, si no supera las 250 ptas; arresto mayor medio a presidio menor mínimo, si no supera las 2.500 ptas; presidio menor en grados mínimo y medio, si no supera las 25.000 ptas; presidio menor en grados medio y máximo, si supera las 25.000 ptas

Fuente: Elaboración propia a partir de los códigos penales

Como curiosidad, las estadísticas de estafas son extremadamente sensibles a los casos extraordinarios, puesto que los criminales pueden estafar a gran cantidad de personas. En Ciudad Real, durante el primer tercio del siglo, una cuarta parte de los juicios por estafa se correspondían con pasajeros que viajaban en el tren sin billete³⁰⁸.

Como se ve, la dureza de las disposiciones en el delito contra la propiedad fue haciéndose más leve. Un periodista de *Faro de Vigo*, Blas Agra Mancebo, clamaba en 1925 contra la protección tan dura de la propiedad privada del Código Penal español, que le parecía anticristiana y contraria a la “legislación tradicional española”, aunque lo cierto es que las penas se habían relajado durante el periodo liberal, y no digamos en relación con las prescripciones del Antiguo Régimen³⁰⁹.

³⁰⁸ BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2005), pp. 127-128.

³⁰⁹ FV, 17-11-1925, p. 1.

3. FUERZAS POLICIALES

En este capítulo estudiaremos las fuerzas policiales formalmente dedicadas a esta tarea y dependientes de las diversas administraciones, así como algunos apuntes acerca de los cuerpos privados. Hemos excluido a los militares del análisis, aunque hay que señalar que a inicios de nuestro periodo de estudio siguen realizando funciones de persecución del crimen. En Ferrol, a inicios de 1841, coexistían patrullas vecinales e integradas por soldados. En enero de ese año se constituyó una Ronda de Seguridad, también llamada “patrulla de capa”. Como respuesta a actos criminales que no se mencionan en detalle, el alcalde requirió la ayuda de otros representantes de la administración para organizar y armar una ronda de vigilantes. No consiguió carabineros ni armas largas, como requería, pero sí ocho hombres de infantería de marina (sargento, cabo y seis soldados), cedidos por el Gobernador Militar, y algunos sables, cananas y pistolas del Parque de Artillería del Arsenal. Los soldados, al mando de dos capitanes de la Milicia Nacional, persiguieron “ladrones y malhechores en este pueblo y sus inmediaciones”, en palabras del regidor José Montero de la Peña. El experimento acabó pronto, ya que la ronda se extinguió el 30 de abril de 1842³¹⁰.

Pero esto constituye una excepción. A partir de mediados del siglo XIX, los militares se despegan de la persecución de los delitos comunes, debido sobre todo a la propia creación de cuerpos especializados; la principal excepción es el mar, donde la Marina, a falta de otros órganos de control, asumió parte el cumplimiento de la legislación relativa a la pesca, una labor que siguen realizando las patrulleras actuales. Pero, como veremos apartado tras apartado, la influencia del Ejército está siempre presente, ya sea como modelo de creación de los cuerpos policiales, ya en la condición de licenciados de sus integrantes o, directamente, a través de la supeditación al Ministerio de la Guerra o los Capitanes Generales bajo ciertas condiciones³¹¹. La dependencia orgánica del Ejército, pero más aún la influencia de su cultura, es un fantasma siempre presente en la concepción del orden público en la España contemporánea, al contrario que en el Reino Unido³¹².

Por otra parte, en este trabajo no entraremos en profundidad en las actitudes de las clases populares hacia las fuerzas policiales y su expansión. Entre las ilustradas no hay nunca aversión al concepto de policía, sino a individuos y grupos rechazando ciertos aspectos de la actuación policial (por ejemplo, su brutalidad o ineficacia o la influencia militar), pidiendo correcciones y, en todo caso, ampliaciones de los efectivos. No tenemos tan claro qué pensaban las clases populares. Las fuentes transpiran, en nuestra opinión, una aceptación de la realidad policial cuando convenía a los intereses de individuos y grupos (protegiendo su propiedad, eliminando a grupos violentos) y un rechazo cuando los perjudicaba (obligándolos, por ejemplo, a pagar Consumos). Ante una misma cuestión podremos encontrar diversas aproximaciones dentro de ese gran conjunto que englobamos con el nombre de pueblo. Si acaso, como dice Churchill para la población inglesa decimonónica, “attitudes towards the law were volatile and complex ; if anything, cynicism rather than hostility was the most common sentiment”³¹³.

³¹⁰ *Expediente de constitución da ronda de seguridad*, C-804-1, Archivo Municipal de Ferrol

³¹¹ En las fuerzas policiales españolas, hay López Garrido, hay una “mayor preocupación por el delito político que por la delincuencia común”, junto con la ya mencionada importante influencia de los militares en los cuerpos policiales y la gestión del orden público y el frecuente recurso a los estados de excepción. LÓPEZ GARRIDO, D. (1984), pp. 64-69.

³¹² “No self-respecting nineteenth-century Englishman was going to suggest deploying a French gendarmerie-style institution either at home or within the empire”, como señala Emsley, si bien en la práctica emplearon modelos similares en Irlanda. EMSLEY, C. (2014), p. 23, 35.

³¹³ CHURCHILL, D. C. (2014), p. 139.

Observando el mismo problema pero desde la óptica contraria, tampoco hemos entrado a evaluar las propias percepciones de los policías, las relaciones y compromisos tácitos a los que llegaban con la población, qué delitos perseguían con más énfasis y con cuáles se hacía la vista gorda. Según señala Emsley, no se debe considerar a los agentes como “controllers, easily and succesfully implementing the desires and decisions of government, even in absolutist or totalitarian societies”. Siempre hay un cierto grado de negociación y pragmatismo³¹⁴. Estudiarlo y determinarlo debería ser el objeto de posteriores estudios.

3.1 Profesionalidad y formación: algunos apuntes globales

La cuestión de profesionalidad se refiere a la dedicación, pero no debemos confundirla con formación técnica o científica. A mediados del siglo XIX los interrogatorios, la (escasa para los estándares actuales) recogida de pruebas materiales, la tasa de daños y la identificación de sospechosos eran tareas que recaían sobre todo en los ciudadanos, pedáneos y alcaldes, y no tenían, ni se les pedía, formación especializada. Esta había sido, por otra parte, lo predominante en casi todas las sociedades y culturas anteriores³¹⁵.

¿Cómo era la instrucción en el siglo XIX? Nos da algunas pistas el *Manual del Juez de Paz* de Celestino Mas y Abad, publicado a mediados de la centuria y que vendió en poco tiempo más de cinco mil ejemplares, si hemos de creer al prólogo de su cuarta edición³¹⁶. Además de un resumen de la legislación y consejos morales, incluye modelos de escritos y ejemplos prácticos del tipo de situaciones que los jueces locales podrían enfrentar en su desempeño, desde mediar en un divorcio a hacer frente a un motín. Resulta pertinente recurrir a él para observar cómo se esperaba que actuase la justicia a mediados de la década de 1850.

Veamos, por ejemplo, un caso de homicidio³¹⁷. Al juez de paz (en la práctica, probablemente al alcalde o a su teniente hasta 1870, según hemos visto en el apartado 2.2) llega el aviso de que ha aparecido un cadáver. No le corresponde juzgar el hecho, pero sí investigarlo, así que envía al secretario al lugar de los hechos. Este comprueba, tras “varias tentativas”, que en efecto está muerto, y que parece que de forma violenta, observa las inmediaciones y no encuentra el arma, pero sí una cartera con la que se queda como prueba. El cuerpo queda guardado por dos porteros o, en su defecto, vecinos por turno.

Prosiguen algunas diligencias que llevan a cabo el juez de paz y su secretario, aunque respondiendo a autos del juzgado que lleva el caso: autopsia del cuerpo, reconocimiento de la cartera, interrogatorios a posibles implicados o testigos, incluida la entrega del presunto homicida. El modo descrito es casi idéntico a los modos de actuación que, miles de años antes, emplearon un investigador babilónico³¹⁸ o un forense de la dinastía Qin³¹⁹ al encontrarse con respectivos

³¹⁴ EMSLEY, C. (2004), pp. 206-207. También sobre esta cuestión, LAWRENCE, p. (2004), 222-223.

³¹⁵ Sobre la falta de profesionalización de la persecución del delito en el periodo romano, FUHRMANN, C. J. (2012).

³¹⁶ MAS Y ABAD, C. (1857), p. 3.

³¹⁷ MAS Y ABAD, C. (1857), pp. 130-140.

³¹⁸ Vease el informe de Bahdi-Lim entre la correspondencia de la administración de Mari, acerca de un niño hallado descuartizado a orillas del Éufrates: “The very day I heard this report, I resorted to strict measures; I questioned the overseers of the city quarters, the craftsmen and the harbor people, but neither any owner of this child nor its father or mother or anybody who could [shed light] on this incident came forward. The very same day, I sent Beli-lu-dari to my lord with this news. Also during the seven days since I sent Belu-dari, I have done much questioning but [no se conserva el resto de la tablilla]”. OPPENHEIM, A. L. (1967), pp. 103-104.

³¹⁹ En la tumba del juez Xi encontramos un caso de homicidio cuya investigación sirve como método de enseñanza. Tras encontrar a una víctima de homicidio, un informe forense sobre una víctima de homicidio, se

cadáveres, aunque la nota de profesionalidad decimonónica la pondría el médico forense. Aún así, no resulta sorprendente que cuando ocurriese un delito particularmente llamativo, los responsables de hacer la primera investigación no supieran cómo responder; tras un atraco de Santa Cruz de Valadouro en 1888, que dejó varios muertos, el juzgado local actuó de manera tan deficiente en la investigación que el juez de instrucción le impuso una multa a su homólogo municipal³²⁰.

El manual de Mas y Abad incluye otros casos menos severos, pero en los que la autoridad local sigue siendo la que realiza la investigación sobre el terreno. Si aparece un herido en su circunscripción, se encarga de enviarlo al hospital e interrogarlo a él, a los testigos y a los sospechosos³²¹; en un caso de hurto de leñas, además de recibir y tramitar la denuncia, se encarga de nombrar peritos para valorar lo sustraído e informar de su cálculo³²²; el secretario del juzgado de paz acude rápidamente después de que se prenda fuego en un pajar para tratar de averiguar quién es el incendiario³²³.

El hecho de que los juzgados municipales realizasen la primera instrucción en delitos graves les daba la oportunidad de ayudar a los criminales, en caso de que les interesase. En el año 1900, el juez y secretario municipales de Arteixo, así como un particular, fueron absueltos de facilitar la fuga de un hombre acusado de matar a otro aplastándole la cabeza con una piedra. El sospechoso fue detenido por las autoridades locales y trasladado al depósito municipal bajo la custodia de paisanos, pero le permitieron ir a cenar a casa del tercer encausado, al parecer un pariente, y desde allí se fugó.

El juez, según la acusación, habría sabido de la muerte “por las funciones de su cargo”, ya que instruyó primeras diligencias, y habría avisado a la familia del acusado para facilitar la fuga, además de “no haber dispuesto anteriormente” que la Guardia Civil condujese al detenido ante el juez de instrucción de A Coruña. El secretario, que también conocía el caso por haber participado en la instrucción, fue acusado de haberse puesto con otras personas para preparar la fuga, “conviniendo en que el reo fuese puesto bajo la custodia de paisanos en el depósito municipal” y en los hechos posteriores. Los tres fueron declarados inculpables por el jurado, pero su actuación, aún en el caso de que no fuese maliciosa, no parece muy diligente³²⁴.

No existía una enorme diferencia entre las competencias técnicas de estos jueces y secretarios y las de las fuerzas policiales contemporáneas. En la Guardia Civil, quizás el cuerpo más profesional hasta el siglo XX, ni números ni oficiales no tenían una formación criminológica particular, fuera de la experiencia de campo que fuesen adquiriendo. Los agentes de campo eran en general licenciados del ejército cuya formación se basaba en memorizar la Cartilla, que en conjunto da muy pocas pistas acerca de cómo conducir una investigación criminal³²⁵.

Los métodos de “policía judicial científica” cobran relevancia, y aún así de manera experimental, a partir de la primera década de 1910. La dactiloscopia, de uso relativamente sencillo en comparación con otras técnicas, se empezó a aplicar en España en la década de 1900 en las prisiones y en las

anotó su descripción física, se retiró el cadáver, la ropa y zapatos del cuerpo fueron etiquetados e ingresados en un registro, y los investigadores preguntaron por el caso en una comisaría y granja cercanas. El informe forense anota la posición y ángulo de entrada de las heridas, evaluando el tamaño y tipo de filo del arma. CLEMENTS, J. (2008), pp. 131-132.

³²⁰ VILA PERNAS, M. (2004), p. 32.

³²¹ MAS Y ABAD, C. (1857), pp. 140-147.

³²² MAS Y ABAD, C. (1857), pp. 157-158.

³²³ MAS Y ABAD, C. (1857), p. 159.

³²⁴ Aunque en el caso solo conocemos la sentencia, y no el proceso. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, fsdtomo II y las del jurado*, caso 57, folios 1585-1587.

³²⁵ Más allá de algunos consejos generales en el capítulo I, como “procurar adquirir noticias” (artículo 26) y preguntarle siempre a los detenidos su nombre, edad, oficio y naturaleza (artículo 29), el documento trata sobre todo de las infracciones más frecuentes y de cómo realizar el servicio. *Cartilla del Guardia Civil* (1846).

fuerzas policiales de Madrid y Barcelona, y para realizar ficheros, al tiempo que su valor probatorio seguía discutiéndose a la hora de realizar exámenes forenses³²⁶. A lo largo del periodo la labor de las fuerzas policiales fue básicamente la de patrullar, realizar detenciones de delincuentes in situ y auxiliar a las autoridades judiciales y políticas. Estas funciones se podían realizar de manera relativamente satisfactoria sin proporcionar una formación especializada, cuyos fundamentos estaban desarrollándose y cuya implantación hubiese sido costosa. Según señala Emsley en relación a la policía metropolitana de Londres, creada en 1829, “the prevention of crime by regular patrolling was neither cerebral nor skilled”³²⁷.

3.2 Los (inexistentes) cuerpos policiales antes de nuestro periodo de estudio

En Galicia, salvando a los serenos de algunas ciudades, no podemos hablar de la existencia de cuerpos policiales profesionales antes de la implantación de los Carabineros y la Guardia Civil. Durante el Antiguo Régimen no existieron cuerpos profesionales de guardería rural, aunque sí que se emplearon cuerpos militares a la función secundaria de persecución del crimen, y existieron cuerpos milicianos o paramilitares que auxiliaban en esta tarea.

Véase, por ejemplo, *Real instrucción de 29 de junio de 1784, expedida para la persecución de malhechores y contrabandistas en todo el reyno*, por la que se ordenó a los Capitanes Generales formar partidas de tropa para perseguir delincuentes, entre los que parecen destacar desertores, contrabandistas y vagos, sometiéndolos en determinados casos (art. 8 y 9) a consejos de guerra³²⁸. La ausencia de fuerzas permanentes no desentonaba del conjunto de España, si bien en el siglo XVIII encontramos una aproximación a estos cuerpos a través de los Mossos d'Escuadra, ni era una excepción en la mayor parte de los países europeos, que crearon sus fuerzas policiales en el siglo XIX³²⁹.

Es pertinente hacer esta observación porque algunos autores citan como precedentes de la Guardia Civil a algunos cuerpos existentes en Galicia antes de 1844, como la Milicia Honrada, los Caudillatos o las partidas de observación. No estamos de acuerdo con esta asociación, que, nos parece, induce a error. Estas organizaciones son fuerzas ciudadanas que en todo caso tienen relación con la Milicia Nacional o los Voluntarios Realistas, sobre los que volveremos en el apartado 4.4 y en el capítulo 8, y que actuaron sobre todo para prevenir amenazas de naturaleza insurreccional. Sus integrantes, aunque incidentalmente puedan haber evitado delitos o perseguido criminales, no eran profesionales, y el propósito de su creación no era el policial.

Tampoco fue una fuerza policial la Hermandad de Galicia, que encontramos en el cambio entre la Edad Media y la Moderna³³⁰. La Hermandad fue instaurada en 1482 y entre sus propósitos se encontraban la “prosecución de los malhechores e seguridad de los caminos e ejecución de la

³²⁶ BERTOMEU SÁNCHEZ, J. R. (2018), pp. 211-219.

³²⁷ EMSLEY, C. (2007), p. 109.

³²⁸ El texto se ha recuperado de MARTÍN DE BALSAMEDA (1818), pp. 203-217. En las páginas anteriores pueden encontrarse disposiciones semejantes.

³²⁹ Cabe destacar la excepción de Francia, que desarrolló un cuerpo de policía rural, la *Maréchaussée*, antecedente de la *Gendarmerie nationale* pero muy limitado en efectivos. Más numerosas eran las fuerzas que servían de policía privada para los *Fermiers généraux*, cuyos integrantes eran conocidos como *gabelous*. En Inglaterra los condestables de parroquias, en principio un cargo rotativo, fue profesionalizándose; otros países europeos recurrieron al ejército. EMSLEY, C. (2007), pp. 66-70.

³³⁰ En este sentido coincidimos con Martínez Ruiz, que señalaba en 1994 que “la argumentación que identifica a Guardia Civil y Hermandades es de tipo historicista, hecha sin fundamento por Quevedo e Sidro y que ha sido aceptada sin más por cuantos historiadores se ocuparon de la Guardia Civil después de ellos, hasta los estudios más recientes”. MARTÍNEZ RUIZ, E. (1994), p. 31.

nuestra justicia e bien e paz de los dichos nuestros regnos e señoríos”, así como la asistencia a los reyes en la guerra de Granada³³¹. Pero si nos vamos a sus cuentas comprobamos que la mayor parte de los gastos iban encaminados al mantenimiento de funcionarios reales, tropas, fortalezas y armamento. Los gastos asociados a la persecución de malhechores se limitan al pago del “pequeño salario de los dos alcaldes de la Hermandad que había en cada una de las cinco provincias gallegas”, letrados y fiscales, y a algunos pagos a particulares que habían capturado a delincuentes, ya fuesen estos miembros de la Hermandad, merinos de las justicias señoriales o particulares³³².

Los Caudillatos se refieren modo de organizar a las milicias que existieron a lo largo de la Edad Moderna en respuesta a distintas crisis: los caudillos eran los encargados de llamar y organizar a los milicianos, y cada caudillato reunía un determinado número de parroquias. En la antigua provincia de Tui, en 1727, ante la amenaza de la flota inglesa, se establecen 23, y su función era servir de “tropa auxiliar de reserva” al ejército y vigilar la costa (lo que podría incluir la persecución de contrabandistas).

El nombre de caudillo pervivió en la Guerra de la Independencia para denominar a algunos de los jefes de las alarmas organizadas contra los franceses, de ahí que se hable de caudillatos en el XIX³³³. Durante los conflictos napoleónicos estas milicias sirvieron como esquema de movilización en Galicia, un fenómeno que se dio con otros cuerpos similares de toda Europa³³⁴. Barreiro Fernández emplea el nombre de las alarmas para referirse a las fuerzas costeras, y considera que los caudillatos eran las fuerzas integradas “por paisanos do interior”, pero, por lo que vemos en el caso de Tui, parece que los términos se empleaban indistintamente³³⁵, y que para los contemporáneos significaban “milicia”. En todo caso, Barreiro Fernández las designa como “organización paramilitar”³³⁶ y no contra el bandidismo³³⁷.

Las Milicias Honradas se establecieron por parte de la Suprema Junta Central Gubernativa del Reino en 1808 para preservar el orden, reprimir el bandidismo y perseguir a los desertores; según Melón Jiménez, el nombre ya se había aplicado en 1743 y 1762 para designar a reorganizaciones de los caudillatos³³⁸. Sus integrantes no cobraban salario, debían armarse a su costa y además no se permitía que se incorporasen jornaleros o trabajadores manuales. Un repaso a la oficialidad y tropa de la milicia de Viveiro en 1810 nos presenta una milicia formada por escribanos, licenciados, sacerdotes, militares y nobles, que participaron de manera significativa en la lucha contra el francés;

³³¹ LADERO QUESADA, M. A. (2005), p. 243. Las finalidades de las hermandades fueron “fundamentalmente bélicas” y de “aplastamiento de las insurrecciones internas”, siendo empleadas “esporádicamente, para combatir diversas formas de bandidaje”, ocupándose de la persecución de delitos comunes “muy secundariamente”. LÓPEZ GARRIDO, D. (1987), pp. 25-28.

³³² Estos premios se pagaban habitualmente con los bienes de los delincuentes detenidos, pero, si estos no lo tenían, los fondos de la Hermandad se hacía cargo. Por ejemplo, a Diego López de Villavriz, merino del conde Sancho de Ulloa, se le concedió un pago por prender a Rodrigo de Mijonfrío, “salteador de caminos, e por las costas que hizo en lo llevar preso a Orense e en lo llevar al camino francés, donde fue aseteado”, a dos criados del alcaide de Torres, por prender al malhechor Pedro Herrán, que fue ahorcado, a Ruy López, alcalde de la hermandad de Herreros, por prender a dos malhechores, etcétera. LADERO QUESADA, M. A. (2005), pp. 254, 265, 281. Sobre otros aspectos de la Hermandad gallega en términos organizativos y fiscales puede verse DE URTAZA, Manuel M^a (2014), pp. 39-40.

³³³ FERNÁNDEZ-VILLAMIL Y ALEGRE, E. (1951), pp. 94-95.

³³⁴ Tanto milicias como grupos paramilitares movilizados previamente y reservistas. Para un repaso de diversos modelos de movilización, PARIS MARTIN, A. (2020), pp. 29-30.

³³⁵ Es más, el mismo autor habla para 1810 de las organizaciones de las “alarmas, nome que substitúe ao de caudillatos”. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), p. 80.

³³⁶ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), pp. 76-77.

³³⁷ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), p. 184.

³³⁸ MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), p. 133.

uno de los integrantes, don Juan Fernández Bao y Moscos, era también jefe del caudillato de Magazos³³⁹.

En cuanto a los cuerpos de observación, siguiendo a Barreiro Fernández, estos eran cuerpos de paisanos reclutados para auxiliar al ejército durante la Primera Guerra Carlista, y estaban enfocados, como su nombre indica, a actividades de reconocimiento e información³⁴⁰. Ciertamente es que las actividades de las partidas carlistas resultan a veces difíciles de distinguir del banditaje, y que el nombre que les atribuían los cristinos de “latrofaciosos” no resulta del todo desacertado. Pero este cuerpo, como los anteriores, no puede considerarse una fuerza policial.

Finalmente, es pertinente hacer referencia a una figura que aparece puntualmente en la literatura, y en las fuentes, los celadores de parroquia. En alguna ocasión parecen tratarse de nombres locales para agentes municipales del estilo de los alguaciles, o bien pedáneos; pero en Lugo, en 1834, el Gobernador mandó establecer un celador en cada parroquia de la provincia, como agente especial de policía y dependiente de los alcaldes mayores, para que “en unión de los mayordomos pedáneos”, ayudasen a la persecución de los carlistas³⁴¹.

3.3 La Guardia Civil

La Guardia Civil, creada siguiendo la inspiración de la *Gendarmerie nationale* francesa, es el cuerpo policial más importante en Galicia durante nuestro periodo de estudio, y prácticamente el único con el que trataban los gallegos, excluyendo las ciudades y zonas fronterizas. Constituye, además, el primer cuerpo policial profesional presente en el rural gallego³⁴².

El decreto de creación de la Guardia Civil, del 28 de marzo de 1844, expresa una diferencia significativa con las fuerzas armadas con las que debía convivir en el ordenamiento contemporáneo. Se concebía como una fuerza de “policía social”, destinada a proteger las “personas y las propiedades” de manera continuada, por contraposición a la Milicia (de acción discontinua y encaminada a defender las leyes y “el sosiego general dentro de las poblaciones”), y el Ejército, cuya tarea debía ser la defensa del Estado y el puntual apoyo a la milicia en relación con el orden interior.

Sin embargo, su carácter puramente policial se confundirá debido a su militarización y relación con el mantenimiento del orden público. El concepto de Guardia Civil aparece, según López Garrido, para proporcionar “cuerpo armado de élite al servicio de la administración civil”, que actuase de contrapeso al Ejército y la oficialidad, pero este intento se vio abortado desde un principio³⁴³. El primer documento relativo a la creación de la Guardia Civil es el decreto del 28 de marzo de 1844, pero otro inmediatamente posterior el 13 de mayo, refleja un cambio de tendencia amparado por Narváez: si el original “diseña un Cuerpo dependiente del Ministerio de Gobernación y de la autoridad política”, el segundo plantea un sistema de doble dependencia entre el poder civil y el ejército y un “marcado carácter militar”³⁴⁴. En un principio el instituto armado debía ser auxiliar de

³³⁹ PARDO DE CELA, S. F., ADRÁN GOÁS, C. (2013).

³⁴⁰ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), pp. 136, 158.

³⁴¹ Debían, en concreto, controlar el pasaporte de los viajeros, avisar de partidos y vigilar a sospechosos. Se elegían a proposición de las autoridades jurisdiccionales. VIVEIRO MOGO, P. (2004), pp. 59-60.

³⁴² Aunque no podamos hablar de profesionalización plena durante todo el periodo. Aún durante el Sexenio Democrático había números que no eran guardias profesionales, sino soldados conscriptos que prestaban su servicio en la Guardia Civil. LÓPEZ CORRAL, M. (1994-A), p. 56. En Cuba los guardias civiles destinados eran militares en comisión de sus cuerpos. PARDOS ALDEA, J. (1994), p. 75.

³⁴³ LÓPEZ GARRIDO, D. (2004), pp. 93-96.

³⁴⁴ Sobre los decretos fundaciones de la Guardia Civil y el cambio de modelo, OLMEDO, N. (2004), pp. 37-39.

una jerarquía civil de comisarios y celadores, pero estas prescripciones “nunca llegaron a tener vigencia real”, y las figuras mencionadas desaparecieron en 1852. La Guardia Civil monopolizó el aparato de seguridad policial³⁴⁵.

El conflicto entre la orientación civil y la militar se prolongaría en lo sucesivo, aunque el segundo polo predominó a lo largo de nuestro periodo de estudio. Los guardias siempre debieron ponerse a la orden de los capitanes generales en estados de guerra o de sitio, pero, a partir de 1885, quedaron bajo la autoridad militar en todo caso. Además, a partir de 1883, el instituto pasó a integrarse en el Ministerio de Guerra, y sus miembros (o las agresiones a ellos) fueron ser juzgadas por tribunales castrenses. En la Dictadura de Primo de Rivera, incluso la policía de Vigilancia y Seguridad pasó al control de la Guardia Civil³⁴⁶.

En cuanto a la adscripción política, pese a que podemos encontrar con facilidad ejemplos de la participación de mandos y números en alzamientos y revoluciones, el grueso de las fuerzas siempre parece haberse plegado al grupo que en ese momento controlase Madrid y los órganos de Gobierno hasta la Guerra Civil. Los mandos de la Guardia Civil mantuvieron una “relativa estabilidad” incluso en circunstancias de cambios políticos, pese al aumento de reemplazos y retiros voluntarios en el periodo 1868-1873 y la Segunda República³⁴⁷.

El instituto armado desempeña durante nuestro periodo de estudio, por tanto, una doble función en Galicia. Por una parte, es el primer cuerpo centralizado y profesional de policía que se desempeñará en el territorio gallego de manera significativa, y tendrá el protagonismo, dentro de las fuerzas uniformadas, en la persecución del crimen común. Por otro, es la fuerza armada encargada de preservar el orden social y político. Por lo tanto la encontraremos suprimiendo motines, cancelando mítines y reprimiendo manifestaciones desde un planteamiento conservador y militarizado del orden público, algo sobre lo que volveremos en el capítulo 8.

Por el momento nos interesa constatar su grado de implantación en Galicia. Hemos empleado como fuente los Anuarios Estadísticos y los escalafones del Instituto Armado, y, para simplificar el análisis, reducido los años estudiados a los cambios de década, cuando se pudieron encontrar³⁴⁸. En la estadística sólo se cuenta a la tropa³⁴⁹; se ha excluido a los jefes y oficiales, pues no aparecen desglosados todos los años³⁵⁰. De cualquier manera, son numéricamente poco significativos. En 1888, por ejemplo, hay en Galicia 33 jefes y oficiales para 591 individuos de tropa, es decir, suponen el 5,6% de esta. Tampoco se cuenta el personal auxiliar, del que disponemos de información irregular y que no participaba en el servicio activo³⁵¹.

Tabla 3.3.1. Dotación de la Guardia Civil en Galicia

Año	1863	1870	1880	1888	1900	1921
Guardias en Galicia	526	563	569	591	837	1.148
Población estimada de Galicia	1.807.845	1.827.962	1.862.023	1.899.205	1.980.455	2.134.848

³⁴⁵ LÓPEZ GARRIDO, D. (2004), pp. 100-105, 197-108.

³⁴⁶ LÓPEZ CORRAL, M. (2009), pp. 65, 109-114, 127-128, 264.

³⁴⁷ LÓPEZ GARRIDO, D. (1984), p. 126.

³⁴⁸ En concreto, los datos de 1863 han sido extraídos del Anuario Estadístico de 1860-1861 (la aparente contradicción temporal se explica porque se publicó en 1862 y 1863). Los datos de 1870, 1880, 1888, 1900 y 1921 del Escalafón de Jefes y Oficiales de la Guardia Civil.

³⁴⁹ Esto es, sargentos, cabos y guardias de primera y de segunda, cornetas de infantería y trompeteros de caballería.

³⁵⁰ Esto es, alféreces, tenientes, capitanes, comandantes, tenientes coroneles y coroneles.

³⁵¹ Armeros, profesores de equitación, veterinarios, médicos y capellanes.

Efectivos de tropa por 100.000 habitantes	29,1	30,8	30,6	31,1	42,3	53,8
Número de gallegos por cada guardia civil de tropa	3.437	3.247	3.272	3.214	2.366	1.860

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

La dotación de guardias en relación a la población permaneció casi inalterable desde los últimos años del periodo isabelino, el Sexenio y la primera etapa de la Restauración. Hasta 1888 a cada guardia le correspondían más de 3.000 habitantes, y su número estaba por debajo de los seiscientos. Con el cambio de siglo vemos un incremento significativo, pero todavía en el año 1900 los efectivos desplegados en Galicia no llegaban a los 900 para una población que se aproximaba a los dos millones de habitantes. Hacia el final de la Restauración, eso sí, el incremento de efectivos ha rebasado el de la población. En 1929, según datos aportados por González Calleja, los números de tropa eran muy semejantes en Galicia a los de 1921, excepto por un incremento en la provincia de Ourense³⁵²; no hemos podido encontrar datos para la Segunda República.

Tabla 3.3.2. Número de puestos de la Guardia Civil

Año	1863	1870	1880	1888	1900	1921
Puestos de la Guardia Civil en Galicia	82	90	90	92	129	158
Guardias por puesto	6,4	6,3	6,3	6,4	6,5	7,3

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

Teniendo en cuenta que Galicia contaba con más de 300 ayuntamientos, no hubiera sido posible situar una pareja de tropa en cada municipio aunque se hubieran distribuido uniformemente. A la altura de 1888 había 92, menos de uno para cada tres municipios, y el número permaneció sin grandes cambios desde el periodo isabelino. Luego aumenta, en paralelo con el incremento de efectivos, pero todavía en 1921 no se alcanzaba siquiera teóricamente la mitad de los municipios. La media teórica de guardias por puesto permanece en un nivel muy similar a lo largo de todo el periodo, seis o siete efectivos por puesto. Hay que tener en cuenta que había despliegues mayores en las sedes de las comandancias, y que parte de los efectivos debían también custodiar las vías férreas; la línea de ferrocarril a A Coruña, por ejemplo, ocupaba en torno a una treintena de agentes³⁵³. Teniendo en cuenta estas circunstancias, muchos puestos debían tener una dotación mínima y estar al mando de sargentos. Si bien es cierto que sus capacidades fueron ampliándose, como parte del esfuerzo del Estado español a lo largo del siglo XIX por aumentar su dotación material e institucional³⁵⁴, el cuerpo distaba de ser la “institución panóptica” que menciona algún autor³⁵⁵.

Esta falta de efectivos se agravaba por tres cuestiones: la escasez de medios de desplazamiento, las deficiencias de la red viaria y la falta de medios de comunicación a distancia. La mayoría de los guardias destinados a Galicia en todos los años consultados son de infantería, con una crónica escasez de caballos. A mediados del siglo XIX, cerca de las tres cuartas partes de la red viaria gallega

³⁵² Que rebasan los 270 en número de tropa, si bien no hemos podido consultar la fuente primaria y quizás no se esté incluyendo dentro de la tropa a los suboficiales. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p. 49.

³⁵³ PUIG, J. J. (1984), p. 346.

³⁵⁴ Sobre el proceso de desarrollo material del Estado español durante el siglo XIX y su éxito relativo, PRO RUIZ, J. (2019).

³⁵⁵ RECASENS I BRUNET, A. (1989), pp. 316-317.

estaban formados por sendas y caminos de herradura por los que no podían circular el tráfico rodado³⁵⁶. A alturas de 1865, solo existían una veintena de estaciones telegráficas en todo el territorio³⁵⁷. Solo a finales de nuestro periodo de estudio empezamos a encontrar teléfonos (reducidos a villas y ciudades) y medios de transporte motorizado. Aún así, la mayor parte de los servicios seguían realizándose a pie.

Resulta difícil entender los problemas del servicio desde nuestra época, en la que las fuerzas de seguridad disponen de coches para desplazarse, hay caminos capaces de albergar vehículos en el entorno rural y dispositivos móviles permiten la comunicación casi instantánea entre las patrullas y la comunicación de alarmas. Los guardias de nuestro periodo de estudio, mayoritariamente, recibían las denuncias de viva voz y no tenían otra forma de atender a las emergencias que caminando.

Si la comandancia del puesto de Chantada, por ejemplo, recibía una denuncia o petición de servicio de una aldea de Taboada, una pareja de guardias tenía que caminar hasta ella, recorriendo quince o veinte kilómetros (y los mismos a la vuelta), cargada el fusil y el macuto, constreñida por el uniforme, soportando sol en verano, nieve en invierno y lluvia todo el año, preguntando por direcciones a paisanos que quizás ni hablasen castellano; todo esto antes de atender al motivo que hubiera dado origen a que acudieran. En estas circunstancias, resulta normal que parte de la investigación y la mayoría de las labores de denuncia recayeran en representantes de las comunidades locales, y que fuese muy extraño que encontrasen delincuentes *in fraganti*.

Tabla 3.3.3 Comparación de la dotación de la Guardia Civil en Galicia y en España

Año	1863	1870	1880	1888	1900	1921
Guardias civiles en Galicia (A)	526	563	569	591	837	1.148
Población de Galicia (B)	1.807.845	1.827.962	1.862.023	1.899.205	1.980.455	2.134.848
Guardias civiles en España (C)	9.844	12.611	15.247	15.381	18.146	24.542
Población de la Península e islas adyacentes (D)	15.830.165	16.230.517	16.909.714	17.612.167	18.607.674	21.571.322
Coeficiente de representación de Galicia en relación a su población (A/(B/D)*C*100)	46,8	39,6	33,9	35,6	43,3	47,2

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

La falta de hombres no es particular de Galicia. Siguiendo a López Garrido, el Instituto Armado no tendría presencia fija en la mayoría de municipios españoles hasta bien entrado el siglo XX³⁵⁸. Pero los gallegos tenían menos guardias que los que les hubiesen correspondido con un despliegue proporcional. Si bien es cierto que, en algunos de estos años, parte del contingente se encuentra sirviendo en las colonias, en ninguno de los años estudiados el número de guardias en Galicia llega a ser la mitad de la que le hubiese correspondido a la región en proporción a su población. La

³⁵⁶ GARCÍA-FUENTES DE LA FUENTE, M. J. (1995), p. 115.

³⁵⁷ GARCÍA-FUENTES DE LA FUENTE, M. J. (1995), pp. 129-130.

³⁵⁸ LÓPEZ GARRIDO, D. (2004), p. 141.

deficiencia es especialmente acusada en 1880, en la que apenas es un tercio. Por contraste, los jóvenes gallegos estaban sobrerrepresentados tanto en las filas de la Guardia Civil como en los soldados que se reenganchaban³⁵⁹.

Tabla 3.3.4 Comparación de la dotación de la Guardia Civil en el territorio gallego y español

Año	1863	1870	1880	1888	1900	1921
Km cuadrados de territorio por cada guardia en Galicia	56	53	52	50	35	26
Km cuadrados de territorio por cada guardia en España	51	40	33	33	28	21
Coeficiente de representación territorial	91,4	76,4	63,8	65,7	78,9	80

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

Esta subrepresentación puede atribuirse, si bien solo en parte, a la alta densidad de población de Galicia. La región nunca llega a tener la dotación que le corresponde por territorio, pero en 1863 hay una correspondencia relativamente fuerte, de más del 90% de la que le sería asignada con una distribución homogénea. El porcentaje decae en los años siguientes, no porque se disminuyan los hombres asignados a Galicia, que aumentan lentamente en números absolutos y más levemente en relación a la población, sino porque se priorizó el despliegue de efectivos adicionales en otras áreas del país. Aumento de plantilla que coincide, por otra parte, con un periodo de congelación de sueldos³⁶⁰.

Tabla 3.3.5. Número de guardias por provincias gallegas

Año	1863	1888	1900	1921
Guardias en la provincia de A Coruña	138	169	226	437
Guardias en la provincia de Lugo	129	139	206	212
Guardias en la provincia de Ourense	130	140	190	227
Guardias en la provincia de Pontevedra	129	143	215	272
Total de Galicia	526	591	837	1.148

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

La distribución por provincias para los años en los que tenemos datos segregados en base a este criterio (en las fuentes de los demás solo encontramos los totales para Galicia) muestra que A Coruña es la demarcación que alberga a más guardias a lo largo de todo el periodo. En todos los años en los que tenemos datos, excepto 1921, es la sede del VI Tercio, y por tanto de la comandancia de toda la Guardia Civil de Galicia. En esta última fecha el mando se ha segregado y un

³⁵⁹ CABO VILLAVERDE, M. (2006), pp. 235-236.

³⁶⁰ Siguiendo a Pérez Viñuela, el salario de los guardias civiles de 1902 no había aumentado desde la fundación del cuerpo en 1844, si bien percibían algunas gratificaciones adicionales. PÉREZ VIÑUELA, A. (1994), p. 92.

nuevo Tercio, afincado en Pontevedra, custodia esta provincia y Ourense³⁶¹. Sin embargo, los datos brutos son engañosos, pues las provincias tienen poblaciones y extensiones muy distintas, que se expresan en las siguientes dos tablas:

Tabla 3.3.6 Porcentaje del despliegue efectivo de la Guardia Civil en las diferentes provincias gallegas en relación al que teóricamente hubiera correspondido debido a su peso poblacional relativo en la región

Año	1863	1888	1900	1921
A Coruña, despliegue en relación a la población	84,1	88,2	81,8	113,7
Lugo, despliegue en relación a la población	103,4	102,7	104,7	84
Ourense, despliegue en relación a la población	119,9	111,1	111,2	102
Pontevedra, despliegue en relación a la población	100,2	103,5	111,3	94,2
Media de Galicia	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a los censos de población y los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

Tabla 3.3.7 Porcentaje de despliegue en las diferentes provincias gallegas en relación al que teóricamente hubiera correspondido debido a su extensión

Año	1863	1888	1900	1921
A Coruña, despliegue en relación a su territorio	97,6	106,4	100,4	141,6
Lugo, despliegue en relación a su territorio	73,6	70,6	73,9	55,4
Ourense, despliegue en relación a la territorio	100,5	96,3	92,3	80,4
Pontevedra, despliegue en relación a la territorio	161,4	159,2	169	155,9
Media de Galicia	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia en base a los censos de población y los Anuarios Estadísticos y Escalafones de la Guardia Civil

El despliegue de la Guardia Civil en el periodo isabelino en Galicia fue relativamente homogéneo en relación a la provincia. Las cuatro recibieron aproximadamente los mismos efectivos, lo que penalizó en términos relativos a la provincia más poblada (A Coruña) y la más extensa (Lugo). Pontevedra, de escasa extensión, siempre tuvo muchos más guardias en relación a su territorio que cualquiera de las cuatro gallegas. La situación permaneció más o menos igual en el cambio de siglo.

Entre 1900 y 1921 se incrementaron las dotaciones un 37,2% en toda Galicia, si bien de un modo muy desigual. En A Coruña lo hicieron un 93,4%, muy por encima del incremento de población. Por primera vez desde que tenemos datos, pasó a ser la provincia con más guardias por habitante. En

³⁶¹ Esta división se mantuvo en el despliegue de mayo de 1926: el VI Tercio custodiaba A Coruña y Lugo, y el vigésimo cuarto las dos provincias meridionales. JAR COUSELO, G. (1994), p. 109.

Ourense y Pontevedra lo hicieron de manera significativa, un 19,5 y un 26,5% respectivamente, si bien el incremento en esta segunda provincia quedó diluido por el importante aumento de habitantes que experimentó. En Lugo el cambio fue anecdótico, de apenas el 2,9%, si bien es cierto que la población permaneció incluso más estancada. En 1921, de cualquiera manera, era la provincia con menos guardias tanto en relación a la población como el territorio, esto último de manera muy acusada.

En los años posteriores la cantidad de efectivos de la Guardia Civil aumentó, si bien no hemos podido rastrear en los escalafones su distribución por provincias. Así, en 1924 la plantilla subió hasta los 27.512 hombres³⁶², mientras que en verano de 1936, fruto de la ampliación de plantilla durante el bienio radical-cedista, el cuerpo sumaba 34.392 individuos³⁶³.

Esta falta de hombres y medios resulta pertinente para comprender el modo en que actuaban las fuerzas policiales y sus limitaciones, y por qué, como veremos en otros apartados, la Guardia Civil coincidía con fuerzas privadas y mecanismos de represión ciudadana del crimen.

Finalmente, hay que señalar aunque sea brevemente la dotación armamentística de la Guardia Civil, puesto que determina cómo respondían a las amenazas. La primera ordenanza sobre uniformidad, de 1844, dota a las fuerzas de caballería de carabina con bayoneta y dos pistolas. Los números de infantería, mucho más frecuentes y las que responden en casi todos los casos que encontramos en Galicia, llevarían un fusil acortado (para mayor movilidad y menor peso), un sable y una pistola pequeña, elemento que no se incorporaría en la práctica al armamento del guardia de a pie hasta 1922, si bien los oficiales tuvieron revólveres antes. La falta de arma corta suscitaba quejas a finales del siglo XIX (cuando las pistolas y revólveres eran frecuentes entre los civiles), por el problema que suponía esa carencia en peleas y aprehensiones de criminales en espacios cerrados³⁶⁴.

A lo largo de nuestro periodo de estudio, por tanto, el guardia civil ejerció sus funciones con un arma larga, evolucionando con la técnica prevalente en el momento. Los números afrontaban la delincuencia o el desorden público con las armas que empleaba la infantería contemporánea en la guerra³⁶⁵, lo que suponía aumentar la letalidad de los enfrentamientos³⁶⁶. En los casos en los que querían emplear la fuerza no letal, debían recurrir a las culatas o los sables envainados, ya que carecían de porra.

3.4 Policías estatales: cuerpos de Vigilancia, Seguridad y Guardia de Asalto

³⁶² Por la Orden del 27-07-1924.

³⁶³ LÓPEZ CORRAL, M. (1994-B), pp. 143-144. Pese a que en un primer momento se redujo el cuerpo por la reorganización de 1933, ya el año siguiente empezaron los aumentos de personal. NUÑEZ CALVO, J. C. (2014), p. 108.

³⁶⁴ El modelo que recibieron los números de infantería fue la pistola semiautomática STAR, muy popular en España en los años 20 y 30 entre las fuerzas de seguridad, los criminales, los pistoleros políticos y la población en general. NIETO RODRÍGUEZ, M. (1990), pp. 99-100, 105.

³⁶⁵ Los modelos fueron evolucionando con las mejoras técnicas, desde el fusil de chispa primitivo con el que empezaron a los modelos Mauser de repetición que predominaron desde finales del XIX. En todo caso, fueron ganando en capacidad de fuego y efectividad, pero no se hicieron menos letales. A partir de 1934, de hecho, a algunas unidades se les empezaron a suministrar ametralladoras, subfusiles y pistolas automáticas. NIETO RODRÍGUEZ, M. (1990), pp. 112.

³⁶⁶ Esta situación, señalada por varios autores, fue reconocida por Azaña tras el incidente del 28 de mayo de 1931 en San Sebastián, cuando los disparos de la Guardia Civil sobre un grupo de manifestantes apiñado en el puente de Miracruz dejó ocho muertos y más de medio centenar de heridos: “fue un verdadero milagro que la descarga no causase un mayor número de víctimas en un lugar tan angosto y con la potencia de las armas empleadas”. ULLA REGA, J. L. (1994), p. 126.

Empezaremos este apartado con una nota sobre terminología. La Policía, con mayúscula, es según la RAE un “cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas”, apartado este último que seguramente ha incluido la academia para diferenciarlo de la Guardia Civil. Bajo esta definición entran sin duda las policías municipales que veremos en apartados posteriores, pero aquí estudiaremos los cuerpos con vocación estatal, es decir, cuya organización se extienda por todo el territorio nacional o al menos una parte mayoritaria.

La historia de la policía española se caracteriza, según apunta Nuño Negro, “por la sucesión de reformas y contrarreformas producto de los distintos cambios de gobierno”, en tan gran número que llegan a “hacer de la historia de la policía un asunto complejo”³⁶⁷. Intentemos resumirlo. Durante el Antiguo Régimen no existió en España un cuerpo de las características que hemos enumerado en el párrafo anterior. Los antepasados lejanos de la actual Policía Nacional se encuentran en cuerpos regionales como las Escuadras de Cataluña³⁶⁸, y, en especial, por las disposiciones para reorganizar la vigilancia en Madrid y controlar la disidencia política. Así, en 1782 Floridablanca crea una Superintendencia General de Policía dirigida a controlar la capital e independiente de las Salas de Alcaldes encargadas de esta función. Entre sus competencias se encontraba perseguir la delincuencia común y la política y la recogida de vagos y mendigos. Sancionaba directamente, al contrario que en instituciones posteriores, y fue suprimida en 1792³⁶⁹.

José Bonaparte con las competencias sobre la “proposición de las medidas necesarias para la seguridad general del Estado, la custodia del interior de las prisiones y la censura de los periódicos”, de acuerdo con el Real Decreto del 6 de febrero de ese año³⁷⁰. Su presencia fue efectiva en Madrid, con la creación de una intendencia general de Policía general el 18 de febrero de 1809³⁷¹, y se proyectó una estructura con comisarios generales (que no llegaron siquiera a designarse) y provinciales, algunos de los cuales llegaron a nombrarse. Las Cortes de Cádiz, en su sesión del 4 de abril de 1811, acordaron “que se estableciese un superintendente de policía para la seguridad del Estado, y que para que se verificase, dispusiese el Consejo de Regencia su pronta formación, remitiendo para la soberana sanción el reglamento que, atendida las circunstancias, debe darse á dicho tribunal”³⁷², aunque no llegó a concretarse³⁷³.

Fernando VII apostó por la creación de un cuerpo de policía de estas características. Tras su primera llegada al poder, el 15 de marzo de 1815 se crea un Ministerio de policía y Seguridad Pública para investigar a “sospechosos de conspiración”³⁷⁴, señala López Garrido. Una vez más, también elaboró un reglamento con una estructura para controlar Madrid. También encargó al presidente del Tribunal de Vagos de Madrid, José Manuel de Arjona, un proyecto de reforma de las fuerzas policiales, que quedó en nada.

Entre las primeras medidas del Trienio Liberal estuvo la supresión del tribunal de la Santa Inquisición (aunque siguieron funcionando Juntas de Fe en algunas provincias hasta 1834), y Fernando VII no lo

³⁶⁷ NEGRO, N. (2018), p. 55.

³⁶⁸ LÓPEZ GARRIDO, D. (1987), p. 32.

³⁶⁹ TURRADO VIDAL, M. (1991), p. 17.

³⁷⁰ TURRADO VIDAL, M. (1991), pp. 18-19.

³⁷¹ LÓPEZ GARRIDO, D. (1987), p. 32-34.

³⁷² Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, sesión del día 4 de abril de 1811, nº 187, pp. 823-824.

³⁷³ LÓPEZ GARRIDO, D. (1987), p. 34.

³⁷⁴ LÓPEZ GARRIDO, D. (1987), p. 32-34.

restauró con su vuelta al poder efectivo³⁷⁵. En 1823, a medida que los Cien Mil Hijos de San Luis y las fuerzas realistas iban tomando territorios, constituyeron una Superintendencia General de Vigilancia Pública. El rey puso a su frente a Arjona el 26 de noviembre, y le encargó retomar el proyecto de reforma. Finalmente, por la Real Cédula del 13 de enero de 1824, se publicó creó la que Turrado Vidal considera el primer cuerpo policial español, y que englobaba Madrid y provincias.

Las competencias de este nuevo cuerpo eran amplias. Su artículo trece, que fija las “atribuciones privativas” del cuerpo, incluye la formación de padrones exactos de la población, y la expedición de pasaportes, licencias para fondas, permisos de armas y un registro de todos los coches y tartanas. Este trabajo administrativo no es baladí, ya que, en especial los padrones y pasaportes, permitirían dar a la autoridad central una información exacta de la población y sus movimientos, esencial para un Estado moderno.

El artículo catorce, referido a atribuciones que desempeñaría “acumulativamente” a las justicias ordinarias, privativas y autoridades gubernamentales (ayuntamientos y juntas), es incluso más amplio, con 33 puntos. En el apartado sociopolítico, controlaría la prensa y libros, arrestarían a los que injuriasen al Rey e impediría asociaciones secretas, tumultos y “las coaliciones de jornaleros para hacer subir el precio de los jornales”, pero los policías debían además recoger expósitos, hijos prófugos o gitanos sin domicilio, perseguir ladrones por pueblos y caminos a denunciar edificios ruinosos y evitar que se colocasen tiestos y cajas en ventanas desde las que pudieran caer sobre los viandantes, entre otras atribuciones³⁷⁶. En una misma estructura, por tanto, se unificaban las funciones de policía administrativa y judicial³⁷⁷, aunque solo la primera era competencia exclusiva.

El 20 de febrero tenemos su reglamento para Madrid y las provincias, por el que se crean, además de la capital, 32 intendencias divididas entre la primera y la tercera clase en relación a la población de las capitales y la extensión de las provincias; las atribuciones eran las mismas, pero las clases con número más bajo tenían más funcionarios y mejor pagados (arts. 1, 5, 18 y 29). A su vez, cada capital tenía en 126 delegaciones (art. 6). Galicia es una única intendencia, de segunda clase, con diez subdelegaciones: en la actual provincia de A Coruña (además de la capital), se establecieron subdelegaciones en Betanzos, Ferrol y Santiago; en Lugo, en la ciudad homónima, Mondoñedo y Viveiro; en Ourense, en la ciudad del mismo nombre y Monterrei; en la de Pontevedra, la ciudad del Léz no consiguió subdelegación, pero sí Vigo y Tui.

Al igual que en el resto de provincias, carecían de una estructura uniformada, armada y numerosa. La intendencia tenía un pequeño grupo de funcionarios con sueldo en la capital: a Galicia, además del intendente, le correspondían un secretario, tres oficiales, tres escribientes, un portero y un mozo de oficios (art. 29). En lo referente a los subdelegados, del reglamento parece derivarse que serían, o bien corregidores o alcaldes mayores, o bien algunos especiales para Puertos y Fronteras³⁷⁸.

³⁷⁵ aquí debemos recordar que el rey, como hemos visto en un apartado anterior, tampoco había restablecido las justicias señoriales tras la marcha de los franceses. Según la interpretación de Nuño Negro, que nos parece bastante razonable, esto se debió a que la Inquisición era un “nido de ultrarrealistas” y a que el monarca prefería su propio aparato represivo: “la defensa del Trono ha de defender del Trono”. NEGRO, N. (2018), p. 72.

³⁷⁶ Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, por la que se manda guardar y cumplir el Real Decreto inserto comprensivo de las reglas que han de observarse en el establecimiento de la Superintendencia General de la Policía del Reino, con lo demás que se expresa. Madrid, 13 de enero de 1824. Archivo Histórico Nacional. Reales Cédulas número 2.824. Consultado en TURRADO VIDAL, M. (2002), pp. 32-36.

³⁷⁷ NEGRO, N. (45-46), pp. 45-46.

³⁷⁸ Dado que los artículos 47 y 48, que enumeran las gratificaciones, no establecen otras posibilidades.

Estos hombres podían desempeñar las funciones administrativas y los procedimientos de sanción, pero, ¿quién patrullaba? Pocos hombres, solo en las capitales de las intendencias, y no sabemos si llegaron a hacerlo efectivamente. El artículo 40 señala también que en cada uno de los barrios de las capitales de las intendencias (A Coruña en nuestro caso) se establecerían celadores de barrio, con un sueldo de 3.500 reales (art. 44); se establecía uno por cada 500 vecinos (art. 40) algo mayor que la proporción de la Guardia Municipal coruñesa a lo largo del siglo XIX, como veremos en el apartado 3.8. Al igual que los de Madrid, debían ir uniformados (art. 43). En las subdelegaciones se establecerían también celadores de barrio, pero sin cobrar (art. 50), con lo que no podemos hablar de fuerzas profesionales³⁷⁹. En Madrid se creó en 1825 una Compañía de Celadores Reales para realizar rondas, que provocaron “un sinfín de incidentes” con los Voluntarios Realistas, que también patrullaban³⁸⁰.

Esta policía fue vista con recelo no solo por los liberales a los que perseguía, sino también por los ultrarrealistas, que la percibían como “una policía del estado, y no de los poderes locales, de las audiencias y de la Inquisición”³⁸¹. Ese fue el caso en Galicia en la década de 1820, a juzgar por la reacción de las autoridades eclesiásticas y capitanes generales³⁸². En 1827, tras la sublevación de los Agravados en Cataluña en la que “los insurrectos unían al grito de Viva la Inquisición el de “Muera la Policía”, se redujeron las competencias a entender de delitos políticos; las de 1824 se recuperaron tras la muerte del Rey en septiembre de 1833, pero la Superintendencia General volvió a ser suprimida en 1835, con la guerra carlista en marcha, y los asuntos policiales atribuidos a los gobernadores militares³⁸³.

La organización policial vuelve a aparecer en los términos de 1824, como Protección y Seguridad, por el Real Decreto de 26 de enero de 1844 y el reglamento del día 30 de ese mes. A partir de entonces seguirá existiendo de manera ininterrumpida hasta el final de nuestro periodo de estudio. Toma el nombre de Cuerpo de Vigilancia en 1852, sujeto a diversas transformaciones organizativas con los vaivenes políticos del periodo isabelino en las que no entraremos³⁸⁴.

¿Y qué ocurre con los agentes de campo? Según señala Morales Villanueva, “La Policía tendría en un principio un número reducido de agentes uniformados, ya que podría contar con la colaboración de la Guardia Civil”, pero cuando esta autorización desapareció con el decreto del 2 de agosto de 1852, “se hizo sentir la imperiosa necesidad de aumentar la Policía con dichos funcionarios”. En 1854 se crearon los Cuerpos de Vigilancia Pública, Vigilancia Municipal y Salvaguardias para Madrid, sustituidos al poco por la Guardia Urbana, que se integró en la Guardia Civil. En 1863, con una nueva reconstitución, se crea el cuerpo de Vigilancia Pública, con funcionarios de paisano y también de uniforme³⁸⁵. A finales de 1868, inmediatamente después del alzamiento, el cuerpo se reformuló como de Orden Público, con un reglamento promulgado en junio de 1870; durante este periodo mantuvo como una de sus atribuciones prioritarias controlar el orden público en Madrid³⁸⁶.

³⁷⁹ Reglamento de Policía de Madrid y de las Provincias del Reino, promulgado el 20 de febrero de 1824. Archivo Histórico Nacional, sección de Estado. Legajo 3.031/12, consultado en TURRADO VIDAL, M. (2002), pp. 43-95.

³⁸⁰ TURRADO VIDAL, M. (1994-A), p. 203.

³⁸¹ LUIS, J.-L. (2014), p. 110.

³⁸² BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 213-214.

³⁸³ TURRADO VIDAL, M. (1991), pp. 26-27.

³⁸⁴ Para una relación en detalle, TURRADO VIDAL, M. (2001), pp. 39-47.

³⁸⁵ MORALES VILLANUEVA, (1989), p. 391-392.

³⁸⁶ TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 45. Sus atribuciones en cuanto a orden público convirtieron a la policía en objetivo en más de una revuelta y pronunciamiento: en la de 1848 fue asesinado el jefe de la ronda, y en el bienio progresista fue asesinado el JEfe Superior de Policía de Madrid por parte de un grupo de revoltosos. NEGRO, N. (2018), p. 81-82.

Tras la revolución de 1868 se reformó y refundó la policía, con la creación, a finales de ese mismo año, el Cuerpo de Orden Público, con reglamento definitivo en julio de 1870. Este permitió al cuerpo evolucionar, señala Morales Villanueva, “desembarazándose de muchas funciones burocráticas que pasarían a los Ayuntamientos” pero en el que “las continuas reformas hacían inoperantes todos los proyectos”³⁸⁷. Este primer despliegue, que no sabemos si llegó a ser efectivo, establecía casas-cuarteles en las capitales de provincia gallegas: 40 hombres en A Coruña, 18 en Lugo, 21 en Ourense y el mismo número en Pontevedra. Es decir, 97 agentes e inspectores de un total nacional de 2.146, o el 4,5% del conjunto nacional. Al año siguiente el porcentaje tuvo que caer, pues la fuerza de Madrid pasó de poco más de 500 a 1.000³⁸⁸.

Ya en la Restauración, tenemos una reorganización con bases más sólidas en el decreto del 6 de noviembre de 1877, que constituyó dos cuerpos en Madrid: Vigilancia y Seguridad. El primero, un cuerpo civil, realizaría tareas de policía administrativa y judicial, mientras que el segundo, de organización castrense y con muchos oficiales procedentes de la Guardia Civil, sumaba a sus competencias de policía judicial el mantenimiento del orden público³⁸⁹. Este sería el modelo que se extendió a las provincias, aunque mantuvieron el cuerpo de Orden Público hasta 1886 y el de Seguridad todavía tardaría dos décadas en extenderse por el conjunto del territorio³⁹⁰. El primer despliegue del cuerpo de Seguridad en A Coruña sería a finales de 1907 o inicios de 1908, coincidiendo con otras ciudades como Valencia, Bilbao y Sevilla³⁹¹. En 1911 ya se les encuentra en Santiago, Ferrol, Vigo y Pontevedra³⁹², y en 1913 en Tui³⁹³.

En esta primera etapa, los cuerpos presentaban deficiencias; el magistrado Gil Maestre, que acusaba al cuerpo de Orden Público de los males de corrupción, incapacidad y desorganización, entre otros, opinaba en 1886 que para continuar así “valdría más que no existiese”³⁹⁴. Siguiendo a Turrado Vidal, “el mayor mal” de la policía en la Restauración era la “falta de profesionalidad”, que derivaba de que “eran más importantes las relaciones externas que el propio trabajo policial para ascender en la organización”. El ingreso “se producía indefectiblemente por un nombramiento realizado por la libre y soberana voluntad del Gobernador civil”, al igual que los ceses (que no llevaban aparejada compensación económica), con las irregularidades asociadas: casos en los que entraban hombres que no cumplían los requisitos, licenciados de presidio y reclamados por los tribunales que continuaban realizando actos delictivos dentro del cuerpo. Otros individuos cesados por cambios

³⁸⁷ MORALES VILLANUEVA, (1989), p. 392.

³⁸⁸ FERNÁNDEZ BARALLOBRE, J. E. (2010), pp. 21-23.

³⁸⁹ MORALES VILLANUEVA, (1989), p. 392-393.

³⁹⁰ TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 63.

³⁹¹ FERNÁNDEZ BARALLOBRE, J. E. (2010), p. 51.

³⁹² FERNÁNDEZ BARALLOBRE, J. E. (2010), p. 106-109.

³⁹³ FERNÁNDEZ BARALLOBRE, J. E. (2010), p. 113.

³⁹⁴ El juez no tenía una palabra amable para la institución: “Es un conjunto informe de delegados, inspectores y agentes, sin reglamento general á que atenerse sin deberes claros y precisos , sin derechos determinados, sin conocimientos especiales, sin enlace, sin aptitudes , y sin otra dirección que la más ó menos inteligente y caprichosa de los Gobernadores Civiles. Apartados bastantes de sus individuos de sus verdaderas funciones para desempeñar servicios de oficina y otros de muy distinta índole, trasladados frecuentemente á sitios y pueblos diversos cuyas costumbres é idioma desconocen, remunerados con un sueldo que no cubre sus necesidades precisas, faltas de instrucción, elegidos por el favor y no por los méritos inseguros en su porvenir, menospreciados, sin fuerza moral, sin merecer la confianza del público, estropeados en el traje, bruscos en las maneras, y en relación casi continua y hasta íntima con los que debieran ser objeto de su vigilancia, no debe extrañarse que lleguen tarde á donde se les necesita, que acudan demasiado pronto á donde no . habrían de acudir, que no vean lo que están obligados á ver, y que motiven con sobra de fundamento las quejas que la prensa consigna todos los dias, y los dichos y las críticas, y hasta las burlas que se repiten á cada paso en su desprestigio.” GIL MAESTRE, M. (1886), p. 207.

políticos o incluso después de hacer cumplir la ley contra individuos influyentes. A esto se sumaba una baja formación, desconocimiento de las leyes, y un sueldo escaso que favorecía la corrupción.

Otro arquetipo presente en los cuerpos policiales era el del *momio*, esto es, un individuo que estaba en plantilla para pagar favores al que lo había designado pero que no realizaba una labor efectiva. Según señalaba el medio *La Policía Española* en 1898, “hoy raro es el periódico que no cuente en su redacción alguno o algunos individuos que perciban el haber de un guardia de orden público; los diarios ministeriales, por el hecho de serlo; los de la posición, para que ésta no sea muy enérgica, y si hay alguno independiente, para que no resulte verdad lo del adjetivo que se atribuye”³⁹⁵.

Estos males se corrigieron, al menos en parte, en la primera década del siglo XX. El 22 de enero de 1906 se creó la policía gubernativa, a la que se dotó de reglamento, y en ese año y en el anterior se crearon academias en Madrid y Barcelona para el Cuerpo de Vigilancia (el de Seguridad no tendría una hasta 1925)³⁹⁶. La Ley Orgánica del 27 de febrero permitió la estabilidad en el puesto de trabajo y el final de las cesantías turnistas³⁹⁷. En esta se establece el ingreso al Cuerpo de Vigilancia a través de concurso y examen (art. 3), y al de Seguridad de licenciados o retirados de la Guardia Civil o el Ejército, de donde salían también sus oficiales (arts. 9-11)³⁹⁸. En las décadas siguientes se desarrollaron otras iniciativas de formación y dotación técnica.

Como hemos visto anteriormente, también es por esta época cuando la policía se extiende más allá de Madrid. La ampliación del cuerpo de Seguridad tuvo que ver con separar a la Guardia Civil del mantenimiento del orden público en las ciudades. Según cuenta en sus memorias Juan de la Cierva, que lo coordinó desde Gobernación, el cuerpo se expandió a “todas las capitales y poblaciones. Preparaba yo así reservar la Guardia Civil para los momentos decisivos, y en los grandes centros cuidé de contar con núcleos de caballería de seguridad”³⁹⁹. Según escribía en 1876 el historiador y jurista Manuel Colmeiro, “en el resto de las poblaciones de España desempeñan los servicios propios de la policía general un corto número de agentes a las órdenes inmediatas de los gobernadores de provincia y alcaldes de los pueblos sin la organización ni las instrucciones convenientes; de forma que las autoridades mantienen el orden público *con el* auxilio de la Guardia Civil y la policía municipal”⁴⁰⁰. Como herramienta antidisturbios se les dotó de un machete, denominado modelo 1907 y declarado reglamentario al año siguiente, sin filo y con punta redondeada⁴⁰¹.

Tabla 3.4.1 Distribución de las fuerzas policiales en España y Galicia en 1899 y 1926

	1899 (Suma de las plantillas de Vigilancia y Seguridad)	%	1926 (Plantilla de Seguridad)	%
España	3.029	100	5.516	100
Madrid	1.476	48,7	1.606	29,1
Provincias menos Madrid	1.553	51,3	3.910	70,9
A Coruña	38	1,3	186	3,4

³⁹⁵ *La Policía Española*, nº 283, 02-09-1898, citado en TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 120.

³⁹⁶ NEGRO, N. (2018), p. 156.

³⁹⁷ Diversos ejemplos de corruptelas y males asociados a la situación policial en TURRADO VIDAL, M. (2001), pp. 17, 52, 55-56, 61, 66, 87-88, 93, 90-97, 104.

³⁹⁸ Los guardias rasos debían entrar como aspirantes sin sueldo y, cuando consiguiesen entrar por vacantes, debían someterse a formación y examen.

³⁹⁹ DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, J. (1955), p. 92.

⁴⁰⁰ Manuel COLMEIRO, *Derecho Administrativo Español*, T-I, 4.a ed., Madrid, 1876, pág. 346, citado en MORALES VILLANUEVA, (1989), p. 395.

⁴⁰¹ FERNÁNDEZ BARALLOBRE, J. E. (2010), p. 87.

Lugo	12	0,4	10	0,2
Ourense	0	0	15	0,3
Pontevedra	18	0,6	67	1,2
Total de Galicia sobre el conjunto nacional	68	2,2	278	5
Total de Galicia sobre el conjunto nacional menos Madrid	68	4,4	278	7,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por Martín Turrado Vidal y Eugenio Fernández Barralobre

En 1899 la suma de las plantillas policiales en toda España era de 3.029 hombres, de los que 1.476, es decir, cerca del 49%, se encontraban en Madrid, con un contingente también importante en Barcelona. Galicia solo suma 68 hombres (el 4,4% del despliegue policial fuera de Madrid), de los que el mayor contingente, 29, se encontraba en A Coruña, considerada capital de una provincia de primera clase. En Ferrol se hallaban otros 9 hombres. Lugo, provincia de tercera clase, disponía de once en la capital, mientras que en Pontevedra, con la misma categoría había el mismo número en la ciudad homónima y seis en Vigo. En Ourense, por su parte, no había fuerzas policiales, que por tanto cubrían solo a una pequeña parte de la población gallega.

Las dotaciones policiales en las ciudades oscilaban. Aunque no encontramos evidencia de un despliegue en Santiago en 1899, había un servicio por tierras compostelanas en la década anterior: en enero de 1884 la prensa local pide al Gobernador que se mantenga al jefe de Orden Público local, de “integridad y refinado celo”, pues en la ciudad “los rateros andarían como conejos si nuestro buen amigo no anduviese en constante caza de ellos”⁴⁰² (aún así, fue trasladado a Ferrol al mes siguiente⁴⁰³). Y en esta segunda ciudad, entre 1875 y 1876, hubo entre tres y siete agentes de Orden Público, dependiendo del mes, de acuerdo con las relaciones de personal⁴⁰⁴.

Por lo demás, y a mayores de sus labores de policía administrativa, los agentes gubernativos realizaban tareas de calle, persiguiendo delincuentes e interviniendo en altercados, como el caso del agente de Orden Público que en una noche de domingo de 1886 detuvo y desarmó a un hombre que amenazaba a otros con un revólver⁴⁰⁵. Siempre, eso sí, dentro de las posibilidades de la plantilla. En diciembre de ese año, el Gobernador Civil determinó, “en vista de lo deficiente del servicio que prestan tanto los serenos del municipio como particulares” en el centro de A Coruña, donde se concentraban el comercio, establecer un nuevo servicio de vigilancia a cargo del cuerpo de Orden Público: tres parejas, un cabo y un inspector. “Es de sentir, sin embargo, que dado el escaso personal [...] no pueda esa vigilancia hacerse extensiva a otros puntos de la población, abandonados por completo por parte de los agentes de la autoridad”⁴⁰⁶.

La falta de personal hizo que, al menos en la primera mitad de la Restauración, no fuesen la fuerza hegemónica en las calles de las ciudades gallegas, ni siquiera en aquellas en la que la dotación era mayor. Tenían, eso sí, precedencia sobre los municipales. Ese mismo año estalló una discusión por competencias entre un guardia municipal coruñés y un agente de Orden Público: el primero

⁴⁰² *La Gaceta de Galicia*, 14-01-1884, p. 2.

⁴⁰³ *Gaceta de Galicia*, 10-02-1884, p. 3.

⁴⁰⁴ En general agentes de tercera y segunda, aunque puntualmente sirvieron en la ciudad un cabo y un inspector. C-1560, 2.10.4, Archivo Municipal de Ferrol.

⁴⁰⁵ *La Voz de Galicia*, 13-07-1886, p. 3.

⁴⁰⁶ *La Voz de Galicia*, 24-12-1886, p. 3.

pretendía detener al dueño de un café cantante y llevarlo a la casilla, mientras que el segundo insistía en que “él era allí la legítima autoridad y que por lo tanto le correspondía conducir a la inspección al delincuente”; cuestión que se zanjó cuando el agente le dijo al guardia que, si no cedía, al que iba a detener era a él⁴⁰⁷.

En 1926, Fernández Garballosa ha recopilado datos sobre el despliegue del cuerpo de Seguridad, que en ese momento contaba con más de 5.500 hombres (casi un 30% de ellos en Madrid). Galicia tiene un porcentaje más respetable de la fuerza: 278 hombres, el 5% del total nacional, o el 7,1% descontando Madrid. Aún así, aunque se han ampliado los lugares que cubre, sigue estando concentrada en la capital de la región; fuera de ella la presencia es muy reducida, sobre todo en las provincias orientales. La provincia de A Coruña cuenta con 130 hombres en la capital, 31 en Ferrol y 25 en Santiago, mientras que en Pontevedra la fuerza se encuentra más distribuida: 28 hombres en la ciudad del mismo nombre, 24 en Vigo, diez en Vilagarcía y cinco en Tui. Las fuerzas de Lugo y Ourense, 10 y 15 hombres respectivamente, se encuentran en las capitales de provincia. El despliegue de las fuerzas uniformadas, aunque más amplio que en el periodo anterior, estaba limitado a ciudades y villas.

Del cuerpo de Vigilancia, por su parte, no tenemos datos globales. Según aparece en prensa, el despliegue teórico para A Coruña en 1920, según el presupuesto del ministerio de Gobernación, era de 37 hombres⁴⁰⁸, y de diez en Ferrol⁴⁰⁹, cifras que suponen aproximadamente un tercio del despliegue de Seguridad seis años después. Una estadística sobre su actividad en A Coruña, en el mes de marzo de 1925, muestra que intervenía que sus servicios iban desde intervenir en riñas, escándalos y peleas a perseguir a carteristas y ladrones, cobrar multas y hacer cumplir reglamentos⁴¹⁰.

A lo largo de la Dictadura primorriverista, las fuerzas policiales vieron un gran incremento de su dotación económica⁴¹¹. La Segunda República supuso un importante aumento de la plantilla de las fuerzas policiales, mejor retribuidas que la Guardia Civil⁴¹². Esto se dio especialmente en el cuerpo de Seguridad y la Guardia de Asalto, una nueva fuerza creada el 9 de febrero de 1932. Era originalmente una escisión del cuerpo de Seguridad: hombres grandes, jóvenes y en buena forma que debían deshacer manifestaciones y motines callejeros actuando como antidisturbios⁴¹³. En un principio no tenían otro equipo que las porras, pero no duraron las buenas intenciones: pronto se les proporcionó pistolas ametralladoras e incluso se les permitió ir armados de paisano, y hacia el final

⁴⁰⁷ *La Voz de Galicia*, 09-04-1886, p. 3.

⁴⁰⁸ Un comisario de primera clase, un inspector de primera, otro de segunda, tres de tercera, dos agentes, dos aspirantes, veinte vigilantes de primera, siete de segunda.

⁴⁰⁹ Un inspector de primera, otro de segunda, otro de tercera, un agente, un aspirante, un vigilante de primera, cuatro de segunda.

⁴¹⁰ Las intervenciones fueron “De lesiones leves, 22; Lesiones de pronóstico reservado, 3; desobediencia, 16; riñas, 10; escándalos, 18; malos tratos de obra, 21; de palabra, 20; amenazas, 3; daños, 3; estafas, 6; detenidos por este delito, 6; robos, 5, con ocho detenidos; allanamiento de morada, 1; retención de efectos, 1; prófugos, 2; tenencia de armas sin licencia, 3; reclamados, 8; infracción de órdenes gubernativas, 2; dfe reglamento hospedages, 10; del de carrwajes, 4; faltas a la moral y decencia pública, 4; blasfemas, 7; carteristas, mecheras y rateros detenidos, 21; informes emitidos, 8; indigentes y mendigos recogidos, 8; servicios varios, 15; cartas de socorro expedidas, 16; importe de multas hechas efectivas, 975 pesetas”. *La Voz de Galicia*, 15-04-1925, p. 5.

⁴¹¹ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2005), p. 59.

⁴¹² Tanto en el caso de los empleados de Vigilancia como en los de Seguridad. RICO SÁNCHEZ, A. (2008), p. 272.

⁴¹³ Dentro del cuerpo de Seguridad se había creado en 1930 la Sección de Gimnasi, armada con porras de goma. FERNÁNDEZ BARALLOBRE, J. E. (2010), p. 256.

del periodo contaban con armamento pesado. Su crecimiento fue enorme: en 1936 ya eran 7.000, frente a unos 11.000 efectivos de Seguridad, y en julio de ese año unos 10.000⁴¹⁴.

En Galicia vemos a los guardias de asalto disolver manifestaciones y motines, o simplemente conatos. Al contrario que la Guardia Civil algunas décadas antes, tenían la ventaja de ser un cuerpo dedicado al mantenimiento del orden público, sin distracciones con la criminalidad corriente, disponer de números importantes, y, esto no es baladí, disponer de vehículos propios. Estos factores le proporcionaban proyección y capacidad de disuasión. El 18 de junio de 1935, por ejemplo, se armó un “pequeño revuelo” en las afueras de una fábrica del Camino Nuevo, en las afueras de A Coruña; al poco llegó una sección de Asalto en un autocar de servicio, “despejando sin más incidentes el numeroso grupo”⁴¹⁵.

La motorización, que en nuestra opinión debe entenderse entre las principales mejoras técnicas que aumentaron la efectividad y presencia de las fuerzas policiales en la mitad del siglo XX, también les permitía acudir a reforzar su presencia en ciudades en las que se temiesen incidentes o se hubiesen producido. Por poner algunos ejemplos, en Vigo, tras un atentado y la aparición de bombas, se envió en febrero de 1935 a 120 hombres⁴¹⁶, y al mes siguiente se destinó un cuartel móvil a Lavadores⁴¹⁷. También los vemos desplazarse con rapidez a villas en las que se temían incidentes, como la intervención en Pontedeume en julio de 1936 después de que un guardia municipal matase a un ciudadano⁴¹⁸. Sin embargo, su actuación siguió limitada a las ciudades y su entorno, mientras que el orden público de amplias zonas rurales, incluyendo villas y poblaciones de mediano tamaño continuó siendo dominio exclusivo de la Benemérita.

Hemos escrito que la Guardia de Asalto estaba desligada de la persecución del crimen habitual, pero lo cierto es que sus miembros actuaban puntualmente en situaciones más allá del mantenimiento del orden público. Además de su intervención puntual tras catástrofes, vemos a agentes deteniendo a un hombre por agredir a una mujer⁴¹⁹, o participando en un tiroteo para arrestar a atracadores⁴²⁰.

La Guardia de Asalto aparece más en la prensa en los últimos meses de la República, cuando los disturbios e incidentes provocan traslados por la geografía gallega de las columnas móviles. *La Región* afirmaba en abril de 1935 que la Guardia de Asalto no era necesaria en Ourense⁴²¹, pero se enviaron guardias de asalto a la ciudad casi exactamente un año después, sin protesta por parte de la prensa⁴²². Sin embargo, su actuación no es muy violenta, ni hacía frente a oponentes directamente agresivos. No hay ningún muerto o herido grave en una acción en la que actúe, y, aunque sin duda repartían algunos golpes al disolver manifestaciones, tampoco lesionados por bala.

Como es sabido, fue un cuerpo políticamente afín a la República, frente a la lealtad más dudosa de la Guardia Civil y el cuerpo de Vigilancia, que no se consideraba fiable políticamente. El 70% de los guardias de asalto se mantuvieron fieles a la República, quizás en parte por su despliegue en ciudades⁴²³.

⁴¹⁴ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), pp. 138-145, 154, 158, 169.

⁴¹⁵ *La Voz de Galicia*, 19-06-1935, p. 7.

⁴¹⁶ *El Faro de Vigo*, 26-02-1935, p. 11.

⁴¹⁷ *El Faro de Vigo*, 20-03-1935, p. 3.

⁴¹⁸ *La Voz de Galicia*, 05-07-1936, p. 5.

⁴¹⁹ *El Faro de Vigo*, 06-09-1935, p. 2.

⁴²⁰ *El Faro de Vigo*, 24-12-1935, p. 6.

⁴²¹ *La Región*, 19-04-1935, p. 1.

⁴²² *La Región*, 18-04-1936, p. 2.

⁴²³ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), pp. 89, 145, 157-161, 163.

3.5 Los carabineros

El Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras⁴²⁴, creado por el Real Decreto del 9 de marzo de 1829, es el más antiguo de los cuerpos armados permanentes creados en el periodo liberal para combatir el crimen. En concreto, según el texto aparecido en la *Gaceta de Madrid*, para “hacer la guerra al contrabando, para prevenirlo ó atacarlo vigorosamente en sus puntos de generación, y perseguirlo en todas sus direcciones hasta su exterminio”⁴²⁵; seguramente no por casualidad, su creación coincide con la tendencia centralizadora de la Hacienda de la segunda restauración fernandina⁴²⁶. Como, en contraste con la abundancia de trabajos sobre la Guardia Civil, no existen estudios académicos acerca de este cuerpo⁴²⁷, y por tanto faltan obras a las que remitir al lector que busque contexto, en este apartado describiremos someramente su historia y cometidos a partir de fuentes primarias⁴²⁸.

Los carabineros se constituyeron como “organización enteramente militar”, con una fuerza teórica, según el decreto de su creación, de 8.581 hombres. Así mismo, se contemplaba una fuerza de resguardo interior en todas las provincias, incluidas las del interior (art. 157-160)⁴²⁹, y parece que llegó a constituirse un servicio marítimo con otros 700 hombres⁴³⁰. Suponía, así, una fuerza numéricamente comparable a la Guardia Civil.

Los carabineros contaban con un antecedente directo en el siglo XVIII. El Resguardo de Rentas mantenía rondas a caballo y a pie para perseguir a los contrabandistas, y en cada una de las sus diversas demarcaciones suponían decenas o centenares de hombres armados en patrullas de a pie o a caballo⁴³¹. En 1787 ya había en Galicia 230 empleados del Resguardo de Rentas⁴³², de los que no sabemos cuántos se dedicaban al servicio armado; en esta década se desplegaron también tropas y milicianos de los regimientos provinciales para perseguir a contrabandistas y bandidos⁴³³. La cifra era menor que la de otras regiones costeras o fronterizas⁴³⁴.

⁴²⁴ Por el Real Decreto del 25-11-1834 su nombre se cambió por Carabineros de Real Hacienda; por la Real Orden del 28-05-1838 pasó a ser Cuerpo de Carabineros de Hacienda Pública, y por el Decreto del 11-11-1842 el nombre se cambió por Carabineros del Reino. Nos referiremos a ellos, por simplicidad, como Carabineros.

⁴²⁵ *Gaceta de Madrid*, 31-03-1829, nº 39, p. 153. El resto del decreto en *Gaceta de Madrid*, 02-04-1829, nº 40, p. 157; 04-04-1829, nº 41, p. 161; 07-04-1829, nº 42, p. 165; 09-04-1829, nº 43, p. 169; 14-04-1829, nº 45, p. 177; 16-04-1829, nº 46, pp. 181-182; 23-04-1829, nº 49, p. 193; 25-04-1829, nº 50, p. 197; 28-04-1829, nº 51, p. 201; 30-04-1829, nº 52, p. 205; 02-05-1829, nº 53, p. 209; 05-05-1829, nº 54, p. 213; 07-05-1829, nº 55, p. 217.

⁴²⁶ En 1830 “el 90% de las rentas estaban centralizadas”. LUIS, J.-P. (2014), p. 110.

⁴²⁷ NUÑEZ CALVO, J. C. (2014), p. 117.

⁴²⁸ Como base para repasar la trayectoria del cuerpo y sus transformaciones hemos empleado los Escalafones del Cuerpo de Carabineros, que, además de proporcionar información sobre sus , incluyen un resumen histórico sobre la legislación que afectó al cuerpo y sus diversos despliegues.

⁴²⁹ Del artículo 158 se deduce que serían 250 hombres por provincia, si bien hay una probable errata: “constará este resguardo de 2[seguido de cifra incomprensible] hombres, de los cuales 250 serán cabos ó comandantes de partida”. La labor de este cuerpo se consideraba más fatigosa (se destinaban a él los carabineros que “merecieren ocupación más descansada” y consistía en la persecución del contrabando en el interior, el resguardo en las puertas de las ciudades y la recaudación de rentas.

⁴³⁰ Escalafón del Cuerpo de Carabineros para el año 1855.

⁴³¹ Estos, a la vez, heredaban la función de cuerpos muy anteriores. Los guardas o guardias de sacas se ocupaban de la vigilancia aduanera en el reino de Castilla ya en la Edad Media. En el siglo XVI existían rondas volantes de guardas a pie y a caballo que recorrían la frontera con Portugal y “cuyo mando se disputaban de continuo las autoridades hacendísticas y las militares”. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1998), p. 48.

⁴³² MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), p. 45.

⁴³³ MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), p. 138.

⁴³⁴ En la ciudad de Cádiz y su partido, a finales del XVIII, encontramos a 226 hombres en rondas montadas y a pie, así como a 136 en diferentes embarcaciones, además de decenas de otros empleados en diversas labores

Con la creación del nuevo cuerpo de carabineros, la fuerza armada encargada de combatir el contrabando pasó a ser independiente de la Dirección General de Rentas, y quedaron al mando de una inspección general dividida en 12 comandancias siguiendo la división militar de las provincias. Este sistema, probablemente, estaba pensado para asegurar la independencia de la fuerza armada de las lealtades locales⁴³⁵.

Los carabineros eran una fuerza paramilitar. Iban armados con arma larga y sable⁴³⁶ (art. 110), se organizaban con un esquema castrense y estaban sometidos a disposiciones similares a los militares y sometidos al fuero militar en determinados casos. También podían ser arrestados, encerrados a pan y agua, o destinados al ejército por faltas de disciplina (art. 118 y 120-155). Aunque se permitía un margen de admisión discrecional en circunstancias especiales, los carabineros serían preferentemente voluntarios con cuatro años de experiencia en el ejército, jóvenes letrados, con “buena y honorífica licencia”, certificados de buena conducta y salud y sin antecedentes criminales (art. 15 y 17, además de capacidad para pagarse el equipo, que corría de su cuenta (art. 19). También se contemplaba admitir a los antiguos ronderos de buenas cualidades (art. 16); sin estudios en detalle sobre esta transición entre cuerpos, no sabemos cómo se realizó. El servicio mínimo era de ocho años (art. 18).

El propósito principal era combatir el contrabando, pero debía de ser grande la tentación de emplear a varios miles de hombres uniformados y armados, dispersos por el territorio nacional, en un momento en el que no existían otras fuerzas policiales equivalentes. En 1831, solo dos años después de su creación, los encontramos asignados a “la persecución y exterminio de los revolucionarios”, motivo por el que debían prestarse a la cooperación con “los gefes militares superiores de las provincias, y aun por otras autoridades subalternas ó justicias de los pueblos”⁴³⁷. En octubre de 1833 se movilizaron más de 4.000 hombres de este cuerpo para prestar servicio de campaña⁴³⁸, situación que se repetiría en guerras sucesivas. Durante la insurrección de Porlier, encontramos carabineros tanto en las fuerzas que se incorporaron a su ejército en Lugo, pero también a 60 entre las fuerzas lealistas que sometieron a esta ciudad, y a otra partida persiguiendo a una partida de rebeldes en Ourense⁴³⁹. Entre 1872 y 1875 el cuerpo perdió 14 jefes y oficiales “en operaciones de guerra durante las últimas campañas carlistas y republicanas”⁴⁴⁰, y grupos del cuerpo servirían posteriormente en las guerras coloniales finiseculares y, ya en el siglo XX, en África.

Se emplearon, también, para ejercer funciones de policía judicial y realizar detenciones relacionadas con delitos totalmente diferentes al fraude fiscal. Por ejemplo, en 1854 el alcalde del municipio

como oficiales, escribanos, artilleros o visitadores. Un plan para el Resguardo de Navarra contemplaba 300 hombres en más de medio centenar de partidas, y en la provincia de Córdoba la suma de oficiales, visitadores y guardas de diversas categorías sumaban 443 hombres. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), pp. 67-68, 101, 107. En la reestructuración del Resguardo de Extremadura se contemplan 478 hombres en el cuerpo de vigilancia (contando jefes y empleados que probablemente no podemos considerar fuerzas policiales, como los escribanos). MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1999), p. 149.

⁴³⁵ Posiblemente este fuera uno de los problemas de las antiguas rondas. Repasando la información acerca de ellas, encontramos propuestas de traer foráneos a patrullar: castellanos para Navarra, o migueletes para la costa andaluza. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), pp. 94, 108. Puntualmente se privatizó el servicio de carabineros en las Islas Baleares, pero por lo que sabemos se trató de un hecho puntual. LUIS, J.-L. (2014), p. 116.

⁴³⁶ Carabina, pistola, y espada o sable dependiendo de si el carabinero prestaba servicio en caballería o en infantería.

⁴³⁷ Real Orden del 11-09-1831, *Gaceta de Madrid*, 04/10/1831, nº 122, p. 535.

⁴³⁸ *Escalafón del Cuerpo de Carabineros del Reino de 1855*.

⁴³⁹ *Gaceta de Madrid*, 02-05-1846, nº 4248.

⁴⁴⁰ *Escalafón de Carabineros...* (1878), p. 75.

coruñés de Boiro ordenó el registro de la casa de la costurera Josefa Santa María, acusada de robar una porción de carne de cerdo. La inspección la realizaron los carabineros, acompañados por el celador del lugar y algunos paisanos⁴⁴¹.

Al igual que en el caso de la Guardia Civil, hemos realizado una estadística de su presencia en Galicia a partir de los datos del Escalafón del cuerpo, intentando obtener al menos una muestra por década. No ha sido posible obtener datos para todas ellas. Así, no hemos encontrado cifras para la década de 1870, pues los anuarios no indican el número de tropas entre los años 60 de ese siglo y 1883, y no se publicaron números, o al menos no hemos podido encontrarlos, entre 1912 y 1930. Las estadísticas se han elaborado en base a las dotaciones de suboficiales y tropa⁴⁴², sin contar a jefes y oficiales o al personal de apoyo (en este caso, las matronas y los armeros). Al referirnos al total de España, hablamos de la Península e islas adyacentes; debemos tener en cuenta que, al igual que ocurrió con la Guardia Civil, en ciertos periodos se desplegó a una minoría del cuerpo en las posesiones coloniales.

Tabla 3.5.1 Número de oficiales y tropa en las diferentes provincias gallegas, en el conjunto de la región y en todo el Estado

	1829	1838	1853	1860	1883	1890	1901	1912	1930	1935
A Coruña	?	332	266	320	358	322	322	316	288	284
Lugo	?	152	169	205	195	178	146	151	152	148
Ourense	?	190	277	322	316	295	280	274	300	325
Pontevedra	?	275	292	352	380	368	351	345	358	373
Total Galicia	902	949	1.004	1.199	1.249	1.163	1.099	1.086	1.098	1.130
Total España	8.260	10.634	9.766	12.570	14.512	14.156	14.171	14.325	15.337	15.323

Fuente: Elaboración propia a partir de los *Escalafones de Carabineros*

Al contrario que en el caso de la Guardia Civil, en el que vemos una progresión ascendente de la dotación para Galicia, el cuerpo de carabineros de la región aumenta desde los poco más de 900 carabineros y suboficiales en el momento de su creación hasta los 1.249 en 1883, y luego disminuye. La corriente ascendente se ve interrumpida en la muestra de 1853 debido, probablemente, a la creación del cuerpo civil de Aduaneros por la Real Orden de 28 de enero de 1852, puesto a este cuerpo se trasladaron 2.000 efectivos en toda España (al poco desaparecería)⁴⁴³. Hay que resaltar que en 1900 hay 1.099 carabineros en territorio gallego, esto es, 262 hombres más que los 837 guardias civiles que prestaban servicio en la región en 1901.

Entre 1901 y 1930 la cifra se sitúa algo por debajo de los 1.100 hombres, y la cifra de guardias en 1921 ya supera a la de carabineros en 1930. Vemos un pequeño repunte de la plantilla gallega en 1935, si bien posiblemente el número de hombres era algo menor a la altura de la Guerra Civil. Al contrario que la Guardia Civil y, más específicamente, la Guardia de Asalto, los carabineros no

⁴⁴¹ Causas, 1296, 3.

⁴⁴² Durante la mayor parte del periodo comprende tropa (carabineros de primera y de segunda mientras estuvo vigente esta clasificación y cabos) y sargentos. En los últimos años se añaden a los suboficiales

⁴⁴³ Por decreto del 31 de enero de 1854 se refundieron en el cuerpo de carabineros los aduaneros, el resguardo especial de sales y las rondas volantes de Cataluña, con lo que la plantilla ganó 3.600 hombres. El Resguardo de Sales volvería a crearse por decreto del 13 de febrero de 1855; salieron otros 1.557 hombres. *Escalafón de Carabineros...* (1935), pp. 7-8.

ampliaron su plantilla significativamente durante la Segunda República, y por el contrario se redujo en 1935 se eliminaron 785 plazas del cuerpo, que había llegado a tener 16.154⁴⁴⁴. En el conjunto de España, como vemos, la dotación en la Segunda República era muy semejante a la de 1883, medio siglo antes.

A la hora de analizar la distribución de los carabineros por las diferentes provincias, observar la relación entre el territorio y el número de efectivos no tiene demasiado sentido⁴⁴⁵, y la proporción de hombres por población tampoco resulta del todo satisfactoria. Independientemente de su población, las provincias del interior no tenían costas y fronteras que vigilar. Aún así, recurriremos al número de guardias per cápita como herramienta de análisis a partir de 1857, cuando tenemos información censal:

Tabla 3.5.2 Número de carabineros por 100.000 habitantes en las diferentes provincias gallegas, en el total de la región y en España

Año	1860	1883	1890	1901	1912	1930	1935
A Coruña	57,42	58,99	52,01	49,1	46,26	37,52	34,41
Lugo	47,4	46,03	40,43	31,27	31,6	32,44	30,16
Ourense	87,23	79,27	72,94	69,13	66,55	70,42	73,5
Pontevedra	79,95	85,05	82,76	76,14	68,59	63,03	61,66
Galicia	66,64	66,58	60,94	55,26	52,32	49,23	47,82
España	80,28	84,43	79,91	75,61	70,82	65,09	61,98

Fuente: Elaboración propia a partir de los *Escalafones de Carabineros*

Tabla 3.5.3 Porcentaje de carabineros en las diferentes provincias gallegas y en el conjunto de la región en relación a la que les correspondería por población, comparado con el conjunto de España

Año	1860	1883	1890	1901	1912	1930	1935
A Coruña	71,52	69,87	65,09	64,94	65,32	57,64	55,52
Lugo	59,04	54,52	50,59	41,36	44,62	49,84	48,66
Ourense	108,66	93,89	91,28	91,43	93,97	108,19	118,59
Pontevedra	99,59	100,73	103,57	100,7	96,85	96,84	99,48
Galicia	83,01	78,86	76,26	73,09	73,88	75,63	77,15

Fuente: Elaboración propia a partir de los *Escalafones de Carabineros*

En relación al conjunto de España, Galicia se encuentra algo por encima del 75% de los carabineros que le corresponderían por población, oscilando entre el 83% de 1860 y el 73,2% de 1901. Las diferencias por provincias son importantes y se van agrandando, a lo largo del periodo de estudio, con la caída de la representación de carabineros en términos relativos en las provincias septentrionales. A Coruña, que empieza en torno al 70% de la dotación que le correspondería, acaba

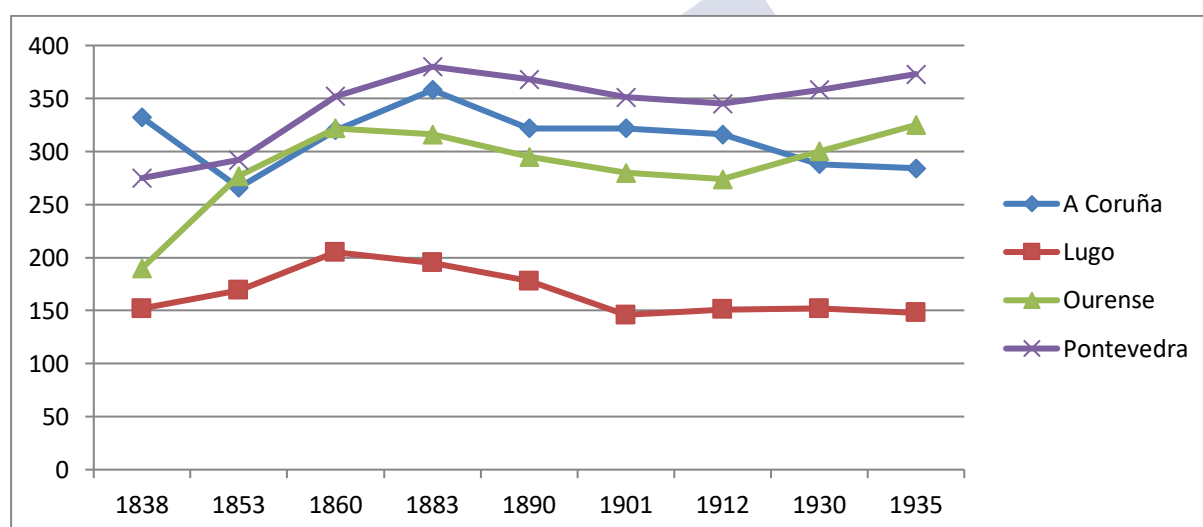
⁴⁴⁴ El 18 de julio contaba con 15.321 plazas. NUÑEZ CALVO, J. N. (2014), pp. 97, 120.

⁴⁴⁵ Un indicador geográfico como la longitud de la costa o la frontera externa de la provincia quizás sería algo más conveniente, pero tampoco es demasiado efectivo, pues no tendría en cuenta el número e importancia de los puertos, el valor de los intercambios comerciales, el nivel de monetarización de la economía en la provincia, etcétera.

descendiendo al 55,6% en 1935, y Lugo pasa del 59% en 1860 al 48,8 en 1935, si bien el punto más bajo es en 1901.

La representación de Pontevedra es casi perfecta en relación a su población, unos puntos o décimas más abajo o más arriba de la que le correspondería demográficamente. Las amplias zonas de costa, las numerosas villas con puerto, la riqueza relativa de la provincia y la frontera con Portugal explican la presencia sostenida de un contingente relativamente numeroso. En Ourense las oscilaciones son más bruscas, pero está relativamente bien representado: entre el mínimo del 91,4% en 1883 y el máximo del 118,8% en 1935. Una vez más, la explicación es la frontera con Portugal, en la que el contrabando, como veremos en la sección correspondiente, fue un problema endémico para la Hacienda española desde el Antiguo Régimen, y que incorporaba hasta 1968 la anomalía del Couto Mixto, exento de tasas aduaneras y en el que ningún vecino del lugar podía ser arrestado por contrabando a menos de una legua de sus fronteras⁴⁴⁶. En el apartado 12.1 veremos más en detalle este delito.

Gráfico 3.5.1. Número de suboficiales y tropa de carabineros en las diferentes provincias gallegas en los años indicados



Fuente: Elaboración propia a partir de los *Escalafones de Carabineros...*

Observando la dotación real, vemos que entre 1829 y 1860 hay una tendencia generalizada de ascenso, y que después el número de hombres cae entre 1860 y 1901: las cifras bajan en todas las provincias, si bien, como cayeron en toda España, Pontevedra aumentó la presencia en relación a su población y la plantilla estatal. Pontevedra es, en efecto, la provincia que tiene más efectivos en todos los años, salvando el primer despliegue de 1829.

El segundo puesto lo ocupan A Coruña u Ourense, dependiendo del año; como A Coruña tiene una población más grande y con un mayor crecimiento encontramos la sub representación en términos relativos que mencionábamos antes. Lugo es siempre la provincia con menos tropa, incluso en su pico de 1853. Los números sufrieron un descenso importante en los descenso de personal de la segunda mitad del XIX y a partir de ahí permanecen estancados. La falta de contacto con Portugal y

⁴⁴⁶ Contaba también con un camino privilegiado que enlazaba con Portugal y en el que no podían actuar carabineros y guardiñas. Sobre su papel como zona de contrabandistas y asilo legal de delincuentes, GARCÍA MAÑA, L. M. (1988), pp. 97, 102-104.

una costa con relativamente pocos intercambios comerciales con el exterior explican, a nuestro juicio, la carencia de efectivos.

En cuanto al tipo de servicio, las tres provincias gallegas con acceso al océano contaron, a lo largo del periodo estudiado, con pequeños números de carabineros de mar, además de las fuerzas sustancialmente más numerosas de infantería. En los anuarios consultados no encontramos fuerzas de caballería destinadas a ninguna de las provincias gallegas hasta 1930, cuando hallamos pequeños números en Ourense y Pontevedra⁴⁴⁷. Sin embargo, como veremos en el apartado 12.1, algunas causas muestran que había secciones montadas en la frontera portuguesa en las décadas de 1840 y 1850.

El instituto siempre conservó una organización militar. En el periodo 1834-1843 fue puramente dependiente de Hacienda, pero a partir de entonces funcionó en un régimen mixto entre esa cartera y la de Guerra⁴⁴⁸. En 1932, tras la Sanjurjada, vuelve a situarse únicamente bajo el mando de Hacienda⁴⁴⁹, si bien esto no implica que pasasen a dedicarse exclusivamente a la lucha contra el fraude. Aunque esta seguía siendo su misión principal, el decreto del 16 de septiembre de 1935 les atribuía funciones de defensa del orden público muy similares a las de la Guardia Civil⁴⁵⁰, y aún antes las desempeñaban⁴⁵¹.

Sale fuera de nuestro ámbito de estudio, pero escribamos un pequeño epílogo de los carabineros que quizás ayude a entender por qué este cuerpo no está más presente en la bibliografía. Por motivos que no han sido estudiados en detalle, los carabineros permanecieron mayoritariamente fieles a la República. En la Guerra Civil se convirtieron, según Gabriel Jackson, en “el grupo militar [sic] al que mayor aprecio tuvo Negrín durante la guerra”; como ministro de Hacienda los empleó en operaciones de orden interno⁴⁵², y, al llegar a la presidencia del Gobierno, amplió sus efectivos⁴⁵³, además de confiarles su propia seguridad. El cuerpo también se desempeñó de manera destacada en el frente, si bien probablemente muchos de esos integrantes serían militantes izquierdistas de nueva hornada y no carabineros de oficio. Con la victoria del bando franquista, los carabineros desaparecieron, integrados en la Guardia Civil por la ley del 15 de marzo de 1940.

⁴⁴⁷ En concreto, quince hombres en Ourense y una decena en Pontevedra. No eran números especialmente bajos (a estas alturas, la provincia con más jinetes, Badajoz, tenía 50 hombres montados, pero ninguna otra comandancia rebasa los 25). Tampoco es inusitado que las comandancias no tuvieran tropas de caballería a lo largo del periodo. *Escalafón de Carabineros...* (1930).

⁴⁴⁸ En el momento de su creación era militar, y en 1830 sus miembros quedan exentos del servicio de quintas. Por el decreto del 25 de noviembre de 1834 pasaron a ser considerados empleados de Hacienda, si bien conservando la organización militar (división en compañías y secciones, nomenclatura de los mandos). Por el decreto del 11 de noviembre de 1843 viene a constituirse de nuevo en militar, si bien continuó dependiendo de Hacienda. El 15 de mayo de 1848 un nuevo decreto establece un carácter mixto: en cuanto a organización, accesos, recompensas, retiros, etc, tenía carácter militar; pero dependía de Hacienda para el cobro de los salarios y en lo tocante al servicio de lucha contra el fraude. *Escalafón de Carabineros...* (1935), pp. 5-18.

⁴⁴⁹ La primera de ellas ocurrió en agosto de 1932, pocos días después de la intentona golpista del teniente general Sanjurjo. Este era el director general de Carabineros, y, pese a que los miembros de su Instituto no participaron el golpe, este órgano director fue sustituido por dos inspecciones de los ministerios de Guerra y Hacienda. Un nuevo decreto en noviembre de ese año colocó al cuerpo exclusivamente bajo el mando de la segunda de estas carteras. NUÑEZ CALVO, J. N. (2014), p. 118.

⁴⁵⁰ NUÑEZ CALVO, J. N. (2014), p. 119.

⁴⁵¹ En octubre de 1934 fue el teniente de carabineros de Cangas, ejerciendo de comandante militar, el que clausuró las sociedades obreras de la villa. SANTOS CASTROVIEJO, I., NORES SOLIÑO, A. (2005), p. 622.

⁴⁵² Por ejemplo, en la primavera de 1937 Negrín envió camiones de carabineros desde Valencia para ocupar los puestos de la frontera franco-española que habían quedado bajo el control de comités revolucionarios. JACKSON, G. (2008), p. 89, 97. Cita a BOLLOTEN, Burnett (2005): *La guerra civil española, revolución y contrarrevolución*, Madrid, Alianza, pp. 654-655.

⁴⁵³ De acuerdo con Jackson, en 1937 pasaron de 40.000 a 60.000 hombres. JACKSON, G. (2008), p. 104.

3.6 Los cuerpos de guardería rural

Durante sus primeras décadas de existencia, la Guardia Civil competía a nivel español con una miríada de agrupaciones policiales locales que operaban en el ámbito rural, tanto públicas como privadas. El Estado español no llegó a constituir un cuerpo de guardería estable a nivel nacional, pese a la multiplicidad de proyectos y reclamaciones⁴⁵⁴. A cambio, creó el marco legislativo para la aparición de una miríada de instituciones locales.

La Real Orden del 8-11-1849, por la que se publica el *Reglamento para los guardas municipales y particulares de campo de todos los pueblos de España*, expresa cómo concebía el Estado central las fuerzas de vigilancia particulares del entorno rural. La base de la Real Orden son las disposiciones encaminadas a la creación de guardas municipales del campo, que estuvieron en vigor durante todo nuestro periodo de estudio así como durante el franquismo⁴⁵⁵. Los guardas municipales encargados de patrullar el campo, además de las habituales recomendaciones sobre buena conducta, constitución robusta y alfabetismo, no debían “tener propiedad rural ni ser colono ni ganadero”. Serían un cuerpo armado con carabina (sable, si hacían el servicio a caballo), a las órdenes inmediatas del alcalde. Perseguirían todos los delitos y faltas, pero también todo acto en el que “aunque no se hubiere causado daño a la propiedad rural, se hubiera atentado contra los derechos del propietario, bien sea invadiéndola, bien tomando o disponiendo de alguna cosa, cualquiera que sea ella, comprendida en las heredades ajenas”. Debían recuperar caballerías perdidas, avisar de la enfermedad de los ganados, prevenir incendios, advertir de la proximidad de la langosta y señalar sus puntos de cría. Su palabra daba fe de las faltas, que no de los delitos, y estaban obligados a proteger “a los que en su persona o en su propiedad fueren atacados o se vieren expuestos a serlo”.

En paralelo a estas fuerzas municipales, el reglamento contempla la figura del guardia particular del campo en sus artículos 29 a 31: “los propietarios rurales pueden, siempre que lo crean conveniente, nombrar guardias para la protección de sus propiedades y de sus cosechas y frutos, imponerles las obligaciones que estimen oportunas, y asociarse unos con otros para este objeto (...) sin que para nada de esto tengan necesidad de recurrir a ninguna Autoridad, ni obtener de ella la aprobación de sus convenios”. Estos guardias podían estar armados, previa licencia del alcalde y bajo la responsabilidad de los empleadores. Reuniendo algunas condiciones adicionales, estas fuerzas pagadas por particulares pasaban a ser guardas particulares jurados y gozar de las mismas consideraciones y distintivos que la fuerza pública, convirtiéndose, en la práctica, en guardias municipales pagados por particulares⁴⁵⁶.

En el periodo isabelino, por tanto, se propuso una configuración tripartita de las fuerzas rurales, que no debemos entender como una disposición centralista para guardar el campo que se trasladó a los ayuntamientos sino a un intento de uniformar y oficializar las diversas fuerzas que las entidades locales y los particulares estaban constituyendo para defender la propiedad. Por un lado estarían las fuerzas municipales, encargadas no solo de perseguir el crimen sino de prevenir accidentes y plagas perniciosas para la agricultura, y con respaldo legal para perseguir de manera inquisitorial los pequeños atentados contra la propiedad. Siguiendo el reglamento, si un guardia veía a alguien cometer una falta, por ejemplo espigar en un campo ajeno, el acusado sería castigado sin más prueba que su declaración.

⁴⁵⁴ A lo largo de este apartado citaremos varias de ellas como fuente. También puede consultarse COSTA MARTÍNEZ, T. (1912), pp. 23-33, 145-190.

⁴⁵⁵ Las disposiciones se seguían considerando en vigor, de hecho, en 1986. LÓPEZ-NIETO Y MALLO, Francisco (1986), pp. 77-78, 97-99.

⁴⁵⁶ Real Orden del 8-11-1849, Gaceta de Madrid 10-11-1849, nº 5581, pp. 1-2.

Por otra parte, los propietarios locales podían establecer sus propias guardias sin permiso previo ni intervención administrativa, y armarlas de manera muy sencillo. En tercer lugar, y previendo la debilidad de las haciendas municipales, el reglamento permitía a los notables del campo español pagar guardias con todas las consideraciones de la fuerza pública. En cualquiera de sus tres encarnaciones, el control y organización de estos cuerpos pasaba por las élites económicas y políticas locales. Los hombres encargados de integrar estos cuerpos, en la práctica e incluso en la legislación, no serían agricultores o rentistas, sino desposeídos profesionalizados a los que el reglamento permitía exigir una disciplina rígida: era una falta al servicio, por ejemplo, dedicarse a juegos de azar.

Como suele ocurrir, la realidad fue algo más compleja que este modelo tripartito, pues se crearon otros cuerpos de guardería rural, como los guardias de montes, las administraciones provinciales dispusieron puntualmente de sus propios cuerpos, y en algunas zonas de España pervivieron cuerpos como los Migueletes, los Miñones o (hasta 1868), los Mossos de Escuadra. Pero los diferentes grupos de guardias rurales se constituyeron en una de las modalidades de persecución del delito más importantes de la España de la segunda mitad del siglo XIX.

Un informe sobre las fuerzas armadas civiles en España, elaborado por el Gefe [sic] de Orden Público del Ministerio de la Gobernación, muestra la predominancia de las guardias rurales a nivel español en el año 1872: 18.850 efectivos. A estos se suman otros 1.866 guardias de monte (financiados sobre todo por el Estado central). Son más que los guardias municipales, 2.409, la policía de Seguridad y Vigilancia, 1.471 hombres, los serenos públicos y privados, 2.502⁴⁵⁷, y, si bien estas están calculadas a la baja, que las escuálidas guardias forales, 187 migueletes y 81 miñones⁴⁵⁸. Y superan en número a los guardias civiles: la tropa del Instituto Armado sumaba ese año 11.093 hombres de infantería y 1.543 de caballería⁴⁵⁹.

Esta fuerza era eminentemente local, y más de la mitad de su sueldo provenía de las aportaciones privadas. El coste de los guardias rurales se calcula en 23,6 millones de reales, de los que 12,95 millones los abonaban particulares y 10,7 los ayuntamientos. Las diputaciones solo aportaban 451.180 reales a esta fuerza, y el Estado, 5.000. En una propuesta de reorganización patrocinada por la Diputación de Valencia en 1864 se afirma que vivían más bien de las multas⁴⁶⁰.

Es cierto que, hubo una tendencia sostenida a hacer desaparecer estos cuerpos e integrar sus funciones en la Guardia Civil o en un nuevo cuerpo estatal, con proyectos y medidas legislativas en 1864, 1866, 1868⁴⁶¹ y, sobre todo, 1876, cuando se encomendó la guardería rural y forestal a la Guardia Civil y se eliminaron, en teoría, los cuerpos costeados por el Estado, las provincias y los pueblos que venían dedicándose a ello, si bien permanecieron las guardias municipales⁴⁶². Pero en

⁴⁵⁷ Remisión por el Ministerio de la Gobernación de datos relativos a la Guardia Rural, 10-04-1872.

⁴⁵⁸ El documento incluye, aunque no son fuerzas propiamente policiales, 1.510 hombres dedicados al resguardo de sales, 2.635 guardias de puertas y consumos, 3.477 peones camineros, 917 celadores de telégrafos y 51 "guardas de agua".

⁴⁵⁹ Escalafón de la Guardia Civil de 1872.

⁴⁶⁰ LASSALA Y PALOMARES, V. (1864).

⁴⁶¹ Hubo un efímero intento, en este año, de crear una Guardia Rural dependiente de los Gobernadores Civiles y del director general de la Guardia Civil en cuestiones de organización y disciplina. Fue disuelta por un edicto del general Prim, que integraba a efectivos y jefes en la Guardia Civil. SERRANO JIMÉNEZ, LL. (2016), pp. 241-246. LÓPEZ CORRAL, M. (1994-A), p. 54.

⁴⁶² Sobre los cambios legales de ese año, veanse la ley del 7 de julio de 1876 y las reales órdenes del 9 de agosto y 26 de septiembre. En la práctica, muchos ayuntamientos mantuvieron cuerpos de guardias municipales sin ser estorbados, y esta facultad se reconoció en disposiciones posteriores. *Manual de la Guardia Rural*, pp. 8-10.

cuanto a la sustitución de unos por otros, en palabras de López Garrido, “el proceso será lento”⁴⁶³. No por dejación de funciones, sino porque el número de guardias no era suficiente para cuidar la propiedad del medio rural y sus prioridades eran el mantenimiento del orden público y el control de los caminos y vías de comunicación⁴⁶⁴. A esto se sumaba la dispersión y alejamiento de las viviendas de la propiedad rural, características que la hacían, según reconocían los propios guardias, difícil de proteger⁴⁶⁵.

Así, cuando el diputado por Albacete Carlos María Perier proponía en 1863 que el servicio de guardería en el campo quedase a cargo de la Guardia Civil, señalaba que sería necesario un aumento de efectivos para desempeñar la tarea⁴⁶⁶; a su juicio, en estos años el instituto armado había dado seguridad a los caminos, pero no a la propiedad rural, “que no está bien guardada”⁴⁶⁷. En 1906 la situación, según el Marqués de la Fuensanta de Palma, vicepresidente de la Sociedad de Agricultores de España, seguía en parecidos términos: la Guardia Civil “por su escasez y por la multiplicidad de los servicios a que se destina y por sus frecuentes reconcentraciones”⁴⁶⁸, resultan los campos menos vigilados de lo que fuera de desear⁴⁶⁹. Tomás Costa resumía en 1912 los dos principales problemas a la protección del campo por la Guardia Civil: “las permanentes concentraciones, que, cual ahora ocurre, habían de dejar forzosamente abandonado el campo a los malhechores”, y la resistencia de la Hacienda, pues la Guardia Civil “es demasiado cara”⁴⁷⁰.

Además, la progresiva ampliación de funciones de la Benemérita no fue universalmente aplaudida. En Málaga, a inicios de la década de 1880, los pueblos consultados por la Diputación votaron mayoritariamente que preferían sustituir a los guardias civiles encargados de la policía rural “por los antiguos guardias municipales”⁴⁷¹. Todavía en la década de 1910, Costa identificaba múltiples formas de guardería rural en las Castillas, Extremadura, Andalucía y la actual Cantabria⁴⁷².

⁴⁶³ LÓPEZ GARRIDO, D. (2004), p. 141.

⁴⁶⁴ El problema limitante era la financiación: así, en la ley de presupuestos de 1892-1893 se estableció que las provincias que reclamasen más fuerzas de guardias civiles “para desempeñar el servicio de seguridad y policía rural y forestal”, debían procurarse recargos impositivos para pagarla, de acuerdo con el artículo 23. La provincia de Málaga hubo de pagar ese recargo en el año impositivo 1894-1895 las matrículas de Industria y de Comercio y los departamentos de contribución urbana, rústica y pecuaria, lo que motivó una reclamación de la industria vinícola de la capital. *Reclamación administrativa deducida en primera instancia...* (1894), pp. 5-6.

⁴⁶⁵ RUBIO, L. (1910), p. 162.

⁴⁶⁶ Y, reconociendo implícitamente las dificultades para pagar el gasto, proponía financiarlo a cargo “del presupuesto general del Estado, de los de las provincias y de los municipios, en proporción a su respectiva riqueza rural imponible”. PERIER, C. M. (1864), pp. 3-4.

⁴⁶⁷ PERIER, C. M. (1864), pp. 6-7.

⁴⁶⁸ Esta es una afirmación también realizada por Martínez Ruiz tratando la cuestión de los primeros tiempos de la Guardia Civil, según la cual las concentraciones de guardias provocaban que se disparase la delincuencia en el campo por la desprotección. Sin embargo, no conocemos ningún estudio que lo haya probado en un estudio de caso. MARTÍNEZ RUIZ, E. (1994), p. 33.

⁴⁶⁹ FUENSANTA DE PALMA (1906), p. 7.

⁴⁷⁰ COSTA MARTÍNEZ, T. (1912), pp. 17, 19-21.

⁴⁷¹ Este era también el parecer de la comisión de la Diputación encargada de estudiar el asunto. *Reclamación administrativa deducida en primera instancia...* (1894), p. 21.

⁴⁷² Encontramos pueblos en los que los propietarios arrendaban anualmente un servicio de vigilancia para sus pueblos, a guardias jurados permanentes a cargo de una comunidad de labradores, pasando por celadores de riego pagados por comunidades de regantes o vigilantes de olivares o vigilantes a cargo de los fondos municipales. En algún punto de Burgos y Cantabria se hacían guardias por prestaciones vecinales, si bien en el segundo caso estaba en decadencia; en León encontraron guardias que cobraban una combinación de prestaciones en especie y bonificaciones por multas. COSTA MARTÍNEZ, T. (1912), pp. 35-92. Sobre las vigilancias vecinales en Burgos, SERRANO GÓMEZ, J. (1902), pp. 380-384.

No disponemos de datos que nos permitan cuantificar la implantación de los cuerpos de guardería rural en Galicia, pero consideramos que su implantación fue pequeña, en tanto que no aparecen más que marginalmente en las fuentes judiciales y hemerográficas, y en la bibliografía referida a la vida municipal gallega. A la altura de 1916 encontramos un pequeño número de ordenanzas municipales gallegas que regulaban la existencia de cuerpos de guardería rural, siguiendo la obra del jurista Luis Redonet. Sabemos que existía uno en Pontedeume, organizado por un cabildo de labradores que elegía cada primero de enero un presidente y dos vocales para ejercer las funciones ejecutivas. El cabildo redactaba el reglamento de los guardas de campo y mantenía el control de sus actividades: “las denuncias, con el visto bueno del Presidente del Cabildo, se presentan por los guardas ante el Alcalde, que entiende en el asunto [suponemos que si tiene relación con la infracción de ordenanzas municipales] o le envía a los Tribunales, según sea o no gubernativo”. Los labradores no asociados tenían derecho a nombrar guardas particulares. Un sistema parecido regía en Betanzos⁴⁷³.

En Ourense la vigilancia parece ligada al cultivo vinícola: las ordenanzas de Ribadavia establecen que el municipio nombraría guardas para su custodia, y las de Melón que el ayuntamiento designaría vigilantes temporeros para custodiar las uvas “cuando sus fondos se lo permitan”. Vilar de Santos establece un servicio de guardería en el que los guardas percibían un tercio de las multas, y hay disposiciones que quizás no llegaron a cumplirse en Carballada de Avia y Calvos de Randín⁴⁷⁴.

En Pastoriza (Lugo) se dispone que los alcaldes de barrio nombrarían celadores “que vigilen el buen comportamiento de lo mandado en Policía rural”, pero no parecen ser profesionales contratados, y su servicio parece auxiliar al cumplimiento de las disposiciones municipales y no a combatir robos y hurtos⁴⁷⁵. En toda la provincia de Pontevedra, abundante en normas municipales sobre prácticas agrícolas, no se mencionan disposiciones de policía. Esta escasez en la obra de Redonet no quita que existiesen cuerpos municipales o privados que no tuviesen reflejo en las ordenanzas, pero la falta de disposiciones resalta, por ejemplo, si la contrastamos con la abundancia de la provincia de León, en el mismo volumen.

Es posible, aunque mera hipótesis, que en algún caso el puesto no fuese remunerado y sí un modo en el que los comuneros designaban a un miembro de la parroquia como autoridad para poder agilizar o respaldar legalmente el castigo a los intrusos, dando fuerza de autoridad en las denuncias. También consideramos probable que buena parte de la vigilancia efectiva la ejerciesen los propios vecinos, y los guardas rurales serían una parte del control ejercido por parte de las comunidades de pequeños agricultores y autoridades locales hacia las conductas que ponían en peligro la propiedad rural. Por ejemplo, cuando en 1862 un guardia rural ourensano dio parte de una pordiosera a la que se acusaba de comer cinco racimos de uvas, el aviso inicial provino de una mujer que no se nombra en la causa⁴⁷⁶; el guardia la denunció ante el pedáneo, y este, a su vez, ante el alcalde.

En cuanto a los guardas particulares, no tenemos cifras globales. En los archivos del ayuntamiento de Pontevedra se conservan 19 expedientes de guardas jurados conferidos por el municipio entre 1901 y 1929, si bien es cierto que pueden haber desaparecido otros documentos. Por otra parte,

⁴⁷³ REDONET Y LÓPEZ-DORIGA, L. (1916), pp. 29-30.

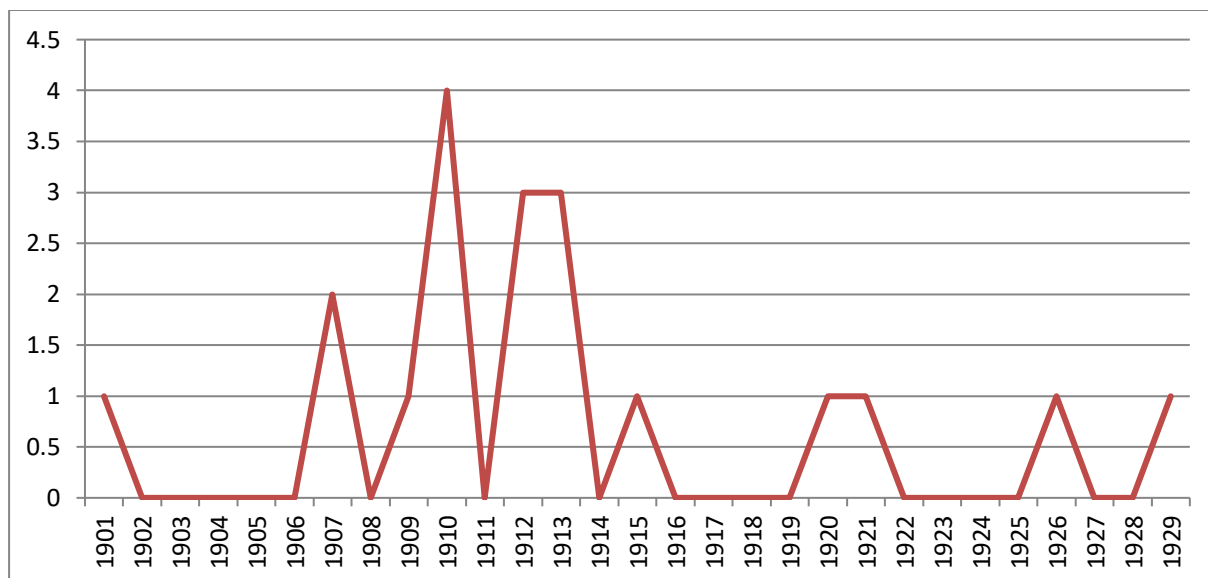
⁴⁷⁴ En el primero de los ayuntamientos, las ordenanzas de 1881 establecen que “en cuanto se aprobase en las Cortes el proyecto de Guardería rural se pondría en uso en el término”, pero a las alturas de 1916 seguían esperando. En Calvos de Randín, ante la ausencia del proyecto, se establece en 1906 que se crearían guardas jurados “porque urgía remediar el poco respeto que hay a la propiedad, los muchos daños que se causan no sólo a la forestal sino a la agraria, y la tendencia absorbente que se notaba a allanarlo todo”. REDONET Y LÓPEZ-DORIGA, L. (1916), pp. 94-95.

⁴⁷⁵ REDONET Y LÓPEZ-DORIGA, L. (1916), p. 75.

⁴⁷⁶ Causa 1774, 11, Archivo del Reino de Galicia.

resulta razonable pensar que en Pontevedra el número de guardas sería más alto que en otros municipios más rurales. No son muchos, y parecen concentrarse entre 1907 y 1915.

Gráfico 3.6.1. Expedientes de guardas jurados en Pontevedra para 1901-1929 según el año en que fueron promovidos



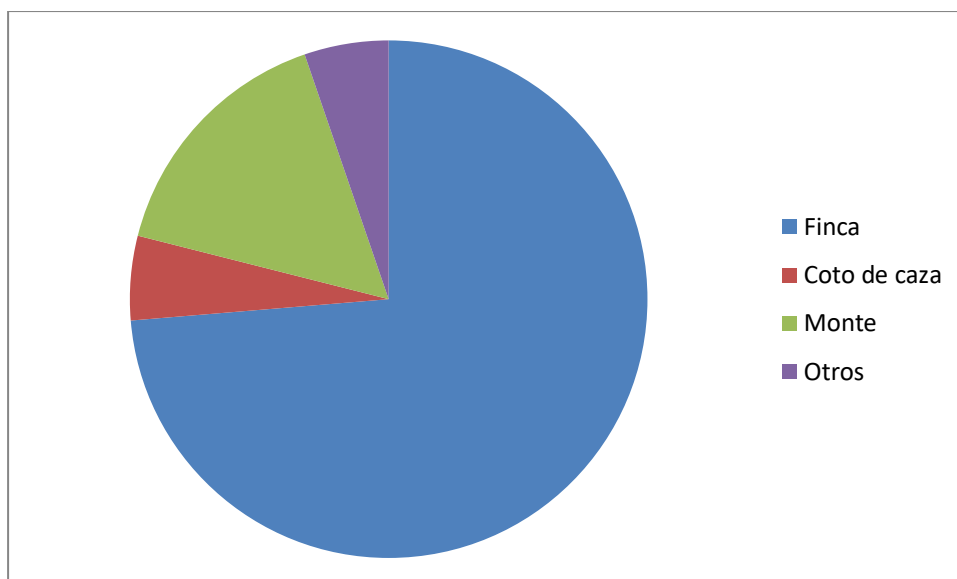
Fuente: Expedientes de guardas jurados de Pontevedra

El proceso de convertirse en guardia jurado era relativamente sencillo. Un interesado o grupo de interesados elevaba un escrito al alcalde en el que figuraba la propiedad que deseaban guardar y una propuesta de vigilante. El regidor, a su vez, pedía un certificado de idoneidad al comandante del puesto de la Guardia Civil de donde el propuesto fuese vecino, y, todos los casos consultados menos uno, un informe de buena conducta al párroco del lugar. En un caso se pidió también un certificado de antecedentes al juzgado de instrucción correspondiente, y en otros tres, al concejal del distrito municipal en el que residía el vigilante y al alguacil o agente municipal asignado a este. No solía haber problemas⁴⁷⁷, y el guarda pasaba a prestar juramento ante el regidor; en algún caso, todo el proceso se resuelve en ocho días. Entendemos que su propósito era principal era defender la propiedad, aunque a veces interviniesen en delitos de otros tipos⁴⁷⁸.

Gráfico 3.6.2 Expedientes de guardas jurados en Pontevedra para 1901-1929 según el tipo de propiedad a proteger

⁴⁷⁷ Solo hay un caso en el que no se aceptó al guarda propuesto automáticamente. La sociedad de propietarios de fincas rústicas de Salcedo presentó a un hombre que renunció ante el alcalde alegando que no sabía leer ni escribir y que, además, no sabía la remuneración que recibiría. El segundo propuesto motivó un informe negativo de la Guardia Civil, que consideró que tenía la mano izquierda con un grado de parálisis que le estorbaría a la hora de emplear armas. Sin embargo, el aspirante a guarda presentó un informe médico favorable y la comandancia cambió su informe. 6036/45, Archivo municipal de Pontevedra. Según señala Nuño Negro, habitualmente la obtención de credenciales para guardas jurados era un “mero trámite”, pero podía haber problemas y suscitarse un pulso entre propietarios y alcalde. NEGRO, N. (2018), pp. 213-214.

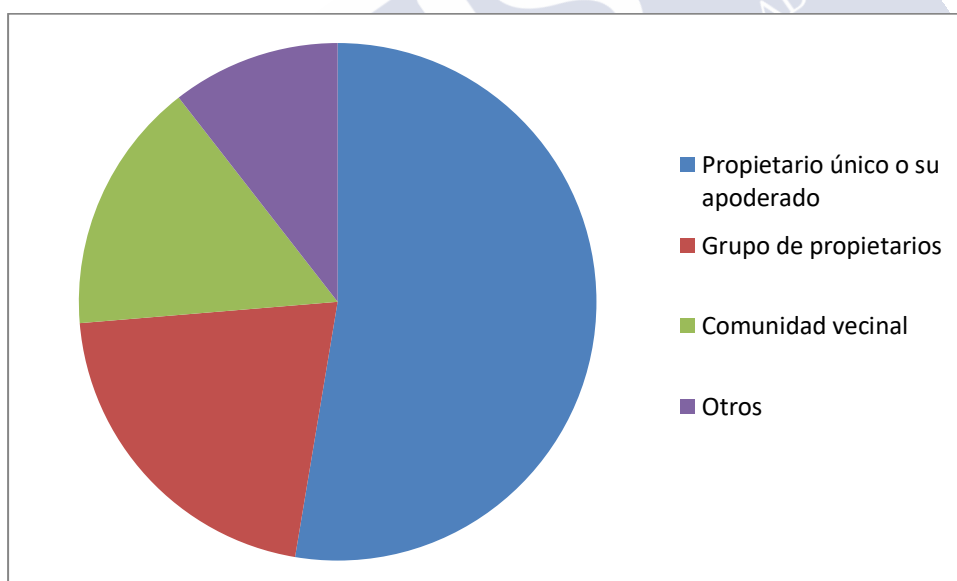
⁴⁷⁸ Por ejemplo, el guardia-jurado de la parroquia de Grou, en Lovios, impidió que un aserrador portugués disparara contra un hombre al que le adeudaba dinero, según la prensa (si bien esta también señala que fue detenido por injurias y amenazas, y no homicidio frustrado). *La Región*, 23-01-1920, p. 2.



Fuente: Expedientes de guardas jurados de Pontevedra

La práctica totalidad de las propiedades a guardar son rurales. El 73,7% son fincas, o grupos de fincas, y el 15,8% son montes comunales. Un 5,3%, es decir, un caso, se corresponde con un coto de caza, y en otro caso el guarda jurado fue propuesto por la Junta de Obras del Puerto.

Gráfico 3.6.3 Expedientes de guardas jurados en Pontevedra para 1901-1929 según su promotor



Fuente: Expedientes de guardas jurados de Pontevedra

En cuanto a quiénes promueven los guardas, en diez casos, esto es, un 52,6% de los casos, se trata de un propietario único. Ahora bien, la cifra tiene trampa, puesto que en cinco de estos casos el que lo pide es Casimiro Gómez, indiano retornado y después empresario de éxito de agua mineral⁴⁷⁹, o bien uno de sus apoderados. Al menos desde 1901 Gómez tuvo un guardia en su finca “villa Buenos

⁴⁷⁹ En concreto, en un caso en el que envió un escrito al alcalde en 1912, lo hizo en una hoja con publicidad de su empresa, Agua Mineral Lérez, publicitada como “La reina de las aguas de mesa. Las más radiactivas (sic) del mundo”, “10.000 voltios hora-litro de radiactividad (sic)”. 6036/42, Archivo municipal de Pontevedra.

Aires”, en la parroquia de Mourente, pero se inicia un expediente cada vez que lo renueva. Entre los otros cinco propietarios, estos diferentes entre sí encontramos a Eugenia Montero Ríos, que suponemos que se corresponde con la hija del político compostelano que contraería matrimonio con el general Martínez del Campo. En 1926 requirió un guarda para la Granja de Lourizán, el pazo que comprara su padre⁴⁸⁰.

En otro 21% de los casos, cuatro en total, los empleadores son grupos de propietarios. Tres de ellos son una veintena de propietarios de la parroquia de Bora, que en 1909-1910 fueron contratando por grupos a un carabinero retirado, Manuel Fernández, para que guardara sus propiedades. La mayoría son labradores varones, aunque hay también un médico, un propietario que residía en Pontevedra y tres mujeres (todas ellas viudas). La última es, ya en 1929, la Sociedad de Propietarios de Fincas Rústicas de Salcedo, que contrató un guarda para las propiedades de sus asociados.

En otros tres casos, es decir, el 15,8%, los promotores fueron una comunidad de vecinos para vigilar un monte comunal. Dos son de 1910: treinta y tres vecinos de la parroquia de Tomeza contrataron a un hombre para vigilar el monte Loureda y dieciocho de la de Marcón para el mismo objetivo en los montes Loureda y Reigosa (casi todos los firmantes son hombres). Curiosamente, es en estos dos casos de los pocos en los que se pide un informe al concejal de distrito. En 1920, 39 vecinos de Salcedo propusieron a otro guarda para vigilar su monte comunal. Las comunidades de montes siempre proponen a un vecino de la parroquia. Los dos promotores restantes son la Sociedad Venatoria de Pontevedra⁴⁸¹ y la ya mencionada Junta de Obras del Puerto.

En cuanto a los hombres que ocupaban el puesto, los informes dan relativamente poca información acerca de ellos. Son hombres maduros: el más joven tiene 29 años, otros están en la treintena, y tres pasan de los cincuenta años. Suelen vivir en la parroquia que custodian o en una cercana. Casimiro González, en concreto, propuso en dos ocasiones para guardas a hombres que estaban viviendo en su finca. Hay excepciones: Eugenia Montero Ríos contrató a un oficial de la Guardia Civil retirado, vecino de Santiago, para vigilar su finca. Al menos cuatro de ellos son guardias civiles o carabineros retirados; ya hemos mencionado el caso de Manuel Fernández, que consiguió tres contratos colectivos y uno individual en las parroquias de Bora y Mourente.

En conjunto, y aunque no podemos descartar que falten expedientes, la guardería jurada no parece muy extendida en el municipio de Pontevedra, y la que existía era eminentemente rural. La empleó sobre todo algún gran propietario y se ubicó en ciertas zonas, en especial la parroquia de Bora, en la que un carabinero retirado supo convencer a varios propietarios para que lo contratasen.

En relación a la falta de guardias rurales en Galicia, vemos significativo que cuando estos guardas de campo, de montes, forestales, etcétera, aparecen mencionados en la bibliografía, se mencionan vinculados a situaciones de conflictividad por un acceso desigual a la propiedad de la tierra. Los encontramos vigilando las propiedades de los terratenientes en el sur de Navarra⁴⁸², custodiando montes particulares e impidiendo que los vecinos hagan en ellos aprovechamientos particulares en Huesca (y quizás haciendo la “vista gorda” cuando las infracciones las cometían las élites locales)⁴⁸³. En Ciudad Real, ya en el siglo XX, vemos a guardias jurados custodiando cotos de caza y reprimiendo,

⁴⁸⁰ 6036/43, Archivo municipal de Pontevedra.

⁴⁸¹ Domínguez Almansa señala que las sociedades venatorias que surgieron en las ciudades gallegas a finales del XIX se encontraban con la oposición tanto de “as elites tradicionais coma o común do campesiñado” a la hora de regular la caza, lo que llevaría a contratar guardias jurados; por ejemplo, la de A Coruña designó guardias en cinco ayuntamientos cercanos en 1897. DOMÍNGUEZ ALMANSA, A. (2009), pp. 167-168.

⁴⁸² DE LA TORRE, J., LANA BERAÍN, J. M. (2000), p. 83.

⁴⁸³ FRÍAS CORREDOR, C. (2000), p. 111.

en alguna ocasión a tiros, pequeños hurtos de leña, espigas o uvas⁴⁸⁴. En Málaga, en la Segunda República, encontramos un atentado contra un guarda de un terreno comunal privatizado⁴⁸⁵.

En la costa granadina, señala Tomás Costa con quizás alguna exageración, los guardas se escogían por los alcaldes o por los dueños de los cortijos que “tienen importancia para sostenerlos”, y los elegían “muchas veces entre presidiarios cumplidos, o bien entre los probados como valientes”. Sus castigos eran “brutales, criminales casi”; los alcaldes “jamás separan a un guardia porque maltrate a un ladrón, ni lo entregan a los tribunales si le hizo heridas aunque fueran graves”⁴⁸⁶. En la literatura del esperpento, el patrón de guardias es el Marqués de Torre-Mellada, al que sus monteros uniformados esperan en la estación de tren y dice tras una visita de la Benemérita “que para la defensa de mis propiedades, tengo mis guardias”⁴⁸⁷.

No son los únicos casos (también hay guardas, por ejemplo, contratados por vecinos para defender al comunal⁴⁸⁸), pero apuntan a que su implantación en otras zonas de España estuvo ligada a la defensa de la propiedad en zonas en las que había una diferenciación clara entre grandes poseedores de fincas y una clase sin tierra o con un acceso muy limitado a ella que recurría al latrocinio como estrategias de protesta y de supervivencia. En Galicia estas fuerzas no eran necesarias. No porque no hubiese jornaleros, desposeídos, caseiras y mendigos que robasen, que los había, sino porque estos no constituían una clase aparte de la población. El control social sobre los desposeídos, en vez de ser ejercido mediante fuerzas privadas armadas por la plutocracia, quedaba en manos la propia mesocracia de agricultores propietarios y semi-propietarios, numéricamente hegemónicos.

3.7 Los serenos⁴⁸⁹ y guardias municipales

En el Antiguo Régimen existieron algunas rondas organizadas por alcaldes para la prevención de los delitos y su averiguación⁴⁹⁰. Pero es en nuestro periodo de estudio cuando las ciudades gallegas asentaron servicios de serenos y Guardias Municipales, esto es, trabajadores del Ayuntamiento que, a tiempo completo, ejercían labores de vigilancia y seguridad. En tanto que cuerpos al servicio de los municipios y bajo el mando del alcalde, armados pero de carácter netamente civil, constituyen el antecedente directo de la actual Policía Local⁴⁹¹.

⁴⁸⁴ BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2005), p. 125-126, 131, 135.

⁴⁸⁵ PRIETO BORREGO, L. (2014), p. 18.

⁴⁸⁶ El resultado feliz de este estado de cosas, señala el autor, es que en la costa granadina se respetaba la propiedad, pues, “triste es confesarlo, pero los rateros no temen más que al palo, y de él debe hacerse gasto”. COSTA MARTÍNEZ, T. (1912), pp. 78-79.

⁴⁸⁷ VALLE-INCLÁN, R. (1927), pp. 168-169, 259.

⁴⁸⁸ SERRANO ÁLVAREZ, J. A. (2005), p. 454.

⁴⁸⁹ El término sereno puede conducir a confusión. A inicios del siglo XIX designaba a los guardias municipales encargados de patrullas las calles. Tras la constitución de las Rondas o Guardias Municipales, el término se emplea a veces para referirse a aquellos guardias que prestan servicio nocturno. En alguna ocasión se trata de un servicio aparte, pero también pueden ser guardias diurnos que cumplen un turno rotatorio. Al mismo tiempo, existían serenos pagados por particulares, como los serenos del comercio, que, creemos, dependían de los propietarios de tiendas y negocios. Para distinguir entre estos dos tipos, hablaremos de serenos municipales cuando nos refiramos a los trabajadores del Ayuntamiento. En cuanto a los serenos privados, no hemos encontrado evidencia documental suficiente como para dedicarles una sección aparte.

⁴⁹⁰ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), p. 155.

⁴⁹¹ Bajo la Ley Orgánica 27/1986, la máxima autoridad de las policías locales españolas seguía siendo el alcalde, si bien pueden actuar como policía judicial y en ese caso, aunque orgánicamente bajo la dependencia del regidor, funcionalmente dependen de los jueces, tribunales y ministerio fiscal. GARCÍA GIL, F. J., GARCÍA NICOLÁS, L. A. (2000), pp. 25-27.

Siguiendo el esquema que ya hemos empleado anteriormente, hemos calculado el número de guardias municipales al final de cada década, empleando la información presupuestaria y de mandamientos de pago que se conserva en los archivos municipales de las seis principales ciudades gallegas⁴⁹². Hemos podido hacer una estadística relativamente precisa a lo largo del periodo para tres de ellas, A Coruña, Ferrol y Santiago, aunque, aún así, no se conservan los presupuestos de todos los años. En esos casos, se ha empleado la cifra de un año cercano⁴⁹³. Nótese también que, debido a que hemos construido las cifras en base a los presupuestos municipales, en algunos casos no se señala el año de calendario sino el año a efectos presupuestarios⁴⁹⁴. Las distorsiones introducidas en estos casos, confiamos, son mínimas.

Tabla 3.7.1. Agentes de la Guarda Municipal o servicio equivalente en los municipios y años señalados

Número de guardas municipales	A Coruña	Ferrol	Santiago
1840	15	0 ⁴⁹⁵	35
1850	32	7	35
1860	41	28	35
1870	49	38	52
1880	66	39	50
1890	70	46	45
1900	72	42	49
1910	81	40	54
1920	85	43	53
1930	85	47	63
1936	85	54	71

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes municipales

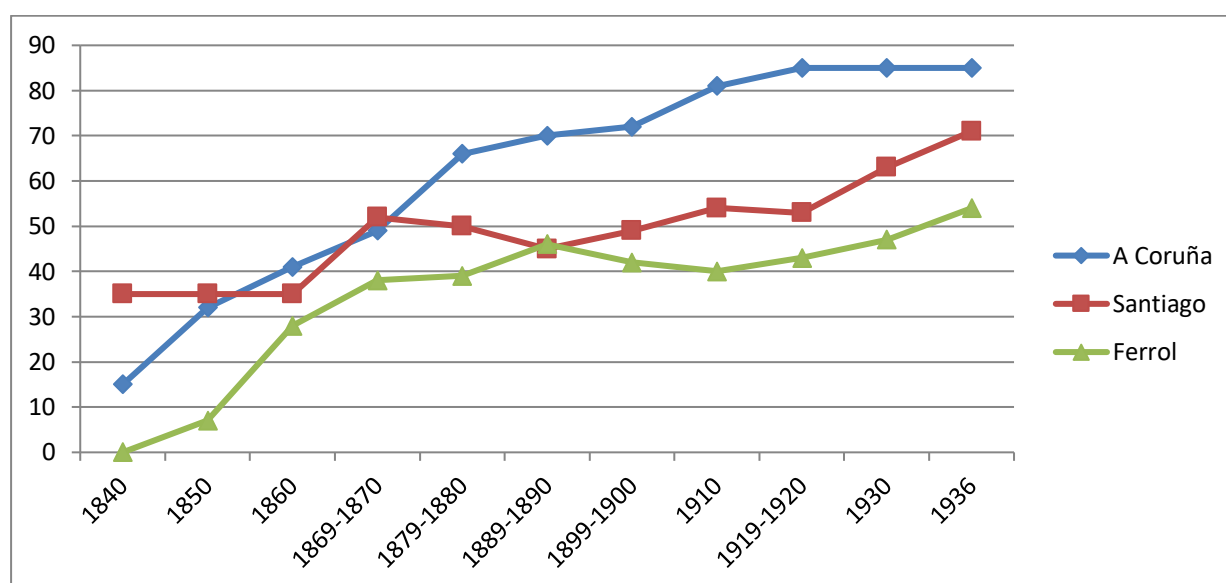
⁴⁹² En el Archivo Municipal de A Coruña hemos consultado los expedientes de elaboración de presupuestos: C-6328, 2; C-6332; C-6335; C-6356; C-6340; C-6345-1; C-6350, 1; C-6352, 1; C-6479 (presupuesto extraordinario); C-6359; C-5044. En el Archivo Municipal de Santiago hemos consultado varios proyectos de presupuestos: AM 608; AM 609; AM 611; AM 616; AM 622; AM 632; AM 641; AM 2099. También el proyecto de presupuesto para 1918, AM 2101; la *Nómina de los haberes y jornales que corresponden al personal de la Guardia municipal en enero de 1930*, AM 243; y para 1936 los *Mandamiento de pago a la Guardia municipal*, AM2450. En Ferrol hemos consultado expedientes de presupuestos, excepto para 1909, año en el que disponemos del propio presupuesto: C-14180.2, C-14181, C-14181, C-14183, C-14185, C-14189, C-14194, C-14198 (el ya mencionado de 1909), C-14201, C-14205, C-14207. La información extraída del resto de archivos, municipales o no, se menciona en las notas. Agradezco, de paso, la diligencia de los trabajadores de los organismos consultados a la hora de ayudarme a localizar material muchas veces difícil de consultar, y en especial al Archivo Municipal de Vigo, que tuvo la amabilidad de remitirme la documentación que necesitaba telemáticamente.

⁴⁹³ En concreto, en Santiago no hemos podido encontrar datos de la dotación en 1920, así que hemos empleado la de 1918. En Ferrol no hemos encontrado las de 1910 y 1936 y hemos empleado las de 1909 y 1935.

⁴⁹⁴ Por ejemplo, las cifras para 1920 en A Coruña y Ferrol son realmente las del presupuesto para 1919-1920, y las de 1880 en Santiago son las de 1879-1880.

⁴⁹⁵ Ferrol no disponía en 1840 de guardias ni serenos en nómina, aunque sí cinco alguaciles y dos maceros. Debido a que los primeros acabarían siendo integrados en la Guardia Municipal que se creó a finales de esa década, consideramos probable que desempeñasen algunas funciones asignadas después a este servicio.

Gráfico 3.7.1 Número de guardas municipales en los municipios y años señalados



Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes municipales

Como se puede apreciar, el ascenso del número de guardias es significativo entre 1840 y 1870, periodo en el que, como veremos, las guardias municipales se crean *ex novo* o se reorganizan con nuevos reglamentos a partir de servicios anteriores. El proceso es menos significativo en Santiago, que ya en 1840 contaba con un cuerpo de serenos relativamente numeroso (33 hombres y dos capataces), si bien se les consideraba dentro del servicio de alumbrado.

En el resto del periodo la tenencia a medio plazo es ascendente, aunque con diversos ritmos en las distintas ciudades; dinámicas que, para estudiarse en detalle, tendrían que compararse con el aumento de la población, la reorganización de los cuerpos y el estado de las finanzas municipales.

Tabla 3.7.2 Número de habitantes de hecho por guarda municipal en los municipios y años señalados

	A Coruña	Ferrol	Santiago
1860	736	754	679
1870	659	598	462
1880	527	626	484
1890	546	554	540
1900	611	602	492
1910	592	658	456
1920	730	706	488
1930	872	757	607
1936	1.085	928	631
Media	706	687	538

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes municipales y poblaciones censales

Si vemos el número de guardias en relación a la población, dentro de lo que lo permiten los datos disponibles⁴⁹⁶, se hacen visibles otras consideraciones. A Coruña, pese a tener un cuerpo de guardias alto en términos absolutos y a que este tiende a crecer hasta 1920, es el que tiene menos guardias por habitante, en atención al alto crecimiento de la población. Le siguen en la media de los años de muestra, y en la mayor parte de los años particulares, Ferrol y Santiago, por este orden. La dotación del cuerpo del municipio compostelano fue siempre muy alta en relación a la población a lo largo del siglo estudiado.

Hay que señalar que el servicio efectivo dependía de otras consideraciones, como el tamaño del terreno a patrullar y el modo en el que se hiciera; así, el de A Coruña era muy pequeño y urbanizado hasta la incorporación de Oza a inicios del XIX. Santiago era más grande e incluía varias parroquias rurales, aunque la Guardia Municipal parece concentrarse en el casco urbano, y éste era más pequeño que el coruñés.

Además, el número de hombres que hacían vigilancia activa en las calles se podía ver reducido por servicios que los inmovilizaban. En la reorganización de la guardia coruñesa del 31 de enero de 1857 se conceptualizan varios puestos fijos: un guardia para vigilar las carreteras de la Aduana; dos, uno en cada puerta, para impedir la entrada de mendigos; dos en la plaza de mercado; uno en la portería de la secretaría del Ayuntamiento; otro para el alcalde. Finalmente, aunque los números absolutos de guardias parezcan altos, la cantidad de botas sobre el terreno se veía reducido por la necesidad de establecer turnos. Resulta significativo que tanto A Coruña como Ferrol vean aumentar significativamente su ratio de ciudadanos-guardias en la década de 1930, un periodo de fuerte crecimiento urbano que coincide con un aumento de las dotaciones de cuerpos de seguridad dependientes del Estado central.

Los guardias municipales constituían en el XIX uno de los grandes bloques de personal de las administraciones locales gallegas, junto con el cuerpo de limpieza, si bien a medida que ocurre el tiempo se va reduciendo el porcentaje que ocupan dentro de la plantilla debido a la ampliación de personal y la creación de nuevos servicios, como los bomberos. Además, hay servicios que se asumen por los ayuntamientos o se externalizan dependiendo del lugar y la época, como el del cobro de Consumos. En este sentido, consideramos relevante estudiar el porcentaje de gastos que la Guardia Municipal consumía en el total de los presupuestos:

Tabla 3.7.3 Porcentaje del presupuesto municipal ordinario dedicado a los gastos de Policía de Seguridad o equivalentes, por año

Año	Ferrol	Santiago
1840	-	24,11
1850	9,17	11,89
1860	11,1	9,01
1870	11,48	11,17
1880	12,02	8,1
1890	11,58	4,53
1900	8,22	4,08
1910	9,43	4,29

⁴⁹⁶ Las muestras se han escogido buscando que coincidiesen, en lo posible, con los años censales, para tener datos ajustados de la población de hecho. Hay que tener en cuenta, como ya se ha señalado en una nota a pie de página anterior, que no siempre ha sido posible estudiar el año deseado, lo que puede generar pequeñas distorsiones.

1920	6,54	4,04
1930	6,71	-
1936	6,12	-

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación municipal

Las cifras presentadas son orientativas, debido tanto a la heterogeneidad de las fuentes⁴⁹⁷ como por el hecho de que los presupuestos son, por definición, previsiones de gastos que no tienen por qué reflejar lo que verdaderamente se emite a lo largo del año. Hemos empleado como base los presupuestos ordinarios, para reflejar el gasto en policía en relación a los gastos normales de los gobiernos locales y no las inversiones y obligaciones especiales, que se contabilizaban en presupuestos especiales⁴⁹⁸. Tampoco este parámetro es claro, ya que a mediados del siglo XIX las obligaciones extraordinarias se refundían en el presupuesto ordinario.

A la hora de contabilizar las cifras dedicadas a la Guardia Municipal se han contado no solo los haberes de los guardias, sino el total de dinero presupuestado para el departamento⁴⁹⁹, comprendiendo, según la época, el material, premios extraordinarios, seguros, socorros de incendios y otros gastos. Sin embargo, los salarios y gratificaciones son indefectiblemente la mayoría del monto dedicado a la sección.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los datos indican una tendencia a la disminución del peso del gasto en policía municipal a lo largo del periodo estudiado. Esto lo achacamos no a la disminución del desembolso total del departamento (como hemos visto, las plantillas tendieron a subir, y también los salarios de los guardias, al menos en términos nominales) como a la asunción de mayores competencias por parte de las autoridades locales y un aumento de sus gastos e ingresos. Así, mantener a 33 serenos a cinco reales diarios y a dos capataces se llevaba en 1840 casi una cuarta parte del desembolso de la corporación; en 1850 y 1860, con un sueldo de seis reales, el porcentaje disminuye al 11,9 y el 9% del importe de los gastos.

En cualquier caso, y salvo el caso ya mencionado de Santiago en 1840, no suponen la obligación principal de los municipios, aunque sí una minoría significativa del gasto. En el siglo XIX apenas sobrepasan el 10% de la dotación presupuestaria, y en el siglo XX nunca llegan a superar esta cifra. En Santiago, entre 1890 y 1918, se sitúan entre el 4 y el 4,5% de los gastos. La orientación hacia la seguridad de las administraciones locales en nuestro periodo de estudio era sustancialmente inferior a la central.

Nos hemos centrado en las ciudades de la provincia de A Coruña por la escasez de datos en otras. No hemos podido encontrar datos en detalle para Ourense, más allá de alguna queja en prensa sobre la escasa dotación. Después de un tiroteo en una casa de prostitución en 1920, el alcalde afirma que “no es posible con tan reducido número de guardias municipales como los que de noche prestan servicio, mantener una constante y completa vigilancia”⁵⁰⁰, pero no sabemos cuál era ese número.

En Pontevedra la información es escasa, debido a que han desaparecido la mayoría de los presupuestos, pero, por lo que parece, la ciudad del Lérez mantuvo un servicio poco numeroso hasta

⁴⁹⁷ Al ser algunas, como señalamos en una nota anterior, presupuestos publicados con la aprobación del Gobernador Civil y por tanto definitivos, mientras que otros son proyectos, etcétera.

⁴⁹⁸ Y que se afrontaban con deuda o con tributos extraordinarios.

⁴⁹⁹ Lo que en el modelo de presupuesto que rellenaban los ayuntamientos en esta época se denomina “Policía de Seguridad”

⁵⁰⁰ *La Región*, 02-07-1920, p. 3.

el final del periodo isabelino⁵⁰¹. Entre 1920 y 1936 disponen de una Guardia Municipal relativamente numerosa. Es la única ciudad en la que hemos encontrado un servicio de guardería rural municipal, si bien muy reducido en número (tres alguaciles rurales).

Tabla 3.7.4 Número de guardias municipales, de guardias por habitante y de porcentaje de gasto en relación al presupuesto ordinario en Pontevedra en 1920-1936

Año	Número de guardias	Número de habitantes por guardia municipal	Porcentaje de gasto
1920-1921	36	750	-
1929-1930	37	833	6,44
1936-1937	40	863	5,73

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación municipal y censos

En cuanto a Vigo, en el presupuesto de 1842 se mencionan algunos porteros y alguaciles del Ayuntamiento, si bien no guardias⁵⁰², en contra de lo que señala Gerardo Martín⁵⁰³, si bien, como siempre, las fronteras entre las responsabilidades de los funcionarios municipales son difusas y es posible que los alguaciles realizasen algún servicio de guardería. En 1914 el servicio contaba con 111 agentes, contando todos los grados⁵⁰⁴. En 1930 eran 110, esto es, uno por cada 591 habitantes, si bien un importante porcentaje se dedicaba a servicios especiales⁵⁰⁵. En 1937 el servicio había disminuido hasta los 83 hombres, si bien puede tener que ver con el conflicto bélico⁵⁰⁶. Parece que en esta época se les apodaba Romanotes⁵⁰⁷.

Además de las grandes ciudades, las villas y poblaciones de menor tamaño también dispusieron de servicios de vigilancia municipales. En Melide parece que ya estaban en servicio en la década de 1920, aunque “é moi probable que xa existiran dende comezos de século”⁵⁰⁸. Cangas tenía un cuerpo constituido en 1917⁵⁰⁹. Un viveirense comparaba en 1951 a los guardias de su niñez, en general licenciados del ejército, la guardia civil o los carabineros, con navajas suizas: “Guardias, serenos, agentes ejecutivos, recaudadores de arbitrios, consumidores, y sobre todo –esto era lo

⁵⁰¹ En 1851 pagaba a cinco serenos y un capataz, así como un guardia de la Alameda. En 1859, además del capataz, encontramos cuatro serenos y dos celadores de policía urbana, que probablemente se dedicasen sobre todo a labores de inspección. En 1859 el número había aumentado a cinco celadores, diez serenos y dos capataces. Cuenta general de gastos municipales, Archivo de la Diputación de Pontevedra, Contas Municipais, 770/1, Nómina de los haberes que corresponden a los empleados en Policía Urbana en el mes de agosto de 1859, Archivo de la Diputación de Pontevedra, Contas Municipais, 786-1/1, Nómina de los haberes que corresponden a los empleados del ayto de pontevedra en el mes de agosto y septiembre de 1869. 789/2.

⁵⁰² *Presupuesto municipal de 1842*, 18511/16, Archivo de la Diputación de Pontevedra

⁵⁰³ MARTÍN, G. (2018), p. 16.

⁵⁰⁴ Presupuesto general para 1914. Archivo Municipal de Vigo.

⁵⁰⁵ 18 a reglamentar la circulación, cuatro al puerto, 11 a vigilancia especial de establecimientos. *Presupuesto general para 1930*. Archivo Municipal de Vigo.

⁵⁰⁶ Presupuesto municipal ordinario para 1937, Archivo Municipal de Vigo.

⁵⁰⁷ PÉREZ ÁLVAREZ, L. (2014), p. 191.

⁵⁰⁸ Así como alguaciles municipales, sin armas, que “tamén procedían a sancionar o incumplimento das normas”. VÁZQUEZ NEIRA, C., BROZ RODRÍGUEZ, X. (2013), pp 74-75.

⁵⁰⁹ SANTOS CASTROVIEJO, I., NORES SOLIÑO, A. (2005), p. 431.

gordo- la fuerza de choque en la lucha civil contra la chiquillería del pueblo”⁵¹⁰. En Chantada, según una queja publicada en prensa, no existía en 1930⁵¹¹.

Como las Guardias Municipales gallegas no han sido objeto de estudio académico conjunto, y solo hemos podido detectar dos trabajos locales, para Vigo y Melide, dedicaremos las siguientes páginas a analizar la evolución y composición de los cuerpos de los que tenemos noticia. Como esclavos de las fuentes, hablaremos sobre todo de la de A Coruña, pues allí son más abundantes.

A inicios de nuestro periodo de estudio, A Coruña contaba ya con cuerpo de serenos (que en 1840 aparecían dentro de la sección de alumbrado público) y otro de policía municipal, que se reorganizaron en 1845-1846 como Ronda Municipal, con un nuevo reglamento en el que se especifican sus obligaciones, y los protocolos a seguir, en la identificación y represión de sospechosos y delitos. Sin embargo, la tarea esencial, sobre todo en el servicio diurno, era la de asistir en términos amplios a la ciudadanía y hacer cumplir las ordenanzas municipales. En los arrestos, tenían un carácter delegado a los celadores de protección y seguridad pública y la Guardia Civil⁵¹².

En la práctica, el cuerpo de personal recicló a los serenos que formaban el servicio anteriormente. En 1854, según la comisión de Gobierno, estaba formada en “gran parte” por sujetos “nada aptos, por su edad y cualidades”, de los que “todos, o casi todos, son casados, gran parte proceden de la clase de paisanos [aunque se preferían licenciados de los cuerpos armados] y varios cuentan ya una edad avanzada”. A estas alturas, se componía de 28 hombres, más un jefe y un ayudante (que tampoco reunían las cualidades necesarias). Lo mismo ocurrió en Ferrol, que publicó su reglamento de serenos en 1849 y constituyó un servicio de Guardia Municipal el 1 de enero de 1850; se nombró a los suplentes de serenos, tres alguaciles y dos guardias de la Alameda⁵¹³.

Ese año se reorganizó el servicio a instancias del Gobernador de la provincia, que envió un escrito al alcalde denunciando que el servicio de policía urbana no se realizaba en la ciudad “con la precisión que corresponde a una Capital de 1er orden” e instándole a que se ocupase del problema con reglamentación y una renovación del personal. Los motivos para la reorganización no debieron ser un aumento percibido de la criminalidad, pues las faltas que destaca en la ciudad son “las de limpieza y alumbrado público” y la falta de presencia en las calles: “tanto la Autoridad como los particulares no encuentran con puntualidad a los dependientes”.

La solución sería una reorganización de los guardias: “aumentándolos si son pocos en el día, y procurando que los destinados á la vigilancia sean de la clase de licenciados del Ejército y solteros ó viudos sin hijos y de una edad proporcionada al servicio que tiene que prestar, y si pudiera ser que estuviesen acuartelados”⁵¹⁴. La idea, por tanto, era crear una fuerza casi paramilitar, con un modelo muy parecido al de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento de A Coruña reorganizó el servicio, ampliando la dotación hasta los 33 guardias, un cabo, un ayudante y un jefe⁵¹⁵. En principio, seguía las líneas dispuestas por el Gobernador y aceptadas por el alcalde, pero, en la práctica, pesaron las dinámicas personales del poder municipal

⁵¹⁰ CANOSA, R. (1951).

⁵¹¹ *El Faro de Vigo*, 14-12-1930, p. 6.

⁵¹² Reglamento de la Ronda Municipal, Expediente sobre el establecimiento de la ronda municipal, C-9030. Sobre la subordinación a los celadores, artículo 49, 68. Archivo Municipal de A Coruña.

⁵¹³ Serenos, expte de constitución do corpo. C-804-5.2.10.4, Archivo Municipal de Ferrol

⁵¹⁴ Escrito del Gobernador Civil al alcalde, en los folios 1-2 del primer legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵¹⁵ Aprovecharon la reorganización para cargar a los empleados el coste de los uniformes.

y las restricciones presupuestarias. Se expulsó a algunos ancianos o empleados de mala conducta, pero la mayor parte de la ronda antigua, 21 hombres, pasó al servicio de noche como guardias de primera clase. Se creó, para el antiguo ayudante, una plaza de cabo *ad hoc*.

La patrulla de día, compuesta por doce hombres, incluía a 11 nuevas plazas de guardias de segunda clase, que compondrían el nuevo perfil de profesional. Debían ser solteros o viudos sin hijos, licenciados del Ejército, Guardia Civil o Carabineros, de entre 25 a 34 años, tener “la robustez y aptitud suficiente” y saber leer y escribir. Mientras estuviesen en el servicio de día se mantendrían acuartelados, y solo podrían casarse o residir en domicilios particulares cuando promocionasen a la primera categoría. Debían ir siempre de uniforme, con el pelo corto, las patillas muy cortas, y recomendándose el uso de bigote sin patillas. Se les prohibía ir a “tabernas, cascarillas y aguardenterías para beber, comer o distraerse”⁵¹⁶. Como armamento, contaban con sable, y los jefes y cabos “sable-espada”⁵¹⁷.

En cuanto al jefe, con una dotación económica superior, no se pedían conocimientos o méritos adicionales a los de los guardias (de hecho, un candidato a presidir el cuerpo se incorporó como guardia de a pie), pero sí una dotación de 6.000 reales como fianza. De los cinco candidatos admitidos en la lista, disponemos de información de cuatro, todos ellos sargentos en activo o licenciados, y uno de ellos con carrera universitaria. El elegido fue Antonio Llamas, un sargento de artillería del que en la instancia no se conserva el expediente pero sí una recomendación remitida al alcalde desde su arma de procedencia. Su antecesor en el puesto, Ignacio Carral, había sido también sargento⁵¹⁸.

Incluso en el contexto de depresión económica de 1854, las condiciones no eran atractivas; en dos convocatorias no consiguieron llenarse las plazas con candidatos que reuniesen todas las condiciones. Solo se crearon siete nuevos puestos, y un guardia, Andrés Conejo, desertó al poco tiempo. El sueldo no era alto. Los de primera clase cobraban siete reales al día, y los de segunda, pese a ser en teoría los más profesionales, cinco, y se les descontaba un real y medio diario para cubrir el equipo y vestuario, cobraban menos que los de primera clase: cinco reales en vez de siete.

La falta de aspirantes estaba relacionada, probablemente, con las condiciones del trabajo, marcado por los largos horarios y la monotonía. Siguiendo el reglamento de la guardia coruñesa, los hombres de la ronda nocturna (a los que se sigue designando como serenos) se presentaban quince minutos antes de empezar sus patrullas en un punto, recibían órdenes (las nueve en invierno, las diez en verano) y patrullaban en solitario sus demarcaciones “al paso regular”, sin detenerse excepto por motivos de servicio. También cantaban la hora. Su actividad acababa una hora antes del amanecer (una y media en invierno), se concentraban en un local y daban parte. Patrullaban en solitario, y un compañero tenía que hacerse cargo de su zona mientras paraban para comer y almorzar. El reglamento de Santiago (art. 13) los sometía a una revista semanal para que mantuvieran buen aspecto⁵¹⁹.

⁵¹⁶ Instrucción particular para el mecanismo del servicio que debe prestar la Ronda municipal de esta Capital (sobre folio 20, sin numerar, del primer legajo del C-2598). Archivo Municipal de A Coruña

⁵¹⁷ Libro Registro del armamento y vestuario de la Guardia municipal. 6304-1. Archivo Municipal de A Coruña

⁵¹⁸ Concesión de plaza a Ignacio Carral, Expediente... C-9030. Archivo Municipal de A Coruña

⁵¹⁹ El jefe “todas las semanas les pasará revista de ropa y armas y cuidará de que anden afeitados, con el pelo y la barba cortos, calzado limpio, y e fin, como si fuesen soldados de Ejército”. *Reglamento de la Guardia Municipal de Santiago...* (1885).

En una nueva convocatoria de plazas, en noviembre de 1854, se suprimió la condición de ser licenciado del ejército, se permitió estar casado y tener hijos⁵²⁰. Poco después se admitió en la Guardia a miembros de las cuadrillas de limpieza municipal que habían hecho méritos durante la epidemia de cólera. El método de selección de candidatos se había corrompido, según señala un informe del alcalde José María Bermúdez, en verano de 1856⁵²¹: la guardia municipal era “poca, mal pagada y en lo general de mal personal é inutil”, y la colocación de las nuevas plazas se realizaba por “los empeños y recomendaciones de personas” que emplearon los destinos para “recompensar servicios personales”. Se rechazaron solicitudes de licenciados a favor de “individuos raquíticos, apocados y sin ninguna disposición [sic]”.

En las dos décadas siguiendo fue ampliándose el tamaño del cuerpo y las condiciones de trabajo y se redujeron las exigencias. La guardia se refundó a inicios de 1857 como un cuerpo único con un jefe, dos cabos, y 42 guardias, aumentando el sueldo a seis reales por día, si bien se abandonó la pretensión de que permaneciesen célibes. En 1869 hubo una nueva reforma, nuevamente a instancias del Gobernador Civil, en la que se les concedió derecho a jubilación y se amplió la plantilla hasta los 49 hombres. En lo demás, se mantenían en lo esencial los requisitos de admisión⁵²².

Los buenos deseos cedían ante el clientelismo imperante. En 1865, en una instancia al alcalde, Antonio Iglesias pide que se le conceda una plaza en la guardia municipal en atención a que su padre había servido en ese destino 17 años y a que había dejado embarazada a una chica. Le suplica al regidor ampare “á una Infeliz Criatura que yo hice desgraciada la que se encuentra con una hija y que si VS no tiende su protectora mano para bien de dos seres desgraciados, no tendre mas recurso que abandonarla, con todo el cariño y sentimiento de todo un hombre honrado”.

Aunque la instancia ocupa poco más de una carilla, abunda en apelaciones al “apiadado” “magnanimo”, “bondadoso”, y “sentimental corazon” del alcalde, y al parecer en una promesa que este le hizo al propio Antonio: “una vez prometida la palabra de VS”. Iglesias consiguió el puesto, aunque renunció a los pocos meses por motivos desconocidos. Aunque es cierto que era licenciado del ejército, puede verse que el medio de elección no se había desprendido de personalismos⁵²³. Sin embargo, no tenemos constancia de que entrasen y saliesen con los vaivenes políticos⁵²⁴.

El criterio de preferir licenciados de cuerpos armados se siguió en la creación del cuerpo en Santiago, aunque no sabemos si ocurrió lo mismo en los años siguientes, pues los nuevos guardias fueron designados interinamente por el alcalde. Tenemos una estadística exhaustiva de los hombres que formaron el primer cuerpo de Guardia Municipal de Santiago, constituido en 1870, en las que figura su edad, su historial en otros cuerpos armados sus antecedentes y si saben leer y escribir⁵²⁵. Sin

⁵²⁰ Concurso de seis plazas de guardia de segunda clase, sobre folio 18 sin numerar, legajo primero del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵²¹ Proyecto de reforma de la Guardia Municipal, por el alcalde José María Bermúdez (sobre folio 20, sin numerar, del segundo legajo del C-2598). Archivo Municipal de A Coruña

⁵²² *Expediente relativo a la reforma del reglamento de la Guardia Municipal*, C-9030. Archivo Municipal de A Coruña

⁵²³ *Instancia de Antonio Iglesias a la alcaldía, agosto de 1865*, sobre el folio 90 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵²⁴ Hay alguna mención a que era así para algún guardia viveirense. CANOSA, R. (1951).

⁵²⁵ Los datos se han extraído del *Registro de la Guardia Municipal, 1870-1883*, pág 37, Archivo Municipal de Santiago, seleccionando aquellos que fueron nombrados para su destino el 7 de mayo de 1870. En el resto del libro, y en los otros dos libros registro de guardias que se conservan en este archivo, no figuran los antecedentes de los guardias, tan solo sus servicios extraordinarios y premios, sus faltas y castigos e información acerca de sus periodos de servicio.

contar al jefe y su ayudante, se incorporaron medio centenar de guardias, 34 de ellos procedentes de cuerpos municipales anteriores (la ronda municipal y el cuerpo de serenos)⁵²⁶.

Entre los que provenían de cuerpos anteriores, el 73,5% eran licenciados del ejército o las tropas provinciales (en el resto de casos no figura o no consta). Entre los hombres nuevos, lo son el 97%, es decir, todos menos uno, en el que no figura seguramente por error. Entre ellos se encuentran, aunque son minoritarios, licenciados del cuerpo de carabineros y de la Guardia Civil, así como veteranos de las campañas de África y Santo Domingo y hombres que ostentan condecoraciones. Siete eran sargentos, seis eran cabos, y el tiempo medio de servicio es de ocho años. No era un cuerpo de jóvenes, incluso contando con las nuevas incorporaciones. La edad media de los guardias es de cerca de 42 años, y los más jóvenes tienen 27. Los suplentes son más jóvenes, pero aún así la media es de 33 años. En los años siguientes se siguió exigiendo que fuesen licenciados del ejército⁵²⁷. En el caso de Ferrol, cuatro de los cinco postulantes que conocemos en 1849 eran veteranos del ejército, el cuerpo de carabineros o ambos, y ocuparon todas las plazas disponibles⁵²⁸.

Lo mismo, con la salvedad de mayor experiencia, se aplica a los cargos superiores. En Ferrol, en 1849, para los puestos de responsabilidad del servicio de serenos encontramos un segundo condestable, dos sargentos, un teniente y un cabo primero, entre otros. Juan Cende Iglesias, el primer jefe de la Guardia Municipal de Santiago tras su reorganización en 1871, había sido alférez del ejército y sargento de la Guardia Civil, con 27 años de servicio (tenía 48 cuando accedió al puesto), y dos cruces. Su segundo, José Vázquez, había sido también alférez militar y sargento de la guardia civil⁵²⁹.

Ya hemos señalado que el ideal del guardia era un hombre joven, robusto y alto, de buenas cualidades morales y que hubiese pasado por la experiencia del servicio en un cuerpo armado, y también cómo este ideal no primaba ante las dinámicas de reparto de prebendas por parte de las élites locales. Pero no debe pensarse que eran lumpen. Ya desde el establecimiento de la Ronda Municipal los guardias tenían que saber leer y escribir, presentar un aval de buena conducta y, sobre todo, a alguien que los afianzase por 3.000 reales para responder de las responsabilidades a las que pudieran incurrir en el servicio.

Cuando Santiago reorganiza la Guardia en 1870, el 44% de los hombres provenientes de los cuerpos de seguridad municipales sabían escribir correctamente, el 12% eran analfabetos parciales y otro 44% sabía leer y escribir “bastante bien”, “medianamente”, “regularmente” o “algo”. Entre las nuevas incorporaciones, todos saben leer y escribir sin más calificaciones. En A Coruña, en 1868 el alcalde les ordenó aprenderse “de memoria” y en un plazo de dos meses, el reglamento de la Guardia Municipal, y que entiendan las ordenanzas municipales⁵³⁰. Los guardias compostelanos también debían conocer el reglamento de Policía Urbana, las Ordenanzas y los bandos de alcaldía⁵³¹. Obviamente la teoría no es la práctica, probablemente algunos hombres desconociesen parte de las normas con las que tenían que trabajar, pero ya en esta época se esperaba que fuesen capaces de leerlas y comprenderlas, lo que supone una importante diferencia en relación a las fuerzas de serenos de unas décadas atrás.

⁵²⁶ A mayores, entraron en las listas 17 suplentes.

⁵²⁷ Al menos en la teoría; la exigencia figura en el artículo 7 de su reglamento. *Reglamento de la Guardia Municipal de Santiago...* (1885).

⁵²⁸ C-804-1, Archivo Municipal de Ferrol.

⁵²⁹ Ambos fueron suspensos de empleo y sueldo por los sucesos del 13 de agosto de 1873.

⁵³⁰ *Comunicación del alcalde 28 de enero de 1868*, sobre 125 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña.

⁵³¹ *Reglamento de la Guardia Municipal de Santiago...* (1885), pp. 11-12.

Otro aspecto es el de la disciplina interna⁵³². El archivo municipal de A Coruña se conserva un legajo acerca de los asuntos internos de la guardia municipal, aproximadamente entre 1856 y julio de 1869, con algunos expedientes sueltos que llegan hasta 1873. En general se trata de un relatorio de los ceses, fallecimientos, sustituciones, instancias a la alcaldía acerca del pago de material y castigos impuestos por pequeñas faltas a la disciplina, pero también hay un número elevado de apartamientos del servicio: al menos trece en un cuerpo que apenas sobrepasaba los cuarenta hombres.

Cuatro de ellos derivan de abandono del servicio⁵³³. Otros dos, de problemas de comportamiento en el trato con los ciudadanos. En 1857 Ramón Sanjurjo dejó su puesto después de una reprimenda de su superior por “producirse con malos modos y falta de educacion [...] con una señora que queria indicarle una cosa de policia”⁵³⁴, y su compañero Manuel Domínguez fue expulsado en 1861 por intentar golpear a un muchacho, sumado a antecedentes de “carácter violento y arrebatado” (ya se le había amonestado en 1859 por cobrar multas sin dar parte de ello, y responder mal a un superior). Se recomienda a los guardias amonestar a los vecinos con “sensatez y prudencia”⁵³⁵. También se les exigía moralidad: en 1865 se separó a José Gómez por mala conducta moral y “vivir amancebado y con familia”. Según su jefe, se le amonestó y se le concedió una licencia para ir a su pueblo para arreglar unos papeles con la finalidad de casarse, pero aprovechó el tiempo “quizá para divertirse con algun amigo en la ciudad de Santiago”. Después de una prórroga y un nuevo plazo de “12 ó 14 días para arreglar sus asuntos y colocarse en la sociedad”, que resultó infructuoso, se le separó del servicio⁵³⁶.

Pero lo más común son borracheras y desacato. A Antonio Ferreiro lo apartaron del servicio en 1860 después de que dos compañeros lo encontraran borracho “con la lanza tirada a un lado, y cuasi sin poder contestar ni sabia donde se encontraba pues se le notaba alguna bebida”⁵³⁷. A Tomás Vales, al año siguiente por abandonar su puesto para ir a una taberna (abierta, por cierto, a horas prohibidas). Cuando sus compañeros fueron a buscarlo, escapó por la ventana⁵³⁸. Ese mismo año el cuerpo expulsó a Manuel Domínguez. En 1863 se separó a Juan López por discutir con un vecino e insultar y amenazar con la lanza a su jefe de servicio, posiblemente estando borracho⁵³⁹. En 1865 se apartó a Antonio Noguera después de que un superior lo encontrase dormido en su puesto, y, más

⁵³² Según una referencia de la que no hemos podido rastrear la fuente, la Guardia Municipal ferrolana fue disuelta en 1860 por “problemas internos”. LLORCA FREIRE, G. (2008), p. 223.

⁵³³ *Proceso contra Benito Sabín*, sobre el folio 40 del segundo legajo del C-2598, *proceso contra Domingo Rodríguez*, septiembre de 1860, en torno a folio 50 del segundo legajo del C-2598, *proceso contra Juan Martínez*, sobre el folio 55 del segundo legajo, *proceso contra Pedro Cernadas*, sobre folio 70 del segundo legajo del C-2598, *proceso contra Antonio Rajo*, sobre folio 90 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña. Esto se daba también en otras ciudades. En 1881, el alcalde de Vigo destituyó a un cabo o responsable de la Guardia Municipal “que durante seis días no se había presentando al Alcalde ni realizado servicio alguno”. MARTÍN, G. (2018), pp. 19-20.

⁵³⁴ *Proceso contra Ramón Sanjurjo*, sobre el folio 30 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña.

⁵³⁵ *Amonestación a Manuel Domínguez*, 1859, sobre folio 25 del segundo legajo. *Proceso contra Manuel Domínguez*. Sobre el folio 70 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña.

⁵³⁶ *Comunicación de Antonio Llamas a la alcaldía*, 15 de diciembre de 1865, sobre folio 110 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵³⁷ *Proceso contra Antonio Ferreiro*, 1860, sobre el folio 35 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña.

⁵³⁸ *Proceso contra Tomás Vales*. Sobre el folio 60 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña.

⁵³⁹ *Proceso contra Juan López*. Sobre el folio 80 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña.

tarde en esa misma noche, entrar en una casa a “pasar el tiempo con unas mugeres”⁵⁴⁰. A Manuel Morodo se le apartó del cuerpo en 1868 después de un incidente con un alférez del escuadrón de Cazadores de Galicia⁵⁴¹. El año siguiente se despidió a José Díaz por golpear a un compañero y apuñalar a otro estando borracho⁵⁴², y en 1870 a Francisco Seijas por insultar a sus compañeros y discutir con un superior (según la versión del implicado, su comportamiento fue una queja fundada y moderada)⁵⁴³.

En cambio, los problemas con la ley podían ser disculpables. También causaban baja mientras estaban implicados en procesos penales. José Faraldo, un guardia municipal, causó baja de empleo y sueldo en 1860, cuando ingresó en prisión, y se presentó a su jefe cuando salió libre “libre y dispuesto a prestar el servicio que V. S. se digne ordenarle”, según comunicó el responsable de la Guardia al alcalde. “Desele de alta para que preste el servicio de [segunda?] clase”, respondió este⁵⁴⁴. A Diego Roibás se le apartó mientras estuvo procesado por el desacato a su jefe y el homicidio de Fernando Macías, pero luego se le volvió a incorporar al servicio en 1871⁵⁴⁵.

Estos casos no deben llevar a considerar que el servicio en su conjunto estuviese formado por inútiles o incompetentes, ni que los hombres que fuesen buenos en un sentido lo fuesen en todos. José Núñez, aunque iba sin armas y de paisano, desarmó, arrestó y condujo a la cárcel a un hombre que acababa de matar a puñaladas a una muchacha en 1866, por lo que se le concedió una recompensa de 30 escudos⁵⁴⁶. En 1866 el guardia de A Coruña Juan Fanjul recibió treinta escudos de gratificación después de lanzarse al mar, en medio de la noche, para rescatar a un suicida⁵⁴⁷. Pocos meses después se le amonestó por faltas en el servicio y contra la moral no especificadas, quizás beber durante el servicio, y en 1868 abandonó el servicio. El problema en esta época parecía ser el de encontrar hombres con el necesario autocontrol.

En algunos casos se habla de guardias que cobran multas sin dar parte de ellas, pero no parece un problema generalizado en el cuerpo. El principal problema para el Ayuntamiento era el de los guardias que se regentaban tiendas y tabernas, lo que, además de distraerlos de sus funciones, ofrecía inconveniente “al imparcial y buen desempeño de estas”, ya fuese relajando la vigilancia con sus parroquianos, ya incumpliendo las ordenanzas municipales. En 1850 se prohibió a los guardias desempeñar otro oficio y se les obligó a renunciar a poseer establecimientos⁵⁴⁸. En la reorganización propuesta por el alcalde Bermúdez en 1856 se reiteró que no les estaba permitido tener establecimientos “por sí ó sus mujeres tengan establecimiento de ninguna clase”, disposición que se reiteró, en términos muy parecidos, en 1868, dando un plazo de 15 días para deshacerse de ellas a los que las poseyeran⁵⁴⁹. En 1872 vuelve a repetirse una disposición parecida⁵⁵⁰.

⁵⁴⁰ *Proceso contra Antonio Noguera*, sobre folio 100 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴¹ *Proceso contra Manuel Morodo*, sobre el folio 110 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴² *Proceso contra José Díaz*, final del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴³ *Proceso contra Francisco Seijas*, tercer legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴⁴ *Comunicación de Anastasio Llamas, jefe de la guardia municipal, al alcalde, 7 de mayo de 1860*. Sobre el folio 50 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴⁵ *Comunicación del jefe de servicio al alcalde, 20-3-1871*, tercer legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴⁶ *Comunicación de Llamas al alcalde, abril de 1866*, sobre 115 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴⁷ *Comunicación de Llamas al alcalde, abril de 1866*, sobre 116 del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴⁸ *Comunicación del alcalde, 13-02-1850*, Expediente... C-9030. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁴⁹ *Comunicación del alcalde, 3 de agosto de 1868*, final del segundo legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

La violencia contra los ciudadanos fue, al parecer, característica durante una cierta época de los guardias municipales compostelanos, a los que llamaban *villeus*⁵⁵¹, si bien el reglamento de 1885, en sus artículos 69 a 79, les exigía ser corteses, gentiles y tranquilos en el trato con los ciudadanos. Las detenciones arbitrarias eran denunciabiles legalmente incluso aunque el Ayuntamiento no tomase medidas, pero las penas no eran graves. En el año 1900 un guardia municipal fue hallado culpable por un jurado por arrestar a Jacinto Baluja por un hecho indeterminado pero que no constituía delito, y con las garantías constitucionales en vigor. El delito se saldó con una multa de 125 pesetas, lesionar a Baluja con cinco días de arresto, y romperle la ropa con cinco pesetas de sanción y una indemnización similar, pero no a una inhabilitación⁵⁵².

En cuanto a sus funciones, los reglamentos incluyen una gran cantidad de obligaciones, desde detener delincuentes a alertar de los incendios. En tanto que ubicuos y cercanos a las denuncias ciudadanas, les correspondía lidiar con buena parte del delito menor. Los encontramos persiguiendo pequeños crímenes, llevando a borrachos a las celdas de prevención, deshaciendo peleas, impidiendo pedreas entre chavales o deteniendo ladronzuelos⁵⁵³. Si observamos el único libro-registro que hemos encontrado en los diversos archivos consultados, el de la guardia municipal de Ferrol entre abril de 1935 y diciembre de 1936, encontramos que buena parte de las intervenciones tienen que ver con las ordenanzas municipales y la policía urbana, y no tanto la represión del crimen: los resúmenes de las entradas tienen nombres como “señora que se emperrea en el mercado”, “salen aguas sucias a la vía pública”, “para que le retirase una escalera”, “por dejar el carro y caballos abandonados”, y, reiteradamente, gente que orina en la calle, perros sin bozal y retretes que rebosan. En junio de 1935, de un total de 455 entradas, solo contamos cuatro casos de robo o hurto, un matute apresado, un posible disparo, tres casos de riñas o gritos subversivos, ocho agresiones con un protagonista adulto y algunos escándalos, riñas y gamberradas de chiquillos⁵⁵⁴.

En ciertas ocasiones también se desempeñan manteniendo el orden público, o reprimiendo organizaciones obreras. En 1896, en Santiago, fue la Guardia Municipal la encargada de detener a 47 carpinteros reunidos en la Alameda por una protesta⁵⁵⁵. En 1902 los obreros vigueses protestaron contra la reposición como jefe de la guardia local de Prudencio Contreras, al que acusaban de irregularidades. En los Carnavales del año siguiente hubo un motín derivado de la agresión de un guardia a un enmascarado, que escaló con peticiones a la dimisión de Contreras y la intervención de la Guardia Civil, que disparó contra los manifestantes. Hubo tres muertos⁵⁵⁶.

Si observamos la relación de “partes producidos a la Alcaldía por la Guardia municipal y comunicaciones al Juez de instrucción dando cuenta de los mismos” de 1895⁵⁵⁷ vemos cómo la población acudía con naturalidad a los guardias, normalmente para denunciar una agresión, pero también por una amplia variedad de problemas. Dolores García, una vecina de la calle del Castro, acudió a dos guardias una noche de febrero “para que la auxiliasen por que su marido Andrés Rico la maltrataba a ella y a su hijo”; el tal Rico se negó a salir de su casa y agredió a uno de los guardias. En marzo, Rafael Vidal y Manuela Valcárcel, de la calle de la Virgen, requirieron el socorro de otro

⁵⁵⁰ *Comunicación de alcaldía, 28-02-1872*, final del tercer legajo del C-2598. Archivo Municipal de A Coruña

⁵⁵¹ PEREIRA, D. (2012), p. 33.

⁵⁵² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 40, folios 1521-1523.

⁵⁵³ En este sentido, pueden entenderse como “policías de primer escalón”, los primeros en entrar en contacto con los problemas debido a su proyección espacial pero remitiéndolos a fuerzas más especializadas si les desbordasen. MONTERO AROCA, J. (1979), p. 72.

⁵⁵⁴ *Libro de registro* nº 26. L-1071-B, Archivo Municipal de Ferrol.

⁵⁵⁵ PEREIRA, D. (2012), p. 95.

⁵⁵⁶ MARTÍN, G. (2018), pp. 53-60.

⁵⁵⁷ Documento C-1560.2.10.4, Archivo Municipal de Ferrol

municipal porque otro hombre había entrado en su casa amenazándolos con un puñal. Al guardia municipal José Peña se le presentó “Juan Fistes, cocinero del Suizo, manifestando que Genoveva Rodríguez habitante de la calle de S. Sebastián nº 40, le había sustraído una peseta cincuenta céntimos del bolsillo”. Al guardia Domingo López lo avisó un hombre porque su suegra “quería matarse con una cuchilla”. A Juan Méndez se le acercaron algunas operadoras de la fuente de San Amaro, manifestando que dos niños pedigüños andaban robando las llaves de las casas en las que pedían limosna; el guardia cazó a uno, recuperó cinco llaves y las devolvió a sus dueños. A Juan Pérez, unas mujeres vinieron a contarle en junio que una joven madre de Pontedeume había venido a dejar a su niña en la Inclusa, pero que temían que “la dejase tirada en cualquiera parte”.

La familiaridad de estas policías de proximidad a la población local podía derivar en un papel mediador⁵⁵⁸. Si el dueño de un bar y unos clientes empiezan a golpes por el pago de unos cafés, un sereno interviene y consigue una solución de compromiso⁵⁵⁹. En una ocasión, un compostelano bebido que discutía con su hijo pidió al sereno que lo encerrase en la *Falcona*⁵⁶⁰. Comparten este papel con amigos de los contendientes, notables locales o alcaldes de barrio⁵⁶¹, que puede que complementasen la labor de los agentes formales⁵⁶². Esta aproximación, curiosamente, sigue recomendándose en un manual contemporáneo para policías locales⁵⁶³.

En ocasiones había discusiones de competencias. Un sereno vigués avisó a la Guardia Municipal para que vigilase un almacén que había quedado abierto (pues él tenía que estar acudiendo a llamadas para abrir los portales). Los guardias le dijeron que era competencia del Cuerpo de Seguridad, y el hombre acabó sacando la caja de caudales del lugar y depositándola en la redacción de un periódico cercano⁵⁶⁴.

Las guardias municipales eran un cuerpo uniformado, pero sus armas variaban. El chafarote o sable en los guardias y el chuzo en los serenitos parecen ser las armas más empleadas en los enfrentamientos callejeros. Los guardias de Vigo llevaron pistola durante parte de su existencia, y una fuente secundaria señala que también los serenitos de Ferrol⁵⁶⁵, aunque, según el reglamento de 1849, combinaban sable con un “funquillo o bastón delgado”⁵⁶⁶. Que llevasen o no armamento era importante porque de él derivaba el carácter de fuerza armada que los ponía directamente bajo el mando del alcalde, que no de la corporación, lo cual tenía consecuencias políticas⁵⁶⁷.

⁵⁵⁸ TURRADO VIDAL, M. (2001), pp. 159-160.

⁵⁵⁹ *La Voz de Galicia*, 01-07-1883.

⁵⁶⁰ *La Gaceta de Galicia*, 29-03-1886.

⁵⁶¹ *La Voz de Galicia*, 19-02-1885, 26-05-1885, 0-07-1885, 13-07-1886.

⁵⁶² Según Mark Cooney en *Warriors and Peacemakers*. Citado en SPIERENBURG, P. (2004), pp. 8-9.

⁵⁶³ Así, el *Manual del policía local* del año 2000 señala que “Los policías locales, al igual que otros agentes sociales, se enfrenta diariamente a problemas concretos para los que la simple aplicación de la ley no ofrece respuesta”, y resalta su “función de mediación” en discusiones familiares y riñas vecinales. GARCÍA GIL, F. J., GARCÍA NICOLÁS, L. A. (2000), pp. 361-362.

⁵⁶⁴ *El Faro de Vigo*, 06-10-1925, p. 8.

⁵⁶⁵ El autor parece señalar como fuente el reglamento de 1849 y afirma que portaban “lanza, sable e pistola” LLORCA FREIRE, G. (2008), p. 176.

⁵⁶⁶ *Reglamento para la Organización de la ronda municipal que para el servicio diurno y nocturno debe establecerse en Ferrol desde el 1º de enero de mil ochocientos cincuenta (1849)*, art. 8. C-804-5.2.10.4, Archivo Municipal de Ferrol.

⁵⁶⁷ Esto se comprobó en Vigo en 1887, cuando parte del pleno trató de privar a los guardias de arma de fuego y sable para sustituirlos por una vara, con lo que hubieran salido del control del regidor. Éste logró abortar la maniobra, que había sido aprobada por la corporación, gracias a que la decisión fue revocada por el Gobernador Civil. MARTÍN, G. (2018), pp. 40-43.

La principal limitación para el establecimiento de una guardia abundante y bien servida era siempre el dinero, problema que los ayuntamientos sufrían a la hora de proporcionar otros recursos, como la educación⁵⁶⁸. Más recursos hubieran permitido una mayor capacidad para atraer a hombres capaces interesados (apartado en el que las policías locales debían competir con los aparatos de seguridad estatal, las ofertas de serenos privados y otros empleos públicos como las porterías), plantillas más numerosas que permitiesen afrontar jornadas más cortas y patrullar por parejas.



⁵⁶⁸ HIJANO PÉREZ, A. (2013).

4. POLICÍAS SIN UNIFORME: VIGILANTES, SOMATENES Y PEDÁNEOS

En la Galicia de antes de la Guerra Civil, el monopolio de la violencia por parte del Estado y sus representantes distaba de ser absoluto. La ciudadanía, los cargos municipales y las élites locales la empleaban para sus propios fines, que a menudo estos eran contrapuestos al Estado, o se empleaban en flagrante conflicto con la legalidad, a través del delito o de las movilizaciones que ponían en cuestión el orden público. Veremos esa casuística en los capítulos posteriores. En este nos centraremos en las fuerzas particulares que actuaban a favor de la ley y el orden: ciudadanos que persiguen a ladrones e incluso los castigan, grupos armados organizados por los notables locales para proteger el orden público en momentos de tensión o disturbios, criminales encadenados por sus vecinos y custodiados en casas particulares.

Al inicio de nuestro periodo de estudio, detener a un delincuente in fraganti no era solo un derecho de todo un ciudadano, como sigue siéndolo en la actualidad, sino una obligación⁵⁶⁹. Esta concepción era heredera de las circunstancias del Antiguo Régimen, un periodo en el que, como mencionábamos en el apartado 3.2, no había fuerzas de policía dedicadas y el crimen tenían que perseguirlo los militares y vecinos.

En este sentido, resultaba esperable que los civiles se defendiesen ellos mismos de los criminales⁵⁷⁰, y la justicia les obligaba a servir como auxiliares armados. A finales del siglo XVIII, por ejemplo, en las cárceles de las diversas jurisdicciones gallegas los guardianes eran nombrados entre los vecinos, que, a designación del juez, custodiaban a los presos armados normalmente con “malas lanzas o chuzos”, bajo la pena de embargo de bienes si se escapaban los presos, según un escrito de denuncia contemporáneo⁵⁷¹. Los paisanos se resentían por la imposición y distribución de estas corveas⁵⁷². Todavía en 1920, tras un homicidio en Bueu, vemos a la prensa pedir que en el caso de que no hubiese guardias civiles para trasladar a los detenidos por la muerte “por hallarse concentrada [la fuerza] en Cangas, designe el alcalde a dos o más vecinos que les custodien y conduzcan a la capital”⁵⁷³.

Pero en esta época ya era anacrónico. A partir de 1870 deja de ser obligatorio detener a los delincuentes, y ya a inicios del siglo XX el papel de los vecinos en la persecución del crimen va haciéndose escasa, y los individuos que defendían la propiedad y las *posse comitatus* suponían un pequeño porcentaje de la violencia. Según veremos en el apartado 7.8, entre una muestra de centenares de homicidios en esta época, menos del 1% son delincuentes abatidos por ciudadanos particulares.

4.1 “El pueblo mata a dos gitanos”: linchamientos de criminales

A Manuela Gómez, una vecina de Mesía le robaron el 1 de febrero de 1921 una buena cantidad de propiedades: dieciséis sábanas, cuatro colchas, dos mantas, tres pañuelos, otras prendas de ropa, “gran cantidad de carne de cerdo”, 135 pesetas y una yegua. Denunció, y la Guardia Civil encontró

⁵⁶⁹ MAS Y ABAD, C. (1850-A), p. 345.

⁵⁷⁰ A finales del siglo XVIII comandante militar enviado a Extremadura para perseguir bandidos se quejaba de que “unas poblaciones de tres o cuatro mil vecinos se dejen avasallar de un número tan corto [de asaltantes], y que por esta cobardía nos hagan hacer unas marchas tan largas y violentas en un tiempo tan riguroso”. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), pp. 230-231.

⁵⁷¹ ANÓNIMO, *Memoria sobre la necesidad de remediar en Galicia ciertos abusos.*, p. 6, citado en GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. (1994), p. 45.

⁵⁷² VELASCO SOUTO, C. F. (2000), pp. 114-115.

⁵⁷³ FV, 02-06-1920, p. 1.

parte de lo robado en casa de un vecino de la parroquia de Loureda, en Boqueixón, un pueblo separado a unos 50 kilómetros del lugar del robo. A la yegua la encontraron abandonada algunos vecinos de la parroquia el día 3, y sospechando que podía haber sido robada, se la llevaron al pedáneo. Esa noche se presentaron “dos gitanos” reclamándola. El pedáneo, respaldado por otros vecinos, se negó a dársela, y empezó una disputa; según *La Voz de Galicia*, los vecinos mataron a los gitanos a palos y abandonaron los cuerpos en un monte. La Guardia Civil detuvo por las muertes a nueve hombres de la parroquia, de entre 25 y 50 años. Todos afirmaban ser inocentes⁵⁷⁴.

El linchamiento estaba presente en la España de la Restauración. Un reciente artículo de Bascuñán Añover identifica 11 casos consumados en toda España entre 1875 y 1923, con otras 78 tentativas abortadas por las autoridades locales o las fuerzas del orden, alguno de ellos en Galicia. Es un cálculo de mínimos, y sin duda habría más casos⁵⁷⁵. Tres cuartas partes son respuesta a delitos de sangre, en especial sucesos como infanticidios, parricidios y otros delitos especialmente chocantes, y no se trata solo de muestras de furia espontánea: en ellas Bascuñán encuentra “rasgos de una violencia más coordinada que visceral”, que ofrecía modos de agencia a las comunidades. Les permitía preservar su integridad ante nuevas formas de organizar la convivencia y hacer justicia y expresar su propia forma de entender esta y administrarla. También eran “oportunidades para hacer política” y modos de presionar a los poderes del Estado. Por ejemplo, un caso derivó en la salida de un juez de instrucción impopular⁵⁷⁶. Según Lucea Ayala, que estudió el fenómeno en Aragón, este tipo de linchamientos empieza a escasear, aunque no desaparece, a partir de la segunda década del XX⁵⁷⁷.

Estas consideraciones son necesarias para entender el fenómeno, aunque siempre debemos tener presente que el linchamiento no era un suceso habitual en Galicia y su impacto no puede compararse con otras sociedades contemporáneas en las que estaba presente el vigilantismo, como la estadounidense. Son raras las muertes (las de los gitanos en Mesía son las únicas que hemos detectado, y no están dentro de la muestra de homicidios que desarrollaremos en el capítulo 7 y siguientes), no hay rituales de tortura⁵⁷⁸, y no hay grupos organizados que ejecuten a delincuentes. Como ha demostrado Bascuñán, la mayor parte de las tentativas son impedidas por las autoridades (lo que lleva a preguntarse si en algunos casos los amotinados querían linchar al delincuente, o simplemente abuchearlo, pero en todo caso demuestra que la presencia de la autoridad podía controlar a la multitud). Los que matan en frío por la propiedad lo hacen casi siempre por disputas relativas a ella que pertenecerían a la jurisdicción civil, pero que en conjunto no tienen sanción comunitaria ni son consideradas como un tipo de justicia por el resto de la población.

Algunos linchamientos son respuestas inmediatas ante un delito. Por ejemplo, en 1935, un carterista coruñés se internó en una aglomeración en la feria de Meira, se acercó disimuladamente a uno de los asistentes y le hizo un corte en el bolsillo de la americana para sacarle la cartera. No disimuló lo suficiente. Su víctima se dio cuenta y pudo sujetarlo; el ladrón “fue apaleado por el público y muy mal lo hubiese pasado” si dos guardias de Asalto fuera de servicio no se hubieran hecho cargo de él, “evitando el linchamiento”⁵⁷⁹. Cinco años antes, un carterista había recibido una paliza en grupo⁵⁸⁰.

⁵⁷⁴ LV, 16-02-1921, p. 1.

⁵⁷⁵ BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2019), pp. 705-706.

⁵⁷⁶ BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2019), pp. 703, 709-715.

⁵⁷⁷ LUCEA AYALA, V. (2009), pp. 77-79, 97.

⁵⁷⁸ Tras una muerte acontecida en Bergondo en 1902, de acuerdo con el diario *El Noroeste*, varios hombres “molieron a palos” al homicida y le hicieron pasar toda la noche atado a un árbol frente al cadáver de su víctima. BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2019), p. 704. En *La Voz de Galicia*, en la que se dice que el homicidio fue el resultado de una riña entre mozos, se dice que el padre del muerto y algunos otros persiguieron al homicida y lo golpearon y amedrentaron con armas porque se resistió; el padre lo habría atado a un árbol hasta que llegase la Guardia Civil porque intentaba escaparse de nuevo. LV, 10-12-1902, pp. 1-2.

⁵⁷⁹ De acuerdo con un testimonio familiar, un bisabuelo del autor de esta obra protagonizó un incidente similar contra un ladrón que le echó mano a la cartera y por esta época. EP, 06-03-1935, p. 2.

⁵⁸⁰ FV, 08-05-1930, p. 10.

En otro caso ocurrido a 1935, dos ladrones hirieron a un matrimonio en cuya casa habían entrado a robar y “por la prudencia y defensa de la Guardia Civil no fueron maltratados por el vecindario amotinado”⁵⁸¹.

Esto indica algo con respecto a las mentalidades. No debemos exagerar la implicación emocional de los ciudadanos al impartir estas formas de “*rough justice*”: nuestra época es una en la que la violencia estallaba con facilidad, como veremos en el capítulo 11. Pero si los ciudadanos perseguían el delito individual o colectivamente era porque lo consideraban un mal que les perjudicaba, no solo porque estuviese prohibido, y si atacaban a los criminales económicos era porque había una animosidad popular hacia los ladrones, fácilmente explicable: como recuerda Emsley, si las clases bajas no simpatizaban con los delincuentes es porque eran víctimas de ellos⁵⁸².

Pero las persecuciones expresan más la condena comunitaria, en nuestra opinión, cuando no son respuestas espontáneas a un delito que acaba de ocurrir, sino que se persigue a un delincuente en frío; aquí se ve más fácilmente la búsqueda de agencia a la hora de aplicar justicia por parte de la población que señala Añover. La Guardia Civil de Vilagarcía tuvo que usar la fuerza en 1920 para evitar que el público linchara a Amadeo Blanco, el jefe de la estación telegráfica, después de que este disparara con un revólver contra un anciano (el día anterior, Blanco ya había lesionado al juez municipal)⁵⁸³. José Regueira tuvo que esconderse en un tojal escapando de los parroquianos de O Val, en Narón, que lo acusaban de haber abusado de una joven “imbécil” de la localidad⁵⁸⁴.

Probablemente los agresores consideraban que las víctimas de los linchamientos, además de haberse saltado el Código Penal, eran individuos objetivamente malvados. Cusac, en su obra acerca del castigo en los Estados Unidos, afirma la disminución del violencia en este país coincidió con una agudización de su percepción como un problema grave, de una mayor presencia de los crímenes en los medios y en la ficción. La tendencia a exigir un mayor castigo hacia los delincuentes habría empezado en los años 70, cuando existía realmente una oleada de violencia, pero en las décadas siguientes se habría asentado una tendencia cultural que veía con simpatía el empleo de métodos agresivos para reprimir a presuntos delincuentes y presos: “Americans have become hardened to the people we put in detention or behind bars [y han llegado a pensar que] criminals are bad people –almost subhuman-who can’t be rehabilited; therefore, punishment must be as harsh as possible”⁵⁸⁵.

Por último, que los gallegos de la época no linchasen frecuentemente a los delincuentes no quiere decir que les apenase demasiado verles desaparecer. Las hermanas Teresa y María Alján Rodríguez, de 60 y 70 años de edad respectivamente, protagonizaron en junio de 1930 una pelea a palos porque María entró en la finca de la primera para coger unas patatas para comer. En la última noche del mes, María pidió a un criado joven que vivía cerca que durmiese con ella, “porque le tenía miedo a su hermana”. Ese miedo no le impidió despertarlo a las seis de la mañana para que la acompañara a otro robo de patatas en la finca de su pariente y se quedase vigilando. Teresa los cogió de improviso y mató a su hermana con un azadón. En los vecinos el homicidio “no produjo esa impresión que en casos análogos se refleja. Nada tiene de particular esta indiferencia”, señala el periodista, puesto que la muerta era una ladrona habitual de huertas⁵⁸⁶. También es posible que hubiese venganzas privadas que no hemos detectado con una cierta sanción de la comunidad. El día de Nochebuena de 1925 Jesús Patiño, un vecino de la parroquia monfortina de Piñeira con “fama de

⁵⁸¹ LR, 08-01-1935, p. 3.

⁵⁸² EMSLEY, C. (1997), p. 286.

⁵⁸³ FV 09-07-1920, p. 7.

⁵⁸⁴ EP, 05-02-1920, p. 2.

⁵⁸⁵ CUSAC, A-M. (2009), pp. 103, 210, 252.

⁵⁸⁶ FV, 02-07-1930, p.1, 03-07-1930, p.1, 04-07-1930, p. 8, 12-07-1930, p. 1.

pendenciero” y al que se le acusaba de estar complicado en un crimen reciente de la parroquia, recibió una “brutal agresión”. Recibió un tiro en la pierna, y su hijo Luis, otro en la cabeza que lo dejó muerto. Fueron detenidos tres hombres de la localidad, pero “está dicho sujeto muy mal visto entre sus vecinos siendo muchos los enemigos que tiene, lo cual dificulta bastante el descubrimiento de los autores del hecho”⁵⁸⁷.

Además de los casos contra criminales, una significativa minoría de los linchamientos se debió a atropellos⁵⁸⁸. Los nuevos automóviles eran muy peligrosos para los transeúntes, los accidentes frecuentes, y los viandantes reaccionaban algunas veces con hostilidad. Después de que un bus atropellara a un niño de cinco años en Vigo, “el público lanzó algunas piedras contra el coche y contra los guardias que protegían a los empleados”⁵⁸⁹.

4.2 “Le propinaron una monumental paliza”: el vigilantismo

En septiembre de 1883 una banda armada asaltó la casa de otro “hacendado labrador”, don José Vilacoba, repartiendo golpes y amenazas contra él su mujer y su madre impedida porque no encontraron en su casa más que 48 duros. Los hijos escaparon y pidieron ayuda a los vecinos, y cuando estos acudieron, mal armados, los asaltantes los recibieron con un “nutrido fuego”, desde las ventanas; el alcalde de barrio murió cuando se aproximó hasta la puerta de la casa. Los asaltantes, que “iban sin disfraz y no eran conocidos”, escaparon al ver que se congregaban labradores de las aldeas cercanas⁵⁹⁰.

Los vigilantes que encontramos en Galicia durante nuestro periodo de estudio son agrupaciones de vecinos armados ad hoc y efímeras, surgidas, para responder a casos puntuales o crisis de delincuencia. No tienen reglamento, listas de participantes, no digamos uniformes o armas; carecen, siquiera, de un nombre con el que identificarse, y se funden con la respuesta espontánea ante el crimen. En este sentido Galicia no se diferencia de la mayoría del territorio español, en el que, con la excepción del Somatén rural catalán, no existían cuerpos ciudadanos armados prolongados en el tiempo dedicados a la persecución del delito⁵⁹¹. Sí grupos unidos por vínculos sociales, de parentesco o de vecindad que actuaban con ese fin.

Pongamos algunos ejemplos. Un vecino de la parroquia de San Cosme de Cusanca, en O Irixo, regresaba de la feria de Lalín la noche del 3 de febrero de 1920, cuando dos atracadores cayeron sobre él, intentando reducirlo. A un viandante que lo presenció “se le ocurrió con muy buen acuerdo, aproximarse a la iglesia de Cusanca” y empezar a tocar las campanas a rebato. Los atracadores se dieron a la fuga, haciendo algunos disparos de armas de fuego sobre otros dos parroquianos que también volvían de la feria y parece que fueron los primeros en llegar al lugar. Si bien se movilizaron “numerosos vecinos armados con palos, hoces, guadañas, escopetas y cuantos instrumentos ofensivos y defensivos encontraron a su alcance”, los bandidos se escaparon⁵⁹². La prontitud de la respuesta quizás se deba a que había habido atracos en la zona anteriormente, pero en todo caso revela una disposición a las ayudas entre vecinos para evitar los robos. En otro caso, un grupo de tres atracadores asaltó una casa en Pereiro de Aguiar, y una vez más las campanas sonaron

⁵⁸⁷ EP, 27-12-1925 (1)

⁵⁸⁸ Nueve en la muestra de Bascuñán Añover, algo más del 10%. BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2019), p. 707.

⁵⁸⁹ FV, 25-01-1920, p. 4.

⁵⁹⁰ *La Gaceta de Galicia*, 20-09-1883

⁵⁹¹ Puntualmente se pudieron organizar partidas con sanción estatal en otros puntos del territorio, como la real orden de 18 de febrero de 1797 para la persecución de malhechores.

⁵⁹² LR, 22-02-1920, p. 2.

en alarma. Un vecino llegó disparando con una pistola, pero no alcanzó a ninguno de los maleantes y uno de los tiros de respuesta lo malherió en una pierna. La hija del propietario tuvo mejor suerte e hirió “de alguna importancia” a uno de los atracadores con un trozo de leña⁵⁹³.

Es importante señalar que la labor de los vecinos iba más allá de evitar delitos in fraganti. También fiscalizaban el trasiego de personajes sospechosos o detenían delincuentes en frío. En 1936, una lechera que había ido a Lugo a vender su mercancía volvía a su casa, en la cercana parroquia de San Vicente de Pías, cuando observó que la seguía un desconocido. Al llegar a casa se lo indicó a su marido, Andrés Abuín, que salió a buscarlo junto con varios vecinos. El sujeto les pareció sospechoso, y, según las versiones, Abuín propuso entregarlo a la Guardia Civil o “darle su merecido, ya que aquí no viene a hacer cosa buena alguna”. En todo caso, el forastero sacó una pistola, abrió fuego (uno de los proyectiles hirió a Abuín en la cara) e intentó darse a la fuga, pero los vecinos lo alcanzaron y le propinaron una paliza “regular” o “monumental”, según la fuente. Luego lo encerraron y avisaron a la Guardia Civil, que lo llevó primero al hospital y luego a la cárcel. El apalizado resultó llamarse José Darriba, recientemente licenciado de presidio y al parecer con antecedentes por atraco. El Gobernador Civil de la provincia transmitió a la prensa “su satisfacción por la reacción ciudadana que se venía observando, como lo demostraba lo acaecido en San Vicente de Pías, recomendando que se hiciera público lo ocurrido para que cundiera ejemplo”⁵⁹⁴.

En alguna ocasión es difícil saber si se establecen patrullas ciudadanas o se contrata a vigilantes; ambas posibilidades entran dentro de lo posible en esta época. Por ejemplo, en 1925, los vecinos de la parroquia de Aldán, en Bueu, acordaron “establecer un retén de vigilantes nocturnos, visto el continuo asalto a la propiedad”⁵⁹⁵.

En Estados Unidos, donde el vigilantismo está muy estudiado, los castigos informales eran sustancialmente más violentos que los judiciales. Ya en el periodo colonial se formaron comités de vigilantes que golpeaban y ejecutaban delincuentes ante lo que consideraban laxitud de las autoridades⁵⁹⁶. Curiosamente, el auge de los linchamientos convivió con la tendencia a eliminar las ejecuciones judiciales, aunque puede que esto refleje cambios de sensibilidades en grupos sociales diferentes⁵⁹⁷.

En Galicia la intensidad de los castigos es muy inferior. En la primera mitad del siglo XIX, según López Morán, los vecinos amparaban las ejecuciones extrajudiciales de bandidos, bajo el soporte legal de la ley de fugas. Que los delincuentes muriesen libraba a los vecinos de los costes y cargas de mantenerlos vivos, de hacer guardias nocturnas y diurnas hasta que llegasen a la cárcel de partido, de tener que mantenerlos mediante cargas a los vecinos municipales una vez en ella. También eliminaba la posibilidad de que se fugasen (cosa frecuente), volviesen a delinquir o se vengasen. Sin embargo, las ejecuciones que cita la autora las llevaron a cabo los soldados⁵⁹⁸. Remontándonos al Antiguo Régimen, Felipe IV y Carlos III sancionaron que particulares ejecutaran bandoleros en determinadas circunstancias⁵⁹⁹.

Para explicar por qué no se dio el fenómeno del vigilantismo volveremos a Estados Unidos, como contra ejemplo. Nació en un espacio con características que lo diferenciaba de Europa: zonas

⁵⁹³ LR, 21-02-1935, p. 3, 22-02-1935, p. 5.

⁵⁹⁴ EP 21-03-1936, p. 2. FV 21-03-1936, p. 2.

⁵⁹⁵ FV, 04-01-1925, p. 2.

⁵⁹⁶ Por ejemplo, en Carolina del Sur aparecieron los Regulators después de que el gobernador perdonara a cinco delincuentes sentenciados a muerte por robo. WALKER, S. (1980), pp. 31-32.

⁵⁹⁷ CUSAC, A-M (2009), pp. 94-97.

⁵⁹⁸ LÓPEZ MORÁN, B. (1995), p. 324.

⁵⁹⁹ CARDESÍN, J. M. (2008), p. 39.

amplias de frontera en las que actuaban bandas nómadas y muy violentas de criminales, fuerzas policiales poco centralizadas y bajo control popular, espacios en los que no existía autoridad central o estaba constituyéndose, una concepción de la justicia como emanante del pueblo que justificaba que las comunidades aplicasen el castigo sin pasar por el sistema judicial. Pero también comunidades jóvenes y heterogéneas, en la que se producía violencia organizada entre diferentes grupos religiosos y étnicos, o choques por otros motivos se agravaban por estas diferencias⁶⁰⁰. En la frontera, los grupos de vigilantes eran a veces un medio de presionar para conseguir transferencias de propiedad de la tierra⁶⁰¹.

Tras la Guerra Civil, una parte importante de los blancos y los negros del Sur no confiaban en el Estado para perseguir el crimen sino que, ante un ataque a un miembro de la comunidad, reaccionaban a través de grupos de vigilantes, juicios paralelos y linchamientos. Si bien las turbas linchaban a miembros de su propia raza, y en ocasiones muchedumbres mixtas cooperaban para castigar y matar a un criminal, si el crimen se producía entre una comunidad y otra la violencia se hacía más cruel; y desigual, pues casi siempre se cometía de blancos a negros. Para los primeros, el linchamiento se convirtió en un modo de aterrorizar a los libertos y negarles derechos políticos y ciudadanos, más allá de la persecución de los delitos en sí⁶⁰². Otro factor a tener en cuenta es la gran impunidad presente en ese contexto⁶⁰³ y que las bandas, además de defender la propiedad, perseguían a oponentes políticos⁶⁰⁴.

Otro ejemplo es el de la Rusia zarista posterior a la emancipación de los siervos. Según señala Stephen P. Frank, pese a la idea del Imperio como un estado policial, la presencia de fuerzas del orden era muy limitada en los vastos espacios rurales de la Rusia europea, y proliferaban delitos graves y sostenidos en el tiempo por bandas organizadas⁶⁰⁵. Los campesinos se quejaban contra la justicia en el cambio de siglo porque la veían como poco efectiva y blanda, en cuestiones como el robo de caballos, pero también incluyendo pequeños robos dentro de sus comunidades⁶⁰⁶. Como respuesta, encontramos medidas brutales contra los criminales: torturas por parte de policías y comunidades⁶⁰⁷, linchamientos, asaltos a cárceles para matar delincuentes, patrullas masivas, y, en 1911 en la provincia de Volynia, “a virtual state of warfare” entre campesinos que habían matado a siete ladrones de caballos y herido a veinte y los camaradas de los delincuentes, que buscaban venganza⁶⁰⁸. Todo esto no era necesariamente reflejo de una brutalización de las costumbres, pues, por ejemplo, los castigos físicos legalmente suministrados entraron en declive⁶⁰⁹, pero sí de una ciudadanía que buscaba castigos más duros que los que imponía la ley (y que muchas veces podía aplicarlos sin represalias del Estado).

⁶⁰⁰ La competición de distintas etnias y confesiones estuvo relacionada con el fenómeno de los vigilantes, que incluía competición política además de la defensa de la propiedad. GILJE, P. A. (1996), pp. 83. Sobre motines, linchamientos, milicias, vigilantes y enfrentamientos en los EEUU en el siglo XIX, ligada a cuestiones étnicas y políticas, pp. 64-70, 77-80, 82, 86, 130.

⁶⁰¹ GILJE, P. A. (1996) p. 83-84.

⁶⁰² VANDAL, G. (2000), pp. 90-109. Los linchamientos se desencadenaban a veces en base a crímenes reales, otras en base a rumores, y en ocasiones porque un negro se había saltado normas de comportamiento impuestas por los blancos. En conjunto, eran “a form of terror used to keep black Americans down”. GILJE, P. A. (1996) p. 101-107.

⁶⁰³ VANDAL, G. (2000), pp. 33, 78, 79, 204-205.

⁶⁰⁴ GILJE, P. A. (1996), pp. 79-81.

⁶⁰⁵ FRANK, S. P. (1999), p. 127.

⁶⁰⁶ FRANK, S. P. (1999), pp. 78-79, 122, 128.

⁶⁰⁷ FRANK, S. P. (1999), p. 225.

⁶⁰⁸ FRANK, S. P. (1999), pp. 262-266.

⁶⁰⁹ FRANK, S. P. (1999), p. 229-230.

No encontramos este tipo de extremos en nuestro periodo de estudio. Los gallegos que detenían civilmente a un criminal puede que le diesen unos cuantos golpes, pero lo normal es leer que “retuvieron al ladrón hasta que llegó la policía”⁶¹⁰, no que lo ejecutaron. Cuando un hombre se acercó a una parroquia de Rodeiro vistiendo una zamarra que los vecinos creyeron reconocer como la de un hombre atracado unos días antes, “salieron en su persecución los mozos de Vilela, y a pesar de que aquel se defendió, haciendo como unos dieciséis disparos (...) fue al fin y al remate detenido y entregado a la Guardia Civil”⁶¹¹.

Los mecanismos contrarios operan en Galicia. Los espacios son mucho más pequeños, y no existe el fenómeno de las bandas errantes en despoblado que se dio no solo en el Oeste norteamericano sino en otras zonas de España. Ciertamente, había desconfianza hacia la justicia, especialmente en apartados como los jueces municipales o los jurados⁶¹², pero las fuerzas policiales estaban presentes en cada partido judicial, podían acudir en espacios razonables de tiempo y estaban sometidas a un control centralizado. Eran relativamente confiables y tenían la capacidad de perseguir a los posibles vigilantes. Las comunidades eran maduras, no recién aglomeradas por inmigrantes, como en los Estados Unidos, y estaban habitadas por una población homogénea, en la que no había grupos que cimentasen su superioridad con respecto a los otros en base a criterios étnicos o religiosos, o que los quisiesen excluir de la propiedad o de la práctica política. Contra los que se salían de la norma, gitanos y vagabundos, no hacía falta una competición violenta de alta intensidad.

4.3 Un policía por parroquia: pedáneos y alcaldes de barrio⁶¹³

En los apartados inmediatamente anteriores hemos visto ejemplos de pedáneos y alcaldes de barrio gestionando crisis en las aldeas y muriendo en enfrentamientos con criminales. No es casualidad, aparecen frecuentemente en nuestras fuentes desempeñando este tipo de cometidos. Y, sin embargo, son fáciles de soslayar. Apenas aparecen en la legislación, no cobran del erario público (ni de nadie) y no tienen asociaciones profesionales o mecanismos de actuación colectiva. Quizás por eso, la figura del pedáneo no ha merecido una gran atención por parte de la historiografía española relativa al municipio, que se ha centrado en otras cuestiones como la lucha de partidos, la Hacienda o la inversión en política social, y en algún caso se les señala como poco significativos⁶¹⁴. ¿Qué podían aportar a la lucha contra el crimen? En el capítulo 5 veremos que fueron importantes en los primeros tiempos de la justicia liberal, cuando todavía se estaba implantando el régimen de juzgados y la Guardia Civil daba sus primeros pasos. Pero, ¿para qué servirían una vez que las fuerzas policiales habían incrementado sus efectivos y sus métodos de desplazamiento, y la población se fue acostumbrando a la existencia de los juzgados de instrucción?

En primer lugar, capilaridad, pues seguían estando próximos a los problemas, aunque fuese por casualidad o porque no había nadie más; eran en ese sentido parecidos a los policías elegidos por las comunidades campesinas rusas a partir del siglo XVIII⁶¹⁵, aunque un ejemplo más próximo lo

⁶¹⁰ FV 22-03-1935, p. 2.

⁶¹¹ FV, 14-02-1935, p. 4.

⁶¹² BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2019), pp. 718-721.

⁶¹³ La diversidad de nombres para designar a los pedáneos, que ya hemos apuntado en el apartado correspondiente a la ola de crimen contra la propiedad de mediados del XIX, se mantuvo hasta finales de nuestro periodo de estudio. Aún en la Guerra Civil encontramos expresiones como “o mordomo de Sorribas fixo o chamado aos veciños para que concorresen a reparar os camiños”. ALONSO RÍOS, A. (2006), p. 141.

⁶¹⁴ Un ejemplo en CABO VILLAVEVERDE, M. (2006), p. 241.

⁶¹⁵ Llamados *desiatskie* y *sotskie*, eran auxiliares de los ancianos del pueblo, mantenían el orden, supervisaban el cumplimiento y auxiliaban a la policía de verdad, aunque apenas perseguían el crimen severo; aproximadamente había uno por comunidad rural. Tienen interesantes similitudes con los pedáneos (como su presencia en las comunidades rurales y que servían de enlace con las fuerzas policiales), e importantes

constituyen los *Regedores* y *Cabos* portugueses del siglo XIX⁶¹⁶. “Cuando el distrito de un Ayuntamiento se componga de varias parroquias, feligresías o poblaciones apartadas entre si se nombrará un Alcalde pedáneo para cada una de ellas, excepto el caso de que en la misma resida alguno de los tenientes [de alcalde]”, dice el artículo quinto de la ley de organización y atribuciones de los ayuntamientos de 1845⁶¹⁷, que fija la organización municipal en el periodo liberal⁶¹⁸. Sus atribuciones no están fijados con claridad, más allá de ser delegados del alcalde y ejercer “las funciones que este les señale” (art. 88). Las modificaciones de 1870, 1876 y 1877 aclaran el método de elección y el régimen disciplinario de los pedáneos (o, más correctamente, “alcaldes de barrio” según la terminología de estas normativas), pero no introdujeron grandes cambios en la figura. Sus competencias siguieron siendo difusas y derivadas de lo que dispusiese el alcalde o los tenientes de alcalde del municipio⁶¹⁹.

La Dictadura y la II República tampoco introducen transformaciones de calado. “Durante los cuarenta y siete años de vida que cuenta la ley de 2 de octubre de 1877, se ha intentando su reforma, siempre infructuosamente, veintidós veces”, dice la exposición del Estatuto Municipal de 1924, que realiza una gran ampliación de la normativa municipal, pero paradójicamente deja en el aire la figura del pedáneo. El alcalde “también podrá nombrar Alcaldes de barrio”, dice el artículo 100, pero el resto del reglamento no define sus atribuciones, competencias ni régimen de sanciones⁶²⁰. La II República, en 1931, derogó en gran medida el Estatuto de 1924 y restableció la vigencia de varios títulos de la Ley Municipal de 1877, “con excepción de los artículos referentes a las Juntas de asociados y Alcaldes de barrio”⁶²¹.

Cada municipio organizaría a su manera la elección de pedáneos, pero por las fuentes hemerográficas, había como mínimo un pedáneo en cada demarcación parroquial de la Galicia rural. Ante la ausencia de funcionarios o cargos especializados, desempeñaba una gran cantidad de

diferencias, incluyendo la no desdeñable de recibir un sueldo a cargo de un consejo de la comunidad; probablemente sean más parecidos a los guardias de los municipios de otras partes de España. FRANK, S. P. (1999), pp. 22, 33-34.

⁶¹⁶ “Men chosen at the parish level to perform policing duties without receiving any remuneration”. ROCHA GONÇALVES, G. (2014), p. 9.

⁶¹⁷ Consultada en *Gaceta de Madrid*, 15-01-1845, nº 3776, pp. 1-3.

⁶¹⁸ Según algunos autores, ley municipal de 1845 será la vigente a lo largo del siglo, con “pequeñas modificaciones” HIJANO PÉREZ, Á. (2013), p. 150. Durante un breve periodo, entre 1854 y 1856, se volvió a la ley de ayuntamientos de 1823, pero la de 1845 fue restablecida por Narváez. *Gaceta de Madrid*, 17-10-1856, nº 1383, p. 1.

⁶¹⁹ De acuerdo con la ley municipal de 1870, los municipios de más de 4.000 habitantes se dividirían en barrios, cada uno con un alcalde de barrio elegido por el Ayuntamiento, con carácter general, “entre los vecinos que tengan su residencia fija en la demarcación” (art. 35). En concreto, los alcaldes y tenientes proponían los nombres en el día de toma de posesión y los concejales votaban si los aceptaban (art. 53-54). El cargo era “gratuito, obligatorio y honorífico” (art. 58). Estos barrios parecen tender a solaparse con los distritos electorales y las circunscripciones de reparto contributivo (art. 36 y 61.3). Los alcaldes de barrio estaban a las órdenes del teniente alcalde de su distrito y “ejercen las funciones administrativas que estos les deleguen” (art. 109), y necesitaban la licencia de este para abandonar su cargo más de 24 horas (art. 111). Estaban, “relativamente a los Ayuntamientos, en la misma dependencia jerárquica que los Alcaldes y Tenientes respecto a los Gobernadores”, podían ser suspendidos por el alcalde (aunque para la destitución se precisaba el acuerdo del Ayuntamiento) y podían ser objeto de multa en relación a sus funciones (art. 188). *Gaceta de Madrid*, 21-08-1870, nº 233, pp. 14-20. La reforma de 1876 no los menciona. *Gaceta de Madrid*, 17-12-1876, nº 352, pp. 691-692. Con la reforma de 1877 pasan a ser nombrados directamente por el alcalde, que los podía separar libremente (art. 36, 58-59). Las condiciones el cargo son virtualmente idénticas a las de la ley de 1870 (art. 63, 66.3, 116, 118, 196), añadiéndose la potestad de desempeñar “funciones de Gobierno político” (art. 202). *Gaceta de Madrid*, 04-10-1877, nº 277, pp. 39-46.

⁶²⁰ Consultado en *Gaceta de Madrid*, 09-03-1924, nº 69, pp. 1218-1302.

⁶²¹ *Gaceta de Madrid*, 17-06-1931, n. 168, p. 1447.

funciones, sobre todo al principio de nuestro periodo de estudio. Si hay que determinar las propiedades de un condenado que se declaraba insolvente, se pide informe al pedáneo. Cuando el cura de la parroquia denuncia que alguien ha robado en la iglesia por la noche, avisa al pedáneo. Si un vecino sospecha que alguien le ha entrado en la casa, va a contárselo al pedáneo de la aldea. Si en el lugar aparece un baúl abandonado, lo abre el pedáneo y dos testigos, y se queda en casa del primero⁶²², el pedáneo le entrega al juez un arma relacionada con un homicidio⁶²³.

Su ubicuidad hace que, aunque sea por casualidad, conozcan una buena parte de los crímenes antes que cualquier otra autoridad, e incluso intervengan en su comisión. En 1935 el criado Enrique del Río, tras ser despedido, insultó a su amo e intentó sacar un revólver, “lo que fue evitado por el pedáneo José Villasal que le arrebató el arma”⁶²⁴. Otro alcalde de barrio le salvó probablemente la vida al vecino Jesús Losada, cuando desarmó a un agresor que lo había tirado al suelo y lo estaba apuñalando⁶²⁵. Cuando en 1925 el vecino de Vilagarcía Tomás Romero fue agredido por un guardia de Seguridad borracho, que le apuntó con una pistola y lo obligó a llevarlo a una casa en la que atacó a una mujer, “corrió entonces a dar a viso de lo que ocurría al alcalde de barrio”, que fue allí acompañado de su mujer y de su hija⁶²⁶.

Se llamaba a los pedáneos para que interviniesen en escándalos y conflictos que ocurrían en sus parroquias y, en este sentido, ejercían algunas de las atribuciones del modelo de “policía de proximidad”. En 1930, el alcalde de barrio de Os Castros (en aquel entonces, un suburbio de A Coruña) fue la primera autoridad en acudir a una vivienda en la que el vecino Pedro Blázquez, que “sino [sic] está loco poco le falta para serlo”, había encerrado a su familia, que pedía auxilio. Blázquez lo amenazó con un revólver y tuvo que acudir una pareja del cuerpo de Seguridad para desarmarlo y detenerlo⁶²⁷. El alcalde de barrio de Mandín intervino en agosto de 1930 en una reyerta entre los mozos de su zona y los de Feces de Abaixo, y uno de estos últimos le arrebató un revólver; luego se lo entregó a su propio pedáneo, y este a la Guardia Civil⁶²⁸.

Por otra parte, el pedáneo no dejaba de ser un vecino del barrio y de la aldea, una figura conocida de la que pedir su intervención, en realidad, no era tan diferente de una entreayuda. El 4 de septiembre de 1920, se presentó ante el alcalde de barrio de la parroquia de Artes el vecino Antonio Vila “requiriéndole para que le ayudase a buscar a su padre”, que había desaparecido (en realidad, el vecino había participado en un complot para asesinarlo y ahora estaba fingiendo que no tenía nada que ver, pero esa es otra cuestión). El alcalde, que quizás estaba ocupado en ese momento, “dispuso que un hijo suyo acompañase al Antonio Vila”⁶²⁹. Cinco años después, cuando el cura de Lózara agonizaba en su vivienda después de recibir dos disparos, llamó al pedáneo de su parroquia y “refirióle la forma en que había ocurrido el hecho”⁶³⁰.

También servían para abordar situaciones no convencionales, Manuel María Barreal fue reclamado por el juez de instrucción de Sarria (Lugo) por tentativa de homicidio. La Guardia Civil lo detuvo pero no lo trasladó a la cárcel porque estaba enfermo, así que lo dejó “bajo la custodia del alcalde de

⁶²² LR, 01-10-1935, p. 4.

⁶²³ LV, 09-12-1930, p. 7.

⁶²⁴ FV, 06-12-1935, p. 9.

⁶²⁵ FV, 14-05, p. 2.

⁶²⁶ El guardia, que en el entrtanto había matado a la mujer, salió de la casa y le soltó una bofetada a Romero. “Tomás le dijo que aquel que le acompañaba, era el alcalde de barrio. El guardia le exigió la credencial, y el alcalde contestó: -es que no estoy solo. Ahí abajo están el cab de municipales y la Guardia civil”, que, aunque era mentira, sirvió para que el criminal escapase. FV, 11-08-1925, p. 1.

⁶²⁷ La Voz de Galicia, 25-01-1930, p. 3.

⁶²⁸ LR, 22-08-1930, p. 8.

⁶²⁹ EP, 10-09-1920, p. 5.

⁶³⁰ EP, 25-09-1925, p. 2.

barrio” de la parroquia⁶³¹; en otro caso, un pedáneo quedó como encargado de vigilar a un detenido gravemente enfermo “mientras no mejore su salud”⁶³² y pudiese ser trasladado.

Si los pedáneos no intervenían podían verse sometidos a consecuencias legales. En 1899, un alcalde de barrio del partido de Pontedeume, Francisco Vales Castro, jornalero de 47 años, fue requerido por varios de sus vecinos para “tratar de detener” a varias personas que se hallaban causando daños en la casa de uno de ellos. Vales se negó, señalando que no tenía autorización del alcalde (aunque cooperó al día siguiente cuando se personó el juzgado municipal y la Guardia Civil). La Fiscalía lo acusó de prevaricación y pidió once años y medio de inhabilitación, así como el pago de costas, que, como hemos visto en otros capítulos, resultaba oneroso. Fue absuelto, también de las costas, puesto que no se probó que se negase “maliciosamente”⁶³³. En 1935 la Guardia Civil de Albarellos acudió al pueblo de Medeiro para investigar unos destrozos en una finca, y requirió al pedáneo que se presentase con dos vecinos para hacer la tasación de los daños. Este se negó, alegando supuestamente que tenía que ir a Allariz y que “más que los asuntos propios de su cargo le interesaban los de su casa”, y fue denunciado⁶³⁴.

Solo hemos encontrado en una ocasión un choque de competencias. Ocurrió en una fiesta de agosto de 1935 en la parroquia de Arnego, en la que la intervención de la Guardia Civil para requisar un arma de fuego provocó revuelo entre los presentes. El comandante de los guardias ordenó que los músicos se retirasen, “pero el alcalde pedáneo, erigiéndose en autoridad hizo que dicha orden no tuviese efecto, obligando a que la música continuase tocando”. La situación degeneró en un tiroteo en el que quedaron heridos de bala tanto el comandante como el pedáneo, y muerto un paisano⁶³⁵. Más frecuentes debieron ser las venganzas y rencillas ligadas a denuncias. José González Araujo, pedáneo de la parroquia de Corredoira, acabó herido tras acusar a dos convecinos de ser autores de un atraco⁶³⁶.

4.4 Fusiles para impedir (o hacer) la revolución. Las guardias cívicas antes de 1923

En Galicia existieron en los inicios del siglo XIX dos cuerpos armados ciudadanos: la Milicia Nacional y su contrapartida absolutista, los Voluntarios Realistas, que ya hemos mencionado en el capítulo 3. Aunque son un fenómeno eminentemente de ciudades y villas, en algunos momentos su implantación estuvo bastante extendida en Galicia. Sobre la Milicia Nacional, Xosé Ramón Veiga afirma que “ningún rincón del territorio se vio privado de su influencia”. En su último periodo se hallaban presentes en las capitales de provincia y cabeceras de partidos judiciales, y de manera intermitente en localidades pequeñas y aldeas⁶³⁷. De cualquier manera, la preponderancia de las villas es resaltable⁶³⁸. Los milicianos desempeñaron algunas tareas policiales: custodia de reos,

⁶³¹ EP, 01-02-1930, p. 2.

⁶³² LR, 04-07-1925, p. 5.

⁶³³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 1, folios 1-2.

⁶³⁴ LR, 09-04-1935, p. 4.

⁶³⁵ FV, 20-07-1935, p. 7.

⁶³⁶ LR, 13-09-1925, p. 1.

⁶³⁷ VEIGA, X. R. (2016), pp. 3-4.

⁶³⁸ Como señala el estudio de Domínguez Ferro para la milicia de Pontedeume, incluso en periodos de reclutamiento obligatorio los oficiales y suboficiales eran burgueses, y los milicianos, trabajadores de las clases populares. DOMÍNGUEZ FERRO, M. (2018), p. 312. En Ribadeo, durante el trienio liberal, “a totalidade dos milicianos eran veciños da vila, sen que ninguén dos pobos do derredor se integrase nela: xa que logo, unha milicia exclusivamente urbana”. VEIGA, X. R. (2017), p. 225.

persecución de presos, traslado de quintos, guardia de ferias⁶³⁹, y persecución de ladrones y criminales.

Pero este no era su propósito dominante. Su carácter era político, con adscripciones claras a las tendencias absolutista o liberal. Al igual que las milicias provinciales que los antecedieron, participaron en pronunciamientos y hechos bélicos derivados de la pugna política de su tiempo, como veremos en el capítulo 8. Lo mismo se puede decir de la milicia absolutista, pues, en palabras de Barreiro Fernández, “más que un cuerpo de policía rural, los Voluntarios Realistas eran una fuerza militar en reserva”⁶⁴⁰.

En paralelo tenemos el fenómeno de la aparición de grupos armados sin organización previa para proteger el orden público ante una crisis. En 1870, un grupo de notables de A Estrada, entre ellos terratenientes, abogados y comerciantes se reunió para defender el consistorio de la villa de un motín campesino⁶⁴¹.

A finales de la década de 1910 encontramos una ola de apariciones o reorganizaciones de milicias en España. Tras estas apariciones, o reorganizaciones, de grupos armados no se encontraba una voluntad de servir de complemento a las fuerzas policiales en la persecución del crimen común, sino de responder a desórdenes de tipo social, una orientación relacionada, sobre todo, con la huelga revolucionaria de 1917 y la violencia sindical tras la Gran Guerra. En Madrid aparecieron una organización de Defensa Ciudadana que en 1920 se convertirá en Somatén, ligada al catolicismo social y a la alta burguesía, y una Unión Ciudadana mesocrática y juvenil con planteamientos próximos a la derecha radical⁶⁴². En Cataluña, el Somatén había actuado en conflictos sociales puntualmente desde 1902⁶⁴³, pero es a partir de la Primera Guerra Mundial cuando pasa de ser una milicia “realmente *popular* y políticamente amorfa a convertirse en una *guardia cívica* hegemonizada por las burguesías”, sobre todo debido a la creación en 1919 de un somatén barcelonés concebido para combatir las violencias sindicales y garantizar el orden y los servicios públicos en caso de huelga⁶⁴⁴. Ese año nació un Somatén de imitación en Valencia, por parte de propietarios agrícolas temerosos de las reivindicaciones jornaleras⁶⁴⁵, y el 24 de marzo, coincidiendo con la huelga de la Canadiense, se crea otro en Zaragoza⁶⁴⁶, con iniciativas similares en algunas partes del País Valenciano, Mallorca, Andalucía, Castilla y el País Vasco⁶⁴⁷.

Estas guardias cívicas aparecen con rasgos paramilitares, como la posesión de armas, la organización jerárquica y la intervención armada para proteger el orden público, en subordinación a la autoridad. Conceptualmente se ligaban a mantener el orden en las huelgas de servicios públicos en tanto que se entendían como intentonas revolucionarias, si bien también intervinieron en paros obreros en el sector privado. En este sentido, no debemos entender sus actividades como esencialmente violentas. Es cierto que podemos encontrar muestras de tiroteos, choques y peleas contra izquierdistas, incidentes en los que defienden a esquirols de la violencia sindical, a somatenistas

⁶³⁹ VEIGA, X. R. (2016), p. 2.

⁶⁴⁰⁶⁴⁰ Afirma que en Galicia se apuntaron a la milicia “los vagos, el lumpen de las aldeas”, aunque no creemos que haya motivos suficientes para fundamentar esta afirmación. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), p. 215.

⁶⁴¹ FERNÁNDEZ CASTRO, X. A. (2000), pp. 77-83.

⁶⁴² GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 105-141.

⁶⁴³ Por ejemplo, en distintas localidades durante la Semana Trágica. Al menos desde 1910 los somatenistas tenían un protocolo de actuación ante disturbios. MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. (1980), pp. 29-45.

⁶⁴⁴ GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 71, 85-89.

⁶⁴⁵ LÓPEZ ÍÑIGUEZ, J. (2017), pp. 139-140.

⁶⁴⁶ MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. (1980), p. 47.

⁶⁴⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 147-152.

sufriendo atentados o ejerciendo coacciones. Pero su labor probablemente más importante a la hora de romper las huelgas era la de sustituir a los trabajadores en paro y mantener los servicios públicos.

¿Y en Galicia? Existieron algunos paralelismos con la acción de las guardias cívicas en momentos de crisis y miedo revolucionario, ya que grupos conservadores se movilizaron para ayudar al Estado a mantener el orden público, como ocurrió en 1917 durante la huelga revolucionaria de agosto. De cualquier manera, en la huelga hubo muy poca violencia real, los militares y las fuerzas de la Benemérita desplegados fueron más que suficientes para controlar la situación y no tenemos constancia de que estos ciudadanos armados llegaran a actuar. En A Coruña, el grupo voluntario que más colaboró con las autoridades fue el de los Exploradores de España, que barrieron las calles en sustitución de los trabajadores municipales que secundaron el paro.

En 1920, cuando por decisión del Consejo de Ministros se extendió la institución del Somatén fuera de Cataluña, vemos las primeras milicias en Galicia, aunque de corta vida. En A Coruña el Gobernador militar invitó a “distintas personalidades y representaciones” para discutir la creación de uno en la ciudad el 9 de febrero⁶⁴⁸; unos pocos días más tarde hubo una reunión similar en Santiago con la presencia del comandante militar de la plaza y el alcalde⁶⁴⁹. La alcaldía de Vigo recibió un oficio del capitán general en este sentido el 5 de febrero, aunque no parece haber tenido constitución efectiva⁶⁵⁰.

La constitución del somatén pasaba por una junta; tanto en A Coruña⁶⁵¹ como en Santiago⁶⁵², las comisiones organizadoras se compusieron por notables locales. Se estructuraba por distritos, con una jerarquía culminada por un cabo, designado por la autoridad militar, con mando supremo, y subcabos por distrito. Los participantes, de 25 años o más, podrían emplear armas (a guardar en su domicilio o en un edificio que funcionase como armería), pero estas no podrían ser las reglamentarias del Ejército⁶⁵³. Podían tener oficiales militares como auxiliares, y en caso de estado de guerra podrían ser considerados fuerza armada si así lo disponían los capitanes generales. Los mayores de 60 años quedaban solo obligados a defender su domicilio: los demás formarían rondas para guardar el orden público de la población en caso de revuelta o asaltos a comercios o casas⁶⁵⁴. A Coruña llegó a tener su reglamento en abril, aprobado por las autoridades militares al mes

⁶⁴⁸ LV, 07-2-1920, p. 1.

⁶⁴⁹ LV, 12-02-1920, p. 2.

⁶⁵⁰ FV, 06-02-1920, p. 4.

⁶⁵¹ En un principio el presidente de la comisión organizadora fue Antonio Fernández López (suponemos que el que había sido alcalde en 1902). Los vocales eran Rafael Fernández Conde, Juan Golpe (ex dirigente de Solidaridad Gallega), Narciso Obanza (banquero), Francisco Ponte y Blanco (ingeniero y presidente de diversas asociaciones coruñesas, además de alcalde en 1923), José Hernansáez (catedrático de Agricultura en el instituto local), el conde de Canillas (Francisco Piñeyro y Diago, uno de los impulsores de las Escuelas Populares Gratuitas), Antonio Ibáñez Solloso (militar o ex militar), Dionisio Tejero (empresario de consignación de buques e industria textil), Narciso Correal (abogado y ex concejal monárquico), Eduardo Vila, Manuel Barja (presidente a finales del siglo XIX del Círculo Católico coruñés), Ventura Novoa y Enrique Pérez Ardá (decano a partir de ese año del Colegio de Abogados), además de representantes de la prensa que no se nombran. LV, 19-02-1920 (1). Algunos de los nombres cambiaron unos días después. LV 26-02-1920, p. 1, 29-02-1920, p. 1.

⁶⁵² La junta compostelana la componían los “D. Miguel Osende, coronel de Infantería; D. Lino Torro, rector de la Universidad; D. José Harguindey, vicepresidente de la Patronal; D. José Rivero de Aguilar, director de la Económica; D. Osmundo de la Riva, comandante de ingenieros y concejal; D. Julio Bruzos, gerente de la Empresa automovilista “El Noroeste”; D. Abelardo Nieta, diputado provincial y D. Felipe Gil Casares, concejal”. LV, 25-04-1920, p. 2.

⁶⁵³ Había un gran énfasis entre distinguir entre somatén y fuerzas armadas. Los somatenistas no podían constituir unidades análogas a las militares, practicar ejercicios de tiro o simularlos ni ostentar carácter militar.

⁶⁵⁴ Según la información sobre la autorización del somatén de Vigo. FV, 12-02-1920, p. 1.

siguiente⁶⁵⁵. Su cabo mayor y jefe fue un militar retirado, pero no se lo nombró hasta finales de julio, y todavía entonces no había cabos de distrito⁶⁵⁶.

Hasta entonces, el año había sido conflictivo en la ciudad: bombas, huelgas, desabastecimiento y motines de pan, pero sin actos de violencia grave. Pocos días después del nombramiento del jefe del Somatén se produjo la muerte de dos policías por una huelga de estibadores, y empezó un ciclo de violencia que veremos con más atención en el capítulo 9 y que dejó ocho fallecidos, entre policías, sindicalistas, esquirols y viandantes. Parecería un momento señalado para que entrase en acción el Somatén: pero no hay ninguna referencia a actividades durante este periodo. Bien la iniciativa hubiese quedado abortada anteriormente (como parece indicar su tardanza al constituirse), porque su junta no contase con el permiso de las autoridades para actuar, o porque el recrudecimiento de la violencia asustase a sus posibles integrantes, la milicia cívica no llegó a ser una realidad.

No hay constancia de que en otras ciudades gallegas fuese más efectivo. No hemos visto actuar en prensa al de Santiago o Vigo. En Lugo se recibieron las instrucciones, pero sin que se mencione la constitución de una comisión organizadora⁶⁵⁷, mientras que la prensa ourensana no menciona ninguna iniciativa en este sentido. En junio de ese mismo año, en Lugo, “los comerciantes se reunieron en la Cámara de Comercio, para cambiar impresiones, a fin de organizar la defensa mutua”, después de que circulase el rumor de que los obreros intentarían asaltar los comercios⁶⁵⁸, pero no hay constancia de que creasen una asociación de mayor recorrido.

4.5 Vida y muerte del Somatén Nacional

La auténtica creación de una fuerza paramilitar llega en 1923, con la famosa decisión de Primo de Rivera de crear un Somatén Nacional a partir de sus experiencias como capitán general de Cataluña. El gobierno surgido tras el golpe estableció su creación a través de un Decreto Ley del 17-09-1923. El reglamento preveía la actuación del somatenista en caso de desórdenes y declaración del estado de guerra. En circunstancias normales actuaban como agentes de la autoridad a previo requerimiento de las autoridades, o por su propia iniciativa, si perseguían y capturaban criminales detenidos en flagrante delito.

No conocemos demasiados detalles acerca de la implantación en Galicia, pero parece que no fue demasiado exitosa en ninguna de las cuatro provincias. En Ourense, solo sabemos que el establecimiento en 1924 iba con retraso, según la queja por telegrama de uno de los vocales de la comisión organizadora⁶⁵⁹. En cuanto al número de efectivos, no se conservan los boletines oficiales de somatenes de la VIII Región⁶⁶⁰, y no sabemos demasiado de su implantación por pueblos⁶⁶¹.

la bibliografía coincide en señalar que, si la meta era convertir al somatén en una milicia masiva, el resultado fue un fracaso: las afiliaciones fueron escasas, muchas veces coincidían con miembros de Unión Popular que se dedicaban más bien a actividades de promoción del régimen y en más de una

⁶⁵⁵ LV, 25-04-1920, p. 2, LV, 22-05-1920, p. 3.

⁶⁵⁶ El coronel de Artillería José Núñez Ribadulla. LV, 16-07-1920, p. 1.

⁶⁵⁷ EP, 12-02-1920, p. 5.

⁶⁵⁸ LV, 08-07-1920, p. 1.

⁶⁵⁹ MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. (1980), p. 237.

⁶⁶⁰ MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. (1980), p. 275.

⁶⁶¹ Según Martínez Segarra, en A Coruña había somatén en la capital del mismo nombre, en Betanzos, Arzúa, Melide y Pontedeume; en Lugo en la capital, Monforte, Friol, Sarria y Castroverde; en Ourense en la capital, Celanova y el partido de Verín; en Pontevedra en la capital, Lalín, Carbia, Cambados, Vigo y A Estrada, pero no cita la fuente de la que saca estos datos.

ocasión eran ridiculizados⁶⁶². En el caso concreto de Lugo, Vigo Fernández calcula que la afiliación llegó al 3% de la población posible; considera que se habrían afiliado mayoritariamente las élites, pero ofrece pocos datos sobre su actividad⁶⁶³.

Calleja y del Rey Reguillo explican por qué el Somatén no se convirtió en masivo atendiendo a su dimensión política y social y al contexto en el que existió. En primer lugar, si en un principio el Somatén Nacional se planteó como partido civil de la Dictadura que permitiese alistar a la clase media conservadora, pero en 1924 este papel ya queda para la Unión Patriótica, y la milicia armada “se encargaría nominalmente de salvaguardar un orden público ya garantizado” por el Estado⁶⁶⁴, controlado por el ejército y dirigido por élites económicas y sociales de carácter conservador. El otro tiene que ver con las circunstancias del régimen; las uniones cívicas españolas habían surgido para “la derrota de la revolución en la calle como apoyo subsidiario a los recursos preventivos y coercitivos oficiales”, así que prolongarlas fuera de la coyuntura histórica en la que la revolución se percibía como posible sería abocarla al fracaso⁶⁶⁵. Esto lo podemos comprobar en Galicia. En los años estudiados no hubo demasiadas protestas de carácter político, pero, cuando las hubo, la defensa del orden público y la organización social continuó recayendo en los cuerpos de seguridad.

Pero esto afecta sobre todo a la lucha social en el espacio urbano. En el ámbito rural, el formato de Somatén introducía una dimensión adicional: reconocía a sus miembros la posibilidad de ejercer funciones policiales, portar armas para la defensa de sus comunidades y perseguir a los delincuentes cuando no había profesionales cerca. Actividades todas ellas que, como hemos visto anteriormente, venían realizándose por parte de la sociedad civil en Galicia durante todo el periodo liberal, y que podían resultar atractivas los propietarios rurales que no tenían puestos de la Guardia Civil cerca. Por ejemplo, el 16 de enero de 1930 un vecino de Meilán, en Riotorto, denunció que un grupo de gitanos le habían robado “varios objetos”. Cuatro somatenistas locales los persiguieron, interrogaron y detuvieron, recibiendo por ello “muchas felicitaciones”⁶⁶⁶. Se puede alegar que el Somatén tuvo previsiblemente una mayor implantación en villas y ciudades, donde ya había fuerzas policiales disponibles para hacer intervenciones rápidas, pero la organización podía amoldarse a las características locales: entre el Somatén gallego existieron cabos o sub-cabos “de parroquia”⁶⁶⁷.

Hacerse somatenista no era muy gravoso ni complicado: en la VIII Región Militar, que comprendía a Galicia, las tasas eran en 1925 de 0,10 pesetas mensuales para los somatenistas, una para las clases y dos para los vocales. Se podía servir más allá de los sesenta años y podían existir “somatenistas protectores, honorarios y somatenes de honor”⁶⁶⁸. Tenía sus ventajas, como el permiso para poseer armas largas, y precios económicos para conseguirlas: todavía en 1930, cuando ya habían pasado los días de gloria del Somatén, los miembros gallegos podían adquirir un fusil Remington en el Parque de Artillería de la Región por entre 15 y 25 pesetas, y medio centenar de cartuchos por un duro⁶⁶⁹. Los afiliados gozaban de una cierta protección legal por el fuero militar: en febrero de 1925 vemos cómo el juez-instructor militar de la plaza de Monforte instruye expediente contra tres individuos

⁶⁶² LÓPEZ ÍÑIGUEZ, J. (2017), p. 142.

⁶⁶³ VIGO FERNÁNDEZ, A. P. (2010), p. 53-54.

⁶⁶⁴ GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 183-184, 188.

⁶⁶⁵ GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 218.

⁶⁶⁶ EP, 19-01-1930, p. 1.

⁶⁶⁷ Se los menciona en relación a la revista anual de 1930. EP 08-02-1930, p. 1.

⁶⁶⁸ Según las cuotas fijadas en la reunión de somatenes de Galicia, León y Asturias de 1925. En el mismo encuentro se solvetaron algunas cuestiones de régimen interior, se revisó al alza el número de vocales, se nombró a dos interventores de cuentas (el conde de Canillas y Fernández López) y se pidió que algunos somatenes pudiesen portar armas cortas. LV 24-05-1925, p. 2.

⁶⁶⁹ De acuerdo con un recordatorio aparecido en prensa y relacionado con la proximidad de la revista anual reglamentaria de los afiliados. Según la noticia, el fusil costaba 25 pesetas “recastado” y 15 “sin recastar”, si bien no hemos podido determinar en qué consiste la diferencia. EP 04-01-1930, p. 1.

encarcelados por la Guardia Civil en la cárcel local “por maltrato de palabra a un individuo del somatén”⁶⁷⁰. Como contrapartida, estaban sometidos a la disciplina de la revista anual, a la que tenían que presentarse con sus armas. Parece que hubo algún caso de somatenistas gallegos encarcelados por no respetar el precepto⁶⁷¹.

Algunos autores han resaltado las burlas que provocaba en parte de la población: la “ironía ante demostraciones de valor que dejaban mucho que desear, como detener a pequeños rateros o conducir a personas borrachas a sus domicilios”⁶⁷². No nos parece justificada la sorna: la inmensa mayoría de los servicios policiales son de este tipo, y es para esta clase de cuestiones para las que los ciudadanos suelen requerir ayuda policial. Y podemos encontrar ejemplos de servicios más serios sin demasiados problemas. Por poner algunos ejemplos, dos somatenistas detuvieron, “después de alguna lucha”, a Avelino Fernández, después de que apuñalase a su hermano hasta la muerte⁶⁷³. Otro hizo preso a un miembro de la banda de *Los Bergantiños* poco después de que se tirotease con la Guardia Civil⁶⁷⁴.

En algunos casos, los somatenes tenían un carácter mediador o alternativo a las fuerzas de seguridad. En 1925 tres somatenistas de la parroquia de Pias, en Pontearreas, identificaron a siete hombres que habían talado pinos en montes de la zona. Estos comparecieron ante un tribunal de honor formado en la Sociedad de Agricultores local (suponemos que eran miembros de ella) y “procedieron a indemnizar a los perjudicados de los daños causados, quedando muy satisfechos de que la cosa no pasase a mayores”, si bien se señala en la propia noticia que este procedimiento es una particularidad de esa parroquia⁶⁷⁵. Ese año, en Pontevedra, un paisano se resistió a ser detenido por los policías de Seguridad de Pontevedra. Un cabo del somatén lo convenció para que fuese a comisaría y luego medió para que se le dejase en libertad⁶⁷⁶.

Ciertamente hubo casos de somatenistas que no cumplieron los preceptos de “paz, paz y paz” que les exigía el reglamento. De hecho, es sorprendente cuántos casos de malas prácticas llegan a la prensa, incluso en la época de la censura de la Dictadura. En general se trata de mal uso de las armas. A Manuel Prieto Gallego las autoridades le requisaron el carnet de somatenista y una escopeta con guía expedida por el comandante general de Galicia después de que la empleara para encañonar a un vecino al que acusaba de haber provocado que le asignaran una cuota de consumos demasiado elevada. Prieto era, por cierto, un maestro de 66 años⁶⁷⁷. A Antonio Antúnez lo detuvo la Guardia Civil después de dispararle en el pie a un vecino de Muíños⁶⁷⁸, y encontramos algunos otros ejemplos de somatenistas que abrieron fuego contra vecinos⁶⁷⁹, o estando borrachos⁶⁸⁰, o usaron sus armas para amenazar a otro miembro del instituto⁶⁸¹.

Hay dos factores a señalar acerca de la falta de popularidad del formato como modelo de represión del delito común por parte de la sociedad civil. Uno, en relación a su implantación, es que en los

⁶⁷⁰ LV, 06-03-1925, p. 5.

⁶⁷¹ El único caso que hemos encontrado es el de un vecino de Neira de Xusá, Emilio Fernández Dorado, del que no se dice que fuese somatenista pero que fue detenido en 1930 por la Guardia Civil “por no haber pasado la revista anual”. Recibió treinta días de arresto. EP, 29-10-1930, p. 2.

⁶⁷² LÓPEZ ÍÑIGUEZ, J. (2017), p. 154.

⁶⁷³ LR, 20-10-1925.

⁶⁷⁴ LV, 08-05-1930, p. 3.

⁶⁷⁵ FV 13-05-1925, p. 2.

⁶⁷⁶ FV 05-06-1925, p. 7.

⁶⁷⁷ FV, 03-11-1925, p. 2.

⁶⁷⁸ FV, 16-04-1930, p. 3.

⁶⁷⁹ LV, 18-08-1925, p. 3.

⁶⁸⁰ LV 21-09-1930; en este caso no parece estar tan claro que fuese somatenista.

⁶⁸¹ FV 10-05-1925, p. 2.

años 20 el Estado ya había ido asumiendo en gran medida estas tareas a través de las fuerzas policiales. Otro, en cuanto a su decadencia, tiene que ver con que el Somatén aparecía ligado a la Dictadura, aunque se definiera como apolítico. La afiliación subió en periodos de popularidad como la campaña de Alhucemas y descendió a finales de los años 20 en paralelo con la caída del apoyo a Primo. La relación con el poder funcionaba en los dos sentidos: se adscribían los que querían estar a bien con las autoridades, pero se inhibían los que rechazaban la Dictadura; “en los dominios gallegos del ex-ministro conservador Gabino Bugallal, la afiliación siempre resultó muy pobre”⁶⁸². Siempre hay altruistas bienintencionados, pero unirse al cuerpo era para muchos un modo de conseguir prebendas. En 1925 José Cervera, cabo del somatén vigués, lamentaba públicamente a sus compañeros que se dedicaban a “hacer política”, a los que “lograron al amparo del nombre del Somatén cargos a que nunca hubiesen podido aspirar”⁶⁸³.

A finales de los años 20 el Somatén no solo estaba fuertemente identificado con un régimen crecientemente impopular, sino que este lo unió aún más al proyecto político de Unión Patriótica, y lo alienó de la población general, al intentar convertir a los afiliados en una especie de policía política del Gobierno. Este nuevo planteamiento queda claro en el artículo quinto del RD del 09-02-1929:

“En todas las oficinas de Somatenes y Uniones Patrióticas se llevará (...) un registro de personas propicias a la difamación, al alboroto político y a la desmoralización del ánimo público, los cuales informes se pondrán a disposición de las autoridades (...) cuando ellas lo demanden o las circunstancias lo aconsejen”⁶⁸⁴.

Esta práctica, no el órgano en sí mismo, fue diana de las críticas de la prensa una vez que cayó el régimen y su aparato censor. “La Dictadura hacía de los somatenes órganos de espionaje”, titula en septiembre de 1930 *La Voz de Galicia*, haciéndose eco de una supuesta circular recogida por *El Sol* en la que se ordenaba que “siempre que se celebren en la vía pública actos con aglomeraciones de gente, se distribuyan los somatenistas mezclados con el pueblo”, de incógnito y escuchando las conversaciones “para después efectuar las oportunas delaciones”⁶⁸⁵. El papel era impopular, según la fuente, entre los propios jefes del Somatén. Los convertía en algo mucho peor que chivatos: los convertía en chivatos públicamente señalados de un régimen en decadencia.

Sin reivindicar el aspecto de policía política, el Somatén no se desligó de sus vínculos con la Dictadura con el exilio de Primo de Rivera; probablemente se convirtió en la última trinchera de los irredentos. La comisión organizadora de la Octava Región emitió un manifiesto en abril de 1930 en el que, admitiendo implícitamente la decadencia de su número, la dirección de los somatenistas apelaba en esta época a una concepción elitista de su organización: “No queremos número, pues con facilidad se ocultan en el los indeseables; queremos calidad (...); queremos selección”. Pero la parte más importante del documento estaba dedicada a enfatizar el carácter “completamente apolítico” de su institución. Así, prohibía a los afiliados participar en actos políticos en tanto que afiliados, mostrando el distintivo o portando armas.

Ahora bien, donde la comisión escribe “apolítico” debemos leer monárquico. Cuando dicen que el organismo no puede expresar sus simpatías colectivamente hacia ninguna persona, hacen una excepción con el “jefe de la nación o su gobierno, como representación única de la voluntad nacional”. Cuando afirman que un somatenista puede votar y expresar sus opiniones políticas en su

⁶⁸² GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 200.

⁶⁸³ *FV*, 25-12-1930, p. 16.

⁶⁸⁴ Extraído de MARTÍNEZ SEGARRA, R. M. (1980), pp. 94-97.

⁶⁸⁵ *LV* 26-09-1930, p. 1.

vida civil, en tanto que “ciudadano libre”, limitan esa libertad a participar en “los sectores políticos que reconocen hoy a la Monarquía como forma esencial de gobierno”⁶⁸⁶.

Durante ese año algunos somatenes siguieron activos. En abril seguían realizando revista en Tui⁶⁸⁷ y Crecente⁶⁸⁸. En julio, un somatenista de 62 años de Cruces, Manuel Villar intentó intervenir en un tiroteo entre jóvenes en una romería de Carbia, pero fue herido de un garrotazo⁶⁸⁹. Otro somatenista de Agolada usó poco después su rifle para detener a un ladrón al que habían dado una batida varios guardias civiles y vecinos⁶⁹⁰, y probablemente hubo servicios como estos hasta la desaparición de la organización con la II República⁶⁹¹. En esta, según veremos en el capítulo 10, hubo algunas iniciativas de patrullas ciudadanas y grupos armados para responder a situaciones ad hoc, pero no una organización paramilitar masiva organizada desde el Estado.



⁶⁸⁶ *LR*, 10-04-1930, p. 8.

⁶⁸⁷ *FV*, 09-04-1930, p. 2.

⁶⁸⁸ *FV*, 23-04-1930, p. 2.

⁶⁸⁹ Dado que también resultó apaleado otro Villar, es posible que hubiese intentado defender a un familiar. *FV*, 27-07-1930, p. 2.

⁶⁹⁰ *FV*, 03-08-1930, p. 11.

⁶⁹¹ Hay una referencia entre 1935 a un delincuente detenido por somatenistas, pero probablemente se refiera a un hecho ocurrido años antes. *FV*, 21-07-1935, p. 2.

5. ESTUDIANDO EL CRIMEN EN EL PERIODO PRE-ESTADÍSTICO (1800-1859)⁶⁹²

5.1 Metodología y sesgos en las fuentes de estudio del crimen. La serie de causas del Archivo del Reino de Galicia

El sueño de todo estudioso del delito con debilidad por los números es poder determinar las cifras de crímenes y su incidencia. Es una aspiración esquiva, por cuestiones epistemológicas y prácticas. En primer lugar, la estadística criminal no es un reflejo fiel de la realidad criminal. Siempre tiene como sombra una *dark figure*, una cifra oculta de delitos que no llegan a registrarse⁶⁹³. Pero, como señaló en el siglo XIX Quetelet, uno de los primeros estudiosos del crimen, las estadísticas sobre la delincuencia tienen una “constante étonnante”: año tras año, las cifras de un determinado crimen, las proporciones entre sexos de los autores, tienden a ser parecidas⁶⁹⁴. Si los sesgos son aleatorios, tienden a anularse si la observación es suficientemente amplia; si son sistemáticos, parece que afectan de manera parecida todos los años. Volviendo a Quetelet, las estadísticas “would have no utility at all if we did not tacitly assume there is a nearly invariable relationship between offenses known and adjudicated and the total sum of offenses committed”⁶⁹⁵.

Sin embargo, actualmente sabemos que existen sesgos sistemáticos que varían con el tiempo: “the dark figure expands and contracts with the values we bring to our study: recent studies of the extent of marital rape or changes in child abuse over time clearly indicate this”⁶⁹⁶. A medida que cambian las definiciones de crimen, las prácticas judiciales o la dotación y efectividad policial, lo hacen las estadísticas. Así, la aproximación historiográfica es la de considerarlas no tanto como una medición del crimen en sí, sino como un indicador “of socioeconomic conditions, public anxieties, police practice, and governmental policy”⁶⁹⁷. Algún autor ha llegado a afirmar que no son válidas para el estudio histórico de la delincuencia, pero no es el criterio mayoritario⁶⁹⁸.

En segundo lugar, y en lo referente al estudio histórico, las estadísticas muchas veces no existen, son fragmentarias o poco fiables. La monarquía hispánica venía exigiendo a los tribunales datos acerca de su actividad al menos desde 1726, y los modelos fueron afinándose en el primer tercio del siglo XIX. La finalidad mayoritaria de las disposiciones parece ser la de asegurarse la rapidez de la justicia y controlar que los tribunales no se queden atascados; y el interés semeja incidir más sobre los procesos criminales, más numerosos que sobre los civiles.

El primer liberalismo dio importancia a las estadísticas judiciales hasta el punto de incorporarlas a la Carta Magna. El artículo 267 de la Constitución de Cádiz establece que a las Audiencias les correspondería “recibir de todos los jueces subalternos de su territorio avisos puntuales de las causas que se formen por delitos, y listas de las causas civiles y criminales pendientes en su juzgado, con expresión del estado de unas y otras, a fin de promover la más pronta admisión de justicia”. El 270 obliga a las audiencias a transmitir anualmente al Supremo Tribunal de Justicia (el órgano

⁶⁹² Este capítulo, en especial el segundo apartado, supone una ampliación de un artículo ya publicado, CARBALLO GENDE, E. (2020-B).

⁶⁹³ MOSHER, J. C., MIETHE, T. D., HART, T. C. (2011), p. 46.

⁶⁹⁴ AEBI, M. F., LINDE, A. (2016), p. 58.

⁶⁹⁵ MOSHER, J. C., MIETHE, T. D., HART, T. C. (2011), p. 34.

⁶⁹⁶ En palabras del criminólogo Jock Young, citado en WALKLATE, S. (2007), p. 65.

⁶⁹⁷ GODFREY, B. (2016), p. 41.

⁶⁹⁸ Sobre los diversos tipos de estadísticas criminales “there is consensus among researchers that while none of them produces an accurate picture of the levels and trends in crime, their combination can increase our understanding of them”, AEBI, M. LINDE, A. (2016, pp. 66-67). Sobre el debate acerca de su validez, IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), pp. 31-34, EMSLEY, C. (1997), pp. 29-32.

encargado de dirimir sus competencias en el sistema constitucional) listas de las causas civiles, y, semestralmente, de las criminales “así fenecidas como pendientes, con expresión del estado que éstas tengan, incluyendo las que hayan recibido de los tribunales inferiores”, y los artículos 276 a 277 obligan a los tribunales inferiores a transmitir información a las Audiencias y establecen la periodicidad de las comunicaciones.

Sin embargo, las disposiciones muchas veces no se cumplieron o no se conservan los datos, y de las que sí disponemos nos ofrecen una estadística “muy simple y deficiente”⁶⁹⁹. Además, antes de la implantación del primer Código Penal en 1848, la aplicación de la legislación era heterogénea, y los recopiladores de estadísticas, cuando sabían qué penas se habían impuesto, no sabían en base a qué leyes⁷⁰⁰. Los mecanismos se fueron puliendo a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Las audiencias territoriales enviaban estados anuales, si bien, según escribía el abogado Eugenio García de Gregorio en 1836, “ni llegan el objeto, ni son otra cosa que puras imperfecciones que confunden más bien por su inexactitud en lugar de ilustrar”⁷⁰¹.

En lo referente a Galicia tenemos información parcial para algunos años. En el Archivo del Reino de Galicia se conservan algunas comunicaciones correspondientes a los años 1822 y 1823⁷⁰². En la Estadística Judicial de 1826 se informa de que la Audiencia Real de Galicia dio sentencia a 2.005 causas en ese año, pero no cuantas quedaron pendientes, ni cuántos expedientes criminales se despacharon, ni sabemos si había sentencias emitidas por tribunales menores que no entraban en la estadística. La Audiencia gallega tampoco remitió, como sí lo hicieron otros tribunales, información de a qué delitos se correspondieron las causas vistas⁷⁰³. La única información detallada es la del carácter de las resoluciones judiciales y las penas (entre ellas cinco a muerte, una en ausencia), que se muestra a continuación.

Tabla 5.1.1. Destino de los reos juzgados por la Real Audiencia de Galicia en 1826

Destino del reo	Número de reos	Porcentaje
A muerte	5	0,5
Azotes y vergüenza	11	1,2
Trabajos públicos, arsenales y presidios	203	21,8
Prisión, reclusión y destierro	121	13
Servicio de armas y marina	20	2,2
Privación y suspensión de oficio	0	0
Multas y apercibimientos	244	26,2
Indultados	24	2,6
Absueltos y causas sobreseídas	302	32,5
Total	930	100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Judicial de 1827

Gráfico 5.1.1 Penas impuestas por la Real Audiencia de Galicia en 1826

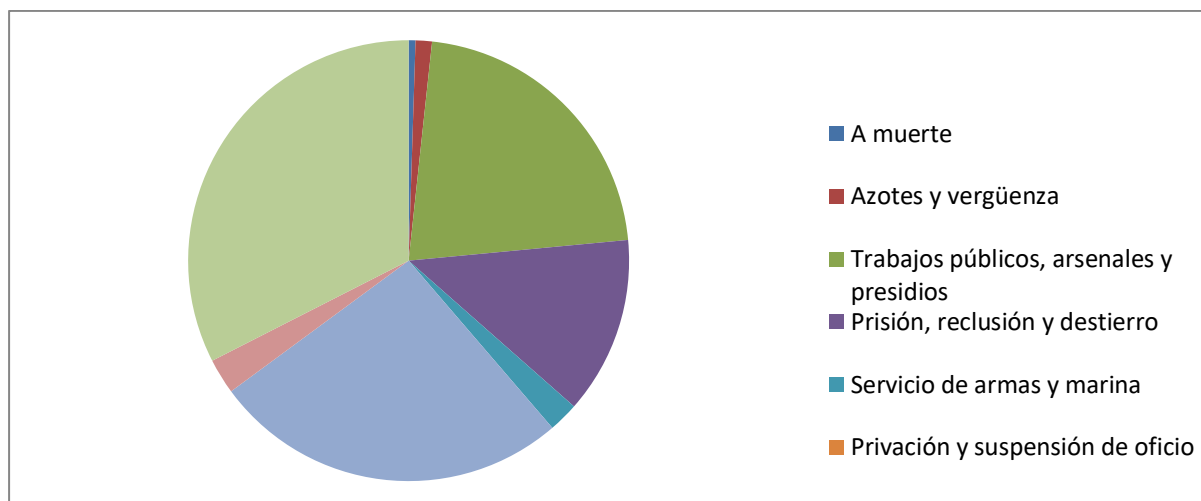
⁶⁹⁹ Para un resumen de la estadística judicial en este periodo, ORTEGO GIL, P. (2016), pp. 25-61. Sobre las deficiencias que presentan estas estadísticas, pp. 62-63.

⁷⁰⁰ ORTEGO GIL, P. (2016), pp. 76.

⁷⁰¹ En su Memoria leída en la Academia matritense de Jurisprudencia y Legislación el 16 de abril de 1844. Recogida en ORTEGO GIL, P. (2016), p. 96.

⁷⁰² En ORTEGO GIL, P. (2016), p. 336.

⁷⁰³ *Gaceta de Madrid*, 20-11-1827, pp. 571-572, 24-11-1827, pp. 563-564.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística Judicial de 1827

También se elaboró una estadística de lo criminal para 1838, que conocemos parcialmente a través de un resumen aparecido en la *Gaceta de Madrid* y la introducción de la *Estadística de Justicia en lo Criminal de 1900*, que hace un resumen histórico de las primeras estadísticas sobre crimen español. Los resultados no son muy fiables: el propio redactor de la información aparecida en la *Gaceta* señala que los datos de buena parte del territorio están distorsionados por la guerra; en especial, los de las audiencias de Navarra, Zaragoza, Valencia y Cataluña “no merecen gran confianza”⁷⁰⁴.

De acuerdo con el resumen publicado en la *Gaceta*, Galicia aparece como una de las regiones en las que se cometen menos crímenes. En ella se impone una pena por cada 709 habitantes, mientras que en la media del país se impone una por cada 501. Al mismo tiempo, hay una causa por cada 1.097 habitantes, y en España, por cada 683. Sin embargo, los datos presentados en la Estadística de 1900 dan cifras ligeramente diferentes para España, y no aparece desglosada Galicia⁷⁰⁵.

En el conjunto de país, siguiendo los datos de la *Gaceta*, hay una causa por muerte por cada 3.972 habitantes. Si cada una se correspondiese con un homicidio doloso (y seguramente no sea así, ya que debe incluir muertes accidentales), y todas se hubiesen producido el mismo año, la tasa de homicidios sería de 25,2 por 100.000 habitantes. Los crímenes contra la seguridad individual son de uno por cada 1.417 habitantes, y los que se producen contra la propiedad, uno por cada 2.406 habitantes⁷⁰⁶.

Sin embargo, estos números quedan reducidos si contrastamos con los datos que aparecieron, atribuidos a 1838, en el resumen histórico de la Estadística de 1900⁷⁰⁷. El número de “homicidios” es de 1.944, para una población estimada en 12.162.872 habitantes. Esto supone una tasa de 15,98 homicidios por 100.000 habitantes, bastante elevada incluso para el contexto del siglo XIX; pero no podemos saber cuántos se deben a la guerra civil en marcha. A partir de estos datos podemos estimar una tasa de delitos contra la persona de 46,35 casos por 100.000 habitantes⁷⁰⁸, y la de

⁷⁰⁴ *Gaceta de Madrid*, número 1668, del 10/06/1839, p. 3.

⁷⁰⁵ *Estadística...* (1900), p. 12. Se señala que hay un delincuente por cada 534 españoles, 30.072 acusados. No se dan cifras para Galicia, y se señala con provincias con menos criminalidad Barcelona (un acusado por cada 1.239 habitantes) y Oviedo, la actual Asturias (uno por cada 988).

⁷⁰⁶ *Gaceta de Madrid*, número 1668, del 10/06/1839, p. 3.

⁷⁰⁷ *Estadística...* (1900), p. 12.

⁷⁰⁸ Para un total de 5.637 casos.

atentados contra la propiedad de 42,1 por 100.000 habitantes⁷⁰⁹. Es salientable la alta tasa de homicidios en relación a las lesiones; más de 1.900 de los primeros frente a 3.693 de las segundas. Esto lleva a pensar que las lesiones leves tendían a no denunciarse en esta época. También es alto el número de penas de muerte, 310.

En 1845 se publicó una estadística relativa a los delitos juzgados en 1843, que hemos consultado también en la introducción de la estadística criminal de 1900⁷¹⁰ y que se considera más completa que la anterior. Hay 3.048 homicidios y seis parricidios, lo que ofrece una tasa de homicidios de 25,2 casos por 100.000 habitantes. Los delitos contra la persona son de algo más de 145 casos por 100.000 habitantes⁷¹¹, los que se realizan contra la propiedad de 85,71 por 100.000 habitantes⁷¹². Las tasas deberían reducirse un tanto, ya que esta estadística sigue presentando una población igual a la anterior por la falta de un nuevo censo; de cualquier manera, las cifras de homicidios dejan claro que España era un país violento, aunque resulta imposible medir año por año las oscilaciones de la tasa de muertes dolosas. La cantidad de penas de muerte sentenciadas sigue siendo alta, 227, y se ejecutaron 223. La cantidad de condenas y el escaso número de indultos que parecen indicar los datos contrastan con las cifras de la Restauración, en las que las ejecuciones decayeron y prácticamente desaparecieron en la práctica.

En el caso concreto de Galicia, disponemos de un volumen importante de causas anteriores entre finales del siglo XVIII y la década de 1860. Se conservan en el Archivo del Reino. Esta serie es muy relevante: la Real Audiencia recibía causas de toda Galicia, y para este periodo las encontramos clasificadas por partidos. Podemos, por tanto, observar tendencias de fondo que quizás quedarían distorsionadas con un estudio local.

Pero tiene algunas deficiencias. En primer lugar, ha habido importantes pérdidas de documentación. Son más importantes antes de 1836, pues el archivo de la Audiencia existe desde la época de Carlos V y el del Reino desde 1691 o 1775, según cómo se quiera fijar la fecha⁷¹³, y en este tiempo sufrió en los traslados, incendios y guerras. En las primeras décadas del siglo XIX hubo expurgos para liberar espacio, aprovechar los papeles de las causas para hacer cartuchos, y, en 1835, destruir los expedientes políticos, siguiendo el espíritu del decreto de amnistía del diez de octubre de 1832⁷¹⁴.

Para el periodo que estudiamos, encontramos expurgos en 1847, 1849-1850, 1853 (parece que el más importante cuantitativamente) y 1854. Parece que la tendencia fue eliminar las causas criminales más antiguas, los sobreseimientos, las causas de penas capital ejecutadas y los incidentes de exacción de costas y multas⁷¹⁵. También se dictaminó normativa para el expurgo en 1911 y, de manera desorganizada, en el periodo franquista, en el que la demanda de papel después de la Guerra Civil animó a realizar expurgos⁷¹⁶.

Aún así, se conservó un número importante de procesos, de manera que el archivo de las causas de la Real Audiencia supone la mayor colección de causas criminales para esta época, con mucha diferencia. En el *Índice Topográfico Cronológico de Causas entre 1.836 y 1.864*, elaborado por el personal de la Audiencia, encontramos clasificados por año y partido judicial de procedencia unos

⁷⁰⁹ Un total de 5.119 casos.

⁷¹⁰ *Estadística...* (1900), pp. 12-13.

⁷¹¹ Además de los homicidios, se cuentan un total de 11.123 lesiones, más de 1.500 con armas.

⁷¹² En total, 10.425.

⁷¹³ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 753, 757.

⁷¹⁴ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 913-914.

⁷¹⁵ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 914-918.

⁷¹⁶ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 918-920.

1.300 legajos de sumarios vistos por la Audiencia, lo que supone quizá unas 15.000 causas⁷¹⁷; hay otro documento equivalente para las causas anteriores. A partir de 1864 solo se conserva documentación suelta, y no hay libros-registro de sentencias antes de 1873, según información facilitada por los responsables del Archivo.

En segundo lugar, la Audiencia no era el tribunal de primera instancia durante esta época. Los magistrados subordinados realizaban la primera sentencia y la Audiencia se pronunciaba sobre las apelaciones en casos en los que el condenado no estaba conforme. Pero no era puramente un tribunal de apelación, ya que también recibe sentencias que simplemente ratifica, y causas criminales sin resolución. En algunos casos simplemente vemos un resumen de la causa, en otros aparece muy pormenorizada Delitos como los asaltos en gavilla y los robos en iglesias parecen haberse conservado sistemáticamente aunque solo sean sobreseimientos, a juzgar por la cata que hemos realizado y de la que luego hablaremos. Quizás ciertos tipos de crímenes (los más graves, aquellos en los que se acusa a alcaldes, escribanos y jueces de primera instancia) tenían más posibilidades de verse en la Audiencia de manera pormenorizada y de sobrevivir a los expurgos.

Finalmente, como herramienta para manejar los datos contamos con los ya citados *Índices*, documentos creados por el propio Archivo del Reino de Galicia en los que constan, además de los números que identifican el legajo y número de cada sumario, el partido judicial y año de origen y una breve descripción de la causa. Permite ahorrar gran cantidad de trabajo al tratar la información, pero tiene algunos problemas. Un número indeterminado de causas, quizá unos pocos centenares, se conservan en los fondos del Archivo pero no están incluidas en el *Índice*.

También hay algunos problemas menores para la clasificación temporal y espacial de las causas. El partido al que se refieren los *Índices* es aquel en el que se llevó el proceso antes de remitirse a la Audiencia. Casi siempre se debe a que allí se cometió el delito, y por tanto se juzga en primera instancia, pero hay algún caso durante la instrucción se deriva a otro juzgado⁷¹⁸. En cuanto al año, entendemos que es aquel en el que se abrió el sumario, o al menos coincide en todos los que hemos observado. Habitualmente, también es el año en que se cometió el delito. En la muestra que veremos en el apartado 5.2, en el 89,7% de los sumarios el crimen ocurrió el año en que se inició la causa, y en el 8,5% el acto se cometió el año anterior, o al menos corresponden a una serie de delitos que se inició en este. Tan solo el 1,7% responden a crímenes más antiguos. De cualquier modo, no creemos que distorsionen de manera importante la serie estadística, y en todo caso, este documento es la mejor opción para el análisis cuantitativo, puesto que las condiciones de los índices elaborados en el siglo XIX hacen inviable trabajar con ellos⁷¹⁹.

Otro problema es la falta de descripción detallada de las causas, que impide estudiar algunos delitos a través de ellos. Por ejemplo, hemos podido reconstruir el número de posibles causas por homicidio

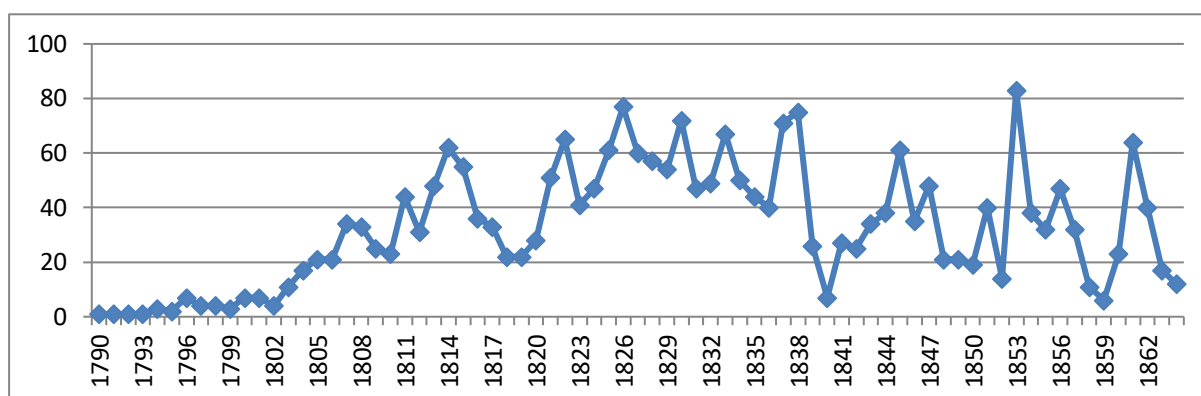
⁷¹⁷ Se conserva un número similar, si bien seguramente más irregular, entre finales del siglo XVIII y 1835. Las estimaciones se han hecho en relación a los ya mencionados *Índices Topográficos*.

⁷¹⁸ *Causas* 2143, 2, iniciada en Lalín porque allí se puso la denuncia, se deriva al juzgado de Santiago porque allí se cometió el robo, el domicilio de los acusados está más próximo a este juzgado y “la carcel de este de Lalin se halla atacada de presos, su local es reducido que no ofrece seguridad y menos proporcion”. Del promotor fiscal, folio 2A del primer legajo.

⁷¹⁹ Se conservan aproximadamente una treinta de índices para el siglo XIX de las diferentes escribanías de la Audiencia, de los que dos registran exclusivamente causas criminales y el resto tienen algunas. Sin embargo, están organizados en base a los nombres de los implicados en las causas, no hay modo de filtrar las causas por año o por región, en muchos asientos no aparece siquiera esta información, se incluyen causas del siglo anterior y no registran exhaustivamente las causas de las últimas décadas del siglo. Por todos estos motivos sirven para buscar causas concretas de las que se conozca la escribanía y el nombre del implicado pero no para elaborar información estadística. Las causas que contienen, según los responsables del archivo, ha sido trasladada al sistema de fichas ya mencionado.

entre finales del siglo XVIII y los años 60 del siglo XIX a partir de las anotaciones sobre procesos de investigación de muertes (excluyendo aquellas que aparecen descritas como accidentales o son evidentemente naturales, como los fallecimientos por caída de rayo). Pero un número desconocido son muertes naturales investigadas por ser consideradas sospechosas, algo que, como veremos en el próximo capítulo, componía el grueso de las investigaciones por homicidio. Se añade la estadística pero no tiene valor a menos que se realice un estudio en detalle de las causas.

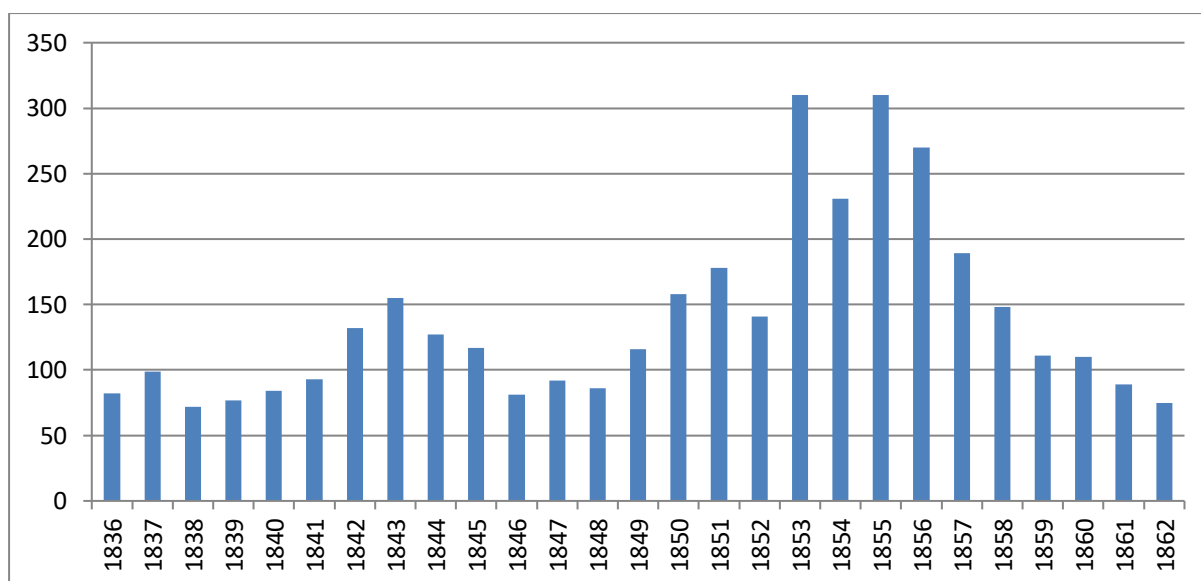
Gráfico 5.1.2 Causas por muertes no accidentales (a partir de la su descripción en los índices topográficos)



Fuente: Elaboración propia a partir de las causas conservadas en el archivo de la Real Audiencia de Galicia

Una vez asumidos estos sesgos, la clasificación da una visión bastante fiable de la dispersión geográfica y temporal del crimen. Para estudiarlo hemos seleccionado tres partidos judiciales de cada una de las provincias gallegas, buscando, en la medida de lo posible, la heterogeneidad social y económica. En la provincia de A Coruña se han elegido los partidos de Noia, Arzúa y Santiago de Compostela. En la de Lugo, Fonsagrada, Viveiro y Lugo. En la de Pontevedra, Cambados, Verín y Pontevedra. En la de Ourense, Xinzo de Limia, Valdeorras y Ourense. En todos se ha buscado un partido judicial con una ciudad con peso de la Administración, otro con una villa costera (excepto, por supuesto, en Ourense, en el que hemos elegido uno que haga frontera con Portugal) y uno de interior con economía rural. En cuanto al marco temporal, hemos escogido como años límite 1836, por ser el siguiente a la formación de los modernos partidos judiciales, y 1862, pues a partir de ese año el número de causas conservadas desciende de manera importante. En total, hemos registrado 3.733 causas, con un importante incremento en los años 50.

Gráfico 5.1.3 Causas entendidas por la Real Audiencia



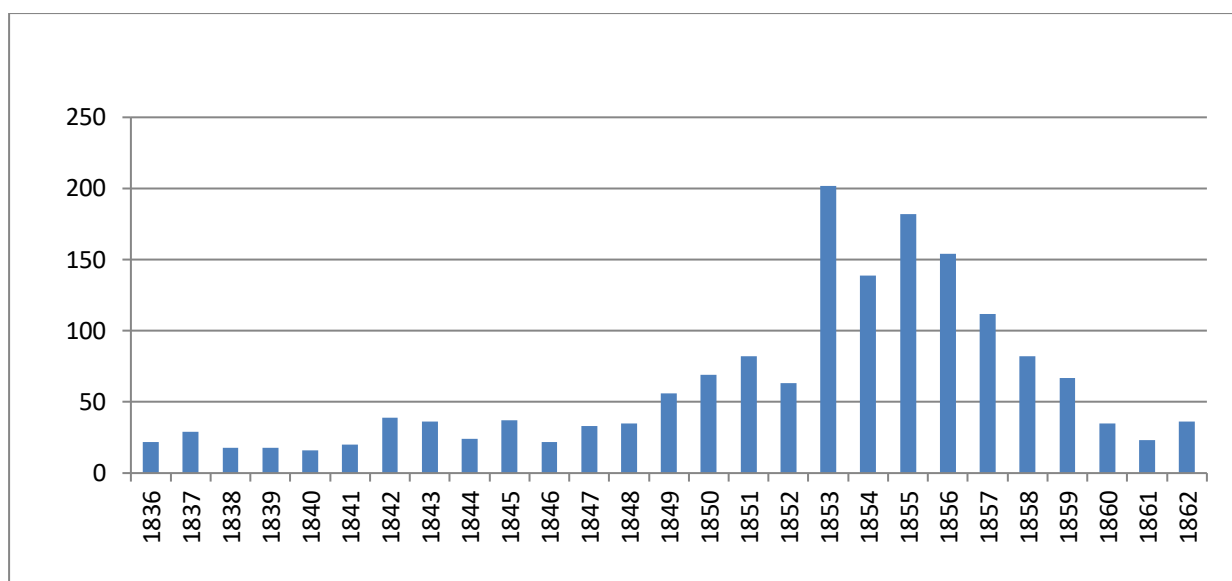
Fuente: Elaboración propia

Dentro de esta serie, el fenómeno más llamativo es el crecimiento de los delitos de naturaleza económica, que parecen indicar un aumento de este tipo de criminalidad: hablamos de los hurtos, robos y apropiaciones de bienes muebles (ya contengan violencia o no), estafas, malversaciones, tráfico de mercancías ilícitas y moneda falsa, cobro de exacciones indebidas y defraudaciones. Incluimos las causas en las que el delito quedó en intento y aquellas en las que se persigue a sospechosos de ladrones, se aprehende a individuos con mercancías robadas o se actúa contra receptores, cómplices y encubridores. Son, en total, 1.651 casos. De estos, el 97% corresponden a robos y hurtos.

Hemos dejado fuera de la estadística las destrucciones de propiedad privada e incendios, y también, por prudencia, algunos casos de talas, daños en frutos y apropiaciones de piedras que podrían tener motivación económica que no se señala explícitamente⁷²⁰, y los casos de sospechas de conducta en los que no se acuse de ladrón. También hemos excluido las causas que están repetidas. Con estos parámetros, los datos indican que a lo largo del periodo hay un aumento de las causas vistas, que sigue hasta cierto punto el incremento general. Pero también un incremento relativo de este tipo de delitos, que pasan de ser menos de un tercio del total a superar ampliamente el 50% en los años 50.

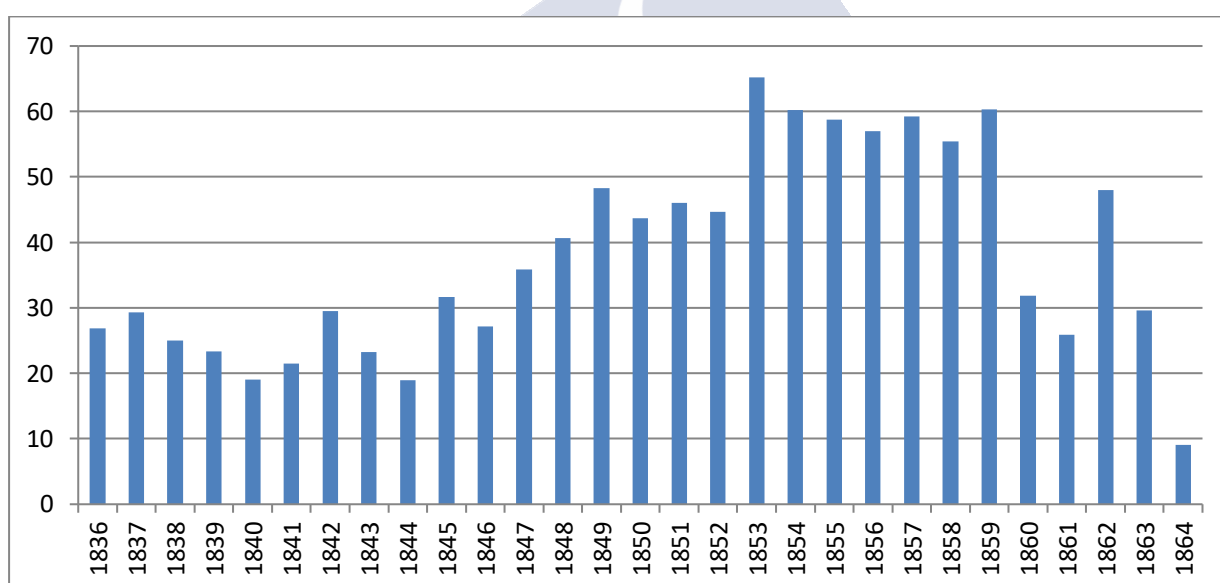
Gráfico 5.1.4 Delitos económicos entendidos por la Audiencia

⁷²⁰ También algún caso muy concreto, como las comunicaciones remitidas a la Audiencia sobre una gavilla de ladrones.



Fuente: Elaboración propia a partir del Índice Topográfico Cronológico

Gráfico 5.1.5 Porcentaje de delitos económicos en relación al total



Fuente: Elaboración propia a partir del Índice Topográfico Cronológico

Podemos describir tres periodos. Entre 1836 y 1845 las causas por delitos económicos son minoritarias, entre algo menos de un quinto y algo menos de un tercio del total. En 1836 y 1837 el porcentaje de crímenes económicos es relativamente elevado en comparación con los años siguientes, pero aún así no llega al 30% del total de causas. Un estudio detallado de las causas abiertas por asaltos y maltratos de partidas o simpatizantes carlistas quizás aumentaría los porcentajes, ya que en los sumarios también se suele mencionar secundariamente que robaron o exigieron bienes, armas o dinero⁷²¹.

⁷²¹ Así lo detectamos en algunas causas, como la 1716 (6) y 1716 (12). En principio, y debido al estado de guerra, la jurisdicción ordinaria se inhibía a favor de la militar para los procesos relacionados con los carlistas, pero en la práctica aparecen tanto acciones militares como robos en los que es difícil distinguir si nos encontramos con una mala identificación de criminales comunes, con bandidos que se hacen pasar por

La tendencia positiva se observa quizás ya en 1845, pero se hace evidente en términos relativos (no tanto en los absolutos) de 1847 en adelante. Entre 1848 y 1852 los delitos económicos ya suponen entre el 40 y el 50% del total todos los años. Si el incremento refleja un aumento real de la criminalidad, o de su persecución, tenderíamos a situarlo en la segunda mitad de la década de 1840. Simultáneamente, vemos cómo se incrementa el número de causas.

El tercer periodo es el más claro. Entre 1853 y 1859 los delitos económicos ya son mayoría, entre el 54 y el 62,9% del total. En los años centrales de la década, 1853-1856, encontramos simultáneamente las cifras más altas de causas vistas por la Audiencia de todo el periodo y las tasas más altas de crimen económico en relación al total. En 1852-1853 hay un importante aumento de las aprehensiones por parte de la Guardia Civil en la provincia de A Coruña, y destacan las detenciones de ladrones en 1853 y de autores de faltas leves en 1852, lo que no deja de ser un indicador secundario pero relevante. Martínez Ruiz atribuye el aumento del crimen al hambre⁷²². En cambio, el número de procesos se dispara en 1854, con un salto importante en relación a 1853. Esto puede deberse al expurgo ya mencionado de este último año, o a otros posteriores. En todo caso, la combinación de un alto número de causas con un porcentaje alto de delitos económicos lleva a pensar que se siguieron más procesos.

Esta tendencia coincide con lo que muestran las escasas estadísticas judiciales de las que disponemos, que apuntan a un recrudecimiento del delito contra la propiedad a mediados del periodo isabelino. En 1843, se juzgó a 10.425 personas por delitos contra la propiedad⁷²³, incluyendo entre ellos algunos tipos como las talas y daños en montes y paseos y los incendios casuales, de entre los 38.620 acusados cuyas causas se fallaron. No sabemos a cuántos delitos corresponde esta cifra, pero, si sigue la misma proporción que el conjunto, serían unos 3.780 delitos⁷²⁴. Siguiendo nuestras interrumpidas fuentes estadísticas, encontramos unos 20.000 anuales en el periodo 1859-1861. La cifra vuelve a descender en 1883 y los años siguientes, como veremos en el capítulo siguiente.

Es posible, aunque no lo consideramos probable, que la distribución sea un sesgo provocado por los expurgos⁷²⁵. Suponiendo que no sea así, podemos correlacionar las tasas más altas de crimen contra

carlistas o con partidas que propiamente se dedican al latrocinio. Sobre todo en los últimos años de la guerra, las partidas carlistas gallegas impusieron contribuciones, amenazas contra individuos concretos y “xa no final, non deixaron de acudir á rapiña”. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), p. 111, 155.

⁷²² Señala que hay también picos de detenciones en Pontevedra y Lugo en 1852-1853 (no así en Ourense). Hay que apuntar, sin embargo, que el número máximo de detenciones en la primera provincia se da en 1857, y que el propio autor considera que el número de aprehensiones no refleja con fidelidad la criminalidad, ya que considera que los picos de criminalidad se producen en épocas de crisis en las que la Guardia Civil los reprimía con menos efectividad. Así, mantiene que en el periodo 1854-1856 se produjo una de las “alzas claras” en los niveles de delincuencia de la época isabelina, pese a que el número de capturas de delincuentes descendió. MARTÍNEZ RUIZ, E. (1982), pp. 97, 101-102, 105-108, 114, 146-147, 261-264.

⁷²³ *Gaceta de Madrid*, 14-02-1845, pp. 1-2.

⁷²⁴ El número de delitos ese año es de 14.005; según el informe del Ministerio de Gracia y Justicia, “no es de extrañar que sea menor que el número de acusados por ser tan común cometerse aquellos con el auxilio de cómplices”.

⁷²⁵ La correlación entre el número de causas vistas por la Audiencia y el peso relativo de los delitos económicos es positiva, si bien no clarísima (0,72 según el coeficiente de Pearson). En los años en los que se entendieron, o se conservan, muchas causas, es más probable que un porcentaje elevado de ellas sea por delitos económicos, así que puede ser que simplemente los años en los que se expurgaron causas se eliminaran las más leves de hurtos y robos. Además, el número de causas es más volátil que el peso relativo de estos crímenes: en general, el porcentaje de delitos económicos de un año es coherente con la tendencia y con su época, no con el número de causas que contiene. La principal salvedad es la de 1860. Sin embargo, si observamos los años

la propiedad se sitúan en los años de la crisis de subsistencias. La relación entre un aumento de la criminalidad de tipo económico y el hambre en los años 50 ya ha sido señalada por parte de la historiografía para España⁷²⁶. En cambio, en 1847, un año en el que en España se viven motines relacionados con el encarecimiento del pan y cuestiones laborales y fiscales, y en Galicia, en particular, “the disturbances were at their most intense”⁷²⁷, no encontramos un aumento de la criminalidad. Esto no es extraño, ya que los motines suelen producirse en momentos puntuales ante la previsión del aumento de precios (y en las villas y ciudades), y no en periodos de auténtica hambruna⁷²⁸.

Mientras que en la mayoría de países de Europa la crisis agrícola de mediados del XIX se produce en la segunda mitad de los años 40, en Galicia los peores años empiezan con la mala cosecha de 1852, en el que empieza una crisis de subsistencias que durará hasta 1855. Coincidirá, primero, con una epidemia de fiebres y luego otra de cólera. Los precios del cereal no se normalizarán hasta la cosecha de 1857-1858⁷²⁹. La crisis es así más larga que en el conjunto de España, en la que los años más duros fueron 1856-1857. No tenemos datos acerca de si produjo una caída de población en Galicia por las malas cosechas. En otras provincias de la costa cantábrica murió mucha más gente de la esperable en 1855, pero por la epidemia de cólera; las carestías de esta época “apenas se dejaron sentir en el movimiento de la población y mucho menos en la mortalidad”⁷³⁰.

En 1860 y los años subsiguientes los datos se hacen más escasos y la fuente pierde fiabilidad, pero sin embargo parece que hay un patrón de descenso. Al menos en el partido judicial de A Coruña, el número de reos que ingresaron en la cárcel provincial condenados a arresto mayor por delitos económicos desciende a partir del pico de la segunda mitad de los años 50. Esta categoría incluye a la mayoría de hurtos y los robos menos graves, por lo que lo consideramos una fuente fiable para medir el delito económico menor. Sin embargo, es posible que no sea representativa del conjunto de la región. Para la década de 1880, como veremos en el capítulo 6, el delito económico había descendido.

Gráfico 5.1.6 Reos de pena de arresto mayor por delitos contra la propiedad por 100.000 habs. En la cárcel de partido de A Coruña

1843, 1849 y 1858 vemos que tienen un número de sumarios muy parecido, pero el porcentaje de delitos económicos es muy diferente entre ellos, coherente con los años que los rodean y con la tendencia general, y en 1857-1859, aunque el número de causas desciende de manera importante, se mantienen porcentajes similares a los del cuatrienio anterior.

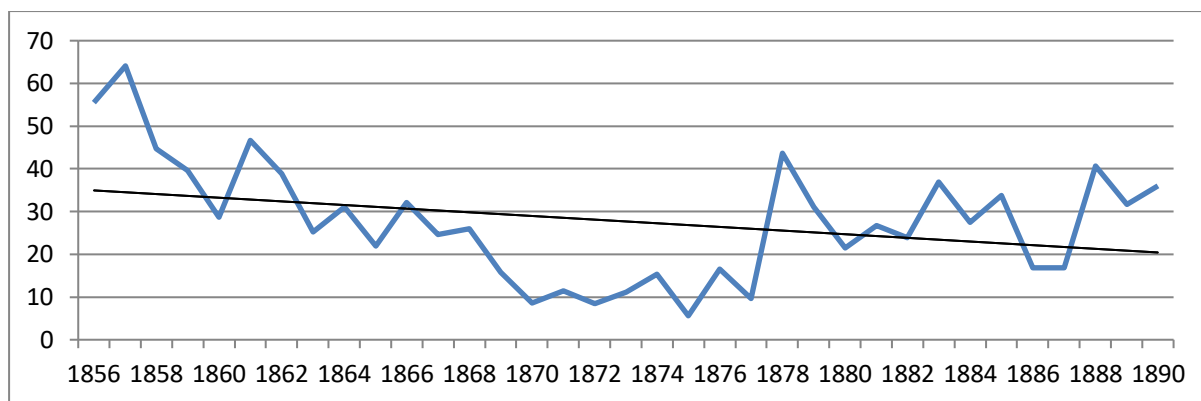
⁷²⁶ Martínez Ruiz ve una “indudable” relación entre “los momentos de virulencia delictiva y los años de crisis económica y social” y afirma que “los años de crisis de subsistencias, pues, son años en los que los índices delictivos suben destacadamente” MARTÍNEZ RUIZ, E. (1982), pp. 4, 11, 28, 32, 77.. Para Gómez Bravo, en 1856, para Alcalá de Henares, “se sucedieron las crisis del pan” y en paralelo el “hurto de alimentos y robo de cosechas”, fenómeno ligado a la quiebra del sistema de caridad por la desamortización. GÓMEZ BRAVO, G. (2004), p. 478, 525.

⁷²⁷ Los encontramos en villas y ciudades: Vigo, Ponte Sampaio, Pontevedra, Santiago y A Coruña, donde se produjeron varios muertos por disparos de las tropas. DÍAZ MARÍN, P. (2007), p. 281. Sobre el comportamiento del precio del trigo en Galicia, pp. 270-272.

⁷²⁸ Según las tesis clásicas de Sorokin y Keys, citadas en VANHAUTE, E., PAPING, R., Ó GRÁDA, C. (2007), p. 38.

⁷²⁹ RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), pp. 15-19.

⁷³⁰ En Cantabria y en Vizcaya fue del 203,7% y 161,7% respectivamente, según un cálculo realizado por desde 1680 a 1860. En ambos casos, son las más altas de todo el periodo. En Guipúzcoa es del 168,1%, la segunda más alta de la serie. CATALÁN MARTÍNEZ, E., LANZA GARCÍA, R. (2015), p. 24, 29.



Fuente: Registros de reos y censos⁷³¹

5.2 “El hambre le impulsara”: proletariado y crímenes de hambre en la crisis de subsistencias

“No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprenden robando debe devolver siete veces el valor de lo robado; a veces tiene que pagar con todas sus posesiones”- Proverbios 6:30-31

Para determinar si podemos ligar el aumento aparente de la criminalidad económica en los años 50 a la crisis de subsistencias hemos realizado una cata de las causas por robos y hurtos en los años 1844, 1849, 1854 y 1862. Para obtener una visión amplia hemos dispersado la muestra en los diversos partidos judiciales, priorizando siempre los partidos capitalinos porque tienden a tener más causas criminales⁷³², si bien no hemos encontrado causas suficientes para todos los años y todos los partidos⁷³³.

En total, hemos visto 139 sumarios, de las que hemos descartado 22 por mala clasificación, información mínima, mala conservación o porque la causa se desvió a otro partido. Las 115 restantes proporcionan un nivel de información muy heterogéneo: a veces encontramos unos pocos folios con un relatorio de la causa, algunas comunicaciones y un auto de sobreseimiento, en otras centenares de folios con procesos de cobro de costas y extractos de las causas originales. Hemos examinado las partes más ricas en información⁷³⁴, anotando sistemáticamente ciertos datos a los que se hará referencia en adelante según su estudio haya resultado de utilidad⁷³⁵.

⁷³¹ CARBALLO GENDE, E. (2018).

⁷³² Se estableció como número a estudiar cuatro causas en 1844, 1849 y 1862 para cada uno de los partidos capitalinos, y dos para el resto, sumando 32. En 1854, en el que hay más datos, y tiene un plus de interés por ser el que nos puede dar más información de la crisis de subsistencias, el cupo fue respectivamente seis y tres, sumando 48. Se han observado por el orden en que aparecían en el listado del Archivo del Reino. Si una causa resultaba descartada, se pasaba a la siguiente, hasta agotar el cupo o el año.

⁷³³ En 1844 el número de causas observadas es de 17: cuatro en Lugo, una en Fonsagrada, ninguna en Viveiro, tres en Santiago, una en Arzúa, ninguna en Noia, una en Ourense, dos en Xinzo, una en Valdeorras, dos en Lalín, dos en Pontevedra, ninguna en Cambados. En 1849 se cumplió todo el cupo excepto en Xinzo, donde solo se vio una causa. En 1854 se cumplió todo el cupo menos en Fonsagrada, donde se encontraron dos. En 1862 se vieron 22: una en Cambados, dos en Pontevedra, dos en Lalín, tres en Lugo, ninguna en Fonsagrada, ninguna en Viveiro, dos en Santiago, dos en Noia, dos en Arzúa, cuatro en Ourense, dos en Xinzo, dos en Valdeorras.

⁷³⁴ En particular, las sentencias en primera y segunda instancia, los relatorios de la causa, las indagatorias de los procesados, los informes del fiscal y los escritos de los acusados y sus abogados. Queda material para el

En los tres primeros años de la muestra encontramos un par de casos de denuncias falsas que acaban en la persecución judicial de la parte demandante, pero la mayoría de los sumarios acaban en condena, al menos, en cuanto a costas, y parecen fundamentados. En 1862 la inmensa mayoría son sobreseimientos remitidos a la Audiencia para su aprobación y veredictos de libre absolución, y se incluyen una cantidad importante de denuncias maliciosas o apenas fundamentadas. Esto nos lleva a pensar que la muestra está sesgada; quizás estos años se eliminaron las causas más voluminosas. Este año, por tanto, queda excluido de los análisis que realizaremos a continuación, a menos que especifiquemos lo contrario.

Los datos apuntan a que parte del aumento de crímenes en la década de 1850 se debe al aumento de los delitos de subsistencia. En 1844 los delitos en los que se roba sobre todo alimentos son menos del 12% de los crímenes, y en 1849 suponen el 6,5%. En 1854, en cambio, suman el 34% del total. En este año tenemos también un porcentaje significativo de sustracciones de enseres domésticos y herramientas (a veces acompañados de pequeñas cantidades de alimentos o ropa): suponen casi el 15% de los casos, mientras que en 1844 eran el 5,9% y en 1849 no hubo ninguno. Sumados, son casi la mitad de las causas examinadas ese año. Otro 10,6% son sustracciones de ropas y telas.

No todas ellas son robos de supervivencia, y no todos los robos de supervivencia son sustracciones de alimentos: los robos de ropas y telas son el 23,5% de las causas en 1844 y el 32,3% de las de 1849, y veremos algún robo de alhajas justificado por el hambre. Pero el aumento numérico de los sumarios de robos de alimentos nos lleva a pensar que habían aumentado como estrategia de supervivencia en la crisis de los 50, o al menos se perseguían más.

En general, los que roban no tienen propiedades o muy pocas, pero eso es el caso de la mayor parte de la población, y no siempre es para cubrir una necesidad básica. José Villamarín, un sastre ourensano de 22 años, le robó 60 reales en 1854 porque aunque “le alimentaba y vestía, no le daba dinero mas de alguna que otra vez para fumar y afeitarse y no para sus diversiones”. Invirtió el dinero en emborracharse⁷³⁶.

Pero, si atendemos a las alegaciones de los procesados y sus abogados, y al veredicto de los jueces, el número de criminales que delinquían por su miseria también se incrementa. En 1854, en el 12,8% de los casos el procesado alega extrema miseria o la satisfacción de una necesidad urgente, o se reconoce así en el veredicto judicial. Otro 27,6% apuntan en esa dirección (el encausado estaba pidiendo cuando cometió el crimen o admite ser un pordiosero, un testigo dice que lo hizo para comer aunque él no confiese el crimen, se hurtó leña para quemar), así que quizás podamos achacar un 40% de los casos a la satisfacción de necesidades urgentes. En 1849 hallamos este tipo de consideraciones en las defensas o en los veredictos en el 6,5% de los casos, y otro 6,5% son dudosos, entre ellos un hombre que hurtó una yegua “acosado de necesidades y falto de medios con que atender á ellas”, pero usó el dinero para comprar una vaca⁷³⁷. En 1844 no lo encontramos en

estudio en detalle de cuestiones que no hemos tratado más que de pasada, como las actitudes y discursos por parte de los testigos.

⁷³⁵ En concreto, el lugar o parroquia en la que se cometió el hecho; el año en el que se cometió el delito; el sexo, edad, profesión y estado civil de los reos; qué se sustrajo; el tipo de delito, y si fue o no con violencia; quién advirtió el robo, cómo se dio el aviso y qué autoridad realizó las primeras diligencias; qué condena se sentenció en primera y segunda instancia.

⁷³⁶ *Causas*, 1746, 3. La causa del robo se recoge en la sentencia de primera instancia.

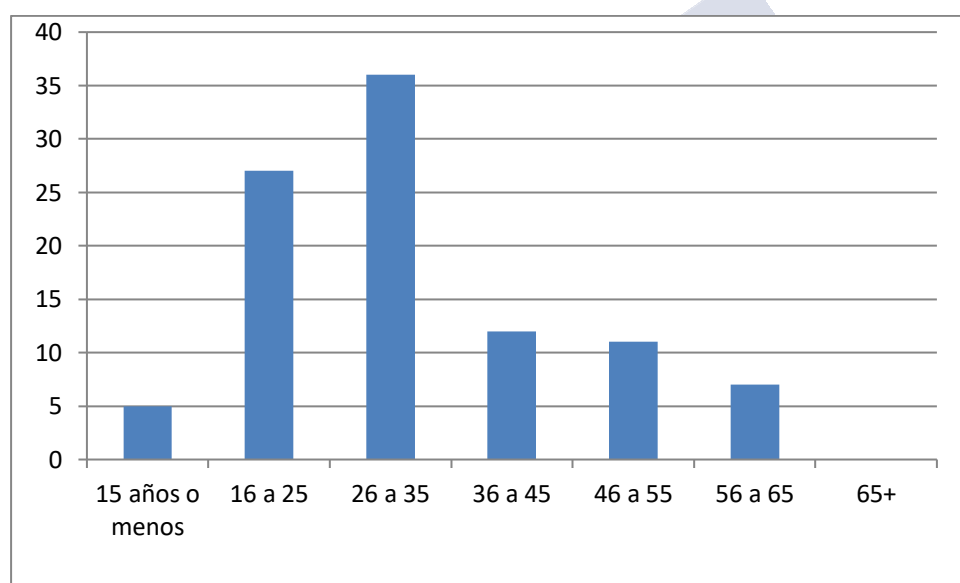
⁷³⁷ Le hemos concedido el beneficio de la duda y hemos considerado su caso como dudoso. *Causas*, 1881, 1; indagatoria de Ramón Cid, , 67B del último legajo. Auto del fiscal, donde viene lo de la vaca, 71A del primer legajo.

ninguno⁷³⁸. Es cierto que determinar las motivaciones de los criminales a partir de la documentación judicial es difícil⁷³⁹, pero la tendencia nos parece significativa.

Pasemos a la estadística demográfica de los acusados, incorporando los casos de 1862 que resulten pertinentes. Excluyendo a los cómplices y encubridores, los casos de denuncias más infundadas⁷⁴⁰ y un robo protagonizado por una nutrida banda de facciosos en 1844 del que tenemos poca información y que distorsionaría la estadística, encontramos a un total de 117 acusados. De ellos, los hombres suponen el 77,8% de los encausados. En los casos de subsistencia o dudosos, son 20 de un total de 30 personas, esto es, el 66,7%. Los hombres, en cambio, suponen el 100% de los casos en los que se produce algún tipo de violencia o intimidación grave contra las personas durante el robo (incluyendo los casos en los que esta derivó del enfrentamiento con los que intentaban impedirlo).

La distribución por edades señala un pico de la actividad delictiva entre los 16 y los 35 años, lo que no supone ninguna sorpresa. Los jóvenes y solteros delinquen más, y las cohortes demográficas que pasan la treintena empiezan a acusar el efecto acumulado de las defunciones.

Gráfico 5.2.1 Distribución de los delincuentes por edad



Fuente: Elaboración propia a partir de las causas del Archivo del Reino de Galicia

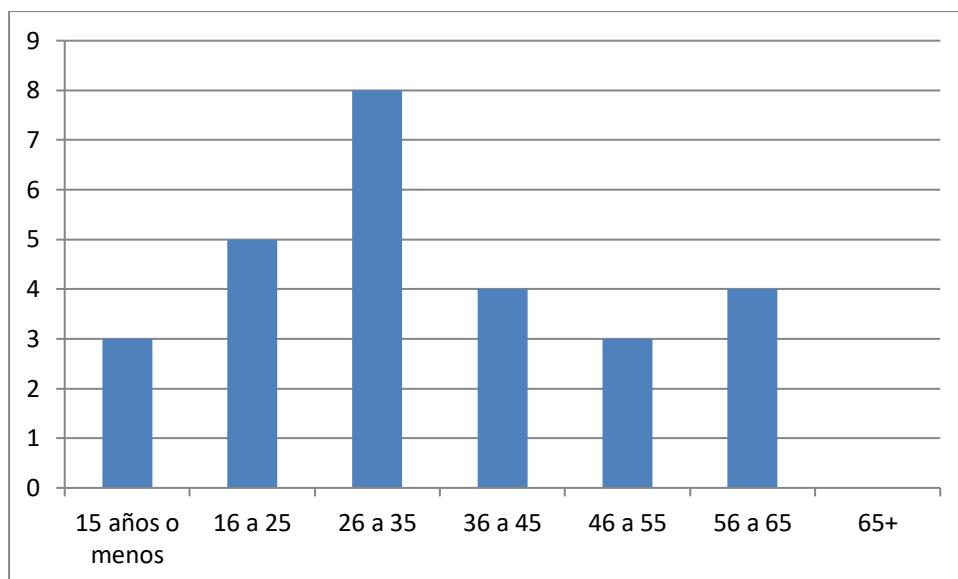
Los crímenes de supervivencia y dudosos siguen el mismo patrón, pero mucho menos acusado, y un número comparativamente alto de mayores de 55 años participan en ellos. No es tampoco sorprendente, pues a estas alturas encontraremos a más incapacitados para el trabajo. Como veremos más adelante, en esta franja se encuentran tanto pordioseros como trabajadores humildes que se ven sin medios para atender a sus familias por la crisis de 1854.

Gráfico 5.2.2 Distribución por edades de los delincuentes

⁷³⁸ Los únicos dos robos de alimentos de ese año son la extracción de diez fanegas de grano de un depósito de Lugo, por un desconocido, un hurto de gallinas en el que la defensa se basó en que se trataba de una “muchachada”.

⁷³⁹ BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2014), pp. 97-98.

⁷⁴⁰ Hemos entendido por tales aquellas en las que se condena al demandante, el caso se sobresee o el acusado es absuelto en primera y segunda instancia.



Fuente: Elaboración propia

Expresar cuantitativamente la posición económica y social de los acusados es más complicado. Encontramos 98 casos en las que se explicita la profesión. Normalmente esta se aparece registrada en la indagatoria del preso, por lo que, hasta cierto punto, responde a la definición que él mismo realiza de su oficio⁷⁴¹. La distribución por profesiones que obtendremos no debe interpretarse como representativa del conjunto del crimen en Galicia, puesto que tampoco lo es la muestra que hemos escogido; seguramente la población urbana está sobre representada, y no encontramos marinos ni pescadores porque no hemos puesto el foco en los partidos rurales costeros. Pero usaremos los oficios para aproximarnos a las capas sociales de las que provenían los delincuentes.

El 43,9% de los acusados de los que sabemos el oficio declaran trabajar en el campo, sin que se mencione ninguna actividad artesanal o comercial de complemento. Los labradores suponen el 25,5% de los acusados. Este término da una engañosa imagen de homogeneidad, pues un labrador puede ser tanto un mediano propietario con fincas que arrienda a terceros como un casero o un miembro del lumpen que tiene una choza y una pequeña huerta. No hemos realizado una categoría sistemática de las propiedades de los reos, pero la cantidad de insolvencias y el pequeño tamaño de los patrimonios que aparecen en los procesos de costas llevan a pensar que el perfil del criminal está más bien entre los últimos, y que muchos son jornaleros aunque no se definan así. Los explícitamente jornaleros, por su parte, suman el 18,4% de los reos⁷⁴², y hay 7,2 jornaleros por cada diez labradores.

El 27,6% de los reos desempeñan profesiones artesanales en su sentido más amplio⁷⁴³. La variedad en cuanto a estatus social es mucha. Muchos se dedican también a tareas agrícolas a tiempo parcial.

⁷⁴¹ Decimos hasta cierto punto porque la indagatoria no es la transcripción literal de las palabras del preso, sino una reconstrucción elaborada por el escribano que está presente. No sabemos si alguien que aparece registrado como “jornalero”, por ejemplo, se describió a sí mismo como tal o el escribano lo catalogó

⁷⁴² El término jornalero en esta época todavía no designa a los trabajadores urbanos a sueldo, a los que se ampliará a medida que avance el siglo. Para evitar confusiones con el proletariado urbano, sólo hemos incluido en esta categoría a los jornaleros del entorno rural, y que por tanto realizan labores agrícolas o de pesca. Para una explicación de la evolución del uso del término. Sobre los jornaleros en el ámbito urbano, MÍGUEZ MACHO, A. (2008), pp. 44-52.

⁷⁴³ Hay que señalar que de estos artesanos seis fueron encausados por dos causas que se consideraron muchachadas.

Aproximadamente la mitad se dedican a tareas que requieren una formación o capital relativamente amplio, aunque algunos de estos están arruinados. Entre el resto tenemos tanto a aprendices adolescentes como a empleados en actividades más accesibles⁷⁴⁴. El 7,1% son comerciantes. Cinco de ellos, todos hombres y de posición al parecer asentada, participaron en un robo en gavilla⁷⁴⁵. Las otras dos son mujeres de estatus bajo: una regatona y una revendedora de pescado al por menor, que realizaron pequeños hurtos.

El 4,1% son menores de edad de los que no figura la profesión. Muy pocos, el 3,1%, se describen como pordioseros o sin oficio. Excepto en casos extremos, los pedigüeños se engloban en las categorías de labradores o jornaleros, o se les asigna en último trabajo que realizaron. Los criados suponen el 7,1% de los casos: en su mayoría están sin trabajo o han robado a sus amos. Encontramos también a un escribano (labrador y barbero a tiempo parcial) y a un trabajador de una contaduría, a los que hemos asignado una categoría aparte. Bajo el epígrafe otros se engloban profesiones que solo aparecen una vez y que no encajan en las restantes categorías⁷⁴⁶.

Tabla 5.2.1 Distribución por profesiones de los acusados

Profesiones	Total	Porcentaje de casos en los que figura la profesión
Labradores	25	25,5
Jornaleros agrícolas	18	18,4
Profesiones artesanales	27	27,6
Comerciantes	7	7,1
Mendigos o sin oficio conocido	3	3,1
Menores de edad sin profesión	4	4,1
Criados y sirvientes	7	7,1
Profesiones letradas	2	2
Otros	5	5,1
Subtotal de aquellos de los que sabemos la profesión	98	100
No figura	18	

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los robos de subsistencia y los casos dudosos, hemos incluido la distribución por profesiones en la tabla siguiente, pero el tamaño de la muestra es demasiado escaso para sacar conclusiones fundadas. Aumenta el porcentaje de trabajadores agrícolas, ya que los casos que hemos visto provienen sobre todo del rural. Los menores que aparecen, excepto en un caso, delinquen acompañados de sus padres o tutores.

⁷⁴⁴ Para realizar el cálculo nos hemos basado en las observaciones de Domínguez Castro acerca de la distribución de las actividades artesanales en los estratos sociales del campesinado. De los casos que hemos observado, 12 se dedican a actividades que requieren un capital o formación (maestros, herreros, sastres o costureras, molineros) y que tenderán a ser ocupados por gente de las familias más acomodadas. Otros 12 son aprendices, o desempeñan tareas que dependen más del trabajo que del capital: zapateros, carpinteros, zoqueiros, canteros, curtidores. Otros tres artesanos, dos panaderas y un “fabricante”, no han sido clasificados. DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (2005), p. 466.

⁷⁴⁵ Dos traficantes “en género”, uno en caballerías, un “alquilador” y un “comerciante”. *Causas*, 1042, 10.

⁷⁴⁶ Un licenciado del ejército, un soldado, una mujer de profesión “labores de su casa”, un peón y un minero.

Tabla 5.2.2 Distribución por profesiones en los casos catalogados como crímenes de subsistencia o dudosos

Profesiones	Total	Porcentaje
Labradores	8	32
Jornaleros agrícolas	5	20
Profesiones artesanales	3	12
Comerciantes	1	4
Mendigos o sin oficio conocido	1	4
Menores de edad sin profesión	4	16
Criados y sirvientes	1	4
Profesiones letradas	1	4
Otros	1	4
Total	25	100

Fuente: Elaboración propia

Los datos, por los motivos que ya hemos expuesto, no nos sirven como una radiografía del perfil de los criminales en toda Galicia. Pero nos muestran que el robo y el hurto son delitos típicos de las clases populares; las altas no participan en ellos. Hay un párroco entre los absueltos, pero es un caso testimonial, y si hubiera sido culpable su caso hubiera respondido más bien a cobrarse una deuda por la fuerza que a un robo típico. Sobre todo en el caso de los crímenes de subsistencias, parece concentrarse en los sectores más proletarizados y vulnerables a los vaivenes económicos.

Para entender las dinámicas sociales que llevaron al aumento del robo durante la crisis de subsistencias consideramos necesario un análisis cualitativo de ciertos casos. En 1854 vemos agricultores maduros sin antecedentes que se declaran labradores o jornaleros y que se ven incapaces de mantener a su familia (aunque esto no los libra de recibir castigos bastante duros). Según el abogado del labrador Manuel Canda, cuando su cliente entró en la noche del 30 de mayo de 1854 en un molino ajeno para extraer maíz (valorado en 39 reales) “el hambre le impulsará”. Tenía 58 años, estaba viudo y tenía hijos El robo no le sirvió de mucho: le encontraron el maíz la noche siguiente, y, condenado a un año de presidio. Murió el uno de enero de 1855 en la cárcel de Lalín⁷⁴⁷. Felipe Rodríguez, un jornalero de 60 años del partido de Valdeorras, fue encausado por hurtar a sus vecinos algunos haces de centeno y algunas patatas y garbanzos. Afirmó que “las mieses las ha cogido como el año está escaso de frutos para vivir a fin de tener algo más con que atender a sus necesidades”⁷⁴⁸.

Otro labrador de 44 años, José Sierra, robó un costal de maíz por valor de 12 reales del horno de una convecina, Francisca Casás. Antes de llegar a su casa lo sorprendió un hombre de la parroquia, Bernardino Doniz. Sierra, quizás derrumbándose ante los vecinos que se reunieron, confesó y entregó la llave con la que había cometido el hurto. Admitió los hechos ante el teniente de alcalde que llevó la instrucción, alegando solo que no tenía “cosa alguna que comer”. La sentencia recoge que lo hizo “para alimentar a su mujer y cuatro hijos de tierna edad”, resalta “levedad del robo” y

⁷⁴⁷ *Causas*, 2150, 5. Declaración del abogado, en primer legajo, 13A. De su muerte, 49A. Valor del maíz, 26B. Condena en primera instancia, 27B.

⁷⁴⁸ *Causas*, 1959, 1, 11A.

admite su “muy probable necesidad”. Pero fue un robo con llave falsa, y, siguiendo el Código Penal, fue sentenciado a diecisiete meses de presidio correccional. Esquivó la prisión dándose a la fuga⁷⁴⁹.

Parece claro que estos robos derivan del empobrecimiento generado por la crisis, si bien no debemos pensar que afectó a toda la población por igual. Como hemos adelantado anteriormente, la sociedad rural gallega era heterogénea en cuanto a recursos y estrategias laborales y de supervivencia. Domínguez Castro engloba a los campesinos en tres bloques: aquellos que trabajan tierras propias, aquellos que trabajan tierras de otros (como jornaleros, y también los caseros en arrendamiento) y los pobres de solemnidad; Cardesín incorpora, para finales del siglo XIX, a los que tienen tierras que arriendan a otros⁷⁵⁰. En este modelo caben todo tipo de gradaciones intermedias, y los linajes familiares y los individuos ascendían o descendían a lo largo del tiempo según su fortuna. Por ejemplo, los hijos menores de las casas sin tierras para repartir quedaban solteros, o emigran, o se colocan como caseiros arrendando tierras ajenas, o pasan a vivir de los comunales⁷⁵¹; a algunos labradores con gran capital podía irles peor que a vecinos con más capacidad de trabajo o más suerte, etcétera.

En relación a la crisis, podemos resumirlo en que existía un grupo que participaba en la economía rural más con su trabajo que con su capital: caseteiros, braceros, artesanos que suministraban productos de poco valor. Su contraparte serían los agricultores que trabajaban una cantidad significativa de tierra en propiedad o en modalidades de aparcería de larga duración, o incluso arrendaban tierra sobrante. Los datos recogidos por Domínguez Martín a partir del censo de 1860 señalan que en torno a la mitad de la población activa agraria en Galicia se clasificaba como jornaleros agrícolas.

Tabla 5.2.3 Población activa agraria en 1860

	Propietarios	Porcentaje	Arrendatarios	Porcentaje	Jornaleros agrícolas	Porcentaje	Total
A Coruña	45.624	20,1	34.433	15,2	147.030	64,7	227.087
Lugo	36.806	39,1	18.554	19,7	38.666	41,1	94.026
Ourense	78.248	52,1	3.028	2	68.845	45,9	150.121
Pontevedra	85.993	41	4.570	2,2	119.338	56,9	209.901
Galicia	246.671	36,2	60.585	8,9	373.879	54,9	681.135
Media de España	1.465.960	33,9	510.467	11,8	2353.005	54,3	4.329.432

Fuente: Elaboración propia a partir de los censo de 1860, recogidos por Domínguez Castro. Los porcentajes y los datos conjuntos para Galicia son de elaboración propia⁷⁵².

Por una parte, las descripciones aparecidas en las causas no tienen por qué coincidir con las del censo. Por otra, nuestra muestra no es representativa del conjunto de Galicia y no tiene en cuenta las importantes variaciones entre provincias. También es posible que en 1860, a consecuencias precisamente de la crisis, el porcentaje de jornaleros fuese mayor que una década atrás. Pero en todo caso, los datos apuntan a que una parte importante de los trabajadores gallegos en el agro dependían de vender su fuerza de trabajo a mediados de siglo.

⁷⁴⁹ *Causas*, 1746, 13. Sentencia en segunda instancia, 7 del primer legajo. Declaración de un vecino en el que habla de su confesión, cinco del último.

⁷⁵⁰ DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (2005), pp. 465-469. CARDESÍN, J. M. (1992), p. 257.

⁷⁵¹ CARDESÍN, J. M. (1992), p. 314.

⁷⁵² DOMÍNGUEZ MARTÍN, R. (1996).

No disponemos de estudios que nos puedan indicar la distribución de estos grupos de población en Galicia, si en la década de 1850 eran más numerosos que en periodos anteriores o si la región estaba más cerca del límite de alimentos de la población. En Europa, globalmente, el crecimiento de la producción agrícola no fue más rápido que el de la población entre 1750 y 1850, lo que generó polarización social y una clase de campesinos dependientes, para mantenerse, del trabajo ajeno⁷⁵³. La población gallega pasa entre 1787 y 1860 de poco más de 1,4 millones de habitantes a casi 1,8 millones, un incremento del 28%. El ritmo de crecimiento es algo menor que el de la población española en su conjunto (fue del 44%), pero la densidad de población era más del doble que la del conjunto del país; el aumento demográfico ya se había producido entre 1650 y 1750, a la par que una la “considerable reducción de la mortalidad catastrófica”. En la década de 1820, la densidad gallega está a la par de “las zonas más ricas de economía agrícola de Europa”⁷⁵⁴. La consecuencia lógica, no por tónica menos cierta, era la “extremada división de la propiedad”, como escribió en 1853 Castro Bolaño en el Informe sobre las causas de la Miseria en Galicia⁷⁵⁵.

Al mismo tiempo, las tasas de crecimiento agrario entre 1752 y 1900 son superiores a las del conjunto del reino de Castilla⁷⁵⁶, pero esto tampoco es una garantía de que el campesinado tuviese una menor presión. En Flandes, el aumento de la población generó empobrecimiento del campesinado pese al alto crecimiento de la producción, al elevarse el precio de la tierra y el monto de las rentas⁷⁵⁷. Cardesín, a partir de una observación en una parroquia rural del ayuntamiento de Castro de Rei, encuentra un incremento de la población de en torno al 40% entre 1790 y mediados del siglo XIX, que coincide con un aumento de la producción intensiva y de la polarización económica⁷⁵⁸.

La práctica totalidad de la población participaba del trabajo o las rentas del sector primario, complementado entre las clases populares con actividades artesanales orientadas al mercado entre las que destaca la industria casera del lienzo. Esta, sin embargo, entró en crisis en la mitad del siglo XIX, sobre todo debido al descenso del arancel de hilo extranjero en 1841. En esta época están también en crisis las ferrerías y la producción de curtidos⁷⁵⁹, y el cultivo de la vid, que tenía un papel fundamental en la economía de algunas zonas como Ribadavia, se vio afectado en la década de 1850 por la epidemia de oidium⁷⁶⁰.

A cambio, el pequeño campesinado y el proletariado rural gallego conservó durante más tiempo el acceso a bienes comunales. En las postrimerías del Antiguo Régimen, mientras en Inglaterra se privatizaban los comunes, la legislación gallega se postuló contra el cercado de pastos en común⁷⁶¹. Las desamortizaciones no afectaron a la mayoría de montes en mano común, y, pese a las disposiciones legislativas del liberalismo tendentes a reconocer solo la propiedad pública y la privada, las particularidades de la estructura económica y social gallega garantizaron que en la práctica se mantuviera la explotación comunal en la mayoría de las parroquias durante los años de nuestro estudio⁷⁶².

⁷⁵³ VANHAUTE, E., PAPING, R., Ó GRÁDA, C. (2007), pp. 18-19.

⁷⁵⁴ DE JUANA LÓPEZ, J., VÁZQUEZ GONZÁLEZ, A. (2005), p. 394-400.

⁷⁵⁵ Recogido en RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), p. 25.

⁷⁵⁶ FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2005), p. 144, en base a datos extraídos de SOTO FERNÁNDEZ, D. (2002): *Transformación productiva da agricultura galega contemporánea. Da agricultura orgánica á revolución verde*. Tesis de doctorado defendida en la Universidade de Santiago de Compostela.

⁷⁵⁷ VANHAUTE, E. (2007), p. 125, 129-130.

⁷⁵⁸ CARDESÍN, J. M. (1992), pp. 161, 165-166.

⁷⁵⁹ ALONSO ÁLVAREZ, L. (2005), pp. 36-45.

⁷⁶⁰ RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), pp. 119-135.

⁷⁶¹ LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), p. 283.

⁷⁶² Sobre el estatus jurídico de los montes en mano común en Galicia, la ofensiva legislativa contra ellos y la comunidad de intereses de labriegos y propietarios rentistas que permitieron su preservación en la práctica (si

Este es un trazado de brocha gorda. La población creció de manera diferente en diferentes partes de Galicia, había heterogeneidad en los modelos agrarios practicados en las diferentes regiones, y las crisis de alimentos, en una época en la que los costes de transporte eran altos y los medios de preservación deficientes, deben analizarse preferentemente en estudios regionales o locales⁷⁶³. También sería necesario conocer las medidas paliativas de las instituciones, que, si bien globalmente parece que fueron “del todo insuficientes”, precisarían un análisis detallado⁷⁶⁴. Pero, a falta de estudios de detalle, podemos colegir de los datos que en la década de 1850 existía una parte importante de la población rural que necesitaba vender la fuerza de trabajo para subsistir, que las fuentes de ingresos independientes de la actividad agraria eran escasas y que habían disminuido en relación a principios de siglo, y que probablemente el incremento poblacional había aumentado la cantidad de proletarios.

Vemos a algunos de estos pobres de aldea durante la crisis de 1854. Un ejemplo es Andrés Fernández, de Vedra, un labrador de 40 años, soltero, que vivía en “dos alpendres o cobertizos” y, según sus propias palabras, se dedicaba a “cultivar sus cortísimos bienes y en trabajar al jornal cuando es llamado en casas de sus convecinos pidiendo limosna cuando no tiene quien le llame”. Su hermana y cuñado lo acusaron de robarles comida de su bien provista despensa. Fue arrestado e ingresó en la cárcel de Santiago en espera de juicio el 21 de febrero de 1854. De sus pertenencias al entrar en prisión solo tenemos esta frase: “ropa que trae, andrajos”. Murió el 28 de febrero en el hospital⁷⁶⁵.

Para Gadd, el aumento de crímenes contra la propiedad tiene correlación no solo con el aumento del grano, sino con las malas cosechas: se juntan los altos precios con la falta de trabajo⁷⁶⁶. Quizás esto fue lo que vivió Ramón Lojo, alias *Cuqueiro*, al que encontramos en un proceso por robo de 1854. Era tan pobre que no tenía siquiera domicilio fijo, pero no era un marginal: a sus treinta años podía trabajar, y trabajaba. La sentencia recoge que según los testigos era un hombre “laborioso” y dedicado a los labores de la pesca, interín dura”, y cuando esta cesa “al jornal que puedan darle de su trabajo en el campo, sin dejar nunca de trabajar a no ser que de la facilite, gozando de buena conducta”. Se introdujo en un horno ajeno para robar un poco de pan de maíz, pero los propietarios lo atraparon. Lo achacó al “hambre”. Tenía antecedentes de la década anterior (él decía que falsos), así que fue condenado a 36 meses de presidio correccional⁷⁶⁷.

Incluso en los años buenos, la estrategia vital de este tipo de trabajadores dependía de la buena voluntad de su entorno, de los propietarios que les dieran trabajo y parte del sobrante de su producción, así como de obtener beneficios marginales de la explotación de los montes comunales. Pero en la crisis los propietarios recortarían gastos, disminuyendo la demanda de trabajo externo, y seguramente eran más reticentes a la hora de compartir sus productos, necesarios para el autoconsumo y que alcanzaban precios altos en los mercados.

No debemos restringir la demanda de trabajo externo a aquel por el que se pagaba un salario en dinero. El proletario agrícola podía recibir a cambio un pago en especie, licencia para aprovechar el

bien con un proceso creciente de parcelación que se acelera a finales del XIX y en el siglo XX), LÓPEZ BALBOA, X. (1990), especialmente pp. 53, 90-92, 156, 219-222.

⁷⁶³ VANHAUTE, E., PAPING, R., Ó GRÁDA, C. (2007), pp. 34, MAHLERWEIN, G. (2007), p. 214.

⁷⁶⁴ Entre las medidas se encuentra la realización de obras públicas, los donativos y préstamos en grano, la disminución de las contribuciones y la libre introducción de cereales. RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), p. 26.

⁷⁶⁵ *Causas*, 1434, 2.

⁷⁶⁶ GADD, C-J. (2007), pp. 330-331.

⁷⁶⁷ *Causas*, 1296.

sobranje de la cosecha, el préstamo de animales o aperos agrícolas, etcétera. La privación de estas formas de aprovechamiento sería igualmente perjudicial aunque no se expresase en términos monetarios, y el hecho de que fuesen irregulares y contingentes, por oposición a la contratación de criados y trabajadores por periodos largos de tiempo⁷⁶⁸, seguramente dificultaba que pudiesen reclamarse como un derecho. Otros pequeños propietarios se verían abocados a descapitalizarse, sin que ello signifique una protesta activa contra sus condiciones externas, en cuyo caso atraería al ojo del historiador⁷⁶⁹.

Los estudios sobre la crisis de la segunda mitad de los años 40 en diversos países de Europa señalan a los pobres rurales como un colectivo perjudicado⁷⁷⁰, si bien en parte porque esta crisis afectó a la patata, un alimento del proletariado rural. Al tiempo, otros trabajos señalan que los agricultores más solventes se veían beneficiados por el aumento de precios o participaban en la especulación⁷⁷¹. La incidencia de estas prácticas debe evaluarse a través de estudios locales. En Jerez de la Frontera, en 1847, los “especuladores, comerciantes y propietarios de trigo en general” se confabularon para mantener alto el precio de este cereal tras la mala cosecha de 1846, siendo “los principales responsables de que la situación se agudizara adquiriendo el carácter de una auténtica crisis de subsistencia”⁷⁷². En el País Vasco, con la crisis de subsistencias de la década de 1850 “la cohesión comunitaria por la que las comarcas autoabastecían se rompió, y los productores con excedentes sucumbieron a las tentaciones del mercado”, las regiones más afectadas fueron precisamente las productoras, y los sectores más familiarizados con el tráfico comercial fueron beneficiados. A mayores, e irónicamente desde el punto de vista de este trabajo, en 1854 la Diputación de Guipúzcoa importó maíz de Galicia; evidentemente, algunos gallegos tenían excedente para exportar⁷⁷³.

La crisis de Crimea había provocado un aumento del precio del grano en toda Europa, y durante la crisis de subsistencias (sobre todo en 1855) se producen motines protagonizados por paisanos que intentan impedir la exportación de cereales⁷⁷⁴. Las dinámicas dependerían quizás del tipo de explotación y su nivel de acceso al mercado⁷⁷⁵; veremos ejemplos de conflictos colectivos por subsistencias en el apartado 8.5.

⁷⁶⁸ En Dinamarca el elevado número de trabajadores que percibían bienes en especie pudo ayudar a mantener la estabilidad durante la crisis de la segunda mitad de los años 40. Hay que matizar que en este país la crisis fue muy leve, por lo que la caída de demanda de trabajo no debió ser dramática, y que incluso allí el proletariado salió perjudicado, como se señala en la nota posterior. HENRIKSEN, I. (2007), p. 311.

⁷⁶⁹ El ruso A. N. Trainin señalaba que la decadencia de las familias campesinas era gradual: First of all, a peasant will sell off his household equipment, after which he sells his work animal, further reducing the area under crops... The road from rye to “famine bread” is strewn with unnoticed transitions that deaden the peasant’s sense of protest and teach him to wait patiently”. A. N. Trainin, *Prestupnost’ goroda i derevni v Rossii*, RusM, nº 7, 1909, citado en FRANK, S. P. (1999), p. 59.

⁷⁷⁰ Así ocurre en Irlanda, donde se multiplican los desahucios de familias pobres DALY, M. E. (2007), pp. 65-66; en Francia, donde los pequeños propietarios y los pobres tuvieron que recurrir al crédito para alimentarse, VIVIER, N. (2007), p. 231-232; y en Dinamarca a mucha menor escala, HENRIKSEN, I. (2007), p. 308.

⁷⁷¹ Así ocurre, por ejemplo en el sur de Alemania, donde “there was a marked contrast in fortunes between the lower classes, on the one hand, and the farmers, who could sell their crops at a price that more than made up for the decline in yield, on the other”, MAHLERWEIN, G. (2007), pp. 217-218. También encontramos dinámicas de ese tipo en Holanda, PAPING, R., TASSENAAR, V. (2007), pp. 165, 171; en Francia,

⁷⁷² GARCÍA CABRERA, J. (2002), pp. 24-25.

⁷⁷³ RUZAGA ORTEGA, R. (2004), pp. 213, 216, 232.

⁷⁷⁴ RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), p. 29.

⁷⁷⁵ En su trabajo sobre la crisis de subsistencias en Prusia, Bass describe tres posibles situaciones en zonas agrícolas. En las regiones exportadoras y con la tierra en manos de grandes propietarios los jornaleros pasaron hambre por el “efecto tijera” de aumento de precios de los cereales (que se destinaban a la exportación) y la menor demanda de mano de obra. En regiones orientadas al mercado con distribución más igualitaria hubo menos hambre, excepto donde la cosecha fue especialmente baja: allí “the joint decline of

5.2.1 “Se le vendieron todos sus bienes”: las dinámicas de la represión del pequeño delito durante la crisis

“Si al Sancionarse las Leyes que nos rigen hubiera pasado por un omento la idea a sus Legisladores de que algunas Provincias de Galicia habían de pasar por los azares que hemos presenciado indudablemente hubieran formulado un Código especial que penara estos delitos escepcionales e hijos de las circunstancias”

Son las palabras del abogado de Antonio Espantoso, un joven zoqueiro de Arzúa encausado por robar telas, ropa y comida de un *sueiro* por “la extrema hambre y miseria”, y “una de las víctimas en quien ha hecho tantos estragos el hambre y miseria que ha afligido a este Partido”. Gregorio María García, juez de primera instancia de Arzúa y alcalde segundo, no tuvo en cuenta este alegato, y condenó a treinta meses de presidio (reducidos, tras apelar, a diecisiete)⁷⁷⁶.

Para entender en todas sus dimensiones el modo en el que el sistema penal castigaba al preso no debemos atender tan solo a los meses o años de prisión a los que se sentencia, sino a la situación del preso durante el proceso judicial y después de la sentencia. En primer lugar, como nos enseña el ejemplo ya citado de Espantoso, se condenaba a los delincuentes independientemente de los motivos que les hubiesen impulsado a robar; con mucha suerte, quizás la pobreza podía aliviar la condena. En este sentido debemos distinguir dos periodos. Hasta 1848, salvando el breve paréntesis del Código Penal de 1822, los jueces se rigen por la Novísima Recopilación. Las penas que se imponen en caso de hurto son arbitrarias, según la valoración que el juez haga de “la repetición o reincidencia, el valor de lo que se regule el robo, la calidad de la persona á quien se robó, y la del delinqüente, con lo demás que se halla prevenido por el Derecho”⁷⁷⁷. Es posible que algunos jueces incluyesen la necesidad entre estas circunstancias, aunque no hemos visto casos.

En el Código Penal de 1848, y su actualización de 1850, los periodos de pena quedan establecidos por ley y con ellos la lista de circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes. Entre ellos no se encuentra el hambre o la satisfacción de necesidades básicas, si bien se exime de pena al que “obra violentado por una fuerza irresistible”⁷⁷⁸ y atenuar la pena al que lo hace por estímulos “poderosos”⁷⁷⁹ y circunstancias análogas. En los casos que hemos visto, los jueces nunca consideran el hambre un eximente, y en la mayoría de las sentencias de 1854 ni se menciona. Seguramente no contamos con más testimonios de alegatos que apelan al estado de necesidad porque los encausados y abogados sabían que esta apelación era inútil, y las defensas se orientaban por tanto a negar el hecho en sí mismo o a presentarlo como encuadrado en un tipo penal leve⁷⁸⁰.

home-grown food and agricultural income opportunities for the day labourers’ families resulted in hunger. From the perspective of the market-oriented peasants, the (negative) volume effect had overcome the (positive) price effect of the dearth. En regiones de economía de subsistencia, “the crop failure directly led to a deficit in food consumption”. BASS, H. H. (2007), p. 199-200.

⁷⁷⁶ *Causas*, 1048, 11. Las declaraciones del condenado, en 2B. El alegato del abogado, 20. Sentencias, 23 y 10.

⁷⁷⁷ Así se decretó en 1745 y figura en la Ley VI del Libro XII, Título XIV, de la Novísima Recopilación. Esta discrecionalidad era, en realidad, una muestra progresiva. La anterior disposición decretaba diez años de galeras, doscientos latigazos y el marcado de los ladrones plebeyos, y diez años en el Peñón o en las minas de azogue para los nobles.

⁷⁷⁸ Código Penal de 1850, art. 8.9

⁷⁷⁹ Código Penal de 1850, art. 9.7.

⁷⁸⁰ En la práctica, la mayor parte de las alegaciones se refieren a cuestiones técnicas. ¿El baúl del que se han extraído unos pocos reales tenía o no llave? ¿Para salvar el muro detrás del que estaban las ropas hurtadas fue necesario trepar? ¿Acceder al horno del que el encausado intentó robar un poco de pan se puede considerar

Sí que hemos identificado algunos casos en los que se tiene en cuenta como atenuante. La Audiencia impuso una pena mínima de un mes de arresto mayor a María López y María Antonia Veiga, que hurtaron un cabrito y un cordero en 1849, y mandó que, en atención a las “miserables circunstancias que concurren en las procesadas y la tenacidad [sic] del delito perseguido”, se “sobresea en mas actuaciones”, lo que lleva a pensar que el juzgado de primera instancia había impuesto otras cargas (aunque no hemos encontrado esta sentencia)⁷⁸¹. En 1862 hay otros dos casos: el de Josefa Arce, una pordiosera que hurtó cinco racimos de uvas de un campo “para comer con un poco de pan”⁷⁸², y el de Manuela Piñeiro, que hurtó ropas a una mujer que la había acogido, según su propia declaración, por “el hambre que padecía y siendo joven que no podía mendigar”. Aquí encontramos declaraciones favorables tanto del fiscal, para el que actuó “impelida por la necesidad que la rodeaba, circunstancia que atenúa su responsabilidad” como del juzgado, que considera que “sinó en todo alo menos en parte por el poderoso estímulo del hambre”⁷⁸³.

Quizás las actitudes hacia el robo se hubiesen dulcificado fuera del periodo de la crisis de subsistencias, quizás las condenas hacia mujeres fuesen un poco más leves. Pero, en cualquier caso, en todos estos casos las acusadas entraron en la cárcel. Durante nuestro periodo de estudio todas las sustracciones por mínimas que fuesen, exceptuando unos pocos casos muy concretos, como hemos visto en el apartado 2.4.3, se penaban con cárcel.

El segundo a tener en cuenta es que los acusados pasaban una cantidad variable de tiempo arrestados en la cárcel a espera de juicio. De hecho, en algunos crímenes menores acababa englobando la pena de cárcel: en los años 40 vemos cómo en algunas sentencias se especifica que las penas se entienden contadas “desde el día en que fueron constituidos en prision”⁷⁸⁴, y en otras se condena “a la Prision Sufrida y un mes Mas de Carcel”⁷⁸⁵. A nivel español, el 9,7% de las sentencias en 1843 eran de “prisión sufrida”⁷⁸⁶. En 1853 y a partir de entonces, cada dos días de arresto se abonarán por uno de sentencia.

El arresto siempre es una experiencia desagradable, pero a mediados del siglo XIX era absolutamente miserable. Las condiciones eran pésimas y en las cárceles de partido se mezclaban acusados en espera de juicio, sentenciados a cargos menores y criminales endurecidos a la espera de ser trasladados a los establecimientos de corrección o a África. Y, lo importante, era ruinoso⁷⁸⁷. Además de perder días de jornal, los detenidos debían ocuparse de su propia manutención. Josefa Santa María, una costurera de 26 años de Boiro, entró en 1854 en la cárcel de Noia acusada de hurtar carne de cerdo a un vecino. Su marido trabajaba desde el amanecer hasta la noche como atador en un almacén, tenían dos hijos menores de tres años, así que para mantenerse en la cárcel solicitó alimentos por ser pobre. Sin embargo, en el informe de pobreza apareció como propietaria

escalamiento? ¿La puerta del molino del que el encausado se llevó maíz estaba abierta, o estaba cerrada, y entonces le fue necesario emplear una llave falsa? ¿Debe considerarse que la lámpara de la catedral de Ourense es un objeto sagrado, y por tanto robarla es sacrilegio de primer orden, o no, ya que no ha sido consagrada, y por tanto lo es de segunda orden? Todas estos ejemplos son reales, y son relevantes afectaban a circunstancias previstas en el Código Penal. De la respuesta dependía que la sentencia fuese de robo o de hurto, o que un agravante alargase la pena.

⁷⁸¹ *Causas*, 1476, 7.

⁷⁸² *Causas*, 1774, 10.

⁷⁸³ *Causas*, 2096, 9.

⁷⁸⁴ *Causas*, 2143, 1.

⁷⁸⁵ *Causas*, 2019, 12.

⁷⁸⁶ *Gaceta de Madrid*, 14-02-1845, pp. 1-2.

⁷⁸⁷ En la primera versión de este capítulo, que fue publicada en la revista *Hispania*, insistimos en esta realidad, que nos parecía que no había sido tratada en la historiografía de la Galicia contemporánea; pero ya la señaló Velasco Souto en una obra que entonces desconocíamos. VELASCO SOUTO, C. F. (2000), pp. 107-108.

de “una casita, una heredad de una *conca* de sembradura, y un pedacito de viña”. Pasado el informe al promotor, determinó que se subastasen las propiedades y que Santa María se mantuviese con el fruto de la venta. En el informe del perito podemos comprobar que la casa solo la poseía a medias, y era “una pequeña choza sin apartados ni divisiones y solo la cubre un mal techo”⁷⁸⁸. El conjunto de las propiedades se tasó en 114 reales. En otro sumarios vemos cómo todas las propiedades del platero José Leiva son embargadas y vendidas “para pagar el importe de socorro al mismo suministrado durante su prisión”⁷⁸⁹.

Los presos insolventes tenían en teoría derecho a la alimentación gratuita, pero en la práctica se formaba un mercado negro para cubrir necesidades básicas. Leemos en la declaración de un preso de la cárcel de Lalín: “habrá como cosa de dos meses poco mas o menos y en época que el deponente se hallaba asentado en la cárcel de este Partido vino tambien a ella un tal Juan Carro, y como se hallase necesitado y no tubiese cosa alguna que come el mismo deponente le fue adelantando algunas libras de Pan para su sustento, y por cuia satisfacción el Carro le dio unos Borciguies ya usados de Cuero [robados], que como nole veniesen bien al declarante y le lastimasen los pies, tubo que volverlos a vender aun sugeto desconocido que allí vino por la Carcelen la cantidad de trece reales”⁷⁹⁰.

Por suerte, los juicios eran relativamente rápidos y se resolvían en pocos meses. A veces se decreta la libre absolución para el acusado; este es puesto en libertad, aunque sin ninguna compensación por parte del Estado por el tiempo pasado en prisión y los gastos afrontados. En algún caso el juez sentencia al denunciante a indemnizarlo o abre la puerta a iniciar un proceso por denuncia falsa, pero es muy dudoso que supusiesen una compensación por el tiempo pasado en prisión.

En otros casos la justicia sospecha que es culpable, aunque no pueda probarlo. En este caso, el acusado ha de pagar una parte o la totalidad de los gastos del juicio. Además de librar de gastos al erario público creemos que el aparato judicial, al cargar este importe sobre los sospechosos, aplicaba un castigo intencionado. En el caso de Josefa Santa María, de la que ya hemos hablando, leemos en una comunicación del fiscal que “el ministerio imparcial solo puede, solo debe pedir al Juzgado que se sirva absolver de la instancia a Josefa Santa María si bien condenándola en las costas y gastos del juicio al tenor de lo que dispone el artículo cuarenta y seis del Código penal en atención a los vehementes y graves indicios que contra ella resultan”.

Las costas y gastos suponían cantidades elevadas, y el monto no guardaba proporción con la cuantía de lo robado. Así, castigaban desproporcionadamente a los más pobres. “Por más que á primera vista parezca como una cosa insignificante el arresto de ocho días á que han sido condenadas mis defendidas, hay una consideración que da grande importancia á lo que parece no tenerlo. Tal es la condenatoria de costas y gastos del juicio que se imponen á las encausadas [...]. Mis representadas son unas pobres mugeres, cuyos cortos bienes de fortuna apenas llegaran para satisfacer las costas de este procedimiento. Resulta de aqui que lo que para otras personas de mas fortuna seria una cosa de poca importancia, para Marta y Pascua Varela es de grande consideración; pues al fin se rata de una pena que ha de tener para ellas los mismos resultados que si se confiscasen todos sus bienes”, alega el abogado de dos hermanas condenadas por hacerse con unos pocos manojos de centeno. Efectivamente, el proceso de costas se prolongó hasta 1857, y el embargo de los bienes de las mujeres no alcanzó para satisfacer la deuda⁷⁹¹.

⁷⁸⁸ *Causas*, 1296, 3.

⁷⁸⁹ *Causas*, 1724, 16.

⁷⁹⁰ *Causas*, 2020, 8.

⁷⁹¹ *Causas*, 2021, 10.

Los gastos desbordaban la mayoría de economías humildes. María Alverta González y su yerno Pedro Gómez resultaron absueltos de robo de maíz en 1854, y solo tuvieron que afrontar las costas de su defensa. Los bienes de ambos fueron subastados y se reunieron 1.481 reales; la deuda era de 2.220. En la práctica, se arruinaron⁷⁹². Ya hemos visto el caso de Ramón Lojo, cuyo delito fue intentar apoderarse de un pan que, según su abogado, no valía más que cuatro. Las costas y gastos del juicio ascendieron a 790 reales. Él, por lo menos, era insolvente, con lo que se le perdonaron las costas. Por los gastos del juicio y el pago de multas e indemnizaciones, sin embargo, los insolventes tenían que cumplir más tiempo de cárcel, un día por cada medio duro impagado⁷⁹³.

Un caso extremo es el de Ángel Luna, un labrador de 50 años de Canedo que robó algunas cepas “que consideró infructíferas con el objeto de venderlas para comprar una libra de pan y quemar algunas para calentar a su familia”. A nivel penal, salió bien librado. El ofendido le perdonó la indemnización (las cepas valían diez reales) y no cumplió el mes de arresto que se le impuso porque pudo acogerse al indulto del 22 de enero de 1854. Pero todos sus bienes se pusieron en subasta para pagar los gastos del juicio; si bien hubo alguna consideración al bienestar de su familia, pues debían reservarse para su mujer los suficientes para justificar “completo reintegro de su dote, y los restantes si los hubiese se destinen al pago de las Costas”. La causa para determinar si era insolvente o quedaba algo que expropiar siguió al menos hasta 1862⁷⁹⁴.

En algunos casos el pago de costas puede ser el motivo que lleva a los condenados a reincidir, al privarlos de todos sus bienes. Manuel Varela, un labrador de Buxán, pasó un año en la cárcel de Santiago en 1842, cuando tenía unos treinta años, por robar en un molino. En una sentencia que recibió ocho años después, se recoge que en aquella ocasión “se le vendieron todos sus bienes sin que actualmente tenga algunos ni de que vivir”. En 1854, como ya hemos mencionado, lo encontramos viviendo del robo: “hecha la mano a todo lo que puede”⁷⁹⁵.

Varela quizás fuese un criminal endurecido que hubiese vuelto al crimen de cualquiera manera, si atendemos a la opinión que de él tenían sus vecinos. Pero no todos los afectados por los procesos penales eran así. En las indagaciones del juzgado de Cambados para averiguar la solvencia de un condenado, leemos que “el José Antonio Cores ha sido siempre un zapatero remendon sin casa ni hacienda propia alguna, y que desde que se vendió la casa terrena perteneciente a su mujer para pago de costas en que fue penada por el Tribunal superior por causa contra ella formada, anda aquel pordioseando por la provincia y apenas se le ve en la parroquia, en la que ni otra parte tiene intereses algunos”. En 1854 volvió a la parroquia, donde debía tener aún una choza o algún refugio, e hizo leña de sauce en la propiedad de Santiago Abal para llevársela para casa, “con el objeto de quemar pues no tenía leña”. Este dio parte a la alcaldía y Cores, aunque dijo que se había ofrecido a devolver o pagar la leña, acabó en la cárcel⁷⁹⁶.

El coste para la parte denunciante era relativamente menor. Encontramos a alguna gente que no quiere denunciar “por no entrar en gastos”⁷⁹⁷, pero los robos y los hurtos eran delitos públicos y la justicia estaba obligada a seguir las denuncias de oficio, de manera que el denunciante solo tenía que acudir a la autoridad, y ni siquiera tenía por qué ser parte en el juicio. Algunos se veían seducidos por la posibilidad de solventar sus rencillas o castiga injusticias personales y acusaban de robos bastante poco creíbles a amantes huidos o vecinos con los que tenían problemas

⁷⁹² *Causas*, 2027, 4.

⁷⁹³ Así figura en el Código Penal de 1850, artículos 48 y 49; la excepción son los presos condenados a más de cuatro años de prisión.

⁷⁹⁴ *Causas* 1747, 2.

⁷⁹⁵ *Causas*, 1748, 8.

⁷⁹⁶ *Causas*, 2086, 13.

⁷⁹⁷ *Causas*, 1476, 8.

personales⁷⁹⁸. Esta tendencia quedaba acotada por los castigos a las falsas denuncias y a los testigos falsos, pero existía. En algún otro caso, la vía penal se intentaba utilizar para solventar cuestiones de propiedad que más bien pertenecían al apartado civil. Manuel Alfonso, cura párroco, llevó al labrador Benito Rodiño al juzgado de Cambados por extraer piedra de un monte que decía haber recibido en herencia de su padre (en este caso no fue la mejor estrategia ya que la propiedad se le reconoció a Rodiño; según el propio fiscal, las pruebas aportadas por el sacerdote acerca de la titularidad del terreno “son muy débiles”)⁷⁹⁹. Encontramos gente que dice no haber querido dar parte a la justicia “por no entrar en gastos”⁸⁰⁰.

Había colectivos a los que la dureza de los castigos no servía de inhibición. En los robos en gavilla y los crímenes con violencia e intimidación encontramos tanto a delincuentes endurecidos como a otros sin antecedentes, pero que tienen perspectivas de conseguir sumas importantes de dinero. En el caso de los hurtos de poca cuantía, había gente que tenía poco que perder o que no sabía vivir de otra forma. María Juana Fernández, mujer “incorregible, vagante entregada a sus vicios”. Fue detenida en 1849 por sospechas de robo, pero mientras la conducían a Villalba se fugó de la casa donde la guardaban (llevándose de paso unos zapatos). La dejaron dormir de limosna en una casa y también hurtó allí, según informe del Jefe Político. Según su propia declaración, ya había estado en la cárcel por robo, por la desaparición de una niña y por agredir a un hombre. Murió bajo arresto por una “afeccion enomica del pecho sostenida por un antiguo vicio sifilítico general” el 3 de febrero de 1850⁸⁰¹.

Sin llegar a este extremo, un colectivo que quizás recurriera al robo para complementar sus ingresos era el de los núcleos familiares formados por mujeres sin tierras ni oportunidades laborales remuneradoras. En especial, puede que fuese especialmente frecuente entre las jornaleras y pordioseras con hijos de soltera, un caso en el que el crimen puede convertirse en una estrategia heredada de madres a hijas⁸⁰². Benita Graña, de quince años, fue arrestada en 1854 por robar pendientes de escaso valor en una joyería de Pontevedra. Había entrado en la ciudad acompañada de su madre, Rosa Graña (que también era hija natural, y que no fue condenada), y una vecina de su parroquia de San Juan de Poio, María Benita Giménez, de 43 años. Ambas habían sido condenadas por otros robos. El abogado de Giménez achacó el crimen a la “la miseria, la espantosa miseria que pesava sobre la procesada y sus hijas”⁸⁰³. Creemos que los delitos de este colectivo no están ligados de manera tan clara a la crisis de 1854, sino a una situación de pobreza y exclusión social sostenidas; al tiempo, quizás los jueces fuesen algo más laxos con las mujeres

Otro caso es el de las mujeres de la familia Vidal, de Pontevedra, a las que no se les conoce “bienes algunos pues son unas semi-pordioseras que viven de lo que pueden agenciar con el sudor de su [incomprensible] y de caridad”⁸⁰⁴, según el alcalde de su barrio, o Manuela Fernández y su hija natural Benita, de Dozón, madre e hija y detenidas por robos en 1844 cuando ya ambas eran reincidentes. Estos linajes de solteras parecen encontrarse con más frecuencia entre los delincuentes de Pontevedra, seguramente porque había más mujeres en esa situación⁸⁰⁵.

⁷⁹⁸ *Causas*, 2049, 19.

⁷⁹⁹ *Causas* 2086, 4.

⁸⁰⁰ *Causas*, 1476, 8.

⁸⁰¹ *Causas*, 1476, 8.

⁸⁰² En la literatura a veces se las llama caseteiras o bodegueiras. También se habla de camareiras para designar a ese tipo de personas, aunque también se emplea el término para referirse a matrimonios pobres, CARDESÍN, J. M. (1992), p. 334. Seguramente también se llamase caseteiros a los jornaleros pobres.

⁸⁰³ *Causas*, 2027, 2.

⁸⁰⁴ *Causas*, 2027.

⁸⁰⁵ SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1992).

También encontramos algún delincuente precoz entre los jóvenes de familias desestructuradas, antecesor del niño golfo que tan popular se hará en la literatura del siglo⁸⁰⁶. Manuel Cabanelas, pontevedrés de doce años acusado de robar dinero de una casa con otro pilluelo robo, fue detenido mientras andaba pidiendo “por cuanto su madre y padrastro no lo cuidan ni nada le dan”. Con el botín e compró algo de ropa, se la enseñó a un compañero suyo y de allí se fueron “a hechar un vaso de vino en una taberna”⁸⁰⁷. Seguramente hubiese muchos más casos de delincuentes infantiles que no llegarían a entrar en el sistema judicial por su escasa edad.

En definitiva, el aparato judicial y penal de mediados del XIX castigaba a los criminales, incluyendo a aquellos a los que se les reconocía que habían actuado movidos por el hambre, de una manera más dura de lo que expresan simplemente las sentencias de cárcel. Ser acusado de un delito económico, aunque no se pudiese probar la propia culpabilidad, llevaba a la ruina económica absoluta a los pequeños propietarios que vivían al borde de la subsistencia, y que perdían sus escasas tierras y casas. Denunciar, en cambio, era mucho menos oneroso, a menos que la acusación fuese flagrantemente falsa, y el hecho de que se emplease a veces como castigo contra personas inocentes prueba que suponía una amenaza creíble. El crimen quedaba, por tanto, para los que no tenían nada que perder, y si se incrementó en 1854 da idea de que la situación se hizo verdaderamente desesperada para muchos.

5.2.2 Vecinos ladrones, vecinos delatores: la sociedad civil y la persecución del crimen

Parece intuitivo que en periodos de absoluta desesperación aumenten los robos simplemente para sobrevivir. En la Irlanda de 1847, en plena hambruna de la patata, el crimen se triplicó, con especial el económico, y al parecer había gente que delinquía con tal de entrar en prisión y asegurarse algo de comida⁸⁰⁸, un fenómeno que también se observaba por parte del lumpen ruso para encontrar un refugio durante el invierno⁸⁰⁹. En lugares que sufrieron crisis menos violentas la explicación quizás sea más compleja; en las crisis de hambre de Galicia parece que la opción mayoritaria de la población desposeída era pedir, no robar; ir hacia las ciudades en las que había instituciones caritativas efectivas fue un recurso de muchos gallegos en la década de 1850, en proporciones mucho mayores que en años posteriores⁸¹⁰.

La Bélgica de 1845-1847 vivió un pico de procesos criminales y condenas. El número de juicios en los tribunales correccionales aumentó un 50% en 1847 en relación al nivel de los años sin crisis. Para Frédéric Vesentini, se trataba de una “«criminalité de crise» composée de vagabondage, de mendicité, de maraudages et de vols”. Pero también a la represión por parte del Estado para mantener el orden público, a partir de medidas legislativas contra el vagabundeo y comunicaciones ministeriales a la gendarmería y los gobernadores provinciales: “afin de garantir l’ordre public, une répression tous azimuts des vagabonds et mendiants est donc décrétée dès les premiers signes de la

⁸⁰⁶ Por ejemplo en el relato *Pipá*, de Clarín.

⁸⁰⁷ *Causas*, 2021, 5.

⁸⁰⁸ Ó GRÁDA, C. (2007), p. 47.

⁸⁰⁹ FRANK, S. P. (1999), pp. 141-142.

⁸¹⁰ SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1992), p. 68. En la década de 1850 se aglomeraron en Santiago unos 2.000 pobres. Por comparación, en 1890 había algo más de 400 pobres de solemnidad, en su mayoría mujeres. PERNAS OROZA, H. (2001), pp. 187, 197. En Pontevedra, “el cólera y la crisis económica provocaron el aumento del número de pobres y pedigüños” en 1853, lo que llevó a la creación de un Hospicio. RODRÍGUEZ MARTÍN, A. M. (2017), p. 420.

crise”⁸¹¹. En Flandes aumentó el crimen, pero también la cantidad de estatus de policía, la persecución de mendigos, las rondas comunitarias para expulsar vagabundos⁸¹².

En Galicia pudo haber alguna actuación dirigida a reprimir el crimen, al menos a nivel local⁸¹³. Pero si observamos los pasos que se recorren desde un hecho delictivo hasta la condena nos muestra que la persecución del crimen económico no fue una decisión del Estado ajena al sentir de la mayoría de la población. Las condenas no se deben más que marginalmente al celo de las patrullas que recorren los caminos buscando a rateros y cacheando pordioseros. Si atendemos al conjunto de causas, incluyendo las de 1862, observamos que solo en un 3,4% de las ocasiones el aviso del crimen lo da una autoridad (un guardia, o, en una ocasión, el alcalde). En el 76% de las ocasiones, con seguridad, y en otro 16,2% con más dudas, el aviso lo da un miembro de la sociedad civil, normalmente el propietario o un allegado, más raramente un testigo, y en alguna ocasión un cargo municipal informal o un compañero de celda. En el restante 5,1% de casos la persona que identifica el robo es dudosa o se corresponde con otras tipologías que no merece la pena agrupar.

En términos actuales, si hubo represión de los robos y hurtos fue porque existió una intensa colaboración ciudadana para combatir el crimen, y está claro que mayoritariamente fue voluntaria y no una imposición del Estado⁸¹⁴. Solo puntualmente los agentes del orden identifican y denuncian al propio delincuente: una ronda de celadores de Pontevedra encontró a las once de la noche en el puente do Burgo a Francisco Pérez, de 21 años, con un saquete de naranjas. Era sospechoso: un jornalero sin apenas propiedades, que según sus declaraciones venía ese día de pedir; era analfabeto y no sabía siquiera el nombre de su madre, a la que no había conocido. Fue condenado por hurto después de que los celadores de Pontevedra lo encontraran con un saco de naranjas, al no dar una explicación de cómo las había conseguido que satisficiera al juez⁸¹⁵. En el resto de casos, los agentes actúan en respuesta a una denuncia, y en alguna ocasión detienen a sospechosos que son perseguidos por un delito.

Encontramos a paisanos que detienen e interrogan a foráneos que les parecen sospechosos, o paran a vecinos que llevan frutos que, a su juicio, no deberían tener. Indagan, hacen preguntas, siguen a los sospechosos hasta su casa, entran con alguna excusa para buscar pistas. Algunas veces arrestan al delincuente in fraganti, otras lo detienen horas después tras seguirlo. Esta iniciativa ciudadana no tiene nada de particular, es característica de las sociedades que carecen de un sistema formal de persecución del crimen. En las colonias norteamericanas, el sheriff era “a reactive agent. He acted upon a formal complaint or information about an offense. The initiative lay with the public”⁸¹⁶.

Para que llegara al juzgado era necesaria la denuncia. En un 10,2% de los casos, el hecho se lleva directamente al juzgado, y en el 29%, a fuerzas de policía formales (guardias civiles, agentes de

⁸¹¹ Contaría con la aquiescencia de los tribunales: “L’instruction systématique du vagabondage et de la mendicité ne serait donc pas une réaction ponctuelle afin de permettre au parquet de traiter les autres dossiers mais une adaptation structurelle, presque anticipée, consistant en un simple rééquilibrage des charges de travail entre procureur et juge d’instruction”. VESSENTINI, F. (2007).

⁸¹² VANHAUTE, E. (2007), pp. 136-139.

⁸¹³ Parece que en 1856 el ayuntamiento de Ribadavia creó tres plazas de policía “a fin de evitar los diferentes robos que nocturnamente se cometen, asaltando las casas de los vecinos indefensos, consecuencia de la espantosa miseria que estaban pasando todas las clases”. Recogido en EIJÁN, Samuel: Ribadavia y sus alrededores, Madrid, 1920, páginas 597-8, y citado en RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), p. 122.

⁸¹⁴ En teoría los españoles debían dar parte de los delitos, puesto que el robo y el hurto eran crímenes públicos. Pero no vemos que este imperativo legal pesase en sus decisiones: en la práctica, vemos que el delito de encubrimiento se aplica a los receptadores de bienes robados. Los testigos que, a colación de un juicio, mencionan que el acusado hurtó con anterioridad y que no lo denunciaron no son perseguidos.

⁸¹⁵ *Causas*, 2027, 1.

⁸¹⁶ WALKER, S. (1980), p. 18.

Vigilancia, carabineros, serenos), a veces porque el afectado los busca para poner la denuncia, a veces porque están cerca del lugar del robo. En una parte de estos casos, como ya se ha adelantado, los paisanos acuden después de haber realizado indagaciones o incluso se presentan ante el juez con los sospechosos bajo arresto, para que los interne en la cárcel del partido⁸¹⁷. Hallamos otro 10,3% de casos en los que el proceso es desconocido o pasa a través de autoridades minoritarias, como el alcaide de una prisión, el Gobernador Civil, el Jefe Político, el Promotor Fiscal o la Milicia Nacional.

Pero las fuerzas de la administración local son aun más importantes, y a ellas se recurre en aproximadamente la mitad de los casos. En un 19,7% de las ocasiones, la primera autoridad que conoce los hechos es el alcaide. En un 30,8% de las ocasiones, la primera autoridad, si bien informal, en conocer de los hechos es el pedáneo, el alcaide de barrio, el celador del lugar o un cargo equivalente⁸¹⁸. Estos cargos subordinados a la alcaldía, que hemos visto en el apartado 4.3, tenían como vemos en esta época un papel crucial en la comunicación entre los vecinos y la justicia.

El procedimiento varía según dónde se realice el delito. En los casos que se producen en los cascos urbanos de Pontevedra, Lugo, Ourense y Pontevedra el 73,7% de los casos pasan por el juzgado o las fuerzas policiales, lo que no es de extrañar, ya que están físicamente más próximas al ciudadano. Solo el 21% pasa por alcaldes y pedáneos. Parece que el porcentaje de individuos que recurren al juzgado y a la policía se incrementa en 1862 en relación a las catas de años anteriores⁸¹⁹, aunque la muestra es demasiado pequeña como para identificar una tendencia.

También parece que los miembros de las clases altas tienen una mayor tendencia a dirigirse directamente a los juzgados y las fuerzas policiales, aunque para todo hay excepciones. Después de que su amante la dejase embarazada, le robase (según ella) tres mil reales que tenían ahorrados y huyese a Valladolid, una criada analfabeta se dirigió al Gobernador Civil para que “por parte telegráfico, cuyos derechos estaba pronta á satisfacer viese como conseguir la captura” del fugado, que, por cierto, era hermano de su antiguo amo. Cuando no lo consiguió, fue al juzgado de Instrucción para pedir que “venga á este Juzgado á cantar la palidonia y á responder de los cargos que contra el deben resultar”⁸²⁰. La referencia al poema de Estesícoro, casi seguro, es del funcionario; a juzgar por el tono del texto, los trabajadores del juzgado debieron reírse bastante con este caso.

Fuera de las ciudades el patrón se invierte. El 55,7% de los casos llegan primero a alcaldes y sus representantes, y el 33% a jueces y policías. La preferencia por la autoridad municipal y sus delegados en el rural probablemente se explique en parte porque eran las que más poder tenían sobre sus vidas a través de las redes caciquiles. Pero sobre todo, eran los más cercanos. En un caso en Curtis, el alcaide, la corporación municipal y varios pedáneos interrumpieron una reunión en la Casa Consistorial para defender a un sacerdote de la localidad, cuya casa estaba siendo asaltada por una gavilla de ladrones; estos desistieron y se marcharon “disparando tiros a todos costados”⁸²¹.

⁸¹⁷ Por ejemplo, en *Causas* 1556, 4.

⁸¹⁸ A veces encontramos denominaciones tales como alguaciles o celadores de la parroquia, celador de policía (*Causas* 1952, 3) o la arcaica mayordomo pedáneo (*causa* 1039, 17). En algún caso, parece haber un celador por debajo del alcaide pedáneo (*Causas*, 2019, 5A), y celadores de lugares más pequeños de la parroquia (*Causas* 2040, 19). Encontramos también un “mayordomo de la parroquia” (*Causas* 2081). Interpretamos que se desarrollaron varias maneras de nombrar a los representantes de la administración municipal en los distintos lugares, y quizás algunos testigos confundan el cargo de pedáneo con otros equivalentes del Antiguo Régimen.

⁸¹⁹ Hasta el 41%, en comparación con el 36,4% de alcaldes y pedáneos.

⁸²⁰ *Causas*, 1502, 10.

⁸²¹ *Causas*, 1042, 10.

La mayor parte de las actuaciones de los cargos municipales no son tan heroicas, y el grado de celo y diligencia mostrado por los pedáneos es heterogéneo. Algunos se limitan a dar parte verbal o escrito al alcalde. Pero en otros muchos casos reúnen testigos y declaraciones, gestionan arrestos, o registran casas y terrenos en los que pueden estar guardados productos robados acompañados por algunos vecinos, quizás de manera no muy legal. Un celador ourensano llega a comparar las huellas dejadas en el lugar del crimen con el calzado de los sospechosos⁸²². Actúan en compañía de los denunciantes o con vecinos que reclutan en el momento, quizás en parte para auxiliarles en los arrestos, pero sobre todo para tener testigos. “Halle a la persona de Pedro Bernardez lo lleve en mi auxilio” y un poco más adelante “tambien he buscado alli mas hombres que estavan en su trabajo” cuenta Pedro Pascual, pedáneo de la parroquia de San Juan de Sisto en Dozón, acerca de sus diligencias para atrapar a dos ladronas⁸²³.

Lo que nos interesa es que esta red de autoridades locales semi-formales está presente en los lugares y parroquias del rural y constituye la base del aparato represivo y el enlace entre los ciudadanos comunes y la justicia. En estos primeros tiempos del liberalismo, muchos los verían seguramente como una continuación lógica de los merinos y mayordomos señoriales, los delegados de la justicia en el Antiguo Régimen.

Sigamos con el proceso. Los pedáneos pueden dar parte a la alcaldía, que a su vez realiza diligencias antes o después de comunicarse con el juzgado. El alcalde manda a veces recado a los pedáneos para que realicen indagaciones, pero tampoco es extraño que el alcalde se desplace al lugar para realizar indagaciones, supervisar el peritaje o entrar en una casa buscando bienes robados. Algunos ayuntamientos disponían de funcionarios especializados en realizar arrestos. En un proceso de 1849, el alcalde de Xinzo envió a José Quelle, alguacil de la alcaldía, para que “buscando a Ramon Cid, a quien ya el declarante conocia, le hiciese comparecer a su presencia” y que averiguase “si tenia algunos ganados, y teniéndolos que los embargase y depositase”. Pudo hacer lo segundo, pero no lo primero, ya que Quelle se había dado a la fuga⁸²⁴.

Un ejemplo quizás ayude a ilustrar cómo los procedimientos judiciales seguían dependiendo de la colaboración de los vecinos y los cargos no profesionales incluso en un momento avanzado del proceso. En 1854 se siguió una causa contra el molinero José Rodríguez, alias *Brincos*, de la pedanía de Paramontáns. En un primer momento lo detuvo la Guardia Civil, pero como las sospechas contra él eran solo de hurto, lo volvieron a poner en libertad. El juzgado de Xinzo de Limia lo reclamó el 27 de junio, si bien el oficio no llegó a la parroquia hasta la noche del 3 de julio. Para llevarlo al juzgado se reunieron tres o cuatro hombres, entre los que se contaban el pedáneo, un alguacil auxiliar (entendemos que del juzgado) y un vigario (interpretamos que un vecino requerido para el caso y en ese sentido *vicario* del poder municipal o del juzgado). Según estos, no les recibió muy bien: “ni me presento [ante el juez] ni quiero. Venid aca, carajo, que os han de llevar los demonios: que venga el del gorro [parece que el pedáneo], que yo le deseo junto a mí”, les dijo, aunque había sido él el que había echado a correr cuando llegaron a detenerlo. De la declaración de uno de ellos, no sabemos si transcribiendo las palabras de Rodríguez en estilo indirecto, el escribano registró que “será mejor lo persiga y arreste la guardia civil: pues es sujeto de muy malas intenciones” y que “si los civiles vienen para arrestarlo que vengan de noche”⁸²⁵.

Una vez finalizado el proceso penal, las declaraciones de los pedáneos y los vecinos permitían identificar los bienes de los procesados en una época en la que la mayor parte de la población no estaba sometida a la fiscalidad directa, no existía el catastro y, por tanto, el Estado no conocía

⁸²² *Causas*, 1729, 7.

⁸²³ *Causas*, 2143, 3.

⁸²⁴ *Causas*, 1881, 1.

⁸²⁵ Según el propio *Brincos*, se limitó a escaparse. *Causas*, 1884, 2.

directamente el patrimonio de los acusados. Si en este paso los vecinos ocultaban algunas propiedades del reo por compasión, o delataban para hacerse con ellas en la subasta, no lo dicen nuestras fuentes.

Lo anteriormente expresado no debería banalizar la importancia de las fuerzas policiales a favor de las autoridades municipales. La población recurría a ellas de manera importante y seguramente creciente. El organigrama del Estado central, en especial la Guardia Civil y los Gobernadores Civiles, proporcionaba seguramente mecanismos mucho más eficaces para perseguir ciertos tipos de delito, como el bandolerismo, que las autoridades municipales. Esto quizás no era tan importante para perseguir al criminal de subsistencia, que le robaba a su parroquia, pero sí para otros que se dan a la fuga. Encontramos a un acusado de robo en Cervo (partido de Viveiro) al que devuelve a Galicia el Gobernador Civil de Bilbao⁸²⁶. Además, las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad eran complementarias, y los protocolos de actuación maleables en función de las circunstancias. Vemos cómo el alcalde de Boiro pide a los carabineros que realicen un registro⁸²⁷. En al menos una ocasión, la Guardia Civil detuvo a un sospechoso y lo llevó ante el secretario del Ayuntamiento⁸²⁸; El 23 de agosto de 1849 un guardia civil el celador del barrio del Pilar de Santiago “fue llamado por un Guardia cibil para que le auxiliase con dos testigos” en un caso de robo, según su propia declaración⁸²⁹.

Pero debemos tener presentes tres puntos. En primer lugar, si bien la estructura de la justicia había sufrido grandes transformaciones desde el Antiguo Régimen, las primeras diligencias y la persecución del delito en las zonas rurales seguían dependiendo de las autoridades municipales y sus representantes elegidos discrecionalmente, y por tanto pasaban por las élites locales, con un amplio espacio para la corrupción y las presiones. En segundo lugar, este sistema permitía que la justicia llegase a una población dispersa de manera bastante efectiva. Los pedáneos y celadores no eran profesionales, pero estaban cerca, podían reclutar ayudantes en el lugar y actuar rápidamente (y sin demasiado respeto por las garantías procesales) contra los criminales.

En tercer lugar, si hubo represión del crimen la hubo por el apoyo de la población. La persecución de los pequeños delitos contra la propiedad no fue una imposición del Estado central, sino que se inició por parte de los afectados y sus vecinos. Sin las denuncias de los robados y la colaboración vecinal, el sistema no hubiera funcionado.

5.2.3 “Es de sospechar que este hombre Roba para sostenerse”. Actitudes populares hacia el robo y límites del sentimiento comunal

En el testimonio de un pedáneo de Dozón, en el partido de Lalín, vemos cómo una sospechosa de robo le suplica “que no se notificase el Pedaneo, ni los mas hombres [que lo acompañaban] que ella entregaría todos los enseres a Cayetana Arean”⁸³⁰. Obviamente no atendieron su petición, puesto que de haberlo hecho el caso no hubiera llegado al juzgado. ¿Qué porcentaje de crímenes quedaban impunes por la simple tolerancia vecinal? Obviamente, es imposible darle una respuesta en términos cuantitativos a esta pregunta, pero no creemos que sean los suficientes como para hablar de una tónica general de impunidad.

⁸²⁶ *Causas*, 1704, 4.

⁸²⁷ *Causas*, 1296, 3.

⁸²⁸ *Causas*, 1292, 7.

⁸²⁹ *Causas*, 1420, 1.

⁸³⁰ *Causas*, 2143, 3.

Los estudiosos del crimen del Antiguo Régimen han destacado el recurso a métodos de resolución de conflictos por parte de la población sin recurrir a la justicia ordinaria. En Galicia, Iglesias Estepa ha documentado el apartamiento de pleitos en la vía penal a finales de la Edad Moderna⁸³¹. Las fuentes judiciales no son un buen lugar para intentar buscar casos de este tipo, pues la administración estaba obligada a iniciar un juicio si tenía conocimiento de un delito, con muy pocas excepciones. Sí vemos cómo los sospechosos buscan llegar a acuerdos sin pasar por el juzgado. Francisco Gruña afirmó en 1854 que “estuvo preso y encausado por haber escalado y robado un Molino (...) pero aquel delito lo pago con dinero habiéndose compuesto con la parte ofendida y bajo fianza salió en libertad el que declara”⁸³².

José González, un viudo de 50 años y con hijos al que conocían como *Toco*, le robó al sacerdote de su parroquia una clavija y algunos eslabones de una cadena. Convocado junto con algunos vecinos y el propio herrero por el cura, confesó espontáneamente que había causado las roturas “con objeto de componer una sacha para con ella salir a ganar su jornal, respecto se hallaba constituido con su familia en la mayor miseria y sin medios para facilitar su sustento; pidió al propio Señor Cura le indultase o perdonase el delito consignado en la seguridad de que jamás robara otra cosa alguna, ni menos lo haría a lo subcesivo”. Según otro testigo, le pidió perdón “hechándosele a los pies”. El cura dijo que lo perdonaba personalmente, pero que “una vez había cometido un delito público, que públicamente tenía que manifestarlo”. Poco después lo arrestó la Guardia Civil⁸³³.

Volviendo a la obra de Iglesias Estepa, a finales de la Edad Moderna los paisanos recurrirían a la infrajusticia porque los pleitos se considerarían, a finales de la Edad Moderna, largos, costosos e inciertos, y se temía a los tribunales. Pero además las características de las “comunidades tradicionales” redundarían en “una fuerte solidaridad intracomunitaria que se trata de mantener a toda costa”. Así, la justicia ordinaria se emplearía más contra para marginados y foráneos, que se perciban como atentatorias contra el honor o que traspasen los límites del umbral de tolerancia de la comunidad⁸³⁴. Según señala Chauvaud, en las sociedades en que todos se conocen ante un delito no se pasa tanto por la punición sino por la reparación y negociación, parte de esa negociación puede ser no denunciar⁸³⁵.

En situaciones como las de Toco no podemos hablar de infrajusticia, ya que acabaron en los tribunales. Pero sí podemos acreditar que existía un umbral de tolerancia hacia los delitos de miembros de la comunidad. Según los vecinos de la labradora Teodora Cao, una labradora de 25 años del partido de Viveiro, aguantaron sus delitos durante varios meses, y eso que era una ladrona “peor que los que salen a los caminos”. Se escondía en las casas de los paisanos y, cuando los habitantes se dormían o salían a trabajar, “roba de estas cuando puede así como fruto en grano de todas clases pan cocido, sal, carne, madejas de lino y otros efectos”, y de las tierras verduras, fruto, haces de paja o hierba e “incluso leña”. Pero habían tenido una cierta tolerancia con sus fechorías antes de denunciarla a la Guardia Civil. Uno declaró que la había encontrado robando en su domicilio, pero que la dejó ir a cambio de que se corrigiese. Los vecinos de Manuel Varela, un

⁸³¹ Suponían en torno al 22,68% de los litigios de naturaleza penal en la antigua jurisdicción de Santiago, y el 36,26% en la de Noia, si bien se recurría a ellas sobre todo para solventar casos de “injurias y lesiones junto con la ruptura de palabra de matrimonio”, y en mucha menor medida a crímenes contra la propiedad. IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), pp. 174-187.

⁸³² *Causas*, 1485, 4.

⁸³³ *Causas*, 2150, 2.

⁸³⁴ IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), pp. 151-156. Garnot diferencia entre tres conceptos: infrajusticia por medios públicos o semipúblicos, con mediadores y rituales de compensación; parajusticia, con procesos privados sin intervención de un tercero, venganza y rechazo colectivo, y extrajusticia, crímenes tolerados por los contemporáneos, por su decisión o contra su voluntad. GARNOT, B. (2000).

⁸³⁵ CHAUVAUD, F. (2006), pp. 196-197.

labrador de Buxán, también lo consideraban un “ratero” de mala conducta. Al menos uno lo acusó de haberle robado “un yugo de los bueyes”, aunque le fueron devueltos y por lo que parece no denunció. Otro aseguró que le había confesado el robo de tocino y dos jamones a otro “para comer” (no literalmente, ya que comió el tocino y vendió los jamones)⁸³⁶.

Debemos tener cuidado con estos testimonios, pues suelen surgir en procesos en los que los vecinos achacan a un ratero una serie de hurtos que se remontan en el tiempo y para los que no se presentan pruebas, y quizás no tengan otro propósito que perjudicar al acusado. Según un juez de la Audiencia en relación a la causa que acabamos de ver, varios folios de ella no se refieren “a ningún hecho determinado, parecen más bien una pesquisa en orden a la conducta y proceder de la Teodora Cao y su familia”. Solo fue condenada por un hurto de lienzo, de los varios de los que se le acusaba⁸³⁷. A veces los vecinos muestran saña acusatoria. José Soutullo, alias *Macho*, fue condenado por varios hurtos intentados y frustrados, si bien se le acusaba de alguno más. Las denuncias eran por materias, dice el fiscal, de “ningún significativo valor”: cuatro espigas de maíz, guisantes, un pantalón, patatas. La sustracción de guisantes, según el fiscal, se produjo por confusión, al extraer unos pocos de un vecino de una finca adyacente que estaba sembrada de lo mismo⁸³⁸.

Algunas prácticas tendrían un cierto margen de tolerancia. *No siegues el grano en las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalos para los pobres*, dice el Levítico, y aún los duros códigos penales del siglo XIX, como hemos visto, considerar el espigueo solo una falta. Estas formas de distribución solo eran delito si el dueño no las aceptaba⁸³⁹, y estos podían hacerlo por diversos motivos (por caridad o amistad, para respetar la costumbre, a cambio de favores laborales)⁸⁴⁰. Tampoco debemos exagerar su importancia. Se trataba de un aprovechamiento marginal, limitado a una parte del año y dependiente de la buena voluntad de los propietarios de las tierras. En los años en los que la cosecha era escasa, y el pan caro, presumiblemente quedaban menos mieses en los campos. La mayor parte del año el fruto está verde o almacenado. En los casos de robos de alimentos que hemos observado, contando 1862 y descontando sobreseimientos y denuncias falsas, el 71,4% de las sustracciones son en casas, hórreos, hornos, paneras o molinos, y no en los campos. En definitiva, la recogida de frutos en los campos seguramente era más difícil de perseguir y castigar y se denunciaba menos, pero al mismo tiempo muchas veces sería un pago a cambio de un favor o una obra de caridad, y, en todo caso, solo era una estrategia de subsistencia válida en momentos puntuales.

También influían las relaciones personales por motivos personales, y las reticencias, por moralidad o por miedo, a enviar a un vecino a la cárcel. Pero no debemos olvidar que los ladrones eran objetivamente un problema para la comunidad, y un peligro para las economías domésticas de los vecinos. José González, un labrador de Enfesta (entonces municipio, actualmente incorporado a Santiago), delató a su vecino José Míguez al pedáneo de su parroquia: “anda estraviado sospechosamente, sin ocuparse en los negocios de la Agricultura, sin saber su entretenimiento: añade que tanto ami, como amis vecinos nos están faltando algunas cosas, como se hará público siendo necesario, pues es de sospechar que este hombre Roba para sostenerse [sic]”. Varios vecinos

⁸³⁶ *Causas*, 1748, 8.

⁸³⁷ *Causas* 1703, 12.

⁸³⁸ *Causas*, 2086.

⁸³⁹ El código penal de 1870 castiga a los que entrasen en campo ajeno “antes de haber levantado por completo la cosecha para aprovechar el espigueo”, pero especifica que solo si se hace “sin permiso del dueño” (art. 607.3), aclaración que no se encuentra, aunque es obvia, en el de 1850. De cualquiera manera, es una falta.

⁸⁴⁰ En Castro de Rei, en Lugo, la costumbre permitía el espigueo de forma más amplia en las agras, un tipo de explotación que se explotaba en un régimen parcialmente colectivo. El espigueo y la escarda se realizaban de forma más restringida y dependiente de la buena voluntad de los dueños en otro tipo de terrenos (en los que podía otorgarse a cambio de favores o trabajos). CARDESÍN, J. M. (1992), pp. 134, 136, 139, 143, 181.

lo acusaron de diversos robos. Escapó de su casa, aunque unos meses después robó un caballo y fue condenado⁸⁴¹.

Las denuncias nos llevan a preguntarnos qué entendemos por comunidad campesina, cuáles son los límites de su solidaridad interna, y si las delaciones entre vecinos son parte de la presión del Estado y el mercado que van quebrantándolos. La idea de decadencia de comunidad aparece vinculada, sobre todo, al reparto individualista de los bienes de explotación en común⁸⁴², un proceso que Bloch ligó a la confrontación entre una noción tradicional del derecho y otra que defendía el carácter sagrado de la propiedad individual⁸⁴³.

No entraremos en los entresijos teóricos del concepto de comunidad, pero sí recordaremos, para el propósito de este trabajo, que esta no era en sí misma un fin absoluto, y que, según el propio Bloch, englobaba a grupos con intereses diferentes⁸⁴⁴. Los usos de tenencia comunal estaban supeditados a las estrategias de reproducción del núcleo familiar⁸⁴⁵. Las comunidades campesinas de la mitad del XIX lo eran desde el punto de vista social, en el aprovechamiento de buena parte de su capital, que se gestionaba de manera común, en la colaboración para proyectos comunes y las ayudas en el trabajo y en el de que en ellas se establecían vínculos emocionales entre sus integrantes. Derechos que no se extendían al conjunto de la humanidad, pues, según recuerda Thompson, la conciencia comunal “no era un espíritu comunista generoso y universalista”⁸⁴⁶. Estas vivencias en común hacían que se tolerasen algunos comportamientos, y hemos visto ejemplos de ello, pero esta tolerancia se extinguía pronto.

Las comunidades campesinas no eran sistemas de reparto de los beneficios en atención a las necesidades de sus integrantes. Si lo hubieran sido, difícilmente se hubiesen producido crímenes de supervivencia en su seno. Los desposeídos roban a vecinos (y a veces familiares) que tienen despensas y hórreos repletos con comida y ropa de sobra. Estos bienes son para garantizar el sustento de sus propietarios, pagar las rentas, generar efectivo con el que ampliar sus propiedades, en fin, contribuir a la prosperidad de su núcleo, no para repartirse entre los menesterosos de su parroquia, y sus propietarios creían en su derecho a defenderlos: así se explican las delaciones y persecución de los delincuentes.

Puede que algunos redistribuyeran parte de su renta por caridad, pero también para conseguir favores o esperando un retorno. La crisis que provocaba la ruina del vecino podía ser una oportunidad para comprar tierra o sacar rentabilidad a los ahorros. La carestía de la década de 1850 provocó, en palabras de Rodríguez y Dopico, que los campesinos “tuvieran que acudir ineludiblemente al préstamo usurario”, a pesar de la medida de otorgar préstamos en grano⁸⁴⁷. Estos dieron buen resultado en Suecia, según Gadd, al evitar que durante la crisis de 1846 los campesinos

⁸⁴¹ *Causas*, 1414, 7

⁸⁴² BALBOA LÓPEZ, X. (2005), pp. 454-455, DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (2005), pp. 462-465.

⁸⁴³ El propio Bloch señala que BLOCH, M. (1930), 246-247.

⁸⁴⁴ Las comunidades rurales “no formaban sociedades niiformes ni igualitarias” y en ellas había contraste entre clases sociales, entre los que destaca los distintos intereses de labradores y jornaleros, de relación “bastante conflictiva” y que adoptaron posturas diversas ante la individualización de la explotación. BLOCH, M. (1930), p. 296-299.

⁸⁴⁵ En palabras del profesor Balboa, la “importancia del comunalismo no puede ensombrecer la importancia de otro centro vital en la relación del campesino con la tierra: la explotación agraria, de carácter familiar, considerada como unidad de producción”, y “lejos de favorecer un ilusorio igualitarismo social, la propiedad colectiva del monte servía a la reproducción de las diferentes explotaciones familiares en las condiciones y con las necesidades que cada una tuviese”. BALBOA LÓPEZ, X. (2005), pp. 448-449.

⁸⁴⁶ THOMPSON, E. P. (1995), p. 207.

⁸⁴⁷ RODRÍGUEZ GALDO, M. X., DOPICO, F. (1981), p. 26.

se arruinasen acudiendo a prestamistas privados⁸⁴⁸. En Castro de Rei, en 1852, aumentan los juicios verbales por impagos de pequeñas cantidades de dinero o pan cocido. Incluso fuera de tiempo de crisis, otros perdían sus tierras al empeñarlas por dificultades económicas, y los beneficiarios son otros convecinos “en buena situación financiera”⁸⁴⁹.

La defensa de las rentas de la propiedad parece una parte esencial del sistema de vida campesino en la Galicia de mediados del siglo XIX. Puede que esto sea un síntoma de la quiebra de una solidaridad campesina anterior por los envites del mercado y el Estado; habría que compararlo con el comportamiento de las comunidades campesinas ante las crisis de subsistencia del Antiguo Régimen para saberlo. Sin embargo, según señala Mantecón, en la Cantabria del Antiguo Régimen, había una pobreza crónica de entre el 5 y el 10% de la población, y desposeídos y rateros ya eran disciplinados “desde abajo” por sus propias comunidades⁸⁵⁰. En nuestra opinión, esta mentalidad (favorable al mantenimiento de la propiedad privada basada en torno al núcleo familiar) podía convivir perfectamente con un sentido de comunidad en otros aspectos.

Sin duda, la lectura que harían los pobres de las obligaciones consuetudinarias sería más favorable a sus intereses, como enseña Scott, y reclamarla es parte del repertorio de las armas del débil. Pero estas, como señala el propio autor, no pueden más que “afectar marginalmente” a la explotación que se sufre, excepto en circunstancias excepcionales.

Pero la moralidad de los propietarios es otra. El ladrón no era una persona respetable y digna de ser considerada como un vecino más. De Domingo Ramos, un jornalero de 25 años encausado en 1849 por robar un pañuelo y 15 reales en la casa en la que estaba trabajando, su tío y parece que pariente más próximo, Antonio Ramos, dice que es un “vago” que ya había estado en prisión por robo de maíz y que con él no valieron “las amonestaciones que le hizo al que declara para que en su compañía se sugetase al trabajo y fuese hombre de bien pero nada pudo conseguir, cuyos particulares constan á la mayor parte de su Parroquia y a su Padrino Domingo Aller”. Este añadió que le había pagado escuela cinco años pero que “ni siquiera aprendió el padrenuestro”, y que venía haciendo hurtos desde pequeño por su “propensión á las golosinas y poco apego al trabajo”⁸⁵¹.

Por otra parte, este tipo de crisis, con carácter catastrófico, y procesos de empobrecimiento de todo tipo, con carácter habitual, generaban mendigos⁸⁵² e individuos y familias al borde del abismo⁸⁵³. Es posible que la gente en los márgenes de la estructura económica, y especialmente los niños criados en esa situación, fuesen más proclives a repetir algunos rasgos de lo que Lewis llamó “cultura de la pobreza”, que perjudicasen todavía más su situación en relación a sus vecinos: falta de ahorro, apatía y fatalismo en cuando a su situación, bajas aspiraciones y dificultad, para los que se criasen en ese ambiente, de sacar provecho a las nuevas oportunidades, cuando las hubiera⁸⁵⁴.

⁸⁴⁸ GADD, C-J. (2007), p. 336.

⁸⁴⁹ CARDESÍN, J. M.(1992), pp. 303-306.

⁸⁵⁰ MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. (1997), pp. 425, 444.

⁸⁵¹ *Causas*, 1042, 11.

⁸⁵² Tampoco debemos pensar que existía una hermandad entre los desposeídos. En 1936 Antón Alonso Ríos recorrió los caminos gallegos en 1936 disfrazado de mendigo para evitar la represión, proceso en el cual recibió algún insulto por robar un racimo de uvas. Sobre la comunidad de pordioseros, escribió que “os pobres non son bos uns para os outros. Reciben a caridade pero non a practican. Son envexosos e ruins entre si”. ALONSO RÍOS, A. (2006), pp. 78, 105-106.

⁸⁵³ Un proceso observado para los jornaleros extremeños del Antiguo Régimen en ME LÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel (1989), p. 401.

⁸⁵⁴ Según destaca Lewis, se trata de una subcultura con un modo de vida que se hereda entre generaciones, no es solo una cuestión de privaciones LEWIS, O. (1972), pp. 9, 15, 18, 22, 26, 48, 50, 64.

6. LAS TENDENCIAS CUANTITATIVAS DEL CRIMEN GALLEGO (1859-1926)

6.1 La estadística de Matrícula Criminal

Como hemos señalado en el apartado 5.1, está claro que buena parte del delito, especialmente el menor, no se denunciaba, y por tanto no va a dejar constancia en las estadísticas criminales. Pero hay otro problema: como veremos en las páginas siguientes, las estadísticas más completas parecen hacer referencia a las sentencias, y un alto porcentaje de los casos abiertos acaban en sobreseimientos; a veces porque se trata de una denuncia falsa o de un hecho que no es delictivo, pero en muchas otras ocasiones, por la imposibilidad de fijar un acusado.

Hemos podido consultar los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume, que están sin describir pero que, por lo que hemos podido deducir por la información presente en ellos, comprenden todas las causas criminales abiertas en este partido judicial y recibidas entre el 26 de febrero de 1907 y el 16 de agosto de 1916; suman exactamente 800 casos⁸⁵⁵. En ellas figura el inicio de la causa, la fecha en la que fue recibida, el escribano, el delito, los procuradores y procesado, el número de juzgado y ponencia, y el “estado del asunto”, donde se describe la recepción del sumario, envíos a fiscal y ponente, final de instrucción, autos, condenas, etc. Atendiendo a este último parámetro, más de la mitad de las causas, el 56,4% del total, fueron sobreseídas. Este dato se debe en parte al elevado número de muertes naturales o accidentales que se investigan de oficio, pero también a hurtos o casos de lesiones en los que no se pudo determinar un culpable. Más adelante, en el apartado dedicado a las diferentes categorías de delitos, los analizaremos al detalle.

Otro 14,4% fueron derivadas a juzgados municipales al ser consideradas faltas. Solo en el 11,5% aparece registrada una sentencia absolutoria, condenatoria o por conformidad del acusado, mientras que en el 13,6% no aparece una conclusión y en el 2,3% todos los acusados fueron declarados en rebeldía.

Tabla 6.1.1 Final de las causas criminales vistas en el juzgado de Pontedeume entre febrero de 1906 y agosto de 1916

	Causas	Porcentaje
Cerradas con un sobreseimiento libre o provisional	451	56,4
Acabadas en condena, absolución o conformidad con la acusación	92	11,5
Derivadas a faltas	115	14,4
Sin conclusión específica	109	13,6
Fallecimiento del acusado	3	0,4

⁸⁵⁵ En la fecha en la que los consulté, verano de 2020, estos dos documentos estaban clasificados con las firmas que menciono dentro de la información procedente de juzgados de ámbito local-municipal del Archivo del Reino de Galicia (de hecho, se nos facilitaron al solicitar documentos de juzgados municipales anteriores a 1936), aunque su origen es un juzgado de instrucción. En el mismo archivo también se encuentran un tercer tomo incompleto sobre Pontedeume y Arzúa, a los que no se les ha asignado un número de legajo. Las estadísticas de este capítulo se construyeron a través del *Libro de matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1912-1916*, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155 y de la *Matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1907-1912*, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155. En cuanto al material no incluido en las estadísticas, se trata del *Libro de Matrícula Criminal Juzgado de Arzúa 1915-1917* (son 231 causas) y el *Libro de Matrícula Criminal Juzgado de Pontedeume 1916-1917* (son 141 causas).

Acusado en rebeldía	18	2,3
Perdón de la parte ofendida (casos de abusos sexuales)	3	0,4
Retirada de la querella (casos contra el honor)	5	0,6
Otros	4	0,5
Total	800	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume

6.2 Las Estadísticas oficiales entre 1859 y 1918

El núcleo de este capítulo se ha construido en base a las Estadísticas de la Administración de Justicia en lo Criminal, publicadas por el Ministerio de Gracia y Justicia para los años 1859-1862 y 1883-1918. Ahora bien, estas estadísticas presentan varias deficiencias a la hora de observar los patrones de criminalidad.

El primero y más visible es que estas estadísticas no son continuas y presentan huecos. En concreto, hemos podido encontrar ejemplares para los años 1859-1862, 1883-1884, 1886-1890, 1892-1893, 1895-1902, 1904, 1906-1912 y 1914-1918.

En segundo lugar, los criterios de recogida de datos y definición del crimen no son homogéneos a lo largo del periodo. El ideal, explica el ministro de Gracia y Justicia Fernández Negrete en el prefacio de la primera estadística nacional de 1859, sería contar los crímenes cometidos en el año, pero eso resultaba imposible, pues para ello habría que elaborar la estadística cuando se resolvieran todos los juicios por delitos cometidos ese año. Así que se recogieron tanto las causas ejecutoriadas⁸⁵⁶ ese año como los “hechos justiciables”, esto es: “todos los hechos de que han conocido los Jueces de primera instancia desde el 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre, sin tener en cuenta las declaraciones que acerca de ellos dictaron ya, o hayan todavía de dictar los criminales”⁸⁵⁷. Éste es un *proxy* razonable del nivel de criminalidad, pero solo se publicó en 1859 y 1860; por lo tanto, no se puede estructurar un análisis en base a él.

Para los siguientes dos años hay un cambio de criterio, derivado quizás tanto de una actualización de la legislación que regía la elaboración de las estadísticas como de penurias materiales que extendieron los plazos de elaboración. El Real Decreto del 03-07-1863 eliminó parte del personal del Ministerio de Gracia y Justicia encargada de elaborar estadísticas; la de 1861 se publicó en 1865⁸⁵⁸, derivada de la Real Orden del 20-09-1863. Así, en 1861 y 1862 se incluyen tanto las causas como los “delitos declarados como tales en virtud de sentencia ejecutoria”⁸⁵⁹, que dejan fuera las inhibiciones, exenciones de responsabilidad y sobreseimientos.

Las causas serían un indicador preferible si estuviésemos consultando los documentos originales, pues podríamos diferenciar aquellos casos en los que se produjo un sobreseimiento aunque hubiese

⁸⁵⁶ Ejecutoriado es aquel pronunciamiento judicial, auto o sentencia “firme y que ha sido consignado mediante ejecutoria”, es decir, “documento público y solemne en el que se consigna una sentencia firme”, de acuerdo con el Diccionario del español jurídico de la Real Academia Española. Las causas ejecutoriadas, por tanto, equivalen a sentencias firmes.

⁸⁵⁷ *Estadística...* (1859), p. XIII.

⁸⁵⁸ *Estadística de la Administración de Justicia en lo Criminal...* (1861), p. V.

⁸⁵⁹ En base al significado actual de ejecutoria en el derecho, entendemos que se refiere a sentencia firme, es decir, aquella ante la que no cabe recurso alguno. Ley Orgánica 6/1985 del 1 de julio, del Poder Judicial, art. 245.4, 245.5.

delito (por ejemplo, porque no había indicios del culpable, o estaba muerto), de aquellos en los que no se produjo un hecho delictivo (supuestos homicidios que acaban siendo accidentes, o delaciones falsas). Como solo tenemos los números absolutos, nos encontraríamos contando denuncias para perjudicar a vecinos, ahogamientos sospechosos y hechos que no se entendió que tuvieran relevancia penal. Si bien en la misma causa se puede juzgar más de un delito⁸⁶⁰, el método elegido es en general la estimación más conservadora, aunque, en los delitos que vamos a analizar, las diferencias numéricas son moderadas⁸⁶¹. Hemos contado los delitos, pero debido a la variada terminología, consideramos las estadísticas de esta época las menos fiables.

En 1883 en adelante la estadística recoge procedimientos y “delitos que ha conocido cada Audiencia”⁸⁶². Consultando las tablas en los que se recogen, consideramos los primeros análogos a las causas del periodo anterior y los segundos a los hechos delictivos, ya que en su clasificación se mencionan procesados condenados o absueltos, pero no sobreseimientos⁸⁶³. En consecuencia, hemos escogido los segundos. En fechas posteriores los delitos aparecen como “delitos que han dado lugar a procedimiento”, una analogía más clara con los del periodo isabelino. En algunos números se incluyen sumarios de causas incoadas en cada uno de los juzgados de instrucción, y se especifica la fecha, pero estos datos no especifican el tipo de delito.

En tercer lugar, las categorías que estamos estudiando analizan los crímenes que se juzgaron en un determinado año, no los que se cometieron en él. La alternativa sería contar sólo los crímenes en los que la sentencia llega el mismo año que se cometió el delito, y esto, además de complicar las cuentas, dejaría fuera muchos casos y minimizaría las tasas de delito⁸⁶⁴. Este problema lo hubiéramos tenido igualmente si contásemos las causas. Así, el anuario estadístico de 1883 cuenta los procesos abiertos con anterioridad que terminaron en 1883, incluso aquellos tramitados antes de la entrada en vigor de la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882⁸⁶⁵. También se recogen algunos crímenes que quedaron en tentativas o conspiraciones, dado que la ley los castigaba igualmente.

Finalmente, faltan datos de delitos concretos a nivel gallego y provincial. Las estadísticas de 1859-1862 sí los recogen, pero las de la Restauración solo presentan las cifras absolutas para toda España; en el caso de 1862, para complicar más las cosas, la división por provincias se hace por causas. Por regiones, el crimen se agrupa en categorías más amplias, seguramente para reducir espacio y simplificar las tablas. Por ejemplo, se nos muestra el número de homicidios a nivel español, pero si queremos ver cuántos se registran en Galicia los encontramos agrupados en la categoría “delito contra las personas” junto con el parricidio, asesinato, infanticidio, disparo de arma de fuego, aborto, lesiones y duelo. En la década de 1880 sí que aparecen divididos por audiencias los reos, pero estos datos no son comparables con los delitos. Emplearemos estas agrupaciones para observar las tendencias a largo plazo.

⁸⁶⁰ Un ejemplo extremo: en 1860, en Zaragoza, se condenó a un solo procesado por 611 delitos de estafa. *Estadística...* (1861), p. XVII.

⁸⁶¹ En las cifras globales hay un desfase importante entre causas abiertas y hechos considerados delictivos, pero que se corresponde con las muertes casuales, los incendios sin autor y los suicidios, hechos por los que se abre una investigación pero que no acaban en sentencia. Esta diferencia no se encuentra en los crímenes más comunes y de naturaleza convencional. Por ejemplo, en 1860 hubo en España 13.141 causas ejecutoriadas por hurto y 12.844 delitos de hurto, así como 9.861 causas por lesiones y 8.709 delitos de esta naturaleza; pero también 3.517 procesos abiertos por muertes que se rebelaron casuales.

⁸⁶² *Estadística...* (1883), p. X-XI.

⁸⁶³ Vease como ejemplo *Estadística...* (1883), pp. 2-3.

⁸⁶⁴ Por ejemplo, en 1861, de los hechos declarados delictivos por la Audiencia de A Coruña, 915 se cometieron ese año y 1156 en anteriores. *Estadística...* (1861), p. 30.

⁸⁶⁵ Figura en la página IX de la introducción.

Esto se corrige, aunque incorporando nuevos problemas metodológicos, a partir de 1900. Ese año las estadísticas incluyen una separación por audiencias de los delitos concretos vistos en juicio oral. A partir de 1901 la separación incluye también a los delitos vistos ante el tribunal del jurado en ese año, datos que sin embargo no coinciden con los totales de delitos agrupados por provincias o regiones. Por ejemplo, en la estadística de ese mismo año los delitos contra la propiedad vistos en juicio oral o por el jurado suman 7.503 casos, mientras que los delitos que dieron lugar a procedimiento son 7.645. En este caso extractaremos los datos de homicidios y similares, ya que coinciden esencialmente con los datos expuestos en el apartado 1.8.

Teniendo presentes estos sesgos, consideramos que las estadísticas tienen tres virtudes que justifican dedicarles un capítulo. En primer lugar, no hay otras tan exactas para esta época, y sería imposible elaborarlas ya que no se conservan series de causas. En segundo lugar, la serie a partir de 1883 tiene una elaboración relativamente homogénea, así que los cambios que en ella se produzcan reflejarán transformaciones en el comportamiento del delito o de su represión. Y, finalmente, dado que se elaboraban de manera centralizada, debemos suponer que los criterios con los que se recopiló la información son idénticos para toda España en cada año dado, y por lo tanto nos permiten hacer comparaciones fiables entre Galicia y el resto de España, y entre las cuatro provincias gallegas entre sí.

En este último caso, el de la comparación de las diferentes regiones de Galicia, encontramos un nuevo sesgo, ligado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 que hemos explicado en otra parte del trabajo. Antes de esta, cuando se cometía un delito contemplado en el Código Penal, este era instruido por el juez del partido judicial correspondiente, que dictaba una resolución. Esta, a su vez, se transmitía a la Audiencia Territorial correspondiente (en el caso de Galicia, la de A Coruña), donde se confirmaba o revocaba definitivamente. Pero esta nueva legislación genera cinco salas que ven en primera instancia los delitos penales, como hemos explicado en otra parte del trabajo: Lugo, Mondoñedo, Ourense, Santiago y Pontevedra; a mayores, la Audiencia Territorial de A Coruña, que ve en primera instancia los hechos que se corresponden a los partidos del norte de la provincia del mismo nombre. En consecuencia, las Estadísticas reflejan los delitos según se hayan cometido en la jurisdicción de cada uno de estos cinco órganos.

Observando los datos en 1883 se detecta que la Audiencia juzga una cantidad desproporcionada de casos en relación al territorio que le correspondería, por lo que no queda claro si se incluyen delitos cometidos con anterioridad al cambio en el modo de enjuiciamiento, o delitos vistos en segunda instancia y procedentes del territorio de otras salas⁸⁶⁶. En los años siguientes esta diferencia disminuye, y podemos reconstruir la distribución de los delitos por provincias en base a los juzgados que los entienden, sobre todo después de su reorganización por provincias para dar lugar a las Audiencias Provinciales.

6.3 Homicidios a partir de las estadísticas isabelinas y los juicios por jurado

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestras fuentes no desagregan los delitos particulares excepto en el periodo 1859-1862.

⁸⁶⁶ Así, en 1883, el resto de salas vieron 185 delitos contra las personas, y la Audiencia Territorial de A Coruña 340. Pudiera pensarse que se debe a que en la Audiencia Territorial se agregan los casos que ve en primera instancia y todos los de las diversas audiencias de lo criminal de su territorio, pero si ese fuese el caso, la suma de delitos de todas las Audiencias Territoriales equivaldrían al total nacional, y no es así. En 1883 estas suman 5.837 delitos contra las personas, mientras que en el conjunto del Estado son 10.647.

Tabla 6.3.1 Homicidios e infanticidios anuales en España, Galicia y las provincias señaladas por 100.000 habitantes

Año	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia	España
1859	1,8	5,6	7,3	3,4	4,2	11,4
1860	2,7	3	4,9	2	3,1	9,4
1861	2,1	1,6	4,1	2,3	2,4	8,6
1862	2	3	2,2	1,4	2,1	8
Media para el periodo	2,2	3,3	4,6	2,3	3	9,4

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

La incidencia en el conjunto de Galicia del homicidio e infanticidio se encuentra en niveles similares, e incluso más bajos, que los que encontraremos en las muestras para el primer tercio del siglo XX que veremos en el próximo capítulo a partir de la información en prensa. La comparativa temporal resulta complicada. Además de los problemas que pudo haber durante el periodo isabelino para elaborar las estadísticas y que pueden restarle credibilidad, las estadísticas judiciales en base a delitos tienden a ser sustancialmente más bajas que las que usan fuentes periodísticas, pues, como señalaremos en el apartado 7.1, buena parte de los homicidios acaban en sobreseimiento.

En comparación con el resto del territorio, todas las provincias gallegas presentan tasas de homicidios bajos para la media española. Incluso la provincia y año donde es más alta, Ourense en 1859, queda por debajo de la media nacional en cualquiera de los cuatro años. Además, serían todavía más bajos si no fuese por la participación de los infanticidios, que se dan relativamente más en relación a las muertes de adultos en la región: si en el conjunto de España hay un infanticidio por cada 8,3 homicidios, en Galicia la proporción es uno a 4,3. A menos que haya habido una dejación de funciones catastrófica por parte de los funcionarios encargados de recopilar los datos, que no consideramos probable⁸⁶⁷, parece que en Galicia la violencia grave era menos intensa que en el conjunto de España.

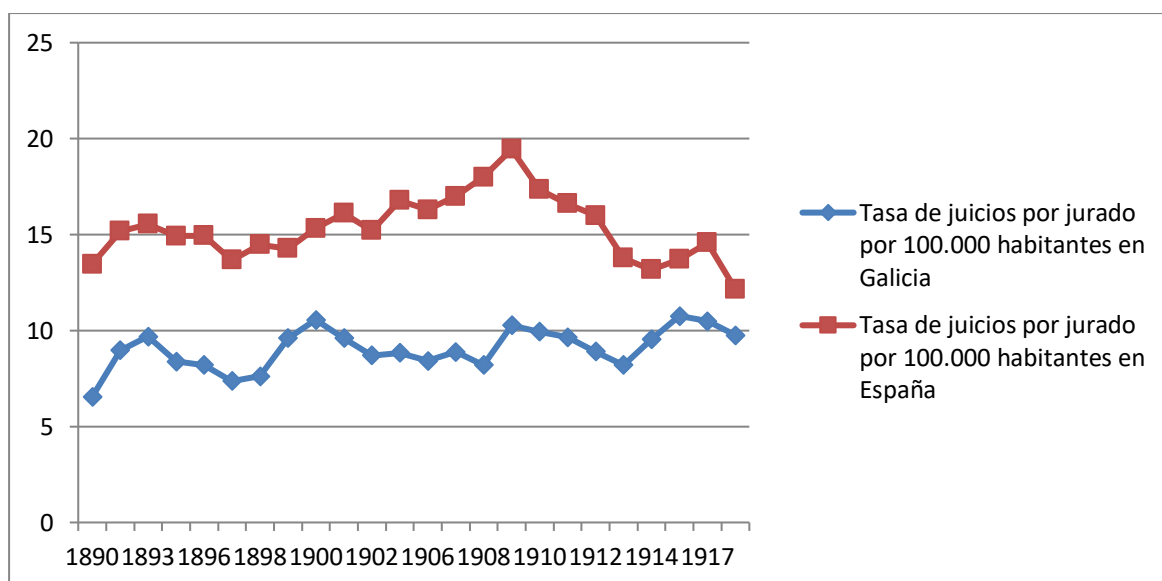
Esto encaja con otros datos ya conocidos. De acuerdo con los criminólogos contemporáneos, en la región se daban tasas muy bajas de delitos graves y de sangre, aunque, opinara lo que opinase Bernaldo de Quirós, no creemos que se deba al tipo braquicefálico de los gallegos⁸⁶⁸. Las provincias gallegas presentaban, al menos entre 1860 y 1887, un porcentaje de presos sustancialmente menor al que les correspondía por su peso demográfico⁸⁶⁹, lo cual también es una muestra en el mismo sentido. Por otra parte, y tras la constitución del jurado, Galicia siempre tiene una tasa inferior de juicios de lo que le correspondería por población; ante el jurado se veían homicidios y robos con violencia.

Gráfico 6.3.1 Tasa de juicios por jurado por 100.000 habitantes en España y Galicia

⁸⁶⁷ Es cierto que se registran menos delitos en Galicia en 1851-1862 que en el conjunto del país, pero esto será así también durante toda la Restauración. Por otra parte, incluso para estos cuatro años del periodo isabelino, ¿cómo se explica que se hubiesen contado muchos infanticidios y pocos homicidios al recoger los datos?

⁸⁶⁸ BERNALDO DE QUIRÓS, C. (1906), p. 26, 62, 87-88. Otros estudiosos realizaron lecturas semejantes en la primera mitad de la Restauración sin la lectura racial, por ejemplo GIMENO AGIUS, J. (1885-A), p. 501, CERVERA BARAT, R. (1898), p. 123.

⁸⁶⁹ CARBALLO GENDE, E. (2020-A), MARTÍNEZ RUIZ, E. (1982), pp. 173-174.



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Tabla 6.3.2 Tasa media anual de juicios por jurado por 100.000 habitantes en España y Galicia, agrupada por periodos

	Galicia	España	Porcentaje de la tasa de juicios por jurado en Galicia en relación a España
1890-1900 (9 años)	8,6	14,6	58,9
1901-1910 (8 años)	9,1	17,2	52,9
1911-1918 (7 años)	9,6	14,4	66,7
Conjunto del periodo	9	15,4	58,4

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Galicia mantuvo todos los años del periodo estudiado, una tasa de juicios por jurado sustancialmente inferior a la que le correspondía, de algo menos de un 60%, en su conjunto. La distancia fue mayor en 1901-1910 (cuando la tasa nacional subió más que la gallega) y menor en 1911-1918 (cuando la gallega subió y la española descendió un tanto), pero aún en este último periodo apenas superó los dos tercios de lo que le correspondería por población. El año en el que la distancia fue menor fue 1918, en el que los delitos contra la persona gallegos se aproximaron al total nacional, como veremos en el apartado 6.4.

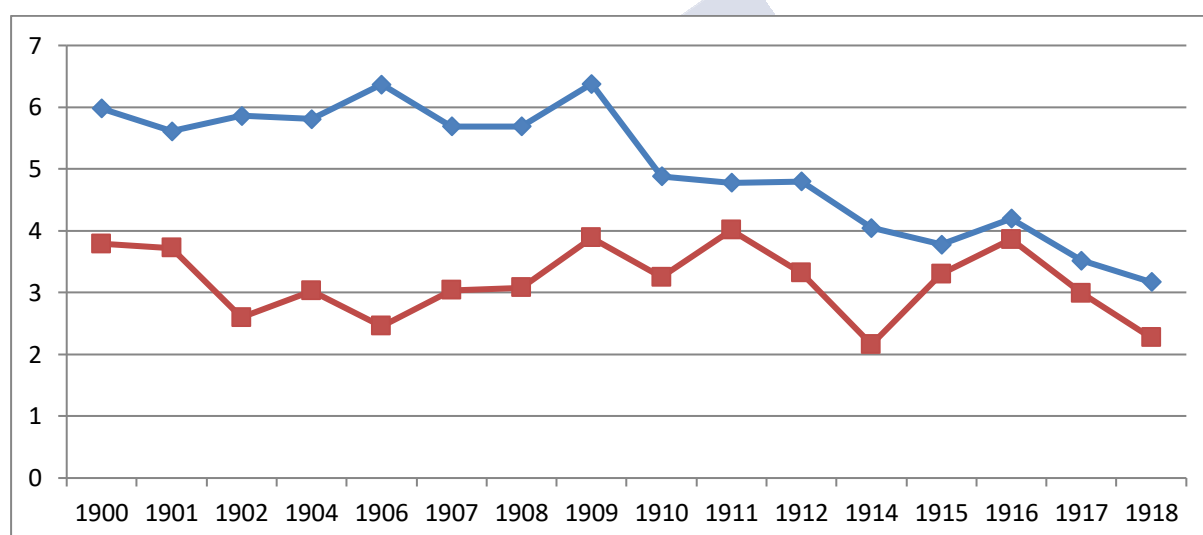
A partir de 1900, como mencionamos en el apartado anterior, encontramos datos de los delitos que fueron vistos por el jurado en cada una de las audiencias. En el caso de los homicidios, dan resultados relativamente similares a los de los resultados generales⁸⁷⁰. A lo largo de este periodo la tasa de delitos de homicidio de todo tipo (esto es, homicidio, infanticidio, parricidio y asesinato) es en España de 5,04 casos anuales por 100.000 habitantes, con una tendencia descendente muy

⁸⁷⁰ Las excepciones son la Estadística de 1906 (que cuenta 38 infanticidios en la página 124 y 88 en la 36), la de 1911 (que cuenta 116 asesinatos para toda España en la página 36 y 166 en la 132) y la de 1912 (que suma 87 parricidios en la página 36 y 37 en la página 125), así como una diferencia de 1 homicidio en el año 1901. Creemos que todos se deben a errores materiales por parte de los elaboradores. En el apartado 1.8 hemos empleado los datos de los resúmenes generales, mientras que en este apartado, para mantener uniformidad de criterio, hemos empleado los datos presentes en las estadísticas de jurados.

acusada; en la primera década se sitúa en el entorno de los 6 casos por 100.000 habitantes, mientras que en 1910 y los años siguientes nunca llega a 5 y en la Primera Guerra Mundial roza los 3-4. En Galicia la tasa es inferior, en torno al 3,2 si promediamos todos los años del periodo, pero la caída no es tan pronunciada, con lo que ambas tasas tienden a converger. De cualquier manera, la tasa gallega nunca llega a sobrepasar a la española en un año determinado, y oscila entre menos de un 45% de esta (en 1902) y casi un 92% (en 1916). Si promediamos los años de todo el periodo, la tasa gallega es de media un 65,1% de la española.

Al contrario que en los años que hemos visto del periodo isabelino, la prevalencia del infanticidio en relación al total de crímenes no es llamativa, y de hecho es inferior en Galicia. Este tipo de crímenes supone un 3,65% en la región y un 5% en el conjunto del país. La proporción de parricidios es casi idéntica (4,4% en Galicia, 4,5% en España) y la de asesinatos es un poco más baja que en el conjunto del país (7,1 frente a 9,8%). En ambos casos, los homicidios simples suponen más de las cuatro quintas partes de los homicidios.

Gráfico 6.3.2 Tasa anual de delitos de homicidio (incorporando infanticidio, parricidio y asesinato) vistos por el jurado por 100.000 habitantes en España y Galicia



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Tabla 6.3.3 Tasa anual de delitos de homicidio juzgados en España, Galicia y las provincias de esta por 100.000 habitantes

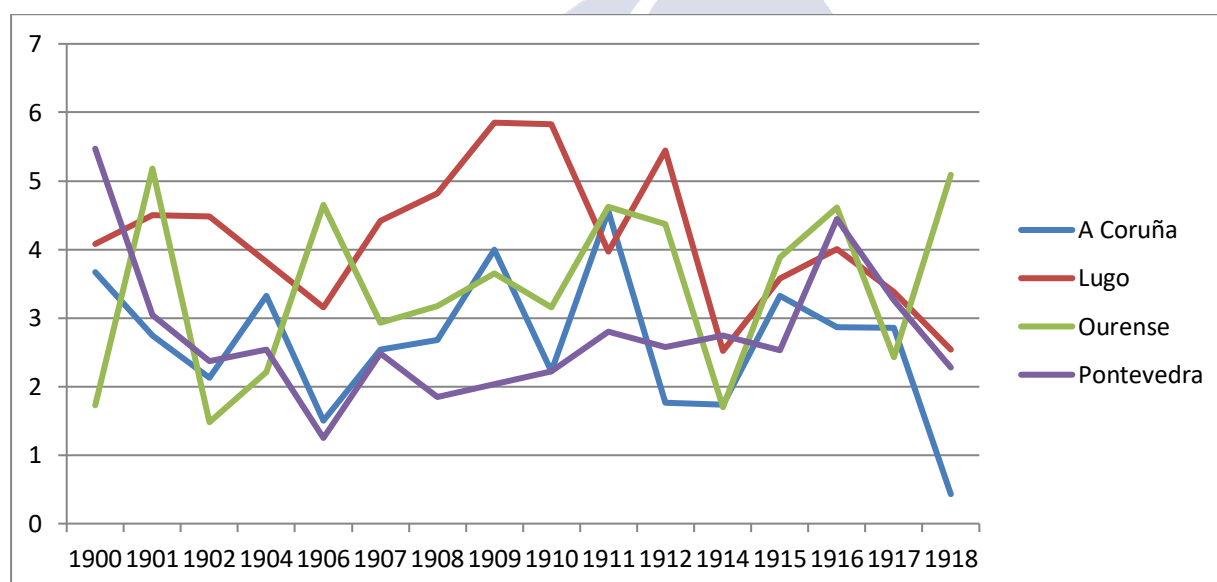
	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia	España	Tasa de Galicia / Tasa de España
1900	3,67	4,08	1,73	5,47	3,79	5,98	63,38
1901	2,74	4,5	5,18	3,04	3,72	5,61	66,31
1902	2,13	4,48	1,48	2,37	2,6	5,86	44,37
1904	3,32	3,82	2,21	2,54	3,03	5,81	52,15
1906	1,5	3,16	4,65	1,25	2,46	6,37	38,62
1907	2,54	4,42	2,93	2,48	3,04	5,69	53,43
1908	2,68	4,82	3,17	1,85	3,08	5,69	54,13
1909	4	5,85	3,65	2,03	3,89	6,38	60,97
1910	2,22	5,83	3,16	2,22	3,25	4,88	66,6

1911	4,56	3,97	4,62	2,8	4,01	4,78	83,89
1912	1,76	5,44	4,37	2,58	3,32	4,8	69,17
1914	1,74	2,52	1,7	2,74	2,16	4,05	53,33
1915	3,32	3,58	3,88	2,53	3,3	3,78	87,3
1916	2,87	4,01	4,61	4,44	3,86	4,2	91,9
1917	2,86	3,38	2,43	3,26	2,99	3,52	84,94
1918	0,43	2,54	5,09	2,28	2,27	3,17	71,61
Media	2,65	4,15	3,43	2,74	3,17	5,04	65,13

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Por provincias, ninguna alcanza la tasa de homicidios española. Las muertes son más elevadas en las provincias del interior: Lugo tiene un promedio de 4,15 delitos anuales por 100.000 habitantes, y Ourense de 3,54. Estas dos provincias llegan a sobrepasar en algún año puntual la tasa española, pero no es lo habitual. Las variaciones anuales son muy altas.

Gráfico 6.3.3 Tasa anual de delitos de homicidio (incorporando infanticidio, parricidio y asesinato) vistos por el jurado por 100.000 habitantes en cada una de las provincias gallegas



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

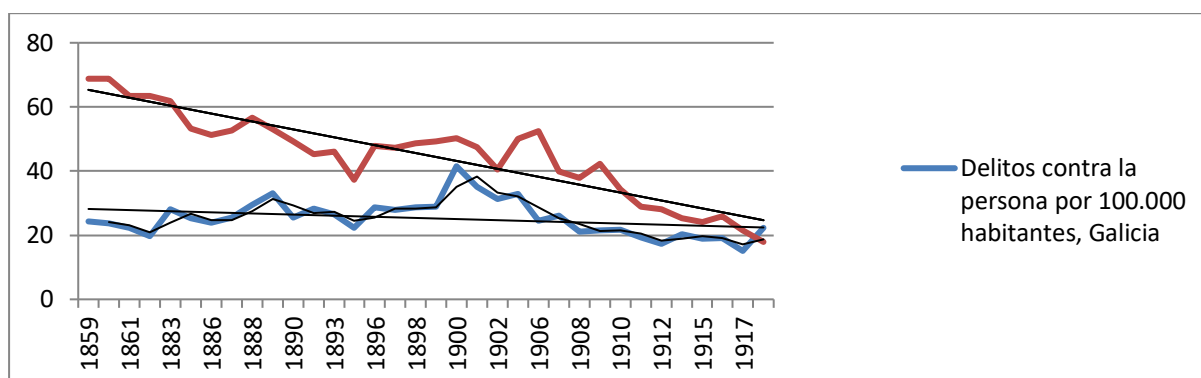
6.4 El crimen contra la persona

Nuestras fuentes clasifican como crímenes contra la persona el parricidio, asesinato, homicidio, disparo de arma de fuego contra persona, infanticidio, aborto, lesiones y duelo a partir de 1883; en el periodo de 1859-1862 la lista de delitos es algo más corta, pero no varía en lo fundamental⁸⁷¹. Esta clasificación tiene algunas deficiencias que no nos permiten entenderla como una muestra exacta del conjunto de la violencia interpersonal. No se incluyen los robos con violencia, que se clasifican

⁸⁷¹ Esto es, hemos agrupado los delitos antes citados, excepto el disparo de armas de fuego contra personas, pues no existía como tal en el ordenamiento jurídico anterior al Código Penal de 1870, y el parricidio y asesinato, que no aparecen consignados como tales y entendemos que se incluyen en las estadísticas de homicidio.

como delitos contra la propiedad, y buena parte de la violencia menor se clasifica como falta. Pero la categoría compone una muestra significativa de los delitos de cierta gravedad.

Gráfico 6.4.1 Tasas de crimen contra la persona por 100.000 habitantes, en Galicia y España



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Si observamos el conjunto del periodo, la tendencia es a la disminución de los delitos contra la persona tanto en España como en Galicia, delitos que, recordemos el apartado 5.1, también caen en 1859-1862 en relación a 1843⁸⁷². Observamos una caída apreciable en el conjunto de España entre el periodo 1859-1862 y la Restauración, y otra en el periodo 1907-1910, que coinciden con cambios legislativos en los que se restringía el delito de lesiones, según lo ya expuesto en el apartado 2.4⁸⁷³.

Sin embargo, no creemos que el patrón de descenso a largo plazo en España se deba a los cambios legislativos. Hay reducción del número de delitos en periodos de uniformidad legislativa, como 1883-1907 y 1907-1917. Y, más importante, la tasa de homicidios tiene un patrón descendente a largo plazo, y este delito se ve poco afectado por los cambios legales.

Si distribuimos los datos por décadas (con las debidas reservas ya que no en todas se reflejó el mismo número de años en la estadística), observamos que el número absoluto de delitos desciende periodo a periodo. Si ponderamos la cantidad de crímenes en relación a la población, se hace más patente que la incidencia de los atentados personales es cada vez más baja.

Tabla 6.4.1 Delitos contra la persona en España y Galicia en tasa por 100.000 habitantes como media para cada uno de los periodos, índice para ambas tomando la media del primer periodo como 100, y porcentaje de la tasa gallega en relación a la media nacional

	Tasa de delitos por 100.000 habitantes				Porcentaje de Galicia sobre la media nacional
	España	Índice	Galicia	Índice	
1859-1862 (4 años)	66	100	23	100	34,8
1883-1890 (7 años)	54	81,8	27	117,4	50
1891-1900 (8 años)	46	69,7	29	126,1	63
1901-1910 (8 años)	43	65,2	27	117,4	62,8

⁸⁷² Si bien la falta de un Código Penal en 1843, y las dificultades para estimar la población de ese año, hacen que nuestras estadísticas no sean directamente comparables.

⁸⁷³ Este último no pareció provocar un descenso en los delitos contra las personas de manera tan inmediata en España como en Tierra de Campos. Vease REDONDO CARDEÑOSO, J-A. (2010), pp. 271-272.

1911-1918 (7 años)	25	37,9	19	82,6	76
--------------------	----	------	----	------	----

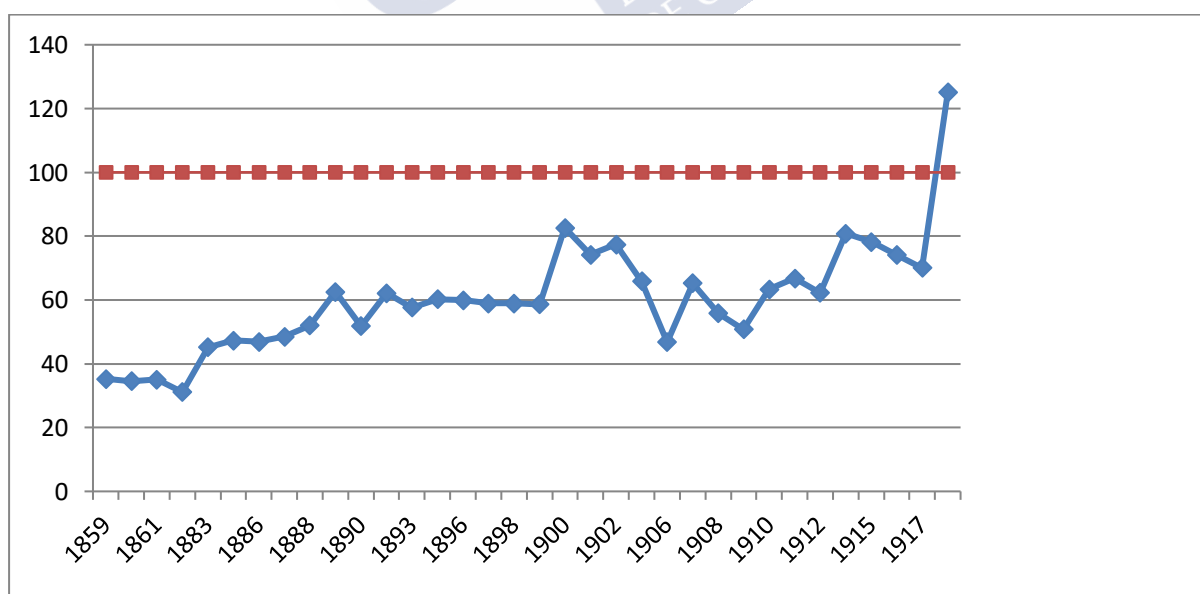
Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Pero no ocurre lo mismo en Galicia, en donde los delitos crecen en la Restauración con respecto al periodo isabelino. Entre 1883 y 1907, un periodo en el que los delitos en España caen notablemente, en Galicia se incrementan. Tan solo descienden en números absolutos en la última década, por influencia de los cambios legislativos ya mencionados, y aún así la caída, en el conjunto del periodo es notablemente inferior a la media española.

El resultado es que, partiendo de una tasa de delitos contra la persona muy inferior a la media nacional (algo, como hemos visto, refrendado por las estadísticas parciales de la primera mitad del siglo XIX), a lo largo del tiempo vamos viendo una paulatina confluencia. En 1859-1862 los delitos son algo menos de un 35% de los que le corresponderían en relación a su población, y en 1883-1890 un 50%. En las dos décadas siguientes los encontramos en algo más del 60% de la media nacional, si bien con saltos apreciables en periodos de tres o cuatro años.

Mientras que en 1889-1899 los datos se mantienen muy estables en torno al 60%, en 1900 oscilan hasta el 80%, y luego van cayendo durante la siguiente década. En 1910 y años siguientes suben y en 1914-1917 oscilan entre el 70y 80%. En 1918, por primera vez en los 34 años estudiados, el porcentaje de delitos contra las personas en Galicia resulta superior a la media nacional: en concreto, un 25,1%. En ese año coincidió una caída en España, hasta el 17,9 por 100.000 habitantes, cuando nunca anteriormente había bajado de 20 por 100.000, con un pequeño pico en Galicia (22,3 por 100.000 habitantes, la cifra más alta desde 1907). La falta de datos en los años posteriores impide determinar si esta tendencia se asentó al final de la Restauración, pero como veremos en el apartado 6.8, es probable que así lo hiciera.

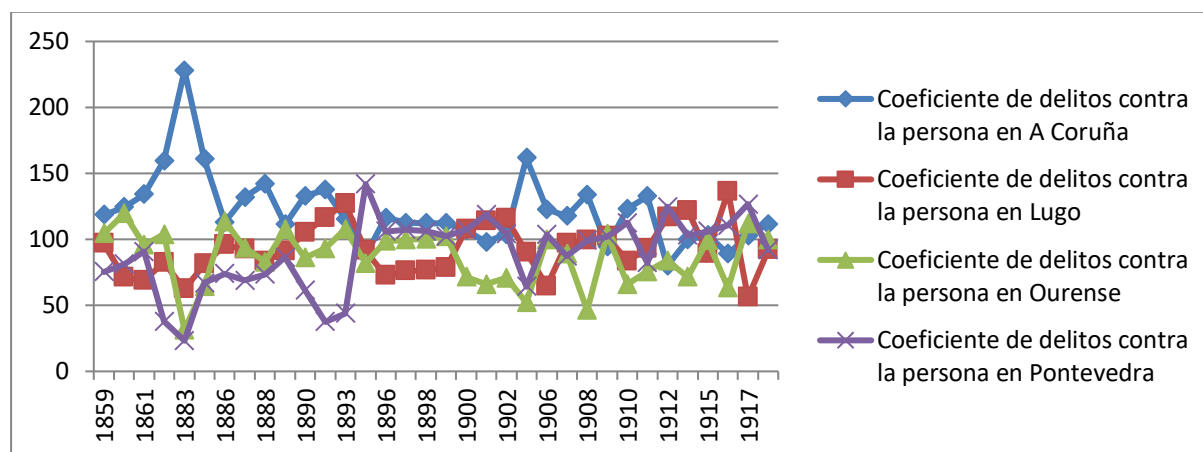
Gráfico 6.4.2 Porcentaje de delitos contra la persona en Galicia en relación a la media española, ponderando la población



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Estudiar la distribución del crimen contra la persona entre las diferentes provincias gallegas presenta complicaciones a lo largo de un periodo tan amplio, debido a que las oscilaciones interanuales son muy fuertes. Existen, eso sí, algunas tendencias perceptibles.

Gráfico 6.4.3 Coeficiente de delitos contra las personas en las diferentes provincias gallegas, teniendo la media regional como base 100



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

La complejidad obliga a distribuir la serie en periodos, para su mejor comprensión. Hemos seguido las diferentes décadas, pero hay que tener en cuenta que para algunas hay un número sustancialmente mayor de datos que para otras, y que no reflejan con exactitud las tendencias.

Tabla 6.4.2 Delitos contra la persona en las diferentes provincias gallegas como media en los periodos expresados en tasa de crímenes anuales por 100.000 habitantes, relación porcentual con el periodo anterior y porcentaje en relación a la media gallega

	A Coruña			Lugo		
	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega ⁸⁷⁴
1859-1862	30	-	134	18	-	80
1883-1890	40	33,3	146	24	33,3	87
1891-1900	33	-17,5	113	27	12,5	93
1901-1910	32	-3	119	26	-3,7	96
1911-1918	20	-37,5	103	19	-26,9	101
	Ourense			Pontevedra		
	Tasa	% sobre el periodo	% de la media	Tasa	% sobre el periodo	% de la media gallega

⁸⁷⁴ El lector atento podrá apreciar que, si realizásemos los porcentajes en base a las tasas para Galicia expresadas en la tabla 6.4.1, habría ligeras diferencias, en algún caso de más el 1%. Esto se debe a que los porcentajes en esta tabla están redondeados; en la base de datos el cálculo se ha hecho con más decimales.

		anterior	gallega		anterior	
1859-1862	24	-	106	16	-	71
1883-1890	23	-4,2	83	18	12,5	65
1891-1900	27	17,4	94	27	50	94
1901-1910	20	-25,9	74	26	-3,7	99
1911-1918	16	-20	86	20	-23,1	106

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

La característica más llamativa de la transición entre las estadísticas isabelinas y las de la primera Restauración es el incremento de la tasa de delitos, contrastando con la tendencia general en el conjunto del país. En A Coruña y Lugo la tasa aumenta en un tercio, en Pontevedra en un 12,5%, y tan solo desciende moderadamente en Ourense, que se encontraba algo por encima de la media en 1859-1862 (recordemos que era la provincia con el índice de homicidios más alto) y que ve una bajada de un 4,2% en su tasa en los años observados de la década de 1880. A partir de entonces esta provincia interior siempre estará por debajo de la media, sobre todo en 1901-1910, cuando no llega al 75% de los delitos que le corresponderían por población.

Dejando aparte el periodo 1883-1890, influido como explicamos por el sesgo de la Audiencia, A Coruña presenta siempre tasas por encima de la media gallega, muy pronunciadas en el periodo isabelino y mucho más moderadas en la Restauración. Sin embargo, la tendencia es que su tasa total de delitos disminuya a lo largo del periodo.

Lugo y Pontevedra parten de valores mucho más bajos que la media regional en 1859-1862 y aumentan a lo largo del periodo, si bien de manera desigual. En Lugo encontramos un incremento sostenido en el tiempo en relación al primer periodo, con un pequeño retroceso, siguiendo la tendencia general, en 1901-1910, y otro más acusado en la década siguiente (si bien la tasa de delito continúa siendo mayor que en 1859-1862). La tendencia de crecimiento a finales del XIX es más marcada en Pontevedra, que en el periodo isabelino se encuentra en la posición más baja de Galicia (un 29% por debajo de la media). Entre 1891 y 1918, las tasas medias de estas dos provincias son prácticamente idénticas.

Desde nuestro punto de vista, lo que se muestra a lo largo del tiempo en la mayoría de las provincias es una tendencia a la igualación. Los mayores incrementos en relación a la población se dan en dos provincias, Lugo y Pontevedra, que tenían menores tasas de delito, mientras que en A Coruña, donde las tasas son más altas mientras poseía la única audiencia del territorio, hay una caída de la tasa. En el siglo XX, si tenemos en cuenta los sesgos que pueden introducir los años que faltan, no podemos hablar de grandes diferencias en las tasas de violencia registradas entre A Coruña, Pontevedra y Lugo. La excepción parcial es Ourense, en el sentido de que tiene unas tasas relativamente más bajas.

¿Cuál es nuestra interpretación? Que la violencia siempre estuvo ahí, pero en la Restauración el Estado la comenzó a perseguir con más efectividad y la población española recurrió cada vez más a los tribunales para denunciarla. Esto se explicaría por una mayor confianza en los tribunales y un aumento de la efectividad de la justicia estatal, combinada con una menor disposición a tolerar conductas violentas o resolverlas de manera privada (ya fuese mediante mecanismos de

conciliación, o, simplemente, con más violencia). Ahora bien, las costumbres no cambian de un año para otro. Si la población estaba acostumbrada a ejercer un tipo de violencia de baja intensidad que paulatinamente se comienza a judicializar y reprimir con éxito por parte del Estado, tendríamos un periodo de adaptación en el que las condenas por lesiones y amenazas aumentarían durante un cierto tiempo, aunque no se hubiesen incrementado los hechos en términos absolutos. Esta es la lectura que hace Ploux del aumento del homicidio en Francia a partir de 1860 y que nosotros, compartiendo sus argumentos, consideramos que se pueden aplicar con mayor seguridad a la violencia menor que a este tipo concreto de crimen⁸⁷⁵. Como hemos visto en el apartado 6.3, los crímenes más graves contra la persona parecen mantenerse esencialmente estables.

Un proceso similar de judicialización puede ayudar a explicar el importante aumento de los delitos en Inglaterra y Gales en las primeras décadas del siglo XIX, y el crecimiento de ciertas infracciones en la segunda mitad del siglo⁸⁷⁶ en un contexto en el que la violencia paroxística era muy escasa. En la zona de Coimbra, y aunque la judicialización no es la única explicación, los delitos contra las personas se quintuplican en la década de 1880⁸⁷⁷. Un ejemplo más moderno es el del enorme incremento de la violencia que reflejan las cifras oficiales en diversos países europeos entre la década de 1950 y la de 1990⁸⁷⁸ y que se explica en gran medida por la persecución de comportamientos que en otros tiempos quedaban en privado⁸⁷⁹.

Para dar una idea de en qué consistían este tipo de delitos hemos seleccionado los cincuenta primeros delitos contra las personas que aparecen en el libro de sentencias del Juzgado Provincial de la provincia de A Coruña en el año 1900; un año en el que, recordemos, este órgano juzgaba todos los delitos que no requiriesen de un jurado⁸⁸⁰. Descartamos las imprudencias. Se corresponden con los crímenes menos graves; en el Tribunal del Jurado de ese año encontramos 23 casos de homicidio (20 homicidios dolosos, uno imprudente, un asesinato y un parricidio, que darían, descontando el imprudente, una tasa de 3,37 casos por 100.000 habitantes si representasen todos los cometidos durante un año). Pero ya hemos dedicado otros apartados al estudio del homicidio y de los actos de violencia cotidianos que no llegaban a los juzgados; en este apartado, intentaremos ver los sucesos violentos de nivel medio, ni tan leves como para quedarse en el juzgado municipal pero no tan graves como para llegar al juzgado popular.

El medio centenar de juicios se corresponden con causas por lesiones graves o menos graves, así como, en el pequeño porcentaje en el que se emplearon armas y que luego veremos, lesiones y disparo, que constituía un delito aparte y, a este nivel, condenas más graves que la herida causada por la bala.

Tabla 6.4.3 Procesados por delitos contra la persona según su sexo y estado civil

⁸⁷⁵ “...la hausse, après 1860, de la criminalité enregistrée reflète sans doute en grande partie l’effritement des normes traditionnelles, et la dislocation concomitante de la communauté coutumière. Le village est désormais beaucoup moins tolérant à l’égard des individus violents. Dans les provinces périphériques, où la paysannerie s’était longtemps illustrée par son comportement dissident (la haine du gendarme y était féroce), on admet désormais que l’État intervienne dans les affaires locales. “Se faire justice soi-même” n’est plus une norme admise”. PLOUX, F. (2009), p. 102.

⁸⁷⁶ SHARPE, J. (2009), p. 240.

⁸⁷⁷ VAQUINHAS, I. M. (1996), pp. 299, 324, 402.

⁸⁷⁸ LINDSTRÖM, D. (2009), p. 259, BIRKEL, C. (2009), pp. 212-213.

⁸⁷⁹ TONRY, M.: “Why Crime Rates are Falling Throughout the Western World”, citado en AEBI, M. F., LINDE, A. (2016), p. 66.

⁸⁸⁰ La fuente es *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, Archivo del Reino de Galicia, Fondo Audiencia Provincial, nº 44.400.

Procesados en los que se conoce el sexo	Número	Porcentaje
Hombres	75	93,8
Mujeres	5	6,3
Total	80	100
Procesados en los que se conoce el estado civil	Número	Porcentaje
Casados	16	20,5
Solteros	60	76,9
Viudos	2	2,6
Total	78	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

Los procesos suman un total de 80 encausados, y el perfil, de manera poco sorprendente, es el de un varón soltero joven de las clases populares. Conocemos el sexo de todos los procesados; el 93,8% son hombres. Entre los 78 en los que figura el estado civil, casi el 77% son solteros, con un 20,5% de casados y un 2,6% de viudos.

En cuanto a la edad, aunque la fuente puede tener un sesgo que atribuya más años a los procesados de los que tenían en el momento de comisión del delito⁸⁸¹, tres cuartas partes tienen menos de 30 años. Algo más de una cuarta parte tienen menos de veinte. La franja de edad de 20 a 29 años, por tanto, es la más numerosa, con un 47,4% de los encausados, y otro 19,2% superan los 29 pero no llegan a los 40. Los que están en la quinta década de la vida suponen el 5,1% de los procesados, y a partir de los 50 las cifras son testimoniales. La edad media es de 25,9 años; 25,4 en el caso de los varones y 33,2 en el caso de las mujeres.

Tabla 6.4.4 Casos de delitos contra la persona según partido judicial

Partidos judiciales	Casos	Porcentaje
Noia	7	14
Pontedeume	6	12
Santiago	5	10
A Coruña	5	10
Betanzos	5	10
Ferrol	4	8
Corcubión	4	8
Carballo	4	8
Negreira	4	8
Muros	2	4
Arzúa	2	4
Ordes	2	4

⁸⁸¹ La edad de los procesados figura al inicio de la sentencia junto con los datos sobre estado civil, residencia, instrucción, etcétera. Ahora bien, en algunos casos parece figurar la edad que tenían cuando se realizó el delito o quizás la instrucción, y otra en el momento del juicio. Esto se hace patente en algún caso en el que se señala que el procesado tiene 18 años pero en el proceso se señala que en la comisión del delito no llegaba a la mayoría de edad. De cualquier manera, dado que la mayoría de las sentencias consultadas hacen referencia a delitos cometidos en 1899 o 1898, no creemos que la distorsión sea grande.

Total	50	100
-------	----	-----

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

En lo referente a la procedencia de los casos, encontramos representación de todos los partidos judiciales de la provincia excepto de Ortigueira y Padrón; además, los más representados no son los de A Coruña, Santiago y Ferrol, donde se encuentran las principales ciudades, sino Noia y Pontedeume. La primacía de estos dos partidos, y la ausencia de los dos ya citados no tiene por qué ser real (con una muestra de medio centenar de casos, puede ser una coincidencia), pero la difusión de los datos deja claro que este delito se encuentra distribuido ampliamente por las zonas rurales.

Tabla 6.4.5 Profesión de los procesados

	Casos	Porcentajes
Oficios del campo o del mar	51	66,2
Labrador	36	46,8
Jornalero	8	10,4
Marinero	7	9,1
Labores artesanas o servicios	18	23,4
Aserrador	4	5,2
Zapatero o zoquero	3	3,9
Pintor	1	1,3
Herrero	1	1,3
Carpintero	4	5,2
Albañil	1	1,3
Cantero	1	1,3
Empleado en el comercio	2	2,6
Cochero	1	1,3
Marginales y otros	8	10,4
Prostituta	2	2,6
Dependiente de Consumos	1	1,3
Pordiosero o sin oficio	2	2,6
Estudiante universitario	3	3,9
Total	77	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

Esto también se ve en la distribución de los oficios. De los 77 individuos de los que conocemos el oficio, un total de 36, esto es, el 46,8%, son labradores; por sí solos constituyen casi la mitad de la muestra. Otro 10,4% son jornaleros, y, si bien en esta categoría se clasificaban también trabajadores por cuenta ajena en trabajos no relacionados con el mundo rural, según ya hemos mencionado en el apartado 5.2, por el contexto parecen más bien trabajadores agrícolas, y el 9,1% son marineros (por las sentencias no queda claro si de la flota pesquera o mercante). Algo menos de la cuarta parte se dedican a actividades del sector secundario o terciario, casi siempre en labores artesanales, con la excepción de dos del sector del comercio y un cochero. El cuadro queda completo con tres

universitarios, dos prostitutas, dos individuos pordioseros o sin oficio y un dependiente de Consumos. La muestra pertenece casi completamente, por tanto, a las clases trabajadoras.

La inmensa mayoría de los procesados, el 91%, carecen de antecedentes. Entre los seis que sí los tienen encontramos cuatro hombres que habían sido condenados por lesiones⁸⁸², un joven que lo fuera por hurto y una prostituta con antecedentes por escándalo público. Esto no quiere decir que los que carecen de antecedentes penales tengan un historial perfectamente limpio en cuanto a violencia (pueden haber sido condenados en juicios de faltas o haber participado en peleas que no quedaron registradas⁸⁸³), pero apuntan a que este tipo de delito no provenía de sectores marginales. El comportamiento violento, según una tesis que ya hemos defendido en otras ocasiones⁸⁸⁴, era realizado por amplios sectores de la población y no por una subclase de lumpen.

En cuanto a las víctimas, esto es, las personas que resultaron lesionadas, también predominan los hombres: 51 ante 14, con lo que los varones suman el 78,5% de los heridos. Se puede apreciar que el porcentaje no es tan elevado como el de los procesados. Es también interesante la interacción de los sexos en el acto de la violencia. En todos los casos en los que las agresoras son mujeres, agreden a mujeres, pero este tipo de caso solo suma cuatro víctimas. En cambio, hay una decena de casos de mujeres agredidas por hombres. Por lo tanto, si bien la violencia que cometen y sufren los hombres es mayoritariamente intrasexual, la violencia recibida por las mujeres en esta franja de gravedad es mayoritariamente intersexual, y las féminas, por su parte, no agreden a varones. Este patrón se repite también en los homicidios, como veremos en el apartado 7.3.

Tabla 6.4.6 Heridas de las víctimas de los delitos contra la persona

Heridas	Individuos	Porcentaje
Armas de fuego	3	4,6
Armas blancas de filo o corte	21	32,3
Palos, piedras, vergajos y otras armas contundentes	23	35,4
Golpes con la mano desnuda, empujones, etcétera	3	4,6
Causas desconocidas o no señaladas	15	23,1
Total	65	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

En cuanto a las heridas, siguiendo el mismo criterio que luego emplearemos en las víctimas de homicidio, encontramos que dos tercios de las víctimas, a partes más o menos iguales, fueron lesionadas con armas blancas (casi siempre navajas o cuchillos, pero también algún instrumento agrícola) o con armas contundentes (habitualmente palos y piedras). En el 4,6% se mencionan golpes con la mano desnuda, y en el 23,1% no sabemos la fuente o no queda clara; en su mayoría, creemos, se trata de ataques sin armas. Las armas de fuego solo provocaron tres heridas, el 4,6%; lógicamente, el porcentaje es menor del que será en los homicidios. No hay casos de métodos para realizar daño más exóticos, como venenos, explosivos o la asfixia.

⁸⁸² Tres de ellos recibieron sentencias desfavorables de nuevo en los casos que hemos estudiado, con el agravante de reincidencia, si bien en dos casos estos quedaron anulados por la atenuante de embriaguez. En el tercero, supuso aumentar la condena hasta los cinco meses.

⁸⁸³ En este delito y otros las menciones a malos antecedentes, mala conducta o mala fama son testimoniales, pero no sabemos si quizás esto se mencionaba poco en las sentencias.

⁸⁸⁴ CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 25.

Medio centenar de procesados fueron condenados, lo que supone el 62,5% del total. El 21,3% para un total de 17 procesados, fueron absueltos por la retirada de la acusación del Ministerio Fiscal, normalmente por falta de pruebas. En el 12,5% de los casos, una decena de personas, el hecho se consideró una falta y se derivaron a juzgados municipales. En cuanto a los tres restantes, uno se benefició de un eximente y dos se declararon rebeldes.

Los que cometían delitos violentos tenían la ventaja de una legislación generosa en cuanto a atenuantes⁸⁸⁵. En los casos estudiados se beneficiaron de ellos 21 de los condenados, esto es, el 33,6%. Sin embargo, en ocho casos el único atenuante fue el de tener entre quince y dieciocho años, circunstancia que también se dio en dos condenados que se beneficiaron de otra rebaja, y que rebajaba las condenas de manera significativa.

Si descontamos esta circunstancia y nos ceñimos a los atenuantes, por así decirlo, ambientales, encontramos que solo beneficiaron al 20,8% de los condenados. La Sala realizaba una interpretación restrictiva de los atenuantes y eximentes, limitando, lógicamente, las peticiones de las defensas, y corrigiendo su interpretación maximalista. Apuñalar a un hombre porque se negase a pagar en una taberna el precio de un pan que había comprado conjuntamente con su agresor no suponía "provocación o amenaza adecuada"⁸⁸⁶. Aproximarse borracho a un conocido pidiéndole explicación "de ciertas frases ofensivas que suponía había proferido anteriormente" y acabar profiriéndole seis heridas de arma blanca y cara y cuello no se consideraba actuar "en vindicación próxima de una ofensa grave" ni actuar motivo por "estímulos poderosos"⁸⁸⁷. Acercarse a un hombre mientras orinaba, recordarle una disputa pasada y, tras algunas palabras "sin importancia", meterle dos cuchilladas en el costado y otra en la muñeca no era obrar en defensa propia, ni vengar una supuesta ofensa producida meses atrás en un día de fiesta no justificaba "arrebato y obcecación"⁸⁸⁸.

Dejando aparte la edad, que está presente en 12 casos, el atenuante más frecuente es el estado de embriaguez, que benefició a ocho condenados, el 16% del total. Aún así es mucho menos habitual que en los casos contra el orden público, como veremos más adelante. Un número mayor de los procesados que sufrieron condena habían bebido, pero a algunos no se les concedió porque no se consideró que estuviesen lo suficientemente borrachos, o por el contrario, debido a que se embriagaban de manera habitual, lo que les impedía reclamar el atenuante. Un caso típico es el de José Ramón Giráldez, un marinero de Boiro que apuñaló a un hombre en la cara y pecho estando borracho, ocasionándole casi un mes de incapacidad laboral y "una visible deformidad". La embriaguez no habitual rebajó su condena a siete meses⁸⁸⁹.

Tres condenados, el 6% del total, rebajaron la condena por arrebato u obcecación, entre ellos el labrador Benigno Laulés, que hirió con una azada a un vecino que estaba limpiando una franja de riego en una finca del padre del agresor. Este le pidió que detuviese el trabajo, que "consideraba perjudicial a la finca de su padre". La víctima no le hizo caso, y la Sala estimó que su actitud había sido suficiente como para hacerle perder los estribos a Laulés⁸⁹⁰. También se beneficiaron de este atenuante un mendigo que le pegó a su ex pareja después de que esta lo increpara por haberla dejado⁸⁹¹ y un dependiente de Consumos que había empujado a una mujer en una discusión por el

⁸⁸⁵ CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 68.

⁸⁸⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 66, folios 182-183.

⁸⁸⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 75, folios 208-210.

⁸⁸⁸ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 86, folios 234-236.

⁸⁸⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 57, folios 156-158.

⁸⁹⁰ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 35, folios 99-101.

⁸⁹¹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 46, folios 128-130.

pago de derechos⁸⁹²; quizás la Sala considerase que las mujeres eran más propensas a provocar arrebatos en los hombres.

A dos condenados, el 4%, se les rebajó la pena por haber sido objeto de amenazas o provocaciones por parte de su víctima. En 1899 hubo una disputa entre dos casas de prostitución en la Rúa Cega de A Coruña, y la habitante de una de ellas, Carmen Carballo, entró acompañada de su amante, Francisco Ramos, en la de su rival. Allí estaba comiendo un estudiante de Getafe de 23 años llamado Roque Rodríguez, alias *Francisco*. Carballo y su querido tuvieron con los de la casa una “actitud provocativa” y “rompieron algunos cacharros”, hasta que el madrileño se cansó y le pegó un tiro en la cara a Ramos; por suerte para este, solo le produjo una herida ligera en el labio superior. El hecho era serio, e incluía dos delitos: disparo de arma de fuego y lesiones menos graves. Al ser el tiro medio para cometer el delito de lesiones, no se le juzgó por ambos, sino por el más grave de los dos. Además, Rodríguez se benefició del hecho del atenuante de “provocación inmediata”; el herido había entrado en su casa dando golpes e insultándolo. Fue condenado a algo menos de tres años de cárcel y a pagar una indemnización de 56 pesetas⁸⁹³. Es relevante señalar que la Sala nunca aceptó como atenuante la venganza de una ofensa grave.

Nadie consiguió la absolución por defensa propia, aunque sí uno por miedo insuperable. Jesús María Amado, un joven campesino de 16 años, volvía en 1898 de una taberna con un compañero cuando les salió al paso Pedro Vázquez “disfrazado e imitando el aullido de animales” para darles un susto. El compañero de Amado salió corriendo, y este, asustado, “trató de defenderse con el guadaño que consigo llevaba”. Vázquez se llevó un golpe en la cabeza que lo dejó tres meses fuera de combate como recuerdo de la broma, pero Amado no fue condenado a petición de la Fiscalía⁸⁹⁴.

Si observamos la matrícula criminal de Pontedeume encontramos algunos datos interesantes acerca de los delitos contra la persona. Un total de 129 casos se corresponden con la muerte de seres humanos, el 13,9% del total de causas. No es que el partido tenga una tasa de violencia extremadamente alta. Solo 18 son investigaciones propiamente por homicidio, otros cuatro aparecen descritos como suicidios, y 107 son causas por “muerte” que seguramente se correspondan con las investigaciones de oficio de fallecimientos naturales pero sospechosos o accidentales⁸⁹⁵. Descontando estas muertes, la mayor parte de las causas son por lesiones simples, pero aún así, para un periodo algo superior a diez años y una población aproximada de 45.351 personas (de acuerdo con la población de hecho en el censo de 1910) tenemos 18 casos de homicidio, 47 de disparo y lesiones y 24 de disparo contra personas; las tasas anuales por 100.000 habitantes son respectivamente de 3,97 (homicidio), 10,36 (disparo y lesiones) y 5,29 (disparo sobre las personas). A estos debemos sumar siete explosiones de bomba y dos envenenamientos, probablemente accidentales. Todos estos delitos fueron sobreseídos.

Tabla 6.4.7 Delitos contra la persona entre febrero de 1906 y agosto de 1916 en el juzgado de Pontedeume

Delito	Casos	Porcentaje
Homicidio	18	6,1
Lesiones	208	70
Disparo y lesiones	47	15,8

⁸⁹² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 18, folios 47-49.*

⁸⁹³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 29, folios 82-85.*

⁸⁹⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 89, folios 244-245.*

⁸⁹⁵ Matrícula criminal de Pontedeume, AA16, AE3.

Disparo	24	8,1
Total	297	6,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume⁸⁹⁶

En cuanto a la resolución de los casos, hay un elevado porcentaje de sobreseimientos. Llega al 50% en los disparos que no llegaron a herir a nadie (posiblemente porque se trataba de crímenes en los que alguien disparaba de lejos o de noche, para intimidar o amedrentar), pero incluso en las lesiones, en el que el porcentaje es menor en la muestra, supera el 35%.

En el caso de los homicidios el sobreseimiento es también muy alto, del 38,9%. No podemos responder a esta pregunta sin consultar los expedientes de los delitos, puesto que puede que se trata de casos que fueron clasificados como homicidio en la matrícula criminal pero que resultaron ser muertes accidentales, pero recuerda al tercio de homicidios que, señala Roth, no llegan a sentencia. Además, la mitad de las causas aparecen como inconclusas y no encontramos ninguna sentencia, lo que quizás sea un sesgo de la fuente (los responsables de elevar la matrícula criminal no parecen señalar las sentencias en los casos que se derivan al jurado). También tenemos un caso terminado por rebeldía y otro por el fallecimiento del procesado.

Tabla 6.4.8 Evolución de las causas por delitos contra la persona

Delito	Porcentaje que acabó en sobreseimiento	Porcentaje que acabó en sentencia	Porcentaje que se consideró falta	Porcentaje que nunca fue concluido	Porcentaje que acabó en rebeldía	Otros
Homicidio	38,9	0	0	50	5,6	5,5
Lesiones	35,1	18,3	26,4	18,3	1,9	0
Disparo y lesiones	42,6	21,3	14,9	17	4,3	0
Disparo	50	25	8,3	8,3	8,3	0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume⁸⁹⁷

Por lo demás, alrededor de una cuarta parte de las causas por lesiones simples se derivaba a juicios de faltas. Los casos inconclusos suponen menos de una quinta parte, excepto en el caso ya señalado de los homicidios. Un porcentaje pequeño pero significativo de los delincuentes son declarados rebeldes, una categoría que abre sus propias preguntas sobre el porcentaje de individuos que abandonaban el país, o, al menos, el lugar en el que vivían, para escapar a la acción judicial.

6.5 El delito contra la propiedad

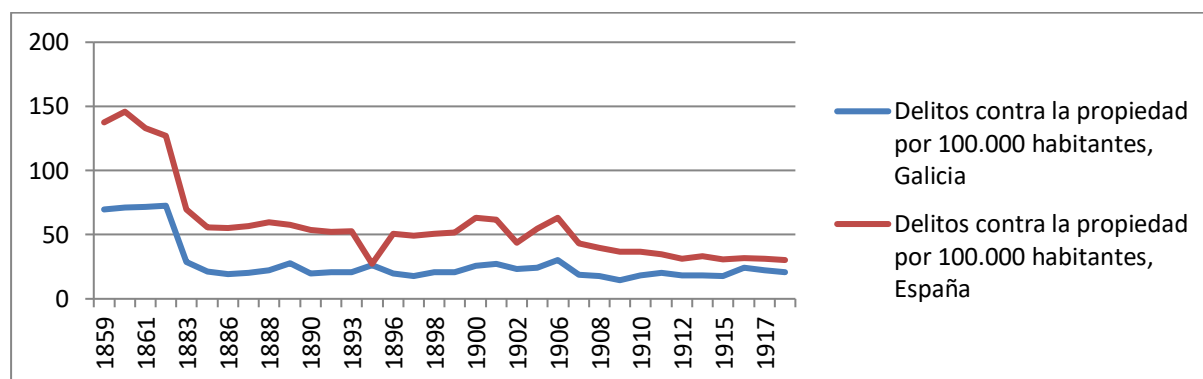
A partir de 1883 las estadísticas judiciales para Galicia presentan conjuntamente una categoría que incluye los robos y hurtos, la usurpación, el alzamiento, la quiebra e insolvencia punibles, las estafas

⁸⁹⁶ *Matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1907-1912*, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155, *Libro de matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1912-1916*, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155.

⁸⁹⁷ *Matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1907-1912*, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155, *Libro de matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1912-1916*, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155.

y otros engaños, las maquinaciones para alterar precios, las casas de préstamo sobre prendas, el incendio y los daños. De ellas, las más numerosas con diferencia son los hurtos, seguidos de los robos, las estafas y, en mucha menor medida, los daños e incendios. El resto son testimoniales. Los datos de los años 1859-1862, en los que no se contempla la citada agregación, se corresponden con la suma de los delitos ya citados, con la excepción de las usurpaciones.

Gráfico 6.5.1 Tasas de delito contra la propiedad a nivel gallego y español, por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

El dato más llamativo es el descenso de la tasa de delitos contra la propiedad entre el periodo isabelino y 1883, mucho más acusado que en el caso de los delitos contra la persona. En estos, el número de crímenes en cifras absolutas se mantenía aproximadamente en el conjunto del Estado, y bajaba la incidencia debido al incremento de la población. En los ataques contra la propiedad, sin embargo, la caída es sustancial en cifras absolutas, y abrumadora en las relativas.

Tabla 6.5.1 Media por periodos de la tasa de delitos contra la propiedad en Galicia y España, índice tomando el primer periodo como 100 y relación entre ambas tasas

	Tasa de delitos por 100.000 habitantes				Porcentaje de Galicia sobre la media nacional
	España	Índice	Galicia	Índice	
1859-1862 (4 años)	136	100	71	100	52,2
1883-1890 (7 años)	58	42,6	23	32,4	39,7
1891-1900 (8 años) ⁸⁹⁸	50	36,8	21	29,6	42
1901-1910 (8 años)	47	34,6	22	31	46,8
1911-1918 (7 años)	32	23,5	20	28,2	62,5

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Si comparamos el periodo 1859-1862 con los seis años que conocemos de la década de 1880, la tasa de delitos contra la propiedad desciende un 57,4% en España, y un 32,7% en Galicia. A su vez, la tasa de crímenes contra la propiedad en 1858-1862 es sustancialmente más alta que en 1843, como hemos visto en el apartado 5.1; y en 1843, bastante más alta que en la década de 1880 y las siguientes. Debemos recordar, como ya hemos señalado en el apartado 2.4.3, que el periodo isabelino y 1883-1906 son equiparables en cuanto a la definición de delitos económicos.

⁸⁹⁸ Hay que tener en cuenta que en 1895 la tasa de delitos tiene un descenso significativo en relación a los años que lo rodean, y posiblemente se trate de una deficiencia en la estadística de ese año.

El pico al inicio de la década de 1860 se debe, en nuestra opinión, a que coincide con el final de un ciclo de crisis de subsistencias y desamortización en el conjunto del Estado español, que empujó a masas de población hacia el crimen de subsistencia, como hemos visto en el capítulo 5 si bien centrándonos en Galicia, que además coincide con la crisis de instituciones de beneficencia heredadas del Antiguo Régimen. Al tiempo, el paso a propiedad privada sobre antiguas propiedades comunales hacía delitos de hábitos antes aceptados.

En Galicia, como ya hemos señalado en el apartado correspondiente, no se modificó la estructura de bienes comunales. Si bien aumentó la delincuencia vinculada a la crisis agrícola y económica en los años 50, en 1859-1862, creemos, lo peor ya había pasado, y de cualquier manera la participación gallega en el delito pudo mantenerse bajo la media española incluso durante la crisis, viendo su comportamiento en el resto de épocas.

Por otra parte, la tasa de delitos contra la propiedad en el conjunto del Estado se mantiene aproximadamente entre los 50 y los 60 casos por 100.000 habitantes entre 1884 y 1906, exceptuando bruscas caídas en 1895 y 1902 que probablemente debamos atribuir a deficiencias en la recogida de los datos esos años. Parece haber un descenso entre la década de 1880 y la de 1890, incluso excluyendo 1895, que es un año anómalo. Entre 1900 y 1906 las cifras vuelven a aumentar ligeramente. Hay una nueva caída a partir de 1906⁸⁹⁹, coincidiendo con los cambios en la definición de hurto que ya hemos mencionado en el apartado 2.4.3. En 1910 en adelante la tasa se sitúa en torno a los 30 casos por 100.000 habitantes, sin que la Gran Guerra parezca producir efectos.

La observación de los datos lleva a dos conclusiones a nivel español. En primer lugar, la persecución de los delitos contra la propiedad fue haciéndose más laxa en términos legales, pero de manera muy lenta. La legislación relativamente comprensiva con el pequeño hurto que lo excluía de la categoría de delito solo estuvo vigente entre 1870 y 1876, y de nuevo a partir de 1906.

Por otra parte, la caída en los atentados contra la propiedad en el conjunto del Estado es muy significativa. La defensa legal de la propiedad era férrea a mediados del siglo XIX, fuese por una tradición que provenía del Antiguo Régimen o por una nueva concepción liberal de la pertenencia. Pese al incremento del personal judicial y policial que hemos visto en el capítulo 3⁹⁰⁰, en 1918 el Estado español persiguió un 30% de los delitos de 1859, en cifras absolutas, 6.338 contra 21.449. Si tenemos en cuenta la evolución de la población, la cifra es de una quinta parte. No se pueden comparar a la ligera dos estadísticas tan diferentes, pero la tasa en 1911-1918, de 24 delitos por 100.000 habitantes, es inferior a los 42 por 100.000 habitantes de 1838 (apartado 5.1), cuando la guerra dificultó la recopilación de datos y ni siquiera existía Código Penal; si bien, por otra parte, una porción del delito económico de la segunda década del siglo XX se juzgaba ahora como falta.

La tendencia es general a lo largo del periodo, si bien no tan acentuada como el descenso desde el periodo isabelino. En la Restauración, las tasas de delitos tendieron a descender en España en los periodos en los que hay uniformidad legal.

En Galicia la tasa de delitos es sustancialmente más baja que en el conjunto del Estado a lo largo del periodo. La tendencia a la convergencia que se aprecia en el caso de los delitos contra la persona, si

⁸⁹⁹ En el conjunto del Estado, se pasó de 12.273 delitos contra la propiedad en 1906 a 8492 en 1907.

⁹⁰⁰ No está claro hasta qué punto la cantidad de patrullas policiales influye en la cantidad de crimen reforzado. Sobre estudios, ya para el siglo XX, que señalan que no existe esa relación, EMSLEY, C. (1997), pp. 234-235. De cualquier manera, parece lógico que exista un nivel mínimo de inserción de la policía en una población que sí provoque un aumento del reporte del crimen, al dar una avenida nueva de resolución de problemas a los ciudadanos, aunque sucesivos aumentos de la dotación policial tengan retornos decrecientes.

bien también existe, no llega a acercarse a la paridad y no responde a un patrón claro. Al igual que en el conjunto de España, se produce un descenso en el periodo 1890-1899 en relación a los años anteriores, pero en el septenio 1900-1906 las tasas aumentan. En 1907 y siguientes las tasas bajan siguiendo el comportamiento general en España, aunque en menor medida.

Esta convergencia se produce sobre todo por el descenso de los delitos a nivel estatal. La tasa gallega, pese a su tendencia ligeramente descendente, permanece esencialmente estable en torno a los 20 delitos por 100.000 habitantes durante toda la Restauración.

En este caso, consideramos que la menor prevalencia de atentados contra la propiedad en Galicia sí que se corresponde con la estructura de la propiedad en la sociedad gallega, y la existencia de menores desigualdades relativas que en otras regiones impulsaban a capas de la población a un crimen de subsistencia. Para Gatrell, la caída del crimen contra la propiedad en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra está relacionada con un aumento del nivel de vida, lo que podría ser el caso para el conjunto de España⁹⁰¹.

Explicamos la menor prevalencia del delito contra la propiedad en base a tres factores relacionados entre sí: la relativa igualdad en la distribución de la renta, la existencia de medios alternativos de supervivencia alternativos a la posesión individual de propiedad y la proximidad e interdependencia económica y social entre potenciales víctimas y autores de delitos económicos, que formaban parte de la misma comunidad.

En Galicia la población rural no era uniforme económicamente, pero la propiedad no se concentraba en unos pocos grandes hacendados. Existían asalariados agrícolas y desposeídos, pero estos no constituían bloques de población alejados socialmente de sus vecinos. Contrasta con otras zonas como Castilla-La Mancha, donde, aún con diferencias regionales, existían “profundas desigualdades en la distribución de la tierra y la riqueza”⁹⁰².

Por otra parte, en la Galicia rural el monte pervivió hasta una época muy avanzada, pese a estar privado de respaldo legal durante todo el periodo. Pese a que, como indica Balboa López, en términos brutos los labradores más acomodados extraían más del monte que sus vecinos más humildes, para los débiles económicamente era un modo de supervivencia. En segundo lugar, los más pobres podían paliar su situación vendiendo su fuerza de trabajo o implorando la caridad de otros miembros de su comunidad. Mientras tanto, en Castilla La-Mancha, la desposesión de los comunales llevaba a los campesinos a incumplir la ley para sobrevivir y perpetuar su disfrute. Una cuarta parte de los hurtos en la Restauración en las provincias manchegas son de leña, y esto se suma a otras infracciones como el pastoreo ilegal o el furtivismo⁹⁰³.

Esto nos lleva a un tercer punto, el de los factores sociales y económicos relacionados con la comunidad, de los que derivan circunstancias que interactúan con nuestro índice de manera un tanto compleja. Creemos que esta vinculación existía, pero invocarla en términos generales no tiene fuerza explicativa. ¿Por qué la solidaridad interna no inhibía las agresiones, que, como hemos visto, eran más frecuentes que los delitos económicos, y se daban muchas veces en el seno de la comunidad, o en el de la familia? ¿No debería ser bastante más fuerte cuanto más atrás nos remontemos en el tiempo, y sin embargo nos encontramos con que los delitos contra la propiedad disminuyen con el tiempo? El concepto debe desarrollarse y concretarse. Como ya hemos señalado en el apartado 5.2.3, la solidaridad interna de la comunidad no era una fuerza centrífuga homogénea, sino un conjunto de interrelaciones que afectaban de manera diferente a diferentes

⁹⁰¹ Citado en EMSLEY, C. (1997), pp. 34, 36, 38-39, 40-41.

⁹⁰²⁹⁰² BASCULÁN AÑOVER, Ó. (2008), p. 23.

⁹⁰³ BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), pp. 49-61, 240-263.

tipos de conflicto y llevan a ciertas resoluciones, o repertorios de delictivos, con preferencia de otros.

Señalemos en primer lugar que no hay una gran diferenciación social entre poseedores y desposeídos: los campesinos propietarios tenían un notable peso numérico en las comunidades agrícolas, estaban fijados a sus propiedades y formaban parte de la misma comunidad que los campesinos jornaleros; la diferencia entre ambas categorías era fluida y cambiante según las fortunas particulares y familiares. La comunidad campesina gallega, relativamente indiferenciada⁹⁰⁴, estructurada casi siempre en torno a la parroquia y de la que formaban parte todos los vecinos, excepto algunos marginales, generaba una solidaridad interna entre sus componentes que podía inhibir el delito. Si observamos consideraciones sobre la moral de la clase trabajadora inglesa contemporánea en relación al delito, vemos que para ellos podía ser aceptable quedarse con algo del taller, pero no robarle a un vecino⁹⁰⁵.

Por otra parte, según ya hemos visto en el apartado 5.2, el espacio común de convivencia hacía que los posibles robos fuesen cuestiones directas y personales. Los jornaleros de los espacios de grandes propiedades entraban a robar en montes vacíos, a gentes que no conocían, y cuyas propiedades defendían guardias civiles y privados que empleaban la detención y la denuncia para castigar las infracciones. En cambio, en las aldeas gallegas los propietarios ejercían una labor de policía directa sobre sus propiedades.

Adicionalmente, los pobres de las parroquias estaban relacionados con sus posibles víctimas con vínculos que limitaban sus actividades delictivas. Lo más importante era que dependían de mantener la buena voluntad de sus vecinos para sobrevivir. Si tenía aunque fuese una mínima propiedad, le convenía cultivar una buena relación con el pedáneo y los que tuviesen buenas relaciones con el Ayuntamiento para que le echasen una mano cuando fuese necesario algún trámite, para que no lo perjudicasen en el reparto de Consumos o lo detuviesen en cuanto ocurriese algo sospechoso en la parroquia. Si no la tenía, dependía aún más de que sus vecinos quisiesen ayudarlo o darle trabajo. Necesitaban la confianza de los propietarios del pueblo para los llamasen para trabajar o hacer entreayudas, su buena voluntad para que les permitiesen espigar, su apoyo para repartir los lotes del monte comunal, su respaldo para pedir un préstamo o colocar a un hijo de criado.

A lo que hay que añadir que la comunidad era el marco de relaciones sociales de sus miembros. Incluso el más pobre no quería ser un paria social, no deseaba tener el estigma de ser un indeseable, un delincuente o un vago⁹⁰⁶. Quería que lo invitasen a las bodas y vinieran a velar su cadáver, sentarse con sus vecinos en las romerías y en las ferias, que alguien quisiese casarse con sus hijos, que lo invitasen a sentarse en la taberna los domingos y que no murmurasen a sus espaldas.

Hurtar o robar a los vecinos ponía en peligro todos estos vínculos, dado que la simpatía social estaba del lado de la propiedad. En la Galicia de mediados del siglo XX estudiada por Lisón Tolosana se condenaba al ladrón (con una cierta tolerancia si lo hurtado era una minucia), aunque se diese muy

⁹⁰⁴ En el sentido de que no había subgrupos que se considerasen comunidades aparte o enfrentadas a otros grupos dentro de la misma parroquia.

⁹⁰⁵ EMSLEY, C. (1997), p. 86.

⁹⁰⁶ Las sociedades tradicionales también tenían sus propios parias, los que no encajaban en los ritmos de la producción. Se pueden encontrar ejemplos en la literatura costumbrista gallega y española, pero también en otros lugares más exóticos. El escritor nigeriano Chinua Achebe escribía en 1958 sobre Unoka, agricultor anterior a la colonización, que era “un fracasado”: “la gente se reía de él porque era perezoso, y juraba que nunca le volvería a prestar dinero porque nunca lo devolvía”. ACHEBE, C. (2010), p. 8.

poco; en el oriente de Lugo se consideraba una de las peores acusaciones: “espetar en una riña a otro “eres un ladrón” es insulto mayor, próximo a mentar a la madre”⁹⁰⁷.

Existían algunos marginales que se dedicaban solo a la mendicidad o al crimen y a los que estas sanciones sociales resultaban indiferentes, pero eran pocos y su estilo de vida no era muy sostenible a largo plazo. Los mecanismos de control social y los repertorios de armas del débil entraban en juego en este espacio de convivencia común, y había un terreno de bordes imprecisos en los que se ocurrían ciertas acciones que podrían ser consideradas delito si el propietario no consentía, como el espigueo. En periodos de gran tensión por los recursos, como la crisis de supervivencia que ya hemos descrito, los márgenes de tolerancia y de respeto se contraían y se multiplicaban las denuncias. Pero en Galicia no encontramos crisis de supervivencia ni hambrunas en las décadas de 1860 en adelante.

Los episodios violentos derivados de enemistades, los conflictos de herencias y los choques vinculados a las disputas de propiedad en las que los contendientes defendían tener una reclamación legítima eran una cuestión particular entre los implicados. Al resto de los vecinos no les importaba demasiado, sobre todo si no pasaba de un nivel aceptable. Volviendo de nuevo a Emsley, entre las clases trabajadoras inglesas, más pacíficas que las españolas, era aceptable una pelea, no un asesinato⁹⁰⁸; además, se entendía que si alguien se metía con una persona violenta y acababa recibiendo algunos golpes, ya se sabía a lo que se exponía⁹⁰⁹. Esto se combina con una mayor tolerancia social y cultural sobre el recurso hacia la violencia, que veremos en el capítulo 11. Es cierto que en ocasiones había violencia en términos comunitarios, conflictos de la aldea con fuerzas externas u otras comunidades (capítulos 7 y 9) Pero la mayor parte de la violencia no debemos pensarla en términos comunitarios, puesto que no tiene esa dimensión.

Tabla 6.5.2 Delitos contra la propiedad en las diferentes provincias gallegas como media en los periodos expresados en tasa de crímenes anuales por 100.000 habitantes, relación porcentual con el periodo anterior y porcentaje en relación a la media gallega

A Coruña				Lugo		
	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega
1859-1862	80	-	113	53	-	74
1883-1890	29	-63,8	122	20	-62,3	90
1891-1900	23	-20,7	111	21	5	100
1901-1910	19	-17,4	90	19	-9,5	87
1911-1918	14	-26,3	68	21	10,5	102
Ourense				Pontevedra		
	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega

⁹⁰⁷ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), pp. 16, 57, 60-61.

⁹⁰⁸ EMSLEY, C. (1995), p. 86.

⁹⁰⁹ EMSLEY, C. (2007), p. 59.

1859-1862	90	-	126	62	-	87
1883-1890	21	-76,7	96	19	-69,4	83
1891-1900	18	-14,3	86	21	10,5	98
1901-1910	21	16,7	90	29	38,1	135
1911-1918	23	9,5	111	27	-6,9	132

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Al igual que ocurre en el conjunto del Estado, todas las provincias gallegas tienen enormes descensos en la tasa de crímenes contra la propiedad entre el periodo isabelino y la década de 1880, de los que ya hemos hablado. La tasa de delitos es especialmente alta en 1859-1862 en Ourense, un 26% de la media gallega; una investigación en detalle quizás podría determinar si tiene relación con la crisis de la industria vinícola.

Hasta 1900 A Coruña se sitúa por encima de la media de los delitos contra la propiedad. En el periodo isabelino, un 13%; en 1883-1890, un 22% (seguramente por el sesgo ya mencionado del cambio en el sistema judicial); en 1891-1900, un 11%. A partir de ahí, desciende. En la década de 1910, la provincia se encuentra un 10% por debajo de la media gallega, después de un descenso del 17,4% cuarta parte en la incidencia de delitos contra la propiedad, y en 1911-1918, un 32%. Esto último puede deberse a un dato anómalo en 1917, cuando las estadísticas solo muestran 25 delitos contra la propiedad en la provincia.

Lugo se sitúa un 26% por debajo de la media gallega en el periodo isabelino; sin embargo, en la Restauración la tasa se encuentra tan solo algunos puntos por debajo de la media, excepto en la de 1890 y en la de 1910, en las que coincide casi exactamente con ella. Ourense muestra un patrón similar, durante la Restauración, excepto en 1911-1918, pues, debido a un aumento de las tasas contra la propiedad, asciende al 115% de la media gallega.

Por último, Pontevedra, que se encontraba algo por debajo de la media gallega a lo largo del XIX, sufre un gran aumento de la tasa en el siglo XX. En la década de 1900 supera en un 38% la media gallega, y en la siguiente, un 32%. La diferente distribución del delito contra la propiedad al final de la Restauración parece apuntar a una mayor incidencia criminal en Pontevedra que agradecería un estudio comparativo en un futuro.

Pasemos al estudio en detalle. Entre los cincuenta primeros delitos de naturaleza económica vistos por la Audiencia Provincial en 1900 están representados doce de los catorce partidos judiciales de la provincia, y las ausencias, Arzúa y Ordes, se corresponden con partidos interiores y rurales. Destaca Santiago, con un 34% de los casos, muy por encima de lo que le correspondería por población, y A Coruña, con el 16%. Sería preciso hacer una toma más amplia de datos para saber si la tendencia de Santiago es solo una anomalía de la muestra, pero parece haber una concentración que apunta a que este delito se daba o al menos perseguía más, en términos relativos, en las ciudades, en comparación con el violento.

Tabla 6.5.3 Distribución por partidos de los 50 primeros delitos contra la propiedad en las sentencias de la Audiencia coruñesa en el año 1900

Partidos judiciales	Casos	Porcentaje
Santiago	17	34
A Coruña	8	16
Betanzos	4	8
Ferrol	4	8
Noia	4	8
Ortigueira	3	6
Corcubión	2	4
Pontedeume	2	4
Carballo	2	4
Padrón	2	4
Muros	1	2
Negreira	1	2
Total	50	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

Su distribución socioeconómica es diferente a la de los delitos violentos, debido a la mayor presencia de mujeres y casos procedentes de las ciudades. De un total de 68 procesados, el 79,4% son hombres y el 20,6% mujeres; la primacía varonil sigue siendo relevante, aunque, como es consistente con otras observaciones, menos acentuada que en el caso de los delitos contra la persona. Hay algunos cambios en la estructura demográfica. Aunque la edad media de los procesados solo es ligeramente inferior al de los delitos contra la persona (27,35 años), hay muchos muy jóvenes: casi el 39% de los procesados son menores de 20 años. El porcentaje se reduce en el caso de los condenados, en parte porque algunos de los encausados fueron exentos de la responsabilidad criminal, aunque la edad media baja a los 26 años, puesto que también hubo menos condenas en los tramos de mayor edad, a partir de los 39 años. De los 67 procesados en los que sabemos si tenían antecedentes, 63, esto es, el 94%, carecían de historial delictivo. Del resto, una mujer los tenía por lesiones y otros tres por hurto.

Tabla 6.5.4 Edades de los procesados y condenados por delitos contra la propiedad en 1900

Edades de los procesados	Casos	Porcentaje	Edades de los condenados	Casos	Porcentaje
Menor de 20	26	38,8	Menor de 20	19	28,4
20 a 29	18	26,9	20 a 29	13	19,4
30 a 39	10	14,9	30 a 39	9	13,4
40 a 49	8	11,9	40 a 49	5	7,5
50 a 59	2	3	50 a 59	1	1,5
60 o más	3	4,5	60 o más	1	1,5
Total	67	100	Total	48	71,7

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

También hay diferencias en cuanto a las profesiones. Aunque los oficios más presentes siguen siendo labradores y jornaleros, los primeros se encuentran en mucha menor proporción que en los delitos contra la persona y la relación entre ambos ha cambiado: un 16,4% de labradores y un 20,9% de jornaleros. Con las mismas reservas sobre los términos que ya expresamos en el apartado 5.2, creemos que esto indica una situación económica más frágil entre los que cometen este tipo de delitos. Su participación es mucho menor que en otros ámbitos (en Tierra de Campos suponían casi la mitad de procesados por hurtos y robos sin violencia⁹¹⁰). El tercer grupo en importancia es el de los pordioseros o sin oficio, un 9%, seguidos por los sastres y carpinteros, con un 6% cada uno. El resto de la muestra se compone de diversos oficios, casi siempre manuales o de servicios, junto con tres estudiantes universitarios, dos guardias municipales y alguna ama de casa. Nos parece relevante destacar la presencia de una minoría de sirvientes, el 4,5%, que no estaban presentes en los delitos contra la persona.

En cuanto a los universitarios, no fue una sorpresa encontrarlos en el apartado de delitos contra la persona (su participación en formas de violencia menor puede verse en el apartado 11.5), pero su presencia es más llamativa en los delitos contra la propiedad. Su número relativamente alto probablemente está ligado a la gran cantidad de casos procedentes del partido de Santiago que hemos analizado. Parece que algunos de ellos recurrían al hurto o a la estafa para complementar las asignaciones familiares. Ese fue el caso de Luis Fernández, un universitario vallisoletano que fue a un establecimiento compostelano y seleccionó una buena cantidad de prendas de ropa⁹¹¹ y luego le pidió a un dependiente que le acompañara con las prendas a una posada en la que se hospedaba para que las pagase su madre. Una vez allí le dijo que no estaba, que le dejase la ropa y que volviese al cabo de dos horas. Aprovechó el plazo para esfumarse, y cuando en la tienda preguntaron por sus señas, y en la posada no lo conocían ni a su madre ni a él. Desafortunadamente para Fernández, había disimulado mal que se dirigiría a Vilagarcía⁹¹², y allí fue detenido en una casa de lenocinio con las ropas, parte de las cuales llevaba puestas. Le correspondieron dos meses y un día de arresto⁹¹³.

Tabla 6.5.5 Oficios de los procesados por delitos contra la propiedad en 1900

Oficio	Casos	Porcentaje
Jornalero	14	20,9
Labrador	11	16,4
Pordiosero o sin oficio	6	9
Sastre	4	6
Carpintero	4	6
Marinero	3	4,5
Cantero	3	4,5
Sirviente	3	4,5
Estudiante	3	4,5
Panadero	3	4,5
Traficante	2	3
Guardia Municipal	2	3
comerciante	1	1,5
Escribiente	1	1,5

⁹¹⁰ REDONDO CARDEÑOSO, J. A. (2011), p. 150.

⁹¹¹ Seis pares de calcetines, seis calzoncillos, seis camisas y dos camisetas.

⁹¹² Con el dependiente delante, unos amigos le preguntaron si iría a Vilagarcía y él les dijo que no.

⁹¹³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 6, folios 13-15.

Mozo de cordel	1	1,5
Cochero	1	1,5
Impresor	1	1,5
Labores domésticas	1	1,5
Costurera	1	1,5
Zapatero	1	1,5
Tabaquero	1	1,5
Total	67	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

No hay datos por esta parte de que el delito económico lo practicase una minoría enquistada en el crimen, sí hay un cierto perfil de delincuente habitual, que, además, practica crímenes en los que probablemente hay una intención de hurtar previa al acto; por oposición a otros casos en los que, como veremos, el delincuente actúa ante una oportunidad imprevista, como encontrarse una pieza de ropa a secar en un zarzal. Así, por ejemplo, tenemos el caso de los jóvenes de 15 años y sin oficio Jesús Franco y Antonio Cerdido (el primero ya con antecedentes múltiples por hurto) que antes de ser atrapados realizaron seis sustracciones en A Coruña de objetos diversos: un mantón; un sifón de vidrio; un reloj y dos rosarios; dos pares de botas; cinco tocas de estambre; doce boinas y dos zapatos. Revendieron buena parte al por menor⁹¹⁴.

Pero la fama de ladrón podía jugar malas pasadas. Domingo Cotelo, un panadero del partido de Carballo con antecedentes por hurto, se llevó una yegua que pastaba en el monte en septiembre de 1899. Paró en la casa de un tal Antonio Santa, este y otro convecino "trataron de enterarse de la procedencia de la yegua, por presumir que había sido hurtada". Cotelo pretextó que iba a tomar agua en la cocina y se fugó por una puerta trasera. No debió llegar muy lejos, ya que en mayo del año siguiente fue condenado a cinco meses con el agravante de reincidencia⁹¹⁵.

Según el tipo de crimen, la hegemonía pertenece al hurto, que suma el 78% de sus casos; en algo más del 10% hay un hecho violento relacionado con el delito contra la propiedad, pero, como veremos, en circunstancias diferentes a las que permitirían calificarlo como robo. La estafa supone el 18% de los casos, y hay un caso de cada en cuanto a robo y daños, el 2% para cada uno. La mayoría de los robos, y los casos de incendio, se veían a través del Tribunal del Jurado.

Tabla 6.5.6 Delitos contra la propiedad en la muestra del año 1900

Delitos	Casos	Porcentaje
Hurto	35	70
Hurto y violencia o amenazas	4	8
Subtotal de hurto	39	78
Estafa	9	18
Robo	1	2
Daños	1	2
Total	50	100

⁹¹⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 190, folios 528-532.*

⁹¹⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 175, folios 485-487.*

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

El robo es una sustracción de herramientas de una obra en la que se empleó una escalera, y, por tanto, hubo escalamiento, pero no hay casos con fuerza o violencia. Dos de los procesos en los que hay violencia ligada al hurto acabaron en absolción. En los otros dos, el ataque o la amenaza no se produjeron durante el propio acto del crimen, y escapan de las mayores penas que supondría una condena por robo. Así, por ejemplo, tenemos el caso de José Seoane, un joven de 17 años que sustrajo el pañuelo que una tal María Braña había puesto a secar en un zarzal. Cuando se lo reclamó, lo destrozó con una navaja y la amenazó con esta. Fue condenado a una multa de 125 pesetas por el hurto (con la atenuante de no llegar a los 18 años) y a tres días de arresto por las amenazas⁹¹⁶.

El último caso resulta interesante porque ayuda a entender las fronteras de lo que constituía o no hurto. Ezequiel Juega, alias *Besugo*, un “comerciante” de quince años, y su madre, tenían “rotas las buenas relaciones” con los hermanos García Osorio, Francisco y Ramón. Les sustrajo algunos efectos, según la Sala, “con el único propósito de molestar”, entre ellos unas muletas que usaba Francisco, que era impedido. Ramón fue a reclamárselas a su casa y profirió “frases injuriosas y provocativas” contra el ladrón y su madre, tras lo que Ezequiel salió de la vivienda y tuvieron un enfrentamiento: el *Besugo* le disparó a su oponente tres tiros de revólver que no hicieron blanco (no sabemos a quién pertenecía el arma) mientras este le respondía a pedradas. El tribunal lo absolvió del delito de hurto; no había habido afán de lucro. Sí lo condenó por los disparos, si bien con dos atenuantes: su escasa edad y la “vindicación próxima de una ofensa grave” por los insultos⁹¹⁷.

De las nueve estafas, dos son casos en los que no se probó que hubiese oportunidad de engañar y que acaban en absolción. Las siete que acaban en condena son por cantidades moderadas: tres de ellas se realizaron por cantidades entre la 1 y las 10 pesetas, el mismo número entre las 10 y las 20, y la más alta es la ya mencionada de Luis Fernández, que se quedó con ropa valorada en 86 pesetas (y le causó destrozos por valor de 16).

Esta muestra no nos asoma al pintoresco y original mundo de los estafadores creativos y profesionales, los “caballeros de industria” que celebraba la prensa y que veremos en el apartado 13.3. Entre los procesados no hay nadie con antecedentes penales y los delitos son más bien torpes. Uno es un simple caso de viaje en tren sin billete⁹¹⁸. Tres individuos, dos hombres y una mujer, se llevaron ropa de fiado y no la pagaron. Un jornalero ferrolano consiguió sacarle 7,15 pesetas a la esposa de don Ricardo Criado, de Narón, esgrimiendo una orden de pago al portador que este no había expedido. Los hermanos Luis y José Beltrán, mozo de cordel y cochero respectivamente, se quedaron con una caja que un hombre les había encargado llevar a la estación de ferrocarril de Santiago.

El caso más llamativo es el del escribiente Segundo Rey, que, tras ser oficial en el registro de la propiedad de Corcubión, se llevó a su casa documentos para conseguir en beneficio propio pequeñas cantidades; por ejemplo, a Juan Suárez le digo que no encontraba la partición de la herencia de sus padres, “y al ofrecerle cinco pesetas, lo sacó del bolsillo y se lo entregó”. Logró sacarles trece pesetas a tres personas⁹¹⁹.

⁹¹⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 3, folios 5-7.

⁹¹⁷ Atenuante que, recordemos, no apareció en ninguna ocasión en el medio centenar de fallos en delitos contra la persona que analizamos en las páginas anteriores. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 38, folios 107-110.

⁹¹⁸ Que costó dos meses y un día de arresto al polizón. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 174, folios 483-484.

⁹¹⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 49, folios

Tabla 6.5.7 Tipo de robo o hurto en casos acabados en condena

Material sustraído	Casos	Porcentaje
Alimentos o frutos	4	13,8
Ropa o calzado	7	24,1
Animales	3	10,3
Dinero en metálico	4	13,8
Relojes	2	6,9
Madera o leña	3	10,3
Otros	6	20,7
Total	29	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

En los casos de robo o hurto, descontando los que acabaron en absoluciones o circunstancias eximentes, la circunstancia más habitual es el robo de ropa (24,1%). En su mayoría, se trata de sustracciones de prendas que estaban a secar en fincas o zarzales y de las que se apropió un viandante. Un ejemplo es el crimen cometido por Teresa Ameneira, una ama de casa de “mala conducta”, aunque sin antecedentes penales, que se llevó varias prendas que había dejado olvidadas en un campo una lavandera. Aunque oyó preguntar a esta por ellas, las llevó a empeñar en parte en un monte de piedad de Santiago, donde la detuvo un guardia municipal⁹²⁰.

Le siguen en importancia la sustracción de alimentos o frutos y de dinero en metálico, con un 13,8% en cada uno de ellos. Los alimentos son, en dos casos, sustracciones de pequeñas cantidades de frutos de una finca: un par de jóvenes sastres que se llevaron algunos limones, tasados en 10 céntimos⁹²¹, una jornalera que entró en una huerta ajena y arrancó “unas cuantas cebollas”, por valor de un quinto de peseta, antes de que un pariente del dueño le obligase a dejarlas⁹²². Se saldan con multas, aún así un par de órdenes de magnitud superiores al valor de lo robado⁹²³. Las sustracciones más graves se producen en comercios o almacenes: el Labrador Andrés Martínez, ladrón reincidente, se llevó un to de cerdo de una taberna de Conxo⁹²⁴, y Francisco Antelo, de la misma profesión, sustrajo 23 ferrados de maíz y 13 cestos de patatas valorados en 90 pesetas de un hórreo⁹²⁵. No encontramos en esta época un patrón de crímenes de supervivencia como el que apreciamos durante la crisis de subsistencias de la década de 1850.

Tres de los robos de dinero se produjeron por el probado método de meterle la mano en el bolsillo a un incauto, y el cuarto, por la sustracción de una maleta en un coche de Ortigueira a Ferrol. Son los más provechosos: un adolescente que le vació los bolsillos a un compañero de cárcel en Ortigueira solo se llevó 40 céntimos⁹²⁶, pero Juan Mosquera sustrajo 193 pesetas en una feria de Santiago⁹²⁷, y en la maleta, que se llevó el Labrador Andrés Blanco, iban 865 pesetas⁹²⁸. Sin embargo, todo indica que este último golpe no fue planificado: Blanco estaba borracho cuando cometió el acto. En

⁹²⁰ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 78, folios 216-218.*

⁹²¹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 7, folios 16-18.*

⁹²² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 21, folios 56-58.*

⁹²³ En los casos expuestos, de 125 pesetas.

⁹²⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 2, folios 3-4.*

⁹²⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 176, folios 488-490.*

⁹²⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 39, folios 111-112.*

⁹²⁷ Aunque al poco lo atraparon guardias municipales y viandantes. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 74, folios 206-207.*

⁹²⁸ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 26, folios 74-76.*

cambio, los dos hurtos íntegramente de relojes se produjeron por parte de empleados hacia sus amos, y no fueron tan provechosos⁹²⁹.

El hurto o robo de dinero tenía la ventaja de que el delincuente obtenía el valor íntegro de lo sustraído y era difícil de trazar. De los objetos, en cambio, había que deshacerse. Sebastián Maizoso robó herramientas de carpintería por valor de veinte pesetas y las colocó por seis. Joaquín Aller y Eduardo Neira, estudiantes universitarios, sustrajeron dos libros de química industrial valorados en 30 pesetas cada uno y los colocaron respectivamente por 10 y 6,5⁹³⁰. De los seis hurtos, sobre todo de ropas, realizados por los adolescentes Jesús Franco y Antonio Cerdido, valorados en 42,75 pesetas, los dos jóvenes se lucraron aproximadamente con 25,25, tras revender el material al por menor. Pero, para evaluar las condenas, se tenía en cuenta en valor pericial.

Las sustracciones de animales, excepto en el caso que ya hemos comentado, son de escaso valor (un carnero que valía un duro y una gallina tasada en 1,25 pesetas). Las sustracciones de leña no encajan con el perfil de protesta. En uno de los casos de sustracción de leña, el procesado alegó que la finca le pertenecía, por lo que puede ser una disputa por la propiedad⁹³¹; en otro, un par de jóvenes panaderos compostelanos se llevaron un pie de boj para venderlo a un siller⁹³². El último, del partido de Pontedeume, se corresponde una labradora de 18 años y su hermano de 16, de la misma profesión, que se llevaron piñas y leña de una finca ajena⁹³³; no sabemos si revestía carácter de crimen de subsistencia.

Por último, se encuentran una serie de hurtos de diferentes materias, en general de escaso valor y para su reventa: trozos de hierro y plomo, dos libros, herramientas de carpintería, siete libras de sebo, un quinqué, cuatro plantas de naranjo para plantar en la finca propia. Excepto los libros, ninguna llegaba a las diez pesetas.

Tabla 6.5.8 Casos de robos o hurtos que acabaron en condena según el valor de lo sustraído

Valor de los hurtos o robos en los casos en los que hubo condena	Casos	Porcentaje
1 peseta o menos	6	20,7
Más de una peseta, hasta 10	11	37,9
Más de 10 pesetas, hasta 100	10	34,5
Más de 100 pesetas	2	6,9
Total	29	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

De hecho, el valor de la mayor parte de las sustracciones es muy escaso. El 58,6% no superan las diez pesetas, el tope que establecía el Código Penal para dar la pena mínima (arresto mayor en los grados mínimo o medio), y el 34,5% están entre la decena y el centenar de pesetas (una cifra que

⁹²⁹ Las máquinas estaban tasadas en diez y quince pesetas.

⁹³⁰ Aunque es cierto que estaban borrachos cuando cometieron los hurtos y quizás su capacidad de negociación se vio mermada.

⁹³¹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 52, folios 144-145.*

⁹³² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 56, folios 153-155.*

⁹³³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 150, folios 412-414.*

conllevaba el arresto mayor en su grado máximo). Solo el 6,9% (dos robos de dinero ya mencionados) superan la segunda cifra.

De las 68 personas procesadas, el 70,6% fueron condenadas (casi todas por el delito que se juzgaba, y, en un caso, por encubrimiento), un porcentaje superior al de los delitos contra la persona, y el 20,6% fueron absueltos. Al contrario que en los crímenes contra la persona, los atentados contra la propiedad se consideraban faltas en casos muy específicos, por lo que la Sala no los desvía a los juzgados municipales excepto si los hechos acaban encajando en otro tipo delictivo.

Algunas de las absoluciones se deben a que no se consideró probado que el participante hubiese cometido el delito. Pero la mayoría se producen porque, habiendo realizado el hecho, no se estima que concurren las circunstancias para considerarlo un crimen, sino que el implicado actuó sin mala fe: sin ánimo de lucro en el caso de los hurtos, o de engaño en las estafas. Así ocurre con un cantero que se llevó el pico de otro "acaso por equivocación", una mujer que se llevó a casa un impermeable que creía abandonado y cuando se lo requirieron "no opuso aquella la menor resistencia a que entrasen, y entregó inmediatamente las prendas", etcétera. En el caso de Cándido Vilas, que soltó tres cabalgaduras atadas a la puerta de una taberna, se puso a galopar sobre uno de ellas "sin que se haya puntualizado tuviera otro objeto que el de correr en ella montado", y por el camino hirió a un hombre de una pedrada, el tribunal no consideró que hubiese cometido delito alguno con sus actos, aunque los derivó al juez municipal correspondiente por si fuesen falta⁹³⁴.

Tres jóvenes se libraron de la condena gracias a su escasa edad: tenían entre 13 y 14 años y habían entrado a robar peladillas en la huerta de las Trinitarias de Noia; el tribunal les aplicó los eximió de responsabilidad criminal por haber actuado "sin discernimiento" en atención a su edad⁹³⁵. Otro de la pandilla, seguramente también un chaval de esa edad, fue declarado en rebeldía. La casuística se completa con una mujer fallecida antes de que pudiera celebrarse el juicio y un procesado, cuyo caso ya hemos visto que fue absuelto del crimen que se le imputaba por hurto, pero condenado por disparo de arma de fuego.

Tabla 6.5.9 Destino de los procesados en las causas contra la propiedad de 1900

Destino del procesado	Casos	Porcentaje
Absuelto	14	20,6
Condenado	48	70,6
Exento de responsabilidad criminal	3	4,4
Condena parcial	1	1,5
En rebeldía	1	1,5
Fallecido antes del juicio	1	1,5
Total	68	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

Las penas se determinan en base al valor de lo sustraído y al tipo de delito, pero la más frecuente es de dos meses y un día de arresto mayor (a cumplir, por tanto, en la cárcel del partido correspondiente), que se corresponde con un delito de hurto por valor de diez pesetas o menos, sin circunstancias modificativas ni antecedentes. Un cierto número consiguen librarse con penas de multa (la estándar era de 125 pesetas), bien por la atenuante de la edad o en casos de hurtos

⁹³⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 118, folios 323-325.

⁹³⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 110, folios 300-302.

frustrados, encubrimiento o porque el crimen finalmente se calificó como daños⁹³⁶. Merece la pena detenerse en algunas apreciaciones con respecto a las condenas. En primer lugar, el arresto mayor se aplicaba a todos los delitos consumados de hurto, incluso, teóricamente a los condenados por robar un céntimo; Manuel Martínez sufrió dos meses y un día de prisión por sustraer 40 céntimos⁹³⁷, José María Sieira la misma pena por sustraer madera por valor de diez⁹³⁸, sin que en ninguno de los dos casos hubiese circunstancias modificativas.

En segundo lugar, como hemos mencionado en un apartado anterior, los delitos contra la propiedad estaban comparativamente más castigados que los que se realizaban contra la persona en comparación con la legislación actual. La misma condena de dos meses y un día, sin atenuantes o agravantes la recibió el herrero Plácido Costa tras herir con una navaja en la cara y la mano derecha a otro hombre, "sin motivo bastante para ello" según el tribunal, dejándolo inútil para el trabajo durante diez días⁹³⁹. Lo mismo para Valentín Otero, que se encontró con Joaquín Piñeiro mientras este regresaba para casa y "recordando sin duda una cuestión que habían tenido anteriormente", lo acuchilló en el hombro izquierdo que lo dejó 19 días sin poder realizar sus quehaceres⁹⁴⁰.

En el 73,9% de los condenados por delitos contra la propiedad no se apreció ningún atenuante, si bien el 19,6% recibieron una rebaja de la pena debido a su edad. Otras circunstancias atenuantes eran más difíciles de englobar en delitos contra la propiedad, si bien el 6,5% de los condenados pudo rebajar la pena por haber cometido el acto en estado de embriaguez no habitual.

En la España actual, un porcentaje minoritario pero significativo de los crímenes contra la propiedad se cometen para financiar una adicción⁹⁴¹, un fenómeno denominado "delito funcional"⁹⁴². Aunque en la Restauración empiezan a difundirse por España nuevas drogas, cuyo consumo puede llevar al delito⁹⁴³, en el siglo XIX la droga por excelencia es el alcohol. Su consumo era abundante en la Galicia de finales del Novecientos, aunque no todos los obreros se lo pudiesen permitir⁹⁴⁴. El discurso antialcohólico que dio algunos tímidos pasos en España en la década de 1890 no caló en las clases populares⁹⁴⁵. En nuestro periodo de estudio, el ocio de una parte de los hombres de las clases trabajadoras pasar por beber de manera paroxística los sábados y domingos.

Múltiples médicos, criminólogos y moralistas europeos del siglo XIX relacionaron el ambiente de la taberna y el consumo de alcohol con el crimen; en parte hacían referencia a la degeneración moral de los alcohólicos crónicos, o a cómo acostumbrarse al juego y la bebida empujaba a los obreros al crimen. Pero la mayor parte de los autores hacen referencia a las reyertas, riñas y homicidios cometidos bajo sus efectos, y no a delitos contra el patrimonio realizados para poder consumirlo⁹⁴⁶.

⁹³⁶ Casos de estas tres posibilidades se pueden ver en *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, casos 7, folios 16-18; 21, folios 56-58; 62 (el caso de los daños) folios 172-174; 69 (la encubridora), folios 192-194; 90, folios 246-248.

⁹³⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 39, folios 111-112.

⁹³⁸ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 52, folios 144-145.

⁹³⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 43, folios 119-121.

⁹⁴⁰ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 58, folios 159-160.

⁹⁴¹ DIEZ RIPOLLES, J. L., MUÑOZ SÁNCHEZ, J., GARRIDO DE LOS SANTOS, M. J. (2002), p. 21.

⁹⁴² DIEZ RIPOLLES, J. L., MUÑOZ SÁNCHEZ, J., GARRIDO DE LOS SANTOS, M. J. (2002), p. 15-16.

⁹⁴³ En particular, la morfina. LLORENS Y GALLARD, I. (1894), p. 147. Sobre la introducción de las drogas de laboratorio, ESCOHOTADO, A. (2008).

⁹⁴⁴ PERNAS, H. (2001), p. 86.

⁹⁴⁵ CAMPOS MARÍN, R. (1997), pp. 137, 139.

⁹⁴⁶ CAMPOS MARÍN, R. (1997), pp. 43-44, 79, 118, 126, 149-156, 169, 174, 206, 211.

A nuestro parecer, esta distribución refleja la realidad. Según hemos estudiado en un trabajo sobre la delincuencia en A Coruña y Santiago en la década de 1880⁹⁴⁷, si bien hay algunos casos de individuos que se apropian de herramientas, ropas e incluso una puerta para venderlas y poder comprar alcohol, estos son casos muy minoritarios y, curiosamente, se limitan a mujeres y a niñas⁹⁴⁸. Los hombres, principales actores del delito, hieren y matan cuando están embriagados, pero no parecen robar para beber.

Creemos que la explicación es en parte cultural. Se comprendía que alguien embriagado se comportase violentamente, pero robar para comprar alcohol era difícilmente disculpable. Aunque existía una cierta comprensión hacia el hurto nacido de la necesidad, esta no se extendía a la vagancia y el vicio, y el alcohólico crónico no suscitaba simpatías entre las clases ilustradas⁹⁴⁹. El Código Penal reducía la pena a los delitos que se consumiesen bajo los efectos del alcohol, pero no para financiar su compra. La embriaguez, de hecho, no se consideraba atenuante cuando “habitual”, aún cuando el criterio fuese laxo o arbitrario⁹⁵⁰.

Pero lo más probable es que la bebida fuese, al contrario que la adicción a las drogas ilegales de la actualidad, un hábito barato dentro de la pobreza generalizada. Podían conseguirse vinos muy económicos, si bien de pureza discutible⁹⁵¹, y el consumo no conllevaba automáticamente la marginación social o la pérdida de empleo. Los alcohólicos podían mantener su dependencia con un trabajo mal remunerado, o, en último término, pidiendo limosna, sin arriesgarse al crimen.

Al igual que en el Código Penal de 1850, que hemos visto en práctica en el apartado 5.2, en el Código Penal de 1870 no había un atenuante en base al estado de necesidad, pero sí una forma indirecta de aplicarlo. El último punto del artículo noveno, que regulaba las circunstancias atenuantes, permitía rebajar la pena por “cualquiera otra circunstancia de igual entidad o análoga a las anteriores”, una de las cuales era un estado de arrebato u obcecación. Esto daba pie a disminuir la condena a aquellos que actuaran ante una miseria tal que la oportunidad de conseguir bienes de manera ilegal los obcecara. Nunca lo encontramos invocado en las causas vistas ante la Sala de lo Criminal, pero sí en los casos ante jurado. Así, este mecanismo sirvió para rebajar la condena de Francisco Díaz, un jornalero de 64 años que, según el jurado, cuando robó en una casa “obró impulsado por la necesidad en que se encontraba y esto le estimuló por natural estado de su ánimo”. Probablemente jugaron a su favor otras circunstancias favorables a ese relato: había entrado en la casa empleando una llave que se hallaba “oculta en un agujero en la pared”, devolvió la mayor parte del dinero, no se demostró que llevase armas durante el hecho y realizó daños mínimos en la vivienda⁹⁵².

Según el artículo 533 del Código Penal de 1870, aumentaba la pena al haber sustraído objetos de culto (no hay ningún caso), si el criminal fuese dos o más veces reincidente (como ya hemos visto), y si fuese “doméstico” o mediase abuso de confianza. La mayor pena para los criados, junto con la nocturnidad (que se ve en este caso por única vez) elevó la pena de Manuel García hasta los seis meses tras sustraerle a su amo un reloj de 15 pesetas, pese a no tener más de 16 años⁹⁵³. La definición de “doméstico” era laxa. Se le aplicó a José Sande, condenado por llevarse un reloj de diez pesetas de su amo que poseía su empleador, aunque este solo lo había contratado para un día y

⁹⁴⁷ CARBALLO GENDE, E. (2018), pp. 51-52.

⁹⁴⁸ *La Voz de Galicia*, 26-01-1884, 07-05-1882, 10-06-1883, 05-08-1883.

⁹⁴⁹ CAMPOS MARÍN, R. (1997), 15-17, 28, 34-36, 38, 81-88.

⁹⁵⁰ Código Penal de 1850, art. 9.6 Código Penal de 1870, art. 9.6.

⁹⁵¹ *La Voz de Galicia*, 20-09-1882. Un comerciante publicita en el periódico, para su venta, una partida de “vino auténticamente puro”. *La Gaceta de Galicia*, 12-01-1885.

⁹⁵² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 4, folios 1368-1371.

⁹⁵³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 48, folios 134-135.

para mover leña. El crimen le costó un año y un día de prisión⁹⁵⁴. De las circunstancias agravantes como tales, fuera del caso de nocturnidad ya mencionado, solo encontramos el abuso de confianza, por el que se sentenció a dos vagabundos lucenses que se aprovecharon de su relación con el hijo del posadero que los hospedaba para hurtarle ropas⁹⁵⁵.

Queda fuera de la muestra de cincuenta casos que hemos estudiado, pero querríamos incluir en el trabajo el único proceso que encontramos por alteración de lindes, un acto que veremos en el apartado 7.7 como desencadenante del crimen violento. La alteración de lindes, englobada dentro de la usurpación y dentro del artículo 535, constituía un delito contra la propiedad, si bien curiosamente solo estaba penada con multa, que además se fijaba en la mitad de la utilidad que se le achacase al delincuente por el hecho. Resultaba, así, menos castigada que el hurto de bienes inmuebles.

En nuestro caso, se dirigió en el juzgado de instrucción de Noia contra Manuel Lorenzo, un jornalero de 47 años acusado de mover los límites de una finca dedicada a pasto de un propietario particular. Se le pedía multa de cien pesetas (por lo que suponemos que el peritaje determinó que la tierra usurpada valía doscientas), otro tanto por perjuicios y las costas. Fue absuelto por la retirada de la acusación del Ministerio Fiscal.

Los datos de Pontedeume muestran que se abrieron causas en ese partido por un número de delitos contra la propiedad inferior a los cometidos contra la persona, pero no por mucho: 231 frente a 297⁹⁵⁶. Predomina el hurto⁹⁵⁷, que supone más de un tercio de los casos con 82 procesos, pero el robo lo sigue mucho más de cerca que en las estadísticas judiciales de sentencias, con 53 casos, que suponen el 22,9%. Es posible que se trate de un error del escribano, que clasifique como “robo”, siguiendo la terminología popular, casos de hurto, aunque parece extraño en un escribiente de juzgado. También están mucho más presentes que en la muestra de sentencias los casos de daños y de incendios.

Tabla 6.5.10 Causas por delitos contra la propiedad vistos en el juzgado de Pontedeume entre 1906 y 1916

Delito	Casos	Porcentaje
Hurto o sustracción	82	35,5
Robo	53	22,9
Estafa	13	5,6
Daños	40	17,3
Incendio	38	16,5
Usurpación o movimiento de lindes	5	2,2
Total	231	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume

⁹⁵⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 137, folios 377-379.*

⁹⁵⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 154, folios 423-424.*

⁹⁵⁶ *Matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1907-1912, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155, Libro de matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1912-1916, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155.*

⁹⁵⁷ Hemos calificado los casos de sustracciones como hurtos.

Pero ocurre que, con la excepción de la usurpación, que es un delito muy infrecuente (un caso cada dos años), la mayor parte de los delitos contra la propiedad no llegan a tener sentencia, y eso afecta más al robo. Un 79,2% de los casos acabó en sobreseimiento, con lo que, descontando los casos de procesados rebeldes y las causas inconclusas, tenemos constancia de que hubo sentencia en el 9,4% de los casos. Un porcentaje similar al número de hurtos o sustracciones con resolución, del 9,8%, si bien aquí casi una quinta parte de las causas figura en los libros de matrícula criminal como inconclusas, con lo que la cantidad de sentencias podría ser sustancialmente mayor, y un 15,9% fue considerada falta y probablemente en el 1900 hubieran sido juzgados como delitos; recordemos que, a partir del 3 de enero de 1907, esta categoría se reintrodujo para los hurtos menores, algo que probablemente hiciese que delitos de escasa entidad no llegasen a los libros de matrícula criminal que hemos estudiado. En las estafas hay un porcentaje de resolución mayor, del 15,4%, pero aún así cerca del 70% acaban en sobreseimiento.

Tabla 6.5.11 Causas por delitos contra la propiedad vistos en el juzgado de Pontedeume entre 1906 y 1916 según su resolución

Delito	Porcentaje que fue sobreseído	Porcentaje que acabó en sentencia	Porcentaje que pasó a juicio de faltas	Porcentaje que no fue concluido	Porcentaje que acabó en rebeldía	Otros
Hurto	48,8	9,8	15,9	19,5	4,9	1,1
Robo	79,2	9,4	0	7,5	3,8	0
Estafa	69,2	15,4	7,7	0	7,7	0
Daños	42,5	0	52,5	5	0	0
Incendio	94,7	2,6	0	2,6	0	0
Usurpación o movimiento de lindes	20	40	20	20	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume

La tabla deja claro por qué en los libros de sentencias vemos tan pocos daños de naturaleza destructiva contra la propiedad. En los daños, el 42,5% de de las causas se sobresean, y algo más de la mitad se derivan a juicios de faltas por su pequeña entidad. Los incendios, en casi 19 de cada 20 casos, acaban en sobreseimiento: con total seguridad, se trata de destrucciones realizadas de noche, premeditadamente y con precauciones, en las que el fuego se detecta al día siguiente o cuando ha adquirido dimensiones importantes y el responsable ya se ha escabullido (o aprovecha para hacerlo que la atención de los afectados está en apagar las llamas).

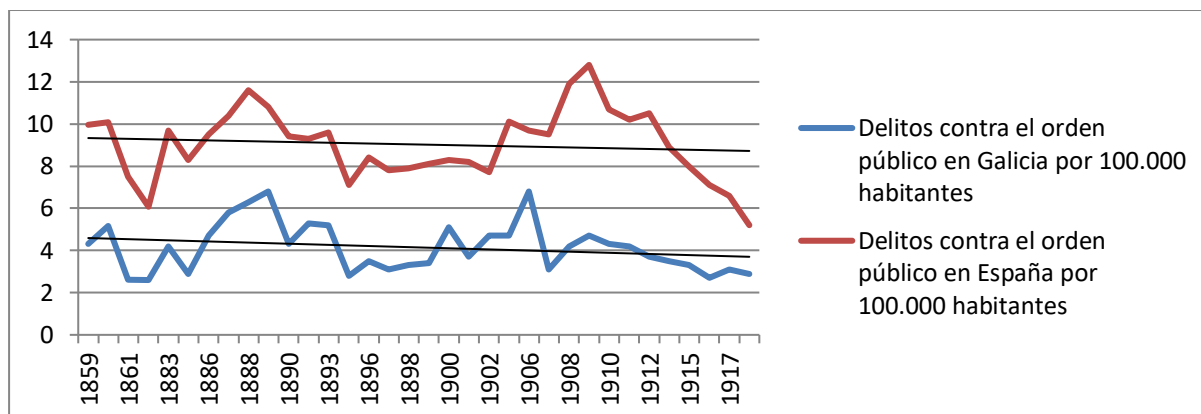
6.6 El ciudadano contra el Estado: delitos contra el orden público y crímenes especiales

En la categoría de delitos contra el orden público⁹⁵⁸ se agrupan las agresiones físicas o verbales de los ciudadanos contra el Estado. Esta categoría incluye dos delitos claramente políticos, el de rebelión y sedición, muy infrecuentes, y el de desórdenes públicos, algo más común. Sin embargo, la inmensa mayoría se compone de dos subcategorías que se estudian en conjunto: por una parte los atentados contra la autoridad y sus agentes, la resistencia y desobediencia; por otra y los desacatos,

⁹⁵⁸ Libro segundo, título tercero, del CP de 1870.

insultos, injurias y amenazas a sus agentes y demás funcionarios públicos⁹⁵⁹. En este apartado, por tanto, se mezclan crímenes puramente políticos y acciones de protesta colectiva con acciones más restringidas de resistencia a las imposiciones del Estado, y actos de simple vandalismo.

Gráfico 6.6.1 Tasas de delitos contra el orden público en Galicia y España por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

En lo relativo a la tendencia temporal, encontramos un descenso muy importante a nivel español y gallego en 1861-1862 en relación a los dos años anteriores, que no sabemos si se puede achacar al cambio de datos estudiados. A lo largo de la Restauración se mantiene constante con oscilaciones tanto en Galicia como en España, con dos picos pronunciados a finales de la década de 1880 y 1910; en Galicia, los dos años de pico son 1889 y 1906. De 1915 en adelante la tasa cae en picado en España, mientras que en Galicia se mantiene relativamente estable. Una vez más, la media en Galicia es sustancialmente inferior a la nacional, de la mitad o menos, sin que en esta ocasión sea apreciable una tendencia a la equiparación.

Tabla 6.6.1 Medias de la tasa anual por 100.000 habitantes de delitos contra el orden público en Galicia y España y evolución en términos relativos

	Tasa en España	Tomando el primer periodo como índice 100	Tasa en Galicia	Tomando el primer periodo como índice 100	Porcentaje de Galicia sobre la media nacional
1859-1862	8,4	100	3,7	100	44
1883-1890	10	119	5	135,1	50
1891-1900	8,3	98,8	4	108,1	48,2
1901-1910	10,1	120,2	4,5	121,6	44,6
1911-1918	8,1	96,4	3,3	89,2	40,7

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Si descomponemos los resultados por provincias, vemos que A Coruña tiene una predominancia clara. Todos los años se sitúa sustancialmente por encima de la media gallega, en especial antes de

⁹⁵⁹ En 1859-1862, con carácter general, los hechos agrupados en este apartado aparecen desagregados en tres: rebelión y sedición (libro segundo, título tercero, capítulo segundo del CP de 1850), "atentados y desacatos contra la autoridad y otros desórdenes públicos" (libro segundo, título tercero, capítulo tercero del CP de 1850, y "resistencia y desobediencia" (libro segundo, título octavo, capítulo segundo del CP de 1850). En 1860 el delito de rebelión aparece desagregado del de sedición.

la década de 1890, y hasta el final de nuestro periodo de estudio se mantendrá un tercio por encima de lo que le correspondería por población. Lugo ocupa el otro extremo de la tabla, se encuentra un 20 o 40% por debajo de la media gallega.

En Ourense el índice suele ser inferior al del conjunto de la región, si bien de manera tan acusada como Lugo, y con oscilaciones mayores (hasta 1890 se sitúa cerca de la media gallega, pero en la de 1890 no alcanza el 44%), y solo en la de 1910 supera la media en un 21%. Pontevedra se halla sustancialmente por debajo de la media en la mayor parte de los periodos, excepto en 1900-1910, cuando la supera en un 6,7%.

Tabla 6.6.2 Delitos contra el orden público en las diferentes provincias gallegas como media en los periodos expresados en tasa de crímenes anuales por 100.000 habitantes, relación porcentual con el periodo anterior y porcentaje en relación a la media gallega

	A Coruña			Lugo		
	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega
1859-1862	5,2	-	140,5	2,8	-	75,7
1883-1890	6,7	28,8	134	4,2	50	84
1891-1900	6,3	-6	157,5	3	-28,6	75
1901-1910	5,8	-7,9	128,9	3,6	20	80
1911-1918	4,4	-24,1	133,3	2	-44,4	60,6
	Ourense			Pontevedra		
	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega	Tasa	% sobre el periodo anterior	% de la media gallega
1859-1862	3,4	-	91,9	2,8	-	75,7
1883-1890	4,9	44,1	98	3,5	25	70
1891-1900	1,9	-61,2	47,5	3,5	0	87,5
1901-1910	3,3	73,7	73,3	4,8	37,1	106,7
1911-1918	4	21,2	121,2	2,7	-43,7	81,8

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Lo característico de este delito es su alta volatilidad. En todas las provincias gallegas la tasa de delitos contra el orden público aumenta sustancialmente en la década de 1880, en relación al periodo isabelino: en torno al 50% en Lugo y Ourense, sobre el 25% en A Coruña y Pontevedra. En la década de 1890 desciende en todas las provincias, excepto en Pontevedra, donde permanece estática. En la de 1900 aumenta casi todas, si bien en A Coruña desciende un tanto, y en la de 1910

el patrón es nuevamente de descenso, y de manera muy importante, en todas las provincias excepto en Ourense.

Para analizar este tipo de crímenes hemos seleccionado los veinte primeros casos en los que un delito del orden público aparece de manera principal en los libros de sentencias de 1900 en las salas criminales coruñesas, si bien esta es una categoría que se pisa con los delitos contra la persona: en los casos de atentado suele haber un delito o una falta por lesiones de manera subsidiaria, y en algunos casos que hemos visto como contra la persona también hay crímenes contra el orden público. No sabemos cómo lo clasificaban de cara a las estadísticas contemporáneas, ya que en estas no se cuentan aparte los crímenes complejos (esto es, con varios delitos en la misma causa). Todos los casos que hemos visto pertenecen a la Sala de lo Criminal, ya que el Tribunal del Jurado no vio ningún caso de este tipo.

En el 40% de los casos, la acusación es de atentado contra la autoridad, es decir, haber realizado una agresión contra un agente. Las heridas son ligeras, golpes con la mano, alguna con una piedra o palo, y una herida leve de arma blanca. En el 25%, se trata de actos de resistencia o desobediencia que no implican agredir a una persona, sino simplemente estorbarle o forcejear. El 30% son injurias, calumnias o amenazas, o una combinación de estas tres. Apréciase que estas tres categorías, en orden descendente de gravedad, suelen incluir a las siguientes: cuando alguien agrede a un guardia municipal, casi siempre es porque está resistiéndose a obedecerle, y probablemente le suelte algún insulto, pero, al menos en los casos que hemos visto, las condenas no se apilan.

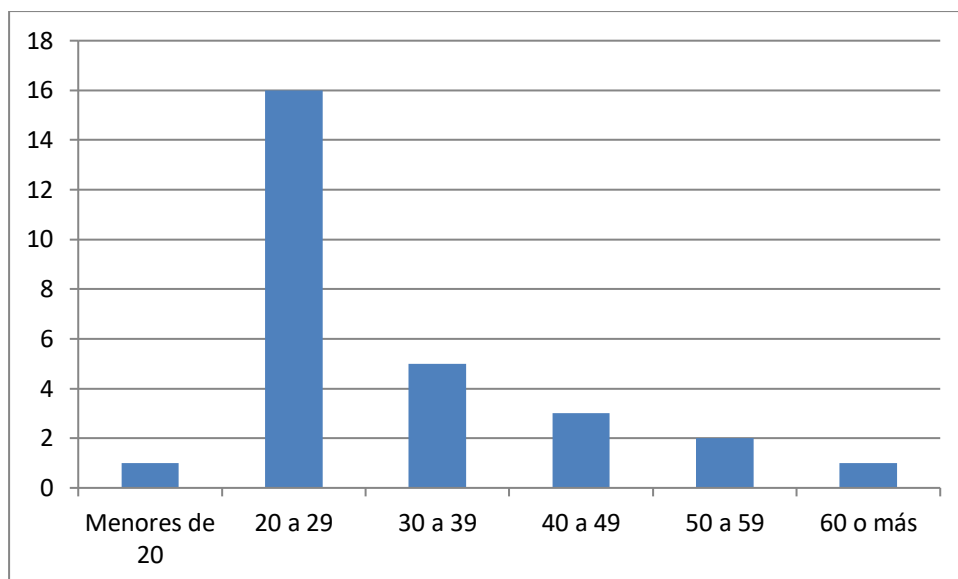
Tabla 6.6.3 Tipo de delito contra el orden público entre la muestra de sentencias del año 1900

	Casos	Porcentaje de casos
Ataques físicos	8	40
Resistencia y/o desobediencia	5	25
Injurias, calumnias o amenazas	6	30
Desacato	1	5
Total	20	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

Esta categoría delictiva es muy parecida a la de los delitos violentos en cuanto a la demografía: los banquillos de los acusados los pueblan varones jóvenes. Entre los 29 encausados en los procesos estudiados solo encontramos dos mujeres, y los restantes, el 93%, son hombres. La edad media es de algo menos de 31 años (algo más de un lustro más elevada que en los delitos contra las personas), pero el 57,1% tienen entre 20 y 29; les siguen los treintañeros, con el 17,9% de los casos, y los que tienen entre 40 y 49, con el 10,7%, mientras que es infrecuente hallar otros tramos de edad. En el 57% de los 28 individuos en los que figura el estado civil, este es de soltería, el resto están casados. En el 64% se señala que tienen instrucción o que saben leer y escribir. No son criminales habituales: solo hay tres personas con antecedentes, una por hurto, otra por lesiones y una tercera por atentado contra la autoridad.

Gráfico 6.6.2 Distribución por edades de los encausados por delitos contra el orden público



Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

De entre los que conocemos los trabajos, casi todos son trabajadores de oficios manuales: labradores, jornaleros, zapateros, cocheros y zagales de coches, marineros o pescadores... Junto con un par de industriales y un estudiante universitario. Según estudió Vaquinhass para Portugal, los grupos sociales más elevados y las profesiones de oficina estaban más representadas en los delitos contra el orden, injurias contra las autoridades, disturbios y “assoadas”; no es así en nuestra muestra porque, como veremos más adelante, no hay apenas delitos con motivación política⁹⁶⁰.

En cuanto a las víctimas, en once de la veintena de casos se busca defender la persona y dignidad de guardias municipales, y en cuatro, la de dependientes de Consumos. El resto es más variado: un profesor universitario, un juez municipal, un agente ejecutivo del cobro del repartimiento, un militar, y un caso de desacato. No encontramos agentes de orden público, seguramente, porque su número era muy bajo en esta época y sus actividades muy limitadas, como se puede ver en el apartado correspondiente, y tampoco miembros de la Guardia Civil debido, entendemos, a que los casos de desobediencia o atentado contra ellos se verían en la jurisdicción militar.

Y, ¿qué tipo de sucesos se persiguen? Hay dos grandes bloques, de los que el más importante es el de las intervenciones relacionadas con borrachos y reyertas en espacios de fiesta. Once casos (diez de ellos protagonizados por guardias municipales) se produjeron cuando los acusados estaban embriagados, se encontraban en tabernas, romerías o equivalentes, o ambas a un tiempo. Formaban jaleo o se metían en una riña, y pegaban, empujaban o insultaban a los guardias que venían a detenerlos. En un caso ocurrido en Porto do Son, el guardia municipal también estaba embriagado⁹⁶¹.

Otros cinco están relacionados con el pago de impuestos o tasas. Cuatro con los Consumos, como el que implicó a Marcelino Maceiras, dependiente de este servicio en Ferrol. Cuando dos hombres a los

⁹⁶⁰ VAQUINHASS, I. M. (1996), p. 378.

⁹⁶¹ Manuel Fernández, industrial, intentó entrar en un teatro con un acompañante que no tenía billete, y montó un escándalo. Se resistió cuando el guardia municipal José Mariño intentó sacarlo de allí, y este le pegó con la porra, pero Fernández se la sacó y rompió. La pelea siguió a bofetadas, por parte de Fernández, y golpes de sable, por la de Mariño. Como el guardia había pegado primero, el industrial salió libre del delito de atentado, aunque no de una ligera por resistencia, y el agente también fue condenado por lesionarlo. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 45, folios 125-127.

que interrogaba se dieron a la fuga, persiguió a uno de ellos y le requisó cuatro litros de alcohol de contrabando; lo desafiaron, y otro día lo amenazaron diciéndole que le iban a "clavar un compás en la tabla del pecho"⁹⁶². A Manuel Vázquez, agente ejecutivo que acudió a la casa del zapatero Ramón Ferreiro para pedirle que exhibiese el recibo de pagar el repartimiento de cereales y sal o dejase entrar para hacer el embargo, este le dijo que era un "cochino, un ladrón y que había de beberle la sangre", aunque Vázquez estaba acompañado por guardias civiles y un vecino, y siguió insultándolo mientras lo llevaban a la cárcel⁹⁶³.

A esto se suman algunos casos más difíciles de clasificar, como un anónimo amenazante dirigido contra un juez municipal o la carta de un veterano de la penúltima guerra de Cuba contra el comandante don Antonio de la Rosa, señalando que "no sabía como tuviera valor y dignidad" de firmar un abonaré expedido en su favor por su servicio bélico. "Este dinero se lo comieran y que ahora no había quién se lo abonase", afirmaba el antiguo cabo de infantería de Marina, que fue absuelto⁹⁶⁴. En el caso del estudiante de Medicina José Vallejo, lo escucharon borracho en la Alameda de Santiago diciendo en alto "eres un marica", "le voy a abrir en canal" y "antes de veinte y cuatro horas le he de asesinar"; sin que, según la sentencia, "se haya podido puntualizar a quien iban dirigidas, aunque no lejos de él se hallaba el catedrático de medicina Don Vicente Goyanes". Como funcionario público, se promovió una causa en defensa de Goyanes, pero el delito no se consideró acreditado⁹⁶⁵.

Esta era la tónica habitual; pocas sentencias eran desfavorables para el reo. Solo nueve querellados (el 31%) fueron condenados al delito por el que se los acusaba, mientras que 18 (el 62,1%) fueron absueltos libremente. Otro no fue sentenciado por hallarse en rebeldía, y en otro caso se rebajó la acusación de atentado a una de resistencia. Las condenas se concentran en los casos cometidos contra guardias municipales. Solo hubo una condena fuera de ellos, la de un hombre que se negó a ratificar una declaración que había realizado en un proceso judicial y que fue condenado por desacato a algo más de un año y ocho meses de prisión⁹⁶⁶.

Las causas se solían desestimar por la retirada de la acusación del Ministerio Fiscal o porque no se considerase que el hecho fuese doloso o revistiese la categoría de delito. El carácter de atentado contra la autoridad no podía invocarse solo por haber golpeado a un agente de esta. Se ve claramente en un caso ocurrido en febrero de 1899 en la ciudad de A Coruña, por el que al año siguiente se juzgó al herrero Luis Jesús Macías. Este no era un ciudadano modelo: a sus 26 años ya había sido penado por atentado a la autoridad, y el día de autos estaba embriagado, cosa que "le sucede con frecuencia" según el tribunal. Discutió con su hermana, "lo cual suele suceder alguna vez", y esta escapó para buscar a un guardia municipal. El agente la acompañó al lugar en que se encontraba el herrero, y los dos hermanos volvieron a reñir; según la propia defensa, Macías estaba "maltratando a su hermana". El guardia le dio una bofetada y lo derribó al suelo para llevarlo a las celdas de prevención, y a cambio recibió algunos golpes, no de gravedad, que le causaron algunas contusiones. La Fiscalía denunció a Macías por agresión, pero el herrero salió absuelto. "No solo no acometió al Guardia Municipal" razonó la Sala "sino que este le acometió a él dándole una bofetada primero y derribándole al suelo, en cuyo acto, dada la embriaguez en que el Macías Vidal se encontraba y el estado de irritabilidad que le producía, nada de particular tiene que al proceder del Guardia contestara el procesado en la forma que lo ejecutó"⁹⁶⁷.

⁹⁶² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 102, folios 277-279.*

⁹⁶³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 131, folios 361-362.*

⁹⁶⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 98, folios 267-268.*

⁹⁶⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso*

⁹⁶⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 127, folios 350-352.*

⁹⁶⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 31, folios 89-90.*

En los casos en los que se producían condenas, lo habitual es que fuesen leves, arrestos mayores de un mes y medio. Jugaba a favor de los reos la poca importancia de los incidentes y que la embriaguez no habitual era atenuante. Aún así, el ataque contra la autoridad hacía que las condenas fuesen sustancialmente más graves que si el hecho se hubiese dirigido contra un particular, en cuyo caso serían simples faltas. Veamos, por ejemplo, el caso de los hermanos Esteban y Manuel Carballo, dos zapateros que insistieron en entrar en un baile en la casa consistorial de Corcubión estando borrachos y que se enfrentaron a los guardias municipales que intentaron impedirselo. Manuel sacó una navaja que no llegó a utilizar, y Esteban le provocó una herida ligera a un guardia de una pedrada, además de arrojar otras sin acierto. Por las lesiones, una falta, fue condenado a cinco días de arresto menor, pero por el delito de atentado les cayeron dos años y cuatro meses de prisión⁹⁶⁸.

También jugaban un papel importante los antecedentes del reo y su actitud durante el incidente. La Sala de los Criminal juzgó el 10 de mayo de 1900 dos casos que empezaron de manera casi idéntica, con un joven borracho con la navaja en la mano formando escándalo: el marinero José González lo había hecho el 6 de mayo de 1899 en la feria de Mugardos⁹⁶⁹, y el zagal de coche Manuel Cao el 6 de agosto de ese año en Carballo⁹⁷⁰. En ambos casos, intervinieron guardias para quitársela. Cao se limitó a resistirse, empujar a un guardia y darse a la fuga, pero González (borracho habitual, y, por tanto, sin poder acogerse a eximente de embriaguez) agarró un leño de un puesto de madera cercano y golpeó al agente causándole lesiones ligeras. Además, tenía antecedentes por lesiones menos graves. El zagal de cochero se libró con un mes y un día de arresto mayor, pero González fue condenado a siete años, cuatro meses y un día, la mayor sentencia que hemos visto en este apartado.

Por zonas, seis casos se produjeron en el partido judicial de Noia (de los que tres fueron protagonizados por un guardia municipal de Porto do Son, José Mariño), cuatro casos en la propia A Coruña, tres en el partido judicial de Santiago, otros tres en el de Pontedeume, dos en el de Ferrol, uno en el de Corcubión y un último en Carballo. Se agrupan en ciudades y villas, algo que no es de extrañar si se ve que están ligados a la actividad de los guardias municipales, los fieltos y, en menor medida, los jueces; los dos primeros grupos no existían en la mayoría de ayuntamientos pequeños y los jueces se concentran en las poblaciones más importantes. La comparación con los delitos cometidos contra guardias civiles nos permitiría ver de manera más ajustada la comisión de crímenes contra el orden público en las zonas rurales.

En cuanto a la *dark figure* de este delito, el partido de Pontedeume entre 1906 y 1916 encontramos un total de 37 causas por delitos contra la autoridad, desde insultos a amenazas a desobediencia y atentado. Los más comunes son las desobediencias (43,2%) y las injurias (29,7%), y solo hay cuatro casos de atentado en los años estudiados. Del total de causas, 21 fueron sobreseídas (un 56,7%); una cifra superior a los atentados contra la persona.

Tabla 6.6.4. Delitos contra la autoridad en los libros de Matrícula Criminal de juzgado de Pontedeume

Delito	Casos	Porcentaje del total de delitos contra la autoridad
Injurias a la autoridad	11	29,7
Amenazas a la autoridad	3	8,1
Desobediencia a la autoridad	16	43,2
Desacato	2	5,4

⁹⁶⁸ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 140, folios 384-387.*

⁹⁶⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 159, folios 438-440.*

⁹⁷⁰ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 160, folios 441-442.*

Atentado a la autoridad	4	10,8
Resistencia a la autoridad	1	2,7
Total	37	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume

En los delitos de injurias y amenazas la proporción de sentencias fue de aproximadamente un tercio del total, mientras que en los casos de desobediencia apenas se remataron los juicios, con un 6,3% de sentencias condenatorias o absolutorias: dos tercios de los casos acabaron en sobreseimiento, y casi una quinta parte en falta. En el desacato y el atentado el porcentaje de sentencias es mayor (25 y 50% respectivamente) pero la muestra es muy pequeña por la rareza de estos delitos.

Tabla 6.6.5 Resultado de los procesos de los delitos contra la autoridad en los libros de Matrícula Criminal de juzgado de Pontedeume

Delito	Porcentaje que acabó en sobreseimiento	Porcentaje que acabó en sentencia	Porcentaje que se consideró falta	Porcentaje que nunca fue concluido	Porcentaje que acabó en rebeldía
Injurias a la autoridad	54,5	36,4	9,1	0	0
Amenazas a la autoridad	66,7	33,3	0	0	0
Desobediencia a la autoridad	68,8	6,3	18,8	6,3	0
Desacato	50	50	0	0	0
Atentado a la autoridad	25	25	0	50	0
Resistencia a la autoridad	0	0	100	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Libros de Matrícula Criminal del juzgado de Pontedeume

En 1901 aparece una nueva categoría, la de “delitos especiales”⁹⁷¹, en la que se incluyeron, en general, nuevos delitos que se fueron incorporando tras la publicación del Código Penal de 1870 y que por tanto no tenían una categoría propia. Englobaba los delitos realizados por medio de la imprenta o por medio de explosivos⁹⁷² y los crímenes electorales⁹⁷³, y si se hubiera limitado a estos podríamos clasificar la categoría de crímenes políticos y terroristas. Sin embargo, en la misma categoría se incluían el contrabando y la defraudación⁹⁷⁴, las infracciones de policía de ferrocarriles⁹⁷⁵ y de la ley de caza⁹⁷⁶.

En 1906, a raíz de la famosa Ley de Jurisdicciones, se incorporan delitos de injuria o ataque armado contra la patria⁹⁷⁷. Es pertinente recordar que los agravios equivalentes contra los institutos armados

⁹⁷¹ *Estadística...* (1901), p. 12.

⁹⁷² Ley del 10 de julio de 1894.

⁹⁷³ En sus artículos 85 a 97. Ley de 26 de junio de 1890, *Gaceta de Madrid*, nº 180, 29-06-1890, pp. 901-908.

⁹⁷⁴ Desarrollada en la Ley del 3 de septiembre de 1904. Para más información, ver el apartado 12.1.

⁹⁷⁵ Ley de 23 de noviembre de 1877.

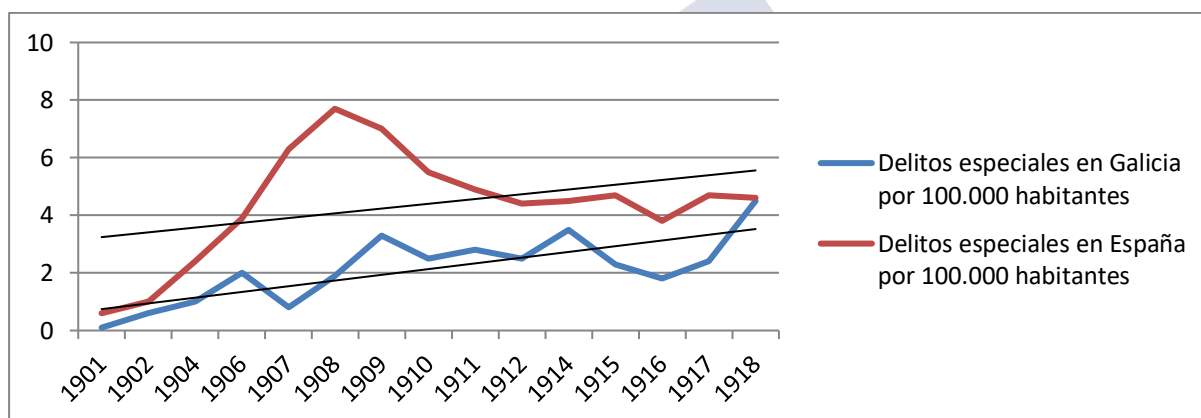
⁹⁷⁶ Desarrollado a partir de 1902 por la ley de Caza del 16 de mayo de ese año.

⁹⁷⁷ Ley de 23 de abril de 1906. Los delitos castigados por la jurisdicción ordinaria incluyen: tomar las armas contra la Patria al servicio de una potencia extranjera, o por la independencia; los ultrajes a símbolos

pasaron a las jurisdicciones especiales, con lo que en principio quedan fuera de las estadísticas que estamos analizando⁹⁷⁸. Por otra parte, su impacto en la legislación civil fue prácticamente nulo. En 1906-1907 no hay ninguno, en 1908, 15; en 1909 otros 3; en 1910, uno; ninguno en 1911, ni en 1912, uno en 1913, ninguno en 1918. Finalmente, se incorporaron a la categoría de delitos especiales las infracciones a La ley de Emigración del 21 de diciembre de 1907⁹⁷⁹, también anecdóticas⁹⁸⁰.

Las categorías más frecuentes suelen ser el contrabando y la defraudación, a partir de la ley de 1904, y las infracciones de la ley de caza, seguidas por los delitos cometidos por medio de la imprenta (aunque en 1917 este delito alcanza el primer puesto en el ranking, seguramente debido a la huelga general de ese verano). El aumento apreciable en este tipo de crímenes en 1905 y los años siguientes en España se explica, pues, no por una eclosión de los delitos de tipo político, sino por la nueva legislación contra la criminalidad económica. Parece lógico suponer que ocurre lo mismo en Galicia, si bien, como los delitos especiales no aparecen segregados en las categorías que lo componen por Audiencias, no podemos afirmarlo con seguridad.

Gráfico 6.6.3 Tasas de delitos especiales en Galicia y España por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

En el conjunto del país hay una campana de altas tasas de delitos entre 1905 y 1909, seguida de un estancamiento en la década siguiente, mientras que Galicia presenta una evolución positiva sostenida. Suponen una categoría minoritaria en relación a las que hemos visto anteriormente, pero relevante: la media es de 4,4 delitos anuales por 100.000 habitantes en España, y 2,13 en Galicia, lo

nacionales, regionales o locales y la apología de los delitos comprendidos en la ley. Gaceta de Madrid, 24-04-1906,

⁹⁷⁸ Las injurias a las Fuerzas Armadas, el llamamiento a la insubordinación y al incumplimiento de los deberes militares quedaron bajo fuero de las jurisdicciones de Guerra y Marina, según procediese, y no entran en nuestras estadísticas.

⁹⁷⁹ Esta ley solo contempla nuevas penas de arresto mayor para navieros, armadores o consignatarios (art. 51), así como multas para estos colectivos (art. 52), además de endurecer penas ya existentes (art. 53, 55). No queda claro si fueron comprendidas en esta categoría penas anteriormente existentes en la legislación criminal. Los artículos sobre responsabilidad criminal de esta ley pueden comprobarse en su capítulo VI. *Gaceta de Madrid*, 22-12-1907, nº 356, pp. 1087-1088.

⁹⁸⁰ Vease (totales españoles): 1907, 0; 1908, 1; 1909, 26; 1910, 21; 1911, 7; 1912, 17; 1913, 22; 1914, 21; 1915, 11; 1916, 0; 1917, 0; 1918, 0.

que supone que, en el conjunto del periodo, algo menos de un 50% de lo que le correspondía por población⁹⁸¹. Hay una ligera tendencia hacia la confluencia entre las tasas gallega y española.

Aunque la clasificación de delitos especiales todavía no existe en el año 1900, merece la pena consultar dos causas de este año que no se corresponden con crímenes que puedan ser agrupados en el resto de categorías estudiadas. Una es una apelación por una causa de contrabando entre el Abogado del Estado y la Empresa de los Ferrocarriles del Norte; relacionada con la aprehensión de cerillas en la estación de Lugo⁹⁸².

Otro caso reúne los únicos ejemplos de delitos por medio de la imprenta y contra el libre ejercicio de los cultos que se registra ese año. A don José Inocencio Ulibarri, un periodista vizcaíno de 26 asentado en Ferrol, lo acusaban de haber insertado en el diario *La Verdad* un artículo titulado *La Confesión* en el que decía que “de todas las infamias cometidas por las religiones antiguas y modernas ninguna iguala a la confesión establecida por la Iglesia católica” y que esta “es inmoral, degradante, sacrílega”. Se le acusaba de “escarnecer públicamente un dogma de la Religión Católica, apostólica, romana”, y para el Ministerio Fiscal suponía un delito contra el libre ejercicio de los cultos cometido por medio de la imprenta⁹⁸³. El jurado lo declaró inculpable⁹⁸⁴, quizás porque las palabras no eran suyas, ya que había copiado el artículo de *El Progreso* [sic] de Nueva York.

6.7 Otros delitos

Del resto de categorías del Código Penal, excluimos del análisis seis de ellas, en general despreciables numéricamente: los delitos contra la seguridad exterior del Estado⁹⁸⁵, las infracciones relativas a las inhumaciones y salud pública⁹⁸⁶, los juegos y rifas⁹⁸⁷, los delitos contra el estado civil de las personas⁹⁸⁸, las imprudencias⁹⁸⁹ y los delitos de quebrantamiento de sentencia⁹⁹⁰, por motivos diversos que explicamos en las correspondientes notas.

⁹⁸¹ Hay que tener en cuenta que hay varios años excepcionalmente bajos: 1901, con un 16,7% de la tasa, 1907, con un 12,7%, y 1908, con un 25%, que rebajan la media. En otros años la tasa en Galicia se sitúa en torno al 60%, y en 1918 alcanza el 97,8%.

⁹⁸² El Estado acusaba a la compañía del delito por no exigir la presentación e cédulas personales para identificar al remitente de mercancías (suponemos que en este caso al que envió las cerillas), y el juez de Primera Instancia de Lugo absolvió a la empresa, algo que ratificó la Audiencia. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 11, folios 28-29.

⁹⁸³ Siguiendo el artículo 240.3 del Código Penal vigente.

⁹⁸⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 29, folios 1482-1484.

⁹⁸⁵ Relativo al libro segundo, título primero, del CP de 1870, el epígrafe engloba la traición, los delitos que comprometen la paz e independencia del Estado, los delitos contra el derecho de gentes y la piratería. Son muy infrecuentes, y hay años en los que no hay ninguno en toda España. Reflejan realidades alejadas de la delincuencia común que estamos estudiando y, como hechos extraordinarios, no resulta demasiado provechoso convertirlos en estadística.

⁹⁸⁶ Relativo al libro segundo, título quinto, del CP de 1870, el epígrafe engloba la infracción de las leyes sobre inhumación y violación de sepulturas y los delitos contra la salud pública. Suponen una cifra muy pequeña y están alejados de los fenómenos que estamos estudiando.

⁹⁸⁷ Relativo al libro segundo, título sexto, del CP de 1870, engloba los juegos y rifas ilegales que se consideren delito, un hecho infrecuente y una dimensión de la ilegalidad que no exploramos en el texto.

⁹⁸⁸ Relativo al libro segundo, título undécimo, del CP de 1870, engloba la suposición de partos, usurpación del estado civil y la celebración de matrimonios ilegales. Hay años en los que no se llega a la decena de casos en toda España. En Galicia, pese al posible impacto de situaciones de bigamia derivadas de la inmigración, siguen siendo extremadamente raros, según algunas catas de años, y cuando ya en el siglo XX aumenta la persecución de este tipo de delitos, la participación gallega desciende. En 1883 solo hay dos delitos de este tipo en Galicia, por ocho en toda España; en 1890 dos sobre un total de nueve; en 1900 uno sobre cinco; en 1910 siete sobre

Evaluaremos otras seis categorías delictivas de manera simplificada, restringiendo el análisis a los años que conocemos de la Restauración y estudiando solo los datos de Galicia en conjunto en comparación con la media nacional. Se trata de categorías relativamente infrecuentes, a uno o incluso dos órdenes de magnitud por debajo de los delitos contra las personas o la propiedad, y que en varios casos son agregados de tipos delictivos muy diferentes entre sí, lo que limita su valor explicativo.

Los delitos contra la Constitución⁹⁹¹ engloban seis tipos de crímenes relativamente disímiles entre sí. Por una parte están los delitos de Lesa Majestad, los cometidos contra las Cortes o el Consejo de Ministros y los realizados contra la forma de Gobierno, que son muy raros. Luego se encuentran los cometidos por particulares en el ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitución (art. 189 a 203), que engloba toda clase de manifestaciones y asociaciones ilícitas. También los delitos relativos a los derechos individuales realizados por funcionarios (art. 204 a 236), en los que se castiga limitaciones de los derechos y libertades realizadas de manera arbitraria por los trabajadores públicos: las detenciones arbitrarias, represión de manifestaciones pacíficas o expropiaciones ilícitas, por poner algunos ejemplos. Este tipo de delitos son los que predominan numéricamente al principio de nuestro periodo de estudio, según parece; en 1890 son el 96 de las 113 infracciones recogidas en este apartado, mientras que en 1909 no encontramos ninguna. Finalmente, se encuentran las infracciones relativas al libre ejercicio de los cultos (art. 236-241), impidiendo ceremonias, obligando a otros a participar en ellas entre su voluntad, o, quizás el apartado más vago, ofender al sentimiento religioso de los asistentes a un acto. En 1890 son solo 12 de 113, pero en 1909, 42 de 83.

Los delitos comprendidos en este apartado son muy escasos en el conjunto de España, con apenas de 0,4 casos anuales por 100.000 habitantes. Son relativamente más frecuentes en 1890 y años anteriores; después, la tasa nunca volverá a sobrepasar los 0,5 por 100.000 habitantes). Posteriormente encontramos un valle hasta el siglo XX; entre 1908 y 1912 son relativamente elevados, para caer de nuevo a lo largo de la década de 1910.

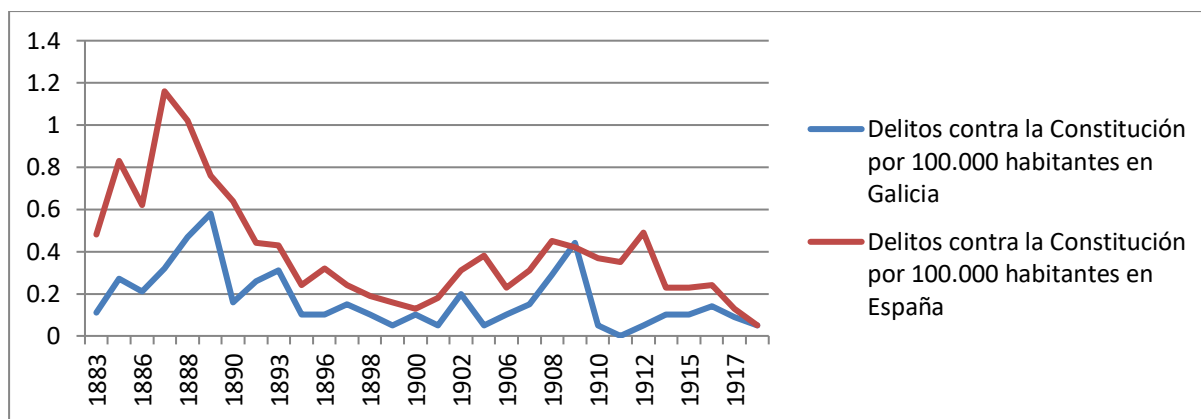
Gráfico 6.7.1 Tasa de delitos contra la Constitución por 100.000 habitantes en Galicia y España

139; en 1917 uno sobre 88. De cualquier manera, en el conjunto del país son más frecuentes la suposición de partos y suplantación del estado civil que los matrimonios ilegales.

⁹⁸⁹ Relativo al libro segundo, título decimocuarto, del CP de 1870, engloba las imprudencias simples y temerarias; las segundas son las que generan la mayor parte de las condenas. Este es el apartado más numeroso de los que hemos descartado, pero no lo consideramos pertinente para nuestra investigación, al tratarse del único tipo de delito sin dolo.

⁹⁹⁰ Relativo al libro primero, título quinto, del CP de 1870. Las condenas por quebrantamiento de sentencia son escasas numéricamente, apenas algunas decenas anuales. Como no sabemos qué criterio siguieron los tribunales a la hora de juzgarlas, no podemos determinar si los casos juzgados en Galicia son de nativos de la región, de individuos que fueron juzgados allí o personas que se escaparon de cárceles gallegas.

⁹⁹¹ Libro segundo, título segundo, del CP de 1870.



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

En Galicia estos crímenes son especialmente infrecuentes. La media para el periodo, en los años que tenemos datos, es de 0,17 casos por 100.000 habitantes en Galicia, y en algún año no hay ninguno. El único año en el que en Galicia se juzgaron más delitos de este tipo de los que le correspondían por población fue en 1909, en el que se superó la media española por un 4,8%, pero es un año extraordinario: en 1910 el porcentaje cayó al 12,2% de la media nacional. En promedio, el porcentaje de delitos en Galicia en relación a España fue del 46,51% durante los años estudiados. En el conjunto del periodo los delitos tienden a descender de manera notable en el conjunto nacional, y, en un ángulo menos pronunciado, también en Galicia.

En el año 1900 tan solo hay un caso, tanto en la Estadística de Administración de Justicia en lo Criminal⁹⁹² como en los libros de sentencias. El labrador José Arias, alias *Louro*, ejercía en 1899 de alcalde de Boimorto y fue acusado de un delito contra la libertad individual por un embargo relacionado con el repartimiento vecinal. El jurado lo declaró inculpable, con lo que fue absuelto libremente⁹⁹³. En todo ese año, las estadísticas de criminalidad solo mencionan otro caso en Pontevedra, y ninguno en Lugo o en Ourense.

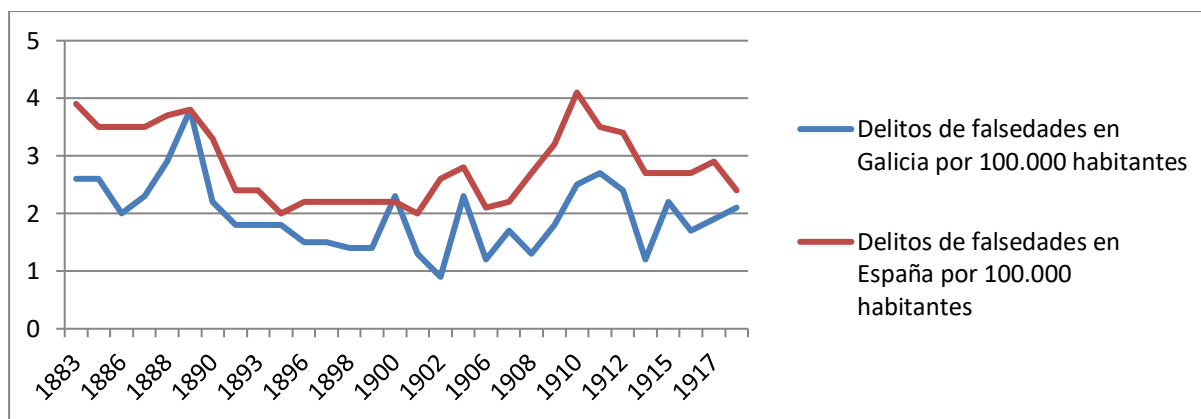
Los delitos de falsificaciones son otro grupo fuertemente heterogéneo⁹⁹⁴. En él se engloban la falsificación de la firma real o de los ministros (categoría que suele quedar desierta en las estadísticas), de sellos y marcas, de moneda y de efectos timbrados. También la falsificación de documentos públicos y privados y certificados como las cédulas de empadronamiento, y la usurpación de funciones o el uso indebido de nombres o condecoraciones. Finalmente, en él se agrupan, en un solo apartado, la ocultación violenta de bienes o industria, el falso testimonio, la acusación y la denuncia falsa; esta subcategoría suele ser la más numerosa dentro del apartado de falsificaciones a nivel español.

Gráfico 6.7.2 Delitos de falsedades en Galicia y España, tasas por 100.000 habitantes

⁹⁹² *Estadística de Administración de Justicia en lo Criminal*, 1900, p. 140.

⁹⁹³ Lamentablemente no se conserva el proceso, pero el alcalde (un labrador sin padre conocido pero que sabía leer y escribir), quizás llegó a ser detenido, ya que en el momento del juicio estaba en libertad provisional. *Sentencias de la Sala de lo Criminal*, 1900, tomo II y las del jurado, caso 34, folios 1498-1500.

⁹⁹⁴ Comprenden los reunidos en el libro segundo, título cuarto, del CP de 1870.



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

La distancia entre la incidencia de este delito en Galicia y en España es menor que en otros apartados. A nivel nacional la tasa anual es de 2,81 casos por 100.000 habitantes, y en Galicia de 1,97, esto es, un 69,6%. Al igual que en el caso de la estafa, este delito también es sensible a casos con un volumen masivo⁹⁹⁵.

Entre las sentencias de la Audiencia Provincial coruñesa en el año 1900 encontramos delitos de este tipo tanto en la Sala de lo Criminal como en el Tribunal del Jurado, y hemos seleccionado los cinco primeros de uno y otro. Al ser un número escaso, y permitírnos detenernos en tipos de delito que no mencionaremos en otras partes del trabajo, nos permitimos ser algo prolijos en su descripción.

El jurado vio tres delitos por falsedad de documento público y dos por expedición de moneda falsa. Empezamos a estudiar este tipo de delitos esperando que los primeros fuesen cometidos por hombres maduros de las clases más ilustradas y urbanas, pero la fuente nos corrigió. Si bien uno de los autores es un secretario municipal suspenso de Arteixo o A Laracha⁹⁹⁶, tenemos también dos labradores de 29 y 62 años, uno de ellos agente ejecutivo de Consumos, y una jornalera, si bien esta con un carácter secundario.

El secretario municipal, Juan Mosquera, fue acusado y absuelto de falsificar un expediente judicial de desahucio para conseguir la expulsión de los ocupantes de una vivienda⁹⁹⁷. Jesús Trillo, el labrador de mayor edad y agente de Consumos, fue considerado culpable de falsificar la fecha de una notificación para que una mujer llamada Prudencia Morales no pudiera apelar por haberse excedido en el plazo, causándole un importante perjuicio económico. Alegó estar embriagado al realizar el acto, aunque no se le aceptó como atenuante. Aunque no tenemos acceso al expediente, posiblemente había enemistades personales entre ambos. Debido a su puesto de agente ejecutivo, el delito pasaba a tener la consideración de haber sido cometido por un funcionario público. Además de las consecuencias monetarias, recibió una condena de casi quince años⁹⁹⁸.

Finalmente, el agricultor Esteban Gerpe se presentó ante un notario de Noia con una mujer que decía ser su tía Dominga, que deseaba registrar la venta de todos sus bienes al sobrino. La tía

⁹⁹⁵ Un sumario instruido en Valencia contra academias de preparación militar y agentes que intervenían en la tramitación de expedientes de cuotas incluía 3.587 delitos de falsedad en documentos oficiales y estafas. LR, 12-04-1930, p. 1.

⁹⁹⁶ Ambos municipios aparecen mencionados en la sentencia; Arteixo en su inicio y A Laracha en las preguntas dirigidas al jurado. Nos parece más probable que se trate del segundo municipio porque el hecho se juzgó en el partido judicial de Carballo, mientras que Arteixo se encuadraba y encuadra en el coruñés.

⁹⁹⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 13, folios 1405-1409.

⁹⁹⁸ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 24, folios 1456-1459.

Dominga resultó ser una jornalera portuguesa llamada Ana Cacheira, que desconocemos si tenía algún parecido con la mujer simulada pero a la que los testigos denunciaron como impostora. Los implicados acabaron condenados a cuatro meses de arresto mayor⁹⁹⁹.

En cuanto a la expedición de moneda falsa, ambas causas proceden de Santiago y se dieron en 1899. Una vendedora ambulante llamada Manuela Rey fue acusada de colocar a sabiendas una moneda falsa de un duro en el mercado de Abastos, mientras compraba cebollas. Pese a su perfil marginal (padres desconocidos, edad inconcreta, sin domicilio fijo, "mala conducta" y antecedentes penales") resultó absuelta¹⁰⁰⁰. También en Santiago, la Guardia Municipal detuvo a otro lumpen: Manuel Blanco, un sastre criado en la inclusa de León sin domicilio fijo y condenado dos veces en 1898 por estafa. En los bolsillos tenía una moneda legítima de cinco céntimos, dos duros falsos, "una porción de polvos que sirven para platear monedas", y unos "anuncios de una fábrica de chocolate de Astorga que simulan billetes del Banco de España de los de a cien pesetas". Como autor de un delito de expedición de moneda falsa en grado de tentativa (no llegó a colocar el material), fue condenado a algo más de tres meses de arresto¹⁰⁰¹. Con dos casos en un año en toda la provincia, no parece un delito muy frecuente, y, además, los dos casos están conectados casi con total seguridad¹⁰⁰². Observando los libros de matrícula criminal de Pontedeume encontramos tres casos en casi una década, todos ellos sobreseídos.

Gil Maestre afirmaba, para la Barcelona de la Restauración temprana, que la falsificación de moneda "sirve de garantía a cientos de familias", en un negocio bastante complejo que incluía al fabricante, al "negociante" que actuaba como intermediario y a expendedores que repartían por lo menudo, a menudo delincuentes de otro tipo que traficaban con pequeñas cantidades para evitar las penas (y quizás para llamar menos la atención y dispersar el riesgo). Por haber, según Maestre, había hasta "guitarristas", delincuentes que estafaban a los fabricantes de moneda falsa¹⁰⁰³. No hay constancia de que, al menos este año, existiesen en A Coruña bandas organizadas para la expedición de moneda falsa, como mencionan otras fuentes para la España de la época, pero seguramente existieron a lo largo del periodo estudiado.

De las causas de la Audiencia Provincial, tres son por falso testimonio, y engloban a una docena de personas acusadas de mentir en juicio: uno por robo, otro por homicidio y un juicio de faltas. Once son hombres, y predomina la mediana edad, aunque la muestra es escasa para un delito de este perfil, pues los testigos variarían ampliamente dependiendo del proceso original. Las causas por falso testimonio son muy pocas teniendo en cuenta la cantidad de juicios penales y de faltas; probablemente solo se persiguiesen las mentiras más exageradas, y en casos importantes.

Aún así, la condena parece difícil de lograr. Solo se mandó a prisión, durante medio año, a dos hombres (otro procesado en ese juicio fue declarado en rebeldía) por faltar a la verdad en un juicio de homicidio¹⁰⁰⁴. En el proceso por las mentiras en el juicio contra Generoso Arijón, un condenado por robo con violencia en un momento en el que el herrero Manuel Rey y otros siete testigos declararon que había estado trabajando en la forja de este, los testigos fueron absueltos porque no se consideró probado que hubiesen faltado a la verdad¹⁰⁰⁵, y también quedó libre Simón Crespo, un

⁹⁹⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 11, folios 1395-1402.

¹⁰⁰⁰ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 12, folios 1403-1404.

¹⁰⁰¹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 24, folios 1456-1459.

¹⁰⁰² Blanco fue detenido tres días después de que Rey pagase con moneda falsa, así que probablemente fue detenido en una redada debido al primer delito.

¹⁰⁰³ GIL MAESTRE, M. (1886), pp. 109, 116-124.

¹⁰⁰⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 241, folios

¹⁰⁰⁵ No hemos podido acceder al expediente del juicio oral, donde se determinó por qué la circunstancia expuesta no se consideraba necesaria para lograr la condena.

jornalero con antecedentes que había declarado en contra de lo que dijeron otros testigos en el juzgado municipal de Ames¹⁰⁰⁶. La información sobre los procesos de falso testimonio, aunque escasa, indica que la persecución de la mentira en instancias judiciales no era frecuente ni draconiana.

Los otros dos delitos se corresponden con simulaciones de contrato, que acabaron en absolución. También aquí las clases altas están presentes pero no son hegemónicas, si bien sería necesaria una muestra más amplia. Uno, de Negreira, es una denuncia contra dos labradores de 61 y 72 años por quedarse con un hórreo a través de un contrato falso¹⁰⁰⁷. El otro fue constituido entre un oficial de infantería en la reserva y su padre, un zapatero coruñés que "carecía de capital y bienes"; los perjudicados eran la viuda del teniente y sus herederos¹⁰⁰⁸.

Los delitos relacionados con la falsificación de documentación que hemos visto, por tanto, se producen entre los labradores y entre los gestores municipales de pequeños ayuntamientos, fuera de las grandes ciudades. Los primeros acuden al delito o la denuncia para asegurarse la propiedad de bienes muebles, sabedores de que la utilidad del respaldo documental en las reclamaciones sobre la pertenencia de una propiedad. Los segundos, cometen falsificaciones en su beneficio o son acusados de ellas.

La categoría de delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos que agrupa a los crímenes que solo pueden ser cometidos por funcionarios¹⁰⁰⁹: la prevaricación, las infidelidades en la custodia de presos y documentos, la violación de secretos, desobediencia y denegación de auxilio; la anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas; la usurpación de atribuciones, abusos contra la honestidad, nombramientos y exacciones ilegales, el cohecho y la malversación de caudales públicos¹⁰¹⁰. Este último apartado, sin ser mayoritario, suele ser el más frecuente en las estadísticas a nivel nacional.

Gráfico 6.7.3 Delitos de los empleados públicos en el ejercicio de sus cargos en Galicia y España, tasas por 100.000 habitantes

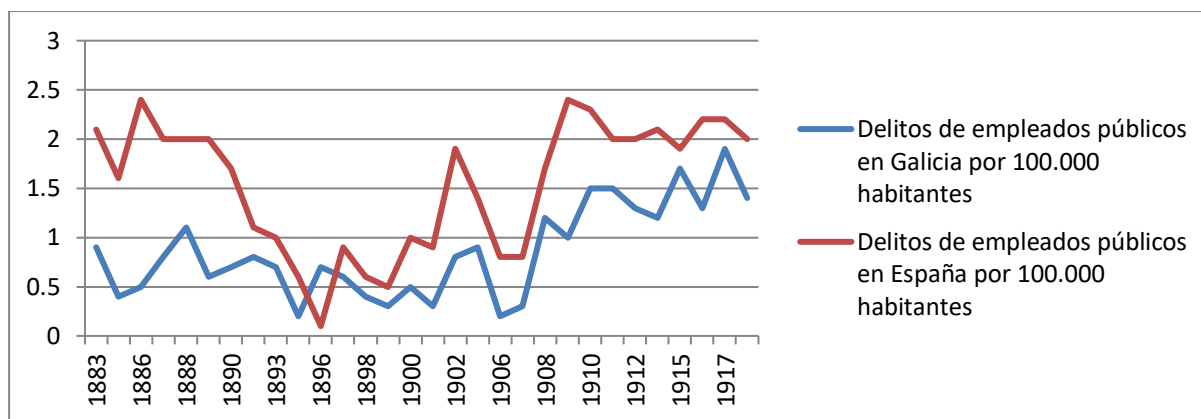
¹⁰⁰⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso, folios 986-987.

¹⁰⁰⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 170, folios 473-474.

¹⁰⁰⁸ En este caso, el oficial, Nicolás González, se casó con una mujer que aportó bienes al matrimonio. Los liquidaron y compraron una casa y huerta. Luego el procesado constituyó una hipoteca sobre la propiedad en base a un supuesto préstamo de 11.000 pesetas por parte de su padre. La hijastra del hombre, hija de una relación anterior de su esposa, afirmó que, tras la muerte, le vio romper un papel de recibo en el que el padre declaraba ser deudor de 11.000 pesetas; presumiblemente, esto les permitiría desviar los bienes de la mujer y de sus herederos. Fueron absueltos en virtud de la disposición que establecía que no había responsabilidad criminal entre parientes (la perjudicada sería la fallecida) por un crimen de estas características, lo que no quiere decir que la hijastra no pudiese presentar denuncia, pero debería tramitarla por lo civil. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 123, folios 339-342.

¹⁰⁰⁹ Libro segundo, título séptimo del CP de 1870.

¹⁰¹⁰ En los inicios de nuestro periodo de estudio se incluía una categoría, las negociaciones prohibidas a los empleados, muy infrecuente y que posteriormente desapareció. Los abusos contra la honestidad cometidos por funcionarios también se incluyeron en otros subapartados, pues eran prácticamente desconocidos.



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Teniendo en cuenta que solo pueden ser cometidos un número restringido de personas, los delitos de este tipo son relativamente frecuentes. La media en el periodo es de 1,53 casos por 100.000 habitantes en España, y de 0,86 en Galicia, esto es, un 75,2% de la cifra que le correspondería a la región atendiendo a su población. En este caso, sin embargo, no deberíamos analizar la cifra de gallegos, sino la cantidad de funcionarios en la región; con este criterio, seguramente nos aproximaríamos más a la media nacional.

La distribución temporal resulta curiosa: a nivel nacional, forma una V con un valle muy acusado en la segunda mitad de la década de 1890, años en los que encontramos menos de un caso por 100.000 habitantes. Antes de 1890 y después de 1907, se sitúa casi siempre por encima de los 2. En Galicia encontramos un reflejo de las tendencias nacionales en el siglo XX, si bien las cifras de las décadas de 1880 y 1890 son más similares entre sí. A largo plazo, los delitos tienden a aumentar tanto en España como en Galicia, pero más en esta última, lo que quizás sea un reflejo del aumento del número de trabajadores públicos en relación a la media nacional a lo largo de la Restauración. Quizás también se produjo un aumento de denuncias debido a la mayor competencia entre corrientes políticas y de una mayor fiscalización por parte de la prensa o agrupaciones de la sociedad civil.

En el año 1900 encontramos cinco casos según las estadísticas centrales¹⁰¹¹, y siete en los libros de sentencias. Dos casos de prevaricación fueron juzgados por la Audiencia Provincial: un pedáneo acusado de no colaborar contra un delito, y el juez municipal de Muros, denunciado por sobreseer una acusación contra el alcalde y teniente de ese ayuntamiento y el regidor de Outes por participar indebidamente en actos electorales. Los dos casos acabaron en absolución¹⁰¹².

Entre los casos del jurado, dos de ellos (el 40%) se corresponden con malversaciones. Un empleado de Hacienda en Ferrol fue acusado de llevarse de la caja, a lo largo de dos semanas, la nada despreciable cantidad de 52.059 pesetas y cinco céntimos¹⁰¹³. Otro, un escribano judicial, fue acusado de quedarse con más de dos mil pesetas procedentes de un embargo¹⁰¹⁴. Ambos fueron

¹⁰¹¹ *Estadística de Administración de Justicia en lo Criminal, 1900*, p. 140.

¹⁰¹² Para el primer caso, véase el apartado dedicado a los pedáneos y alcaldes de barrio en la persecución del delito. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 1, folios 1-2, *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 236, folios 659-661.

¹⁰¹³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 30, folios 1485-1487.

¹⁰¹⁴ El jurado determinó que el dinero se lo había robado un hijo suyo. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 53, folios 1568-1570.

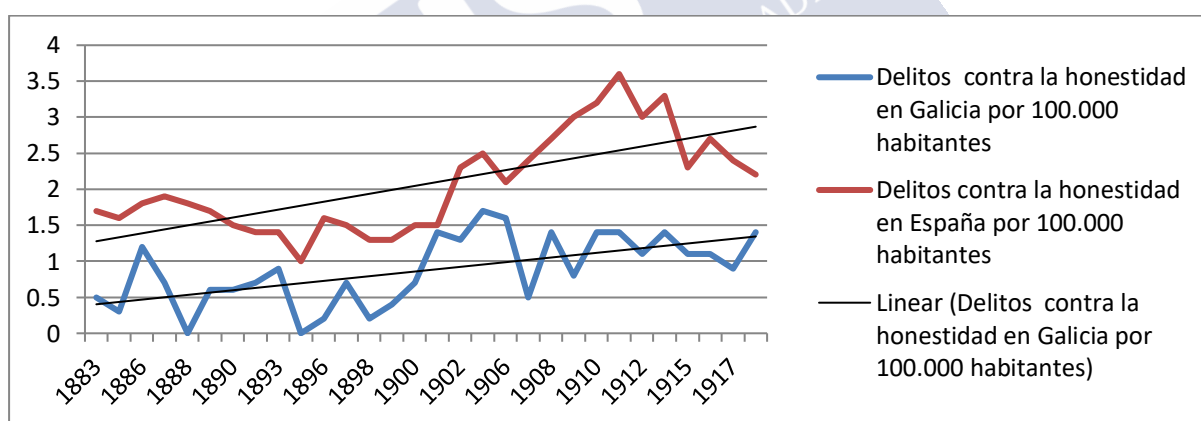
absueltos. Otros dos casos se corresponden con acusaciones de arrestos arbitrarios e ilegales, y el tercero, con una supuesta colaboración en una fuga¹⁰¹⁵.

Los delitos contra la honestidad engloban diversas formas de agresión sexual, junto con el adulterio, que en muy raras ocasiones llega a juzgarse, y el escándalo público, que también es infrecuente que se castigue como delito (aunque era una falta muy común). El grueso de crímenes lo conforman la violación y los abusos deshonestos, seguidos por el estupro y corrupción de menores y el rapto. Las definiciones legales de estos delitos contemplaban a la mujer como víctima preferente, y es de suponer que encontraremos pocos varones adultos como objetos de este tipo de agresiones.

Por otra parte, hay que señalar que en esta época no hay persecución penal de la homosexualidad, que no es delito en los códigos liberales. En palabras de Vázquez García y Cleminson, en España “no existió una penalización de las prácticas homosexuales [...], como sucedió en otros países europeos”¹⁰¹⁶. Habría que esperar hasta la Dictadura para que se persiguiesen explícitamente¹⁰¹⁷: el código penal de 1928 incluía entre el escándalo público, explícitamente, al que “*habitualmente o con escándalo, cometiere actos contrarios al pudor con personas del mismo sexo*”.

En el de 1932 ya no se menciona explícitamente¹⁰¹⁸. Los homosexuales tampoco se perseguían en la redacción original de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933¹⁰¹⁹. La única referencia que hemos visto en nuestras fuentes data de mayo de 1935, cuando la Guardia Civil de Redondela informó de la instrucción de un atestado por sodomía contra tres vecinos, dos de los cuales eran hermanos entre sí, pero no se menciona el delito por el que se les inculpaba¹⁰²⁰.

Gráfico 6.7.4 Delitos contra la honestidad en Galicia y España, tasas por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

La tasa media en España para el conjunto del periodo es de 2,07 casos anuales por 100.000 habitantes; en Galicia, de 0,94, es decir, un 44,22% de los casos que le corresponderían por población. Es cierto que en Galicia no hemos podido recuperar los datos de dos años (1888 y 1894),

¹⁰¹⁵ Dos de ellas se pueden ver en detalle en otros apartados, puesto que proporciona información valiosa sobre las restricciones legales a la actividad de la Guardia Municipal y la relación de los juzgados municipales con las primeras diligencias. La tercera resulta ilegible.

¹⁰¹⁶ Aunque sí había existido en el Antiguo Régimen. VÁZQUEZ GARCÍA, F., CLEMINSON, F. (2011), p. 33.

¹⁰¹⁷ ARESTI, N. (2010), pp. 192-200.

¹⁰¹⁸ TERRADILLOS BASOCO, J. M. (2020), p. 77.

¹⁰¹⁹ Sí, ya fuera de nuestro periodo de estudio, después de la modificación de 1954. VÁZQUEZ GARCÍA, F., CLEMINSON, F. (2011), p. 217.

¹⁰²⁰ FV, 03-05-1930, p. 2.

por deficiencias de la fuente que hemos consultado, pero esta carencia no cambia la tendencia general: en todos los años en los que sí hay datos la tasa en Galicia es sustancialmente menor a la media española. Esta es la relación más baja de entre todos los apartados criminales estudiados, y, aunque incluyéramos los años que faltan, seguramente no variaría significativamente.

Si estudiamos la evolución del delito a lo largo del periodo encontramos una tendencia ascendente para el conjunto de los años, que se hace más clara a finales de siglo, y que se da tanto en España como, de manera menos pronunciada, en Galicia. Probablemente tenga que ver con un aumento de las denuncias, más que de los hechos en sí.

En cuanto a la muestra que hemos podido ver del año 1900, tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal del Jurado de la provincia emitieron seis sentencias por este tipo de delitos ese año. Es cierto que la Estadística de Administración de Justicia en lo Criminal marca cuatro delitos para ese periodo en la provincia¹⁰²¹, si bien dos de las sentencias estudiadas dieron lugar a absoluciones. Tres de ellos pertenecen a la Audiencia Provincial: dos casos de adulterio y uno de escándalo, que constituye una de las absoluciones¹⁰²². El jurado vio tres causas por abusos o violación. Debido al escaso número de procesos y a la atención que suscita en las últimas décadas este tipo de delitos por parte de la historiografía, merece la pena dedicarles algunos párrafos de manera algo más pormenorizada.

Primero los casos de adulterio, que, como ya hemos señalado, son muy escasos en el conjunto nacional. En ambos casos, se trata de denuncias de un marido contra una esposa infiel, dado que el supuesto de adulterio no establecía responsabilidad criminal para un esposo que tuviese una amante. ¿Qué casos llegaban a los tribunales? Ricardo Montero, maquinista de la Armada, se hallaba en 1897 en Filipinas, y su mujer, doña Sabina Vázquez, empezó a recibir en casa a un “joven” en su casa de Ferrol. Su suegra y cuñada la vieron despidiendo al amante a altas horas de la noche en el mes de julio, “sin otro calzado que las medias y con la chambra desabrochada”, y esta les respondió, cuando la reprendieron, que “la desgracia era suya, pero que no estaba embarazada”. En octubre una criada de la casa encontró al amante en una cama de la vivienda. Un inspector de vigilancia, a instancias del suegro de la mujer, lo detuvo y envió a prevención. Más tarde, según la sentencia, siguieron viéndose en una casa de lenocinio. La mujer fue sentenciada a algo más de tres años y seis meses de prisión correccional (no sabemos el destino del amante, que estaba en rebeldía en el año 1900)¹⁰²³.

Otro caso, esta vez en A Coruña. Josefa Cao, esposa de Pedro Cabrera, se veía en tabernas con un veterinario llamado Luis Tomes. El marido la sorprendió con algunos parientes y amigos tomando queso y vino con Tomes, la reprendió, y cuando esta le respondió “bueno y qué” le soltó una bofetada¹⁰²⁴. Dos días más tarde ambos estaban dividiendo las pertenencias de la casa, para separarse. Cao le dijo a su marido que le dejaba unas cabezas de ciervo “para que las conservase como recuerdo de los cuernos que le había puesto”. Fue absuelta, pues, según señaló el tribunal, la frase “no significa la confesión seria de su falta, sino la expresión del despecho por la imputación

¹⁰²¹ *Estadística de Administración de Justicia en lo Criminal, 1900*, p. 140.

¹⁰²² A Teresa Soto, una residente en A Coruña de 40 años, padre desconocido, sin oficio ni instrucción y alcohólica habitual, sus vecinos la denunciaron por proferir a diario frases obscenas e injurias. Quedó absuelta por entenderse que los hechos serían constitutivos de falta. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 257, folios 725-726.

¹⁰²³ No prosperó la iniciativa de la acusación de añadir agravante por el apartado duodécimo del artículo 10. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 449, folios 1307-1311.

¹⁰²⁴ Cuestión probada pero a la que no se dio importancia en el juicio, si bien no era un delito que juzgase el tribunal. Sería motivo para un juicio de faltas que no sabemos si se dio.

que le hacía acusándola de infidelidad, lo que ella negaba”¹⁰²⁵. Los casos son muy pocos, pero apuntan a que la acusación de adulterio no prosperaba con la sola palabra del marido y sin testigos de peso, y, por otra parte, parece darse más en ciudades y entre familias relativamente acomodadas: las dos mujeres, de 29 a 30 años, eran amas de casa y sabían escribir. Cruzarle la cara a una mujer por sospechas de infidelidad, y dejar de convivir por mutuo acuerdo, parecen ambos actos aceptables en la mentalidad de la época. Por otra parte, cuando la infidelidad se probaba y llegaba a juicio, las penas eran sustantivas.

Pasemos a los crímenes más severos. José Tollente, un jornalero de 26 años, fue condenado por intentar violar a una niña de diez, “de cuyo propósito desistió ante el temor de ser sorprendido”. El jurado aceptó como probado que le había causado una herida leve en el interior de los genitales, pero no que llegase a meter los dedos, y consiguió una condena relativamente leve, de poco más de tres años de prisión (inferior al caso de adulterio que hemos visto)¹⁰²⁶. Otros dos jóvenes, de 16 y 18 años de edad, fueron condenados intentar violar a una niña de once cuando estaban embriagados. Uno fue condenado a ocho años y medio, el otro a algo más de 28 meses de prisión¹⁰²⁷. Finalmente, Manuel Mayo y Mayo, alcaide de la cárcel de Noia¹⁰²⁸, fue condenado porque “solicitó y obtuvo” favores sexuales de una presa, que además estaba casada. La mujer quedó embarazada, pero a consecuencia del parto fallecieron ella y su hija. Además de ser condenado a algo más de tres años y medio de cárcel, quedó inhabilitado por once años y un día¹⁰²⁹.

Los delitos se producen de hombre a mujer. Hay que señalar que, por el ordenamiento legal del periodo, era imposible que un hombre fuese víctima de violación, y que el estigma social relacionado con la homosexualidad masculina hacía improbable la denuncia. También resulta llamativo que las víctimas suelen ser niñas. En una muestra de los delitos ocurridos en el partido judicial coruñés aparecidos en *La Voz de Galicia* entre 1882 y 1886¹⁰³⁰, encontramos de dos investigaciones a vecinos de Oza por violaciones de niñas de 11¹⁰³¹ y 9¹⁰³² años y, ya en A Coruña, un intento de violación con amenazas por parte de varios hombres que intentaban abusar de una joven¹⁰³³ y un “bárbaro e inmoral atentado” contra una niña de corta edad realizado por un cantante itinerante de romances¹⁰³⁴.

Los delitos contra la honestidad, independientemente de su naturaleza, probablemente tienen una alta proporción de *dark figure*. En una provincia de más de 650.000 habitantes, como A Coruña en el año 1900 tendría que haber más de dos adulterios y tres casos de abuso al año. Este es un caso en el que las convenciones sociales, el miedo al juicio público y la vergüenza asociada a la exposición al entorno de la sexualidad, en nuestra opinión, servían de barrera para que la población acudiese a los tribunales. También, posiblemente, quedan fuera del radar muchas que se producían dentro del matrimonio porque la mujer fuese dependiente económicamente del hombre, y quizás aquellas en las que el violador acababa casándose con la mujer, fuesen o no pareja en el momento del crimen¹⁰³⁵.

¹⁰²⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 106, folios 288 a 290.*

¹⁰²⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado, caso 18, folios 1427-1430.*

¹⁰²⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado, caso 25, folios 1460-1467.*

¹⁰²⁸ Recordemos que todos los partidos judiciales disponían de un establecimiento penal.

¹⁰²⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado, caso 43, folios 1534 a 1537.*

¹⁰³⁰ CARBALLO GENDE, E. (2018), pp. 41-42.

¹⁰³¹ *La Voz de Galicia*, 21-10-1883.

¹⁰³² *La Voz de Galicia*, 07-05-1884.

¹⁰³³ *La Voz de Galicia*, 01-11-1884.

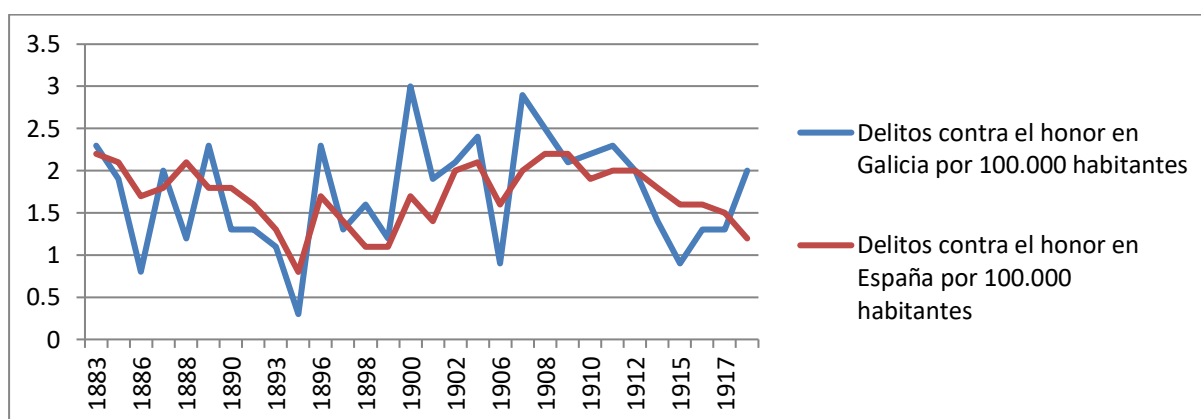
¹⁰³⁴ *La Voz de Galicia*, 21-05-1886.

¹⁰³⁵ Como referencia, en el siglo XVIII, cuando el derecho de familia todavía recaía en tribunales eclesiásticos, había pocas acusaciones de violación, pues para la mujer era preferible afirmar que había habido palabra de matrimonio previa al acto. Esto obligaba al hombre a casarse con ella o darle una compensación, según

En cuanto a la persecución judicial, en la muestra de Pontedeume vemos seis causas por violación y dos por abusos deshonestos. En las causas por violación, no hay información sobre su conclusión; dos sobreseimientos y dos casos en los que el crimen se perdonó por la parte ofendida. Uno de los abusos acabó en absolución, y el otro en perdón por la parte ofendida.

Los delitos contra el honor¹⁰³⁶ se reducen a dos tipos penales: calumnia e injurias, y casi todos los casos se corresponden al segundo apartado. Es una categoría delictiva relativamente poco gravosa para los autores: el porcentaje de absoluciones es alto, los condenados reciben multas o penas correccionales, y probablemente la mayoría de las injurias se resolverían en un juicio de faltas, sin entrar en las estadísticas penales que estamos manejando.

Gráfico 6.7.5 Delitos contra el honor en Galicia y España, tasas por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

Aún así, es relativamente frecuente dentro de las categorías menores. La tasa en España es de 1,7 delitos anuales por 100.000 habitantes, y en Galicia de 1,74. Es la única categoría delictiva en la que la región supera la media española, si bien modestamente, en un 1,27%. Este tipo de delito presenta, además, grandes oscilaciones interanuales, especialmente en el caso de Galicia. A largo plazo, la tendencia es ligeramente decreciente en España, y creciente, de forma más acusada pero todavía muy modesta, en Galicia.

Para visualizar la naturaleza de este tipo de crímenes hemos seleccionado los primeros diez delitos registrados en los libros de sentencias del año 1900: todos ellos fueron por injurias, aunque a uno se añadieron también calumnias. De la decena de casos, la mitad se produjeron en A Coruña, mientras que los juzgados de Vimianzo, Betanzos y Padrón contribuyeron con un caso cada uno y dos, procedentes del mismo hecho, vinieron del de Pontedeume. Las ciudades y villas están sobrerrepresentadas en relación a la población que albergaban.

Al igual que en el conjunto nacional, el porcentaje de absoluciones es alto, lo que probablemente se deba a tres circunstancias: al contrario que otros delitos, los que se realizaban contra el honor se perseguían solo a instancia de parte; solo las injurias y calumnias más graves competían a los tribunales, lo que restringía los hechos que podían ser considerados delito, y, por último, los jueces

afirman Baldellou Monclús y Alfaro Pérez al estudiar al servicio doméstico español de ese siglo. BALDELLOU MONCLÚS, D. S., ALFARO PÉREZ, F. J. (2015), p. 716.

¹⁰³⁶ Engloba los comprendidos en el libro segundo, título décimo, del CP de 1870.

eran bastante comprensivos con las circunstancias en las que se producía la injuria¹⁰³⁷. De las diez sentencias, siete son absolutorias, entre de ellas debido a la retirada de los cargos, lo que probablemente sea achacable a resoluciones extrajudiciales, mientras que otra se retiró por vicios de nulidad.

Tres casos cayeron porque se consideró que no había injurias merecedoras de sanción por la Sala. Por ejemplo, en una sentencia aceptó como hechos probados que el matrimonio de Vimianzo, formado por José Santos y Josefa Rodríguez, insultó a José Santos y Josefa Rodríguez, también esposos entre sí, afirmando que “por causa de ese ladrón, cabrón y de esa puta habían pegado o matado a su hija”. Aunque quedaron probados los insultos, la Sala consideró que si bien las palabras ladrón, cabrón y puta eran “en sí y en su estricto y gramatical sentido injuriosas”, iban acompañadas de “la inculpación que hacían a los querellantes al referirse a la participación que les atribuían en los malos tratamientos de su hija”, con lo que su propósito “no fue el de desacreditarlos, sino de queja” por la situación y fueron absueltos¹⁰³⁸. En otra, el tribunal determinó que decir que el padre de la querellante “había sido un ladrón y que había matado a un hombre” no era un insulto hacia ella.

Las mujeres están más representadas en los delitos contra el honor que en la mayoría de categorías penales: suponen cinco de los doce acusados presentes en los casos estudiados, y siete de las trece víctimas de insultos. También es un delito que afecta en una significativa minoría de casos a parejas. En dos de los casos hay matrimonios que insultan en pareja a matrimonios, y en otro caso, una mujer insulta a un matrimonio; no hay ningún caso de mujer que insulte a hombre solo.

Tabla 6.7.1 Casos de delitos contra el honor según el sexo y relación matrimonial de querellantes y querellados

	Casos	Porcentaje
Matrimonio insultó a matrimonio	2	20
Hombre insultó a mujer	0	0
Hombre insultó a hombre	3	30
Mujer insultó a mujer	2	20
Hombre insultó a mujer	2	20
Mujer insultó a hombre	0	0
Hombre insultó a matrimonio	0	0
Mujer insultó a matrimonio	1	10
Total	10	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

De los doce acusados solo uno tenía antecedentes (allanamiento de morada y hurto). Ocho de ellos eran analfabetos: dos jornaleros, dos jornaleras, dos amas de casa que no parecen especialmente solventes, una cigarrera y un zapatero. Otros cuatro, todos hombres, tenían instrucción y la partícula don detrás del nombre: un dependiente de mediana edad, el presidente de la Cámara de Comercio coruñesa, un abogado y el director de la cárcel de Pontedeume. Parece por tanto que en los delitos

¹⁰³⁷ Hay un cuarto factor a tener en cuenta, la dificultad probatoria debido a que las injurias casi siempre se producen de palabra. Sin embargo, creemos que esto no se reflejaría en las absoluciones, pues en los casos estudiados la injuria siempre se establece como hecho probado excepto en los casos en los que la acusación retira la denuncia. Los casos más débiles, por tanto, caerían en la fase de instrucción.

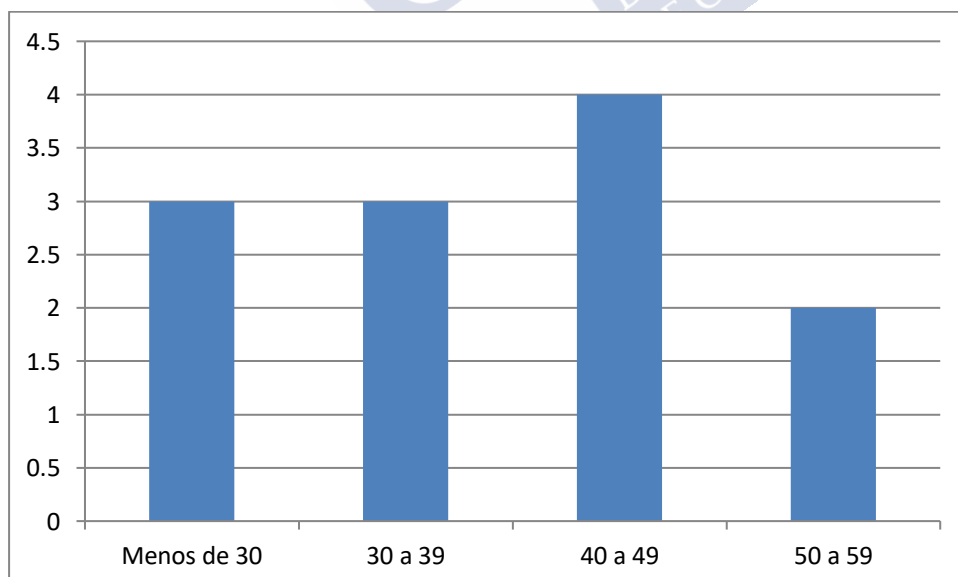
¹⁰³⁸ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 113, folios 309-312.*

contra el honor se veían implicadas las clases altas en mayor medida que en el conjunto de la criminalidad, quizás porque los insultados, de su misma clase, tenían mayor facilidad para acudir a los tribunales o porque fuesen más proclives a entender que la restitución de su honra quedaría facilitada por una resolución judicial, en un contexto en el que el duelo había pasado de moda. Esto, a nuestro juicio, resultaría particularmente importante para figuras públicas o semipúblicas para las que la mácula en su honor suponía el apartamiento de círculos de influencia, pues la resolución judicial permitiría demostrar la limpieza ante el escándalo; de la misma manera que, en nuestros días, se producen denuncias por delitos contra el honor entre políticos, periodistas y otros personajes mediáticos.

Esto se ve claramente, en nuestra opinión, en un caso en el que el querellante fue don Antonio López, profesor de Náutica y secretario de la Cámara de Comercio coruñesa. Sobre él empezaron a circular rumores que no figuran en la sentencia, pero que llevaron a don José Manuel Martínez, comerciante y presidente de la Cámara, a pedirle su destitución en una reunión privada, algo que quedó refrendado en una reunión del organismo. La intención del presidente era “velar por su decoro” (el de la Cámara). Pero López, que no firmó ningún papel de renuncia, lo denunció por injurias graves. Podemos suponer que la pérdida del cargo hacía ver en la ciudad (de unas pocas decenas de miles de habitantes a estas alturas) y en sus círculos sociales que algo habría de verdad en los rumores, o que era una humillación. La Sala absolvió a Martínez del cargo, señalando que no había atentado directamente contra su honor sino que se había limitado a señalar que los rumores existían y que quería proteger a la asociación de ellos¹⁰³⁹.

Otra particularidad de los delitos contra el honor es que son un crimen de la mediana edad. El acusado más joven tiene 28 años, y la mitad 40 o más. La media es de 38,4 años. Las denuncias contra el honor, por tanto, parecen producirse entre personas de mediana edad y ya asentadas; similares insultos entre jóvenes solteros se resolverían seguramente con golpes o intercambios de insultos pero sin denuncia.

Gráfico 6.7.6 Edad de los acusados por delitos contra el honor



Fuente: Elaboración propia a partir de los libros de sentencias del año 1900

¹⁰³⁹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado, caso 315.*

En los casos en los que hay una descripción de las circunstancias de los insultos, suelen responder a una discusión mutua o una ofensa por parte del ofendido. Las injurias en sí mismas son monotemáticas en las mujeres, dejando aparte un caso ya reflejado en el que la insultaron a través de su padre. A cinco las llaman puta, palabra estrella de los delitos contra el honor; a dos las acusan también de ser alcahuetas de parientes, y a una de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio aunque no se menciona que cobre; a esta última, la querellada también la acusó de ayudar a su marido a robar patatas. En algunas la palabra sale en el momento, por lo que la debemos entender como un insulto preferente; en otros las acusaciones son más elaboradas y concretas. Se trata del mismo perfil de insultos que vemos ya en la Galicia del Antiguo Régimen¹⁰⁴⁰.

En los hombres no figura en tres casos, y de los que sí conocemos, a todos los acusaron de infidelidad de sus mujeres, circunstancia para la que se recurría a los términos “cornudo”, “cabrón”, “chulo” y “chulapo”. Más que cuernos pasivos, se acusa al hombre de consentir o lucrarse del acto: “dejar la puerta de su casa abierta para que vayan por la noche junto a su esposa los que quieran”, “tu mujer es una puta; va a las alcahueterías a joder para mantenerte” (acusación especialmente mortificante, puesto que implica que el hombre es un inútil además e cornudo). A dos, también de ladrones, y uno, “maricón” e “hijo de puta”. Estos términos, creemos, son simplemente con intención de ofender y nadie se supone que tengan un trasfondo de realidad.

Por la naturaleza de la información contenida en los libros de sentencias no podemos saber sistemáticamente el perfil socioeconómico de los que recibieron el insulto¹⁰⁴¹, más allá de su sexo, pero en algunos casos se menciona porque se trata de denuncias cruzadas o por las circunstancias de su delito. En general, parecen darse entre individuos de estatus similar: un matrimonio que tiene una zapatería insulta a otro que posee un establecimiento rival en el mismo mercado después de sacarle los clientes¹⁰⁴²; el director de la cárcel de Pontedeume y su cuñado intercambian injurias e intentan pegarse en un encuentro para tratar la propiedad de un muro¹⁰⁴³; un dependiente de comercio insulta a una vieja amiga¹⁰⁴⁴; un jornalero injuria a una mujer en cuya casa se estaba celebrando un baile cuando esta interviene en una querrela en su contra¹⁰⁴⁵; o, como hemos visto, el secretario de la Cámara de Comercio coruñesa denuncia a su presidente.

Generalmente hay una relación personal entre los implicados previa a la disputa, y, en los cuatro acusados con instrucción, los denunciadores son personas de estatus socioeconómico por encima de la media. Creemos, por tanto, que este tipo de delitos no se empleaba como herramienta de control social hacia las clases populares, o quizás las clases populares no insultasen a las más altas con frecuencia.

En las tres condenas que conocemos hubo una pena de destierro, de entre medio año y cerca de dos por las injurias graves, y, en el caso de calumnias (una acusación de robo), un mes y once días de arresto, a mayores de las multas.

Los delitos contra la libertad y la seguridad¹⁰⁴⁶, una vez más ampliamente heterogéneos, podemos dividirlos en varios apartados. Se incluyen en él las detenciones ilegales a cargo de particulares, la sustracción de menores y el descubrimiento y revelación de secretos, testimoniales. También el

¹⁰⁴⁰ IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), p. 29.

¹⁰⁴¹ En alguna ocasión la que recibe la injuria es una esposa pero el querellante es su marido en su representación; en este caso, la contamos como una mujer.

¹⁰⁴² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 169.

¹⁰⁴³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 434.

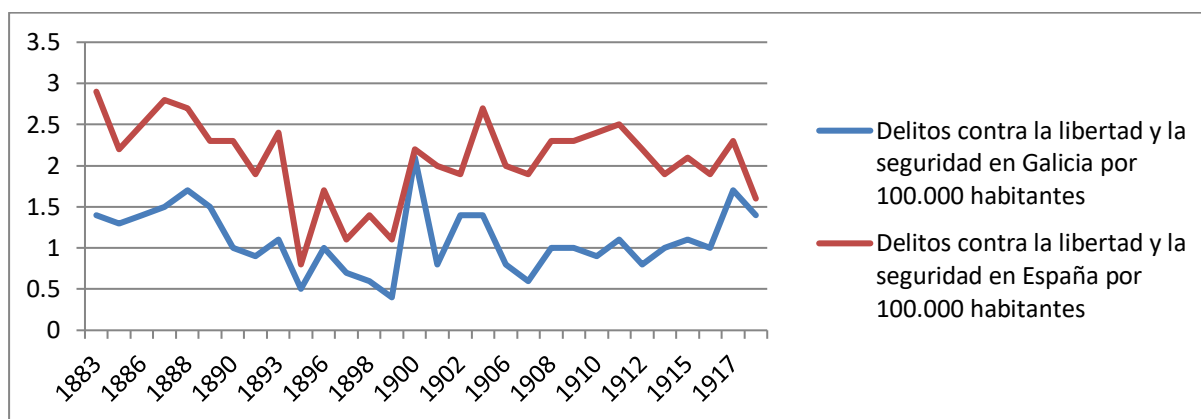
¹⁰⁴⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 306.

¹⁰⁴⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 432.

¹⁰⁴⁶ Libro segundo, título duodécimo, del CP de 1870.

abandono de niños, tan solo un poco más frecuente. Pero la inmensa mayoría de los delitos juzgados son o bien amenazas y coacciones o allanamientos de morada¹⁰⁴⁷, y puede ser tomado, por tanto, como un indicador de la conflictividad entre particulares en los casos en los no hay violencia física contra las personas.

Gráfico 6.7.7 Delitos contra la libertad y la seguridad en Galicia y España, tasas por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

La media en España es de 2,08 casos anuales por 100.000 habitantes, en los años en los que tenemos datos; en Galicia es de 1,1, esto es, un 53,42% de lo que le correspondería por peso poblacional. A nivel español tendemos una ligera tendencia a la baja para el conjunto del periodo, con el consabido valle en la década de 1890 que encontramos en casi todas las series de delitos.

La serie en Galicia se distancia del patrón general en que el descenso en la segunda mitad de la década de 1890 es menos acusado, y por tanto la distancia con la media nacional es menor; sin embargo, nunca se llega a alcanzar la media nacional. Además, la tendencia decreciente no es tan clara, y en los últimos años de la década de 1910 parece acercarse a la convergencia, aunque no sabemos si esto se prolongó en el tiempo. La tendencia en conjunto del periodo de estudio es negativa, tanto en España como en Galicia.

Entre las sentencias del año 1900 hemos encontrado ocho casos, lo que supone una importante diferencia en relación a las estadísticas criminales de ese año, que deberían dar 16¹⁰⁴⁸. Todos se corresponden con la sala de lo criminal, ninguno llegó al Jurado.

De ellos, tres son por coacciones, dos por allanamiento de morada, y en los restantes se combina este último delito con las amenazas o las coacciones. Del grupo, una de las acusaciones de allanamiento de morada se aparta del resto: se trata de una denuncia dirigida contra un grupo de guardas municipales, un escribiente y un dependiente de Consumos de A Coruña por acceder a una vivienda buscando productos que se hubiesen introducido irregularmente, y por la que fueron absueltos.

¹⁰⁴⁷ Descontando, como es natural, los casos en los que este allanamiento tenga intención criminal, que serían tentativas de robo y estarían por tanto en la sección de delitos contra la propiedad.

¹⁰⁴⁸ Quizás se deba a que en juicios por lesiones, delitos en principio de tipo violento, se acabasen realizando condenas por coacciones y amenazas, y fuese este dato el que se incluyese en la estadística.

El resto presentan una serie de características comunes. En primer lugar, fueron casi siempre cometidos por jóvenes de las clases trabajadoras rurales. De la decena de procesados, todos son varones y ocho tienen edades comprendidas entre los 17 y los 29 años. Nueve son labradores o jornaleros¹⁰⁴⁹. El mismo número carece de antecedentes penales, y el único que los tenía era por un delito de lesiones. Todos tienen domicilio, y en cinco de los seis casos, las víctimas eran personas a las que conocían anteriormente. El perfil de los criminales, como vemos, coincide en bastantes puntos con los delitos contra la persona, aunque no tanto en el caso de las víctimas: en la mitad de los casos, las víctimas fueron mujeres.

¿Y cuál es la motivación de los delitos? En dos de los casos, reyertas entre vecinos. Uno de ellos es el protagonizado por cuatro hombres que tenían “resentimientos anteriores” contra una vecina llamada Filomena Figueroa (apellido que compartían tres de los encausados). La amenazaron y “trataron de castigarla”, y tiempo después apedrearon su casa y uno se animó a disparar al aire con un arma sin licencia¹⁰⁵⁰. Otro el de Manuel Luaces, que abrió a golpes la puerta de la casa de Luisa Pazos y la apaleó, lo que le valió una condena de cerca de cuatro años, casi toda por lo primero¹⁰⁵¹.

Los otros cuatro se corresponden con hombres que intentaban recuperar un derecho o propiedad sin pasar por la justicia. Uno de ellos es una acusación, desechada por el tribunal, de allanamiento de morada: el labrador y tablajero José Lema echó por la fuerza a unos traperos que pernoctaban en una morada que consideraba suya (aunque en ella vivía en otra persona)¹⁰⁵². Alguna vez esta actuación, aunque llegase a los tribunales, pudo tener efectos positivos para el delincuente. Francisco García afirmaba que Juan Sueiras le debía 32 duros por la venta de un ternero, así que un día le pidió ver el reloj y se lo quedó como pago mientras caminaban juntos. Sueiras lo llevó ante las autoridades, pero luego retiró la denuncia, así que seguramente llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales¹⁰⁵³.

Pero a la altura de 1900, y esto es lo que resulta interesante, se trataba de un remedio muchas veces contraproducente. Es el caso de los hermanos Antonio y Juan Fernández: después de hacer unas reparaciones a un molino propiedad de varios vecinos se encontraron con que uno de ellos, un tal Portela, no quería pagar su parte, así que el día que le tocaba moler lo sacaron con violencia de allí y le sacaron la llave. Portela no pudo moler ese día, pero cada uno de los hermanos fue condenado a algo más de un mes de cárcel y a pagar 125 pesetas, además de abonarle a su vecino las tres que había perdido por no aprovechar la jornada¹⁰⁵⁴. Otro caso es el de Francisco Dubra. Como una mujer llamada Paula Cabeza, que estaba vendiendo sus propiedades e iba a marchar para América, no quería abonarle una deuda de cinco duros, le dio de bofetadas y le sacó once. Además de una condena de cárcel de poco más de un mes y devolverlos por entero, tuvo que pagar una multa equivalente a cinco veces la deuda¹⁰⁵⁵.

Los juicios por amenazas y coacciones, por tanto, se corresponden con un castigo dado por la justicia contra individuos que pretendían tomarse la justicia por su mano contra conocidos que

¹⁰⁴⁹ El décimo, un joven de 20 años llamado José Figueroa y cuya profesión no se menciona, posiblemente también lo fuese, ya que cometió el delito junto con tres jornaleros. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 198.

¹⁰⁵⁰ Pese a que estos fueron los hechos probados que se aceptaron en el juicio, no fueron condenados, ya que se consideró que eran constitutivos de falta y no delito. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 198.

¹⁰⁵¹ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 328.

¹⁰⁵² Fue absuelto, pues los traperos no vivían allí. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 181.

¹⁰⁵³ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 377.

¹⁰⁵⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 328.

¹⁰⁵⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 256.

consideraban que los habían engañado o estafado, o contra los que tenían problemas personales. Los encontramos en este apartado en casos en los que la *rough justice* fue severa pero no llegó a las lesiones graves o al homicidio, así como los casos en los que implicó entrar en una casa ajena o, al menos, la acusación vio motivos para incluir el allanamiento de morada en la denuncia. Y, esto es relevante, las condenas nos permiten ver cómo la protección de los tribunales hacía que el recurso a la violencia para cobrar deudas o resolver disputas era poco atractivo en cuanto a coste-beneficio, si la víctima acudía a la ley.

El último delito se corresponde con un abandono de niño. Manuela Sandín (joven de veinte años, jornalera, soltera y sin instrucción) abandonó a su hijo recién nacido de noche en una mata a unos doscientos metros de la casa en la que vivía con sus padres; lo que lo rescataron unos cazadores poco después. En el momento del juicio, la madre lo criaba¹⁰⁵⁶.

Tabla 6.7.2 Resumen de categorías delictivas menores para Galicia

	Categorías delictivas en Galicia para el periodo 1883-1918					
	Contra la Constitución	Falsedades	De empleados públicos	Contra la honestidad	Contra el honor	Contra la libertad y seguridad
Tasa anual de delitos por 100.000 habs.	0,17	1,97	0,86	0,94	1,74	1,1
Porcentaje de la media española	46,51	69,6	75,2	44,22	101,27	53,42

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal

A lo largo del periodo estudiado Galicia se encontró por debajo de la media nacional en cinco de las seis categorías delictivas estudiadas en este apartado. En lo tocante a los delitos contra la Constitución y los crímenes sexuales no llegaba al 50% de la media española, y en los delitos contra la libertad y seguridad, que responden en general a formas de agresión interpersonal sin violencia sobre las personas, se encontraba un poco por encima de la mitad de lo que le correspondería por población%.

En lo tocante a las falsificaciones, una categoría en la que se engloban diversos delitos de contrahechura documental y usurpación, normalmente con afán de lucro personal o para evitar alguna imposición gubernamental, se encuentra un 30% por debajo de lo esperable en relación a su población, y en delitos cometidos por empleados públicos en relación a sus funciones, algo más de un 24%; esto, quizás, sea achacable a la menor presencia de funcionarios en el territorio gallego. Tan solo en lo relativo a calumnias e injurias la región gallega se encuentra modestamente por encima de la media, quizás debido a que el reducido tamaño de las comunidades generaba roces enquistados de baja intensidad, los rumores y calumnias pronto se extendían a todo el círculo de conocidos y la vergüenza de ser injuriado reverberaba en comunidades cerradas¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵⁶ Fue condenada a un año y ocho meses. *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado*, caso 17, folios 44-46.

¹⁰⁵⁷ En la España de finales del siglo XX, la mayor incidencia de las infracciones contra el honor (delitos de injurias y calumnias y faltas de injurias) “se produce en los municipios pequeños, siendo Madrid y Barcelona, ciudades de más de 1.000.000 de habitantes, donde menos hechos de ese tipo se producen”. El mayor índice se encuentra en municipios de menos de 100 habitantes, si bien en los ayuntamientos de tamaño intermedio las tasas presentan poca variación entre sí. PÉREZ MARTÍN, J. L. (2000), p. 57, 66.

6.8 Tras la Primera Guerra Mundial

A partir de 1918 las estadísticas criminales dejan de publicarse. En parte de los años 20 y 30 hay información en los Anuarios Estadísticos de España, pero referida a las causas incoadas, no a los delitos, con lo que no se pueden hacer comparativas temporales con el periodo anterior; las tasas de causas serán obligatoriamente superiores a las de delitos. La comparativa entre regiones en el mismo año parece más fiable, pero también debe tomarse con reservas: nada nos garantiza que las tasas de sobreseimiento no varíen entre regiones.

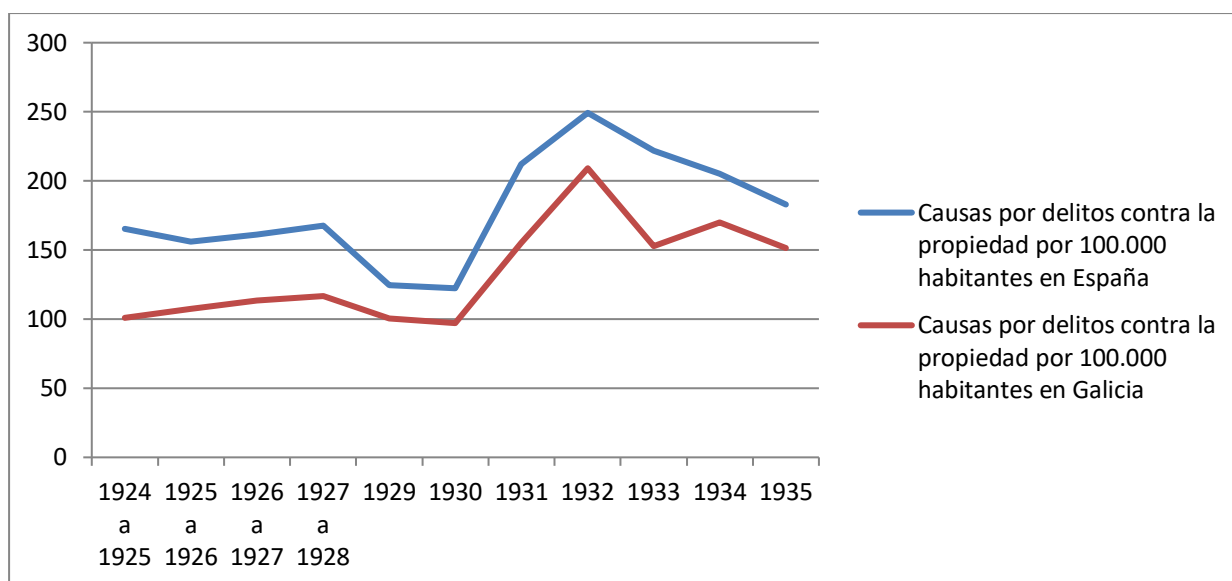
Por otra parte, no todos los años aparece la información distribuida por audiencias, y cambian tanto la agrupación de los delitos como los criterios. Hay estadísticas para las causas incoadas por audiencias en 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927 y 1927-1928¹⁰⁵⁸. En 1929-1930 encontramos información sobre homicidios, parricidios y asesinatos distribuida por Audiencias, por primera vez en la serie estadística española en casi 70 años, pero las cifras son enormes: 13.737 homicidios y asesinatos en toda España en 1929. Evidentemente, se incluyen en esta serie todas las investigaciones por muerte, lo que vuelve a la fuente inútil para estudiar los homicidios dolosos, salvo si nos limitásemos al parricidio, que aparece desagregado; pero este tiene tan pocos casos que no tiene sentido estudiarlo estadísticamente durante dos años.

Los restantes delitos contra la persona, suponemos, se incluyen en el epígrafe de delitos contra la libertad y seguridad individuales, pero no los hemos incluido en la estadística para evitar sesgos por la metodología. También se dan, desagregados, los tipos más frecuentes de delito contra la propiedad, que sumados nos darán un indicador comparable al de los momentos en el que aparecen agregados. En 1931-1933 volvemos a encontrar los delitos separados por categorías. Para 1934 y 1935 tenemos estadísticas recopiladas por González Calleja en base a informes de la Fiscalía General del Estado¹⁰⁵⁹, también referidas a las causas incoadas.

Gráfico 6.8.1 Tasa anual por 100.000 habitantes de delitos contra la propiedad en Galicia y España

¹⁰⁵⁸ También para 1928 por sí mismo.

¹⁰⁵⁹ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), pp. 242-243. Las fuentes primarias son Fiscalía General del Estado (1932): *Memoria elevada al Gobierno de la República por el Fiscal General d. Gabriel Martínez de Aragón y Urbiztondo*, Madrid, Reus, *Memoria elevada al Gobierno de la República con motivo de la solemne apertura de los tribunales el día 15 de septiembre de 1933 por el Fiscal General de la República Excmo. Sr. D. Oriol Anguera de Sojo*, Madrid, Reus, 1933; *Memoria elevada al Gobierno de la República por el Fiscal General d. Lorenzo Gallardo González*, Madrid, Reus, 1935, *Memoria elevada al Gobierno de la República por el Fiscal General d. José Vallés Fortuño*, Madrid, Reus, 1936.

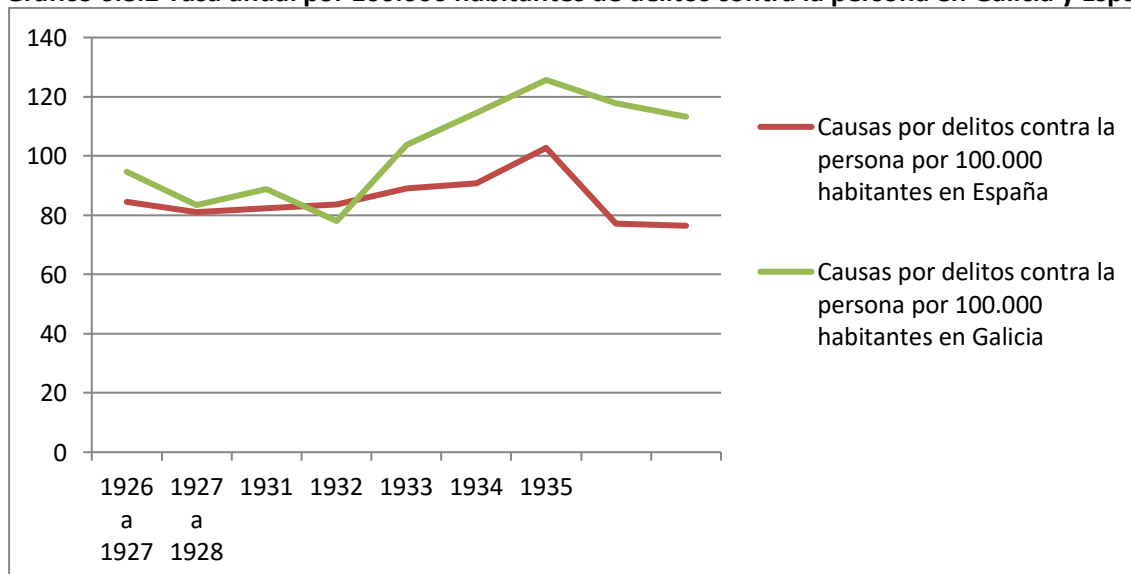


Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos y datos de la Fiscalía recopilados por González Calleja (2014)

La relación entre el delito contra la propiedad en España y en Galicia a través de las causas incoadas en 1927-1935 es semejante a la que vimos en los delitos de la Restauración. Con las reservas debidas a la diferencia de los datos, creemos es una continuación de la tendencia al acercamiento, desde abajo, que se venía produciendo décadas atrás. La tasa gallega sigue las oscilaciones de la española y supone, de media, algo menos de un 75% de esta.

En cuanto al comportamiento de este delito, el fenómeno más llamativo es el gigantesco incremento de las causas que se produce entre 1930 y 1931, y, en menor medida, entre este año y 1932. El año de proclamación de la República se incoaron 50.505 causas, frente a las 28.824 el anterior. Quizás tenga que ver con cambios legislativos debidos a la derogación del Código Penal con Primo de Rivera, o a deficiencias en el recuento de delitos contra la propiedad durante esta. La bajada en 1933 posiblemente tenga que ver con la aplicación del Código Penal de 1932, que elevaba las cifras necesarias para considerar el hurto un delito.

Gráfico 6.8.2 Tasa anual por 100.000 habitantes de delitos contra la persona en Galicia y España



Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos y datos de la Fiscalía recopilados por González Calleja (2014)

En cuanto a las causas abiertas contra la persona (o contra la vida e integridad física, en la nueva clasificación republicana) encontramos dos periodos bien diferenciados. Durante la Dictadura la incidencia de causas en Galicia supera un tanto a la española la mayoría de los años. Si las causas se corresponden perfectamente con los delitos, sería la culminación de la tendencia al acercamiento que vimos en la Restauración. Pero en los años de la Segunda República siempre es significativamente superior a la tasa española. En 1934, cuando las tasas caen en todo el país (seguramente debido a la influencia del Código Penal de 1932, que restringió los delitos de lesiones), en Galicia caen mucho menos y la prevalencia se sitúa un 52% por encima de la media nacional. En 1935 sigue superándola en un 48%.

Sin embargo, ese año, como vemos en el apartado 7.2, hubo menos homicidios en Galicia que en 1920, y la tasa de muertes dolosas por 100.000 habitantes desciende de 5,37 a 4,53 decesos por 100.000 habitantes. También resulta difícil atribuirla a la violencia política; según veremos en los capítulos 9 y 10, era baja en relación al promedio de la Segunda República. Solo cabe asignarla a un incremento de la frecuencia, de la denuncia o de la persecución del crimen común y de baja intensidad, pero no podemos señalar la causa sin realizar un estudio en detalle de los tipos de crimen, complementado por un análisis del tipo de delito contra la persona en otras partes de España.

Tabla 6.8.1 Tasas de causas incoadas por delitos contra la persona por 100.000 habitantes para cada una de las provincias gallegas durante la Segunda República y porcentaje que suponen en base a la media española de ese año

	A Coruña	Porcentaje	Lugo	Porcentaje	Ourense	Porcentaje	Pontevedra	Porcentaje
1931	130,27	146,39	102,11	114,74	96,21	108,11	74,91	84,18
1932	153,15	168,74	105,14	115,84	114,45	126,1	70,18	77,32
1933	156,31	152,13	116,63	113,51	94,56	92,03	114,38	111,32
1934	134,43	174,09	91,72	118,78	120,29	155,78	114,14	147,81
1935	144,91	189,55	79,89	104,5	103,58	135,49	104,48	136,66
Media	143,814	166,18	99,098	113,474	105,818	123,502	95,618	111,458

Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos y datos de la Fiscalía recopilados por González Calleja (2014)

La observación de los datos de causas incoadas por delitos contra el orden público, por su parte, apunta a que la conflictividad en Galicia no se dirigía contra los servidores del Estado. En la segunda mitad de la Dictadura y en el periodo 1933-1935 el porcentaje de la tasa de causas por este tipo de delitos en la región se situó en torno al 65-75% de la que le correspondería por población si continuase el promedio español, mientras que en 1931-1932 se situó en torno al 50%.

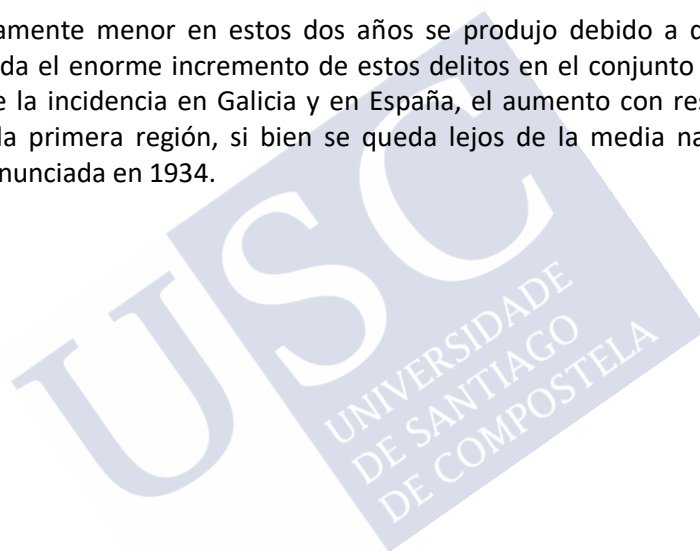
Tabla 6.8.2 Tasas de las causas por delitos contra el orden público incoadas en España y Galicia, en datos anuales por 100.000 habitantes

Orden público	Causas por delitos contra el orden público por 100.000 habitantes en España	Causas por delitos contra el orden público por 100.000 habitantes en Galicia	Coeficiente de Galicia en relación a España
1924 a 1925	13,59	7,62	56,07

1925 a 1926	12,68	9,87	77,84
1926 a 1927	12,5	8,41	67,28
1927 a 1928	12,16	9,51	78,21
1929	12,31	9,69	78,72
1930	13,98	9,82	70,24
1931	25,57	14,58	57,02
1932	29,69	15,85	53,38
1933	37,77	29,18	77,26
1934	33,59	21,83	64,99
1935	27,55	20,82	75,57
Media	21,04	14,29	68,78

Fuente: Elaboración propia a partir de los anuarios estadísticos y datos de la Fiscalía recopilados por González Calleja (2014)

La incidencia relativamente menor en estos dos años se produjo debido a que Galicia siguió de manera más moderada el enorme incremento de estos delitos en el conjunto de España. En 1933, que marca el pico de la incidencia en Galicia y en España, el aumento con respecto a 1932 es sin embargo mayor en la primera región, si bien se queda lejos de la media nacional. La caída, sin embargo, es más pronunciada en 1934.



7. EL HOMICIDIO COMÚN

7.1 Fuentes y metodología

Para estudiar los homicidios ocurridos en Galicia hemos recurrido a la consulta exhaustiva de cuatro diarios, correspondientes a las cuatro provincias gallegas: *La Voz de Galicia* para A Coruña, *El Faro de Vigo* para Pontevedra, *El Progreso* para Lugo y *La Región* para Ourense. Hemos volcado los números correspondientes a los años 1920, 1925, 1930, 1935 y 1936 (hasta el 19 de julio) y anotado todos los homicidios dolosos que aparecieron como tales en la prensa en cualquiera de las cuatro provincias y que se produjeron en esos años. A continuación hemos trasladado las muertes a una base de datos en la que figuran el municipio en el que se produjo, la víctima, los autores, la fecha estimada de las heridas que produjeron la muerte, el modo en que esta se produjo, una breve descripción de los hechos y la fuente.

Se ha elegido la prensa porque la actividad judicial no nos ha legado fuentes fiables acerca del homicidio de la época. Para el periodo estudiado no se conservan registros exhaustivos de las causas criminales seguidas en Galicia. Hubiera sido posible estudiar los crímenes a partir de las sentencias judiciales conservadas en las Audiencias Provinciales, pero otros historiadores del crimen ya han señalado que las estadísticas construidas a partir de este tipo de fuentes suponen estimaciones a la baja¹⁰⁶⁰, aún cuando haya también dudas sobre la fiabilidad de las tasas extraídas de diarios¹⁰⁶¹. Juega a nuestro favor la idea entre la prensa de la época de que los hechos luctuosos son los que más atraen la atención de los lectores¹⁰⁶² y la primacía del homicidio entre las noticias criminales ya en la Inglaterra del siglo XVIII¹⁰⁶³.

Si nos limitásemos a ellas dejaríamos fuera todos aquellos delitos en los que no se llegó a seguir un juicio por diversas causas, de la que la más fácil de entender es la falta de pruebas. Los homicidios solo se identifican como tales, generalmente, cuando hay un cadáver: un anónimo avisando de una misteriosa cruz de madera plantada en un monte es un excelente inicio para una novela de misterio gótico, pero cuando llegó a las autoridades gallegas la investigación tuvo muy poco recorrido¹⁰⁶⁴. Estos casos tampoco entrarían en nuestra estadística.

Por otra parte, hay casos en los que sí hay un cadáver y que no llegan a juicio: si no se llegó a acusar a nadie en firme, si el principal sospechoso se suicidó o huyó del país, si el autor era inimputable, si el juicio fue seguido por un tribunal militar. Los archivos de la Audiencia Provincial no nos informarán de él, mientras que la prensa, potencialmente, sí lo hará. Adicionalmente, el tipo de homicidios que encontraremos estará sesgado por estas casuísticas, que afectan más a un tipo de delitos que a otros. Como veremos más adelante, en los homicidios de pareja se suicidan en torno a un tercio de los autores, mientras que en las muertes cometidas tras peleas en fiestas y romerías no lo hace nadie. En un plano más pragmático, debido al retraso en los juicios, sería necesario observar los registros de muchos años para determinar las muertes que ocurrieron en uno en concreto.

¹⁰⁶⁰ Randolph Roth considera más fiables las inquiries y la prensa. ROTH, R. (2009), p. 492. En la Inglaterra victoriana, aproximadamente el 30% de los casos de homicidio no llegaban a juicio. CHASSAIGNE, P. (1999), p.27.

¹⁰⁶¹ No considera fiables las fuentes hemerográficas Vandal, que las empleó para su estudio del homicidio en Lousiana en la posguerra civil norteamericana. VANDAL, G. (2000), p.10.

¹⁰⁶² LV, 30-05-1925, p. 5.

¹⁰⁶³ En la cobertura de los juicios del Old Bailey, el tribunal penal central, los que más aparecían en los periódicos eran los referidos a violencia letal. KING, P. (2009).

¹⁰⁶⁴ *Causas*, 124, 27.

Analizando los homicidios hemos encontrado 478 casos a los que las propias fuentes atribuyen dolo, descartando directamente aquellos que se presentan como accidentes y suicidios. De entre los elegidos, hemos determinado que 55 tienen un carácter dudoso, y no los emplearemos, excepto que se indique explícitamente, en el resto del trabajo. Estos se corresponden, en un 59,3%, con las apariciones de fetos y niños recién nacidos muertos en los que, por la fuente, no podemos distinguir si se trata de restos de abortos naturales o abortados, muertes naturales o fallecimientos debidos al abandono.

También hay casos de muertes probablemente accidentales, con declaraciones contradictorias o confusas, o que no está claro que se pueda decir que hayan ocurrido en Galicia. Los motivos para considerarlos dudosos son heterogéneos. Han sido evaluados de una manera que, admitimos, resulta arbitraria, pero era necesario hacerlo. En 1925, por ejemplo, en 1925, un mozo del partido de Vilagarcía tomó parte en una pelea a la salida de un baile. Varios días después falleció de una meningitis, y, debido a que circulaba el rumor de que era consecuencia de una pedrada recibida en la reyerta, se detuvo a uno de los participantes¹⁰⁶⁵. El suceso no vuelve a aparecer, y contarle hubiese supuesto incluir en la estadística una muerte natural meramente sospechosa. En junio de 1930 una mujer apareció muerta en una casa de huéspedes en Lugo; según el resultado de la autopsia, por un aborto fallido. Desaparecieron de la ciudad tanto el médico que la había atendido como su novio, que la había acompañado a Lugo¹⁰⁶⁶. Lo más probable es que se tratase de una muerte accidental, y que la mujer se sometiese a la operación voluntariamente.

Descontando estos casos dudosos, nos quedan 423 muertes que consideramos homicidios no dudosos. Quizás no sepamos todos los detalles, o no esté claro quién es el autor o sus motivaciones, pero está claro que alguien murió de forma violenta. Para analizarlos los hemos dividido en una serie de categorías convencionales de acuerdo con su naturaleza en once categorías:

Con carácter sociopolítico: Muertes provocadas por enfrentamientos de carácter político, ideológico o laboral.

Con carácter sociopolítico dudoso: Aquellos en los que es posible que exista una motivación sociopolítica pero es difícil de determinar en base a la fuente.

De pareja: Cometidos por parejas o ex parejas, independientemente del sexo.

Familia: Homicidios cometidos entre parientes de hasta tres grados de afinidad, ascendientes o descendientes. Se cuenta tanto parentesco sanguíneo como político y adoptivo.

Propiedad: Derivados de desencuentros entre individuos no emparentados por un bien económico sin que el enfrentamiento sea un robo o hurto: herencias, propiedades inmobiliarias, derechos de explotación o aprovechamiento de aguas o acceso a terrenos. No se incluyen muertes en peleas derivadas de pequeñas deudas, por el pago de consumiciones o por negar un cigarrillo, pues el apartado económico no parece lo determinante en el enfrentamiento.

Delictivos: Ocurridos a consecuencia de un delito que una de las partes quería cometer, y que era diferente de la agresión, por ejemplo, para cometer un robo o un secuestro.

Resentimientos: Muertes a sangre fría por animosidades personales no comprendidas en los casos anteriores.

¹⁰⁶⁵ FV, 20-11-1925, p.2

¹⁰⁶⁶ EP 12-06-1930, p.1, 13-06-1930, p.1, lv 14-06-1930, p.2

Riña: Derivados de peleas y discusiones, cuando no estén comprendidos en las categorías anteriores.

Fuerzas de seguridad: Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en el desempeño de sus funciones, en represión de individuos que no tiene carácter político, detenciones o fugas. Se incluirían también las ejecuciones judiciales, si bien no se da ningún caso.

Otros: Categorías de difícil clasificación o minoritarias.

Desconocido: Aquellos casos en los que no hay suficiente información para adscribir los casos a una de las categorías existentes.

Frecuentemente, un homicidio presenta rasgos de una o más categorías. Una muerte por motivos sociopolíticos puede surgir de una riña, una persona puede asesinar a un familiar por motivos de propiedad, un guardia civil puede disparar a un sindicalista. Contemplar simultáneamente estas dimensiones complicaría el análisis, así que las hemos asignado en base a su motivación principal, que se presenta en la lista anterior por orden de precedencia. En el análisis de cada una de las categorías, que desarrollaremos más adelante, incluiremos algunas definiciones transversales que permitan estudiar conjuntamente casos comprendidos en varias categorías.

7.2 Cuantificación, evolución y clasificación de las tasas de homicidio

Dentro de los casos conocidos, la principal causa de muertes son las disputas y riñas, con un 35,5% de los casos, seguidas por las muertes entre parientes, que suponen el 19,2%. Los homicidios con carácter sociopolítico, incluyendo casos en los que este resulta dudoso, suman cerca de un 15% de las muertes, y las muertes en la pareja, en actos criminales y por disputas de propiedad constituyen minorías importantes que oscilan en torno al 7%. La mayoría de las muertes, en todos los años, derivan de odios particulares y ligados a la experiencia personal: gente que mata al borracho que le falta al respeto, a la novia que lo abandona, al hijo no deseado o al vecino que no deja de intentar robarle el agua¹⁰⁶⁷.

Tabla 7.2.1 Homicidios cometidos en 1920, 1925, 1930, 1935 y 1936 (hasta el 18 de julio), por categorías

Categorías	Total	1920	1925	1930	1935	1936
Carácter sociopolítico	39	11	0	1	4	23
Carácter sociopolítico, dudoso	13	4	1	0	3	5
Riña	124	41	19	23	26	17
Familia	64	8	15	13	20	8

¹⁰⁶⁷ En un estudio comparativo sobre tipos de odio leve y severo, en el que comparó conflictos interpersonales entre adolescentes estadounidenses y el genocidio de Ruanda, Opatow, establece diferencias entre ambos casos. En los conflictos particulares se enfatiza la experiencia propia, las características de una persona particular, la emergencia del odio es espontánea y se racionaliza a través de relaciones de causa efecto explícitas y particulares. En el colectivo se enfatizan las normas prealentes en la sociedad y se deja a un lado la experiencia personal; se odia a un grupo en base a características que se les adscriben, el odio emerge de manera calculada y fomentada y las relaciones de causa efecto que lo justifican se hacen implícitas y universales, sin necesidad de fundamentarse en premisas lógicas. OPOTOW, S. (2005), p.139-142.

Propiedad	26	4	4	7	5	6
Crimen	24	8	1	1	9	5
Pareja	25	4	4	4	10	3
Resentimientos	13	4	1	2	5	1
Policía	7	1	1	0	3	2
Otros	14	6	3	1	2	1
Desconocido	72	23	13	8	20	8
Total	423	114	62	60	107	79

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes hemerográficas

Tabla 7.2.1 Porcentaje de homicidios cometidos en 1920, 1925, 1930, 1935 y 1936 (hasta el 18 de julio), por categorías, excluyendo los casos desconocidos

Categorías	Total	1920	1925	1930	1935	1936
Político	11,1	12,1	0	1,9	4,6	32,4
Político, dudoso	3,7	4,4	2	0	3,4	7
Riña	35,9	45,1	38,8	44,2	29,9	23,9
Familia	18,2	8,8	30,6	25	23	11,3
Propiedad	7,4	4,4	8,2	13,5	5,7	8,5
Crimen	6,8	8,8	2	1,9	10,3	7
Pareja	7,1	4,4	8,2	7,7	11,5	4,2
Resentimientos	3,7	4,4	2	3,8	5,7	1,4
Policía	2	1,1	2	0	3,4	2,8
Otros	4	6,6	6,1	1,9	2,3	1,4
Subtotal sin casos desconocidos	100	100	100	100	100	100

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes hemerográficas

En conjunto, la tasa de homicidios en Galicia varía de manera importante a lo largo del periodo estudiado. En parte esto se debió sin duda a los enfrentamientos sociales y laborales. En 1920 y 1936 la tasa de homicidios por 100.000 habitantes asciende a 5,4 y 6, respectivamente, coincidiendo con picos de la conflictividad socio-política. El valle se encuentra en los años de la Dictadura: pasa de los 2,8 por 100.000 habitantes en 1925, cuando no hay ningún homicidio claramente sociopolítico, y se acerca a los 2,7 por 100.000 habitantes en 1930, cuando solo hay uno. El año de 1935 tiene una tasa de 4,5, aunque este aumento no se puede achacar tan solo a la participación de la violencia sociopolítica, que ese año tuvo una intensidad moderada.

Tabla 7.2.3 Tasa de homicidios anualizada por 100.000 habitantes, con carácter general y para homicidios con claro carácter sociopolítico¹⁰⁶⁸, para Galicia y para cada una de las provincias en 1920, 1930, 1935 y 1936 (hasta el 18 de julio)

	1920		1925		1930		1935		1936	
	Tasa	Tasa pol.	Tasa	Tasa pol.	Tasa	Tasa pol.	Tasa	Tasa pol.	Tasa	Tasa pol.

¹⁰⁶⁸ No se incluyen los casos dudosos.

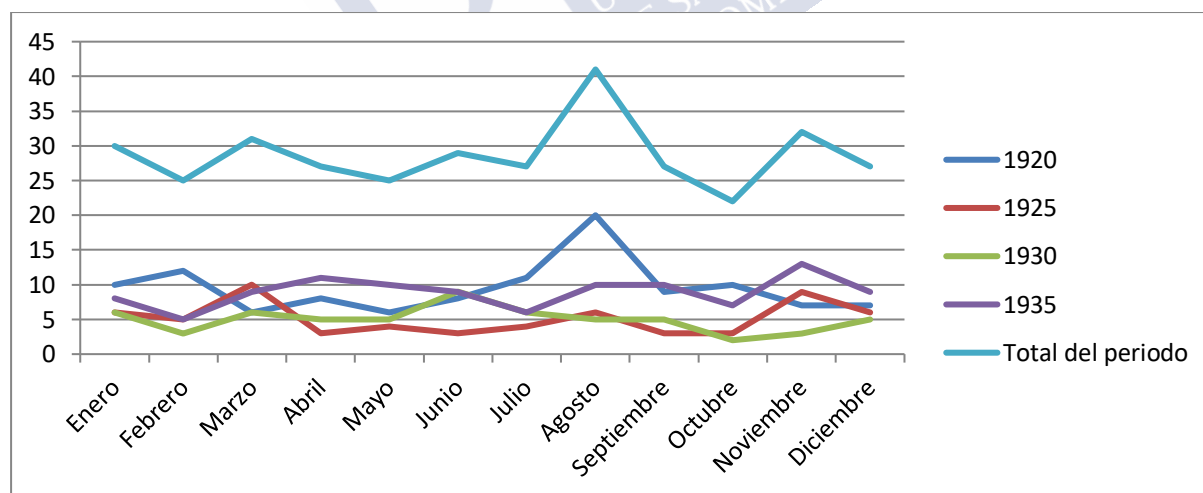
A Coruña	7,48	1,27	1,9	0	2,87	0,13	3,51	0,12	6,56	1,09
Lugo	3,83	0,21	4,9	0	2,99	0	4,28	0,2	5,91	1,48
Ourense	4,61	0	2,62	0	2,58	0	7,24	0,45	8,63	3,7
Pontevedra	4,5	0,19	2,54	0	2,29	0	4,13	0	3,59	1,49
Galicia	5,37	0,52	2,85	0	2,69	0,04	4,53	0,17	6,05	1,76

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes hemerográficas

La violencia política y sus particularidades se detallarán en otro apartado, así que la dejaremos a un lado por ahora. La tasa de homicidios que no son claramente sociopolíticos, es de 4,85 en 1920; de 2,85 en 1925; de 2,65 en 1930; de 4,36 en 1935 y de 4,29 en 1936. Si tampoco contásemos los casos con carácter sociopolítico dudoso, los que podríamos denominar homicidios cotidianos, las cifras oscilarían todavía menos: 4,66 en 1920, 2,8 en 1925, 2,65 en 1930, 4,23 en 1935 y 3,91 en 1936.

Nuestra interpretación es que el nivel de violencia cotidiana intrínseco a la sociedad era estable, quizás con una tendencia ligeramente descendente, y tenía descensos en épocas de gobierno autoritario. La tasa de homicidios cotidianos en 1920 es sobre medio punto superior a las de 1935-1936, que a su vez están muy próximas. Por otra parte, a lo largo del periodo que estamos observando los diarios aumentan su número de páginas y de corresponsales, y mejoran los medios de comunicación y las agencias de prensa, por lo que parece razonable suponer que tenemos una mejor cobertura al final del periodo. Las bajas tasas de muertes en 1925 y 1930 tienen que ver con el descenso de muertes en riñas y peleas con respecto a 1920, de delitos en el seno de la familia en relación al periodo de la II República, y en las muertes por motivos desconocidos y los crímenes, en relación a ambas.

Gráfico 7.2.1 Dispersión temporal de los homicidios, a partir del día estimado en el que se produjeron las heridas, para los años 1920, 1925, 1930 y 1935 y su total.



Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Estudiar la dispersión temporal a lo largo del año presenta dificultades, puesto que en muchas ocasiones los medios no explicitan el día en que se produjeron los homicidios. En los casos en los que aparece la fecha de las heridas que provocaron la muerte, o la hemos podido inferir de manera indirecta (por ejemplo, si se dice que el muerto recibió un disparo en una fiesta de fin de año) la hemos anotado. En los casos en los que se afirma que la muerte ocurrió “hace unos días” o

“recientemente” hemos supuesto que ocurrió tres días antes de su primera aparición en la prensa, y los casos acontecidos “hace un mes” o “unas semanas” se han aproximado.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, los homicidios se distribuyen de manera relativamente uniforme a lo largo del año¹⁰⁶⁹, y no creemos que se puedan colegir patrones estacionales de las diferencias mensuales, puesto que estas varían año a año. El pico de muertes ocurridas en agosto se debe sobre todo a los datos de ese mes en 1920, hinchados por el encadenamiento de muertes ligadas a la huelga general de A Coruña, y los datos por encima de la media que se aprecian en enero, marzo y noviembre no se producen todos los años. Hay que tener en cuenta que, por el medio de recoger los datos, los homicidios cometidos hacia final de año pueden estar subrepresentados¹⁰⁷⁰.

7.3 Primacía masculina y cascada de la violencia: homicidas y muertos en base a su sexo y edad

Tanto los homicidas como las víctimas son mayoritariamente varones. Hombres, o grupos de hombres de 14 años o más¹⁰⁷¹, cometieron el 88% de las muertes, frente al 8,6% realizado por mujeres y el 3% en el que las fuentes apuntan a grupos de adultos mixtos (y en algunos de estos casos, es posible que se esté contando a las mujeres como colaboradoras o cómplices). Son también el 78,4% de las víctimas. Las mujeres adultas son un porcentaje relativamente bajo de los homicidas, el 8,6%, y algo mayor en el de muertes, del 12,6%. Si nos ceñimos a los adultos, hay una mujer asesinada por cada 6,23 hombres. Por cada persona asesinada por una mujer, 10,2 fueron asesinadas por hombres.

Los niños menores de 14 años casi nunca matan a otra persona de manera dolosa. Si bien puede entenderse que hay un sesgo a la baja, ya que son irresponsables penales y sus agresiones pueden atribuirse a juegos o accidentes, y es cierto que al contar los homicidios hemos descontado algunas muertes ocasionados por niños y consideradas como involuntarias, son en todo caso un porcentaje muy pequeño. Suponen, eso sí, el 9,1% de los muertos, normalmente a manos de sus familiares, de perturbados o de familiares perturbados.

Tabla 7.3.1 Muertos y homicidas en base a su edad y sexo

Muertos	Nº muertos	% de casos conocidos	Homicidas	Muertos	% de casos conocidos
Hombres	330	78,38	Un hombre	277	70,13
Mujeres	53	12,59	Un grupo de hombres	71	17,97
Niños menores de 14 años de ambos	38	9,03	Una mujer	34	8,61

¹⁰⁶⁹ Esta distribución relativamente uniforme también se daba en los actos de violencia registrados en Tierra de Campos a inicios del siglo XX, si bien el autor mencionado realizó la distribución por estaciones. REDONDO CARDEÑOSO, J. A. (2011), p. 252.

¹⁰⁷⁰ Debido a que los homicidios aparecen en prensa con días o semanas de retraso. Así, un homicidio que se cometa el 30 de diciembre previsiblemente aparecerá en los periódicos en enero del año siguiente.

¹⁰⁷¹ La distinción entre estos dos apartados no es muy precisa, pues hay casos en los que se informa de varios detenidos en relación a un crimen que hemos catalogado como homicidios en grupo, pero en los que quizás solo uno sea el autor, y otros quizás sólo cómplices, autores o sospechosos. Por otra parte, hay muertos en peleas en los que sabemos que una persona apuñaló hasta la muerte a la víctima, pero otro pudo atacarlo y solo golpearlo, o errar el golpe. En algunos incidentes, como los tiroteos en los que intervinieron personas que no fueron identificadas y el herido recibió varios disparos, es imposible determinar con nuestras fuentes si procedían de una o de varias armas.

sexos					
Desconocido	2	n/a	Un grupo de mujeres	0	0
			Un niño	1	0,25
			Un grupo de niños	0	0
			Un grupo de adultos mixto	12	3,04
			Desconocido	26	n/a

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

En el homicidio a miembros distintos del mismo grupo de sexo y edad, podemos observar que cuando se produce fuera del mismo grupo va en cascada de los varones adultos a las mujeres adultas, y de estas a los infantes. Cada uno de estos grupos agrede en mayor medida al eslabón que lo sigue que al que lo precede. Los hombres suelen matar hombres, pero es mucho más probable que maten a una mujer que el caso contrario. Cuando una mujer mata, lo más probable es que mate a un niño, y que el infante sea su hijo.

Tabla 7.3.2 Comparativa de muertes y homicidas

Cuando un hombre o un grupo de hombres mata, lo hace a:	Muertos	Porcentaje	Cuando una mujer o un grupo de mujeres mata, lo hace a:	Muertos	Porcentaje
Un hombre	293	84,68	Un hombre	7	20,59
Una mujer	46	13,29	Una mujer	4	11,76
Un niño menor de 14 años	7	2,02	Un niño menor de 14 años	23	67,65

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Cuando las mujeres matan, lo hacen casi siempre en el ámbito íntimo. En los casos en los que hemos podido adscribir su motivación a una de las expuestas anteriormente, la homicida mató a un miembro de su familia en el 78,8% de los casos. En otro 12,1% fue a su pareja o ex pareja. En el resto de motivaciones que hemos expuesto no aparecen como homicidas, o lo hacen de manera anecdótica. El crimen y las riñas son dominios casi exclusivamente masculinos, y la violencia política de manera absoluta.

Cuando las mujeres adultas son las asesinadas, en el 43,75% lo son por un compañero sentimental, y en el 16,7% por un miembro de su familia. En este tipo de crímenes la presencia de mujeres es algo más alta en los diversos apartados, y encontramos a mujeres muertas en riñas o discusiones de propiedad o asesinadas por resentimientos.

Tabla 7.3.3 Homicidios en los que murieron mujeres, según las motivaciones del crimen

Homicidios en los que murieron mujeres, según el tipo de crimen	Muertes	Porcentaje sobre el total de mujeres asesinadas, ciñéndonos a casos conocidos
Carácter sociopolítico	0	0
Carácter sociopolítico, dudoso	1	2,08
Riña	4	8,33
Familia	8	16,67

Propiedad	4	8,33
Crimen	4	8,33
Pareja	21	43,75
Resentimientos	3	6,25
Policía	1	2,08
Otros	2	4,17
Desconocido	5	n/a

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

7.4 El uso de armas

En aproximadamente el 12,4% de los casos no sabemos con qué arma se produjo la muerte. En los casos que sí sabemos, la causa más frecuente son las heridas de armas de fuego, con un 49,2% de los casos. Las siguen las armas blancas, con un 28,9%, casi siempre navajas y cuchillos. Dentro de esta categoría, el tipo de elemento que se emplee depende del contexto. Así, encontramos armas cortas en peleas callejeras y choques en tabernas y romerías, a donde los hombres solían llevar navaja. En algunos enfrentamientos que ocurren en fincas del entorno rural encontramos azadas y azadones. Las hachas se suelen emplear en delitos que se cometen en la propia casa o en su entorno. Las espadas, sables, bayonetas y demás armas de guerra no provocan homicidios, y tampoco hemos registrado ningún caso en el que se empleasen para causar una herida. En el siglo XX estar obsoletas incluso entre los militares, que todavía en la segunda mitad del siglo XIX las portaban comúnmente estando fuera de servicio y las vemos en algunas peleas particulares.

Las piedras, palos, porras y otros objetos contundentes asimilables causaron el 11,1% de las muertes. Otro 4,9% de los fallecidos pereció a causa de palizas y golpes asestados con la mano desnuda, o por golpes de procedencia desconocida. Las restantes muertes se reparten en categorías minoritarias. Un 3% de los muertos murió asfixiado por diversos métodos. Los explosivos y el veneno son minoritarios; solo se emplearon en el 0,55% de los casos, dos muertes cada uno. Como veremos en el capítulo 8, las bombas que se colocaban en Galicia tenían un carácter de agresión simbólica y contra la propiedad, muy pocas veces contra las personas, y no eran un método de asesinato.

Evidentemente, las armas de fuego y las blancas tienen más representación en el homicidio por su mayor letalidad. Como hemos visto en el apartado 6.4, en niveles de crimen violento de menos intensidad aparecen en mucha menor medida; en el apartado 11.3 veremos que las armas blancas son las que se siguen empleando preferentemente en los enfrentamientos.

Otro 1,9% de las muertes tienen difícil clasificación en las categorías anteriores. El mozo Carlos Calvo murió mientras intentaba poner paz entre los jóvenes de dos pueblos, cuando uno de los implicados le clavó la varilla de un paraguas a través de un ojo¹⁰⁷². Una mujer de Cariño mató a su hijo metiéndolo en una olla de agua hirviendo¹⁰⁷³.

Tabla 7.4.1 Homicidios en Galicia en base al método de muerte

	Muertes	Porcentaje de los casos conocidos
--	---------	-----------------------------------

¹⁰⁷² LR 30-04-1930, p. 8, FV 01-05-1930, p. 10.

¹⁰⁷³ EP 22-04-1920, p.2, FV 21-04-1920, p.1

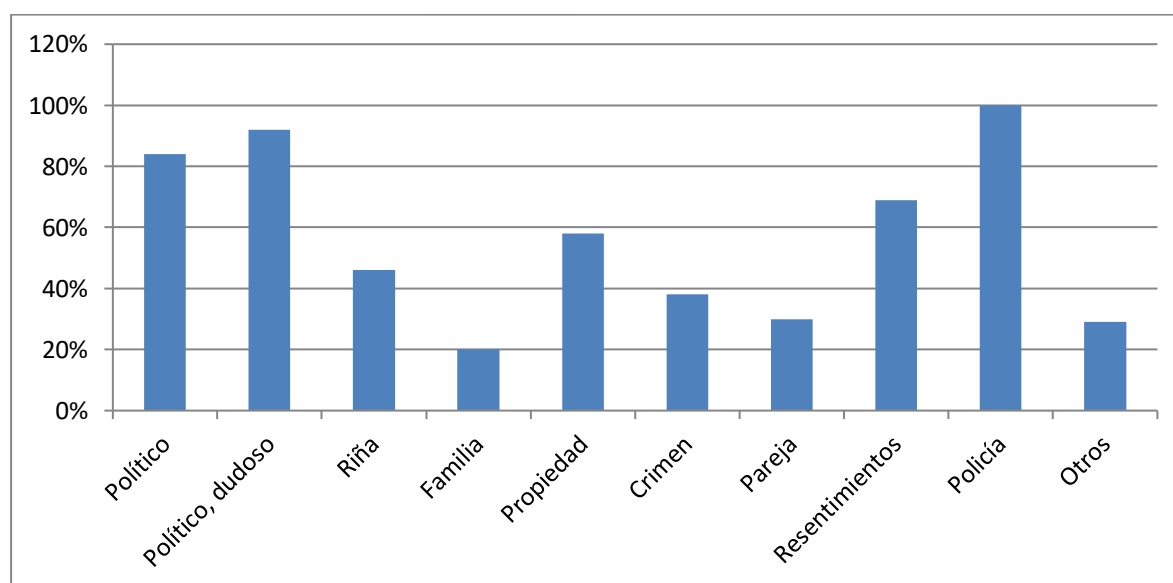
Armas de fuego (cortas y largas)	182	49,19
Armas blancas, con punta o filo (cuchillos, navajas, hachas, azadones)	107	28,92
Armas contundentes (palos, porras, piedras)	41	11,08
Golpes con la mano desnuda o indeterminados	18	4,86
Asfixia (estrangulamiento, ahogamiento)	11	2,97
Veneno	2	0,54
Explosivos	2	0,54
Otros	7	1,89
Desconocido	53	
Total	423	100

Fuente: Elaboración propia a partir de prensa

Las muertes por armas de fuego tienen un impacto muy diferente dependiendo de la categoría en la que se encuadre el homicidio. Se utilizan armas de fuego en todas las muertes cometidas por fuerzas policiales y en la abrumadora mayoría de los delitos políticos. Son el 69% de los casos de muertes a sangre fría por resentimientos y el 58% por motivos de propiedad diferentes del crimen. Varios factores lo explican: el mayor acceso a armas de los participantes en este tipo de enfrentamientos, el cálculo y la preparación previa, la voluntad de matar al oponente.

El porcentaje de muertes por arma de fuego en las riñas es importante pero no mayoritario, del 46%. Esto no quiere decir que se empleasen en cerca de la mitad de las peleas, sino que son más letales; veremos su impacto en otras formas de agresión en el apartado 11.3. Pero el empleo de armas de fuego desciende en la violencia íntima. Sólo se emplean en el 30% de los delitos de pareja, y en el 18% de los que ocurren en el seno de la familia. Estos los cometen personas en su ámbito doméstico o que no suelen portar armas.

Gráfico 7.4.1 Porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego sobre el total de cada una de las categorías, excluyendo los casos en los que no se conoce el medio de muerte



Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

La tasa de homicidios por arma de fuego, siguiendo el patrón general, disminuye en 1925 y 1930 y aumenta el resto de los años, en gran medida debido a la violencia política. Pero si nos limitamos a los homicidios cotidianos, excluyendo los claros o dudosamente sociopolíticos, vemos que la tasa de homicidios por arma de fuego es de 1,79 casos anuales por 100.000 habitantes en 1920, de 1,04 en 1925 y 1930. En 1935 sube hasta 1,55 y en el 1936 de preguerra, que es un año muy violento en general, hasta casi dos casos por 100.000 habitantes.

Tabla 7.4.2. Tasa de homicidios por arma de fuego, en casos anualizados por 100.000 habitantes, y porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego sobre el total de casos en los que el motivo de la muerte es conocida

Año	1920	1925	1930	1935	1936
Tasa de homicidios por arma de fuego	2,31	1,06	1,03	1,61	3,75
Tasa de homicidio por arma de fuego, descontando los homicidios políticos (claros y dudosos)	1,79	1,01	0,99	1,4	1,91
Porcentaje de homicidios con arma de fuego sobre el total de casos conocidos	49,49	46	44,23	39,58	68,06
Porcentaje de homicidios con arma de fuego sobre el total de casos conocidos, descontando los políticos	44,19	44,9	43,14	37,08	55,56

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

A lo largo del periodo la cantidad de muertes debida a las armas de fuego dentro de los homicidios cotidianos de causa conocida permanece sorprendentemente constante, pese a las oscilaciones de la tasa general. En 1920, 1925 y 1930 se sitúa en torno al 44%; en 1935 baja hasta el 37%, quizás porque ese año las muertes dentro del ámbito familiar tienen un peso anormalmente alto. En 1936 vuelve a aumentar hasta el 55,6%. En el crimen común, las muertes por disparos siguen las oscilaciones de la violencia en general.

Nuestra lectura es que no fueron cambios en la disponibilidad de las armas de fuego los que propiciaron tasas de homicidio más o menos altas a lo largo del periodo, pues la proporción de homicidas que empleaba una pistola o una escopeta se mantenía relativamente constante en los delitos comunes. Si los incrementos en las muertes dependiesen de la disponibilidad de armas, en los años con mayor tasa de muertes tendría que aumentar también la proporción de homicidios por disparos. La excepción a esta tendencia es 1936, un año en el que la violencia política y cotidiana crece significativamente, y quizás aumentasen la provisión de armas o la propensión a emplearlas.

En cuanto a las armas blancas, durante el periodo estudiado no parece haber un retroceso significativo en su empleo letal, aunque este pudo producirse en relación a periodos anteriores¹⁰⁷⁴. Su representación en los homicidios oscila entre una cuarta parte y algo más de un tercio de los casos, pero la prevalencia de homicidios en cuanto a la población general se sitúa en torno a los 0,65 casos por 100.000 habitantes cuando hay gobiernos militares, y el doble cuando no.

Tabla 7.4.3 Tasa de homicidios por arma blanca, en casos anualizados por 100.000 habitantes, y porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego sobre el total de casos en los que el motivo de la muerte es conocida

¹⁰⁷⁴ En Ciudad Real, entre 1900 y 1936, “con el transcurso de los años aparecen menos casos delictivos en los que se utilice la navaja, en beneficio de las armas de fuego”, BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2005), p.136.

Año	1920	1925	1930	1935	1936
Tasa de homicidios por arma de blanca	1,27	0,61	0,71	1,55	1,55
Tasa de homicidio por arma de blanca, descontando los homicidios políticos (claros y dudosos)	1,22	0,61	0,71	1,51	1,38
Porcentaje de homicidios con arma de blanca sobre el total de casos con arma conocida	27,27	26	28,85	34,38	25
Porcentaje de homicidios con arma de blanca sobre el total de casos con arma conocida, descontando los políticos	30,23	26,53	29,41	35,96	35,56

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

7.5 “Convencido de que iba a perderla, decidí asesinarla”: la violencia de pareja y ex pareja

La violencia extrema en la pareja se produce, casi universalmente, del hombre hacia la mujer. Encontramos 26 muertes a manos de parejas o ex parejas. De ellos, 21, es decir, el 80,8%, se produjeron de hombres a mujeres. Con los criterios que hemos establecido, las muertes de mujeres incluidas en este apartado serían homologables a las de las de violencia de género que se calculan actualmente¹⁰⁷⁵. Para el conjunto del periodo estudiado, la tasa sería de 0,21 casos anuales por 100.000 habitantes de ambos sexos.

Tabla 7.5.1 Tasa de mujeres muertas por sus parejas o ex parejas, datos anualizados y por 100.000 habitantes

Año	1920	1925	1930	1935	1936
Tasa	0,14	0,18	0,13	0,3	0,31

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Surge la cuestión de comparar esta tasa con la actual de violencia de género. Según la oficina de las Naciones Unidas sobre droga y crimen, la “intimate homicide rate” para mujeres en España fue de 0,2 por cada 100.000 féminas en 2016¹⁰⁷⁶. Si la población a 1 de enero de 2017 era de 46.528.966 habitantes, según la misma fuente, la tasa de homicidio por violencia de género sería de 0,11 por 100.000 habitantes¹⁰⁷⁷. El nivel de feminicidios en el periodo estudiado sería sustancialmente superior al de la España contemporánea, casi el doble.

Pero en todo caso, es baja en términos globales actuales. Siguiendo el informe de la ONU ya mencionado, en 2017 la tasa de mujeres muertas por una pareja íntima era de 0,8 por 100.000 mujeres en el conjunto del mundo; 1,7 en África, 1,2 en América; 0,6 en Europa y 0,5 en Asia¹⁰⁷⁸. Las mujeres muertas por parejas y ex parejas en Galicia durante nuestro periodo de estudio, por tanto, estarían sustancialmente por debajo de la media europea de nuestros días.

¹⁰⁷⁵ “Todo acto de violencia física o psicológica (incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad) que se ejerza contra una mujer por parte del hombre que sea o haya sido su cónyuge o esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad aún sin convivencia”. *Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género*, año 2017, p.2. Para una crítica del concepto de violencia de género desde un punto de vista teórico, CASES SOLA, A. (2017), p. 72, 225.

¹⁰⁷⁶ UNODC (2018), p.24.

¹⁰⁷⁷ Consultado en https://www.ine.es/prensa/cp_2017_p.pdf

¹⁰⁷⁸ UNODC (2018), p.13.

Esto no quiere decir que la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas siguiese esa proporción. En el modelo de dominio patriarcal, la violencia física sería la menos frecuente y se emplearía “cuando las otras formas de sujeción no han logrado su objetivo”¹⁰⁷⁹. El recurso al homicidio será evidentemente mucho más infrecuente que formas de violencia física de menor intensidad, pero resulta difícil definir una relación linear entre ambos parámetros.

Aresti señala que la permisividad a la violencia contra la mujer seguía presente en el primer tercio del siglo XX¹⁰⁸⁰. Esta era una tolerancia en todo caso social. Los códigos penales liberales castigaban la violencia contra la esposa y la mujer, incluso de manera agravada, pero la práctica de los jueces municipales y policial soslayaba o al menos era laxa con los casos más leves debido a la tolerancia social, aunque esta probablemente tendió a erosionarse a lo largo de nuestro periodo de estudio¹⁰⁸¹. En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XIX, “lower courts were more problematic for women, since many magistrates did not want to remove the breadwinner from the home, and so tried to reconcile the couple”; los jueces de los tribunales de más entidad también consideraban que los jurados eran demasiado comprensivos con la violencia doméstica¹⁰⁸². Pero la aceptación legal de la violencia grave o el homicidio marital no existía ni siquiera en el Antiguo Régimen¹⁰⁸³.

Por otra parte, el fenómeno parece tener una tendencia creciente: en 1935 la tasa es más del doble que en 1920, aunque el nivel de homicidios en general de 1920 sea más alto. Deberíamos ser prudentes con las conclusiones, debido al reducido número de casos. Pero este comportamiento de la tasa encajaría con el modelo propuesto por Cases Sola en su estudio para la Dictadura y la Segunda República, según el cual el hombre mataría a su pareja en aquellos casos en los que pierde autoridad ante una mujer que desea librarse de su estado de sumisión. De acuerdo con la tesis de la autora, los casos de violencia de hombres sobre sus parejas femeninas acabados en muerte aumentarían en épocas de cambios políticos y sociales que “hacen que las mujeres tengan más derechos y más libertad”¹⁰⁸⁴.

Tabla 7.5.2 Homicidios de pareja según la motivación atribuida en la prensa

Motivaciones	Número de muertes	Porcentaje	Porcentaje de los conocidos
Crimen pasional (celos o abandono)	9	34,6	50
Defensa propia ante una agresión	4	15,4	22,2
Discusiones por dinero	1	3,8	5,6
Atribuidos a locura	3	11,5	16,7
Otros	1	3,8	5,6
Desconocido	8	30,8	
Total	26	100	

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

¹⁰⁷⁹ CASES SOLA, A. (2017), p. 56.

¹⁰⁸⁰ ARESTI, N. (2010), pp. 52-53.

¹⁰⁸¹ CARBALLO GENDE, E. (2019).

¹⁰⁸² WIENER, M. , pp. 8-10.

¹⁰⁸³ Se entendía que el maltrato injustificado o excesivo era causa de divorcio, si bien no la violencia en sí. Ya en los siglos XVI y XVII los tribunales actuaban, al menos en algunas ocasiones, encarcelando al marido y trasladando a la mujer a un lugar seguro. GIL AMBRONA, A. (2009). El manual para jueces de paz de Mas y Abad da instrucciones para actuar en separaciones cuando no se pueda conseguir la conciliación. MAS Y ABAD, C. (1857), pp. 92-95.

¹⁰⁸⁴ CASES SOLA, A. (2017), pp.178, 195, 270.

La fiabilidad de las fuentes para determinar las motivaciones no es muy alta, así que los resultados en este sentido deben tomarse con prudencia. En un 30,8% de los casos no aparece ninguna descripción de los motivos que llevaron a la muerte, o existen versiones contrapuestas sin que se pueda determinar cuál es la verdadera. Cuando aparece una causa atribuida, en la mitad de los casos es la pasional o sentimental (celos, rotura, temor al abandono o al rechazo por parte de la víctima).

En una parte de los casos, estos celos se presentan como patológicos o anormales. Indalecio Acal mató en 1935 a su mujer y luego se disparó en la cabeza, sin que quede muy claro si se debió a celos, algo que negaba su familia, o a un desequilibrio que se expresaba como manía persecutoria hacia sus familiares¹⁰⁸⁵. De Gerardo Lata, un sastre de Abegondo, se nos dice que estaba “un tanto perturbado” y que “el demonio de los celos le dominaba”. En agosto de 1935 mató a cuchilladas a su mujer y a su hija de once años; otros dos hijos del matrimonio consiguieron esconderse. Sastre se escondió en el monte y volvió unos días después al pueblo para intentar matar a su suegro, acuchillando a un vecino que intentó detenerle¹⁰⁸⁶.

En otros tres casos, el 11,5%, las muertes se atribuyen a la pura locura. En algún caso este parece ser el motivo principal. Los celos extremos o injustificados se consideran también patológicos en esta época y relacionados con un estado biológico anormal, lo que en algún caso pudo aprovecharse en el juicio¹⁰⁸⁷, pero probablemente en otros casos fuese cierto: de Manuel Alonso, que en 1935 ahogó a su mujer en un riachuelo y luego se suicidó, se dice que actuó obsesionado con el diagnóstico de una adivina “quien le predijo grandes desgracias por el mal de ojo de su mujer”¹⁰⁸⁸.

Tomemos el caso de Andrés Rodríguez Freire y su esposa Remedios Naveira. En 1930 estaban separados. Él había vuelto el año anterior de América, arruinado, y recibía de la mujer un dinero para alimentos. Ella regentaba un horno en Betanzos ayudada por el hijo de ambos, Manuel, de 19 años, y vivía con su hermana Concepción y una hija de esta (un rumor vecinal atribuía la paternidad a una violación cometida por el propio Andrés). Un lunes de agosto se presentó por su casa presentando por Manuel, y su mujer no le abrió, diciendo que bastante hacía con alimentarlo. Al día siguiente volvió por la mañana. Según la versión aparecida en prensa, su cuñada lo llamó vago, su esposa, cuando le preguntó por su hijo, le respondió que “es cosa que no te importa”. El hombre las encerró a ambas en un cuarto y las hirió a tiros, suicidándose después. Según el médico encargado de su autopsia, “parece que el finado era un hombre de anormalidad mental”¹⁰⁸⁹. Es interesante constatar que en las violencias cometidas para defender la honra, el prestigio o la propiedad no encontramos una interpretación patológica individual.

La autodefensa es un alegato típicamente femenino. Solo la emplea un homicida varón, pero parece estar presente en tres de las cinco mujeres que mataron a su pareja, y en los dos casos que faltan no tenemos testimonio de las autoras. Florentina García degolló en 1920 a su amante mientras este dormía; alegó que antes éste había intentado clavarle un cuchillo¹⁰⁹⁰. Elena Ramos afirmó en 1935 que había apuñalado a su ex novio cuando lucharon porque él quiso reanudar las relaciones¹⁰⁹¹. En el caso de Camila Rey, su marido dejó escrita una carta en la que expresaba su intención de suicidarse y

¹⁰⁸⁵ FV 26-05-1935, p.9, FV 26-05-1935, p. 4.

¹⁰⁸⁶ LV 20-08-1935, p.1, 23-08-1935, p.1.

¹⁰⁸⁷ Cases Sola señala, para los años 20 del siglo XX, que “en aquella época se generalizó la utilización de la locura” como eximente, y que “fue muy usado por abogados defensores en juicios en los que el marido mataba a su mujer”. CASES SOLA, A. (2017), p.146.

¹⁰⁸⁸ FV 29-01-1935, p. 4.

¹⁰⁸⁹ LV 27-08-1930, p.1, 28-08-1930, p.2

¹⁰⁹⁰ FV 26-02-1920, p.2.

¹⁰⁹¹ FV 25-07-1935, p.14.

matar a su mujer, cosa que intentó con una escopeta y una pistola. Según la reconstrucción de los hechos, ella, que en este caso era superior físicamente, fue capaz de sacarle el arma larga y dispararle de un tiro en la cabeza. Luego se suicidó, invirtiendo la secuencia habitual de los homicidios-suicidios de pareja¹⁰⁹².

En un único caso el homicidio se atribuyó a una disputa por dinero, y el autor parece que también tenía una amante que actuó como cómplice, con lo que no resulta muy difícil encajar la muerte en un contexto pasional¹⁰⁹³. Más tarde veremos otro caso en el que pudieron influir cuestiones monetarias, pero, en todo caso, la tasa de disputas relacionadas con la propiedad es baja y contrasta con la que veremos en los delitos cometidos dentro de la familia pero fuera de la pareja.

Finalmente, hemos clasificado un único delito en la categoría “otros” porque resulta difícil de definir. Una joven llamada Mercedes Fernández fue asesinada en 1920 en Laza por su novio, Cesáreo Abril Alonso, mientras volvía de Verín tras denunciarlo por haber abusado de ella. Alonso estuvo después durante un mes en el monte, dedicándose a mandar cartas amenazantes a las fuerzas vivas de Laza: varios párrocos, el alcalde, el médico municipal, el presidente de la Sociedad Agraria y el director de un medio local recibieron sus misivas. Tras varias batidas, fue emboscado por la Guardia Civil y se entregó¹⁰⁹⁴.

Tabla 7.5.3 Homicidios dentro de la pareja según el tipo de relación entre autores y víctimas

Relación entre los implicados	Número de muertes	Porcentaje del total	Muertes por crímenes pasionales	% de muertes por delitos pasionales (excluyendo casos con motivación desconocida)
Novios o amantes	4	15,4	2	50
Antiguos novios o amantes	4	15,4	3	75
Matrimonio	15	57,7	4	44,4
Cónyuges separados o divorciados	3	11,5	0	0
Total	26	100	9	34,6

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes hemerográficas

Un tercio de las muertes se producen en el marco de relaciones informales; el 15,4% entre parejas de novios, y el mismo porcentaje entre ex novios. La motivación más frecuente en este caso parece ser la puramente emocional: hombres que temen perder a sus parejas, que ven cómo sus novias empiezan a alejarse o que se han visto rechazados. Luciano Fernández mató a su novia con un azadón, tal y como había anunciado a sus amigos, porque ella no quería casarse¹⁰⁹⁵. José Lamas degolló a la suya en 1936, y luego se cortó el cuello; parece que las relaciones entre ambos se habían enfriado¹⁰⁹⁶. Mercedes Carmen García, una tabernera de Vigo prometida en matrimonio, invitó a su ex novio José Magariños a probar el vino de su establecimiento, en el que estaba con su futuro

¹⁰⁹² FV, 12-11-1930, p.1.

¹⁰⁹³ El homicidio de María Viqueira, de Ames. LV, 28-04-1925, p.2, 29-04-1925, p.1, FV 27-04-1925, p.2, 28-04-1925, p.2, 29-04-1925, p.1, 30-04-1925, p.1, 06-05-1925, p.1

¹⁰⁹⁴ LR 08-07-1920, p.2, 13-07-1920, p.3, EP 09-06-1920, p.5.

¹⁰⁹⁵ LR 19-03-1925, p.3, EP 20-03-1925, p.3

¹⁰⁹⁶ FV, 13-02-1936, p.2, FV 15-02-1936, pp. 4.

marido y un hermano de éste. Magariños la mató de una cuchillada, y, al parecer, confesó haberlo hecho por celos: “convencido de que iba a perderla (...) decidí asesinarla”¹⁰⁹⁷.

Pero la mayoría de las muertes, el 57,7%, se producen en el seno del matrimonio. Si nos ceñimos a los casos en los que se atribuye una motivación, el porcentaje de delitos pasionales sigue siendo alto, del 44,4%, pero hay muchos delitos en los que esta es desconocida; en todo caso, son cerca de un tercio del total. En todos los casos se trata de celos o temores de infidelidades, que suelen presentarse como infundados o enfermizos. En otro 11,5% de los casos el homicida y su víctima eran matrimonio, pero estaban separados o, en un caso, divorciados. Aquí no hay crímenes pasionales claros.

Este tipo de crímenes tienen un alto componente pasional; si observamos el conjunto de las muertes violentas, los homicidas casi nunca se suicidan. Escapan del lugar de los hechos, intentan abandonar el país, cuando los detienen niegan su participación, algunos se entregan y confiesan, pero no atentan contra su vida. En cambio, tras el 20,8% de los homicidios de pareja el culpable se suicidó, y el 8,3% lo intentó sin éxito. También vemos, en los años de la muestra, ataques pasionales de hombres que se suicidan sin llegar a matar a su objetivo¹⁰⁹⁸. Un caso parecido ocurrió en Santiago en la década de 1880¹⁰⁹⁹. Este tipo de comportamiento no puede ser casual¹¹⁰⁰, y lo recuperaremos como parte de un análisis más amplio de la violencia sobre la mujer en el apartado 11.4.

En cuanto a las actitudes sociales, los homicidios incluidos en este apartado nunca se justifican ni presentan positivamente, al menos en prensa, y se perseguían por las autoridades. Al entierro de Remedios Naveira acudieron tanto “numerosas mujeres” como el clero, el alcalde, muchos concejales y la Guardia Municipal de Betanzos: el acto fúnebre se convirtió en uno de homenaje público, y lo más parecido a una manifestación de violencia contra la mujer. Pero se trata de un caso extremo. Ella era una mujer trabajadora y apreciada por sus vecinos, y fue asesinada de manera trágica por un hombre al que se consideraba vago, fracasado, quizás adúltero y anormal, del que su esposa se había separado justificadamente.

Otras circunstancias generan otras reacciones. En 1935 el marinero Marcelino Pérez apuñaló hasta la muerte a su ex mujer Rosa Román ante una testigo, alegando, parece que sin demasiado fundamento, defensa propia. Pérez también había emigrado a América, como el asesino de Remedios Naveira, también se había arruinado, y también apareció en prensa el rumor de que le había sido infiel a su esposa, fugándose con su conculhada. Según una versión, seguía reiteradamente a la muerta para pedirle que volviera con él, pero por su propia declaración la insistencia tenía que ver con un dinero que le reclamaba. El entorno, del ayuntamiento de Lavadores, lo consideraba positivamente: según varios testigos, era “hombre de intachable conducta y honrado trabajador”. Sus vecinos creían que había ganado dinero en América y lo había enviado a su mujer, pero que esta y su suegro lo habían defraudado y arruinado¹¹⁰¹. Quizás por ello, cuando el hombre se encontraba detenido se presentó “una crecida manifestación de vecinos de Lavadores,

¹⁰⁹⁷ LV 12-03-1935, p.2

¹⁰⁹⁸ Por ejemplo, dos casos en Lovios y Verín en 1920 en LR, 16-01-1920, p.2, EP, 17-01-1920, p. 5, EP, 06-01-1920, p. 6.

¹⁰⁹⁹ CARBALLO GENDE, E. (2019).

¹¹⁰⁰ Cottier y Raciti, en su estudio sobre el homicidio en Suiza, distinguen entre un tipo de violencia doméstica en la que el agresor corrige a la víctima porque esta le faltó al respeto y los crímenes fatalistas (no siempre de pareja, pero siempre en relaciones íntimas) en las que el homicida siente sentimientos de odio o amor muy fuertes hacia su víctima, y piensan suicidarse después, están relacionados, supuestamente, con las características culturales de la clase media. Relacionan este tipo de delito, y su auge, con la expansión de las características culturales de la clase media. COTTIER, M. RACITI, S. (2013).

¹¹⁰¹ FV 16-06-1935, p. 12, 18-06-1935, p. 10.

hombres y mujeres” ante el Palacio de Justicia para pedir su liberación. Cuando las autoridades se negaron, la concentración se reprodujo unas horas después¹¹⁰².

En la sociedad gallega del primer tercio del siglo XX no había, por tanto, una aceptación social de lo que ahora llamaríamos muertes por violencia de género. La tolerancia hacia las agresiones menores contra la mujer probablemente era más alta, pero las muertes generaban rechazo y a los autores se los consideraba como individuos con comportamiento patológico o anormal. Ahora bien, las valoraciones del entorno dependerían de las circunstancias, y del modo en que se percibiese la adecuación del autor y de la víctima a sus roles de género y honorabilidad¹¹⁰³.

7.6 “Un horrible parricidio se ha cometido”: las muertes en el seno de la familia

Las muertes entre parientes suman 63 casos. De ellos, las víctimas más frecuentes son los niños (49,2%), seguidas por los hombres (39,7%). Los hombres, siguiendo el patrón general, suelen ser asesinados por otros hombres, en casi un 71% de las ocasiones. Algo más de un 8% mueren de parientes femeninas, y algo más de la quinta parte a manos de grupos mixtos de adultos. Aunque, como vimos en un apartado anterior, la muerte a manos de sus familiares era una de las principales causas de homicidio en mujeres adultas, solo suponen el 11,1% de las muertes en el seno de la familia. En los casos en los que sí son asesinadas por sus familiares, en el 83,3% es por un hombre adulto.

En las muertes de niños menores de 14 años lo más frecuente es que los niños mueran al poco de nacer, encajando en la tipología penal de infanticidio. En cuanto a los niños, solo en un 12,9% los mata un hombre. En el 74,2% de las ocasiones mueren a manos de mujeres, normalmente su madre o su madre con la ayuda de otra mujer de la familia. En un 12,9% de las ocasiones los matan grupos mixtos de adultos. No se han registrado muertes dolosas a manos de menores de 14 años. Las dos tipologías más frecuentes de muerte dentro de la familia, por tanto, son la del recién nacido asesinado por su madre, y la de un hombre adulto muerto por otro varón.

Tabla 7.6.1 Muertes a manos de parientes en base al sexo y la condición de adulto de la víctima y el autor o autores (en casos en los que estos datos son conocidos¹¹⁰⁴)

	Porcentaje del total de víctimas	De ellos, % muerto por hombres	De ellos, % de muertos por mujeres	De ellos, % de muertos por grupos mixtos
Hombre adulto	39,68	70,83	8,33	20,83
Mujer adulta	11,11	83,33	16,67	0
Niño menor de 14 años	49,21	12,9	74,19	12,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

¹¹⁰² EP 21-06-1935, p.4.

¹¹⁰³ Cases Sola afirma que los hombres identificados con el arquetipo del Don Juan eran “desacreditados moralmente ya fueran agresores o víctimas”, mientras que los considerados trabajadores y responsables “obtenían la aprobación general y un cierto grado de disculpa cuando eran procesados por un crimen motivado por celos o por la infidelidad de su pareja”. CASES SOLA (2017), p.267.

¹¹⁰⁴ En el caso de un hombre y una mujer adultos sus muertes se atribuyen a parientes pero no se explicita quiénes exactamente.

Determinar la incidencia real del infanticidio es una cuestión compleja. No existe consenso entre los historiadores sobre si el infanticidio era una práctica minoritaria en Galicia y España en esta época, o simplemente no se detectaba¹¹⁰⁵. La muerte o desaparición de un adulto llama la atención, pero la de un niño recién nacido puede ejecutarse con gran facilidad, y, mientras el nacimiento se mantengan en el ámbito familiar, puede ocultarse con relativa sencillez.

Hemos detectado 25 infanticidios en los que sabemos que el niño murió y se culpó a sus familiares, lo que supone una incidencia relativamente baja. A esto se suman otros 3 casos en los que apareció un recién nacido muerto, sin que se acusase a nadie. Entre los casos dudosos que mencionábamos al principio encontramos otras 32 muertes que encajan con este perfil. En este caso concreto, y por la facilidad con la que la muerte de un niño puede clasificarse como dudosa, resulta interesante incluir el número de casos dudosos.

Tabla 7.6.2 Casos de infanticidio, contando solo los considerados como tales e incluyendo las muertes a manos desconocidos y los casos dudosos. En casos absolutos y en tasa de muertes por 100.000 habitantes

	1920	1925	1930	1935	1936
Infanticidios seguros	3	9	7	6	0
Tasa anualizada por 100.000 habitantes	0,14	0,41	0,31	0,25	0
Contando casos de autor desconocido y dudosos	10	12	14	17	7
Tasa anualizada por 100.000 habitantes	0,47	0,55	0,63	0,72	0,53

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Siendo generosos encontraríamos una tasa de infanticidios para Galicia superior a los 0,5 casos anuales por 100.000 habitantes, con una tendencia ligeramente creciente a lo largo del periodo que quizás se pueda explicar simplemente por la mejor cobertura en prensa de los hallazgos de cadáveres de expósitos. Si le aplicamos el criterio más restrictivo que hemos empleado para el conjunto de homicidios, se reduciría a menos de la mitad.

En todos los casos de muertes de niños recién nacidos de los que conocemos el autor está implicada la madre. En aproximadamente tres cuartas partes de los casos realizan el acto solas, a veces con la ayuda de su propia madre como cómplice o colaboradora. Casi siempre se trata de mujeres jóvenes y solteras, y, en varios casos, criadas. En el resto de los casos los cometieron ambos progenitores, o el padre con la aquiescencia de la madre. Resulta difícil acreditar hasta qué punto había tolerancia social hacia el infanticidio. Al menos en algunos casos, como ya hemos mencionado, había colaboración por parte de los parientes próximos, aunque no era universal. A una mujer soltera de Cariño acusada de cocer vivo a su hijo en 1920 la delató su hermana¹¹⁰⁶.

¹¹⁰⁵ CASTRO PÉREZ, X. (2007), SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1992), pp.132-133. BERNALDO DE QUIRÓS, C. (1906), p. 87. Martínez Lacabe ha encontrado varias cartas del juzgado de primera instancia de Pamplona a mediados del siglo XIX en las que se concedía permiso al administrador del Hospital General para enterrar cadáveres de niños recién nacidos hallados en la capital, que “sugieren claramente la posibilidad de que la práctica del infanticidio no fuera un hecho infrecuente”. MARTÍNEZ LACABE, E. (2004), p. 99. Sobre los fundamentos de la práctica en base a la teoría evolutiva, PINKER, S. (2012), pp. 548-560.

¹¹⁰⁶ EP 22-04-1920, p.2, FV 21-04-1920, p.1

En los casos en los que se detuvo a una mujer alguien que sabía que había dado a luz habló, fuese un vecino, una compañera de trabajo, un patrón o una criada. Resulta imposible saber en cuántos casos se tapaba o ignoraba. La reacción vecinal era variable. En 1925, una muchacha de 18 años de la parroquia de Cícere dio a luz a una criatura, la golpeó en la cabeza y la arrojó en una huerta. Unas vecinas la recogieron antes de que muriera y la llevaron a recibir bautismo, pero al parecer no delataron a la chica; a la Guardia Civil llegó la información “por rumores”¹¹⁰⁷. En 1935 los vecinos de la parroquia de Viveiro, en Celanova, no solo delataron a dos vecinos por tener dos hijos y matarlos, sino que los intentaron linchar. Esta hostilidad seguramente se explique porque los autores eran padre e hija entre sí y trataban de ocultar los frutos del incesto.

¿Qué llevaba a las mujeres a matar a sus hijos, y qué creían los contemporáneos que las impulsaba? Nunca se mencionan motivos eugenésicos. En algún caso, como ya hemos mencionado, se trata de ocultar un incesto. En alguna otra ocasión, como la de la casada Manuela Bustelo, que dio a luz cuando su marido llevaba ocho años en América, de tapar un adulterio¹¹⁰⁸. La mayor parte son mozas solteras, alguna de las cuales ya era madre. En estos casos, en la prensa se da por supuesto que se trata de proteger la reputación propia. Ermelinda Lorenzo, soltera, arrojó a su hijo al río y tras ser detenida “confesó su delito, añadiendo que por ocultar su deshonor cometiera ese hecho”¹¹⁰⁹. El término se repite una y otra vez en relación con el infanticidio, pero hay motivos para pensar que era un cliché, ya que, la propia legislación lo ligaba al infanticidio. Es de suponer que todas las acusadas, o su abogado de oficio, lo alegarían. Este era también el caso en Italia: en opinión de Gibbon, esto indica que “women’s diminished responsibility for infanticide and abortion was not a recognition of their right to control their sexuality but a means of protecting family honor”¹¹¹⁰.

La idea predominante en la época parece ser la de que el sentimiento materno era innato y no adquirido. “Sabed que no se puede formar a la madre; la madre es la obra maestra del instinto natural [...] Tengamos valor para añadir que el instinto maternal es más fijo y cierto en el irracional que en la humanidad”, decía Emilia Pardo Bazán en 1892¹¹¹¹. En los diarios encontramos referencias a la madre infanticida como desnaturalizada o monstruosa, o bien una víctima más de una situación que la ha desquiciado. “Sólo circunstancias extremas unidas a la indefensión social pueden conducir a un infanticidio”, afirma un periodista coruñés en 1930, que extiende la culpabilidad a otros factores (“un novio pícaro, un temor al escándalo, la vergüenza de una familia”)¹¹¹². La narrativa predominante en Francia y Austria sobre la infanticida, según Tinková, sufrió varias transformaciones en los siglos XVIII y XIX: “de la mère perverse et cruelle liée au diable, en passant par la victime séduite et abandonnée, en proie à la détresse sociale et économique, jusqu’à l’aliénée dont la volonté est altérée par une mutation physiologique et psychologique”¹¹¹³.

En nuestra opinión, en el fenómeno del infanticidio hay una toma de decisiones, si bien no puramente racional en el sentido de estar exenta de emociones, pero sí en base a un cálculo de coste-beneficio. Como el aborto estaba prohibido, era costoso y peligroso, en los casos en los que el niño se venía como una carga el infanticidio se configuraba como un medio de planificación familiar. Esta lógica es la que explica las muertes realizadas por matrimonios, en las que no había temor a la deshonor.

¹¹⁰⁷ EP, 26-04-1925, p. 3

¹¹⁰⁸ LV 26-12-1920, p.1.

¹¹⁰⁹ FV 23-10-1935, p.4

¹¹¹⁰ En este país, si el infanticidio o el aborto “were committed “to save her own honor,” then the sentence was reduced”. GIBBON, M. (2009), p.29.

¹¹¹¹ PARDO BAZÁN, E. (1892-A), p. 81-82.

¹¹¹² LV, 17-06-1930, p.1.

¹¹¹³ TINKOVÁ, D. (, p.18.

En cuanto a las madres solteras, que son la mayoría, es necesario aclarar lo que suponía un hijo fuera del matrimonio para ver que no se trataba de la deshonra en sí misma. Un niño fuera del matrimonio no conllevaba la exclusión social absoluta, es más, eran muy frecuentes y llevaban siéndolo toda la Edad Contemporánea¹¹¹⁴. Volviendo a las reflexiones de Pardo Bazán sobre la mujer gallega, “es raro que una aldeana vaya al altar sin haber dado al mundo prole”¹¹¹⁵.

Pero para una mujer joven un niño no deseado suponía costes, de los que los más evidentes es la inversión en tiempo y dinero que supone cuidarlo. En Alemania parte de la condena hacia los bastardos parece provenir de que su existencia contribuiría a “strain the poor funds of the village”¹¹¹⁶; en Galicia no parece existir un juicio en este sentido, quizás porque los vecinos, simplemente, no se hacían cargo de los hijos de los demás. También podía dificultarle acceder al mercado matrimonial y hacerle perder oportunidades laborales, en especial en el servicio doméstico. En el caso de un infanticidio cometido por una criada en A Coruña, el periodista afirma que su ama le había preguntado si estaba embarazada antes de admitirla: “¡Ave María, señorita!-negó la chica-. Si tal fuera, ¿cómo había de atreverme a venir a una casa tan seria como esta”. La mujer no era muy observadora, ya que la criada dio a luz poco después y el niño apareció muerto en un cubo. Dejando aparte la transcripción literaria de la entrevista de trabajo, es razonable pensar que los empleadores no querían mujeres con hijos¹¹¹⁷. Es cierto que una mujer podía deshacerse anónimamente de un niño en la Inclusa provincial, pero había que viajar hacia ella tras el parto y, de cualquier manera, muchos de los expósitos morían¹¹¹⁸.

Esta lectura puede parecer excesivamente pragmática. Las mujeres que matasen a sus hijos no percibirían el acto como un cálculo matemático en el que pusiesen la vida del niño en una balanza contra su propio futuro, sino como un suceso fuertemente emocional en el que sentirían pánico, miedo o un rechazo patológico hacia el niño. Pero ambas posturas no son incompatibles, y entender el fenómeno de la depresión post-parto puede salvar la distancia entre ambas interpretaciones¹¹¹⁹. En contra actuarían el miedo al rechazo social si se descubría el crimen, las presiones de una sociedad en la que los niños eran cada vez más valorados y la persecución policial.

Si dejamos aparte los infanticidios, observamos que el resto de homicidios se mantienen en tasas anuales muy similares hasta 1930, mientras que se duplican en los años de la República estudiados. Este comportamiento no resulta fácil de explicar, ya que, descontando los infanticidios, las muertes a las que hemos podido atribuir una motivación suelen derivar de disputas por propiedades y herencias, de ataques de locura o de enfrentamientos personales, casuísticas que presumiblemente serían independientes de la situación económica y política. Tampoco parece probable que las dinámicas sociales cambiasen durante el periodo de una manera tal que generase mayores tensiones dentro de la unidad familiar.

Tabla 7.6.4 Muertos no dudosos por ataques de sus familiares, y tasa anualizada por 100.000 habitantes

¹¹¹⁴ SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1992), p.168.

¹¹¹⁵ PARDO BAZÁN, E. (1890), p. 69. Concepción Arenal postulaba que sería más difícil que una mujer educada y con un oficio remunerador abandonase a su hijo o cometiese infanticidio: “si su imaginación y sus instintos tuvieran el contrapeso de una razón más cultivada y de una ocupación más racional, ni sería débil tantas veces, ni abandonaría tantas el fruto de una unión ilegítima, por la imposibilidad de sostenerla sola”. ARENAL, C. (1869), p. 76.

¹¹¹⁶ SCHULTE, R. (1997), p. 80.

¹¹¹⁷ LV 17-06-1930, p.1, FV 17-06-1930 (7)

¹¹¹⁸ En la Inclusa de Pontevedra, más de la mitad de los niños ingresados murieron durante la mayor parte de los años del último cuarto del siglo XIX. RODRÍGUEZ MARTÍN, A. M. (2008), pp. 360-361.

¹¹¹⁹ PINKER, S. (2012), pp. 549-551.

	1920	1925	1930	1935	1936
Muertes	5	6	6	14	7
Tasa	0,24	0,28	0,27	0,59	0,53

Fuente: Elaboración propia a partir de datos hemerográficos

Descontando los infanticidios, en los que la violencia va por definición hacia los descendientes, es aproximadamente igual de probable que vaya hacia arriba o hacia abajo en el árbol familiar, o que se produzca entre iguales. Aproximadamente en un 30,5% de los casos el homicida mató a un ascendiente biológico o político: un padre, un suegro, un padrastro... En otro 27,8% recorrió la relación inversa, y en un 30,6% de los casos se dio entre individuos con la misma relación de parentesco entre sí (primos, hermanos, cuñados). Las muertes entre familiares biológicos son sustancialmente más frecuentes que entre los políticos, y la violencia entre miembros cercanos, con un solo eslabón de parentesco, que aquella entre otros más lejanos, aunque hay algunos ataques entre primos y tíos y sobrinos. No hay nietos que maten a sus abuelos ni viceversa; quizá la lejanía de los ciclos vitales explique la ausencia de conflictos.

Tabla 7.6.5. Homicidios en familia, descontando los infanticidios, según la relación entre el homicida y la víctima (descontando dos casos en los que la relación no se explicita)

El fallecido era	Muertos	Porcentaje	El fallecido era	Muertos	Porcentaje
Ascendiente de su homicida	8	22,22	Descendiente de su homicida	8	22,22
Ascendiente político de su víctima	3	8,33	Descendiente político de su víctima	2	5,56
Fallecido y víctima tenían la misma relación (hermanos, cuñados, primos)	11	30,56	Otros tipos de relación, combinaciones o muertes por parte de parientes inespecíficos	4	11,11

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

En cuanto a las motivaciones, encontramos ocho casos a los que no podemos asignar con cierta seguridad ningún motivo al autor. “Un horrible parricidio se ha cometido en Antas de Ulla”, titulaba *El Progreso* en noviembre de 1935, después de que Manuel Guerreiro matase con disparos y heridas punzantes a su padre de 62 años. Sin embargo, no sabemos los motivos de la muerte, más allá de que la víctima sostenía con sus hijos altercados “por cuestiones de familia” y que el homicida, tras esconderse en casa de una vecina, intentó suicidarse¹¹²⁰.

Entre los restantes la motivación más frecuente, que se halla en un 46,7% de los casos y que dejó 14 muertes en nuestro periodo de estudio, son los asesinatos debidos a cuestiones de propiedad o intereses. En alguna ocasión es un simple robo que por azar se cometió dentro del domicilio familiar. El zapatero Eugenio Costas fue asesinado con un azadón en 1935 por su hijo Jesús, que, después de intentar desviar infructuosamente las sospechas confesó a las autoridades que había cometido el delito “con el propósito de robarle una cadena de oro, un reloj” y un documento al “que el criminal llamaba el cheque de los mil pesos” y que llevaba en la cartera. Este resultó ser un billete austríaco de mil coronas retirado de la circulación¹¹²¹.

¹¹²⁰ EP 21-11-1935, p.6, FV 23-11-1935, p.2.

¹¹²¹ FV 12-02-1935, p. 12, 15-02-1935, p.2, 16-02-1935, p. 10.

Más frecuentemente, se trata de temas de herencias, herencias que no se reciben, que se consideran injustas o que no acaban de llegar. Manuel Díaz, un campesino de 29 años, discutía frecuentemente con su madre en relación al legado de esta. En 1920 le atravesó el cuello de un disparo y se suicidó¹¹²². Cuando apareció estrangulado en un monte de Lousame el anciano Manuel Maroñas, recayeron “fundadas sospechas” de la autoría sobre su hijo y esposa, pues “venían exigiendo al anciano muerto que les legase sus bienes; a lo cuál él se oponía por no perjudicar a otro hijo que tiene en América”¹¹²³. A Camilo Salgado lo mató su cuñado en 1935 a tiros por una disputa relacionada con la herencia que había recibido su mujer¹¹²⁴.

Hay que señalar que, en el ámbito familiar, las disputas por cuestiones familiares son muy difíciles de distinguir de las disputas, resentimientos personales y fricciones. Juan Álvarez, un hombre de 22 años del municipio de Pantón, disputaba frecuentemente con su suegro “por cuestiones de interés”. Un domingo en el que había bebido surgió de nuevo la discusión, cogió un hacha “de las de partir leña” y le abrió la cabeza a su padre político¹¹²⁵.

Otro 26,7%, ocho en total, se achacan a ataques de locos o acciones para defenderse de sus agresiones, bien se trate de episodios de vesania sin precedentes o al comportamiento habitual de dementes violentos a los que se mantenía en casa porque los familiares no querían o no podían internarlos. A Ramón Taboada, un hombre de 36 años de Sobrado dos Monxes, su familia lo tenía por un loco de atar, literalmente. Lo mantenían amarrado y “lo vigilaban de cerca, formando turnos”. En febrero de 1935 se escapó y mató a su cuñado a hachazos. “A duras penas se logró reducirle de nuevo al loco, que sigue amarrado y al que no se recluyó”¹¹²⁶. También arrebatos de desesperación. El 9 de marzo de 1936 Ángel Vázquez, un joven agricultor de Melide, dejó a sus tres hijos y a su mujer Josefa Segade en su modesta vivienda, “casi una choza”, para ir a apacentar el ganado. Cuando este regresó encontró “a sus hijitos degollados, en un charco de sangre, y a la desnaturalizada matadora en un rincón”. De la mujer, “que está como inconsciente”, se supuso que había sufrido un trastorno mental, y “pudo influir en ello el hecho reciente de haber sido lanzado el matrimonio de un lugar acasado (...). Desde entonces, su situación ya difícil se hizo más angustiosa y crítica”¹¹²⁷.

Quedan ocho casos se deben a diversos motivos, incluidas peleas de borrachos y discusiones con resultados letales. Curiosamente, y aunque seguramente el maltrato en el ámbito doméstico era frecuente, no encontramos muertes debidas a él, y solo en un par de casos alusiones a malos tratos reiterados por parte de la víctima. A Jesús Vila, un labrador de Ribeira, lo golpeó su hija Ramona por la espalda con un fungueiro, y cuando se revolvió su hijo Santiago lo remató a hachazos en la cabeza. Pero en la planificación y encubrimiento del crimen participaron el tercer hijo y la esposa del muerto, y antes de la comisión del delito ya habían realizado dos intentos fallidos de acabar con su vida. Declararon que el muerto “que tenía un carácter violentísimo, los maltrataba brutalmente, llegando cierto día a obligarles a tirar del arado”, si bien lo que los determinó a matarlo fue al parecer que “pretendía que su esposa le autorizase para vender unas fincas heredadas de su padre”¹¹²⁸. Francisco Lorenzo confesó haber matado de un tiro a su padre de 70 años en Veá, añadiendo que “no estaba apesadumbrado de haberlo hecho, porque maltrataba frecuentemente a

¹¹²² LV 30-11-1920, p.2, FV 30-11-1920, p.2, EP 01-12-1920, p.2.

¹¹²³ LV 12-11-1925, p.2.

¹¹²⁴ LR 11-10-1935, p.6, LV 11-10-1935, p.5, FV 16-10-1935, p.4.

¹¹²⁵ EP, 09-05-1936, p. 6, LV 09-05-1936, p. 8.

¹¹²⁶ LV, 08-02-1935, p.1, EP 06-02-1935, p.3.

¹¹²⁷ LV, 10-03-1936, p.1.

¹¹²⁸ El caso inspiró a Francisco Camba a realizar una de sus crónicas humorísticas. LV 07-09-1920, p.1, 09-09-1920, p.1, 16-09-1920, p.1.

su madre”. Poco tiempo después se suicidó en su celda, apuñalándose en el cuello y lanzándose sobre una hoguera improvisada que había hecho con su catre¹¹²⁹.

El resto responden al amplio conjunto de agravios que pueden producirse dentro de una familia. Dolores Vigo le ofreció una taza de cascarilla con arsénico a su cuñado y hermanastro Ricardo Veiga después de que este abandonara a su hermana¹¹³⁰. Manuel Souto le pegó un tiro en la cabeza a su tío en la feria de Cachafeiro; “declaró que se vengaba de una agresión de que fue víctima un hermano suyo en Asturias”¹¹³¹. Los intentos de suicidio son mucho menos frecuentes en los homicidios entre parientes que en los casos que se producen en pareja. Los autores se mataron en el 6,3% de los homicidios, y lo intentaron en el 1,6% de los casos.

7.7 “Enemistados por cuestión de intereses”: los homicidios por disputas acerca de la propiedad

Un total de 25 muertes se produjeron por enfrentamientos derivados de discusiones acerca de la propiedad de un bien o una suma en casos diferentes al simple robo. En tres ocasiones el motivo del desencuentro es una deuda, una dote o un embargo.

En otro, en el que las motivaciones y la autoría no están muy claras, podría tratarse de una disputa acerca de la herencia. En 1925 apareció muerto en su casa de Vilasantar el labrador Pedro Pereiro, con un tiro en la sien y un revólver en la diestra. Como no había casquillo, el arma no tenía señales de haber sido disparada, y faltaban 50 pesetas, se descartó que se tratase de un suicidio. Fue detenido un vecino llamado Manuel Sánchez, y hermano de la novia del muerto. Además de que sumaba varias condenas por robo, estaba enfrentado a que Pereiro porque temía que se convirtiese en perceptor de la mejora familiar, y deseaba “ir él, y no Pedro, a vivir en la casa de los padres, con el propósito de heredar a la muerte de los mismos, la casa y otros bienes”¹¹³².

Estos son casos excepcionales. En el resto de ocasiones en las que se menciona el bien objeto de la disputa, se trata de la propiedad de una parcela, el derecho de riego sobre una finca, el aprovechamiento de un pasto o un muro. Es un tipo de delito, por lo tanto, eminentemente rural y ligado al aprovechamiento agropecuario de la tierra, en el que se resuelven violentamente disputas que, de afrontarse pacíficamente, deberían pasar por los juzgados de lo civil. Predominan los jóvenes y adultos, aunque también hay enfrentamientos entre ancianos. En Poio, en 1935, dos hombres de 68 y 72 años discutieron acerca de un marco, y durante la riña “el Manuel dio al Agustín una puñalada en un brazo y a consecuencia de la herida sufrida falleció” de septicemia al poco tiempo¹¹³³.

Tabla 7.7.1 Homicidios por disputas de propiedad en Galicia y tasa anualizada por 100.000 habitantes

	1920	1925	1930	1935	1936
Homicidios	3	4	7	5	6
Tasa	0,14	0,18	0,31	0,21	0,46

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

¹¹²⁹ FV 03-02-1935, 24-02-1935, p.2.

¹¹³⁰ LV, 21-08-1925, EP 20-08-1925, p.3.

¹¹³¹ EP 17-09-1930, p.2.

¹¹³² LV, 18-12-1925, p. 1.

¹¹³³ FV 06-11-1935, pp. 2, 6.

Los enfrentamientos de este tipo presentan una tendencia creciente, y, al igual que en otros apartados, en 1936 alcanzan su punto más alto. En este caso, puede que el aumento sea un sesgo de la fuente. Los diarios de los años 30 tienden a dar más información que los de la década anterior de los crímenes, y por tanto es posible que delitos debidos a disputas acerca de la propiedad se hayan clasificado como riñas o en el apartado de desconocidos. Por otra parte, la cantidad de delitos es tan baja que los datos son muy volátiles.

Si observamos la distribución por provincias vemos que hay más muertes por disputas de propiedad, en relación a la población, en las provincias orientales, en la que la proporción de población dedicada al sector primario es mayor y la población es un tanto más violenta en lo referente a los homicidios no sociopolíticos. En Lugo y Ourense la tasa duplica a la de A Coruña, si bien es un tipo de delito infrecuente. De media hay algo más de un caso en cada provincia cada año.

Tabla 7.7.2 Homicidios por cuestiones de propiedad por provincia, en número de muertes y tasa de homicidios anualizada por 100.000 habitantes para el conjunto del periodo estudiado

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Muertes	6	6	7	6	25
Tasa	0,17	0,28	0,36	0,23	0,25

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Emilia Pardo Bazán imagina en *Reconciliados* a dos ancianos labriegos que se enfrentan por una pequeña parcela de tierra, primero con discusiones, luego en los tribunales, más tarde con sabotajes nocturnos, y, finalmente y con resultado letal para ambos, con horquillas y sachos. Esa parcela, nos dice, no les iba a dar de comer a ninguno, pero por ganarla “hubiesen sacrificado con gusto el resto de lo que tenían”, pues “no era ya el pedazo; era su honra, era su dignidad, era su amor propio, era, sobre todo, su odio insatisfecho”¹¹³⁴. La vida imita a la literatura. En Navia de Suarna, en 1930, los vecinos Manuel Saavedra y Faustino Fernández, “enemistados por cuestión de intereses”. Faustino murió “acribillado a puñaladas”, y “momentos después fallecía también en el mismo sitio, con la cabeza destrozada con una piedra, el Manuel Saavedra”¹¹³⁵.

No somos literatos y no podemos inventar lo que pasó por la psique de estos dos rivales mortales. Pero las características de los crímenes comprendidos en este apartado apuntan a que la intuición de la escritora era correcta. Las muertes por disputas por la propiedad no eran instrumentales ni actos calculados para maximizar la propiedad, sino actos con fuerte carga emocional. Los choques por el aprovechamiento de bienes materiales se convertían, para una parte de la población rural, en cuestiones de honra en los que se cifraba su autoestima y su prestigio, y sus oponentes, en enemigos personales. Las dinámicas de algunos enfrentamientos en los que los autores carecían de una autoridad neutral que pudiese imponerse sobre ambos llevaban a que se produjesen escaladas de hostilidad, en las que la violencia acababa siendo desproporcional al bien material en cuestión.

Así, los homicidas acaban matando por derechos difusos y por aprovechamientos nimios. Manuel Rodríguez, de 73 años, mató a su conculhada María Liñares, de 64, de un garrotazo en la cabeza, una muerte atribuida “a una antigua cuestión que tenían los dos ancianos acerca del derecho preferente a la utilización de las hierbas del monte donde tuvo lugar el crimen”¹¹³⁶. A Pedro Pereira le pegaron

¹¹³⁴ PARDO BAZÁN, E. (1888), pp.106-107.

¹¹³⁵ FV 12-07-1930, p. 10.

¹¹³⁶ LV, 20-05-1936, p. 7.

un tiro en la frente por regar una finca con un agua que una familia vecina le disputaba¹¹³⁷. Sin duda, disputas de este tipo caldeaban el ambiente para otros homicidios en tabernas o bailes, e innumerables rencillas y odios sin resultados letales. Citando a Mathieu, la violencia en el rural a veces es paroxística, pero lo que marca la cotidianeidad rural es “la violence rentrée, la violence de la non violence, du consensus conformiste et du manque d’expression”¹¹³⁸.

En el caso del robo podemos clasificar la violencia como instrumental, en el sentido de que el autor la emplea de una forma que, racionalmente, le permitirá conseguir un objetivo. Pero la mayoría de los homicidas por disputas de propiedad sufren una pérdida neta tras cometer su crimen: son detenidos y condenados (o al menos han de pasar por un proceso costoso y lleno de molestias), o tienen que darse a la fuga. Al menos en las sociedades occidentales modernas, en las que existe un sistema policial y de justicia medianamente eficiente, recurrir a la violencia tiende a comportar pérdidas a largo plazo, y sin duda era el caso de la Galicia de inicios del siglo XX¹¹³⁹. Los hermanos Gabriel y Francisco González, eran convecinos de Manuel Núñez, y en 1930 lo mataron en Verín de diez puñaladas después de discutir acerca de la servidumbre de una finca. Luego desaparecieron; como la finca en cuestión estaba a una veintena de metros de la frontera, se supone que pasaron a Portugal, ruta de buena parte de los homicidas ourensanos. Si consiguieron esquivar la captura, les esperaban al menos un par de décadas de exilio en un país extranjero, perdiendo el disfrute de las propiedades que sí tenían, a cambio de ganar una discusión.

La explicación de esta violencia, por tanto pasa por introducir factores emocionales. Buena parte derivan de riñas, y el homicida, simplemente, está enfadado. Amadeo Lino Fernández, un hombre “de carácter provocador”, discutió en una romería con otro hombre por la propiedad de una finca el 15 de enero de 1930. El hijo de su oponente y otros le dieron algunos golpes. Fernández se vengó a navajazos esa misma noche apuñalando hasta la muerte a un tal Mariano Estévez, al que confundió con uno de los que habían participado en la paliza¹¹⁴⁰.

En la mayoría de los casos parece que el homicidio fue el culmen de una dinámica de confrontación y de una relación personal de enemistad. Janina Novoa golpeó por la espalda con un hierro a Avelino Rodríguez, dueño de una finca colindante a la suya, cuando entró en su propiedad, y este murió poco después. La mujer creyó que “iba a desviarle un regato de agua que pasa por su finca”. Entre ambos “existían viejos resentimientos, pues ya en otras ocasiones tuvieron algunas riñas”¹¹⁴¹. La relación de Francisco Vázquez, de la parroquia lalinense de Palmou, y sus vecinos, se había agriado debido a un pleito pendiente por la servidumbre de un camino, así que en 1930, en vez de pedirles una máquina de majar que varios de estos tenían en sociedad, se trajo una de otra parroquia. No les pareció bien. En el tiroteo subsiguiente, Francisco Vázquez acabó con un disparo en el escroto, y su hermano, que había venido a ayudarlo en la faena, murió de cuatro disparos¹¹⁴².

7.8 “Por cien pesetas matan a un hombre”: las muertes en la comisión de delitos, robos y atracos

¹¹³⁷ LV, 26-08-1925, p.1, 27-08-1925, p.1

¹¹³⁸ MATHIEU, N. (2005), p. 364.

¹¹³⁹ El autor extiende la falta de efectividad de las soluciones violentas a la mayoría de formas de agresión instrumental, como el robo, el crimen organizado y el tráfico de drogas, que quizás fuesen más discutibles. BAUMEISTER, R. F. (1997), pp.111-120.

¹¹⁴⁰ FV, 17-01-1930, p.1. Juicio en FV 17-07-1930, p.1.

¹¹⁴¹ FV 11-06-1935, p. 7.

¹¹⁴² FV 02-09-1930, p.2, 04-09-1930, p.2.

Las muertes durante la comisión de delitos contra la propiedad suponen 0,24 casos por 100.000 habitantes a lo largo del periodo estudiado, una cifra equiparable a los enfrentamientos por cuestiones de propiedad que hemos visto en el apartado anterior. Hay, eso sí, una fuerte heterogeneidad entre los diferentes años. Se corresponden enteramente por delitos contra la propiedad y constituyen el grueso de lo que podríamos llamar homicidios derivados de la actividad criminal, junto con dos asesinatos atribuidos a sicarios ocurridos en 1920¹¹⁴³ y un homicidio en A Coruña que, quizás, tuviese algún tipo de relación con el tráfico de drogas. En 1930 el fenómeno ya era conocido¹¹⁴⁴ y el Gobierno estaba tomando medidas para controlar este mercado¹¹⁴⁵. Pero, más allá del caso ya mencionado, no hemos visto constancia de tráfico de estas sustancias en Galicia en este periodo. Posiblemente hubiese consumo, pero por cauces legales o en cantidades muy pequeñas, que no llamaban la atención¹¹⁴⁶.

Junto con las muertes por enfrentamientos políticos, las ocurridas por delincuencia son las más sensibles a la Dictadura y los gobiernos militares. En 1920, 1935 y 1936 oscilan en torno a las 0,35 por 100.000 habitantes; en 1925 y 1930, en torno al 0,05. El patrón resulta tan claro que es difícil atribuirlo a una coincidencia.

Tabla 7.8.1 Homicidios derivados de actividades delictivas en Galicia por año, y tasa en casos anualizados por 100.000 habitantes

Año	1920	1925	1930	1935	1936
Homicidios	8	1	1	9	5
Tasa por 100.000 habitantes	0,38	0,05	0,04	0,38	0,38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la prensa

Las diferencias entre provincias no son destacables. A Coruña presenta las menores tasas y Lugo las mayores, pero el escaso número de casos no permite establecer un modelo. Hay que salientar, eso sí, que no parece haber un patrón sustancialmente diferente entre las provincias más desarrolladas económicamente y las más rurales.

Tabla 7.8.2 Crímenes por provincia y tasa en cifras anualizadas por 100.000 habitantes

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Muertes	6	7	4	7	24
Tasa	0,17	0,32	0,21	0,27	0,24

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

¹¹⁴³ FV 28-08-1920, p.2, EP 09-11-1920, p.1.

¹¹⁴⁴ La prensa gallega hablaba ya de la “guerra a las drogas” en Cuba, con estupefacientes comparados con los que “la afición al alcohol no es nada”: cocaína, heroína, morfina y opio. LV, 10-01-1930, p. 5.

¹¹⁴⁵ En julio se crearon doce regiones en España para controlar el tráfico de estupefacientes. Las provincias gallegas, junto con León y Oviedo, constituyeron la undécima. LR, 22-07-1930, p. 6. En agosto se obligó a los almacenistas que quisiesen negociar con estas sustancias a pedir autorización al presidente de la junta Social y Administrativa de la Restricción de Estupefacientes, en virtud de una Real Orden que desarrollaba el artículo 35 del R. D. nº 1.685. LR, 14-08-1930, p.1.

¹¹⁴⁶ Sobre el consumo en esta época, ESCOHOTADO, A. (2008).

En la amplísima mayoría de los casos, un 87,5% por ciento, los homicidios fueron cometidos por delincuentes que mataron a su víctima para robarle o cuando esta se resistió a un atraco. Las motivaciones son exclusivamente atentados contra la propiedad inmueble: la práctica del secuestro a cambio de dinero parece desconocida en la Galicia de la época¹¹⁴⁷.

En otro 12,5% de las ocasiones, es decir, tres casos, las muertes se produjeron cuando un ciudadano trató de evitar un crimen. En 1920, un hombre de Tui mató de un estacazo a un portugués que estaba robando maíz en el hórreo de un vecino; al parecer, el ladrón le disparó cuando le dio el alto¹¹⁴⁸. En 1930 un joyero coruñés que tenía por costumbre dormir en la tienda, pues le habían advertido de que podía ser atracada, repelió a tiros a tres ladrones que entraron en su negocio de madrugada y, según él, trataron de sujetarlo; uno de ellos, un delincuente habitual, recibió dos balas en la cabeza¹¹⁴⁹. La tercera muerte la causó Benigno López, conserje en 1936 de un mercado municipal coruñés y antiguo guardia municipal. Un hombre que según él venía siguiéndolo desde hacía tiempo se le acercó con la mano metida en el bolsillo, el conserje creyó que llevaba un arma y lo mató a tiros. López tenía la costumbre de llevar encima siempre todo su dinero, la supuesta arma del atracador nunca se encontró y según algunos el homicida sufría manía persecutoria; por otra parte, el muerto era un delincuente con antecedentes¹¹⁵⁰. En definitiva, las muertes por parte de ciudadanos son excepcionales y no siguen un patrón común.

De entre la veintena de muertes producidas por atracadores, el 38,1% se produjeron en el domicilio de la víctima o después de asaltar este, y el 4,8% en una tienda que regentaba el fallecido y que se encontraba en la casa donde vivía. El caso más representativo del primero es el asalto en pequeños grupos a una casa aislada, habitada por alguien de buena posición económica y a ser posible débil. La mayoría de los muertos eran ancianos. Una cuadrilla de cuatro hombres asaltó a una pareja mayor en diciembre de 1920, en Forcarei. A ella solo la mantuvieron bajo vigilancia mientras robaban, pero el hombre apareció desnudo y atado a un árbol a un kilómetro de la casa, con la boca tapada. Murió al poco tiempo, de frío según los médicos¹¹⁵¹. Otra gavilla, ésta de cinco atracadores, asaltó un domicilio de una parroquia de Coristanco en mayo de 1935. A Juan López, de 70 años, lo degollaron, y a su mujer la dejaron gravemente herida¹¹⁵².

Los robos en cuadrilla en domicilios se realizaban a través de la pura violencia o mediante estratagemas simples. En 1920, Juan Morgán y María Otero llamaron por la noche a la puerta de un matrimonio acomodado de la parroquia de San Jorge de Veá (A Estrada), pidiendo caridad. Cuando les abrieron, mataron al hombre a golpes, “amarraron a la mujer con unas cuerdas, obligándola a decir dónde guardaba el dinero”. La dejaron malherida y quizás también murió. Luego huyeron con 525 pesetas y un jamón¹¹⁵³. En otro atraco en diciembre de 1935 los atracadores esperaron a que las hermanas del dueño de la casa salieran a recoger ganado; dos de ellas se quedaron sujetándolas mientras que los otros tres entraban en la vivienda, robaban y mataban a Manuel Arias, de 70 años¹¹⁵⁴. En los casos citados los asaltantes trataron con menos violencia a las mujeres, pero no siempre era así. En 1920 encontramos a una anciana que vivía sola asfixiada por un mendigo, con la

¹¹⁴⁷ No parece un tipo de crimen muy frecuente en la España de nuestro periodo de estudio, aunque no desconocido literariamente, como vemos en *La corte de los Milagros* de Valle-Inclán. En Huesca hubo algunos casos en las décadas de 1870 y 1880, pero, según se deduce de un testimonio contemporáneo, eran casos extraordinarios. FRÍAS CORREDOR, C. (2000), p.105.

¹¹⁴⁸ FV 26-02-1920, p.2.

¹¹⁴⁹ LV, 23-09-1930, p.2.

¹¹⁵⁰ LV, 27-05-1936, p.2.

¹¹⁵¹ FV 05-12-1920, p.1, 14-12-1920, p.2.

¹¹⁵² LV 21-05-1935, p.1, 24-05-1935, p.5, EP 31-05-1935, p.4.

¹¹⁵³ EP 04-08-1920, p.2.

¹¹⁵⁴ LV 28-12-1935 (8)

complicidad de dos vecinos¹¹⁵⁵, y en 1935 Benita Barro, de 84 años, fue asesinada a machazos por un hombre de 44 con el que tenía amistad, para robarle¹¹⁵⁶.

Todos los asaltos a domicilios son en zonas rurales, y el de la tienda, en las afueras de Santiago. Esto puede explicarse por motivos pragmáticos. No solo vivía más población en las zonas rurales que en las urbanas, sino que el poblamiento disperso y sin fuerzas de seguridad cerca acercaba los asaltos. Las cantidades oscilan entre unos cientos y unos miles de pesetas.

Aquí debemos hacer un inciso. En la época de la que hemos extraído las muestras, la era de auge del bandolerismo y de los grandes robos en gavilla había terminado. Siguiendo el trabajo de Beatriz López Morán, este fenómeno, que ya existía en el Antiguo Régimen, aumentó tras la Guerra de la Independencia, y fue disminuyendo a partir de 1835, al ser perseguida por el Estado a través del ejército y sus nuevas instituciones: gobernadores de provincia, municipios, jueces de instrucción, y la Guardia Civil, que tiene un papel primordial¹¹⁵⁷. El bandolerismo gallego no fue un fenómeno de bandas permanentes y militarizadas que se refugiaban en las montañas, como en Andalucía, sino de grupos que se reunían para dar un golpe y después se disgregaban. Lejos de la hipótesis del bandido social de Hobsbawm¹¹⁵⁸, o de grupos organizados por élites en los extremos del Estado, según la propuesta de Blok¹¹⁵⁹, estaban dirigidas por “pobres, vagos, marginados, dislocados”¹¹⁶⁰ e integradas casi siempre por lumpen¹¹⁶¹; por parte del campesinado había una “resistencia permanente”, una “generalizada hostilidad”¹¹⁶².

Falta un estudio centrado en el fenómeno a partir de 1850, periodo para algunas consultas parciales nos han mostrado, sin embargo, que existían tanto los robos nocturnos a casas sin violencia¹¹⁶³ como los asaltos por grupos violentos de tamaño mediano o reducido (probablemente planificados y dirigidos a personajes de buen pasar)¹¹⁶⁴ y los robos de caminos¹¹⁶⁵.

¹¹⁵⁵ FV 30-11-1920, p.2, 03-12-1920, p.1

¹¹⁵⁶ FV 09-02-1935, p.2

¹¹⁵⁷ LÓPEZ MORÁN, B. (1995), pp.29, 126, 274, 355.

¹¹⁵⁸ El bandolerismo social sería un fenómeno de las sociedades agrícolas invadidas o compuestas por “campesinos y trabajadores sin tierra oprimidos y explotados por algún otro”; el bandolero se encuentra fuera de la ley, pero permanece “dentro de la sociedad campesina”, que lo considera un héroe; le resulta “impensable robar las cosechas de los campesinos”; lucha contra los abusos y las injusticias y puede convertirse en “símbolo y adalid de la defensa del orden tradicional frente a las fuerzas que lo distorsionan y destruyen”. HOBSBAWN, E. J. (1976), pp. 9-23. No encontramos estos rasgos en los criminales gallegos de nuestro periodo, y tampoco el perfil de “cuasi-bandidismo” de “expropiadores” que el autor desarrolla en las pp. 139-163 de la obra ya citada.

¹¹⁵⁹ Formulada en su libro *Honor and violence*, de 2001, citado en SPIERENBURG, P. (2008), p. 140.

¹¹⁶⁰ LOPEZ MORAN, B. (1995), p. 122, 165

¹¹⁶¹ *Ibid*, pp. 348-349

¹¹⁶² *Ibid*, p. 108, 110, 129, 164

¹¹⁶³ Agustín Seijas, maestro de instrucción primaria que a las alturas de 1883 ya había sido procesado en seis ocasiones (dos por vagancia) fue juzgado de nuevo acusado de entrar en la casa del juez municipal de Cerceda reventando una ventana, robarle 28.000 reales y hacer desaparecer algunos documentos. Seijas había sido escribiente del juez, y había sospechas de manejos turbios entre ellos. También subsiste el asalto de caminos.” *La Gaceta de Galicia*, 18-05-1883.

¹¹⁶⁴ Contra la casa del sacerdote de Gorgullos (Tordoia) “varios hombres armados” intentan un asalto en 1883, y la prensa informa de que “es la segunda vez que los ladrones le acosan”. *La Gaceta de Galicia*, 10-09-1883. En Toques, en febrero de ese año 1883, asaltan una casa “ocho o diez” enmascarados con “escopetas, revolvers y pistolas”, maltratando a la dueña y atando a los moradores de la casa; se llevan 4.000 reales y “porción de objetos que en la casa había”; en los días siguientes cae la banda, que parece que ya había actuado en otras ocasiones, con detenciones en las inmediaciones y Pontevedra, incluyendo a gente de Agolada y Santiso. *La Gaceta de Galicia*, 27-02-1883, 02-03-1883. En septiembre de 1883, en un atraco en la casa del “hacendado labrador” Don Antonio García en el que le roban 40.000 reales, los ladrones “debían estar

En los casos expuestos en este trabajo encontramos algunas continuidades con el bandolerismo descrito por López Morán: por ejemplo, un objetivo preferente del asalto siguen siendo las viviendas rurales, pues al estar aisladas facilitaban la comisión de un golpe sin la intervención de terceras personas y retardaban la persecución. Sin embargo, no parece haber golpes de grandes bandas, una tendencia que ya se había apreciado anteriormente (a partir de 1834 se hacen más pequeñas y menos violentas¹¹⁶⁶) y que, creemos, responde a la presión policial. Los jabalíes, en las zonas en las que hay más cazadores, se hacen más pequeños y adquieren hábitos nocturnos para pasar desapercibidos; de la misma manera, la mayor efectividad de la Guardia Civil hizo que los delincuentes optaran por grupos más pequeños, que podían optar a golpes menos ambiciosos pero que disminuían el peligro de delación y eran más difíciles de perseguir.

Otras seis víctimas, el 28,6%, aparecieron muertas en caminos y montes. Son de los que tenemos menos detalles, pues el muerto suele aparecer en los días siguientes al asalto y no hay testigos. Al menos la mitad de las víctimas, todas ellas en la provincia de Ourense, eran agricultores o tratantes que regresaban de ferias con dinero en el bolsillo. A José Vázquez lo mataron y atracaron a la vuelta de la feria de Maside. Manuel Cabala fue degollado tras vender dos terneras en la de Laza¹¹⁶⁷. Al ganadero José Mera lo tirotearon cuando regresaba de la de la feria A Pereira, en Xinzo de Limia, y el cuerpo apareció sin dinero ni documentos¹¹⁶⁸. El robo de caminos parece dirigirse hacia particulares que van solos o en pequeños grupos. Hemos visto casos acabados en muerte, pero también los había sin tanta violencia¹¹⁶⁹. Los grupos grandes y los vehículos no tenían mucho que temer de los bandidos¹¹⁷⁰.

El 9,5% de los muertos fueron heridos mientras realizaban tareas de vigilancia: el guardia privado de unas minas y un campesino que buscaba cuatrerros en un monte. Solo un caso, que supone el 5%, se produjo en las calles de una población, en este caso A Coruña (en la que, sin embargo, ocurrieron dos de las tres muertes para impedir un atraco).

Tabla 7.8.3 Homicidios por parte de atracadores en Galicia, según el lugar de su comisión o, si no se conoce ésta, de aparición del cadáver

Lugar en el que se produjo el atraco	Número de muertes	Porcentaje de muertes
En el propio domicilio de la víctima	8	38,1
En caminos rurales, montes y despoblados	6	28,6

perfectamente enterados de todas las dependencias de la casa por cuanto su primer intento fue recoger las armas que en distintos puntos de la casa había". *La Gaceta de Galicia*, 14-09-1883.

¹¹⁶⁵ Un vecino de la parroquia de Cances (Carballo) regresaba a su casa en 1883 después de vender unos bueyes en Berdillo cuando Manuel Ares, conocido como Fanao, le robó 425 pesetas, no sabemos si con violencia. En Celanova, dos fabricantes de curtidos de Allariz son asaltados por varios hombres que, antes de apalearlos, los despojan "de todo el dinero y prendas de algún valor". *La Gaceta de Galicia*, 12-03-1883, 28-08-1883.

¹¹⁶⁶ Aunque incluso en bandas numerosas, había casos en los que en la vivienda objetivo del robo entraban solo tres o cuatro y los demás vigilaban el entorno. LÓPEZ MORÁN, B. (1995), pp.136, 152-153.

¹¹⁶⁷ LR 14-12-1935, p.6, 20-12-1935, p.6.

¹¹⁶⁸ LR, 6-05-1936, p.5, 26-06-1936, p. 3, FV 05-05-1936, p. 8, FV 23-05-1936, p.2.

¹¹⁶⁹ A dos ganaderos de O Bolo que regresaban de una fiesta, unos desconocidos, a los que no pudieron reconocer por la scuridad, "les apalearon brutalmente hasta dejarlos en tierra sin sentido", llevándose la cartera de uno de ellos. LR, 03-07-1930, p. 8.

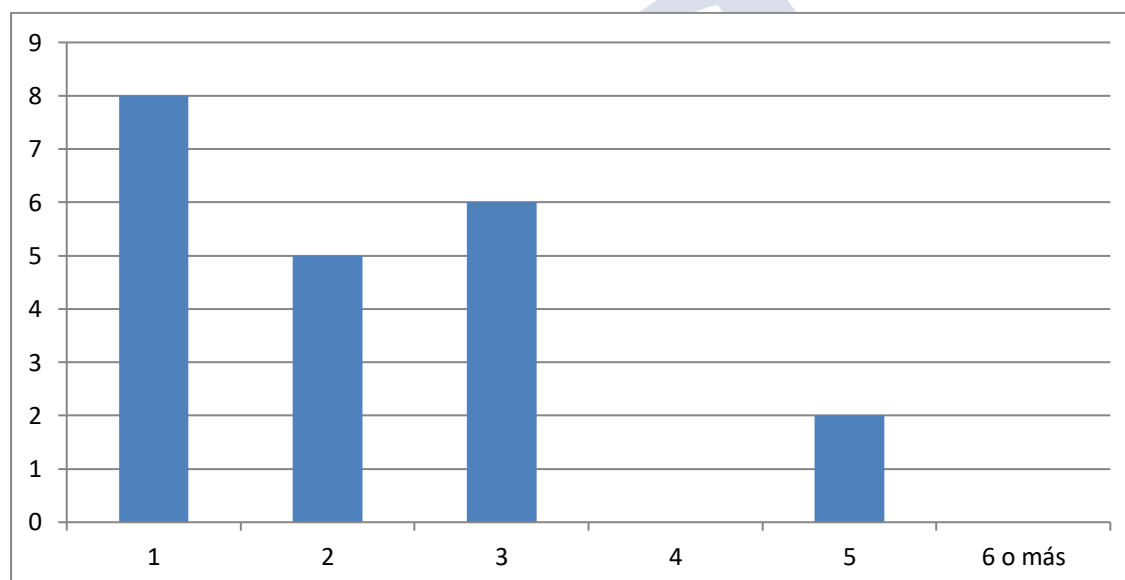
¹¹⁷⁰ En 1930 un hombre y sus dos hijos fueron detenidos en Cenlle por intentar detener el coche correo entre Ribadavia y Pazos de Arenteiro a tiros y estacazos, aunque no sabemos si fue con intención criminal. LR, 04-01-1920, p. 8.

Desconocido	3	14,3
Cuando el muerto realizaba actividades de vigilancia	2	9,5
En calles de poblaciones	1	4,8
En la tienda de la víctima	1	4,8
Total	21	100

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes hemerográficas

Las bandas de atracadores son pequeñas. Resulta imposible determinar los números con exactitud, ya que la prensa da informaciones confusas, se informa de la detención de individuos que quizás no tengan nada que ver, o se informa de la detención de encubridores y colaboradores que no participaron en el atraco. Pero, si excluimos tres casos en los que no tenemos ninguna pista de quiénes participaron, encontramos que el 38% de los robos parecen cometidos por un único delincuente, y en el 23,8%, solo dos. En ninguna ocasión participaron más de cinco personas en un único asalto.

Tabla 7.8.4 Número de atracos en relación a la cantidad de ladrones que participaron en ellos



Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Los botines son de unos cientos de pesetas, o en algún caso unos miles; el más alto parecen ser las 6.000 pesetas que llevaba encima Antonio Vigo, contratista de ferrocarril, que apareció asesinado y carbonizado en un monte¹¹⁷¹. Generosa Dacal asesinó a otra mujer para robarle un documento acreditativo de una deuda de 3.000 pesetas que ella y su marido tenían con la víctima¹¹⁷². Por el contrario, a Antonio Sanjurjo lo mataron a hachazos tres vecinos para robarle la cuantía de un pequeño préstamo que acababa de pedir al cura del lugar: “por cien pesetas matan a un hombre”, fue el titular¹¹⁷³.

Como hemos visto, en bastantes ocasiones los asesinos son conocidos y vecinos, lo que puede ser un aliciente para acabar con la vida del atracado y evitar que los identifique ante la policía. En un caso

¹¹⁷¹ LV, 04-03-1925, p.2, 07-03-1925, p.4, 11-03-1925, p. 2, 19-3-1925, p.4.

¹¹⁷² EP 9-02-1936, p. 6, LV, 11-02-1936, p.10.

¹¹⁷³ EP, 06-02-1935, p.6, FV 07-02-1935, p. 8.

particularmente sangriento, en 1888, un grupo de seis atracadores asaltó la casa del párroco de Santa Cruz do Valadouro (Lugo), en la que se encontraba junto con tres criados. Los asaltantes eran de A Pastoriza, a varias decenas de kilómetros, pero varios tenían vínculos con los habitantes de la casa¹¹⁷⁴. Los estrangularon a todos.

En 1935 los atracos parecen generar especial ansiedad, a juzgar por la prensa, hasta que queden en segundo plano por las elecciones y la violencia política. Hay una cierta percepción de que los delincuentes violentos se habían multiplicado, y que el atracador era un ser patológico. En un editorial en primera página del *Faro* la encontramos como la última de las “enfermedades sociales epidémicas”, tras la piromanía y la cleptomanía, una “hedionda peste” en la que se usa “cobardemente la fuerza y el arma”, que se llama a combatir desde los poderes públicos antes de que “el pueblo ejerza su derecho a la defensa, tomándola por sí mismo”¹¹⁷⁵.

El miedo no parece referirse a los robos a los campesinos que vuelven de la feria y el asalto a viviendas rurales. Las muertes por estos casos se despachan brevemente en los periódicos. Lo que atrae más la atención son los robos a mano armada por parte de cuadrillas que asaltan oficinas o tiendas y actúan en el entorno de las ciudades. Este es un fenómeno que seguramente se diese con más frecuencia en Galicia en esta época por el crecimiento de la población urbana, la creciente complejidad de la economía y, quizás, el automóvil, que permitía a los ladrones intentar huir rápidamente. Aunque, como hemos dicho, no dejó ningún muerto en nuestra cata.

Pero también es una percepción alimentada por sucesos de fuera de la región, en especial las constantes noticias de robos con arma en Madrid. Se había convertido en un fenómeno social reproducido por el cine y las noticias, con rasgos identificables y que estaba en el imaginario. Varios jóvenes de Teis, por ejemplo, simulaban un atraco con la cara cubierta por una apuesta y para gastarles una broma al dueño de una tahona¹¹⁷⁶. Valentín F. Cuevas culpaba a las películas y a la crónica periodística: “las bandas de jovenzuelos amigos de lo ajeno, están constituidas por elementos de esa literatura macabra, o adiestrados ante la pantalla cinematográfica”¹¹⁷⁷.

Constantino Villaverde, comerciante al que se tenía “por hombre adinerado”, se resistió a tres atracadores que entraron en su ferretería en las afueras de Santiago el tres de enero de 1935. Recibió dos balazos en el torso y en el vientre, y murió al poco tiempo. Los ladrones, que seguramente habían entrado sin intención de disparar, huyeron sin llevarse nada porque acudió gente. Fue el único atraco “al nuevo estilo” con resultado de muerte de ese año en Galicia (y casi el único que tuvo lugar), y su análisis muestra varias características del fenómeno¹¹⁷⁸.

En primer lugar, el funcionamiento de la banda y la planificación del atraco. Según las conclusiones provisionales, durante la última quincena de 1934 seis hombres se reunieron en diversas tabernas de Santiago para planear varios robos, entre ellos el de Villaverde. Uno de ellos, José García Noya era cliente de Villaverde y tenía crédito abierto en la tienda. Conocía el local y el lugar, actuó como

¹¹⁷⁴ El sacerdote tenía bienes raíces en la parroquia de los asaltantes y prestaba dinero a los vecinos. Al menos dos le debían dinero al muerto. Uno de ellos lo había amenazado anteriormente. Otro era pariente de una de las criadas asesinadas, cuya madre de una de las criadas asesinadas era de su zona y ya había escuchado rumores de que se estaba formando una banda para cometer el atraco, VILA PERNAS, M. (2004), pp. 24, 45, 91.

¹¹⁷⁵ FV 05-01-1935, p.1.

¹¹⁷⁶ FV, 24-02-1935, p. 9.

¹¹⁷⁷ FV 13-09-1935, p.10.

¹¹⁷⁸ El suceso tuvo una cobertura mediática muy amplia. Hemos extraído esta información de *La Voz*, que cubrió con detalle la investigación y el juicio. LV 04-01-1935, p.4, 8-01-1935, p. 8, 15-01-1935, p. 8, 22-01-1935, p.2, 04-04-1935, pp. 1-2, 05-04-1935, p.1

informador y se lo mostró a algunos de los compinches en la víspera del crimen. Del asalto se encargaron Aureliano Rodrigo, un zamorano que se dedicaba a la venta ambulante de por Santiago y que tenía varios antecedentes por disparo y hurtos, Jaime Couto, que vivía de pasar mecheros de contrabando procedentes de Portugal, y un tercero que no fue aprehendido y del que no se menciona el nombre. Todos los implicados eran hombres jóvenes en situación económica no muy boyante, con una mezcla de criminales reincidentes y oportunistas.

En segundo lugar, el suceso se interpretó como extremadamente grave por las autoridades. La muerte de Villaverde motivó el despliegue de fuerzas policiales, de Seguridad y de la Guardia Civil, y a los pocos días ya había varios detenidos ante el tribunal militar que realizó la instrucción. Los procesados y la defensa denunciaron coacciones y arbitrariedades: retenciones ilegales, amenazas hacia los detenidos, omisiones en el sumario, interrogatorios sin garantías y palizas¹¹⁷⁹. El asunto se despachó por el tribunal de Urgencia y sin intervención del jurado (si bien en este caso es cuestionable que hubiese favorecido a los acusados). El cuatro de abril se emitió sentencia, después de dos días de audiencia pública; otros juicios por homicidio se demoraban años hasta su resolución. La acusación pública pidió en un primer momento cinco penas de muerte, no solo para los atracadores que habían participado en el acto sino para otros miembros de la banda. No se llegaron a aplicar, quizás en parte porque la acusación de la familia del muerto pidió solo penas de privación de libertad, pero estas fueron bastante duras¹¹⁸⁰.

Por otra parte, este tipo de delito se consideraba singular. La prensa reflejó la vida de los acusados, los pormenores de las investigaciones y los detalles del juicio. Al juicio en sí mismo, que se celebró en A Coruña, acudió “numeroso público, gran parte de él venido ex profeso de Santiago y constituido por estudiantes de la Universidad”, atraído, según un cronista, por “la gravedad de las penas” y por la “novedad de ese conato de “gansterismo” ridículo, que dijo la acusación privada, que quiso tomar cuerpo entre nosotros, aunque no pasa de un mal ensayo”.

Finalmente, las declaraciones de la acusación particular y la defensa indican algunos puntos sobre actitudes culturales e ideas fijas sociales en ese momento. El letrado de la acusación privada, Manuel Casás, presentó al muerto como un ejemplo de “hombría de bien”, que había conseguido levantar un negocio y criar a su familia a partir de unos orígenes modestos, y que, moribundo, dijo a los que lo asistían “que me perdonen como yo perdono a todos”. Los procesados, en cambio, eran una “parodia ridícula del gansterismo yankee”, alucinados por la sugestión del dinero, unos “desdichados” a los que tratar sin venganza pero con justicia. Rechazó, eso sí, la pena de muerte, “por razones ideológicas y de humanidad”. El abogado de la defensa, Manuel María González López, aludió a la cuestión del paro obrero, afirmando que en “estos crímenes de carácter social es responsable el Estado”. Los dos tenían perfil ideológico muy diferente¹¹⁸¹, y, aunque con carácter menor, en los alegatos salieron algunas menciones a la contraposición entre la Dictadura y la República, o a la Iglesia.

En resumen, los robos con violencia contra la persona son un fenómeno rural durante esta época. El modo predilecto de asalto de las bandas criminales era la invasión nocturna de casas aisladas en las

¹¹⁷⁹ En el alegato final del juicio, el abogado defensor “recuerda lamentaciones de alguno de sus defendidos a él dirigidas: “Tanto me vapuleaban que me daba lo mismo vivir que morir”. Aureliano Rodrigo aún es hoy el día en que echa sangre por la boca a consecuencia de los golpes recibidos. Couto tiene todavía huellas de los culatazos que le dieron”.

¹¹⁸⁰ Treinta años de cárcel de reclusión mayor a los dos autores del homicidio, y otros tres por tenencia ilícita de armas; a otros dos, como cómplices, se los sentenció a 14 años y ocho meses.

¹¹⁸¹ Manuel Casás, conservador y monárquico, fue en dos ocasiones alcalde de A Coruña por decisión gubernamental, y tuvo enfrentamientos con los concejales republicanos. Profesionalmente era un penalista de renombre, y solía actuar como defensor.

que esperaban encontrar dinero, al igual que en la primera mitad del siglo XIX, aunque las bandas eran sustancialmente más pequeñas. Esto convivía con el robo de caminos, del que sabemos poco acerca de los criminales, y con otra variedad de delitos, como los crímenes de oportunidad o los cometidos entre parientes, que acababan en asesinato por diversas circunstancias, pero que no pueden ser considerados bandolerismo.

Al tiempo se producían robos sin violencia contra las personas, que se cometían en edificios en los que se guardaban bienes y en momentos en los que se esperaba que no hubiera nadie: tiendas, almacenes, joyerías, oficinas privadas y públicas o iglesias (volveremos a este perfil de crimen, en su variante urbana, en el capítulo 13). En Tierra de Campos, donde había bandas de ladrones semiprofesionales que asaltaban establecimientos de este tipo, vemos ejemplos de robos en ayuntamientos¹¹⁸², pero en Galicia solo encontramos algún asalto para hacerse con papeles y un robo en la casa consistorial de Sarria en la que los ladrones se llevaron una gallina que allí pernoctaba¹¹⁸³.

7.9 “Entre el detenido y la víctima existían antiguos resentimientos”: homicidios por enemistades sin provocación previa

En trece casos los homicidas mataron a su víctima sin una discusión en las horas previas, y no se les puede atribuir motivaciones políticas o de propiedad, eran familiares o de pareja, pero en las que había resentimientos de carácter personal entre ambas partes. En el conjunto de los homicidios incluidos en esta categoría, los autores son siempre hombres, pero el 23,1% de las víctimas son mujeres.

Realizar un estudio de la incidencia de este tipo de casos no resulta útil con el tipo de datos que tenemos, por su escaso número y porque un cierto número de casos que hemos catalogado como desconocidos seguramente encajarían en este apartado. De cualquier manera, estos delitos siguen la secuencia habitual de descenso en 1925 y 1930:

Tabla 7.9.1 Homicidios por resentimientos por año, expresados en número absoluto de muertes y tasas anualizadas por 100.000 habitantes

	1920	1925	1930	1935	1936
Muertes	4	1	2	5	1
Tasa	0,19	0,05	0,09	0,21	0,08

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

En cuanto a la causa de las muertes, cinco casos lo fueron en cuestiones ligadas a disputas amorosas, siempre de hombres contra hombres. Luis Barreiro se encontró con un rival en el patio de la casa de una joven que ambos pretendían y lo mató de un tiro. Otros hombres asesinaron a sus rivales en cuestiones de faldas tendiéndoles una emboscada, o disparándoles por la espalda mientras hablaban con terceras personas. A Manuel Muras lo mataron en Teis en 1936 los parientes de una tal Hortensia Prado, porque se oponían a las relaciones que tenía con esta; en alguna fuente se clasifica el caso como un asesinato por motivos políticos¹¹⁸⁴.

¹¹⁸² REDONDO-CARDEÑOSO, J.-A. (2010), p.189-196.

¹¹⁸³ LV, 20-11-1935, p. 6.

¹¹⁸⁴ FV, 11-06-1936 (9); 14-06-1936., p.2. Grandío Seoane, teniendo como referencia *El Ideal Gallego*, lo considera un derechista muerto en una pelea. GRANDÍO SEOANE, E. (1998), p.282.

Fuera de las cuestiones amorosas, el resto de disputas son heterogéneas. En algún caso ni se mencionan las causas, pero lo que parece subyacer son rencores entre vecinos, entre familias y combinaciones de ambos. De Manuel Roca, inculcado por la muerte de un vecino que apareció con un disparo de una pistola de su pertenencia, solo sabemos que “entre el detenido y la víctima, existían antiguos resentimientos”, y que había dicho en más de una ocasión “que había de matar al desgraciado Martínez Pena”¹¹⁸⁵. Antonio Lobios, un labrador ourensano de 40 años, le salió al paso a su convecina Paula Romero cuando esta se dirigía a su casa y la mató de un golpe en la cabeza sin mediar palabra; estaba enfrentado con ella y con su familia.

Es probable que antes de muchas de que estas disputas acabasen de manera letal los dos bandos empleasen herramientas para atacar socialmente a sus rivales, como el rumor. La vecina de O Rosal Angustias Martínez, aunque en un primer momento se supuso que la habría matado algún portugués, la mató un vecino suyo de 18 años y de “buena familia”, Severino Rivero, ofendido por los rumores que estaba difundiendo. Dijo, como explicación, que la muerta “le atribuía constantemente un robo de que fuera autor un hijo de ella, que por tal motivo se halla en la cárcel de partido”; además, poco antes de la muerte había discutido con su tía, algo que parece que fue el detonante del acto¹¹⁸⁶.

En aldeas en las que el roce con los enemigos era inevitable, las muertes podían llegar tras una larga serie de enfrentamientos. En 1930 un hombre llamado José González, de 30 años, mató en una aldea de Cervantes (Lugo) a un niño de doce años llamado Jesús, con el mismo apellido, de un disparo de escopeta. La madre o abuela del muerto, Generosa, tenía un pleito con el hermano del homicida, Antonio, y se pelearon sin causarse heridas. Un hijo de Generosa, tras enterarse, le pegó una paliza en venganza a Antonio. José, que vivía en otra provincia pero estaba de paso en la aldea, se puso a buscar al agresor escopeta en mano sin encontrarlo. Vio a Jesús casualmente a la entrada de la aldea e, incitado por una mujer (suponemos que pariente de José) descargó el arma contra él y se dio a la fuga. Para complicar más las cosas, es probable que el niño muerto y su asesino fuesen parientes¹¹⁸⁷.

7.10 “Al repeler a los mozos, hizo dos disparos”: los muertos por fuerzas policiales

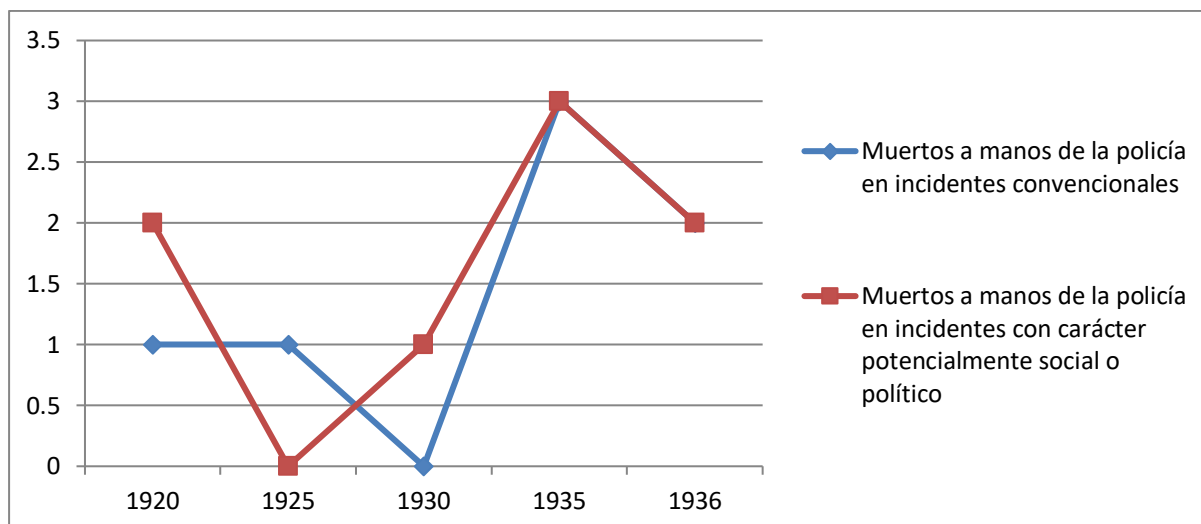
En todos los años estudiados, las fuerzas de seguridad acabaron con quince personas en ejercicio de sus funciones, de las que la mayoría, ocho, fueron en enfrentamientos de naturaleza socio-política y los estudiaremos con más detalle en el capítulo 9. En los restantes siete casos nunca se trató de detener un robo o proteger a alguien de un ataque que estuviese sufriendo; la violencia se produjo al intentar arrestar o en enfrentamientos con juerguistas. Si lo comparamos con la población, y lo anualizamos, nos da una tasa de 0,15 casos por 100.000 habitantes; si descontamos los motines con matices sociopolíticos sería aproximadamente de la mitad. En conjunto, tanto las muertes en circunstancias convencionales como políticas, se concentran en los años estudiados de la II República.

Gráfico 7.10.1 Homicidios a manos de las fuerzas policiales

¹¹⁸⁵ EP, 12-11-1925, p.1

¹¹⁸⁶ FV, 07-08-1920, p.2, 08-08-1920, p.3, 10-08-1920, p.3

¹¹⁸⁷ La prensa menciona de pasada que el niño muerto era sobrino del “agresor”, pero no sabemos si se refiere al hijo de Generosa que había atacado a Antonio (lo que no tendría sentido, ya que el periodista los nombra a ambos como hijos de Generosa), o si se refiere a José, lo que también resulta difícil de creer, pues de ser así debería haberse señalado de manera más destacada en la noticia, y eso convertiría a José en hermano o cuñado de Generosa. Quizás fuese sobrino segundo. EP, 03-12-1930, p. 1.



Fuente: Elaboración propia a partir de prensa

La Guardia Civil es la que causa más muertes, quizás en parte por la impunidad jurídica que han señalado algunos autores¹¹⁸⁸, pero más probablemente porque es la fuerza con un mayor despliegue. Dos paisanos fallecidos en sendos enfrentamientos entre la fuerza y mozos de fiesta. En 1925 un guardia y corneta de la Benemérita acorralaron a algunos juerguistas que estaban montando escándalo y empezó una pelea. Los jóvenes golpearon y le rompieron la capa al corneta, que “al repeler a los mozos (...) hizo dos disparos” y mató a uno de ellos. La recogida de un arma en una romería en Vila de Cruces en 1935 acabó en un tiroteo entre paisanos y guardias en el que murió uno de los primeros¹¹⁸⁹. Tenemos constancia de algún otro enfrentamiento en espacios de fiesta que no llegó a tener resultados letales¹¹⁹⁰.

Otros dos muertos se resistieron a su detención. Uno de ellos era un vecino de Cenlle que, después de amenazar al novio de su hija, matar a su perro y herir con su escopeta a su padre y hermana, disparó contra la Guardia Civil cuando fue a detenerlo¹¹⁹¹. Otro fue abatido a tiros en 1936 cuando abrió fuego contra los guardias que investigaban un robo con homicidio, si bien también circuló la versión de que el fallecido no tenía nada que ver y simplemente había intentado huir¹¹⁹².

Los carabineros mataron a un supuesto contrabandista en 1920, mientras intentaba cruzar el Miño con sacas de harina para Portugal. Un guardia municipal de Marín disparó por error a una mujer en 1935, cuando intentaba defenderse de su marido borracho. Otros dos, del cuerpo de Pontedeume, dispararon por la espalda a un joven de 28 años en 1936 cuando echó a correr después de que le diesen el alto. Las policías de Vigilancia, Seguridad y Asalto no mataron a nadie en los años estudiados en la persecución del crimen común, y tampoco el Somatén.

¹¹⁸⁸ BLANEY, G. (2012), pp.109-110.

¹¹⁸⁹ FV, 20-08-1935, p. 7.

¹¹⁹⁰ Por ejemplo, en una fiesta en Castroverde en 1920, con disparos que no llegaron a herir a nadie. EP, 19-02-1920, p. 5.

¹¹⁹¹ LR 14-11-1935, p.6, 19-11-1935, p.6, FV 17-11-1935, p. 12.

¹¹⁹² En este caso *El Progreso* presenta la versión más favorable a la Guardia Civil, según la cual el fallecido, un joven llamado Amadeo Roca, estaba siendo buscado por los agentes por un robo con homicidio en las minas de O Freixo poco antes, y disparó contra los guardias que se le acercaron. En *La Voz* se dice simplemente que se dio a la fuga “sin motivo justificado”, y que quizás iba a esconder una pistola. EP, 17-01-1936, p. 6, LV 17-01-1936, p. 9.

Este relativo poco uso de la fuerza letal puede tener que ver con la falta de conflictividad criminal. Los delincuentes raras veces se oponen a tiros a las fuerzas del orden, y ya hemos visto en el apartado 7.8 que a inicios del siglo XX no se encuentran las gavillas violentas y numerosas de bandidos del siglo anterior. Los métodos de actuación que sí causaron víctimas son violentos desde la perspectiva actual: los agentes dispararon a fugitivos, delincuentes que estaban realizando crímenes sin víctimas como el contrabando o para o dispersar motines en los que solo se habían empleado piedras. Pero muchas otras situaciones similares se resolvieron sin víctimas. La violencia letal no era la tónica general de la actuación de las autoridades en Galicia cuando reprimía el crimen común, como tampoco lo era cuando se enfrentaba a movilizaciones colectivas, según veremos en el apartado 8.5.1.

7.11 “Discutiendo con los demás mozos, dijo que no había hombre para él, y se cruzaron varios disparos”: los muertos en riñas y peleas

En el apartado de muertos en riña incluimos a aquellas muertes que se produjeron como consecuencia de un enfrentamiento físico o verbal entre dos bandos y que no encajan en los apartados anteriores. Este choque no tiene por qué ser agresivo por parte de la víctima, pero sí percibirse como una oposición por parte del homicida. Pablo Rúa, vecino de Castrelo do Val, empezó a insultar a la gente junto con otros mozos después de que hubieran bebido. El sacerdote de su parroquia le dijo que se retirase y Rúa lo mató con una azada¹¹⁹³. También hemos incluido unos pocos casos en los que la víctima murió porque recibió una bala destinada a otra persona, o le golpearon mientras intentaba poner paz.

Por otra parte, el enfrentamiento no tiene por qué ser inmediato. Ocurre, por ejemplo, que después de una discusión en una pelea o una romería que se queda en palabras o bofetadas, uno de los bandos embosca al otro en un camino y lo acribilla a tiros.

Las disputas y peleas por cuestiones suman, como ya hemos mencionado, más de un tercio de las muertes clasificadas según su causa. Al contrario que en otras formas de violencia, si bien se produce un descenso en 1925 y 1930 con respecto a 1920, en la Segunda República no se recuperan las tasas de este año.

Tabla 7.11.1 Homicidios por riñas, en números absolutos y en tasa anualizada por 100.000 habitantes

Años	1920	1925	1930	1935	1936	Conjunto del periodo
Muertes	41	19	23	26	17	126
Tasa	1,93	0,87	1,03	1,1	1,3	1,24

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Si observamos la forma en la que fueron producidas, vemos que la tasa de homicidios por arma de fuego en disputas y peleas alcanza su mayor pico en 1920, y que no se recupera ni siquiera en la Segunda República. En 1936, el segundo año más violento en este apartado y en el que la proporción de muertos en riñas por arma de fuego se duplica, la tasa de fallecidos en disputas a tiros es menor que en 1920. Si entendemos que la fuente es fiable, no parece haber un aumento de las muertes por conflictividad interpersonal debida al mayor empleo de las armas de fuego.

¹¹⁹³ LR 29-04-1920, p.2, LV 19-02-1920, p.2

Tabla 7.11.2 Muertos en riña por arma de fuego y por otros medios, en números absolutos; tasa anualizada por 100.000 habitantes, excluyendo casos en los que el medio de muerte es desconocido; y proporción entre muertos por arma de fuego y por otros medios

	1920	1925	1930	1935	1936	Conjunto del periodo
Muertos por arma de fuego	18	6	10	10	9	53
Tasa	0,85	0,28	0,45	0,42	0,69	0,52
Muertos por otras causas Conocidas	19	11	12	15	5	62
Tasa	0,89	0,51	0,54	0,63	0,38	0,61
Muertos por arma de fuego por cada muerto por otras causas	0,95	0,55	0,83	0,67	1,8	0,85

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

En cuanto al sexo, este tipo de agresiones casi es universalmente masculino, tanto en autores como en víctimas. En ningún caso los autores de una agresión fueron un grupo mixto de ambos sexos.

Tabla 7.11.3 Porcentaje de homicidios en riña según el sexo de autores y víctimas (sobre el total de casos en los que se conoce en ambos)

Autor hombre u hombres, víctima hombre	Autor hombre u hombres, víctima mujer	Autor mujer o mujeres, víctima mujer	Autor mujer o mujeres, víctima mujer	Víctima menor de 14 años
96%	2,4%	0%	0,8%	0,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

El siguiente factor explicativo con capacidad predictiva es la presencia de espacios de ocio. En el 54 de los homicidios de este tipo surgieron en algún tipo de fiesta: una romería, un baile, una taberna, un grupo de borrachos que volvían a su casa (nunca en un café cantante, pese a la mala fama que tenían en la época). Si nos restringimos solo a los casos en los que el lugar de la muerte es conocido, la proporción sube al 68%. De esta relación entre los espacios de ocio y la violencia ya he hablado en un trabajo anterior como el factor más presente entre las agresiones, en especial las masculinas¹¹⁹⁴. Los espacios de ocio eran espacio de desinhibición y competencia social, y ello fomentaba la violencia. Los hombres buscaban la taberna para divertirse, y lo hacían jugando y bebiendo. Se contaban cuentos y se conversaba, y surgían desavenencias y discusiones. En las fiestas y romerías los asistentes iban a ver y ser vistos, y sus choques e interacciones sociales eran presenciados por sus amigos y conocidos.

¹¹⁹⁴ En concreto, entre las agresiones que se produjeron en 1882 en A Coruña, recogidas a través de la prensa: casi una cuarta parte de las agresiones masculinas, y un 6,1% de las femeninas, se producían en tabernas, burdeles y espacios de ocio nocturno. Los porcentajes son muy superiores a otros factores estudiados a través de catas parciales, como los celos (presentes en el 2,7% de los casos) o las disputas familiares y deudas (que no llegan al 1%). Seguramente las cifras reales serían más altas: muchas peleas se producen en días de fiesta y domingos o a altas horas de la noche, y aunque el periodista no señale que los implicados habían bebido, podemos darlo por supuesto. CARBALLO GENDE, E. (2018), pp. 39-40.

Gimeno Azcarate, quizás el primer criminólogo español que realiza un estudio de detalle de una región española con fuerte respaldo estadístico, no tenía dudas en señalar al principal factor que conducía al crimen: el alcohol, al que culpaba de la mitad de los delitos graves contra la persona¹¹⁹⁵. En la campaña contra el matonismo coruñés de 1906, de la que hablaremos más adelante, podemos encontrar la misma idea: “la mayor parte de los crímenes que se cometen en esta población, tienen por causa la embriaguez”; los “*infelices*” que se pelean en las romerías “no tienen ellos la culpa de sus desafueros, sino esos antros viciados, las tabernas”; “el noventa por ciento de los crímenes son cometidos bajo la funesta acción del alcohol”¹¹⁹⁶. En la Irlanda de la época, en la que el alcohol está presente explícitamente en el 28% de los homicidios, “the actual percentage was probably much higher”¹¹⁹⁷.

La embriaguez favorece asumir riesgos, pero creemos que el contexto cuenta tanto o más que la propia ebriedad. La taberna era un espacio de ocio crucial en la sociabilidad de las clases populares en nuestro periodo de estudio, en especial de los hombres. El alcohol era importante como alimento y para aliviar las frustraciones cotidianas, pero, además, el lugar constituía un espacio de ocio al que los hombres acudían voluntariamente para tratar con sus iguales¹¹⁹⁸, precisamente el marco de interacciones en el que podía estallar la violencia en una discusión dentro de una cuadrilla. O un cruce de miradas hostil o un empujón con el codo entre dos desconocidos; al contrario que en el café burgués, las tabernas tenían barras¹¹⁹⁹. Otro espacio de sociabilidad masculina era el burdel, si bien no encontramos ningún homicidio en uno en esta muestra¹²⁰⁰. Tampoco en casinos y sociedades de clase alta, aunque en estos haya alguna riña por cuestiones sociopolíticas que no pertenecen a este capítulo¹²⁰¹.

Los establecimientos populares, y también las romerías y fiestas, funcionan como marcos de desinhibición y de interacciones sociales potencialmente violentas, la noche proporciona un cierto anonimato, los actores saben que recurrir a la violencia en este contexto es más comprensible por su entorno¹²⁰². “Haylos también que para meterse con un fulano, para ciertos casos, se privan [beben] un poco, se ponen contentos para atreverse”, le contaba a Lisón Tolosana un lugareño de Rinlo a mediados del siglo pasado¹²⁰³.

En cuanto a las motivaciones, hay algunas riñas por cuestiones de propiedad; las fronteras entre las clasificaciones que hemos elaborado no están perfectamente delimitadas. Antonio Fernández mató por una deuda de 30 céntimos¹²⁰⁴, Ramón Lois por una de tres pesetas¹²⁰⁵. El carabinero retirado

¹¹⁹⁵ GIMENO AZCARATE, M. (1900), p. 55. También CERVERA BARAT, R. (1898), p.123.

¹¹⁹⁶ *La Voz de Galicia*, 04-07-1906, 06-07-1906, 10-07-1906.

¹¹⁹⁷ CONELY, C. (1998), p. 64.

¹¹⁹⁸ Sobre la “naturalidad” y voluntariedad de la taberna como espacio de ocio, y consideraciones sobre estos lugares en la sociabilidad de las clases populares, URÍA, J. (2003), pp. 572, 580-581.

¹¹⁹⁹ URÍA, J. (2003), p. 586.

¹²⁰⁰ Sobre el papel del prostíbulo, GUEREÑA, J.-L. (2003). Aunque sí un homicidio en casa de una mujer que supuestamente acogía a una prostituta, y que veremos después. En la década de 1880 hubo un homicidio en un burdel de Santiago. CARBALLO GENDE, E. (2018). Es posible, aunque no lo consideramos probable, que se ocultase el lugar en prensa si ocurriese un suceso luctuoso en uno.

¹²⁰¹ A inicios de la Restauración parece que se intentaba mantener las discusiones políticas fuera de este tipo de asociaciones, aunque esto seguramente no siempre se mantuvo y con la revitalización en la República de estas instituciones el signo de los tiempos jugaba en contra. La conflictividad por estas cuestiones se mantenía a raya, sin embargo, porque era frecuente que en una misma localidad hubiese dos casinos, cada uno con socios de diferente filiación. Sobre el Casino, Círculo, Ateneo y Club, conceptos emparentados, VILLENA ESPINOSA, F., LÓPEZ VILLAVERDE, A. L. (2003), pp. 452, 458-460.

¹²⁰² FREEMAN, N., FRIEDMAN, R. S., BARTHOLOW, B. D., WULFERT, E. (2010), p.141.

¹²⁰³ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), p. 68.

¹²⁰⁴ *FV* 07-09-1935, p. 9.

Manuel Suárez apuñaló hasta la muerte a un tabernero después de que lo intentase echar del local tras una discusión por veinte céntimos en la cuenta¹²⁰⁶. Dos hombres murieron en riñas de vecinos que se acusaban de pequeños hurtos, y otros dos en discusiones en ferias acerca del precio de venta de una vaca. Las cantidades son nimias y la animosidad personal explica mejor estas muertes que entenderlas como disputas para conseguir un bien material.

Veamos, por ejemplo, una muerte ocurrida un domingo de febrero de 1930 en Carral. Un grupo de portugueses que trabajaban en las obras de una carretera se reunieron en una taberna-estanco para beber y jugar a la brisca. Uno de ellos, David da Silva, “era un sujeto de temperamento agresivo, y más cuando estaba bebido”. Le dijo a uno de sus compañeros con el que compartía apellido, un tal Idilio, “que pagase el vino que había perdido en el juego”, a lo que este se negó. Discutieron, y David lo golpeó primero con la mano y luego con un gavillo; Idilio se lo arrebató y lo hirió mortalmente a golpes antes de que consiguieran separarlos¹²⁰⁷. Ciertamente estaban discutiendo por el valor de una consumición, pero no se mataron por el vino.

Si nos centrásemos en el desencadenante de las peleas encontraríamos una gran diversidad. Hay hombres que mueren por llamar a alguien por un apodo ofensivo¹²⁰⁸, por una discusión acerca de quién ha abatido un jabalí¹²⁰⁹, por negarse a dar un pitillo a un jornalero¹²¹⁰, por deshacer una hoguera que otros muchachos estaban saltando¹²¹¹, por recriminarle a su futuro homicida que disparase contra un gato¹²¹², o simplemente tras discutir por cuestiones de “escasa importancia”¹²¹³. A otros no les sentó bien una cencerrada y respondieron a palos, discutieron por causa de una mujer o por cómo tenía que realizarse un trabajo.

Hay que tener en cuenta que aunque las causas de los estallidos de violencia puedan parecer ínfimas o ridículas, subjetivamente eran importantes para los autores. Esta sobredimensión, siguiendo la experiencia de la psicología clínica, puede derivar de dos fuentes. Una son los sesgos cognitivos que llevan a algunos individuos a exagerar los agravios. En palabras de Beck y Pretzer, los individuos con tendencia a la ira suelen interpretar eventos impersonales de manera egocéntrica (¿Por qué esto siempre me tiene que pasar a *mí*?), y exagerar la frecuencia e importancia de los actos que les molestan (“*Siempre* hace lo mismo” “*Nunca* me muestra *ningún* respeto”). La segunda, las creencias y asunciones en base a experiencias pasadas¹²¹⁴, que es el apartado que más fácilmente podemos ligar a actitudes sociales o culturales. Finalmente, hay individuos que cultivan una imagen de “tipo duro” cometiendo actos de violencia en apariencia irracional para obtener réditos sociales o evitar convertirse en víctimas de agresiones. En términos de Toch, que hemos visto en el apartado 1.5, encajaría con el patrón de “self-image promoting”.

Hay dos nexos culturales entre esta variedad de causas, a nuestro entender. Uno es el prestigio y la honra. Los homicidas matan porque se sienten insultados y agraviados por su oponente. Muchas veces es explícito: el homicida mata a alguien que lo acaba de insultar. A Benito Davila, un pescador de 50 años de Bueu, el resto de tripulantes de su barco lo empezaron a molestar en broma,

¹²⁰⁵ LV, 16-01-1936, p. 8, 18-01-1936, p. 7, 18-06-1936, p. 7.

¹²⁰⁶ LV 31-10-1920, pp. 1-2.

¹²⁰⁷ LV 04-02-1930, p.3.

¹²⁰⁸ LV 15-07-1920, p.1

¹²⁰⁹ EP 19-08-1920, p.6, FV 18-08-1920, p.2.

¹²¹⁰ LR 23-03-1920, p.1, Ep 24-03-1920, p.2, EP 27-03-1920, p.6, LV 26-03-1920, pp. 2-3, LV 27-03, p.2.

¹²¹¹ LV 26/12/1920, p.1, 09-07-1921.

¹²¹² EP 29-12-1925, p.1.

¹²¹³ EP 23-04-1930, p.1, LV 26-04-1930, p. 5.

¹²¹⁴ BECK, A. T., PRETZER, J. (2002), p. 68.

“llamándole “baldrobas” y “virulé”, a la vez que le arrojaban puñados de tierra y algunas piedras”. Este se cansó y le abrió la cabeza con una piedra a un compañero de 15 años¹²¹⁵.

En este caso el ataque tiene un componente reactivo bastante claro, ya que todo el entorno lo estaba molestando. Si todos los casos fuesen así, podríamos entender la violencia por cuestiones de honra como la reacción de desesperados que se ven marginados u objeto de burla de su entorno, pero no es el caso. Unos meses antes del homicidio de Davila, un grupo de jóvenes marineros de varias tripulaciones se pusieron a arrojar trozos de corcho en una playa de Poio mientras otros compañeros arreglaban los aparejos. A Carlos Vallejo, uno de los marineros, le dio un corcho, y retó a uno de los chicos a bajar de su barca. Este “se acobardó” y se quedó en la embarcación, pero otro marinero, llamado Manuel Sande, le recriminó su actitud al retador: “Cómo te atreves con él, ¿no ves que es más pequeño que tú?”. Sande sí estaba en la playa. Vallejo sacó la navaja, lo persiguió, lo derribó de una zancadilla y lo degolló mientras estaba en el suelo. La víctima tenía 15 años; Vallejo, que se dio a la fuga inmediatamente, 16¹²¹⁶. Como hemos mencionado en el apartado 1.3, parte de la psicología contemporánea apunta a que los hombres violentos no tienen una baja autoestima, sino que tienen una alta opinión de sí mismos y la necesidad de defenderla¹²¹⁷.

Las agresiones no tienen por qué ser la reacción del dominado socialmente, sino que pueden servir a hombres orgullosos para reafirmar su estatus, dejando claro que responden a cualquier desafío. Antonio Chaves, un joven de la parroquia de Bastabales, mató en 1930 a un convecino de 20 años; “parece que esta agresión fue debida a que discutieron los mozos sobre la “fachenda” que tenía el agresor desde que hace cinco meses regresó de América”¹²¹⁸. En otra fiesta de Año Nuevo, Antonio Arca, que había regresado poco antes de Cuba “con algunos miles de duros”, comenzó a discutir con otros mozos y dijo “que entre éstos no había hombre para él”. Dos le tomaron la palabra, y en el tiroteo Arca mató a uno y malherió al otro, pero también él perdió la vida¹²¹⁹.

El otro componente es la alta presencia de la violencia menor, que impregnaba la sociedad de una manera mucho más amplia de lo que reflejan las estadísticas de homicidio. Las muertes incluidas en este apartado no dejan de ser casos excepcionales. Por cada una de ellas hay un gran número de enfrentamientos a bofetadas, heridos a puñaladas y apaleados. Golpear a alguien era una reacción quizás no universalmente aprobada, pero sí fácilmente explicable y entendible por los contemporáneos, y algunas, simplemente, se salían de los habituales cauces no letales.

Veamos lo sucedido en la muerte de José María Blanco Pardo, un mozo de una parroquia de en Lalín. En enero de 1920, el sacerdote del lugar organizó una pasantía nocturna para hombres jóvenes a la que acudió el finado. Quizás fuese algo adelantado en las lecciones, pues le encargó a Blanco que les enseñase a otros dos, Emilio Gómez y Francisco Sobrado. Pero el ayudante del maestro “atendía al parecer con preferencia al último y había maltratado de obra y llamado burro al Emilio”. El hermano de este, de 28 años, “moleestado por el proceder de Blanco”, le dio un estacazo en la cabeza que lo mató a los tres días. El jurado dio veredicto absolutorio¹²²⁰. Como vemos, los dos implicados emplearon formas relativamente poco letales de violencia para regular la conducta de sus compañeros. Probablemente era parte de sus formas normales de relación. En este caso, y quizás por casualidad, un golpe malo dejó a un hombre muerto.

¹²¹⁵ FV 25-11-1920, p.1.

¹²¹⁶ FV 28-07-1920, p.1.

¹²¹⁷ La relación entre la violencia y la autoestima aparece desarrollada en PINKER, S. (2012), pp. 679-681.

¹²¹⁸ LV 04-03-1930, p.2, 05-03-1930, p.2.

¹²¹⁹ LV 04-01-1920, p.2, FV 03-01-1920, p.1.

¹²²⁰ FV 11-09-1920, p.2.

Probablemente, la mayor parte de los homicidas que hemos incluido en este apartado se considerasen justificados. Volviendo a Beck y Pretzer, en la mayoría agresiones perpetradas en actos de furia (y en muchas de las cometidas a sangre fría) el autor considera generalmente que la violencia es una forma legítima de equilibrar la situación tras un agravio previo. En abstracto, los seres humanos son más proclives a recurrir a la violencia si su víctima les parece diferente, extraño o malvado, pero en momentos de enfado las inhibiciones disminuyen, e “individuals and groups may commit acts of violence that they would not normally commit and that they regret deeply once their anger subsides”¹²²¹. La ira, a su vez, está asociada al sentimiento de haber sido “wronged”¹²²².

En resumen, los datos muestran que una parte muy importante de la conflictividad letal provenía de enfrentamientos entre varones no relacionados, derivada de discusiones en las que influían el prestigio y la honra y que estallaban preferentemente en lugares de ocio.

Al igual que el resto de conductas violentas, los homicidios por riña descienden en 1925 y 1930, pero no vuelven a remontar en la Segunda República hasta los niveles de 1920. Ya hemos visto que, según Spierenburg, el descenso de este tipo de homicidio indicaría una bajada de la violencia en general¹²²³. No creemos que la tasa conjunta de homicidios gallegos pueda utilizarse como proxy de las formas de violencia menores, pues tienen causas muy distintas. Pero el descenso específicamente de las muertes por riña indica, en nuestra opinión, que se estaba produciendo una pacificación general de las formas de relación entre hombres jóvenes, o bien que la violencia entre estos adoptaba formas más moderadas.

7.11.1 “Un grupo de mozos invadió el campo, empezando a disparar tiros”: los choques interparroquiales

El subconjunto más interesante de este grupo es el constituido por los muertos en choques entre grupos de mozos de bandos organizados según criterios geográficos que se enfrentan en fiestas y romerías. Casi siempre la adscripción geográfica coincide con la parroquia, de manera que los denominaremos, por comodidad y porque hay precedentes en la bibliografía, como choques interparroquiales.

El fenómeno ha sido estudiado para Galicia por Cabo Villaverde y Vázquez Varela como una modalidad importante de conflicto entre mozos, definidos no tanto por la edad como por la soltería, que en esta época quizás sea el estado que mejor defina la condición de joven¹²²⁴. El soltero, en las sociedades tradicionales, no lo era tanto por elección sino por incapacidad para fundar un hogar propio, normalmente por falta de recursos económicos. Si la situación se alargaba, se convertía en un fracaso vital: el varón permanecía sometido al dominio del padre, sin hijos y mujer propia sobre los que asentar su autoridad, sin ser un adulto completo¹²²⁵. Su situación es, quizás, comparable al desempleado actual¹²²⁶. Los choques entre parroquias, volviendo a Cabo Villaverde y Vázquez Varela, serían fruto de una competición ritualizada entre las mocedades de lugares adyacentes para reforzar la solidaridad grupal y competir por los recursos (aprovechamientos de agua, demarcación

¹²²¹ BECK, A. T., PRETZER, J. (2005), p. 72-73.

¹²²² BECK, A. T., PRETZER, J. (2005), p. 82, a partir de los estudios empíricos de WICKLESS, C., KIRSCH, I. (1988): “Cognitive correlates of anger, anxiety, and sadness”, en *Cognitive Therapy and Research*, nº 12, pp. 367-377.

¹²²³ El autor se refiere al contexto de la Edad Moderna, en la que interpreta que la mayoría de las muertes se producían en este tipo de enfrentamientos. SPIERENBURG, P. (2013), pp.20-21.

¹²²⁴ CABO VILLAVERDE, M., VÁZQUEZ VARELA, J. M. (2015), p. 785.

¹²²⁵ VAQUINHAS, I-M. (1996), p. 486.

¹²²⁶ MUCHEMBLED, R. (2008). En la Europa de la Edad Moderna, señala Raffaella Sarti, el matrimonio era un hito en la vida, pero al mismo tiempo un fracaso si no se conseguía. SARTI, R. (2003), pp. 98-99.

de los comunales, acceso al mercado matrimonial)¹²²⁷, lo que apuntaría a que el origen de estos conflictos era en parte instrumental.

Por otra parte, este tipo de motivos prácticos no aparecen en las fuentes, a excepción de las disputas por una mujer. Los medios contemporáneos asumen que cuando los mozos de dos parroquias se enfrentan es por una disputa previa, porque se llevan mal sin más, porque se divierten o porque es su costumbre, nunca por un recurso concreto.

¿Cuáles eran los mecanismos psicológicos que regían las agresiones? Para guiarnos, recurrimos a los modelos recurriendo a los modelos de origen de la violencia de Baumeister y Butz. Estos autores señalan, en primer lugar, que hay una abundante literatura en psicología acerca de la tendencia humana a agruparse y competir con otros grupos: “forming groups and differentiation between who belongs in an in-group and an out-group is seemingly natural and universal”¹²²⁸.

Esto es relevante en dos sentidos: por una parte, los vecinos de una parroquia tenderían a sentirse un grupo por comparación con los extraños, y, si bien las agresiones entre vecinos son más frecuentes que las interparroquiales, si hay un conflicto entre los mozos del vecindario y los de otro lugar, la tendencia sería a amparar a los más cercanos. Los miembros de un grupo tienden a limitar el sentimiento de justicia a sus congéneres y excluir moralmente a los “otros” del derecho a ser tratados con justicia¹²²⁹. Esta dimensión es la que da carácter de “comunidad” a los choques entre parroquias, en los que participaban, en la práctica, una minoría de sus habitantes. Otro cuestión psicológica: las interacciones entre grupos tienden a ser más violentas y agresivas que las que se producirían entre dos individuos de ellos¹²³⁰. Así mismo, es posible que los mozos fuesen más agresivos porque entendían que su comunidad aprobaría sus acciones, o al menos no las perseguiría¹²³¹.

En segundo lugar, los mozos que se criaban juntos establecían grupos de amigos entre los vecinos de su cohorte de edad, con sus propias jerarquías, lealtades y afectos, y acudían a las romerías con ese bagaje de vínculos afectivos¹²³². Esto es un comportamiento universal: las bandas juveniles criminales o terroristas también se organizan entre individuos cercanos, del entorno relacional y geográfico¹²³³. Así que si alguien del grupo recibía un ataque de un extraño tenderían a respaldarlo, si a un vecino le robaba la novia alguien de otra parroquia sus amigos tenderían a considerarlo más indignante que el caso contrario. Así, una disputa individual podía convertirse en colectiva. Esto cimentaría a su vez los lazos intragrupal: nada como un enemigo común para forjar vínculos.

¹²²⁷ CABO VILLAVERDE, M., VÁZQUEZ VARELA, J. M. (2015), pp. 795-796. En el caso del mercado matrimonial, los mozos intentaban impedir que los de fuera pretendiesen a las mujeres de su núcleo, aunque no tenían problemas con que miembros de la comunidad se buscasen mujeres fuera. Las jóvenes tenían sus propios modos de buscar pretendientes fuera de la parroquia, al menos en el primer franquismo. ALONSO GAYOSO, E. (2015), p. 320.

¹²²⁸ BAUMEISTER, R. F., BUTZ, D. A. (2005). Sobre las teorías de por qué se da este fenómeno, BERKOWITZ, L. (2005), p.170.

¹²²⁹ DOVIDIO, J. F., GAERTNER, S. L., PEARSON, A. R. (2005), pp.224. a partir de TYLER, T. R., BLADER, S. L. (2000): *Cooperation in groups: Procedural justice, social identity, and behavioral engagement*, Philadelphia, Psychology Press.

¹²³⁰ Los grupos también tienden a posturas más extremas que sus miembros: esto es conocido como discontinuity effect. Así, sería más fácil que el vecino de una parroquia expresase una actitud más negativa sobre los de otra rival al encontrarse entre sus compañeros. BAUMEISTER, R. F. (1997), p.193.

¹²³¹ BERKOWITZ, L. (2005), p.172.

¹²³² “At the most basic level, there is a tendency for more positive emotional responses to in-group members”. DOVIDIO, J. F., GAERTNER, S. L., PEARSON, A. R. (2005), pp.224.

¹²³³ VISHNEVETSKY, M. (2009), p.164.

Si hay competición por un bien, “ensuring that and in-group succeeds and gains the desired resources is also natural”, lo que enlazaría con la interpretación que liga los choques interparroquiales a la competición por los recursos. Este tipo de conflictos son endémicos y característicos de las sociedades sin Estado. En las tierras altas de Papúa, los conflictos tradicionales eran de tipo instrumental: miembros de una aldea agrícola disputaban a los de la vecina recursos económicos¹²³⁴. En nuestra opinión, este tipo de conflictos sería más frecuente en el Antiguo Régimen que en nuestro periodo de estudio, atendiendo al progresivo dominio de las fuerzas policiales y judiciales en la conflictividad¹²³⁵.

Pero “hate may well develop. Repeated conflicts establish the two parties as chronic enemies”¹²³⁶. Así que, digamos, una animosidad originada por una pelea o un problema de lindes podía pervivir como un sentimiento de hostilidad que generaba agresiones entre individuos que no estaban relacionados con la disputa original, y que no sabrían decir por qué. Probablemente los miembros de la parroquia rival les cayesen mal, los considerasen estúpidos o vagos o en general mala gente; los mecanismos cognitivos de devaluación son una constante entre grupos que tienen malas relaciones¹²³⁷. No sería necesario que tuviesen fuertes sentimientos de aversión para que se produjesen episodios de violencia: como hemos visto anteriormente, los llamados crímenes de odio surgen frecuentemente del aburrimiento y el deseo de destacar dentro del propio grupo¹²³⁸. El enfrentamiento, así, establecería unas dinámicas propias y los participantes lo emplearían para obtener beneficios emocionales y sociales.

En la mayoría de los casos, como en el conjunto de la violencia derivada de disputas y riñas, estos enfrentamientos se limitaban a peleas y golpes con armas no letales, con lo que el homicidio sería la excepción. Además, testimonios de la época franquista señalan a que había una cierta ley del silencio, y solo se acudía a las autoridades en caso de muertes o heridos graves¹²³⁹. A la hora de cuantificar el fenómeno hemos contado como muertos en este tipo de enfrentamientos a fallecidos en peleas de carácter colectivo y en las que los contendientes estén diferenciados en base a un criterio geográfico, es decir, que los bandos pertenezcan a parroquias o lugares distintos. Basta con que una sola persona realice la agresión letal, pero ha de pertenecer a un grupo o enfrentarse a otro. Es posible que así excluyamos enfrentamientos en los que solo se mencione al homicida y al fallecido, pero es una limitación necesaria. Entender todas las muertes que se cometan entre vecinos de diferentes lugares como enfrentamientos interparroquiales sería diluir el fenómeno. Manuel Carrodegua discutió en una taberna con un hombre de otra parroquia; un vecino del segundo, Santiago Canosa, se interpuso para separarlos, y Carrodegua le disparó por la espalda¹²⁴⁰; aquí no hay un componente colectivo, ni mucho menos competición comunitaria por los recursos.

Tener una confirmación explícita de que había dos bandos geográficamente también es necesario para descartar falsos positivos, pero deja fuera enfrentamientos que posiblemente tuviesen carácter

¹²³⁴ “The main course of conflict during traditional times was competition over the ownership, access and use of resources, particularly land, women and pigs. Conflicts were seen as an inevitable part of life and a higher authority capable of exerting and enforcing power and authority across tribes, regions, and cultural groups was absent”. YALA, CH. (2002), p. 7.

¹²³⁵ Hay que señalar que en los siglos XIX y XX la violencia instrumental no resultaba demasiado práctica, pues, como hemos visto en las disputas acerca de la propiedad, el bando “ganador” solía recibir una sanción penal muy superior al valor del objeto en disputa.

¹²³⁶ BAUMEISTER, R. F., BUTZ, D. A. (2005), pp. 88-89.

¹²³⁷ STAUB, E. (2005), pp. 52-53.

¹²³⁸ BOYZMAN, E. B. MCCAULEY, C. ROZIN, P. (2005), p.25. A partir de los trabajos de BAUNMEISTER, R. F. (1997), y el estudio a partir de los ficheros de la policía de Boston de MCDEVITT, J., LEVIN, J., BENNET, S. (2002): “Hate crime offenders: An extended typology”, en *Journal of Psychology*, nº 40, pp.104-114.

¹²³⁹ ALONSO GAYOSO, E. (2015), pp. 326-328.

¹²⁴⁰ EP 05-02-1920, p.5, EP 07-02-1920, p.6, LV 06-02-1920, p.3.

interparroquial. En una romería celebrada en septiembre de 1935 “en el lugar de Portomouro [Portomouro], parroquia de Buján [actualmente Val do Dubra] se suscitó una violenta discusión entre varios jóvenes porque un grupo de mozos pretendió suspender el baile”. Uno de los segundos hizo cinco disparos con una pistola sin licencia y un joven acabó muerto¹²⁴¹. Es probable que este enfrentamiento tuviese carácter interparroquial, ya que intentar impedir un baile o una fiesta organizada por los de la parroquia rival era uno de los desencadenantes de las peleas, pero al no tener una confirmación explícita, lo hemos descartado, al igual que otro caso parecido ocurrido en la parroquia de Sira, en Silleda¹²⁴². En otro caso acontecido en 1920, que veremos en el apartado 9.3, se produjo un choque de mozos de dos parroquias diferentes con motivaciones supuestamente políticas. No lo incluimos en esta parte porque puede que los bandos se definiesen en base a la adscripción política y no a la parroquial; sin embargo, como señalan Cabo Villaverde y Vázquez Varela, en algunos casos se mezclaron ambos parámetros.

Teniendo en cuenta estas exclusiones, hemos encontrado veintidós en enfrentamientos interparroquiales. Son minoritarios en el conjunto de homicidios por riñas y peleas, y son incluso una minoría dentro de los que ocurren en espacios de fiesta. Teniendo en cuenta que la media para el periodo estudiado es de poco más de cuatro muertos por año, que Galicia cuenta con unas 3.700 parroquias y que en casi todas ellas habría una festividad del patrón y varios bailes y romerías todos los años, puede verse que los enfrentamientos letales por disputas interparroquiales ocurrían en una parte muy pequeña de las fiestas. No sabemos, por supuesto, cuántas peleas sin carácter letal ocurrían.

Pero la cantidad de muertos no es desdeñable. Aunque cubren una casuística tan restringida, suman una cifra similar a las muertes de pareja, por actos delictivos, y superior a todos los muertos por fuerzas policiales.

Tabla 7.11.1.1 Muertes en enfrentamientos interparroquiales, en números absolutos y en tasa anualizada por 100.000 habitantes, en conjunto y con arma de fuego

	1920	1925	1930	1935	1936	Conjunto del periodo
Muertes	8	5	2	4	3	22
Tasa	0,38	0,23	0,09	0,17	0,23	0,22
Muertes por arma de fuego	7	0	2	3	1	13
Tasa	0,33	0	0,09	0,13	0,08	0,13
Porcentaje de homicidios realizados con arma de fuego dentro de los casos realizados con un arma conocida	100	0	100	75	50	72,22

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Con los datos que tenemos, el fenómeno parece disminuir con el tiempo, aunque hay que decir que, como estamos registrando el número de muertes y estas son pocas, la volatilidad de la tasa es alta. Sin embargo, hay motivos para pensar que estaban en decadencia, relacionados con el aumento de la presión policial. Al menos desde el siglo XX los alcaldes pedían parejas de guardias para custodiar las romerías y prevenir incidentes, lo que posiblemente se convirtió en un factor de disuasión. Esto

¹²⁴¹ LV 15-01-1936, p.2.

¹²⁴² FV 15-12-1935, p. 12, 19-12-1935, p.2, LV 20-12-1935, p. 9.

era una práctica antigua; según afirma Peña Díaz, “las romerías estuvieron durante siglos fuera de control, y en el XVIII se convirtieron en un campo de tensiones y fuerzas entre la cultura popular y las agresiones ilustradas”, si bien parte de ese fuera de control no son violencia y motines, sino beber, bailar y vender; el autor considera que fracasaron, quizás por falta de alternativas¹²⁴³, pero es razonable pensar, a la vista de los datos sobre fuerzas policiales que hemos visto en el artículo 3, que en el siglo XX el control podía hacerse más efectivo¹²⁴⁴. El régimen de Primo de Rivera persiguió los choques interparroquiales, con castigos ejemplares por parte de los gobernadores civiles¹²⁴⁵. Al menos en Lugo, el Gobernador Civil asumió la competencia de autorizar “fiestas campestres y bailes públicos”, aunque en 1930 volvieron manos de los ayuntamientos¹²⁴⁶.

El año de 1920 es además en el que hay una mayor incidencia de muertes por arma de fuego en relación a la población general, y en algún caso se emplearon con profusión. En junio de ese año los vecinos de la parroquia chantadina de Argozón estaban celebrando una romería en honor a San Antonio. Cuando “mayor era la animación, un grupo de mozos de la inmediata parroquia de Muradelle, invadió el campo empezando a disparar tiros”. Un joven, Ramiro Río, quedó herido de un tiro y solo se pudo traer a un cura que lo absolviera, al tiempo que los atacantes se marchaban “aquellos rifeños huían saltando zanjas y destrozando sembrados”¹²⁴⁷.

Las muertes por disparos en choques interparroquiales descendieron con Primo de Rivera (si bien en 1925 hubo bastantes por otras causas), y, al contrario que otras formas de violencia, no se recuperaron en la Segunda República. Esto pone en cuestión la percepción de algunos contemporáneos de que se estaban perdiendo las costumbres que frenaban el uso de la violencia extrema, como los ancianos de la parroquia de Velle entrevistados por Vicente Risco en los años 30¹²⁴⁸. De cualquier modo, esta percepción puede responder con una experiencia local; si los mozos de Velle llevaban una década peleándose con garrotes y navajas y en un momento dado uno mató a otro de un pistoletazo, es lógico que los habitantes de la localidad percibiesen que se había incrementado la violencia.

En su conjunto, los disparos causan en conjunto un 68,75% de las muertes, pero esto no quiere decir que las pistolas fuesen las armas más empleadas: simplemente aparecen sobrerrepresentadas porque eran las más letales.

Todas las muertes se producen entre hombres, y hombres jóvenes. El implicado de más edad que conocemos es Manuel Pallas Golán, que murió a los 28 años en “una verdadera batalla” a tiros y a

¹²⁴³ El autor considera que estas fiestas también se limitaron en el siglo XIX por un aumento de los tiempos de trabajo, algo que no tenemos datos para corroborar o desmentir. PEÑA DÍAZ, Manuel (2014), pp. 791-792, 800-802.

¹²⁴⁴ El control no fue fácil de lograr incluso en países europeos considerados como más avanzados en el proceso de contrucción estatal y nacional que España. Así, en en la Francia decimonónica y en lo referente a las luchas entre aldeas, “pendant plus d’un demi-siècle, les pouvoirs publics apparaissent bien souvent impuissants et la justice ne parvient que très difficilement à endiguer de tels éclats de violence. CHAUVAUD, F. (2002), p. 8.

¹²⁴⁵ CABO VILLAVERDE, M., VÁZQUEZ VARELA, J. M. (2015), pp. 789-790.

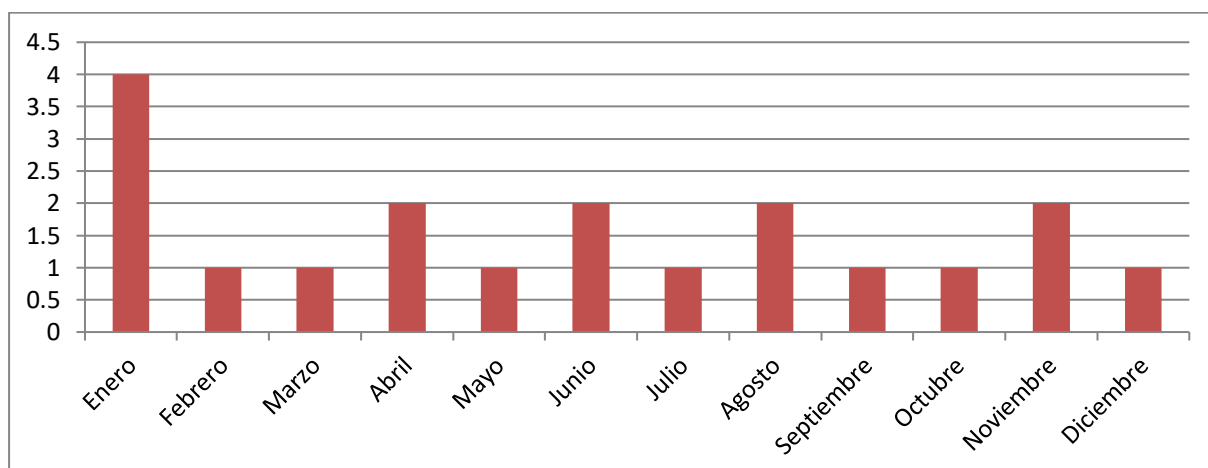
¹²⁴⁶ EP, 24-04-1930, p.1.

¹²⁴⁷ Esta es la versión del *Faro de Vigo*, que si bien cataloga erróneamente el lugar como perteneciente a Ourense, proporciona detalles sobre el nombre de las parroquias y el muerto que dan verosimilitud a la versión. En *El Progreso* solo se señala que se produjo un choque entre mozos con navajas y revólveres, sin que se haga mención a su carácter de choque interparroquial. EP 26-06-1920 (5-6), FV 25-06-1920, p.3, LR 24-06-1920, p.2.

¹²⁴⁸ En concreto, los ancianos de la parroquia de Velle, entrevistados por Vicente Risco en los años 30. Citado en CABO VILLAVERDE, M., VÁZQUEZ VARELA, J. M. (2015), pp. 786.

palos entre los mozos de la parroquia de Andaio, en Tordoa, y “otros de las limítrofes” ¹²⁴⁹. Todas las muertes tienen lugar en el ámbito rural y en contextos de fiesta. Al contrario de lo que sería esperable, en verano no se da un pico de muertes en choques entre parroquias: los homicidios por mes son muy parecidos, y tan solo destaca enero.

Gráfico 7.11.1.1 Muertos en choques interparroquiales, según el mes en que se produjeron las heridas, contando 1920, 1925, 1930 y 1935 y descontando 1936 por ser un año incompleto



Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Al igual que en los enfrentamientos particulares, los caminos de regreso de la fiesta podían convertirse en el espacio de la violencia. El 18 de enero de 1920 varios mozos de las parroquias de Santa María de Castro y Berís, en Begonte, regresaban de una romería y se encontraron en un lugar llamado Puente Miraz, en el que “después de discutir acaloradamente y armados de palos, se repartieron varios estacazos, de los cuales recibió uno con tan mala suerte el desgraciado Antonio Grandío, que a los tres días dejó de existir”¹²⁵⁰.

En nuestras fuentes no encontramos (tampoco se prestan a ello), auténticos campeones de parroquia, esto es, al joven del que los demás esperan que se pelee con miembros de otros grupos y que lo hace por la presión social en torno a ello. Este es un patrón que se da en otros ámbitos de gresca juvenil y que Toch describe como “rep-defending”; Pardo Bazán también presenta a dos de estos valientes de parroquia en *Sin Querer*.

Algunos de estos enfrentamientos eran efímeros y tan solo una o dos personas realizaban agresiones de consideración. Otros son más numerosos, y, si bien no dejan de ser escaramuzas con media docena de heridos, en la Galicia del momento hay que irse a los motines y la violencia política para encontrar eventos similares en número de heridos. El jueves 25 de junio de 1936 se celebró un baile en la parroquia de Gones, en Ponteceso, y “sucedio que, como suele ocurrir siempre, en tales esparcimientos de la aldea; terminado el baile a las nueve de la noche, se libró una pelea a palos y puñaladas” entre los mozos del lugar y otros de una parroquia de Malpica. Murió acuchillado un mozo de Gones, Ramón Abelenda, y heridos seis convecinos, cinco hombres y una mujer, de palos o puñaladas¹²⁵¹. En 1920 un enfrentamiento entre varias parroquias dejó cinco heridos¹²⁵². En un caso de 1930, que quizás podría denominarse choque entre villas, un grupo de jóvenes de Corcubión

¹²⁴⁹ LV 13-08-1920, p.1, EP 14-08-1920, p.6

¹²⁵⁰ EP, 24-01-1925, p.2

¹²⁵¹ LV, 28-06-1936, p.6.

¹²⁵² LR 18-06-1920, p.2, EP 19-06-1920, p.6

fueron de fiesta a Finisterre en coche (entre las cabezas de los dos municipios hay unos 12 kilómetros). “Ya en Finisterre quisieron hacerse los dueños del pueblo”, con lo que empezó una pelea con varios vecinos y tres resultaron heridos¹²⁵³.

En la Francia contemporánea las peleas entre bandos de jóvenes solían escapar a la acción de la justicia, en algún caso se imponía algún castigo ejemplarizante¹²⁵⁴. Pero el carácter caótico de estos enfrentamientos podía ayudar a que las agresiones quedasen impunes. En agosto de 1898 en el campo de la fiesta de una parroquia ferrolana empezó una pelea en la que, según fuentes judiciales, participaron “los mozos de distintos pueblos inmediatos, dándose unos a otros golpes con palos y navajas”. Un hombre recibió una herida incisa en la novena costilla, otro, una penetrante en el brazo derecho. Se juzgó a seis personas de la parroquia de Vilalba por las lesiones, todos hombres jóvenes aunque no adolescentes: tres de ellos tenían 29 años, y los restantes 26, 24 y 18. Comparten el no tener lazos matrimoniales, pues cinco eran solteros y el sexto, uno de los de 29 años, ya era viudo, y quizás estaba viviendo una segunda juventud con los solteros de su edad que nunca se habían casado. Todos eran analfabetos, circunstancia que en esta época ya no era hegemónica en su franja de edad (aunque seguramente variaría mucho entre parroquias, en función de la disponibilidad de escuelas), y uno había sido condenado anteriormente por lesiones. Se retiró la acusación por parte del Ministerio Fiscal “por no haberse acreditado culpabilidad alguna por parte de los procesados”¹²⁵⁵.

Puntualmente hay ataques de carácter ritual. En una romería celebrada en una parroquia identificada como “Haz” [Az], del municipio de Rodeiro, estalló una disputa entre unos vecinos de la localidad y otros de Ventosa, en A Golada. Quedó muerto un hombre, Manuel Hermida, que fue enterrado en Haz. Los autores no fueron hallados, pero sí se detuvo a algunos vecinos de Ventosa que desenterraron el cadáver de Hermida y lo llevaron al cementerio de su parroquia¹²⁵⁶. La noticia no deja claro si intentaron recuperar el cuerpo de un vecino que había sido enterrado en el terreno sagrado de una comunidad rival, o si era una profanación maliciosa de algún tipo. No sería el único caso de ritual de humillación a un cadáver que encontrásemos en Pontevedra ese año: en agosto fueron detenidos el enterrador de la parroquia de Cella y la vecina María Alonso por violar la sepultura de un tal José Casqueiro, propiedad de Alonso, y arrojarlo a una fosa abierta: “Parece ser que tales hechos obedecieron al rencor que la María conservaba al Casqueiro porque le había puesto encinta a una hija suya”¹²⁵⁷.

¿Cuál era la percepción de los contemporáneos sobre estos enfrentamientos? Para empezar, hay que señalar que los reconocían perfectamente, señal de que era un tipo de evento frecuente. El cronista judicial de *La Voz de Galicia*, acerca de una vista sobre una muerte en un choque entre parroquias en Abegondo ocurrido en 1924, describía fácilmente su trasfondo: “Los motivos [...] son los que generalmente originan muchos de los [homicidios] que se cometen en Galicia. Rivalidad de parroquias”¹²⁵⁸. Las clases ilustradas parecían pensar que se trataba de un rasgo de salvajismo, a eliminar, aún considerando quizás que provenían de una tradición romantizada.

¹²⁵³ LV, 24-12-1930, p. 7.

¹²⁵⁴ CHAUVAUD, F. (2006), pp.188-189.

¹²⁵⁵ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 25, folios 72-73.

¹²⁵⁶ EP 20-04-1920, p.6

¹²⁵⁷ FV 18-08-1920, p. 4.

¹²⁵⁸ Sería interesante estudiar las estrategias de defensa y los resultados de este tipo de juicios, aunque queda fuera de los propósitos de este trabajo. En este caso, para los acusados de la muerte el fiscal pedía cerca de quince años de prisión y una indemnización de 10.000 pesetas, mientras que los procesados se declaraban inocentes. LV, 27-11-1925, p.1.

Después de una muerte en un choque interparroquial en el partido de Monforte en 1920, un periodista de *El Progreso* llamado Ricardo Valcarce escribía un artículo de opinión titulado *El imperio de la barbarie*, lamentando que al volver a Galicia, tras dos décadas y media en Buenos Aires, afirmaba que la Galicia tradicional ya había dado paso al progreso, aunque quedaban “los vestigios más dolorosos”. En las antiguas reyertas de romería, afirmaba Valcarce, se batían los “buenos esgrimidores del fungueiro que aun no dejando de ser unos vulgares pendencieros, sus reyertas tenían alguna vez matices de gimnasia bucólica”. Pero en su época solo quedaba el “atavismo bestial”. “¿Para qué queremos esas romerías sin en ellas sólo se practica la cacería de hombres?” preguntaba, pidiendo más vigilancia de las autoridades¹²⁵⁹.

7.12. “Salió dispuesto, a ser posible, a dar muerte a cuantos encontrase a su paso”: otros homicidios, locura y crímenes sexuales y pasionales

Los casos que hemos conceptualizado como “otros” suman 14 muertes, y suponen un 4% del total, descontando casos desconocidos. En algunos no hay demasiado que decir; simplemente escapan a las categorías. En 1936, un ex legionario mató a un industrial que le negó trabajo¹²⁶⁰. Pascual Campos, un guardia de Seguridad de “buenos antecedentes” y estimado por sus jefes y compañeros se emborrachó en 1925 y encañonó con su pistola un vecino de Vilagarcía para que le indicase dónde podía encontrar a determinada prostituta; no la encontró en la casa que la indicaron, y acabó estrangulando a la anciana que allí vivía. Unos minutos después se presentó a prestar servicio¹²⁶¹.

El contingente más importante dentro de este apartado son los homicidios causados por ataques de locura, de los que hay algunos muy claros. Manuel Barros, un herrero de 50 años, sufría accesos de vesania, y su mujer e hijos lo habían abandonado por ello. El lunes 24 de mayo de 1920 llevó a su taller a un niño de tres años, hijo de una vecina, le puso la cabeza sobre un cepo, lo decapitó a hachazos, tiró la cabeza a un rincón y depositó el cuerpecillo en su fragua. Al homicida, que según el periodista “no parece darse cuenta de nada”, lo condujeron sus vecinos y la Guardia Civil a la cárcel de partido¹²⁶². Una década más tarde, un hombre llamado Luis Outeiriño murió a hachazos en Paderne (A Coruña) a manos de su convecino Jesús Fuente. Después de que dos hombres lograran reducirlo y encadenarlo, declaró que “el Outeiriño estaba preparando el horno para quemar a una hija suya”. El desequilibrio mental de se atribuyó a que Fuente había perdido recientemente un pleito de riegos¹²⁶³.

Encontramos otros tres homicidios, uno en 1925¹²⁶⁴ y otros dos en 1935¹²⁶⁵, en el que la motivación principal atribuida a los autores es la locura, exactamente uno al año. A estos cinco se suman otras 8 muertes en el seno de la familia, entre parientes y otras 3 entre pareja, contando los casos en los que alguien se defendió del ataque de un alienado.

No encontramos grandes muestras de ataques masivos e indiscriminados con finalidad suicida, del tipo que Mullen denomina “autogenic massacre”¹²⁶⁶, o en asaltos tipo *amok*¹²⁶⁷. El sábado 7 de septiembre de 1935 José Pérez, un carpintero de una parroquia rural de Miño, salió de su casa con

¹²⁵⁹ EP, 14-01-1920, p. 5.

¹²⁶⁰ FV, 30-06-1936, p.1, FV, 04-07-1936, p. 9

¹²⁶¹ FV 11-08-1925, p.1, 12-08-1925, p.1, eP 12-08-1925, p.2

¹²⁶² LV, 26-05-1920, p.1.

¹²⁶³ FV 03-04-1930, p.1.

¹²⁶⁴ El de Justo Tojeiro FV 26-12-1925.

¹²⁶⁵ LV 15-11-1935 (8), LR 23-11, p.6, LV 23-11, p.1.

¹²⁶⁶ MULLEN, P. E. (2004).

¹²⁶⁷ IMAI, H. et al (2019).

una escopeta “dispuesto, de serle posible, a dar muerte a cuantas personas encontrase a su paso”. Estaba obsesionado con la idea de que “todos sus convecinos le odiaban y perseguían” y que llevaba meses dando muestras de enajenación mental. Hirió a tres personas antes de ser detenido¹²⁶⁸. Pero no forma parte de un patrón cultural reconocible.

Hay un par de casos de crímenes pasionales que no pueden encajarse en las categorías anteriores. Bernardo Espiñeira, un joven de 24 años, había sido rechazado por Bernardina Blanco, una mujer casada con Segundo Vila. La noche del 28 de agosto de 1920 fue hasta el domicilio de ambos, armado con escopeta y revólver. Mató al marido en la puerta de su casa, sin disputa previa, luego la mató a ella de un tiro de revólver y le golpeó el cráneo con la culata de la escopeta¹²⁶⁹. Antonio Serén mató al padre de su novia y apuñaló a su hermana por oponerse a sus relaciones; en medio del ataque también hirió a su pareja, si bien al parecer por accidente¹²⁷⁰.

No hemos encontrado ninguna muerte ligada a abusos sexuales fuera de la pareja, pero sí un crimen tratando supuestamente de evitarlo. José Castro, un viudo de Silleda de 65 años de edad, apareció muerto en 1920 con la cabeza destrozada. Fueron detenidos Pedro, Manuela y Leonor Gómez, que “confesaron que lo habían matado a golpes de azada y palos, manifestando que lo hicieran porque el muerto intentara violar a la Manuela”¹²⁷¹.

Sí, en cambio, se ve alguna muerte por agresión sexual entre hombres. Así se insinúa en el caso del joven Camilo Fernández, al que cuatro ferrolanos golpearon y abandonaron en una playa para ocultar las huellas de la paliza que le habían pegado. Además de los golpes, “se les imputan otros delitos repugnantes”, un maltrato ejercido de una manera “tan despiadada, que la pluma se resiste a narrarlo”¹²⁷². Una propuesta de relaciones homosexuales que fue rechazada parece estar detrás de otro homicidio en Ourense en 1930, cometido por Faustino Cruz, un tabernero “degenerado” y “afeminado”¹²⁷³.

7.13 Con motivación desconocida

En este apartado se ha incluido un contingente numeroso de muertes, un total de 72, que no han podido adscribirse a la clasificación anterior debido a la falta de información fiable. En algunos casos, sabemos que alguien murió asesinado pero no conocemos el autor. Vicente Echevarría apareció muerto en 1935 en A Coruña, tirado en unas peñas y con tres tiros en el pecho y otro en el hombro. Pese a que se especuló con que su muerte estuviera ligada al tráfico de drogas, o a una venganza amorosa, el autor es desconocido, y también la motivación real¹²⁷⁴. La cabeza de Manuel Rial, así como algunas ropas y otros restos, aparecieron en un monte de Santa Comba en septiembre de 1925, en lo que evidentemente no era una muerte natural. “Se supone sea el criminal un compañero y vecino”, aparece en la prensa, pero la cuestión no pasa de suposición; según el periodista, “porque la psicología de nuestros paisanos, produce labor negativa: nadie sabe nada, nadie oyó nada; nadie vió nada”¹²⁷⁵.

¹²⁶⁸ LV, 10-09-1935, p.2.

¹²⁶⁹ LV, 19-10-1920, p.3. En El Progreso se presenta otra versión, que consideramos menos fiable 07-10-1920, p.6.

¹²⁷⁰ FV, 30-08-1925, p. 8, 01-08-1925, p. 7, 04-08-1925, p.1.

¹²⁷¹ FV 03-09-1920, p.1.

¹²⁷² LV 18-08-1920, p.1, 18-08-1920, p.6.

¹²⁷³ FV 12-03-1930, p. 5, LV 13-03-1930, p.4, EP 13-03-1930, p.3.

¹²⁷⁴ LV 19-06-1935 (1-2), 20-06-1935, p.1, 22-06-1935, p.1.

¹²⁷⁵ LV, 11-11-1925, p.1.

En otras ocasiones hay un detenido, o varios, pero no sabemos nada acerca de las circunstancias del crimen. José Galán salió el 20 de abril de su casa para comprar vino. Volvió horas después, gravemente herido, y murió sin acusar a nadie. Sabemos que se detuvo a Daniel Pardo, un cantero de 23 años, y a otros cuatro hombres, pero con una información tan escasa no es posible clasificar el tipo de muerte¹²⁷⁶.

Las muertes clasificadas como desconocidos, teóricamente, encubren delitos cometidos a sangre fría y en lugares ocultos. Las muertes ante testigos y en poblado aparecerían sobrerrepresentadas entre los casos conocidos. En la práctica, sin embargo, hemos catalogado una buena cantidad de muertes desconocidas simplemente porque la información aparecida en la prensa es insuficiente. Se habla de un sospechoso principal o incluso de un autor, pero no sabemos por qué cometió el delito. Estos son los más conflictivos, ya que con algo de imaginación podrían clasificarse en otras categorías, y en ocasiones resulta difícil ponderar qué casos incluir y cuáles no. De Evaristo Balsas Carballo, por ejemplo, sabemos que lo mató un vecino suyo con un gadaño, según la declaración que realizó antes de morir en el hospital de Santiago, pero no por qué¹²⁷⁷. Eligio Pérez y Vital González eran vecinos en Cenlle, Ourense, y el primero le disparó al segundo una mañana sin mediar palabra. Si el periodista hubiera apuntado que había “resentimientos” entre ellos, y parece probable que existiesen, lo habríamos clasificado en el apartado correspondiente¹²⁷⁸.

Por último, hay otros homicidios en los que hay demasiadas posibles explicaciones, pero ninguna satisfactoria. Un caso curioso es el de Teresa López, una viuda, una viuda vendedora de quincalla de 60 años que apareció golpeada y estrangulada en su casa de Oleiros en noviembre de 1935, con la mesa puesta para dos personas aunque vivía sola. El detenido por la muerte fue un tal José Ramos Illobre, que años atrás había matado al marido de Teresa y cumplido condena por ello en presidio. Tiempo después volvió por la zona, con el nombre cambiado y convertido en constructor, hasta que en 1933 se esfumó dejando deudas por 100.000 pesetas. El año en que supuestamente mató a la mujer vivía retirado y con otra identidad; abundaron las especulaciones acerca de la relación entre ambos¹²⁷⁹.

Por las propias características de los homicidios clasificados como desconocidos resulta inútil realizar una tipología interna en base a sus motivaciones, y los parámetros relevantes para otras partes del análisis, como el sexo de autores y víctimas, la fecha de la muerte y las armas empleadas, ya se han incluido en los apartados correspondientes.

Tabla 7.13.1. Porcentaje de muertes clasificadas como de motivación desconocida en relación al conjunto de casos no dudosos

	1920	1925	1930	1935	1936	Conjunto del periodo
% de muertes por motivo desconocido	20,18	20,97	13,33	18,69	10,13	17,02

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa¹²⁸⁰

¹²⁷⁶ LV, 25-04-1930, p.1, 26-04-1930, p.3.

¹²⁷⁷ LV 17-03-1936, p. 10, FV 17-03-1936, p.6.

¹²⁷⁸ LR 30-05-1935, p.5.

¹²⁷⁹ LV 26-11-1935, p.2, 27-11-1935, p.1, 28-11-1935, p.1, 04-12-1935 (7), 15-01-1936 (1-2), 16-01-1936, p.1, 17-01-1936, p.1

¹²⁸⁰ Homicidios en Galicia, BZ125.

Sí que resulta relevante cuantificarlas para identificar los posibles sesgos que ha podido introducir en el estudio. La cantidad de muertes clasificadas como desconocidas es para el conjunto del periodo cercana al 17% de los casos, es más alta en los años 20 y disminuye en 1930 y en adelante. El descenso se debe seguramente a la mayor información que ofrece la prensa, que en conjunto va mejorando en número de corresponsales, profesionalidad y extensión. Los números especialmente bajos de 1936 se deben, además de a esta tendencia, a que varias muertes misteriosas de ese año se han clasificado como potencialmente por motivos políticos.



8. LA VIOLENCIA POLÍTICA HASTA EL FINAL DE LA RESTAURACIÓN

En este apartado y los dos siguientes nos ocuparemos de la violencia con carácter colectivo y objetivos sociales o políticos. Trataremos de ver la violencia no como irrupciones disruptivas o fuera de la normalidad en una vida política que deba ser naturalmente pacífica, sino como una herramienta que se empleó en momentos en que sus autores, por disposición y oportunidades, lo consideraron conveniente. Como dice Rafael Cruz, “la violencia política es parte de la política”¹²⁸¹.

Dejaremos fuera ataques contra las autoridades que no responden a nuestra definición. Por ejemplo, la noche del 15 de febrero de 1841 hubo un supuesto intento de magnicidio contra el alcalde primero constitucional de A Coruña, Ubaldo Chicharro: un tal Nicolás Barral, según la declaración del regidor, lo siguió por la calle y lo acometió a navajazos, aunque Chicharro pudo retrasarlo y escapar esgrimiendo su paraguas. El motivo del ataque era, supuestamente, que el alcalde había expulsado a su amante, Antonia Buján, con la que se entendía “escandalosamente y por la cual golpeaba frecuentemente a su infeliz mujer”. Lo acusó de haber acometido con navaja también a un sereno y a su cuñado¹²⁸². En este caso, aunque el agredido sea una figura pública, y recibiese un ataque en ejercicio de su cargo, la motivación no tenía como objeto cambiar la configuración política del Ayuntamiento ni modificar las relaciones de poder en un entorno laboral o social. De la misma manera, al regidor del ya extinto municipio lucense de Villadrid fue herido a tiros en 1930 de un vecino, pero al parecer por estar atravesando una finca de la propiedad de este¹²⁸³.

8.1 Amanecida de sangre: las convulsiones del nuevo siglo (1800-1840)

Durante la Edad Moderna el territorio gallego no había sido tocado por “sucesos convulsivos de tipo bélico, demográfico o institucional” que generasen cambios bruscos¹²⁸⁴. Los gallegos servían en guerras exteriores, y, si bien la Monarquía Hispánica tenía problemas para conseguir voluntarios en la región, se enviaron miles de gallegos al conflicto de Flandes en el siglo XVII, contando voluntarios, forzados, quintos y milicianos del ejército de Galicia constituido durante la guerra de separación con Portugal y posteriormente embarcados hacia el Norte¹²⁸⁵.

Las principales actividades bélicas fueron los enfrentamientos con Portugal, que convirtieron las regiones meridionales de Galicia en territorios de frontera, especialmente a mediados del XVII¹²⁸⁶ y las incursiones marítimas de otras potencias europeas: en 1719, los ingleses asaltaron poblaciones como Ribadeo y Finisterre y tomaron varias villas y fortalezas de las villas meridionales, entre ellas Vigo, Pontevedra, Marín y Redondela¹²⁸⁷, mientras que la incursión de Drake en A Coruña en 1589 sigue recordándose anualmente con fuegos y una Función del Voto.

La vulnerabilidad de las costas determinó el establecimiento de sistemas de alarmas, caudillatos y fachos por la costa, que no debemos ver como una particularidad gallega. Las milicias locales y

¹²⁸¹ CRUZ, R. (2002), p. 293.

¹²⁸² El hombre se dedicaba a la curia forense, y había sido oficial de varios escribanos de número. Se le condenó a cuatro meses (más los pasados en prisión provisional, con lo que cumplió desde febrero hasta diciembre). *Causas*, 978, 5.

¹²⁸³ *LR*, 24-01-1930, p. 8.

¹²⁸⁴ ARTIAGA, A. (2005), p. 58.

¹²⁸⁵ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J. (2007).

¹²⁸⁶ Sobre los enfrentamientos con los portugueses en la frontera ourensana durante la Edad Moderna, GARCÍA MAÑA, L. M. (1988), pp. 46-72.

¹²⁸⁷ MEIJIDE PARDO, A. (1992), pp. 45, 62, 65.

provinciales eran comunes en el Antiguo Régimen y existían en otras partes de España y Europa¹²⁸⁸. Puntualmente se convocaron milicias del interior: en 1719, para proteger Santiago, acudieron paisanos “con chuzos y picas antiguas agunos, otros con mosquetes, pocos con escopetas, y los más con varales largos de los que compran en Castilla cuando van a la siega”¹²⁸⁹.

Salvando estos casos, Galicia no vivió el paso de ejércitos por su territorio, y tampoco sufrió las luchas religiosas o grandes agitaciones revolucionarias que marcaron a otros países. Es más, salvó con cierta solvencia la crisis de mediados del siglo XVII¹²⁹⁰ y, como hemos señalado en el apartado 5.2, empieza nuestro periodo de estudio con una alta densidad de población para la Europa de la época.

La lucha contra el francés es el gran conflicto del siglo XIX. En Galicia fue limitada temporalmente; la insurrección contra José Bonaparte estalló en 1808 y se constituyó una Junta del Reino de Galicia que mandó hombres armados a la Meseta, pero en estos momentos no había guarniciones leales a Bonaparte en territorio gallego. Los combates en la región se limitan a los meses de enero a finales de junio-inicios de julio de 1809, esto es, desde que las primeras fuerzas francesas entraron persiguiendo al ejército de Moore y ocuparon las principales ciudades hasta que las tropas de Ney abandonaron la región¹²⁹¹. Los franceses, por su parte, no eran una fuerza muy numerosa¹²⁹².

Lo que resulta interesante es que muchos paisanos ejercieron violencia extrema en ámbitos cercanos a su vida civil, dado que el combate contra los franceses en territorio gallego se realizó sobre todo con fuerzas irregulares y por tanto locales. Las milicias gallegas pelearon con ferocidad, al menos según la percepción de los soldados franceses que se enfrentaron a ellos como Rocca¹²⁹³ o Jomini. El inicio de la lucha popular contra los franceses se inició con requisas, brutalidad y saqueos de éstos¹²⁹⁴, y continuó con violaciones, masacres y matanzas de represalia; constituye, en nuestra opinión, la experiencia más brutal e intensa de violencia que vivió la población gallega desde entonces.

Sobre todo, fue una guerra popular, no en el sentido de que la resistencia fuese un movimiento de las clases populares, pues las juntas estuvieron dominadas por las élites¹²⁹⁵, pero sí en el sentido de que los combatientes surgieron de la sociedad civil y no de fuerzas formadas por militares

¹²⁸⁸ BUTRÓN PRIDA, G. (2020), pp. 6-7.

¹²⁸⁹ MEIJIDE PARDO, A. (1992), p. 121.

¹²⁹⁰ Fue “la única parte de España que registró un crecimiento demográfico sostenido” durante el siglo. PARKER, G. (250), pp. 91, 778.

¹²⁹¹ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), pp. 60-64, 89.

¹²⁹² Ney comandaba a unos 15.000 hombres para ocupar la región, que tenían que “cubrir un territorio hostil extenso, mal comunicado y con una población muy dispersa”. DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (2009), pp. 197-198.

¹²⁹³ “El mariscal Ney intentó en vano someter a Galicia por el terror de las armas, pero las medidas violentas, lejos de abatir a los habitantes, aumentaron su odio a los franceses, y como sucede siempre, en un país donde hay patriotismo, las medidas violentas continuaron con represalias aún más violentas. Los batallones y escuadrones enteros fueron degollados por los paisanos en una noche”. ROCCA, A. J. M. (1814), p. 91.

¹²⁹⁴ Un hecho reiterado en prácticamente todas las obras sobre las guerras napoleónicas que traten las relaciones con la población civil; los ejércitos de este periodo vivían de las requisas y el pillaje en territorio hostil. Por poner algunos ejemplos para Galicia, VALLEJO POUSADA, R. (2009), pp. 136, VALLEJO POUSADA, R., DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (2009), p. 243.

¹²⁹⁵ En Galicia estuvieron constituidas por “los hidalgos, los clérigos, empleados públicos y muy secundariamente por campesinos fuertes” a nivel local, y en las provinciales y la regional “el poder fue controlado exclusivamente por la elite militar, eclesiástica y económica”. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2005), p. 89. Sin negar esta primacía, Veiga Alonso resalta el “empuxe popular” en la creación de las juntas gallegas, con un “incremento da lexitimidade política que representan verbo dos concellos tradicionais”. VEIGA ALONSO, X. R. (2017), pp. 76-79.

profesionales o reclutas coaccionados por el Estado. “La guerra de liberación fue protagonizada por el pueblo”¹²⁹⁶, dice Barreiro Fernández, si bien la dirección de las partidas quedaba en manos de las élites locales. El pueblo participó también en los linchamientos de afrancesados y colaboracionistas, entre ellos el capitán general de A Coruña y el general José de Vargas, Comandante General del Departamento Marítimo del Norte, al que una turba sacó del arsenal de Ferrol y arrastró con una cuerda hasta dejar su cadáver bajo el pórtico de la intendencia de su departamento¹²⁹⁷.

La incursión francesa dio una experiencia de primera mano a los gallegos en relación a la guerra: en su recuento de bajas entre los paisanos, Osuna Rey contabiliza 1.865 hombres y 281 mujeres muertas¹²⁹⁸, e, incluso si estas fuesen todas las que acontecieron, supondría un peso relativo sobre la población similar a las 4.699 víctimas mortales de la represión franquista que ha contado el proyecto Nomes e voces, además de estar más concentradas en el tiempo. Solo podemos especular acerca del número de heridas, violaciones y requisas. Aunque breve, la presencia francesa en Galicia proporcionó sin duda experiencia con las armas a muchos paisanos, y muchos otros pelearon en otras partes de la Península¹²⁹⁹. Gran número de hombres formó parte de las fuerzas paramilitares: en 1810 la fuerza teórica de las alarmas, las milicias gallegas, era de 212.972 efectivos¹³⁰⁰. En agosto de ese año, 23.312 hombres de diferentes regimientos del ejército español se hallaban estacionados en la región¹³⁰¹.

Aún así, hay que poner estas pérdidas en relación a las vividas en el conjunto del país: en Navarra, zona de entrada de las tropas napoleónicas, la violencia causó un número de fallecidos semejante al de Galicia, pero para una población que no llegaba al cuarto de millón de habitantes. La continua presencia de tropas regulares de uno y otro bando y de guerrillas condujo a trajo enormes pérdidas económicas y la ruina a comunidades enteras, a través de exacciones y destrucciones¹³⁰².

En 1809, ya sin tropas francesas en Galicia, el capitán general hablaba de los efectos de la guerra en los paisanos: “esta experiencia les hace apreciar sobremanera las armas y las guardan como un tesoro para la primera necesidad, siendo más fácil hacerles dar todos sus frutos y ganado que un solo fusil”. Algunas de estas armas, señala, acababan en manos de contrabandistas y bandoleros¹³⁰³. Tras la toma de Vigo, de 2.000 fusiles que teóricamente dejaron los franceses en la ciudad, solo se recuperaron 300, “la mayor parte quedó extraviada entre el paisanaje, hecho frecuente en todo el reino durante la contienda”¹³⁰⁴. ¿Tuvo esto influencia en los niveles de violencia cotidiana, y, como detectaban las Cortes de Navarra para su propio territorio en 1828, era preocupante la “frecuencia de asesinatos, homicidios alevosos” motivada por la “desmoralización general y cierta ferocidad e las costumbres” debida a la “guerra de invasión de Napoleón y del sistema llamado constitucional”¹³⁰⁵?

Es una idea estimulante, aunque en lo referente a la “ferocidad” hay que recordar que, en base a estudios del siglo XX, no parece haber relación entre el incremento de la presencia de veteranos de guerra y la violencia en una sociedad: después de todo, una vez acabado el conflicto matar deja de

¹²⁹⁶ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2005), p. 91.

¹²⁹⁷ CARDESÍN, J. M. (2008), pp. 28-29.

¹²⁹⁸ OSUNA REY, J. M. (2006), pp. 414-416.

¹²⁹⁹ Ya en 1808 un total de 22.768 gallegos, del ejército reunido por la Junta de Galicia, pasó a Castilla. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), p. 49.

¹³⁰⁰ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), pp. 80-84.

¹³⁰¹ *Estado que manifiesta la fuerza efectiva...* (1810).

¹³⁰² MARTÍNEZ LACABE, E. (2004), pp. 212-219.

¹³⁰³ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2009), pp. 155.

¹³⁰⁴ VALLEJO POUSADA, R., DOMÍNGUEZ CASTRO, L. (2009), pp. 237, 240.

¹³⁰⁵ MARTÍNEZ LACABE, E. (2004), p. 289.

ser socialmente aceptable¹³⁰⁶, y, más importante, no tenemos estadísticas que nos permitan comparar los niveles de violencia antes y después de la guerra. Lo que sí parece haber aumentado, siguiendo a López Morán, es el bandolerismo violento¹³⁰⁷, reprimido por otra parte con por las autoridades militares.

La contienda trajo consigo dos olas de represión: hacia los afrancesados (y franceses) y, tras la vuelta de Fernando VII, contra los liberales gallegos más significados. Ni una ni la otra fueron especialmente feroces, hasta donde sabemos, dentro del contexto de la época. Al menos 411 individuos fueron procesados por colaboración con el invasor francés, y existieron algunos casos de ataques populares contra franceses o colaboradores, pero ningún linchamiento, dejando aparte los ya mencionados arrastramientos de militares en 1808, que fueron insurreccionales más que represivos¹³⁰⁸.

En cuanto al ajuste de cuentas de 1814, aunque en Galicia no hubo oposición armada a la reinstauración del absolutismo¹³⁰⁹, algunos liberales significados sufrieron penas de prisión o multa. Hubo numerosos actos de violencia simbólica contra los símbolos del constitucionalismo, y algunos ataques personales¹³¹⁰. El castigo, en palabras de Barreiro Fernández, se centró en A Coruña (la urbe más significada en cuanto a liberalismo) y parece tener como objeto más bien desactivar al liberalismo como movimiento político que a perseguir a los que profesasen esas ideas por tenerlas. Hubo una única ejecución en Galicia, la de Sinforiano López¹³¹¹.

El siglo continúa con pronunciamientos liberales. En 1815 tenemos la famosa conspiración de Díaz Porlier, con el pronunciamiento de la guarnición de A Coruña. No llegó a matar a nadie, si bien, según las actas del Ayuntamiento, tuvo un momento de furia después de que el órgano se negase a obedecer a sus órdenes. Golpeó al corregidor y “trato de asesinarle” mientras gritaba “Carajo, me cago en Fernando Septimo, me cago en el Ayuntamiento, y en el extraordinario Carajo [...]”, aunque lo contuvo un oficial. Luego mandó a fusilar a los concejales, si bien no llegó a efectuar la amenaza¹³¹². Porlier, por su parte, fue el único ejecutado por el pronunciamiento¹³¹³. En 1817 hubo otra conspiración en Santiago para dar un golpe de Estado, en la que participaron algunos liberales gallegos, militares de la guarnición y cadetes. Tuvo escasa entidad y fue fácilmente desmontada, y la mayor parte de los condenados a penas de cárcel ya habían sido liberados antes del Trienio Liberal¹³¹⁴. Habría un tercer complot en 1819¹³¹⁵.

A Coruña vuelve al candelero en 1820. El 21 de febrero el capitán general Francisco Venegas, recién destinado a Galicia, reunió a los altos cargos militares en el palacio de Capitanía General. Pero los liberales gallegos y los oficiales de los regimientos destacados en Galicia habían seguido

¹³⁰⁶ BOURKE, J. (2008), pp. 348-350, 363.

¹³⁰⁷ LÓPEZ MORÁN, B. (1995), p. 29.

¹³⁰⁸ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 32, 61-62.

¹³⁰⁹ GONZÁLEZ LÓPEZ, A. (1980), p. 33.

¹³¹⁰ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), pp 158-159.

¹³¹¹ Quizás debida a su posible conocimiento de la conspiración de Porlier, según Barreiro. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 84, 102-103.

¹³¹² Las citas son del Acta del Ayuntamiento del 22-07-1815, Archivo Municipal de A Coruña. Han sido extraídas, junto con el contexto del acontecimiento, de DE BARTHÉLEMY, R. G. (1995): *El Marquesito Juan Díaz Porlier: "general que fué de los Ejércitos Nacionales--" (1788-1815). Volumen 2*, (1995), pp. 473-478.

¹³¹³ Hubo otra decena de condenas de muerte, pero aplicadas a individuos que habían huido al extranjero. 95 conspiradores fueron puestos en libertad en 1819, al final del juicio, pues se consideró suficiente castigo la prisión que ya habían cumplido durante este. Otros recibieron penas de prisión o multas. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 108-110.

¹³¹⁴ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (1985), p. 42.

¹³¹⁵ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), pp. 182.

conspirando. Las tropas de Ferrol y Galicia estaban, sin que Venegas lo supiese, de acuerdo con Riego. Los oficiales presentes, unos 200, “sacaron sus espadas, creyendo Gral que las desenvainaban para sostener los sagrados derechos del trono”, según el propio Venegas, pero lo que hicieron fue llevarlo a prisión después de que un conspirador le pusiese “una pistola al oído derecho diciendo viva la Nación”. El gobernador de la plaza desenvainó la espada contra los sublevados y recibió “vars. heridas”¹³¹⁶. Tras algunas acciones militares, los sublevados expulsaron a las tropas absolutistas de Galicia.

En el golpe que dio inicio al Trienio Liberal se evitaron linchamientos, aunque el propio capitán general afirma que un “oficial desconocido”, que identificó como José Mariano Michelena, intentó provocarlo para hacerlo asesinar. Hubo, eso sí, depuración de funcionarios, multas y destierros¹³¹⁷. Pero las fuerzas opuestas al régimen liberal empezaron a actuar ya desde 1820, con motines, y sobre todo, la formación de partidas que se mantendrían a lo largo del trienio, perseguidas por el ejército regular y la milicia: “Apenas xura Fernando VII a constitución, e xa unha “Junta Apostólica” aparece na raia de Portugal con berros a prol de rei “neto” e relixión”¹³¹⁸. En la composición y acciones de estas guerrillas aparecen anticipadas las actividades carlistas de la década siguiente, y hay una cierta coincidencia de “zonas calientes”: las más activas fueron las de Chantada-Monterroso-Taboada y Burón, y también se levantan en la zona de Arzúa-Melide-Sobrado¹³¹⁹. Sus acciones fueron limitadas y no llegaron a ocupar territorio¹³²⁰. Sin embargo, la persecución de los grupos guerrilleros llevó, quizás, a una mayor brutalidad en las actitudes gubernamentales, muertes en caliente y ejecuciones. De cualquier manera, según Barreiro Fernández, mayoritariamente “se respetó la legislación vigente”¹³²¹.

Esto cambió cuando las tropas del duque de Angulema entraron en Galicia, donde, aunque las fuerzas constitucionalistas contaban con fuerzas numéricamente superiores a los invasores, no se organizó una resistencia capaz, como no la había habido en el resto del Estado¹³²². El general Morillo cambió de bando y se unió a los franceses pro-realistas. Después de la defección de sus tropas, resistir a ultranza era suicida. *Nuestro corazón tiernamente unido / Una y mil veces prometió, si, al cielo / De perecer en libertad lidiando / Cumplamos pues tan digno juramento, / Que en aras de la Patria hicimos / Yo por mi parte, Amigos, lo prometo*, decía en 1822 el estudiante de medicina Nicolás Taboada Leal a sus compañeros milicianos de Santiago en su *Canto épico al exaltado patriotismo [sic]*, pero tanto él como sus correligionarios optaron sensatamente por dejar la muerte heroica para otro momento¹³²³. Algunos, como parte de los miembros de la Compañía Sagrada de Ferrol, siguieron peleando por la causa liberal en otros países europeos y en la incursión de Espoz y Mina contra Irún en 1830¹³²⁴.

Ante la derrota inminente, diversos jefes militares escaparon como pudieron con sus tropas, llevando a cabo “actos de venganza individuales y colectivos”. Una columna al mando del general

¹³¹⁶ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (1982), pp. 174-176.

¹³¹⁷ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 116-122.

¹³¹⁸ Sobre la revuelta anticonstitucional en Ourense en 1820, VEIGA ALONSO, X. R. (2017), pp. 246-247. También VEIGA ALONSO, X.R.: “Violencia e conflitividade política na Galiza do século XIX (1808-1874)”, de próxima publicación.

¹³¹⁹ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (1985), pp. 70-79.

¹³²⁰ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), p. 124.

¹³²¹ Si bien hubo al menos un episodio de destierro colectivo de líderes realistas por orden del jefe político García Puente.

¹³²² Según Meijide Pardo, “estimábanse las fuerzas liberales del orden de 8.000 a 10.000 hombres, incluyendo el Ejército regular, la Milicia nacional y los nuevos reclutas”, frente a 7.500 hombres conducidos por el general Bourke. MEIJIDE PARDO, A. (1992), p. 95.

¹³²³ El propio Taboada Leal vivió hasta 1883. TABOADA Y LEAL, N. (1822).

¹³²⁴ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1980), pp. 149-150.

Roselló ejecutó a dieciséis realistas presos en Maceda. En A Coruña, durante el breve asedio de las furezas invasoras, el gobernador militar ordenó trasladar a 51 presos a una embarcación, en su mayoría prisioneros realistas. Una vez en alta mar, los milicianos que los custodiaban los ataron de dos en dos, los arrojaron al agua y se repartieron sus posesiones. Todos perecieron ahogados, excepto uno que consiguió desatarse y al que dos marineros remataron a golpes de remo. El proceso abierto por esta causa se saldó con otras seis ejecuciones, tres suicidios de presos. El gobernador militar, el jefe de los milicianos y uno de los asesinos debían ser troceados, con su cabeza colocada en una pica en su pueblo de origen y sus cuartos en las capitales de provincia gallegas¹³²⁵. Otras fuentes hablan de ejecuciones en la cárcel de Ourense¹³²⁶.

El regreso al absolutismo trajo consigo una represión más sistemática y amplia que las anteriores ya descritas; todos los funcionarios, por ejemplo, tuvieron que someterse a un “expediente purificador”, y los procesos alcanzaron “por vez primera al pueblo campesino y marinero”¹³²⁷. Sin embargo, tanto en 1814 como en 1823 la represión es mayoritariamente no violenta, con la excepción de individuos que habían cometido delitos de sangre¹³²⁸, por lo que parece que el castigo en base a la ideología fue más laxo que en otras partes del país. Pero las mujeres “trasquiladas” ya se vieron en la represión absolutista de 1823¹³²⁹, como se verían más de un siglo después en la Guerra Civil. En cuanto a la actividad partisana, algunos grupos de milicianos o soldados realizaron acciones contra los ocupantes franceses en 1823, pero solo tenemos constancia de una partida liberal posterior, en 1830¹³³⁰.

Así llegamos al alzamiento carlista. “En otra ocasión, cuando una Mujer quiso ocupar el Trono de León, vsotros supisteis proclamar y ungir por Rey en Santiago al Varón [...]” proclamaba, retrotrayéndose a Alfonso VII, el aspirante a rey Carlos V desde su exilio portugués “Gallegos: Cuento con vuestra cooperación: tomad las armas”¹³³¹. Centenares le hicieron caso, aunque la guerra Primera Guerra Carlista, en Galicia, no tuvo el carácter de confrontación militar abierta del Noreste. Hubo una breve intervención militar: el ejército carlista del general Gómez entró en la región en 1836, procedente de Orduña, con más de 6.000 hombres, y ocupó Santiago durante dos días en agosto, antes de volver al este. Durante su estancia perdió a los dos tercios de sus hombres pese a que no hubo combates destacados, así que, o bien tuvo una gran cantidad de desertiones, o parte de la fuerza estaba constituida por voluntarios gallegos que se le unieron temporalmente pero no lo acompañaron fuera de la región¹³³². Por lo demás, el territorio permaneció bajo control isabelino y las fuerzas carlistas llevaron a cabo una guerra de guerrillas, levantadas a partir de 1834, y, aunque puntualmente se tomaban villas, no se defendían ante contraataques cristinos. Barreiro Fernández cuenta 91 carlistas fusilados y 88 muertos en acción¹³³³.

Algunos enfrentamientos llegaron a ser pequeñas batallas. Una emboscada dejó más de cuarenta bajas en el bando realista¹³³⁴. La persecución de las partidas por parte de los militares fue brutal, con ejecuciones sumarias y heridos rematados en el lecho, especialmente tras la incorporación del

¹³²⁵ Tanto el gobernador militar como el jefe de los milicianos habían huido al extranjero. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), p. 139-145, 184.

¹³²⁶ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1980), p. 198.

¹³²⁷ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 168-197.

¹³²⁸ Sobre la de 1823, considerada más dura, “non hai probas dun trato degradante ou especialmente violento contra dos individuos que manifestaran o seu liberalismo”. VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 341.

¹³²⁹ VEIGA ALONSO, X. A. (2017), p. 277.

¹³³⁰ En A Mezquita, y ligada al clan familiar apodado Bordas. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 220-222.

¹³³¹ DÍAZ NUEVA, José (2011), p. 118.

¹³³² BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), p. 114.

¹³³³ Las fuentes oficiales contemporáneas hablan de cifras sustancialmente más altas, que a este investigador le parecen más infladas. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 244-245.

¹³³⁴ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), p. 84.

general Sanjuanena, veterano de las guerras de independencia americanas. Sobre los huidos sospechosos de ayudar a los carlistas recayeron embargos masivos, se tapiaron casas de los que habían dado cobijo a los facciosos, y, a modo de suplencia, se encarceló a familiares de los desaparecidos. Al jefe carlista Antonio López le apresaron dos hermanas y dos cuñados “simplemente por seren irmás e cuñados”, y uno de sus hermanos fue fusilado después de que el guerrillero matara a un correo¹³³⁵. Fuera de Galicia, la madre de Cabrera fue rehén de los isabelinos durante más de año y medio, y fusilada en febrero de 1836¹³³⁶. En este sentido, la concepción del enemigo se aproximó a la de las guerras de independencia americanas: un ser nocivo a exterminar¹³³⁷.

Además, se empleó el terror como estrategia de contrainsurgencia. Los cuerpos de varios líderes carlistas fueron troceados y exhibidos en villas y ciudades gallegas, bien visibles, o sometidos al escarnio público. Los ciudadanos de Santiago, ciudad carlista por excelencia en Galicia, podían ver en 1835 la cabeza del caudillo Antonio López clavada en la plaza central de la ciudad, mirando a la Catedral; los de Lugo, dos años más tarde, pudieron observar el cráneo del jefe José Ramón González Soto empalado en una pica. Antonio García, segundo de una facción que actuaba en la zona de Arzúa, fue enterrado en secreto tras morir en combate; el comandante del ejército isabelino Juan de la Torre dio orden de desenterrarlo y cuartearlo “para que sus brazos y piernas fueran fijadas en sitios públicos en donde actuara el muerto”¹³³⁸.

Los carlistas también cometieron brutalidades, entre las que destaca la masacre de prisioneros isabelinos en Chantada a cargo del jefe Francisco Javier Martínez Villaverde el 9 de marzo de 1835¹³³⁹. El caudillo Mateo Guillade, cuando entró en Tui, quiso capturar al liberal Pablo Rovira: “al no encontrarle apresaron a su mujer, Ignacia Valdés, con la intención de ejecutarla”, aunque no llegó a hacerlo por la intervención del obispo. Más tarde, a Guillade lo decapitó un sobrino para cobrar la recompensa¹³⁴⁰.

Emplearon amenazas, daños y asesinatos para coaccionar a la población rural, con una cierta simbología en las heridas. A José Pérez, alcalde segundo del distrito de Zoén, un grupo de cuatro carlistas lo sorprendieron en la cocina de su casa en la noche del 22 de marzo de 1838. Según su propia declaración, tras robarle ropas y papeles, lo llevaron a punta de fusil hasta la casa del depositario de las contribuciones del pueblo, donde robaron y secuestraron al hijo de este, Juan Cruz. Lo llevaron hasta un alto, lo hicieron ponerse de rodillas y “hacer el acto de contrición”; el propio Cruz sirvió de testamento. Pero “suspendieron su tremenda Sentencia”, le “cortaron redonda la Oreja izquierda” y le dejaron volver a su casa¹³⁴¹. Según Juan Cruz, también dispararon las carabinas y le dijeron que “sería testigo de la Muerte de aquel, y Guardia de que no le comiesen los Perros”. En la noche del 11 al 12 de julio un grupo de hombres asaltó la casa de Benito Vaca o Baca, en el mismo municipio, y tras hacerlo arrodillar “le dieron ocho palos en las espaldas y le cortaron la horeja derecha”. A otros los amenazaron con lo mismo¹³⁴².

¹³³⁵ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), p. 146.

¹³³⁶ FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), p. 19.

¹³³⁷ LEMPÉRIÈRE, A. (2004), p. 32.

¹³³⁸ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 243-244.

¹³³⁹ Según Díaz Nueva, se lo reprochó su propio hermano, también caudillo carlista. DÍAZ NUEVA, José (2011), p. 120.

¹³⁴⁰ DÍAZ NUEVA, José (2011), p. 121.

¹³⁴¹ Causas, 1716, 6, declaración de Pérez 1-2, de Cruz 3A.

¹³⁴² Causas, 1716, 12. Según declaración del herido, 9AB. El corte de orejas a los sospechosos de espías era al parecer práctica habitual de las partidas gallegas en la Primera Guerra Carlista, en especial de la partida de Álvarez de la Peña, en la provincia de Lugo; también hubo algún caso en la tercera. BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), p. 92, 130, 228. Hay constancia de que se realizó puntualmente en otros momentos. En el siglo XVIII en Extremadura por parte de un contrabandista, para castigar a un supuesto confidente de las autoridades.

En medio de este enfrentamiento tenemos el movimiento revolucionario del verano de 1835. A Coruña y Lugo se sumaron al movimiento juntero, no así Ourense y Pontevedra, pero se mantuvo el orden público y el alzamiento quedó en manos de las autoridades¹³⁴³.

Un punto a señalar sobre los conflictos armados de esta época es la participación de las élites, no ya como organizadores, que sería esperable, sino como actores. Las clases altas todavía tomaban directamente las armas para defender su ideología e intereses. En la Guerra de la Independencia el estamento eclesiástico gallego participó no solo como inductor u organizador, sino que “centos, quizáis miles de cregos galegos apoiaron a guerra contra os franceses e loitaron coas armas na man”¹³⁴⁴. En las partidas absolutistas del Trienio “el 45,6% de los efectivos de las partidas lo constituían los hidalgos, el 34% el clero y sólo el 20,3% el pueblo”¹³⁴⁵. La distribución se ve seguramente favorecida por el número reducido de componentes. Por otra parte, según señala Veiga Alonso, muchos de los milicianos nacionales pasarán por ayuntamientos, diputaciones y parlamentos, así que para este autor “a violencia intégrase na súa cultura política como marca de fábrica”¹³⁴⁶.

8.2 El legado de la violencia del inicio de siglo

El impacto de la inestabilidad de esta época, creemos, no deriva tanto el número de muertos y destrozos; sino de la misma existencia de las bandas armadas y la sucesión de golpes de Estado y la militarización del orden público. Grupos de jinetes con mosquetes recorrían los montes y los caminos, defendiendo la facción o persiguiéndola y dificultando el funcionamiento normal de las entonces todavía primitivas instituciones públicas, mientras que los vaivenes políticos se dirimían en conspiraciones de cuarteles y no por los mecanismos legales.

Un compostelano de 50 años, a mediados de siglo, había visto la ciudad tomada por franceses (dos veces), carlistas, progresistas y moderados. ¿Hasta qué punto se podía confiar en un Estado en el que el poder siempre podía cambiar con una nueva guerra? Algo a tener en cuenta en un Estado que, como señala Veiga Alonso, se estaba dotando paulatinamente de un armazón institucional y que “ten que gañar unha lexitimidade social diante dos seus cidadáns (xa non súbditos)”¹³⁴⁷. Veía como la justicia, incluso acabada la guerra, era servida manu militari. El juez de primera instancia de Xinzo de Limia, refiriéndose a unos sospechosos de robo en iglesia requeridos en 1844, contestó que “no tubo efecto por contestar el Alcalde no fueran habidos los que indudablemente pasarían, en aquella fecha, á la Comision militar instalada entonces en esta Capital para conocer contra jente de mal vivir y poner termino á los innumerables raptos y robos que sucedian en dicha epoca”¹³⁴⁸.

Esta justicia era brutal. En febrero de ese mismo año, nueve o diez hombres armados con pistolas y carabinas asaltaron una casa en O Corgo (Lugo), haciéndose con dinero público y privado. La tropa los detuvo, mató a uno y detuvo a cómplices. En marzo el ejército abatió al jefe de la partida, Domingo Arrás, alias *Castrovilar*, y capturó a unos hermanos apellidados Ceside, y, a continuación, al

MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1999), p. 232. También lo volveremos a encontrar en la violencia anticlerical de la Guerra Civil, en la que “ears – traditionally cut from defeated bulls at the end of bullfights – were one of the most commonly amputated body parts”. THOMAS, Maria (2013), p. 127.

¹³⁴³ VIVEIRO MOGO, P. (2004), pp. 69-87.

¹³⁴⁴ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2005), p. 140-151.

¹³⁴⁵ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2005), p. 98.

¹³⁴⁶ VEIGA ALONSO, X.R.: “Violencia e conflitividade política na Galiza do século XIX (1808-1874)”

¹³⁴⁷ VEIGA ALONSO, X. R. (2002), p. 78.

¹³⁴⁸ Causas, 1877, 5, folio 33A

menos el presbítero Francisco Antonio Fernández, y quizás el resto de componentes de la partida, que eran "nueve o más". La Audiencia de Galicia, a quien le correspondía seguir el caso, reclamó al juzgado de instrucción de Lugo información sobre este. Le llegó una comunicación señalando que los prisioneros "ya todos yacen ya en la Eternidad, habiendo sido pasados por las armas estos y los Ceside hoy a las once de la mañana en virtud de Sentencia de la Comisión Militar aprobada por el excelentísimo señor Capitan General"¹³⁴⁹.

Las facciones surgían en las élites sociales, pero se filtraban al pueblo. Los habitantes de las parroquias rurales tenían vecinos que desaparecían para unirse a las gavillas de facciosos o que se incorporaban a las de leales al Gobierno (categorías que cambiaron en más de una ocasión), y en algún caso convivían hombres que habían estado en bandos opuestos o que se habían delatado. Los que no se significasen tenían que estar atentos a no buscarse enemigos en ningún bando, pues el Estado no ofrecía garantía contra las partidas, y tampoco estas contra los soldados.

En la noche del 14 de julio de 1834, el labrador Tomás Vilela, que había colaborado con la facción de Antonio López y se había acogido a un indulto, volvía con su cuñada de segar centeno en el campo de un vecino cuando aparecieron cinco hombres de su antigua cuadrilla. La mujer escapó tras recibir algún golpe, pero Vilela no se libró tan fácilmente. Dos de ellos, los hermanos Juan y Vicente da Roca (el primero desertor de artillería), lo arrojaron al suelo, lo apalearon, le cortaron las orejas con una navaja y le infirieron dos puñaladas, una en cada pierna, mientras otros observaban. Según el propio herido, quisieron cortarle la lengua pero no pudieron "por haver apretado fuertemente los dientes". Un tercero, Juanito el Capador, los asistió y les indicó cuándo debían detenerse, mientras que Bernardo Ferro y Esteban da Roca, solo miraron. El motivo de la paliza, afirmó, era que sus agresores pertenecían a la facción acaudillada por Antonio López y fueron a por él por haber desertado: según afirmó, tras agredirle dieron vivas a Carlos V. La causa fue seguida inicialmente por la jurisdicción militar, aunque pasara a la civil.

Pero recordemos que Antonio López, aunque fue sentenciado a garrote vil por este acto, no tuvo parte físicamente en él. Casi todos los implicados en la causa eran vecinos de la parroquia San Julián de Carballo, en un principio en una jurisdicción eclesiástica integrada del partido judicial de Lugo¹³⁵⁰. Ese día, en la siega de centeno, Vilela había estado trabajando con dos de sus agresores. Según uno de los testigos a los que citó (también vecino), Ramón da Ponte:

"como el Vilela digese a Tomás Barreiroy [ambos eran primos] segase mas bajo hubo entre los [dos] algunas palabras como la de si voy allá te esmago dicha por Vilela, y esta expresión la oyeron nº 4 y 5 [Bernardo Ferro y Esteban da Roca], por cuya razón dijo este, cállate que se te ha de acordar el día de hoy, y el otro nº 4 tambien le dijo estate calladito, estate calladito que todavía estoy yo aquí a que contestó el Vilela, que mal te tengo echo, y Julian Figueiras nº 7 tratando de poner paz dijo calle uno o callen dos, que entonces callan todos y atendamos a segar que es lo que mas nos importa"

Pudo ser una venganza de la facción por haber desertado o haber delatado, o quizás una disputa personal en la que Vilela aprovechó para acusar a sus vecinos de connivencia con la facción. En el primer caso, no sabemos si la ordenó el propio Antonio López o si algunos de sus hombres tomaron justicia por su mano contra su vecino desertor. Lo que ilustra esta causa es el modo en el que la guerra de guerrillas se introdujo en la vida de las aldeas.

La aldea era el marco de relaciones sociales y personales complejas, en el que las enemistades podían mantenerse. En 1844, dos acusados afirman que un testigo ha declarado con ánimo de

¹³⁴⁹ *Causas*, 1466, 14.

¹³⁵⁰ *Causas*, 913, 2. Parte de heridas y declaración, Calificación del cuerpo del delito, 8-10. Sentencia de la Audiencia, final del primer legajo. Testimonio de Ramón da ponte, 14B del segundo legajo.

perjudicarlos por la enemistad que les profesa “por la delación de una cavalleria que tubiera oculta en tiempo de la facción, y tuvo que aprontarla en este Juzgado, y sufrir algun arresto”¹³⁵¹. El recuerdo perduraba. Y en 1862, un denunciante se refiere a un supuesto ladrón (y su cuñado) como “antiguo Latro-faccioso”¹³⁵².

A esto hay que añadir el uso del uniforme para motivos particulares, y el aprovechamiento de la inestabilidad política para solventar venganzas, como un caso acontecido durante el Trienio. Cuando Francisco Domínguez, del lugar de Soñeiro, cerró un trozo de terreno en el que se incluía un camino. Los vecinos replicaron destruyendo el cercado. Cuando lo volvió a erigir, apareció junto a su casa “Una Picota, ó Horca, con su Escala cn su Cortel, en el Palo Trabieso de ella y mediato a dicho muro, y mas adelante otro Palo con las [incomprensible] de un Cadalso, todo ello fabricado de la madera que se allaba plantada en dicha Cerradura”, además de recibir a sus criados a pedradas y a tiros cuando fueron a indagar. Entre los atacantes reconoció a Andrés Domínguez Pardo y a su hijo, don Roque. El padre era un labrador de 65 años, el hijo el jefe del “primer trozo de la Jurisdicción de Miraflores”, oficial, entendemos, de la Milicia Nacional.

Roque Domínguez recibió al alguacil del juzgado, según la declaración de este, con un sable desenvainado y acompañado de dos soldados. Más tarde, la casa del denunciante fue asaltada por una muchedumbre, “unos militares con armas de Fusil, y espadas Desnudas y muchos Paisanos, unos y otros con diversas caras Aparentes o Carantñas Pero Vestido y Unifirme de Militar” que maltrataron a su mujer y a sus criados. Parece que se condenó en costas al denunciante¹³⁵³.

8.3. Pronunciamientos y segunda y tercera guerra carlistas (1840-1875)

Entre la primera y segunda carlista persistieron algunas facciones irredentas, suprimidas ferozmente bajo fuero militar, y realizando asaltos similares a las gavillas de bandidos; como señala Ferrán Toledano en su trabajo sobre las partidas carlistas de Cataluña en la tercera guerra, el botín tenía un papel crucial¹³⁵⁴. A menudo, incluso en tiempo de guerra, resultaba difícil distinguir entre unos y otros. En instancias oficiales se empleaba el término latrofacciosos, que, además de describir sus actividades, tenía la ventaja para los isabelinos de que era denigrante y les privaba de la capa de legitimidad que tiene la violencia ideológica asimilándolos a criminales¹³⁵⁵, de manera similar a cómo actualmente se ha empleado el término narcoguerrilla.

Pero la violencia política fue de menos intensidad que en el periodo precedente: en los golpes del periodo isabelino, señala Barreiro Fernández, no se ejercía la pena de muerte contra los civiles, y “en cualquier caso se generalizan los indultos y amnistías”. En este sentido, considera que “el proceso de humanización de la represión siguió desarrollándose a lo largo del siglo XIX, especialmente a consecuencia de la victoria del Sexenio y la Constitución de 1869”¹³⁵⁶. Los militares y civiles residentes en Galicia se hicieron eco de buena parte de estas conspiraciones y golpes, e iniciaron alguna.

En septiembre de 1840 se alzan los progresistas en un pronunciamiento que convertirá a Espartero en regente. Lo apoya el ejército el día 10 en Vigo y Ferrol, con levantamientos posteriormente en A Coruña y Santiago. No hay participación gallega en el alzamiento moderado de 1841, y la rebelión de

¹³⁵¹ *Causas*, 2143, 1, 28A y 32A del tercer legajo.

¹³⁵² *Causas*, 1502, 16. Declaración de Patricio Lamas, folio 2A.

¹³⁵³ *Causas*, 28, 4.

¹³⁵⁴ FERRAN TOLEDANO, LI. (2000), pp. 101-102.

¹³⁵⁵ CANAL, J. (2004), p. 48.

¹³⁵⁶ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), p. 283.

Prim y Milans del Bosch en mayo de 1843 no tiene respuesta inmediata: “prende, en primer lugar, en A Coruña el 18 de junio, le siguen Lugo, y Vigo y Ourense, aunque amplios sectores de esta ciudad y de Ferrol permanecen fieles a Espartero durante algún tiempo”; en Vigo se levantará la guarnición en octubre a favor del antiguo regente¹³⁵⁷. La mayoría de las agrupaciones de Milicia Nacional gallegas se alzaron contra Espartero¹³⁵⁸.

Ya en la década moderada, en 1846 encontramos el muy recordado alzamiento de Solís, organizado sobre todo por grupos progresistas¹³⁵⁹. El segundo batallón del regimiento de Zamora, con base en A Coruña, era sospechoso de movimientos conspiratorios. Ordenaron su traslado a la ciudad que le daba nombre. En Lugo, donde estaba de paso, el comandante Miguel Solís, de 31 años, se pronunció con la tropa, y el apoyo del regimiento de Gijón y algunos carabineros. En fechas posteriores se incorporaron Santiago, Vigo, Pontevedra y Tui, de entre las plazas que tenían guarniciones, y las tropas alzadas reclutaron milicianos para engrosar sus filas.

Sin embargo, el alzamiento no tuvo apoyos fuera de Galicia, y dentro de ella resistieron A Coruña, Ferrol y Ourense. Los sublevados recorrieron el territorio sin conseguir tomar las plazas fuertes, y Solís se enfrentó a las tropas gubernamentales en una batalla de varios días de duración en Sigüeiro, aunque en los primeros choques, según un contemporáneo, la lucha era más bien verbal: “habían llegado las dos líneas a encontrarse a la distancia de unos ocho pasos una de la otra; los soldados se saludaban mutuamente”, antiguos camaradas de armas intentaban convencerse para cambiar de bando y en un regimiento pedían que “no hiciesen fuego, puesto que todos eran hermanos, y más de alguno al tratar de romper la línea, fue detenido por las amenazas de sus gefes”¹³⁶⁰. Ninguna de las dos fuerzas cedió y acabaron por combatir en serio, sin que los sublevados pudiesen romper el frente enemigo¹³⁶¹.

Solís se entregó el 23 de abril, tras ser derrotado en la famosa batalla de Cacheiras. Lugo, cuna del alzamiento, y defendida por militares rebeldes junto “con la patulea que formaban la Milicia nacional que habían armado, y algunos paisanos”, según el parte del capitán general, cayó pocos días más tarde¹³⁶². Algunas tropas rebeldes pasaron a Portugal o permanecieron algunos días en los montes de Pontevedra. Solís fue juzgado sumárisimamente y ejecutado junto con una decena de oficiales dos días después de rendirse, en Carral, destino que también corrió otro suboficial¹³⁶³. Otros alzamientos y asonadas durante el periodo isabelino afectaron poco a Galicia¹³⁶⁴.

Al año siguiente se produce la segunda guerra carlista: hay grupos armados en la frontera con Portugal, Burón, Arzúa o el sur de la provincia de Lugo, punto de origen del líder más destacado de esta etapa: Fernando Gómez, alias El Ebanista, un veterano de la guerra anterior al que mataron a tiros en septiembre de ese año¹³⁶⁵ (un par de municipios lucenses lo recuerdan¹³⁶⁶). La relevancia de

¹³⁵⁷ FERNÁNDEZ CASANOVA, C. (2005), pp. 120-122.

¹³⁵⁸ Una descripción más pormenorizada en VEIGA ALONSO, X.R.: “Violencia e conflitividade política na Galiza do século XIX (1808-1874)”.

¹³⁵⁹ Con la participación de moderados resentidos con el Gobierno de Narváez, que pronto se desvincularon, y algunos incipientes provincialistas.

¹³⁶⁰ DO PORTO, J. (1846), p. 62.

¹³⁶¹ PAZOS GÓMEZ, M. (2005).

¹³⁶² El mismo parte habla de una partida arrinconada en Ourense, cerca de la frontera de Portugal. *Gaceta de Madrid*, 02-05-1846, nº 4248.

¹³⁶³ Para una descripción del levantamiento, BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 262-283.

¹³⁶⁴ Sobre el rechazo al pluralismo político en las tradiciones demócrata y liberal, y sus efectos sobre la violencia política, PEYROU, F. (2008).

¹³⁶⁵ Un resumen de las partidas y operaciones en BARREIRO FERNÁNDEZ, (2008), pp. 176-181.

¹³⁶⁶ Pese a que la memoria de las guerras carlistas es muy poca, a Gómez se le recuerda en una información turística sobre Palas de Reis, el municipio en el que murió (<https://www.clubrural.com/que-ver/lugo/palas-de->

las partidas es mucho menor que en la guerra anterior. La revolución de marzo de 1848 por parte de los progresistas parece que tuvo algún apoyo en Ourense, pero en todo caso fue sofocada en un día en Madrid, el epicentro del alzamiento¹³⁶⁷.

La Septembrina de 1868 se extendió en Galicia sin combates. El 19 de septiembre, un día después del alzamiento de la escuadra de Topete y la jornada en la que dimitió González Bravo, se sublevaron las fuerzas de la Armada y los trabajadores del Arsenal, y se formaron batallones voluntarios (nutridos en parte por desempleados a los que después se permitió reincorporarse a la base naval). Las principales villas permanecieron en suspenso hasta pasada la batalla de Alcolea: el 29 de septiembre A Coruña (a la cual había llegado una fragata sublevada una semana antes) se pronunció en contra de la reina, y al día siguiente la secundaron Pontevedra, Tui, Vigo y Santiago¹³⁶⁸.

La política gallega en el Sexenio fue convulsa pero relativamente poco sangrienta. Las dos grandes corrientes excluidas del poder, esto es, los carlistas y los republicanos hasta 1873, promovieron incidentes, guerrillas y alzamientos para tomar el poder. Pero entre sus métodos no estaba la eliminación física del rival, y tampoco en los de los Gobiernos que los reprimieron. En 1868, el general Cándido Pieltain declaró el estado de guerra y el desarme de milicias “en varias poblaciones de Galicia”¹³⁶⁹. En junio de 1869 hay varios heridos en Ferrol, en un choque entre obreros que se dirigían a jurar la recién aprobada Constitución y otros que trataban de impedirselo¹³⁷⁰.

En cuanto a las milicias, no se puede decir que revivieran como en su edad dorada de las décadas de 1810 a 1840. Tras la revolución de septiembre de 1868 se constituyó una, los Voluntarios de la Libertad, aunque con implantación irregular: en Ferrol, por ejemplo, se formuló un reglamento pero el Ayuntamiento no llegó a constituirla pese a la insistencia de la junta revolucionaria y de trescientos vecinos; de cualquier manera, su curso fue muy breve, puesto que, para desmayo de los republicanos, se ordenó desarmarla el 19 de octubre del año siguiente¹³⁷¹. Tuvieron tiempo de participar en el alzamiento federalista de Ourense en 1869, pequeño y rápidamente sofocado¹³⁷². Volvió a ocurrir en febrero de 1873¹³⁷³.

La única insurrección republicana propiamente dicha aconteció en 1872, con “enormes recursos técnicos y humanos”, pero sin embargo fracasará¹³⁷⁴. El 11 de octubre, un grupo de rebeldes militares y civiles a favor de la República Federal tomaron el Arsenal sin efusión de sangre (se permitió salir a la mayoría de oficiales que no respaldaron la insurrección, y no hostilizaron a la

[rei](http://www.concellodechantada.org/concello_historia19.htm)), y en la historia municipal del concello de Chantada lo llaman “ilustre veciño” (http://www.concellodechantada.org/concello_historia19.htm).

¹³⁶⁷ BELTRÁN VILLALBA, M. (2005), p. 60.

¹³⁶⁸ GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), pp. 30, 52-55.

¹³⁶⁹ López Corral considera que eso le valió ser cesado de su puesto en la Dirección General de la Guardia Civil y un destino poco atractivo en Cuba en 1873, a manos del Gobierno republicano. LÓPEZ CORRAL, M. (1994), p. 58.

¹³⁷⁰ GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), p. 91.

¹³⁷¹ Si bien sí se armó a la maestranza durante la revolución, y unos doscientos trabajadores de esta se presentaron voluntarios para defender las instituciones en el alzamiento republicano de diciembre. GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), pp. 57-62, 107-108.

¹³⁷² En el que también hubo disturbios en A Coruña en octubre. FERNÁNDEZ CASANOVA, C. (2005), p. 134. Moreno González menciona un muerto en esta ciudad. MORENO GONZÁLEZ, X. (1990), p. 56.

¹³⁷³ Según Barón Fernández, que no cita fuente, cuando voluntarios gallegos de Madrid, custodiados por el Ejército, se produjo un incidente entre ambos grupos que dejó un muerto y seis heridos. BARÓN FERNÁNDEZ, J. (1998), p. 297.

¹³⁷⁴ MORENO GONZÁLEZ, X. M. (1984), p. 458.

guarnición local) y con la incorporación de los guardias y la mayoría de los marineros¹³⁷⁵, que se apoderaron de gran cantidad de armas, buques de guerra y artillería, además de una posición fuerte. Pero no encontraron apoyos en otros puntos de España, y escaso eco en la propia ciudad¹³⁷⁶.

Acudieron fuerzas gubernamentales bien armadas y empezó un duelo de artillería y disparos. Los sublevados resistieron unos pocos días antes de escapar en masa. Murieron dos vecinos y dos militares en escaramuzas en la ciudad, y quizás un soldado y diez o doce sublevados ahogados durante la huida¹³⁷⁷. La represión legal fue severa sobre el papel pero, por los cambios políticos, liviana en la práctica: un millar de participantes fue deportado a ultramar y más de 150 resultaron condenados, 20 de ellos a muerte, aunque a estos se les indultó y, en febrero del año siguiente, la República amnistió a los implicados¹³⁷⁸. Las insurrecciones cantonales de 1873 en el Sur y el Levante no tuvieron eco armado en Galicia¹³⁷⁹.

En 1872 comienza la tercera carlista, que se prolongará cuatro años. Fuera de las ciudades vuelven a aparecer partidas carlistas en zonas tradicionales, como A Fonsagrada y el triángulo Sobrado-Arzúa-Melliz, y los guerrilleros seguirán actuando hasta 1875¹³⁸⁰, con algunas breves tomas de villas, entre ellas la captura de Monforte por los hombres de Ostendi. Pero, en general, los grupos solo mantenían la actividad uno o dos meses¹³⁸¹. Ejército, Guardia Civil y Carabineros se mantuvieron fieles al Gobierno en Galicia, con escasas excepciones¹³⁸².

Comesaña Paz contabiliza 991 efectivos carlistas, casi todos en Ourense y Lugo, que sufrieron 27 muertos y 37 heridos; según el mismo autor, no se contabilizó ninguna baja entre los efectivos movilizados para combatirlos, y solo mataron a un paisano, de manera accidental. Su mayor actividad fue asaltar núcleos núcleos desprotegidos para hacerse con dinero de recaudadores de impuestos y rentas (se llevaron más de 400.000 reales en dinero y mercancía de la Hacienda y estancos)¹³⁸³. La represión al entorno de los carlistas (detenciones, destierros) también se ejerció sin efusión de sangre¹³⁸⁴; hubo acusaciones de algunas ejecuciones en caliente, pero no penas de muerte¹³⁸⁵. Para perseguirlos se constituyeron batallones móviles de paisanos armados, parte de los cuales se amotinaron en agosto de 1873 por falta de haberes¹³⁸⁶.

¹³⁷⁵ Los insurrectos serían, como mínimo, más de 2.000: cerca de 200 guardias de arsenales, unos 1.500 miembros de la Armada, 300 obreros de la maestranza y otros 200 paisanos. GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), p. 151. Sobre la orientación del movimiento obrero al republicanismo en España, DE FELIPE, J. (2011).

¹³⁷⁶ Así, el propio Pi y Margall la desautorizó. GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), pp. 161-163.

¹³⁷⁷ Una descripción del alzamiento, los combates y el cálculo de bajas en GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), pp. 117-145.

¹³⁷⁸ Los paisanos encausados fueron liberados en noviembre. Los trabajadores del Arsenal implicados, eso sí, perdieron el trabajo. GOMIS RODRÍGUEZ, A. (2000), pp. 175-177, 180-183.

¹³⁷⁹ BARÓN FERNÁNDEZ, J. (1998), p. 297.

¹³⁸⁰ Aunque, como señalan los autores consultados, siempre había individuos que no querían entregarse y continuaban su carrera como forajidos.

¹³⁸¹ En Pontevedra solo hubo una partida, y de escasa duración. Para una descripción de las acciones, BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), pp. 195-232.

¹³⁸² COMESAÑA PAZ, A. (2017), p. 37.

¹³⁸³ Los casos de maltratos y golpes a paisanos, según Comesaña Paz, fueron "hechos puntuales". COMESAÑA PAZ, A. (2017), p. 37-41, 58.

¹³⁸⁴ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), pp. 228-240.

¹³⁸⁵ COMESAÑA PAZ, A. (2017), p. 58.

¹³⁸⁶ Dos centenares se amotinaron, detuvieron a su comandante y saquearon propiedades en Trives, iniciando un periplo hacia Portugal por la zona de Verín. Según Barón Fernández, entre ellos había republicanos radicales. BARÓN FERNÁNDEZ, J. (1998), pp. 297-298.

En paralelo, se vivieron motines contra las quintas y contra los impuestos y contribuciones, que veremos en apartados posteriores. Pero no debemos ver la Galicia de este periodo como una región caótica en la que imperase el desorden y la violencia. Las instituciones del Estado continuaron funcionando, aunque con algunas disfunciones, como veremos en el caso de la recluta de quintos. La ley de redención de foros del 20 de agosto de 1873, por ejemplo, generó la oposición de muchos propietarios, pero grandes cantidades de tierra cambiaron de dueño de manera perfectamente legal y por cauces pacíficos¹³⁸⁷.

8.4 La Restauración

La Restauración, marcada por la exclusión en la práctica de carlistas, obreristas y republicanos de las instituciones y por el turno de los partidos dinásticos, transcurrió sin grandes levantamientos armados ni guerras civiles en la España continental hasta 1923. Fue un proceso paulatino: siguiendo a González Calleja, durante su primera década el nuevo régimen todavía no estaba firmemente asentado, y sufrió bastantes amenazas violentas¹³⁸⁸. Entre 1883 y 1886 se produce el “momento álgido del insurreccionalismo militar republicano”, que luego entraría en declive, con las sublevaciones, el primer año, en Badajoz, y en 1884 en la Seo de Urgel; y el pronunciamiento de 1886 de Madrid promovido por Manuel Ruiz Zorrilla, que había sido jefe de Gobierno con Amadeo de Saboya. Ninguno de estos alzamientos afectó a Galicia, si bien la cabeza militar del último, Manuel Villacampa, había nacido en Betanzos. En 1905 encontramos un pequeño levantamiento de dos decenas de republicanos en Crecente, en la provincia de Pontevedra, que fue rápidamente reprimido¹³⁸⁹.

Un elemento a tener en cuenta, además de la estabilidad política, es la desaparición de las milicias. A mayores los cuerpos francos, tropas irregulares y grupos de voluntarios que tomaron las armas fuera de la legalidad o que se constituyeron en tiempo de guerra, en el primer tercio del siglo XIX se constituyeron cuerpos permanentes y legales de ciudadanos armados, Milicia Nacional y Voluntarios Realistas, con el explícito propósito de que defendiesen el régimen que las constituía; eran, por tanto, grupos armados con carácter eminentemente político¹³⁹⁰, y vemos cómo participan en la lucha por el poder durante los dos primeros tercios del siglo¹³⁹¹.

En el caso de la milicia de inspiración liberal, su existencia era también, para los más exaltados, una garantía del pueblo ante posibles derivas tiránicas del Gobierno. Por circunstancias históricas, se impuso el criterio de los liberales moderados sobre los progresistas, y estas fuerzas se extinguieron¹³⁹². Las milicias desaparecieron legalmente en la década de 1840, pero su recuerdo estaba fresco y revivían en los pronunciamientos. En el de Lugo en 1846 “se buscaron armas para

¹³⁸⁷ En la provincia de Lugo cambiaron de manos propiedades con un valor conjunto de más de 1,5 millones de pesetas. Solo el 5% de los propietarios acudieron a los tribunales, y no hay constancia de motines. LÓPEZ RODRÍGUEZ, P. (1985), pp. 18, 103.

¹³⁸⁸ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p. 77.

¹³⁸⁹ Para una descripción del levantamiento, RAMOS RODRÍGUEZ, P. (2015).

¹³⁹⁰ Entre los absolutistas, “el grande objeto del establecimiento de los Cuerpos de Voluntarios Realistas, y el que siempre deberán tener presente al recibir las armas que pongo en sus manos [escribe Fernando VII] y que confío a su lealtad, es el combatir a los revolucionarios y los conspiradores, y exterminar la revolución y las conspiraciones de cualquiera naturaleza y clase que sean”. Siendo cierto que se les asignaban otras tareas, como acudir a los incendios, o custodiar extraordinariamente el transporte de caudales, en el artículo 182 del reglamento se explicita que el servicio “debe estar reducido á lo solo indispensablemente necesario”. *Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas*, pp. 37-38.

¹³⁹¹ Las milicias provinciales participaron en una conspiración liberal en 1819. VEIGA, X. R. (2017), p. 182.

¹³⁹² Sobre las discrepancias políticas entre las dos ramas del liberalismo en torno a este punto, LÓPEZ GARRIDO, D. (2004), p. 78.

organizar la Milicia nacional, se mandaron reunir los destacamentos del provincial de Gijón que estaban esparcidos en varios puntos de la provincia, y algunos carabineros que se habían pronunciado, y se llamó a las armas a todos los ciudadanos capaces de empuñarlas”, escribía ese mismo año Juan do Porto¹³⁹³.

Tras desaparición de la Milicia Nacional en el periodo isabelino los cuerpos ciudadanos armados estuvieron ausentes la segunda mitad del siglo, con la excepción del Sexenio Liberal. A partir de 1875, la presión de la ciudadanía uniformada es un elemento ausente de los cálculos de fuerzas políticas, importante en otros regímenes liberales contemporáneos¹³⁹⁴. En este proceso, creemos, también intervino la creciente complejidad logística y técnica de la guerra moderna.

En torno a 1885 se produciría la integración de la izquierda en el orden monárquico, y, a partir de 1891, la confirmación de la seguridad continuista con la disolución voluntaria del partido posibilista, las leyes de amnistía y sufragio universal (masculino); el régimen “ya no precisaba de cruentos escarmientos para mantenerse”¹³⁹⁵. La guerra de Cuba y la Primera Guerra Mundial, junto con la evolución social, cambiarán las reglas del juego. El régimen vive una “relajación del control social tras la crisis de fin de siglo”, siguiendo de nuevo a González Calleja, con lo que el autor llama una “tímida apertura” al juego democrático de facciones anteriormente excluidas.

Durante este largo periodo de paz, dos generaciones llegaron a la edad adulta sin la vivencia de una guerra en la España continental (aunque muchos jóvenes españoles seguían experimentándola en África y Cuba). Puede que viviesen motines, estados de alarma, coacción gubernamental y, dependiendo de los lugares y las épocas, terrorismo, pero no guerra: esta vivencia quizás debe ser tomada en cuenta al analizar el proceso de pacificación que desarrollaremos en el capítulo 11 y la reducción de los índices de homicidios que hemos visto en el apartado 1.8.

Con el conflicto europeo, los mecanismos de control social del régimen se fueron desmoronando¹³⁹⁶ y las movilizaciones colectivas violentas adquieren una creciente impronta política¹³⁹⁷. Veremos más adelante hasta qué punto los movimientos políticos de masas presentes en Galicia, esto es, el agrarismo y las ideologías obreristas, conllevaron violencia.

8.4.1 A la conquista del Estado: la violencia en las elecciones de carácter nacional

En 1834, con el Estatuto Real, se establecen dos cámaras, una alta, formada por cargos hereditarios de la alta nobleza o vitalicios propuestos por la Corona, y un Estamento de Procuradores electos¹³⁹⁸. Desde ese año, y hasta el golpe de 1923, se celebraron 49 elecciones generales en España, cerca de una cada dos años, y la lucha electoral se convirtió en un elemento constante de la vida nacional.

En sus inicios, el ejercicio de la democracia alcanza a un número muy reducido de electores, ya que el sufragio era censitario y muy restringido. En un primer momento era muy restringido, con carácter indirecto, primaba a los residentes en las capitales de Partido y perjudicaba a las provincias

¹³⁹³ Afirma que en Santiago se proclamaron soldados a todos los hombres entre los 18 y los 40 años. DO PORTO, J. (1846), p. 28.

¹³⁹⁴ Véase el caso de Argentina, en la que no decayó hasta 1880 tras una derrota militar a manos de las tropas estatales, y la participación en la milicia se superponía con el sufragio como prerrogativas del ciudadano. SABATO, H. (2008).

¹³⁹⁵ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), pp. 102, 139.

¹³⁹⁶ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), pp. 381, 552.

¹³⁹⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p.553.

¹³⁹⁸ VIVERO MOGO, P. (2004), pp. 17-18, 21-22, 29.

ocupadas por los carlistas. En los primeros comicios, celebrados a mediados de 1834, hubo menos de 18.000 votantes para una población que sobrepasaba los 12 millones, es decir, en torno al 0,15%¹³⁹⁹. En el partido de Lugo la cifra es de 24 electores sobre 45.005 almas¹⁴⁰⁰.

Ya encontramos en estas elecciones, realizadas en medio de una guerra civil, el problema de intervención estatal que se denunciará de manera recurrente durante el siguiente siglo en España. Al tiempo que se prohibía a los Gobernadores realizar coacciones e intervenir en los comicios, también se les pedía que los electos fuesen fieles a la Reina, es decir, no partidarios de Carlos de Borbón¹⁴⁰¹.

El derecho al sufragio va ampliándose poco a poco durante las décadas de 1830 y 1840¹⁴⁰². En el Sexenio deja de ser censitario, aunque volverá a serlo en los primeros años de la Restauración hasta la década de 1890¹⁴⁰³, cuando se asienta definitivamente el sufragio universal masculino.

La violencia fue un fenómeno presente en los procesos electorales españoles, aunque no debemos pensar que fue exclusivo del país; por ejemplo, en los comicios ingleses de mediados del siglo XIX había bastante violencia de baja intensidad, aunque parece que esta fue disminuyendo a medida que transcurría el siglo¹⁴⁰⁴. El político Joaquín Vázquez de Puga escribía en 1871 en una carta a Elduayen que “cada día reniego mas de la politica viendo los atropellos que se estan cometiendo. En la Cañiza el Alcalde Candido formo la mesa provisional con 4 perdidos a quienes se le ha entregado un Rebolber a cada uno, y cuando llegaba algun elector nuestro á votar se le apuntaba y se le decia atras V. no vota... los pueblos todo pronunciados a nuestro fabor no se lo que resultara”¹⁴⁰⁵.

En el Sexenio y la Restauración la violencia política callejera y de baja intensidad siguió estando presente por parte de fuerzas excluidas del juego político. González Calleja presenta muchos ejemplos: partidas de la porra monárquicas en 1873, matones republicanos en la Restauración (Blasco Ibáñez, al parecer, contrató a vigilantes de Consumos en las luchas entre facciones antimonárquicas valencianas), “rondas volantes” armadas y grupos de pistoleros lerrouxistas, ya en el siglo XX, grupos paramilitares carlistas, y, combinando lo anterior, quedadas para peleas entre republicanos y carlistas en las Ramblas en la década de 1910¹⁴⁰⁶.

También había alicientes para la violencia por parte de los grupos asociados a los partidos turnistas, al menos en los distritos en los que había lucha electoral. Los comicios de este periodo, según Villares, no podrían considerarse “elecciones verdad” debido a la predominancia de un caciquismo desde arriba, o de pactos entre los poderes locales y las élites políticas¹⁴⁰⁷. Pero los comicios eran el resultado de un juego de fuerzas. Si bien en las elecciones a Cortes existía la figura del “candidato ministerial”, esto es, el que tenía apoyo del Gobierno su maquinaria administrativa, los diversos intereses y facciones influían en el resultado final con diversas modalidades de negociación y

¹³⁹⁹ Las corporaciones municipales de la capital de partido y los principales contribuyentes elegían a dos electores de partido, que solo podían ser elegidos de entre propietarios y comerciantes con elevados ingresos o miembros de determinadas profesiones, como abogados colegiados con despacho abierto o relatores y escribanos de Cámara. Hubo un cierto fraude en el cumplimiento de estos requisitos. ARAQUE HONTANGAS, N. (2010), pp. 98-100

¹⁴⁰⁰ En la provincia, los electores supusieron aproximadamente el 0,062% de la población. VIVEIRO MOGO, P. (2004), pp. 37, 50.

¹⁴⁰¹ VIVERO MOGO, P. (2004), p. 31.

¹⁴⁰² FERNÁNDEZ CASANOVA, C. (2005), pp. 111-116.

¹⁴⁰³ VILLARES PAZ, R. (2005), p. 206.

¹⁴⁰⁴ SPIERENBURG, P. (2008), p. 201.

¹⁴⁰⁵ Otra carta recibida por Elduayen habla de “grandes estacazos”, exclusiones de votantes o suspensión parcial de las elecciones. CASTRO PÉREZ, P. (2002), p. 16.

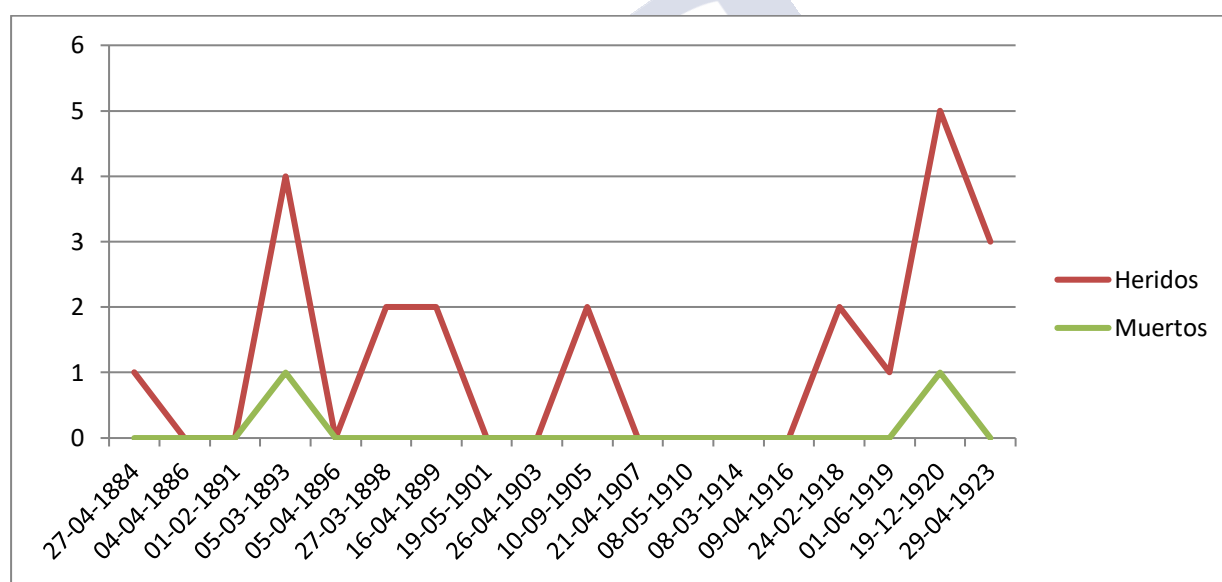
¹⁴⁰⁶ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), pp. 230, 359, 382-385, 478, 482, 489.

¹⁴⁰⁷ VILLARES PAZ, R. (2005), pp. 214-217.

conflicto¹⁴⁰⁸. En el periodo liberal, señala Veiga Alonso, existían distritos enfeudados (un caso estudiado pormenorizadamente es el de Montero Ríos en Compostela¹⁴⁰⁹), en los que un candidato ganaba elección tras elección; las relaciones entre el poder central y los periféricos hay que analizarla “en clave de tensión y de negociación”¹⁴¹⁰. Y el poder central no era el único interlocutor. El diputado tenía que actuar de cara a los electores y la población, y además de controlar los resortes políticos había que cultivar la reputación: proyectar la imagen de padre del distrito, que guardaba los intereses locales ante el Estado, proteger a los débiles con caridad, acumular un capital simbólico y hacerse visible¹⁴¹¹. Había, en resumen, espacios en los que se podía producir batalla política.

Hemos recurrido a *La Voz de Galicia* para determinar el alcance de la violencia en los comicios en el periodo restauracionista, volcando información de las 19 citas electorales entre 1884 y 1923¹⁴¹². Para tener una referencia acerca de los datos, los comicios más violentos en el conjunto de España habrían sido los de 1919, con cuatro muertos¹⁴¹³, aunque esta es un aspecto que probablemente precisase una monografía con un enfoque cuantitativo que por el momento no existe. Los comicios, eso sí, eran más violentos que en Francia o Reino Unido¹⁴¹⁴.

Gráfico 8.4.1.1 Heridos y muertos en Galicia en las jornadas de elecciones nacionales



Fuente: Elaboración propia a partir de *La Voz de Galicia*¹⁴¹⁵

¹⁴⁰⁸ Aunque solo fuese, como la facción riestrista en 1879, causarle molestias y gastos a la candidatura oficial. CASTRO PEREZ, F. (2002), p. 18-19, 25.

¹⁴⁰⁹ BARRAL MARTÍNEZ, M. (2007).

¹⁴¹⁰ VEIGA ALONSO, X. R. (2002), p. 84.

¹⁴¹¹ DALMAU, P. (2018), pp. 85, 91-92, 102.

¹⁴¹² En concreto, las elecciones del 27-04-1884, del 04-04-1886, del 01-02-1891, del 05-03-1893, del 05-04-1896, del 27-03-1898, del 16-04-1899, del 19-05-1901, del 26-04-1903, del 10-09-1905, del 21-04-1907, del 08-05-1910, del 08-03-1914, del 09-04-1916, del 24-02-1918, del 01-06-1919, del 19-12-1920 y del 23-04-1923. Para cada una de ellas hemos consultado siete números de prensa, contando como primero aquel en el que se produce la primera votación.

¹⁴¹³ Según FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor (1986): *Historia del reinado de Alfonso XIII*, Vol. 2, Madrid, Sarpe, p. 58, citado en VILLA GARCÍA, R. (2013), p. 261.

¹⁴¹⁴ VILLA GARCÍA, R. (2013), pp. 261-263.

¹⁴¹⁵ [Violencia en procesos electorales de la época monárquica – La Voz de Galicia, AA6.](#)

El saldo de heridos en diversos incidentes es algo mayor que en las elecciones locales (1,22 por cita, para un total de 22 en los 18 comicios). De los lesionados en la jornada electoral, dos resultaron muertos, lo que supone 0,11 defunciones por jornada electoral, y ambas se produjeron en asaltos a colegios. En 1893, en el municipio ourensano de A Merca, una “turba de paisanos armados con palos y hoces” entró en un colegio electoral arrojando la urna al suelo y obligando al presidente a suspender la sesión. El auxiliar de presidencia, Leopoldo Seoane, cayó “herido de muerte” de un balazo; luego, el grupo se dirigió al colegio de Olas, saqueando “chorizos, jamones y otros comestibles” de casa del presidente de esta sección electoral; es la única muerte mencionada ese año en toda España, aunque hubo otro herido en A Bola y en otras provincias¹⁴¹⁶.

Transcurrieron casi tres décadas sin muertes violentas en Galicia hasta que en 1920 dos vecinos de Biduído, en el municipio coruñés de Ames, Ramón García y José Iglesias mataron al labrador Antonio Barreiro en la jornada electoral del 19 de diciembre de 1920. La versión es que formaban parte de un grupo que entró en el colegio electoral el día de las elecciones, atacando con palos a los presentes. Hicieron disparos, hiriendo al fallecido, que había acudido a votar y a “tres o cuatro” más¹⁴¹⁷.

Aunque es difícil hablar de un incremento de la violencia con cifras tan pequeñas, tras la Primera Guerra Mundial los comicios parecen ser más conflictivos. En 1920 hubo otro choque electoral importante en Alfoz (Lugo), que obligó a repetir la votación¹⁴¹⁸, y un tumulto en un colegio de Redondela (Pontevedra) que la Guardia Civil despejó con disparos al aire. En las siguientes elecciones, en 1923, hubo, además de la clásica urna rota, cortes de caminos y comunicaciones en la zona de Tui y A Guarda (algo que no encontramos en jornadas anteriores), así como choques y un lesionado accidental de disparo¹⁴¹⁹. Una multitud rodeó un colegio de O Rosal en un tumulto en el que fue herido un guardia civil¹⁴²⁰.

En cuanto a los espacios de la violencia, el central es el colegio electoral, en el que los bandos enfrentados tenían que encontrarse. En un par de casos, *La Voz* habla de conquista física del lugar, y acusa a un grupo de paisanos con palos y hoces, partidarios de Joaquín Botana) de impedir el acceso a un colegio en Enfesta en 1884, por orden del alcalde y con tolerancia de la Guardia Civil; a un interventor del opositor marqués de Monasterio le rompieron el brazo a palos poco antes de las elecciones¹⁴²¹, al tiempo que en Silleda, según el mismo medio, un colegio electoral fue defendido con trabucos para que no entrasen los partidarios de Riestra¹⁴²². No hay denuncias de este tipo más allá de 1884.

Lo que encontramos a lo largo del periodo es la modalidad clásica de asaltar el colegio y romper la urna, obligando a repetir la votación. Es, por definición, la herramienta del que calcula que va a perder en ese distrito, limpiamente o por estafa electoral. Hemos visto algún caso acabado en sepelio, pero parece más frecuente que se rompan sin heridos graves: así ocurrió en diversos colegios de Becerreá en 1903¹⁴²³, una del “distrito de Monforte” en la que supuestamente había

¹⁴¹⁶ LV 09-03-1893, p. 2, 11-03-1893, p. 1. En el segundo número se afirma que el muerto fue “un elector”.

¹⁴¹⁷ LV 21-12-1920, p. 1, 26-12-1920, p. 3, FV 28-12-1920, p. 4, EP 22-12-1920, p. 6-7.

¹⁴¹⁸ En este caso, *La Voz* informó de que había habido diez heridos en la parroquia de Mor, donde un notario había sido arrojado por la ventana, pero *El Progreso*, un diario provincial que en este caso nos parece más fiable, habla solo de un herido, el médico Atilano Basanta, que recibió un palo en la cabeza. LV, 21-12-1920, p. 1, EP, 22-12-1920, p. 1

¹⁴¹⁹ LV, 01-05-1923, p. 1.

¹⁴²⁰ LV, 01-05-1923, p. 1.

¹⁴²¹ LV 29-04-1884, pp. 1-2, LV 02-05-1884, p. 1

¹⁴²² LV 03-05-1884, p. 1

¹⁴²³ LV, 27-04-1903, p. 2, 28-04-1903, p. 1

mayoría del conservador Osma en 1910¹⁴²⁴, otra en Narón en 1914¹⁴²⁵, otro par en Pontedeume y en Baleira en 1919¹⁴²⁶... Sin duda hubo más casos, pero no parece que el volumen haya llegado a alterar significativamente el resultado de las elecciones nacionales.

Probablemente hayan quedado fuera del radar pequeños tumultos e incidentes menores en los que no se emplearon armas, como la pelea en la que al ourensano Draulio Soto le arrancaron media oreja de un mordisco en la jornada electoral de 1923¹⁴²⁷, o las bofetadas que se repartieron a la puerta del colegio coruñés de Puerta de Aires, sin lesiones de relevancia, en 1903¹⁴²⁸. Un par de días antes de las elecciones de ese año, los monárquicos y republicanos de una sociedad de recreo de Carballo acabaron a sillazos en la sede¹⁴²⁹.

Esto nos lleva a hacer una reflexión sobre la violencia: muchas veces no era instrumental, sino producto de discusiones acaloradas. Por ejemplo, en Arzúa, en 1918, un vecino le cortó la cara a otro con una navaja mientras volvían de votar, tras una discusión con motivo de las elecciones¹⁴³⁰. Podemos leerlo como un intento del agresor para someter a su vecino, pero más probablemente se trató de una conversación que evolucionó en pelea y se solucionó a navajazos, algo que, como hemos visto en el capítulo 7 y observaremos de vuelta en el 11, ocurría frecuentemente en esta época por todo tipo de motivos. Aunque quizás resulte significativo que en 1918 los vecinos de las parroquias rurales discutiesen también por política; ese mismo año, en A Estrada, se nos dice que “la lucha fue reñida”, con el triunfo del candidato liberal Vicente Riestra y una reyerta en una sección de la parroquia de Codeseda “en la que resultó herido un agrario”¹⁴³¹.

En una escena de *Los Pazos de Ulloa*, una turba acude a la casa del ficticio cacique ourensano *Barbacana* para darle una cencerrada tras una derrota electoral con sartenes, cacerolas, latas, cuernos y “la horrenda vociferación de muchas gargantas humanas, con esa cavernosidad que comunica a la laringe el exceso de vino en el estómago”; dos sacerdotes, un hidalgo y un *guapo* del partido derrotado los dispersan a palos y trallazos. La novela apareció en 1886, pero la costumbre pervivió: en la jornada electoral del cinco de marzo de 1893, una “turba completamente ebria” recorrió las calles de O Barco dando vivas al “candidato ministerial”. Acabaron apedreando la casa de Quiroga Vázquez, político del Partido Conservador, insultando a su esposa e hija. Sus sirvientes, “dispuestos a rechazar la agresión, procedieron no obstante con gran prudencia; algunos de ellos han sido heridos”¹⁴³².

Este tipo de manifestaciones, creemos, tienen una dimensión más allá de la fiesta. Se trata, por una parte, de apropiarse del espacio público y negárselo al rival. Por otra, convierten la política en personalista: no se ataca a un símbolo o una bandera, se va a la casa del rival a molestarlo personalmente y señalarlo a él y a su familia. Finalmente, denotan una cierta saña en la manera en la que se vivía la lucha electoral en los distritos. No basta con la victoria en las urnas, hay que humillar al contrario. Este tipo de prácticas dan una dimensión adicional al juego político. Por supuesto, hay intereses materiales en juego, en poder político o incluso negocios¹⁴³³, pero además era una

¹⁴²⁴ LV 10-05-1910, p. 1

¹⁴²⁵ LV, 13-03-1914, p. 2

¹⁴²⁶ LV, 03-06-1919, p. 1

¹⁴²⁷ LV, 01-05-1923, p. 1

¹⁴²⁸ LV, 27-04-1903, p. 1

¹⁴²⁹ LV, 26-04-1903, p. 1

¹⁴³⁰ LV, 28-02-1918, p. 2

¹⁴³¹ LV, 26-02-1918, p. 2.

¹⁴³² Según *La Voz*, que acusa al alcalde de no intervenir, los alborotadores realizaron “algunos disparos”. LV 10-03-1893, p. 2.

¹⁴³³ Un buen ejemplo se da en el periodo isabelino, con el interés de Elduayen de conseguir diputados provinciales para cimentar sus intereses en la construcción del ferrocarril. CASTRO PÉREZ, F. (2002), p. 6.

cuestión personal. Según señalaba Antonio de Cora a finales de la Restauración, tras la proclamación de un diputado “queda en pie ese pleito entre amigos de uno y otro candidato, entre quienes viven pared con pared todo el año”; los protagonistas de la lucha electoral quizás paseasen por Madrid cogidos del brazo, pero en las villas y pueblos quedaba un “sedimento” de enfrentamiento¹⁴³⁴. Una visión quizás maniquea, pero que pone de manifiesto que la lucha electoral arrastraba un poso de enfrentamiento personal. “Las elecciones [de diputados] y el reparto de los consumos” dice un personaje de Valle-Inclán “son causa de todas las querellas en los pueblos: Unos se arruinan, otros emigran, y sin fin de veces corre la sangre”¹⁴³⁵.

Hay otros campos de batalla que no entran dentro de las estadísticas de la jornada electoral. En febrero de 1920 los agrarios de Nogueira de Ramuín bloquearon la casa donde estaba reunida la Junta del Censo, “temerosos de un chanchullo, de esos que se han cansado de hacer nuestros caciques”, aunque sin que se verificasen los muertos y heridos de los que se habló en un principio. Una vez más, no exageremos el carácter violento de las protestas. Ese mismo mes, y de manera más pacífica, los campesinos de Coles enviaron una “nutrida representación” en protesta por su junta al Gobernador, y centenares de labriegos de Vilamarín desfilaron por la capital en protesta por los “atropellos” en las elecciones municipales¹⁴³⁶.

Otro espacio de posible violencia era el escrutinio. En el de Ortigueira tras los comicios de 1899, una multitud impidió la operación invadiendo la Casa Consistorial y amenazando a los interventores¹⁴³⁷. En A Coruña, en 1903, cayeron algunos golpes sobre los interventores monárquicos a la salida del acto¹⁴³⁸. Pero los incidentes más graves se produjeron hacia el final del periodo, quizás por la rotura del consenso pactista.

En Ourense, el 23 de diciembre de 1920, estallaron disturbios en la junta provincial del censo que discutía los resultados de las elecciones por parte público favorable a los candidatos no gubernamentales. Fueron despejados, y una manifestación acompañó a Calvo Sotelo, Barber, Barriobero y Durán hasta un hotel desde el que dieron un mitin improvisado. El primero había justificado durante la campaña la violencia contra las coacciones gubernamentales, señalando que “Contra la violencia de los de arriba es lícita la de los de abajo”¹⁴³⁹. La multitud fue dispersada por guardias de Seguridad sable en mano, con al menos dos paisanos y un guardia herido¹⁴⁴⁰. En 1923 hubo una manifestación en Cangas después de saberse que no había sido proclamado diputado de distrito el republicano Emiliano Iglesias. Se apedrearon las casas de su contrincante Vicenti, sonaron disparos, estallaron peleas y hubo un herido. La Guardia Civil disolvió a los presentes mediante cargas¹⁴⁴¹.

En resumen, la violencia en torno a los procesos electorales generales no parece determinante para el resultado de estos. Tenemos constancia de que se invadían colegios y se rompían urnas, aunque eran hechos puntuales; en algo más de la mitad de las convocatorias electorales se producía algún

¹⁴³⁴ EP, 26-12-1920, p. 1.

¹⁴³⁵ VALLE-INCLÁN, R. (1927), p. 317.

¹⁴³⁶ LR, 03-02-1920, p. 2, 10-02-1920, p. 2.

¹⁴³⁷ LV, 21-04-1899, p. 1, 22-04-1899, p. 1-2.

¹⁴³⁸ LV, 01-05-1903.

¹⁴³⁹ En octubre concedió una entrevista al diario La Región, en la que, por algún motivo, la mayor parte de las preguntas se han eliminado. En ella afirma: “Si acaso me disgustaría la perspectiva de una política gubernamental violenta [...] no espero tal cosa del actual ministro de la Gobernación [...] Espero, pues, que haya contienda; pero no que ésta sea ilegal, por parte de mi adversario [...] Si lo que juzgo absurdo tuviese realidad, nosotros no nos arredaríamos. Contra la violencia de los de arriba es lícita la de los de abajo”. LR 28-10-1920, p. 2.

¹⁴⁴⁰ LR, 27-12-1920, pp. 1-2.

¹⁴⁴¹ LV, 05-05-1923, p. 1.

herido; y en dos ocasiones llegó a haber muertos. A esto hay que sumar actos de violencia desorganizada, peleas y discusiones en torno a las votaciones.

Hemos dejado fuera del análisis sistemático las elecciones provinciales, aunque en estas también hay acusaciones de coacciones. *La Voz* culpó a un individuo próximo de Maximiliano Linares Rivas (oponente político del dueño de diario, Juan Fernández Latorre) de reclutar sicarios “entre las capas más bajas y despreciables de los muelles de A Coruña” para perseguir a sus rivales políticos durante las elecciones provinciales de 1890¹⁴⁴². El diario ferrolano *La Democracia* los llamó en su editorial “banda de la porra” y “banda de asesinos recintada [sic] en los albañales sociales”, y Fernández Latorre declaró en el Congreso que sus amigos habían tenido que sobornarlos para comprar su “quietud”. Él y otros diputados y senadores¹⁴⁴³ denunciaron en la prensa madrileña, durante las elecciones de 1890 “clausura de colegios y atropellos de todo género”. Sin embargo, nunca los denunció (“hay ciertos agravios cuya reparación no se busca ante los tribunales de justicia”) y no hay constancia de que estos “asesinos” pusiesen sus manos encima de nadie.

8.4.2 La batalla por el Ayuntamiento: violencia en las elecciones locales

Las luchas de bandos políticos ya existían en Galicia en el Antiguo Régimen, limitadas en su alcance, por supuesto, a los escasos espacios de representación política y al escaso número de electores. En Viveiro, caso bastante estudiado, existían a finales del Antiguo Régimen dos cargos concejiles elegidos popularmente, y un procurador general elegido de entre un grupo de familias privilegiadas. En el mismo municipio, esta dinámica se integró en las primeras elecciones liberales con José Bonaparte: “acusacións de falsificar sinaturas, de participar no proceso electoral xente sen dereito, de andar na procura de votos, de cregos que inflúen nos votantes... reflíctense nas actas dese ano”¹⁴⁴⁴, en palabras de Xosé Ramón Veiga, que añade que “nos modestos procesos electorais angorreximentais os intereses enfrontados empregaban estratexias que, sen solución de continuidade, alongaranse nas eleccións liberais”¹⁴⁴⁵. Vemos en algún caso riñas y alborotos en elecciones a corregidor del Antiguo Régimen, y en las elecciones de 1813¹⁴⁴⁶.

Galicia contaba con un número muy reducido de municipios en el Antiguo Régimen. El modelo de organización municipal se extendió por todo el territorio a partir de 1834 no sin traumas acerca de la capitalidad en los casos en los que no existía un núcleo evidente; esto favoreció el crecimiento en los lugares que recibieron las sedes municipales y de partido y en algún caso la aparición de una nueva villa¹⁴⁴⁷. Y, una vez que los ayuntamientos se hubieron constituido como tales, también se iniciaron las luchas por el poder local. Desde los órganos locales se desempeñaban tareas como la fiscalidad y las quintas que “los colocaban en el centro de las estrategias de las oligarquías, que gracias a ellos podían salvaguardar sus intereses y promover sus influencias”¹⁴⁴⁸. Estas, al igual que en las elecciones a Cortes, quedaban manipuladas por la intervención del poder político. Maximiliano Linares Rivas disolvió una quinta parte de los ayuntamientos coruñeses durante su mandato como Gobernador Civil de la provincia.

¹⁴⁴² *La Voz de Galicia*, veinticinco de abril de 1891.

¹⁴⁴³ *La República*, dieciséis de diciembre de 1890.

¹⁴⁴⁴ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 41. En esta obra también se reflejan disputas y amañes electorales en torno a los escasos cargos electos de Mondoñedo y Lugo, en las décadas finales del Antiguo Régimen.

¹⁴⁴⁵ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 61.

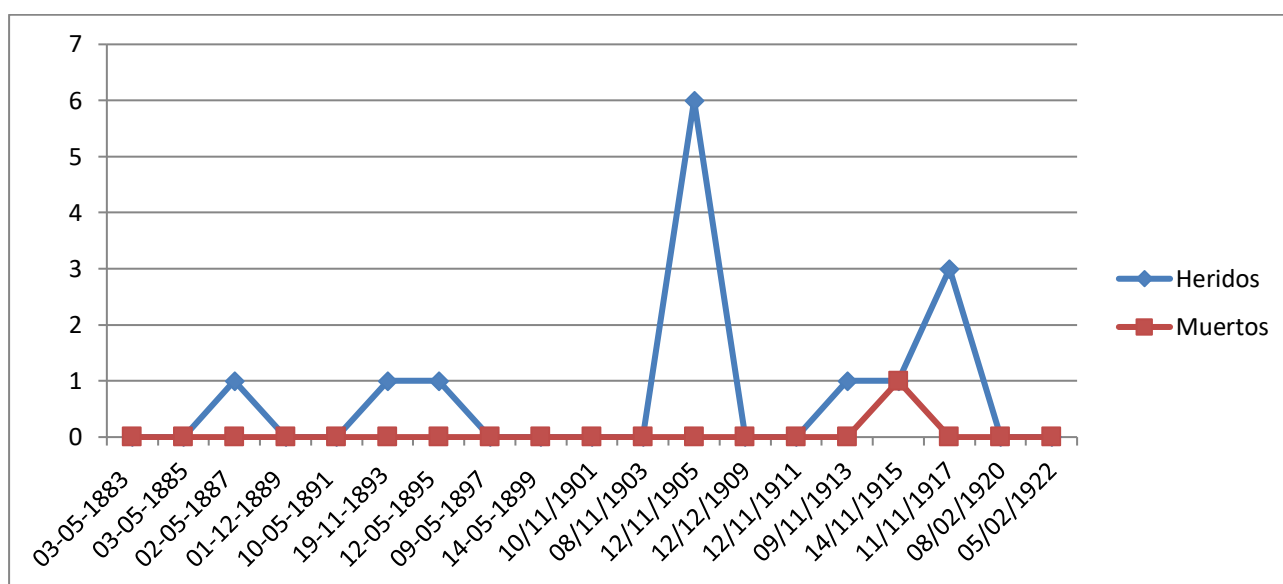
¹⁴⁴⁶ VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 39, 132, así como el artículo de próxima publicación VEIGA ALONSO, X.R.: “Violencia e conflitividade política na Galiza do século XIX (1808-1874)”.

¹⁴⁴⁷ Vease por ejemplo el caso de Carballo: el establecimiento de la casa consistorial y el juzgado en la parroquia de San Juan provocó el asentamiento de “clases no agrícolas”, y apareció una villa a partir de unas pocas casas. REGO RAMA, S. (2000), pp. 2, 6.

¹⁴⁴⁸ MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, J. (2000), p. 104.

¿Cuál fue la intensidad de la violencia electoral en la Restauración? Para responder a esta pregunta, una vez más, hemos recurrido a *La Voz de Galicia*, para que la que hemos volcado una veintena de citas electorales municipales entre 1883 y 1922, un total de 19¹⁴⁴⁹. Aunque a medida que pasan los años *La Voz* va recogiendo información del proceso electoral en otros puntos de Galicia, la información se centra en los resultados de A Coruña, e, irregularmente, de su entorno y otras villas importantes de la provincia y en menor medida del conjunto de Galicia. Además, se recoge información a nivel nacional de los sucesos más llamativos ocurridos en el conjunto del Estado. Supone, así, una buena fuente de información sobre las dinámicas locales, y, sin ser exhaustivo, un pulso de los sucesos más dramáticos o llamativos ocurridos en el conjunto de Galicia¹⁴⁵⁰.

Gráfico 8.4.2.1 Heridos y muertos en el día de las elecciones municipales en Galicia



Fuente: Elaboración propia a partir de *La Voz de Galicia*

Empleando esta fuente periodística, parece que la violencia grave está mayoritariamente excluida de las citas electorales municipales. La media de heridos es de 0,74 en cada jornada electoral, una media significativamente más baja que en las generales. En muchas no hay ningún incidente en el que se mencione a un lesionado. A esto hay que sumar algunos incidentes que ocurrían después de las elecciones; por ejemplo, el lunes siguiente a los comicios de 1922 empezó una discusión en Finisterre entre Jacobo Mariño y Francisco Canosa, y el primero acabó con lesiones de pronóstico reservado¹⁴⁵¹. El pico se produce en 1915; ese año, varias peleas en la jornada electoral de A Coruña

¹⁴⁴⁹ En concreto, las elecciones de 03-05-1883, 03-05-1885, 02-05-1887, 01-12-1889, 10-05-1891, 19-11-1893, 12-05-1895, 09-05-1897, 14-05-1899, 10-11-1901, 26-04-1903, 12-11-1905, 12-12-1909, 12-11-1911, 09-11-1913, 14-11-1915, 11-11-1917, 08-02-1920, 05-02-1922. En las anteriores a 1891 el primer día de elecciones es el de la votación para elegir a los integrantes de las mesas electorales; las votaciones a concejales, propiamente dichas, duraban dos días. Para cada una de ellas hemos consultado siete números de prensa, contando como primero aquel en el que se produce la primera votación.

¹⁴⁵⁰ *La Gaceta de Galicia* menciona que en 1883, la Guardia Civil reprimió un motín por motivos electorales en Lousame, con el resultado de un hombre y una mujer muertos, dos personas heridas y ocho detenidos, entre ellos un sacerdote. *La Gaceta de Galicia*, 08-05-1883, 10-05-1883.

¹⁴⁵¹ *LV*, 12-02-1922, p. 2

acabaron con dos participantes curándose en farmacia, y un choque a bofetadas y palos en Valdoviño dejó tres heridos leves y uno grave¹⁴⁵².

Por las limitaciones de la fuente la estadística de heridos no puede considerarse una muestra fiable de todo lo que ocurría en Galicia. Sin embargo, la estadística de homicidios resulta más representativa, ya que las muertes son más difíciles de disimular y en la prensa local, a través de la información telegráfica, aparecían fallecidos en choques electorales de toda España. En todos los años consultados solo encontramos un muerto (esto es, 0,06 fallecidos por cita electoral). Curiosamente, está ligado al agrarismo. Después de los comicios de ese día, un tal José Lago entró en una taberna de Vigo diciendo con "bravuconería" que había votado al candidato oficial. Lago era miembro de la sociedad de agricultores de Santa Marina de Cabral, que al parecer aconsejaba otra opción, y en la tasca había otros asociados, así que se lo tomaron como una provocación. Discutieron, se insultaron, y el resto de agrarios se lanzaron sobre Lago. Éste parece que sacó una navaja para defenderse, pero otro hombre se la arrebató y se la clavó en la cabeza, matándolo¹⁴⁵³. No hay constancia de ningún fallecido en choques relacionados con las elecciones en días posteriores.

Veamos en detalle las dinámicas de las citas electorales tanto en las ciudades importantes como en el entorno rural. A Coruña, de la que *La Voz de Galicia* entendemos que sí da información fiable, era en la Restauración la sede del Gobierno Civil y de una importante guarnición, presta a intervenir ante la amenaza de disturbios. También era la ciudad más poblada de Galicia, con talante liberal y una oposición activa dispuesta a denunciar y dar publicidad a intervenciones violentas. La lucha electoral municipal se daba entre diversas facciones monárquicas y republicanas, pero sin intervención de los movimientos obreristas en cuya acción y represión, como veremos en el apartado 9.2, se concentraba la violencia sociopolítica de la ciudad.

Consistentemente con lo anterior, no hay actos de violencia que impidan los comicios. En las 19 elecciones municipales estudiadas en el municipio no encontramos a un par de heridos leves, pero ningún homicidio o acto de violencia realmente grave, ningún disparo o amenaza con arma de fuego ni ningún apuñalamiento por motivos electorales¹⁴⁵⁴. No hay urnas rotas, ni colegios tomados a la fuerza, ni partidas de la porra, ni atentados o incendios. Con respecto a las denuncias de irregularidades nos encontramos con el problema de que el bando que pierde unas elecciones las denuncia sistemáticamente, no tanto en los tribunales como en las sesiones de escrutinio y la prensa afín. Los promotores tenían incentivos para exagerar o inventar los abusos, por lo que no podemos aceptarlas acríticamente.

Pero los actos de violencia menor formaban parte de la normalidad de los comicios en los que había disputa. Frecuentemente la prensa informa de que en tal pueblo es que se realizaron en completo orden y normalidad, dejando aparte "algún incidente sin importancia". Conviene recordar, una vez más, la frecuencia con la que los contemporáneos recurrían a la violencia en otras situaciones sociales como los espacios de fiesta; no dejaban atrás sus costumbres levantiscas para ir a votar. A mayores, las elecciones se celebraban en domingo, con lo que no pocos electores y curiosos llegaban bebidos de la noche anterior, o estaban bebiendo.

Estos incidentes no eran en general actos de violencia para impedir que haya una votación, sino disputas que se originaban por corruptelas o pequeñas trampas electorales, choques de individuos de bandos contrarios que se encontraban en momentos críticos de gran tensión, o enfrentamientos

¹⁴⁵² LV, 14-11-1905, p. 1, LV, 15-11-1905, p. 2

¹⁴⁵³ LV, 19-11-1913, p. 2.

¹⁴⁵⁴ Recalquemos: por motivos electorales. En las jornadas de los comicios encontramos heridas y homicidios por motivos particulares.

personales que se llevaban a las manos en el colegio. No se les daba gran relevancia. En 1897, por ejemplo, un joven carpintero coruñés apellidado Frias intentó votar dos veces; cuando un concejal allí presente, apellidado Rouco, protestó, Frias le soltó “dos bofetadas”, le pegó al portero del ayuntamiento y montó un escándalo, amparado por un compañero de oficio que acudió en su ayuda. Acabó siendo arrestado por orden del alcalde, pero estos cargos municipales “opinaron luego [...] que al hecho no debía concedérsele importancia y poco después fueron puestos en libertad”¹⁴⁵⁵.

También hay que visualizar el ambiente de los colegios electorales en la Restauración y las estrategias de la jornada electoral para entender cómo se producían conflictos. El momento y lugar de la votación no eran asépticos, ni el acto un trámite, sino el punto de mayor ebullición política de la campaña. Los candidatos e interventores pasaban las elecciones en los locales, vigilando que los contrarios no hiciesen trampas o intentando hacerlas ellos. Tenían que estar atentos a los electores ficticios, con documentación falsa o que se hacían pasar por muertos, tan frecuentes que muchas veces ni se les detenía; cuando se les identificaba y expulsaba se formaba el respectivo alboroto¹⁴⁵⁶.

Había grupos destacados que merodeaban en torno a los colegios para espolear a los remolones, convencer a los indecisos o directamente comprar votos¹⁴⁵⁷. Los diferentes bandos tenían ideas acerca de sus fuerzas relativas y de cuánto tenían previsto sacar en los comicios, quizás incluso en base a pactos anteriores, y si parecía que iba a ver un resultado diferente, la lucha se recrudecía¹⁴⁵⁸. La votación también se vivía en la calle, aunque esto dependía hasta cierto punto de si el día de las elecciones llovía o no. La gente se agolpaba en las pizarras de recuento para ver y discutir los resultados, se originaban manifestaciones de felicitación o protesta, y hacia la noche los candidatos victoriosos celebraban con murgas, cohetes y bailes improvisados. Los locales de bebidas hacían su agosto¹⁴⁵⁹.

A riesgo de ser prolijos, pongamos por ejemplo los comicios municipales de 1909 en A Coruña. La ciudad tenía ocho distritos electorales. En el primero (correspondiente a la Ciudad Vieja, y el único en el que en esta época había mayoría monárquica), no “ocurrió nada digno de mención”. En el segundo “fueron rechazados algunos electores “ful””, es decir, con identidad falsa¹⁴⁶⁰. En el tercero, disputado en esa cita electoral, hubo un “alboroto” cuando intentó votar un individuo que, según varios interventores, no era quien decía ser; en medio del escándalo el presidente de la mesa

¹⁴⁵⁵ LV, 10-05-1897, p. 1

¹⁴⁵⁶ De un colegio en las elecciones de 1891 se dice que “no hubo protestas de las que se consignan por escrito, pero de las que se hacen a voz en cuello a la puerta del colegio y se solucionan a bofetadas allí mismo o a la vuelta de la primera esquina, no fue corto el número”. LV, 11-11-1901, p. 1.

¹⁴⁵⁷ En una anécdota sobre la vida del universitario compostelano Garaboa, sus compañeros lo retan en día de elecciones a votar por un muerto, y éste enseguida cómo hacerlo: “pide a un muñidor que a la puerta estaba, nombre de un muerto y papeleta de votación, con la cual se introduce en el colegio electoral”. Lamentablemente para él, el presidente de la mesa era uno de sus catedráticos. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, H. (1920), pp. 23-24.

¹⁴⁵⁸ Vemos un caso así en 1911 en A Coruña. En el séptimo distrito se elegían tres concejales, y se habían presentado visiblemente dos republicanos y dos monárquicos. La jornada electoral fue “deslizándose tranquilamente” hasta que los monárquicos se dieron cuenta de que sus oponentes, “no conformándose con dos puestos, intentaban un copo”. Los conservadores “apretaron entonces” para hacer fracasar la intentona; hubo “incidentes largos, sobre todo en la sección segunda, en donde parece que salieron a relucir las navajas”. Mientras, en el distrito de las afueras, en el que no había lucha, el candidato republicano se paseaba tranquilamente por la calle Real. LV, 13-11-1911, p. 1.

¹⁴⁵⁹ El día después de las elecciones de 1901, “Cafés, tabernas y otros centros más o menos electorales estuvieron abarrotados de consumidores hasta muy avanzada la madrugada de hoy. Curdas y discusiones hubo muchas, pero no pasaron de ahí las cosas”. LV, 11-11-1901, p. 1.

¹⁴⁶⁰ La palabra ful se empleaba en la Restauración para denominar a algo falso o de mala calidad. Como curiosidad, en A Coruña sigue empleándose popularmente, como “ful” o “aful”.

rompió sin querer la urna de un puñetazo. Se expulsó a varias personas y la votación siguió “en medio de la mayor tranquilidad”, dejando aparte “algunos cachetes” que “se ganó un borracho atrabillario”, y un buen número de discusiones “más o menos acaloradas”. “Pero nada de esto” apunta el cronista “tuvo importancia ni merece consignarse con detalle”.

En el cuarto distrito competían ese año tres facciones, dos de ellas republicanas, lo que estimulaba la lucha. “Comisiones muy numerosas andaban a caza de votos, con singular ardimiento”, y un establecimiento de bebidas cercano repartía “caño libre” [aguardiente] a los electores de una facción. Constantino Pazos, uno de los candidatos, “protestando y dando puñadas sobre la mesa, logró que fracasasen algunos embuchados”, y montó un escándalo, “que no pasó a mayores”, durante el escrutinio. Por lo demás, hubo “algún incidente”, con “alguna que otra bofetada”, con “conatos de pelea”, pero “no llegó la sangre al río”. En el quinto vemos de nuevo conflictos menores, uno de ellos entre dos candidatos. En la sexta demarcación no había competición electoral, así que los sucesos se limitaron a rechazar algunos votantes ficticios. Por el séptimo, en el que peleaban el republicano Santiago Casares y el independiente Antonio Jaspe, encontramos una pelea con “algunos sopapos”. En el octavo, pese a la presencia de numerosa policía y a que no se preveía lucha electoral, “hubo un temporal de puñetazos formidable a primera hora”¹⁴⁶¹.

En A Coruña, este tipo de conflictividad parece ser muy limitada en la década de 1880, cuando las fuerzas monárquicas aún controlaban la ciudad, y aumentar con la introducción del sufragio universal a lo largo de la de 1890, cuando monárquicos y republicanos conseguían números de concejales parecidos (si bien los primeros estaban divididos). Alcanzan su auge en las décadas de 1900 y 1910, cuando las diversas facciones republicanas ejercieron un dominio incontestado en ediles. Sin embargo, puede que esto sea un espejismo y que en las décadas en las que encontramos más incidentes simplemente se cubran más.

Pasemos ahora a los distritos rurales. Aquí era posible ejercer coacciones de más calado, y vemos, aunque no sean la tónica habitual, auténticos asaltos a colegios electorales. En las municipales de 1895, por ejemplo, un grupo armado con navajas y palos invadió un colegio electoral de As Pontes, hiriendo gravemente a un hombre¹⁴⁶². En Ribadeo, en 1905, hubo un tiroteo en el distrito de Devesa después de que un concejal, supuestamente respaldado por la Guardia Civil, intentara usurpar el cargo de presidente de la mesa (que, según la fuente, era tercer teniente de alcalde). En el colegio de Cubelas también sonaron disparos cuando los electores, “indignados justamente” por las irregularidades de la mesa, asaltaron el local y rompieron la urna¹⁴⁶³.

En 1887, de acuerdo con un dictamen del Consejo de Estado sobre la anulación de las elecciones municipales de Cambre, un tal José Míguez González irrumpió durante estas en uno de los colegios electorales del municipio, acompañado de otros tres individuos. Llevaban en la mano paraguas y palos, Míguez portaba un revólver y los demás navajas, y se resistieron a ser desalojados¹⁴⁶⁴. Míguez fue también acusado de disparar durante esos comicios contra la Guardia Civil y el alcalde, con el que mantuvo posteriormente disputas legales, y de incendiar la casa de un rival político. Aún así, en 1889 tenía derecho al uso de armas, como antiguo recaudador de Contribuciones con recibos pendientes de cobro¹⁴⁶⁵. En 1890, un hombre llamado José Míguez fue uno de los dos detenidos en Oza acusado del asesinato de Manuel López Trillo, alias *El Señorito*, ex alcalde de la localidad, un crimen que se atribuyó a disputas de la política local, si bien lo más probable es que no se tratase de la misma persona.

¹⁴⁶¹ LV, 13-12-1909, p. 1.

¹⁴⁶² LV, 17-05-1895, p. 2

¹⁴⁶³ LV, 14-11-1905, pp. 1-2

¹⁴⁶⁴ *Gaceta de Madrid*, 17-09-1887.

¹⁴⁶⁵ *La Voz de Galicia*, 23-03-1883.

Aunque en la literatura naturalista de la época encontramos algunas veces a matones y ex presidiarios sirviendo a tiempo completo a los políticos y notables de la Restauración¹⁴⁶⁶, los casos que hemos citado para el ámbito gallego parecen más bien obra de simpatizantes políticos o clientes de algún cacique local, y no de pistoleros contratados.

La rotura de la urna era una táctica a la que recurrían aquellos que iban a perder la elección o pensaban que concurrían circunstancias desfavorables; invalidaba la votación y obligaba a repetirla. En 1923, en Coles, tras el rechazo a la presencia de apoderados agrarios en las mesas electorales, estos rompieron una urna en señal de protesta. Varios quedaron heridos en la refriega posterior¹⁴⁶⁷. Ahora bien, estos incidentes son la excepción. Si observamos el estudio sobre las elecciones en el distrito de Ponteareas de Candeira Mosquera, vemos que en los seis comicios entre 1884 y 1894 no hay ninguna denuncia de hechos violentos. La más parecida es la presencia de guardias civiles y serenos armados en un colegio de Ponteareas, que según la queja estaban “cohibiendo la entrada y favoreciendo la candidatura de los señores Soto y Sestelo”¹⁴⁶⁸, y una protesta por detenciones de electores y expulsiones de interventores. Sí hay muchas por ilegalidades, acarreo de votos, faltas en las listas, participación de individuos inhabilitados, etcétera.

Encontramos el mismo esquema en las celebraciones de elecciones provinciales en ese periodo¹⁴⁶⁹, o en los comicios de Cerdedo entre 1916 y 1923, municipio con grandes tensiones políticas entre los agraristas y las fuerzas afines al Marqués de Riestra¹⁴⁷⁰. Tampoco vemos violencia en las citas electorales de la villa de Cangas entre 1900 y 1923¹⁴⁷¹. Siguiendo el caso de Carballo, cuya política local ha analizado Silvia Rego, pese a que la vida municipal se estructuraba en base a dos facciones enfrentadas, estas eran monárquicas durante la Restauración y no hay una “ruptura clara del consenso” hasta la II República¹⁴⁷²; pese a que hay múltiples acusaciones de corruptelas e irregularidades de notables, el trabajo no menciona agresiones hasta 1931¹⁴⁷³.

Esto encaja con el modelo defendido por Cabo Villaverde y Míguez Macho sobre el proceso de democratización de la Galicia rural durante la Restauración. Para estos autores, la violencia física explícita contra los disidentes “era excepcional”; se empleaban más frecuentemente presiones como la distribución interesada del cupo de consumos¹⁴⁷⁴. Añaden que “su manejo en el fondo una muestra de debilidad”, es decir, se recurriría a la violencia como medida desesperada por aquellos que habían fracasado buscando el control de la población por otros medios¹⁴⁷⁵.

Resulta relevante señalar que la violencia en periodo electoral no tenía por qué ser más castigada. En la parroquia de Seavia, del municipio coruñés de Coristanco, hubo un alboroto el 14 de mayo de 1899, tras las elecciones a concejales. Dos jóvenes de diecinueve años golpearon a un hombre con palos, causándole pequeñas heridas en la cabeza y brazo; quedó impedido para el trabajo durante

¹⁴⁶⁶ Por ejemplo, los criminales que rodean al señorito Luis Dupont en *La Bodega* o el Tuerto de Castrodoma, guardaespaldas y asesino a sueldo del cacique Barbacana en *Los Pazos de Ulloa*.

¹⁴⁶⁷ SOUTELO VÁZQUEZ, R. (2014), p. 199.

¹⁴⁶⁸ CANDEIRA MOSQUERA, F. (1990), pp. 95-125.

¹⁴⁶⁹ Cinco porque una de las votaciones se suspendió por nulidad. CANDEIRA MOSQUERA, F. (1990), p. 95-111.

¹⁴⁷⁰ Lo más parecido a un episodio violento es un pequeño tumulto en 1920, sin víctimas, contra la toma de posesión de una corporación municipal en base a unas elecciones anteriores. SOLLA, C. (2011), p. 182.

¹⁴⁷¹ SANTOS CASTROVIEJO, I., NORES SOLIÑO, A. (2005), pp. 277-308.

¹⁴⁷² REGO RAMA, S. (2000), pp. 7-8, 14, 38.

¹⁴⁷³ REGO RAMA, S. (2000), p. 35.

¹⁴⁷⁴ MÍGUEZ MACHO, A., CABO VILLAVERDE, M. (2013), pp. 50-51.

¹⁴⁷⁵ Es decir, del modelo de control blando en el que entraban los apoyos y prebendas reconocidos a los vecinos a cambio de apoyo electoral; no debemos verlo como un dominio omnímodo y sin concesiones de las élites sobre la ciudadanía.

quince días. Fueron condenados a dos meses y un día de arresto mayor y al pago de treinta pesetas, la sentencia estándar para este tipo de lesiones “por no haber concurrido en su ejecución circunstancias atenuantes ni agravantes”¹⁴⁷⁶; puede, de cualquier manera, que la disputa no fuese por las elecciones¹⁴⁷⁷.

Una última consideración acerca de los enfrentamientos de la política local. Compartimos la idea de Candeira Mosquera de que en la política restauracionista, mientras que en las altas esferas “reina o pacto e o reparto”, en la política local los enfrentamientos personales se mantenían vivos y mezclados con animosidades personales, generando una atmósfera “chea de rencillas, xenreiras, bandos, pleitos e demais”¹⁴⁷⁸, y, como han demostrado estudios regionales, no solo en Galicia¹⁴⁷⁹. Esto no implica un mayor grado de violencia *per se*, pero determinados actos de violencia impulsiva en torno a la cuestión electoral municipal, de encono en posiciones que parecen irracionales, no se explican solo por las ansias de poder o ganancias materiales sino por la oposición partidista concebida como factor definitorio de la personalidad.

8.4.3 La movilización universitaria durante la Restauración

La movilización colectiva juvenil en España empezó con retraso, según señalan González Calleja y Souto Kustrín, pero fue asentándose durante nuestro periodo de estudio. A inicios del siglo XX surgieron organizaciones juveniles ligadas a partidos, y a finales de los años veinte “se puede hablar de organizaciones juveniles propiamente dichas”, mientras que en la Segunda República ya hay programas propiamente juveniles¹⁴⁸⁰. Dado que, según los mismos autores, los primeros movimientos juveniles fueron universitarios, es pertinente detenernos en la movilización del estudiantado compostelano.

Miembros de la comunidad universitaria compostelana participaron en los enfrentamientos políticos anteriores a 1875, como el asalto al Casino carlista en 1870 o el levantamiento de Solís de 1846¹⁴⁸¹. Veremos ahora los incidentes de carácter corporativo o ideológico político protagonizados por los estudiantes universitarios compostelanos durante la larga paz de la Restauración, para ver hasta qué punto coordinaban esas acciones dentro de la comunidad estudiantil, y si esta favorecía el asociacionismo político que a su vez permitía la acción colectiva.

En primer lugar, los universitarios compostelanos no actuaban aislados, sino que se integraban en reclamaciones y ciclos de protesta compartidos con estudiantes de otras partes del Estado. En 1884 hubo una manifestación en Santiago relacionada con los alborotos de Santa Isabel, producidos en la Universidad Central de Madrid acerca de la libertad de cátedra, que llevó a la clausura del recinto compostelano¹⁴⁸². En 1903 hubo disturbios en Santiago, entre otras ciudades, por el nuevo plan de estudios de Medicina; después de que se impusieran sanciones a los estudiantes gallegos, los tumultos se recrudecieron en otras ciudades, como Valencia y Barcelona¹⁴⁸³. Dos años después, en el

¹⁴⁷⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, caso 12, folios 30-32.*

¹⁴⁷⁷ No la hemos contado como tal en las estadísticas.

¹⁴⁷⁸ CANDEIRA MOSQUERA, F. (1990), p. 45.

¹⁴⁷⁹ Por ejemplo, en Castilla La Mancha se registran disturbios entre bandos de pueblos y facciones electorales, algunas con incendios, tiros y heridos, asesinato de un ex alcalde. BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), pp. 35-37, 39-42.

¹⁴⁸⁰ GONZÁLEZ CALLEJA, E., SOUTO KUSTRÍN, S. (2007), p. 74.

¹⁴⁸¹ BARÓN FERNÁNDEZ, J. (1998), p. 287.

¹⁴⁸² GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009), p. 72.

¹⁴⁸³ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009), p. 84.

marco de una protesta para derogar disposiciones relativas a los exámenes, los universitarios compostelanos aseguraron que “no entrarán en las clases hasta que lo hagan los de Madrid”¹⁴⁸⁴.

El último cuarto de siglo de la Restauración, que Varela González ha seguido año a año para el estudiantado compostelano, arroja protestas de uno u otro tipo en prácticamente todos los cursos, en forma de algaradas, huelgas y manifestaciones. Las movilizaciones estudiantiles llevaron a abortar la decisión gubernamental de 1899 relativa a suprimir la facultad de Derecho de Santiago, a la dimisión del rector Romero Blanco en 1904¹⁴⁸⁵. Pero aún durante las dos primeras décadas del siglo XX el asociacionismo universitario compostelano es “tímido y esporádico” si bien van apareciendo brotes de agrupaciones estudiantiles de carácter reivindicativo¹⁴⁸⁶.

Pero en esta época está en marcha una transformación de las mentalidades y modos de organización de los estudiantes, que modifica la conflictividad estudiantil. Los conflictos de disciplina y agresiones a profesores están en decadencia: “son pocos los casos que se registran a partir de 1900, y alrededor de 1917-1918 desaparecen definitivamente”. En esta época encontramos conflictos de solidaridad, que considera que “definen perfectamente al estudiante de los primeros años del siglo XX”. Son protestas corporativas en defensa del colectivo estudiantil “ante las agresiones de otros grupos sociales”; por ejemplo, si un artículo de prensa o la actitud de cierto profesor había afectado al honor de los universitarios. Se suman a las numerosas movilizaciones de naturaleza “reivindicativa”, defendiendo sus derechos como estudiantes o como futuros profesionales. Estas dos tipologías serían las que predominaban numéricamente en la Restauración, mientras que las protestas políticas eran minoritarias¹⁴⁸⁷.

A partir de 1920, señala la autora, el alcance y madurez política de las protestas compostelanas aumenta¹⁴⁸⁸. En los años 20 se produjo una movilización creciente del estudiantado con fines ideológicos, ejemplificada por la creación de la Federación Universitaria Escolar (FUE) en 1926 en la Universidad Central de Madrid, que centró la actividad política estudiantil durante los años siguientes antes de decaer ante la creciente politización en facciones de los universitarios de la II República. Este proceso de asociacionismo político se vio también en las facultades compostelanas¹⁴⁸⁹. En el capítulo 11 veremos incidentes en la Universidad de Santiago durante los meses previos a la Guerra Civil, pero también en la Normal coruñesa y en los institutos de varias ciudades.

8.5 Buscando el rostro del motín. Dinámicas violentas y pacíficas en la acción colectiva

En los apartados anteriores hemos visto actos de violencia destinados a cambiar el orden político. Aunque la mayor parte de la conflictividad social de la época es sorda y sin grandes movimientos de violencia¹⁴⁹⁰, Galicia vivió motines o algaradas con un alcance distinto: no para modificar la

¹⁴⁸⁴ VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), p. 287.

¹⁴⁸⁵ VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), pp. 272-323. En 1915-1916, según Santiago Prol, “a vida académica estuvo suspendida case todo o ano” por la contestación a la decisión del ministro de Instrucción Pública, Julio Burell, de nombrar una junta de patronato de la Escuela de Veterinaria; en las revueltas estudiantiles de este año habría participado el después líder comunista Benigno Álvarez, en esta época estudiante de veterinaria. PROL, S. (2008), p. 8.

¹⁴⁸⁶ VARELA GONZÁLEZ, I. (1991), p. 231-235. Para más detalles sobre este fenómeno de asociacionismo “no comprometido” en la universidad compostelana, VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), pp. 211-227.

¹⁴⁸⁷ VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), pp. 316-320.

¹⁴⁸⁸ VARELA GONZÁLEZ, I. (1991), pp. 238-241.

¹⁴⁸⁹ En Santiago se constituyeron las primeras asociaciones profesionales de Estudiantes (APEs) en el curso 1929-1930, “con la finalidad de agruparse en la FUE gallega”. VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), p. 238.

¹⁴⁹⁰ HERVÉS SAIAR, H. et al (1997), p. 7.

composición del Gobierno, sino para oponerse a alguna de sus medidas o mejorar la situación de los participantes ante un problema de carácter social, como la escasez de suministros.

Es obligada, aquí, la mención a los Tilly. Los Tilly describieron una tipología que puede aplicarse tanto a la violencia como a la movilización colectiva. Distingue tres clases, según la intencionalidad: la proactiva, en la que se intenta influir en el Estado, la reactiva, que expresa oposición a una nueva política implantada por este, y la competitiva, entre grupos que se enfrentan por un recurso material o inmaterial¹⁴⁹¹, que no nos interesa para este apartado: la compondrían, por ejemplo, las peleas entre parroquias o barrios.

La movilización proactiva va surgiendo con la sociedad de masas y el crecimiento del Estado, por lo que sería más común al final de nuestro periodo de estudio. Su fórmula clásica es la manifestación, que se habría difundido en los países europeos en la última década del siglo XIX con la celebración del Primero de Mayo¹⁴⁹²; también el mitin y la huelga. La reactiva tiene su expresión en los tumultos clásicos que ya venían de la sociedad tradicional, como los que se producían contra el fisco o de subsistencias, y sería extinguiendo con la modernidad. Ya existía en la Galicia del Antiguo Régimen, si bien no era frecuente¹⁴⁹³. Su forma clásica es el motín.

Estos, por supuesto, son modelos ideales, y creemos vano intentar establecer una fecha de cambio de modelo: hay ejemplos de uno y otro tipo a lo largo de nuestro periodo de estudio. En el Trienio Liberal, por ejemplo, hubo un motín o protesta en A Coruña contra el gobierno moderado para lograr la destitución de Espoz y Mina como capitán general de Galicia; su intención era proactiva¹⁴⁹⁴. En 1946 encontramos en O Saviñao una protesta contra la salida de grano del municipio que, según Souto Blando, tiene características que “permiten encuadrarla en el repertorio tradicional denominado “revuelta de hambre” o “motín de subsistencias” típica de condiciones políticas y sociales del Antiguo Régimen o de la España decimonónica”¹⁴⁹⁵, reactivo por tanto en la clasificación de Tilly. Adicionalmente, las formas de ambos modelos se mezclan en la práctica: según señala Rafael Cruz, en las dos primeras décadas del siglo XX la combinación de los dos repertorios “resultó frecuente” en España¹⁴⁹⁶.

La palabra motín parece evocar un acto desorganizado, en el que una masa popular se enfrenta a los uniformados, y con violencia caótica de uno y otro bando. No tiene por qué ser así: hay motines planeados de antemano, ciudadanos que se ponen de parte del Estado, y que terminan sin violencia.

Vemos algunos ejemplos. En 1870 se produjo una oleada de motines antifiscales, entre ellos en Maceda en marzo, con tres muertos y “numerosos heridos y detenidos”¹⁴⁹⁷, Palas de Rei en mayo y las cercanías de Sarria en octubre. Artiaga señala que “todos ellos mantuvieron unas características similares”: se iniciaban en las aldeas con la negativa al pago de un impuesto o la resistencia a un embargo; los vecinos se movilizaban tras una apelación a la solidaridad vecinal; finalmente, eran reprimidos “tras algún encuentro violento entre los amotinados y las fuerzas del orden”¹⁴⁹⁸. En A

¹⁴⁹¹ TILLY, Ch., TILLY, L. TILLY, R. (1997).

¹⁴⁹² CRUZ, R. (2015), p. 50.

¹⁴⁹³ HERVÉS SAYAR, H. et al (1997), pp. 10-11.

¹⁴⁹⁴ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1980), pp. 120-121.

¹⁴⁹⁵ SOUTO BLANCO, M. J. (2003), p. 243.

¹⁴⁹⁶ CRUZ, R. (2015), p. 42. Para un ejemplo, protestas colectivas en 1912-1913 con similitudes a nivel formal con los tipos preindustriales pero relacionadas con la política, DELGADO CENDAGORTAGALARZA, A. (2000) pp. 171, 184-186. Para una exploración del proceso de “transición y coexistencia” de los repertorios en Aragón, LUCEA AYALA, V. (2009), pp. 430-450.

¹⁴⁹⁷ Moreno González habla de cuatro víctimas, y otras cuatro en Quiroga. MORENO GONZÁLEZ, X. (1990), p. 59.

¹⁴⁹⁸ ARTIAGA REGO, A. (2005), pp. 79-80.

Estrada, los incidentes ocurrieron en julio. Unos doscientos hombres entraron en la villa armados con palos y enseres de labranza. Eran vecinos y se habían movilizado contra el pago de impuestos municipales: en concreto, llevaban prisionero al comisionado de la alcaldía para el cobro de deudas fiscales en varias parroquias. Según el alcalde, participaron casi todas las 51 parroquias del municipio, y era parte de un complot organizado. En paralelo a esta movilización, los labradores habían enviado un listado con sus agravios al Gobernador¹⁴⁹⁹.

A Estrada era capital de partido, y el juez de Primera Instancia ocupó rápidamente la casa consistorial, respaldado por tres guardias civiles y varios vecinos armados, algunos de ellos ex miembros de la Milicia Nacional. Con esta fuerza, el juez se atrincheró en el edificio, y pidió a los amotinados que enviasen a los alcaldes de barrio y celadores parroquiales para negociar. Como se negaron, sus fuerzas capturaron a catorce paisanos, repelieron un asalto (disparando al aire) e hicieron otros diez prisioneros. Aunque hubo un elevado número de participantes, a que los amotinados “llegaron a las manos con la Guardia Civil” y a la presencia de armas de fuego por parte de los defensores del Consistorio, no hubo heridos¹⁵⁰⁰.

Está claro que no pudieron hacerlo solo los tres guardias, y que la presencia de 24 defensores voluntarios fue crucial. Grupos de vecinos armados realizaron patrullas durante esa noche para defender la villa. Posteriormente llegaron refuerzos armados, que dispersaron a un nuevo grupo de amotinados dos días después de los incidentes originales, sin violencia. Los labradores acabaron pagando pacíficamente¹⁵⁰¹.

Por otra parte, Artiaga señala que en 1870 hubo una “fuerte politización” de estos conflictos. Intervinieron los republicanos y los informes militares señalan la presencia de “banderas rojas, gritos contra el orden político vigente y agitadores no campesinos”. La Primera República, por cierto, no dejó de cobrar impuestos y reprimir a los que no querían pagarlos. Se produjo un tumulto de paisanos de Oimbra (Ourense), contra el impuesto extraordinario, con la muerte de un recaudador. El ejército¹⁵⁰² dispersó a los paisanos, matando a tres vecinos y deteniendo a otros 31¹⁵⁰³.

Moreno González habla de decenas de muertos durante el verano de 1873 en motines en Xinzo y Bande (Ourense) y Vimianzo (A Coruña), pero no cita fuentes primarias¹⁵⁰⁴. El origen parece ser un artículo aparecido en el diario *El Eco de Galicia*, en la que se habla de 50 muertos en Bande y once en Xinzo, mientras que en el Boletín Oficial de Ourense el comandante interino de la provincia cifra en veinte muertos las bajas de los insurrectos del primer pueblo¹⁵⁰⁵.

¿Qué lleva a alguien a organizar motines violentos o manifestaciones pacíficas? Para Sidney Tarrow en su clásico *El poder en movimiento*, la violencia tiene un escaso coste organizativo y es “fácil de desatar”, lo que explicaría su empleo generalizado en las formas de protesta de las sociedades tradicionales¹⁵⁰⁶. Una huelga sostenida o una manifestación ordenada requieren de mecanismos de organización, disciplina y coordinación mucho más robustos que un motín. A esto añadiríamos que

¹⁴⁹⁹ FERNÁNDEZ CASTRO, X. A. (2000), pp. 60, 69-70.

¹⁵⁰⁰ FERNÁNDEZ CASTRO, X. A. (2000), pp. 71-72.

¹⁵⁰¹ FERNÁNDEZ CASTRO, X. A. (2000), pp. 59, 74-76.

¹⁵⁰² En los incidentes de 1874 habría participado el regimiento de infantería Murcia, nº 42. En 1867 se situó en Ourense, en 1872 sentó plaza en Santiago de Compostela, donde permanecería hasta 1877. Tras la guerra de Cuba estuvo estacionado en Vigo. PARDO GATO, J. R. (2018-B), p. 151-152. Entre 1874 y 1876 combatió en la segunda guerra carlista, menciona Pardo Gato, sin que se señale la acción represiva en Ourense. PARDO GATO, J. R. (2018-A), p. 225.

¹⁵⁰³ COMESAÑA PAZ, A. (2017), p. 50.

¹⁵⁰⁴ MORENO GONZÁLEZ, X. (1990), pp. 91-92.

¹⁵⁰⁵ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L. (1997), pp. 228-229.

¹⁵⁰⁶ TARROW, S. (2012), pp. 184-187.

los individuos del siglo XIX estaban familiarizados con la violencia y preparados para ejercerla. El principal problema de la acción violenta es que el interlocutor, habitualmente el Estado, puede también recurrir a ella, y con más efectividad.

Tarrow también señala que defiende que los individuos recurren a un conjunto de acciones colectivas aprendidas. Estos métodos surgen en procesos históricos, es decir, se desarrollan y se incorporan al comportamiento de los grupos a través de experiencias pasadas e imitación y van evolucionando¹⁵⁰⁷. La idea de realizar una marcha por las calles para condenar o celebrar algo no era desconocida en el Antiguo Régimen. En las ciudades gallegas, en 1814, vemos a autoridades y absolutistas preparando actos públicos para celebrar la vuelta de Fernando VII, desde marchas callejeras a rituales de escarnio de la Constitución¹⁵⁰⁸. Pero no se había convertido en una acción política frecuente con unos códigos establecidos, como lo sería un siglo después.

A esto hay que añadir que las formas de protesta callejeras no eran el único modo de movilización colectivo en una sociedad con el repertorio tradicional de protesta. La capacidad de acción colectiva no se limita a las acciones callejeras: las comunidades tradicionales podían coordinarse para mandar peticiones escritas a las autoridades o presionar legalmente, y, si observamos con atención el pasado, vemos que lo hacían en la prehistoria del repertorio moderno. Ya en el Antiguo Régimen, los mareantes gallegos preferían recurrir a los tribunales antes que a los tumultos (y en especial a la Real Audiencia, para evitar la intervención de las justicias locales, mediadas por los notables)¹⁵⁰⁹.

El motín contra la siderurgia de Sargadelos, el más famoso del Antiguo Régimen en Galicia, ocurrió el 30 de abril de 1798, y reunió a unos 4.000 amotinados (de los que más de 800 fueron procesados), y vino precedido de incendios y protestas de menor entidad durante los años anteriores¹⁵¹⁰. Pero los vecinos y las élites locales, que se oponían a la fábrica por el consumo que hacía de leña del monte comunal y los acarreos obligatorios, habían actuado mucho antes pacíficamente: el 19 de marzo de 1788, “casi simultáneamente” a la solicitud de permiso para construir la fábrica, se reunieron 123 vecinos de cuatro localidades y firmaron un escrito de oposición.

A partir de ese momento, cuenta González-Pola, “se inicia toda una abrumadora cascada de escritos de pueblos asociados, curas párrocos y hacendados reunidos, que se oponen a la instalación de la fábrica”, y en un primer momento la respuesta real fue negativa. El rumor de que se aprobaría, como se hizo finalmente, hizo que varios pueblos se reunieran “en forma de concejo” y nombrasen dos procuradores en Madrid para vigilar sus intereses¹⁵¹¹. Como señala Stephen P. Frank en su libro sobre la criminalidad en el campo ruso tras la emancipación de los siervos, al estudiar los motines visibles solemos olvidar que por cada uno de ellos hay centenares más pequeños, y que “lengthy efforts at resolution in other forums frequently preceded such conflicts. Peasants flood courts and administrative bodies alike with petitions and suits asking, in effect, for official support of their vision of justice”¹⁵¹².

En cuanto al motín en sí mismo, no fue improvisado: se había anunciado días anteriores y hubo una conspiración para juntar a los vecinos en diversos puntos, con la participación de élites locales y

¹⁵⁰⁷ TARROW, S. (2012), pp. 50-51.

¹⁵⁰⁸ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), p. 76-82. Sobre este tipo de actos festivos, antecedentes de las manifestaciones, vease VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 161.

¹⁵⁰⁹ Aunque es cierto que realizaron algún motín, como el de Marín contra los vicarios del Corpo Santo, encargados de regular la pesca. DUBERT, I. (2016), pp. 25-31.

¹⁵¹⁰ En concreto, un incendio en 1791, con la fábrica todavía en construcción, un alboroto en una asamblea en 1792 y tres levantamientos. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. (1994), p. 63-64, 66.

¹⁵¹¹ GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. (1994), p. 16-17.

¹⁵¹² FRANK, S. P. (1999), pp. 10-11.

declaraciones como “viva la libertad que nosotros ya no queremos más justicia ni juez en nuestro pueblo” que, de producirse un siglo después, catalogaríamos como de campesinado politizado¹⁵¹³. Por otra parte, pone de manifiesto una modalidad de castigo especialmente gravosa. Tras los sucesos de Sargadelos no hubo ejecuciones (en el propio asalto murió un amotinado y hubo seis heridos), pero se obligó a pagar los daños a unos 400 individuos, y “a muchos ni el embargo de todos los bienes les puso en paz” con su deuda¹⁵¹⁴.

A finales de la Restauración en Galicia ya se conocía ampliamente el repertorio pacífico, una implantación en la que seguramente fue crucial el sufragio universal masculino, integrando a las clases populares en la comunidad política. En ciudades y villas, su difusión tiene que ver con la entrada en el panorama sociopolítico del obrerismo organizado, que sentó las bases para la realización de acciones colectivas. A inicios del siglo XX, la huelga se había asentado como medio de negociación colectiva en la industria gallega. La manifestación, su correlato en la calle, se empleó con profusión como manera de profusión y protesta, si bien también de celebración; la fecha del primero de mayo motivaba año tras año que los obreros ocupasen el espacio público con sus marchas, eslóganes, cantos y banderas.

Su introducción y popularización entre la población rural debe mucho, probablemente, a la difusión del asociacionismo y a los sucesos movilizadores de acción colectiva. Así, el conflicto de la traíña en el cambio de siglo, del XIX al XX, no solo conllevó la creación de sociedades de marineros, sino un ciclo de movilización y protesta, con alguna acción violenta pero sobre todo con una movilización masiva. En verano de 1900 vemos manifestaciones contra las traíñas en Moaña, Aldán, Bueu, Marín, Baiona, Vigo, Fisterra, etcétera. Estos actos deben entenderse como intentos de presión a las autoridades, con las que en paralelo se buscaba el diálogo, y de comunicación con la opinión pública. Una comisión se reunió con los diputados al Congreso de las costas de Galicia, se expiden cartas y telegramas al ministerio, se busca el apoyo de la prensa y de organizaciones y grupos influyentes y, aprovechando la visita de los reyes por las Rías Baixas, se organizaron manifestaciones masivas¹⁵¹⁵.

En el conjunto de la Galicia rural, la introducción de este repertorio pacífico conecta con el agrarismo, en tanto que modo de introducción en la participación política de grandes masas de población. En 1916, una manifestación de vecinos de las diversas parroquias del municipio pontevedrés de Cerdedo se dirigió a la capital provincial para protestar ante el Gobernador Civil por los “inauditos atropellos” en las elecciones (los manifestantes, partidarios de los candidatos agraristas, reclamaban una repetición de los comicios); poco después visitaron al delegado gubernamental vecinos de Forcarei con reclamaciones semejantes¹⁵¹⁶.

En 1920, poco antes de las elecciones, el Gobernador Civil de Ourense recibió a una “nutrida representación de campesinos” de Coles para protestar contra la junta del censo local¹⁵¹⁷. Pocos días después, pasados los comicios, una “nutrida manifestación” de unos 500 campesinos del municipio de Vilamarín desfiló por las calles de la capital provincial para protestar contra maniobras fraudulentas de los “caciques” en contra de los candidatos agrarios. Vitorearon al gobernador civil y al presidente de la audiencia y enviaron una delegación a la prensa para explicar sus reclamaciones¹⁵¹⁸.

¹⁵¹³ GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. (1994), p. 66-68.

¹⁵¹⁴ GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. (1994), p. 97.

¹⁵¹⁵ SANTOS CASTROVIEJO, Iago, NORES SOLIÑO, Antonio (2005), pp. 49, 58-77.

¹⁵¹⁶ SOLLA, C. (2011), pp. 26-27, 48-49.

¹⁵¹⁷ *La Región*, 03-02-1920, p. 2.

¹⁵¹⁸ *La Región*, 10-02-1920, p. 2.

Ahora bien, las manifestaciones podían derivar en disturbios, y las multitudes podían iniciar protestas improvisadas ante un hecho inmediato, y el hecho podía derivar en enfrentamientos contra las autoridades. La protesta contra el embargo de un vecino, un intento de impedir que un carro cargado de mercancía abandonase un mercado, un enfrentamiento ideológico o personal que escalaba, eran motivo de intervención de las fuerzas policiales o militares, intervención que a veces derivaba en muertes y heridas en alguno de los bandos o en ambos.

Hay acciones reactivas contra políticas del Estado o las élites locales que no tienen que ver con la fiscalidad o bienes materiales. En Salcedo, una parroquia rural de Pontevedra, un motín para impedir el embargo a un vecino fue reprimido a tiros por una docena de guardias civiles, con dos hombres y una mujer muertos y heridos entre amotinados y guardias¹⁵¹⁹. En 1909, en la parroquia de Oseira, del municipio ourensano de Cea, una multitud de vecinos se amotinó para impedir la retirada del baldaquino de un monasterio local, ordenada por la autoridad eclesiástica. Una sección de la Guardia Civil enviada para proteger a los obreros abrió fuego y mató a nueve de los presentes, con un número indeterminado de heridos, siete varones y dos mujeres¹⁵²⁰. Un motín en la parroquia carballesa de Sofán, disuelto por la Guardia Civil con el resultado de cuatro mujeres fallecidas y varios heridos se produjo por la ubicación del cementerio parroquial en plena epidemia de gripe española de 1918. Las autoridades sanitarias y municipales decidieron fundar uno nuevo, más lejano y perteneciente a la familia Regueiro, “símbolos do caciquismo en Carballo”. Los vecinos y el párroco preferían ampliar el existente y se empezaron a celebrar entierros nocturnos y clandestinos. El tiroteo se produjo durante la comitiva fúnebre de un niño¹⁵²¹.

Si comparamos las muertes en motines con el total de homicidios que se cometían en Galicia, vemos que son un porcentaje muy pequeño, pero su peso simbólico y emocional va más allá de las matemáticas. Provocaban otras manifestaciones o disturbios de protesta¹⁵²², salían en los diarios, llegaban al parlamento, suscitaban debate político, condicionaban comportamientos y actitudes, generaron monumentos, obras de arte e interpretaciones políticas¹⁵²³. Guillarei, por ejemplo se convirtió, bien que brevemente, en un lugar de memoria; en 1932 se irguió un monumento financiado con aportaciones de las asociaciones agrarias, y para asistir a la inauguración “se desprazaron centos de persoas en autobuses dende diferentes lugares de Vigo e Lavadores”¹⁵²⁴.

En cuanto a las causas más frecuentes de los motines, un tema recurrente y del que ya hemos visto ejemplos es la presión fiscal, al alza en la Restauración¹⁵²⁵. La bestia negra de las poblaciones es el impuesto de Consumos, un arbitrio con el que se cargaba a productos de primera necesidad y que además se recaudaba a nivel local, con lo que la protesta podía dirigirse contra individuos cercanos y con nombre¹⁵²⁶. En las poblaciones pequeñas el tributo se repartía entre los vecinos, provocando las consabidas luchas por la distribución de las cuotas para beneficiar a los que hacían el reparto y los afines¹⁵²⁷.

¹⁵¹⁹ ÁLVAREZ CASTRO, X. (2018), p. 7.

¹⁵²⁰ CABO VILLAVERDE, M., RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2019), pp. 244-245.

¹⁵²¹ FRAGA RODRÍGUEZ, X. (2019), pp. 47-49.

¹⁵²² CABO VILLAVERDE, M., RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2019), p. 246.

¹⁵²³ CAPELÁN REI, A. (2019).

¹⁵²⁴ VÁZQUEZ ACUÑA, B. (2014), p. 70.

¹⁵²⁵ Sobre su incremento sobre el campo, BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), p. 63.

¹⁵²⁶ Sobre su imposición a partir de 1845, y ejemplos de ataques a fielatos durante el Bienio Progresista (que llegó a aborlirlo parcialmente), MORENO LÁZARO, J. (2003), pp. 112-113, 121-125.

¹⁵²⁷ Santiago Álvarez afirma que a la hora de debatir sobre el reparto de Consumos en una gestora municipal constituida en Ourense durante la Segunda República hubo una discusión sobre adoptar una “actitud de revancha” y perjudicar a “quienes votaban a la derecha tradicionalmente”, que finalmente no se llevó a cabo. ÁLVAREZ GÓMEZ, S. (1985), pp. 160-161.

En las poblaciones más grandes y concentradas, el tributo solía recaudarse a través de una serie de puestos que vigilaban los principales accesos y en el que los agentes, bien directamente del municipio o de un arrendatario que hubiese adquirido el derecho a cobrarlo, hacían pagar a los que introducían las materias. Estos eran objeto de particulares odios¹⁵²⁸, y perjudicaban no solo a los consumidores, sino a los vendedores que introducían los alimentos en la ciudad.

En general, la oposición a los Consumos se hacía a través del fraude, que, como veremos en el capítulo 13.5, era una auténtica industria paralela, y estallidos y peleas callejeras. Pero en otras ocasiones, después de cambios en las tasas o de una actuación particularmente brutal de los cobradores, estallaban motines. En julio de 1892, en Pontevedra, un anciano murió de un bayonetazo y se registraron varios heridos después de que las tropas dispararan contra un motín contra la imposición de un nuevo arbitrio sobre la leche, en el que se saquearon fielatos¹⁵²⁹.

Veamos un caso en detalle. El descontento contra el nuevo arrendatario del arbitrio en A Coruña y, sobre todo, el aumento de la tasa con la que se gravaban productos como las frutas, hortalizas y carbón mineral, parece estar detrás del motín en la ciudad el domingo 5 de septiembre de 1886. El año anterior había habido ya motines contra los Consumos en otra partes de España¹⁵³⁰, y se habían producido otros incidentes en la ciudad. En febrero de ese año, un hombre había muerto en una pelea masiva entre carabineros, serenos y dependientes de consumos y paisanos¹⁵³¹; un empleado de consumos acabó en el hospital tras recibir un palo en la cabeza el 16 de julio, y el 29 de agosto se produjo una refriega “bastante empeñada” entre tres vecinos de Oza y varios dependientes del fielato de la estación, que acabó con tres heridos¹⁵³². El 4 de septiembre, víspera de los desórdenes, *La Voz de Galicia* informa de un nuevo incidente en el mismo puesto: los dependientes, al parecer “en completo estado de embriaguez”, arrojaron una cesta con fruta que una mujer traía para vender en la ciudad, iniciándose una disputa contra varias aldeanas. El diario pidió ese mismo día que se tomasen acciones contra los dependientes del puesto, dado que “son tantas las pendencies” ocasionadas por su “intemperancia”¹⁵³³.

Antes del domingo del motín se difundieron rumores de que habría piquetes para boicotear a los vendedores, por lo que se dispusieron varias parejas de la Guardia Civil en los alrededores de la ciudad. Un labrador de 40 años, Antonio Paradela, recibió golpes que provocaron su muerte, al parecer por parte de un cabo. Los guardias detuvieron a nueve hombres y a una mujer y los protegieron a golpes de filo de sable contra los que los querían liberar. Para cuando llegaron a la inspección de policía se había formado una muchedumbre, y, explica gráficamente un periodista contemporáneo, “comenzaron los silbidos, las amenazas, los mueras, las pedradas a las ventanas y peurtas de dicha oficina, las carreras”. Acudieron las autoridades y el Gobernador civil intentó disipar a la multitud con un discurso, sin mucho éxito. Por la tarde soltaron a la mayoría de los detenidos y hacia la noche la Guardia Civil a pie y caballo dispersó a la multitud.

Hacia la noche, un grupo de amotinados intentó asaltar la oficina del impuesto, y los asaltantes lograron penetrar, aunque no quemarla: los empleados dejaron a varios heridos a tiros, un guardia civil acabó en el hospital por una pedrada, y rompieron los cristales de la casa del alcalde. Dos niños de cinco y siete años resultaron heridos de bala.

¹⁵²⁸ El impuesto parece ser más odiado cuando lo llevaba un arrendatario. BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), pp. 62-74, 88-93.

¹⁵²⁹ ÁLVAREZ CASTRO, X. (2018), p. 6.

¹⁵³⁰ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p. 122.

¹⁵³¹ LV, 16-02-1886.

¹⁵³² LV, 18-07-1886, 31-08-1886.

¹⁵³³ LV, 04-09-1886.

Al día siguiente, por la mañana, los amotinados apedrearon la casa consistorial y hubo choques con las fuerzas del orden en el centro de la población, con al menos tres paisanos heridos a culatazos y golpes de bayoneta, militares contusos por pedradas y accidentes y un grupo que se lanzó al mar para escapar de una carga. Pero la mayor parte de la destrucción se realizó a partir del mediodía a las afueras, por parte de una multitud que recorrió los fielatos destrozándolos uno a uno. La casilla de Santa Lucía “fue despedazada y arrancados los hierros en que estaba empotrada”; en la del ferrocarril sacaron todo lo que había dentro sin dejar “ni un papel, ni un mueble” y les prendieron fuego en la calle; la de la cuesta de la estación la echaron, precisamente, cuesta abajo; ardieron las de la Gaiteira, Nelle, Santa Margarita, las de Riazor; cuando llegaron a la de la plaza de Ourense ya no les quedaba petróleo, así que la destrozaron y arrojaron al mar.

Echaron combustible en un almacén de la Puerta de la Torre de Arriba, pero no se prendió fuego porque se corrió la voz de que hubiese perjudicado a propiedades particulares, así que se limitaron a quemar la casilla de ese punto. En el asalto a la de Juana de Vega, que también ardió, algunos “compadecieron” de un zapatero que trabajaba en un taller anexa y “sacaron el material del interior de la caseta”. Se disolvieron por la tarde, “más por virtud de la lluvia que por la presencia de la caballería”. Se declaró el estado de guerra¹⁵³⁴.

El martes hubo escaso suministro hubo pocos vendedores en el mercado: en el lugar de Eirís, en el municipio anexo de Oza un piquete detuvo y asaltó el coche de viajeros (cuyos viajeros, que no tenían noticia de los disturbios, se unieron al grito de “¡viva Eirís [una parroquia del extrarradio]! ¡abajo los consumos!, a fin de evitar escenas violentas”, y, aunque no hizo daño a los pasajeros, desparramó la leche y hortalizas. A un teniente de Artillería le dispararon e hirió a un amotinado de un sablazo, hubo nuevas detenciones y cargas... Y, en torno a las cuatro de la tarde, el alcalde provocó un bando suprimiendo los aumentos en la tasa. Probablemente fue clave en la consecución de los objetivos que la acción colectiva fuese sostenida y organizada (se habla de santo y seña entre los amotinados) y que ceder no fuese muy oneroso para las autoridades: el propio bando del alcalde afirma que el gravamen era “ciertamente insignificante”. Las autoridades, por su parte, no optaron por una represión a ultranza, aunque hubo una víctima mortal que, posiblemente, fue en detrimento de sus intereses y ayudó a movilizar la protesta¹⁵³⁵. Podemos encontrar más ejemplos de disturbios de este tipo durante la Restauración¹⁵³⁶.

En la mayoría de los municipios rurales, los Consumos no se pagaban en fielatos, sino que el municipio repartía la carga fiscal entre los vecinos. Por tanto, en ellos no vemos asaltos a oficinas de cobro, aunque sí manifestaciones en protesta contra el arbitrio o, en un esquema que se repite en varios incidentes graves, choques entre una comunidad vecinal y guardias civiles que acompañan a agentes de la recaudación. El 12 de octubre de 1916, un grupo de guardias abrió fuego contra una multitud que intentó evitar un embargo por impago de Consumos al alcalde de barrio de Nebra (Porto do Son, A Coruña), lo que dejó cuatro mujeres y un hombre muerto entre los amotinados¹⁵³⁷.

La oposición a las imposiciones fiscales, como en los otros casos mencionados, solo era violenta en ocasiones excepcionales, y, repitamos, la población civil tenía capacidad para realizar acciones colectivas que no pasaban por el motín. En Cerdedo hubo protestas pacíficas contra el reparto de

¹⁵³⁴ LV, 07-09-1886, pp. 1-2, 08-09-1886, pp. 1-2.

¹⁵³⁵ Posiblemente fueran dos. En noviembre falleció un tal José Veiga Collazo, al que habían tenido que amputar una pierna a causa de los sucesos del motín. LV, 17/11/1886.

¹⁵³⁶ HERVÉS SAYAR, H. et al. (1997), pp. 174-175, 182-183. En la Semana Trágica barcelonesa, aunque el desencadenante fuese el embarque de reclutas a la guerra de África, “las iras de la población, cada vez más enemiga de las quintas, se dirigieron fundamentalmente contra las casetas del consumo y la iglesia”. MARTÍN CORRALES, E. (2002), p. 194.

¹⁵³⁷ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Eliseo (2019), p. 29.

Consumos, reuniendo la cuota que correspondía al Estado sin pagar la parte municipal¹⁵³⁸. En Porto do Son, antes de la matanza de Nebra en 1916, había habido un motín fiscal en 1897, una manifestación en 1905 pidiendo el abaratamiento de los suministros y una delegación al año siguiente al Gobernador para quejarse del reparto de Consumos; dos manifestaciones contra los arbitrios en 1910 y un disturbio en 1912 que obligó a suspender al cobranza de Consumos y que el alcalde accediera a que la Guardia Civil no acompañara a los recaudadores para evitar incidentes. Además se registraron otras manifestaciones y protestas en 1916¹⁵³⁹.

En épocas de escasez y aumento del precio de los alimentos se producían disturbios en las sociedades tradicionales y europeas. Es muy frecuente que en los trabajos sobre ellos en lengua hispana se emplee el término “motín de subsistencias”, que es acaído y evocativo, pero algo engañoso en tanto que puede llevar a pensar que siguen siempre un mismo patrón, mientras que hay incidentes que son poco más que saqueos y otros en los que se reivindica un precio justo, algunos se producen espontáneamente y en otros hay planificación, a veces se dirigen hacia las autoridades y otras no.

Pero siguiendo a E. P. Thompson en *Costumbres en común*, muchos de los motines que estudió para el siglo XVIII tenían una serie de rasgos en común. La más incontrovertible y crucial, en nuestra opinión, es que, no serían una respuesta “obvia” o determinista ante el hambre, sino que se regirían por expectativas culturales¹⁵⁴⁰. Surgían, por tanto, por el “consenso” y “un modelo de acción heredado”. Estaban ligados a la idea de economía moral que legitimaba rebelarse cuando se rompían ciertas reglas mínimas de comercio ético, por ejemplo guardando o exportando grano en tiempos de escasez para aumentar su precio. Esto determinaba que “en general” tenían el consenso de la comunidad. Se promovían por parte de los que tenían poco poder de otro tipo, y en muchos, no todos, había respeto por la legalidad: por ejemplo, un grupo de saqueadores se repartían una partida de grano dejándole al propietario un precio considerado justo, e incluso en ocasiones se castigaba a los que iban más allá y hacían robos particulares¹⁵⁴¹.

Es difícil definir si en Galicia existía un “modelo de acción heredado” en los motines de subsistencias, puesto que definir este plantea dificultades, pero sí es cierto que existía una tradición de motines en épocas de crisis con características recurrentes. Se producían en villas, ciudades, ferias y puertos, donde el grano se compraba, vendía, almacenaba y exportaba, y los protagonizaba población que debía acudir al mercado para hacerse con este. Muchas veces estaban dirigidos a partidas de grano que salían del mercado local.

En 1709, en plena guerra de Sucesión y tras un verano lluvioso, se produjo un motín en agosto en Santiago, y también en villas costeras. El 10 de junio hubo un tumulto en A Coruña, porque los amotinados se oponían a “la extracción de granos y harinas que hacían algunos extranjeros” y el proveedor del ejército; el cabildo municipal realizó exacciones en las paneras y pidió la suspensión de la saca. En Caión, una localidad costera próxima y mucho más pequeña, los pobladores se alborotaron dos días más tarde tras tener noticia de que el administrador de la condesa de Graxal, titular de la jurisdicción, había vendido mil ferrados de trigo al mismo proveedor, “clamando al cielo que por el tanto se les a de vender a ellos” y usar la fuerza.

Se paralizó la operación, y el asentista vendió parte en el mercado autóctono y parte a la ciudad de A Coruña; en agosto hubo nuevas concesiones de las autoridades para mantener la calma en la urbe. Las autoridades locales, en este caso, estaban en el mismo bando que los consumidores, fuese por

¹⁵³⁸ SOLLA, C. (2011), pp. 62-63, 182.

¹⁵³⁹ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Eliseo (2019), pp. 22-28.

¹⁵⁴⁰ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 215, 302.

¹⁵⁴¹ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 216, 262, 270, 300, 332-334, 370-371.

una aceptación de los términos de la economía moral, por el temor a disturbios o porque ellos también compraban grano, y regularon el precio, algo que también realizó ese año el Consejo de Castilla¹⁵⁴². Hay que recalcar también que esta fue una crisis dura, en la que la mortalidad se multiplicó por cuatro o cinco en algunos puntos¹⁵⁴³.

Seguimos encontrando motines de subsistencias en el siglo XIX. Los hubo en 1835-1836 en las costas pontevedresas, en la que la escasez vino dada, como es norma en estos casos, por las malas cosechas y la demanda exterior, en este caso sobre todo hacia Portugal con motivo de la guerra. Así, hubo protestas en Cangas (cuyo alcalde recibía “infinitos” anónimos con amenazas de asesinato), cuyos vecinos saquearon maíz que iba a exportar una comerciante, y en otro incidente apedrearon carros que iban hacia Portugal; en Arousa, donde hubo pasquines, tiros y amenazas contra los comerciantes catalanes; Vilaxoán, Caldas y Padrón, donde integrantes de la Milicia Nacional se hicieron con maíz destinado a la exportación o a ferias; Tui, donde se produjeron motines contra un comerciante portugués al que le permitieron sacar una partida del país¹⁵⁴⁴. Aquí volvemos a Thompson, señalaba que entre las clases populares inglesas había mayores quejas cuando se exportaba grano a extranjeros¹⁵⁴⁵.

En 1847 se producen motines de subsistencias en España, y en Galicia “the disturbances were at their most intense” en diversas villas y ciudades: Vigo, Ponte Sampaio, Pontevedra, Santiago y A Coruña, donde se produjeron varios muertos por disparos de las tropas¹⁵⁴⁶. En el de Santiago, según Barreiro Fernández, intervinieron carlistas¹⁵⁴⁷. Debemos volver de nuevo a la racionalidad de los motines. En las crisis de subsistencias, se producen cuando la gente sabe que piensa que hay alimentos en la localidad que podrían ir para el mercado local y que van a salir de este, no cuando no hay alimentos, por mucha hambre que se pase. En la crisis de subsistencias de 1709-1710, los meses más duros fueron el invierno del segundo año, y “no hubo sin embargo agitaciones populares”¹⁵⁴⁸. Hubo disturbios en Santiago en la crisis de la década de 1850¹⁵⁴⁹, pero en el bienio progresista, repleto de protestas anti fiscales y motines por el precio del pan en toda España, Galicia permanece casi totalmente tranquila, pese, o quizás debido a, la fuerte crisis de subsistencias que hemos visto en el capítulo 5 y la epidemia de cólera¹⁵⁵⁰. A partir de la década de 1860, señala González Calleja, dejan de hacerse crónicos en España¹⁵⁵¹, aunque, como vemos en este trabajo, encontramos protestas por subsistencias en la Galicia de la Segunda República o de la posguerra.

Al mismo tiempo, la elevación del precio del grano no tenía por qué deberse a grandes especuladores, sino a labradores pequeños y medianos. Como hemos visto, estos motines son

¹⁵⁴² LÓPEZ DÍAZ, M. (2009), pp. 422-427, 435.

¹⁵⁴³ LÓPEZ DÍAZ, M. (2009), p. 431.

¹⁵⁴⁴ TABOADA, P. (1978).

¹⁵⁴⁵ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 243-245.

¹⁵⁴⁶ DÍAZ MARÍN, P. (2007), p. 281. Sobre el comportamiento del precio del trigo en Galicia, pp. 270-272.

¹⁵⁴⁷ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), p. 187.

¹⁵⁴⁸ LÓPEZ DÍAZ, M. (2009), p. 437.

¹⁵⁴⁹ Según FERNÁNDEZ CASANOVA, C. (2005), p. 128. Hubo un condenado a muerte según MORENO LÁZARO, J. (2003), p. 125.

¹⁵⁵⁰ Así, en el alzamiento de 1854, en Castilla y León se unieron no solo ciudades, sino también pueblos, “la turba incendió los fielatos” y hubo persecuciones contra comerciantes de grano y administradores de Hacienda. La mayoría de juntas revolucionarias sancionaron la abolición de los consumos, aunque duró poco excepto en Salamanca, hasta que cuatro compañías del ejército recuperaron el orden. En las navidades de 1854-1855 vemos motines por el precio del pan en Castilla, Cataluña, Valencia, Extremadura y Andalucía. A partir de junio de 1856 empezaron revueltas en tierra de campos, con motines por todo el país (entre ellos Vigo y Pontevedra, pero entre un centenar de localidades) y una fuerte represión que acabó propiciando la sustitución de O'Donnell por Narváez. MORENO LÁZARO, J. (2003), pp. 121-125, 128-135.

¹⁵⁵¹ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p. 538.

protestas de los consumidores de grano en lugares en los que hay una cierta concentración de población, no de las comunidades productoras; en las parroquias rurales había otros mecanismos de redistribución y conflicto en tiempos de escasez. Un escrito enviado por el alcalde de Negreira al Gobernador Civil, en 1916, achaca la escasez de grano no a su falta física, sino a los altos precios que se ofrecen, y describe cómo estos generaban beneficios para los labradores:

“Viene observándose de algún tiempo a la fecha aumento en los precios acentuándose en el maíz por el bastante número de arrieros o traficantes que se dedican a su adquisición, trasladándolo en caballerías hacia el partido de Carballo. Esto produce como queda dicho elevación en el precio, pues se cotizó a 20 reales ferrado y aún más, que la clase pobre y obrera con mucha dificultad puede soportar. El labrador o cosechero ante la ventaja indicada procura activar la venta de su producto limitándose a dejar el subsistente que calcula preciso para sí y sus familiares, sin tener en cuenta el gran número de familias que se ven obligadas a la compra”.

Para evitarlo, el alcalde informa de que determinó que en la feria de la villa el pueblo comprase hasta una hora marcada, y después entrasen a pujar los traficantes de grano. Pero los vendedores se negaron a vender hasta que los arrieros fijasen un precio; se fomó un tumulto que, dice el regidor, pudo detener con la ayuda de vecinos, pero advierte de nuevos desórdenes “formándose dos grupos, el uno de la clase pobre y obrera y el otro de vendedores y traficantes en la referida especie maíz, amenazando estos últimos que harían la venta-compra a domicilio y que dejarían de traerlo a la feria”¹⁵⁵².

El alcalde de Negreira escribía en el marco del aumento del precio de los alimentos en la Primera Guerra Mundial. A estas alturas se había incorporado un nuevo repertorio en ciudades y villas, la huelga obrera. En marzo de 1918 hubo un ciclo de protestas en los municipios de Neda y Narón, en la inmediata periferia de Ferrol. El día 9, un sábado, las trabajadoras del textil protestaron contra comercios donde entendían que se acaparaba harina, y fueron dispersadas a tiros por empleados armados, que dejaron a dos mujeres heridas graves. Dos días después, amotinados de la zona periurbana, con especial preeminencia de las mujeres, cortaron el acceso a la ciudad y, después de pedir una audiencia con el alcalde, parte de los amotinados intentó asaltar un comercio.

Acudieron las fuerzas de seguridad y mataron a tiros a un niño y a un joven de 17 años; Ferrol quedó militarizado y los trabajadores del arsenal y otras industrias se unieron a la huelga, con manifestaciones masivas. El día 13, soldados y guardias civiles dispersaron a una multitud que se había congregado en torno a la vivienda del alcalde de Narón, dejando cinco muertos y decenas de heridos¹⁵⁵³. Es relevante que estos motines, aunque no consiguiesen su objetivo directo, sí que posiblemente aumentarían la tensión y espolearían a tomar medidas. En Ribadavia en 1920 hubo incidentes por el paso de un carro con harinas que salía de la villa, reprimidos por la Guardia Civil; “en vista de la excitación popular” se reunió la Junta de Subsistencias para tratar de bajar el precio del producto¹⁵⁵⁴.

La presencia de mujeres es muy importante en los motines gallegos, un tema que trata con detalle Pernas Oroza en un artículo de próxima publicación¹⁵⁵⁵. Las encontramos en variantes tradicionales de motín en los espacios europeos, según Thompson, más que en las manifestaciones obreras de la segunda mitad del siglo XIX. Hay motivos prosaicos: por ejemplo, eran buena parte de las participantes en los mercados en torno a los que estallaban motines de subsistencia, mientras que

¹⁵⁵² RODRÍGUEZ GÓMEZ, J. (2014), p. 36.

¹⁵⁵³ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, F. (2019), pp. 35-38.

¹⁵⁵⁴ LR, 22-05-1920, p. 2.

¹⁵⁵⁵ PERNAS OROZA, Herminia: “Presenza feminina en actos revoltosos en violentos na Galicia do século XIX e comezos do XX”.

su presencia y relevancia entre el proletariado politizado sería menor¹⁵⁵⁶. Por otra parte, había reticencia a disparar contra mujeres y niños, con lo que situarlas ante policías y militares resultaba más seguro para todos; pero, como destaca Lucea Ayala, las mujeres estaban menos presentes en las conclusiones violentas de los motines y sufrían menos detenciones¹⁵⁵⁷.

El regionalismo y nacionalismo gallegos están ausentes en esta genealogía de la violencia, aunque hubo algunas acusaciones contra Solidaridad Gallega de realizar daños en entornos rurales¹⁵⁵⁸. En cuanto al agrarismo, el movimiento presentó un “casi unánime pacifismo”¹⁵⁵⁹, pese a la retórica extrema de algunos dirigentes. De hecho, según considera Cabo Villaverde, la mayor organización de los campesinos en sociedades agrarias pudo disminuir la violencia de conflictos en los que participaban las comunidades campesinas, al poder estructurar la acción y ofrecer interlocutores a las autoridades¹⁵⁶⁰, lo que supone una hipótesis interesante para un estudio comparativo de acciones colectivas como motines antifiscales en zonas rurales con y sin organización.

Las sociedades agrarias no eran ajenas a la coacción. Casi siempre estructuradas en base a la parroquia, no solo ejercieron presión sobre individuos externos a la colectividad sino también hacia los miembros disidentes de la parroquia y los *free riders*. Pero su recurso fue más bien el de las armas de los débiles, recuperando el término de Scott¹⁵⁶¹. La presión social, los daños o el incendio a las propiedades eran herramientas más empleadas que la violencia personal. La protesta campesina, según recuerdan González de Molina y Ortega Santos, tiene una “enorme plasticidad”, y pueden convivir formas de lucha individuales con un “amplio respaldo de la comunidad”¹⁵⁶².

La mayoría de la actividad de las sociedades oscilaba en cuestiones técnicas y económicas pragmáticas: mutuas de seguros, compras y comercialización en común, arbitraje, vigilancia, organización de la sociabilidad, etcétera. Aunque el nivel de politización aumentó en la Segunda República, la ideologización de derechas¹⁵⁶³ o izquierdas de la mayoría de las sociedades era bajo, y se movían por objetivos pragmáticos.

La principal cuestión político-reivindicativa y proclive de generar violencia fuera del circuito de la parroquia, ya que chocaba con los intereses de las clases tradicionalmente propietarias, era la redención foral¹⁵⁶⁴. Puntualmente, dejó incidentes violentos. En 1922 una mujer embarazada y dos hombres, todos ellos vecinos de la parroquia de Guillarei en el municipio pontevedrés de Tui, murieron a manos de la Guardia Civil cuando intentaban impedir el embargo de un labrador local por no haber pagado la renta foral. Pero es el único caso de acción colectiva con resultado de muerte en toda la Restauración por esta cuestión, que conozcamos, aunque haya otros casos de

¹⁵⁵⁶ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 265, 363-365, 379.

¹⁵⁵⁷ LUCEA AYALA, V. (2002), pp. 193, 202. Otro ejemplo de la participación de mujeres en motines, pensando que sería menos probable que las atacasen las fuerzas del orden, en actos contra la colectivización soviética. VIOLA, L. (2013), p. 143.

¹⁵⁵⁸ CABO VILLAVERDE, M. (2006-B), pp. 252-253.

¹⁵⁵⁹ CABO VILLAVERDE, M. (2002), p. 164.

¹⁵⁶⁰ Esta hipótesis, junto con un repaso exhaustivo de la violencia real y verbal del movimiento agrarista, en CABO VILLAVERDE, Miguel: “A violencia na retórica e na realidade do movemento agrarista”, de próxima publicación en el libro colectivo *A xustiza pola man*.

¹⁵⁶¹ CABO VILLAVERDE, M. (1998), pp. 47-48.

¹⁵⁶² GONZÁLEZ DE MOLINA, M., ORTEGA SANTOS, A. (2000), pp. 111, 113.

¹⁵⁶³ Cabo Villaverde y Míguez Macho achacan la falta de éxito del catolicismo social gallego al férreo control de la jerarquía y la preponderancia de la religión sobre otros aspectos. MIGUEZ MACHO, Antonio, CABO VILLAVERDE, Miguel (2010), p. 244.

¹⁵⁶⁴ CABO VILLAVERDE, M. (1998), pp. 53-58.

coacciones¹⁵⁶⁵. En conjunto, la cuestión foral se solventó sin violencia revolucionaria, con acuerdos a nivel local y presión sobre los rentistas¹⁵⁶⁶.

Ya a inicios del siglo XIX, muchos vecinos y comunidades aprovecharon la crisis del régimen señorial para intentar impagos o al menos disminuciones de los foros y de otras cargas, en especial en el noroeste ourensano y sur de Lugo. Pero esta conflictividad se expresó en los tribunales, y los campesinos, más que a la lucha abierta, apelaron a tácticas que encajaban dentro de la lógica de la ley: complicar el contrato foral, renegociaciones de las condiciones, apelaciones a tribunales superiores, querellas para dilatar los pleitos o fingir desconocimiento de las obligaciones. Tampoco fue común la intervención militar o la represión carcelaria para reprimirlos, ni la violencia directa, pese al famoso caso en el que el secretario de Salvaterra de Miño y sus hijos mataron brutalmente a un agrarista¹⁵⁶⁷.

En conjunto, las reivindicaciones del agro gallego se llevaron en esta época con un nivel de violencia que parece inferior al de las zonas españolas en las que abundaba el proletariado agrícola (que nunca dominó en las sociedades agrarias gallegas).

Es también preciso señalar que la conflictividad entre comunidades campesinas (en base, casi siempre, a aprovechamientos de recursos naturales como montes o aguas) tampoco es más que puntualmente violenta, aunque haya casos en los que se produzcan enfrentamientos¹⁵⁶⁸. Esto ocurrirá durante todo nuestro periodo de estudio. En 1936 hubo un tiroteo entre jóvenes de los pueblos de Arcos y Brandela, de los municipios de Sandiáns y Xunqueira de Ambia “siendo el móvil, diferencias surgidas por el aprovechamiento forestal en montes del Estado [probablemente comunales o al menos tratados como tales] que llevan límites”¹⁵⁶⁹; ese mismo año, una pelea entre miembros de dos parroquias de Becerreá por una roza en un monte comunal dejó cinco heridos¹⁵⁷⁰. Las disputas entre las comunidades podían venir de muy antiguo, y en algún caso hay incluso una interpretación mitológica de estas, como en el caso de las aldeas ourensanas de Moialde y Pousada¹⁵⁷¹. Por el contrario, y por los motivos ya expuestos en el capítulo 5, está ausente la conflictividad violenta o criminal ligada a la privatización de los comunales que tan importante resulta en otros puntos¹⁵⁷².

No encontramos ningún muerto entre choques entre comunidades movilizados por la explotación de un recurso concreto, y los sucesos son bastante escasos. Como estudió Velasco Souto, este tipo de conflictos ya se daban en la primera mitad del siglo XIX y, aunque hubo episodios de violencia puntual, muchos más se pelearon en los tribunales, en los “innumeráveis preitos” intercomunitarios

¹⁵⁶⁵ Ejemplos de amenazas contra un párroco y vecinos que no querían unirse a una sociedad agraria, ligados al parecer a la cuestión foral, en LR, 12-11-1920, pp. 1-2, 25-11-1920, p. 1.

¹⁵⁶⁶ CABO VILLAVARDE, M. (1998), p. 148.

¹⁵⁶⁷ VELASCO SOUTO, C. F. (1995), pp. 16-42, 113.

¹⁵⁶⁸ SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1992), p. 73.

¹⁵⁶⁹ FV, 29-03-1936, p. 6.

¹⁵⁷⁰ EP, 16-01-1936, p. 6.

¹⁵⁷¹ Ambos reclamaban la posesión de un monte llamado Andamil, como comunal, y contaban la historia de dos hermanas, antecesoras de ambos pueblos, que se disputaron el monte tras tener que abandonar su vivienda original por una invasión de hormigas. La prueba era llegar a cierto punto y tocar una campana. La de Pousada llegó primero porque la de Moialde se detuvo a lavar a su hijo o a su ropa. Según los del pueblo ganador de la carrera, esto se debía a que su antepasada era coja y su oponente se confió; los de Moialde no dicen nada de la cojera, simplemente su antecesora se detuvo porque era una buena madre. ALONSO GAYOSO, E. (2015), pp. 322-323.

¹⁵⁷² Para La Mancha, BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), p. 310. Para motines en Aragón en defensa de bienes de propios y comunales, para que no se vendan o que de ellos se beneficien foráneos, LUCEA AYALA, V. (2009), pp. 64-66.

conservados en el Archivo del Reino de Galicia¹⁵⁷³. La violencia de los más jóvenes y exaltados, seguramente, se desplegaría en las peleas parroquiales que ya hemos visto en el capítulo 7¹⁵⁷⁴.

Los motines gallegos dejan varios puntos a comentar. En primer lugar, parecen menos prevalentes que en otros puntos de la Península, y no tienen carácter insurreccional ni masivo. Llamarían mucho la atención en nuestros tiempos, pero en la Restauración tenían que competir con los sucesos del Sur y el Levante y la mayor atención que, por serlo, levantaban las grandes urbes, especialmente Barcelona y Madrid. Esta calma por contraste ha llevado a afirmaciones como la de González Calleja referida a que, en cuanto a violencia política, la España rural del Norte permaneció “totalmente inerte”¹⁵⁷⁵.

No fue totalmente, pero sí que podemos decir que Galicia estaba relativamente inerte en cuanto a violencia extrema. Un dato que nos parece significativo es que los asaltos a cárceles, reiterados por ejemplo en Castilla La Mancha¹⁵⁷⁶, son desconocidos en Galicia, o por lo menos lo suficientemente raros como para que no hayamos encontrado ningún caso. Y esto, recordemos el capítulo 3, con una dotación de fuerzas de seguridad sensiblemente inferior a la que le correspondía por población. La relativa falta de conflictividad rural ante otras zonas de España seguramente derive de la estructura de la propiedad y del mercado de trabajo. En Galicia no existían grandes masas dependientes del jornal de pocos empleadores, afectadas por el paro agrícola o la negociación conjunta de retribuciones. También hay que tener en cuenta la idoneidad de diferentes procesos agrícolas a ciertos tipos de repertorio. Las huelgas parecen más prevalentes en estas zonas en la que la mano de obra temporera era precisa en momentos concretos del año para recoger las cosechas, por ejemplo¹⁵⁷⁷.

Por otra parte, los manifestantes son poco violentos, siempre en términos relativos. En los motines rurales observados, las muertes son siempre de paisanos, nunca de fuerzas de seguridad. La Guardia Civil recibía pedradas, gritos y amenazas con palos, pero no balas. Aunque los guardias alegan en varios motines que les dispararon, nunca se registran heridos. Probablemente hubiese agentes muertos y lesionados en algún motín que no hemos estudiado, pero no era lo habitual.

A lo largo del siglo estudiado, se va creando un repertorio de actuación grupal y presión sobre el Estado a través de formas mayoritariamente pacíficas que no existía, o al menos no era tan frecuente, a mediados del XIX. Es cierto que seguimos encontrando motines, pero conviven con modos pacíficos de canalizar demandas o quejas grupales. Hablamos de la presentación de escritos, la manifestación y, por supuesto, la huelga. Si observamos el conjunto del periodo, estas formas de movilización son más comunes, si bien no más llamativas, que el recurso a la violencia, y se dan no solo entre el movimiento obrero organizado y con finalidad política, sino entre los campesinos y marineros y para cuestiones de muy diferente naturaleza.

Finalmente, hay un número relativamente elevado de mujeres entre las víctimas mortales, que podemos atribuir en parte a la alta proporción de protestas ligadas directamente a los precios de los

¹⁵⁷³ Los episodios violentos no responden a batallas campales: un grupo de vecinos de Sobradelo que incautó armado a los animales de Vilar de Gomareite que pastaban en un terreno compartido entre ambas comunidades en 1825; 1828 hubo otra pelea entre los vecinos de San Bernabeu da Graña y Avión en 1828 con uso de armas; posibles maltratos en otro caso en Allariz... Entre otros ejemplos. Velasco Souto, que estudió la serie documental, no menciona ningún homicidio. VELASCO SOUTO, C. F. (1995), pp. 66-77.

¹⁵⁷⁴ Por ejemplo, en los citados Moialde y Pousada se daban tanto conflictos por mujeres como por el monte. En el primer tipo de conflictos participaban preferente, pero no exclusivamente, los mozos (los hombres de Pousada ayudaron a sus jóvenes en una refriega con una tercera aldea). ALONSO GAYOSO, E. (2015), pp. 324-325.

¹⁵⁷⁵ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p. 543.

¹⁵⁷⁶ BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), pp. 121, 143, 145.

¹⁵⁷⁷ CRUZ, R. (2015), pp. 58-59.

suministros y los impuestos sobre estos, y en parte a la escasa violencia manifestada por los amotinados. Si estos buscasen el enfrentamiento con la Guardia Civil veríamos prevalencia de hombres empleando armas de fuego. Entre las abundantes bajas de la violencia sociopolítica de 1936, con enfrentamientos abiertos entre fuerzas de seguridad, izquierdistas y derechistas, solo encontramos hombres, como veremos en el capítulo 10.

8.5.1 ¿Por qué dispara el máuser? La frecuencia de la represión violenta y sus explicaciones

Cuantitativamente, lo excepcional es la violencia desatada, tanto entre los amotinados como entre los que los reprimen. En las comunicaciones del puesto de la Guardia Civil de Negreira entre 1903 y 1936, recopilados por Rodríguez Gómez, encontramos varios requerimientos para que impidan la celebración de mítines de sociedades agrarias, o para que vigilen el cumplimiento de imposiciones gubernamentales desagradables, de las que sería un ejemplo la petición de una pareja para “acompañar al Alcalde de barrio de este pueblo con el fin de cobrar los Arbitrios extraordinarios”¹⁵⁷⁸. En un plano políticamente menos conflictivo, pero también potencialmente violento, en numerosas ocasiones se pide a los guardias que vigilen fiestas, romerías, bailes y ferias, y en algunas, que directamente se impidan. Muchas de estas actuaciones podrían haber desencadenado motines, pero no ocurrieron.

¿Por qué en algunas ocasiones las circunstancias potencialmente desencadenantes acaban violentamente y en otras no? Si buscamos una regla universal que nos dé la respuesta, corremos el riesgo de quedar decepcionados. En cada disturbio hay un componente de azar, y la acción de una persona o un pequeño grupo de personas es determinante para que ocurra o no¹⁵⁷⁹. Lo mismo ocurre con su represión. Veamos el caso de la matanza de Oseira en la mañana del 22 de abril de 1909. La causa del incidente, la retirada del baldaquino del monasterio local, llevaba tiempo siendo objeto de disputa entre las autoridades eclesiásticas de la comunidad, y tres días antes un grupo había ocupado la iglesia del edificio. En la mañana de los hechos llegaron veintidós miembros de la Guardia Civil, los obreros encargados de retirar la pieza y el secretario del juzgado municipal, pero se congregaron unos trescientos vecinos, con lo que la expedición estaba en una inferioridad numérica, que no de armas, importante. Hubo dos negociaciones fracasadas con los congregados en el templo.

El oficial al mando de la fuerza ordenó un amago de carga que no consiguió despejar a la multitud. Los obreros le pidieron volver a Ourense, el responsable de la tropa los despachó a la ciudad con una escolta. Luego, los guardias almorzaron al mediodía, y, solo después, cuando los paisanos empezaron a acumular los andamios dispuestos ante la fachada del templo para quemarlos, escaló la situación. Los amotinados se negaron a hacerlo, supuestamente algunos tiradores situados en las torres del templo dispararon contra los guardias (aunque ninguno salió herido y no se confiscaron armas), los agentes dispararon al aire y entonces, cuando según señalan Cabo Villaverde y Rodríguez Lago, el incidente ya debería haber acabado “en pura lógica”, el teniente al mando ordenó descargas contra los paisanos, con el resultado ya señalado de siete muertos y una cantidad sin precisar de heridos¹⁵⁸⁰.

Sí que podemos plantearnos qué factores permitían que ocurriesen estos incidentes. Algunos de ellos residen en los mecanismos de actuación policial. Hasta la creación de la Guardia de Asalto, ya en tiempos de la República, no existían fuerzas antidisturbios especializadas en España. La Guardia Civil realizaba la mayor parte de las intervenciones en Galicia, y su *Cartilla*, que los agentes debían aprender de memoria, aconseja mesura pero firmeza. “Debe ser prudente, sin debilidad, firme sin

¹⁵⁷⁸ RODRÍGUEZ GÓMEZ, J. (2014), p. 33.

¹⁵⁷⁹ TOCH, H. (1993), p. 206.

¹⁵⁸⁰ CABO VILLAVERDE, M., RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2019), pp. 244-245.

violencia, y político sin bajeza”, dice su artículo quinto. El 18º afirma que las primeras armas del guardia son “la persuasión y la fuerza moral”. Pero cuando la palabra no baste o se vea atacado, manda recurrir a las físicas¹⁵⁸¹. Nos parece acertada la consideración de González Calleja sobre la España de la Restauración, a la que califica de “Estado en ocasiones brutal pero no policíaco”¹⁵⁸².

¿Eran las matanzas casos en los que guardias de a pie, ansiosos y con miedo, disparaban al azar y herían a alguien por error? Según un artículo referido a la Guardia Civil actual, “los agentes poco preparados o entrenados tienden a experimentar una cadena de reacciones de escalada de estrés (...) disminuyendo consecuentemente la pericia para empuñar un arma, disparar o adoptar la postura de fuego”¹⁵⁸³. Los números carecían de entrenamiento antidisturbios¹⁵⁸⁴. Relacionado con la escasez de personal que vemos en el capítulo dedicado a las fuerzas del orden, los guardias siempre estaban en inferioridad numérica.

En Sofán, solo estaban presentes cuatro guardias y un cabo, pero aquí tampoco podemos hablar de disparos hechos al azar: cinco hombres se las apañaron para matar a cuatro mujeres, una con una bayoneta, y herir a más personas, lo cual demuestra que dispararon de manera continuada. Los servicios de pequeño calado eran los más habituales y casi nunca eran tan violentos. Cada año había decenas de situaciones que ponían a un pequeño número de guardias (a menudo, solo una pareja) en situaciones potencialmente tumultuosas, pero solo se desencadena violencia letal en un pequeño número de ellas. En un motín de marineros en huelga ocurrido en 1914 en Cangas en el que se apedrearon las casas de los armadores locales, solo había tres guardias en toda la villa; aún así, según el alcalde, fue capaz de restablecer el orden¹⁵⁸⁵. En un pequeño motín en una feria de O Courel en 1935, un tiro al aire de un guardia civil en respuesta al lanzamiento de piedras por parte de un grupo de alborotadores causó “carreras, choques y algunas caídas, sembrándose el consiguiente pánico”¹⁵⁸⁶. Eran media docena de guardias, pero un aviso de que estaban dispuestos a emplear la violencia bastó para disolver al grupo.

Pero en la mayoría de los motines acabados en tiroteos los guardias, aunque en inferioridad numérica con respecto a los amotinados, van en grupos superiores a la decena, al mando de oficiales, que ordenan directamente hacer fuego. En Oseira, Salcedo y Nebra, los disparos se produjeron por parte de fuerzas comandadas por oficiales y formadas no por los números presentes en los municipios en los que ocurrieron los tiroteos, sino por columnas especiales enviadas en previsión de que ocurriesen incidentes, y tampoco eran pocos o sin liderazgo los que dispararon contra la multitud coruñesa en 1901 o contra los amotinados de Narón en 1918.

La persona clave es, por tanto, el máximo responsable de las fuerzas del orden, normalmente oficiales de la Guardia Civil. Más allá de sus capacidades personales, no contaban con un entrenamiento en habilidades negociadoras, y la mentalidad que transpira el reglamento es la de no retroceder en el mantenimiento del orden. Si el oficial al mando de la fuerza no sabía desescalar la

¹⁵⁸¹ En términos teóricos, a la hora de gestionar las protestas en esta época predominaba una visión de prioridad del principio de autoridad sobre los derechos ciudadanos; el control, al igual que en la mayoría de los países de esta época, se basaba en “la doctrina de la escalada de fuerza, con fuerte presencia policial-militar, la imposición de una ley restrictiva, castigador e indiscriminado en la intervención”, frente a un modelo más blando o negociador. Sin embargo, como vemos en los ejemplos de este capítulo, no se trata de absolutos. CRUZ, R. (2015), pp. 23-24.

¹⁵⁸² GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), p. 52.

¹⁵⁸³ RIZO GÓMEZ, R. (2002), pp. 107-108.

¹⁵⁸⁴ LÓPEZ CORRAL, M. (2009), p. 75.

¹⁵⁸⁵ SANTOS CASTROVIEJO, I., NORES SOLIÑO, A. (2005), pp. 417-418.

¹⁵⁸⁶ FV, 20-10-1935, p. 11.

situación, o no quería hacerlo más que a través de órdenes que no conseguían efecto, recurría a la fuerza.

Según Toch, en los Estados Unidos del siglo XX, la violencia policial se concentra en una porción de los agentes, apoyados por una cultura de corporativismo¹⁵⁸⁷. Gumersindo Salinas, el teniente segundo al mando de la fuerza de Oseira, era conocido por su “carácter arrebatado e impulsivo”, según la prensa liberal, y ya había protagonizado incidentes en un carnaval en Vigo y en el transcurso de un embargo en Verín, que por lo que sabemos no afectaron a su carrera profesional; por otra parte, fue eximido de toda responsabilidad por su actuación¹⁵⁸⁸. Por otra parte, las muertes en Narón en 1918 llevaron a la dimisión del jefe de la guardia municipal y del alcalde¹⁵⁸⁹. El militar Miguel Cuervo, implicado en la matanza de Sobredo, lo encontramos disparando contra obreros que perseguían a un esquirolo en 1936 (mató a un viandante)¹⁵⁹⁰. Es aventurado decir que estas acciones quedaban impunes, ya que tenían un coste político, pero sí que es cierto que los mecanismos por los que protestar y pedir responsabilidades ante actuaciones desproporcionadas eran limitados¹⁵⁹¹.

No creemos que Salinas o Cuervo fuesen el oficial típico. Aunque no tuviesen un aprendizaje o una doctrina formalizados, algunos agentes y oficiales resolvían situaciones conflictivas negociando, incluso cuando las autoridades locales no querían o no eran capaces de entenderse con los responsables de una huelga o un motín. En Vilagarcía, el 10 de agosto de 1920, los obreros fueron a la huelga general para pedir la readmisión de trabajadores detenidos en una Sociedad Huevera local. Varios fueron detenidos después de destrozar las mercancías que llevaban al mercado vendedoras de las aldeas próximas. Un grupo se situó ante la Casa Consistorial para pedir su liberación, y recibió varias cargas.

Según una versión, intentaron asaltar la celda de prevención, y resultó herido el teniente que mandaba a los guardias de Cambados¹⁵⁹², pero es posible que el autor de la crónica se confundiese con un suceso que ocurrió al día siguiente¹⁵⁹³. Por la tarde acudió desde Pontevedra un teniente de la Guardia Civil, Ulpiano de la Hoz, con más fuerzas. Fue él quien recibió a una comisión de obreros que le pidió, además de las exigencias ya señaladas, la “destitución del alcalde”, cuyas gestiones fueron criticadas por la prensa¹⁵⁹⁴.

¹⁵⁸⁷ TOCH, H. (1993), p. 242-243.

¹⁵⁸⁸ CABO VILLAVARDE, M., RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2019), p. 243, 248.

¹⁵⁸⁹ No así el de la policía gubernativa. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, F. (2019), p. 42.

¹⁵⁹⁰ FV, 01-05* (8), LV, 14-05-1936, p. 5.

¹⁵⁹¹ Para una aproximación a estas cuestiones en Prusia, JOHANSEN, A. (2009).

¹⁵⁹² EP, 12-08-1920, p. 6

¹⁵⁹³ El día 11 un teniente de la Guardia Civil resultó herido de una pedrada. FV, 12-08-1920, p. 1.

¹⁵⁹⁴ FV, 11-08-1920, p. 1.

9. VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN EL DECLIVE DE LA RESTAURACIÓN, LA DICTADURA Y LA II REPÚBLICA (1920-1935)

9.1 Fuentes y metodología

Para analizar la violencia sociopolítica hemos empleado la misma fuente y metodología que hemos señalado en el apartado anterior referido al homicidio, esto es, los diarios *La Voz de Galicia (LV)*, *La Región (LR)*, *El Faro de Vigo (FV)* y *El Progreso (EP)*, para los años 1920, 1925, 1930, 1935 y 1936 (hasta el 20 de julio). Como la orientación ideológica del medio, su línea editorial y su modelo de negocio son relevantes a la hora de proporcionar información sobre luchas políticas, permítasenos una pequeña introducción en este sentido.

Para Ourense hemos escogido *La Región*, un diario con un sesgo marcadamente derechista y antimarxista que es más bien político que de información general, y para Lugo, *El Progreso*. Ambos tienen habitualmente seis páginas por ejemplar, y ofrecen poca información de primera mano sobre hechos que no ocurran en sus provincias, en especial el primero.

Para las provincias occidentales tenemos *El Faro de Vigo* para Pontevedra, un diario de orientación conservadora pero más moderada que *La Región*. En A Coruña *La Voz de Galicia*, de tradición republicana, no tiene una clara tendencia partidista (por ejemplo, en 1936 no recomendó a sus lectores el voto en uno y otro sentido), pero se ha leído su posicionamiento durante la República como “progresista”¹⁵⁹⁵. Son medios de información general, con doce páginas por ejemplar (aunque la cantidad oscila, en especial en el caso de *El Faro*, que muchos días sale con ocho o diez), amplia presencia publicitaria, una red de corresponsales y que recogen acontecimientos que ocurren en el resto de las provincias gallegas.

A partir de estas fuentes, hemos recogido todos los hechos violentos en los que se hirió a una persona¹⁵⁹⁶, se realizó un ataque con armas blancas, de fuego o de peligrosidad comparable (como un ataque con cóctel molotov)¹⁵⁹⁷ y los atentados con bomba¹⁵⁹⁸, siempre que se les pueda atribuir motivación sociopolítica y que hayan ocurrido en los años que estamos analizando. Por su carácter simbólico, también hemos recogido sistemáticamente los ataques contra iglesias, monasterios, ermitas y casas rectorales.

Nos hemos limitado, por tanto, a los actos de violencia extrema, que son los más fácilmente comprobables y mensurables; dejamos fuera de la estadística los empujones y bofetadas, actos de boicot, pedradas a cristales y amenazas, si bien haremos referencia a ellos a lo largo de este trabajo. La existencia de este tipo de comportamientos menores es importante. Según se ha estudiado a partir del ejemplo de Irlanda del Norte, la participación en actos de vandalismo o violencia menor, en peleas o disturbios, es uno de los factores que explican que un individuo acabe realizando actos de violencia política o terrorismo de mayor entidad, como la colocación de bombas, los asesinatos o

¹⁵⁹⁵ Hervella García considera que sus lectores eran “na súa inmensa maioría de ideoloxía progresista” y que la presencia en A Coruña de una Federación Obrera fuerte y con poder de convocatoria contribuía a su orientación en sentido izquierdista. HERVELLA GARCÍA, G. (1999), p. 220.

¹⁵⁹⁶ Contamos como heridos los casos en los que requirió asistencia médica, se dice específicamente que fue “herido” o “lesionado” o la herida se produjo con armas blancas o de fuego.

¹⁵⁹⁷ Descontamos tiros al aire (frecuentes en las intervenciones de las fuerzas de seguridad como aviso), amenazas con arma, etc.

¹⁵⁹⁸ Como en esta época conseguir explosivos era relativamente accesible para el ciudadano, vemos que a veces se emplean para dirimir cuestiones particulares, como veremos a lo largo de este capítulo.

la unión a un grupo paramilitar¹⁵⁹⁹. Lo mismo se ha observado en la segunda generación de grupos de extrema izquierda italianos¹⁶⁰⁰. Pero, las fuentes disponibles, su estudio cuantitativo para el conjunto de Galicia es imposible, así que hemos optado por no cuantificarlas y hacer referencia a hechos destacados o representativos cuando sea relevante.

Por otra parte, dejamos fuera métodos de coacción del Estado, tan capaz como grupos privados de emplear la violencia y el terror aunque en ocasiones se beneficie de un doble estándar moral sobre sus acciones¹⁶⁰¹. Las acciones policiales más violentas, y en esta época hubo casos de terrorismo de Estado como Casasviejas, quedan reflejadas en nuestras fuentes, pero los abusos policiales o carcelarios no lo hacen. Las autoridades militares y civiles empleaban profusamente las detenciones por motivos políticos, en base a motivos más o menos razonados o más o menos espurios; cuando había conflictos obreros, o se temía que se produjeran, el cierre de centros sindicales y las detenciones políticas se multiplicaban.

Nuestra unidad para la recogida de información es el hecho violento, esto es, un suceso en el que ocurrieron uno o más de los comportamientos arriba descritos. A la hora de seleccionarlos y descartarlos existe un componente de arbitrariedad, pues es difícil definir cuánto un acto tiene un carácter sociopolítico y qué no. Lo clasificamos como tal cuando puede atribuírsele motivación ideológica o se produce en el marco de una huelga o alguna forma de movilización o protesta colectiva, y también cuando los contemporáneos le atribuyen un carácter social o reaccionan en consecuencia.

Así, no consideramos sociopolítico el asesinato del empresario ferrolano Mariano Piñeiro, al que un ex legionario disparó cuando le negó empleo¹⁶⁰², la pelea a navajazos que empezó el joven ourensano Sergio Estévez cuando otro hombre lo llamó fascista “en broma”¹⁶⁰³, ni las heridas que le produjeron a Constantino Pazos durante su detención por no pagar sus consumiciones de comida y bebida en un restaurante, abofetear a un guardia y dar “vivas al fascio”¹⁶⁰⁴.

La violencia en las relaciones laborales resulta especialmente difícil de ubicar. Contamos como político el balazo que le propinó Luis Costa a José Álvarez cuando este no quiso turnarse en su puesto de trabajo; aunque los dos eran carpinteros y pertenecían a la CNT, “durante el día y en señal de protesta por la agresión que dejamos reseñada, no se trabajó en las obras del puerto”, lo que lleva a pensar que el asunto tenía un trasfondo más amplio¹⁶⁰⁵. A Enrique Dorrou, capitán del pesquero *Medillar*, le cortó en la cara un marinero apodado *El Rufo* en los muelles de A Coruña, después de que el primero lo despidiera¹⁶⁰⁶. Sin duda es un conflicto laboral y subjetivamente muy importante para los protagonistas. Pero *El Rufo* actuó solo, que sepamos no pertenecía a ningún sindicato, nadie reivindicó ni justificó su acto, el acto no se denominó en prensa como “cuestión social”; por lo tanto, no tiene naturaleza socio-laboral.

¹⁵⁹⁹ Los factores son más relevantes son: la existencia de un agravio o injusticia percibida por un subgrupo de la población; la edad y sexo (los terroristas suelen ser hombres jóvenes); la involucración de la familia en el movimiento; apoyo de la comunidad a los actos, o que convertirse en miembro del grupo terrorista confiera alto estatus; el señalado proceso de incrementación de la violencia; el deseo de venganza o corregir injusticias percibidas; la fuerte identificación con un grupo, presenciar violencia contra miembros de este y la presencia de modelos de comportamiento. FERGUSON, N., BURGESS, M. (2009), pp. 23-26.

¹⁶⁰⁰ DELLA PORTA, D. (2009), p. 313.

¹⁶⁰¹ Para un resumen de alguna bibliografía que ha abortado esta cuestión, TAYLOR, A. J. W. (2007), pp. 373-374.

¹⁶⁰² FV, 30-06-1936, p. 1, FV, 04-07-1936, p. 9, FV, 09-07-1936, p. 7.

¹⁶⁰³ LR, 29-03-1936, p. 4.

¹⁶⁰⁴ LV, 12-05-1936, p. 7.

¹⁶⁰⁵ FV, 19-06-1936, p. 2.

¹⁶⁰⁶ LV, 20-11-1935, p. 3.

Al contar solo los ataques con materiales explosivos no registramos diversos incidentes comunes en las huelgas, a los que en la época a veces se denominaba como atentados: el corte de líneas de electricidad o de telefonía, daños y destrozos materiales y los ataques personales sin heridos, bien dentro de la ciudad o para impedir la entrada de subsistencias¹⁶⁰⁷, quedan dentro de la conflictividad de baja intensidad que no registramos¹⁶⁰⁸. También quedan fuera otros tipos de atentados más exóticos. Al almacenista Valentín Muiños le colocaron en octubre de 1920 un hilo metálico conectado a unos cables de alta tensión en el llamador de la puerta de su casa. Su criada acabó con quemaduras en un brazo al intentar salir a la calle¹⁶⁰⁹.

Dentro del espectro recogido se encuentran enfrentamientos ideológicos, escaladas de violencia en manifestaciones y acciones premeditadas que podríamos denominar como terrorismo, esto es, el empleo de la violencia contra blancos civiles para conseguir un objetivo político, o, al menos, perjudicar a los rivales ideológicos¹⁶¹⁰. De acuerdo con la literatura académica, no hay evidencia de que los que realizan acciones terroristas respondan a un tipo psiquiátrico patológico, pese a las diferentes propuestas teóricas que parten de esa base¹⁶¹¹. En palabras de McCauley y Segal, “terrorism is not understandable in terms of individual psychopathology; rather it appears to be a phenomenon of group dynamics and normal psychology”¹⁶¹². Tampoco es inmoral, desde el punto de vista de sus autores¹⁶¹³, ni deriva del odio personal¹⁶¹⁴. El perfil educativo, laboral y cultural de los perpetradores de los actos oscila ampliamente según el contexto y el grupo al que pertenezcan¹⁶¹⁵.

La aproximación más adecuada, siguiendo a Kruglanski y Fishman, es entenderlo no como un síndrome derivado de una u otra causa estructural, sino como una herramienta subordinada a otro objetivo, y que como tal puede ser utilizada por diversos actores por motivos heterogéneos; en este sentido, las preguntas deben encaminarse a resolver por qué un grupo elige los ataques violentos como estrategia, ante otras posibles alternativas¹⁶¹⁶.

¹⁶⁰⁷ Tratar de impedir el abastecimiento de los mercados con piquetes en las entradas de las poblaciones y amenazas era una táctica habitual en huelgas y protestas de cierta entidad. Ante el golpe de 1936, marineros y labradores del área de Vigo opuestos a los sublevados intentaron cortar las comunicaciones y la entrada de alimentos, siguiendo quizás el modelo de anteriores protestas; fueron reprimidos con mucha más violencia que nunca antes. VÁZQUEZ ACUÑA, B. (2014), p. 123.

¹⁶⁰⁸ El sabotaje para conseguir el corte de comunicaciones telegráficas y telefónicas, y, quizás en alguna menor medida, de vías férreas y suministros de electricidad y agua, formaba parte del repertorio de lucha del obrerismo gallego. Por poner algunos ejemplos de la bibliografía, el corte de líneas de telégrafo en A Estrada en 1934 GARRIDO COUCEIRO, X. C. (2016), p. 83, o el de la luz eléctrica en Santiago MÍGUEZ MACHO, M. (2008), p. 195.

¹⁶⁰⁹ FV, 19-10-1920, p. 2.

¹⁶¹⁰ Hay innumerables definiciones de terrorismo, incluidas algunas que consideran que el término se restringe a la violencia ilegítima. Lo que nos parece definitorio, rescatando algunas características expuestas por Gerwehr y Hubbard, es que un ataque terrorista emplea una violencia que rompe con la normalidad para conseguir influencia social, esto es, para “influence a target population’s emotions, motives, objective reasoning, perceptions, and ultimately, behavior”. GERWEHR, S. HUBBARD, K. (2007), p. 87-88.

¹⁶¹¹ SILKE, A. (2009), pp. 101-105; MCDERMOTT, R., ZIMBARDO, P. G. (2007), pp. 367-368. Tampoco, aunque resulte más sorprendente, en el caso del terrorismo suicida. ATRAN, S. (2009), pp. 148-149.

¹⁶¹² MCCAULEY, C. R., SEGAL, M. E. (2009), p. 344,

¹⁶¹³ WARDLAW, G (2009), pp. 409-410.

¹⁶¹⁴ MCCAULEY, C. R. (2007), pp. 15-18.

¹⁶¹⁵ VICTOROFF, J. (2009), pp. 57-62.

¹⁶¹⁶ Para una revisión en detalle de la bibliografía, en la que se rechaza el terrorismo como un síndrome ligado a causas dadas y sí como una herramienta, KRUGLANSKI, A. W., FISHMAN, S. (2009), especialmente pp. 43 y 45-50.

Los autores de los actos que hemos registrado están ya fuera de cualquier posible indagación psicológica, y en muchos casos, ni siquiera sabemos quiénes eran. Pero debemos asumir que tenían motivos internamente coherentes para realizar los actos. Acciones como colocar una bomba en el vestíbulo de la casa del pueblo de Vigo, en el marco de una huelga a la que la Federación Obrera de esa ciudad no acudió¹⁶¹⁷, apalizar a un estibador esquirol¹⁶¹⁸ o tirotear a un ebanista de izquierdas¹⁶¹⁹ responden a una lógica para sus autores, aunque en ocasiones no resulte evidente para el observador, o incluso pueda parecer contraproducente¹⁶²⁰.

Con estos criterios hemos construido una base de datos con 319 hechos violentos, que pretendemos poner a disposición del público tras la publicación de esta tesis con la intención de que sea objeto de permanente actualización y corrección. En esta la que hemos incluido, de manera sistemática:

a) La provincia.

b) El municipio.

c) El día en la que ocurrió o se inició. En algunos sucesos no conocemos la fecha concreta. Hay peleas que ocurren en torno a las doce de la noche, o capillas que aparecen profanadas y destrozadas de madrugada sin que se pueda estimar exactamente a qué hora ocurrió el hecho. En otros casos, la prensa no llega a aclarar exactamente el día. Esto es más frecuente, como veremos en el capítulo 10, en 1936, año en el que la censura actuó con fuerza. Para recuperar la información con más facilidad y tratarla informáticamente, hemos incluido una fecha estimada en estos casos¹⁶²¹.

d) La fuente. Como la prensa escrita constituye el fundamento de la base de datos, lo más frecuente es que se incluyan una o más referencias de prensa, incluyendo el medio, día y página en el que aparece la información. Habitualmente una noticia aparece en varios medios. Hemos hecho referencia a todas las fuentes, exceptuando algunos casos en los que eran obviamente reiterativas (la prensa de la época se copiaba entre ella, y en ocasiones encontramos un texto idéntico al que ya ha salido publicado en un diario en otro que incluye incluso los errores y faltas de ortografía). En los casos en los que el hecho también aparece en la bibliografía de apoyo se incluye la referencia pertinente.

e) Descripción del hecho. Se incluyen las contradicciones entre las fuentes, si las hay, qué versión se considera más fiable, si es el caso, y las conexiones con otros hechos.

Los hechos violentos oscilan entre episodios puntuales y concretos, fácilmente definibles, y jornadas de disturbios o ataques con bomba coordinados. Estudiar cuantitativamente los sucesos no tendría demasiado sentido, pues son disímiles entre ellos. Realizaremos nuestro estudio a partir de cuatro tipos de datos:

¹⁶¹⁷ *FV*, 02-10-1930, p. 5, 04-10-1930, p. 5, *LV*, 02-10-1930, p. 2

¹⁶¹⁸ *EP*, 25-02-1936, p. 2, *LV*, 25-02-1936, p. 11

¹⁶¹⁹ *LR*, 20-05-1936, pp. 1, 5.

¹⁶²⁰ La necesidad de analizar los ataques de terroristas de manera utilitaria ha sido señalada por varios autores. Para Martha Crenshaw, las consideraciones estratégicas no son el único factor que influye en la decisión de realizar un ataque terrorista, pero sí uno relevante. CRENSHAW, M. (2009), pp. 381-382. Breckenridge y Zimbardo señalan que "Terrorists choose terrorist tactics—even suicide terrorism- because historically the underlying logic has realized some success". BRECKENRIDGE, J. N., ZIMBARDO, P. G. (2007), p. 117. Un análisis matemático y de teoría de juegos de las relaciones de negociación entre grupos terroristas y gobiernos en SANDLER, T., TSCHIRHART, J. T., CAULEY, J. (2009).

¹⁶²¹ Con carácter general, se ha estimado que el suceso tuvo lugar dos días antes de su primera aparición en prensa, a menos que en la noticia se incluya una expresión que indique que fue anterior ("hace una semana").

1. Los homicidios a los que hemos asignado un carácter sociopolítico, de manera firme o dudosa. Ya nos hemos referido a ellos en los apartados 7.1 y 7.2.

2. Los heridos en enfrentamientos con las mismas características. Como heridos contamos los que tienen lisiaduras producidas por armas blancas o de fuego, precisan tratamiento médico o se definen como “herido” o “lesionado” por la fuente. Descontamos a los contusos o que solo recibieron alguna bofetada o empujón.

3. El número de explosivos detonados, situados para realizar un ataque o cuya colocación fue impedida in fraganti. En los gráficos los denominaremos como “bombas”. Se apreciará que contamos el número de artefactos explosivos, no el número de ataques o, en lenguaje popular, “atentados”¹⁶²². Lo más habitual es que no tengamos una explicación de la potencia de los explosivos, que suelen denominarse en prensa genéricamente como “petardos”, lo que nos lleva a tener que aplicar un cierto margen discrecional para descartar bromas o bombas de juguete.

Hemos incluido los casos en los que se encuentran bombas que no llegaron a estallar, que fueron abandonadas al ser sorprendidos in fraganti los que las llevaban o las que portaban individuos que fueron detenidos cuando parecían dirigirse a cometer atentados. Dejamos fuera otros casos en los que los explosivos existían pero no estaban colocados para realizar un ataque terrorista. Por ejemplo, en 1935 se encontraron en unos solares de Vigo cuatro bombas, dos cargadas y dos vacías, acompañadas de una supuesta nota con instrucciones para utilizarlas contra objetivos patronales¹⁶²³. Como parece ser un depósito o alijo, no se ha incluido en la estadística. Sí que se hubieran contado si, por ejemplo, los artefactos que se encontrasen cargados y en edificios relacionados con la patronal.

4. El número de capillas, monasterios, casas rectorales e iglesias que sufrieron profanaciones destructivas, ataques con explosivos o fuego con intencionalidad sociopolítica. Dejamos fuera casos abortados (por ejemplo, cuando la presencia de las autoridades hizo escapar a los sospechosos de intentar incendiar una iglesia) porque puede haber falsos positivos; hemos hecho alguna excepción cuando se detuvo a individuos con explosivos cerca del objetivo, pues en este caso parece claro que iban a cometer un atentado. Tampoco contamos un pequeño número de casas rectorales que fueron expropiadas por la fuerza, y no hemos registrado los daños en los edificios sagrados relacionados con robos y actos de vandalismo menor, como las pintadas, y los ataques a cruceros, que ocurren puntualmente. Como era de esperar, solo hemos encontrado ataques contra centros de culto católicos.

Éste es el único caso en esta parte de la investigación en que una gran parte de los hechos registrados provienen de fuentes bibliográficas y no de la prensa, pues el trabajo de Hernández Figueiredo a partir de los datos enviados por las cinco curias diocesanas gallegas a la Nunciatura de Madrid en 1936 incluye una buena cantidad de casos de ataques contra edificios religiosos que no aparecen en los medios. Por una parte, la fuente presenta algunas deficiencias¹⁶²⁴; por otra, si bien

¹⁶²² Etimológicamente el atentado es bien la agresión y desacato a la autoridad o bien el abuso de esta, así como los ataques personales: la segunda acepción de la RAE presenta como definición “agresión contra la vida o la integridad física y moral de alguien”. En el lenguaje común actual, sin embargo, lo vemos empleado frecuentemente como sinónimo de “ataque terrorista”.

¹⁶²³ FV, 22-02-1935, p. 5, LV, 22-02-1935, p. 2.

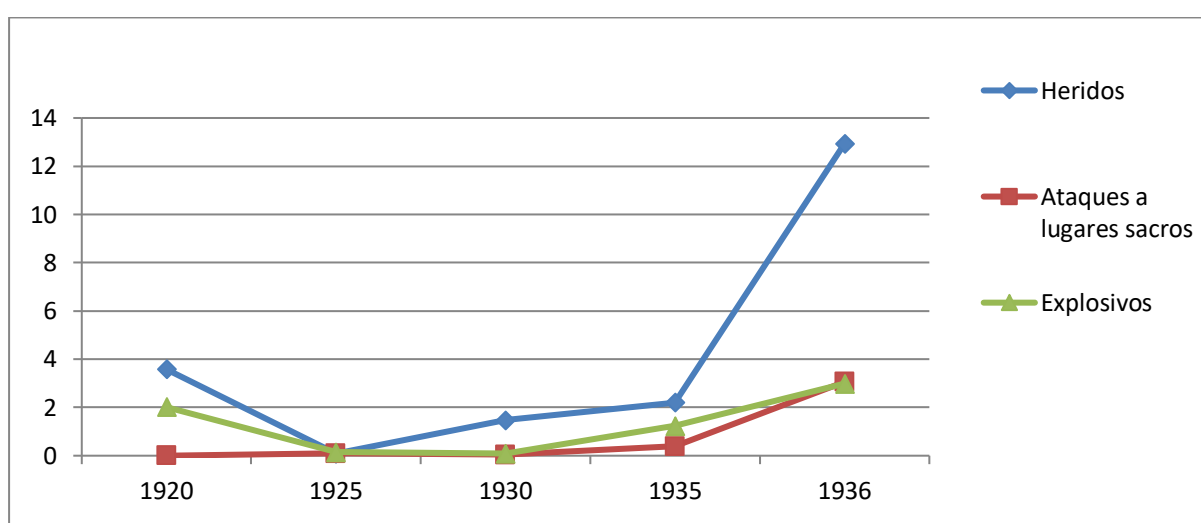
¹⁶²⁴ Los problemas, en concreto, proceden de la falta de datos de las comunicaciones de las diócesis de Lugo, Ourense y Tui. Por ejemplo, la primera informó en su comunicación de febrero-marzo a la Nunciatura de que había sido incendiada la iglesia de Ribasaltas, en Monforte, sin especificar cuándo. En otras ocasiones informa de que ha habido ataques “en la última decena del mes”. En estos casos, hemos optado por adscribirles como fecha la del punto medio del periodo descrito. Tampoco se identifica correctamente el lugar (aparece

es explicable que aparezcan casos en los archivos diocesanos y no en la prensa, debido a que estos hechos se concentran en 1936 y este año la censura es fuerte¹⁶²⁵; resulta más inquietante para el investigador que en la prensa aparezcan iglesias incendiadas que no conocen los propios obispos.

9.2 Comparativa temporal

En total, se han contado 52 homicidios por motivos sociopolíticos, de los que 13 tienen un cierto carácter dudoso, 332 heridos (incluyendo los casos que acabaron en homicidio), 116 explosivos empleados en atentados y 53 ataques a lugares sagrados, con una distribución temporal muy heterogénea. La violencia sociopolítica es altamente contextual y episódica, por lo que las tasas oscilan ampliamente:

Gráfico 9.2.1 Heridos en enfrentamientos políticos, ataques a lugares sagrados y explosivos empleados en atentados para toda Galicia, en casos anualizados por 100.000 habitantes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la prensa y bibliografía

En otros tipos de delitos hemos realizado un análisis conjunto, que, creemos, no sirve para los enfrentamientos sociopolíticos. Los homicidios por riñas o por violencia intrafamiliar pueden oscilar en los diferentes años que estudiamos, o manifestar una tendencia creciente o decreciente, pero mantienen una continuidad en las tasas y el perfil de los autores, incluso con los saltos temporales de nuestra muestra. Esta continuidad no existe en la violencia sociopolítica, que aparece en estallidos temporalmente localizados y por causas diferentes. Así, analizaremos los resultados en tres apartados de este capítulo: la crisis de postguerra (1920), la Dictadura y su decadencia (1925-1930) y el año 1935. 1936, en atención al mayor volumen de datos que registra, a sus especificidades, y al gran interés que ha generado en la historiografía española, se tratará en el capítulo 10.

nombrada solo la parroquia, y en la misma diócesis podría corresponderse con varias), y hemos descartado un caso en Ourense porque no hemos podido identificar si el lugar existe o es una confusión terminológica. Aún así, las fuentes diocesanas resultan útiles y la mayor parte de casos aparecen debidamente registrados. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R. (2009).

¹⁶²⁵ Por ejemplo, en los medios indicados no hay noticias que aborden directamente los ataques contra iglesias que se produjeron en Ferrol tras las elecciones, aunque sí menciones a las fuerzas desplegadas para ahogar los motines.

La perspectiva interanual sí que resulta relevante para señalar algunas características comunes. Una de ellas es que no hemos encontrado ninguna evidencia sólida de que los actores de violencia sociopolítica participasen en actividades criminales como el robo o el contrabando para financiarse¹⁶²⁶. La evidencia circunstancial es muy débil. Por ejemplo, en un robo en domicilio en 1935 en un pueblo ourensano, un medio de derechas informó de que los asaltantes eran anarquistas¹⁶²⁷.

Por otra parte, al menos en Galicia la violencia personal entre los sindicatos de izquierdas es limitada. No provoca ningún muerto, aunque sí algunos heridos. El socialista Eduardo López recibió un disparo en Ferrol en 1920 por parte de Ricardo Lavandeira, “sindicalista”, tras una pelea de bar por cuestiones societarias¹⁶²⁸. En Vigo, en 1935, el joven Manuel Eijo fue herido a tiros y se negó a decir por quién, pero las autoridades sospecharon de correligionarios de las FAI¹⁶²⁹. En A Coruña se produjeron peleas entre obreros en la órbita de la CNT y sus homólogos de la UGT en varias ocasiones.

Lo habitual era que los obreros atacasen a los esquirols. “A existencia dun enmarcado sobre o proceder dos “esquirols” aséntase e convértese nunha base mobilizadora do obreirismo, que non deixa de medrar a carón do crecemento do chamado societarismo católico á partir de 1915”¹⁶³⁰. Puntualmente el objetivo son los propietarios, o las administraciones, y también chocaban con las fuerzas de seguridad en manifestaciones, huelgas o disturbios. En 1935 y 1936, el patrón habitual se convierte en choques entre jóvenes de izquierdas y de derechas.

Otra cuestión que merece un análisis temporal es la de las diferencias de intensidad de las conductas violentas. Como se puede observar en la tabla precedente, el periodo prebélico de 1936, es el pico de violencia sociopolítica en los años estudiados, con mucha diferencia. Todos los tipos de sucesos estudiados tuvieron un momento de auge en 1936, si ajustamos los datos a los cambios de población y anualizamos los datos (ya que para 1936 solo hemos recogido datos hasta el 20 de julio). En todos los indicadores, excepto los ataques a lugares sacros, el siguiente año en intensidad de violencia es 1920, un año de fuertes choques sindicales y motines de subsistencias. Le siguen 1935, 1930 y 1925.

Tabla 9.2.1 Homicidios y heridos en enfrentamientos políticos, ataques a lugares sagrados y explosivos empleados en atentados para toda Galicia, en casos anualizados por 100.000 habitantes

Año	Heridos	Explosivos	Ataques a lugares sacros	Homicidios políticos, sin contar casos dudosos	Homicidios políticos con casos dudosos
1920	3,58	2,02	0	0,52	0,71
1925	0,09	0,14	0,09	0	0,05
1930	1,48	0,09	0,04	0,04	0,04
1935	2,2	1,23	0,38	0,17	0,3

¹⁶²⁶ Para un modelo teórico acerca de la permeabilidad de las actividades criminales y terroristas en un grupo dado, GUP TA, D. K., HORGAN, J., SCHMID, A. P. (2009), pp. 123-136.

¹⁶²⁷ LR, 22-02-1935, p. 5.

¹⁶²⁸ EP, 16-06-1920, p. 6, LR 18-06-1920, p. 2

¹⁶²⁹ FV, 22-08-1935, p. 5.

¹⁶³⁰ En el artículo de próxima publicación MÍGUEZ MACHO, Antonio: ““Una colisión fina”. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepción e consecuencias (1890-1940)”

1936	12,94	2,99	3,06	1,76	2,14
------	-------	------	------	------	------

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Este pico de intensidad está relacionado con ataques contra las personas. El índice de homicidios sociopolíticos, incluyendo casos dudosos, es en 1936 de 2,14 casos por 100.000 habitantes, casi el triple que en 1920, y cerca de siete veces el de 1935. El de heridos, de 13 casos por 100.000 habitantes, esto es, más del triple que en 1920 y casi seis veces más que en 1935. Los siete meses y medio que hemos consultado para ese año contienen más heridos que la suma de todos los demás, y suponen más del 50% de los muertos.

Resulta poco probable que esta sobrerrepresentación se deba a un sesgo en la recogida de datos. Es cierto que 1936 ha sido más estudiado que otros años, y está más presente en la bibliografía académica, lo que podría llevar a que pareciese que hay más violencia simplemente porque se ha buscado con más intensidad. Pero la inmensa mayoría de nuestra base de datos sobre heridos y homicidios proviene total o parcialmente de la prensa consultada y solo puntualmente de otros autores. Más aún debido a que la censura de prensa de 1936, sobre la que abundaremos más adelante, presumiblemente disminuye el número de casos que hemos podido conocer a través de la prensa.

Tabla 9.2.2. Número de heridos en actos de violencia sociopolítica en el conjunto de Galicia

Año	Número de heridos	Porcentaje
1920	76	22,9
1925	2	0,6
1930	33	9,9
1935	52	15,7
1936	169	50,9
Total	332	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Tabla 9.2.3 Número de muertos en actos de violencia sociopolítica en el conjunto de Galicia

	Sin contar casos dudosos	Porcentaje	Contando los casos dudosos	Porcentaje
1920	11	28,2	15	28,8
1925	0	0	1	1,9
1930	1	2,6	1	1,9
1935	4	10,3	7	13,5
1936	23	59	28	53,8
Total	39	100	52	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Otro factor a tener en cuenta es que 1936 supuso niveles desacostumbrados de violencia en todas las provincias de Galicia. La que presenta un menor índice de heridos en ese año (Lugo, con 8,13 casos por 100.000 habitantes), rebasa significativamente la violencia de cualquier otra provincia en cualquiera de los años anteriores. En todas las provincias la tasa de muertes violentas es superior a

la de años anteriores; la única provincia que se aproxima a los índices de violencia de 1936 es A Coruña en 1920.

Tabla 9.2.4 Heridos en hechos violentos sociopolíticos, en casos por 100.000 habitantes anualizados

Año	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
1920	5,79	1,28	5,09	1,5	3,58
1925	0	0,21	0	0,18	0,09
1930	2,08	2,77	0,47	0,35	1,48
1935	2,18	1,83	2,49	2,31	2,2
1936	10,71	8,13	19,31	15,24	12,94

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

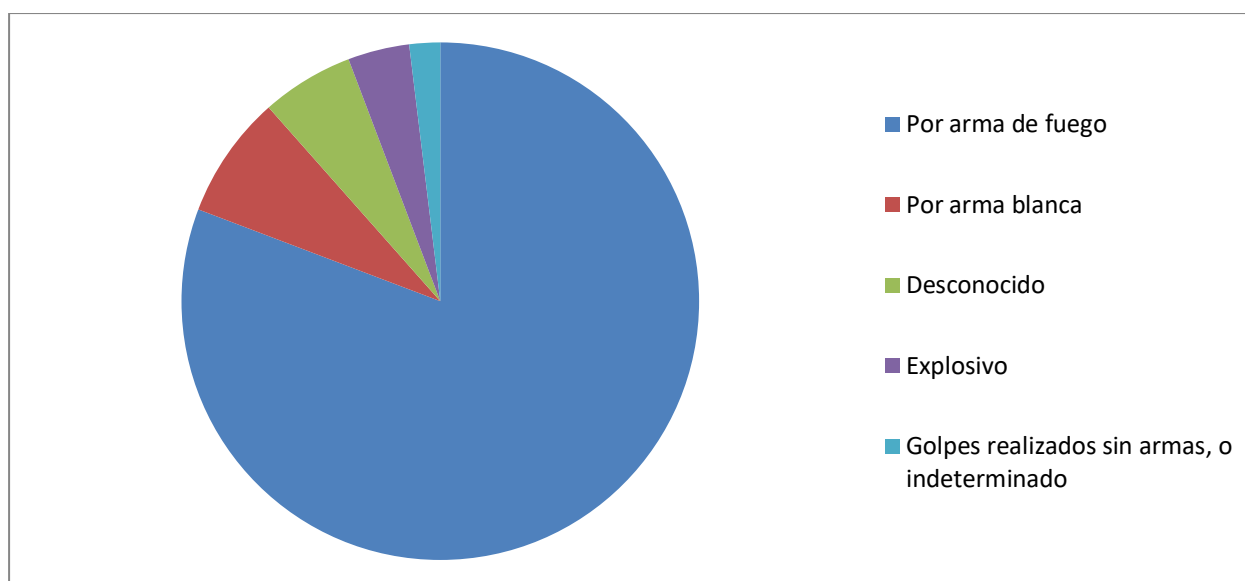
Tabla 9.2.5 Homicidios en hechos violentos sociopolíticos, incluyendo casos dudosos, en casos por 100.000 habitantes anualizados y por provincias

Año	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
1920	1,69	0,21	0,24	0,19	0,71
1925	0	0,21	0	0	0,05
1930	0,13	0	0	0	0,04
1935	0,12	0,2	0,68	0,33	0,3
1936	2,19	1,48	3,7	1,49	2,14

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

De los homicidios sociopolíticos observados, el 80,77% se cometieron con armas de fuego (casi siempre cortas), el 7,69% con armas blancas y el 3,85% con explosivos. La muerte de Jesús García, un patrono vigués asaltado por desconocidos en 1935 y que suma el 1,92% de la muestra, se debió a una paliza, y otros tres casos, que suponen el 5,77%, no se aclara la forma de muerte.

Gráfico 9.2.2 Homicidios sociopolíticos según causa de muerte



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

La violencia sociopolítica grave es un asunto entre hombres adultos. De los 52 muertos registrados, 51 eran varones mayores de edad. La única mujer fallecida fue una anciana tiroteada en un asalto a un autobús que tenía el objeto de matar a dos hombres. En cuanto a los autores, en el 48,08% de los casos son hombres solos y en el 36,54% grupos de hombres, mientras que en los casos restantes no se conoce quién realizó el ataque. Nunca encontramos a mujeres entre los homicidas en los casos estudiados. Es cierto que en la España de la Segunda República hubo féminas que participaron activamente no solo en motines de subsistencia o protestas, sino en atentados o ataques¹⁶³¹, pero su participación en los enfrentamientos es residual en términos cuantitativos.

Por otra parte, las agresiones están concentradas en las ciudades. Si desglosamos los heridos por los municipios en los que ocurrieron, el 60,5% fueron lesionados en el territorio actual de los municipios de A Coruña, Vigo, Ourense, Pontevedra¹⁶³², Santiago, Lugo, Ferrol y Vigo¹⁶³³. El porcentaje oscila según los años, pero las siete ciudades y sus hinterland siempre son una cifra mayoritaria en los heridos, excepto en 1925, en que solo hay dos en toda Galicia. En 1920 suman el 74% de los heridos, en 1930 el 90,9%, en 1935 el 53,8% y en 1936 el 51,2%.

Tabla 9.2.6 Heridos en hechos violentos sociopolíticos según el municipio en que recibieron las heridas

	Heridos	Porcentaje
A Coruña	68	20,48
Vigo	37	11,14
Ourense	38	11,45
Pontevedra	10	3,01

¹⁶³¹ Cases Sola considera que esto es una muestra de los cambios de roles de género que ya se había producido en los años 30. La lectura de la participación de las mujeres en actos de violencia dependía de la adscripción ideológica de las protagonistas del suceso y de quienes lo interpretaban. CASES SOLA, A. (2013), pp. 95-96.

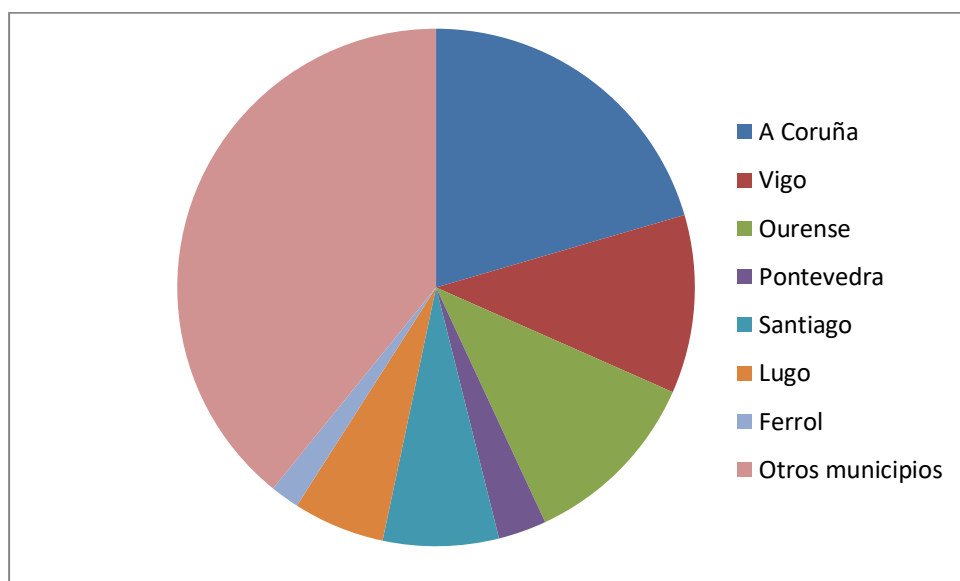
¹⁶³² Hemos incluido los casos ocurridos en el entonces municipio de Geve, anexionado a Pontevedra. CASES SOLA, A. (2017), p. 247-253.

¹⁶³³ Hemos incluido los casos ocurridos en los entonces municipios de Lavadores, Coia y Bouzas, anexionados a Vigo.

Santiago	24	7,23
Lugo	19	5,72
Ferrol	6	1,81
Otros municipios	130	39,16
Subtotal de las siete ciudades	202	60,84

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Gráfico 9.2.3 Heridos en hechos violentos sociopolíticos según el municipio en que recibieron las heridas



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Si nos ceñimos a los homicidios encontramos cifras similares. Más de la mitad de las muertes acontecieron en este pequeño porcentaje de los homicidios, y algo menos de un tercio en A Coruña.

Tabla 9.2.7 Homicidios sociopolíticos según el municipio en que ocurrieron

Contando casos dudosos			Sin contar casos dudosos		
	Homicidios	Porcentaje		Homicidios	Porcentaje
Total	52	100	Total	39	100
A Coruña	16	30,77	A Coruña	11	28,21
Vigo	5	9,62	Vigo	4	10,26
Ourense	3	5,77	Ourense	3	7,69
Pontevedra	2	3,85	Pontevedra	2	5,13
Santiago	1	1,92	Santiago	1	2,56
Lugo	0	0	Lugo	0	0
Ferrol	1	1,92	Ferrol	1	2,56
Otros municipios	24	46,15	Otros municipios	17	43,59
Subtotal de las siete ciudades	28	53,85	Subtotal de las siete ciudades	22	56,41

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

El campo no está exento de violencia sociopolítica. En los años que hemos observado, los choques electorales suelen producirse en villas o pequeños pueblos. En 1936, aún siendo minoritarias, hubo agitaciones sociales en el campo de las que nos ocuparemos más adelante, y en la Segunda República el partido de Sarria fue especialmente conflictivo.

Existe un tipo de violencia sociopolítica propiamente rural, la relacionada con el asociacionismo agrario, que se detecta en 1920. Un choque entre grupos de vecinos de dos sociedades agrarias que convivían en la misma parroquia dejó cuatro heridos de bala en marzo en Chantada¹⁶³⁴. En Ourense, “más de 200 vecinos se amotinaron” cercando la casa del propietario Camilo González, para que despidiesen a los jornaleros que tenía contratados, pues “no están asociados en la Federación Agraria, y les consideran esquirols”. Los jornaleros se refugiaron en una casa y los asaltantes, ante la respuesta negativa de González, “sacaron a relucir toda clase de armas, y trataron de asaltar la finca”. Sin embargo, no se informa de heridos, con lo que el suceso quizás haya sido exagerado¹⁶³⁵. Unos meses más tarde, un tiroteo entre obreros asociados y libres en torno a la vendimia en el pueblo de Vilariño, perteneciente al municipio de Ourense, dejó “varios heridos”¹⁶³⁶. A finales de año, un propietario de O Saviñao mató de un tiro a un miembro de una sociedad agraria que intentaba impedir que obreros no asociados trabajasen en una finca de su propiedad¹⁶³⁷.

En octubre murió asesinado el presidente de la sociedad de agrarios de Teixeira (Curtis, A Coruña). Probablemente se tratase de una venganza familiar, por lo que hemos catalogado el hecho como dudoso, pero aún así el vecindario se opuso a que actuase el juzgado de Curtis y el asunto tuvo que trasladarse a Arzúa¹⁶³⁸. En noviembre estalló una bomba en las cercanías de la casa del propietario César Pereira, residente en el municipio ourensano de Leiro, atentado que “se relaciona con un boicot que una sociedad agraria” había declarado a uno de sus caseros¹⁶³⁹. Algunos miembros de la directiva de la Sociedad agraria de Gomariz fueron detenidos, con lo que “se congregaron a toque de campana, cerca de dos mil campesinos con el propósito de gestionar la libertad de los detenidos”, amenazando con acudir a Ribadavia o a Ourense.

Se dispersaron “ante la actitud del jefe de la benemérita y merced a la intervención pacificadora de algunas personas”. Los agrarios consideraban improcedentes las detenciones dado que la directiva de la sociedad se había dirigido al juez del partido, “rogándole instruyese diligencias por el referido atentado que la Sociedad era la primera en reprobar”¹⁶⁴⁰. Aún así, el juzgado de Ribadavia detuvo a tres propagandistas que habían participado en un mitin en el que se habían realizado “claras excitaciones al atentado”, entre ellos el concejal de Ourense Manuel Suárez¹⁶⁴¹. El atentado quizás estuviese relacionado con el pago de foros, o se subsumiese en la reivindicación foral¹⁶⁴².

¹⁶³⁴ EP 28-03-1920, p. 1.

¹⁶³⁵ EP, 22-07-1920, p. 6

¹⁶³⁶ En *La Voz* se dice que fue a la vuelta de la vendimia; en el *Faro*, que los asociados trataron de impedirla. LV, 23-11-1920, p. 1, FV 23-11-1920, p. 1.

¹⁶³⁷ EP 02-11-1920, p. 3, LV 01-11 -1920

¹⁶³⁸ EP, 07-10-1920, p. 6, 10-10-1920, p. 6, LV 18-12-1920, p. 3, LV 19-10-1920, p. 3.

¹⁶³⁹ FV, 26-11-1920, p. 2.

¹⁶⁴⁰ LR, 28-11-1920, p. 2.

¹⁶⁴¹ LR, 04-12-1920, p. 2.

¹⁶⁴² Una noticia de *El Progreso* habla de “serios desórdenes” provocados por campesinos que se negaban a abonar los foros en Leiro, con el estallido de “varias bombas” y concentración de la Guardia Civil. EP, 03-12-1920, p. 6.

Pese a que el asociacionismo agrario en su conjunto parece estar dominado numéricamente por los pequeños propietarios, y los jornaleros ocupaban un papel secundario¹⁶⁴³, en 1920 los conflictos abiertos de los que conocemos el motivo se producen en torno al control del mercado de trabajo. Resulta significativa la presencia del noroeste de la provincia de Ourense, que quizás se explique por la importancia de los jornaleros en los trabajos vitivinícolas. Sería el caso de algunas de las parroquias de Coles (partido de Ourense), con grandes propiedades dedicadas a la vid y un “importante número” de labriegos con tierra insuficiente o dependientes del trabajo a jornal¹⁶⁴⁴.

Los actos de violencia abierta e interpersonal seguramente sean la punta del iceberg de la conflictividad de las sociedades agrarias. Más frecuentes serían las coacciones y los sabotajes¹⁶⁴⁵. En todo caso, no cabe, como hace algún autor, hablar de “Revolución Agrarista” caracterizada entre 1916 y 1923 “pola radical insubmisión dos campesinos”¹⁶⁴⁶.

En cuanto a la cuestión de los foros, podemos afirmar que no fueron fuente de conflictividad en términos violentos. Solo hemos encontrado un hecho de violencia sociopolítica ligada a ellos. Discrepamos con González Calleja, que liga la frecuencia de la violencia contra la persona en la Segunda República “al encono de los pleitos vecinales sobre la propiedad o los foros en una región fuertemente minifundista”¹⁶⁴⁷; la violencia interpersonal en la Galicia de los años treinta no puede explicarse por los foros, que se habían redimido mayoritariamente en la década anterior, bien a través de pactos o tras la regulación de 1926, mientras que los pleitos vecinales, como hemos visto en el apartado 7.7, solo explican una pequeña parte de los homicidios.

Por otra parte, incluso antes de ese año los foros fueron extinguiéndose sobre todo a través de la negociación (ayudada en algunos casos por el sabotaje y tácticas dilatorias ilegales, pero menos por la violencia directa contra las personas)¹⁶⁴⁸. Concordemos o no con la afirmación de Julio Prada de que la desaparición de los foros fue sustituir la “explotación feudal pola do Estado”¹⁶⁴⁹, debido a los impuestos sobre las explotaciones agrarias, las rentas forales no eran en esta época un motivo de violencia en el campo gallego.

Encontramos una excepción en 1930, sobre la persona de un procurador de Xinzo, Antonio González Bouzas, que había demandado a varios vecinos de Blancos por negarse a abonar rentas forales. El tres de enero de 1930 se dirigía a un acto de conciliación en el juzgado municipal cuando varios paisanos lo emboscaron, lo derribaron del caballo de una pedrada y lo llevaron hasta el juzgado, donde, “por violencia, consiguieron que el juez y el secretario les entregasen el escrito de demanda”. Luego obligaron a González a subirse a lo alto de un crucero, leer el documento y romperlo públicamente, además de su palabra de que “haría ver que la demanda había sido retirada espontáneamente y que las heridas se las había producido al caer del caballo”¹⁶⁵⁰.

En cuanto a la gestión de los comunales, solo hemos encontrado otro hecho violento relacionado con ellos, ocurrido en el municipio ourensano de Calvos de Randín: a Bernardo Sotelo le colocaron

¹⁶⁴³ CABO VILLAVERDE, M. (1998), p. 49.

¹⁶⁴⁴ En este municipio se habla al menos de un herido en la Segunda República “no contexto dun posible enfrontamento entre xornaleiros da sociedade agraria local e esquireiros que non respectaban as folgas decretadas polos agrarios da parroquia”. SOUTELO VÁZQUEZ, R. (2014), p. 72, 102.

¹⁶⁴⁵ Un ejemplo de denuncias de coacciones en LR 26-10-1920, p. 2.

¹⁶⁴⁶ Tampoco parece correcto, como afirma la misma fuente, que actuasen “destemidos de face o seu brazo armado [del caciquismo], a Garda Civil”. SOLLA, C. (2011), p. 13.

¹⁶⁴⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), p. 245.

¹⁶⁴⁸ CABO VILLAVERDE, M. (1998), p. 148.

¹⁶⁴⁹ PRADA RODRÍGUEZ, J. (2016), p. 87.

¹⁶⁵⁰ LR, 05-01-1935.

tres cartuchos de dinamita en su casa por edificarla en terreno comunal “contra los deseos del pueblo”¹⁶⁵¹.

Dos tipos de suceso merecen una atención comparativa temporal: los atentados con explosivos y los ataques a lugares sagrados. Los atentados con explosivos tienen su máximo en el año 1936, al igual que los atentados personales, pero es mucho menos acentuado que en los ataques contra personas. La tasa de explosivos en 1936 es un 59% superior a la de 1920, y un 172% superior a la de 1935. Siendo cifras significativas, la desproporción no es tan grande como en el homicidio. En Galicia la violencia política de 1936 fue desusada porque el objetivo eran las personas, hasta llegar a la muerte. Los atentados con explosivos aumentaron en intensidad, pero no definen el año.

Tabla 9.2.8 Explosivos colocados o requisados en incidentes sociopolíticos, en casos anualizados por 100.000 habitantes, para cada una de las provincias gallegas y para el conjunto de Galicia

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
1920	2,96	0	3,39	1,5	2,02
1925	0	0,43	0,24	0	0,14
1930	0	0	0	0,35	0,09
1935	0,73	0	0,45	3,47	1,23
1936	4,37	1,48	4,11	1,49	2,99

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Hemos contado 87 hechos violentos sociopolíticos con presencia de explosivos, en los que intervinieron 116 bombas, pero las explosiones solo provocaron en torno a una decena de heridos (dos de los cuales murieron). Se comprenderá fácilmente si atendemos al método de utilización de las bombas y a los objetivos, lo que separa a los atentados con bomba realizados en Galicia, por ejemplo, de la propaganda del hecho de los revolucionarios rusos, cuyo objetivo eran las autoridades¹⁶⁵². En esto, los atentados de esta época seguían la tradición anterior. En el partido judicial de Pontedeume, entre 1906 y 1916, encontramos siete causas por explosiones de explosivos en los libros de matrícula criminal. En ninguna de ellas hay heridos, y todas acabaron en sobreseimiento. En cuanto a los objetivos, hay una escuela y la casa de un párroco en 1908, dos viviendas en 1911 y 1913 y un “disparo con bombas o cohetes con dinamita” en 1915, que quizás sea por diversión; los otros dos son daños por petardos o bombas sin especificar. Es posible que algunos sean accidentales.

Si atendemos al lugar donde fueron colocadas las bombas, encontramos que casi el 39% fueron colocados en instalaciones o maquinaria industrial: comercios, talleres, fábricas, barcos, tranvía, obras, etcétera, casi siempre, aunque no siempre, cuando estaban desocupados. Habitualmente se corresponden con las propiedades de empresas cuyos obreros están en huelga, propietarios que sufren un boicot, etcétera. El siguiente lugar más frecuente son las viviendas particulares, con cerca de un 19% de los casos. Las infraestructuras y las vías de comunicación sufren un 10,3% de los ataques en cada caso, y el 6% se colocaron en lugares de culto. Un 6,9% de las bombas fueron parte de ataques múltiples que comprenden dos o más de las situaciones anteriores. Dos explosivos, que suponen el 1,7% de los casos, se colocaron en un centro obrero o una casa del pueblo, otros cuatro,

¹⁶⁵¹ LR, 26-05-1920, p. 2, EP, 30-05-1920, p. 6

¹⁶⁵² REICH, W. (2009), p. 25.

que suman el 3,5%, en edificios públicos, en general centros educativos¹⁶⁵³, y el 2,6% en otros lugares o ubicaciones sin aclarar.

Tabla 9.2.9 Bombas, según el lugar en que detonaron.

Viviendas	18,97
Negocios o vehículos (talleres, tiendas, fábricas, obras, barcos, tranvías, maquinaria, etc)	38,79
Edificios públicos	3,45
Infraestructuras (instalaciones eléctricas, de gas, etcétera)	10,34
Vías de comunicación (ferrocarril, carreteras, etcétera)	10,34
Capillas, iglesias y otros centros de culto	6,03
Centros obreros	1,72
Combinación de dos o más de las anteriores	6,9
Otros o desconocido	2,59

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

El empleo de bombas con objetivos políticos fue, en su amplísima mayoría, una táctica de las izquierdas y del movimiento obrero, al menos en los casos en los que hay un culpable señalado. Las derechas apenas las emplearon, si excluimos dos posibles casos en 1936. Si atendemos a la finalidad con la que fueron colocados los artefactos, encontramos un 18,1% de casos no aclarados, que se concentran en 1936, cuando la censura dejaba a los diarios dar pocas pistas de las causas. Por lo demás, el conjunto más numeroso, un 38% del total, se colocaron en el marco de huelgas obreras sin carácter político primordial. Otro 18,1%, lo fueron con una finalidad explícitamente política, o en el marco de huelgas con ese carácter, y el signo es mayoritariamente izquierdista. El 13% responden a otros actos atribuidos al movimiento obrero diferentes a paros sindicales, como protesta por un despido o un conflicto laboral o, con mucha menos frecuencia, disputas entre sindicatos. El 6,9% de los explosivos se emplean en ataques contra instalaciones eclesiásticas o sacerdotes. El agrarismo, las protestas derivadas de motines de subsistencia y otras cuestiones (como venganzas tras protestas colectivas por embargos), ocupan un lugar marginal, el 0,86%.

Los porcentajes oscilan según el año de manera importante. En 1920, el 65,1% de los explosivos se colocan en el marco de huelgas sin carácter político o en actos relacionados con el movimiento obrero, mientras que en 1936 el porcentaje baja a un tercio. Por el contrario, el número de ataques con signo político o en protestas de carácter político se duplica.

Tabla 9.2.10 Bombas colocadas en los años estudiados, según su motivación presumida

Por una huelga obrera urbana, o derivada de ella	37,93
Otros actos derivados del obrerismo (coacciones, "cuestiones sociales")	12,93
Motín o protesta de Consumos, o por consecuencia de ella	0,86
Ligados al movimiento agrario o al proletariado rural	0,86
Móviles políticos o electorales, incluyendo huelgas de protesta o políticas	18,1
Ataques anticlericales	6,9

¹⁶⁵³ Una cochera municipal, una escuela, la Universidad Literaria de Santiago y la Escuela de Comercio coruñesa.

Otras causas	2,59
Causa no aclarada o dudosa	18,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa

Tanto en los ataques políticos como en los sindicales, más que conseguir daños económicos y personales, parece que se busca el valor simbólico, dar un aviso a un oponente o a la ciudadanía de que “la cosa va en serio” y alarmar. Este tipo de actividades encaja, dentro de la clasificación de Pape, con un terrorismo demostrativo, más que destructivo o suicida¹⁶⁵⁴. Habitualmente, las bombas se dejaban en el objetivo de noche preparadas para detonar un tiempo después, y en lugares poco transitados a esas horas. Cuando el ataque era contra un edificio habitado, el explosivo solía dejarse fuera. Esto hacía que a los responsables les fuese más fácil cometer el acto y escabullirse sin ser detenidos, pero al mismo tiempo disminuía la posibilidad de que algún transeúnte resultara herido.

Por poner un ejemplo de contexto de una campaña de atentados saliendo de nuestra muestra, el conflicto de la flota moañesa de la sardina en 1933-1934, en base a la aplicación de la ley de Seguros y Accidentes provocó huelgas de tripulantes y lock-outs patronales que mantuvieron los barcos parados catorce meses. La descripción de uno de los huelguistas habla de un atentado contra la casa de un esquirol, varios barcos petardeados por los huelguistas (y uno por la patronal) y viñas taladas¹⁶⁵⁵.

Algunos son explosivos químicos fabricados de manera casera y envueltos en paquetes o bolsas, como uno encontrado en Vigo que tenía “de forma cilíndrica, de unos doce centímetros de largo por cinco de ancho. La coraza, de base sólida, es un trozo de hierro del que se usa para las “balas” de oxígeno”¹⁶⁵⁶. En otros casos se trata simplemente de cartuchos de dinamita, fáciles de conseguir en la época pese a la cada vez más restrictiva legislación sobre explosivos, aunque no hay motivos para pensar que tuviese la dimensión simbólica de la que gozó entre algunos terroristas políticos del XIX¹⁶⁵⁷. Los cartuchos se encontraban en las casas de campesinos y marineros que los empleaban para desmenuzar rocas, para pescar o para abrir troncos¹⁶⁵⁸; un joven de Folgoso perdió la mano en 1925 cuando intentó usar uno como petardo para celebrar la víspera de la fiesta del Carmen¹⁶⁵⁹.

En al menos un caso, la observación del lugar de los hechos llevó a pensar que se había empleado una bomba de metralla, cargada de clavos o balines¹⁶⁶⁰. Pero no es algo habitual, y este atentado en concreto, en el que hubo dos heridos, desencadenó una represión más intensa de lo habitual. El procedimiento de detonación de los explosivos parece ser casi siempre por mecha de ignición.

¹⁶⁵⁴ El terrorismo demostrativo estaría dirigido mayoritariamente a obtener publicidad para reclutar más activistas, llamar la atención de los moderados del otro bando sobre los agravios denunciados, o conseguir que terceras partes ejerzan presión sobre el oponente; los que lo emplean “often avoid doing serious damage so as not to undermine sympathy for the political cause”. El terrorismo destructivo buscaría causar daño real a los oponentes, el suicida maximizar la coerción aún a riesgo de perder el apoyo de su propia comunidad. PAPE, R. A. (2009), pp. 160-161.

¹⁶⁵⁵ PÉREZ ÁLVAREZ, L. (2015), pp. 80-89.

¹⁶⁵⁶ FV, 25-01-1935, pp. 5.

¹⁶⁵⁷ Según Iviansky, llegó a identificarse con el movimiento revolucionario más allá de los aspectos prácticos. Así, por ejemplo, se habría elegido para un atentado frustrado contra el zar Alejandro II antes que una pistola, más barata y segura, por su carácter simbólico. IVIANSKY, D. (2009), pp. 11-12.

¹⁶⁵⁸ FV, 20-05-1936, p. 8.

¹⁶⁵⁹ FV, 21-09-1925, p. 8.

¹⁶⁶⁰ LV, 06-01-1920, p. 1, EP, 09-01-1920, p. 6.

Por una falsa noticia de bomba, que resulta ser publicidad de un detergente¹⁶⁶¹, sabemos que ya en 1925 se conocía la técnica de transportar los explosivos en un carro blindado hasta un lugar seguro para proceder a desmontarlos una vez allí, pero no nos consta que hubiese vehículos de ese tipo en Galicia, y en casi todos los casos los explosivos no se detectan hasta que estallan. Cuando las autoridades acudían al lugar, lidiaban con las bombas como mejor sabían. Tras una explosión en un taller de Bouzas en el marco de una huelga, los guardias que acudieron encontraron dos artefactos sin estallar “con las mechas medio quemadas”, y simplemente las arrancaron¹⁶⁶². José Arruty, guardia urbano de Vigo, detectó un explosivo colocado en una droguería por el humo que salía de su mecha, se acercó y la cortó con “con una [sic] pequeñas tijeras que llevaba”; ya había desactivado anteriormente otra bomba colocada en la casa de un armador en una huelga anterior¹⁶⁶³. En otro caso, una pareja de la Guardia Civil encontró una bomba en un transformador y la arrojó “en una “leira” próxima, y al cabo de una hora, viendo que no estallaba, fue recogida de nuevo”¹⁶⁶⁴. Las bombas inutilizadas o que no habían sido encendidas se trasladaban a instalaciones militares.

En cuanto a los ataques a lugares sacros, apenas están presentes en nuestra base de datos antes de la Segunda República. En 1920 no encontramos ningún caso, pese a la intensidad de la violencia sindical de ese año. En 1925 solo hay dos casos de atentados con explosivos contra capillas: una de un propietario privado, en Trabada, y otra, en construcción, en Abadín. En enero de 1930, un desconocido incendió la ermita de Os Remedios en O Cesar, Sarria. En los dos primeros, puede tratarse de animosidad contra los propietarios más que de anticlericalismo, y el tercero quizás sea un acto de vandalismo o incluso un incendio accidental por parte de algún vagabundo.

El inicio de la Segunda República vino acompañado de algunos atentados anticlericales. El 13 de mayo de 1931 una manifestación obrera asaltó varios edificios eclesiásticos en A Coruña, buscando supuestas armas escondidas, y desalojaron a los ocupantes¹⁶⁶⁵. Cuando intentaron volver, el 2 de julio, empezaron disturbios que incluyeron el incendio del convento de los Capuchinos y con varios heridos de bala por la represión de las autoridades¹⁶⁶⁶. Se produjeron otros incidentes en zonas rurales¹⁶⁶⁷.

Los ataques seguirían a lo largo del primer bienio republicano, en 1932 y 1933. En este segundo año, según el diario *Los Hijos del Pueblo*, ardieron trece iglesias en Galicia, todas ellas en A Coruña, Ferrol o sus inmediaciones; a lo que hay que sumar un atentado con bomba en el templo coruñés de San Andrés y otro en el palacio episcopal de Tui¹⁶⁶⁸.

En 1935 encontramos nueve casos de capillas, iglesias o similares incendiadas, atacadas con explosivos o asaltadas para destruir su interior; en 1936, la cifra aumenta hasta las 41, a lo que hay que sumar, como mencionábamos en un apartado anterior, otros ataques menores que no hemos incluido en nuestra base de datos. Por comparación, De la Cueva Merino cuenta 135 inmuebles

¹⁶⁶¹ “En una villa importante de esta provincia, en una de las calles más céntricas, fue hallada una bomba de grandes dimensiones con la mecha encendida (...) con grandes precauciones fue recogido el artefacto en un carro blindado y llevado al parque (...) la bomba en cuestión estaba cargada con 20 paquetes de una libra de polvos Jay, que se venden a 50 céntimos (...) limpian admirablemente los mármoles, lunas, loza, cristal y metales”. *EP*, 16-02-1925, p. 2.

¹⁶⁶² *FV*, 31-12-1935, p. 12.

¹⁶⁶³ *FV*, 25-01-1935, pp. 5, 9.

¹⁶⁶⁴ *EP*, 29-01-1920, p. 1. Otra versión señala que apagaron la mecha. *LV*, 03-02-1920, p. 2.

¹⁶⁶⁵ GRANDÍO SEOANE, E. (1998), pp. 41, 61-62.

¹⁶⁶⁶ HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R. (2009), pp. 288-291.

¹⁶⁶⁷ *La Voz de Galicia* del 21 de abril de 1931 informa de una capilla incendiada en el ayuntamiento de Trives, y el número del día siguiente, de un intento de incendio de un templo en Españaredo. HERVELLA GARCÍA, G. (1999), p. 213.

¹⁶⁶⁸ Citado en HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R. (2009), p. 294.

eclesiásticos dañados¹⁶⁶⁹. Aunque la mayoría de edificios eclesiásticos de Galicia nunca fueron atacados¹⁶⁷⁰, nuestra lectura es que en la Segunda República los ataques al patrimonio de la Iglesia, antes casi desconocidos en Galicia¹⁶⁷¹, se convirtieron en una herramienta reconocible del repertorio de acción política.

La hostilidad hacia la Iglesia no era nueva, por supuesto. Vemos sus rastros en la cultura popular gallega y española desde mucho antes de la Segunda República¹⁶⁷². Durante la transición del Antiguo Régimen al periodo liberal, la Iglesia católica española se opuso a los movimientos reformistas, y, en las primeras décadas del siglo XIX, al proceso de nacionalización y a los liberales, de manera que el clericalismo se configura como una opción política¹⁶⁷³. A partir de 1840, si bien la mayor parte de los católicos se alejan de las posturas más ultramontanas, los liberales más radicales van encaminándose hacia el anticlericalismo, que se convirtió, en palabras de Sanabria, en “a fundamental weapon in the discursive arsenal of liberal progressive Spain”. Una herramienta que en especial los líderes republicanos populistas emplearon para llegar emocionalmente a las masas a través de tópicos negativos referentes al clero (su riqueza, su inmoralidad, su supuesto papel como lastre inhibidos del desarrollo, la Inquisición) y conseguir apoyos¹⁶⁷⁴.

El anticlericalismo también fue, durante la Restauración, un rasgo de las culturas políticas obreristas. Según Maria Thomas, se correspondía tanto con la identificación de la Iglesia como aliada de poderes que consideraban hostiles (los propietarios, el Estado) como con el deseo de configurar una esfera pública y privada fuera de una influencia eclesiástica que entendían como opresiva: “a desire to break free from the Church’s pervasive influence was a common element of the overlapping network of political, cultural and social spaces which anarchist, socialist and republican workers’ groups opened from the late nineteenth century onwards”¹⁶⁷⁵.

En el siglo anterior a la Segunda República hubo varios episodios de violencia contra el clero, normalmente ligados a conflictos políticos entre fuerzas progresistas y reaccionarias¹⁶⁷⁶. En la primera década del siglo XX se expandieron de unos pocos núcleos hasta convertirse en un fenómeno nacional¹⁶⁷⁷.

¹⁶⁶⁹ DE LA CUEVA MERINO, J. (2012), p. 54.

¹⁶⁷⁰ La actual comunidad gallega cuenta con 3.600 parroquias, a lo que hay que sumar centenares de otras ermitas, capillas, monasterios, etcétera.

¹⁶⁷¹ Contrasta esto con la afirmación de Maria Thomas de que la quema de iglesias era, a la altura de la República, un tipo de acción colectiva con “a lengthy history in Spain, forming part of a “traditional” local protest repertoire”. THOMAS, M. (2013), pp. 54-55.

¹⁶⁷² Sobre la crítica al sacerdote y la religiosidad entre la población gallega, BERAMENDI, J. (2007), p. 52. Sobre el anticlericalismo popular en España, SHUBERT, A. (1999) p. 240-243, THOMAS, M. (2013), pp. 22. Sobre la campaña de pánico moral contra los sacerdotes pederastas en la Restauración, y las ansias contra el sacerdote como una presencia que acababa desvirilizando a los maridos a través de una esposa sometida a su guía espiritual, VÁZQUEZ GARCÍA, F. (2018), p. 775.

¹⁶⁷³ ÁLVAREZ JUNCO, J. (2001), pp. 336, 380.

¹⁶⁷⁴ En especial, Blasco Ibáñez y Lerroux. SANABRIA, E. A. (2009), p. 2, 98.

¹⁶⁷⁵ THOMAS, M. (2013), p. 34, 37.

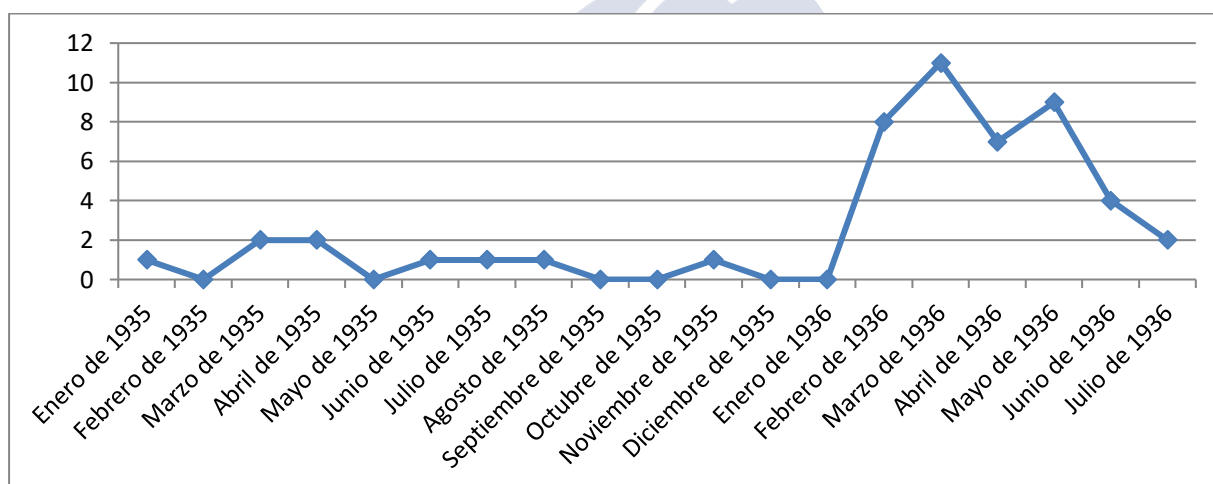
¹⁶⁷⁶ Así, encontramos ataques contra el patrimonio religioso y ejecuciones de religiosos durante el trienio liberal, en respuesta a las partidas absolutistas, o saqueos de iglesias y ataques a religiosos en la revolución de 1868. También asaltos durante disturbios populares, como los linchamientos de religiosos en el motín de Madrid de 1834 (en el que se acusaba a los jesuitas de provocar el cólera) o los ataques de la Semana Trágica barcelonesa. SANABRIA, E. A. (2009), pp. 22-30.

¹⁶⁷⁷ SANABRIA, E. A. (2009), p. 152. No entraremos en el análisis de la propia cultura de los católicos gallegos. Sobre este tema, RODRÍGUEZ LAGO, J. R. (2012).

En la Segunda República accedieron al poder grupos anticlericales que durante el periodo monárquico habían sido sistemáticamente excluidos¹⁶⁷⁸, lo que lógicamente redundó en una mayor difusión de sus discursos, un recrudecimiento de la lucha cultural y el paso, pionero en la práctica política española, de intentar laicizar el país y separar Iglesia y Estado. Y, en el ámbito concreto que nos interesa, los ataques directos contra el patrimonio eclesiástico también se multiplicaron, a partir de la famosa oleada de incendios de mayo de 1931: bien en momentos de tensión política o sociolaboral, bien tras provocaciones derechistas o falsos rumores, bien en revueltas de izquierdas: “la destrucción de símbolos religiosos se convirtió [...] en un hecho familiar a todo acto insurreccional en contra del Estado”¹⁶⁷⁹. A lo que se sumaría, recuperando a Thomas, las acciones de unas masas populares que empleaban estos actos para avanzar una agenda laicizadora que entendían que el poder realizaba de manera frustrantemente lenta¹⁶⁸⁰.

Al igual que todos los tipos de incidentes violentos que venimos describiendo, el número de ataques contra establecimientos eclesiásticos se recrudeció en 1936, si bien la tendencia no era puramente ascendente a lo largo del año. En enero no hay ningún caso, pero los ataques aumentaron en febrero-marzo y, en menor medida, en abril-mayo, para descender de nuevo en junio y la porción que conocemos de julio.

Gráfico 9.2.4 Ataques contra lugares sacros en Galicia, por mes



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

¿Podemos leer esto como un preludio o anticipación de las matanzas de sacerdotes de la zona republicana? En parte, en cuanto a la hostilidad que manifiestan. ¿Muestran que hubiese una campaña violenta de exterminio del clero? No, al menos en Galicia. Los ataques se dirigen contra símbolos y objetos, no contra personas. El más de medio centenar de ataques contra patrimonio eclesiástico no dejó ningún herido, y el uso de bombas fue minoritario; en general su propósito parece ser el de intimidar. Solo en un caso se emplearon contra un objetivo con personas dentro: durante la misa de la parroquia de Galdo, en Viveiro, estalló una bomba en abril de 1936¹⁶⁸¹, pero el

¹⁶⁷⁸ Al contrario de lo que ocurrió en Francia. SANABRIA, E. A. (2009), p. 31.

¹⁶⁷⁹ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (et al.) (2015), pp. 203-210.

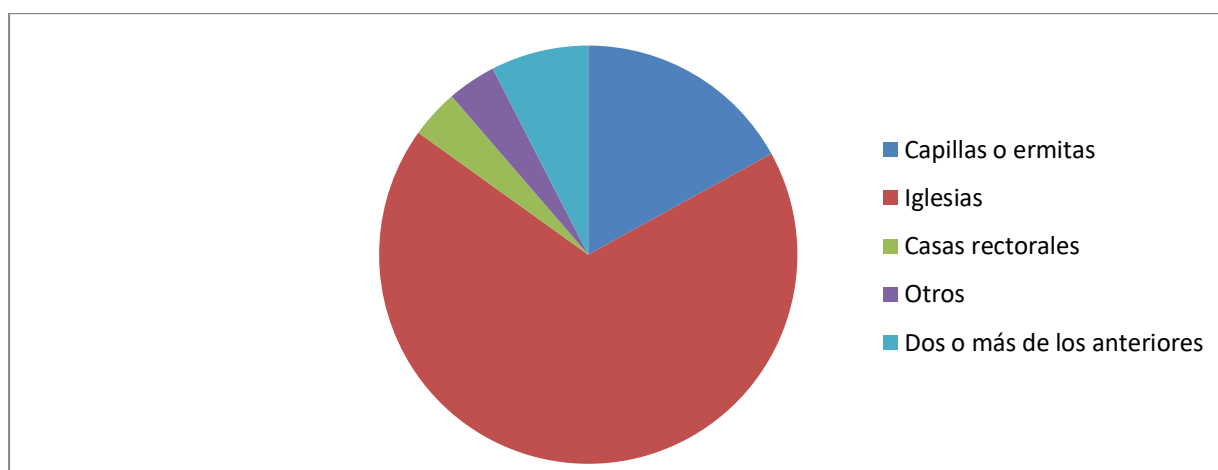
¹⁶⁸⁰ Para esta autora, los ataques al patrimonio eclesiástico servirían en momentos concretos para secularizar el paisaje o privar a la Iglesia de instituciones educativas o penitenciarias que, para los autores de los atentados, debían ser laicos. El triunfo electoral de 1936 habría venido acompañado de un aumento de asaltos puesto que se vería como una oportunidad política ante el bloqueo de los años anteriores. THOMAS, A. (2013), pp. 54-55, 59-61, 65, 69.

¹⁶⁸¹ EP, 08-04-1936, p. 6.

autor colocó el explosivo en la sacristía. De la misma manera, tenemos constancias de sacerdotes que denunciaron que fueron coaccionados o amenazados por sus vecinos para que abandonasen la parroquia, pero ninguno fue asesinado dentro de nuestros años de muestra, ni recibió heridas graves. Por ejemplo, tras la ola de ataques a iglesias en la vecindad de Ferrol en febrero de 1936, el obispo de Santiago escribe que “en ninguno de los asaltos e incendios hubo agresiones personales: únicamente estuvo en inminente peligro el párroco de Serantes, que, avisado, pudo huir precipitadamente” (un grupo de manifestantes asaltó y saqueó su vivienda)¹⁶⁸².

Aproximadamente dos tercios de los ataques son contra iglesias parroquiales o sus sacristías. El 17% son ermitas o capillas apartadas, que quizás fuesen presas tentadoras al estar apartadas de lugares poblados. Tenemos dos casos de ataques contra casas rectorales, otro contra un seminario y un cuarto contra la iglesia de un convento. Finalmente, cuatro edificios de diferente naturaleza fueron asaltados en los disturbios antieclesiásticos de A Coruña que luego mencionaremos.

Gráfico 9.2.5 Edificios eclesiásticos atacados según su tipo



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

En cuanto a la distribución provincial, la provincia con más ataques fue A Coruña (20), seguida de Lugo (14), Ourense (11) y Pontevedra (8). Sin embargo, Ourense y Lugo tuvieron más ataques que esta provincia en 1936 en relación a su población, mientras que Pontevedra ocupa el lugar de cola.

Tabla 9.2.11 Establecimientos eclesiásticos atacados por provincias para 1935 y 1936

	Casos en 1935	Casos por 100.000 habitantes en 1935	Casos en 1936	Casos por 100.000 habitantes en 1936
A Coruña	4	0,5	16	3,5
Lugo	1	0,2	10	3,7
Ourense	1	0,2	9	3,7
Pontevedra	3	0,5	5	1,5
Galicia	9	0,4	40	3,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Al contrario que en los homicidios o atentados con explosivos, los ataques contra establecimientos eclesiásticos son un fenómeno mayoritariamente rural: solo el 26,4% se da dentro de los municipios

¹⁶⁸² HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R. (2009), pp. 300-301.

de las siete ciudades gallegas. En esto probablemente haya una cuestión práctica (los templos aparatados eran un objetivo más fácil) pero tampoco debemos olvidar el carácter simbólico que tenían los ataques contra las iglesias en las zonas rurales, dentro del marco de una sociedad para la que la parroquia servía para relacionarse con el exterior, organizar los elementos comunes de la vida económica y ordenar las relaciones de sociabilidad. Suponía, en conjunto, un marco identitario¹⁶⁸³. El templo parroquial era un referente importante imbricado en esta identidad local, como lo era el inevitable sacerdote asignado a él de los marcos relacionales de los vecinos. Pero era también, obviamente, un símbolo de la Iglesia Católica, y en los años 30 había vecinos que no deseaban que la religión fuese parte de su comunidad (o, al menos, una parte dominante) u odiaban a su sacerdote.

En algún caso (no necesariamente aquellos relacionados con incendios y atentados con explosivos), un vecindario, o una parte sustancial de él, actuó en contra del párroco. En diversos puntos de Galicia, los párrocos fueron expulsados o coaccionados para abandonar la parroquia. En Rutis (Culleredo), el 6 de mayo de 1936, “un grupo de trescientos obreros asaltó la casa rectoral, que ha sido convertida en Casa del Pueblo”¹⁶⁸⁴. También hubo ocupaciones de propiedades parroquiales, como veremos en el apartado 10.4.

Pero creemos que la mayoría de los ataques se correspondían con comunidades divididas en cuanto a la cuestión religiosa. El ataque con cócteles molotov a la iglesia de Baldráns, en Tui, fue abortado por la intervención de algunos vecinos, que hicieron huir a los atacantes; y sin embargo fue detenido un joven de 20 años que era también vecino¹⁶⁸⁵. José Diéguez fue detenido en abril de 1936 por incendiar la iglesia lalinense de San Pedro de Castro, pero no era ningún líder local, sino un vecino al que ya se acusaba anteriormente de incendiar un pajar y tratar de hacer arder la casa de unos familiares suyos por resentimientos¹⁶⁸⁶.

Tabla 9.2.12 Establecimientos eclesiásticos asaltados en relación al municipio en el que se encontraban

Municipio	Establecimientos asaltados	Porcentaje
A Coruña	5	9,43
Vigo	0	0
Ourense	2	3,77
Pontevedra	0	0
Santiago	1	1,89
Lugo	1	1,89
Ferrol	5	9,43
Subtotal de las siete ciudades	14	26,42
Otros municipios	39	73,58
Total	53	100

¹⁶⁸³ Vease en lo referente a esto la obra del antropólogo Lisón Tolosana, si bien elaborada a partir de un estudio de campo realizado décadas después de las fechas que nos ocupan. Considera que en el rural gallego la identificación residía en la parroquia, más que en el municipio, y que esta suponía una agrupación con la endogamia y la identificación con las ánimas de los vecinos muertos como rasgos principales. LISÓN TOLOSANA, C. (1983), pp. 63, 109.

¹⁶⁸⁴ HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R. (2009), p. 311.

¹⁶⁸⁵ LV, 23-06-1935, p. 10.

¹⁶⁸⁶ LV, 12-04-1936, p. 10.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Más que a un sentimiento masivo de anticlericalismo, se corresponden con una minoría politizada que encontraba en estos años en los ataques a los templos su propia versión de la propaganda por la acción. Los ataques tenían fuerte carga simbólica y probablemente eran catárquicos y satisfactorios para sus autores, a los que podemos imaginar inmersos en una sociedad y sistema políticos más “reaccionarios” de los que les gustarían¹⁶⁸⁷. Como parte de una tendencia de este tipo de actos en toda la geografía española, podemos suponer que se sentían parte de un enfrentamiento ideológico global, pero que al tiempo se expresaba en lo local y tenían implicaciones personales y emocionales derivadas de esta dimensión.

Y, esto es importante, en general era anónimo y entrañaba pocos riesgos. El incendio de una iglesia está más próximo al vandalismo¹⁶⁸⁸ que al homicidio político. El ataque directo por parte de turbas a templos presentes en poblaciones es minoritario. Los únicos casos que conocemos se dieron en Ferrol, donde una muchedumbre atacó y quemó la iglesia de Serantes al poco de las elecciones¹⁶⁸⁹, y A Coruña la muchedumbre atacó y prendió fuego a los altares de la iglesia de los jesuitas¹⁶⁹⁰.

Resultaría interesante construir una tipología de los ataques aludiendo a los medios empleados y al modo de ataque, pero resulta difícil por la calidad de las fuentes. Los breves o las notas diocesanas que nos señalan que una iglesia ha ardido muchas veces no explican el cómo, a qué hora, ni a manos de qué sospechosos. Teniendo en cuenta estas reservas, el tipo de ataque más frecuente parece ser el incendio cuando el edificio está vacío; normalmente, por la noche.

Las fuentes más ricas nos muestran algunas variantes que empleaban los asaltantes: algunos lanzaban cócteles molotov¹⁶⁹¹, o rompían de la puerta para después prender fuego al altar mayor¹⁶⁹². En un caso ocurrido en Ordes en mayo de 1936, los atacantes se limitaron a apiñar madera ante la puerta principal y le prendieron fuego; como quizás era de esperar, las llamas no comunicaron al interior y la iglesia se salvó¹⁶⁹³.

Menos frecuente es el asalto directo al templo, para destruirlo o profanar los objetos de culto. Creemos que estos casos se dieron más bien en lugares sacros pequeños y apartados, contra los que un grupo de asaltantes podía despacharse a su gusto sin ser molestado. Por ejemplo, el 21 de enero de 1935 un grupo de desconocidos penetró en la capilla de As Lamas, en Barbadás, profanó y destruyó las imágenes y las abandonó en un prado¹⁶⁹⁴. En marzo o junio de ese año (no podemos

¹⁶⁸⁷ Refiriéndose a muestras de anticlericalismo en la Galicia rural, Soutelo Vázquez propone repensarlas como “simples manifestaciones de violencia reactiva contra miembros de las elites locales para reafirmar el carácter arrollado de los hombres que desafiaban a los curules e imitaban a *modernidade* de los retornados”. La reafirmación viril tras estos actos nos parece un enfoque interesante; en nuestra opinión, se puede aplicar a las juventudes politizadas de izquierdas que atacaban símbolos de la iglesia, de la misma manera que se hace con los grupos radicales que practicaban la violencia callejera durante la 2ª República. VÁZQUEZ SOUTELO, R. (2014), p. 255.

¹⁶⁸⁸ Deberíamos considerarlo, de hecho, parte de un continuo que se inicia en las pintadas o pedradas contra la iglesia, continúa con el derribo de cruceros y los pequeños destrozos nocturnos, y en algunos casos llega a la destrucción total del templo a través del fuego o de la dinamita.

¹⁶⁸⁹ Concretamente, el 26 de febrero. HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, J. R. (2009).

¹⁶⁹⁰ Según el obispo de Santiago también hubo fuegos, rápidamente sofocados, en otros establecimientos religiosos de la ciudad: la colegiata, la capilla y la residencia de los padres redentoristas y un edificio de los padres terciarios.

¹⁶⁹¹ Por ejemplo, en el incendio de la iglesia de Baldranes, en Tui, LV, 23-06-1935, p. 10, o en el del ataque contra el templo parroquial en San Pedro de Visma, en A Coruña LV, 05-07-1935, p. 5.

¹⁶⁹² FV, 16-04-1935, p. 2, 17-04-1935, p. 4

¹⁶⁹³ EP, 08-05-1936, p. 2, HF

¹⁶⁹⁴ LR, 29-01-1935, p. 6, FV, 26-01-1935, p. 6.

señalar el día exacto), una ermita de Fisterra fue saqueada e incendiada, con objetos arrojados al camino.

Algunas iglesias recibían ataques reiterados que probablemente indiquen vecindarios especialmente anticlericales o disputas personales con un clérigo concreto. La de Sequeiro recibió un ataque con bomba y fue incendiada unos días más tarde¹⁶⁹⁵. De la iglesia parroquial de Caranza, quemada el 20 de febrero de 1936, el obispo de Santiago escribe que “ya fue incendiada esta iglesia otras cinco veces, desde el 12 de agosto de 1932” (los ataques anteriores habían sido de menos consideración)¹⁶⁹⁶.

9.3 Huelgas y motines de subsistencia (1920)

El año 1920, como hemos visto, presenta índices de violencia sociopolítica que no veremos en nuestra muestra hasta 1936. La causa principal, y en la mayor parte de los índices elaborados, mayoritaria, fueron las huelgas obreras y su represión. En el marco de huelgas, o en venganza por ellas, sucedieron el 64,1% de los hechos violentos sociopolíticos, el 65,1% de las bombas colocadas y el 38,16% de los heridos, y también la mayoría de los homicidios.

Tabla 9.3.1 Casos de heridos, homicidios, explosivos utilizados en atentados y ataques a lugares sacros en Galicia en 1920, en casos anualizados por 100.000 habitantes

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Heridos	5,79	1,28	5,09	1,5	3,58
Explosivos	2,96	0	3,39	1,5	2,02
Ataques a lugares sacros	0	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Tabla 9.3.2 Porcentajes de hechos violentos sociopolíticos, atentados, heridos y muertos en 1920 en Galicia según la causa del suceso

	Hechos	Bombas	Heridos	Homicidios, contando dudosos	Homicidios, descontando dudosos
Por una huelga obrera, o derivada de ella	64,1	65,12	38,16	53,33	72,73
Otros actos violentos derivados del obrerismo (celebración del 1 de mayo, choques entre sindicatos)	5,13	4,65	6,58	0	0
Motín o protesta de Consumos (aunque lo convoquen asociaciones obreras)	3,85	2,33	21,05	0	0
Ligados al movimiento agrario o al proletariado rural	7,69	2,33	10,53	13,33	9,09
Móviles políticos o electorales	8,97	9,3	19,74	20	18,18
Otras causas	3,85	4,65	2,63	13,33	0

¹⁶⁹⁵ LV, 27-03-1936, p. 9. Sobre los posibles antecedentes EP 04-03-1936, p. 6, EP 04-05, p. 6.

¹⁶⁹⁶ HERNÁNDEZ FIGUEIREDO (2009), p. 301.

Causa no aclarada o dudosa	6,41	11,63	1,32	0	0
----------------------------	------	-------	------	---	---

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa

Esta intensidad relativa de la violencia obrera requirió antes un proceso de sedimentación y organización del obrerismo. Las dos primeras décadas del siglo XX habían servido para extender la afiliación e incorporar al repertorio de acción colectiva modalidades de acción de masas, especialmente el mitin y la manifestación, de presión económica y social a través de la huelga y el voto, y de actividad terrorista, especialmente el sabotaje y la bomba, con asesinatos puntuales.

Al contrario que en otras partes de España, en particular Barcelona, Galicia no vivió campañas terroristas de ideologías de izquierdas a finales del siglo XIX¹⁶⁹⁷, ni un fenómeno comparable a la oleada de violencia que vivió la ciudad en 1904-1908¹⁶⁹⁸. Según Míguez Macho, el pico de conflictividad huelguística en Galicia se produce en 1919-1923, tanto por causas endógenas como exógenas al obrerismo, en el “período final de la Restauración, grave crisis de postguerra y momento de madurez organizativa y extensión territorial del movimiento obrero”¹⁶⁹⁹. Para Barrio Alonso, la debilidad del Estado no proporcionó cauces de integración al movimiento sindical, por lo que “el revolucionarismo terminó imponiéndose sobre el reformismo”¹⁷⁰⁰. Por otra parte, González Calleja señala que en esta época los conflictos tenían un carácter eminentemente sociolaboral; tras la Dictadura de Primo de Rivera ganaría importancia la dimensión política¹⁷⁰¹.

Detengámonos en la cuestión económica. La economía española se había expandido en los años de la Gran Guerra por las exportaciones, si bien estas cayeron un 40% en 1919-1922¹⁷⁰². Los efectos macroeconómicos no fueron devastadores: la renta nacional neta continuó su crecimiento en 1919 y 1920¹⁷⁰³. Pero el aumento de las exportaciones durante la guerra había provocado desabastecimiento y un fuerte proceso inflacionario ya durante la guerra que perjudicó a los perceptores de salarios. Entre 1913 y 1918, según Martorell Linares, el índice de precios subió de 100 a 218, y el de salarios solo de 100 a 125¹⁷⁰⁴. El aumento fue inferior al de otros países europeos, pero se produjo tras el largo periodo de estabilidad de precios de 1873-1913¹⁷⁰⁵. En 1919 la oferta monetaria aumentó un 13,5%; en 1920, otro 14%¹⁷⁰⁶.

Gráfico 9.3.1 Índice de precios de consumo para diferentes artículos en España entre 1913 y 1922

¹⁶⁹⁷ AVILÉS, J., HERRERÍN, Á. (2010).

¹⁶⁹⁸ En base a grupúsculos anarquistas. DALMAU I RIBALTA, A. (2012), pp. 162-164.

¹⁶⁹⁹ MIGUEZ MACHO, A. (2008), pp. 216, 222.

¹⁷⁰⁰ BARRIO ALONSO, A. (2006), p. 156.

¹⁷⁰¹ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2005), p. 387.

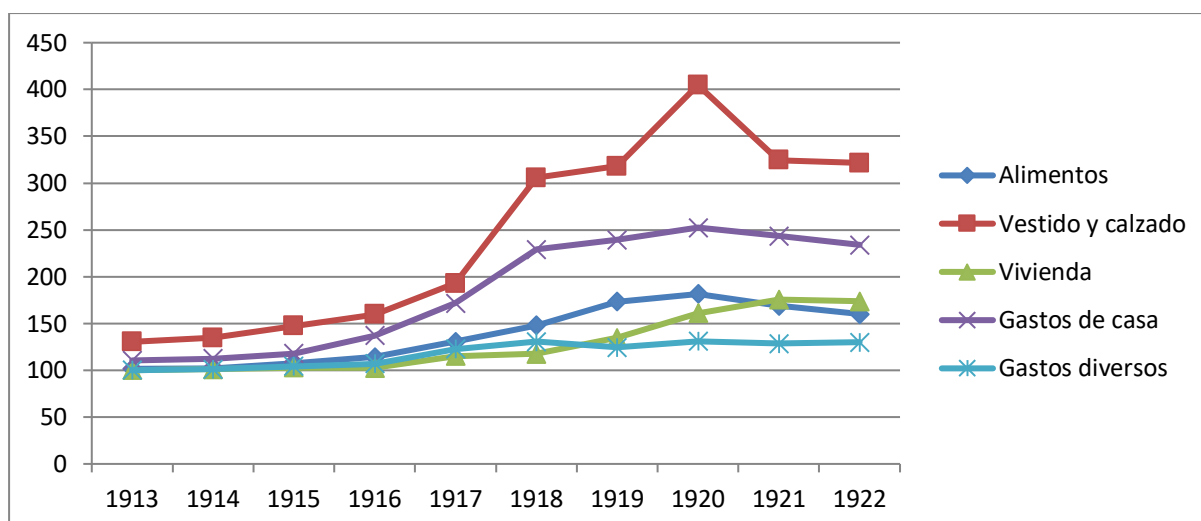
¹⁷⁰² PAREJO BARRANCO, A., SÁNCHEZ PICÓN, A. (2007), p. 117.

¹⁷⁰³ MARTÍN ACEÑA, P. (1984), p. 45. Sobre el crecimiento económico, urbano e industrial español en las tres primeras décadas del siglo, PALAFOX, J. (1997), pp. 63-78.

¹⁷⁰⁴ MARTORELL LINARES, M. (2011), p. 32.

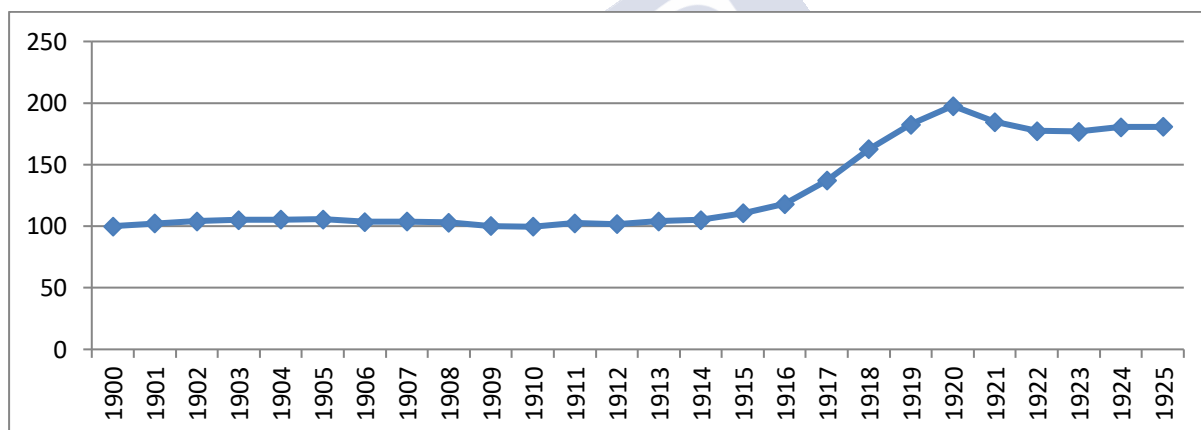
¹⁷⁰⁵ Para una comparación entre ambos periodos, y un análisis de las políticas y características de la inflación hasta 1936 MALUQUER DE MOTES, J. (2013), pp. 65-72.

¹⁷⁰⁶ MARTÍN ACEÑA, P. (1984), p. 48.



Fuente: Elaboración propia a partir del índice de Maluquer de Motes¹⁷⁰⁷

Gráfico 9.3.2 Evolución del índice general de precios de consumo en España entre 1900 y 1925



Fuente: Elaboración propia a partir del índice de Maluquer de Motes

Las protestas contra la falta de subsistencias, el aumento de precios o las quejas contra la extracción de productos alimenticios desencadenaron una oleada de motines en Galicia a partir del verano de 1917, con algunos incidentes de consideración. Dos jóvenes resultaron muertos por disparos de la policía en una manifestación en Ferrol el 11 de marzo de 1918, y dos días después, en el vecino ayuntamiento de Neda, la Guardia Civil causó otros siete muertos reprimiendo una protesta, como ya hemos visto en el apartado 8.5¹⁷⁰⁸.

Sin embargo, este ciclo de protestas enfocadas hacia las subsistencias remitiría en la primavera de 1919, según Eliseo Fernández¹⁷⁰⁹, lectura con la que coincidimos parcialmente con este autor; en 1920 siguieron existiendo, si bien es posible que no fuesen tan frecuentes como en los años anteriores. No tanto así en su conclusión para los años siguientes: considera que, gracias a la

¹⁷⁰⁷ MALUQUER DE MOTES, J. (2013), pp. 95.

¹⁷⁰⁸ También hubo incidentes en Santiago, si bien sustancialmente menos graves. PEREIRA, D. (2012), p. 174.

¹⁷⁰⁹ FERNÁNDEZ, E. (2016), pp. 84-85.

experiencia rusa de 1917, los obreros pasaron tras 1917 de una lógica de motines de subsistencias a la “maior preparaçao e objetivos revolucionários das greves operárias”¹⁷¹⁰.

La exigencia de un cambio de gobierno no se encuentra los actos violentos obreristas de 1920, al menos en nuestras fuentes, y tampoco hemos registrado aspiraciones a hacerse con la propiedad de los medios de producción. El alcance no es revolucionario, como en 1917: no encontramos huelgas generales con objetivos políticos que se extiendan por varias localidades. En 1920 hubo huelgas propiamente políticas y solidarias, para pedir la liberación de los detenidos en un motín local¹⁷¹¹ o en respuesta a muertes de obreros o represión de las autoridades en un momento anterior, pero la motivación más frecuente de los paros laborales era la mejora de las condiciones laborales, y, en concreto, los salarios.

Además, la experiencia más reciente de una huelga general con carácter revolucionario entre la población gallega era precisamente la de agosto de 1917, que buscaba derrocar al Gobierno y renovar el sistema político. Para comprobarlo no hay más que leer las palabras firmadas por Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y Andrés Saborit, firmantes el 12 de agosto del manifiesto de convocatoria¹⁷¹². Y, si bien fue posterior al inicio de la Revolución Rusa, el primer ministro en San Petersburgo todavía era Kerenski. En Galicia, la huelga revolucionaria causó algunos atentados y disturbios, centenares de detenciones gubernativas y algún muerto¹⁷¹³, pero, a la hora de conseguir un cambio político, fue una experiencia fallida. Mostró, sin embargo, como afirma Míguez Macho, “a fortaleza da disciplina e a extensión da organización obreira”, con una semana de paro en las ciudades y principales villas gallegas.

Volvamos a la situación económica. No queremos explicar la actividad huelguística o violenta en torno a la miseria. Los indicadores económicos sí nos señalan que la inflación obligaba a renegociar salarios en base a cifras elevadas. De Ojeda Eiseley calcula, tomando como 100 los precios de 1909-1914, que el “índice de coste de la vida del obrero en las capitales de provincia” españolas era de 197,7, el pico más alto hasta la Guerra Civil (en 1930 era de 168,9, y en 1935, de 171)¹⁷¹⁴.

Los precios se ajustaban dinámicamente, pero los salarios industriales dependían de la negociación colectiva, y cada una de estas, debido a la tasa acelerada de inflación, planteaba ajustes de sueldos altos que suponían altos beneficios o pérdidas para patronos o trabajadores, en base a su capacidad negociadora. Los trabajadores de la construcción de Tui, en noviembre, se plantaron a cambio de un aumento salarial del 25%. Consiguieron un 20% tras unas pocas jornadas¹⁷¹⁵, el mismo aumento que consiguieron los sastres de Ourense tras una huelga sin incidentes graves¹⁷¹⁶. Si los precios se habían duplicado en una década, y los aumentos salariales a negociar en un momento dado eran en base a incrementos del 20 o 25% de la nómina, no es de extrañar que los trabajadores se mostrasen dispuestos a ir a la huelga más que en otros años en los que las ganancias potenciales eran menores.

¹⁷¹⁰ FERNÁNDEZ, E. (2016), p. 92.

¹⁷¹¹ En agosto en Vilagarcía, FV 17-08-1920, p. 2.

¹⁷¹² “Pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivos y moderador y prepare, previas las modificaciones imprescindibles de una legislación viciada, la celebración de elecciones sinceras, de unas Cortes Constituyentes que aborden, en plena libertad, los problemas fundamentales de la constitución política del país. Mientras no se haya conseguido este objetivo, la organización obrera se halla absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de huelga”. Manifiesto para la huelga de agosto de 1917, extraído de LACOMBA, J. A. (1970), pp. 251-254.

¹⁷¹³ En concreto, el ourensano Antonio Pérez Pérez, a manos de la Guardia Civil. FERNÁNDEZ, Eliseo (2016), p. 86.

¹⁷¹⁴ DE OJEDA EISELEY, A. (1988), p. 54.

¹⁷¹⁵ FV, 14-11-1920, p. 2, 18-11-1920, p. 2.

¹⁷¹⁶ LR, 22-10-1920, p. 2.

Ahora bien, esto es solo parte del asunto. La acción colectiva sindical y la violencia que formaba parte de ella en la Galicia de 1920 no se explica sino por la existencia de un grupo, que se entendía a sí mismo como clase obrera, que había desarrollado una solidaridad interna y tenía a su disposición un repertorio de acciones de protesta que les proporcionaban perspectivas realistas de conseguir sus objetivos. La clase obrera no era, evidentemente, una masa uniforme, y aún dentro de sus vanguardias políticas había tirantez: en A Coruña, por ejemplo, la hegemónica CNT boicoteaba en 1920 a los familiares de las trabajadoras de la Fábrica de Tabacos que se habían unido a UGT¹⁷¹⁷.

Pero el grado de coordinación a lo largo del territorio español es notable. A mediados de enero de 1920, la prensa coruñesa dejó de publicarse porque los tipógrafos de los cuatro diarios locales se negaban a incluir un anuncio de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa para la provisión de guardias jurados, aviso contra el que había llamado al boicot un acto sindicalista “celebrado en Madrid”¹⁷¹⁸. Los propietarios de los diarios se negaron a ceder y no volvieron a salir hasta el 3 de febrero, tras unos veinte días de parón y después de que mediase el Gobernador Civil¹⁷¹⁹.

En la medida en que algunos colectivos habían implantado en sus mecanismos de movilización medios violentos de presión, o se encontraron con patronales que no querían ceder, la violencia relacionada con las huelgas se incrementó. La violencia sociopolítica se concentró en las ciudades, de manera destacada en Ourense, con motivo de la huelga de electricistas, y sobre todo en A Coruña. Otras urbes tuvieron choques de intensidad inferior, y en Lugo o Vigo todo el año transcurrió sin incidentes graves.

Tabla 9.3.3 Heridos y explosivos empleados en hechos violentos sociopolíticos en 1920, según el municipio en el que ocurrieron

	Heridos	Porcentaje	Explosivos	Porcentaje
Total	76	100	43	100
A Coruña	24	31,58	15	34,88
Vigo	3	3,95	0	0
Ourense	17	22,37	7	16,28
Pontevedra	3	3,95	2	4,65
Santiago	9	11,84	3	6,98
Lugo	0	0	0	0
Ferrol	1	1,32	2	4,65
Otros municipios	19	25	14	32,56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Tabla 9.3.4 Homicidios sociopolíticos en 1920, según el municipio en el que ocurrieron

	Contando casos dudosos		Sin contar casos dudosos	
	Homicidios	Porcentaje	Homicidios	Porcentaje
Total	15	100	11	100
A Coruña	8	53,33	8	72,73
Vigo	0	0	0	0

¹⁷¹⁷ FV, 24-01-1920, p. 2, LV 08-02-1920, p. 2, 10-02-1920, pp. 2-3, 12-02-1920, p. 2.

¹⁷¹⁸ EP, 15-01-1920, p. 8, FV 16-01-1920, p. 5.

¹⁷¹⁹ LV, 03-02-1920, p. 1.

Ourense	0	0	0	0
Pontevedra	1	6,67	1	9,09
Santiago	0	0	0	0
Lugo	0	0	0	0
Ferrol	0	0	0	0
Otros municipios	6	40	2	18,18
Subtotal de las siete ciudades	9	60	9	81,82

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

A Coruña supone un caso especial, debido a que la huelga de estibadores de ese verano derivó en una espiral de violencia. Mientras que en el resto de Galicia no hubo ningún muerto relacionado con una huelga obrera en todo el año, en el paro de los estibadores murieron ocho personas. Al contrario que en la mayoría de las acciones obreras, los huelguistas emplearon armas de fuego contra las fuerzas de seguridad, matando a dos policías. Los estibadores que siguieron el paro sindical y los contratados para romper la huelga se enfrentaron reiteradamente en las calles coruñesas. Los miembros de la colla patronal, que continuaban el trabajo, mataron a un huelguista y a un viandante en un enfrentamiento a tiros. Los sindicalistas asesinaron a tres esquirols en diversas emboscadas, y un cobrador de tranvías murió en un ataque con bomba cuando trabajaba después de que se convocase la huelga general en la ciudad¹⁷²⁰.

Se rebasaron, en fin, los límites habituales en los conflictos sociolaborales gallegos, pero fue un fenómeno limitado en el tiempo al verano de 1920. Ni en 1919 ni en 1921 hubo homicidios con carácter sociopolítico en la ciudad, aunque sí huelgas, atentados y peleas entre sindicalistas y amarillos¹⁷²¹, e incluso en 1920 la violencia contra las personas se concentró en unos pocos meses. Las huelgas de estibadores en otros puntos de Galicia en estos años no llegaron al pistolero reiterado de A Coruña¹⁷²². Quizás se deba a que en esta ciudad ya existían antecedentes de violencia en este gremio a lo largo de la década anterior, y a que ya se habían producido homicidios sociopolíticos antes¹⁷²³.

La huelga de estibadores de A Coruña no es representativa del nivel de violencia del obrerismo gallego de 1920. Por poner algunos ejemplos, la de la construcción en Vigo acabó en enero de ese año tras cuatro meses de paro¹⁷²⁴; la de Pontevedra, en julio, tras catorce¹⁷²⁵; en Santiago hubo otra

¹⁷²⁰ La huelga de septiembre de 1920 solo fue secundada por seis empleados de tranvías. Sobre la conflictividad en la Compañía de Tranvías coruñesa, a raíz de los despidos de huelguistas tras el paro de agosto de 1917, y sobre su historia de movilizaciones desde 1908, VELASCO SOUTO, C. F. (2014), pp. 38-42.

¹⁷²¹ CARBALLO GENDE, E. (2020-A).

¹⁷²² Hubo conflictos, sin muertos, en los puertos de Ferrol y Vilagarcía en 1915 y 1916, respectivamente, y en Vigo, en 1919. En 1920-1921 un nuevo conflicto en Ferrol incluyó agresiones, incendios y el asesinato del presidente de la asociación patronal y consignatario Nicasio Pérez. FERNÁNDEZ, E. (2016), pp. 88-89.

¹⁷²³ Emilio González, que se crió en A Coruña a principios de siglo, afirma que “la primera víctima de las luchas laborales en La Coruña” fue el patrono Ortiz, dueño de una fábrica metalúrgica y representante de la patronal coruñesa, que murió apuñalado el 29 de octubre de 1906. Cerca apareció, también herido de muerte, un zapatero anarquista de nombre Ramón Castiñeiras, del que González especula que lo mataron sus propios compañeros cuando quiso impedir el atentado. GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1987), pp. 26-27. El suceso seguía sin aclararse en la Segunda República, como señala el artículo de próxima publicación MÍGUEZ MACHO, Antonio: “Una colisión fina”. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepción e consecuencias (1890-1940)”.
¹⁷²⁴ FV, 08-01-1920, p. 1.
¹⁷²⁵ FV, 04-07-1920, p. 4.

de operarias que duró siete meses, y también estuvieron en huelga los estibadores de Ferrol¹⁷²⁶. Ninguno de estos casos derivó en dinámicas de pistolero. En Pontevedra, el patrono Avelino Iglesias, dueño de una función en Vigo, intercambió algunos disparos con un huelguista en enero, pero es el único caso de este tipo que registramos en la provincia en todo el año¹⁷²⁷.

La segunda huelga en nivel de violencia fue la de la sociedad eléctrica de Ourense, que dejó tres heridos. Un grupo de desconocidos, probablemente huelguistas ourensanos, sabotearon un poste eléctrico en Monforte a finales de febrero, dejando sin luz a la villa; los vecinos oyeron ruido y los espantaron a tiros¹⁷²⁸. Los obreros en huelga a la ciudad áurica fueron sustituidos por militares del cuerpo de ingenieros¹⁷²⁹. Un desconocido lanzó un petardo un cartucho de dinamita contra las instalaciones de la Sociedad Eléctrica ourensana la noche del sábado 13 de marzo. No causó víctimas, aunque una bala procedente de las fuerzas de guardias civiles y soldados que buscaban al atacante hirió a dos adolescentes, parte de un grupo de jóvenes que dormían en un alpendre cercano¹⁷³⁰. Poco después, un esquirolo fue herido con arma blanca¹⁷³¹. A esto hay que sumar varios atentados con explosivos contra instalaciones de la red eléctrica, pero ningún ataque con arma de fuego, y ningún herido grave. La huelga, por tanto, siguió las dinámicas generales de evitar la violencia personal.

El nivel habitual de violencia en las huelgas, motines y manifestaciones era todavía más limitado. Había boicots, destrozos de lunas y comercios, pero no violencia extrema. En enero, en Bueu, la recepción de un obrero detenido tras su puesta en libertad se convirtió en una manifestación política que acabó con un choque con la Guardia Civil y otros tres detenidos¹⁷³². En febrero los huelguistas de Vilagarcía, aserradores y obreros del puerto, apedrearon algunas fábricas, trataron de impedir que las mujeres llevaran comida a los que no seguían el paro e intentaron asaltar un barco griego estacionado en el muelle para que no se descargase¹⁷³³. En agosto, una nueva huelga en la localidad dejó un herido. Estos eran los incidentes tipo, junto con los atentados contra propiedades. En los casos en los que los paros se convertían en generales en una villa o ciudad, se añadían los bloqueos de campesinos que acudían a los mercados.

En paralelo, encontramos boicots y daños de escasa cuantía de los que sabemos menos, seguramente debido a que salían menos en las noticias. Al armador Rafael González, de Cangas, le talaron 119 cepas la misma noche en la que salió a faenar un barco de su propiedad tripulado por obreros no asociados, pues el sindicato de marineros local estaba en huelga¹⁷³⁴.

Los motines relacionados con las subsistencias y Consumos suponen algo más de una quinta parte de los heridos por violencia sociopolítica de ese año, pero se concentran en dos incidentes. Uno de ellos ocurrió en Santiago el 25 de marzo, en un conflicto que, si bien tenía que ver con los artículos de consumo, era proactivo y dirigido contra una tasa municipal. Las sociedades obreras convocaron

¹⁷²⁶ EP, 29-12-1920, p. 7.

¹⁷²⁷ EP, 08-01-1920, p. 6, EP, 10-01-1920, p. 6, LV 08-01-1920, p. 2.

¹⁷²⁸ EP 19-02-1920, p. 1, EP, 20-02-1920, p. 1, LV 19-02-1920, p. 1.

¹⁷²⁹ Según las quejas de una comisión de representantes del Centro Obrero, expuestas al Gobierno Civil. Los obreros afirmaban que la huelga se proloongaba porque el gerente de la empresa se negaba a reconocer un sindicato constituido por sus empleados, que “dicho gerente es a la vez comandante de Infantería con destino en la Zona de Allariz”, por lo que pedían que “se le obligue a trasladarse a dicho pueblo par que así pueda cumplir con sus deberes militares”. LR, 17-03-1920, p. 2.

¹⁷³⁰ Los heridos fueron Benjamín González, de 16 años, y Nemesio Blanco, de 14 años, “sin domicilio”.

¹⁷³¹ LV, 19-03-1920, p. 1.

¹⁷³² FV, 07-01-1920, p. 2.

¹⁷³³ Los patronos se encargaron de las descargas, protegidos por la fuerza pública. FV, 14-02-1920, p. 1, 22-02-1920, p. 1.

¹⁷³⁴ FV, 29-05-1920, p. 1.

un mitin para protestar contra un acuerdo contra el arriendo de consumos, que según acuerdo de la corporación iría a parar a un empresario local que era un “acaparador”. Tras el encuentro, fueron a presentar las conclusiones en manifestación al Ayuntamiento. Mientras una comisión hablaba con el alcalde, hubo un tumulto en la plaza del Hospital e intervino la policía, que los dispersó con una carga y disparos al aire. Tres agentes y cuatro obreros quedaron heridos de pedradas¹⁷³⁵. Siguió una huelga general con incidentes menores¹⁷³⁶ y la declaración del estado de guerra¹⁷³⁷.

Ourense tuvo su propio motín de subsistencias el 18 de mayo, éste más caótico. Ese día hubo un pequeño altercado porque las campesinas que acudían al mercado a vender hortalizas se negaban a “acatar las órdenes de la Alcaldía respecto a las horas de venta”. Desde el Ayuntamiento se había impuesto que no podrían vender a comerciantes de fuera de la villa antes de las nueve y media, para que los vecinos tuviesen derecho de compra preferente. Algunas se negaron a vender y coaccionaron a las que sí transigieron, “llegando incluso a la agresión y a la destrucción de mercancías”¹⁷³⁸. Un grupo se dirigió a la alcaldía para protestar y el alcalde les prometió “armonizar sus intereses con los del pueblo”.

Pero, a partir de ese alboroto, comenzaron a congregarse en torno a las diez de la mañana grupos que “daban mueras a la Junta de Subsistencias y a los acaparadores” y hablaban de saquear los almacenes. Un grupo, sobre todo de mujeres y niños, entró en uno de los almacenes de Puente Mayor y lo saqueó, siguiendo, también en la preponderancia femenina, las pautas de un motín tradicional en los términos de Tilly¹⁷³⁹. El cronista de *La Región*, medio que criticó la laxitud de la fuerza pública, se lamentaba de que los saqueadores pasaron con su botín “por delante de los municipales, de la guardia de Seguridad, de la Guardia civil, de los soldados” que habían sido desplegados.

Siguieron otros asaltos a almacenes y comercios, que fueron asaltados y saqueados. En los almacenes de Simeón García, varios dependientes intentaron repeler el asalto con disparos de revólver¹⁷⁴⁰. También se lanzaron pedradas contra la fuerza pública. A la Casa de Socorro acudieron nueve lesionados, dos de ellos de bala, a los que habría que sumar “muchos heridos, aunque no de cuidado”, que se curaron en las farmacias de la ciudad. El único herido de consideración fue el niño Cándido Pereiro, que recibió un balazo de *browning* en la pierna¹⁷⁴¹. En torno a las cuatro de la tarde la multitud fue dispersándose, quizás debido a que se había establecido la ley marcial.

Parece claro que los robos no se dedicaron a artículos de primera necesidad; también se robaron perfumes o sombrillas. “Daba pena ver, como hemos visto, a algunas mujeres con dos botas de un mismo pié o de diferentes números, que para nada le servían”¹⁷⁴². A Venerando Penedo, comerciante de la carretera de las Mercedes, “le llevaron todo su capital, que calcula en unas 8.000 pesetas”, así como géneros “de uso doméstico”, como la máquina de coser de su esposa¹⁷⁴³. La

¹⁷³⁵ EP, 27-03-1920, p. 1.

¹⁷³⁶ FV, 28-03-1920, p. 3

¹⁷³⁷ LV, 31-03-1920, p. 1 En 1920, además de estos incidentes, hubo otras 31 huelgas en Santiago, cuando la media de los años anteriores era de seis. PEREIRA, D. (2012), pp. 234-237.

¹⁷³⁸ LR, 18-05-1920, p. 2.

¹⁷³⁹ En Lucea Ayala y Bascuñán Añover encontramos la idea de la participación destacada de las mujeres en los motines del XIX, relegada progresivamente por las nuevas formas de movilización obrera. LUCEA AYALA, V. (2002), pp. 204-206, BASCUÑÁN AÑOVER, O. (105-108, 112). Cases Sola afirma que estas formas tradicionales no se extinguieron, y las mujeres siguieron participando en las combinaciones de protesta tradicional y moderna según los criterios de Tilly. CASES SOLA (2017), p. 262.

¹⁷⁴⁰ LV, 19-05-1920, p. 1.

¹⁷⁴¹ LR, 19-05-1920, p. 1, FV, 19-05-1920, p. 2.

¹⁷⁴² LV, 19-05-1920, p. 1.

¹⁷⁴³ LR, 21-05-1920, p. 2.

diversión del vandalismo o la oportunidad de conseguir ganancias materiales son motivos frecuentes para participar en los disturbios¹⁷⁴⁴.

En los días siguientes no se repitieron los saqueos, si bien los comerciantes cerraron los comercios en protesta ante la autoridad hasta que el gobernador militar dio orden de abrirlos “garantizando que nada pasaría”. Pero en la plaza de abastos no hubo movimiento, pues no acudieron las vendedoras rurales. Esto se achaca al boicot de “los agrarios”: “las pocas mujeres que consiguieron pasar con algún producto para la venta fueron objetos de coacciones y violencias”¹⁷⁴⁵. Finalmente, el decreto impidiendo vender a los acaparadores fue retirado¹⁷⁴⁶.

En este conflicto vemos que no hay un pueblo en sí mismo, sino varios grupos de intereses. El proletariado urbano quería productos baratos. Los campesinos de los alrededores, vender a los comerciantes, que les ofrecían un precio más alto. Sin embargo, sí que hay apelaciones a la economía moral, aunque por parte de los vendedores del mercado en el que se produjo el disturbio, no, como en los casos que se suelen señalar, de los usuarios. Los campesinos se justificaban en su incremento de precios en que ellos mismos se enfrentaban a la inflación de sus insumos. Si en Ourense querían tener “la plaza llena y abundante de todo lo que el agricultor procure”, y a precios bajos, afirman las campesinas de Lonia, Quintela de Canedo, Reza, Caldas y Velle en una carta colectiva dirigida al regidor ourensano, debía bajar el precio de los artículos de necesidad que ellas compraban, en concreto acordando “que la harina baje a los precios que tenía hace dos meses”¹⁷⁴⁷. “Usted sabrá, señor alcalde” señalaban las labradoras “que tenía el sulfato a diez pesetas la arroba, el azufre a seis, y fue elevado el precio, de una semana a otra, a catorce pesetas”.

Hay que señalar que el regidor no estaba de acuerdo con esos datos y desmintió las cifras. Según afirmaba, sería difícil abaratar el nivel de vida debido “la elevación de los salarios y la escasez de las cosechas”, sumada al resentimiento de la producción por “las huelgas y paros que con tanta frecuencia se suceden y la disminución de las horas de trabajo”¹⁷⁴⁸. Pero la misma petición de abaratamiento de subsistencias la repitieron los presidentes de los sindicatos y sociedades agrícolas ourensanos ante el Gobernador militar¹⁷⁴⁹, y el mensaje caló. Se creó una Junta de Abaratamiento para hacer bajar el precio, no tan solo de los alimentos, sino de los insumos agrarios como el sulfato y el azufre. La comisión, presidida por el primer teniente de alcalde, fue constituida desde arriba, en una reunión en el despacho del gobernador civil a la que acudieron la Junta Provincial de Subsistencias, el gobernador militar, la Cámara de Comercio y la Asociación Patronal; sin embargo, debía incluir “representantes de los propietarios, de los obreros, de las sociedades agrarias del término municipal, de los militares, del clero, de los empleados, de los farmacéuticos y de la prensa”¹⁷⁵⁰.

¹⁷⁴⁴ El autor señala asimismo que “once collective action has been initiated, it acquires a momentum of its own; even if people did not suffer from grievances, riots would attract and recruit participants (...) because they appeal to boredom, anger, frustration, desire for adventure; because they provide a ready-made opportunity to discharge feelings; because they furnish festive activity with the sanction of peers and under the aegis of principle”. TOCH, H. (1993), p. 198-199, 207.

¹⁷⁴⁵ LR, 20-05-1920, p. 2, LR, 21-05-1920, p. 2.

¹⁷⁴⁶ LR, 22-05-1920, p. 1.

¹⁷⁴⁷ LR, 22-05-1920, p. 2.

¹⁷⁴⁸ LR, 26-05-1920, p. 1.

¹⁷⁴⁹ LR, 23-05-1920, p. 2.

¹⁷⁵⁰ LR, 25-05-1920, p. 2.

En mayo hubo algunos rumores de un posible levantamiento obrero en Lugo, desmentidos por la prensa de la ciudad¹⁷⁵¹, que no parecen más fundados que los del establecimiento de la “República de los Soviets” en Portugal de ese mes de marzo¹⁷⁵². En la ciudad no se produjo ningún ataque con bomba en todo el año, y tampoco heridos o tiroteos. En septiembre se celebró una reunión extraordinaria del pleno municipal de la capital a petición de los obreros y relacionada con una huelga en el sector de la construcción, presidida por el Gobernador Civil¹⁷⁵³. El primer intento acabó con un “escándalo formidable”, tras el cual “la guardia civil desaloja la tribuna pública, los de Seguridad reparten algunos sablazos, y los guardias municipales evitan la entrada del público en los escaños”, pero en la segunda sesión los obreros se retiraron “con absoluto orden” y, tras recibir algunas promesas de mediación por parte de las autoridades, acordaron volver al trabajo en la mayoría de los puestos¹⁷⁵⁴.

La violencia puramente política fue limitada, y sus picos se correspondieron con las jornadas electorales. En enero murió un maestro de escuela del ya desaparecido municipio de Xeve, hoy anexionado a Pontevedra. El hombre, llamado Segundo Eduardo Corvacho, recibió un disparo mortal en la ingle en un choque entre bandos de distinta ideología que empezó en una taberna de madrugada y en el que también intervinieron el secretario del Ayuntamiento y un abogado¹⁷⁵⁵. Las elecciones municipales de febrero pasaron sin incidentes graves, si bien en Allariz se colocaron algunas bombas que no causaron daños personales¹⁷⁵⁶. En A Veiga, en agosto, un mozo llamado Darío Seoane apareció muerto tras una reyerta entre mozos de dos parroquias a las que algunos atribuyeron raíces políticas¹⁷⁵⁷.

En las elecciones a diputados de diciembre hubo más episodios de violencia, como hemos visto en el apartado 8.4. En Lugo se produjeron disturbios en Foz y Alfoz que obligaron a repetir los comicios¹⁷⁵⁸. En Ames un grupo atacó a palos y tiros un colegio electoral, dejando varios heridos y un elector muerto¹⁷⁵⁹. En la provincia de Ourense no hubo notas violentas, aunque sí denuncias de pucherazos en contra de Calvo Sotelo¹⁷⁶⁰. Cuando el día 23 se reunió la Junta Provincial del Censo para discutir las actas, el público, mayoritariamente a favor de los candidatos no gubernamentales, formó un alboroto.

“Hubo frases durísimas, bofetones, sillas por el aire”¹⁷⁶¹, y la Guardia Civil entró en el local “echando al público a la calle a culatazos”¹⁷⁶². Fueron despejados, y una manifestación acompañó a Calvo Sotelo, Barber, Barriobero y Durán hasta un hotel desde el que dieron un mitin improvisado. La multitud fue dispersada por guardias de Seguridad sable en mano, con al menos dos paisanos y un guardia herido. Siguió una huelga general de tres días en la ciudad. A la siguiente sesión sólo se dejó

¹⁷⁵¹ A raíz las declaraciones del 20 de mayo del ministro de Gobernación, Francisco Bergamín, que incluyó a Lugo entre las ciudades en las que se estaría gestando un alzamiento. Se puso en alerta a dos compañías de infantería de Ferrol para un posible traslado a la capital provincial. *EP*, 22-05-1920, p. 1.

¹⁷⁵² Así apareció en la sección de internacional de la prensa gallega. *EP*, 05-03-1920, p. 4.

¹⁷⁵³ El conflicto provenía de un desencuentro de los trabajadores de las obras del Círculo Mercantil y del Hospital y su contratista, que llevó a los trabajadores a un paro de varias semanas y desencadenó una huelga en solidaridad organizada por el Centro Obrero de la ciudad. *EP* 17-09-1920, p.1.

¹⁷⁵⁴ *EP*, 21-09-1920, p. 1.

¹⁷⁵⁵ *FV*, 03-01-1920, p. 2, 04-01-1920, p. 1

¹⁷⁵⁶ *LR*, 07-02-1920, p. 2

¹⁷⁵⁷ *LR* 20-08-1920, p. 2, 25-08-1920, p. 3, *EP* 21-08-1920, p. 6, *FV* 20-08-1920, p. 2.

¹⁷⁵⁸ *LV*, 21-12-1921, p. 1, *EP*, 22-12-1920, p. 1

¹⁷⁵⁹ *LV* 21-12-1920 (1), 26-12-1920 (3), *FV* 28-12-1920 (4), *ep*, 22-12-1920, pp. 6-7.

¹⁷⁶⁰ “Un colegio de Boborás, donde tiene el Sr. Calvo gran mayoría, no se abrió ni el 19 ni el 20, simulándose la elección con pucherazo”, entre otras irregularidades. *LV*, 22-12-1920, p. 2.

¹⁷⁶¹ *LR*, 27-12-1920, pp. 1-2.

¹⁷⁶² *FV*, 24-12-1920, pp. 1-2.

acceder a los candidatos y apoderados. Esta sucesión de violencias y actos luctuosos no debe llegar a pensar que no existiesen los actos pacíficos: en la campaña electoral de febrero hubo mítines y actos con normalidad¹⁷⁶³.

No entran dentro de la definición de violencia sociopolítica, pero como curiosidad, en 1920 también se producen conatos de motín en protesta por atropellos y por falta de tabaco.

9.4 Política, movilización y protesta durante el auge de la Dictadura (1925)

Uno de los años de nuestra muestra, 1925, se corresponde con un punto álgido de la Dictadura primoriverista, con el juego de partidos reprimido por el régimen. Una viñeta de Maside en enero de ese año, en la portada del Faro de Vigo, ironizaba “-Ya comprendo por que hay tan poca concurrencia en los cafés. ¡No se puede hablar de política!...”¹⁷⁶⁴. Por otra parte, seguía habiendo huelgas y algún acto político fuera de los partidos, como una asamblea en Teis para separarse de Lavadores¹⁷⁶⁵.

Tabla 9.4.1 Casos de heridos, explosivos utilizados en atentados y ataques a lugares sacros en Galicia en 1925, en casos anualizados por 100.000 habitantes

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Heridos	0	0,21	0	0,18	0,09
Explosivos	0	0,43	0,24	0	0,14
Ataques a lugares sacros	0	0,43	0	0	0,09

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Tampoco se peleaba violentamente por ella, como prueba la falta de enfrentamientos y bombas tan llamativa en comparación con un lustro antes. Sí que existía represión de actividad políticas y de la libertad de expresión: un sindicalista detenido en Tui por repartir “hojas clandestinas”¹⁷⁶⁶, un diario pontevedrés suspendido unos días por “publicar sueltos contraviniendo las órdenes de la censura” (sobre la noticia, otro medio publicó la viñeta “Iso de ser mudo é unha desgracia, pro non sei-o e non poder falar o qu’un quer”)¹⁷⁶⁷, otro de Vigo durante dos semanas¹⁷⁶⁸. Una censura extraña la del régimen, en el que los diarios no podían incluir determinadas informaciones, pero sí textos firmados en primera página quejándose de esa misma censura, pidiendo medidas políticas o la salida de los militares del Gobierno¹⁷⁶⁹.

Durante la Dictadura quedaron en general en suspenso las formas de lucha política violentas, pero no desapareció el juego político. Entre las élites, tomaban la forma de dimisiones. En Lugo, la corporación local dimitió en masa en enero y fue sustituida por el Gobernador Civil, aunque hay que enterarse del suceso por un medio de otra provincia¹⁷⁷⁰. Según señala en marzo la prensa local, se

¹⁷⁶³ Por poner algún ejemplo, el maurista en el teatro de Pontevedra. FV, 05-02-1920, p. 1.

¹⁷⁶⁴ FV, 31-01-1925, p. 1.

¹⁷⁶⁵ FV, 07-04-1925, p. 8.

¹⁷⁶⁶ FV, 15-05-1925, p. 2.

¹⁷⁶⁷ FV, 29-07-1925, p. 1.

¹⁷⁶⁸ FV, 09-08-1925, p. 7.

¹⁷⁶⁹ Algunos ejemplos en EP 15-09-1925, p. 1, 16-09-1925, p. 1, 24-09-1925, p. 1.

¹⁷⁷⁰ LV 14-01-1925, p. 4.

produjo la dimisión del presidente de la Diputación, José María Montenegro, según algunos por “la lista de los diputados designados últimamente” para constituir la corporación provincial. Cuando se supo la noticia, “varios concejales que son incondicionales suyos y que constituyen la mayoría de la Corporación municipal” lo visitaron y “pusieron a su disposición los cargos que desempeñaban”¹⁷⁷¹. A nivel ciudadano, la movilización ciudadana y la presentación de quejas continuaron existiendo a lo largo de los años 20, y en este sentido el periodo riverista no supuso una ruptura de conversión de la población española en ciudadanos.

También vemos algún motín sin heridos, como un tumulto en septiembre en el campo de la feria de Tui para impedir el embargo de una yunta de bueyes, en el que un guardia municipal fue agredido y una pareja de Seguridad “acorralada”, aunque una nueva pareja de la Guardia Civil despejó el campo¹⁷⁷². En Mugardos, medio centenar de mujeres se concentraron ante la Casa Consistorial protestando por el aumento del precio de las cédulas personales, hasta que las convencieron de presentar la reclamación ante Hacienda¹⁷⁷³. En otro caso, en Ares, una “manifestación pacífica figurando a la cabeza las mujeres” protestó contra el nombramiento de un cartero, consiguiendo que el alcalde cambiase su designación¹⁷⁷⁴. No destacamos este tipo de eventos de protesta de escasa violencia o sin ella porque sean novedosos, pues acontecían también en otros años estudiados; simplemente los usamos para recordar que la Dictadura no fue un marasmo en la movilización social.

En Sarria, en noviembre de 1925, la alcaldía emitió un impopular bando obligando a que todos los cerdos sacrificados en domicilios particulares debiesen ser reconocidos por el veterinario municipal, servicio que los usuarios debían abonar. El día 18 se organizó una manifestación de protesta “que formaban más de tres mil personas” (según los convocantes, “más de cuatro mil”), acaudillada por los pedáneos. Acudió la Guardia Civil, probablemente para proteger al Ayuntamiento, pero el comandante observó que “la cosa se deslizaba pacíficamente”: más tarde un corresponsal diría que hubo algunas palabras “cariñosas” entre los manifestantes, pero que, aunque los hombres llevaban piedras en los bolsillos de las chaquetas y las mujeres en los delantales, estas no llegaron a volar.

La benemérita pidió a los reunidos que designasen una comisión, o, según la versión, los propios pedáneos leyeron una serie de reivindicaciones que “unánimemente fueron aprobadas y aplaudidas por la concurrencia”. De cualquier manera, los alcaldes de barrio se presentaron ante el alcalde y el delegado gubernativo acompañados por el comandante de la Guardia Civil y reclamaron, además de la suspensión del bando, “otras peticiones de carácter político” y “la destitución de la Corporación municipal en pleno”. Más tarde sus peticiones se hicieron públicas en la prensa, y encontramos entre ellas, además de una declaración de adhesión al Directorio y petición de reformas de los arbitrios fiscales, que una comisión “elegida por las parroquias” revisase el presupuesto municipal, eliminando gastos “que no son absolutamente necesarios y reales”, para hacer disminuir las cargas sobre los vecinos¹⁷⁷⁵. Unos días después las presentó ante el Gobernador Civil una comisión formada por un concejal, Jesús Ferreiro López, “cuarenta y dos alcaldes pedáneos” y un número indeterminado de delegados de distintos lugares¹⁷⁷⁶.

¹⁷⁷¹ EP, 31-03-1925, p. 1.

¹⁷⁷² FV, 05-09-1925, p. 3.

¹⁷⁷³ LV, 21-01-1925, p. 3.

¹⁷⁷⁴ LV, 30-12-1925, p. 2.

¹⁷⁷⁵ En concreto, los manifestantes pedían substituir las exacciones municipales sobre carnes y alcoholes por el Impuesto substitutivo de Consumos, “no como hasta ahora, que fue arma caciquil”, sino por el modelo contemporáneo. EP, 20-11-1925, p. 1, 21-11-1925, pp. 2-3.

¹⁷⁷⁶ EP, 26-11-1925, p. 1

Continuaron existiendo huelgas. La más larga de 1925 en Galicia es quizás la de los mineros de Villadodríd, en la que, tras la intervención del Gobernador Civil, los obreros vieron aumentados en un 25% sus jornales¹⁷⁷⁷. También hubo paros sindicales entre los obreros de la carretera de Lugo a Portomarín, que “dada la justicia de su petición” el periodista entiende que “el conflicto quedará solucionado pronto”¹⁷⁷⁸. La dinamita sigue utilizándose para solventar conflictos particulares¹⁷⁷⁹, y hubo, como ya hemos mencionado, algún atentado anticlerical, pero los ataques con explosivos relacionados con huelgas, tan frecuentes a finales de la Restauración, desaparecieron.

Vemos a los delegados gubernativos ordenando algunos arrestos, valga la redundancia, gubernativos¹⁷⁸⁰. Rogelio Alonso Fernández, identificado como comunista, había sido desterrado a Monforte. En febrero se ausentó sin permiso del alcalde de la villa, a cuya autoridad estaba sometido, y fue detenido en Ourense por la Guardia Civil con algunas cuartillas “que contienen conceptos injuriosos para las autoridades”¹⁷⁸¹. El adjetivo comunista seguramente se encuentre más en el discurso gubernamental y periodístico para referirse a cualquier tipo de izquierdista, ya que la Federación Comunista de Galicia del PCE era en estos años un grupo muy reducido y con escasa implantación. Separados del socialismo y de la UGT¹⁷⁸², quedaron excluidos de cualquier posibilidad de participación institucional durante la Dictadura.

Tan solo hay dos casos en los que haya heridos en enfrentamientos sociopolíticos ese año. Un vecino de Tui, Telmo Rodríguez, fue herido a inicios de año en un “atentado sindicalista” en el aserradero Salcedo. Se le extrajo un proyectil del cerebro¹⁷⁸³. Del segundo caso tenemos bastante más información, y, aunque su carácter político sea dudoso, resulta más interesante, ya que arroja pistas sobre cómo seguían funcionando tensiones de naturaleza ideológica y societaria durante la dictadura. El sacerdote de Lózára, una parroquia de O Incio, llegó a su casa el 29 de mayo después de rezar la novena, con una herida de bala en el abdomen, y falleció dos días después en el hospital de Lugo. El cura, de nombre José Couso, afirmó antes de morir que el autor del disparo era a uno de los vecinos de su parroquia, Manuel Rodríguez, opuesto a él por la celebración de la novena en la parroquia y por cuestiones de sociedades agrarias. El muerto era consolidario del Sindicato Católico Agrícola de Lózára, y se hallaba enfrentado a otra Sociedad de Agricultores con delegación en la parroquia. Según se informó en un primer momento, Rodríguez, de “ideas avanzadas”, era secretario de esta. La sociedad quedó clausurada por orden gubernativa, varios miembros fueron detenidos y encarcelados y se requisó su documentación¹⁷⁸⁴. La Federación Católico Agraria de Lugo consideró al párroco muerto un “mártir” y aprobó honrarlo con varios homenajes y presentándose en el proceso como acusador privado¹⁷⁸⁵.

¹⁷⁷⁷ Esta se anunció en agosto de 1925. *EP* 29-08-1925, p. 2, *EP* 03-09-1925, p.1, 10-11-1925, p. 1.

¹⁷⁷⁸ Reclamaban, según la prensa, la jornada de ocho horas y aumentos de salarios, tanto para los obreros de tres categorías como para los pinches y mujeres. *EP*, 24-10-1925, p. 2.

¹⁷⁷⁹ Así, en mayo alguien colocó un cartucho de dinamita en un garaje de Ponte Ulla perteneciente a “D. José Fernández”. *LV*, 24-05-1925, p. 3. En agosto un desconocido hizo explotar la fuente de un balneario de Sarria con un triple cartucho; poco después, un vecino de As Nogais acusó a otro sujeto de inutilizarle un molino con explosivos. *LV* 22-08-1925, p. 5.

¹⁷⁸⁰ El de Quiroga envió quince días a la cárcel del partido al procurador de los tribunales Nicomedes Polanco Rodríguez en febrero de 1925. *EP* 24-02-1925, p.2.

¹⁷⁸¹ *EP*, 22-02-1925, p. 2, *LV* 25-02-1925, p. 5.

¹⁷⁸² Fruto de una escisión de miembros del PSOE partidarios de la Internacional Socialista en 1921, la Federación se constituyó el 30 de abril de 1923 y a finales de la década no llegaba a los 200 afiliados en toda Galicia. En 1922 los sindicatos “rojos”, ligados al Partido Comunista, fueron expulsados de la UGT, entre ellos algunos gallegos. Se volverían a integrar, a través de la CGTU, en 1932. SANTIDRIÁN ARIAS, V. M. (2016), pp. 66-69.

¹⁷⁸³ *FV*, 28-01-1925, p. 2.

¹⁷⁸⁴ *LV*, 07-06-1925, p. 1

¹⁷⁸⁵ *EP*, 31-05-1925, p. 1, 02-06-1925, p. 1.

La realidad resulta más compleja, pues el proceso desveló una red de lealtades, discusión de costumbres y problemas personales. Rodríguez era socio de la Sociedad de Agricultores, pero no estaba en la directiva ni era un miembro significado, más allá de haber ayudado alguna vez a cobrar las cuotas al delegado de la parroquia. Tampoco el delegado gubernativo tenía noticias de que fuese un “revolucionario”. Pero tras cometer su crimen le escribió una carta al presidente de esta, Manuel Celeiro, en la que le “solicitaba apoyo”¹⁷⁸⁶. De las declaraciones de los testigos queda claro que estaba enemistado con el cura y que habían disputado alguna vez, pero los motivos son más bien confusos: el sacerdote lo había reconvenido, lo llamaba “revolucionario”, se oponía a la celebración de bailes... Algunos, si bien sin significarse, afirmaban que había amenazado al muerto, otros lo defendían con afirmaciones más fundamentadas o más espurias. El pedáneo de Lózara, Vicente López, dijo al tribunal que apostaba siete mil duros a que Manuel era inocente; al día siguiente del supuesto crimen estuvo en casa del acusado para que lo afeitase, explicó, “y fue afeitado con pulso seguro”, ¿hubiera podido hacer eso alguien con un muerto sobre su conciencia?

El capitán de infantería José Armada Piñeiro, ex delegado gubernativo de Sarria a la fecha del juicio, vino a aclarar algunos de los puntos referidos a la animosidad societaria. Según afirmó en el juicio, cuando se formó la sociedad agraria que presidía Celeiro varios curas le pidieron que impidiese su formación, “por tratarse de una entidad de ideas disolventes”. Se negó, y los sacerdotes, entonces, decidieron constituir su propio sindicato católico. Armada trató de mediar para que se constituyese un sindicato único en la parroquia, pero si bien los agricultores “accedieron a todo lo que se les pedía”, incluido aceptar el nombre de “sindicato católico” para su sociedad, se negaron a que Couso formase parte del sindicato¹⁷⁸⁷.

Y es que el sacerdote era conflictivo en general. Varios parroquianos declararon que habían tenido problemas con él. Algunos, incitados o no por la sociedad de agricultores, se oponían al pago de las ofrendas a los difuntos y otras costumbres; el muerto, por ejemplo, recibía jamones por *esconxurar* el trueno¹⁷⁸⁸. Carmen Otero, convocada por la defensa, contó que “la maltrató el señor cura porque fue a cristianar la hija de una hija suya, moza soltera, y la llamó mala madre”. “Insultaba a los feligreses desde el altar”, dijo Santos Pereira Rodríguez, señalando un caso “en el que faltó a los difuntos del declarante”. “Riñó el cura a las jóvenes del pueblo por cantar en el entierro de una compañera”, narra Primitiva Vila, diciendo que “las mujeres no estaban contentas con el párroco”. Según el ex delegado gubernativo, una delegación de feligreses le pidió que lo trasladaran, y el cura denunció a varios parroquianos por pesca furtiva. Otro grupo de vecinos había llevado la queja al palacio obispal¹⁷⁸⁹.

El juicio, por tanto, se apartó de las disputas societarias como móvil. Los miembros de la sociedad agrícola detenidos no fueron procesados en el juicio, aunque al menos el presidente declaró como testigo¹⁷⁹⁰. En su alegato final, el fiscal alegó como motivo que el procesado había estado trabajando en los ingenios de caña de Cuba, y que “al volver, quiso imponer en las costumbres de su parroquia los calenturientos hábitos de los trópicos”, y la acusación privada tampoco acusó, al menos

¹⁷⁸⁶ El documento no aparece en el juicio porque la esposa del presidente la quemó. *EP*, 25-09-1925, p. 2.

¹⁷⁸⁷ *EP*, 25-09-1925, p. 2.

¹⁷⁸⁸ Es decir, por realizar algún tipo de ceremonia para impedir que el rayo afectase a las propiedades de los que le realizasen regalos. En la parroquia de origen de la familia del autor, en Taboada, esto seguía practicándose sobre la época de la Guerra Civil, según testimonios familiares.

¹⁷⁸⁹ *EP*, 25-09-1925, p. 2.

¹⁷⁹⁰ Otros cuatro vecinos de Lózara llegaron a ser procesados, si bien fueron puestos en libertad en un momento temprano del proceso. Eran los hermanos Francisco, José y Camilo González García y Manuel Celeiro Pereira. *LV*, 10-07-1925, p.1

directamente, a la sociedad laica de agricultores¹⁷⁹¹. Ambos reclamaban pena de muerte¹⁷⁹². La defensa se concentró en presentar testigos de que el acusado estaba en su domicilio en el momento de los hechos, y que el cura llevaba armas habitualmente, pues la argumentación principal del abogado era que el sacerdote se había herido a sí mismo por accidente¹⁷⁹³. Rodríguez fue condenado por homicidio, con agravante de ofensa a la dignidad de párroco¹⁷⁹⁴.

¿Tuvo su crimen naturaleza política? Hemos clasificado el caso como homicidio de carácter dudoso en nuestra propia clasificación, y esto resume nuestra opinión. En la violencia ideológica hay un componente de impulsividad y enfrentamiento personal, según ya hemos señalado en otra parte del texto, de manera resulta imposible trazar una línea perfectamente definida entre un homicidio político y otro por motivos particulares. Pero, entendiendo estos como polos ideales en un continuo, y en base a la información sobre este caso, creemos que tiende más hacia lo personal que hacia lo ideológico.

La cuestión societaria motivó que los contemporáneos le dieran a la muerte una posible lectura política que no concedieron a otros ataques contra sacerdotes que ocurrieron ese año. Ningún medio atribuyó un trasfondo ideológico al ataque al párroco de Carballo, Taboada, al que un feligrés apaleó pocos meses después¹⁷⁹⁵. Tampoco en el que sufrió el sacerdote de Noceda, en Lalín, al que un convecino de 40 años le colocó un explosivo en su domicilio¹⁷⁹⁶. En la atmósfera de la parroquia de Lózara hay un enfrentamiento en torno a la concepción del asociacionismo parroquial y las ofrendas; en torno a la concepción de lo que debe ser la sociedad aldeana, en suma, lo cual no deja de ser social y político. Pero la narrativa de sacerdote asesinado por un emigrante retornado de “ideas avanzadas” enfrentado a él quizás emerja más de los prejuicios de los observadores que de la realidad.

En el enfrentamiento entre los vecinos de Lózara y su párroco, aún con algunos visos de confrontación moral y de costumbres, hay incompatibilidades personales, no de principios. Recordando las palabras del ex delegado gubernativo, los vecinos no se negaban a formar una sociedad católica, se negaban a formar una sociedad en la que participase un párroco concreto al que estaban enfrentados. De Rodríguez, que nunca confesó, no sabemos los motivos impulsores del crimen, pero sus enfrentamientos con el muerto, en la medida en que se concretan, parecen referirse más bien a la celebración de bailes, una actividad más tradicional que revolucionaria. Recurrió al presidente de la sociedad agraria a la que pertenecía en busca de ayuda, pero nada apunta a que fuese incitado por él.

9.5 Violencia sociopolítica durante la caída de Primo de Rivera en Galicia (1930)

1930, el último año de la Dictadura, presenta un índice de violencia sustancialmente más elevado que 1925, pero aún así, sustancialmente más bajo que 1920 o 1936, y con solo un homicidio.

¹⁷⁹¹ EP, 26-09-1925, p. 1.

¹⁷⁹² FV, 25-09-1925, p. 8

¹⁷⁹³ EP, 26-09-1925, pp. 1-2.

¹⁷⁹⁴ En concreto, a 17 años, cuatro meses y un día, además de abonar 10.000 pesetas a la familia del muerto. LV, 30-09-1925, p. 2

¹⁷⁹⁵ EP, 08-12-1925, p. 1, 16-12-1925, p. 1.

¹⁷⁹⁶ El asunto pasó de la jurisdicción militar a la ordinaria y el autor, un convecino, solo fue condenado a ocho años pese a que se pidió la pena de muerte. Entendemos que el juez no le atribuyó carácter ideológico y no lo hemos clasificado como político. FV, 24-03-1925, p. 2, 08-08-1925, p. 1, 23-08-1925, p. 1, 24-09-1925, p. 8.

Tabla 9.5.1 Casos de heridos, explosivos utilizados en atentados y ataques a lugares sacros en Galicia en 1930, en casos anualizados por 100.000 habitantes

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Heridos	2,08	2,77	0,47	0,35	1,48
Explosivos	0	0	0	0,35	0,09
Ataques a lugares sacros	0	0,21	0	0	0,04

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Gráfico 9.5.1 Hechos violentos sociopolíticos en Galicia en 1930, según mes



Fuente: Elaboración propia a partir de prensa y bibliografía

Además, el invierno, primavera y verano transcurrieron hubo algunos incidentes de poca importancia: una agresión en enero, una ermita incendiada en febrero, una pelea por motivos políticos en Betanzos en agosto. La conflictividad se concentró en septiembre y octubre. El paro general universitario del 22 de enero de 1930, inmediato precedente de la dimisión de Primo de Rivera, no parece haber dejado incidentes graves en Santiago¹⁷⁹⁷, al contrario de lo que había ocurrido el año anterior en las protestas contra la Ley Callejo¹⁷⁹⁸.

¹⁷⁹⁷ En ese mes cerró sus puertas la facultad de Derecho “como protesta por la actitud del Dictador”. VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), p. 333.

¹⁷⁹⁸ En los disturbios de marzo de 1929, y después de que el Gobierno destituyera a todos los decanos y al rector de la Universidad de Madrid, los estudiantes de Santiago “cortaron la luz y el agua, saquearon la delegación del Gobierno Civil y el edificio de la UP [Unión Patriótica] y colocaron cuatro artefactos explosivos, no de ellos en la casa del rector”. La Universidad fue clausurada, junto con otras que habían destacado en las protestas. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009), pp. 111-113, 118. Perdieron la matrícula los alumnos de Fisiología, Derecho y Filosofía. La conflictividad de 1929 contrasta con la quietud de los años anteriores, que se vivieron en la universidad compostelana sin movilizaciones. VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), pp. 325-330.

La violencia política de este año se produce en septiembre, cuando cargos políticos de la Dictadura visitaron Galicia en un *tour* propagandístico para reunirse con los comités locales de la Unión Monárquica en banquetes, a medio camino entre el acto privado y el de masas¹⁷⁹⁹. Visitaron Galicia, entre otros, Rafael Benjumea y Burín y José Calvo Sotelo, y por el hijo del ex dictador, José Antonio Primo de Rivera; estos dos últimos fueron las caras visibles en los actos. Las fuerzas obreristas y republicanas respondieron con protestas que acabaron de manera violenta.

Las primeras paradas en villas de la costa Norte y en Ferrol transcurrieron sin incidentes, pero en A Coruña hubo en protestas, cargas policiales y un choque en la calle Real entre manifestantes y simpatizantes de la Unión Patriótica¹⁸⁰⁰. Los servicios médicos atendieron a nueve heridos, entre ellos dos guardias de Seguridad y un oficial, y parece que hubo más contusos, pero no se emplearon armas de fuego y no hubo casos de heridos graves¹⁸⁰¹. En algún momento Calvo Sotelo, según un biógrafo, derribó de un bastonazo a un individuo que lo estaba provocando¹⁸⁰². Se canceló un mitin en Vilagarcía “pues los inexpertos organizadores locales habían dejado que el teatro se llenase de republicanos”, pero Calvo Sotelo pudo realizar un acto sin violencia en Vigo y visitar algunas villas.

En Ourense, los alborotadores rodearon el teatro donde se realizaba el encuentro. Para llevar la comida a los comensales las fuerzas de seguridad tuvieron que dar varias cargas, y aún así algunos se colaron para derribar las fuentes hasta que los expulsaron¹⁸⁰³. Fuera del teatro hubo peleas entre simpatizantes y detractores, pedradas contra el diario de la Unión Monárquica y cierres de comercios, y después de finalizar el mitin “se produjeron incidentes a granel” en las calles adyacentes y en algunos cafés, “abundando las bofetadas y los bastonazos”. Un joven de Unión Monárquica fue herido “por dos republicanos”. Los coches que debían recoger a los conferenciantes no pudieron acceder, y salieron a pie, afrontando pitidos y gritos. Primo de Rivera “sacó una pistola ante la actitud levantisca de algunos grupos”, y Benjumea “presa de fuerte excitación, buscaba a los alborotadores para repeler la gritería, pero fue contenido por algunos de sus acompañantes”¹⁸⁰⁴.

Tras una cena y verbena propagandísticas sin incidentes en Celanova, Calvo Sotelo y Primo de Rivera fueron a Lugo. Una manifestación de protesta los estaba esperando. Cuando llegaron los recibió una “pita ensorcededora”, acompañada de insultos. Según el corresponsal de *La Voz*, empezaron a volar piedras, y una carga de Seguridad hizo correr al gentío. Se presentaron nuevas fuerzas con armas de fuego. “¿Se dieron los toques reglamentarios y preventivos? (...)” se pregunta retóricamente el corresponsal el periodista “se asegura que sí. Pero también se dice que el gentío arremolinado y

¹⁷⁹⁹ Los políticos participaban en una comida masiva con miembros de los comités locales de las ciudades que visitaban y de otros municipios menores, y luego impartían discursos a públicos más amplios. En Ourense, por ejemplo, se organizó una comida para unos quinientos comensales en el teatro Losada, y tras los postres los espectadores ocuparon los palcos y gradas para escuchar a los oradores. *LR*, 06-09-1930, p. 1.

¹⁸⁰⁰ Teresa Alvajar, entonces una niña, afirma que su padre, el republicano César Alvajar (gobernador en Soria cuando empezó la Guerra Civil), fue el que organizó las protestas, y que “había na casa unha caixa de cartón chea de asubíos e viñeron buscalos moitos mozos para recibiren o político”. También que un guardia a caballo le sacó un ojo a un manifestante, según un rumor que oyó. ALVAJAR LÓPEZ, T. (2012), pp. 40-41.

¹⁸⁰¹ Entre ellos dos guardias y un oficial de seguridad, según el *Faro*. El Progreso da el nombre de ocho heridos que acudieron a la casa de socorro del distrito de la Audiencia, entre ellos los dos guardias, y afirma que resultaron lesionadas “numerosas personas” que no acudieron a los servicios médicos. *FV*,

¹⁸⁰² Para una descripción de la gira en su conjunto, aunque no menciona los heridos en A Coruña, BULLÓN DE MENDOZA, A. (2004), pp. 257-262. Otra versión de los hechos, según la cual los disturbios fueron más graves pero en la que no se mencionan heridos, en GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1987), p. 289.

¹⁸⁰³ *LV*, 06-09-1935, p. 1.

¹⁸⁰⁴ *LR*, 06-09-1930, p. 5.

enardecido no llegó a oírlos”. Los guardias dispararon contra el gentío, dejando al menos tres heridos¹⁸⁰⁵. “Hubo palos, sablazos y pedradas a granel”, resume un diario local¹⁸⁰⁶.

Mientras la Unión Monárquica celebraba su reunión dentro del hotel Méndez Núñez, los afiliados del Centro Obrero dejaron sus puestos y salieron a la calle en una manifestación en principio pacífica: en esta ocasión fue la Guardia Civil la que abrió fuego, “al verse agredida a pedradas”. Otras tres personas resultaron heridas de bala, uno de ellos un muchacho de doce años. El gobernador Civil ordenó a Calvo Sotelo y a Primo de Rivera abandonar la ciudad para evitar nuevos accidentes. Se dice que hubo “numerosos heridos y contusos” que no se presentaron en los hospitales, así como detenciones en ese momento y en la semana siguiente¹⁸⁰⁷. Los obreros solo causaron daños materiales¹⁸⁰⁸ con piedras, y no hay constancia de atentados con bomba¹⁸⁰⁹.

Debido al empleo de armas de fuego en la dispersión de los disturbios, fue el caso lucense el que tuvo más recorrido. Generó un movimiento de protesta organizado y a nivel gallego que resulta interesante. En los obreros lucenses provocó el despliegue de un repertorio de movilización pacífica. Organizaron una recogida de firmas en protesta¹⁸¹⁰, y también una suscripción a favor de los heridos¹⁸¹¹, y presentaron a las autoridades y al público una petición de responsabilidades. Pero, al mismo tiempo, se produjo un movimiento de renovación de las cúpulas sindicales. En Lugo dimitió en bloque la junta de Gobierno del Centro Obrero, y la sociedad tipográfica lucense destituyó a su presidente¹⁸¹². Los delegados de un número indeterminado de centros obreros gallegos se reunieron en Santiago el día 18, para determinar si concurrir a la huelga general. Acordaron pedir la destitución del Gobernador civil de Lugo, el traslado de las fuerzas que habían abierto fuego “sin causa ni motivo, contra el pueblo”, el cese de la “persecución” contra los trabajadores y la anulación del proceso contra varios trabajadores “que fueron detenidos días después de los sucesos”¹⁸¹³.

En este caso, el movimiento obrerista parece haber conseguido el respaldo de buena parte de la opinión pública. Cuando los obreros de Lugo finalmente fueron a la huelga, el lunes 22, los acompañó la Asociación Patronal; la Cámara de Comercio se abstuvo, con una velada crítica a las autoridades en una nota oficiosa¹⁸¹⁴. Hubo algunas cargas, con seis obreros heridos, y se enharinaron las calles para que los caballos no resbalasen si tenían que hacer cargas¹⁸¹⁵.

¹⁸⁰⁵ El diario católico *La Voz de la Verdad* afirmó que hubo un tiroteo entre monárquicos e izquierdistas después de que uno de los primeros lanzara un reto, y que después la policía se defendió del ataque de la multitud. La versión parece poco probable ya que no la confirma ningún otro medio. *LV* 09-09-1930, p. 1.

¹⁸⁰⁶ *EP*, 07-09-1930, p. 1.

¹⁸⁰⁷ Las segundas no parecen durar más de 24 horas, según la prensa local, pero por las protestas obreras posteriores parece que se siguieron procesos judiciales contra obreros. *EP*, 13-09-1930, p. 1, *EP* 14-09-1930, p. 1.

¹⁸⁰⁸ Uno de los heridos, José Traseira, era cabo de Reclutamiento, pero parece haber recibido fuego de la policía. En el *Faro de Vigo* se menciona que vestía de paisano. *FV* 07-09-1930, p. 12.

¹⁸⁰⁹ El juzgado investigó una herida por bomba sufrida por un tal Manuel Fernández durante estos días, pero probablemente fuese un accidente. *FV* 09-09-1930, p. 1.

¹⁸¹⁰ *EP*, 11-09-1930, p. 2.

¹⁸¹¹ *EP*, 13-09-1930, p. 1.

¹⁸¹² *EP*, 10-09-1930, p. 1, *EP* 13-09-1930, p. 1.

¹⁸¹³ *LV*, 19-09-1930, p. 4.

¹⁸¹⁴ La Cámara “lamenta y casi [sic] lo hará constar oportunamente ante quien proceda, que por el poco tacto y previsión de quien por el cargo que ejerce debiera tenerlos, se llegue a extremos que perjudican grandemente al comercio y al pueblo en general”. *EP*, 19-09-1930, p. 1, 21-09-1930, p. 1.

¹⁸¹⁵ *EP*, 25-09-1930.

Los obreros de Ferrol determinaron no ir a la huelga¹⁸¹⁶. En Santiago, donde sí hubo paro el día 24, hubo varios choques y cargas. Una multitud de estudiantes arrancó en la Universidad el busto del ministro Rodríguez de Viguri, sin que el rector consiguiese convencerlos para que se detuviesen; más tarde presentó su dimisión. Otro grupo de huelguistas hizo lo mismo con dos retratos del ministro en la Unión Protectora de Artesanos. Los choques se produjeron en la Alameda. Dos guardias resultaron heridos a pedradas, dos obreros fueron atendidos por heridas de sable. Un aprendiz de fundidor de 19 años, Ángel Antelo, cayó herido mortalmente de un balazo “frente al monumento levantado en honor de Rosalía de Castro”¹⁸¹⁷.

Las autoridades mostraron gestos conciliadores¹⁸¹⁸, pero la muerte de Antelo prolongó otra semana la huelga general de Santiago y reavivó el conflicto a nivel gallego. El paro de Lugo se prolongó¹⁸¹⁹. Hubo huelgas de solidaridad en Marín¹⁸²⁰ y Pontevedra¹⁸²¹, respaldada por el comercio y algunas sociedades agrarias, y en Chantada, Ourense y A Coruña¹⁸²², aunque sin efusiones de violencia. Es decir, no hubo heridos o atentados, pues en muchas huelgas que mencionamos como no violentas hay incidentes menores, como destrozos de lunas, pedradas a vehículos, conatos de carga o detenciones¹⁸²³. En Vigo la policía dispersó una reunión para tratar la cuestión¹⁸²⁴, pero la mayoría de las sociedades afiliadas a la Federación de Trabajadores votaron por no ir al paro¹⁸²⁵. Algunos grupos no afiliados sí hicieron huelga¹⁸²⁶, alguien colocó una bomba en el vestíbulo de la Casa del Pueblo¹⁸²⁷, y aparecieron piedras en vías del tranvía¹⁸²⁸. Pese a la presión, Berenguer se negó a destituir al Gobernador civil de Lugo¹⁸²⁹.

Los paros fueron siendo desconvocados en la semana siguiente a la muerte de Antelo¹⁸³⁰, pero habían dejado una impronta de movilización política entre los grupos obreros de varias ciudades que contó con la simpatía de otros grupos sociales. Entre los republicanos fue capitalizado como símbolo del movimiento popular contra la monarquía. En un mitin de afirmación republicana celebrado en Madrid el 29 de septiembre, que contó con oradores como Azaña, Martínez Barrio, Lerroux y Alcalá Zamora, celebrado el 29 de septiembre, Abad Conde inauguró la ronda de discursos presentando los incidentes como muestras de vigor de Galicia, que “vierte su sangre y no la regatea nunca cuando se trata de defender los altos ideales de la democracia y de la justicia”. Presentó Lugo como

¹⁸¹⁶ LV, 24-09-1930, p. 2.

¹⁸¹⁷ Otros dos obreros resultaron heridos leves, así como dos guardias que recibieron pedradas. Como es habitual, se informa de más heridos que pasaron a curarse en sus casas. LV, 25-09-1930, p. 1, FV, 25-09-1930, p. 7.

¹⁸¹⁸ El Ayuntamiento se encargó de los gastos de entierro y del nicho del fallecido, y el Gobernador civil prometió a los huelguistas “aplicar las correspondientes sanciones, si hubiera motivo para ello”. LV, 26-09-1930, p. 1.

¹⁸¹⁹ EP, 28-09-1930, p. 1. La petición de dimisión del Gobernador fue criticada por el general Berenguer, lo que motivó una respuesta de un representante del Centro Obrero lucense en el pleno municipal de la ciudad. EP, 07-10-1930, p. 2.

¹⁸²⁰ FV, 28-09-1930, p. 10.

¹⁸²¹ FV, 01-10-1930, p. 2.

¹⁸²² EP, 30-09-1930, p. 1.

¹⁸²³ En A Coruña, por ejemplo, “una señorita y un joven” recibieron contusiones, que no contamos como heridas, cuando los obreros trataron de impedir el paso de los tranvías. LV, 30-09-1930, p. 1.

¹⁸²⁴ EP, 30-09-1930, p. 1.

¹⁸²⁵ FV, 27-09-1930, p. 7.

¹⁸²⁶ 01-10-1930, p. 1.

¹⁸²⁷ FV, 02-10-1930, p. 5, 04-10-1930, p. 5, LV, 02-10-1930, p. 2.

¹⁸²⁸ LV, 02-10-1930, p. 2, LV 01-10-1930, p. 1.

¹⁸²⁹ LV, 30-09-1930, p. 3.

¹⁸³⁰ LV, 01-10-1930, p. 1.

“representación viril de nuestro sentimiento y del de toda España”. Santiago de Compostela “acaba de verter su sangre. Uno de los hijos del pueblo ha entregado allí su vida”¹⁸³¹.

La muy escasa violencia política en Pontevedra se concentró en la huelga de obreros carboneros de los muelles vigueses en septiembre, con una pelea entre trabajadores que dejó un par de guardias heridos en los muelles¹⁸³². En este caso parece que varios amarillos vivían en la parroquia de Bemvibre. Un jornalero allí residente acusó a un carbonero, habitante de otro lugar de la parroquia, de colocarle una bomba en su casa¹⁸³³ la misma noche en la que fueron destruidas plantaciones de maíz, alubias y viñas en la parroquia en unos ataques que se supuso que “fueron causados, como venganza, por huelguistas carboneros de la parroquia de Beade”¹⁸³⁴.

La rebelión de Jaca no provocó un gran movimiento en los términos que estamos estudiando. En A Coruña hubo dos días de paro, “en absoluto total y también pacífico”, dejando aparte la rotura de un par de escaparates. Se detuvo a los integrantes del comité de huelga¹⁸³⁵. Los atentados se emplearon poco este año, aunque siguieron dándose casos atribuibles a enfrentamientos particulares¹⁸³⁶.

9.6 Tras la Revolución de Octubre (1935)

En 1935 encontramos un retorno a niveles de violencia que en nuestra muestra no aparecían desde 1920, si bien se mantienen por debajo de ese año excepto en lo tocante a los ataques a edificios eclesiásticos. Por falta de datos, no podemos afirmar que fuese un año especialmente violento dentro de la Segunda República. La dispersión mensual de la violencia no arroja un factor claro, y se distribuyó de manera bastante homogénea por las diferentes provincias. En cuanto al tipo de violencia, en las agresiones hay una prevalencia clara de un tipo nuevo, los choques entre izquierdistas y militantes de extrema derecha.

Tabla 9.6.1 Casos de heridos, explosivos utilizados en atentados y ataques a lugares sacros en Galicia en 1935, en casos anualizados por 100.000 habitantes

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
Heridos	2,18	1,83	2,49	2,31	2,2
Explosivos	0,73	0	0,45	3,47	1,23
Ataques a lugares sacros	0,48	0,2	0,23	0,5	0,38

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía¹⁸³⁷

¹⁸³¹ LV, 30-09-1930, p. 1.

¹⁸³² FV 04-09-1930, p. 5

¹⁸³³ FV, 06-09-1930, p. 5

¹⁸³⁴ Bemvibre y Beade pertenecían al entonces ayuntamiento independiente de Lavadores, hoy anexionado a Vigo.

¹⁸³⁵ LV, 18-12-1930, pp. 2-3.

¹⁸³⁶ Como el que sufrió el 13 de septiembre el jornalero Juan Pan, de Arteixo, al que colocaron una bomba en la puerta de su casa mientras dormía con su familia. Afirmó que “seguramente para quien estaba destinado era para un vecino suyo”. LV, 20-09-1930, p. 4. En noviembre encontramos otro atentado con dinamita en un molino de Monfero, por lo que parece relacionado con una disputa acerca del uso del agua. LV 04-11-1930, p. 3, FV, 04-11-1930, p. 10.

¹⁸³⁷ [Hechos violentos sociopolíticos](#), BA 68.

Aunque no dejaron muertos ni heridos y fueron pocos numéricamente, los actos de violencia con más participantes y con un intercambio de disparos de más intensidad tuvieron que ver, probablemente, con intentos de liberación de presos en los sucesos de octubre. En abril, un grupo de desconocidos intercambió “más de un ciento de tiros” con los guardias de la base militar ferrolana de A Graña, algo que se achaca a que intentaban liberar prisioneros de la revolución del año anterior¹⁸³⁸. El 27 de octubre, unos quince desconocidos intentaron asaltar la cárcel del polvorín de Monte Alto, en A Coruña, intercambiando quizás algo más de medio centenar de disparos con los centinelas. Se replegaron ante la movilización de guardias civiles y de asalto y fuerzas de infantería¹⁸³⁹. Que nadie recibiese un balazo pese a la gran cantidad de disparos es comprensible si atendemos a las circunstancias prácticas, como también lo es que los atacantes no llegaran a asaltar sus objetivos¹⁸⁴⁰. El autor de violencia política tipo en Galicia durante la II República evitaban los riesgos extremos, al contrario que algunos magnificadas anarquistas de décadas anteriores, construida sobre una negación de la identidad individual¹⁸⁴¹, o que grupos que adoptaron los ataques sucesivos en tiempos más modernos, entre ellos movimientos marxistas y nacionalistas¹⁸⁴².

El recuerdo de Octubre era importante por su carga moral. Leído bien como revolución roja abortada o como represión del pueblo, el golpe constituía un conflicto en el pasado inmediato. La percepción de agravio, de que el grupo propio es objeto de ataque, es crucial para la aparición de violencia armada¹⁸⁴³. Más importante, si había ocurrido una vez podía repetirse, lo que suponía un argumento de radicalización para las derechas. Las narrativas de odio, según Sternberg, el grupo odiado aparece como una amenaza que se ha revelado como tal en el pasado, pero que con sus acciones en la actualidad resulta cada vez más peligroso¹⁸⁴⁴.

En este sentido, que una revolución de izquierdas fuese una posibilidad real o no después de 1934 importa mucho menos que lo que creyesen los contemporáneos. El odio y la violencia pueden derivar de experiencias pasadas, pero sus causas no tienen por qué ser legítimas ni reales y pueden ser sobredimensionados por sesgos cognitivos y otras distorsiones¹⁸⁴⁵. Según la tesis de Pyszczynski y sus colaboradores, la presencia de pensamientos acerca de la propia muerte hace a un individuo más propenso a defender una concepción del mundo polarizada en torno a conceptos rígidos de bien y mal, y a experimentar ira hacia los grupos considerados como malignos. Esta tendencia, en

¹⁸³⁸ EP, 26-04-1935, p. 4

¹⁸³⁹ LV, 29-10-1935, p. 2, FV, 29-10-1935, p. 12

¹⁸⁴⁰ Los tiroteos en los que sí que hay muertos se producen a corta distancia y casi siempre cuando la víctima no amenaza a su asesino. En este caso los grupos estaban separados, en condiciones de baja visibilidad e intercambiando disparos, lo cual incentivaba a todos los implicados a parapetarse, mantener las distancias y no exponerse demasiado. En los intercambios de disparos, incluso tropas entrenadas pierden los nervios y disparan al azar. En los atacantes de los casos expuestos, presumiblemente sin preparación o experiencia de combate y equipados con armas cortas que no permiten afinar la puntería, estas tendencias se exacerbarían.

¹⁸⁴¹ Sobre la ideología suicida en los Illégales o el Catecismo Revolucionario, entre otros, IVIANSKY, Z. (2009), p. 17.

¹⁸⁴² MOGHADAM, A. (2009), ATRAN, S. (2009), PAPE, R. A. (2009).

¹⁸⁴³ “In short, all terrorism depends upon a grievance”, señala Jeffrey Ian Ross; pese a que hay otros factores que pueden estimular la creación de un grupo terrorista, “none can sustain an organization without the perception of some sort of hurt, insult or damage to an organization, religion, culture, race or ethnicity; a wrong that is widely felt, longstanding and unresolved”. El autor se basa en el análisis comparativo de la historia y circunstancias de Al Fatah, las FARC y el IRA Provisional. ROSS, J. I. (2009), p. 77, 92.

¹⁸⁴⁴ Los cinco pasos de la narrativa de odio serían una acción del grupo odiado en el pasado histórico o imaginado que lo revela como anatema del grupo al que va dirigido el discurso; la idea de que el objeto de odio prepara acciones contra el grupo; de que está haciéndose más poderoso y hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde; de que está llevando a cabo una acción perniciosa; y que está consiguiendo éxito con ella. STERNBERG, R. J. (2005), pp. 44-45.

¹⁸⁴⁵ BECK, A. T., PRETZER, J. (2005), p. 73.

especial en individuos que tienen una inclinación psicológica hacia esta visión del mundo, podría favorecer ciclos de violencia hacia los grupos que tengan diferentes visiones de la realidad¹⁸⁴⁶.

Tabla 9.6.2 Violencia sociolaboral en 1935 de acuerdo con las motivaciones

	Sucesos	Porcentaje	Heridos	Porcentaje	Atentados	Porcentaje
Choques en los que estuvieron implicados fascistas	18	28,13	21	40,38	1	3,45
Violencia sindical	20	31,25	18	34,62	14	48,28
Otras disputas políticas	6	9,38	3	5,77	9	31,03
Asaltos relacionados con los presos de octubre	2	3,13	0	0	0	0
Atentados anticlericales	9	14,06	0	0	0	0
Motines fiscales	3	4,69	8	15,38	1	3,45
Otros sucesos e incidentes poco claros	6	9,38	2	3,85	4	13,79
Total	64	100	52	100	29	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Tabla 9.6.3 Homicidios sociolaborales en 1935 de acuerdo con las motivaciones

	Muertos (sin contar dudosos)	Porcentaje	Muertos (contando dudosos)	Porcentaje
Choques en los que estuvieron implicados fascistas	1	25	1	1
Violencia sindical	0	0	2	0
Otras disputas políticas	0	0	1	0
Asaltos relacionados con los presos de octubre	0	0	0	0
Atentados anticlericales	0	0	0	0
Motines fiscales	2	50	2	2
Otros sucesos e incidentes de motivación poco clara	1	25	1	1
Total	4	100	7	4

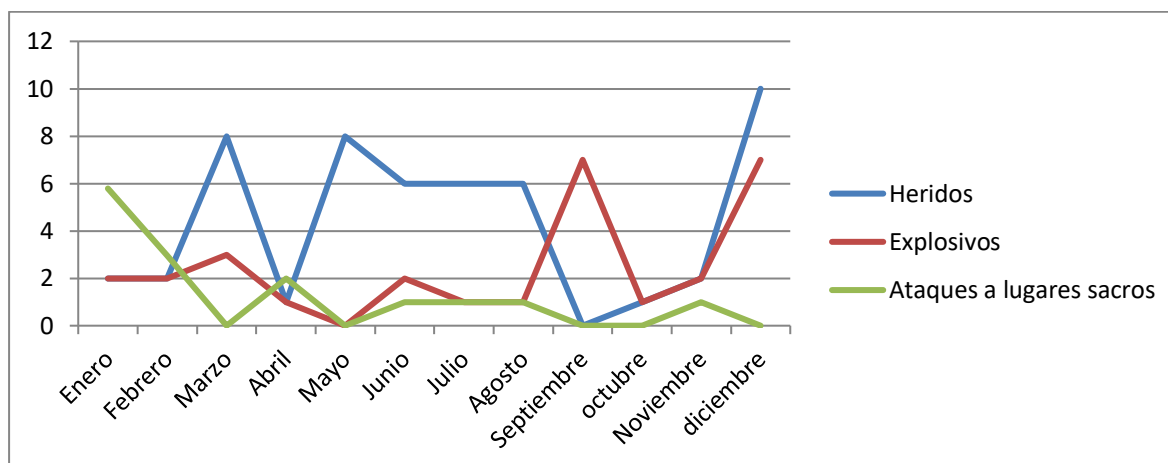
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Más relevante numéricamente fue la eclosión de la violencia debida a choques entre individuos del entorno de la extrema derecha y sindicalistas o izquierdistas, que supone casi un tercio de los heridos durante todo el año. Dejó también una muerte en julio, que se produjo en Ferrol tras una larga serie de incidentes que muestran la tensión entre los militantes este año. Juan Teijeiro,

¹⁸⁴⁶ Para los experimentos que soportan esta teoría, PYSZCZYNSKI, T., et al (2009), especialmente p. 296. La visión chovinista entre bien y mal y la llamada apocalíptica, de un mundo en un precario balance que debe modificarse inmediatamente por la acción directa, está relacionada con los actos de violencia política. MCCAULEY, C. (2007), pp. 20-21.

conserje de la sección ferrolana de la ciudad, fue detenido por amenazar con un revólver a un joven de 22 años. Según la prensa, varias personas le gritaron Abajo el Fascio, respondió Arriba España, se le echaron encima y sacó el arma. Recibió un golpe de escasa entidad que hace que ni lo contemos como herido, pero parece que el suceso provocó nuevas peleas entre uno y otro bando. Nicasio Pérez, consignatario de barcos de 17 años supuestamente fascista¹⁸⁴⁷ y cuyo padre había sido asesinado por sindicalistas en 1921, se vio implicado en un choque con Antonio Gundín, un fundidor cenetista que le doblaba la edad. Más tarde se volvieron a encontrar y, según el homicida, el muerto intentó agredirlo con varios compañeros y sacó un arma (extremo que negaban otros testigos sindicalistas). De cualquier manera, Pérez apuñaló al fundidor y lo mató¹⁸⁴⁸.

Gráfico 9.6.1 Heridos, explosivos empleados en atentados y ataques a lugares sacros en Galicia durante 1935, por mes de comisión



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de prensa y bibliografía

Aunque el pico de violencia se da en diciembre, hay casos todos los meses, y en el caso concreto de la extrema derecha encontramos incidentes durante todo el año. En febrero un socialista ourensano, Antonio Taboada, denunció que había asaltado a tiros por extremistas de derecha, un “pistolerismo incipiente e irresponsable que no se puede consentir”, según el diario local *La Región*. La investigación ordenada por el Gobernador civil llevó a pensar que Taboada había fingido la agresión para realizar una denuncia falsa, y fue él el que acabó procesado¹⁸⁴⁹.

De cualquier manera, poco después empezaron choques que sí eran reales. En abril se produjo un tiroteo entre fascistas y socialistas ante el ourensano café España, por “un grupo de muchachos que portaban una bandera”¹⁸⁵⁰. En un mitin de Primo de Rivera en Vilagarcía resultaron heridos un jonsista y un obrero; según la prensa se vieron implicados un teniente de Seguridad y el ex alcalde Elpidio Villaverde, que había militado en la ORGA¹⁸⁵¹. Poco después, varios choques entre “jóvenes extremistas” dejaron cuatro heridos en el centro de A Coruña (se confiscaron dos pistolas, pero el enfrentamiento fue a bofetadas y porrazos)¹⁸⁵².

¹⁸⁴⁷ Varios testigos declararon que este estaba amenazado y que había dejado de pertenecer a Falange.

¹⁸⁴⁸ LV 04-07-1935, p. 5, 05-07-1935, p. 8, 06-07-1935, p. 9, 09-08-1935, p. 2, EP, 05-07-1935, p. 4.

¹⁸⁴⁹ LR, 23-02-1935, p. 3, 24-02-1935, p. 1, 26-02-1935, pp. 1, 6.

¹⁸⁵⁰ LR, 14-04-1935, p. 5, 09-05-1935, p. 5.

¹⁸⁵¹ LV, 19-03-1935, p. 1, FV, 19-03-1935, p. 5, LR, 19-03-1935, p. 1.

¹⁸⁵² LV, 31-03-1935, p. 5.

El uno de mayo fascistas y comunistas se encontraron en Maside, en la provincia de Ourense, con dos detenidos de poca importancia por arma blanca. La pelea fue dispersada por la Guardia Civil, que se llevó a ocho detenidos; más tarde subieron a 25¹⁸⁵³. Las fuerzas policiales lidiaron con los enfrentamientos entre extremistas políticos a través de las detenciones. No sabemos hasta qué punto eran efectivas, pero no fueron capaces de desmontar los grupos ni de reconducir a sus componentes. Los grupos pequeños y sin base de apoyo tienen sus ventajas, pero son susceptibles a un “golpe de noqueo” policial: el arresto repentino de unos pocos miembros clave los puede dejar desmoralizados e incapaces de actuar¹⁸⁵⁴. Falangistas y extremistas de izquierdas tenían una mayor resiliencia y apoyo, y, de cualquier forma, las detenciones duraban poco y no eran disuasorias. En palabras de un antiguo falangista ourensano, antes de la guerra “te metían tres meses en la cárcel y no pasaba nada, tres meses... y estar en la cárcel era casi un timbre de gloria”¹⁸⁵⁵.

Parte de la violencia partía de provocaciones simbólicas. Manuel Rodríguez, un cantero coruñés, saludó con el puño en alto a un grupo de cuatro hombres y una mujer en mayo y recibió una paliza¹⁸⁵⁶; es de suponer que lo hizo a modo de desafío o burla. En julio hubo una nueva pelea cuando un grupo de fascistas estaban repartiendo folletos en un bar lucense; dos obreros antifascistas resultaron heridos a cuchilladas, y dos fascistas, con heridas más leves, fueron detenidos.

Falange también llegó a desafiar a los sindicatos en el que era su principal interés: el control del mercado de trabajo. En mayo el conserje de la sección de Lugo, Santiago Lacaste, acudió a un sorteo de puestos de trabajo en una obra en la que los ramos locales de UGT y CNT habían pactado que no trabajasen obreros no asociados. Tras una discusión que derivó en conflicto físico, acabó herido y detenido por realizar disparos que no dieron a nadie¹⁸⁵⁷. Ese mes se produjo el primer muerto gallego de Falange del que tenemos constancia: Manuel García Mínguez, abatido a tiros en un choque por motivos políticos en Aznalcollar (Sevilla) pero vecino de Santa María de Babío y “muy estimado” en Bergondo, a donde pertenece esta parroquia, y Sada¹⁸⁵⁸.

Para seguir el proceso ideológico de los participantes es útil el esquema de radicalización conducente a la violencia política de Sprinzak, consistente entre tres fases. En la primera, un grupo deja de confiar en el Gobierno, pero basando la falta de legitimación en políticas y gobernantes concretos. En la segunda, el grupo cuestiona la legitimidad del sistema en sí mismo. Finalmente, extiende ese rechazo a toda persona que asocie al sistema, con un proceso de deshumanización que, para los que lleguen a esta fase, lo convierte en un objetivo legítimo de violencia¹⁸⁵⁹.

Los enfrentamientos solían ser choques entre fuerzas relativamente iguales, y la mayoría de heridos se debió a armas blancas y porras; esto explica su relativa baja letalidad. En una tangana entre fascistas que repartían propaganda en Lugo y obreros locales se emplearon tacos de billar y cuchillas de zapatero, con dos heridos de cada bando¹⁸⁶⁰. En otro suceso en Vigo, se cruzaron desafíos entre jóvenes fascistas y comunistas y uno de cada bando empezaron a pelear; cuando el paladín

¹⁸⁵³ LR, 03-05-1935, p. 6, 09-05-1935, p. 5.

¹⁸⁵⁴ El concepto de “knockout punch” proviene de Alexander Y., Pluchinsky, D. (eds) (1992): *Europe's red terrorists: The fighting communist organizations*, Londres, Frank Cass, p. 48. Extraído de KASSIMERIS, G. (2009), p. 99.

¹⁸⁵⁵ NÚÑEZ SEIXAS, X. M. (1993), p. 154.

¹⁸⁵⁶ LV, 28-05-1935, p. 5.

¹⁸⁵⁷ EP, 29-05-1935, p. 1. Poco después hubo un conflicto entre el contratista y los obreros en esas mismas obras, EP, 30-05-1935, p. 2.

¹⁸⁵⁸ LV, 08-05-1935, p. 9.

¹⁸⁵⁹ SPRINZAK, E. (2009), pp. 326-328.

¹⁸⁶⁰ EP, 13-07-1935, p. 1, juicio en LV 09-11-1935, p. 9.

derechista iba ganando el resto de sus oponentes se lanzaron sobre él y uno lo apuñaló con una navaja causándole “graves heridas”¹⁸⁶¹.

Desde la perspectiva individual de los participantes, la participación en actos de violencia debió ser un proceso con sentido y significado. Horgan entiende que para comprender por qué un individuo se integra en un grupo terrorista es necesario ver el proceso a través del que lo hace, no tanto buscar las raíces (“root causes”), pues puede llevar a confundir causalidad con correlación. Los reclutas de movimientos políticos ilegales que emplean la violencia sienten que lo que hacen es importante, y participar en el movimiento es una recompensa psicológica¹⁸⁶². Cuando dos grupos están enfrentados, tienden a justificar sus propios actos violentos, culpar a los otros y enfocarse en el daño que ellos reciben¹⁸⁶³. Esto conduce a ciclos de venganza; en alguna ocasión se dice explícitamente que un incidente responde a una provocación anterior¹⁸⁶⁴, y en muchas otras sería así aunque no se explicita en la fuente.

Finalmente, hay que puntualizar que este tipo de violencia es un fenómeno mayoritaria, pero no exclusivamente, urbano. Los incidentes se concentraron en A Coruña, Lugo, Vigo, Ourense, Ferrol y Vilagarcía. También se registraron casos en O Carballiño y Maside (ambos en el mismo partido de la provincia de Ourense y en los que, como veremos en el próximo capítulo, hubo una presencia relevante de Falange).

Al igual que en 1920, encontramos heridos y atentados relacionados con la actividad sindical. La conflictividad laboral dejó casi tantos heridos como los choques de extremistas, junto con dos muertos que se pueden atribuir a cuestiones laborales (si bien ninguno de los casos se aclaró). El patrono carpintero Jesús García, de Vigo, murió tras recibir una paliza de desconocidos¹⁸⁶⁵. El gerente de la central eléctrica de Cabanelas fue abatido a tiros cuando se dirigía a pagar a los trabajadores de unas obras¹⁸⁶⁶.

No fueron los únicos miembros de la patronal agredidos. En Vigo, en enero el carabinero Vicente Aldeguer y el propietario de pesquero Arturo Rodríguez fueron golpeados y heridos cuando entraban en la casa del último por un grupo de hombres emboscados en el portal; al parecer, el motivo era que Rodríguez había despedido a un tripulante y admitido a un sustituto, por lo que los tripulantes se negaron a salir al mar¹⁸⁶⁷. Al armador Manuel Pérez, de la misma ciudad, lo lesionó un

¹⁸⁶¹ EP, 19-09-1935, p. 4.

¹⁸⁶² El autor señala también la pertinencia de explicar el proceso de integración en un grupo terrorista a través de las rutas (routes) y no de las raíces (root causes). Los individuos que se integran en grupos terroristas pasan por un proceso de socialización, que tiene efectos beneficiosos, al menos subjetivamente y a corto plazo: la adquisición de habilidades; sentimientos de empoderamiento, significado e importancia; de control; de aceptación y estatus. HORGAN, J. (2009), p. 261-263. La idea de que pertenecer a un grupo terrorista arroja beneficios materiales e inmateriales, ha sido señalada por otros autores, como WALTER, R. (2009), pp. 29-30.

¹⁸⁶³ STAUB, E. (2005), p. 59. Resumen de las investigaciones de BAR-TAL, D. (2002): “Collective memory of physical violence: Its contribution to the culture of violence”, en SALOMON, G., NEVO, B. (eds): *Peace education: The concept, principles and practice around the world*, Mahwah, NJ: Erlbaum, pp. 27-36; y STAUB, E. BAR-TAL, D. (2003): “Genocide, mass killing and intractable conflict: Roots, evolution, prevention and reconciliation”, en SEARS, D., HUDDY, L., JARVIS, R. (eds): *Oxford handbook of political psychology*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 710-751.

¹⁸⁶⁴ Por ejemplo, en el caso de jóvenes falangista que persiguieron a tiros a obreros en la Alameda compostelana para vengarse de un ataque anterior. LV, 21-05-1935, p. 2.

¹⁸⁶⁵ FV 10-09-1935, p. 5.

¹⁸⁶⁶ LR 21-07-1935, p. 5, 27-07-1935, pp. 3-4, 03-08-1935, p. 5, FV 21-7-1935, p. 12.

¹⁸⁶⁷ FV, 18-01-1935, p. 5, LV, 19-01-1935, p. 8.

fogonero en relación a una causa por despido que se seguía en el jurado mixto (las heridas no fueron muy graves, ya que el propio Pérez consiguió entregarlo a la policía)¹⁸⁶⁸.

También hay algunos actos de agresión contra esquirols. Por poner dos ejemplos, en A Coruña, José Cedeira, contador del sindicato autónomo de estibadores, gremio que ya hemos visto era conflictivo, acabó grave de una paliza por parte de desconocidos que se atribuyó a rivalidades sindicales¹⁸⁶⁹. Como se puede ver en la tabla ya señalada, casi la mitad de los atentados con bomba de ese año, un total de 14, se produjeron debido a cuestiones sindicales. Siguen el patrón ya descrito de atentados contra la propiedad, aunque una colocada en Vigo hirió a dos personas¹⁸⁷⁰. Una madre e hija de Cariño fueron lesionadas gravemente por unos vecinos en castigo por haber trabajado durante una huelga meses antes¹⁸⁷¹. En cuanto a la violencia intersindical, un joven vigués fue herido a tiros en agosto y se negó a decir por quién, aunque se sospechó de correligionarios de la FAI¹⁸⁷².

Los motines registrados relacionados con la fiscalidad dejaron dos muertos en municipios rurales. En Castro de Rei (Lugo) hubo disturbios en junio por la negativa a pagar las cuotas del recaudador de arbitrios municipales. Dos parejas de la guardia civil presentes recibieron pedradas. Los guardias hirieron de bala a dos hombres, uno de los cuales, Manuel Pena murió al poco. Un guardia del puesto local resultó herido en una rodilla. Siguió una concentración de fuerzas en Castro de Rei por orden del gobernador sin que tengamos constancia de más actos de violencia¹⁸⁷³. En Baltar (Ourense) hubo un motín contra los carabineros y el recaudador del impuesto de utilidades. Se propuso que los vecinos enviasen una representación al ayuntamiento, pero esta se convirtió en una manifestación, y esta en enfrentamiento entre los paisanos por un lado y guardias y carabineros por otro. Resultaron dos heridos de esta fuerza y otros tres paisanos, uno de los cuales murió. Una carta de los vecinos dice que el muerto no participó en agresiones y solo había ido a pagar su cuota, mientras que el alcalde achacó los hechos a célula comunista¹⁸⁷⁴.

No todos los incidentes de este tipo fueron tan sangrientos. En Vilamartín de Valdeorras, en la provincia de Ourense, un agente de Consumos, escoltado por la guardia civil, embargó una vaca a un vecino de Portela el 25 de enero. Los vecinos se reunieron al son de las campanas y se amotinaron, sacándole la vaca. Al día siguiente aparecieron el juez municipal y 16 números de la guardia civil, encontrándose con el vecindario de Portela y en parte de otras localidades, pero las gestiones de una comisión de vecinos consiguieron una fórmula de arreglo. Al pedáneo le colocaron una bomba el 27 en la casa por haber estado presente en el embargo¹⁸⁷⁵.

En la categoría de otros incidentes políticos tenemos la muerte de Ángel Fernández, un vecino de Lalín con un hermano que era concejal agrario en ese Ayuntamiento. Su vecino Antonio Pájaro, enfrentado “por cuestiones políticas y de intereses”, lo derribó de un garrotazo una tarde de marzo y, sin atender a las súplicas de la mujer de Fernández ni a la presencia del hijo de ocho años de este, le pegó un tiro en la cabeza y otro en una pierna¹⁸⁷⁶.

¹⁸⁶⁸ EP, 26-05-1935, p. 4, LV, 25-05-1935, p. 4.

¹⁸⁶⁹ LV, 02-04-1935, p. 2, FV, 02-04-1935, p. 9, EP, 03-04-1935, p. 4.

¹⁸⁷⁰ LV, 24-02-1935, p. 3, FV, 23-02-1935, p. 8, FV 24-02-1935, p. 9.

¹⁸⁷¹ LV, 08-06-1935, p. 7

¹⁸⁷² FV, 22-08-1935, p. 5.

¹⁸⁷³ EP 09-06-1935, p. 6, 11-06-1935, p. 6, LV 13-06-1935, p. 8, FV 11-06-1935, p. 12.

¹⁸⁷⁴ LR 04-12-1935, p. 6, 05-12-1935, p. 6, 06-12-1935, p. 1, 14-12-1935, p. 5, 29-12-1935, p. 4, FV 03-12-1935, p. 12.

¹⁸⁷⁵ LR, 31-01-1935, p. 6.

¹⁸⁷⁶ LV 12-03-1935, p. 8.

Buena parte de los incidentes que hemos señalado como de carácter político, dejando aparte los fascistas y sindicales, están relacionados con la organización el 1 de septiembre en Santiago un acto masivo de la JAP, para el que se concentraron decenas de miles de asistentes. Quedó, finalmente, algo deslucido por la lluvia, pero fue seguramente el acto político más importante del año en Galicia. Unos días antes del evento, unos menestrales que al parecer estaban colocando carteles del mitin vieron a un grupo arrancándolos. Al llamarles la atención, estos los agredieron e hirieron a dos. Fue detenido un coruñés, Luis Amboage, probablemente un miembro del sindicato de estibadores que posteriormente fue asesinado en marzo de 1936¹⁸⁷⁷. En el día concreto del mitin no hubo incidentes en Santiago, si bien se colocaron bombas en la vía férrea de Vigo y en la carretera de Vilagarcía¹⁸⁷⁸.

Otro pequeño choque se dio en Folgoso do Courel, donde Ricardo Gasset, ex gobernador de Lugo, empezó a dar un mitin improvisado a favor de Unión Republicana en una feria, y discutió con la Guardia Civil. Algunos de los presentes lanzaron piedras contra los guardias, y una hirió un viandante. Los que allí se encontraban se dispersaron tras un tiro al aire¹⁸⁷⁹. No hay casos de violencia grave contra otros mítines o conferencias de signo político a lo largo de ese año, si bien tampoco abundaron. De cualquier manera, en el conjunto de la Segunda República siguieron realizándose movilizaciones y acciones colectivas pacíficas, tanto en nuestro ámbito de estudio como en otras partes de España¹⁸⁸⁰. En cuanto a las coacciones contra individuos, en marzo estallaron dos bombas en el por entonces barrio de Lavadores, que tuvieron como objetivo las viviendas de un concejal del Partido Radical y de un sacerdote¹⁸⁸¹.

En la categoría de otros tenemos un muerto en un motín espontáneo. La Guardia Civil intervino en junio en una feria de Vilar de Barrio (Ourense) y realizó algunos cacheos y detenciones¹⁸⁸². Se formó un tumulto y les arrojaron algunas piedras: un guardia mató de un disparo a uno de los amotinados¹⁸⁸³. A esto se suman algunas peleas por “cuestiones sociales” y expresiones similares sin aclarar, y el caso de Manuel Roel, que se presentó en la Sociedad de Oficios Varios de Santiago e hizo un disparo contra los afiliados por motivos desconocidos¹⁸⁸⁴. También bombas sin atribuir, entre ellas un atentado contra la casa del alcalde de A Peroxa (Ourense)¹⁸⁸⁵.

¹⁸⁷⁷ EP, 30-08-1935, p. 4.

¹⁸⁷⁸ FV, 03-09-1935, pp. 2, 5, LV 03-09-1935, p. 5

¹⁸⁷⁹ FV, 20-10-1935, p. 11.

¹⁸⁸⁰ Veanse como ejemplos, para La Rioja, GIL ANDRÉS, C. (2013), pp. 105-106.

¹⁸⁸¹ FV, 14-03-1935, p. 9, 15-03-1935, p. 5, LV, 15-03-1935, p. 4.

¹⁸⁸² Les atribuimos carácter sociopolítico porque se realizaron en una feria y no en un lugar de fiesta, lo que indica que posiblemente estuviesen buscando armas a militantes políticos.

¹⁸⁸³ LR 12-06-1935, p. 6, 14-06-1935, p. 6.

¹⁸⁸⁴ Él alegó que n había querido herir a nadie. FV, 31-10-1935, p. 7.

¹⁸⁸⁵ LR, 19-04-1935, p. 6, 23-04-1935, p. 6, LV, 21-04-1935, p. 8.

10. VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA EN 1936

La mayor matanza ocurrida en Galicia en 1936 antes de la sublevación no tuvo lugar en una huelga, en una ocupación de tierras o en un choque entre pistoleros, sino en *El Barquillero*, un autobús de viajeros que, en la tarde del lunes 29 de junio, salía de A Coruña en dirección al cercano municipio de A Laracha. Cerca de la Granja Agrícola, en las afueras de la ciudad, un grupo de tres o cuatro hombres hicieron señas al conductor para que se detuviera, subieron al ómnibus y empezaron a disparar con armas cortas, mientras los viajeros gritaban o se lanzaban al suelo. Los hermanos José y Francisco Freire Caamaño, objetivos probables del ataque, quedaron muertos en el sitio. Pero la cabina del Barquillero era pequeña, quizás de unos cuatro metros de largo a juzgar por las fotos, y estaba repleta, con más de dos decenas de viajeros. También perdió la vida una anciana llamada Pastora Núñez, y otros tres viajeros resultaron heridos pero sobrevivieron¹⁸⁸⁶.

No sabemos quién mató a los Freire Caamaño, ni por qué. El sumario no se conserva y, en todo caso, fue sobreesido el 26 de agosto de 1936¹⁸⁸⁷. Sí sabemos que se habían ganado enemigos. Ese día volvían de una vista en la Audiencia territorial por un homicidio imprudente cometido por Francisco, el mayor, en 1934: había atropellado a un hombre con su camioneta, precisamente en la misma carretera en la que fue ejecutado¹⁸⁸⁸. Los hermanos también se habían dedicado al transporte de madera durante una huelga, y según el corresponsal de *Faro de Vigo*, habían sido objeto de sabotajes por no querer sindicarse, ataques que habían sufrido con poca paciencia: Francisco Freire “hirió hace poco de un balazo al presidente del Sindicato”¹⁸⁸⁹, en concreto, de la Sociedad de Oficios Varios de la CNT¹⁸⁹⁰.

El asalto al autobús de A Laracha fue el suceso más sangriento de este periodo, y uno de los más confusos, pero no era excepcional. En 1936, antes del golpe, se produjeron al menos 79 homicidios en Galicia. Más de dos decenas de ellos tienen una clara motivación social o política, y si incluimos algunos incidentes con motivación poco clara, el saldo es de 28 muertes. Esto supone tasas de conflictividad sociopolítica muy alta, según hemos visto en el capítulo anterior.

10.1 Cinco meses de censura previa. Particularidades de las fuentes en 1935

El año de inicio de la Guerra Civil cuenta con otra particularidad, que hay que tener en cuenta. El 17 de febrero el Gobierno de Portela Valladares decretó el estado de alarma en toda España. En las cuatro provincias gallegas, se prolongó hasta el golpe militar¹⁸⁹¹, y solo se levantó con motivo de las elecciones del Estatuto entre los días 27 y 29 de junio¹⁸⁹². Durante el resto del tiempo, la prensa quedó sometida a censura previa, llevada a “notas y asuntos que no ofrecen aquel alto relieve y que

¹⁸⁸⁶ La descripción de los hechos está extraída de LV 30-06-1936, p. 2.

¹⁸⁸⁷ El documento ha sido localizado por el autor del blog laninhadelexorcista.blogspot.com, que dedicó varias entradas a este caso y vincula el ataque a un atentado sindicalista <https://es.scribd.com/doc/134578248/Causa-sobre-asesinato-de-Jose-y-Francisco-Freire-Caamano-y-Pastora-Muniz>

¹⁸⁸⁸ LV, 01-07-1936, p. 3.

¹⁸⁸⁹ FV, 30-06-1936, p. 10.

¹⁸⁹⁰ La agresión fue en mayo de 1935. EP, 23-05-1935, p. 5, FV, 22-05-1935, p. 7.

¹⁸⁹¹ Según la cronología de estados de excepción elaborada por GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), pp. 232-233.

¹⁸⁹² Hubo algunas dudas acerca de si continuaba levantado tras las elecciones. Todavía a mediados de julio, el gobernador de Ourense envió una nota oficiosa a los diarios recordando que “una vez celebrado aquel [plebiscito], automáticamente quedaba declarado nuevamente en toda Galicia”, y recordando las restricciones a los derechos que comportaba. FV, 16-07-1936, p. 6.

no encierran novedad alguna”¹⁸⁹³, según se quejaba un diario contemporáneo. Los problemas de esta censura se exacerban porque coincide con un pico de conflictividad sociopolítica (precisamente el tipo de información que el Gobierno quería controlar) y se expresa de varias maneras:

-Hay tendencia a presentar los sucesos como leves y excepcionales, ya que el periodista sabe que las noticias que parezcan alarmistas serán censuradas. Por ejemplo, en Ferrol el día 22 de febrero transcurrió “con tranquilidad, fuera de un suceso sin importancia” entre un falangista y un grupo de obreros¹⁸⁹⁴.

-Hay noticias que, directamente, desaparecen o aparecen amputadas. Sobre la identidad del asesino del derechista Secundino Esperón “hay un testigo presencial, el hijo del señor Mirón que da el nombre del muchacho [tachón]”. Tras una manifestación izquierdista en Santiago, leemos en *La Voz* que, “se realizaron algunos actos de atropello [siguen unas treinta líneas borradas, para seguir con una relación de individuos de derechas detenidos sin que figure cómo ni por qué]”¹⁸⁹⁵.

-Algunos incidentes aparecen despojados de carácter social. El 19 de marzo, en A Coruña, el estudiante Edmundo Lora fue detenido después de disparar al aire: “iba corriendo, empuñando una pistola, atemorizado de que intentasen agredirle los que, al parecer, lo perseguían”. Unos días después fue detenido otro estudiante con un revólver (solo que esta vez, era él quien perseguía a sus oponentes)¹⁸⁹⁶. Muy probablemente se trata de choques ideológicos, aunque no se puede demostrar con seguridad.

-Si se admite el carácter social de un evento, muchas veces no se dan detalles del cómo ni por qué. “En la noche del domingo al lunes se promovió una reyerta en la parroquia de Louzana [...] parece ser que entre dos bandos de distinta ideología política. Nos dicen que a consecuencia de esta colisión resultó muerto el vecino de Chelo, Benito Vila, y varios heridos”¹⁸⁹⁷.

-Finalmente, está la autocensura, las presiones de la dirección y el ansia de no ganarse la enemistad de ningún sector. “Quéjense algunos estimados lectores de la escasez de noticias de La Guardia en las columnas de FARO; y a esto debemos manifestar que no todas las noticias pueden ni deben darse”¹⁸⁹⁸.

Puede que la censura haya contribuido a rebajar el tono alarmista de la prensa derechista antirrepublicana, y eliminado algunos bulos o noticias malintencionadas. Pero, en conjunto, obliga a un ejercicio de imaginación y heurística. Por estos sesgos, los resultados de esta investigación sólo pueden interpretarse como aproximados.

10.2 Los inicios de año y la campaña electoral

El año de 1936 empezó en Vigo con una muerte. El 2 de enero, el obrero metalúrgico en huelga Jaime del Río Barreiro recibió dos tiros por la espalda mientras entraba en su casa. Un mes después, el 7 de febrero, un grupo de pistoleros se presentó en el local de la Falange de la ciudad y empezó a disparar. Un falangista, Luis Collazo resultó herido de muerte, y uno de los asaltantes, Robustiano

¹⁸⁹³ LV, 01-04-1936, p. 1.

¹⁸⁹⁴ LV, 23-02-1936, p. 11.

¹⁸⁹⁵ LV, 21-02-1936, p. 8.

¹⁸⁹⁶ LV, 29-03-1936, p. 7.

¹⁸⁹⁷ FV, 22-04-1936, p. 10.

¹⁸⁹⁸ EF 15-07-1936, p. 4.

Figueira (también obrero del metal en huelga¹⁸⁹⁹) fue abatido cuando los del local respondieron a tiros y persiguieron a los atacantes. El choque dejó al menos cinco heridos, entre ellos un guardia de seguridad que se vio implicado en la persecución¹⁹⁰⁰.

En enero los sindicatos estudiantiles de derechas convocaron una huelga contra la reposición del Patronato Universitario Catalán¹⁹⁰¹. En Santiago, sede de la por aquel entonces única Universidad gallega, hubo cuatro heridos con porras y armas blancas y un pequeño atentado¹⁹⁰². En A Coruña, pedradas, cargas y una bomba en la escuela de Comercio¹⁹⁰³. En el instituto de Ourense un catedrático fue herido en la cabeza por estudiantes derechistas¹⁹⁰⁴; en el de Lugo parece que los alumnos no se adhirieron a la protesta¹⁹⁰⁵. Estos actos de violencia política en los recintos educativos, impensables durante la Restauración, se corresponden con la creciente politización activa durante la época republicana de la comunidad estudiantil a nivel español, que también tuvo su reflejo en Galicia¹⁹⁰⁶.

Fuera de estos casos, el gran acontecimiento es la campaña electoral. Empecemos por la provincia de Lugo. Hubo algunos enfrentamientos violentos parecidos a los que encontramos en otras partes de Galicia: los mineros de Viveiro apedrearon un coche en el que viajaban candidatos derechistas¹⁹⁰⁷, y un propagandista de la CEDA recibió un disparo en Paradela en una riña¹⁹⁰⁸. Pero la particularidad de la provincia fue la alianza entre Portela y las candidaturas de izquierda, en oposición a la derecha, que concurrió en dos candidaturas¹⁹⁰⁹.

Esto generó un conflicto entre las derechas y el Gobierno, que se acusaban mutuamente de intento de manipulación electoral¹⁹¹⁰. Para Portela Valladares, las acciones de su gabinete en Lugo pretendían “un artilugio, una máquina de hacer actas” que actuaba en la provincia para “deshonar

¹⁸⁹⁹ Al parecer, era cenetista. PÉREZ ÁLVAREZ, L. (2014), nota a pie de Dionisio Pereira, p. 93.

¹⁹⁰⁰ FV, 08-02-1936, p. 10, 09-02-1936, p. 5, 11-02-1936, p. 5, 13-02-1936, p. 5.

¹⁹⁰¹ GONZÁLEZ CALLEJA et al (2015), p. 1017.

¹⁹⁰² LV, 24-01-1936, p. 8, EP 25-01-1936, p. 3, FV 24-01-1936, p. 2, LV 26-01-1936, p. 10, FV, 28-01-1936, p. 6, EP 28-01-1936, p. 2. La huelga estuvo centrada en la facultad de Derecho. González Calleja eleva el número de heridos a cinco y afirma que eran galleguistas lesionados en los incidentes “después de una manifestación falangista”. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009), p. 197.

¹⁹⁰³ Tanto en el instituto como la escuela de Comercio coruñeses habían acogido núcleos jonsistas tempranos en 1931. NÚÑEZ SEIXAS, X. M. (1993), p. 145. En 1934, el SEU había llamado a tomar las Normales de toda España. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009), p. 178.

¹⁹⁰⁴ Prada menciona también explosión de petardos e intercambio de disparos. PRADA, X. (2007), p. 235.

¹⁹⁰⁵ Una carta enviada a los medios explicando su postura en EP 30-01-1936, p. 2.

¹⁹⁰⁶ En 1934 la FUE gallega se disolvió y sus miembros “van engrosando las listas de las organizaciones juveniles de izquierdas y sus acciones contra los jóvenes fascistas, cada día más numerosos, se multiplican”. Miembros de la Federación de Estudiantes Católicos, de la Asociación Escolar Tradicionalista y jaimistas “protagonizan desde 1932, ataques continuos a jóvenes estudiantes de izquierda y a fuistas”. El Sindicato Español Universitario (SEU), de carácter falangista, se habría constituido en Santiago “muy tardíamente”, en enero de 1936. Sin embargo, hay que señalar que, al contrario que en otras universidades españolas, la violencia se daba “al margen del ambiente escolar, con una “clara separación entre las actividades docentes y los enfrentamientos ideológicos”. VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), pp. 259-263, 350.

¹⁹⁰⁷ EP, 12-02-1936, p. 6

¹⁹⁰⁸ EP, 05-02-1936, p. 6. Se confirma en LV, 06-02-1936, p. 6

¹⁹⁰⁹ El Centro portelista aportó cinco miembros a la candidatura de coalición, junto con dos de Izquierda Republicana y uno de Unión Republicana. En la derecha tenemos una coalición contrarrevolucionaria, con la CEDA y otros partidos, y un independiente, disidente de la CEDA. SOMOZA CAYADO, A., FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2011), pp. 154-155.

¹⁹¹⁰ Para más detalles sobre Lugo, donde hubo una “injerencia gubernativa inusitada”, ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017), p. 191-193.

de la ciudadanía¹⁹¹¹. Pero sabemos que el propio presidente del Consejo maniobró, en claves de la vieja lógica caciquil, para asegurarse las elecciones a favor de candidatos de su cuerda¹⁹¹².

Para manipular las elecciones la clave era controlar el poder local. Los alcaldes tenían amplios poderes, por ejemplo, para aprobar o impedir los mitines¹⁹¹³. A finales de enero el gobernador civil mandó una circular a los regidores instándoles a no dificultar la propaganda de los partidos políticos “a pretexto de inseguridad, falta de condiciones del local [los mitines a cielo descubierto estaban prohibidos] u otra excusa injustificada”¹⁹¹⁴.

Además del traslado de funcionarios y modificar la composición de algunas gestoras municipales, el Gobierno Civil adoptó la política de imponer delegados gubernativos en los municipios, que asumían las competencias de orden público, mientras que los alcaldes seguían desempeñando sus labores administrativas¹⁹¹⁵. El 13 de febrero ya había delegados en 24 de los 66 ayuntamientos de la provincia, según el propio gobernador¹⁹¹⁶, que realizaron arrestos de personal municipal y dirigentes de derechas. El delegado gubernativo del Courel fue herido de un tiro por la espalda, y el gobernador achacó el ataque al “caciquismo escandaloso y amoral (...) [que] pretende prevalecer a base de pucherazos, actas en blanco y toda la gama de delitos electorales”¹⁹¹⁷. La derecha del Bloque Contrarrevolucionario, por su parte, activó “a sus cargos públicos afines” en la promoción de su candidatura¹⁹¹⁸.

En las ciudades, en las que sí hubo una campaña electoral propiamente dicha, la violencia aparece ligada a los choques entre Falange y jóvenes obreros, herencia directa de las que hemos visto en el apartado 9.6. Estallaban provocaciones, o se buscaban. En un caso típico acontecido en A Coruña, un grupo se puso a saludar con los puños en alto, algunos falangistas respondieron con sus Arriba España, se calentaron los ánimos y “se repartieron bofetadas hasta que intervino la Guardia de Seguridad”¹⁹¹⁹. Estos choques callejeros eran relativamente poco letales: en la República los choques no planificados entre grupos dejaron muchos menos muertos que los atentados¹⁹²⁰. Son, sin embargo, muy numerosos.

El voceo de diarios de partido, y, a medida que se acertaba la cita electoral, el reparto de folletos de propaganda los carteles que se pegaban y arrancaban, generaban situaciones proclives a la conflictividad. Al vendedor en A Coruña del diario falangista *Arriba*, Avelino Méndez, le pegaron al

¹⁹¹¹ LV 15-02-1936, p. 3.

¹⁹¹² El gabinete Portela realizó 88 cambios de gobernadores en dos meses, junto con múltiples destituciones en diputaciones y ayuntamientos. GONZÁLEZ CALLEJA et al (2015), p. 1081.

¹⁹¹³ Vease el caso de Ortigueira en esas mismas elecciones. Según denuncia el corresponsal de La Voz, el alcalde José Fojo Díaz arrendó uno de los dos locales disponibles para hacer mitines a nombre de un socio, y el otro fue “embargado y deshauciado por él mismo”. LV 09-02-1936, p. 10.

¹⁹¹⁴ EP 25-1-1936, p. 6.

¹⁹¹⁵ EP 04-02-1936, p. 8.

¹⁹¹⁶ EP 14-02-1936, p. 6.

¹⁹¹⁷ EP 15-02-1936, p. 6. Sobre las críticas de la derecha al Gobernador, en especial del diario monárquico *Alborada*, y la defensa de este, EP 16-02-1936, p. 6. Álvarez y Villa indican erróneamente que el delegado murió; en realidad, el hombre, un maestro de José Ramón López, sobrevivió al disparo pero fue ejecutado el 21 de octubre en Lugo por los golpistas, acusado de traición NEV. ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017), p. 193.

¹⁹¹⁸ SOMOZA CAYADO, A., FERNÁNDEZ PRIETO, L. (2011), p. 157.

¹⁹¹⁹ EP, 29-01-1936, p. 5.

¹⁹²⁰ Suponen aproximadamente una quinta parte de los casos descritos, excluyendo la revolución de Asturias. González Calleja, aludiendo a Enric Ucelay, destaca que “el cálculo y la premeditación como rasgos característicos del proceso violento republicano. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), p. 95.

menos dos veces en enero¹⁹²¹. Manuel Conde Cid, conserje de la Falange de Ourense, recibió dos disparos el 9 de enero mientras estaba, según él, vendiendo periódicos. Poco antes otro hombre lo había denunciado por agredirlo con una llave inglesa¹⁹²². A Miguel Soriano, un grupo de desconocidos le propinó una paliza mientras colocaba pasquines en los alrededores de Vigo¹⁹²³, y en O Carballiño, dos días antes de los comicios, izquierdistas y derechistas empezaron a pegarse por la retirada de unos carteles¹⁹²⁴.

Seguramente hubo muchas más peleas de las que hemos registrado, pero en esta época, previa al estado de alarma, es poco probable que muchos incidentes graves pasasen desapercibidos. En conjunto, el periodo de campaña dejó 28 heridos en Galicia, calculados con los criterios ya expuestos, de los que no todos, como hemos visto, son directamente achacables a la lucha electoral. La alta participación de Pontevedra se debe sobre todo al asalto del local de la Falange del siete de febrero. Las diferencias entre el resto de provincias no son significativas.

Tabla 10.2.1 Heridos y muertos en incidentes sociopolíticos en Galicia durante la campaña electoral (hasta el 14 de febrero, éste incluido). En números absolutos y datos anualizados por 100.000 habitantes

	Heridos	Tasa por 100.000 habs	Muertos	Tasa por 100.000 habs
A Coruña	8	7,77	0	0
Lugo	5	8,21	0	0
Ourense	4	7,3	0	0
Pontevedra	11	14,61	3	3,99
Galicia	28	9,53	3	1,02

Fuente: Elaboración propia

Hubo algunos incidentes ligados a mítines electorales, que parecen concentrarse a primeros de enero. En A Coruña, el primer día del año, la guardia de asalto desalojó un encuentro izquierdista mientras hablaba la Pasionaria¹⁹²⁵. Pocos días después hubo varias peleas en la ciudad después de un mitin de la CEDA¹⁹²⁶. Cuando Gil Robles pasó por Chantada, un grupo de personas lo recibió con palos y piedras, aunque los dispersó la Guardia Civil antes de que pudieran hacerle nada¹⁹²⁷. El líder local de las JAP, Manuel Lorenzana, se molestó en escribir a los principales periódicos de Galicia para contarles que los que protestaban se habían limitado a silbar, y que “de no ser por la presencia de la Guardia Civil, mal lo hubieran pasado”, pues su presencia evitó que “los argumentos “contundentes”

¹⁹²¹ Los ataques contra Méndez en LV, 14-01-1936, p. 2, LV, 29-01-1936, p. 7. En vísperas de elecciones, según una denuncia que no parece muy fiable, obligó a un joven vendedor de prensa izquierdista “a beber cierta cantidad de aceite de ricino y aun gasolina” bajo la amenaza de un arma. LV, 16-02-1936, p. 5. Las luchas callejeras estuvieron protagonizadas en esta ciudad por las JAP, según GRANDÍO SEOANE, E. (1998), p. 247.

¹⁹²² LR, 09-01-1936, p. 6, LR, 10-01-1936, p. 5. Parece que más tarde se destacó en la represión de la zona. CARBAJO, J. (2018), pp. 347-350.

¹⁹²³ FV 13-02-1936, p. 5, EP 13-02-1936, p. 5

¹⁹²⁴ LR, 16-02-1936, p. 5.

¹⁹²⁵ En La Voz se achaca el desorden a un enfrentamiento entre anarquistas y otros sindicalistas entre el público asistente. Según el corresponsal de Faro, primero vino la orden de desalojo por los ataques de la Pasionaria contra el Gobierno y luego el tumulto. LV, 03-01-1936, p. 6, EP 3-01-1936, p. 3, FV 02-01, p. 6

¹⁹²⁶ LV, 14-01-1936, p. 2.

¹⁹²⁷ Esta es la versión ofrecida por el Gobernador Civil de la provincia a la prensa. EP 10-01-1936, p. 6.

empleados por los miembros de esta Juventud allí presentes llegasen “a convencer” a mayor número de los que pasaron a sus casas a lamentar su mala educación”¹⁹²⁸.

Pero los incidentes son excepcionales, y esta curiosa bravata en los diarios de gran tirada, todavía más. Tras identificar todos los mítines de los que se habla en cada periódico para su provincia correspondiente durante el mes de febrero después de su realización, encontramos reseñas de al menos 104 de ellos (y que van desde actos de extrema derecha a comunistas), pero solo alteraciones del orden público de una mínima significación en dos. Los mineros de Viveiro apedrearon un coche con propagandistas de derechas después de un mitin derechista, como ya hemos señalado, y un encuentro electoral de izquierdas en Santa Comba se canceló porque los ponentes fueron recibidos con silbidos. A esto hay que añadir decenas de otros mítines de los que no hay recensiones en prensa, así como veladas y espectáculos celebrados por organizaciones vinculadas a partidos, conferencias y disertaciones con carácter partidista, celebraciones del aniversario de la República y reuniones de candidatos con las fuerzas vivas de los pueblos y con los electores. En conjunto, la campaña se vivió con normalidad.

10.3 Violencia en el periodo electoral

La violencia grave tuvo un claro pico en el fin de semana de las elecciones, aunque las autoridades no llegaron a perder el control de la calle¹⁹²⁹.

Tabla 10.3.1 Heridos y muertos en el fin de semana electoral (15 y 16 de febrero)

	Heridos	Muertos (ninguno de ellos es dudoso)
A Coruña	6	2
Lugo	5	1
Ourense	2	1
Pontevedra	3	0
Galicia	16	4

Fuente: Elaboración propia a partir de la prensa y la bibliografía

En O Carballiño un hombre resultó muerto y otro herido en una reyerta en la noche previa a la votación. La prensa regional habló de un apuñalamiento en un bar sin motivos claros, los teletipos hablaron de un crimen sociopolítico¹⁹³⁰. Lo admitimos como tal porque así lo acepta la bibliografía. En Pontevedra fue apuñalado un interventor izquierdista en el municipio de Lavadores (actualmente Vigo)¹⁹³¹ y hubo disturbios, con algunos heridos leves, en Moraña (Pontevedra)¹⁹³². No hemos podido encontrar ninguna referencia a los dos muertos en Vilagarcía y las otras dos defunciones en Vigo de las que informó la embajada británica¹⁹³³, y por tanto no los hemos incluido.

¹⁹²⁸ Su versión aparece recogida en EP 09-01-1936, p. 6, FV 10-01-1936, p. 7 y LV 9-01-1936, p. 9. Otra de Ramón de Soto, que refrenda que hubo peleas, en GRANDÍO SEOANE, E. (1998), p. 252.

¹⁹²⁹ VILLA GARCÍA, R. (2013), pp. 264-265.

¹⁹³⁰ FV, 18-02-1936, p. 12, LV, 19-02-1936, p. 9, EP 18-04-1936

¹⁹³¹ FV 18-02-1936, p. 5, EP 18-02-1936, p. 7.

¹⁹³² LV 23-02-1936, p. 10; FV 22-02-1936, p. 2.

¹⁹³³ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), p. 396.

La jornada fue más sangrienta en Lugo. Un choque electoral en Antas de Ulla acabó con dos “centristas” heridos de bala (uno de ellos, miembro de Izquierda Republicana, acabó falleciendo). El atacante, de derechas, también fue ingresado en el hospital de un garrotazo en la cabeza¹⁹³⁴. El líder de las JAP y candidato Pérez Laborda se presentó al parecer en varios colegios electorales del sur de Lugo acompañado de pistoleros; de Chantada se marchó después de un tiroteo con los vecinos, según *El Progreso (Faro de Vigo)* habla de dos heridos a tiros, pero en una disputa por el escrutinio de un colegio electoral). De Palas de Rei, según el alcalde, “tuvo que salir precipitadamente, gracias a la valentía de los ciudadanos encargados de sostener el orden”¹⁹³⁵.

En Ourense no encontramos hechos violentos en prensa el propio día de las elecciones, si bien Xulio Prada, a través de fuentes judiciales y las protestas en las actas, da cuenta de al menos un apuñalamiento en Cortegada y un presidente de mesa herido en Ribadavia. Abundan más las protestas por coacciones, y en varios colegios se presentaron hombres armados, si bien debemos ser prudentes al analizar las denuncias electorales, pues siempre son *ex parte*. De cualquier manera, más que la violencia directa, en esta provincia predominó una gran desmovilización y fraude electoral por parte de las derechas, que llevó a la anulación de 100.000 votos (si bien Calvo Sotelo conservó su acta de diputado)¹⁹³⁶.

Fue A Coruña la provincia donde hubo más muertos, con incidentes localizados en el partido de la capital y sus inmediaciones. Un tiroteo en un colegio electoral de Arteixo dejó un cadáver y un herido grave¹⁹³⁷. En Culleredo, un vecino denunció que lo ataron y amordazaron para que no pudiera actuar como interventor en una mesa, y un segundo recibió un disparo en el codo en una emboscada la noche anterior a los comicios¹⁹³⁸; el día de las elecciones, las fuerzas de seguridad abatieron a un militante comunista en un control de carretera en un tiroteo, aunque la prensa informó que volvía de una boda¹⁹³⁹. Hubo un herido de bala en Carballo¹⁹⁴⁰, y en diversos puntos se produjeron peleas, choques sin heridos y roturas de urnas¹⁹⁴¹.

La jornada electoral fue mucho más violenta que la campaña. Quizás esto se inserte en una mecánica arcaica de funcionamiento de los partidos en Galicia; en un territorio de población dispersa y poco movilizada electoralmente, la lucha no pasaría tanto por los mítines y la propaganda electoral, sino por el poder local (desde el que repartir prebendas y castigos) y el control físico de los colegios electorales, para hacer pucherazos o para coaccionar directamente a los electores. Pero en todo caso contrasta con las jornadas mucho más pacíficas que fueron la norma durante la Restauración, como hemos visto en el apartado 8.4.2. La recta final de la campaña gallega concentró, según un cálculo, una cuarta parte de los muertos en toda España¹⁹⁴², pero Villa García advierte que no lo debemos considerar automáticamente un reflejo de la tensión social existente¹⁹⁴³.

¹⁹³⁴ *EP*, 18-02-1936, p. 8. *LV*, 22-03-1936, p. 6. Una versión afirma que la agresión la empezó el muerto. ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017), p. 283.

¹⁹³⁵ *EP*, 18-02-1936, p. 8, *EP* 22-02-1936, p. 6. Los heridos en Chantada se mencionan en *FV* 18-02-1936, p. 9.

¹⁹³⁶ Sobre las elecciones, PRADA, X. (2007), pp. 254-284.

¹⁹³⁷ *LV*, 17-02-1936, p. 1, 18-02-1936, p. 6.

¹⁹³⁸ *LV*, 17-02-1936, p. 1.

¹⁹³⁹ *LV*, 17-02-1936, p. 1, 18-02-1936, p. 6.

¹⁹⁴⁰ *LV*, 18-02-1936

¹⁹⁴¹ Por ejemplo en Monforte *EP*, 18-02-1936, p. 4.

¹⁹⁴² No hemos podido contrastar los datos que manejan. ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017), p. 263.

¹⁹⁴³ Según señala Villa García, en las provincias con mayor número de actos de violencia electoral, “se constata que los municipios en que estos ocurrieron no coinciden, por ejemplo, con los de mayor conflictividad socio-laboral previa”, lo que obligaría a concederle al fenómeno “unos contornos específicos que exigen considerarlo con cierta autonomía”. A esto, añadimos, hay que agregar un factor de azar. VILLA GARCÍA, R. (2013), p. 257.

Pero la perspectiva nos la devuelve un articulista que escribe desde Carral y nos cuenta que las elecciones “se celebraron aquí con tanta tranquilidad que hasta resultaron aburridas, porque estamos acostumbrados a que haya jaleo”¹⁹⁴⁴. Los comicios transcurrieron sin agresiones en la mayoría de los colegios, y en el conjunto del Estado “la violencia electoral estorbó, pero no impidió, la competición democrática”¹⁹⁴⁵. Las peleas y tiroteos en torno a las urnas llevaban produciéndose en España desde que había elecciones. Mucho más que la violencia, el falseamiento de las elecciones vino por la vía del fraude¹⁹⁴⁶.

10.4 La violencia tras la victoria de las izquierdas y durante el gobierno de la coalición izquierdista

Tras la victoria electoral y antes del golpe volvemos a encontrar un periodo de violencia sociopolítica intensa, si bien no sostenida.

Tabla 10.4.1 Heridos y muertos en incidentes sociopolíticos en Galicia tras la jornada electoral al golpe militar (17 de febrero al 18 de julio, ambos incluidos). En números absolutos y datos anualizados¹⁹⁴⁷ por 100.000 habitantes

	Heridos	Tasa	Muertos, sin casos dudosos	Tasa	Muertos, con casos dudosos	Tasa
A Coruña	35	10	3	0,86	8	2,29
Lugo	12	5,8	3	1,45	3	1,45
Ourense	41	22,02	8	4,3	8	4,3
Pontevedra	37	14,46	2	0,78	2	0,78
Galicia	125	12,51	16	1,6	21	2,1

Fuente: Elaboración propia

Tras las elecciones se produjeron manifestaciones en las principales ciudades y villas para celebrar el éxito de las izquierdas y pedir la liberación de los presos gubernativos. En Galicia, las movilizaciones transcurrieron en conjunto con orden. Pero no fue el caso de todas. En Pontevedra, en protesta por la detención de candidatos izquierdistas en Lalín, la multitud destruyó los locales de Falange y Acción Popular y la sede del *Diario de Pontevedra*, además de establecimientos particulares¹⁹⁴⁸. En Santiago se apedrearon de madrugada cuatro centros católicos¹⁹⁴⁹. El Gobernador puso en suspenso todas las licencias de armas cortas del término municipal concedidas por el Gobierno y obligó a sus propietarios a entregarlas¹⁹⁵⁰. En Ferrol, aunque los periódicos tratan el tema muy de pasada, ardieron iglesias, y patrullas militares y policiales recorrieron las calles¹⁹⁵¹. Parece que también hubo un ataque al Centro de Derechas de Betanzos¹⁹⁵². No tenemos constancia de heridos ni muertos. En

¹⁹⁴⁴ LV, 05-04-1936, p. 11.

¹⁹⁴⁵ ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017), p. 272.

¹⁹⁴⁶ Aparte de los casos ya señalados, en A Coruña ganaron las izquierdas “en base a un tremendo fraude electoral”. GRANDÍO SEOANE, E. (1998), p. 272. Para una visión de conjunto, ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017).

¹⁹⁴⁷ A partir de un periodo de 153 días.

¹⁹⁴⁸ FV 21-02-1936, p. 2, LV 21-02-1936, p. 8.

¹⁹⁴⁹ FV, 21-02-1936, p. 2.

¹⁹⁵⁰ 28-02-1936, p. 2.

¹⁹⁵¹ FV, 22-02-1936, p. 2, LV 25-02-1936, p. 11. Parece que hubo daños en el Casino.

¹⁹⁵² No lo hemos podido comprobar en la prensa regional, como tampoco los disturbios en A Coruña que mencionan los autores. ÁLVAREZ TARDÍO, M., VILLA GARCÍA, R. (2017), p. 323.

la ciudad de Ourense, las manifestaciones post-electorales transcurrieron pacíficamente¹⁹⁵³, pero el fin de semana siguiente, que coincidía con Carnaval, se produjeron diversos choques, palizas y tiroteos entre izquierdistas y derechistas en calles y bares. Hubo al menos ocho heridos, contados con nuestros criterios, y quizás hasta diez¹⁹⁵⁴.

No hubo nada parecido a un intento de revolución popular u ocupación masiva de terrenos por jornaleros, como en otros puntos de la Península. Podemos, si queremos, buscar casos. En Ourense hubo reclamaciones relativas al reparto de tierras públicas entre los campesinos (Prada interpreta que se hace referencia a bienes comunales), que quizás no fuesen más que una trasposición de la problemática de otras partes del Estado, y en algún caso los vecinos se repartieron tierras rectorales o al menos forzaron su arriendo. También hubo incautaciones de propiedades eclesiásticas¹⁹⁵⁵. El Gobernador Civil prometió detenerlas “aplicando con todo rigor la ley”¹⁹⁵⁶. A un propietario de Mos (Pontevedra) le causaron daños en el cierre y los pinos de una finca; “la Benemérita parece que comprobó que el referido monte era comunal y el denunciante fuera amenazado de que si vencían las izquierdas sería cortada dicha alambrada para de que el referido monte pudieran servirse todos los vecinos”¹⁹⁵⁷.

En marzo encontramos sucesos violentos ligados a los conflictos laborales que generó victoria del Frente Popular. La huelga de octubre había provocado el despido de miles de trabajadores que ahora quedaron amnistiados y optaban a recuperar sus puestos de trabajo. En Lavadores, un municipio de la periferia de Vigo, los esquirols de la compañía de tranvías empezaron a recibir disparos mientras trabajaban. Uno de ellos, Fernando Romero salvó la vida echándose al suelo¹⁹⁵⁸, pero al día siguiente su compañero Ángel Rodríguez recibió dos heridas de bala¹⁹⁵⁹. González Calleja menciona la muerte a tiros de un listero de la agrupación patronal en Xove (Lugo) el 24 de febrero, pero no hemos encontrado rastro en prensa¹⁹⁶⁰.

¹⁹⁵³ Parece que hubo un plan izquierdista para asaltar la sede de Falange desarticulado por el Gobernador Civil. NÚÑEZ SEIXAS, X. M. (1993), p. 170.

¹⁹⁵⁴ LR, 25-02-1936, p. 3, EP 26-02-1936, p. 3, FV 25-02-1936, p. 2, LV 25-02-1936, p. 10, LV 26-02-1936, p. 8, LR, 27-02-1936, p. 9.

¹⁹⁵⁵ La distribución de “terrenos del Estado y de los Municipios, en usufructo, entre los campesinos pobres” se incluye en las reclamaciones de la manifestación posterior a la victoria electoral en Ourense presentadas al Gobierno Civil. Tras esta parece que hubo repartos en A Rúa y O Barco, de la que se dice que fueron comunales; quizás se tratase de los repartos de tierras rectorales que mencionamos a continuación. FV 21-02-1936, p. 10, EP 11-03-1936, p. 3, EP 12-03-1936, p. 3. Ya se había planteado en el obrerismo ourensano en octubre de 1934. PRADA, X. (2007), p. 118. Sobre el reparto de bienes rectorales en algunas parroquias en 1936, en esa obra, pp. 343, 356, 362-364. El mismo autor ha desarrollado el asunto de ocupaciones de bienes rectorales posteriormente, dejando claro que no se trataba de una turba de desposeídos. En las incautaciones participaron sobre todo hombres de 18 a 45 años, en mayor medida labradores que jornaleros, una quinta parte eran elementos muy politizados, sobre todo socialistas y comunistas, y buena parte participaron en otros actos de violencia política o protesta social, o se unirían a la lucha contra el golpe. PRADA RODRÍGUEZ, X. (2019), pp. 179-183. Sobre las expectativas del reparto de tierra en Coles, partido de Ourense, SOUTELO VÁZQUEZ, R. (2014), p. 212. No parece haber habido colaboración por parte de las autoridades locales; en O Bolo hubo un intento de ocupación de la rectoral de Outardepregos, promovida por el líder local del PCE, pero el alcalde lo detuvo “sempre no intento de manter a legalidade republicana”. HERVELLA GARCÍA, G. (2007), p. 118.

¹⁹⁵⁶ LR, 31-03-1936, p. 4.

¹⁹⁵⁷ FV, 23-02-1936, p. 2.

¹⁹⁵⁸ LV 29-03-1936, p. 6.

¹⁹⁵⁹ FV, 31-03-1936, p. 5., EP 01-04-1936, p. 3. Recordemos que en el conjunto de la historia del movimiento obrerista gallego, la violencia solió dirigirse contra los esquirols, según MIGUEZ MACHO, A. (2008), p. 232.

¹⁹⁶⁰ Su fuente es la carpeta 1536 del centro documental de la Memoria Histórica. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), p. 398.

En A Coruña, donde varios estibadores de los muelles habían recibido palizas a finales de febrero. Un cenetista local, Luis Amboage, fue asesinado de un tiro por la espalda el 20 de marzo. Había perdido su trabajo en Telefónica en 1934 y en el momento de su muerte trabajaba en la “colla vieja”, la integrada por trabajadores próximos a los sindicatos de clase. Se detuvo a cuatro hombres “despedidos de la “colla nueva””, ligada a la patronal (ninguno de los que figuran como objeto de agresiones anteriores)¹⁹⁶¹; conviene recordar las brutales luchas entre collas en el puerto coruñés en 1920 a las que hicimos referencia en el apartado 9.3. La CNT ligó la muerte a pistoleros patrocinados por la Asociación Patronal y exigió al Gobernador Civil “el desplazamiento de la Asociación Patronal como entidad”¹⁹⁶². Pocos días más tarde, y en la misma calle en la que había muerto Amboage, fue asesinado a tiros un obrero, Ángel Redondo, un obrero precario también afiliado a la CNT. El silencio de las organizaciones obreras lleva a pensar en una venganza, si bien desde instancias oficiales se negó que el homicidio tuviese carácter social¹⁹⁶³.

En Vigo, el 13 de mayo, el abogado y militar retirado Miguel Cuervo, al parecer ligado a los sucesos de Sobredo, acudió a la defensa de un esquirolo que estaba siendo perseguido por un grupo de obreros. Disparó, quizás al aire, pero una bala alcanzó a José Lemos, un carpintero de 34 años que paseaba con su hija sin relación con el incidente. En el momento hubo un intento de linchamiento contra Cuervo, que salvó la vida por la intervención de las fuerzas de seguridad; los guardias de asalto que lo defendieron abrieron fuego, hiriendo a dos personas, una de ellas de gravedad¹⁹⁶⁴. El 17 de mayo el comunista Manuel da Silva fue tiroteado en una emboscada en Ourense, al parecer por el falangista Emilio Prieto. A su muerte, su cuerpo fue expuesto en una capilla ardiente y provocó un paro general y un entierro masivo, pero no tenemos constancia de actos de represalia por parte de las izquierdas en Ourense¹⁹⁶⁵.

Sin embargo, dos días después encontramos la primera víctima con filiación derechista. Secundino Esperón, que había sido liberado después de estar arrestado acusado de conexiones con la Falange y había participado en “incidentes”¹⁹⁶⁶, murió de cuatro disparos de pistola en Pontevedra. El Gobernador Civil se apresuró a achacar la muerte a un tiroteo de madrugada en un bar, sin motivación política, y anunció la detención de un tal Antonio Fandiño; el nombre de la persona a la que acusaba un testigo de los hechos, un tal Mirón, fue censurada¹⁹⁶⁷. El sábado de esa semana fueron detenidos tres fascistas, dos de ellos ourensanos, de los que “la Policía supone que preparaban alguna represalia por la muerte de Secundino Esperón”¹⁹⁶⁸. Pocos días después, fue detenido el propio Mirón por una acusación similar¹⁹⁶⁹.

El 23 de mayo estalló una bomba en el café Iberia, de A Coruña. Un joven falleció a los pocos días (al entierro acudieron representantes del Ayuntamiento y de las asociaciones obreras) y otro perdió una pierna. Según los comunistas coruñeses, se trató de una “provocación de los elementos

¹⁹⁶¹ LV, 22-03-1936, pp. 1-2.

¹⁹⁶² *El Pueblo Gallego*, Vigo, 22-03-1936. La cita proviene de MÍGUEZ MACHO, Antonio: “Una colisión fina”. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepción e consecuencias (1890-1940)”, de próxima publicación.

¹⁹⁶³ La prensa local le atribuyó en un primer momento un carácter social, para desmentirlo después. LV, 27-05-1936 (2), 28-05-1936 (1)

¹⁹⁶⁴ FV, 01-05-1936 (8), LV, 14-05-1936 (5)

¹⁹⁶⁵ LR, 20-05-1936 (1, 5), LV 19-05-1936, p. 2, LV 20-5-1936, p. 9, FV 19-05-1936, p. 11

¹⁹⁶⁶ Probablemente, los enfrentamientos ligados al boicot sobre una panadería de la localidad.

¹⁹⁶⁷ FV, 20-05-1936 (2)

¹⁹⁶⁸ FV, 30-05-1936, p. 2, LV 31-05-1936, p. 10.

¹⁹⁶⁹ FV, 02-06-1936, p. 2.

fascistas¹⁹⁷⁰, y tanto las federaciones obreras como el gobierno local, izquierdista, acudieron al entierro. El suceso nunca fue aclarado judicialmente¹⁹⁷¹.

En las elecciones a compromisarios y las del Estatuto de Galicia apenas encontramos conflictos, seguramente debido a que tampoco hubo mucha competencia. En las primeras, unos sujetos interrumpieron en un colegio electoral de Baiona y rompieron una urna, generando una reyerta que dejó dos heridos¹⁹⁷². En las segundas no se derramó sangre; como mucho, un repartidor de propaganda galleguista le propinó “sendas bofetadas” a un transeúnte pontevedrés que rompió el folleto que le ofrecía¹⁹⁷³.

Durante estos meses hubo un par de homicidios en la provincia de Ourense, ligados a conflictos sociopolíticos pero que escapan a la dinámica de enfrentamientos entre pistoleros de derechas e izquierdas. El 11 de mayo se produjo un pequeño motín contra recaudadores de cédulas de consumos en A Teixeira, y un paisano murió de los disparos de la Guardia Civil. A inicios de junio, en Vilardevós, un oficial telefonista que había sido colocado por la gestora municipal del ayuntamiento mató a tiros al hermano del anterior ocupante del puesto, tras una discusión por “cuestiones políticas”¹⁹⁷⁴. Simultáneamente encontramos heridos, tiroteos y atentados en diversos puntos de la provincia. En la capital se producen, en palabras del gobernador, “continuos escándalos” protagonizados por “elementos socialmente indeseables”. En abril ordenó que los establecimientos de bebidas cerraran a las diez y media, y avisó de que desterraría de la provincia a los que realizaban cacheos ilegales¹⁹⁷⁵, aunque, como vimos, no impidió el asesinato de Da Silva.

El domingo 7 de junio un tiroteo en el bar *La Bilbaína*, en la capital, desencadenó un nuevo ciclo de violencia. Hay varias versiones, pero parece que uno o varios falangistas dispararon contra un grupo de izquierdistas, matando a dos e hiriendo a otros dos. Un miembro de la JAP resultó tiroteado en represalia, y se inició una huelga general de varios días, con ramificaciones en otras localidades de la provincia y fuera de ella¹⁹⁷⁶. Una camioneta que volvía del entierro fue tiroteada en el cercano municipio de Punxín, dejando otros dos muertos y un herido¹⁹⁷⁷, dando más combustible a las protestas. Hubo quemas de iglesias, atentados y choques, con detenciones masivas de falangistas en O Carballiño y Ribadavia, pero ningún muerto más. De cualquier manera, continuaron los choques, y en julio fue asesinado en O Barco de Valdeorras el falangista Castor Pérez, criado del juez municipal¹⁹⁷⁸.

Hemos dejado aparte la provincia de Lugo, pues en ella, dejando aparte algunos choques menores, la conflictividad se concentró en un único partido judicial. A finales de febrero, el Gobernador Civil manifestó a los periodistas que “la tranquilidad era absoluta en toda la provincia, excepto en Sarria”¹⁹⁷⁹ y envió policías para controlar los “frecuentes altercados”¹⁹⁸⁰ en este partido, en el que ya

¹⁹⁷⁰ LV, 25-05-1936, p. 2, 30-05-1936, p. 7.

¹⁹⁷¹ El acta de sobreseimiento gracias al autor de <http://laninhadelexorcista.blogspot.com>, que sospecha que el ataque fue realizado por algún grupo obrerista.

¹⁹⁷² FV, 29-04-1936, p. 2.

¹⁹⁷³ FV, 16-06-1936, p. 2.

¹⁹⁷⁴ LR, 05-06-1936.

¹⁹⁷⁵ LR, 19-04-1936, p. 6.

¹⁹⁷⁶ Hubo al menos una manifestación de solidaridad en Lugo. EP 10-06-1936, p. 6.

¹⁹⁷⁷ LR, 13-06-1936, pp. 1, 4, FV 09-06-1936, p. 10, FV 10-06-1936, p. 10), FV 11-06-1936, p. 9, LV 9-06-1936, p. 1, LV 10-06-1936, pp. 5, 8, LR, 13-06-1936, pp. 1, 4, FV 10-06-1936, p. 10.

¹⁹⁷⁸ La Falange de O Barco estaba dominada por dos familias pudientes; tras el golpe, mandaban a sus criados a realizar ejecuciones, según fuentes orales. CARBAJO, J. (2018), p. 341-343.

¹⁹⁷⁹ FV, 28-02-1936, p. 9.

¹⁹⁸⁰ EP, 29-02-1936, p. 6.

habían muerto dos personas en los comicios de 1933¹⁹⁸¹. Uno de estos choques provocó la muerte a mediados de abril de Benito Vila, en Samos¹⁹⁸², y a principios de mayo Manuel Carro resultó herido de una patada en el bajo vientre¹⁹⁸³, pero seguramente hubo muchos más incidentes. “Lo de siempre” titula un corresponsal de *La Voz* a finales de junio, cuando informa de que una sección de la Guardia Civil se desplazó desde Lugo hasta Sarria “con motivo de la tensión política que allí existe”¹⁹⁸⁴. Según el diputado republicano Emilio González, Sarria poseía “uno de los grupos falangistas más activos y agresivos de la provincia de Lugo”, y Antonio Páramo, alcalde tras la victoria del Frente Popular, había sido herido en uno de sus ataques en el casino del pueblo¹⁹⁸⁵.

Los guardias hicieron falta. En la noche del 25, un hombre al que identificaron como Manuel Corrozas entró en la sociedad La Unión y disparó contra el secretario local de Izquierda Republicana, Pedro García. El industrial Victoriano Cabarcos, también de Izquierda Republicana, intentó sujetarlo y fue apuñalado. Los dos heridos fallecieron. Al mismo tiempo un grupo de enmascarados hicieron fuego contra la casa consistorial, donde se estaba juzgando a un hombre por apagar el alumbrado en San Juan. En el pueblo comenzó una huelga indefinida en protesta, y durante los días 27 y 28 hubo al menos tres tiroteos, uno de ellos un disparo contra un grupo de izquierdistas que provocó un motín en el que se destruyó el Casino¹⁹⁸⁶. Sin embargo, no tenemos noticia de más víctimas.

Finalmente, en las semanas previas a la guerra encontramos cinco homicidios que podrían tener carácter político en el municipio de A Coruña, pero que hemos decidido calificar de dudosos. Además del atentado contra los hermanos Freire Caamaño, Francisco Suárez, un obrero eventual y vigilante de obras municipales, fue asesinado a tiros sin motivo aparente la noche del 5 de julio¹⁹⁸⁷, y Gerardo Canzobre murió acribillado a balazos el 17 o 18 de ese mes en las afueras de la ciudad¹⁹⁸⁸; puede que haya otro caso en Teis, en los alrededores de Vigo¹⁹⁸⁹.

Tras la victoria de las izquierdas destaca la relativamente baja conflictividad de Lugo y el alto nivel de violencia que encontramos en Ourense, donde se encuadraba el mayor núcleo de Falange en Galicia¹⁹⁹⁰. Esta aparece liderada por los choques en la capital, pues en este municipio, o en sus alrededores, se producen cinco de las ocho muertes, y cinco de las seis que podemos atribuir, directamente, a diferencias ideológicas, pero también son numerosos los choques entre izquierdistas y falangistas en villas y municipios menores.

10.5 La pesadilla del exterminio. Niveles y características de la violencia sociopolítica

¹⁹⁸¹ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), pp. 350-351.

¹⁹⁸² *FV*, 22-04-1936, p. 10, *FV*, 24-04-1936, p. 10.

¹⁹⁸³ *LV*, 05-05-1936, p. 9.

¹⁹⁸⁴ *LV*, 26-06-1936, p. 2.

¹⁹⁸⁵ No hemos incluido este suceso en las estadísticas porque no aparece confirmado en otras fuentes que se produjera en 1936. González López conocía a Páramo y afirma que en otoño de 1935 ya había sido herido en el pene y en una pierna por un disparo falangista, estando con él en Madrid. Puede, por tanto, que haya una confusión de tiempos. GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1988), p. 299.

¹⁹⁸⁶ *EP*, 27-06-1936, p. 1, *LV* 01-07-1936, p. 8. Por el incidente del Casino se siguió causa por delito de rebelión contra 16 personas en 1937. SOUTO BLANCO, M. J. (1999), p. 49.

¹⁹⁸⁷ *LR*, 14-07-1936, p. 1, *EP*, 15-07-1936, p. 6.

¹⁹⁸⁸ *LV*, 19-07-1936, p. 4.

¹⁹⁸⁹ Es el de Manuel Mura o Muras, alias Sardiñeiro, asesinado, según la prensa, por los familiares de una mujer con la que tenía relaciones. *FV*, 11-06-1936, p. 9; 14-06-1936, p. 2. Grandío Seoane, teniendo como referencia *El Ideal Gallego*, lo considera un derechista muerto en una pelea. GRANDÍO SEOANE, E. (1998), p. 282.

¹⁹⁹⁰ NÚÑEZ SEIXAS, X. M. (1993), p. 158.

“Hacia la catástrofe” titula Navarro Gisbert su capítulo dedicado al Frente Popular, en el que habla del “cáncer del orden público”¹⁹⁹¹; para Pío Moa, la violencia era un “preludio de la toma del poder” por parte de los izquierdistas, y la muerte de Calvo Sotelo el “tiro de gracia” a la República¹⁹⁹². La idea de una erosión de la seguridad y el orden en España que desencadenó la guerra continúa entre algunos autores fuera del ámbito académico formal, y no son los únicos. Payne afirma que “el carácter y la extensión del colapso del orden público con el Gobierno republicano de izquierda de 1936 carecen de un precedente histórico de tales proporciones en Europa occidental” y que a las derechas solo les quedó “la rebelión armada o la resignación cristiana ante la tiranía de la izquierda”¹⁹⁹³.

El análisis de los datos que hemos recogido a Galicia muestra que, a menos que nuestras fuentes sean mucho menos fiables de lo que estimamos, no se produjo un colapso absoluto del orden público. Tampoco puede afirmarse que la violencia estuviese siempre protagonizada por la extrema izquierda. Si comparamos las cifras con las del gabinete de Portela Valladares para ese año (en los que se incluyen los muertos en el fin de semana de las elecciones), encontramos que las diferencias no son tan significativas, una vez que anualizamos los datos.

Tabla 10.5.1 Tasas de heridos y homicidios, en datos anualizados por 100.000 habitantes, para el año de 1936 con el gabinete de Portela Valladares (1 de enero hasta 16 de febrero) y durante su interinidad y el Gobierno de izquierdas (17 de febrero a 18 de julio)¹⁹⁹⁴

	Homicidios hasta el 16 de febrero (todos) ¹⁹⁹⁵	Homicidios tras el 16 de febrero (todos)	Homicidios hasta el 16 de febrero (sin casos dudosos)	Homicidios tras el 16 de febrero (sin casos dudosos)	Heridos hasta el 16 de febrero	Heridos tras el 16 de febrero
A Coruña	1,86	2,29	1,86	0,86	13,03	10
Lugo	1,57	1,45	1,57	1,45	15,73	5,8
Ourense	1,75	4,3	1,75	4,3	10,49	22,02
Pontevedra	3,82	0,78	3,82	0,78	17,81	14,46
Galicia	2,28	2,1	2,28	1,6	14,34	12,51

Fuente: Elaboración propia

La tasa de heridos que presentamos es prácticamente idéntica con el gabinete de Portela y tras la victoria electoral, e incluso disminuye un poco. El homicidio disminuye. Es cierto que los datos del Gobierno de Portela cuentan los incidentes ocurridos en la jornada electoral (que puede verse en todo caso como deterioro del orden público por parte de los extremistas políticos, pero no de dejación de funciones de los ganadores, que todavía no habían asumido competencias). Si

¹⁹⁹¹ Para su visión de la conflictividad en esta época, NAVARRO GISBERT, J. A. (2006), pp. 525-636. La cita es de la página 600.

¹⁹⁹² MOA, P. (2005), pp. 115, 152.

¹⁹⁹³ PAYNE, S. G. (2005), pp. 541, 544.

¹⁹⁹⁴ Con más propiedad, deberíamos contar

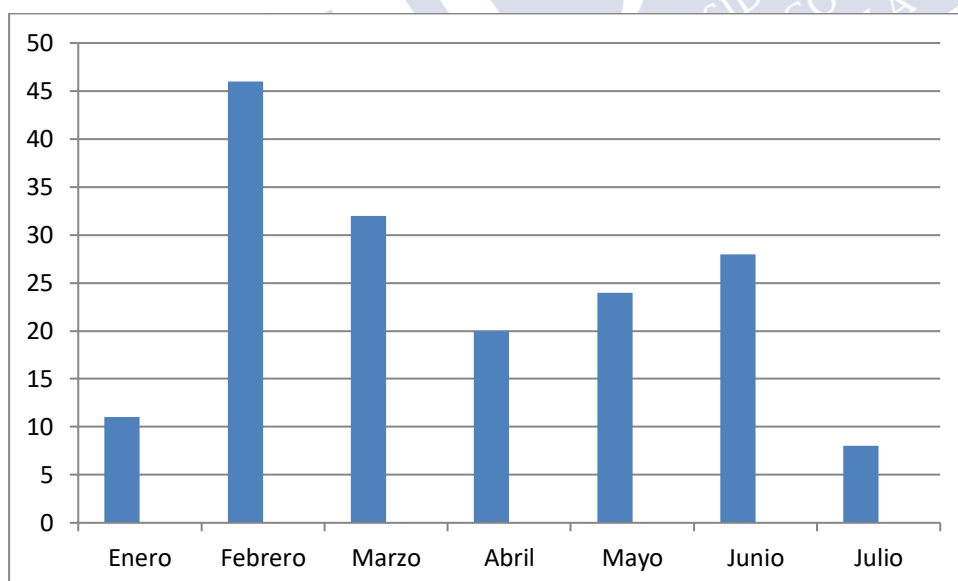
¹⁹⁹⁵ No hay casos dudosos.

descontamos este fin de semana, como ya vimos anteriormente, la cifra de homicidios políticos sería algo menos de un 60% superior tras las elecciones.

No creemos que sea una representación fiel de la realidad, debido a los sesgos introducidos por la censura. Incluso en los casos más graves, como los heridos por disparo, el número de heridos está seguramente infrarrepresentado, y lo más probable es que el nivel de conflictividad aumentara tras las elecciones. Sin embargo, no debió hacerlo de manera exagerada. La excepción es Ourense, en el que los heridos se triplican tras la victoria electoral y la violencia aumenta significativamente en mayo y junio. No tenemos motivos para pensar que la censura actuase con menos intensidad allí que en el resto de provincias..

Tampoco hubo una tendencia creciente que culminase en la Guerra Civil. Con los datos que hemos recogido, febrero y marzo son los meses más violentos agregando todos los heridos, y el incremento es significativo en relación a enero en todas las provincias. Luego tiende a bajar, con picos puntuales que siguen los patrones de conflictividad regionales: en Pontevedra en abril se producen choques en la capital y en Vigo, además de en varias villas; en Lugo, tenemos en junio las peleas y muertes en Sarria. Nuevamente la excepción es Ourense, con un pico muy importante en mayo y junio, y en el que las elevadas tasas de febrero no se deben a la conflictividad electoral sino a las peleas que se produjeron tras la victoria izquierdista. Las tendencias pueden apreciarse en el siguiente cuadro. En julio la violencia disminuye de manera importante, incluso si tenemos en cuenta que nuestra información solo abarca la mitad del mes; por otra parte, como ya hemos señalado, hay varios muertos en A Coruña que probablemente sean políticos. Es posible que hubiese un aumento de la censura.

Gráfico 10.5.1 Heridos por mes, para toda Galicia



Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, tomando como indicador los homicidios, la Galicia de 1936 sí que vivió un grado de violencia sociopolítica sustancialmente mayor que durante el resto del quinquenio republicano, en el que, en conjunto, la comunidad fue muy pacífica¹⁹⁹⁶. Atendiendo a los datos recopilados por González Calleja, desde la proclamación de la República hasta el 31 de diciembre de 1935 murieron

¹⁹⁹⁶ A lo largo del quinquenio la actual comunidad concentró el 1,41% de las muertes, la tasa más baja por regiones descontando el País Vasco. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), p. 108.

13 personas por conflictos sociopolíticos en Galicia; en 1936 y hasta la guerra, 25¹⁹⁹⁷. Nosotros, con algunas altas y bajas, reducimos la cifra a 23. Ahora bien, como el número de homicidios sociopolíticos fue muy alto en España tras la victoria de las izquierdas, Galicia siguió teniendo un nivel muy inferior al que le correspondía por población.

Álvarez y Villa achacan el pico de violencia electoral a la aguda “intervención arbitraria de las autoridades provinciales y locales a favor del Gobierno”, en comparación con otras partes de España. Nosotros matizaríamos. Una parte, como la conflictividad en Lugo, se debió seguramente a la oposición entre unas derechas arraigadas y el Gobierno, con despliegue de política caciquil por ambas partes; quizás se pueda aplicar lo mismo a Ourense (en el que ellos encuentran menos episodios que en otras provincias). Pero la mayor parte de los incidentes de la campaña que hemos registrado se producen en ciudades y villas, y se explica por los choques entre el movimiento obrerista y las juventudes derechistas.

Resulta obligada la referencia a la interpretación de Rafael Cruz acerca de la “politización de la brutalidad” en la época de entreguerras, como respuesta a la de “brutalización” de la política de George L. Mosse. Para el segundo autor, la Gran Guerra habría tenido como consecuencia la deshumanización del adversario político y protagonismo de los jóvenes, lo que conduciría a una mayor violencia. Cruz propone, en cambio, que las rivalidades y peleas de cuadrillas entre jóvenes que ya habían existido anteriormente cambiaron porque los jóvenes de entreguerras “actuaron en nombre de agrupaciones políticas, y de esa manera politizaron la violencia ejercida con rasgos tradicionales”¹⁹⁹⁸.

En nuestra opinión, en la Galicia del final de la Segunda República podemos apreciar rasgos de una mayor radicalidad en la concepción del rival, aunque ese fenómeno no deriva de una experiencia militar generacional. Quizás, en nuestro periodo de estudio, podríamos seguir a Mosse en la primera mitad del siglo XIX, y hablar de brutalización a partir de la Guerra de la Independencia.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la violencia engloba muchos formatos y son hasta cierto punto independientes unos de otros. En la violencia “tradicional”, la inmensa mayoría de los actos de violencia son privados y personales, mientras que la política siempre tiene un matiz comunitario. La violencia “tradicional” de riñas estaba en decadencia independientemente de la introducción de la política, por lo que una no es directa sustitución de la otra.

No se trata de negar la tesis de Cruz, pero sí de señalar que la violencia ejercida por grupos de mozos a los que se refiere el autor y la violencia politizada tienen parecidos importantes, pero también diferencias relevantes. En la violencia “tradicional” la comunidad es pequeña: el grupo de amigos, los jóvenes de la parroquia. En la política, amplía: vemos cómo un obrero de A Coruña pelea en Santiago o un jonsista ourensano recibe una herida en Vilagarcía contra oponentes de los que solo saben que son del grupo rival. En la tradicional el enemigo es privado: alguien que ha hecho una afrenta personal, un miembro de un bando de mozos rival. En la política, es un enemigo público, alguien contra el que se pelea porque es enemigo de la sociedad en la que participan ambos. La tradicional es, como mucho,, competitiva en los términos de Tilly. La política es proactiva: quiere cambiar el mundo.

También afectan a grupos diferentes. En la tradicional y colectiva participaban más las clases populares. En la política vemos estudiantes e hijos de la clase media que (creemos) de no ser por la ideología no participarían activamente en peleas callejeras.

¹⁹⁹⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015).

¹⁹⁹⁸ CRUZ, R. (2013), pp. 282-283.

Finalmente, hay una gran diferencia en la letalidad. En la tradicional del siglo XIX y XX gallegos no vemos ciclos de venganzas de sangre, donde una muerte se pague por una muerte (estas dinámicas son características de sociedades con un estado muy débil, o de organizaciones criminales), y es más frecuente el homicidio que el asesinato. En la política, una muerte puede, y como hemos visto lo hizo ampliamente, generar ciclos de atentados y ataques con intención letal.

10.6 Huelgas, revoluciones y ansias. La movilización colectiva y el miedo a la revolución

¿En qué medida contribuyó la violencia que hemos descrito al inicio de la Guerra Civil? Es una pregunta que parece inevitable, pero que quizás no tenga demasiado sentido. La guerra se desencadenó por una conspiración protagonizada por un número reducido de individuos que movilizaron a bases más amplias, que podía haberse abortado, o fracasado, por actitudes individuales, y no la consecuencia inevitable de un estado social desequilibrado¹⁹⁹⁹. Solo podríamos decir que la violencia sociopolítica desencadenó la Guerra Civil si pudiéramos demostrar que los implicados en la conspiración actuaron debido a esta. Parece claro que no era el único factor²⁰⁰⁰, que influyeron negociaciones y decisiones personales²⁰⁰¹, en todo caso, la extrema derecha ya había planteado un golpe militar antes de que las izquierdas entrasen en el Gobierno²⁰⁰². Que el golpe multiplicó la violencia que se vivía en Galicia, donde la represión acabó con 4.619 personas²⁰⁰³, es tan obvio que resulta pueril.

Objetivamente, la Galicia pre-bélica no se estaba viviendo un exterminio violento de las derechas, la violencia letal se dirigía sobre todo contra oponentes en conflictos políticos o laborales, y pocas veces contra las instituciones. El mayor contingente de muertos lo conforman militantes izquierdistas asesinados por sus oponentes de derechas; los falangistas mataron a 4 o 4,5 oponentes por cada baja que sufrieron. La distribución de víctimas encaja a grandes rasgos a la que hubo en la violencia sociopolítica de la República, pero, al contrario que en lo observado en el conjunto del Estado, en el que tuvieron un importante peso los choques entre los izquierdistas y las fuerzas de seguridad en el conjunto del Estado²⁰⁰⁴, en la Galicia de 1936 tan solo intervinieron agentes en dos muertes, y ninguno murió en acto de servicio, una después de las elecciones.

Tabla 10.6.1 Filiación de los muertos en ataques de carácter sociopolítico tras las elecciones en Galicia

	Muertos contando casos dudosos	Porcentaje	Muertos sin contar casos dudosos	Porcentaje
Izquierdistas muertos por atacantes de	9	42,86	8	50

¹⁹⁹⁹ FERNÁNDEZ PRIETO, L., MIGUEZ MACHO, A. (2018), p. 22.

²⁰⁰⁰ Coincidimos en que la violencia política fue un factor de desestabilización y polarización, pero “no fue la causa – al menos no fue la única- de la crisis que desembocó en la Guerra Civil”; hay que considerar otros factores, como la relación del Gobierno y la cúpula militar. GONZÁLEZ CALLEJA, E., et al (2015), pp. 20, 169. CRUZ, R. (2006), p. 205-218. Por otra parte, según Comín, la crisis económica de la Segunda República (aumento del desempleo, caída de precios, descenso de la producción) no derivó de la conflictividad social.

²⁰⁰¹ Sobre las reticencias y ambigüedades de Franco a incorporarse al golpe (y con él el Ejército de África), PRESTON, P. (1994), p. 173.

²⁰⁰² Gil Robles conspiró a favor de un golpe militar en 1935, y, de nuevo, el día siguiente a las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular.

²⁰⁰³ Nomes e Voces.

²⁰⁰⁴ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), p. 115. Hay que señalar que, si bien en Galicia mueren más izquierdistas que derechistas en choques entre ambos, en el conjunto del Estado y en la época del Frente Popular las cifras se igualaron más que en periodos anteriores, p. 287.

derechas				
Derechistas muertos por atacantes de izquierdas	2	9,52	2	12,5
Muertos colaterales en agresiones de derecha	1	4,76	1	6,25
Muertos colaterales en agresiones de izquierda	1	4,76	0	0
Amotinados abatidos por las fuerzas de seguridad	1	4,76	1	6,25
Muertos por atacantes que pudieran ser de izquierdas o derechas	3	14,29	2	12,5
Individuos no militantes cuyas muertes fueron atribuidas a izquierdistas	4	19,05	2	12,5
Total	21	100	16	100

Fuente: Elaboración propia

La fuerza tampoco parece parte de un proceso revolucionario planificado. Los homicidios en la Galicia de 1936 no parecen formar parte de un proceso revolucionario para reforzar su acceso al poder político en competición con el Estado o con otros grupos. Este sería el caso, por ejemplo, de la violencia que el propio Payne describe para el fascismo italiano, cuyo objetivo era “el poder político, y la táctica para alcanzarlo, la acción directa. En mayo de 1922, se lanzó una nueva ofensiva, durante la cual los fascistas se apoderaron de los gobiernos municipales en un creciente número de distritos del norte”²⁰⁰⁵, o, evidentemente, la revolución de Asturias. Las muertes por motivos sociales y políticos en Galicia no se producen en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ni en el contexto de movilizaciones colectivas, ni se asalta y sustituye por la fuerza el poder local.

Hubo, sí, una escalada violenta en la lucha entre las izquierdas y derechas que probablemente se correspondió con un patrón gradual de desensibilización; los individuos que participan en actos violentos van acostumbrándose a la respuesta emocional negativa que producen, y por tanto sus inhibiciones van erosionándose²⁰⁰⁶. Pero la violencia permaneció dentro de círculos reducidos. No existían grupos organizados capaces de tomar el poder o disputárselo a las fuerzas de seguridad, ni entre las derechas ni entre las izquierdas. Los grupos paramilitares, señala Calleja, nunca fueron una amenaza para el ejército regular en la Segunda República²⁰⁰⁷.

En Ourense, donde más muertos se registran, las actitudes paramilitares y la violencia serán patrimonio “dunhas cantas ducias e non de centos de militantes”²⁰⁰⁸; al tiempo, la constitución de milicias por parte de alcaldes y gobernadores parece tener corto alcance temporal²⁰⁰⁹. Esta es la dinámica en el resto de Galicia, donde aunque había habido iniciativas milicianas²⁰¹⁰ desde el año anterior, el grado de efectividad parece baja.

²⁰⁰⁵ PAYNE, S. G. (1995), pp. 141-144.

²⁰⁰⁶ BAUMEISTER, R. F. (1997), p. 285-286.

²⁰⁰⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009-B), p. 47.

²⁰⁰⁸ PRADA RODRÍGUEZ, X. (2007), p. 58-60.

²⁰⁰⁹ Sobre los servicios armados en la provincia en la Segunda República, organizados por algunos casos por alcaldes y pedáneos, PRADA RODRÍGUEZ, X. (2007), pp. 144, 147, 152, 154-155, 160, 163, 165-168.

²⁰¹⁰ En marzo de 1935 la Guardia de Asalto detuvo a 42 personas haciendo “ejercicios de formación, y entonando cánticos subversivos” en la playa de Bastiagueiro, cerca de A Coruña. Nueve de ellos, que llevaban camisetas rojas, pasaron a la cárcel con multa de 250 pesetas, mientras que el resto “serán sancionados con arreglo a los antecedentes de cada uno de ellos”, según dijo el Gobernador, que expresó a la prensa que esperaba que “el aviso llegue a todos para que sepan que en esta provincia no son posibles estas expansio-

La prueba es que, tras el 18 de julio, se levantaron varios grupos milicianos en defensa de la República en diversas villas y ciudades de Galicia, pero, por lo que podemos discernir de la crónica de los combates, los izquierdistas no disponían de armas de guerra en cantidades relevantes, y tampoco de organización para el combate. En una escaramuza en torno a Tui, contra los sublevados “os paisanos, armados con escopetas cargadas con munición para cazar coellos, desesperándose ao ver a inutilidade das súas armas, que só servían para facer estrondo”; al día siguiente, los carabineros que los acompañaban rechazaron pelear, porque se les habían acabado las balas²⁰¹¹. Un cenetista de Moaña recuerda cómo empezaron una requisita de armas, con algunas “escopetas o rifles de caza”. Capturó dos de las primeras “y un saco de cartuchos” pero el secretario del sindicato, sabiendo de la situación en Vigo y Pontevedra, las mandó devolver, pues “consideraba un suicidio hacernos fuertes en el pueblo, y además, con esta clase de equipo defensivo”²⁰¹².

Lo mismo ocurrió en las grandes ciudades; pese a arranques de voluntarismo, no había milicias equipadas y preparadas para la lucha. En Vigo “había personas con fusiles de carabineros, que se los habían dejado coger, y con escopetas. Por la zona de Lavadores resistieron durante unos días y luego fueron cazados como conejos”, testimonia el militante socialista Antonio Arenosa²⁰¹³. Javier Alvajar, que vivió su adolescencia en A Coruña durante la II República, recuerda que “las noches del 17, 18 y 19 de julio de 1936, los buques de pesca hicieron sonar sus sirenas para congregarse al pueblo corruñés que a gritos pedía armas ante el Gobierno Civil”. Pero la ciudad cayó tras un corto combate.

Lo mismo ocurre entre las derechas: podemos encontrar a algunos requetés ataviados con sus boinas rojas manteniendo el orden en un mitin de Calvo Sotelo²⁰¹⁴, a falangistas cometiendo actos terroristas, y, después de la guerra, un papel importante de las milicias en la represión y persecución de retaguardia²⁰¹⁵; pero si la sublevación en sí misma fue obra de los grupos armados. Quizás el movimiento que estuvo mejor organizado en este sentido fue el carlismo, que “creó las mejores organizaciones paramilitares que existieron en nuestro país en los años treinta”, señala Souto Kustrín²⁰¹⁶, pero, según vemos en la Guerra Civil, el requeté gallego no era comparable al de otras zonas de España.

El atentado, la bomba, el motín y otras formas de coacción menores formaban parte del repertorio de acción de los izquierdistas, pero no eran preeminentes como forma de movilización. Puede verse en la respuesta ante los homicidios de obreros. González Calleja describe para la primavera del 36 el patrón de violencia “agresión-protesta-represión”, caracterizado por una provocación derechista, un asalto en respuesta de la multitud a sedes o símbolos de las derechas, y muertos o heridos cuando la fuerza pública intervenía para reponer el orden²⁰¹⁷, y podemos ver un caso claro tras la muerte de Lema. Pero en los días siguientes en los atentados predomina la actuación disciplinada a través de un frente unido. El repertorio de acción preferido fue el paro general local²⁰¹⁸ y las manifestaciones

nes”. LV, 28-03-1935, p. 2. El Progreso afirma que los ejercicios se realizaban en San Amaro (en la propia A Coruña) y que los jóvenes, además de hacer “prácticas”, cantaban La Internacional y que se les encontró una hoja titulada Iskra (como el diario fundado por Lenin en Ginebra). EP, 29-03-1935, p. 4.

²⁰¹¹ ALONSO RÍOS, A. (2006), pp. 42-43, 53.

²⁰¹² PÉREZ ÁLVAREZ, L. (2015), p. 108.

²⁰¹³ La descripción de los combates de la sublevación se ha consultado en FERNÁNDEZ SANTANDER, C. (2007). La cita recogida es de la p. 579. Para una crónica en detalle de la movilización de voluntarios republicanos y sus enfrentamientos con las fuerzas golpistas, VÁZQUEZ ACUÑA, B. (2014), pp. 118-145.

²⁰¹⁴ LV, 02-02-1936, p. 10.

²⁰¹⁵ CARBAJO, J. (2018), pp. 298-303.

²⁰¹⁶ SOUTO KUSTRÍN, S. (2020), p. 88.

²⁰¹⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2015), pp. 297-300.

²⁰¹⁸ Las huelgas locales en respuesta a atentados falangistas se produjeron en otras partes de España. CRUZ, R. (2009), p. 151.

simbólicas en torno a los muertos: las casas del pueblo se convertían en capillas ardientes para acoger sus cuerpos, las protestas por la muerte en manifestaciones, los entierros venían acompañados de mítines²⁰¹⁹.

Así, al entierro de Amboage acudieron cenetistas, ugetistas y comunistas, se reunieron coronas de flores de asociaciones de trabajadores de toda la comarca, y fue seguido de un mitin con unos 5.000 asistentes en el que se pidieron responsabilidades contra la patronal coruñesa²⁰²⁰, de manera mayoritariamente no violenta (aunque hubo una carta, y algunos detenidos). El presidente de la patronal coruñesa abandonó la ciudad “a ruego gubernativo”. La muerte de Lema paralizó Vigo y los municipios vecinos de Teis y Lavadores, sin que abrieran los mercados ni circularan automóviles: las organizaciones obreras “cuidaban ellas mismas, por medio de delegados, del orden”²⁰²¹.

Los mártires se aprovechaban para plantear exigencias. La muerte de Amboage se empleó para pedir el despido de los esquiroles admitidos en las obras militares de la ciudad y la readmisión de los represaliados por los sucesos de octubre²⁰²². En Vigo los obreros exigieron, entre otras cosas, la destitución de autoridades, la creación de un Tribunal Popular y de milicias obreras. En Ourense, tras el asesinato de Da Silva, la disolución de las organizaciones fascistas y el reconocimiento de milicias populares²⁰²³.

El mecanismo de la huelga no estaba restringido a las grandes ciudades, ni tenía por qué seguir a homicidios. En la celebración del 1 de mayo, varios jóvenes izquierdistas intentaron o amagaron con apuñalar a las vacas de una vecina de A Estrada, reprochándole que estuviese trabajando en la festividad obrera. Tres hermanos a los que más tarde se les atribuyó filiación derechista o fascista acudieron a auxiliarla y empezó una pelea, en la que el socialista José Rodríguez resultó herido leve en la cabeza, probablemente de un garrotazo. Aún así, se declaró la huelga general en la villa por 24 horas, y una comisión de “elementos de izquierda” visitó al Gobernador²⁰²⁴. Pocos días después, este declaró a los medios “que estuvo en La Estrada y que observara algunas anomalías respecto al fascismo”. Recompuso la gestora municipal²⁰²⁵. En julio hubo una huelga general en Lalín para protestar por la detención del alcalde (acusado de denegación de auxilio). Los obreros se reincorporaron cuando fue puesto en libertad²⁰²⁶.

El poder político y los obreros navegaban dentro de ciertos límites, que probablemente no dejaran del todo satisfechos a nadie, pero que permitían una negociación sin recurrir a la violencia extrema y dentro de límites compatibles con el estado de derecho. El 20 de mayo los obreros de Lugo fueron a la huelga general, pidiendo la revisión de la causa contra unos fascistas detenidos con armas el primero de ese mes y la revocación de los magistrados que habían sentenciado una condena contra ellos, a su parecer, demasiado leve. El Gobernador declaró ilegal la huelga, pero fue incapaz de forzar a los obreros a volver al trabajo. Estalló un petardo en la huerta del Seminario, y se realizaron algunos daños, y la fuerza pública custodió puntos clave y dispersó tumultos. No hubo incidentes graves, ni represión violenta. La solución al paro fue negociada, pero no pasó por influir en el poder judicial. La presión de los obreros podía conseguir algunas pequeñas victorias (en este caso, el

²⁰¹⁹ Sobre el “repertorio fúnebre” a inicios de la Segunda República, CRUZ, R. (2013), p. 287.

²⁰²⁰ LV, 22-03-1936 (2).

²⁰²¹ FV, 01-05-1936, p. 8.

²⁰²² LV, 24-03-1936, p. 5.

²⁰²³ LR, 20-05-1936, p. 6.

²⁰²⁴ Hemos reconstruido los hechos a partir de FV 03-05-1936, p. 2, FV, 06-05-1936, p. 4, LV, 5-05, p. 10.

²⁰²⁵ FV, 06-05-1936, p. 2.

²⁰²⁶ FV, 14-07-1936, p. 2.

Gobernador aceptó liberar a algunos detenidos por coacciones y rotura de lunas durante el paro²⁰²⁷), pero no modificar los mecanismos esenciales de la justicia²⁰²⁸. Al mismo tiempo, declarar ilegal una huelga, sin pactar con los obreros, no conseguía que volviesen al trabajo²⁰²⁹.

¿Le resultaba más fácil a los obreros gallegos presionar al poder público que en los años anteriores? Sin duda había reivindicaciones que podían plantearse ahora y no antes, como la readmisión de los obreros despedidos en octubre de 1934 (y su reverso quizás tan conflictivo, el despido de los esquirols). También se permitían de facto manifestaciones, incompatibles con el estado de alarma. La respuesta a la pregunta en su conjunto requeriría un estudio aparte, pero no consideramos que haya una especial debilidad por parte del poder público, ni hemos encontrado pruebas de que fuesen más parciales.

Aunque la movilización colectiva izquierdista fuese mayoritariamente a través de la huelga, y la violencia sociopolítica se mantuviesen en los niveles ya expuestos, resulta pertinente preguntarse en qué medida contribuyeron estos factores al apoyo que parte de la población gallega brindó al golpe. Los verdugos fueron pocos en relación a la población. Pero, al mismo tiempo, en Santiago (en el que no había habido ni una muerte por motivos políticos en toda la República" acogió a los golpistas "cos brazos abiertos"²⁰³⁰. Se trata de entender qué creó ese estado de opinión.

Pero para responder a esa pregunta no basta con un análisis cuantitativo al que, por otra parte, los contemporáneos no tenían acceso. Hay que entender la lectura de la violencia como un proceso cultural, siguiendo a Tarrow: una situación de agravio o de injusticia necesita, para verse como tal y suscitar una movilización, un "enmarcado", un proceso por el que se realiza un diagnóstico del problema y de la posible solución²⁰³¹. Dice Cruz que "la violencia por sí sola no destruyó la República, ya que otros gobiernos han soportado niveles similares sin derrumbarse. Fue necesaria una definición de la naturaleza de la violencia como amenaza a la integridad personal, social o política de determinados grupos"²⁰³², y estamos de acuerdo. Hay, por tanto, que analizar varios factores de agravio ligadas a la conflictividad, y, al mismo tiempo, su interpretación.

En primer lugar, incluso unos pocos homicidios dan idea de desgobierno, sobre todo si se incrementan en relación a los años anteriores, como fue el caso de Galicia²⁰³³. "El retorno de Atila", era el título el 25 de febrero de 1935 el artículo de portada de *La Voz de Galicia*, que no era un periódico particularmente derechista, mientras denunciaba la vuelta de una violencia medieval a la vida diaria: "Ladran las pistolas ametralladoras en las avenidas, con la misma naturalidad con que

²⁰²⁷ Algo que no es privativo de la época del Frente Popular. El Gobernador de Cáceres de 1934, por ejemplo, llegó a un acuerdo de liberar presos a cambio de que desconvocase la huelga agrícola de junio de ese año. AYALA VICENTE, F. (2003), p. 92.

²⁰²⁸ EP, 23-05-1936, p. 6, FV 22-05, p. 9, FV 23-05-1936, p. 9, LV 23-05-1936, p. 8

²⁰²⁹ Además de en el caso ya visto, pudo apreciarse en la huelga de dependientes de Vigo, originada por el conflicto y cierre de la delegación de la casa Singer. El Gobernador de Pontevedra intentó en un primer momento suprimirla por decreto, pero se vio obligado a negociar. FV 14-07-1936, p. 10, FV 16-07-1936, pp. 2, 5, FV 17-07-1936, p. 2.

²⁰³⁰ Para Betanzos, LÓPEZ SÁNCHEZ, C. (2018), para Ribadeo BUXEIRO ALONSO, X. (2018), para Pontevedra CIDRÁS, A. (2018), y para Santiago, de donde extraemos la cita, GARCÍA FERREIRA, R. (2018), p. 177.

²⁰³¹ TARROW, S. (1997), pp. 214-215.

²⁰³² CRUZ, R. (2006), p. 191.

²⁰³³ Sesgos mentales, procesos sociales y el tratamiento mediático aumentan la percepción psicológica de cierto tipo de riesgos en relación a otros. Los actos terroristas, en concreto, causan un pánico desproporcionado en relación a la amenaza real que suponen. BRECKENRIDGE, J. N., ZIMBARDO, P. G. (2007), pp. 120-126.

antes rechinaban las espadas románticas. Se blindan el despacho y el vehículo y se aspilleran el convento, el Banco y la casa de campo”²⁰³⁴.

La victoria de las izquierdas venía acompañada de otras formas de violencia menor y, en muchos casos, simbólica, que daba idea de inestabilidad: peleas de bandos en las villas, cacheos, amenazas, presos políticos liberados y paseando por las calles. Aumentaron los atentados con bomba, los ataques contra iglesias. Se trata de una violencia contra las cosas y no contra las personas: ningún ataque contra el patrimonio eclesiástico causa muertos o heridos, y, dejando aparte el atentado de *La Iberia*, solo hay un herido por un ataque con explosivos (un guardia de asalto afectado por la explosión de una bomba contra una tahona)²⁰³⁵. En su mayor parte son explosivos de baja potencia, colocados contra patronos en el marco de conflictos laborales, o bien contra iglesias. Solo hay un ataque que parece claramente derechista, la bomba colocada el 26 de junio en el Centro Obrero de Pontevedra (no llegó a explotar)²⁰³⁶.

Pero combinados, estos actos daban la sensación de desbordar a las autoridades. En 1936 “muchos gobernadores no fueron capaces, por incompetencia, ausencia de medios o deslealtad de sus subordinados, de hacerse con las riendas del orden público”²⁰³⁷, y las masas de votantes de las derechas debieron ser especialmente sensibles a este fenómeno; veían que se estaba cumpliendo lo que sus líderes les habían dicho que ocurriría si perdía el frente antirrevolucionario. Que fuese en gran medida una profecía autocumplida no le resta peso. *La Región*, ultraconservadora, celebró en junio la llegada de Martín March al puesto de Gobernador Civil, aunque estaba próximo a Casares Quiroga y la destitución del anterior había sido pedida por las izquierdas²⁰³⁸, debido a su promesa de mano dura contra el desorden y persecución de las armas ocultas²⁰³⁹.

Además, la violencia en otras zonas del país era objetivamente más alta que en Galicia, y la de las grandes ciudades, en especial la de Madrid, se veía amplificadas por la caja de resonancia de los medios. Los diarios que, como hemos visto, disimulaban la violencia que ocurría cerca de sus redacciones, mostraban ampliamente los atentados y homicidios políticos en otras partes del país en sus secciones de información por teletipos, y el impacto no debe desdeñarse. A su lectura catastrofista entre la población gallega contribuyeron, sin duda, los discursos reproducidos en prensa de Calvo Sotelo y Gil Robles sobre el orden público (aunque fuesen censurados). La muerte del primero lo convirtió en profeta. “Nadie se avenía a creerlo, pero cuando más tarde se confirmó la noticia, ésta causó honda sensación”²⁰⁴⁰, “fueron incontables las personas que desfilaron por las redacciones [...] para adquirir noticias concretas”, se enviaron a la familia del asesinado “infinidad de testimonios de pésame”²⁰⁴¹, “penosísima impresión ha causado en esta localidad la triste noticia del vil asesinato”²⁰⁴², “se tuvieron noticias de los sucesos ocurridos en Madrid, y ello ha sido el comentario natural durante toda la jornada”²⁰⁴³, informan diferentes corresponsales.

En tercer lugar, la actuación disciplinada de los obreros al paralizar ciudades para hacer avanzar reivindicaciones, aunque no fuese explícitamente violenta, no debía ser menos amedrentadora para los sectores sociales que temían que tomaran el camino de la revolución. La huelga, objetivamente,

²⁰³⁴ LV, 25-02-1936, p. 1.

²⁰³⁵ LV, 25-04-1936, p. 5, EP 26-04-1936, p. 3, FV 29-04-1936, p. 2

²⁰³⁶ FV 27-06-1936, p. 2, LV 28-06-1936, p. 10

²⁰³⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. 2014, p. 73.

²⁰³⁸ PRADA, X. (2007), pp. 414, 417.

²⁰³⁹ LR 25-06-1936, p. 1.

²⁰⁴⁰ LV, 16-07-1936, p. 8.

²⁰⁴¹ FV, 15-07-1936, p. 3.

²⁰⁴² FV, 16-07-1936, p. 4.

²⁰⁴³ EP, 14-07-1936, p. 8.

era una demostración de poder. Esto se combina con unas reclamaciones maximalistas, al menos en la retórica, que hacían temer cambios en el orden social. El miedo a la revolución provenía del siglo XIX, pero la toma del poder bolchevique “lo precisa y lo actualiza”, y 1934 lo devuelve al primer plano de la derecha española²⁰⁴⁴. La cuestión de la propiedad de la tierra, en cambio, seguramente un peso menor en Galicia que en otras partes del Estado²⁰⁴⁵; después de todo, el proletariado agrícola tenía poco peso en las sociedades agrarias, principal elemento de las reclamaciones del rural²⁰⁴⁶.

Por último, encontramos el que quizás sea el punto más importante, la sensación de persecución política y de parcialidad por parte de las instituciones. Además del agravio por los fraudes electorales, que los contemporáneos no conocían en detalle pero intuían²⁰⁴⁷, el nuevo Gobierno trajo consigo la reposición de ayuntamientos populares y cambios en las gestoras, que arrastraban también a empleados municipales y generaban claros conflictos de intereses.

Se produjeron amplias redadas y persecuciones gubernativas de “fascistas”, orientadas hacia los miembros de Falange pero en las que seguramente caerían otros conservadores y derechistas, y no solo por actos violentos: también por repartir octavillas²⁰⁴⁸, “proferir palabras desagradables”²⁰⁴⁹, de niños por entregar pasquines subversivos²⁰⁵⁰, por hacer pintadas²⁰⁵¹. Vemos detenciones de sacerdotes o del corresponsal de *Faro de Vigo* en Ribadavia, de claras simpatías derechistas²⁰⁵². Puede argumentarse que estas medidas eran reflejo de las que se habían tomado el bienio anterior en otro sentido; pero lo importante es saber si la lectura de que las medidas para mantener el orden público eran parciales, si la idea de nos cachean a nosotros y no a ellos, llegó a ser un modo prevalente de explicar la realidad²⁰⁵³.

Y estaba la religión. La Iglesia era tanto un valor simbólico a proteger a sus fieles como una entidad capaz de convocarlos en su defensa. La noticia del cierre de los colegios religiosos de primera enseñanza en Ourense y Celanova provocó la movilización de los padres, que se negaron a enviar a sus hijos a escuelas nacionales²⁰⁵⁴. Cuando el ayuntamiento compostelano acordó solicitar al Estado permiso para incautarse los establecimientos de enseñanza religiosa, una delegación de madres se manifestó en protesta (los bomberos las dispersaron con chorros de agua)²⁰⁵⁵. Estos actos no son

²⁰⁴⁴ En el primer bienio de la Segunda República las derechas no habían empleado tanto la carta del anticomunismo, quizás porque se identificaba con la Dictadura. GARCÍA, H. (2005), pp. 14-18.

²⁰⁴⁵ En concreto, J. Otero, registrador de la propiedad de Lugo, habla de una caída del precio de la tierra tras la victoria electoral de las izquierdas debido al temor a la expropiación de las tierras arrendadas. *EP* 04-03-1936, p. 6.

²⁰⁴⁶ Hubo algunas excepciones, como el agrarismo anarquista de los alrededores de A Coruña o la cuestión de los subarriendos. CABO VILLAVARDE, M. (1998), pp. 49, y, para las excepciones, pp. 67, 89-90.

²⁰⁴⁷ Tras el fraude en la votación del Estatuto, “el descrédito de la población gallega respecto a las instituciones republicanas debió crecer considerablemente”. El mismo autor señala el “inmenso fraude electoral” en las votaciones parciales municipales en la provincia de A Coruña. GRANDÍO SEOANE, E. (1998), pp. 272, 279-280.

²⁰⁴⁸ *FV*, 02-04-1936, p. 2, *LV* 03-04-1936, p. 8.

²⁰⁴⁹ *FV*, 14-07-1936, p. 2.

²⁰⁵⁰ *LV*, 14-05-1936, p. 5.

²⁰⁵¹ *LR*, 07-05-1936, p. 1.

²⁰⁵² *FV*, 25-06-1936, p. 9, *FV*, 28-06-1936, p. 7, *LR*, 23-06-1936, p. 1, *LR*, 27-06-1936, p. 1.

²⁰⁵³ Estas arbitrariedades habían generado mártires y la aparición de veinte mil falangistas en Ourense, según un colaborador de La Región. *LR* 28-06-1936, p. 5.

²⁰⁵⁴ *LR*, 17-05-1936, p. 5, *EP*, 14-05-1936, p. 6.

²⁰⁵⁵ *EP*, 31-05-1936, p. 6. La técnica se empleó, probablemente, por tratarse de una protesta de mujeres. Pocos años antes, en Vigo, la Guardia Civil tenía reticencias para dispersar una manifestación de trabajadoras en relación con el seguro de maternidad, de manera que el alcalde “mandou ós bombeiros para dispersalas ós remollóns”. SANTOS CASTROVIEJO, I., NORES SOLIÑO, A. (2005), p. 546.

puntuales, se enmarcan dentro de una campaña nacional de defensa de la enseñanza eclesiástica coordinada por las asociaciones católicas²⁰⁵⁶. Hasta qué punto se persiguió a la Iglesia resulta discutible, pues existían limitaciones: el ayuntamiento de Tui fue disuelto brevemente en junio por los tribunales por tratar de adueñarse del edificio de un seminario²⁰⁵⁷. Pero los intentos del poder local de laicizar el espacio público, las multas y prohibiciones de procesiones²⁰⁵⁸ sin duda se vieron por algunos sectores como parte de una ofensiva contra la religión.



²⁰⁵⁶ CRUZ, R. (2006), p. 125.

²⁰⁵⁷ *EP*, 03-05-1936, p. 4, *EP* 06-06-1936, p. 6, *EP* 12-06-1936, p. 3.

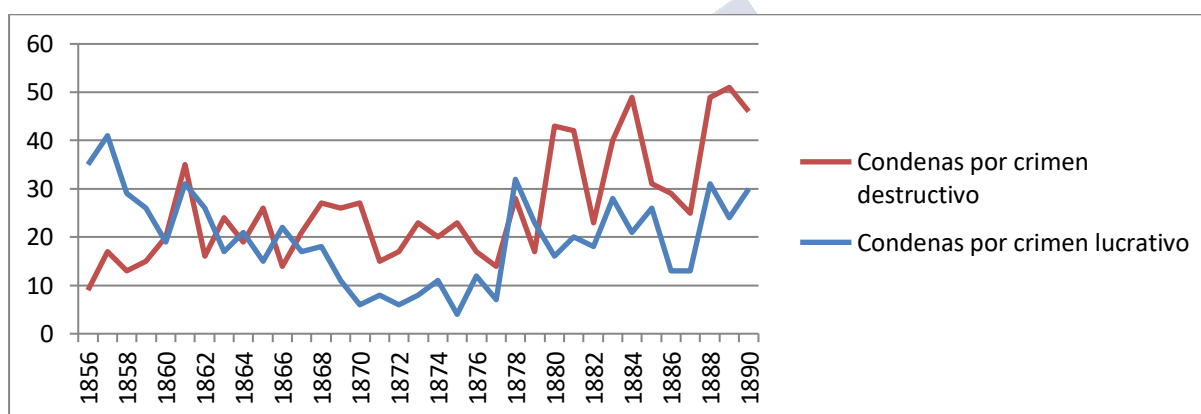
²⁰⁵⁸ *LV*, 15-04-1936, p. 8.

11. DEBAJO DEL RADAR. DELINCUENCIA MENOR Y VIOLENCIA INVISIBLE

11.1 Justicia y castigo cotidianos: juicios de faltas, arrestos gubernativos, *quincenas* y algunos apuntes sobre los gitanos y el espigueo

Las faltas han quedado debajo del radar del trabajo hasta este momento. Juzgadas por alcaldes, jueces de paz o municipales, son el nivel al que se resolvía la mayor parte de las infracciones contra la persona. Un instrumento muy útil para observar su evolución son los registros de reos de las cárceles de partido, donde los condenados por penas poco severas cumplían sentencia. Sin embargo, tras consultas exhaustivas al personal de los archivos municipales de las antiguas cabezas de partido, hemos tenido que renunciar al estudio comparativo de instrumentos de este tipo, ya que en la gran mayoría no los localizan. Reproducimos los resultados de un estudio anterior sobre las prisiones de partido de A Coruña y Santiago²⁰⁵⁹:

Gráfico 11.1.1 Reos de arresto mayor por 100.000 habitantes en la cárcel de partido de A Coruña, para crímenes destructivos²⁰⁶⁰ y lucrativos²⁰⁶¹



Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de reos y censos

Gráfico 11.1.2 Reos de arresto mayor por 100.000 habitantes en la cárcel de partido de A Coruña, para crímenes destructivos²⁰⁶² y lucrativos²⁰⁶³

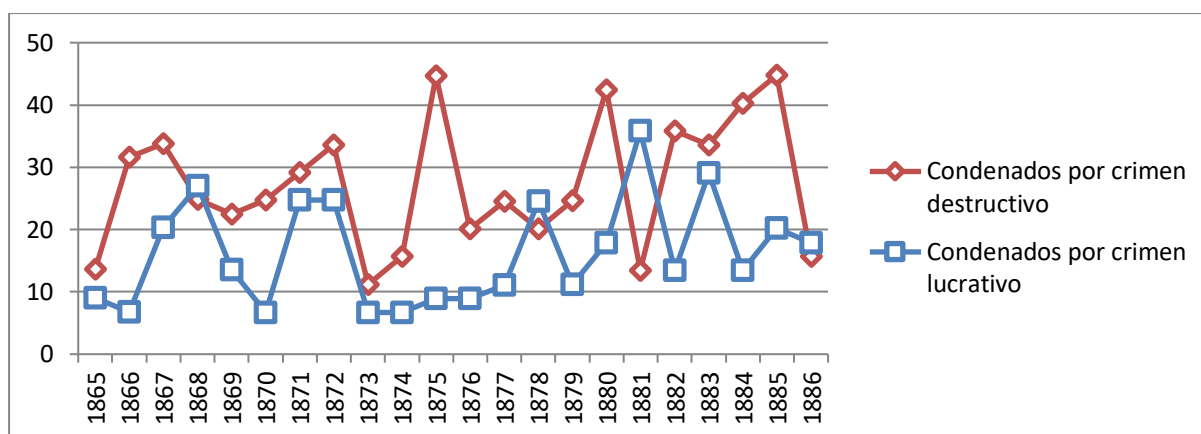
²⁰⁵⁹ CARBALLO GENDE, E. (2018).

²⁰⁶⁰ Contra la integridad física, el honor y la propiedad, cuando no sean provechosos económicamente para el autor, e independientemente de que se cometan contra un particular o contra una autoridad. La mayoría de los condenados en esta categoría lo son por lesiones.

²⁰⁶¹ Todos aquellos crímenes cuya finalidad es la ganancia económica, ya se cometan contra particulares o contra la Hacienda. En su mayoría absoluta se trata de hurtos.

²⁰⁶² Contra la integridad física, el honor y la propiedad, cuando no sean provechosos económicamente para el autor, e independientemente de que se cometan contra un particular o contra una autoridad. La mayoría de los condenados en esta categoría lo son por lesiones.

²⁰⁶³ Todos aquellos crímenes cuya finalidad es la ganancia económica, ya se cometan contra particulares o contra la Hacienda. En su mayoría absoluta se trata de hurtos.



Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de reos y censos

Dos documentos que se conservan en el Archivo Municipal de A Coruña, el *Registro de juicios verbales de faltas 1851-1866* y el *Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18* (que acaba en diciembre de 1869, aunque hay algunas hojas sueltas de 1870 que no hemos contado) ofrece una muestra interesante de la implantación de los juicios de faltas, que quedaron definidas como tales, con el Código Penal de 1850²⁰⁶⁴.

Entre los años 1851 y 1869, las fuentes nos muestran un total de 262 juicios de faltas, con un total de 362 encausados. Hasta 1866, esto es, en el primer documento, figura la fecha de queja o parte; de 1867 en adelante, se indica un día, sin especificar si es el de la queja o del juicio.

Tabla 11.1.1 Procesados en juicios de faltas en A Coruña, por año de parte o juicio, entre 1851 y 1869

1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
6	2	34	4	9	3	15	3	4	1
1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	
5	29	17	18	31	25	54	62	40	

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de juicios verbales de faltas de A Coruña²⁰⁶⁵

Lo más llamativo es la gran irregularidad a lo largo de la serie: en 1868 hubo 62 procesados, cuando en 1860 había habido solo uno. Entre 1851 y 1859 contamos 80 procesados, pero 49, es decir, más del 60%, se dieron solo en 1853 y 1857. Años que, por otra parte, no son extraordinarios en cuanto al tipo de faltas, pues encontramos en ellos, al igual que en los demás, pequeñas lesiones, injurias y faltas a la autoridad. Hasta 1861 solo se sobrepasa en estos dos años la cifra de diez encausados. En la década siguiente las cifras parecen más estables: entre las 17 y las 31 de 1862 a 1866, y entre 54 y 40 entre 1867 a 1869. Si en vez de contabilizar los procesados hacemos la tabla con las causas, la distribución es semejante.

Tabla 11.1.2 Juicios de faltas en A Coruña, por año de parte o juicio, entre 1851 y 1869

²⁰⁶⁴ En el Archivo Municipal coruñés guarda otra documentación de juicios verbales, en las cajas 6295-B y 6300, pero, o bien era anterior al inicio de nuestro periodo de estudio o estaba en mal estado de conservación.

²⁰⁶⁵ *Registro de juicios verbales de faltas 1851-1866, Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18.*

1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860
5	2	29	3	8	2	8	3	4	1
1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	
5	24	12	13	29	15	35	30	34	

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de juicios verbales de faltas de A Coruña²⁰⁶⁶

La falta de casos con anterioridad a estos últimos años no puede achacarse a cambios en la legislación penal, ya que regía el código de 1850. Podría deberse a que solo se registrasen las condenas. En las fuentes no encontramos absoluciones hasta 1866, cuando hay tres²⁰⁶⁷. En 1867 hay otra, junto con un perdón mutuo por injurias, y a partir de entonces se registran apelaciones exitosas, sobreseimientos y otros perdones; quizás estos casos no se contaban anteriormente. Pero eso no explicaría la alta volatilidad de la serie en la década de 1850, como tampoco lo haría atribuirlo al crecimiento de la población coruñesa, que no se duplicó de una década a otra.

En nuestra opinión, las cifras reflejan la adopción paulatina de los juicios verbales por parte de la población y el incremento de las denuncias tramitadas por la Guardia Municipal (que como vimos en el apartado 3.8, se reorganizó a partir de 1845, y fue incrementando sus efectivos en las décadas siguientes), con picos de actividad que quizás se correspondían con la aplicación más enérgica de la normativa por algún alcalde. En la década de 1860 pasaríamos a ver una estabilización de las cifras a medida que el mecanismo judicial se asentaba. En todo caso, la mayoría de los individuos son condenados, lo que contrasta con las altas tasas de sobreseimiento que encontramos en los juicios penales.

El alzamiento de 1868 no parece alterar las dinámicas de los juicios de faltas²⁰⁶⁸, si bien en junio de ese año tenemos la única contra la autoridad a la que se le da un cariz político: Manuel Barral realizó “menos precio al Gobierno de S. M. y a la gua [rdia] rural, ultrajando a un individuo de la misma”. Fue absuelto libremente. Hay una causa por desorden pública masiva, con 11 participantes, que fue juzgada ese mes de diciembre, pero deriva de un escándalo con mayoría de mujeres en el que se lanzaron insultos.

Tabla 11.1.3 Número de encausados por faltas dependiendo de la naturaleza de esta

Falta	Encausados	Porcentaje del total	Porcentaje de hombres	Porcentaje de mujeres
Desobediencia y otras faltas contra la autoridad	70	19,3	74,3	25,7
Lesiones o maltrato	116	32	56	44
Injurias	114	31,5	41,2	58,8
Escándalo público y/o embriaguez	50	13,8	66	34
Vagancia	1	0,3	100	0
Suplantación de moneda	2	0,6	100	0
Faltas de naturaleza económica	1	0,3	0	100

²⁰⁶⁶ Registro de juicios verbales de faltas 1851-1866, Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18.

²⁰⁶⁷ A don Vicente Abeleco, por maltratar a sus hijas, a una mujer por injurias de obra y de palabra, y a un matrimonio por injurias y malos tratamientos.

²⁰⁶⁸ Hubo dos juicios el 29 de septiembre, y otro el 31.

Falta de sumisión	3	0,8	66,7	33,3
Amenazas	2	0,6	100	0
Incomprensible	2	0,6	0	100
Posible pedrea	1	0,3	100	0
Total	362	100		

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de juicios verbales de faltas de A Coruña²⁰⁶⁹

La inmensa mayoría de las faltas responden a unas pocas categorías. El 32% son por lesiones o maltrato, mientras que otro 31,5% se corresponden con injurias. La desobediencia, las injurias y amenazas a la autoridad y el desacato suman 70 encausados, el 19,3%. El escándalo público y la embriaguez (casi siempre el primero, aunque seguramente los casos en los que está presente comprendan la segunda) suponen el 13,8% de los denunciados, aunque el escándalo está presente, como acusación secundaria, en un cierto número de delitos contra la autoridad.

Ese tipo de comportamientos, como señalamos en otras partes del capítulo, corresponden con la violencia de bajo nivel común en la sociedad de la época, y seguramente entrar unos días en prisión o pagar una multa por ellas no tenían consecuencias demasiado graves. En un estudio realizado por Vikström sobre el encarcelamiento en el norte de Suecia a finales del siglo XIX, la mayoría de los presos eran “young men arrested for minor misconduct”, y el encarcelamiento “generally neither excluded offenders from the labor market nor isolated them at the lowest level of it”, pues “even though their careers in comparison to those of average youths were less successful, they were not forced to the bottom of the social strata”²⁰⁷⁰.

A mayores, los alcaldes podían sancionar infracciones gubernativamente e imponer multas. En 1868, la segunda, tercera y cuarta tenencias de alcaldía coruñesas impusieron 34 sanciones por este motivo, de acuerdo con un registro contemporáneo²⁰⁷¹, probablemente incompleto²⁰⁷². De ellas, 27, esto es, el 79,4%, fueron por escándalo, lo que apunta a que el control del orden público concentraba la mayoría de multas en el periodo isabelino, y a que, a la hora de analizar cuantitativamente las faltas por escándalo público, debemos tener en cuenta que muchas se resolvían gubernativamente. De las restantes multas, dos fueron por incumplimiento de ordenanzas municipales, otra por usar medidas no contrastadas, tres por “irreverencia en el templo”²⁰⁷³ y una por daños; todas a hombres, excepto la de las medidas.

Entre los encausados hay mayoría de varones, con 205 procesados de sexo masculino y 157 mujeres juzgadas. La diferencia (56,6% frente a 43,4%) es relevante, pero menor que en otras muestras de delitos más graves que hemos recogido a lo largo del trabajo. Muestra, por tanto, la mayor participación de las mujeres en el nivel de las faltas. Estas, sin embargo, eran juzgadas en un porcentaje mayor por delitos cometidos en grupo. Frente a 134 casos de hombres solos hay 20 juicios a grupos de hombres, pero ante 70 casos de mujeres en solitario hay 21 a grupos de varias mujeres, y 17 a grupos mixtos.

²⁰⁶⁹ *Registro de juicios verbales de faltas 1851-1866, Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18.*

²⁰⁷⁰ VIKSTRÖM, L. (2008), pp. 25, 27-28.

²⁰⁷¹ ES el único documento de este tipo que hemos podido consultar, dentro de nuestro periodo de estudio, en el Archivo Municipal de A Coruña; en la caja en la que se encuentra hay otros documentos de este tipo, pero los responsables del archivo no permiten su consulta por el mal estado de conservación. *Registro de multas impuestas gubernativamente y en juicio de faltas. Tenencias de la alcaldía 2ª, 3ª y 4ª.*

²⁰⁷² El listado de multas solo llega hasta agosto.

²⁰⁷³ Los tres debieron realizar la irreverencia al mismo tiempo, puesto que comparten número de multa. Fueron sancionados con sumas pequeñas: 40, 20 y 10 reales.

Tabla 11.1.4 Faltas según el sexo y número de los responsables de su comisión

	Casos	Porcentaje
Hombre solo	134	51,1
Mujer sola	70	26,7
Varios hombres	20	7,6
Varias mujeres	21	8
Grupo mixto	17	6,5
Total	262	100

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de juicios verbales de faltas de A Coruña²⁰⁷⁴

La participación de las mujeres en las faltas en relación a la de los hombres oscila según el tipo de infracción. Eran menos propensas a enfrentarse a la autoridad, o quizás a ser detenidas por ello, y suman apenas una cuarta parte de las encausadas tras oponerse a los agentes. También era mucho menos probable que acabasen procesadas por escándalo público y embriaguez, ya que suponen solo una de cada tres; pero están más representadas que en los actos de violencia grave en situación de fiesta, dominados por los hombres según señalamos en el apartado 7.11. Es más: si nos vamos a las multas gubernativas de los tenientes de alcalde coruñeses en 1868, exactamente las dos terceras partes de las sanciones por escándalo son a mujeres.

En las lesiones, necesariamente leves, las mujeres suman un 44% de los procesados, lo que prueba su participación en la violencia de baja intensidad. Y son mayoría, un 58,8%, entre los procesados por injurias ligeras, lo que se corresponde con una tendencia que ya se hizo notar en un trabajo anterior en base a los registros de reos de los partidos compostelano y coruñés²⁰⁷⁵ y que confirma observaciones en la Galicia del Antiguo Régimen, la España de finales del siglo XIX y otros espacios²⁰⁷⁶. Los documentos de juicios de faltas no recogen sistemáticamente la identidad de las víctimas, pero parece que las injurias y agresiones femeninas iban sobre todo hacia otras mujeres.

Las presencias de pequeñas desobediencias a la autoridad, lesiones de escasa entidad e injurias era esperable, pero, en este apartado, es quizás más interesante ver las ausencias. La falta de respeto y obediencia debida a los padres y al marido estaba recogida en el Código Penal y era objeto de sanción, pero los juicios de faltas por este motivo son casi desconocidos. No hay ninguno en el ámbito marital en los veinte años que hemos contado, y solo una relacionada con los progenitores: a María Antonia Rodríguez Crego la condenaron en febrero de 1869 a cinco días de arresto “por faltar al respeto y sumisión debida a su madre Josefa Crego”. También estaba encausado su marido, aunque fue absuelto de la instancia (con condena a la mitad de costas). Además, a Juan Somoza lo condenaron a cinco días de arresto en 1868 por “falta de obediencia y sumisión debida a las hijas de la Caridad y superiores” del asilo en el que estaba acogido. La autoridad marital y familiar, por tanto, no se solía judicializar.

²⁰⁷⁴ *Registro de juicios verbales de faltas 1851-1866, Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18.*

²⁰⁷⁵ CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 37.

²⁰⁷⁶ IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), p. 524, 691, BERNALDO DE QUIRÓS, C. (1906), EIBACH, J. (2016), p. 230, 233.

La vagancia estaba penada, ya antes del periodo liberal²⁰⁷⁷. Pero solo tenemos un caso tramitado como falta en dos décadas, si bien también podía perseguirse como delito. Por otras observaciones en los registros de penados de A Coruña y Santiago, vemos que se aplicaba en relativamente pocas ocasiones como delito único (y siempre, como en el caso que hemos detectado ahora, a varones)²⁰⁷⁸. Creemos, por tanto, que, aunque de tanto en tanto se les expulsase y quizás se les obligase a entrar en los asilos, no hubo persecución penal a los pobres de solemnidad e incapaces para el trabajo. No todos los años ingresaba un mendigo en la cárcel de partido de A Coruña solo por serlo, y, en Santiago, no entró ninguno.

Esto no quiere decir que no se tomasen disposiciones para perseguir a los vagabundos. En A Coruña, en la primera Restauración, las ordenanzas municipales no permitían “mendigar en la vía pública y casas de esta capital ni hacer ostentación de deformidades repugnantes y asquerosas”²⁰⁷⁹, pero los pedigüños abundaban. Cada cierto tiempo se hacía una “redada” para internarlos en el Asilo Municipal²⁰⁸⁰, pero “los pobres que se detienen un día, son puestos en libertad a las veinticuatro horas, por carecer de local o de alimentos para tantos acogidos”²⁰⁸¹. Así que se optaba por algo mucho más barato: obligarlos a marcharse²⁰⁸². En diciembre de 1883 se expulsó de A Coruña a 79 personas por carecer de documentación²⁰⁸³. A medida que fue transcurriendo el periodo, las instituciones de caridad destinadas a sacar a los mendigos de las calles fueron ampliando sus capacidades. La Guardia Municipal de la capital gallega condujo a 156 pobres al Patronato de la Caridad en 1919²⁰⁸⁴.

Las autoridades empleaban la legislación y la presión policial para fiscalizar a los grupos de población menos asentados: se controlaba el movimiento de viajeros a través de los posaderos²⁰⁸⁵, a las prostitutas a través del registro de Higiene, a los empleados domésticos a través de una cartilla²⁰⁸⁶. Aunque quizás no fueran muy efectivas²⁰⁸⁷, las medidas reflejan dan cuenta de la preocupación por controlar a la población flotante²⁰⁸⁸.

Los gitanos, creemos, sufrían un grado especial de hostilidad, independientemente de la época. La aparición de una caravana de gitanos en Santiago en 1885 desencadena la vigilancia de las fuerzas policiales y la casi inmediata detención de los hombres por “sospechas sobre un hurto de quincalla, seguida de la expulsión de mujeres y niños”²⁰⁸⁹. En A Coruña, la policía expulsó en 1920 a una caravana de gitanos acampada a las afueras “por orden del gobernador”²⁰⁹⁰. En la relación de

²⁰⁷⁷ Así, en el Antiguo Régimen, en el que los casos contra vagabundos eran casos de Corte, había obligatoriedad de trabajar para los que no dispusiesen de patrimonio y persecución de vagos y maleantes. Se llegó a sentenciar marcarlos a fuego. LÓPEZ GÓMEZ, P. (1994), pp. 157-159, 256, 190.

²⁰⁷⁸ CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 49.

²⁰⁷⁹ *La Voz de Galicia*, 16-07-1886.

²⁰⁸⁰ *La Voz de Galicia*, 21-01-1883, 10-03-1883

²⁰⁸¹ *La Voz de Galicia*, 22-10-1882. También faltaba sitio en el Hospicio de Pontevedra, según ha estudiado Rodríguez Martín para la segunda mitad del siglo XIX. RODRÍGUEZ MARTÍN, A. M. (2017), p. 420.

²⁰⁸² Vease, para Santiago de Compostela, PERNAS OROZA, H. (2001), p. 199.

²⁰⁸³ *La Voz de Galicia*, 17-12-1883.

²⁰⁸⁴ *La Voz de Galicia*, 01-02-1920.

²⁰⁸⁵ *La Voz de Galicia*, 13-07-1884.

²⁰⁸⁶ En Madrid se implantó en 1852; en A Coruña ya existía en 1882, aunque Turrado Vidal afirma que se extendió a provincias cuatro años más tarde. *Gaceta de Madrid*, 27-03-1852, pp. 2-3; TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 278-280; *La Voz de Galicia*, 16-06-1882.

²⁰⁸⁷ Para el jurista, las cartillas tienen “escaso resultado” y “parecen más bien la forma de un impuesto o arbitrio”. GIL MAESTRE, M. (1886), p. 101.

²⁰⁸⁸ Ya desde el Antiguo Régimen, TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 21.

²⁰⁸⁹ *La Gaceta de Galicia*, 04-02-1885, 09-02-1885.

²⁰⁹⁰ *LV*, 25-04-1920, p. 3.

conducidos a la comisaría de Vigilancia de Vigo el 28 de mayo de 1935 encontramos a “Consolación Montoya, por serle ocupada una manta nueva y sospechar fuera robada, pues no justifica donde la compró y es “gitana””²⁰⁹¹. Contra la etnia operaba, según señaló García Sanz, un “derecho de culpables” aquel de jurisdicciones especiales que permite una rebaja de las garantías procesales “ante representaciones imaginarias estigmatizantes del delincuente”²⁰⁹². Cuando la noticia es que robaron un burro a unos gitanos, el periodista advierte “no se rían ustedes”²⁰⁹³.

En 1920, un columnista afirmaba que la regeneración y civilización de la raza gitana se veía impedida por el “menosprecio y asco” que recibía un pueblo “contra el cual existe no ya prevención y antipatía, sino odio real y secular”²⁰⁹⁴. También entre los habitantes de las parroquias el rechazo al gitano podría servir para cohesionar a las comunidades sedentarias y defender sus valores²⁰⁹⁵. Sin embargo, no hay demasiados casos de violencia entre grupos, aunque choques entre vecinos de Vigo y una banda de gitanos dejaron un herido en 1935; la solución de la prensa pasaba por “expulsar [...] a tan desagradables convecinos”²⁰⁹⁶. Ese mismo año, después de que un joven fuese herido por un oso amaestrado en un campamento gitano en la entonces capital de Galicia, la prensa cuestionaba “por qué se consienten ni el oso ni los gitanos en semejante paraje y menos aun por las calles de La Coruña”²⁰⁹⁷.

Es difícil precisar cómo definían gitano los contemporáneos. Había una cierta idea de diferenciación racial, pero lo que marcaba la percepción general era, en gran medida, el estilo de vida. En otro caso ocurrido diez años antes, dos gallegas “que visten y viven como las gitanas” pero a las que se define como “gallegas” llegaron a A Coruña con tres niñas de una de ellas y se asentaron en un descampado. Las dos chicas mayores fueron a pedir limosna a unas viandantes, que les dieron unos caramelos. Una de las niñas comentó que le recordaban a los que había tomado en Madrid, lo que dio pie a que “las señoras, otras mujeres y unos chicos” las confundieran con unas niñas desaparecidas en la capital un tiempo antes. “El escándalo fue tremendo”. Acudieron guardias que se hicieron cargo de las niñas, y, cuando se encontraron con la madre y su compañera, “la gente intentó apoderarse de las dos mujeres, viéndose y deseándose los guardias para defenderlas”. Consiguieron protegerlas, pero, tras comprobar que no eran secuestradoras, las obligaron a desmontar el campamento y salir de la ciudad²⁰⁹⁸.

La cuestión de las sustracciones de niños por los nóamdas parece haber sido recurrente en la Segunda República. A finales de 1936 se detuvo a una caravana por, supuestamente, secuestrar a dos niños de Camariñas que “declararon que los gitanos les amenazaron de muerte si no les seguían”²⁰⁹⁹. En esta época, recordemos, los nazis empezaron una campaña de exterminio contra los romaníes como parte de una persecución secular²¹⁰⁰.

En cuanto a la violencia entre gitanos y campesinos, un hombre murió en Cerdedo en 1935 a manos de una banda de atracadores supuestamente de esta etnia mientras patrullaba con otros vecinos

²⁰⁹¹ FV, 29-05-1935, p. 8.

²⁰⁹² GARCÍA SANZ, C. (2018), p. 118. Sobre la persecución de los gitanos en el País Vasco, MARTÍN SÁNCHEZ, D. (2018).

²⁰⁹³ EP, 19-05-1936, p. 6.

²⁰⁹⁴ EP, 27-07-1920, p. 3.

²⁰⁹⁵ Según estudió Sembel para el Poitou en un periodo contemporáneo a la Restauración española. SEMBEL, P. (2005), pp. 227-229.

²⁰⁹⁶ FV, 06-01-1935, p. 9.

²⁰⁹⁷ LV, 29-01-1935, p. 5.

²⁰⁹⁸ LV, 12-06-1925, p. 1.

²⁰⁹⁹ EP, 24-05-1936, p. 6.

²¹⁰⁰ SIERRA, M. (2020).

para buscar sospechosos del robo de caballerías, y ya hemos mencionado en el apartado 4.1, el linchamiento de dos gitanos por parte de vecinos de Mesía en 1921. Otra campesina de Padrón falleció tras sufrir heridas por parte de unos gitanos que intentaban robarle gallinas a finales de 1934²¹⁰¹. En cuanto a la conflictividad dentro de la etnia, una pelea entre dos grupos de gitanos “embriagados” acampados en Ourense dejó tres heridos²¹⁰².

Creemos que a lo largo de la Restauración se popularizó en Galicia una forma alternativa de castigo a los marginales, a través de la popularización de la quincena²¹⁰³. Este particular castigo se amparaba en el artículo 22 de la Ley Provincial de 1882, que permitía a los Gobernadores civiles imponer multas de hasta 500 pesetas y en caso de insolvencia arresto supletorio hasta un máximo de quince días, en casos de actos contrarios a la moral y a la decencia pública y faltas de obediencia o de respeto a la autoridad²¹⁰⁴. La propia revista de la policía reconocía que se empleaba para castigar a sospechosos sobre los que no había pruebas y para presionar para conseguir delaciones²¹⁰⁵.

Veamos el sistema en marcha. En febrero de 1920 leemos que la Policía “dio ayer una batida a la gente sospechosa que pudiera haber” en A Coruña, deteniendo a tres hombres a los que se describe como “conocidos carteristas”, que fueron denunciados ante el Gobernador e “ingresaron en la cárcel para cumplir una quincena”²¹⁰⁶; la rapidez de la sentencia, la detención masiva y el hecho de que no se mencionen los supuestos robos de carteras, indican que probablemente fueron condenados por una falta que se les imputó *ad hoc*. Dos meses después, y en la misma ciudad, el gobernador dio “instrucciones terminantes” a los policías de realizar una nueva batida, lo que llevó a “varias detenciones” y nuevamente “los detenidos ingresaron en la cárcel, donde sufrirán una “quincena” impuesta por este²¹⁰⁷.

La quincena aumentaba la capacidad punitiva de las autoridades políticas porque permitía soslayar el estado de derecho y la intervención judicial. En 1921 a José Nogareda y Dolores Lama la policía les ocupó un motor que, según dijeron, guardaban para un tercero, Cándido Martínez, un desertor de África. Este no supo explicar la procedencia, por lo que los policías sospecharon que se trataba de un robo. Ahora bien, para castigar a alguien por el robo del motor era preciso algo más que la mera sospecha. El caso tendría que pasar por un juez de instrucción y un juicio. Sin conocer al propietario del motor, casi seguro que el asunto sería sobreseído, y en cuanto a Nogareda y Lama, a los que habría podido acusarse de receptación de un bien robado, habría que demostrar que conocían esa condición. En cambio, y con la justificación de que “los tres citados sujetos son de pésimos antecedentes, ingresaron en la cárcel a sufrir quincena”²¹⁰⁸.

Los quincenarios eran pequeños delincuentes, sospechosos de serlo o individuos considerados indeseables por el aparato policial y judicial local, como el al “conocido ratero” coruñés Julio Rubianes, al que se detuvo en 1921 con un saco de pescado del que no pudo justificar su procedencia. El sospechoso fue enviado a prisión medio mes, y el pescado al Patronato de la Caridad²¹⁰⁹. A algunos individuos se les ponían quincenas una y otra vez, para mantenerlos alejados

²¹⁰¹ LV, 24-01-1935, p. 8.

²¹⁰² LR, 24-12-1930, p. 8.

²¹⁰³ Que no estaba presente en la prensa local coruñesa y compostelana en el periodo 1882-1886, aunque es posible que fuese porque la ley provincial acababa de establecerse y la práctica todavía no se había extendido. CARBALLO GENDE, E. (2018)

²¹⁰⁴ También a las faltas cometidas por funcionarios en ejercicio de su cargo y las corporaciones dependientes.

²¹⁰⁵ TURRADO VIDAL, M. (2001), pp. 283-286.

²¹⁰⁶ LV, 13-02-1920, p. 3.

²¹⁰⁷ LV, 14-04-1920, p. 3.

²¹⁰⁸ LV, 27-04-1921, p. 3.

²¹⁰⁹ LV, 01-06-1921, p. 4.

de las calles y esperando que se aburrieran y emigraran. Esta figura aparece en el relato de Blasco Ibáñez *La corrección*, en el que un joven es castigado una y otra vez por blasfemia por un guardia²¹¹⁰. Si el acusador era una figura de autoridad y denunciaba una falta como esa, el acusado se vería en una situación de prueba diabólica, ¿cómo puede uno probar que no blasfemó?

No hemos podido establecer que se emplease esta acusación también en Galicia²¹¹¹, pero sí que se conocían los castigos reiterados. Cuando en *La Voz de Galicia* aparece en 1921 que la Policía detuvo a dos “conocidos quincenarios”, Antonio López alias *Colorao de amora* y Ramón Mosquera alias *Minuto*, y se añade que “ingresaron en la cárcel a sufrir el arresto de quince días”, los lectores contemporáneos sabían cuál era *el* arresto, que no *un* arresto, qué era *un quincenario*, y seguramente no se extrañaban mucho si, como ocurre en la noticia citada, ni siquiera se mencionaba un motivo de detención²¹¹².

Este tipo de castigo apuntaba a insolventes, pero si se imponían multas pequeñas era posible evadirla. En 1920, por ejemplo, un vigilante de Lugo detuvo al “conocido carterista” Antonio Argimiro y la autoridad gubernativa le impuso 75 pesetas de multa (sin que se explique por qué) “que el Argimiro abonó y... hasta la vista”²¹¹³. En la misma ciudad, cinco años después, la policía detuvo a varios carteristas: *Chileno*, *El Quintás*, *Venerando*, *Ruada* y *Escairón*²¹¹⁴; todos entraron a “por faltar a la moral” por escándalo público al no poder pagar las multas que se les impusieron²¹¹⁵. Si el interesado no tenía dinero, resulta difícil que pudiera librarse de entrar en prisión; era posible interponer recurso de alzada ante el Ministerio de Gobernación, pero solo “previa consignación del importe de la multa”, y es de suponer que el Ministerio apoyaría a los gobernadores.

El relato de Blasco Ibáñez apunta a algunas dinámicas que perpetuaban el sistema, como el prestigio que adquirían los guardias que realizaban estas detenciones y la exageración de los crímenes de los quinceneros por parte de los diarios. No podemos determinar hasta qué punto esto último era cierto, pero sí podemos afirmar que, a finales de la Restauración, parte de la prensa aceptaba la práctica. Además de los ejemplos que ya hemos visto en este periodo y en la dictadura de Primo de Rivera, sigue apareciendo en 1930²¹¹⁶, pero no encontramos referencias a ellas en la República.

Hay que señalar, sin embargo, que esta creó su propio mecanismo para castigar a individuos de perfil quincenario sin sentencia previa, campos de trabajo incluidos. No sabemos hasta qué punto se implantó la Ley de Vagos y Maleantes en Galicia, que parece haber sustituido a las quincenas. Por ejemplo, a inicios de 1935 la Guardia Civil que vigilaba la feria de Guitiriz detuvo a tres hombres “sin domicilio conocido y sin oficio” e identificados como “carteristas”; pasaron a disposición del juez municipal “como incursos en la ley de Vagos”²¹¹⁷. Los libros de Presentación y de Residencia de los peligrosos sujetos a medidas de seguridad, que se formaron en 1935 en el juzgado de Ribadavia en cumplimiento de la ley de Vagos y Maleantes, no contienen ni una sola anotación, y tampoco el libro de multas impuestas en base a esta legislación²¹¹⁸. El libro de Vagos y Maleantes, de esa misma fecha, solo registra tres nombres, y solo se tomaron medidas contra uno de ellos, Emilio Bello, un

²¹¹⁰ BLASCO IBÁÑEZ, V. (1893), pp. 122-123, 125.

²¹¹¹ Por ejemplo, vemos el caso de Rafael Casal, alias *Neno*, condenado a una quincena y multa de 75 pesetas por escándalo y blasfemia; en los días anteriores se habían producido redadas, por lo que es posible que fuese una acusación ad hoc, pero acompañada a la blasfemia tenemos el escándalo, que era muy frecuente y un motivo por el que se podían establecer quincenas perfectamente legales. *LV*, 11-06-1921, p. 3.

²¹¹² *LV*, 24-06-1921, p. 3.

²¹¹³ *EP*, 24-09-1920, p. 1.

²¹¹⁴ “Carteras” según el periodista.

²¹¹⁵ *EP*, 07-10-1925, p. 2.

²¹¹⁶ Por ejemplo, para las provincias de Pontevedra y Ourense, *FV*, 17-05-1930, p. 2, *LR*, 15-10-1930, p. 8.

²¹¹⁷ *EP*, 16-01-1935, p. 2.

²¹¹⁸ Se encuentran en la caja 41 del partido de Ribadavia en el Archivo Xeral Territorial de Ourense.

vendedor ambulante de quincalla al que se deportó a la casa de trabajo de Alcalá de Henares por un tiempo de ocho meses a dos años y se prohibió residir en los partidos de O Carballiño y de Ribadavia. Tenía 31 años y no tenía padre conocido.

Hay escasas condenas solo por amenazas, aunque aparecen en alguna otra ocasión acompañando a las injurias. En alguna de ellas se observa la ya mencionada tolerancia con la violencia menor. En octubre de 1869, Gregorio González fue condenado por “amenazas con arma blanca a D. Pablo Mañón”. Cumplió cinco días de arresto en su propia casa, y otros cinco por insolvencia²¹¹⁹. En diciembre de ese año, a Antonio Flores se le condenó a un duro de multa “por tirar piedras en parage público con riesgo de las personas”, una falta que aparece puntualmente ligada a delitos de lesiones o desobediencia a la autoridad. Posiblemente se tratase de un menor que participase en una pedrea o en la diversión de arrojar piedras a los viandantes, muy en boga entre la juventud del momento. Más allá de estas categorías, a algunos acusados se los encausó también por blasfemia, daños u ocultación de nombre, aunque nunca aparecen solos. En diciembre de 1869 a Manuela Pérez, alias *Carmencilla*, fue sentenciada a dos días de arresto por habersele aprehendido “mantenimiento” de mala calidad “q. tenía p^a la pública venta”, y lo mismo por desobedecer a un agente de la autoridad.

Por su naturaleza o por las consideraciones culturales que los rodean, algunos crímenes son difíciles de identificar, y las estadísticas judiciales que hemos visto hasta ahora apenas nos dan información acerca de ellos. Uno de estos fenómenos es el aprovechamiento de los restos que quedan en el campo tras la cosecha por personas diferentes a sus propietarios, el espigueo o rebusco, *rabusco* en gallego. La legislación española, como ya hemos visto en los capítulos 3 y 5, la castigaba en su primer código penal en todo caso; en 1870 se aclara que solo se perseguirá, como falta, si se realiza sin el consentimiento del propietario, para evitar situaciones absurdas. De esta forma, el espigueo podía ser perfectamente legal (si era consentido consuetudinariamente o a cambio de una contraprestación), e ilegal, pero invisible en los juicios de faltas, si se perseguía pero no se atrapaba a los culpables o si los implicados no denunciaban por miedo o para no perjudicar a sus vecinos. Según señala Emsley para las comunidades rurales de Inglaterra, a veces es muy difícil saber qué es “largesse” y limosna y qué es respuesta a una extorsión más o menos velada²¹²⁰.

Es difícil saber hasta qué punto se toleraba el espigueo; probablemente la respuesta no sea binaria, sino que cambie según la zona, las relaciones sociales y familiares de los implicados y el grado en el que se realice. A la altura de 1916, un cierto número de ordenanzas municipales limitaban la práctica, limitándola en algunas circunstancias (y por consiguiente permitiéndola en otras), mientras que otras la prohibían directamente²¹²¹. La gran mayoría no lo hacían, e, incluso en los municipios con ordenanzas que mencionan los derechos de propiedad de fincas, es relativamente infrecuente²¹²². El doctor en derecho Luis Redonet consideraba que los ayuntamientos sin

²¹¹⁹ Insolvencia referida, entendemos, a los cinco duros de multa y las costas.

²¹²⁰ EMSLEY, C. (1997), pp. 99-100.

²¹²¹ En la provincia de A Coruña lo hacían explícitamente las de Pontes de García Rodríguez, Ares y Ferrol. En Noia solo se prohibía a los espigadores pernoctar en los campos, y en Mañón hacer el espigueo con hoces. En Pontevedra, Crecente prohibía el rebusco de castañas y entrar tras la vendimia a recoger hojas de las cepas, abusos “harto frecuentes en este distrito”. En los ayuntamientos de la provincia “menudea la prohibición de arrancar hierbas”, y Marín y Pontevedra prohíben coger frutas y hortalizas. En la provincia de Lugo, Páramo prohibía el rebusco o la recogida de hierba, y las ordenanzas de Monforte proscribían el espigueo. Ribadeo prohibía sacar hierba de heredad ajena, pero sí los rebuscos de día y sin arrancar la espiga o el fruto de la planta; pero los espigadores no podían pernoctar en el campo, “siendo arrestados como sospechosos los que lo hagan, y conducidos ante el jefe del distrito”. En el municipio de Lugo encontramos disposiciones parecidas. En Ourense hay disposiciones contra el rebusco o espigueo en Laroco, Viana do Bolo y Toén.

²¹²² Sustancialmente más numerosas son las disposiciones encaminadas a prohibir la entrada de ganados o personas en finca ajena, o dejar sueltos animales de manera que perjudicasen los cultivos. Las ordenanzas de

ordenanzas, como Abegondo, Oleiros, Ortigueira o Sada, eran aquellos en los que se mantenía “más vivo el rebusco”.

Hay que puntualizar que la falta de ordenanzas relativas al espigueo no quiere decir que se consintiese automáticamente, ya el rebusco sin permiso del dueño ya estaba sancionado en el Código Penal. Pero sí apunta a que seguía vivo y se permitía consuetudinariamente, al menos en algunas partes²¹²³.

Por otra parte, las propias circunstancias económicas determinan lo que se considera delito. Ya hemos señalado que la práctica del espigueo podía ser más conflictiva en situaciones de malas cosechas, cuando el grano valía más. Otro ejemplo, poco conocido actualmente, es el aprovechamiento del cornezuelo, un hongo que parasita el centeno y otros cereales y causa ergotismo. Durante siglos había vivido en los campos gallegos sin valor en el mercado, pero en 1920 empezamos a ver disputas por su aprovechamiento, quizás por un aumento del interés comercial. Al contrario que en el caso del espigueo, algunos de los que entraban a recoger el cornezuelo de los sembrados causaban “estrágos”²¹²⁴.

11.2 “El Sr. Juez tiene por celebrado el acto sin avenencia”: Arrendatarios, deudores e insultos: los juicios de conciliación

Otra de las labores de los juzgados municipales, como ya hemos señalado en el apartado correspondiente, era la celebración de juicios de conciliación. De estos hemos podido reunir una muestra significativa: el Archivo del Reino de Galicia custodia los celebrados en A Coruña para el del distrito de la Audiencia, si bien dentro del reparto de asuntos civiles, entre los años 1928 y 1936, dentro del ámbito temporal de la tesis. Las series están casi completas²¹²⁵, con la excepción de 1928²¹²⁶, que hemos descartado por ello. No tocan más que tangencialmente el objeto de nuestra tesis, ya que no vemos querellas de tipo criminal, excepto los juicios por injurias y calumnias y por amancebamiento, y por tanto escapan del principal objeto de este trabajo; pero la documentación es tan rica que merece la pena detenerse brevemente en ella. En los ocho años estudiados encontramos 390 demandas, es decir, cerca de 49 al año o casi una por semana, aunque el número anual oscila entre 40 y 60.

No se baja de la primera cifra ni siquiera en 1936, ya que siguieron realizándose actos de conciliación durante la Guerra Civil (aunque ninguno, que hayamos visto, relacionado con el golpe o las operaciones bélicas). Tampoco hay diferencias significativas entre las cifras del período monárquico y republicano, más allá de la anécdota de que en marzo de 1931 el pintor Jesús Rodríguez Illamó a

O Grove llegaban “a no consentir la entrada, estando pendientes las cosechas, ni aun con licencia de uno de los condueños, en finca de más de un propietario. REDONET Y LÓPEZ-DORIGA, L. (1916), p. 49.

²¹²³ Por otra parte, fijarlo en las ordenanzas municipales quizás permitía amenazar con multas municipales a los infractores sin tener que denunciarlos ante el juez de paz. En algunos casos se optaría por fijar en las ordenanzas una prohibición que no se cumplía debido a la práctica consuetudinaria, y en otros, quizás, los mismos ediles podrían pensar que no estaba prohibida per se.

²¹²⁴ EP, 29-06-1920, p. 4, 04-07-1920, p. 1.

²¹²⁵ Esto es, los actos de conciliación están numerados consecutivamente y no hay ausencias significativas en ninguno de los años, aunque falta algún número, puntualmente, como el 38 del año 1931 (la hemos excluido), o el 40 del año 1932, del que una nota indica que falta y da un breve resumen. En otros casos el número aparece repetido, en dos actos, seguramente por un error material de clasificación. En teoría podrían haberse eliminado los números a partir del último, pero lo consideramos improbable. También hemos excluido de la relación un acto conciliatorio suspenso de común acuerdo por ambas partes (sin número y ubicado en la correspondiente caja entre los 42 y 43 de 1933).

²¹²⁶ La serie empieza en el número 22 de ese año, con frecuentes carencias a partir de ese número.

conciliación al alcalde para que le pagase 3.000 pesetas por un retrato al óleo de “S. M. el Rey Don Alfonso XIII”, encargado por su predecesor Manuel Casás. El regidor no pagó²¹²⁷.

Tabla 11.2.1 Actos de conciliación en el juzgado municipal de A Coruña en 1929-1936, por año

1929	1930	1931	1932	1933
50	40	55	53	48
1934	1935	1936	Total	Media
40	63	41	390	48,75

Fuente: Elaboración propia a partir de las documentación del Archivo del Reino de Galicia²¹²⁸

Antes de ver los motivos de las demandas, expliquemos el proceso de la conciliación, pues es diferente a un juicio. El demandante presentaba un escrito ante el juzgado municipal exponiendo una demanda que afectaba a la otra parte y que este consideraba justa: que pagase una deuda, desalojase un piso en el que estaba como inquilino, reconociese una infidelidad matrimonial, etcétera. En un día fijado las dos partes, o sus representantes, se presentaban ante el juez y el secretario municipales acompañados cada uno de un “hombre bueno” (cualquier varón mayor de edad servía). Si acudía, se le releía la reclamación y replicaba lo que le pareciese. Algunos argumentaban su negativa en términos jurídicos o aprovechaban para realizar alegatos, negar su relación con el demandante, burlarse de sus pretensiones, acusarlo de pretender “pasarse de listo”²¹²⁹ o afirmar indignados que la demanda constituía un delito de injurias o calumnia por sí misma²¹³⁰. Otros respondían que aclararían su postura en un juicio o simplemente negaban las pretensiones sin más alharaca. También era frecuente que el demandado no se molestase en acudir, con lo que el acto se cerraba sin avenencia, aunque, en ese caso, debía pagar las costas. El juez no podía obligar a una parte a ceder, ni, según las actas, parece que evaluase siquiera la justicia del caso.

La conciliación era muy rara, en esas condiciones, pues lo normal es que los interesados ya se hubiesen puesto de acuerdo anteriormente si tuviesen intenciones de llegar a una solución pacífica. En el 86,2% de de los actos el demandante no concurría, o se clausuraban con la fórmula de “El Sr. Juez no pudiendo conseguir la avenencia entre partes a pesar de sus exhortaciones y la de los hombres buenos, tiene por celebrado el acto sin avenencia”; en este caso, se expedían los correspondientes certificados y las partes quedaban libres para proseguir sus reclamaciones por vía judicial. Tan solo hubo acuerdo en el 11,3% de los casos.

Tabla 11.2.2 Resolución de los actos de conciliación en el juzgado municipal de A Coruña 1929-1936

Resolución del acto	Casos	Porcentaje
Con avenencia entre las partes	44	11,3

²¹²⁷ Según la demanda, el dinero se le debía desde 1927, por lo que quizás no fuese un caso de furor republicano sino de morosidad habitual de la administración local. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1931, nº 20.

²¹²⁸ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1928-1931*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57041, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1932-1933*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57042, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1934-1938*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57694.

²¹²⁹ La cita, de *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 37.

²¹³⁰ Por ejemplo, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1935, nº 18.

Sin avenencia entre las partes	336	86,2
Otros (incomparecencia del demandante, suspenso)	10	2,6
Total	390	100

Fuente: Elaboración propia a partir de las documentación del Archivo del Reino de Galicia

Los actos de conciliación responden a causas muy dispares, aunque aproximadamente un tercio proceden de reclamaciones de deudas²¹³¹, y, cerca de una cuarta parte son disputas relacionadas con los alquileres.

Tabla 11.2.3 Causas destacadas en los actos de conciliación en el juzgado municipal de A Coruña 1929-1936

Motivación de la demanda	Casos	Porcentaje del total	Porcentaje de casos resueltos con avenencia
Pago de deudas e indemnizaciones	133	34,1	9
Desahucios de arrendatarios urbanos	75	19,2	17,3
Demandas de cumplimiento de contrato	12	3,1	16,7
Demandas de rescisión de contrato	3	0,8	0
Resolución de injurias o calumnias entre partes	19	4,9	10,5
Reconocimiento de la paternidad de niños	2	0,5	0
Amancebamiento	2	0,5	0
Separación matrimonial	1	0,3	0
Cuestiones legales derivadas de herencias	22	5,6	13,6
Otras demandas de alquiler urbano o rural	19	4,9	5,3
Nombramiento de aparejadores (a partir de la ley de 1935, promovidos por la asociación profesional)	16	4,1	6,3

Fuente: Elaboración propia a partir de las documentación del Archivo del Reino de Galicia

El procedimiento de conciliación era obligatorio previamente a la denuncia por injurias, de acuerdo con el artículo 278 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente. La idea era que este tipo de problemas se resolviesen de acuerdo entre ambas partes, pero, en los 19 casos de la muestra recogida, apenas hubo avenencia en el 10,5% de los casos, esto es, en dos de ellos, aunque en otro se produjo avenencia parcial. En todos los casos en los que las injurias eran de palabra, menos uno, y aún en alguno en los que se produjeron por escrito, la parte demandada negó los hechos.

Hay algunas diferencias entre esta muestra y la que vimos a partir de los datos penales de 1900, que se correspondía casi siempre con insultos de palabra. O, mejor dicho, lo hay en parte de la muestra.

²¹³¹ Entre ellas, una por la Sociedad de Seguros Mutos contra los accidentes del Trabajo contra un constructor que no pagaba las primas por sus empleados, de 1935. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1935, nº 1.

En los actos de conciliación las injurias de palabra suponen diez casos, esto es, el 52,6% de la muestra. Son semejantes a las que hemos visto en el apartado 6.5 entre las que llegaron a juicio. Las mujeres ocupan un lugar destacado entre las víctimas de la injuria o calumnia (40% de mujeres, 30% de matrimonios, 30% de hombres). Los hombres son mayoritarios entre los demandados, exactamente la mitad, mientras que en el 30% de los casos estos fueron matrimonios o grupos mixtos y en un 10%, una mujer sola o una sociedad (en este caso, no una empresa como tal sino una asociación recreativa). En las injurias por escrito, los demandantes son siempre hombres (dos tercios) o empresas representadas por hombres (un tercio), y los demandados también hombres, ya sea en solitario (44,4% de los casos), como representantes de empresas (11,1%) o como responsables de publicaciones periódicas (44,4%). Que supongan casi la mitad de los casos, en nuestra opinión, se debe a que la muestra proviene exclusivamente de A Coruña, capital de Galicia y con una mayor concentración de empresas, políticos, órganos de prensa y vecinos implicados en estos asuntos; y quizás al ambiente societario y político más caldeado de estos años.

Tabla 11.2.4 Injuriados o calumniados

	Casos	Porcentaje	De palabra	Porcentaje	Por escrito	Porcentaje
Hombres o grupos de hombres	9	47,4	3	30	6	66,7
Mujeres	4	21,1	4	40	0	0
Matrimonios	3	15,8	3	30	0	0
Empresas o sociedades	3	15,8	0	0	3	33,3
Total	19	100	10	100	9	100

Fuente: Elaboración propia a partir de las documentación del Archivo del Reino de Galicia²¹³²

Tabla 11.2.5 Demandados por injurias o calumnias

	Casos	Porcentaje	De palabra	Porcentaje	Por escrito	Porcentaje
Hombres o grupos de hombres	9	47,4	5	50	4	44,4
Mujeres	1	5,3	1	10	0	0
Matrimonios o grupos de ambos sexos	3	15,8	3	30	0	0
Empresas o sociedades	2	10,5	1	10	1	11,1
Prensa	4	21,1	0	0	4	44,4
Total	19	100	10	100	9	100

Fuente: Elaboración propia a partir de las documentación del Archivo del Reino de Galicia²¹³³

²¹³² *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1928-1931*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57041, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1932-1933*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57042, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1934-1938*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57694.

²¹³³ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1928-1931*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57041, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1932-1933*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57042, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1934-1938*, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57694.

Las injurias de palabra son muy parecidas a las de la muestra de 1900 y responden a tipologías que ya conocemos. Por un lado están las de naturaleza sexual: una mujer que demandó a un amigo de su marido por decir que “estaba encartillada como prostituta”²¹³⁴; un matrimonio acusado de denigrar a una joven de diversos actos oprobiosos de naturaleza sexual, como recibir sexo anal y ser una “puta”²¹³⁵; una sirvienta que llamó “puta”, “pelleja” y “desgraciada” a la que acusaba de engañarla con su marido²¹³⁶; y dos marineros menores de edad de los que un compañero de profesión fue contando por las tabernas que “eran maricones” y que “sabía y le constaba que el Antonio era quien le daba por el culo a José Prado”²¹³⁷.

Evidentemente son desviaciones de la norma aceptada, pero conviene señalar, como bien afirma Laura Gowing, que aunque el insulto y el rumor contribuyen a construir la noción de género y criticar a los que se salen de ella, no son solo formas de mantener normas de comportamiento comunales. Expresan hasta cierto punto ideas personales que se pueden desviar de lo aceptado, muchas veces son falsos, y muchas habladurías no son a project of normative moral regulation, but as one of creative malice”, en la que, más que la acusación, hiere su carácter público²¹³⁸.

Los insultos de naturaleza sexual están casi siempre enfocados hacia mujeres, a las que se llama “puta” o semejantes, mientras que a los hombres se les llamaba homosexuales para denigrarlos, aunque parece mucho más infrecuente. Aparte de la que acabamos de ver, Jesús Vilanova llamó a Manuel Manteca “maricón” en una discusión por una deuda, pero también “cabrón”, “hijo de puta” y “canalla”²¹³⁹; aquí se emplea simplemente como insulto, y no como acusación.

Otro apartado son las acusaciones de robo, que siempre se dirigen hacia hombres. Por ellas se iniciaron cuatro juicios, dos de ellos promovidos por un matrimonio de comerciantes contra un miembro del gremio que había difundido el rumor de que los había estafado. “Ante la duda de la veracidad que tales manifestaciones pudiesen expresar, se negaron a continuar pagando sus créditos en el temor sin duda de verse mezclados en un proceso”. El quebranto no fue “solo en el orden moral, sino en el estrictamente [sic] económico, aparte de el indudable en el crédito comercial”; perdieron “la confianza y el crédito mercantil de que disfrutaban, con la consiguiente imposibilidad de continuar desenvolviendo sus actividades profesionales”²¹⁴⁰.

Esto muestra uno de los puntos a tener en cuenta acerca de la honra: su ausencia perjudicaba a las relaciones comerciales. En este caso resulta evidente, en tanto que las injurias se dirigían hacia los propios clientes, y el demandado conminaba a no pagar las deudas. Pero también se producía en otros ámbitos, como las sociedades tradicionales, en las que los individuos dependían de que otros confiaran en ellos y de tener un mínimo estatus social para realizar sus actividades económicas, según muestran testimonios recabados para el Antiguo Régimen por Tomás Mantecón²¹⁴¹.

Por otra parte, las demandas de conciliación podían ser un arma contra enemigos personales, o acusaciones espúreas, como la de Genoveva Veiguela, una viuda de 48 años que demandó a dos

²¹³⁴ Además de que “visitaba a diario las casas de prostitución de esta ciudad” y que él la había visto en varias. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1929, nº 9.

²¹³⁵ A mayores, intentar abortar y seducir al marido del matrimonio. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 4.

²¹³⁶ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1935, nº 32.

²¹³⁷ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 38.

²¹³⁸ GOWING, L. (1998), pp. 114-116, 121-125.

²¹³⁹ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1929, nº 3.

²¹⁴⁰ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1936, nº 28, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1936, nº 32.

²¹⁴¹ MANTECÓN, T. (1997), pp. 73, 82, 97.

miembros de la sociedad organizadora de un baile por expulsarla y decirle que “tenía mala conducta”²¹⁴². El demandado Ramón Suárez decía en 1934 que la acusación contra él buscaba “ocasionar al contestante molestias y los gastos consiguientes” de tener que ir a la capital “y abandonar el trabajo al que se dedica a expensas del cual vive”; el demandante era vecino suyo²¹⁴³. En el caso de dos matrimonios de vecinos enfrentados que participaron en un acto de conciliación entre 1934, tenían un rico historial de enfrentamientos y acusaciones cruzadas: agresiones (autolesiones para inculpar a la otra parte, a juicio de esta), denuncias ante el Ayuntamiento por cuestiones urbanísticas, injurias y “una puerta que para molestar al demandante dejaban siempre abierta para cortar la luz” formaban la cadena de la disputa, coronada con los insultos de “ladrón” y “andan robando para mantener los hijos, los que traen muertos de hambre” que motivaron el acto²¹⁴⁴. Obviamente, acabó sin avenencia.

En las injurias o calumnias por escrito tenemos a un hombre que dejó por escrito su descontento con una empresa en un cheque, una acusación por escrito de estafa contra un banco, un individuo que apareció en *La Voz de Galicia* acusado de daños²¹⁴⁵, dos disputas internas de la Asociación de Inquilinos que llegaron a la prensa o a octavillas²¹⁴⁶, y un agente comercial de La pesquera del Norte de España, suponemos que despedido, que envió un escrito acusando al gerente de “soberbio e ignorante”, “indocumentación industrial y falta de ética profesional”, y reprochándole a la sociedad “su actitud más propia de un gitano”²¹⁴⁷ (insulto, por cierto, que no hemos encontrado en las injurias de las clases populares).

Algunos casos tienen más proyección pública, y podríamos ligarlos al ambiente político de estos años: más concretamente, personajes no republicanos o de izquierdas demandaban a la prensa por realizar acusaciones contra ellos. En 1931 el funcionario Fernando Osorio demandó a Juan Pita, director del semanario *El Radical*, por decir que antes de la implantación de la república había acudido a Oza dos Ríos para examinar las cuentas municipales y conseguir eximir a los concejales de satisfacer atrasos del impuesto sobre vinos y alcoholes y conseguir la perpetuación caciquil, y recibir “unos canarios que entre todos, dicen tenían 5.000 plumas”²¹⁴⁸.

Al año siguiente, el hortera Elías Moreno demandó al director del diario local *El Noroeste*, Jesús Mejuto. Lo llamó “servidor y siervo de la dictadura” en un suelto. Era comerciante y lo acusaba de inducir, “con palabras capciosas de jesuita mercantil”, a abrir en días en que la República manda cerrar y cerrar “en aquellas otras tradicionales” que el nuevo régimen había prohibido. Mejuto admitió haberlo ordenado la redacción de un suelto en base a una denuncia de persona que “le merece crédito absoluto”, pero cuyo nombre no desveló, como tampoco lo hiciera Pita²¹⁴⁹. En 1934 José Pérez Cepeda, presidente de la Asociación Patronal y que más tarde sería alcalde, demandó al director de *Solidaridad Obrera*, Jesús Moreno, por un artículo en la publicación en la que se le acusaba de ser el “autor moral” de la muerte “patrono D. Julio”, participar en una confabulación y

²¹⁴² *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 18.

²¹⁴³ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1933, nº 31.

²¹⁴⁴ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 25.

²¹⁴⁵ Si bien podríamos excluir este caso de los aparecidos en prensa, ya que, pese a que la prueba de la calumnia era su aparición en prensa, denunció a la mujer que lo había acusado de la falta e iniciado el proceso. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1933, nº 20.

²¹⁴⁶ Hubo dos actos por injurias, además de una disputa por la composición de la junta. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1933, nº 18, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 32, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1931, 19.

²¹⁴⁷ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 1.

²¹⁴⁸ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1931, nº 40.

²¹⁴⁹ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 13.

ser un "bípedo con instintos de chacal" añadiendo que "la Asociación Patronal es una entidad al servicio de Acción Popular"²¹⁵⁰. Moreno no compareció.

También era obligatorio pasar por el proceso de conciliación antes de pasar una querrela criminal por amancebamiento, ambas interpuestas por la esposa; sin embargo, solo encontramos dos en los ocho años de la muestra. En una, de 1929, no parece haber más intención que preceder a la demanda y que no proporciona muchos detalles acerca del caso²¹⁵¹. En el caso de Dominga Abrodes, reclamó en 1930 que su marido y una industrial soltera de la ciudad reconocieran que tenían "relaciones ilícitas de una manera pública e ininterrumpida" desde hacía "muchos años". Los supuestos amantes lo negaron, ella reservándose denunciar a su vez por calumnia e injuria, él señalando que la perdonaba y culpando al hermano de esta, "que desde que llegó de América ha causado grandes trastornos en la familia"²¹⁵². Esto respalda nuestra interpretación, ya señalada a raíz de la muestra de delitos del año 1900, de que este tipo de cuestiones domésticas pocas veces se resolvían en los criminales, si bien no era desconocida y hay constancia de destierros por este motivo²¹⁵³.

Tampoco hubo avenencia en los procesos de reconocimiento de niños, obviamente iniciados por la parte femenina. Así, a don Alfredo-Orestes Rubín Vázquez lo demandó en 1935 doña María Espiñeira, afirmando que había tenido relaciones con su hija a raíz de las cuales esta había dado a luz a un niño, y que "reconociendo la verdad de lo expuesto se avenga a contraer matrimonio con la aludida joven" y a inscribir al niño como suyo en el registro. Al tiempo, le puso una demanda por estupro²¹⁵⁴. Dos años antes, Luisa Méndez, una joven soltera de 26 años del extrarradio coruñés, había demandado a Andrés Pan, un jornalero dos años menor que él, para que reconociera como hija suya a una niña que estaba había tenido, "consecuencia de las relaciones amorosas sostenidas entre ambos, actora y demandado, desde hace más de dos años, próximamente [sic] desde el licenciamiento del citado demandado en el servicio militar". Pan respondió que era mentira y que ya expondría lo que considerase oportuno "ante el Juzgado competente"²¹⁵⁵.

Hay una única demanda de separación matrimonial, y es anterior a la Segunda República. Ramón Villasanta demandó a su esposa en 1930, Filomena Casal, un ama de casa de 45 años. Según afirmó, "vienen teniendo frecuentes disgustos" por lo que pasaron a vivir separados, tanto de la "vida matrimonial" como de "todo trato personal". Escribió al juzgado municipal otorgándole "ejercer libremente la vida civil, en todos los actos de su vida". Villasanta proponía que el hijo mayor quedase con la madre, y, bajo su protección, sus dos hijas en común, de cinco y ocho años, aunque no presentaba un futuro muy alegre: pensaba ingresarlas en el Hospicio Provincial, dando "un tanto diario que le sea posible" para que se educasen en la religión católica hasta que pudiesen ganarse la vida trabajando como modistas o costureras en la edad de "16 a 18 años". El acto no llegó a celebrarse y quedó en suspenso por estar, según el demandante, "en vías de transacción con la

²¹⁵⁰ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 34.

²¹⁵¹ Lo promovió Anunciación Mariño, "sin profesión especial", contra su esposo, Juan Cubeiro, maestro de obras, y su supuesta amante, que, según la demanda, vivía en la misma casa que este. Mariño no se presentó (envió un representante que se limitó a reproducir la demanda) y el de Cubeiro respondió que era una denuncia "absurda" sin más afán que "deshonestar con la querrela las acciones que entablará mi representado". *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1929, nº 1.

²¹⁵² *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1930, nº 17.

²¹⁵³ A este respecto, Herminia Pernas señala a mujer desterrada a Mondoñedo, su ciudad natal, desde Santiago, y una vecina de Vimianzo expulsada fuera de su localidad. Ambos son anteriores a la entrada en vigor del Código Penal de 1870 y se encuentran en PERNAS OROZA, Herminia: "Presenza feminina en actos revoltosos en violentos na Galicia do século XIX e comezos do XX".

²¹⁵⁴ Rubín no se allanó en el acto de conciliación ni, a juzgar por sus declaraciones en este, en el juicio por estupro. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1935, nº 24.

²¹⁵⁵ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1933, nº 46.

demandada para la solución amistosa”, pero ofrece un ejemplo de divorcio *avant la lettre* en una época en la que las separaciones se aceptaban, pero no se formalizaban²¹⁵⁶.

Al tratar el alquiler, debemos recordar que fue un motivo de conflicto colectivo en la Segunda República, con huelgas de inquilinos (es decir, negativas al pago de la renta) en ciudades como Barcelona, Cádiz o Huelva²¹⁵⁷. En nuestra muestra hay casos de todo tipo²¹⁵⁸, pero lo más frecuente, con 75 casos, son demandas de desahucio de inmuebles urbanos, ya sean para vivienda o instalaciones de comercios o talleres. En esta época el alquiler estaba regulado por el, y, más tarde, por el decreto de inquilinato del 29-12-1931; ambas impedían rescindir un contrato sin causa justificada por parte del arrendador, y obligaban a pagar una indemnización al arrendatario.

Las demandas de conciliación en cuestiones de desahucio, por tanto, iban por motivos tasados, por ejemplo, que el arrendatario no estaba aprovechando el inmueble para los usos previstos en el contrato, como el caso de un edificio alquilado para panadería y horno en el que supuestamente vivían un criado y un niño²¹⁵⁹. También podía reclamar el desahucio por impago²¹⁶⁰, aunque en algún caso esto también era contestado: en 1930 hubo un alboroto en la calle de San Roque, de Lugo, después de que el vecindario se enterase de que un casero iba a expulsar de su piso a una inquilina que llevaba varios meses sin pagar. La mujer estaba internada en el hospital y tenía tres niñas pequeñas²¹⁶¹. Un casero coruñés, Francisco Míguez, llegó a los puños con un zapatero que le tenía alquilado un local del que quería disponer; logró derribarlo, pero el menestral contraatacó rajándole el muslo con una cuchilla²¹⁶².

Pero lo más normal era que el casero afirmase que precisaba el piso para él o para un pariente: dejar libre un piso para un hijo que deseaba emanciparse, o que la propietaria necesitaba el piso “toda vez no disfruta salud en el punto actual de su vecindad y, por prescripción facultativa, se le manda cambiar de domicilio y trasladarse a clima marítimo”²¹⁶³, o que vivía con niños pequeños en Pontes de García Rodríguez y que deseaba ir a vivir a A Coruña “para proporcionar instrucción y educación adecuadas a dichas criaturas”²¹⁶⁴. En el caso de los bajos, vemos cómo Antonio Conchado, industrial de Oleiros, reclama a un carpintero llamado José Veiga que deje un local de su propiedad “toda vez precisa el expresado local el Sr. Conchado para establecer en él su propia industria y que viene ejerciendo en otro local desde hace más de un año”²¹⁶⁵.

Esto no tenía por qué ser cierto, claro. Solo hay avenencia en el 17,3% de las demandas de conciliación, lo que quiere decir que más de cuatro de cada cinco se interrumpían o iban a juicio. Esteban Farje, barbero coruñés, demandó que su ex arrendador, Pedro Crespo, le pagase seis mil pesetas en concepto de daños y perjuicios; este le había hecho desalojar un bajo en el que tenía su

²¹⁵⁶ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1930, nº 27.

²¹⁵⁷ CRUZ, R. (2015), p. 86.

²¹⁵⁸ Inquilinos que reclaman que se les permita hacer una obra, reclamaciones de impago, propietarios que reclaman que se firme un contrato partiendo de una ocupación en precario o que se reconozca uso en precario o cambio de titularidad de un inmueble arrendado, etcétera.

²¹⁵⁹ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1930, nº 25.

²¹⁶⁰ Vease, por ejemplo, *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1935, nº 2.

²¹⁶¹ EP, 15-07-1930, p. 2.

²¹⁶² LV, 18-01-1935, p. 5.

²¹⁶³ No es la única vez que aparece la justificación del traslado por motivos de salud, que, en el caso de la cita, fue alegada por doña Isabel García, vecina del municipio lucense de Rábade. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, 11. En otro caso de 1936, la propietaria afirmó que su esposo tendría una mejor asistencia por parte de los familiares que en Ferrol, donde vivía. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1936, nº 19.

²¹⁶⁴ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1936, nº 18.

²¹⁶⁵ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1930, nº 25.

negocio “con el pretexto de desalojarla para que la habitase un hijo de dicho demandado”, pero luego “lo arrendó a otra persona”²¹⁶⁶. Alguna vez, como en la demanda del propietario Clemente García contra el carpintero Benito Ponte, se alega que el ocupante no tiene derecho a indemnización, ya que se encuentra en precario; Ponte respondió que pagaba una renta²¹⁶⁷. Esto probablemente indique la existencia de contratos verbales, que hacían más difícil de sostener la situación de los demandantes. La misma situación se da en la ciudad de A Coruña actualmente en colectivos en riesgo de exclusión que alquilan habitaciones o pisos sin respaldo por escrito²¹⁶⁸.

Detrás de estas demandas de desahucio se encontraba, al menos en algunos casos, la intención de aumentar la renta, ya fuese porque el mercado fuese alcista o porque la inflación jugase a favor de los inquilinos con contratos largos, que podían ocupar viviendas de manera barata gracias a la depreciación de la moneda. Se ve, por ejemplo, cuando Rosa Saavedra heredó un piso de la calle del Orzán y reclamó a sus inquilinos que le reconociesen el derecho a percibir la renta, de 40 pesetas mensuales, y que lo desalojasen porque un juzgado lo había ordenado por no tener las debidas condiciones de higiene. Los inquilinos afirmaron que seguirían pagando pero se negaron a abandonar el piso, invocando “la imposibilidad de hallar nueva vivienda al alcance de sus posibilidades económicas”²¹⁶⁹. O en el caso de Manuel Rodríguez, que pagaba 17,25 pesetas por una buhardilla que le pidieron que desalojase para “reedificar la vivienda”. En su opinión, “parece ser que el propietario quiere pasarse de listo, y, con una ligera reparación, o bajo el pretexto de ella”, echarlo “con objeto de obtener mayor renta por el local”²¹⁷⁰.

Lucila Dopico, cuya casera quiso desahuciar del piso por el que pagaba 45 pesetas, se negó a irse por entender que lo que quería era “un mayor precio de alquiler por la casa”²¹⁷¹, y Gumersinda Bravo, a la que la propietaria de su vivienda quiso desahuciar para meter en ella a una hija que se había casado, dijo que en cinco años la demandante ya le había subido la renta dos veces, y “ahora intenta nuevamente una nueva suba”, que sería su “verdadero móvil”²¹⁷². Otro punto potencialmente conflictivo de los alquileres largos era la muerte del arrendador original, y el cobro de la renta por parte de sus herederos²¹⁷³.

Además de la protección legal contra los desahucios, los inquilinos eran conscientes de sus derechos y reticentes a aceptar las argumentaciones de los propietarios. Al menos en A Coruña, habían constituido una asociación para defender sus derechos, que ya hemos visto por su tumultuosa vida interna. Los propietarios, por su parte, lo tenían muy difícil para conseguir que sus inquilinos vaciasen el piso, lo que podía derivar en otro tipo de disputas. Cuando doña Juana Temprano demandó a un matrimonio de inquilinos, acusándolos entre otras cosas de que haber propalado que su hija realizaba prácticas anticonceptivas con su novio, estos respondieron “achacando esta demanda a una venganza personal por negarse los que exponen a abandonar un piso que llevan en arriendo propiedad de la demandante”²¹⁷⁴.

²¹⁶⁶ El demandado no se presentó al acto. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1930, nº 26.

²¹⁶⁷ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 12. Ese mismo año encontramos dos casos de demandas para exhortar a abandonar una propiedad ocupada en precario en las que se llegó a un acuerdo; en un caso de trataba de fincas. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 14 y en otro de un piso. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 33.

²¹⁶⁸ *Evaluación del programa A Flote 2019*, p. 59.

²¹⁶⁹ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 27.

²¹⁷⁰ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 37.

²¹⁷¹ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1929, nº 27.

²¹⁷² *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1930, nº 29.

²¹⁷³ Un ejemplo de este conflicto en *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1935, nº 25.

²¹⁷⁴ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 4.

En otros casos, el casero optaba por aumentar la indemnización, como en el caso de Ángel Veloso, miembro de la Cámara de Propiedad, cuyo representante ofreció en el acto a su inquilino “no los seis meses [de renta] que determina el decreto sino el importe de ocho mensualidades”²¹⁷⁵. Para llegar a un acuerdo, ya antes del periodo republicano, había que ceder. Por ejemplo, en 1929 la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña quiso desalojar a una modista, ofreciendo 210 pesetas, tres meses de renta; acordaron darle seis meses de habitación gratis mientras buscaba otro piso, y, además, mil pesetas²¹⁷⁶.

Una de las reclamaciones de indemnización hay una especialmente interesante, ya que hace referencia a un acto criminal y da algunas pistas tanto sobre la responsabilidad civil durante la Segunda República, pieza importante de las sentencias, como de consideraciones sobre la valoración de los jóvenes. Emilio Cardelle, un chófer de Bergondo, atropelló mientras conducía la camioneta de su patrón Francisco Cachafeiro a un joven coruñés, José Araujo, en 1930, lesionándolo de tal modo que murió a los pocos días. Fue condenado a cuatro meses y un día de cárcel por homicidio imprudente, y a cinco mil pesetas de multa. En el juicio fue declarado insolvente, y se rechazó que hubiese responsabilidad subsidiaria de terceras personas, de manera que la familia no cobró la indemnización.

En 1932 el padre del niño, Juan Araujo, interpuso una demanda contra Cardelle por los perjuicios de índole material que le había causado. Araujo padre era maquinista, pero en 1930 también tenía dos tabajerías, una atendida por otro hijo y otra por su mujer con la ayuda del fallecido. La muerte le obligó a cerrar una, ya que sin el joven tendría que contratar a un empleado, que tendría sueldo por ser extraña a la familia. Así, razonaba la demanda, su muerte le había causado perjuicios puesto que le rendiría “utilidad a su padre”, no durante toda su vida, pero sí “durante su menor edad y hasta que contrajese matrimonio, hecho que generalmente entre gentes de la condición social de nuestro patrocinado, suele tener lugar a la edad de veintitrés o veinticuatro años”. Pedía las 36.500 pesetas que le habría rendido durante este periodo²¹⁷⁷.

11.3 El cuchillo, la pistola. Tendencias en el uso de armas

¿Cómo medir la prevalencia de las riñas y las disputas callejeras, para saber cómo variaron a lo largo del tiempo? Según hemos visto en el apartado 11.1, entre 1856 y 1890 las tasas de encarcelamiento por delitos violentos se duplicaron en la prisión de partido de A Coruña, donde cumplían sentencia los reclusos condenados a arresto mayor o a penas inferiores. Podría deberse a un mayor recurso a los tribunales para infracciones de ese rango o a un incremento real del número de hechos, pero no tiene por qué ser universalizable: en Santiago hubo una tendencia solo ligeramente positiva entre 1865 y 1886.

La prensa puede ayudarnos a obtener una aproximación a cómo evolucionaron los comportamientos violentos de la población a medio plazo, aunque, como veremos, tiene sus limitaciones. Recurrimos a esta modalidad en un trabajo anterior, volcando sistemáticamente todos los actos violentos con heridos y muertos que registraron en los municipios de A Coruña y Santiago de Compostela entre 1882 y 1886, usando como fuente, respectivamente, los diarios locales *La Voz de Galicia* y *La Gaceta de Galicia*. Este modelo ya expresó sus limitaciones en la investigación original: *La Gaceta de Galicia*

²¹⁷⁵ Aunque podría ser una oferta a la baja, ya que en este caso, el demandado señalaba que tenía derecho a un año de alquiler como indemnización. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1934, nº 10.

²¹⁷⁶ *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1929, nº 17.

²¹⁷⁷ Cardelle alegó que no tenía ningún dinero y se elevó un exhorto contra Cachafeiro, que no vivía en A Coruña. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 16. Este se negó a pagar. *Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña*, 1932, nº 16.

dio una información irregular y muy pobre sobre la información de sucesos, y en *La Voz* descendió la cobertura de manera muy acusada en 1885, hecho achacable probablemente a cambios en la estructura de la redacción o la política editorial. En esta primera investigación, que versaba sobre conflictividad y criminalidad cotidiana, se dejaron fuera del análisis los heridos provocados por violencia sociopolítica, que se incluyen aquí²¹⁷⁸.

En un trabajo posterior quedaron claros los problemas de contrastar estos datos con una nueva investigación hemerográfica para 1919-1921²¹⁷⁹. Las palabras herido y lesionado parecían emplearse de manera menos restringida en esta segunda época, y se contaban como heridos individuos que recibían bofetadas o golpes menores que en 1882-1886 se solían denominar contusos. Para poder comparar los datos es procedente restringirlos a los heridos por armas blancas o de fuego. Para los propósitos de esta investigación, añadimos al análisis de los años ya mencionados 1925, 1930, 1935 y 1936 (hasta el 18 de julio). Una vez más, solo *La Voz de Galicia* ofrece una información de sucesos mínimamente rica durante todos los años, mientras que *La Región*, *El Progreso* y *Faro de Vigo* no dan una cobertura de sucesos que permita sacar conclusiones. Quedan fuera del siguiente cuadro los datos de la violencia en el seno de la pareja, que se analizan en otro apartado:

Tabla 11.3.1 Heridos por arma blanca y de fuego, por individuos adultos y excluyendo violencia de pareja, en tasas anualizadas por 100.000 habitantes y para el municipio de A Coruña, en los años señalados

Año	Heridos por arma blanca	Tasa anualizada por 100.000 habitantes	Heridos por arma de fuego	Tasa anualizada por 100.000 habitantes
1882	25	70,4	3	8,5
1883	20	55,8	2	5,6
1884	13	35,9	2	5,5
1885	4	10,9	2	5,5
1886	27	73,2	8	21,7
1919	23	37,9	4	6,6
1920	23	37,1	18	29
1921	27	42,7	6	9,5
1925	15	22	1	1,5
1930	22	29,7	1	1,3
1935	36	40,4	1	1,1
1936 ²¹⁸⁰	15	29,8	13	25,8

Fuente: Elaboración propia a través de la sección de local de *La Voz de Galicia*²¹⁸¹

Obviamente las cifras de heridos por otras causas son más numerosos. En la Casa de Socorro coruñesa, en tres meses de 1925, el número de heridos atendidos por agresiones fue de 145, lo que nos daría 580 casos al año, o 909 casos anuales por 100.000 habitantes²¹⁸².

²¹⁷⁸ En concreto, dos lesionados por arma blanca y tres por disparos en el motín de 1886.

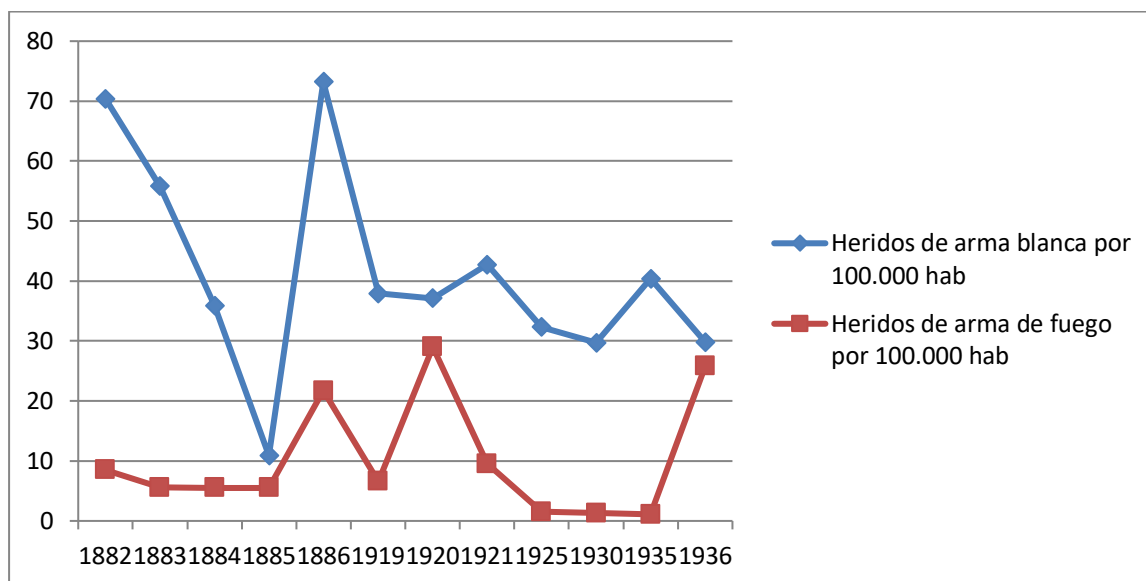
²¹⁷⁹ CARBALLO GENDE, E. (2020-A).

²¹⁸⁰ Hasta el 18 de julio. Se ha anualizado la tasa dividiendo entre 200, por los días hasta la fecha señalada, y multiplicando por 366 (fue año bisiesto), al igual que en las estadísticas sobre homicidio ese año.

²¹⁸¹ [Resumen de violencia en A Coruña, A4.](#)

²¹⁸² LV, 13-09-1925, p. 4.

Gráfico 11.3.2 Heridos por arma blanca y de fuego por 100.000 habitantes, en datos anualizados, para el municipio de A Coruña



Fuente: Elaboración propia a través de la sección de local de *La Voz de Galicia*

En primer lugar, podemos apreciar una cierta decadencia del cuchillo. Los números absolutos de heridos por arma blanca son muy parecidos en 1882-1886 y en años posteriores, pese al incremento poblacional. Estos ataques son casi siempre con cuchillos o navajas, con algún sable, bayoneta o herramienta: el cuchillo es el rey de los homicidios y agresiones improvisados desde hace siglos en Europa, con alguna excepción puntual como el París del siglo XVIII²¹⁸³. La media del periodo mencionado es de 49,2 casos por 100.000 habitantes, por encima de la tasa de cualquier otro año. Si descontamos 1885, un año atípico, la media es de 58,8 heridos por 100.000 habitantes, dieciséis puntos por encima de 1921, que le sigue en importancia.

En 1919-1921 la media anual de heridos por arma blanca está un poco por debajo de los 40 casos por 100.000 habitantes. En 1925 el dato baja a 32,3 casos por 100.000 habitantes (recordemos que ese año bajaron los homicidios en toda Galicia), y en 1930 y 1936 está algo por debajo de los 30 lesionados por 100.000 habitantes: aproximadamente la mitad que en 1882-1886, si descontamos 1885. En 1935 la tasa sube a 40,4; algunos de estos heridos se deben a los choques entre falangistas e izquierdistas, pero no todos.

Por otra parte, las heridas con arma blanca son relativamente poco letales. En 1882-1886, que suman 89 heridos por arma blanca, 83 de ellos sobrevivieron, con lo que la letalidad es de algo menos del siete por ciento. En 1919-1921, con 73 heridos, el número fue de siete, por debajo del diez por ciento. Más tarde la proporción es incluso menor. En 1930 hubo un muerto en una pelea de taberna, junto con otros 21 casos sin resultado letal, y en 1935 otro hombre apuñalado después de supuestamente intentar robar y herir a un compañero de bebida, de entre 36 heridos de arma blanca. Ningún fallecido en 1925, con 22 heridos, ni en 1936, con 15. En total hay 257 heridos y 15 muertos, el 5,8%. Casi diecinueve de cada veinte apuñalados sobrevivían; incluso para los guapos y matones de taberna que peleaban con cierta asiduidad y se encaraban con armas blancas, el riesgo de fallecimiento era relativamente bajo, si nadie sacaba un revólver.

²¹⁸³ En este predominaba la espada. SPIERENBURG, P. (2008), p. 100.

Estos datos permiten realizar algunos apuntes. En primer lugar, si en la muestra de homicidios que hemos estudiado en capítulos anteriores hemos contado 107 muertos por arma blanca en cuatro años y medio, no es descabellado pensar que unos 2.000 fueron apuñalados, y que había varios centenares de heridos por arma blanca todos los años. Además, tantos heridos muestran que en la mayoría de enfrentamientos los atacantes no querían matar, no sabían cómo hacerlo o ambas. No debemos imaginarnos que el enfrentamiento típico era una cuchillada certera en una zona letal, o quince o veinte puñaladas hasta que la víctima dejase de moverse. Muchos agitarían la navaja para asustar o hacer ver que estaban dispuestos a herir, otros se arrepentirían al ver la sangre, pararían de atacar en cuanto su rival estuviese herido o acobardado o escaparían después de dar un golpe sin detenerse a mirar el resultado.

Al mismo tiempo, la víctima no se quedaba quieta. Intentaba escapar, se defendía, pedía ayuda, gritaba, intentaba interponer una mesa; en otras ocasiones intervenían espectadores para calmar la situación y evitar la muerte. En un pequeño porcentaje de las ocasiones, el asaltante estaba determinado, o por suerte o casualidad hería en algún punto vital. Algunos autores han hecho una clasificación de las zonas heridas para buscar criterios antropológicos o simbólicos, pero creemos que la mayor parte de las heridas venían dadas por determinaciones más prosaicas, como las circunstancias del enfrentamiento, las dimensiones del cuerpo humano y la mecánica de los golpes²¹⁸⁴.

En cuanto a los heridos por arma de fuego, pese a que podría pensarse que las armas de fuego fueron incrementando su importancia con el tiempo, ya están muy presentes en 1882-1886, con 9,36 heridos anuales por 100.000 habitantes, si bien sube la media 1886, con 21,7 heridos por 100.000 habitantes debido, en parte, a los tres heridos por disparos en el motín de septiembre de ese año, pero el resto de las lesiones de ese año y del periodo se deben a episodios de violencia cotidiana y no sociopolítica. De cualquier manera, incluso descontando ese año, se hallaría en 6,3 por 100.000 habitantes²¹⁸⁵.

La media en 1919-1921 es de 15 casos por 100.000 habitantes, con un pico en 1920 de 29 casos por 100.000 habitantes y que se corresponde con la conflictividad sindical de ese año. La tasa en los otros dos años es similar a la de 1882-1886. En 1925, 1930 y 1935 el número de heridos por arma de fuego no llega nunca a los dos casos por 100.000 habitantes, un auténtico desplome en relación a la Restauración, si bien en 1936 vuelven a subir las cifras en otro pico de violencia sociopolítica.

Las subidas y caídas son mucho más pronunciadas que en el caso de los ataques con arma blanca. Además de con la suavización de las costumbres, este dato encaja con dos fenómenos que ya hemos estudiado. Por una parte, la caída de los homicidios en general, incluso de los que se producen por arma de fuego. Por otra, con el incremento de la presencia policial que, en el ámbito urbano de la capital de la región, tenía una densidad mucho mayor que en la Restauración.

En conjunto, los datos apuntan a que los coruñeses de la primera etapa de la Restauración empleaban mucho más el cuchillo en sus disputas y peleas que sus descendientes de finales de esa

²¹⁸⁴ En un enfrentamiento entre dos personas erguidas, lo lógico es intentar herir la cara y el torso: apuñalar a alguien por debajo de la rodilla, por ejemplo, implica agacharse y resulta muy poco práctico. Al tiempo, herir a alguien en la mano a propósito es difícil (son pequeñas y móviles), pero muchas heridas se producirían en las manos y brazos de la víctima cuando intentase protegerse. Las circunstancias cambian si los oponentes están en el suelo, tropiezan, se agarran, alguien bloquea una avenida de ataque, o en otra de las miríadas de situaciones que pueden producirse.

²¹⁸⁵ Aunque la fuente y la metodología es la misma, las tasas de heridos por arma blanca y de fuego en 1882-1886 son ligeramente superiores a los expuestos en CARBALLO GENDE, E. (2018) debido a que en ese trabajo, centrado en la violencia cotidiana, no se incluyeron los lesionados durante el motín de 1886.

etapa y hasta la Guerra Civil, quizás incluso el doble. También se usaban más las armas de fuego durante la Restauración (sin cambios significativos los años estudiados, excepto con picos de violencia sociopolítica) que después de esta. En la República era difícil que alguien recibiese un tiro en la capital si no era por motivos sociopolíticos.

Como indicador del conjunto del comportamiento de Galicia en cuanto a violencia cotidiana, estos datos tienen severas deficiencias. La primera y más evidente es que dependemos de la disposición y posibilidades de un diario de cubrir la actualidad local, un sesgo que se hace evidente en 1885. Pero es difícil que pasen desapercibidos hasta para un diario con pocas posibilidades los heridos con armas blancas y, sobre todo, con armas de fuego. Sin embargo, lo más probable es que las deficiencias de la fuente hayan tapado, en todo caso, una tasa aún mayor de violencia en los primeros años, ya que el diario fue creciendo. En 1882-1886 *La Voz* es un diario de cuatro páginas, en 1919-1921 tiene seis, en 1925 y 1930 ocho, en 1935 y 1936, una decena, con un incremento del espacio dedicado a las secciones de local y, suponemos, del número de redactores.

Por otra parte, quizás la muestra no sea representativa. A Coruña era un espacio urbano, y no tiene por qué ser un indicador fiable de las tendencias de la violencia en el mundo rural. En lo referente a las armas de fuego, es probable que la década de 1880 fuese más asequible adquirir revólveres en A Coruña que en la mayor parte de Galicia, y que su uso se difundiese en un período posterior para toda Galicia.

11.4 ¿Está bien regalar armas de juguete? Los cambios en la interpretación y aceptación cultural de la violencia

Poco antes de la fiesta de Reyes de 1936, una asociación cívica, La Liga por la Paz, envió una pequeña gaceta para su publicación en los diarios. Invitaba a los padres a “no comprar a sus hijos juguetes bélicos”, con poco éxito, según escribía el periodista Juan Carranza desde Madrid. Las tiendas (esta era ya una sociedad de consumo) estaban llenas de diminutas escopetas, sables, cañones, cajas de soldados. “Nenes vimos con su fusil en bandolera, y otros con pistolas, sables, cornetas y gorros de uniforme militar. Muchos, también, flameando banderas, y en una palabra, raro era el niño que pasó por nuestro lado desprovisto de su correspondiente atributo bélico”. Prudencia antes de verlo como reflejo de violencia sociopolítica: antes bien en una fábrica de juguetes (verdadera o inventada) le decían a Carranza que las películas norteamericanas habían puesto de moda el juego de pistoleros, como antes habían pasado sucesivas modas de juguetería: toros, fútbol, boxeo. A esto se añadía la “preferencia del niño”, léase varón por las armas de juguete, y su bajo precio²¹⁸⁶. Estos eran los obstáculos con los que se enfrentaba La Liga para la Paz, pero sus componentes, como otras agrupaciones antes y después que ellos, seguían intentando combatir la violencia de los adultos a través de las fantasías de los niños.

Hemos visto estadísticas de violencia, pero, ¿cómo se vivía, qué significaba, y cómo fue cambiando esta percepción? Nuestras observaciones hasta ahora indican que, como señalaron Cabo Villaverde y Vázquez Varela, en la Galicia del siglo XIX y principios del XX “el umbral de tolerancia ante la violencia era mucho más elevado que en nuestros días”²¹⁸⁷. Era un recurso que empleaba la gente normal en sus relaciones cotidianas; si bajó la violencia, es lógico pensar que disminuyó el ánimo de la población a emplearla.

Así, habría un mayor rechazo a emplear la violencia en las relaciones sociales durante nuestro periodo de estudio y que continuó a lo largo de la posguerra. No contamos con el lujo de un estudio

²¹⁸⁶ LV, 04-01-1936, p. 1.

²¹⁸⁷ CABO VILLAVERDE, M., VÁZQUEZ VARELA, J. M. (2015).

en la Galicia de preguerra por parte de un investigador que conociese estas tesis, no digamos ya una encuesta, aunque es una lectura que encontramos en los trabajos de Lisón Tolosana, realizados en la Galicia rural sobre los años 60, especialmente en una entrevista con un anciano de setenta años de Redondela (criado hasta la adultez, por tanto, antes de la guerra). El hombre defendía que “é máis natural matar una persona [porque] uno se ciega y mata, pero uno que anda en pleitos sempre... [pausa], es peor”. Luego cuenta la historia de un hombre que emboscó y mató a otro con una escopeta porque “siempre andaba en pleitos” y los propios vecinos “fueron a favor de él, de modo que é mellor matar a un individuo que andar así toda la vida”.

Merece la pena observar el contraste con otros entrevistados más jóvenes presentes en el lugar: “[Joven:] bueno, hasta matar.. [Corta el primero gritando:] ¡pero si se lo merece! [Otro joven:] bueno sí, ya pero... [El primero, siempre el de edad:] ¡claro que se lo merece! [Un tecrero, joven:] bueno... en un caso así...”, cede a los gritos del primero que ha dominado el diálogo”. El cambio de óptica generacional lo achaca Lisón Tolosana a una sociedad más rica en la que “la propiedad ya no tiene el valor vital de antaño”. Con más y mejores medios de vida, “la vida va cobrando el primer rango en la ética comunitaria tradicional”²¹⁸⁸, alejándose de ese padre gallego que, en el cuento de Pardo Bazán, pega un tiro a su hijo al saber que es un ladrón²¹⁸⁹.

Quizás un ejemplo extremo de esta actitud moral hacia la violencia y rechazo a otro tipo de delitos la da Pedro Marcos Silvar, un vecino de Monfero que en 1935 disparó contra un vecino de su parroquia mientras este se lavaba la cara en una fuente, aunque falló porque este se echó cuerpo a tierra. Pedro dijo, al ser detenido, que “si hubiera sabido que el otro no había muerto, al verle caído en tierra lo hubiera rematado”; en cuanto a su motivación, dijo que el agredido “dijera que le había robado, y [que él] prefería ir a la cárcel por una muerte, que no por ladrón”²¹⁹⁰.

Con aceptación de la violencia no queremos decir que la sociedad la considerase un bien a buscar. Quizás fuese así en algún grupúsculo, pero en general nadie la consideraba un bien en sí misma, sino un mal inevitable o aceptable para compensar otro mal (por ejemplo, un ataque contra la propiedad, el honor o el respeto a los valores tradicionales). Por otra parte, como hemos visto a lo largo de todo el trabajo, existen muchas violencias con procesos y motivaciones diferentes, y un individuo puede ejercer unas (quizás llamándolas justicia o autodefensa) al tiempo que condena el principio abstracto. El discurso público de un individuo, por ejemplo en un juzgado o en un periódico, siempre tendería a condenar la violencia en términos generales y a justificarla en los casos que le interesase, aunque no tenía por qué coincidir con su discurso oculto²¹⁹¹.

Quizas la tolerancia ante la agresión se exprese en el jurado, que Samuel Walker llama “the direct voice of the community, expressing all of its irrationalities and prejudices”²¹⁹², y que en España parecía castigar menos los delitos de sangre. Según afirmaba Gimeno Azcarate a finales del XIX, “la propiedad está bien garantida ante el Jurado, la vida no lo está tanto”, una lenidad que en su opinión propiciaba el crimen violento²¹⁹³. Expresaba patrones que consideramos comunes al Antiguo

²¹⁸⁸ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), p. 47.

²¹⁸⁹ En el cuento *El Justiciero*. PARDO BAZÁN, E. (2002).

²¹⁹⁰ EP, 01-06-1935, p. 4.

²¹⁹¹ James Scott diferenciaba, para las clases dominadas, entre el discurso público y el discurso oculto; el segundo lo emplean en sus propios ámbitos, y expresa valoraciones alternativas de la realidad a las que debían expresar ante sus superiores. Tal como empleo aquí el término, discurso oculto puede aplicarse a las conversaciones “en confianza”, no solo de las clases dominadas. Sobre el término, CABANA, Ana, CABO VILLAVARDE, Miguel (2013), pp. 77-78.

²¹⁹² WALKER, S. (1980), p. 111.

²¹⁹³ El autor también consideraba que acababan como jurados los más menesterosos, y que actuaban con laxitud o incompetencia. GIMENO AZCARATE, M. (1900), pp. 80-86, 89.

Régimen, de donde provenía, de acuerdo con lo que hemos explicado en el capítulo 2, una tradición de dura persecución hacia el delito contra la propiedad que existía entre la mentalidad popular gallega en el siglo XIX, como hemos visto en el capítulo 5.2. No solo en la sociedad gallega, o española: según explica Emsley, el jurado de la Revolución Francesa “could be tolerant of some violence but were likely to show little mercy to any beggar, prostitute, rag-picker, or vagrant who came before them accused of theft”, y los que más perseguían los robos de madera eran, precisamente, los campesinos²¹⁹⁴.

Por otra parte, y aunque vaya en contra de nuestro argumento, los linchamientos casi nunca son contra delincuentes económicos, como vimos en el capítulo 4.2, aunque tampoco se dirigen hacia la mayoría de los delincuentes violentos sino hacia algunos que realizaron hechos particularmente aborrecidos. También podía haber casos en los que el jurado dejase en libertad a un sospechoso de asesinato y en el que los que conociesen a la víctima quisiesen tomar venganza. Un hombre absuelto de una acusación de parricidio fue atacado por una multitud que lo mató con armas blancas, palos y piedras cuando volvió a su pueblo en 1919, cinco años después del supuesto crimen, en uno de los pocos casos de linchamiento letal registrados en la Restauración²¹⁹⁵.

En un trabajo anterior, limitado a la segunda mitad del siglo XIX, defendimos que existían cuatro factores culturales ligados a esta prevalencia de la violencia en la vida cotidiana: la aceptación de la violencia con fines lúdicos y de integración social, la cultura de la honra, el porte habitual de armas blancas y de fuego por parte de los hombres y la tolerancia judicial hacia la violencia menor. Estos factores siguieron estando presentes durante todo nuestro periodo de estudio, si bien es probable que en algunos casos disminuyese su impacto.

Decir que la violencia puede tener fines lúdicos (para quien la ejerce, y en determinados casos para quien la recibe) puede parecer un absurdo, si bien esta dimensión ha sido estudiada y en la Irlanda decimonónica suponía un importante porcentaje de los homicidios²¹⁹⁶. Puede llevar a alguien a pensar que nuestros antepasados empezaban peleas a cuchillo y tiroteos a quemarropa solo por diversión. Nada más lejos de la realidad. En situaciones de estrés el ser humano genera epinefrina y glucocorticoides, que, además de movilizar determinados potenciales fisiológicos (haciendo al individuo más rápido y con mayores reflejos, por ejemplo) resulta anímicamente estimulante, si se mantiene en niveles moderados y en, por usar un término de Sapolsky, “benevolent settings”.

El efecto no es una recta sino una U invertida, con la diversión en el eje de ordenadas y el riesgo en el de abscisas. Una vida sin ningún estrés resulta aburrida. Unos niveles moderados y puntuales son divertidos, pero si la intensidad es muy alta o sostenida resulta nociva. Los niveles de lo que resulta estimulante varían entre individuos. No ahondaremos en esta cuestión puesto que se sale del ámbito estricto de la investigación, pero nos permite entender mejor el fenómeno: una pelea en términos relativamente amistosos o un poco de vandalismo podía ser divertido para una cantidad importante de hombres, pero ser perseguido a tiros o golpeado en prisión les resultaría una experiencia desagradable y aterradora para casi todos²¹⁹⁷.

Pasemos a esta violencia estructural. “A infância desenvolve-se numa atmosfera que possuía acusados riscos de violência”, señala Xavier Castro en su historia sobre la vida cotidiana en

²¹⁹⁴ EMSLEY, C. (2007), pp. 138, 158.

²¹⁹⁵ BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2019), p 717.

²¹⁹⁶ CONLEY, C. (1999).

²¹⁹⁷ Para una explicación de los efectos de los diferentes niveles de estrés, SAPOLSKY (2017), pp. 127-128. Aunque incluso experiencias extremas como la guerra pueden resultar divertidas. BOURKE, J. (2008), pp. 22-49, 142, 143, 280, 306, 362.

Galicia²¹⁹⁸. Además de los golpes de padres, maestros y patrones, la socialización en violencia se desarrollaba con juegos infantiles; en Galicia²¹⁹⁹, Castilla²²⁰⁰ o Portugal²²⁰¹ eran comunes las peleas a pedradas entre niños, con el ocasional apuñalamiento o disparo. No tenemos datos sistemáticos acerca de cómo evolucionaron estas costumbres, aunque es posible que se hiciesen menos agresivas, con la influencia de la escuela²²⁰² (en clase solo pegaba el profesor, aunque lo hiciese abundantemente²²⁰³) y deportes más pacíficos; “logo, co fútbol, calmouse algo a cousa” dice un informante de Xavier Castro tras recordar los desafíos y peleas de su niñez²²⁰⁴.

No discutiremos que la exposición a la violencia pudiese resultar traumática para muchos infantes, pero, como veremos en el apartado 11.5, muchos protagonistas adultos la recuerdan con naturalidad o humor, o incluso con un cierto orgullo. Tampoco era algo de una subcultura infantil: los adultos contribuían con modos de socialización violentos y festivos. Cuando los niños coruñeses se peleaban a pedradas, algunos padres, lamentaba un contemporáneo, miraban “con infinita complacencia la guapeza y valentía” de sus hijos en estas lides²²⁰⁵.

Pero había diferentes sensibilidades. Casto Rodríguez, maestro de aldea en Outeiro de Laxe (en Allariz, Ourense), escribió en 1925 una carta a la prensa local lamentando que para alguien de su profesión “surgen a veces dificultades de no fácil solución, a menos que claudique de los deberes que le impone su cargo”. En su caso, se debatía entre seguir a su conciencia y ganarse la impopularidad de los vecinos, o transigir con lo que le pedían y organizar la llamada “fiesta de la corrida del gallo”, que venía celebrándose el domingo anterior a Carnaval. Consistía esta, explica Rodríguez, en que los niños de la escuela local compraban una o varias aves por suscripción, y, acompañados de su maestro, los vecinos y una banda de música, los llevaban a un campo despejado en el que los perseguían con palos y piedras. Cuando los animales estaban ya cansados, se los enterraba dejando fuera solo la cabeza. Les tocaba ahora a los niños, por turno y con los ojos vendados, buscarlos provistos de “un largo machete” y finalmente matarlos “en medio de la general algarazara de la concurrencia”.

No era Rodríguez lo que actualmente llamaríamos un animalista, y de hecho critica la “sensibilidad enfermiza” del que regala a sus mascotas “dejando entre tanto morir de hambre a los pobres”, pero el espectáculo le parecía “horripilante” y no muy educativo por sus pupilos, así que decidió negarse a organizarlo pese al “ambiente de comprensión e incivilidad que nos rodea, que juzgará como un insulto” la abolición de la fiesta²²⁰⁶.

²¹⁹⁸ CASTRO PÉREZ, X. (2007), p. 160. Sobre la violencia contra los niños en la Francia del siglo XIX, YVOREL, J-J. (2005), pp. 125-136.

²¹⁹⁹ En 1882 las pedreas y peleas de menores de 14 años dejaron en A Coruña al menos 14 infantes y 4 adultos heridos, además de tres heridos por arma blanca y muchos contusos. Algunas luchas llegaron a ser masivas, como una que congregó a “más de cien chiquillos” en el paseo compostelano de la Herradura. Algunos padres, lamentaba un contemporáneo, miraban “con infinita complacencia la guapeza y valentía” de sus hijos en estas lides. CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 60.

²²⁰⁰ REDONDO CARDEÑOSO, J.A. (2010), pp. 335, 339, 347.

²²⁰¹ VAQUINHAS, I. M. (1996), p. 328.

²²⁰² Thompson señala que la escuela hace a los niños “menos pendencieros”. THOMPSON, E. P. (1995), p. 434.

²²⁰³ SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P. (1992), p. 225.

²²⁰⁴ CASTRO, X. (2007), p. 161. Sobre la expansión del deporte en Galicia en esta época, aunque no lo menciona como sustitutorio de las pedreas, DOMÍNGUEZ ALMANSA, A. (2009). Sobre la expansión de clubes deportivos en España, PUJADAS, X., SANTACANA, C. (2003). Sobre la aparición del ocio en términos contemporáneos, proceso en el que se enmarca el deporte moderno, URÍA, J. (2001-A).

²²⁰⁵ *La Voz de Galicia*, 07-07-1906.

²²⁰⁶ *La Región*, 21-02-1925, p. 1.

Este tipo de acciones sobrevivieron más allá de la guerra: en el carnaval de Cobres (Vilaboa), se enterraba un gallo con la cabeza fuera, alrededor del que se bailaba; un mozo escapaba con él y lo perseguían “para recuperar o galo e tratar o ladrón segundo fora da propia parroquia ou de outra”; la fiesta acababa “co sacrificio do galo, que en tempos recentes foi suprimido” y sustituido por una vara de madera engrasada²²⁰⁷. Pero lo que queremos mostrar en este trabajo es que la demonización de la violencia ya estaba haciendo una labor de zapa en estas prácticas.

Ya en la adolescencia, grupos de jóvenes vinculados por lazos de amistad recorrían las calles de las ciudades las noches y los días de fiesta, protagonizando peleas y actos de vandalismo como lo hicieron sus antepasados desde la Edad Media y como lo hacen sus contemporáneos en el resto de la Península²²⁰⁸, con “unha continuidade, sen ruptura, entre as actividades lúdicas e as criminais”²²⁰⁹. En la Galicia del Antiguo Régimen, señala Iglesias Estepa, los jóvenes son “los protagonistas más destacados” de lo que llama “violencia gratuita”, peleas y retos en situaciones de ocio²²¹⁰.

Destacar por la guapeza y conseguir fama de matón podía ser una estrategia para conseguir el respeto de los iguales y, en el caso de los hombres jóvenes, la atención de las mujeres²²¹¹. Luis Cornide destacó este aspecto en 1906 en el marco de la campaña contra el matonismo²²¹². Otros participantes, quizás con algo de misoginia y exageración, destacan la fascinación por la violencia de los jóvenes del rural²²¹³. Recuperando la tesis de David D. Gilmore, para el que “la virilidad es una prueba en la mayoría de las sociedades”, la mayoría de sociedades estimulan en los varones la asunción de riesgos, en comparación con las mujeres, por lo que probarse en las peleas sería parte de probarse como hombres adultos²²¹⁴.

Pero en todo caso, la violencia era parte de la fiesta. En Mugardos “as peleas entre os rapaces de diferentes parroquias eran moi frecuentes, sobre todo cos de Muelle, de Ferrol, que eran moi pendencieros e cos de San Xurxo, que non deixaban entrar aos de fóra porque dicían que as mozas de San Xurxo eran para os do lugar. Trazaban unha raia na terra e desafiaban a quen se atrevera de atravesala e se alguén o facía xa había pelexa e ás veces sacaban as navallas”, mientras que en los bailes de Doniños “otro señor andaba por el salón para que hubiera respeto porque había muchas peleas y a veces llevaba una carabina”²²¹⁵. Un autor recordaba en los años 50 cómo se peleaban por el día de San Lázaro los chavales de Viveiro, “señoritingos y fofos”, con los de Celeiro, “macizos, sanotes y tan recios que hacían fuertes las *ges* suaves”; hasta que aparecían los guardias municipales y hacían causa común contra ellos, con algún éxito²²¹⁶. El sadismo adoptaba modos que parecen privativos de la modernidad. El “idiota” apodado “Chuco-Ramón” sufrió quemaduras en pecho cuello, cara y manos en 1925 cuando un vecino de Cee lo roció con petróleo y le arrojó una cerilla²²¹⁷.

Las peleas entre mozos, según vimos, parecen ir decayendo en los años 20 y 30, y posiblemente tras la Guerra Civil fueron menos violentas por la menor disponibilidad de armas, antes de que la

²²⁰⁷ GARCÍA SANTOS, A. (2019), p. 14.

²²⁰⁸ REDONDO CARDEÑOSO (2010), p. 258, MUCHEMBLED, R. (2008), p. 449.

²²⁰⁹ VAQUINHAS, I. M. (1996) pp.342

²²¹⁰ IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), p. 53.

²²¹¹ PINKER, S. (2012), pp. 676-677,

²²¹² *La Voz de Galicia*, 13-07-1906.

²²¹³ *La Voz de Galicia*, 11-07-1906, 28-07-1906.

²²¹⁴ GILMORE, D. D. (1994), pp. 125, 215.

²²¹⁵ LLORCA FREIRE, G. (2008), pp. 278-279.

²²¹⁶ CANOSA, R. (1951).

²²¹⁷ FV, 28-08-1925, p. 4.

despoblación del rural y los cambios sociales erosionasen la práctica²²¹⁸. También sabemos que las clases populares se vieron sometidas a ofensivas civilizadoras, en cuestiones como el Carnaval²²¹⁹. En 1906, *La Voz de Galicia* incluyó una veintena de artículos de colaboradores y lectores en los que se proponían medidas para acabar con el matonismo, un fenómeno descrito en términos muy vagos pero que remitía a los comportamientos chulescos y violentos de los varones de clases populares. Cada ponente aprovechó el foro para denunciar los males sociales que le preocupaban: desde la debilidad del Estado al nacionalismo, el alcohol o las doctrinas obreristas, pasando, en el caso de Pardo Bazán, por el antagonismo entre sexos. Se propuso un “*centro de defensa social*” para coordinar esfuerzos²²²⁰, que no nos consta que llegase a existir.

Esta iniciativa es parte de otras ofensivas civilizadoras en la relativamente violenta periferia europea. El *hooliganismo* juvenil preocupaba a los rusos en las dos primeras décadas del siglo XX (adoptaron el término inglés): en una encuesta realizada entre las élites en 1913 encontramos explicaciones como la ignorancia y retraso cultural, inmoralidad rampante, declive del respeto por la ley y la autoridad, abuso de alcohol, la influencia corruptora del materialismo y el trabajo por cuenta ajena y la influencia de la revolución y las políticas radicales; salvo este último punto, señala Stephen P. Frank, las respuestas no diferían mucho de otra realizada en 1864²²²¹, y no son tan diferentes de la que vemos en A Coruña.

Más tarde, en la edad adulta, la violencia proseguía, si bien con carácter más atenuado. La que se producía entre mujeres (por lo general, las agresiones fuera de la familia eran intersexuales) era menos grave²²²², con menor propensión al empleo de armas y centrada en espacios de socialización y trabajo femeninos como mercados, fuentes y lavaderos²²²³ pero muy presente²²²⁴. En el siglo XIX las criadas y mujeres que van a coger agua a las fuentes a primera hora galantean, cantan, se pelean con frecuencia. Para las pescaderas “es antiguo”, costumbre arraigada, cubrir de improperios a la clienta que les discute el precio, arrojarle a la cara el pescado que rechaza²²²⁵.

Y está la violencia en el seno de la familia. El esquema que hemos visto en el apartado 7.3 es que la violencia se produce “en cascada” cuando tiene lugar entre individuos diversos por sexo y categoría de edad. Esto es, los hombres golpearían a las mujeres, las mujeres a los niños de ambos sexos. La violencia doméstica, suponemos, seguía la misma ruta.

Un factor, evidentemente, es la superioridad física. La especie humana presenta diferencias significativas en el tamaño y la potencia de la musculatura dependiendo del sexo, y esto es

²²¹⁸ Su extinción, según testimonios de comunidades implicadas, estaría ligada tanto a la emigración como a la “educación” y el contacto con otros. Estos dos últimos puntos encajan en el esquema del proceso de civilización. GAYOSO ALONSO, E. (2015), pp. 327-328.

²²¹⁹ Sobre los intentos de control de Carnavales, cerraduras y fiestas por parte de las autoridades o el movimiento obrero se habla en detalle en MÍGUEZ MACHO, Antonio: “Una colisión fina”. A violencia na acción colectiva do movemento obreiro en Galicia: repertorios, percepción e consecuencias (1890-1940)”, de próxima publicación en el libro recopilatorio *A xustiza pola man*.

²²²⁰ *La Voz de Galicia*, 17-07-1902.

²²²¹ FRANK, S. P. (1999), pp. 280-288.

²²²² En los arrestos mayores por lesiones en la cárcel de partido de Santiago el porcentaje de reos masculinos es del 86%, mientras que en los arrestos menores (menos graves) la proporción decae hasta el 61%. CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 36.

²²²³ Sobre el papel de mercados, fuentes y lavaderos como zonas de sociabilidad femenina, URÍA, J. (2001-B), p. 99. Véase también CASTRO PÉREZ, X. (2007), p. 232.

²²²⁴ Fuera de la violencia de pareja, el 75% de las agresiones descritas por la prensa para A Coruña en 1882-1886 fueron intersexuales. CARBALLO GENDE, E. (2018), p. 74.

²²²⁵ *La Voz de Galicia*, 24-05-1883.

especialmente acusado en la parte superior del cuerpo²²²⁶. Los niños, por supuesto, tenderán en la mayor parte de los casos a ser más débiles que sus padres. En el reino animal existe un concepto conocido como *displacement aggression*: un individuo subordinado y cuya subordinación le ocasiona altos niveles de estrés ataca a otro más débil porque la agresión le ayuda a reducirlos. Por ejemplo, en los babuinos: “a high-ranking male loses a fight and chases a subadult male, who promptly bites a female, who then lunges at an infant”²²²⁷.

Los seres humanos también presentan este tipo de comportamientos, y no tiene por qué responder a un conflicto violento. Imaginemos que un hombre siente que el capataz lo zarandea, le hace reproches injustos o le falta al respeto. No puede decírselo directamente, así que al llegar a casa le grita a su mujer, da un portazo y se va a la taberna. Luego, la mujer descarga su estrés dándole algunas bofetadas al niño.

En cuanto a la violencia del hombre contra la mujer, en sus expresiones más leves, esta podía quedar oculta por factores sociales, como la falta de denuncia por la aceptación de esta práctica o la presión del entorno, la falta de diligencia al perseguirla por parte de las fuerzas policiales o la voluntad de los jueces municipales de llegar a soluciones de consenso en vez de castigar al ofensor²²²⁸. Cuando se dirigía hacia una mujer, las autoridades hacían la vista gorda; cuando se dirigía hacia un hombre, era motivo de burla

Creemos que la situación no era tan exagerada como en el Antiguo Régimen, para el que Iglesias Estepa escribe que “ni la justicia ni la Iglesia ni la sociedad de la época amparaban a la mujer maltratada”²²²⁹, pero en el XIX, siendo cierto que cualquier tipo de agresión estaba penada, el maltrato simple no lo era mucho. En 1868 el juzgado municipal coruñés condenó a Juan Campos a tres días de arresto y reprensión por “maltrato a su mujer” y otros tres por “falta de respeto y obediencia” a un agente de la autoridad²²³⁰. Unos meses después, en septiembre, Juan Pérez recibió del tribunal tres días de arresto por maltratar a su mujer, otro por desobedecer a los agentes y un séptimo por no pagar la multa de escándalo con embriaguez²²³¹. No hay evidencia de desfiguraciones rituales; el corte de pelo, que hemos visto en el capítulo 8 como castigo comunitario, no se parece haber empleado con motivos particulares, al contrario que en otros países de la época²²³², aunque en 1930 se detuvo a un hombre por “haber coartado el pelo e intentado abusar” de una joven²²³³.

Cuando implicaba formas mayores de violencia o llegaba al proceso penal, no quedaba impune y era más castigada que las agresiones entre particulares. Tenemos por ejemplo el caso de Manuel Noya, un carpintero residente en A Coruña que golpeó a su esposa estando borracho en 1899 y le produjo heridas que tardaron en curar doce días. Su delito, de lesiones menores, quedó agravado por la circunstancia de familiaridad, y Noya condenado a cuatro meses y un día; si bien no fue exigible indemnización “por no ser exigible el perjuicio causado en razón de la circunstancia de parentesco

²²²⁶ Las mujeres tienen aproximadamente el 52% de la fuerza de los varones en la parte superior del torso, y un 66% en la inferior. MILLER et al (1993).

²²²⁷ SAPOLSY, R. M. (2017), pp. 131-132.

²²²⁸ Esta interpretación, con mayor desarrollo, en CARBALLO GENDE, E. (2019).

²²²⁹ IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), p. 68.

²²³⁰ *Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18*, Archivo Municipal de A Coruña, caja 6300.

²²³¹ *Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18*, Archivo Municipal de A Coruña, caja 6300.

²²³² En Argentina, quizás por influencia de la inmigración italiana, rapar a la mujer, a veces en público, era un castigo que infligía el marido cornudo a la esposa infiel. RUGGIERO, K. (2009), pp. 59-60.

²²³³ LR, 04-10-1930, p. 8.

entre ofensor y ofendida, y a que esta no estuvo durante la curación de las lesiones imposibilitada para sus quehaceres habituales”²²³⁴. “La muerte de una mujer no es apenas delito ni en los códigos ni en la conciencia pública” protestaba Blanca Calvo en 1925 en la primera página de *La Región*²²³⁵, pero los tribunales tampoco parecen laxos con el uxoricidio: el marido de Adelina Paleo, una vecina de Cervo, fue condenado a cadena perpetua por el “crimen monstruoso”, según lo califica un diario, de matarla en 1910 simulando un suicidio²²³⁶; José Bangueses, que mató en 1932 a su mujer y a su hijo de dos años, salió hacia Canarias y luego volvió al lugar del delito para intentar suicidarse, fue condenado a 30 años²²³⁷. La actitud hacia los asesinos de sus propias esposas no era positiva, según hemos visto en el apartado 7.5, al menos en el discurso público.

Pasemos a las armas. Las de fuego siguieron siendo deseadas y valoradas por amplios sectores de la población general hasta la Guerra Civil; no debemos pensarlo tanto en términos de utilidad, sino en su papel en el refuerzo de la autoestima de los poseedores²²³⁸. “La mayoría de los que solicitan licencias de armas, lo hacen con una cédula de una peseta. Y me extraña que personas que tienen para comprar un arma, y pagar diez pesetas al año de derechos, puedan pagar solamente una cédula tan exigua”, decía el gobernador de Ourense Ángel Carrascosa a finales de mayo de 1936, y aunque con este ejemplo quería denunciar la evasión fiscal, ilustra el estado de ánimo de la población: la gente quería armarse²²³⁹. Y contra personas, más que contra animales: entre enero y julio de 1935 el Gobierno civil de Lugo emitió 615 licencias de armas cortas y 336 de caza²²⁴⁰.

Otra cosa es que pudiesen con la misma facilidad que sus antepasados. En los inicios de la Restauración, las armas de fuego fáciles de conseguir, y el Estado era laxo a la hora de perseguir su tenencia ilegal. Aunque era preceptivo conseguir una licencia para llevar armas, el castigo por llevar armas sin permiso era una multa equivalente al doble de la licencia²²⁴¹, y las campañas de registros y cacheos eran puntuales²²⁴².

La situación no era la misma en la Segunda República. A partir de 1920 se persiguió a través de disposiciones legales el tráfico ilegal de armas, y esta corriente jurídica continuó tras la Dictadura. Hay disposiciones acerca de ellas Ley de Defensa de la República de 1931, en la Ley de Orden Público de 1933 y en varias leyes específicas entre 1932 y 1936, que amplían las penas por tener armas sin permiso y limitando las garantías civiles para hacer su persecución más efectiva²²⁴³. Desde la publicación de la Ley de tenencia de armas y explosivos del 22-11-1934²²⁴⁴, la mera tenencia de armas de fuego “sin poseer la guía y la licencia oportunas” se castigaba con prisión, aunque se guardasen en el propio domicilio, si bien algunos artículos daban un margen discrecional al juez para

²²³⁴ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 60, folios 167-169.

²²³⁵ *LR*, 11-03-1925, p. 1.

²²³⁶ En PERNAS OROZA, Herminia: “Presenza feminina en actos revoltosos en violentos na Galicia do século XIX e comezos do XX”, de próxima publicación.

²²³⁷ *LR*, 14-06-1935, p. 6.

²²³⁸ VANDAL, G. (2000), p. 172.

²²³⁹ *LR*, 28-05-1936.

²²⁴⁰ *LV*, 22-08-1935, p. 8.

²²⁴¹ Real Decreto publicado en *La Gaceta de Madrid* del 14-08-1876, p. 457, y Circular del Ministerio de la Gobernación, publicado en *La Gaceta de Madrid* del 25-11-1876, p. 489.

²²⁴² Más detalles en CARBALLO GENDE, E. (2018).

²²⁴³ Para un resumen de la legislación republicana acerca de las armas, GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), p. 43, 215-220.

²²⁴⁴ González Calleja afirma que fue modificada en la *Gaceta* del 25 de junio de 1935, pero en esta se modifica la ley del 11 de octubre de 1934, no la de 22 de noviembre. GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2014), p. 218; *La Gaceta de Madrid*, 29-06-1935.

rebajar la condena²²⁴⁵. La última de las normas, del 23 de mayo de 1936, permitía el registro domiciliario sin mandato judicial.

A mayores, había un mercado negro que no podemos cuantificar pero que debía ser relevante. Los que querían emplear pistolas y revólveres con fines luctuosos no lo harían, evidentemente, con armas de las que hubiesen solicitado licencia y que fuesen rastreables. En el homicidio que acabó con la muerte de Constantino Villaverde, que hemos visto en el capítulo 7, los autores compraron armas y municiones a un particular. Amador Bermúdez, uno de los autores de un aparatoso atraco en las caballerizas municipales coruñesas el 31 de diciembre de 1934, utilizó una pistola que había sido sustraída algunos meses antes de un almacén²²⁴⁶. En 1936, el inspector de la Tabacalera de A Coruña se vio abordado por dos hombres que lo encañonaron, cachearon y le sacaron el arma; “se ignora el nombre de los enmascarados que con tanta audacia vienen dedicándose a robar las pistolas a las personas que transitan por la noche por lugares más o menos apartados de la población”, señalaba el corresponsal de *El Progreso*²²⁴⁷.

Según señala una disposición del Ministerio de Gobernación de 1935, las iniciativas de legalización de armas “ha venido a demostrar que muchas de ellas sé presentan sin marca o sin número de fabricación, por haber sido borrados y otros alterados, demostrando con ello que la adquisición ha sido clandestina”. Al Ministerio también le había “llamado la atención el sin número de armas que se extravían”, lo que, en muchos casos, reflejaría que los poseedores se desprendiesen de ellas “a favor de individuos que no se hallan dentro de la ley”. El ministerio endureció un endurecimiento de las disposiciones sobre el marcaje de armas, estableciendo medidas para el marcaje de armas que no lo tuvieran, y multas para los que perdieran sus armas a menos que demostrasen que les habían sido sustraídas²²⁴⁸; vemos repetirse las advertencias de la necesidad de presentar armas sin registro en abril de 1936, lo que puede significar una mora tras una campaña infructuosa²²⁴⁹. A finales de 1935, una nueva disposición obligaba a los titulares de escopetas de caza “con o sin licencia” a reseñarlas ante la Guardia Civil antes del 14 de enero de 1936²²⁵⁰. Todas estas medidas, según hemos visto en los capítulos 9 y 10, no pudieron evitar un repunte del uso de las armas de fuego en las violencia sociopolítica y en la convencional de ese año.

Pero las armas de fuego siempre fueron menos utilizadas que las navajas: por cada ciudadano con pistola o revólver, seguramente hubiese cinco o diez con cuchillos. En baile en A Coruña en 1914 se incautaron 63 navajas, un puñal, tres cuchillos, una daga, una llave inglesa y tres revólveres²²⁵¹. En una ronda de cacheos, registros domiciliarios e intervenciones en tabernas frecuentadas por los obreros de la ciudad seis años después, tras el asesinato de dos policías, se recogieron “200 navajas, varias pistolas browning”²²⁵². Tras la llegada a una romería de Agolada de un camión de Guardias de Asalto y otro de la Guardia Civil, ya en la Segunda República, los agentes encontraron “tres pistolas automáticas, tres revólveres y 30 armas blancas de distintas dimensiones”, procedentes de cacheos “entre los mozos” (dos de los individuos con armas de fuego, y cuatro que llevaban navajas barberas, fueron puestos a disposición judicial)²²⁵³. Su porte está extendido entre los jóvenes y los

²²⁴⁵ Si el arma se encontraba dentro de un domicilio la pena mínima era de seis meses y un día. Portarlas por la calle conllevaba al menos dos años, cuatro meses y un día. *La Gaceta de Madrid*, 27-11-1934, nº 331, pp. 1612-1613.

²²⁴⁶ LV, 02-02-1936, p. 7.

²²⁴⁷ EP, 13-05-1936, p. 3.

²²⁴⁸ LV, 30-07-1935, p. 11.

²²⁴⁹ LV, 28-04-1936, p. 5.

²²⁵⁰ LV, 06-12-1935, p. 8.

²²⁵¹ DOMÍNGUEZ ALMANSA, A. (2009), p. 413.

²²⁵² LV, 21-07-1920, p. 2.

²²⁵³ FV 10-09-1935, p. 2.

hombres de clases populares de cualquier edad, con lo que no podemos decir que la navaja sea un arma de marginales, como había ocurrido en zonas de Europa en la que la pacificación llegó antes²²⁵⁴. En categorías de mayor rango social ya no se estilaba el llevar espada, excepto oficiales en activo, que alguna vez protagonizaron peleas a sablazos en tabernas y burdeles. Aunque siempre hay algún verso suelto: la Guardia Civil de Silleda denunció en 1930 a un vecino de la parroquia de Moalde por ir a la feria con un estoque²²⁵⁵.

Un tópico existente en las islas británicas atribuía a los criminales españoles una propensión al apuñalamiento²²⁵⁶. El mismo prejuicio existía en los Estados Unidos hacia españoles y portugueses²²⁵⁷. Ya a finales del siglo XVIII, el español Fernán Núñez, reflexionando sobre las luchas a puños en Inglaterra, las considera una válvula de escape que ayuda a explicar la baja criminalidad del país (otros visitantes españoles no compartían esta apreciación)²²⁵⁸. El estereotipo es real. Como hemos visto en el apartado 1.8, el Reino Unido tenía una tasa de muertes muy inferior a la española; en palabras de Thompson, el inglés se volvió “menos violento y menos espontáneo”²²⁵⁹. Aunque no aceptásemos que fuese una consecuencia del proceso de civilización, lo cierto es que la mayor parte de las muertes se producían por golpes sin uso de armas ya desde el siglo XVIII. Los ingleses del siglo XIX entendían que las peleas a puños eran algo definitorio del espíritu nacional y perdonable. Resulta elocuente que el empleo de una hoja se entendiera como una muestra de premeditación: si el asesino no iba a matar a alguien, ¿por qué portaba una navaja²²⁶⁰?

Una pregunta semejante mucho menos fundamento en Galicia y en España: muchos hombres llevaban una hoja a todas horas. Una circular de la Dirección General de Seguridad del 8 de marzo de 1887 lamenta que las armas prohibidas se emplearan “hasta en los actos más íntimos de la vida social y familiar”²²⁶¹. A inicios de la Restauración vemos enfrentamientos a navaja entre chicos “de doce a trece años de edad”²²⁶², y la prensa lamenta que “los chicos de ahora no salen a la calle sin su correspondiente hoja de Albacete. Así suelen ocurrir tantas desgracias”²²⁶³. Este patrón sigue entre los jóvenes: “los cuchillos y las navajas juegan un papel importante en las diferentes escenas” de la noche coruñesa de la primera Restauración²²⁶⁴. En la Asturias de la época “el minero, el obrero, el aldeano de los pueblos industriales invierten sus primeros jornales en pertrecharse de toda clase de armas”. La favorita es la navaja barbera, a la que el asturiano se “acostumbra” de niño y, “de hombre considera que es elemento indispensable para la vida”²²⁶⁵. Las mujeres también usan cuchillos en su vida diaria, aunque los usen menos, quizás por tabúes culturales²²⁶⁶.

En las armas blancas la presión legal no es definitoria en la disminución de su uso, aunque quizás sí la práctica policial, con cacheos más frecuentes y mayor densidad de agentes en el territorio. Nunca estuvo prohibido portar navaja, pero a la vista de los datos antes expuestos para A Coruña,

²²⁵⁴ Por comparación, en el Amsterdam de la Edad Moderna, las personas respetables se defendían con bastones o palos, y la subcultura de luchadores a cuchillo parece estar ligada a la marginalidad y no tanto a las clases populares en general: la mitad de los implicados en duelos con arma corta eran delincuentes contra la propiedad, al menos ocasionales. SPIERENBURG, P. (1998), p. 107, 109-110.

²²⁵⁵ *FV*, 26-01-1930, p. 2.

²²⁵⁶ WIENER, M. J. (2006), pp. 57.

²²⁵⁷ GILJE, P. (1996), p. 65.

²²⁵⁸ BOLUFER, M. (2015), p. 99.

²²⁵⁹ THOMPSON, E. P. (1989-A), pp. 451-452, 454, 457.

²²⁶⁰ WIENER, M. J. (2006), pp. 42, 47, 51, 53, 57, 198.

²²⁶¹ TURRADO VIDAL, M. (1887), p. 311.

²²⁶² *La Voz de Galicia*, 12-02-1884.

²²⁶³ *La Voz de Galicia*, 05-11-1882.

²²⁶⁴ *La Voz de Galicia*, 24-08-1882.

²²⁶⁵ GIMENO AZCARATE, M. (1900), p. 69-70.

²²⁶⁶ SPIERENBURG, P. (2012), pp. 120-121.

consideramos probable que disminuyese su empleo en las disputas y peleas entre hombres, bien porque menos personas las portasen o porque, en su conjunto, había menos enfrentamientos de este estilo. Ya que mencionamos las concepciones inglesas acerca de la pelea justa, no debe dejarse a un lado la influencia que pudo tener la cultura británica, en especial la moral del *gentlemen* sobre las élites españolas²²⁶⁷.

Pasemos a la cuestión de la cultura de la honra, con un apunte terminológico. Preferimos el término cultura de la honra al original de cultura del honor, acuñado por Nisbett y Cohen²²⁶⁸ porque permite introducir un matiz: engloba tanto el honor de las clases altas, como los sentimientos equivalentes de autoestima de los hombres de las clases bajas, y también de las mujeres y los niños, dos grupos excluidos del discurso. Los gallegos de clases populares no usan directamente la palabra honor para hablar de su reputación, pero desde nuestro punto de vista vivían, en una “culture of honor”, en la que “a male who is affronted may be expected to respond with violence because he will be seen as “not much of a man” if he does not”²²⁶⁹.

Las clases altas de la época diferenciaban muy claramente entre sus duelos por honor y las disputas de las clases bajas²²⁷⁰, pero es, en el fondo, un prejuicio. Como decía Larra en su artículo *Los Barateros*, publicado en 1836, había una hipocresía en la sociedad que a un tiempo “ahorca a los plebeyos que se baten en duelo, colma de honores a los señores que se baten en duelo”. No tenemos por qué perpetuarla: que los plebeyos no hablasen de honor no es crucial; el término tampoco se empleaba, o tampoco se emplea, en otros ámbitos sociales con influencias de la cultura del honor²²⁷¹. En las luchas de las clases populares, eso sí, no se defiende el honor en su acepción de “cualidad moral” o “gloria y buena reputación que sigue a la virtud”. Nos parece más adecuada la definición de honra que da el Diccionario de Autoridades de 1726: “pundonor, estimación y buena fama, que se halla en el sugeto y debe conservar”²²⁷².

En la cultura de la honra, la violencia tiene la finalidad práctica de afirmar el prestigio de un individuo entre sus pares y proporcionarle ventajas prácticas: estatus en su comunidad, mayor valor en el mercado sexual, protección ante las amenazas de otras personas hacia él o hacia su grupo (especialmente en las sociedades sin Estado). Algunas de estas ventajas pervivieron en la mentalidad popular gallega hasta mediados del siglo pasado: Lisón Tolosana explica que el que no defiende lo suyo, no discute ni pelea, era considerado positivamente por ello, pero al tiempo, se veía perjudicado por todos siendo un *xan*, un *coitadiño*, un bendito, un *parvo*, un *burrán*, un *home de palla*²²⁷³. Al tiempo que era necesaria una cierta mano izquierda y permisividad para no generar conflictos por pequeños roces, la vida aldeana precisaba que el hombre cabeza de la casa fuese considerado por los demás como alguien dispuesto a hacer velar sus derechos, especialmente en puntos como el reparto de las aguas, y especialmente en momentos en que las normas parezcan débiles: “hay también agua de brutos o valentos, cuando no está regulada [...] entonces un coitado,

²²⁶⁷ Sobre este punto, MARTÍNEZ DEL CAMPO, L. G. (2013). Sobre la imitación del modelo del gentleman, y el proceso de refinamiento del hombre ya desde el siglo XVIII en España, ARESTI, N. (2017), pp. 21, 29. Como curiosidad, la moda masculina española del XIX imitó más la inglesa, con su sobriedad, que la francesa. MCKINNEY, Collin (2017), pp. 50, 57.

²²⁶⁸ Fue acuñado por Richard Nisbett y Dov Cohen para explicar el hecho de que, en la cultura del Sur estadounidense, la población está más dispuesta a recurrir a la violencia ante los insultos que la del Norte y que en ella “a male who is affronted may be expected to respond with violence because he will be seen as “not much of a man” if he does not”. COHEN, D., Nisbett, R. E. Bowdle, B. F., (1996).

²²⁶⁹ COHEN, D., NISBETT, R. E. BOWDLE, B. F., (1996).

²²⁷⁰ ARESTI, N. (2010), p. 75.

²²⁷¹ SPIERENBURG, P. (2008), p. 213, GOWING, L. (1998), p. 113, 128.

²²⁷² Sobre el cambio de significado del honor a lo largo de la historia, SPIERENBURG, P. (2008) pp. 9-10.

²²⁷³ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), pp. 30-31, 40-41, 140-141.

por no meterse en líos, no riega nunca [...] Cando terminó la guerra uno iba a regar con la escopeta”²²⁷⁴.

Con el duelo de las clases altas convivía, si bien sin ventajas juiciales, el desafío de las clases populares²²⁷⁵. Es casi siempre improvisado y se resuelve en las cercanías de donde estalla, sin parafernalia de testigos ni pretensiones como armas iguales o ritual de primera sangre, y a menudo se hace trampa. Un caso típico ocurrió en marzo de 1899; Cosme Prieto estaba bebiendo en una taberna de la parroquia de Franza con otras personas cuando se le acercó un vecino de esta llamado Pablo Vidal y “le provocó y le desafió para que saliese con él”. No ha quedado constancia de la situación socioeconómica de Prieto, pero sí de la de Vidal: un labrador casado de 34 años y analfabeto. Cuando se hallaban en un soto próximo lo apuñaló en la cara. Prieto también se hirió la mano izquierda intentando sacarle la navaja²²⁷⁶. Otros muchos ataques entre hombres se realizan por honra, como ya hemos visto en el apartado 7.11, y por la misma raíz había peleas a pedradas entre chavales y tirones de pelo y mordiscos entre mujeres de las clases populares en las fuentes.

Pero el duelo es más fácil de rastrear, aunque parece que nunca fue muy popular en Galicia, a juzgar por el escaso número de casos que hemos encontrado. Se extingue como crimen privilegiado con el Código Penal de la República, pero ya antes había decaído en la práctica, probablemente después de una revitalización en el siglo XIX por la influencia francesa²²⁷⁷. En los años 30 del siglo XX se había convertido para buena parte de la población en un anacronismo ridículo. “El duelo está anticuado”, afirmaba Carlos Rivera Gómez en 1935, y “ni aún los militares suelen batirse en el campo del honor”. Pero no creía que fuese porque hubiese desaparecido el sentido del honor, sino porque había recibido “grandes transformaciones en la conciencia de nuestra época”, de manera que los que recurrían al duelo para defenderla tenían “un concepto tartufo” de su dignidad personal. Con este cambio de costumbres se había transformado la consideración social del que recurría al duelo. Antes era una “nota de vivo tono” en la biografía propia, ahora un caballero “le concede tanta importancia como al que se le tache de inculto por no saber marcar los pasos del minué”²²⁷⁸.

Un ejemplo de esta decadencia lo tenemos en Carlos Nieves, un vecino de Verín que escribió una carta a *La Región* en 1920 para corregir una noticia aparecida sobre un incidente en el que había estado implicado y que, a su parecer, no se había cubierto correctamente:

“Habiendo sido molestados mis padres y una hermana en el semanario de esta villa titulado Nuevo Támea, me personé en el domicilio del director y le exigí una satisfacción, siéndome denegada. A la una de la madrugada del domingo último, encontré al mencionado director acompañado de D. Ramón Carnicero; para vengar las ofensas recibidas pegué un bastonazo al primero, y sin que mediase palabra alguna, fui agredido a tiros por el segundo, como probarán los testigos presenciales (...).

Esto ha sido lo ocurrido, y resulta, por lo tanto, inexacto:

1º Que el hecho ocurriera a las dos de la madrugada.

2º Que el autor de los disparos fuera en arrendatario de Consumos, cargo que no existe en Verín.

3º Que yo haya disparado.

4º Que el juez ordenara mi detención.

²²⁷⁴ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), p. 61.

²²⁷⁵ CARBALLO GENDE, E. (2018), pp. 64-65.

²²⁷⁶ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 83, folios 227-229.

²²⁷⁷ A finales del siglo XVIII, el barón de Bourboing consideraba casi extintos los duelos en España. No así las pedreas, que gozaban de buena salud y que, consideramos, fueron una práctica a la que la población permaneció más fiel. PEÑA DÍAZ, M. (2014), p. 782.

²²⁷⁸ Extractos del artículo “Un duelo ridículo”. *EP*, 12-05-1935, p. 1.

5º Que contra mi protestara nadie y sí contra el autor de los tiros.²²⁷⁹”

Ahora bien, lo que cambió fue la presión social para aceptar o rechazar el duelo, independientemente de la conciencia personal. “¿Batirse? ¡Bah!... Es una de las estupideces más solemnes que han podido cometer los hombres en todos los tiempos”, decía Carlos Rivera en 1935; lo mismo defendía Larra cien años antes en su artículo *El Duelo*, pero al mismo tiempo afirmaba que si alguien tocase su honor, se batiría, aunque fuese una estupidez. Los dos pensaban lo mismo intelectualmente, pero el hombre es un ser social, y en esos cien años el duelo pasó de ser considerado una obligación a un anacronismo. Rescatando la idea anterior, creemos que no hay que interpretar que los españoles de 1930 valorasen menos su dignidad que los de 1830, sino que los mecanismos sociales para defenderla habían cambiado, así como el tipo de comportamientos que se consideraban afrentas. Siguiendo lo expuesto por Pinker en relación a las infracciones morales, el duelo desapareció cuando practicarlo fue haciéndose ridículo²²⁸⁰.

Cabe también señalar una propuesta alternativa, defendida por el periodista gallego Francisco Camba²²⁸¹: que el duelo, que había ido domesticándose y en el siglo XX casi nunca implicaba la muerte, no fuese satisfactorio para los que querían matar. Después de todo, el duelo era relativamente seguro, y se podía rechazar en determinadas circunstancias, como prueba el caso del conde de Romanones: llegó a enfrentarse en el campo de honor al alcalde de Madrid, pero más tarde rechazó un segundo duelo y acabó asesorando a su retador en la redacción de un código de honor²²⁸².

En 1921 el capitán Alfonso Barrera asesinó al teniente coronel Carlos Castro, en El Retiro, supuestamente por una infidelidad, antes de iniciar un duelo. El periodista gallego señalaba que algunos madrileños opinaban que hubiera debido batirse; una consideraba una “minoría” moderna optaba perdonar; pero muchos otros defendían el asesinato. El duelo, afirmaba Camba, ya no podía bastar “a los agraviados de veras” y había quedado para solventar murmuraciones menores; “pero en un caso como el del Sr. Barrera, parece que no caben términos medios: o se perdona seráficamente, o se mata de la manera más rápida y más ruda”²²⁸³. No nos parece una explicación muy satisfactoria, porque creemos que la cantidad de individuos dispuestos a matar a toda costa sin la presión social de hacerlo era relativamente baja, e incluso en tiempos en los que el duelo era más sangriento se cometían crímenes de otros tipos.

Por otra parte, y recuperando una vez más el concepto de proceso de civilización de Elías, la masculinidad se redefinió. Según señala Nerea Aresti para el primer tercio del siglo XX, hubo un cambio de mentalidad en España, con énfasis en un mayor autocontrol y un paso de una cultura del prestigio externo a una de la responsabilidad interiorizada. Se potenció un ideal familiar aún no asentado a principios del siglo XX, basado en el “deber”, el “trabajo”, la “elevación del espíritu”²²⁸⁴. En los años 20, el modelo de masculinidad mal entendida que combatía el régimen de Primo de Rivera era el del hombre “irascible, cruel y pendenciero”, con “un sentido desproporcionado del honor”, vengativo, ideas obsoletas²²⁸⁵.

La Dictadura es un ejemplo de ofensiva civilizadora institucionalizada: desde la prohibición del piropro callejero y la obligación de proteger a los caballos en las corridas de toros, a las medidas

²²⁷⁹ LR, 10-08-1920, p. 2, 15-08-1920, p. 1.

²²⁸⁰ PINKER, S. (2012), p. 813.

²²⁸¹ Hermano de Julio Camba.

²²⁸² MORENO LUZÓN, J. (1998), pp. 86, 106.

²²⁸³ LV, 25-06-1921, pp. 2-3.

²²⁸⁴ ARESTI, N. (2010), pp. 24, 56-57, 167, 266, 268, 284, 286-288, 291.

²²⁸⁵ ARESTI, N. (2010), pp. 128-130, 170. TORRES DELGADO, G. (2017).

contra los castigos corporales en las escuelas²²⁸⁶ o el ideal de comportamiento de los somatenistas, basado en la disciplina y no en la agresividad²²⁸⁷. De cualquier manera, hay que evitar considerar este tipo de procesos desde el absoluto. Un concepto como la masculinidad, además de las obvias discrepancias entre las concepciones entre los diferentes individuos, tendrá obligatoriamente muchas interpretaciones dependiendo de los contextos. Así, por ejemplo, este modelo de apaciguamiento en el entorno doméstico podía convivir con interpretaciones de la virilidad más agresivas, por ejemplo, en la guerra del Rif²²⁸⁸.

Era un modelo criticado desde hacía décadas por las clases altas. En el juicio por la muerte de José María Docal, un padre de familia coruñés al que un joven convecino, José Prieto García *El Clavetero*, apuñaló después de que se hubiesen peleado en dos ocasiones en cafés y bailes y el muerto hubiese buscado al *Clavetero* poco antes del fallecimiento, el fiscal manifestó que eran hombres que “por sus costumbres y su carácter no podían vivir en la sociedad”. Pero no eran marginales ni lumpen, sino obreros con trabajo, familia y amigos que en parte compartían sus tendencias violentas²²⁸⁹. El proceso por el que este tipo de individuos fue desplazándose a los márgenes sociales fue gradual, al tiempo que aumentaba la sensibilidad hacia la violencia. Una noche de domingo de 1919, después de una pelea a cuchilladas en el centro de A Coruña, “vaciarónse los cafés y se reunieron varios cientos de personas, que fueron en manifestación al Gobierno civil, a dar cuenta del abandono en que se encuentra la vigilancia en paraje tan céntrico”. No encontramos ningún acto de protesta colectiva similar en periodos anteriores, cuando los incidentes con arma blanca eran más frecuentes, las muertes más numerosas y la dotación policial menor²²⁹⁰.

Un trabajo necesario, al que no llegamos en esta tesis, sería comprobar los modos en que se manifestaba la honra en Galicia y en otras partes de España, y como esto influía en la prevalencia de la violencia. Parece, por ejemplo, que en Galicia había una visión menos drástica de la moral sexual, y una mayor tolerancia del adulterio y las relaciones extramatrimoniales (aunque siempre peor vistas cuando se le achaban a una mujer)²²⁹¹. Por otra parte, algunas de estas historias acababan en tragedia²²⁹². Un análisis comparado de este y otros puntos entre diferentes regiones de España es, creemos, la clave para el análisis de la violencia cotidiana en la Época Contemporánea del país.

En cuanto a la tolerancia judicial, ya he argumentado en un trabajo anterior que disminuyó en el caso concreto de la violencia contra la mujer, aunque un análisis más a fondo sería necesario. La tolerancia, en cualquier caso, no debe confundirse con permisividad, y, creemos, se expresaba especialmente en los jueces de paz o tribunales no profesionales cuando lidiaban con violencia menor, y en los juicios con jurado, en el caso de los homicidios. Cuando, a mediados del siglo XIX, una mujer resulta ligeramente herida por un hombre después de ponerse en la puerta de un baile, avisando de que nadie saldría porque le habían robado, el juzgado de Pontevedra sentencia que “la ligera lesión que ha sufrido, ha sido ocasionada por su culpa, y dio motivo a ello por haber procurado impedir la entrada y salida del establecimiento” (aunque lo cierto es que pudo indisponer al juzgado,

²²⁸⁶ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2005), p. 85.

²²⁸⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E., DEL REY REGUILLO, F. (1995), p. 197.

²²⁸⁸ Sobre la coexistencia de diferentes modelos de masculinidad, FERRÚS ANTÓN, B. (2017), pp. 114-115, SOUTO RUMBO, I. (2017), pp. 156-157.

²²⁸⁹ CARBALLO GENDE, E. (2018), pp. 24-25.

²²⁹⁰ CARBALLO GENDE, E. (2020-A).

²²⁹¹ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), pp. 76-86.

²²⁹² El padre del autor de este texto, criado en los años 50 en Taboada, recuerda ver a una mujer ahorcada al volver de la escuela; se había suicidado porque su padre se oponía a su matrimonio. Alonso Ríos cuenta que la hija de un hombre que conoció tuvo un hijo de soltera, y el supuesto padre apareció “pendurado da póla dun carballo”, en uno de “esos desaxeitos que daquela acontecían tan a miúdo”. ALONSO RÍOS, A. (2006), p. 139.

dado que la denuncia de robo era manifiestamente falsa). Pero este criterio fue revocado por la Audiencia²²⁹³.

Lo que sí parece incontrovertible, según vimos en capítulos anteriores, es la creciente presencia policial y profesionalización judicial, lo que puede llevar a una judicialización de conductas que antes se resolvían fuera de ese ámbito, y, a su vez, a que los contemporáneos cada vez recurrieran menos a ellas. Cuando Lisón Tolosana entrevistó a casi 600 gallegos de zonas rurales a mediados del siglo pasado, encontró a una sociedad atemorizada porque alguien los llevase ante la justicia; y no a que lo hiciese alguien ajeno a su comunidad, sino un vecino. En el oriente de Lugo, en Lousame, en Valadouro, le dicen que ser “testigo falso” era peor, o igual, a matar a alguien en una riña²²⁹⁴, opinión compartida por casi cuatro quintas partes de los individuos a los que les hizo la pregunta. Estaba muy mal visto porque podía tener graves consecuencias para alguien. También había una mala consideración de los pleiteantes por motivos nimios. Esta categorización como abominable en la teoría no hacía que los vecinos dejasen de pleitear o denunciarse entre ellos, ni provocaba un rechazo absoluto hacia los individuos que lo hacían²²⁹⁵. Responde, en nuestra opinión, a un miedo ante la justicia no por ser arbitraria o cruel, sino por ser una institución contra la que no cabía forma de lucha²²⁹⁶.

Veamos ahora otro punto. Lisón Tolosana encontró rasgos de defensa inmediata del honor: “si le faltan a uno con la madre y no salta, no ten sangre, si fora home xa estaba saltando”²²⁹⁷. Pero también una preferencia por la venganza secreta; ante el que ha jugado una mala pasada, realizar daños en secreto, estropear una viña o envenenar a los animales; algo que rechazan entrevistados jóvenes a los que les parece cobarde o poco viril. Esto contrasta con el resto del libro, en el que los entrevistados señalan entre las conductas más rechazables precisamente a los malos vecinos que hacen daño a escondidas, pero tiene una explicación práctica: “si le da bofetadas ten que pagar a la persona [en un pleito] por boa [...] sale mellor denunciar, llevarlo al juzgado”²²⁹⁸.

Para Lisón Tolosana, hay una contraposición entre lo “antiguo” (venganza secreta) y lo “nuevo” (venganza abierta), pero, ¿hasta dónde llegaban las raíces de esa mentalidad “tradicional”? En nuestra opinión, la mayor presencia judicial y policial fue un acicate para solventar en los tribunales o en formas solapadas de venganza las cuestiones: el que fuese víctima de violencia abierta adquiriría la ventaja de poder llevar a su oponente ante los tribunales.

11.5 “El pegar tan bárbara e injustamente a los niños era entonces lo habitual”: recuerdos de la violencia en autobiografías

Por último, es quizás pertinente darle la palabra a los que vivieron esta época, para lo que hemos seleccionado un pequeño número de autobiografías de gallegos nacidos y criados antes de la Guerra Civil. Predominan, porque es el tipo de gente cuyas memorias se encuentran publicadas décadas

²²⁹³ Causas, 2040, 19, Sentencia de primera instancia del juzgado de Pontevedra en el caso de Baltasar Fervenza y Josefa Sequeiros, penúltimo folio del segundo legajo.

²²⁹⁴ La muerte alevosa se consideraba peor que la espontánea en la Galicia rural estudiada por Lisón Tolosana, pero esto no tiene nada de particular: era el criterio de la justicia española contemporánea y actual, y de todas las tradiciones jurídicas latinas y germánicas. LISÓN TOLOSANA, C. (2010), pp. 49-50.

²²⁹⁵ Se decía que el testigo falso hacía desconfiar a los demás, pues se considera que pueden engañar a otro, pero no generaba el rechazo de la comunidad: seguía relacionándose con los demás y no se le retiraba la palabra. LISÓN TOLOSANA, C. (2010), pp. 17, 42-50.

²²⁹⁶ El propio antropólogo liga la problemática del denunciante falso la liga al minifundio, la pobreza y las características de la propiedad gallega. LISÓN TOLOSANA, C. (2010), p. 50.

²²⁹⁷ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), p. 54.

²²⁹⁸ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), pp. 55, 128-130, 144-145.

más tarde, los que tuvieron actividad política o sindical; hay una desproporcionada presencia de zonas urbanas, y la mayoría son hombres.

De entre los textos consultados, ninguna vida están tan sumida en la violencia como la de Enrique Líster, comunista y, con posteridad a la Guerra Civil, general en la URSS, Polonia y Yugoslavia. Llamó a su autobiografía *Memorias de un luchador*, y aunque el título se refiere eminentemente a su lucha política, ya el primer capítulo, dedicado a su infancia y adolescencia antes de la militancia, está lleno de sangre en apenas 16 páginas.

Líster nació en 1907 en una pequeña aldea de la comarca compostelana, pero a los once años fue a Cuba. En La Habana, cuenta, “Yo era uno más de la banda del barrio y por mi fortaleza en las peleas me habían puesto el nombre de “Incógnito”” (un luchador grecorromano de moda). Entró de aprendiz de tendero, pero el dueño le daba “patadas y puñetazos”, hasta que se hartó y le rompió una botella de coñac en la cabeza. A los catorce acabó un reformatorio por transportar un cesto que supuestamente tenía una bomba; según él, sin saberlo. De los dos años que pasó allí no cuenta ningún acto de violencia propio, pero sí palizas y vergajazos de los maestros, uno de los cuales le dejó una cicatriz en la espalda. Salió a los dos años y empezó a trabajar con un gallego que tenía una fábrica de envases de madera, pero no le pagaba, así que se peleó con su sobrino y le arreó un martillazo en la cabeza, quedando así extinguida la relación laboral.

Poco antes de cumplir los 18 años llegó una carta del pueblo. El herrero de la aldea, contaba, había herido a su madre con la culata del revólver mientras un hijo suyo le sujetaba. Según Líster, todo menos un testigo neutral en este asunto, el tal herrero había estafado a su padre en su momento, y era “un verdadero gángster-aldeano gallego”, que con el apoyo de las autoridades, conseguido con sobornos, robaba y pegaba palizas con impunidad. Líster se compró una pistola, preparó los papeles y adquirió un pasaje para Galicia, y solo entonces le reveló la historia a su padre y hermanos, cuya reacción “fue la de ponerse furiosos conmigo, pues todos se consideraban con más derecho que yo para ir a resolver esta cuestión”. Pero como no tenían pasaporte a punto ni billete, fue él el que volvió. En la inevitable pelea acabó herido, pero dejó peor al hijo del herrero, que perdió un pulmón. El herrero murió poco después en un tiroteo con otro vecino. En cuanto a Líster, en los años siguientes tuvo un par de peleas con guardias civiles, en las cuales golpeó a varios y otro “me dio un golpe con la culata del fusil partiéndome la cabeza”²²⁹⁹.

Es un caso extremo, pero casi todos los autores consultados refieren episodios de violencia en sus primeros años. González López, que sería diputado en la Segunda República, nació en 1903 en una familia obrera en la periferia de A Coruña. Recuerda escuchar sus “primeros disparos” de niño, “los que hizo un militar al suicidarse” después de herir a una mujer; recibir “palmetazos o bofetadas” por el más leve error por parte de su profesor de inglés; un golpe de fusta en la cara por dar un muera al Rey y, en una anécdota que sería difícil encontrar en la autobiografía de un político actual, despedazar una rata con un machete²³⁰⁰. También ofrece un testimonio muy rico de los prolegómenos de una pelea entre parroquias, extraído de los recursos de sus vacaciones en Abegondo en 1917. Según explica, en la fiesta había habido peleas entre parroquias el año anterior, y ese se temía que hubiera más, porque las fuerzas de la Guardia Civil estaban reconcentradas en A Coruña. Así que los mozos de Santa María de Vigo, en Cambre, y los de una “parroquia vecina y amiga” se reunieron en lo alto de la colina y “pasaron revista a su armamento, que iba desde una

²²⁹⁹ A partir de ahí siguieron incidentes por motivos particulares. En 1932, por ejemplo, afirma que mató a un hombre e hirió a otros cinco en un tiroteo cuando, junto con algunos compañeros, interrumpió una reunión “de patronos y caciques” en Ames. LÍSTER, E. (1977), pp. 13-28, 45.

²³⁰⁰ Supuestamente, el del caudillo cubano Maceo. GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1987), pp. 27, 29, 45, 61, 99, 273.

navaja de regulares proporciones, hasta una pistola de dos cañones”; recordemos que cuando los acompañaba tenía unos catorce años. La fiesta, finalmente, acabó sin lucha²³⁰¹.

González López también apunta a que la violencia podía ser un mérito entre las clases más altas. Según afirma, el sablazo que recibió en la cabeza Casares Quiroga en una algarada callejera en 1916 hizo que empeorase su salud, pero también que le dio “gran prestigio como hombre de acción”, haciéndose una fama como luchador y “*republicano callejero*”, según él se denominaba, lo que a su vez “le abrió la puerta en la estimación de D. Manuel Azaña”²³⁰².

Santiago Álvarez Gómez llegó a fundar la sección gallega del PCE. Pasó su niñez en Valdeorras, en el interior de Ourense, donde de niño casi perdió un ojo por el ataque de otro chico. Su profesor lo golpeó un par de veces, por acusarlo de robar fruta y por hablar en gallego; según escribía después no le guardaba rencor, ya que “el pegar tan bárbara e injustamente a los niños era entonces lo habitual”²³⁰³. Tampoco los aprendices se libraban de los golpes, como recordaba Luis Pérez, futuro afiliado de la CNT, rememorando cómo estropeó el barniz de unas sillas con siete u ocho años en el taller de su tío: “el estropicio fue fenomenal pero los bofetones y pescozones del tío no lo fueron menos”²³⁰⁴.

Santiago Álvarez identifica la violencia y otras costumbres que le repugnan de su juventud y niñez como la embriaguez o el “trato grosero y soez” de los jornaleros con los que trabajaba, al “primitivismo y el atraso” derivado de la falta de instrucción. El relato de su vida es en parte uno de civilización de sí mismo y de los demás a través de la instrucción y la práctica política. Esto se expresa claramente en su descripción de las luchas de niños y mozos, que según él desaparecieron en su zona “de modo radical, cuando algunos nos fuimos politizando” y pensando que los jóvenes “teníamos algo más importante y noble que hacer que pegarnos entre nosotros, y empezamos a influir en este sentido en los demás jóvenes”²³⁰⁵.

Álvarez da pie a algunas apreciaciones de interés. Una es que los procesos de civilización, como ya hemos mencionado, no tenían por qué provenir de la burguesía: también las ideologías obreristas impulsaban iniciativas encaminadas al fin de la violencia, deseosas de alejarse de la imagen de la “chulería”, “matonismo”, “embriaguez” y difundir una cultura de la contención²³⁰⁶ (al tiempo que promovían sus propios modelos de virilidad heroica en aspectos determinados²³⁰⁷). Algunas iniciativas de patrones y obreros coincidían, por ejemplo, en hacer campaña contra la taberna y alcoholismo²³⁰⁸.

Por otra parte, no debemos ver la aceptación cultural de la violencia como hegemónica: diversos individuos mostraban diversos grados de aceptación y conflicto con los presupuestos culturales en los que vivían. Finalmente, está la interesante interpretación de redigir las energías juveniles hacia un propósito revolucionario. Las adhesiones políticas, si bien llevaron a varios de los que hemos consultado a situaciones de violencia propias, limaron asperezas de conflictos privados. Enrique

²³⁰¹ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1987), p. 61.

²³⁰² GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1988), pp. 14, 83.

²³⁰³ ÁLVAREZ GÓMEZ, S. (1985), pp. 15, 18-19, 26.

²³⁰⁴ PÉREZ ÁLVAREZ, L. (2015), p. 46.

²³⁰⁵ ÁLVAREZ GÓMEZ, S. (1985), pp. 16, 20.

²³⁰⁶ ARESTI, N. (2010), pp. 168, 230. Sobre la fusión cultural de la clase obrera gallega con aspectos de las clases medias y burguesa y la petición de buena conducta en los estatutos obreros, MÍGUEZ MACHO, A. (2008), pp. 333, 349-352.

²³⁰⁷ TORRES DELGADO, G. (2017), p. 211. Sobre la valoración positiva del arrojo de los líderes obreros, MÍGUEZ MACHO, A. (2008), p. 261.

²³⁰⁸ URÍA, J. (2003), p. 603.

Líster mejoró sus relaciones con el joven vecino al que había golpeado hasta hacerle perder el pulmón, cuando ambos coincidieron en las filas socialistas.

La descripción más brutal de la vida de las clases bajas la transmite, José Pasín, nacido en 1870 y criado entre las clases populares del suburbio compostelano de Santa Marta. No creemos que sea casualidad que el más temprano de los autores citados sea el que presenta una atmósfera más violenta. En la escuela bofetadas y golpes de palma convivían con obligar a aguantar losas con los brazos horizontales, de rodillas, mientras “os demais rapaces, no canto de se compadecer, chufábanse da vítima”. Entre sus experiencias directas con la violencia está una pelea con otro monaguillo, mientras los dos sacerdotes de los que dependían se daban bofetadas y palos. En los talleres, algunos patrones pegaban a los obreros y estos se desquitaban con los aprendices²³⁰⁹.

Pasín describió su barrio a través de la ficción en su relato D. Benito, de 1938, y que recordaba envuelto en una atmósfera de violencia con ciertos parecidos a los inicios de *La Madre*, de Gorki:

“Vello, mozo e rapace vivían en continua discordia; as mulleres a cada hora tiñan disputas con porradas e tiróns de pelo, cal leas en plena rúa diante das súas criaturas; os homes, borrachos e viciosos, desafoaban a súa carraxe maltratando as súas compañeiras e elas respondían do mesmo xeito aos seus maridos se podían, aplicando o dito de: “a muller que pega ao home, fai ben se pode”. As casas eran cortellos noxentos, e saían ás portas a comer o caldo, emporcallando a conducta ao home máis puro coa súa maldita lingua de incorrixibles rexoubearas, causa de todos os desgustos que, decote, remataban en liortas dunhas familias contra outras.

Así, os fillos eran montaraces, feros e groseiros”²³¹⁰. A la salida de la escuela se dividían en dos grupos, cartagineses y romanos, y se enfrentaba a bofetadas y golpes de pañuelo, con alianzas para enfrentarse a los de otras.

El arco argumental viene a dar una visión del proletariado compostelano inmerso en ciclos de violencia nihilista y sin redención, pero ofrece una muestra interesante del estereotipo de guapo de la Restauración y el tipo de trifulcas en las que estaba implicado. Es en estas peleas de críos en las que empieza a destacar el protagonista del relato, Benito, con una piedra en el pañuelo y un vergajo rematado en una bola de plomo. Los padres le daban palizas diarias, pero él pelea con todos y de mayor se convierte en el punto más temido de la ciudad en las peleas con otros barrios, ampliando su armamento: con tirachinas, navaja en los dientes y pistola para usar en casos de necesidad.

Las relaciones con su novia pasan por golpes y exabruptos mutuos, y dondequiera que nos lleva el relato hay violencia: en *regueifas* cuando derivan en insultos, en un baile por el tipo de música a tocar. Pasando de los cuarenta años, y tras hacer fortuna en América, Benito vuelve a finales e la Restauración y acaba muerto por una cuchillada en un baile, precisamente tras abandonar los modos violentos de su juventud, y los sospechosos resultan absueltos por falta de pruebas en el juicio oral. La Justicia, remacha Pasín, iba pareja “coa degradación social daquela época: “un muerto máis, qué importa al mundo?”²³¹¹.

En esta relación las mujeres han quedado relegadas, pues no es fácil encontrar autobiografías de mujeres de clases populares del siglo XIX o inicios del XX. Teresa López Alvarar sólo recuerda que su padre, político izquierdista coruñés, le pegase una vez, cuando fue a comprar pan en una huelga de panaderos²³¹². También cómo este guardaba en el cajón del escritorio una pistola, “supoño que

²³⁰⁹ PEREIRA, D. (2012), pp. 46, 50, 58.

²³¹⁰ PEREIRA, D. (2012), pp. 36-37.

²³¹¹ PEREIRA, D. (2012), pp. 35-43.

²³¹² ALVAJAR LÓPEZ, T. (2012), p. 34.

descargada” y cómo solo la portó en el golpe de estado de Sanjuro, cuando “situou a varios republicanos nas esquinas dos cuarteis e en lugares estratéxicos e velaron toda a noite pola salvación da República”²³¹³.

Su hermano Javier (que, traicionando la orientación política familiar, hacía pellas con otro chaval que repartía *Arriba*) tiene recuerdos más belicistas de su adolescencia coruñesa: “Allí, en La Estrada, tenían lugar las batallas que, a pedradas, enfrentaban a los chiquillos de la Ciudad Vieja con los del barrio de Orillamar y Atocha Alta. Cuando los de la Ciudad ganábamos la batalla, corríamos a los contrarios hasta la calle de Orillamar, pero si nos vencían, desaparecíamos como rayos en las viejas calles de nuestro barrio, haciendo imposible la persecución del enemigo”. En otra ocasión “nos acercamos con una modesta lanchita a las escalas del Club [Náutico] para desembarcar allí a un chiquillo que traíamos desde Los Pelamios y nos fue imposible hacerlo porque un grupo de jóvenes “señoritos” nos apedreó al verme a mí en la embarcación”²³¹⁴.

11.6 “Tenía cara de hostia, y como la estaba pidiendo, por eso se la di”. Violencia universitaria

En la violencia de A Coruña y Santiago del siglo XIX predominaban las clases populares, lo que corresponde tanto a su peso numérico como al patrón explicativo del descenso de la violencia en Europa, que fue un proceso iniciado en los modos culturales de las clases altas²³¹⁵. Maticémoslo. Si bien los adultos asentados de clases altas, propietarios y profesionales liberales, intervenían en pocas ocasiones en actos violentos (con la excepción, quizás, de la violencia política), y probablemente podemos afirmar que eran más pacíficos que sus equivalentes obreros o campesinos, este fenómeno está menos claro entre el estudiantado universitario compostelano, proveniente, con matices, de sectores acomodados²³¹⁶.

Los estudiantes universitarios participaban en algaradas, manifestaciones y alzamientos políticos, con carácter particular y colectivo, como señalamos en otros puntos. Pero también en formas de violencia cotidiana. Los de las facultades de Santiago, que por aquel entonces poseían la única institución superior en Galicia, parecen bastante levantiscos en la literatura contemporánea. Los universitarios de Santiago de Compostela se enfrentaban a pedradas y golpes con los artesanos compostelanos²³¹⁷, costumbre inmortalizada por Pardo Bazán y Pérez Lugín. En la narración cómica *Garboa (el estudiante de Santiago)*, publicada en 1920 y menos conocida, el protagonista,

²³¹³ ALVAJAR LÓPEZ, T. (2012), p. 49.

²³¹⁴ ALVAJAR LÓPEZ, J. (1992), pp. 151, 154, 156.

²³¹⁵ PINKER, S. (2012), p. 129.

²³¹⁶ Siendo cierto que no provenían de los estratos más bajos de la sociedad, y que las familias más acomodadas estaban sobrerrepresentadas, existía una gran diversidad de orígenes y recursos entre los estudiantes. Ya en el XVII había matriculados a los que se denominaba directamente “pobres”, y encontramos a hijos de campesinos; si bien parece que esta tendencia se revierte en el siglo XIX coincidiendo con el aumento de costes de matrícula. GASALLA, P. L., SAAVEDRA, P. (2000), p. 511, 515, 529. En un estudio realizado por Barreiro Fernández a partir de los censos compostelanos (que permiten evaluar la situación de aproximadamente un tercio de los matriculados), vemos que en torno a una quinta parte de los estudiantes en los cursos 1857-1858 y 1885-1886 eran hijos de jornaleros, labradores, sirvientes y otros oficios bajos; otro 20% de pequeños empresarios, procuradores, maestros de obras y otros trabajadores más desahogados; a en torno al 60% se les atribuye, en base a los oficios de sus padres, “una buena situación económica”. BARREIRO FERNÁNDEZ, R. (2003), pp. 376-377. En el primer tercio del siglo XX predominaban los hijos de padres profesionales liberales, cerca del 40%, y en proporciones más bajas encontramos propietarios, funcionarios, comerciantes o agricultores, clasificaciones que no son infórmes con exactitud de su riqueza relativa. VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), p. 190.

²³¹⁷ PERNAS OROZA, H. (2001), p. 273

supuestamente un individuo real, cruza la cara desde un tren que arranca a un individuo porque “tenía cara de hostia, y como la estaba pidiendo, por eso se la di”²³¹⁸, lo que es relatado como una ingeniosa ocurrencia. Este tipo de actos se encuadran en las dinámicas de violencia masculina juvenil compartidos con las clases populares²³¹⁹.

Probablemente este tipo de violencia estuviese presente en las universidades desde la Edad Media²³²⁰. Existían reglamentos que regulaban la existencia de los universitarios compostelanos en el Antiguo Régimen y el periodo absolutista, limitándoles el acceso a tabernas y garitos de juego y regulando su vestimenta y comportamiento. El plan Calomarde de 1824, en concreto, les prohibía portar armas, y un Tribunal de Censura debía vigilarlos por si salían a deshoras o se entregaban a vicios, disciplina que se relajó en 1836. En la práctica, parece que estas disposiciones quedaban mayoritariamente en letra muerta, y los universitarios “seguían llevando armas e incluso poseían armas de fuego sin que ello provocara especiales procesos”²³²¹.

En la década de 1850 el director general de Instrucción Pública Gil de Zárate se vanagloriaba de que en las universidades se habían reducido las algaradas²³²². El Reglamento de las Universidades de 1859 establecía un régimen disciplinario estricto²³²³, si bien limitado a la actividad académica y ya no regulaba, como el de 1824, tantos aspectos de la vida privada de los alumnos.

Siguiendo a Varela López, en el XIX eran frecuentes las faltas disciplinarias, generalmente cuando un alumno o alumnos, descontentos con sus notas en los exámenes finales, golpeaban a los profesores²³²⁴. Siguiendo una actuación del Consejo de Disciplina de 1849 encontramos el caso del alumno Luis Salgado, que “atropelló vilmente” al catedrático Vicente Guarnerio cuando lo suspendió. Las agresiones físicas conllevaban la expulsión, aunque los insultos o infracciones menores como arrancar la lista en la que figuraba un suspenso propio se veían con más laxitud²³²⁵.

²³¹⁸ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, H. (1920)

²³¹⁹ Masculina, en tanto que la población universitaria compostelana estaba conformada casi universalmente por hombres durante la mayor parte de nuestro periodo de estudio. En el curso 1913-1914 había tres mujeres en la Univesidad (el 0,28% del censo universitario”, porcentaje que fue creciendo paulatinamente hasta que en el año escolar 1935-1936 llegan a sumar el 8,89%. VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), p. 181.

²³²⁰ Desde sus inicios, el establecimiento de universidades suponía incorporar a la población de una ciudad un contingente de hombres jóvenes solteros que participaban en actividades de fiesta, esto es, un grupo de población que comete más actos de violencia al menos en las sociedades occidentales. Como señala Hammer en su clásico estudio sobre el homicidio en una población universitaria medieval, “if one were a young adult male with university connections living in eastern Oxford and likely to haunt taverns at night on weekends, especially in the suburbs, the chances of being involved in a homicide as assailant, accomplice or victim were high indeed”. HAMMER, C. I. (1978), p. 22. En la Salamanca moderna, la violencia universitaria se manifestaba, entre otros aspectos motivados por cuestiones no estrictamente estudiantiles, entre vecinos y universitarios, banderías estudiantiles y las provisiones de cátedras y cargos. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, G. (2014).

²³²¹ En 1828 se detuvo dos estudiantes por tener en su poder “una carabina, una pistola, un sable y un cuchillo”, parece que después de una refriega con armas de fuego. BARREIRO FERNÁNDEZ, R. (2003), pp. 97-100, 258.

²³²² Esto afirmaba Gil de Zárate en 1855, señalando que en la Universidad “no se ven ya aquellas sublevaciones que tan frecuentemente eran, turbando a veces la tranquilidad de las poblaciones; y algunas que por motivos puramente académicos se han intentado, han sido fácilmente reprimidas”. BARREIRO FERNÁNDEZ, R. (2003), p. 347. Originalmente Gil de Zárate, A. (1855): *De la Instrucción Pública en España*, II, Madrid, pp. 335-336.

²³²³ Los rectores, decanos y catedráticos, o el Consejo de disciplina universitario, según la gravedad del asunto, podía encerrar a un alumno dentro de la universidad un cierto número de días (art. 173, 176). *Reglamento de las Universidades*.

²³²⁴ VARELA LÓPEZ, I. (1991).

²³²⁵ BARREIRO FERNÁNDEZ, R. (2003), p. 259.

Estos hechos no eran extremadamente frecuentes, pero tampoco desconocidos. En 1872 encontramos un profesor de Medicina abofeteado por un alumno, en 1893 un docente de Derecho Internacional atacado con un palo por otro estudiante, y en 1899 el decano de Farmacia fue agredido con un bastón por un tercer universitario²³²⁶, un incidente del que hemos podido observar la sentencia. El atacante, un joven jienense llamado Antonio Fuentes, fue sido suspendido en Botánica Descriptiva por el docente y, al encontrárselo en la calle mientras estaba embriagado, le dio de bastonazos hasta dejarlo inútil para el trabajo durante cerca de un mes y le rompió el paraguas y el sombrero. La condena fue de algo más de seis meses de cárcel y una pequeña indemnización²³²⁷.

Al, tiempo había incidentes fuera de las aulas. Según González Calleja, en torno al periodo isabelino “parece que era habitual que los estudiantes portaran armas blancas e incluso de fuego para dirimir sus querellas particulares [en esto no se diferenciaban de la juventud masculina en general], y solo actuaban de consuno en las protestas de orden académico o local”²³²⁸. Al menos en la Restauración y en adelante, los incidentes con armas son raros y también las muertes violentas, aunque estas ocurrían puntualmente. La única que hemos encontrado deriva de un una discusión en 1886 entre dos universitarios ourensanos y dos sastres que se encontraron en un burdel; los menestrales acabaron en el hospital, del que uno de ellos no saldría con vida²³²⁹. El mes anterior había habido una pelea entre estudiantes y artesanos de la ciudad²³³⁰ y en los días posteriores se canceló un baile, al parecer para prevenir conflictos. En 1905 encontramos a un estudiante de Derecho muerto de un tiro por una discusión debida al juego; los universitarios costearon el entierro, lo convirtieron en una manifestación y quemaron el mobiliario de dos sociedades de recreo donde se apostaba²³³¹.

Sin duda eran más frecuentes las peleas sin muertes, como las que se suscitó en 1899 entre Amador Francisco Ruibal, alias *Fariña*, y Cándido Fariña, que, pese a la coincidencia de nombre y apodo, se dieron de bofetadas una noche de marzo. Cándido salió con una leve lesión, y disparó, aunque “al parecer al aire y para atemorizar a su contrario, sin causarle daño alguno”. Lo detuvo la Guardia Municipal, aunque se resistió, pero lo debieron soltar pronto, porque a las once de ese mismo día Ruibal lo golpeó en la cabeza con un palo. La cosa quedó en un juicio de faltas²³³².

También, curiosamente, parecen ser reiteradas las luchas entre los militares y los jóvenes de las zonas en las que están guarnicionados. En Pontevedra, en 1920, seis artilleros y un paisano acabaron en la Casa de Socorro tras una pelea en un baile de Salcedo, “ambos bandos se hallaban resentidos por incidentes anteriores”²³³³. En A Coruña eran “muy frecuentes” los escándalos entre paisanos y soldados en la calle Marcos de Naya, tanto que en diciembre de 1886 el Gobernador militar pone un sargento a vigilarla para evitar peleas²³³⁴.

11.7 “La ofensiva y agraviosa fiesta”. Las cencerradas

Por cencerrada, charivari, *rough music*, *skimmerton*, nos referimos a un conjunto de rituales públicos de humillación presentes al menos desde la Edad Moderna en las culturas europeas²³³⁵. En su

²³²⁶ BARREIRO FERNÁNDEZ, R. (2003), pp. 378-379.

²³²⁷ *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 167, folios 462-465.

²³²⁸ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2009), p. 58.

²³²⁹ *La Gaceta de Galicia*, 30-11-1886.

²³³⁰ *La Gaceta de Galicia*, 20-11-1886.

²³³¹ VARELA GONZÁLEZ, I. (1989), p. 286.

²³³² *Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I*, caso 63, folios 175-176.

²³³³ *FV*, 11-05-1920, p. 2.

²³³⁴ *La Voz de Galicia*, 07-12-1886.

²³³⁵ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 520-523.

modalidad más típica, un grupo de miembros de una comunidad se reúne para satirizar y molestar con música disonante a un individuo que ha realizado una afrenta contra la el grupo que no puede castigarse legalmente.

En los reinos hispánicos fueron objeto de persecución durante muchos siglos. En 1455 el Concilio de Turín amenazaba con la excomunión de los autores de cencerradas, y el obispo de Teruel, en 1745, obligaba a los autores a oír una misa mayor en medio de la iglesia, “a vista de todos, sin capa ni sombrero o montera y con una vela amarilla en la mano”. Carlos III, con el rigor característico de la legislación de la Edad Moderna, condenaba a los autores a cuatro años de presidio y cien ducados de multa. Una ordenanza municipal de Tui de 1757 prescribía cien azotes y destierro de un año para los que dijiesen pullas y cantares deshonestos, y señalaba que las cencerradas por los matrimonios de viudas generaban “inquietudes y malestar al pueblo, llegando tal vez a amenazas y desafío”²³³⁶. Fuera ya de Galicia, en Cantabria, los Autos de Bueno Gobierno de Alfoz de Lloredo las condenaban con azotes y destierro²³³⁷. En la práctica, sin embargo, parece que al menos en Navarra las autoridades fueron bastante permisivas con la cencerrada durante el Antiguo Régimen²³³⁸.

En los albores del periodo de estudio de este trabajo, antes del primer código liberal, las cencerradas ya llegaban a los tribunales gallegos, bien a través de denuncias, como en la asonada dada a Domingo Valverde por casarse en segundas nupcias en 1837²³³⁹, bien porque generaban actos de violencia que a su vez era delito. Pero no parece que la persecución judicial sea demasiado fructífera en estos casos. En 1830, cuando Francisco Costas se prometió con Ana María Varela, los vecinos se concentraron fuera de sus viviendas, tocando caracolas, calabazas, y profiriendo “dichos malsonantes y palabras desonestas, burlescas y ofensivas”, aunque, en palabras del hermano de la mujer, no constó que “hiciesen violencia alguna”. Los afectados y los vecinos declararon que sin lugar a dudas había habido una cencerrada, pero no delataron a nadie en concreto. Así, para el poder judicial “aunque resulta el echo de la Cencerrada, no así el numero de personas quienes fuesen, su reunion, ni separación ni la menor Cosa de Concimiento”. La causa para averiguar quiénes eran se archivó unos meses después, y los prometidos contrajeron matrimonio sin que pareciesen producirse nuevos casos²³⁴⁰. Si medimos el éxito por el número de condenados, está claro que la denuncia fue un fracaso. Sin embargo, quizás los implicados no querían mandar a ningún vecino a la cárcel, sino enviar un aviso y cortar el acoso.

Los tribunales también conocían los actos de violencia derivados de los charivaris, aunque estos parecen haber estado protagonizados por las víctimas de la burla. En 1844, en Ponteareas, el viudo don Francisco Carballido se casó con Ramona Bugallal. Según declaró un vecino, “hubo cencerrada la noche del propio Diciembre y otras siguientes” y se volvió a repetir en febrero del año siguiente con “coplas bien indecentes”. En la noche del 23 de ese mes rebotó la paciencia de los afectados; cuando un grupo de muchachos se acercó a las casas de las familias objeto de burla tocando instrumentos, tres hombres los recibieron a pedradas y a tiros de carabina, dejando cuatro heridos y luego marchándose a paso ligero. Los autores eran seguramente el propio Carballido y gente de la casa de su esposa, aunque, por supuesto, negaron que supiesen nada del asunto. El ataque fue, en gran medida, un aviso. Dispararon seguramente perdigones sin mucha pólvora, puesto que los heridos fueron leves, y a una mujer a la que le tocaron dos proyectiles no resultó herida dado que los detuvo la ropa²³⁴¹.

²³³⁶ TABOADA, J. (1969), p. 205.

²³³⁷ MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. (1997), p. 344.

²³³⁸ RUIZ ASTIZ, J. (2013), p. 754.

²³³⁹ *Causas*, 2241, 4.

²³⁴⁰ *Causas*, 633, 5.

²³⁴¹ *Causas*, 2165, 9.

La única muerte derivada de una cencerrada con la que nos hemos encontrado en la primera mitad del siglo deriva de una intervención de la autoridad particularmente desastrosa. En 1838, el alcalde de A Guardia convocó a la Milicia Nacional para prevenir un charivari. Dos de los milicianos, José Ventura Martínez y José Bernardo Núñez, dispararon sus fusiles para dispersar a la muchedumbre, con la mala suerte de acertar y matar a uno de sus propios compañeros. Como el juez de primera instancia no encontró en sus actos que “hubiera havido mala intención”, aunque “si una precipitación fogosa”, declaró la muerte casual y dictó sobreseimiento. Los hechos estaban bastante claros, pero las interpretaciones de los vecinos y las autoridades fueron totalmente diferentes. Veamos una declaración conjunta de nueve de los primeros:

“tolerada en aquel Pueblo la costumbre de las Cornetadas, cuando se casa algún viudo, los muchachos se divierten en esto tocando bucinas, calabazas, zambombas, cencerros y otros instrumentos rallantes. Concertados Juan Rodríguez viudo con Jacoba González también viuda, la gente joven parece se entretubo en una cencerrada; y cuando hubiere sido bastante que la autoridad de la Guardia embiare una orden camaral al Jurado, si queria prohibirla la fatalidad quiso que mandase una partida de nacionales; y o bien por que echaran un trago o por que los dirigieran mal [...] se propusieron correr a los muchachos a tiros; y aunque creemos que su animo no seria matarlos como los prueba el no haver dirigido a ellos las balas, lo cierto es que a resultas de los tiros sucedió la desgracia de caer muerto uno de los mismos Nacionales”.

Otra versión era la del fiscal, que defendió la disposición del alcalde:

“para contener y reprimir tan punible, reprovada, y embejecida costumbre de hacer por cencerradas [...] ofenden a los contrayentes, originan sentimientos de suma trascendencia y sobre todo alteran el público sosiego, circunstancias que si bien en todo tiempo debe mirarse con muchísima circunspección toda actoridad a quien está sometida aquel (como al presente lo están todos los Alcaldes), en la actualidad mas que nunca por lo perentorio y crítico de las circunstancias que nos rodean, los grandes males exigen grandes remedios”²³⁴².

En ambas versiones hay un choque de mentalidades, pero también de intereses. Los paisanos, en cierto sentido, defienden el derecho de su comunidad a controlar la moral de la parroquia sin intervención del Estado. En una dimensión más concreta, querían dejar claro que sus hijos y vecinos que habían participado en la cornetada no eran culpables de nada, y prevenir nuevas intervenciones de milicianos armados por cuestiones menores.

El fiscal, en el plano más pedestre, seguramente defiende la actuación del alcalde para no tener que someter a responsabilidades a este y a la Milicia en un momento en el que no era políticamente conveniente. Pero también en su discurso hay ideología. Las cencerradas son punibles porque atacan el derecho del individuo de hacer lo que no está prohibido sin ser insultado ni perseguido, como defiende el liberalismo. También porque generan rencores entre los vecinos, y esto no deja de ser cierto. Pero, “sobre todo”, porque atentan contra el orden público, que debe residir en el Estado, que se ve amenazado por la insurrección carlista. Cualquier desafío al Estado justifica una respuesta severa, aunque, en este caso, la forma adoptada sea la de dispersar a tiros una concentración de particulares que acosaban a otros sin emplear la violencia.

La costumbre, como hemos visto, distaba de tener la aprobación de las autoridades, y de ser seguida por todos los implicados. Las costumbres consuetudinarias no deben verse como leyes a las que todos los implicados se sometían de buen grado, y que solo encontraron oposición en un cambio de mentalidades. Las cencerradas eran aceptadas socialmente, pero está claro que no gustaban a los

²³⁴² *Causas*, 2218, 8.

que tenían que sufrirlas. Estos, las más de las veces, agachaban la cabeza y contemporizaban para evitar males mayores, pero otras tomaban medidas.

La justicia codificada liberal no perseguía las encerradas con especial furor, y el Código Penal de 1850 las considera apenas una falta²³⁴³. La costumbre seguía viva al final de nuestro periodo de estudio, según hemos podido comprobar en las catas de 1920, 1925, 1930, 1935 y 1936; la prensa las trata con la familiaridad de un hecho conocido. Sin embargo, cualitativamente las fuentes hemerográficas son bastante pobres y muy irregulares²³⁴⁴. La gran mayoría de los casos no incluyen una descripción detallada de los hechos, y muchos ni siquiera el motivo de la encerrada, con lo que resultan muy pobres para el análisis. Los casos expuestos, por tanto, se presentan a modo de ilustración y no deben tomarse como un análisis cuantitativo.

Empecemos por las fórmulas e intencionalidad de la encerrada gallega. El empleo del charivari no es el mismo en todas las sociedades. En la Rusia de finales del siglo XIX e inicios del XX, la mayor parte de los charivaris eran a ladrones y otros delincuentes, y había un grado de violencia elevado, con palizas que acababan en muerte y se confundían con el vigilantismo o rituales de humillación pública con latigazos y tarificación²³⁴⁵. En Francia, aunque puede haber un sesgo en la obtención de los datos, predominaban las dirigidas contra los miembros de la comunidad que se casaban en segundas nupcias²³⁴⁶, mientras que en Inglaterra, en el siglo XIX, llegaron a ser mayoría las realizadas contra los maridos que golpeaban a sus esposas²³⁴⁷. En la Navarra del Antiguo Régimen vemos hostilidad hacia las segundas nupcias y control social de la sexualidad femenina, pero también robos, malos tratos, y a veces una herramienta política o la expresión de animosidades entre bandos de vecinos²³⁴⁸. Es, en fin, una herramienta polivalente.

En su obra ya clásica sobre la encerrada en Galicia, Jesús Taboada establecía cinco tipos según su motivación, algunos comunes al ámbito europeo y otras quizás más típicas de la región en su forma de expresión: por segundas nupcias, por casamientos tardíos o anormales, por negarse a pagar el piso (invitar con vino a los mozos el pueblo de la novia) el contrayente forastero; por omitir el cónyuge indígena la obligación de pagar el gaitero (en zonas en las que era tradicional que los novios pagasen la música, comúnmente el día siguiente al enlace); y las encerradas carnalescas²³⁴⁹. El tercer y cuarto tipo, como se puede apreciar, vienen a expresar la concepción de que cuando se producen matrimonios entre miembros de dos comunidades hay que invitar a los vecinos del pueblo en el que se celebra; si no se cumple la obligación social de dar una fiesta, la comunidad recibe a los novios con hostilidad. Es un modo de forzar el “derroche ritual” que, en palabras de Sarti, se esperaba por motivos culturales en las bodas y fiestas de “unas sociedades campesinas siempre al límite de la supervivencia” en el Antiguo Régimen²³⁵⁰. Los matrimonios desaprobados en la Galicia rural, según señala Lisón Tolosana, eran los comprendidos en una serie de categorías: interparroquiales, viudos, bodas de senectud, novios de edades desproporcionadas, excesiva prisa en contraer segundas nupcias, “si no viene a xeito”, si no es agradable, “tipo raro”, “dos tontos”²³⁵¹.

²³⁴³ Se castiga con pena de arresto de 5 a 15 días, o de 5 a 15 duros, a los que “excitaren ó dirigieren encerradas ú otras reuniones tumultuosas en ofensa de alguna persona ó del sosiego de las poblaciones”, siguiendo el Código Penal de 1850, art. 468.14. Si solo se participaban, la pena era menor. Art. 493.2.

²³⁴⁴ *Faro de Vigo* publicaba gran número de provincias interpuestas en el rural de la provincia ante la Guardia Civil, debido, creemos, a una comunicación fluida con el Gobernador Civil.

²³⁴⁵ FRANK, S. P. (1999), pp. 251, 254-256.

²³⁴⁶ THOMPSON, E. P. (1995), p. 550.

²³⁴⁷ THOMPSON, E. P. (1995), p. 561-563, 566.

²³⁴⁸ RUIZ ASTIZ, J. (2013), pp. 738, 742, 750-754.

²³⁴⁹ TABOADA CHIVITE, J. (1969), p. 204.

²³⁵⁰ SARTI, R. (2003), p. 280.

²³⁵¹ LISÓN TOLOSANA, C. (1983), p. 77-83.

Vemos, por tanto, una constante antropológica y comunitaria: los casamientos “normales” debían hacerse entre jóvenes de edades parecidas y de la misma comunidad. No hacerlo no era un tabú fuerte, que fuese impensable, como podría serlo el incesto. Resulta imposible determinar su capacidad para corregir las costumbres (por ejemplo, cuántos viudos dejaban de casarse por miedo a las burlas), pero la norma se rompía constantemente. Cuando esto ocurría surgía una oportunidad para que los vecinos, especialmente los jóvenes, desplegasen un repertorio de humillación ritual con carácter festivo, más o menos fuerte según su disposición hacia la víctima. Por último, hay determinados sujetos de la comunidad, el “tipo raro”, que no encaja. La burla por su matrimonio, que debía ser una extensión del acoso que recibía en su vida diaria.

Las cencerradas que hemos encontrado están en general relacionadas con matrimonios o convivencia extramatrimonial. Vemos cencerradas a dos viudos que acababan de contraer matrimonio²³⁵², a un hombre que “pretende casarse en segundas nupcias a los cinco meses [se supone que de enviudar]”²³⁵³, a un hombre que “se casó con una viuda en terceras nupcias”²³⁵⁴ (estos dos últimos en Gondomar y en diciembre de 1930), una viuda que quería contraer matrimonio²³⁵⁵; a un maestro nacional y a una mujer [suponemos que convivientes]²³⁵⁶; contra una mujer que hacía vida marital con un hombre²³⁵⁷; a un vecino de Sanxenxo “por haberse este separado de su esposa”²³⁵⁸, a otro de Mondariz “que está separado de su mujer y vive con otra”²³⁵⁹.

Casi siempre se dan en parroquias rurales, aunque uno, con supuesta participación masiva, fue abortado por la Guardia Civil en la periferia de Vigo²³⁶⁰, y las realizan los propios vecinos. Cuando se alude a los participantes se suele hablar en masculino, y la mayoría de los detenidos son hombres. A veces se trata de actos con participación masiva; otros se menciona solo a tres o cuatro personas, o incluso a dos.

En las formas del acto y en el nivel de participación e implicación comunitaria hay gran variedad; tampoco debemos pensar que el acto tenía una finalidad única, o que las motivaciones eran las mismas para todos los participantes. Por ejemplo, vemos como en un suburbio de A Coruña, a inicios del siglo XX, una multitud de obreros entre los que predominaba la ideología anarcosindicalista se congregan ante la casa de un pequeño industrial de la zona para darle una cencerrada la noche de su boda, según cuenta en sus memorias el diputado de la Segunda República Emilio González López, que lo vivió siendo un niño²³⁶¹. ¿Qué lo motiva? ¿La diferencia de clase, pues el hombre era “representante de una clase media conservadora” y hablaba castellano, al contrario que la mayoría de sus vecinos, que se expresaban en gallego? ¿Las segundas nupcias? ¿Casarse con su propia sobrina? ¿O simplemente las ganas de divertirse?

Probablemente, de todo un poco, y si en este acto predominó algún factor, en otros sería prevalente alguno de los demás. El charivari, como mecanismo de acción colectiva, podía oscilar entre la dimensión lúdica y reivindicativa sin que existiesen tensiones entre ellas: una y otra se fortalecían mutuamente.

²³⁵² FV, 29-05-1925, p. 2.

²³⁵³ FV, 21-12-1930

²³⁵⁴ FV, 21-12-1930.

²³⁵⁵ FV, 28-04-1936, p. 2.

²³⁵⁶ FV, 04-07-1936, p. 2

²³⁵⁷ FV, 26-09-1935, p. 2, 29-09-1935, p. 11, 29-11-1935, p. 3, 01-12-1935, pp. 3, 6.

²³⁵⁸ FV, 27-02-1930

²³⁵⁹ FV, 22-03-1930

²³⁶⁰ FV, 28-04-1936, p. 2

²³⁶¹ GONZÁLEZ LÓPEZ, E. (1987), p. 35.

A veces desencadenaba una demanda de compensación hacia los jóvenes de la comunidad, que ya hemos mencionado. Por otra parte, para las víctimas (y la letra de la ley) era un acto de extorsión. En Nigrán, en 1930, un viudo de la parroquia de Panxón se prometió con una soltera de Priegue. Jóvenes de ambas parroquias prepararon una cencerrada a los novios. Algunos fueron a pedirle dinero a la chica a cambio de no hacerla, y esta les dio 50 pesetas. Intentaron repetir lo mismo con el novio, pero acabaron detenidos por la Guardia Civil²³⁶². En otro caso, dos jóvenes de un pueblo de Laza fueron a pedirle a un hombre dos ollas de vino “con motivo de la celebración de un matrimonio” y acabaron pegándole un tiro con una escopeta²³⁶³.

Algunos casos, pocos, se salen del esquema de vigilancia de la moral sexual. En Foz, en 1920, un hombre y sus tres hijos fueron detenidos tras dar una cencerrada al cura ecónomo de San Xulián de Nois porque este “con muy buen criterio, prohibió los bailes en el atrio de la iglesia”²³⁶⁴. En Muxía, en febrero de 1930, Gildo González denunció a Manuel Graíño y a sus tres hijos porque le “vienen molestando con cencerradas y le destrozaron unos almiarses, daño que valora en doscientas pesetas”. Esto lo atribuía a una “venganza porque pertenece a la U. P.”²³⁶⁵. En este caso, la cencerrada no tendría por qué tener carácter comunitario, y los Graíño lo habrían empleado como un arma en una campaña de acoso que también incluía daños contra las propiedades. Estos no eran desconocidos en el propio charivari; en O Corgo, en 1930, en una cencerrada con motivo de una boda, la familia del novio fue apedreada, rompiéndole cristales y destrozándole un pajar y el cobertizo de un pozo²³⁶⁶, en otra una vecina de Gomesende denunció que los vecinos le apedrarón la puerta²³⁶⁷. Pero en la mayoría de las referencias no hay violencia contra las propiedades por parte de los integrantes de la cencerrada.

Ni contra las personas, realmente. No hemos encontrado ningún caso en el que los acosados sufrieron un ataque físico de magnitud importante (precisamente, los casos más visibles en prensa), excepto un caso confuso que veremos a continuación. Sí hubo algún incidente menor con la Guardia Civil. En Arbo, poco antes del golpe militar del 36, la Guardia Civil intervino en una cencerrada que estaban dando varios jóvenes en la parroquia de Mourentán; uno de los guardias disparó después de que estallase un cohete, creyendo que había sido un tiro, pero el incidente acabó sin heridos²³⁶⁸. En el actual municipio de Santiago, en 1920, una pareja intervino después de que un grupo de individuos fueran tras unos desposados en Roxos tocando unas latas; un guardia resultó herido de una pedrada²³⁶⁹.

En cambio, sí que encontramos tres muertos por causa de una cencerrada, pero a manos de los allegados de las víctimas. Uno de ellos ocurrió el 24 de septiembre en Marín, cuando un tal José Cerqueira llamó la atención a unos jóvenes que llevaban dos noches molestando a una prima suya “a pretexto de que hacía vida marital con un joven de 20 años”. Como “no le hicieran caso”, repartió un par de palos sobre dos de los participantes, y a uno de ellos (que según una de las informaciones sobre el suceso ni siquiera estaba participando en la cencerrada) le pegó un tiro en la cabeza mientras estaba en el suelo. A pesar de las altas penas que se le pedían (17,5 años por la fiscalía y

²³⁶² *FV*, 18-02-1930, p. 2

²³⁶³ Probablemente, aunque no se dice explícitamente, fuera el novio. Tampoco se menciona que lo amenazaran con una cencerrada. *LR*, 08-04-1936, p. 6.

²³⁶⁴ *EP*, 17-08-1920, p. 1.

²³⁶⁵ *LV*, 18-02-1930, p. 3.

²³⁶⁶ *EP*, 25-06-1930, p. 2.

²³⁶⁷ *LR*, 16-10-1935, p. 4.

²³⁶⁸ *FV*, 11-07-1936, p. 2

²³⁶⁹ *EP*, 25-01-1920, p. 1.

24,5 por la acusación particular, con importantes sumas de indemnización) se libró con seis años de cárcel, quizás porque intentó curar al herido²³⁷⁰.

Faro de Vigo, sin llegar a condonar el homicidio, interpretó que homicida y fallecido habían sido ambos “víctimas de la ofensiva y agraviosa fiesta”, del “acto de barbarie y salvajismo que denigra al que la practica y avergüenza al que se complace”. El periodista compadecía al “muchacho” que había apretado el gatillo, pues “ante tanta palabra gruesa como las que se vierten en las cencerradas, no hay paciencia que se resista”²³⁷¹.

En Celanova, en 1920, Gabriel Virostra pasó con sus dos hijos por el lugar en el que se estaba produciendo una cencerrada contra una mujer y recibió tres disparos de revólver. Por su muerte fueron detenidos cuatro hombres, todos ellos menores de 27 años y parientes de la víctima del charivari, según *Faro de Vigo* (*La Voz* y *El Progreso* apuntan a que eran de los promotores)²³⁷². Quince años después, en A Bola, un joven de 23 años llamado Francisco Miranda y un amigo fueron a darle una cencerrada a un vecino. Un hermano de este les pegó una paliza con un garrote, matando a Miranda y dejando gravemente herido a su compañero²³⁷³.

Estos casos nos hacen volver a los múltiples conflictos comunitarios y relaciones de poder dentro de la comunidad que llevan a una cencerrada y a su resolución. Según señala Thompson, la cencerrada suele estar protegida por la ley del silencio, pero no es no tiene por qué tener la aprobación de la comunidad, que a veces se divide; al tiempo, los vecinos no aplicaban un rasero único a las faltas, sino que la respuesta vendría tanto de circunstancias agravantes por parte de la víctima de la cencerrada como por el afán de diversión y malevolencia personal de los actores de esta²³⁷⁴. La práctica de la cencerrada, lejos de mostrar una comunidad con una sola mentalidad, expresa las fracturas y luchas dentro de ella.

Thompson resulta también interesante porque hizo un esfuerzo por ponerse en la postura de la víctima²³⁷⁵; observar el fenómeno con la distancia del antropólogo que ve en la cencerrada un acto comunitario hace olvidar el dolor emocional que se infligía a los que sufrían estos ataques. En algunos, sería tan solo momentáneamente desagradable, otros que sufrían ataques leves llegarían incluso a reírse de sí mismos; pero en otros casos esta era una modalidad del acoso al que las comunidades sometían a marginados sociales, con consecuencias graves para conseguir trabajo, para colmar las necesidades afectivas; en algún caso, suicidio²³⁷⁶. Sería un método para inducir a la vergüenza pública y forzar a los poderosos a ajustar sus comportamientos a modelos que benefician a los que no lo son²³⁷⁷, en un sentido también estudiado por James Scott. Pero también para castigar a los que, privados de poder, no encajan en el molde.

11.8 “La maltrató bajo el pretesto de que era Bruxa”. Crimen y violencia relacionados con las supersticiones

²³⁷⁰ FV, 26-09-1935, p. 2, 29-09-1935, p. 11, 29-11-1935, p. 3, 01-12-1935, p. 3.

²³⁷¹ FV, 01-12-1935, p. 6.

²³⁷² Damos más credibilidad a la versión de *Faro* porque suele cubrir la información de Ourense con más detalle. FV 13-10-1925, p. 3, LV 14-10-1925, p. 2, EP 14-10-1925, p. 2.

²³⁷³ LR 21-04-1935, p. 6, 24-04-1935, p. 3.

²³⁷⁴ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 545, 567-570, 592-593.

²³⁷⁵ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 587-588.

²³⁷⁶ THOMPSON, E. P. (1995), pp. 539-543.

²³⁷⁷ SAPOLSKY, R. M. (2017), p. 503.

En su libro acerca de la brujería en Galicia, el recientemente fallecido antropólogo Lisón Tolosana recoge para la Galicia rural, ya entrado el siglo XX, una abundante y rica tradición oral sobre meigas, brujas, hechicería, embrujos, magia y modos de precaverse de ellos. Elementos fantásticos que, si no eran creídos por todos, sí por bastantes, y reproducidos incluso entre los escépticos, por tradición o por prudencia. Constituyen, en fin, una parte a tener en cuenta del imaginario popular gallego, en la que la magia aparece encarnada en personas concretas con poderes sobrenaturales pero también, muy frecuentemente, la bruja como símbolo del mal “creado para ser manipulado y destruido, con la pretensión obvia de destruir lo simbolizado” a través de rituales²³⁷⁸.

Las supersticiones y la creencia en brujería pueden interactuar con el crimen y la violencia de tres maneras. Una, a través de la persecución del brujo en tanto que brujo, ya sea a través de sanciones legales o de formas de violencia extralegal. En segundo lugar, en el castigo de los que usan supersticiones y creencia en magia para estafar y engañar. Finalmente, las supersticiones pueden refrendar actos de violencia. Observaremos estas tres dimensiones y su presencia o ausencia para evaluar las creencias supersticiosas de los gallegos del periodo estudiado, y la medida en la que estas causaban delitos o violencia.

La persecución judicial de la brujería tiene largo recorrido en la historia humana. El código de Hammurabi establece un procedimiento sencillo: a los sospechosos de lanzar hechizos hay que tirarlos al río: si se ahogan, son culpables, si sobreviven, se ejecuta al acusador (el de Ur-Nammu se supone que tiene una disposición parecida, pero la tablilla está incompleta). La octava de las Doce Tablas, dedicada al derecho penal, establece la pena de muerte para los que lancen hechizos que causen deshonor o desgracia a otro.

En contra de la idea popular, la supremacía del cristianismo en Europa no conllevó un aumento de la caza de brujas. Las autoridades eclesiásticas adoptaron posturas heterogéneas y seculares acerca de la persecución de actividades sobrenaturales. Se proscribió y persiguió en diferentes momentos la invocación de demonios, y la persecución de prácticas paganas y heréticas, tanto por autoridades eclesiásticas como seculares²³⁷⁹, pero también hubo dudas recurrentes acerca de la realidad de los supuestos poderes mágicos de los acusados de hechicería. La expansión del cristianismo, de hecho, pudo suponer una disminución de su persecución. En el concilio de Paderborn, además de castigar la idolatría, Carlomagno prohibía a los sajones quemar brujas, comérselas y dar su carne de comer a otros, lo cual era un castigo irónico ya que a los brujos se les acusaba de caníbales.

En el siglo XV se recrudece la persecución en el mundo católico, ejemplificada en la publicación del *Malleus Maleficarum* y la bula de 1484 de Inocencio VIII; durante el siglo XVI y parte del XVII las autoridades europeas se lanzarán a la persecución de brujas, y la creencia en ellas parece muy extendida entre la población de la época²³⁸⁰. De cualquier modo las cazas de brujas en el mundo católico fueron menos prevalentes que en las zonas protestantes tras la Reforma. Según señala Midelfort, en el Barroco “the Mediterranean was a huge area of low intensity, not so much despite the inquisitions that operated there as because of those inquisitions”, y había relativamente pocas ejecuciones, aunque se produjeron algunos pánicos masivos.

La última oleada de ejecuciones fue en el periodo 1614 a 1622 en Aragón, por parte de cortes seculares, y tras ello “pain witnessed very few executions”. La persecución fue más fuerte en

²³⁷⁸ LISÓN TOLOSANA, C. (1987), p. 65-69.

²³⁷⁹ Un resumen de diversas disposiciones, en especial de las que afectan a Inglaterra, en MURRAY, M. A. (1978), pp. 26-31. La autora afirma que la persecución a la brujería fue sostenida durante la Edad Media, aunque nosotros suscribimos la interpretación de otros autores de que hubo un recrudecimiento al final del periodo.

²³⁸⁰ Sobre la dispersión cultural de la idea de brujería renacentista, LEVACK, B. P. (1995), pp. 50-59.

Francia, y sobre todo en algunos puntos del Sacro Imperio Romano y Escocia²³⁸¹. En España, además, salió de la jurisdicción eclesiástica. A partir de 1614, tras el auto de Logroño y las intervenciones de Alonso de Salazar y Frías, apodado “abogado de las brujas” los tribunales inquisitoriales españoles fueron adoptando el criterio de que la brujería era en todo caso un delito menor, cuyo juicio debía corresponder a jueces ordinarios²³⁸². Ya en el siglo XVIII las élites hispánicas parecen bastante incrédulas ante la idea de intervención demoníaca²³⁸³ y el padre Feijóo consideraba a los posesos, en general, impostores o ignorantes²³⁸⁴. En la Galicia del siglo XIX e inicios del XX, en resumen, no se perseguía a la magia como tal desde instancias judiciales.

Algunos gallegos las perseguían de manera particular, aunque no es muy frecuente. En 1924 Isolina do Val, de Mondariz (Pontevedra), convencida de que su convencina Dolores Moruño le había embrujado, fue a su casa junto con un hombre y una mujer “que participaban también de tan estúpida idea” y, provistos de azadones, le propinaron una “monumental paliza”, con el resultado de dos brazos rotos, rodilla derecha dislocada y lesiones en la espalda; el fiscal apreció para Isolina la atenuante de obcecación²³⁸⁵. En 1935 Avelina Franco, una vecina de A Coruña de 35 años, denunció que la habían atacado cinco mujeres debido a que una de ellas le achacaba “que por medios de brujería le trastornó a la hija”²³⁸⁶.

Pero no son ataques masivos. En la Rusia de finales del siglo XIX e inicios del XX, por ejemplo, podemos encontrar brujas quemadas vivas tras ser atacadas por su comunidad, en actos con participación masiva²³⁸⁷. En Galicia hubiera sido difícil, en nuestra opinión, tanto por el temor a represalias judiciales como porque hubiese sido muy difícil encontrar una parroquia en la que los vecinos creyesen mayoritariamente en las brujas (al menos, tanto como para matar a una sospechosa de serlo). No hay grandes pánicos ligados a lo sobrenatural: en mayo de 1936 el barrio de Agro do Rolo, en Lugo, estaba “un tanto alarmado” por la presencia de una mujer que “parece tener pacto con el demonio, al decir de la gente sencilla”: esto es, adivinaba cosas. Pero nada indica que fuese perseguida, más allá de que “muchacha gente” acudió al barrio “por curiosidad”²³⁸⁸.

Hemos tenido más éxito rastreando delitos de estafa y similares, con algún caso llamativo. Una tarde de 1812 Juan Vázquez Varela, miembro del Consejo de Regencia de Su Majestad, paseaba por la calle Real de A Coruña cuando encontró un “crecido monton de gente” a la puerta de un comercio, algunos repitiendo “milagro, milagro”, otros hablando de “todo un embuste”. Juan García, un posadero de la ciudad, exponía a su hija, una niña “de tierna edad”, vestida con una mortaja, explicando que había muerto tras una “penosa enfermedad”, pero que “aviendola ofrecido a la Virgen de Pastoriza la resocitara perfecta y sana” al cabo de un día. García pedía ahora limosna con una bandeja para celebrar una función en su santuario, que está cerca de la ciudad, y llevaba reunidos cuarenta y dos reales y veintiséis maravedís, una cantidad respetable. Vázquez Varela sospechó que más bien se trataba de un timo, pasó el asunto al juzgado para que con un “condigno castigo” se “corten en iguales absurdos y abusos, perjudiciales al nombre de la Religión y bien publico”.

²³⁸¹ MIDELFORT, G. H. E. (2019), pp. 756-762.

²³⁸² TAUSIET, M. (2004), pp. 67-68. Sobre el fin del interés inquisitorial en España en las supersticiones y pactos diabólicos en esta época vease también PÉREZ, J. (2010), p. 254.

²³⁸³ RIVOLA JERICÓ, C. (2000).

²³⁸⁴ TAUSIET, M. (2006), pp. 3-5.

²³⁸⁵ En concreto, el Ministerio Público pedía un año, ocho meses y 21 días para Isolina, y para los otros, para los que no se aplicaba la atenuante, de dos años, once meses y once días. Para todos se contaba como agravante el haber realizado el ataque en el domicilio de la ofendida, según la nota sobre el juicio. FV, 25-07-1925, p. 8.

²³⁸⁶ LV, 13-03-1935, p. 5.

²³⁸⁷ FRANK, S. P. (1999), p. 243-245.

²³⁸⁸ EP, 12-05-1936, p. 6, EP, 13-05-1936, p. 6.

Si bien la guerra se prestaba a interpretaciones sobrenaturales²³⁸⁹, que fuese un auténtico milagro no se llegó a plantear en serio: las clases ilustradas ya eran bastante reticentes a aceptar lo sobrenatural en esta época²³⁹⁰. La duda, según el promotor fiscal, era si García y su mujer habían actuado con malicia o si de verdad creían que su hija había resucitado. El fiscal decidió concederles el beneficio de la duda, pese a algunas contradicciones acerca de sus declaraciones sobre la supuesta muerte, alegando que “estas gentes viven, por lo común, en una crasa ignorancia, de la qual resulta su excesiva credulidad”, y que además los testigos daban fe de que llevaban una conducta “bastante arregladas, y ellos, no [eran] unos vagos, tunantes y mendigos”. Se salvaron con un apercibimiento y la obligación de pagar las costas del juicio, y el dinero fue para el socorro de los pobres²³⁹¹.

En 1920 la Guardia Civil de Gondomar detuvo a Benita Rodríguez y su hija, “que se hacían pasar por adivinatoras realizando con ello algunas estafas”. A una mujer con facultades mentales “algo perturbadas” la convencieron para que “se marchara por el mundo a hacer penitencia”, y les dio en pago una ternera, varias gallinas y vino, maíz y leña²³⁹². En 1925 la Guardia Civil detuvo en Cabanas a Aurora Rodríguez “por dedicarse a explotar la credulidad de las gentes sencillas, haciéndose pasar por adivinadora y espiritista”²³⁹³.

En un par de casos, algunos individuos fingieron fenómenos sobrenaturales para fines diferentes de la estafa, o al menos disputas entre vecinos que fueron interpretadas con un componente mágico. En Ferrol, en 1922, empezó a difundirse el rumor de que la casa número 106 de la calle Concepción Arenal estaba embrujada, algo que sufría especialmente Amalia Santalla, vecina del primero: a las doce de la noche escuchaba un quejido “de una persona como demandando auxilio”, así como otros ruidos, y del techo caía agua, polvo y yeso. Los responsables no eran las “meigas” sino los vecinos del segundo, que empleaban estos trucos (junto con agujeros entre su suelo y el techo de la vecina) para que dejase la casa. La Fiscalía lo estimó un delito de coacciones²³⁹⁴. En 1935 Encarnación Estévez fue detenida en Gondomar por tirar piedras contra el tejado de una convecina “queriendo hacer ver que eran arrojadas por un “duende”” y así conseguir que la víctima abandonase unos terrenos. Su propósito era compartido con otros o hizo gracia a imitadores, porque al mes siguiente hubo nuevas detenciones por el mismo motivo²³⁹⁵.

Pero las persecuciones por estafa suelen referirse a cuestiones médicas y a la prevalencia en Galicia, durante nuestro periodo de estudio, de curanderos que con remedios a veces mágicos, a veces prácticos (cuando se pueden distinguir) se ocupaban de la asistencia sanitaria a la población rural. Dejando aparte otras consideraciones, su existencia responde a principios prácticos. En 1804 Galicia contaba con 67 médicos y 514 cirujanos para más de 1,1 millones de habitantes, mientras que

²³⁸⁹ Según señala Ramón Solans, Los españoles, atemorizados y desconcertados, “buscaron algún símbolo sobrenatural que les reafirmara”, se difundieron noticias de milagros marianos y se hizo una lectura providencial de la guerra, RAMÓN SOLANS, Francisco Javier (2014), p. 103.

²³⁹⁰ También en 1812, ante una epidemia de energúmenos que se consideraban maleficiados en el pueblo de Tosos, en Aragón, la población achacó el origen del mal a una bruja, pero los representantes del gobierno constitucional los consideraban dementes. El obispo tampoco se lo creyó y la justicia episcopal consideró delincuentes a los acusadores. TAUSIET, M. (2015), p. 133, 136.

²³⁹¹ *Causas*, 80, 51.

²³⁹² *FV*, 28-04-1920, p. 2.

²³⁹³ *LV*, 15-03-1925, p. 3.

²³⁹⁴ *LV*, 13-01-1925, p. 3.

²³⁹⁵ *FV*, 10-09-1935, p. 2, 11-09-1935, p. 4, 17-10-1935, p. 4, 22-10-1935, p. 4.

algunos municipios no tuvieron médico residente hasta mediados del siglo XX²³⁹⁶. Contando la dispersión de la población y el coste de la asistencia profesional, había espacio para una amplia demanda de remedios para achaques y enfermedades.

Aquí nos salimos de la propia superstición, ya que entre los curanderos populares había desde invocaciones a los santos y prácticas mágicas a compoñedores que recolocaban huesos y sanadores que empleaban tratamientos sancionados por la tradición, y los casos que encontramos son aquellos en los que los remedios salían desastrosamente mal o algún médico cuyos intereses y formación ideológica iban en contra de estas prácticas los denunciaba. Los casos en los que sus esfuerzos rendían fruto, aunque fuese por efecto placebo, no llegan a la prensa ni a los tribunales.

Sin duda el dinero era importante a la hora de elegir a estos practicantes. En 1929 la labradora de Ordes Carmen García ingresó en un hospital compostelano para ser operada de cáncer de cuello de útero. No llegó a pasar por quirófano, porque un hijo suyo se presentó para decirle que un curandero, Manuel Cachelo, podía curarla sin cirugía. A cambio de tres duros y medio ferrado de habichuelas, “le bendijo la camisa y un paño”. Para cuando la enferma acabó por denunciarlo, meses después, el cáncer ya era incurable, según un doctor²³⁹⁷. El coste económico, sin embargo, no tenía por qué ser el definitorio en todos los casos: Lisón Tolosana resalta que algunos aldeanos gallegos en el siglo XX preferían gastar en curanderos que en la medicina convencional, e incluso preferían los primeros en casos en que era gratuita²³⁹⁸. La confianza en una tradición cultural, o en la propia persona del practicante, es también esencial.

En el siglo XX encontramos un buen número de casos de curanderos detenidos o condenados como timadores o médicos sin licencia, alguna vez con desenlace fatal. A Francisco Álvarez, vecino de Canedo, se rompió una pierna en un accidente de carro y acudió a “cierto famoso curandero” para que se la compusiera; la herida se le infectó y, para cuando llegó al hospital, la amputación no pudo evitar su muerte²³⁹⁹. El vecino del partido de Viveiro Miguel Hermida dio empleo a 1930, en una obra de su propiedad, a un obrero de 29 años que se fracturó una pierna en un accidente. El patrón lo dejó a cargo de un curandero local, pero este no se dio mucha maña para curarlo: al cabo de 15 días el herido tuvo que ser trasladado al hospital y murió. El patrón y el improvisado médico acabaron detenidos²⁴⁰⁰.

En algunos casos parece claro que hay un afán de estafar y engañar, y ninguna buena voluntad por parte del curandero. En 1930 año una sanadora coruñesa prometió curar a un niño de Fene. En repetidas visitas le sacó a la familia 50 pesetas y 13 gallinas, pero finalmente las convenció de que el mal se agravaría y pasaría a otras tres mujeres de la familia, a menos que confiasen en un remedio que les daría a cambio de 275 pesetas y de que no hablasen de él con nadie, “pues de no ser así la cura no surtiría efecto”. Como tras probar su medicina una de las mujeres cayó “gravemente enferma” se decidieron a denunciarla. Fue encarcelada²⁴⁰¹.

Al igual que en otros delitos, había pequeñas campañas por parte de las autoridades y los medios tras un caso famoso. En 1935 el alcalde de Enfesta llevó a casa de su hermana, donde la gripe se había llevado a dos de sus sobrinos y mantenía enfermo a otro y a su cuñado, a varios curanderos.

²³⁹⁶ Los datos médicos proceden de J. L. Labrada (1804): Descripción económica del Reyno de Galicia, Ferrol, apéndice 1º, Estado secular, pp. 208-209, citado en LISÓN TOLOSANA, C. (1987), p. 88. El mismo autor señala que en Pedrafita do Cebreiro llegó el primer médico residente en 1947.

²³⁹⁷ LV, 04-02-1930, p. 2.

²³⁹⁸ LISÓN TOLOSANA, C. (1987), pp. 91-92.

²³⁹⁹ La Región, 03-03-1925, p. 1.

²⁴⁰⁰ EP, 21-05-1930, p. 3.

²⁴⁰¹ LV, 08-05-1930, p. 2, 09-05-1930, p. 2.

Uno le hizo unas friegas con alcohol en los brazos al marido. El niño acabó muriendo, y, cuando trascendieron las muertes, se detuvo a los cuatro curanderos para aclarar si las muertes tenían que ver con algún remedio que les hubiesen dado, un tipo de prácticas la prensa definía como basadas “en la más estúpida superstición”. Fueron sometidos a sumario por ejercicio ilegal de la medicina. En la pequeña caza de brujas cayó también una curandera compostelana, la “Paxareira”, que estaba “especializada en cuestiones de manciñeira” y le dio hierbas cocidas a una mujer para curarle la pierna. Poco después la sección compostelana de *La Voz de Galicia* recogía el caso de un campesino que llegó a la ciudad intentando averiguar el nombre de un muerto que había salido de esta en enero, pues una curandera a la que había pagado “más de unos cincuenta duros” le había dicho que la sombra del difunto le había provocado una enfermedad a su madre²⁴⁰².

Los médicos titulados tenían sus propios intereses en perseguir a los curanderos. Manuel López Vizcaíno, alias “médico de Loureiro” cumplió una condena por ejercicio ilegal de la medicina, y al poco de salir, en febrero de 1930 fue denunciado por lo mismo²⁴⁰³. En diciembre de ese año el subdelegado de Medicina le abrió expediente, en el marco de una campaña del Colegio Médico contra el intrusismo²⁴⁰⁴.

Algunos de los curanderos aplicaban como remedios hechizos y encantamientos. Rosa Díaz y José Meizoso, madre e hijo y de 73 y 40 años respectivamente, fueron detenidos por estafar 1.100 pesetas y pedir otras 1.000 a un “perturbado” a cambio de curarlo de su enfermedad (el hecho fue denunciado por su padre). En la requisa realizada en su casa, además del dinero, se encontraron dos barajas y un libro de San Cipriano²⁴⁰⁵. En otros casos hablamos de individuos que apelaban a conocimientos de medicina. Es el caso de Manuela Díaz Piñeiro, una vecina de Melide denunciada por curandera por un cirujano y un médico de la villa y arrestada por aplicar remedios sin tener los conocimientos suficientes “en grave daño de la salud pública” y causando la muerte de una mujer a la que aplicó una sangría (muerte que, al parecer, presenciaron algunos soldados del batallón literario). La justicia de primera instancia falló contra ella en 1807 y de nuevo en 1811, condenándola a ser apartada del ejercicio de la cirugía y a pagar cincuenta ducados. También inició una investigación por la muerte (que no sabemos cómo siguió).

Según expuso la mujer, su padre, Vicente Díaz, era cirujano, y ella, por “ya por la Instrucción y alguna practica que tubo con el y sus observaciones, ya por su propension natural”, sabía hacer cataplasmas y emplastos con hierbas con las que “ha socorrido y valido a muchos Pobres y aun pudientes de dicha Villa y sus inmediaciones”. En la lucha contra los franceses le había extraído a un soldado una bala de la espalda, y a otro de un brazo, y a un tercero le restañó la sangre, “pues le habian cortado las venas de un sablazo”. El propio comandante de la tropa le había querido dar una recompensa, que patrióticamente no aceptó. También realizaba sangrías, “haviendo merecido en esto y aun en otros remedios la aprovacion de Medicos afamados”. La condena, según su declaración, venía por la animadversión del boticario y el cirujano de la villa, puesto que la llamaban muchos y “por medio de las hierbas evita mayores gastos de Medicinas no pidiendo nada por su trabajo”. Quizás sea un poco inocente creer que no cobraba absolutamente nada (pues sabemos que su marido llevaba años desaparecido, y no se menciona cómo se mantenía), pero esta versión la ratificaron con sus firmas más de una veintena de vecinos; por lo menos, debemos suponer que en Melide valoraban su trabajo. La audiencia no estimó su recurso²⁴⁰⁶.

²⁴⁰² LV, 26-04-1935, p. 8, 27-04-1935, p. 8, 01-05-1935, p. 8.

²⁴⁰³ EP, 20-02-1930, p. 2.

²⁴⁰⁴ EP, 26-12-1930, p. 1.

²⁴⁰⁵ LV, 03-05-1935, p. 5.

²⁴⁰⁶ Causas, 72, 35.

La creencia más o menos extensa en prácticas de medicina alternativa no implican que podamos hablar de una mentalidad generalizada anti científica o anti racional radicalmente diferente a la actual. Más bien de estratos de población que recurrían al pensamiento mágico o a las supersticiones para calmar sus ansiedades o buscar remedio a problemas que no podían afrontar, e individuos que los promovían por creer firmemente en ellos, por afán de lucro o por ambas. En los ambientes ilustrados también encontramos prácticas inútiles o perniciosas, aunque quizás presentadas con una pátina de racionalidad. López de la Vega defendía en la revista *Galicia*, en 1862, las virtudes de la homeopatía, afirmando que podía curarse una enfermedad tomando un medicamento que produjese efectos mórbidos semejantes a esta, diluyéndolo en agua y suministrándoselo al paciente.²⁴⁰⁷ La misma argumentación, rechazada una y otra vez por la comunidad científica, sigue encontrando millones de clientes y siglo y medio después. Un artículo de *La Región* de 1925 daba por buena la existencia de la telepatía²⁴⁰⁸.

“En Fene un fantasma tiene aterrizado al vecindario” titulaba *La Voz* en febrero de 1930, explicando que una figura “alta, gigantesca” envuelta en un manto blanco y con el rostro cubierto con un paño negro con una cruz se aparecía por noches y madrugadas; el diario especulaba que podría pertenecer a una cuadrilla de maleantes. “No es cierto lo del fantasma” respondía dos días más tarde el correspondal en Fene, cansado de que varios diarios hubiesen difundido el rumor de un espíritu en el vecindario “debiéndose sin duda ese infundio a la mala fe y desaprensión de alguien que pretende con tales patrañas sembrar el pánico en personas ignorantes”²⁴⁰⁹.

Al mismo tiempo, había una cierta distancia con respecto a las supersticiones populares. En Moeche ocurrió un caso de espiritismo en 1925 que fue portada de *La Voz de Galicia*. Una joven campesina, que llevaba largo tiempo encamada, empezó el 12 de enero a decir que era un sacerdote de Ortigueira fallecido que, “con permiso divina”, había ido a ocupar el cuerpo para expiar ciertas culpas. La enferma realizaba “piadosas pláticas” desde su cama y, cuando el caso se difundió y empezó a llegar gente de la zona y de otras partes de Galicia “en verdaderas peregrinaciones”, también desde el balcón. Desde A Coruña partió un coche con dos redactores de *La Voz*, un médico forense, dos teósofos y un “joven amigo nuestro”, que la interrogaron e hipnotizaron. Llegaron a la conclusión, siguiendo las teorías de Freud sobre el inconsciente, que este en concreto era un caso de histerismo. Sin embargo, afirmaron que creían en ella “aldeanos y gentes crédulas” y que “los primeros adictos” eran los propios familiares de la enferma²⁴¹⁰. En Sobrado, en 1925, una ternera que llevaba enferma varios días vomitó una lurpia, descrita como “exactamente igual a un tentáculo de pulpo, a excepción de que tenía cuatro extremidades, cuatro de cada lado”, y de unos cuarenta centímetros de largo. Los paisanos, que lo consideraban un tipo de “diablillo” según el correspondal de *La Voz*, lo quemaron inmediatamente. El diario no le dio credibilidad a que fuese nada sobrenatural²⁴¹¹.

En cuanto a la violencia causada por las creencias en brujería, las referencias son muy escasas. El caso más famoso es el de Manuel Blanco Romasanta, el asesino en serie relacionado con la leyenda del hombre lobo. Fuera de eso, no hemos encontrado casos de muertes²⁴¹². En 1822 Aniceta Patiño

²⁴⁰⁷ LÓPEZ DE LA VEGA, J. (1862), p. 360.

²⁴⁰⁸ *La Región*, 24-04-1925, p. 1.

²⁴⁰⁹ *La Voz de Galicia*, 12-02-1930, p. 2, 14-02-1930, p. 2.

²⁴¹⁰ *LV* 03-02-1925, pp. 1-2.

²⁴¹¹ *LV* 15-01-1925, p. 1.

²⁴¹² El 6 de febrero de 1935, una joven repartidora de Redondela desapareció. Al día siguiente llegó a Vigo en tren y acudió a una casa de la calle García Hernández en la que, a cargo de una tal Rosa Morera, “se daban unas raras sesiones de espiritismo, a las que solían concurrir mujeres que iban a saber su presente y su porvenir; se cree que también había algo de cartomancia”. La visitante falleció en la casa en “extrañas circunstancias”, pero por la descripción de los hechos no parece haber tenido nada que ver con la labor de la

fue condenada por la justicia de Betanzos a ocho años de destierro tras maltratar a otra mujer, Teresa Vázquez, “bajo el pretexto de que era Bruja”, a lo que debemos suponer que se trató de algún ritual que terminó en lesiones. Un escrito, presentado para lograr la exculpación de algunas cómplices, señala que a Patiño, “llamada Sabia”, ya se le había formado una causa “por igual motivo, lejos de haberse corregido, continua abusando de la Sencillez y Candor de aquellos Rusticos labradores”. Lamentablemente, esta causa conserva muy pocos documentos, y ninguna descripción de los hechos²⁴¹³.

En algún caso poco claro puede que se produjesen actos de violencia justificados por las palabras de videntes. Es el caso de un hombre, cuyo nombre no menciona la prensa, que ahogó a su esposa en un pequeño río de la provincia de Ourense y luego se suicidó. Según el periodista, estaba obsesionado con las palabras de una echadora de cartas que le decían que tenía mal de ojo por su mujer²⁴¹⁴. En Froilán de Vigo y su hijo Ramón, que acusaron a un grupo de cinco hombres de entrar en su casa y repartirles bofetadas mientras les reclamaban el dinero que le habían robado a uno de ellos, Domingo da Riva. Según la versión de los denunciantes, después de advertir el robo, Domingo había acudido a una sabia o agorera en Lugo y este le indicó que el ladrón era Ramón de Vigo. La causa fue sobreseída porque ninguno de los detenidos declaró saber nada de ella²⁴¹⁵.

Los casos de sacrificio humano en España anecdóticos, aunque existen. Hubo uno en Canarias en 1930, relacionado en prensa con el espiritismo (aunque los espiritistas se quejaron y dijeron que aquello no tenía nada que ver con sus creencias)²⁴¹⁶. No hemos visto ninguno en Galicia, aunque sí acusaciones de matar a personas para aprovechar sus restos con fines médicos; lo cual, en puridad, no es algo sobrenatural, pero como tiene parecidos con las persecuciones a brujas por emplear grasa humana, y posiblemente estos casos compartan la apelación a semejantes ansiedades y miedos subconscientes, lo incluimos en este capítulo.

En Viveiro, en 1835, circuló oralmente y en un pasquín el rumor de que un boticario local, don Joaquín de Ávila, aprovechaba las grasas de hombres asesinados para hacer medicinas. Según el escrito de denuncia de este, se decía por toda la villa “y aun todo el Partido sin que sea aventurarme el decir que toda la Provincia” que en su establecimiento “se matan hombres y mujeres impugnemente” y el temor hacía que los labradores que iban a vender a la villa hiciesen negocio en los zaguanes, para que no los asesinasen si entraban en una casa. Apuntaba como origen de las calumnias a un tal José Pérez, matriculado de Marina, que al parecer decía que su hijo homónimo había perdido la voz después de ser atacado por Ávila (los Pérez, por su parte, no refrendaron esta versión ante la justicia). El corregidor de Viveiro sobreseyó la denuncia sin poder probar la culpabilidad de nadie.

Hasta ahora tenemos una murmuración como cualquier otra, el tipo de rumor que podemos atribuir a la superstición e ignorancia o a la malicia vecinal. Pero volvamos a la denuncia de Ávila. Las historias de sacramantecas eran “sandeces” que “parecen efectos de la barbaridad”, pero “puede tal vez que lleben envuelta en sí alguna mira política, por que dicen que el que los mata es un hombre d bigote y perilla e yo como Urbano Boluntario uso de ese distintivo”. Quizás de manera más importante, entre las voces que se daban se incluía la de que y que el Gobierno permitía a cada boticario “el matar, hasta cuatro [personas] cada año”. Más importante, el fiscal lo interpretó de la misma manera: “en esta causa se presentan dos hechos correlativos: 1º, unas voces absurdas sí,

pitonisa: la joven falleció de un ataque fulminante mientras esperaba turno. EP 09-02-1935, p. 3, FV, 08-02-1935, p. 5, 09-02-1935, p. 5.

²⁴¹³ *Causas*, 212, 31.

²⁴¹⁴ FV 29-01-1935 (4)

²⁴¹⁵ *Causas*, 710, 12.

²⁴¹⁶ LV, 01-05-1930, p. 1, 27-06-1930, p. 5.

pero malignas y visiblemente enemistosas contra un oficial de Urbanos; 2º, un pasquín injurioso al mismo, y al propio tiempo subversivo”²⁴¹⁷. Interpretando que las contradicciones de José Pérez hijo sobre si sabía o no firmar “parecen encubrir un fin malicioso”, y a que “el Promotor Fiscal pareció sospechar de la reserva y cautela” de los Pérez, dejó sin efecto el sobreseimiento y devolvió la causa al corregidor para que “amplie el procedimiento con el debido celo legal”²⁴¹⁸.

De cualquier modo, la antropofagia médica siguió pululando por la mentalidad española durante otro siglo, aunque no tengamos constancia de que se practicara en Galicia. En 1920, el doctor A. Muñoz publicaba en *El Progreso* un artículo para dejar claro que “la sangre de niño no cura nada” ante los asesinatos que se cometían “con dolorosa frecuencia” en el país para usar la hemoglobina infantil como remedio contra la tisis y otras enfermedades²⁴¹⁹.

Fuera de los delitos contra la persona, un vecino de la parroquia de Ribarteme, en el municipio pontevedrés de As Neves, denunció en 1935 que habían violado la tumba de una hermana suya, violando los restos y quemándolos. De la investigación salió que una tal Remedios González, “que es muy supersticiosa, encargó a un chico, que actúa como sacristán, le llevara unos huesos humanos, para quemarlos, con el fin de que las cenizas sirvieran de remedio al mal de “aire de los muertos”, que dice sufre una hija suya”²⁴²⁰.

Las creencias religiosas de los gallegos y las previsiones de la autoridad, por otra parte, no bastaron para impedir los robos en iglesias y lugares de culto, que se sucedían con frecuencia en iglesias, e incluso en la propia Catedral de Santiago²⁴²¹. Escribe un fiscal (sin firma) en 1852, atendiendo a la petición de indulto de un platero que receiptó objetos sagrados: “las mas de las Iglesias de Galicia han sido robadas impiamente y despojadas de sus Alhajas, ropa y utensilios, hasta el Estremo de arrebatarse en algunas las campanas y candeleros de metal, y seria de muy mal egemplo indultar los Delitos de esta clase, ya por ser repugnantes en sí, yá también por el escándalo que causan”²⁴²².

No bastaba la especial protección legal: otro fiscal escribe en 1845: “El ladrón que roba alajas y vasos sagrados de una Iglesia, ataca la propiedad ajena y profana lo mas respetable de la tierra que es la casa de Dios”²⁴²³. En teoría, afrontaba incluso la pena de muerte, aunque en la práctica no llega a aplicarse. A este respecto había, sin duda, diversas sensibilidades dependiendo de la moral particular. Así, por ejemplo, en el motín de Sargadelos se profanó la capilla de la fábrica, pero una mujer recogió el cáliz y se lo entregó al cura de Cervo²⁴²⁴.

Acabaremos el capítulo con los padres castradores de Ribas de Sil (Lugo).

La por entonces justicia de San Clodio de Rivas de Sil entendió en 1831 de unos crímenes que el propio fiscal real calificó de “de gravedad y bastante raros a la verdad”. Un tal Vicente Zamud fue condenado a ocho años al servicio de las armas por haber atacado a otro hombre. Sin embargo, un reconocimiento médico mostró que era inútil para el servicio, por estar castrado desde su infancia; al parecer, en “en su país había un capador que ejecutaba tales operaciones satisfaciéndole la cantidad de ciento y tantos reales”. En un primer momento se habló de que en el lugar “había más

²⁴¹⁷ *Causas*, 922, 17.

²⁴¹⁸ *Causas*, 922, 11. Se condenó a Pérez padre a pagar una multa de diez escudos y se embargaron sus propiedades, aunque parece que apelando consiguió un nuevo sobreseimiento.

²⁴¹⁹ *EP*, 30-09-1920.

²⁴²⁰ *FV*, 14-02-1935, p. 2.

²⁴²¹ *La Gaceta de Galicia*, 20-09-1886, 24-11-1884.

²⁴²² *Causas*, 1724, 16. Informe del fiscal sobre el indulto de José Leiva, último folio del primer legajo.

²⁴²³ *Causas*, 1877, 5, folio 36B.

²⁴²⁴ GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. (1994), p. 71.

de sesenta mozos capados”, y la cifra era seguramente exagerada, pero la investigación encontró a cinco varones de la zona de entre 16 y 60 años a los que se les había extraído un testículo, siempre el derecho.

Se estableció que había un castrador (aunque nadie dijo su nombre, y, al menos en un caso, la castración la había realizado la madre o abuela del muchacho). Más fácil fue identificar a los padres, que al parecer no habían procedido con malicia, para curar a sus hijos de “roturas de las yngles”. Se siguió causa contra cinco, y, aunque fueron inicialmente condenados, en segunda instancia consiguieron la “libre absolución”. La sentencia, eso sí, les encomendó que en adelante, si detectaban lesiones de igual naturaleza en sus hijos, “procedan con el dictamen de facultativos”, y a la Justicia que “procure celar cuanto le sea posible evitar iguales procedimientos”²⁴²⁵.

Este no es propiamente un crimen relacionado con la superstición. Al contrario que en el caso de la secta de los *skoptsky*, que mutilaba los órganos sexuales de sus adeptos en los países eslavos en el siglo XIX por motivos religiosos²⁴²⁶, en este caso no parece haber ninguna justificación sobrenatural al fenómeno; los padres pensaban, por muy estúpido que pareciese a los ojos de los contemporáneos y los nuestros, que estaban realizando un tratamiento profiláctico. No creemos que fuese “tradicional”, en el sentido de que llevase tiempo inmemorial practicándose (los propios padres que promovieron las castraciones parecen tener los genitales intactos, o al menos no se hace referencia a lo contrario), y tampoco parece muy extendida. Estamos, como en el caso de Thompson en lo relativo a la venta de mujeres en Inglaterra, ante un caso del inicio de una práctica, aunque en este caso abortada y que no llegó a extenderse.

²⁴²⁵ *Causas*, 746, 7.

²⁴²⁶ FRANK, S. P. (1999), pp. 184-186.

12. LOS DELITOS CONTRA EL ESTADO: CONTRABANDO Y EVASIÓN DEL SERVICIO MILITAR

12.1 Fraude fiscal, contrabando y delitos contra el erario público

Antes de comenzar este apartado, una aclaración terminológica. El sustantivo contrabando comprende actualmente tanto la “introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente” como el “comercio de mercancías prohibidas por las leyes a los particulares”, de acuerdo con las acepciones que la RAE acepta para la palabra. Históricamente, su uso se restringió al segundo de los supuestos mencionados²⁴²⁷. A la evasión de derechos de aduana sería más correcto llamarla fraude fiscal, pero tiene el inconveniente de que en la actualidad esta expresión se emplea, más habitualmente, para referirse a otros tipos de evasión de impuestos. De cualquier manera tiene poco sentido ser puntillosos; ya en el XIX vemos contaminación terminológica y ya se llamaba contrabando a las dos actividades. Como designación global sería preferible el término “tráfico ilícito”, pero es poco popular.

Como veíamos en el apartado 3.6, dedicado a los carabineros, los delitos contra la Hacienda fueron un punto en el que el poder público resultaba especialmente sensible, hasta el punto de que las escasas fuerzas policiales de finales del Antiguo Régimen se dedicaban sobre todo a luchar contra el contrabando. Esto se debía, seguramente, a que el delito erosionaba directamente los ingresos del Estado, sobre todo dado que a partir de 1739 la monarquía hispánica optó por gestionar directamente las aduanas, prescindiendo de arrendatarios²⁴²⁸.

Es imposible obtener datos del volumen de tráfico ilícito en Galicia, pero este debía ser ya importante en la Edad Moderna. A finales del siglo XVIII, Pedro Martín Cermeño, capitán general de Galicia, avisaba de los riesgos de las costas gallegas, “dilatadas y muy favorecidas de muy pequeños abrigos, despobladas de vecinos, con los terrenos vastante fragosos, circunstancias que convidan a la facultad del contravando”, y de una situación similar en la frontera con Portugal, donde transitaba desde “siempre” el ganado vacuno²⁴²⁹ y algo de “tavaco Brasil” (de hoja). Perseguirlo resultaba difícil para las justicias locales por la dispersión de la población²⁴³⁰. En 1821 el Ministro de Gracia y Justicia ordenaba al Intendente de Galicia tomar medidas para “evitar el escandaloso contrabando” en las

²⁴²⁷ Melón Jiménez señala que, etimológicamente y en la Edad Moderna, el tráfico de mercancías prohibidas sería contrabando, mientras que las otras actividades descritas encajarían dentro del fraude fiscal. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), p. 53-55.

²⁴²⁸ Anteriormente se habían probado los dos sistemas. Sobre la reforma de la administración aduanera ese año, MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (1999), p. 75.

²⁴²⁹ El contrabando de ganado lo liga García Maña a la apertura del mercado británico a los portugueses en la década de 1840, si bien, entendemos, supondría un auge de una práctica más antigua. GARCÍA MAÑA, L. M. (1988), pp. 82-83, 164.

²⁴³⁰ “Es materia imposible en Galicia, y la razón es porque la población no está reunida a pueblos, y sí en feligresías que tienen de extensión una o dos leguas, y los vecinos como sembrados, y por consiguiente la justicia y cura suelen estar unos de otros a la distancia de un cuarto de legua, y cada vecino de por sí”. MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2009), p. 163-164.

costas gallegas, ordenándole que promoviese el establecimiento de buques guardacostas y mandando a los jueces de primera instancia que “activen las causas de contrabando que están pendientes”. También permitió a un particular armar una goleta para perseguir al contrabando, con soldados del resguardo militar.

Para estudiar cuantitativamente el contrabando en Galicia no podemos recurrir directamente a las estadísticas criminales ordinarias, puesto que Hacienda disponía de una jurisdicción especial que provenía del Antiguo Régimen. Empezó a ser dismantelada en 1852, cuando se suprimieron los juzgados particulares que existían en cada Subdelegación de Rentas y se traspasaron sus competencias en materia judicial a los juzgados de Primera Instancia de las capitales de provincia, con algunas disposiciones especiales. Pervivieron tribunales propios que al parecer veían sobre todo negocios civiles. El decreto de unidad de fueros del 6 de diciembre de 1868 acaba definitivamente con ella, y las diversas modalidades de fraude fiscal que antes veía el fuero especial pasan a castigarse gubernativamente o por la justicia ordinaria²⁴³¹. A partir de entonces pasó a la legislación penal, que optó sobre todo por las sanciones pecuniarias. El CP de 1870 recogió el castigo para todo tipo de fraude fiscal en su artículo 331 (que conllevaba una multa, no penas de cárcel) y posteriormente la ley del 3 de septiembre de 1904, que ya distinguía entre contrabando y defraudación, estableció en detalle la legislación sobre estos delitos y otros relacionados²⁴³².

Como herramienta de análisis cuantitativo anterior a la unificación de fueros contamos con el *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda: contrabando y rentas. Años 1820-1862*, elaborado en 1968 por el personal del Archivo del Reino de Galicia y que incluye las causas que se conservaron hasta esa fecha en el centro documental. Incluye, como veremos, un heterogéneo conjunto de datos, desde delitos contra la Hacienda pública a faltas administrativas o crímenes cometidos contra los trabajadores de este departamento.

Bien debido a que no sean las causas en sí mismas sino resúmenes que se enviaban desde la jurisdicción de Hacienda a la ordinaria, bien porque se traspapelaron fragmentos de los casos o por la escasa importancia de la mayoría de estos, lo cierto es que en los legajos que se conservan faltan documentos internos del proceso. En varios casos, por ejemplo, encontramos comunicaciones señalando que se han realizado interrogatorios a tal o cual testigo, pero no las declaraciones en sí. En otros, solo documentación correspondiente al pago de costas, y no la sentencia original²⁴³³. No son una fuente tan rica como las causas criminales de jurisdicción ordinaria.

Son, en total, 2.570 asuntos²⁴³⁴, y cubren las cuatro provincias. En la práctica, su alcance es inferior, ya que apenas se recogen, apenas hay datos antes de 1839 y después de 1860²⁴³⁵. Incluso dentro de este ámbito, hay carencias llamativas: apenas hay datos para Ourense en 1839 y 1840, o para Pontevedra a partir de 1857. La gran mayoría de estos dos millares y medio de causas, el 90,3%, se refieren a diversas modalidades de tráfico ilícito. Casi siempre se trata de productos de la vida

²⁴³¹ En lo relativo a Galicia, se permitió al juez de Primera Instancia del partido de Vigo conocer de los delitos de contrabando y defraudación, seguramente en atención a la importancia del puerto. LORENZO JIMÉNEZ, J. V. (2011), pp. 6-7, 20, 25-26.

²⁴³² BAZA DE LA FUENTE, M. L. (1997), pp. 16-26.

²⁴³³ Para un caso claro vease *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2363, nº 2.

²⁴³⁴ Para simplificar la recogida, hemos suprimido un pequeño número de Causas de la Jurisdicción de Hacienda que aparecen repetidas en el índice, quizás debido a errores de transcripción. También alguna que, en las catas, hemos encontrado que estaba mal clasificada; una causa criminal por “expresiones subversivas en el acto de las elecciones de oficiales de la Milicia Nacional” se clasificó como procedente de Hacienda, cuando pertenece a la jurisdicción ordinaria. *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2363, nº 10.

²⁴³⁵ En concreto, solo hay 18 Causas de la Jurisdicción de Hacienda anteriores a 1839, y 10 para los años 1861 y 1862.

cotidiana sometidos a tasas o que precisaban de guías para su transporte. En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de los casos:

Tabla 12.1.1 Causas en los tribunales de Hacienda de Galicia para los años 1820-1862, según el tipo de delito y las mercancías implicadas

Tipo de hecho			
Causas por tráfico ilícito, según el producto		Porcentaje dentro de su categoría	Porcentaje en relación al total de causas
Tabaco	98	4,39	3,96
Alimentos	64	2,87	2,59
Telas, cueros y ropas	102	4,57	4,13
Sal	1.379	61,76	55,78
Ganado mayor y menor	61	2,73	2,47
Alcohol	51	2,28	2,06
Varias de las categorías anteriores	51	2,28	2,06
Causas por tráfico ilícito en los que no se especifica el producto	427	19,12	17,27
Suma de causas por tráfico ilícito	2.233	100	90,33
Otros			
Heridas y muertes	20	8,37	0,81
Falsificaciones	11	4,6	0,44
Otros	208	87,03	8,41
Suma de causas diferentes al tráfico ilícito	239	100	9,67

Fuente: *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda*

Dentro de los delitos directamente referidos al tráfico ilícito, tenemos a numerosos detenidos en causas en las que no se menciona la naturaleza de las mercancías: individuos a los que se aprehendieron bienes de tráfico prohibido, o permitidos pero con los que traficaban cometiendo fraude fiscal o que circulaban sin guía dentro del territorio, junto con causas abiertas a sospechosos de contrabando e investigaciones por productos sospechosos confiscados sin que se conozca el reo. En aproximadamente el 18,6% de los casos sabemos que se persiguió a una persona o a varias por contrabando o que se aprehendió una carga prohibida, pero el Índice no nos especifica su naturaleza: encontramos expresiones como “géneros”, “géneros de contrabando”, etcétera. Creemos que en un porcentaje de estos casos se trata de telas²⁴³⁶, pero debido al elevado volumen de casos no hemos acometido una revisión en detalle.

Por lo demás, la sal es la reina de las mercancías que llevaron a sus poseedores a los tribunales de Hacienda²⁴³⁷. Seis de cada diez causas por tráfico ilícito se refieren a este bien, que estaba sometido a estanco durante el periodo en el que se realizó esta muestra. Si nos limitamos a las causas en las que se especifica la mercancía aprehendida, nos acercamos a cuatro de cada cinco. Sin embargo, hay que recordar que esto no rige durante todo nuestro periodo de estudio; a partir del 1 de enero de 1870 el comercio y distribución del compuesto fueron libres, con lo que desapareció este delito fiscal.

²⁴³⁶ Ya que hemos encontrado en otras anotaciones expresiones como “géneros de algodón”.

²⁴³⁷ En los casos estudiados por Iglesias Estepa para el partido de Santiago, las mercancías más comunes de contrabando son tabaco y telas. IGLESIAS ESTEPA, R. (2007), p. 203.

Los demás productos son muy minoritarios en comparación: telas, cueros y ropas (4,4%), tabaco (4,3%), ganado (2,7%), alcohol (2,2%). En el tabaco encontramos aprehensión, pero también, por su naturaleza, algún caso que apunta a su cultivo ilícito. Así, al labrador Manuel Rodríguez, de O Carballiño, los carabineros le extrajeron de su huerta “cuarenta y una plantas de tabaco”, por las que, además del decomiso, le correspondió una multa “por su triple valor”²⁴³⁸. En otro 2,2% se combinan mercancías de varias categorías.

Un 2,8% de las causas se refieren a tráfico ilícito de objetos no comprendidos en las categorías anteriores. Siempre hay algunos casos exóticos: dos docenas de piezas de marfil²⁴³⁹, o la captura de libros²⁴⁴⁰, libros y sanguijuelas²⁴⁴¹, treinta y dos ejes para carro²⁴⁴², una remesa de paraguas²⁴⁴³ u ochenta y cuatro tinteros²⁴⁴⁴. Otras mercancías se reiteran, como la loza extranjera o los artículos metálicos procedentes de Portugal.

En varios casos hemos visto a individuos detenidos nitro y azufre²⁴⁴⁵, o pólvora, que era una renta estancada y para cuyo transporte, al igual que en la actualidad, era necesaria guía. Detengámonos en ella por la relevancia que tiene esta mercancía en el estudio de la violencia. Hemos encontrado algunos libros relativos a la renta de la pólvora procedentes de los fondos de la Aduana de Betanzos²⁴⁴⁶, en las que se llevaba la cuenta del número de libras recibidas en el almacén de la villa y su calidad²⁴⁴⁷. No era una mercancía menor: en 1862-1863 se vendieron en la villa 1,2 toneladas²⁴⁴⁸.

Según figura en los registros de entradas, la pólvora que se vendía en Betanzos provenía siempre de transportes con guías de la “Administración provincial”, de lo que deducimos que existía un almacén central probablemente situado en A Coruña. En el libro de 1862-1864 se conserva un ejemplo de estas guías. El administrador principal de Hacienda pública en la provincia de A Coruña en 1856 da permiso al “contratista de conducciones” para transportar 120 kilogramos de pólvora de mina y 50 de caza a Betanzos. El contratista tenía cinco días para elaborar el transporte, durante los cuales los empleados de Hacienda “no le pondrán embarazo alguno en su conducción, antes bien le darán paso”; pero, pasa esa fecha, “podrán decomisarse los efectos que contiene”. Finalizado el transporte se guardaba en un almacén, y de este salían a los comercios registrados. El único cliente del almacén de pólvora de la administración de rentas en Betanzos en 1855 es el “Estanquero dela Madalena”, que recibió ese año 1.050 libras de “sello negro”, 125 del “encarnado” y 300 de minas.

Este sistema, en teoría rígidamente controlado y reforzado por disposiciones legales que ordenan registrar las ventas de municiones y regulan su trato y transporte, reflejan el interés constante de la administración por controlar los explosivos y municiones desde un momento muy temprano. Al mismo tiempo, como vemos en otros apartados, las armas ilegales se empleaban con profusión, y su demanda excedía las capacidades del Estado para controlarlas. Así pues, ¿cómo es que no

²⁴³⁸ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2355, nº 5.

²⁴³⁹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2295, nº 30.

²⁴⁴⁰ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2296, nº 16.

²⁴⁴¹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2364, nº 30.

²⁴⁴² *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2376, nº 4.

²⁴⁴³ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2305, nº 21.

²⁴⁴⁴ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2345, nº 29.

²⁴⁴⁵ Por ejemplo, *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2320, nº 37, legajo 2360, nº 98

²⁴⁴⁶ *Diario de Entradas y Salidas del Almacén de la renta de la pólvora...* (1848, 1855, 1862-1864).

²⁴⁴⁷ De minas, superior, fina de caza, encarnada, azul, verde... Las categorías fueron variando. A mediados de siglo las municiones de venta permitida al público se denominan en la documentación, en ocasiones, como “pólvoras libres”; es de suponer que existían calidades reservadas para su uso militar.

²⁴⁴⁸ 150 kilogramos de la calidad denominada superior, 250 de la llamada fina o de caza y 800 kg de pólvora para minas.

encontramos más casos de tráfico ilegal de municiones? En nuestra opinión, esto responde a la facilidad y coste asumible de la munición en el territorio español. Si cualquier individuo podía conseguir una licencia, ir a una armería y comprar municiones de manera barata, y luego repartirlas o revenderlas a sus conocidos que no dispusiesen de licencia, no había incentivo económico para importar ilegalmente pólvora del extranjero. Como, por otra parte, no había posibilidad de rastrear con técnicas forenses el origen de las balas empleadas ni las armas con las que se habían utilizado, los delincuentes tampoco tenían necesidad de importar munición exótica.

Por último, la pólvora en sí misma probablemente dejó de ser un objeto común de tráfico cuando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se popularizaron las armas de retrocarga; para emplearlas, los usuarios necesitaban municiones ya montadas.

No todas las infracciones se producían en puertos y fronteras. Una parte tienen que ver con el transporte de productos dentro del territorio nacional pero sin las guías correspondientes, o con la reventa ilegal de bienes. En el caso de contrabando, el material no pasaba solo por las manos de los contrabandistas que cruzaban la frontera, sino por las de aquellos que los compraban para reventa o para consumirla, sus colaboradores y familiares. Por ejemplo, una de las innumerables causas seguidas en Ourense por la aprehensión de sal de contrabando (proveniente con seguridad de Portugal) señala que las dos arrobas encontrada por los carabineros se encontraron “en un orrio de Franfisca Dorado vecina de Cubelina de Ramanes Alcaldia de Vellamea Partido de Celanova”. La mujer, una labradora viuda de 35 años, dijo que la sal no era suya y el tribunal lo aceptó en parte, imponiéndole solo las costas²⁴⁴⁹.

También tenemos casos en los que los acusados violaron fronteras internas, para evadir el pago de Consumos. Al vecino de Lugo José Martinote una ronda de dependientes del Resguardo municipal le encontró en su casa en 1846 algo más de 16 arrobas “de las cuales no había dado parte al fielato”. Después de ser sentenciado a la pérdida del material y el pago del proceso, el hombre se preocupó de señalar en su petición de indulto que se le había decomisado el material “no por que fuese de contrabando sino porque se descargó de las Acemilas sin anuencia del Fielato”²⁴⁵⁰.

Pero también se sustanciaron al menos 239 causas por motivos diferentes a los tráficos ilícitos. Entre ellas se encuentran atentados contra el patrimonio público, crímenes cometidos por o contra los carabineros o abusos en el cobro de impuestos. También disputas de competencias entre administraciones, y algún caso de difícil clasificación. En 1857 el celador de policía Camilo Crisanto se ahogó cuando cruzaba en barca el río Sil, a la altura de Pumares, cuando se dirigía a este pueblo y a Sobrado “donde en las pasadas funciones de Carnabal, se había alterado el orden”. Se ahogó, fortuitamente según se pudo sacar del testimonio de los barqueros, pero la administración de Rentas siguió una causa por el posible hurto de “varios documentos”, nunca nombrados, que llevaba encima²⁴⁵¹.

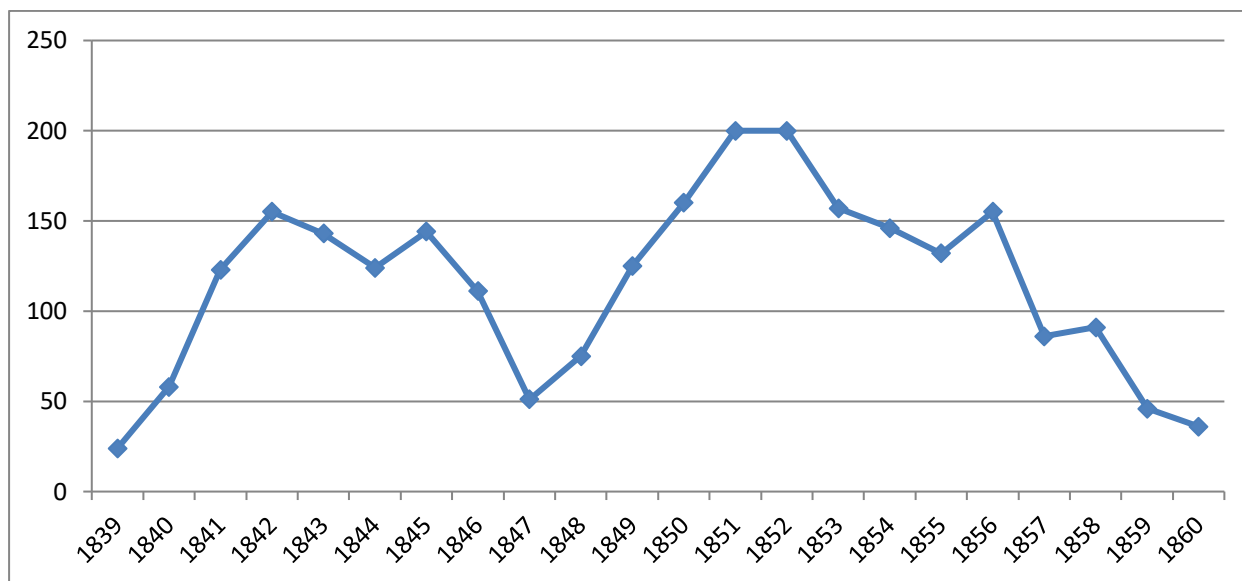
La media para el periodo 1839-1860 es de 115,6 casos anuales, si bien en los años 1839-1840, 1847-1848 y 1857-1860 encontramos menos de 100 causas por año. En 1851-1852 vemos un importante pico, con unas 200 causas. Sin embargo, la sospecha de carencias documentales hace que no podamos precisar si los cambios temporales que apreciamos en la serie son reales o se corresponden con sesgos debidos a la falta de conservación de algunas series. Este, probablemente, es al menos el caso de la segunda mitad de la década de 1850.

Gráfico 12.1.1 Causas en los tribunales de Hacienda de Galicia, por año

²⁴⁴⁹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2354, nº 1.

²⁴⁵⁰ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2308, nº 20.

²⁴⁵¹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2352, nº 27,



Fuente: *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda*

La distribución en cuanto a sexo confirma el predominio masculino común a la mayoría de las infracciones, pero no es tan acusado como en los delitos violentos o económicos contra particulares. De las 2.289 causas que englobamos dentro de tráfico ilegal, 1.055, esto es, el 46,09%, figuran con un hombre solo como único acusado. En 508, el 22,2%, se trata de mujeres solas. El predominio masculino oscila entre provincias, con un resultado quizás sorprendente: en la provincia de Pontevedra hay más causas con mujeres solas encausadas que por hombres en la misma situación. En concreto, suponen un 57,3% de los casos con un solo acusado. Como el número de causas es elevado, 412, no parece probable que se trate de un sesgo de la fuente. En el resto de las provincias predominan los hombres (76,8% en Ourense, 69,8% en A Coruña, 81,4% en Ourense).

Tabla 12.1.2 Relación entre las causas dirigidas hacia hombres solos y mujeres solas, por provincia

	A Coruña	% relativo	Lug o	% relativo	Ourense	% relativo	Pontevedra	% relativo
Hombres solos	90	69,77	70	81,4	719	76,82	176	42,72
Mujeres solas	39	30,23	16	18,6	217	23,18	236	57,28
Total	129	100	86	100	936	100	412	100

Fuente: *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda*

En los casos en los que hay varios acusados la información resulta menos fiable debido a sesgos en la redacción de los resúmenes²⁴⁵², y sería necesaria una investigación en detalle, examinando las 612 causas que componen el subgrupo, para identificar a los responsables reales. También aquí el predominio es masculino, y los grupos conformados por hombres componen el 14,8% del total de

²⁴⁵² Normalmente figuran uno o dos acusados y después la expresión “y otros” o “y otras”. En el primero de los casos, es posible que haya mujeres englobadas en el masculino genérico, pero lo hemos interpretado como masculino. En una pequeña cantidad de casos figura un acusado acompañado de la expresión “y consorte” o “y consortes”. Hemos decidido catalogarlos como casos mixtos.

casos; pero la suma de los grupos exclusivamente femeninos (5,42%) y mixtos (6,55%) alcanza casi la de los hombres. Hay un 4,5% de casos en los que el responsable es desconocido; el tipo más frecuente parece ser el de traficantes que abandonaron sus mercancías y escaparon para no verse detenidos. En algo menos del 0,5% de casos la información es incomprensible.

Tabla 12.1.3 Distribución del sexo de los acusados en las causas por tráfico ilegal en los tribunales de Hacienda de Galicia (1822-1862)

Sexo	Total de casos	Porcentaje
Hombres solos	1.055	46,09
Mujeres solas	508	22,19
Grupos de varones	338	14,77
Grupos de mujeres	124	5,42
Grupos mixtos	150	6,55
Desconocido	103	4,5
Incomprensible	11	0,48
Total	2289	100

Fuente: *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda*

Entre los grupos mixtos hay algunos casos en los que los acusados son hombre y mujer. A Patricio Paz, veredero de tabacos de Cedeira, se le formó causa junto a su esposa, Benita García, pues se acusaba a la segunda de dedicarse al contrabando de tabaco con su conocimiento²⁴⁵³.

No hemos entrado en la clasificación por profesiones, pero, en una muestra de 169 contrabandistas de mediados del siglo XIX con los que trabajó Faya Saavedra, el primer grupo profesional, 27, estaba conformado por vendedores ambulantes. Les siguen nueve marineros, siete labradores y una serie de individuos de diversas profesiones, entre ellos médicos, capitanes y sacerdotes, con una amplia cantidad de personas sin profesión identificada. En su “mayor parte” son insolventes y con “escasez económica”, y además “el bajo nivel social suele verse acompañado de un escaso nivel cultural”²⁴⁵⁴.

Es inevitable dividir los datos según las subdelegaciones de renta, que coinciden con las provincias. Para el periodo estudiado, Ourense es la que presenta un mayor volumen de causas anuales, 62,9. La sigue en número de casos Pontevedra, con 34,4, mientras que A Coruña, la provincia más populosa, apenas llega a los 11,8. Lugo es la que presenta menor número de causas, 6,4 anuales. La diferencia se pone de relieve de manera incluso más aguda si tenemos en cuenta la población de las diversas provincias, ya que las más pobladas son las que presentan menos causas. Tomando como referencia, por falta de datos demográficos anteriores, la población a la altura del censo de 1857, la tasa de causas juzgadas por Hacienda en Ourense más que decuplica a la de Lugo, y duplica a la de Pontevedra.

Tabla 12.1.4 Causas en tribunales de Hacienda para las diversas provincias gallegas en 1839-1840 y tasas por 100.000 habitantes, empleando como referencia de población el censo de 1857

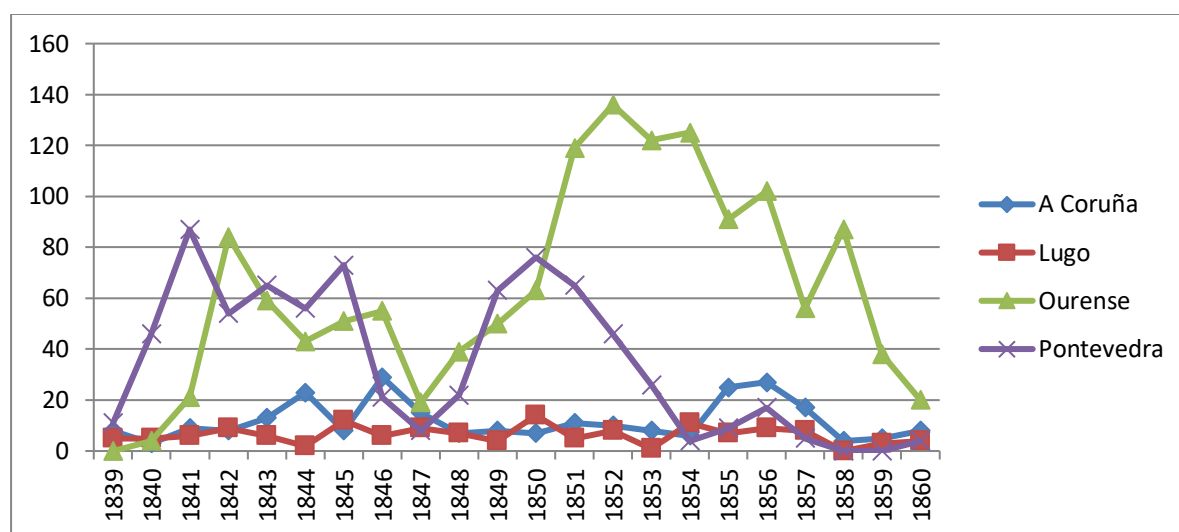
²⁴⁵³ Fueron absueltos libremente y su acusador condenado a seis meses de cárcel y pago de multa. *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2297, nº 14-16.

²⁴⁵⁴ FAYA SAAVEDRA, J. (1990), pp. 86-105.

	A Coruña	Lugo	Ourense	Pontevedra	Galicia
A: Población según el censo de 1857	551.989	424.186	371.818	428.886	1.776.879
B: Media anual de casos en tribunales de Hacienda	11,82	6,41	62,91	34,45	115,59
Casos por 100.000 habitantes (A*100.000/B)	2,14	1,51	16,92	8,03	6,51

Fuente: *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda*

Gráfico 12.1.2 Causas juzgadas anualmente en Galicia en los tribunales de Hacienda, por provincias, en el periodo 1839-1860



Fuente: Fuente: *Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda*

Si bien con variaciones anuales (que una vez más, resulta difícil decidir si se deben a cambios reales o errores en la conservación), la infrarrepresentación de A Coruña y Lugo en esta modalidad criminal se mantiene durante todo el periodo, así como la primacía de las provincias meridionales.

Hasta la década de 1850, la provincia de Pontevedra es casi todos los años la que tiene más causas, en términos absolutos; esto se invierte de manera clara en 1851 y los años siguientes. En términos relativos, Ourense es siempre la que más causas presenta. A la vista de los datos, lo más razonable es achacar el predominio de las provincias meridionales al tráfico ilícito con Portugal, causa por la que se detenía a españoles pero también a vecinos lusos. El 23 de octubre de 1857, por ejemplo, vemos como los carabineros detienen con cuatro caballerías portando 18 arrobas de “acero, arroz, Bacalao y Clabos” a Antonio Ribero, residente en el municipio portugués de A Barca (eso sí, luego se consideró imposible ir a cobrarle las costas al reino vecino)²⁴⁵⁵.

En Pontevedra, los cruces de frontera se hacían obligatoriamente a través del río. En un caso acontecido en 1845, una decena de hombres fueron juzgados por pasar contrabando dentro de la jurisdicción de la subdelegación de rentas de Tui, y herir a un empleado del resguardo de sales²⁴⁵⁶. El testimonio de este, Ramón Iglesias, a su comandante, nos da algunos datos del carácter del tráfico y de la vida en esta parte de la frontera, donde los guardias convivían con pequeños defraudadores.

²⁴⁵⁵ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2353, nº 4.

²⁴⁵⁶ Un cuerpo de escaso recorrido que fue pronto refundido en los carabineros. Véase el apartado 3.6.

El 27 de septiembre, de madrugada, pasó junto con un compañero “al puente nombrado de Barcia en donde acostumbrar hechar barazo los contrabandistas”. El varazo era una cuerda tendida a lo largo del río, y esa noche había uno tendido, un grupo en el lado español, y “transitando un hombre desde aquel [el lado de Portugal] a este”. Iglesias se llevó un golpe de azada en la cabeza, pero su compañero lo socorrió y arrestó a uno de los hombres (el detenido, Juan Fontán, alegó por su parte que había bajado a ayudar a los agentes, como había hecho otras veces, ya que su casa estaba a “como medio tiro de bala” del lugar por el que pasaron los contrabandistas). Se dejaron las armas al lugar. Reconocieron a otros tres, vecinos de las cercanías, de los que el herido decía que “ace mucho tiempo con motivo de estar en aquel punto de servicio por diversas veces, los había y tenía por defraudadores y traficantes de generos del inmediato Reyno de Portugal vigilandoles como tales”, y, tras conseguir algunos refuerzos, empezaron a identificar sospechosos.

A uno lo hallaron en casa del cura y a otro le enviaron que enviase dos hombres a casa de otros supuestamente implicados a buscar una carabina que había desaparecido en el motín (y, según su declaración, se la devolvieron). Los encausados (labradores o artesanos locales), como es de esperar, negaron su participación en los hechos, y presentaron testigos que ratificaron su buen comportamiento, y, según el fiscal, el párroco que había acogido a uno de ellos “faltó a la verdad”, quizás por simpatías. Parte de los implicados fueron condenados a penas leves de cárcel²⁴⁵⁷.

Entre las 239 causas que no se refieren a tráfico ilícito encontramos bastante variedad. Hay una veintena de ataques contra la persona que causaron heridas o muertes, normalmente recibidas o efectuadas por empleados de Hacienda en el cumplimiento de sus funciones. Agustín Roncero y José Rodríguez, vecinos de Vigo, fueron condenados por haber dado una puñalada al carabinero Ignacio de Castro, “que aprendiera un lío de Contravando que conducía una mujer”, según la descripción de la causa. Les condenaron dos meses de cárcel y pago de costas “cuando mejoren de fortuna y llegue a noticia del Juzgado”²⁴⁵⁸. Por las deficiencias de la fuente no conocemos los detalles, pero la sentencia es muy similar a otra en la que no hubo violencia: en 1857 Prudencio Iglesias se enfadó con el dependiente de un fielato ourensano que le reclamó pagar derechos por un haz de leña y, según la versión de este, le respondió que “no le daba la gana” y lo defendió con una cuchilla (esto último no fue demostrado en el juicio, y, por tanto, no debería condicionar la sentencia). Fue sentenciado a un mes de arresto y una multa²⁴⁵⁹.

El testimonio más impactante, sin duda, nos lo da en 1851 el alférez de carabineros Demetrio Solís se dirigía con siete hombres de su sección montada hacia el monte Medo y santuario de los Milagros, en el municipio ourensano de Baños de Molgas. Tenía noticias de que iban a entrar contrabandistas procedentes de Portugal, aunque el lugar está bastante lejos de la frontera. Llegando al lugar escucharon tiros de fusil, y, acercándose más, un “fuego terrible” entre una fuerza de algo más de veinte carabineros, destinados en Allariz, y una turba de “más de mil hombres, armados muchos de ellos”. Cuando vieron que se acercaban las fuerzas de caballería mandadas por Solís, los paisanos “se apoderaron de un Puente desde el que le hacían un vivo fuego acompañado de pedradas”, pero este no se arredró y les dio una carga que los dispersó, quedando en el campo “un muerto, sin herida alguna, quince prisioneros, dos carabinas y otras armas y efectos de conbrabando”. Posteriormente se hicieron algunas capturas más, con lo que hubo 17 procesados.

La versión del fiscal, presente en el folio 37 de la causa que se siguió, era otra. En el monte Medo, admitía, había habido una lucha entre carabineros y paisanos que volvían de realizar faenas agrícolas en Portugal y que volvían con artículos de contrabando o, al menos, sospechosos. Pero le parecía

²⁴⁵⁷ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2367, nº 17.

²⁴⁵⁸ La falta de información de la causa nos impide saber más detalles. *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2365, nº 10.

²⁴⁵⁹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2352, nº 11.

también fuera de lo normal que no se hubiese identificado al cadáver y que, “a pesar de la lesión que se le halló en la cabeza al difunto se haya declarado la muerte casual”, algo que denotaba “poco detenimiento” en los facultativos encargados de la autopsia. Resultaban también oscura la naturaleza de los efectos aprehendidos, y la relación de los hechos, pese al número supuestamente tan elevado de implicados. Ante las circunstancias, determinó absolver a los paisanos detenidos, sobreseer la muerte y aconsejar a los médicos encargados de la autopsia que en casos de esa gravedad procediesen en lo sucesivo “con mas detención y parsimonia”.

Según la sentencia final, dos de los arrestados resultaron ser individuos que se dirigían a vender ganado a la feria de Maceda; otros cinco, individuos que no tenían que ver con el asunto y que habían sido arrestados dentro de un santuario; de otra decena se supuso que eran del grupo que había hecho resistencia a la autoridad, si bien rezagados y no había constancia de que hubiesen cometido ningún acto contra los carabineros. Los siete primeros salieron absuelto libremente, los diez últimos tuvieron que pagar las costas del proceso. Ni el jefe de los carabineros ni ninguno de sus hombres afrontó consecuencias, al menos por los procedimientos civiles²⁴⁶⁰.

La resistencia de “más de mil hombres” y el nutrido fuego hacia los carabineros fueron seguramente una invención para disimular una intervención violenta. Pero sí que existían enfrentamientos con armas de fuego con contrabandistas. Una de ellas aconteció en la sierra de San Mamede en 1842, cuando una patrulla de carabineros encontró a un grupo de sospechosos de contrabando en número de “catorce o dieciséis”. Les hicieron frente, diciendo, según los testimonios de los agentes, “no tenemos miedo ya sabemos que no son ustedes mas que seis algun día los habíamos de atrapar”. Los agentes se dividieron en dos grupos de tres, uno disparando y otro realizando una maniobra para coger a los contrabandistas por la izquierda. El tiroteo de los primeros duró en torno a una hora, hasta que los contrabandistas dieron voces de que habían acabado con el grupo de flanco, y cargaron contra la otra escuadra, haciéndolos retroceder y aprovechando para escapar. Cuando reconocieron el terreno, los carabineros encontraron a sus compañeros derrotados: el cabo Andrés Cociña estaba con la cabeza partida “en tres o cuatro pedazos”, el agente Pedro Fernández Muerto, y su compañero Salvador Lago malherido.

Cuando se repuso, Lago pudo contar lo que había pasado. Cociña y Fernández, “con un valor mas bien temerario que prudente”, desmontaron y atacaron sable en mano a los defraudadores, y él los siguió a caballo y con una pistola. Fernández recibió un disparo, a Cociña lo rodearon entre tres y no lo volvió a ver, y a él mismo, tras golpear con la pistola a un contrabandista, se vio copado a sablazos y golpes. Preguntado sobre los atacantes, apuntó, con razón o sin ella, a un defraudador que el difunto Cociña habría detenido tiempo atrás²⁴⁶¹.

También hay un pequeño número de falsificaciones de documentos. En parte, se deben al control de mercancías estancadas. En 1848 se encargó el transporte de 39 fanegas de sal desde el almacén de Lugo hasta la villa de Valdeorras; estas nunca llegaron a su destino, por lo que se encausó a los dos arrieros contratados para el transporte, para recuperar el material y porque se temía que lo revendieran²⁴⁶². Más comunes son las causas relacionadas con la protección del erario público. Al

²⁴⁶⁰ El testimonio de Solís, el del fiscal y las sentencias de Hacienda y la Audiencia Territorial han sido consultadas en el primer atado de *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2331, nº 14.

²⁴⁶¹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2359, nº 25.

²⁴⁶² Seguir esta causa resulta algo confuso, porque falta documentación, porque hubo una disputa acerca de las competencias con el tribunal ordinario de Lugo y porque los dos arrieros, si bien vecinos de diferentes municipios, se llamaban ambos José Fernández. Uno de ellos se excusó de haber cumplido el encargo de las Causas de la Jurisdicción de Hacienda por una enfermedad y fue condenado a devolver el material y al pago de parte de las costas; otro nunca apareció, lo que, según la Audiencia Territorial, “induce a creer que ha cometido el delito de revender o malversar” la cantidad que se le había entregado. Este fue condenado in absentia a una

responsable del alfolí de Cea, José María Villar, se le siguió causa por la defraudación de 21.500 reales procedentes de la venta de sal a su cargo (el caso se sobreseyó)²⁴⁶³.

En 1846 encontramos varias causas relativas daños causados a los arrendatarios de la sal en diferentes villas gallegas, o, en el caso de Betanzos y Santiago, del robo directo de caudales por parte de la junta revolucionaria²⁴⁶⁴. En la actual capital de Galicia la subdelegación de Rentas coruñesa inició un ramal separado de la causa criminal sobre la extracción de los caudales de la delegación local del Banco Español de San Fernando, puesto que, según un escrito de un escribano de Rentas que figura en la causa, entre los fondos se hallaban 1.400 reales “del ramo de correos”. Proceso en el que, por cierto, no encontramos una solución satisfactoria para la Hacienda, y en toda la causa no hallamos ningún documento que nos informe de quiénes son los acusados de robar el dinero o de cómo se puede recuperar²⁴⁶⁵.

Puntualmente hay algún motín y choques con las autoridades locales. En 1847 vemos cómo la subdelegación de Rentas de Lugo sigue una causa por un pequeño disturbio acontecido en la feria de Castroverde. Según los hechos relatados por el fiscal (no hay indagatorias), una patrulla de carabineros que acudió al mercado encontró unos pocos géneros prohibidos, sin reo, y a muchas personas, hombres y mujeres, vendiendo sal sin la autorización pertinente. Cuando quisieron requisarla, el alcalde “les exigió pasaporte, se opuso a que llevasen la sal dando voces con que se alarmo la feria; y quizá hubiera habido ataque a la fuerza armada si los carabinero no se retirasen”. El fiscal pidió la imposición de costas al regidor y al estanquero al que al parecer pertenecía la sal, “pues que no esta autorizado para delegar poniendo toldos al libertum [sic]”²⁴⁶⁶. En otro caso, el tribunal de Hacienda ourensano impuso una multa de cuarenta reales al alcalde de Castrelo de Miño por “falta de cumplimiento” en un despacho remitido por el tribunal para que identificase a una procesada vecina de ese ayuntamiento. La decisión fue revocada por la Audiencia Territorial²⁴⁶⁷.

También en 1847 tres carabineros se presentaron “disfrazados”, es decir, de paisano, en la feria de Soutomaior (Pontevedra) y aprehendieron dos pañuelos. Según el teniente de alcalde José Lusquiños, el vecindario “viendoles en aquel estado y cuales eran sus procedimientos, medio se amotinaba y cometeria algun desorden; pero afortunadamente hallandome tambien alli, todo lo contube y quedó pacifico”. Contenerlo, para Lusquiños, pasó por ordenar a varios hombres que detuviesen a los carabineros. También devolvió los pañuelos “a la que los bendía”, según la sentencia. La subdelegación de rentas siguió proceso, además de por los pañuelos, contra Lusquiños por ordenar la detención y contra los autores de esta, por “haber maltratado a los carabineros”. La cuestión se sobreseyó, condenando a costas, eso sí, a Lusquiños y a los padres de la chica que vendía el género, “con apercibimiento al primero que a lo subcesibo no impida las prensiones de generos de illicito comercio”. Los autores de la detención fueron absueltos libremente “en atención a que no

multa de diez ducados y seis meses de encarcelamiento, más costas. *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2309, nº 13.

²⁴⁶³ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2352, 5.

²⁴⁶⁴ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2295, nº 34-35, legajo 2296, nº 1-7, 9, 17-20.

²⁴⁶⁵ El legajo es un conjunto de escritos de trámites y comunicaciones entre administraciones. Entre las últimas, encontramos una comunicación del escribano de Rentas de A Coruña el 4 de octubre de 1847 afirmando que el 27 de septiembre se sobreseyó el asunto, entendiéndolo comprendido en el decreto de amnistía. No parece que fuese aceptada la propuesta de sobreseimiento, puesto que el 22 de octubre la causa vuelve a Rentas y se pasó a un asesor “por quien se presentó escusa, por tener un hermano politico comprendido en ella”. En febrero de 1849 el sobreseimiento se declaró improcedente, pero la causa no tiene resolución. *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2294, nº 4.

²⁴⁶⁶ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2309, nº 2.

²⁴⁶⁷ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2354, nº 14.

hicieron otra cosa que obedecer las ordenes del Teniente Alcalde”²⁴⁶⁸; recordemos la normalidad con la que los paisanos se movilizaban a las órdenes de las autoridades locales, según ya hemos visto en el capítulo 4.

Encontramos también varios casos relacionados con disputas contra el pago de impuestos que merece la pena resaltar para ilustrar que la fiscalidad, a mediados del siglo XIX, tenía unas características que motivaban que en torno a ella surgiesen conflictos entre particulares y resaltasen (o surgiesen) enfrentamientos locales. Los repartimientos de algunos impuestos, como las contribuciones territoriales y los consumos donde no había explotación directa, se realizaban en los ayuntamientos. El cobro de impuestos quedaba en muchas ocasiones subarrendado a particulares, que se encargaban de la tarea de cobrar a los vecinos.

Veamos algunos ejemplos. En 1847, el comisionado ejecutor de la Intendencia Pedro Macia se dirigió al vecino de A Coruña Eusebio Fraga para señalarle que “pagué a la Hacienda la cantidad de veinte veinte y un reales y veinte que adeuda por contribución y industrial y territorial [por la propiedad de una casa]”. Este le respondió “que estaba harto de saber lo que adeudaba”, continuando con “palabras escandalosas” y “expresiones lascivas”. Macia, que consideraba que aquel era “solo un medio de eludir el pago”, se retiró prudentemente, ya que “cada vez se behia mas furibundo” y temía que lo golpease. En la causa parecen faltar algunas hojas, pero el fiscal consideró, directamente, que “aquí no hai delito sino un desahogo”, y la cuestión acaba “entendiéndose abonada la advertencia a Eusebio Fraga y las costas de oficio”²⁴⁶⁹. En Ourense, el fiel de uno de los puestos de consumos de la ciudad y un dependiente denunciaron a un vecino acusándolo de dedicarse al contrabando, además de proferir insultos y amenazas de muerte; tenían desencuentros con él por un decomiso anterior realizado a su madre. El acusado fue condenado por el tribunal de Hacienda a dos meses de arresto y al pago de una multa, pero absuelto libremente por la Audiencia Territorial²⁴⁷⁰.

Al igual que ante la justicia ordinaria, las denuncias ante Hacienda se instrumentalizaban en torno a animosidades personales y enfrentamientos de facciones locales. En diciembre de 1851, el párroco de Pereiriña, del ayuntamiento de Cee, se presentó en la casa consistorial pidiendo ver los papeles del reparto de la contribución para el año siguiente, que se estaban elaborando. Según la versión del alcalde, se sacó un lápiz del bolsillo, “propasándose a enmendar con el la cuota que le pareció”, dio algunos gritos y golpeó al secretario. El regidor suspendió una sesión en los días siguientes porque el sacerdote estaba cerca del Ayuntamiento y temía que entrase a realizar una nueva escena.

El caso no es muy impactante, ya que, leyendo las indagatorias de los testigos, todo parece reducirse a una discusión algo acalorada entre el sacerdote y el secretario en el que el segundo lo llamó borracho y el primero quizás lo empujó. Sin embargo, ilustra el modo en que se realizaban los procesos, las competencias de diversas administraciones, los enfrentamientos de las élites locales y la instrumentalización de la justicia. El regidor elevó una protesta al Gobernador Civil. Este ordenó a un letrado vecino de Corcubión para formar un sumario, que se excusó “por sus ocupaciones”, de manera que envió a Cee al Comisario de Protección y Seguridad Pública de A Coruña, que realizó el sumario. La sentencia corrió a cargo del subdelegado de Hacienda en A Coruña, que apercibió al

²⁴⁶⁸ Un posible castigo a los carabineros, que se habían presentado en la feria de incógnito y, según el teniente alcalde, quedaba a juicio de la Audiencia Territorial, pero no hemos encontrado sentencia en la causa en esta instancia, solo la del subdelegado de Rentas (folio 43, aunque se halla sin numerar). *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2368, nº 23.

²⁴⁶⁹ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2297, nº 3.

²⁴⁷⁰ *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2352, nº 24.

párroco y le impuso diez duros de multa. Revisando la decisión, la Audiencia Territorial revocó la sentencia y lo absolvió²⁴⁷¹.

En las indagatorias salieron a relucir animosidades entre las pequeñas élites locales y cómo implicaban a su entorno. El secretario afirmaba que el párroco, que “se metía en cosas ajenas de su ministerio como mezclarse en atribuciones del Ayuntamiento, en elecciones y estampar actas cuando el que dice no era secretario, persiguiéndole en todas épocas de un modo atroz”. Llevó a declarar en su favor a su hijo y a su hermana. El cura presentó 11 testigos adultos que defendieron su “decoro, moderación respeto”, que el alcalde y secretario le profesaban “odio [...] con motivo a las elecciones de diputados a Cortes en 850” y que el día de los hechos había actuado con corrección. Cada uno, pues, movilizó a sus redes de partidarios, y todos tenían intereses y conflictos que precedían en años al caso.

De esta relación un tanto prolija podemos deducir dos cuestiones. La primera, que los tribunales de Hacienda eran empleados de manera instrumental por los que podían acudir a ellos para reforzar su autoridad o solventar conflictos personales; en menor medida, también por la propia Hacienda de manera disciplinaria y para hacer imponer su autoridad sobre otras administraciones. La segunda, finalmente, que la Audiencia Territorial parece tener un acusado papel moderador de la jurisdicción de Hacienda, remedando las sentencias a favor de los reos.

Por falta de fuentes para realizar un análisis comparativo, dejaremos en el periodo isabelino el tratamiento del contrabando. Baste decir que siguió produciéndose durante nuestro periodo de estudio, y más aún. La frontera no estaba exenta de riesgos; además de alguna muerte por carabineros que ya hemos mencionado en el capítulo 7, en el lado español del río, un tal Manuel García, vecino de Camposancos, recibió una bala en el corazón en una madrugada del domingo 22 de febrero de 1920. Lo abatieron guardias portugueses mientras cruzaba el río en una barca con otro hombre, supuestamente después de que desobedecieran una voz de alto. García y su compañero estaban, según la prensa, “entretenidos en las tareas de la pesca”²⁴⁷².

No registramos muertes de carabineros en la muestra de homicidios que hemos visto en los capítulos anteriores, aunque a uno del puesto de Lovios le pegaron una paliza tres portugueses a los que les había decomisado dos arrobas de azúcar²⁴⁷³. En la incautación, por cierto, al carabinero lo había ayudado su hijo, una muestra de los estándares más desenfadados de actuación policial que persistían todavía en el primer tercio del siglo XX.

En la Segunda República parece que el contrabando de café se había hecho popular. En Canido, en 1935, los carabineros encontraron más de cuatrocientos kilos en un automóvil²⁴⁷⁴. Un mes después cayó otro alijo de media tonelada en las cercanías de Vigo²⁴⁷⁵. En febrero de ese año, denunciando un supuesto incremento del contrabando a través de la frontera ourensana, un diario local expandía la lista de materiales importados de Portugal: “ganado vacuno caballar y de cerda especialmente, y, además, baterías de cocina, azúcar, café, tabaco, petróleo, etcétera”²⁴⁷⁶.

²⁴⁷¹ La Audiencia Territorial acabó absolviendo al sacerdote, atendiendo al criterio del fiscal, que veía “enemistad” por parte de los denunciantes y ninguna prueba de que hubiese habido golpes o modificación del documento por su parte. *Causas de la Jurisdicción de Hacienda*, legajo 2300, nº 2.

²⁴⁷² *FV*, 24-02-1920, p. 3.

²⁴⁷³ *LR*, 21-07-1920, p. 1.

²⁴⁷⁴ *FV*, 21-07-1935, p. 7.

²⁴⁷⁵ *FV*, 29-08-1935, p. 5.

²⁴⁷⁶ *LR*, 24-02-1935, p. 1.

El tráfico siguió durante la guerra, como prueba el tenso encuentro que tuvo Antón Alonso Ríos con un grupo de contrabandistas de tela mientras intentaba pasar a Portugal²⁴⁷⁷. Tras la Guerra Civil, en un momento en el que el mercado negro tiene un fuerte impacto en la economía española, a consecuencia de la escasez y un modelo de intervencionismo ineficiente y corrupto²⁴⁷⁸, encontramos el contrabando como estrategia de supervivencia en la frontera con Portugal²⁴⁷⁹. Todavía un par de décadas después un vecino de Vilardevós afirmaba que ofendía más llamar a un hombre “denunciante” que llamarlo homicida, pues al menos “el que mata a un hombre dio la cara” y recordaba como a un hombre todavía vivo “le cortaron una orella” por chivato “hace unos treinta o treinta y cinco años”, esto es, sobre la década de 1920 o 1930²⁴⁸⁰.

Al contrario que en otros delitos, en el contrabando todos los implicados se benefician, y los miembros de la comunidad en la que se realiza no ven perjudicados directamente sus intereses económicos. De esta manera, los ciudadanos no tienen incentivos para acudir a las autoridades, y los agentes del orden pierden capacidad de recabar información. Para fomentar su diligencia y la estimular la colaboración ciudadana, un método popular fue premiar a los delatores. Para luchar contra el contrabando en Ourense durante el primer franquismo, además de los confidentes que actuaban por beneficio personal, para evitar castigos o por motivos ignotos pero que quizás tuvieran que ver con animosidades personales²⁴⁸¹, se emplearon falsos ganchos a través de policías de paisano y la estrategia de propiciar enfrentamientos entre los inculpados para que se delatasen entre ellos²⁴⁸².

12.2 Prófugos y revoltosos: la resistencia al servicio militar²⁴⁸³

De la misma manera que el establecimiento de un tributo genera fraude fiscal, y la prohibición del tráfico de un artículo demandado, contrabando, el establecimiento de un servicio militar obligatorio es una fórmula segura para que aparezcan formas de resistencia y evitación. Quizás algunas cabezas de la monarquía hispánica de los Austrias tuvieron aversión por motivos ideológicos a reclutar a la fuerza a sus súbditos para aventuras extranjeras²⁴⁸⁴, pero ya en el siglo XVII se realizaron levas en Galicia, no ya para la guerra con Portugal, para el que la Junta del Reino movilizó regimientos de milicias, sino con la de Flandes, una guerra que se libró sobre todo con tropas no hispánicas²⁴⁸⁵. Pero los intentos de levas se encontraban con evasiones y desertiones masivas²⁴⁸⁶.

²⁴⁷⁷ ALONSO RÍOS, A. (2006), p. 170.

²⁴⁷⁸ Sobre el fracaso económico del primer franquismo, BARCIELA, C. (1989), COMÍN, F., MARTORELL, M. (2013), DEL ARCO BLANCO, M. Á. (2005) y GARCÍA DELGADO, J. L. (1986). Sobre el mercado negro, MARTÍ GÓMEZ, J. (1995) y RODRÍGUEZ BARREIRA, Ó. (2013). Sobre el estraperlo en Galicia, PRADA RODRÍGUEZ, X., SOUTELO VÁZQUEZ, R. (1998).

²⁴⁷⁹ NOUVELLE LÓPEZ, L. (2012).

²⁴⁸⁰ LISÓN TOLOSANA, C. (2010), p. 48.

²⁴⁸¹ Resulta particularmente curioso el caso de un contrabandista detenido en 1942 que, como, modelo de negocio, vendía tabaco de contrabando y luego delataba a los compradores buscando una gratificación.

²⁴⁸² NOUVELLE LÓPEZ, L. (2012), pp. 291-296.

²⁴⁸³ En este apartado nos ocuparemos de las formas de evitación y resistencia a la conscripción anteriores a la entrada en filas. Dejamos aparte la desertión, un delito que solo pueden cometer los que ya son militares y que queda fuera de los objetivos de este trabajo.

²⁴⁸⁴ Para muestra, las consideraciones de Felipe II para no hacer levas con sus súbditos, que no eran óbice para que se emplease en las galeras a vagos y condenados. BARBERO, A. (2011).

²⁴⁸⁵ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A. J. (2007).

²⁴⁸⁶ La obra de Ruth Mackay proporciona un repaso profundo a estas resistencias en las décadas de 1630 y 1640, que implicaban no solo a los soldados comunes (por ejemplo, de 1.300 andaluces enviados a Cádiz en 1635, desertaron 1.087, y en 1634 los pobladores de Albuquerque liberaron a la fuerza a 26 forzados de la leva), sino también a las instituciones locales y a la nobleza; en 1640 “dieciséis aristócratas de Jerez prefirieron la cárcel antes que prestar servicio militar”. MACKAY, R. (2007), pp. 124, 185, 193.

En contra de algunas visiones románticas, el servicio de las armas era impopular en la Edad Moderna y los inicios de la Edad Contemporánea, y la tropa era tenida en muy baja estima. “Las clases altas de Europa –de las que procedían los oficiales– solían tener a sus soldados como escoria” señala Martines: Carlos V no lamentaba la muerte de sus hombres en el sitio de Metz, pues “de ser hombres de valía no se encontrarían en su hueste por seis libras al mes”; el duque de Alba consideraba a los soldados “peones y lacayos”; el jurista Castillo de Bovadilla decía que la guerra servía para echar de la República a “hombres que son las heces y excrementos de ella”; el conde de Saint Germain llamaba a los soldados “la escoria del pueblo”; Thomas Barnes celebraba que se hubiese producido una leva pues permitiría limpiar la sociedad de “vagabundos buscavidas y calaveras rijosos”²⁴⁸⁷. “Innumerables bandas de holgazanes” llamaba Rousseau a los soldados en *El contrato social*; para Wellington, sus propios soldados eran “the scum of the earth”²⁴⁸⁸ y Beccaria veía a los integrantes de los ejércitos dieciochescos como la hez de la sociedad²⁴⁸⁹.

En el siglo XVIII se desarrolla en España el sistema de reclutamiento por quintas²⁴⁹⁰. Aunque como ya hemos señalado estas ya se levantaron en siglos anteriores, “lo genuino de este siglo es el alumbramiento y desarrollo de un sistema de reclutamiento obligatorio que se irá perfeccionando y regularizando con el tiempo y acabaría por arraigarse definitivamente en el siglo XIX”²⁴⁹¹. La dinastía borbónica, incapaz de suplir su demanda de hombres con voluntarios, optó por sorteos entre la población general o la recluta forzosa de elementos marginales. Pero no se convocaban todos los años, y en la transición al XIX hubo un periodo de decadencia en el sistema²⁴⁹². En esta época la sustitución estaba prohibida²⁴⁹³, pero nobleza, clero y otros grupos gozaban de exenciones.

Las clases populares de pecheros sobre las que recaían los sorteos intentaban evitar un servicio gravoso y con peligros, lo que se traduce en múltiples casos de fraudes, engaños, motines, acciones colectivas de resistencia y fugas individuales muy parecidas a las que describiremos a continuación para nuestro periodo de estudio²⁴⁹⁴. Lo remarcamos para dejar claro que las exigencias de hombres de las autoridades, y los modos de evitarlas de las clases populares, no son novedosas en el periodo liberal sino que ya se habían dado en el Antiguo Régimen, y, con una cierta regularidad, desde inicios del XVIII. Esta resistencia se daba también, poniendo dos países próximos, en Portugal y Francia²⁴⁹⁵.

En el ciclo de guerras europeas tras la Revolución Francesa, se va implantado progresivamente por buena parte de las naciones europeas un servicio militar regular y con levas anuales. Un proceso en el que podemos ver la influencia de la concepción de Rousseau del pueblo armado, pero también un aumento de la capacidad de los estados europeos para mantener contingentes armados permanentes y una necesidad de ampliar los números de combatientes a toda costa para conseguir una ventaja frente a los rivales. Según señala Fernández Vargas, la Asamblea Nacional francesa proclamaba en 1789 que una nación libre solo podía tener un ejército de voluntarios, pero en 1793 se levantó una leva para movilizar soldados ante la invasión austríaca²⁴⁹⁶.

²⁴⁸⁷ MARTINES, L. (2013), pp. 39-42.

²⁴⁸⁸ BARBERO, A. (2015), p. 185.

²⁴⁸⁹ BECCARIA, C. (1764), p. 37.

²⁴⁹⁰ Sobre las levas de ese siglo en Galicia, REY CASTELAO, O. (1996).

²⁴⁹¹ BORREGUERO BELTRÁN, C. (1989), p. 345.

²⁴⁹² Excepto un intento en la década de 1770 que no prosperó. Para una evolución del sistema de quintas desde 1703, además del libro ya citado de Cristina Borreguero, MARTÍNEZ RUIZ, E. (2018), pp. 194-216.

²⁴⁹³ JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), pp. 351-352.

²⁴⁹⁴ MARTÍNEZ RUIZ, E. (2018), pp. 233-248.

²⁴⁹⁵ Para un análisis comparativo de España, Portugal y Francia, DORES COSTA, F. (2010), pp. 449-458.

²⁴⁹⁶ FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), p. 15.

En España el marco legislativo que permite la conscripción está avanzado desde muy temprano. En el año 1800 encontramos la *Real Ordenanza de 17 de octubre de 1800 para el reemplazo anual del ejército*²⁴⁹⁷, y el artículo 10 de la Constitución de Cádiz establece la obligación de todo español de servir a su patria con las armas. Pero la legislación de recluta de referencia es la *Ordenanza para el reemplazo del Ejército de 2 de noviembre de 1837* y sus posteriores reformas, que establecía la creación de padrones municipales, apoyados en la consulta de los libros de registro parroquiales, y regulaba los métodos de sorteo y las posibles exenciones²⁴⁹⁸. Tuvo modificaciones posteriores en 1850, 1856²⁴⁹⁹ y 1870²⁵⁰⁰.

Aunque siempre existieron exenciones, existía la pretensión teórica de universalizar el servicio a las armas a todos los varones. Una Real Orden de 1839, en un esfuerzo por dignificar y extender el servicio militar en tanto que deber cívico, prohibía a los tribunales sentenciar a los reos a unirse a las tropas, una reminiscencia, según el texto, de “tiempos en que los cuerpos del Ejército se componían de bagos, viciosos y mal entretenidos, recogidos en las levas de jóvenes reclutados en las partidas de bandera, y de la clase más miserable del Estado, en quien venía a recaer en las quintas la suerte del soldado por las innumerables exenciones que libraban del servicio militar a los privilegiados y clases acomodadas”²⁵⁰¹. En 1876 se extendió el servicio militar a todo el territorio español, eliminando la exención histórica de las provincias vascas.

Sin embargo, en la práctica no era un periodo de paso para todos los españoles. Por una parte porque, incluso excluyendo a los inservibles por motivos médicos y a las mujeres, en años normales el Estado no podía permitirse reclutar y mantener en filas a toda una cohorte de edad. Por otra parte, y más importante, las levas del periodo liberal permitían la posibilidad de redimirse a través de dinero. Esto establecía una clara diferenciación de clase y como tal fue criticada hasta la saciedad por obreristas y republicanos²⁵⁰² críticos con los gobiernos monárquicos y por individuos que señalaban su hipocresía o pensaban que un servicio obligatorio aumentaría la cohesión nacional.

Hasta 1912 podía hacerse con un contrato particular, pagando a un sustituto para que se presentase como voluntario, aunque algunos militares tenían sus reservas con respecto a la calidad de esta clase de hombres²⁵⁰³, o bien abonando una prima fija al Estado. Las redenciones tenían la ventaja de ser un excelente negocio para el Estado, no tanto en Galicia, en el que eran muy escasas, pero sí en el conjunto del país. En 1860 hubo 7.747 redenciones, casi el 16% (En Ourense el 0,06%, en Lugo el 0,16%, en A Coruña el 2,27%, en Pontevedra el 4,53%), con unos ingresos para el Estado de casi 55 millones de reales; por comparación, las contribuciones de ese año no llegarían a los 291 millones. Seguirían siendo recursos de importancia durante la Restauración, y también durante la guerra de Cuba²⁵⁰⁴. El paso por las fuerzas armadas quedaba así limitado a los voluntarios, siempre bienvenidos

²⁴⁹⁷ JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), p. 80.

²⁴⁹⁸ Para un resumen de la forma de selección de mozos, y las formas de perseguir a los desertores en estos primeros tiempos del servicio militar obligatorio, MARTINEZ RUIZ, E. (1967), pp. 620-638.

²⁴⁹⁹ JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), p. 82-84.

²⁵⁰⁰ GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), p. 212.

²⁵⁰¹ FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), p. 22.

²⁵⁰² En 1873 se suprimió sobre el papel el servicio militar, y por tanto las redenciones, si bien la I República, como veremos, realizó levas para afrontar la Tercera Guerra Carlista. FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), p. 86. Sobre las críticas, vease IGLESIAS AMORÍN, A. (2015).

²⁵⁰³ Agustín Rossell opinaba de ellos en 1848 que “los hombres que solo por codicia de dinero entran a sustituir a los honrados hombres de la clase media de la sociedad, son los que figuran siempre en las salas de corrección y calabozos, los que llenan las enfermerías regimentarias, cuando existen, y los que en los hospitales fijos y de campaña ocasionan al tesoro público enormes gastos”. ROSSELL, A. (1848), p. 12.

²⁵⁰⁴ FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), pp. 136-137, p. 191.

pero nunca suficientes; a los reenganchados, más caros que los conscriptos incluso cuando morían²⁵⁰⁵; o a los que sacaban bajos números en los sorteos.

La prima fue haciéndose cada vez más asequible pero siempre fue cara²⁵⁰⁶. Además de pobres que pagaban con sangre y ricos que pagaban con oro que les sobraba, tenemos a una clase intermedia que se arruinaba para pagar la exención. Nuria Sales señala el caso de una familia de la localidad catalana de Rosas, carpinteros de ribera y copropietarios de barcas pesqueras en el siglo XIX, en la que tres generaciones tuvieron mala suerte en los sorteos de quintas y bajaron de posición socioeconómica tratando de soslayarla. La primera generación vendió una porción de barca para pagar la redención en la Primera Guerra Carlista, su tierra a finales del reinado de Isabel II, y su casa con la guerra de Cuba: el llamado a filas prefirió acudir a las armas “que dejar sin casa a la familia”, allí murió, causando la ruina económica de la viuda y sus hijos, que perdieron la vivienda de cualquier manera²⁵⁰⁷.

La Real Orden del 24 de enero de 1912 se abolió la posibilidad de exención económica, estableciendo un servicio militar “obligatorio para todos los españoles con aptitud para manejar las armas” que sería un “título honorífico de ciudadanía” y eliminando específicamente “la redención a metálico”²⁵⁰⁸. Sin embargo, se siguió permitiendo un abono para reducir el tiempo en filas y obtener exenciones de servicios.

La resistencia a las quintas continuó, de la misma manera que lo había hecho en el Antiguo Régimen. Los estudiosos del fenómeno en Galicia hasta la Restauración coinciden en señalar que fue, sobre todo, una oposición personal y particular, no colectiva. Para Balboa López, que estudió el fenómeno durante el Sexenio Democrático, “o más importante nivel de resistencia á quinta en Galicia é o individual”²⁵⁰⁹, y para González Asenjo, “la resistencia al servicio armado es una cuestión de iniciativa personal y en todo caso familiar”²⁵¹⁰. Es decir, los mozos trataban eminentemente de evadir su propio servicio armado, bien legalmente (pagando), forzando ilegalmente una causa de exención o fugándose.

En Galicia, la redención por pago era minoritaria, y la sustitución más frecuente²⁵¹¹, pero en conjunto el pago para evitar el servicio militar era muy minoritario. Siguiendo las ya clásicas estadísticas recogidas por Nuria Sales, en el periodo 1861-1871 más del 85% de las conmutaciones en las cuatro provincias gallegas se hicieron todos los años por sustitución (un rango en el que solo estaban también Lérida, Castellón y Valencia). Pero el porcentaje de redimidos y sustituidos respecto al total

²⁵⁰⁵ En 1860-1871 se envió a Ultramar, donde era más probable que produjeran baja, sobre todo a los quintos, mientras que los voluntarios quedaban en España: “Al recluta no había necesidad más que de alimentarle y vestirle, y para él no existían pensiones de invalidez, frfandades ni viudedades de ninguna especie. La muerte de un reenganchado con prima significaba la liquisdación de primas no amortizadas, lCausas de la Jurisdicción de Hacienda años de pensiones a hijos o viuda si los tenía. Un reenganchado con prima mutilado significa el pago de una pensión vitalicia durante veinte, cuarenta, cincuenta años”. La misma política se siguió en la Restauración. SALES, N. (1974), pp. 240-243.

²⁵⁰⁶ FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), p. 24.

²⁵⁰⁷ SALES, N. (1974), pp. 235-236.

²⁵⁰⁸ R. O. Circular 24 de enero de 1912, *Gaceta de Madrid*, 24-01-1912. Citado en FERNÁNDEZ VARGAS, V. (2004), p. 79.

²⁵⁰⁹ BALBOA LÓPEZ, X. (1991), pp. 67.

²⁵¹⁰ En los casos en los que hay comportamientos que puedan parecer colectivos, para este autor, se trata de la coincidencia temporal de “acciones fundamentalmente particulares. Si no fuera cierta esta característica señalada, nos encontraríamos con otro tipo de actitudes solidarias que aquí no existen”. Esta afirmación nos parece cierta para la mayor parte del periodo estudiado. GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), p. 311.

²⁵¹¹ Para el periodo 1860-1867, JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), pp. 398-407. Para el Sexenio, BALBOA LÓPEZ, X. (1984).

de quintos en 1860-1871 es todos los años inferior a la mitad de la media nacional, una situación en la que solo se encuentra Asturias además de las provincias gallegas²⁵¹².

Al ser un método legal, la redención no nos interesa para este trabajo en cuanto al estudio de la delincuencia. Sí debemos señalar que la historiografía considera mayoritariamente que esta desigualdad en base a la renta era uno de los factores que erosionaban la justificación ideológica del servicio²⁵¹³. Cuando en Francia el servicio militar se convirtió en plenamente nacional en 1889, considera Weber, se eliminó la exención por pago y se limitaron otras, la aceptación de la conscripción aumentó, y también su papel como agente de nacionalización, de manera que la cultura de evitación y deserción anterior quedó relegada. Debemos puntualizar, sin embargo, que según el mismo autor que en la segunda mitad del siglo XIX “in diet, lodging, bedding, hygiene, dress, the soldier’s wellbeing was well above the standards of the rural working class”; muchos campesinos no querían volver a la vida de antes tras pasar por el ejército. Esto, en nuestra opinión, pudo ser un factor de aceptación del servicio tan importante como el de la justicia social²⁵¹⁴. Por el contrario, la experiencia de Ramón y Cajal en el ejército español en Cuba en la década de 1870 fue una de pobreza, penalidades y corrupción.

Por otra parte, y volviendo a Cristina Borreguero, en el siglo XIX el servicio era más universal que en el Antiguo Régimen en tanto desaparecieron las exenciones basadas en privilegios, hidalguía y oficios ennoblecedores. En esto no se diferencia de otros territorios de Europa occidental, si bien en Rusia la exención nobiliaria llegó hasta 1874²⁵¹⁵. El mayor anacronismo fueron las disposiciones forales que eximían de quintas a los territorios vascos²⁵¹⁶.

Ya en el ámbito de la ilegalidad, al menos en la primera mitad del siglo XIX hubo esfuerzos por evitar el padrón. En algunos casos se hacía pasar a los varones por mujeres²⁵¹⁷, pero lo más normal era no inscribirse. En la Málaga decimonónica llegaron a faltar miles de habitantes de las listas oficiales por la práctica de evadir el servicio. En algunos casos, las autoridades municipales colaboraban en el fraude²⁵¹⁸.

Si no era posible evadir las listas de mozos, los mozos recurrían a diversas ilegalidades para ser declarados exentos. En el aspecto físico, iban desde agacharse en el reconocimiento médico para ser

²⁵¹² SALES, N. (1974), pp. 274-277.

²⁵¹³ Durante el siglo XVIII, el Estado había intentando prohibir la sustitución en las levas, si bien lo permitió en determinados casos. Durante el primer tercio del siglo XIX fue admitiéndose en ciertos casos y con reservas. JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), pp. 351-355. Sobre las críticas internas, vease por ejemplo un informe de la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País, que señalaba que la exención por dinero “lleva la mortificación y el despecho al mayor número de los reclutas y sus familias y afloja en ellos los lazos de la nacionalidad”. Proponían una conscripción obligatoria y universal, precedida de una milicia, y extender el traje de soldado “hasta el heredero del trono de 18 a 20 años, por no haber excepciones para la reserva”; se diluiría la “odiosidad” que motivaba el servicio y se difundiría conocimiento entre los asistentes. *Informe presentado a la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País...* (1877), pp. 6, 8, 13-14.

²⁵¹⁴ WEBER, E. J. (1993), pp. 292-302. Las circunstancias de vida en el ejército español parecen penosas atendiendo a la comida, alojamiento y mortalidad. JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), pp. 500-503.

²⁵¹⁵ MOON, D. (1999), p. 113.

²⁵¹⁶ BORREGUERO BELTRÁN, C. (1989), pp. 263-284, 346. Se mantuvieron, eso sí, exenciones para los religiosos. JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), pp. 287-288.

²⁵¹⁷ Era práctica habitual en alguna comunidad francesa, WEBER, E. J. (1993), p. 296, y puede que también se hiciese en España, JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), p. 227.

²⁵¹⁸ La práctica parece especialmente relevante antes de 1850, ya que el cupo desde 1837 hasta esa fecha se calculaba en base a la población del municipio. A partir de entonces se determinó a partir de las quintas anteriores en cada municipio. En la segunda mitad del siglo, los censos periódicos a nivel nacional debieron dificultar crecientemente el fraude en los patrones. JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), pp. 43-54, 113-114.

declarado inservible como corto de talla (lo que podía acarrear una multa) a fingir todo tipo de enfermedades²⁵¹⁹. En 1896 se reformó la Ley de Reclutamiento y Reemplazo para permitir a las autoridades militares vigilar las sesiones de tallaje y exámenes médicos, a fin de evitar este tipo de evasión que quizás consentían las autoridades locales²⁵²⁰. Otros optaban por la solución más drástica de mutilarse, siguiendo el truco que ya conocían los romanos²⁵²¹. Había individuos que se arrancaban dientes o muelas (hasta que este defecto fue eliminado como causa de exención en 1862, debido “a las frecuentes mutilaciones voluntarias de los mozos”) o amputándose falanges (hasta que en 1874 se endurecieron las normas y se empezó a exigir la falta de dedos completos)²⁵²².

Todas estas modalidades de evasión individual tenían el inconveniente de que, si un mozo faltaba, se designaba a otro de su misma circunscripción para sustituirlo, perjudicando así a un vecino. Los mozos tenían por tanto un incentivo para delatarse unos a otros como, más aún dado que había recompensas para el quinto que capturase a un prófugo²⁵²³. Otros declaraban datos familiares falsos para evadir el servicio en base a las causas de exención correspondientes, como ser hijo único que mantuviese a un padre sin otros medios de supervivencia.

González Asenjo, que encontró 208 individuos encausados por mutilaciones encaminadas a evadir el servicio militar, señala que los que así intentaban evadir el servicio militar podían ser detectados por las autoridades municipales que hacían el reclutamiento, bien por sospechas propias o bien a instancia de otras autoridades. Otros eran denunciados por sus vecinos, otros mozos o sus padres, o por los pedáneos. En su opinión estas denuncias “en muchas ocasiones [...] se convertirían en canalizadores de venganzas existentes en la comunidad rural”. En O Irixe (Ourense), varios vecinos del cercano municipio de O Carballiño incriminaron por mutilarse a sesenta y siete individuos de seis parroquias diferentes²⁵²⁴.

Pero la opción más popular entre los mozos gallegos era escaparse antes de entrar en filas. En los años 1861-1885 y 1912-1933, el porcentaje de desertores respecto al contingente provincial es “muy superior siempre al promedio español” en Galicia, A Coruña y Ourense (algo que solo se da adicionalmente en Asturias y Almería), y en Pontevedra también “muy superior” aunque con más oscilaciones²⁵²⁵. La fuga tenía la enorme ventaja de que los implicados y sus allegados evitaban casi

²⁵¹⁹ Los ejemplos serían innumerables: desde narcóticos para imitar los efectos la gota a vómitos o micción de sangre, imitados o provocados por la “parte mas estúpida de los simuladores”, a demencia, epilepsia o sordera. En relación a esta última afección, el médico Agustín Rossell recomendaba trucos como despertar bruscamente al sujeto en medio de la noche, o dejar caer tras él monedas de plata. ROSSELL, A (1848), pp. 46-51, 88.

²⁵²⁰ LUCEA AYALA, V. (2009), p. 271.

²⁵²¹ Ha pasado a la historia el caso del equite romano que fue vendido como esclavo en tiempos de Augusto por cortar los pulgares de sus dos hijos, para que no tuvieran que servir en el ejército. GOLDSWORTHY, A. (2015). Otras alusiones a la costumbre se encuentran en Amiano Marcelino o el Código Teodosiano, que incluye en cuatro artículos diversas penas para aquellos que se amputasen los dedos para escapar del servicio militar. LANDI, A. *et al* (1997), p. 4-5.

²⁵²² BALBOA LÓPEZ, X. (1991), pp. 53-54.

²⁵²³ Para Balboa López y González Asenjo, esta dinámica podía tener efectos disolventes en los valores comunitarios en las aldeas gallegas; el segundo señala también que podría azucar los problemas de convivencia preexistentes. BALBOA LÓPEZ, X. (1991), p. 55, GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), p. 311-312. Si no estaba sometido a quintas, el delator recibía una recompensa económica que pagaba el prófugo. BALBOA LÓPEZ, X. (1984), p. 85. Dar exenciones legales a los que denunciasen a evasores y fugados era una táctica vieja, que ya encontramos en disposiciones legales de 1639 y 1640. MACKAY, R. (2007), p. 173.

²⁵²⁴ GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), p. 217, 238-241.

²⁵²⁵ SALES, N. (1974), p. 275.

siempre el castigo. Se iniciaban muy pocas causas por este motivo²⁵²⁶, y la acción no podía dirigirse contra los principales interesados, que estaban fuera del país.

También tenía ventajas para el núcleo familiar. Resultaba difícil probar la participación de sus parientes y amigos como colaboradores²⁵²⁷, así que no sufrían represalias. También presentaba muchas ventajas pragmáticas con respecto a la redención. Unos padres con un hijo elegido para el sorteo estarían habitualmente en torno a los cuarenta o cincuenta años, una edad en la que una familia de labradores empezaba la decadencia de la capacidad de producción propia, pero podía haber reunido un cierto capital de tierras y dinero que les asegurase una vejez digna (alquilándolas o explotándolas con la mano de obra de sus hijos), que se esfumaría para pagar la redención. Quizás ni vendiéndolas llegase el dinero (especialmente si los compradores de sus tierras sabían que necesitaba el dinero urgentemente) y pedir prestado era arriesgarse a entrar en una espiral ruinosa. Para los hermanos del quinto, evidentemente, suponía dilapidar su parte de la herencia. Tanto mejor, por tanto, que el desafortunado probase fortuna en la emigración, aunque esto se llevase un pellizco del dinero familiar. La mayor prevalencia de las redenciones en otras regiones de España puede explicarse por un mayor nivel de capitalización de la población susceptible de redimirse, o mejores expectativas económicas para los que se quedasen en casa.

Otro factor importante era la influencia de las dinámicas de emigración a América²⁵²⁸: esta era una opción de futuro para muchos mozos, quisiesen evitar el servicio de las armas o no, por lo que en muchos casos se trataba simplemente de adelantar la salida. Si era imposible cruzar el océano, la frontera portuguesa estaba cerca, aunque esta quizás fuese una opción tomada sobre todo para evitar levas en tiempos de guerra, ya que las perspectivas de ganancia económica eran inferiores. En la Tercera Guerra Carlista existía en el norte del país vecino “un numeroso colectivo de jóvenes prófugos gallegos que huían del alistamiento, a pesar de las duras penas por desertión”²⁵²⁹.

Como ya hemos apuntado en el capítulo en el apartado dedicado a la violencia sociopolítica, las exigencias de quintos suscitaron episodios de resistencia colectiva, esto es, motines que impedían los sorteos para conseguir su suspensión o, al menos, un cambio en los criterios. Estos fueron especialmente disruptivos en el Trienio Liberal, cuando quizás muchos de los participantes cuestionaban la capacidad del gobierno para mantener el control del país y eran frecuentes los rumores de una invasión extranjera para expulsar a los constitucionalistas²⁵³⁰.

Relacionados con diversos motines entre 1821 y 1823 encontramos como instigadores a párrocos y a miembros de partidas realistas, que, sin embargo, no parecían tener el mismo éxito a la hora de conseguir que los mozos que se rebelaban contra la quinta se uniesen a la facción²⁵³¹. En 1824 y

²⁵²⁶ De acuerdo con el estudio comparativo de González Asenjo, en 1837 y 1840 se declaró a 37 individuos como prófugos según el Boletín Oficial de la Provincia, mientras que no se registra ninguna causa en el Archivo del Reino de Galicia por este hecho. En 1860 se registraron 877 prófugos en la provincia, con solo una causa. En total, hubo muchos menos individuos encausados por este hecho que por las mutilaciones voluntarias. GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), p. 247-248.

²⁵²⁷ De las sesenta y nueve personas encausadas en procesos de fuga de quintos identificadas por González Asenjo a partir de los procesos que se conservan en el Archivo del Reino de Galicia, más del 65% vieron sobreesidos los cCausas de la Jurisdicción de Hacienda, y otro 8,9% absuelto. Un 13,4% recibió pena de multa y un 10% fue apercibido. GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), pp. 258-259.

²⁵²⁸ Además de que las provincias gallegas daban cifras récord en cuanto a proporción de prófugos en relación al cupo durante el Sexenio Democrático, los lugares con más prófugos eran aquellos que presentaban más emigración relativa. BALBOA LÓPEZ, X. (1991), pp. 62-65.

²⁵²⁹ COMESAÑA PAZ, A. (2017), p. 48.

²⁵³⁰ Uno de los Causas de la Jurisdicción de Hacienda fue la “negativa dos mozos a loitar contra de tropas estranxeiras prestas para a invasión”. VEIGA ALONSO, X. R. (2017), p. 233, 247, 265-266.

²⁵³¹ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), pp. 135-136.

1826 se abrieron causas contra liberales por intentar entorpecer sorteos de quintas en diversos puntos de Galicia²⁵³².

Restaurado el control fernandino, siguió habiendo incidentes colectivos, pero relacionados, más que con un rechazo general al sistema de quintas, con la percepción de que las exenciones eran injustas. En nuestro repaso a las causas de la Audiencia Territorial hemos encontrado varios casos de motines violentos de quintos en la primera mitad del siglo XIX, y en concreto en su primer tercio.

En 1824, en el coto de Dozón (Pontevedra) los mozos intentaron que la selección de quintos se hiciese por sus propias normas. Cuando el juez del coto intentó realizar el sorteo el doce de agosto, se encontró con “inmoderacion, desóvediencia y desacato” por parte de los quintos, sus padres y demás familiares. Hubo insultos y amenazas para el médico encargado de las exenciones, al que dijeron, según la declaración de este, que “la Justicia la tenían en su mano, que no necesitaban de cirujano que para los enfermos que había lo hexan ellos y que no habría mas exclusión que la que ellos hiciesen y aprovasen”. El acto se intentó de nuevo el día catorce (sin los soldados que el juez había pedido al comandante militar), y una vez más los quintos concurrieron, pero “cada uno con un fuerte Palo en las manos [subrayado en el original]”.

Uno de los mozos sujetos al cupo, José Fernández, reunía al parecer las condiciones para quedar exento del servicio, y cuatro de sus vecinos, José Rey, Fernando de Axean, Ramón y Carlos Fernández (vecinos de este), fueron a testificar en su favor. Acababan de jurar y empezar las declaraciones cuando otros quintos se abalanzaron sobre ellos y empezaron a darles de palos; los testigos se acogieron en la casa del juez, y Carlos “hecho un arroyo de Sangre quasi muerto” y Ramón también herido de gravedad. Los amotinados se negaron a dispersarse, y desde la casa del juez “se dio la disposición de buscar y hacer concurriesen los vecinos que no fuesen interesados con las armas que tubiesen para precaber el insulto que amenazaban”²⁵³³. Dos fueron condenados a cárcel, otros 20 a pago de penas económicas, así como una advertencia general de que “a lo subcesivo se abstengan de cometer iguales excesos”.

Una experiencia similar vivió el escribano y juez de la villa y jurisdicción de Oseira, entre las provincias de Lugo y Ourense, en 1827. Mientras estaba escuchando a los testigos presentados por un tal Pousa, para su exclusión como quinto, varios reclutas formaron un tumulto afirmando que “no se havia de Ohir excepción alguna a los mozos o Padres que las propusiesen”; que los excluidos serían “a quien ellos les dictase su voluntad, y no lo qe pretendiese hacer la Justicia, que ningun crédito le daban a cuanto operase, y en otro caso que buenos Palos tenían en la mano para hacerla”. Se suspendió el sorteo, pero el día siguiente, 29 de abril, los amotinados se le echaron encima, y se libró de los golpes “por la prudencia y listeza de algunas personas que con toda rapidez se han hechado a sorprender y agarrar por el ayre los palos con que hiban a dar al que provee”. Parte de los presentes los protegieron y algunos mozos pedían moderación; mientras, el escribano tuvo “la precaución de huirse precipidatamente a la casa de la Audiencia”. Los acusados alegaron que “nada más hubo que el haber algunos de ellos insinuado en el acto de dicho sorteo las tropelias que ejecutaban en la esclusion de varios sugetos”, todo ello con “respeto y veneración” y una “ciega obediencia a la autoridad”. El juez y los testigos mentían como parte de una “negra intriga”.

En este caso, el juez de Oseira condenó a varios de los acusados a seis meses de cárcel. La Real Audiencia la revocó, aunque con apercibimiento de que si reincidiesen “serán castigados con mayor rigor” y condenó y apercibió a Martín Rodríguez y otros jueces que entendieron de la causa por irregularidades en el proceso²⁵³⁴.

²⁵³² BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2016), p. 196.

²⁵³³ *Causas*, 274, 1.

²⁵³⁴ *Causas*, 453, 7.

El escribano Pedro José de Neira dio parte de un alboroto entre los mozos del sorteo de quintos de Meira, el 15 de septiembre de 1831²⁵³⁵. Falta gran cantidad de piezas, y prácticamente solo conocemos una reclamación del abogado propio Neira contra la Audiencia. Según él, se ocupó “estender el acta en que se hizo merito del alboroto promovido por los mozos”, que firmaron trabajadores del Ayuntamiento y a los curas párrocos que habían acudido para solemnizar el sorteo. Por lo que podemos extraer de las piezas de la causa, no parece haber violencia, sino resistencia y palabras injuriosas. Sin embargo, la sala del Crimen de la Audiencia absolvió a los acusados del alboroto y lo condenó a él, algo que su abogado achaca a “las intrigas y confabulaciones de sus enemigos”, entre las que figuraron ilegalidades y sobornos. En su contra se encontraban, al parecer, el comisionado Neira Gallardo y los hermanos Pérez Mons, también escribanos.

La causa relacionada con el tumulto del sorteo de quintos del 22 de abril de 1830 en Betanzos es amplia y con multitud de versiones. De acuerdo con el escribano Juan Antonio Mata, de entre los quintos reunidos surgieron “expresiones las más indecorosas” y “reclamaciones indiscretas, como lo eran las de que se incluyesen en [...] individuos que habían sido escluidos en el Juicio excepciones, unos por defectos Fisicos, y otros por cortos [de talla]”.

Al contrario que en los casos que hemos presentado, aquí había presencia de la fuerza pública: soldados y voluntarios realistas. Escuchemos ahora la versión de Agustín Coruña, cabo primero de la cuarta compañía del segundo batallón. Cansado de ver cómo autoridad civil les trataba con la “mayor dulzura”, pero la turba seguía con sus “gritos y vocería”, ordenó arrestar y meter en la cárcel de la villa a tres de los más destacados de los amotinados. Pero siguieron las protestas, y el más visible de los amotinados era precisamente un corneta de los voluntarios reales, Juan Pereira, del que Coruña dice que le sacó una navaja antes de que lo desarmaran; otros de sus soldados afirma que había más voluntarios exhibiendo bayonetas. Otras versiones hablan de “golpes dados a los mozos de la quinta” y connivencia entre el regidor y el fiscal para justificarlos.

En todo caso, la situación no se convirtió en un campo de batalla. El oficial Isaach Vélez apareció por el tumulto, tomó dirección de la tropa y les ordenó cargar las armas. Los mosquetes de la época se alimentaban por la boca, y para cargarlos había que situarlos en posición vertical e introducir la pólvora y las balas, una operación muy visible. Al contemplarla “entró la tranquilidad en los mozos” y prosiguió el sorteo sin incidentes.

La conflictividad, por tanto, tiene más que ver con la sensación de estar siendo engañados que con un cuestionamiento de base al sistema. Los sorteos eran sin duda impopulares, como lo eran las contribuciones u otras imposiciones del Estado. Pero ante una autoridad fuerte, los mozos no se oponían violentamente al hecho de servir en sí mismo (que seguramente hubiese desencadenado una represión feroz), sino que empleaban la violencia para corregir a algunos individuos, concretos y conocidos, que entendían que manipulaban las reglas para perjudicarlos²⁵³⁶. Como, por ley, todas las sesiones del sorteo eran públicas por ley²⁵³⁷, el espacio era propicio a protestas y actos de violencia de carácter impulsivo. El motivo de los alborotos era que se cumpliera la norma, y nunca pedían que se excluyese a alguien, sino que se le incluyese²⁵³⁸.

²⁵³⁵ *Causas*, 906, 17.

²⁵³⁶ En este sentido coincidimos con González Asenjo, que encuadra la resistencia al servicio militar como “no opuesta a la existencia de la quinta” y “sin carácter político”. GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), pp. 312-313.

²⁵³⁷ JIMÉNEZ GUERRERO, J. (2001), p. 81.

²⁵³⁸ González Asenjo encuentra cuatro incidentes relacionados con las quintas en el periodo 1835-1874, a partir de información judicial, de los que solo dos tienen carácter de tumulto colectivo. En un caso, en Cambre, los mozos atacaron a pedradas a la autoridad municipal y la Guardia Civil porque la talla no estaba situada “en el sitio que ellos querían”, temiendo trampas. En Neda, dos individuos hubo un pequeño alboroto contra dos

Tras la muerte de Fernando VII encontramos algunos incidentes más. El 10 de noviembre de 1835 se intentó interrumpir el sorteo de quintos de García Rodríguez. Según el alcalde, Pascual Caveyro, y otros testigos, un tal Faustino de Castro y otros mozos presentes en el acto molestaron con gritos y canciones. Intentaron arrebatar papeles de la mesa cuando el tal Faustino fue elegido y lanzaron unas cuantas piedras (al parecer, contra las ollas donde se contenían los números)²⁵³⁹. Pese a que Caveyro afirmó que la intención era interrumpir el sorteo, no cabe buscar intención política. Se condenó a Faustino y a otros cuatro mozos, para un cupo de 35, y las motivaciones parecen tener más que ver, más que con una oposición de fondo, con el consumo de alcohol en una taberna cercana: en la sentencia de la Audiencia se advierte a Juan Pardo, dueño de una esta, de que “se abstenga de beneficiarlos ni tenga franca aquella fuera de las horas regulares marcadas por el reglamento de Policía”.

Esto nos lleva a la cuestión de si los amaños eran frecuentes²⁵⁴⁰. Sin duda, los criterios de qué constituía un soborno eran laxos. En 1844, los médicos Ramón Gayón, Benigno María Cid y Mariano Martín declararon exento a Antonio Ramón Ulloa, del ayuntamiento de Ribadavia. Su hermano Benito les llevó más tarde “tres onzas de oro” para que se las repartiesen, pero lo hizo “únicamente por vía de gratitud” y sin pacto anterior. Además, los médicos se habían resistido a recoger el dinero (aunque no hasta el punto de rechazarlo). Fueron absueltos por el juez y teniente de alcalde de Ourense Evaristo Pérez. La Audiencia revocó la sentencia y les impuso multa y costas²⁵⁴¹.

En el ayuntamiento de O Pino, cuatro exenciones realizadas por los facultativos Vicente López Cabo y Joaquín Caballero en 1840 fueron invalidadas por veedores de Caja y Diputación. El año siguiente ocurrió lo mismo con otros cuatro exentos, aunque en esta ocasión el reconocimiento lo hicieron personas diferente²⁵⁴². Se les impusieron multas, pero fueron absueltos por el juzgado de partido de Arzúa.

Los motines de quintos vuelven a adquirir importancia en el Sexenio Democrático, al igual que en otras zonas de España²⁵⁴³. Ya a finales de 1868 encontramos manifestaciones contra las quintas y las contribuciones en villas gallegas, con la participación de los republicanos federales, que se repiten en los años siguientes junto con el boicot de algunos municipios²⁵⁴⁴. En 1873 un buen número de ayuntamientos coruñeses no presentó ni un mozo, y de un cupo de 2.764 hombres a cubrir en la provincia, solo se constata la entrega de 119. El problema disminuyó un tanto en 1874, si bien solo se cubrieron 736 plazas²⁵⁴⁵. Ese mismo año centenares de “sediciosos y rebeldes” boicotearon los actos de reclutamiento de Boimorto, con el resultado de varios muertos²⁵⁴⁶.

excluidos que consideraban que no lo merecían. Tampoco en este caso cuestionaban la obligación de servir: “queremos la ley, repitieron una porción de veces, y todos los demás mozos repetían lo mismo”. GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), pp. 285-287.

²⁵³⁹ Causas de la Jurisdicción de Hacienda, 925, 12, versión de Caveyro 1A y B. Fallo 288AB y 299A. La sentencia es inusualmente dura para estos casos, puesto que se condenó a Faustino a cuatro años de recCausas de la Jurisdicción de Hacienda en el servicio, y a otros cuatro a un año de prisión seguramente por el contexto de guerra.

²⁵⁴⁰ Cuestión que resulta imposible de resolver con los datos disponibles. González Asenjo encontró una docena de Causas de la Jurisdicción de Hacienda por cohechos de este tipo en el Archivo del Reino de Galicia, implicando a médicos, talladores y funcionarios municipales. GONZÁLEZ ASENJO, J. (1985), pp. 264-274.

²⁵⁴¹ Causas, 1726, 4. Fiscal, 94, sentencia absolutoria, al final, sentencia en segunda instancia, 100.

²⁵⁴² Causas, 1037, 6. Nombres en 1A, exenciones 4B, 6B, detalles sobre la absolución en las reclamaciones finales.

²⁵⁴³ Vease, para Castilla La Mancha, BASCUÑÁN AÑOVER, Ó. (2008), pp. 165-167.

²⁵⁴⁴ BALBOA LÓPEZ, X. (1984), p. 107.

²⁵⁴⁵ BALBOA LÓPEZ, X. (1984), pp. 121-122, 156-158. Resultaría en este sentido inexacta la afirmación de que “en ninguno de los dos años citados [por 1873 y 1874] el reclutamiento pudo llevarse a cabo en ninguna de las

¿A qué se debe este fracaso de las quintas? Podemos señalar varios factores. Uno, señalado por Balboa López, es el de las expectativas frustradas: las proclamas revolucionarias del 68 habían anunciado el fin de las quintas, pero en la práctica solo hubo una rebaja de un año en el servicio activo, y los gobiernos del Sexenio no renunciaron sino ampliaron las levadas. Estas eran el sistema más eficiente para conseguir hombres, y los hombres eran necesarios para mantener el poder. Ya en 1869 movilizaban a los reservistas²⁵⁴⁷. Las esperanzas de abolición fueron traicionadas sucesivamente por el partido radical y por los republicanos, que en febrero de 1873 proclamaron un ejército de voluntarios y en agosto, ante el alzamiento carlista tuvieron que recular y movilizar a 80.000 reservistas²⁵⁴⁸.

Por otra parte, en 1874 se endurecieron las condiciones de exención (se duplicó el precio de la redención, y se suprimió la exención por baja talla), por lo que la quinta afectaría a más mozos. Además de la falta de sintonía del discurso de los dirigentes republicanos con sus actos, reclamaban hombres que anteriormente podrían haberse librado del servicio y les daban menos posibilidades para evadirse legalmente. En tercer lugar, para los quintos era evidente que se los movilizaba para ir a la guerra, y no tan evidente que esa guerra sería victoriosa. En algunas zonas operaban partidas carlistas, que, si bien sin capacidad para ocupar el territorio, quemaron listas de contribuciones con la colaboración de los paisanos y coincidieron con los motines²⁵⁴⁹.

Estas circunstancias, a nuestro parecer, explican la resistencia y hasta los motines, pero no la desmovilización en masa de las instituciones locales. Esta, a nuestro parecer, se debe a la debilidad percibida del Estado. Impopulares y temibles para los reclutas fueron también las guerras de Cuba o de África, pero, pese a las desertiones, los sorteos siguieron realizándose. En la Primera República las instituciones locales y los mozos no confiaban en la estabilidad del régimen ni en su capacidad para imponerles sanciones, por lo que tenían menos incentivos para obedecerlas. De esta manera, la forma de resistencia cotidiana que se plasmaba año tras año en fraudes y evasiones, y puntualmente en formas de acción colectiva que no cuestionaban al sistema, se convirtió en un momento de crisis, y por tanto, recuperando las tesis de Tarrow, en desobediencia masiva y acción colectiva encaminada a impedir, ya no alterar, los sorteos²⁵⁵⁰.

A falta de estudios precisos para el caso de Galicia, parece que la situación volvió a sus cauces en la Restauración, y durante el resto de nuestro periodo de estudio no volvemos a encontrar motines de quintas en Galicia. Las formas de evasión vuelven a ser individuales. Un modelo popular, al menos según las denuncias de los que acusan a tal o cual corporación municipal de caciquismo, era el de estar a bien con los concejales y conseguir una exención; los municipios controlaban el paso crucial del tallaje, en el que era posible favorecer a un quinto²⁵⁵¹. Resulta imposible saber cuál era la incidencia de estas corruptelas.

provincias gallegas", si bien las cifras obtenidas fueron muy inferiores a las calculadas. HERVÉS SAYAR, H. *et al* (1997), p. 178.

²⁵⁴⁶ HERVÉS SAYAR, H. *et al* (1997), p. 178.

²⁵⁴⁷ BALBOA LÓPEZ, X. (1984), pp. 86-91.

²⁵⁴⁸ BALBOA LÓPEZ, X. (1984), pp. 99-103.

²⁵⁴⁹ BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. (2008), pp. 225-227, 263.

²⁵⁵⁰ Para Tarrow, las oportunidades políticas con cuatro: la apertura del acceso a la participación, los realineamientos políticos, los aliados influyentes y la división entre las élites. Podemos Causas de la Jurisdicción de Hacienda aumentar que los mozos que se negaban a participar en los sorteos de la Primera República estaban influidos al menos por la primera (por el establecimiento del sufragio universal), la tercera (en tanto que contaban con la simpatía de los gobiernos municipales) y la cuarta (debido a la inestabilidad política y desunión de las clases dirigentes). TARROW, S. (1997), pp. 157-161.

²⁵⁵¹ Resulta imposible, por supuesto, saber en cuántas ocasiones se empleaba. CANDEIRA MOSQUERA, F. (1990), p. 50.

Por otra parte, volvemos a encontrar el fenómeno de los prófugos, confundido con la emigración²⁵⁵². Pero también con la simple evasión pasiva, no presentándose a las comisiones de reclutamiento, puesto que la persecución no era severa. Xaime Quintanilla, que más tarde sería alcalde de Ferrol y fusilado en 1936, evadió el servicio militar que le correspondía en 1912 con la simple medida de no acudir a las reclamaciones que se le hacían. Fue declarado prófugo en Santiago, pero continuó viviendo en esa ciudad en los años siguientes, participando públicamente en mítines y apareciendo en la prensa, y no tuvo problemas para empadronarse en Ferrol ni para, según un diario local, adquirir patente para ejercer la medicina. En 1918, tras seis años de evasión del servicio, se acogió a la amnistía que permitía redimir el servicio militar o pagar la cuota para evadirlo²⁵⁵³.

En 1921 se presentó un prófugo de la quinta de 1903²⁵⁵⁴, y cuando Vicente Dorado, alias *Ranero*, fue detenido por estafa, había desertado cuatro veces del ejército²⁵⁵⁵. Sí que es cierto que la espada de la justicia militar se mantenía pendiente sobre los que habían evadido el servicio durante muchos años. José López, un vecino de Ortigueira de 36 años, denunció en 1930 a su madre por haberle vendido unos pinos sin permiso. Esta correspondió denunciándole como prófugo; acabó detenido y a disposición de la autoridad militar²⁵⁵⁶.

Para acabar este capítulo, debemos señalar que la idea del Antiguo Régimen de las fuerzas armadas como vertedero de indeseables seguía presente, aunque con palabras menos crudas, al final de nuestro periodo de estudio. Cuando en 1920 se creó la Legión, un telegrama del Ministro de la Gobernación dirigido al Gobierno civil de la provincia de Pontevedra señalaba que por la forma en que se realizaba el reclutamiento “pueden las Autoridades locales encauzar hacia ese Cuerpo a muchos individuos que no reuniendo condiciones para la vida tranquila serían excelentes personas en la vida de campaña”²⁵⁵⁷.

²⁵⁵² Si bien de manera compleja. En Valga, donde se registra un aumento en la evasión del servicio militar a partir de la última década del siglo XIX, Soutelo Vázquez encuentra una fuerte relación entre emigrar para evitar entrar en filas, “a existencia previa de parentes, veciños e coterráneos [en el lugar de destino] e as informacións positivas que enviaban estes sobre as condicións de traballo e de vida”. La relación podía ser también indirecta; si bien es cierto que había jóvenes que marchaban al extranjero para evitar la guerra de Marruecos, parece que en otros casos emigraban para conseguir dinero y así poder pagar la suma que los convertiría en soldados de cuota (que hiciesen el servicio dentro de la Península). SOUTELO VÁZQUEZ, R. (2007), pp. 212-214, 221.

²⁵⁵³ Sobre la evasión del servicio militar y la vida durante esos seis años, ROMERO MASIÁ, A., PEREIRA MARTÍNEZ, C. (2011), pp. 40-44.

²⁵⁵⁴ LV, 07-10-1921.

²⁵⁵⁵ LR, 27-10-1925, p. 1.

²⁵⁵⁶ LV, 13-02-1930, p. 3.

²⁵⁵⁷ FV, 18-09-1920, p. 2.

13. LAS CARAS DE LA DELINCUENCIA

13.1 ¿Una subcultura criminal?

La idea de que los criminales pertenecían a una “clase peligrosa” que amenazaba el orden social existía en la Europa del siglo XIX, si bien coexistieron diferentes criterios acerca de cuáles eran sus fronteras. Chevalier afirma que, a lo largo de la primera mitad del siglo, los escritores que se referían al crimen parisino empezaron considerando a los delincuentes como miembros de una clase criminal numerosa y separada del resto de la sociedad, y los fueron identificando de manera creciente con las la población proletaria, entendiendo el crimen como una de las manifestaciones de los comportamientos patológicos que producía vivir en la urbe²⁵⁵⁸.

De acuerdo con Emsley, entre los autores ingleses del siglo XIX la identificación del crimen con las clases trabajadoras convivía con nociones de que los criminales poseían una cultura y organización propias y de que existían individuos enteramente dedicados al crimen. La policía llevaba registros de los delincuentes habituales, pero se seguían criterios heterogéneos en distintas partes del país, lo que prueba que la definición del término no estaba clara. Sin embargo, el propio autor matiza que la mayor parte de los delitos no los cometían delincuentes habituales, que no era posible distinguir a los criminales de otros miembros de su clase social y que, si bien se puede hablar de algunos delincuentes profesionales, no cabe hablar de clase criminal por su escaso número²⁵⁵⁹. Parece que la contracultura criminal existió sobre todo en la ficción: “the urban underworld was essentially an ideological construct that reflected social fears”²⁵⁶⁰.

A falta de un estudio similar sobre las actitudes de las clases ilustradas españolas con respecto al crimen, cabe distinguir entre la violencia, que como ya hemos surgía de manera espontánea en las interacciones habituales de las clases populares y que sería vano atribuir a un grupo marginal, y los robos, hurtos y estafas, cuya comisión parece más restringida²⁵⁶¹. El magistrado Gil Maestre, que en 1886 realizó un bosquejo de este segundo tipo de delincuentes en Barcelona, les atribuía rasgos culturales propios, y, casi, una sociedad. Poseían un código de silbidos y un caló particular, en el que designaban sus diferentes oficios (como los “minadores”, los “taruguistas o los “pinchos”), motes propios, redes jerárquicas y de receptadores de bienes robados. Se relacionaban con los delincuentes de otras partes del país en los presidios, o con motivo de las emigraciones que realizaban cuando los perseguía la ley. Muchos compartían modos de vida y frecuentan ciertos ambientes, como las casas de empeños, los cafés cantantes o las casas de dormir baratas. Por la ciudad pululaban collas de pilluelos dirigidas por adolescentes que los introducían en el vicio y la homosexualidad, los sometían a una disciplina y organizaban sus robos²⁵⁶². Algún maestro de ladrones entrenaba a sus pupilos haciéndoles robar de un maniquí con campanillas²⁵⁶³. En Barcelona existían “cientos de familias” que vivían de la falsificación de moneda, y en Cataluña operaba una misteriosa asociación de “asesinos y extorsionadores” conocida como “la nazarena”²⁵⁶⁴. Un

²⁵⁵⁸ CHEVALIER, L. (1984), pp. 100-101, 119-121, 130, 133-135, 156, 200, 207, 596-613.

²⁵⁵⁹ EMSLEY, C. (1997), p. 23, 72-73, 84-85, 170-171, 173, 175.

²⁵⁶⁰ DENYS, C. (2016), p. 95.

²⁵⁶¹ Aunque, por supuesto, algunos criminales económicos también eran violentos fuera de su actividad delictiva, y quizás lidiando con sus colegas de profesión. Juan Coca, alias *Cabezas*, fue detenido en octubre de 1886 por apuñalar a un hombre con el que “parece que mediaba íntima y antigua amistad” en una riña, y, un par de meses después, por falsificación de moneda. *La Voz de Galicia*, 30-08-1886, 10-12-1886.

²⁵⁶² La criminalidad infantil, y la identificación de las bandas de niños con grupos de ladrones existe también en el París de la primera mitad del Novecientos. CHEVALIER, L. (1984), pp. 217, 220-221.

²⁵⁶³ En una descripción que recuerda sospechosamente a una escena de la novela *Los misterios de París*. Para Salillas se trata de fantasías. SALILLAS, R. (2004), pp. 182-183.

²⁵⁶⁴ GIL MAESTRE, M. (1886), pp. 16, 20-21, 26-30, 60, 69-74, 79-80, 93-95

observador atento, afirma Gil Maestre, vería a los criminales de la ciudad “combinados entre sí, y cual si respondieran a una organización completa y obedeciesen órdenes generales”.

Pero no debemos deducir de sus palabras la existencia de una Corte de los Milagros, y mucho menos de una Mafia organizada²⁵⁶⁵. Los grupos criminales de los que habla son en general uniones temporales y de pocos miembros, que conviven con “criminales sueltos” y oportunistas movidos por “la necesidad, los compromisos, o el vicio”. Además, este asociacionismo debe entenderse como particular de las grandes poblaciones y áreas desarrolladas. Para Salillas, que escribe una década después, entre los delincuentes “la organización no es general, sino por pequeñas agrupaciones, más que permanentes eventuales, para un fin determinado”, y “la comunidad tampoco es constante”, pese a haber semejanzas en costumbres y procedimientos entre los criminales y existir una lengua particular²⁵⁶⁶. Gimeno Azcarate, que se lamenta en 1900 de un aumento de la criminalidad en Asturias en paralelo con el desarrollo de la minería, habla de crímenes pasionales en pendencias provocados por la degradación moral, las bebidas de alta graduación y la disponibilidad de armas, no de la aparición de bandas de delincuentes organizadas²⁵⁶⁷. En las pequeñas ciudades gallegas la especialización profesional y cultural de los criminales debía ser forzosamente menor que en la Barcelona de esos años.

En este capítulo abordaremos diferentes perfiles de los delincuentes con ánimo de lucro en las ciudades de A Coruña y Santiago de Compostela, en base a un volcado de los diarios locales *La Voz de Galicia* y *La Gaceta de Galicia* para el periodo 1882-1886 que no llegamos a desarrollar en este sentido en un trabajo anterior²⁵⁶⁸. Debido a que *La Voz de Galicia* es un diario con una información de sucesos más completa que su homólogo compostelano, las observaciones de este capítulo se refieren sobre todo a la ciudad de A Coruña.

Los delincuentes económicos que hemos encontrado se pueden dividir en tres categorías atendiendo a lo que, en función de la recurrencia de sus actos y de los ingresos que extraigan de ellos, podemos llamar profesionalidad. La primera la componen individuos indiferenciados de la población general, que en algún momento de sus vidas cometen un hurto o una estafa de manera puntual, y a los que por tanto no podemos considerar profesionales. En segundo lugar tenemos a un grupo de lumpen que comete hurtos de supervivencia y que infringen recurrentemente la ley, pero cuyos miembros no sacan de ello demasiada rentabilidad y reciben castigos relativamente leves. Por último hallamos una categoría de delincuentes que han conseguido hacer del crimen un oficio lucrativo, o al menos cometen delitos importantes de manera recurrente²⁵⁶⁹. Entre estos últimos se cuentan tanto bandas organizadas e itinerantes e individuos endurecidos que vuelven al crimen en cuanto salen de presidio, o al menos eso suponen las autoridades y los contemporáneos²⁵⁷⁰.

²⁵⁶⁵ Hay que apuntar que en la Galicia de la primera mitad del siglo XIX llegó a existir una organización criminal relativamente amplia y organizada: la desarrollada en Ferrol por Manuel de la Cruz, Sopiñas, conectada con decenas de robos, con conexiones con las autoridades y, según algún testimonio, con rituales propios. Aún así, sería difícil considerarla una organización mafiosa. LÓPEZ MORÁN, B. (1995), 134-135, 139-141.

²⁵⁶⁶ Para el autor, las jergas son resultado de la existencia de una agrupación humana aparecida por “segregación de la sociedad común”, que se asocia “con arreglo a sus tendencias, a sus costumbres y a sus leyes peculiares”. En el caso del caló criminal, “se caracteriza por sus tendencias al disimulo”. SALILLAS, R. (2004), p. 53, 68, 74.

²⁵⁶⁷ GIMENO AZCARATE, M. (1900), pp. 19, 23-25, 94.

²⁵⁶⁸ Una versión de este capítulo resultó excluida por motivos de espacio de CARBALLO GENDE, E. (2018).

²⁵⁶⁹ En Alcalá de Henares, población de tamaño modesto, existían “bajos fondos” locales en la Restauración: “pequeños estafadores, y ladrones menores”. Al mismo tiempo, casi todos los presos de la cárcel tenían una profesión. GÓMEZ BRAVO, G. (2004), p. 302, 456-457.

²⁵⁷⁰ Sobre la dificultad de los delincuentes para volver a la sociedad normal debido al ostracismo social y la persecución policial, lo que facilitaba que continuasen en el entorno criminal: GIL MAESTRE, M. (1886), p. 128, EMSLEY, C. (1997), 33, 125-126, 239.

Existen, por supuesto, infractores habituales que no se lucran de su actividad. Encontramos una clase de conocidos habituales de la guardia municipal a los que es difícil considerar delincuentes: alcohólicos, bullangueros, amigos de montar jarana, quizás con problemas mentales o lumpen, que duermen frecuentemente en las celdas de prevención municipal. Es el caso de la *Cacharrona*, una coruñesa “que diariamente escandaliza por las calles de la población, después de embriagarse” y a la que los guardias detienen por armar gritos y jaleos o hallarla “pegando a su novio”²⁵⁷¹; o del *Tolete*, botero que “tiene la costumbre de beber más de lo regular, provocando a los transeúntes y promoviendo reyertas con los vecinos”, aunque sin mala intención: cuando otro borracho le pegó una paliza pidió “con insistencia que se perdonase a su agresor”²⁵⁷².

También hay gente violenta que reincide en el delito de lesiones, familias que protagonizan frecuentes escándalos²⁵⁷³, o incluso que, después de cumplir una condena por homicidio, consigue un revólver e intenta matar a su mujer²⁵⁷⁴. Pero para ellos el delito no es fuente de ingresos ni modo de vida, de manera que no hablaremos de ellos en este capítulo.

13.2 Niños, mozos y mujeres pobres: crimen por diversión y por supervivencia

La delincuencia juvenil y el pánico moral asociado a ella no son un producto novedoso del siglo XX. Los golfos, pillos y granujas, jóvenes vagabundos que no tienen hogar o que solo lo visitan ocasionalmente, eran una constante del paisaje de la Restauración²⁵⁷⁵. Quizás a algunos los impulsaba el amor a la aventura, pero el fenómeno debe atribuirse más bien a la desatención familiar y a hogares más parecidos al de Huckleberry Finn que al de Tom Sawyer²⁵⁷⁶. En todo caso, por las pequeñas ciudades de la Galicia de la Restauración pululaban bandas de chiquillos de las clases populares, “abandonados por sus padres” que no van a la escuela²⁵⁷⁷ ni al taller, o aprovechaban las horas que les dejaban estos para salir a la calle y divertirse. Aunque nos centraremos en el ámbito urbano, la educación de la infancia rural también fomentaba el crimen, según algunos contemporáneos: para la escritora Clemencia Otero, los infantes de las aldeas se criaban “encerrados” o “abandonados” durante el día, en medio de palizas y aprendiendo a ser “cruel y despiadado”, primero con los animales, luego con los hombres²⁵⁷⁸; según otro contemporáneo, las niñas quedaban abandonadas, “trotando por las carreteras en busca de limosna”²⁵⁷⁹.

²⁵⁷¹ *La Voz de Galicia*, 08-02-1884, 04-01-1885.

²⁵⁷² *La Voz de Galicia*, 26-04-1884, 30-12-1884.

²⁵⁷³ Por ejemplo, los clanes conocidos como “*Sartén y Gatos*”. *La Voz de Galicia*, 08-05-1883.

²⁵⁷⁴ *La Gaceta de Galicia*, 10-12-1885.

²⁵⁷⁵ Pío Baroja, nacido en 1874, afirma en sus *Memorias* que “Esta generación nuestra (...) padeció, a consecuencia de su manera de ser, un vicio que tuvo una denominación expresiva”. Citado en REY GONZÁLEZ, A. M. (1990), p. 45. Estas bandas existen también en Barcelona. GIL MAESTRE, M. (1886), pp. 24-26.

²⁵⁷⁶ Sanchís Banús, con un criterio biologicista propio de su tiempo, afirma en que el 80% de los jóvenes golfos son “anormales”, y en general fruto de la degeneración hereditaria. Sin embargo, menciona para el resto una serie de causas externas que nos parecen más razonables y de las que pone ejemplos personales concretos: padres muertos o ausentes, familias desestructuradas o numerosas, niños criados enclusas, etcétera. En otros casos, se dan al vagabundeo por la influencia de otros muchachos o como consecuencia de la explotación infantil y el tráfico de niños para la mendicidad. SANCHÍS BANÚS, J. (1916), pp. 177-186, 188-195.

²⁵⁷⁷ *La Voz de Galicia*, 26-04-1884, 20-05-1883. El abandono de los niños también se denuncia en la campaña moralista de 1906. *La Voz de Galicia*, 07-07-1906, 08-07-1906.

²⁵⁷⁸ *La Voz de Galicia*, 05-07-1906.

²⁵⁷⁹ *La Voz de Galicia*, 24-07-1906.

Ya hemos visto cómo los niños de la época se pelean y cometen pequeños actos de vandalismo. Algunos, desde muy temprana edad, roban, portan armas y beben alcohol, y muchas veces traspasan la línea entre la chiquillada y el crimen. Esta clase de chicos se consideraba en otros países una cantera de la delincuencia²⁵⁸⁰, y lo mismo ocurría en las ciudades gallegas. *La Voz de Galicia* habla en los años 80 de una “plaga” de criminales “de doce a catorce años de edad” o incluso más jóvenes, de “pequeños cacos (...) sin oficio ni ocupación alguna”, que “cuando no se hallan jugando con barajas por los portales, se dedican a tomar lo ajeno contra la voluntad de sus dueños”, un “sin número de chicos dedicados a la vagancia”²⁵⁸¹ que desvalijan bolsillos, roban material de las obras, escamotean patatas, sustraen mercancías de los comercios.

En más de una ocasión salen libres porque la autoridad los considera demasiado jóvenes para molestarlos, su víctima los perdona o “prometieron corregirse”²⁵⁸². En otras, son simplemente demasiado jóvenes como para que se les aplique la ley, pues hasta los 9 años eran inimputables y hasta los 15 años la decisión de si debían ser juzgados quedaba a juicio del tribunal. En los años en los que figura la edad de los presos de la cárcel de partido de Santiago solo encontramos dos ladronzuelos de 13 y 14 años, pero la franja de edad de 15 a 20 años es la que más criminales aporta, lo que lleva a pensar que los jueces actuaban con tolerancia; al cabo, llevar a un menor a la cárcel suponía ponerlo a compartir espacio con criminales adultos y endurecidos²⁵⁸³. Esta impunidad por motivo de su edad molestaba a algunos contemporáneos. En diciembre de 1884 los agentes de Santiago detienen a una banda de siete pilluelos “autores de varios robos” y le arrebatan a uno de 9 años una palanqueta de hierro. Los tribunales “nada absolutamente pueden hacerles” por su edad, y a los pocos días, según la prensa, vuelven a realizar correrías²⁵⁸⁴. En algún caso, el destino de un chiquillo vagabundo fue el internamiento forzoso en el Asilo²⁵⁸⁵.

En conjunto, suponen una buena parte del crimen ocasional, aunque su edad haga que estén más representados en las noticias que en los listados de presos. Algunos chicos dan el paso a la delincuencia más seria, cometiendo robos de relevancia, como una niña de once años que se hace con “cuatrocientos y tantos reales”²⁵⁸⁶, o los “varios muchachos” que sustrajeron un diamante²⁵⁸⁷. Otros llegan a la mocedad como reincidentes, como Juan Luaces, de 15 años, puesto en libertad tras haber sido capturado mientras robaba en un comercio y que en menos de 24 horas vuelve a ser detenido forzando una cerradura²⁵⁸⁸.

Entre los adultos también encontramos a un tipo de delincuente que hurta frecuentemente, pero para apoderarse de mercancías de muy poco valor. En A Coruña, a principios de la década de 1880, tenemos a la *Calderilla*, una ladrona conocida por su apodo, que escamotea ropa²⁵⁸⁹. En una noticia se menciona la banda de las “célebres Calderillas” ha robado una barra de jabón²⁵⁹⁰, así que quizás fuesen una banda organizada, o, más probablemente, una familia del lumpen que recurría a la pequeña delincuencia para sobrevivir. Al menos una mujer con el apodo de *Calderilla* ingresa en la cárcel de partido en enero de 1883. La plazuela de Aduanas coruñesa es una “escuela práctica de

²⁵⁸⁰ Según Louis Chevalier, para Víctor Hugo “tous les crimes de l’homme commencent au vagabondage de l’enfant”. CHEVALIER, L. (1984), p. 210.

²⁵⁸¹ *La Voz de Galicia*, 14-01-1883.

²⁵⁸² *La Voz de Galicia*, 02-02-1883, 31-07-1884, 10-02-1883.

²⁵⁸³ CARBALLO GENDE, E. (2018).

²⁵⁸⁴ *La Gaceta de Galicia*, 23-12-1884, 27-12-1884.

²⁵⁸⁵ *La Voz de Galicia*, 21-08-1882.

²⁵⁸⁶ *La Voz de Galicia*, 02-06-1883

²⁵⁸⁷ *La Voz de Galicia*, 13-04-1884.

²⁵⁸⁸ *La Voz de Galicia*, 16-11-1886.

²⁵⁸⁹ *La Voz de Galicia*, 13-07-1882.

²⁵⁹⁰ *La Voz de Galicia*, 21-04-1882.

fechorías” donde roban con frecuencia maíz o pequeños objetos “mujeres y chicos” que “no escarmientan” pese a las reiteradas detenciones²⁵⁹¹.

Quizás este tipo de crímenes se da sobre todo en mujeres y chiquillos de ámbitos ligados a la marginalidad. En el botín de una ladrona descrito por el juzgado de instrucción de Santiago, encontramos una manta, una funda de terliz llena de lana, una navaja, una espuela, un vaso de vidrio, una saqueta, “media libra escasa de jabón común”, un ramal de cáñamo “para conducir ganado vacuno”, una cabezada para caballerías, un vaso de vidrio, un paraguas, “una llave vieja” y apenas “dos reales en calderilla”²⁵⁹². El ladrón de un pañuelo mantón, según la descripción del juzgado que lo busca, es un joven de “trece a quince años” que “anda descalzo” y “gasta gorra de paño con remiendos muy vieja”²⁵⁹³. El delito cometido por unas mujeres que compartían habitación en una casa de huéspedes y fueron “poquito a poquito sacando la lana” de los colchones y “vendiéndola en diferentes sitios”²⁵⁹⁴, de ser cierto, no se comprende si no es por extrema codicia o extrema miseria.

Interpretamos que esta clase de delitos en los que se escamotea ropas, pañuelos y alimentos deben entenderse como crímenes de subsistencia, protagonizados por personas en las que se combina la pobreza con una situación de exclusión social e imposibilidad de encontrar un oficio remunerado. En el caso de los varones, los robos de comida y pequeños utensilios parecen darse en la transición entre la infancia y la edad adulta, en un contexto de semi-delincuencia. Los que los practican son delincuentes habituales, pero lo que roban relativamente poco, y seguramente la mayor parte de sus ingresos provengan de la caridad.

En algún caso encontramos pequeños peristas, como una mujer a la que se detuvo en 1883 en A Coruña por comprar “a varios muchachos porciones pequeñas de maíz producto de la rapiña”²⁵⁹⁵, pero cuando los objetos robados no se consumían, su destino eran seguramente las casas de empeño, bien conocidas por las clases humildes. La criada compostelana detenida en 1882 por empeñar los cubiertos de la casa en la que servía²⁵⁹⁶ seguramente recurrió al único lugar en el que podía convertir en dinero su botín. La fiscalización de las casas de empeños no fue al parecer exitosa²⁵⁹⁷, el negocio no tenían buena fama y los dueños, de ambos sexos, recibían apelativos despectivos de la prensa, que tenía sospechas sobre su legalidad²⁵⁹⁸. Sin embargo, no queda claro hasta qué punto el colectivo actuaba como receptor o participaban en las redes criminales²⁵⁹⁹.

13.3 Carteristas, estafadores y ladrones

²⁵⁹¹ *La Voz de Galicia*, 18-07-1883, 05-07-1883.

²⁵⁹² *La Gaceta de Galicia*, 20-05-1883.

²⁵⁹³ *La Gaceta de Galicia*, 15-06-1883.

²⁵⁹⁴ *La Voz de Galicia*, 05-05-1884.

²⁵⁹⁵ *La Voz de Galicia*, 14-06-1883.

²⁵⁹⁶ *La Gaceta de Galicia*, 13-04-1882.

²⁵⁹⁷ En 1892 el Gobernador Civil intentó someterlas a un reglamento que, al parecer, no se respetó. TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 207.

²⁵⁹⁸ Como Ibraínes con falda, Hebreos o usureros. *La Voz de Galicia*, 20-09-1882.

²⁵⁹⁹ Gil Maestre afirma que “las prenderías y casas de préstamos y empeños, son en su mayor parte los establecimientos que más y mejor ayudan y explotan al criminal”, pues este se desprendía de los artículos robados por “una pequeñísima cantidad” y algunos dueños lo encubrían, aunque otros no participaban en este tráfico. GIL MAESTRE, M. (1886), pp. 141-143. En Inglaterra parece que no se puede hablar de una cooperación generalizada de los prestamistas con los criminales. EMSLEY, C. (1997), p. 169.

Quizás un poco por encima de este crimen de subsistencia se encuentren los carteristas que se congregan en las ferias, fiestas e inauguraciones, donde haya una aglomeración de gente, y cuyas “prendas preferidas” son los relojes de bolsillo, piezas valiosas que sustraen con habilidad y discreción²⁶⁰⁰. No encontramos demasiados datos sobre este perfil de criminal, que quizás fuese ocasional o se combinase con los tipos ya descritos.

Los estafadores suponen un paso más en el continuo hacia la delincuencia rentable en sí misma, y empezamos a encontrar indicios de que algunos habían convertido la estafa en un trabajo lucrativo. Es el caso de un detenido en julio de 1884 y “conocido ya de antiguo como timador de profesión”, de otros dos “timadores de oficio” aprehendidos por la autoridad en 1885 o de un individuo que en marzo de 1886 estafó a un industrial coruñés a las pocas semanas de salir de la cárcel²⁶⁰¹. Cuando ingresan en prisión, muchas veces se escribe en el delito el término “estafas”, indicando múltiples delitos, o un mismo delito a varias personas.

Otra muestra de la profesionalización de los estafadores es la movilidad geográfica. En la prensa encontramos referencias a foráneos que se acercan a la ciudad para estafar, como los vecinos de Teo que intentan colocar moneda falsa a un comerciante compostelano y los que acuden a A Coruña “con objeto de ejercer su industria en los días de las fiestas”²⁶⁰². También hallamos a un ovetense que estafa a los coruñeses fingiéndose piloto o comisionista, a un supuesto portugués que vende una cartera llena de arena por varios miles de reales y a un alemán que pide ayudas a los médicos compostelanos presentándose como un colega de profesión de la “célebre Universidad de Goetinga” que está pasando apuros²⁶⁰³. En septiembre de 1884 se dice que ha llegado a Santiago una “sección de timadores” y, en efecto, al mes siguiente se detiene a un madrileño y a un salmantino²⁶⁰⁴.

El ejemplo más representativo de esta delincuencia profesional y ligada a las comunicaciones es el de una banda organizada, integrada por al menos tres hombres y tres mujeres, que hacía todos los meses el trayecto entre Santander y A Coruña para esperar en este segundo puerto la llegada del correo con Cuba y estafar a los soldados licenciados, bien en la propia ciudad, bien mezclándose en el pasaje²⁶⁰⁵. El único extranjero que pasó por la cárcel de A Coruña en los 45 años de los que tenemos registro, vecino de Nueva York, era precisamente un estafador. Sin embargo, la mayor parte de los reos por estafa eran nativos del partido²⁶⁰⁶.

Encontramos estafas de todo tipo, en especial en A Coruña, donde los periodistas tratan a este tipo de delinquentes con un cierto humor, llamando al timador “ingeniero” o “caballero de industria”. Entre las tácticas más originales se encuentra pedir dinero para un supuesto fin benéfico, reclamar dinero en nombre de un conocido comerciante local, simular ser dependiente de Consumos y pretender cobrar derechos a aldeanos que introducen patatas en la ciudad, hacerse pasar por un contrabandista que necesita cambio para pagar a un compinche por unos artículos recién introducidos en el puerto o, por parte de un francés, fingirse reclutador para una intentona carlista²⁶⁰⁷. Al menos en un caso, acontecido en Oza, un estafador echó mano del revólver tras no

²⁶⁰⁰ *La Voz de Galicia*, 03-09-1883, 25-08-1884.

²⁶⁰¹ *La Voz de Galicia*, 31-07-1884, 14-11-1885, 28-03-1886.

²⁶⁰² *La Gaceta de Galicia*, 26-02-1886, *La Voz de Galicia*, 17-07-1886.

²⁶⁰³ *La Voz de Galicia*, 21-04-1882, 27-08-1886, *La Gaceta de Galicia*, 03-06-1884.

²⁶⁰⁴ *La Gaceta de Galicia*, 26-09-1884, 23-10-1884.

²⁶⁰⁵ *La Voz de Galicia*, 01-05-1886.

²⁶⁰⁶ En A Coruña el 84% de los reos de la cárcel de partido son vecinos del partido judicial, pero en el caso de los condenados por estafa la proporción de presos de fuera del partido pasa del 16 al 21%. En Santiago se da la situación inversa. El 81,4% de los reos de arresto mayor no es vecino del partido, y entre los timadores el porcentaje asciende al 88,5%. *Libro de reos de la cárcel pública de A Coruña*.

²⁶⁰⁷ *La Voz de Galicia*, 17-10-1884, 16-10-1885, 31-01-1886, 29-04-1882, 03-01-1886.

poder convencer a un panadero de Culleredo de que un alfiler era una valiosa alhaja tasada en 800 duros; tuvo que echar a correr cuando el timado desenfundó un cuchillo²⁶⁰⁸.

Respondiendo al tópico, los campesinos que llegan a la ciudad son objetivo preferente de los timadores, que les venden relojes baratos como si fuesen valiosos, y hacen pasar piezas de lata por oro y plata de ley²⁶⁰⁹. A otro labrador, un estafador y su compinche le colocan una lata rellena de tierra por 500 reales, fingiendo que está llena de oro²⁶¹⁰. En 1884 “ciertos pájaros” se congregan en los soportales del palacio de la Diputación para aprovecharse de la “buena fe de los labradores que vienen a entregar a sus hijos en la caja de quintos”, hasta que lo prohíbe el cuerpo de Orden Público²⁶¹¹. Aunque también hay timadores rurales. Antonio Vilar Caballeiro, a quien se busca en 1883 por la estafa de “varias reses de ganado”, seguramente en una feria, es un labrador de la parroquia de San Miguel dos Agros, en Santiago, y viste “pantalón y chaqueta de paño de tarazona”²⁶¹².

Otros individuos o grupos se dedican al robo nocturno en casas y locales comerciales, un tipo de delito que es mayoritariamente masculino y en el que encontramos a hombres adultos. Algunas veces su botín se diferencia poco del robo de subsistencia. En el ecléctico botín de un sastre aragonés detenido en 1882 en A Coruña encontramos un “portier”, el capote “de un maestro de obras”, paquetes de clavos, un farol, varios efectos sustraídos de un carromato...²⁶¹³. Una táctica no muy elaborada pero mencionada en alguna ocasión para robar en un establecimiento público consistía a parecer en entrar en horario de apertura y esconderse para cometer el crimen por la noche²⁶¹⁴.

Pero los más ambiciosos acuden a establecimientos en los que se guardan cantidades importantes de dinero o de joyas, forzando las cerraduras o abriéndolas con habilidad. Se trata de crímenes que entran ya en la categoría de la delincuencia profesional. Algunos golpes son extremadamente lucrativos, como un robo de “catorce o quince mil reales” en el despacho de unos corredores mercantiles, o el de 20.000 reales en alhajas sustraídas en una joyería²⁶¹⁵. En junio de 1885 desapareció la caja de fondos de la Comandancia de Carabineros coruñesa, que al parecer contenía más de tres mil pesetas²⁶¹⁶.

Un ejemplo de crimen de este tipo es el robo realizado en diciembre de 1886 en una relojería de la calle Real de A Coruña. El local se encontraba en pleno centro geográfico y simbólico de la ciudad, en una zona patrullada por la noche por un sereno del Ayuntamiento y otros dos a los que mantenían los comerciantes. Era a priori seguro: para acceder había que traspasar un portal cerrado por la noche y una puerta “chapada con planchas de hierro”, con cerradura, barra y candado. Los ladrones acudieron de noche, abriendo el portal con una llave falsa y reventando la puerta empleando una barrena, una trencha y una palanca “completamente nuevas” e iluminándose con una “pequeña linterna” (dejaron las herramientas abandonadas, quizás porque huyeron con prisa). Una vez abierta la puerta, se hicieron con “tres o cuatro mil duros”, dinero en efectivo y decenas de relojes de oro y plata. El robo no fue advertido hasta la mañana siguiente²⁶¹⁷. Aunque en los días posteriores se

²⁶⁰⁸ *La Voz de Galicia* 22-10-1885.

²⁶⁰⁹ *La Voz de Galicia* 07-12-1883, 28-03-1884

²⁶¹⁰ *La Voz de Galicia*, 09-02-1886.

²⁶¹¹ *La Voz de Galicia* 12-02-1884.

²⁶¹² *La Gaceta de Galicia*, 10-12-1883.

²⁶¹³ *La Voz de Galicia*, 31-12-1882.

²⁶¹⁴ *La Voz de Galicia*, 16-10-1885.

²⁶¹⁵ *La Voz de Galicia*, 27-01-1883, 06-01-1886.

²⁶¹⁶ *La Voz de Galicia*, 11-06-1885.

²⁶¹⁷ *La Voz de Galicia*, 23-12-1886.

detuvo a cuatro hombres y dos mujeres, parece que fueron liberados al no haber indicios suficientes para presentar cargos.

Pero el golpe del quinquenio, sin duda, se produjo la noche del domingo 29 de noviembre de 1885, en un golpe contra el almacén de efectos estancados de A Coruña. El valor de los efectos robados, según la prensa, ascendió a algo más de 98.000 pesetas. *La Voz de Galicia* señala, además, que el robo probablemente “tiene relación con otros verificados en los almacenes de efectos estancados de otras provincias (este es el octavo)” y que es obra de un grupo itinerante²⁶¹⁸. Algunos miembros de la banda, al parecer, fueron detenidos al año siguiente en Madrid mientras planeaban un nuevo golpe en Granada²⁶¹⁹.

Con cierta frecuencia encontramos a detenidos por crímenes cometidos en otras localidades o incluso provincias, o botines que aparecen dispersos por la región²⁶²⁰. Este comportamiento es perfectamente lógico, puesto que actuaban donde surgían oportunidades y robar en un lugar del que no eran vecinos les ayudaba a no ser descubiertos²⁶²¹. La pauta tampoco es nueva, y ya se documenta en los bandoleros gallegos de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, los avances en los medios de transporte tuvieron seguramente un impacto en las bandas de criminales especializados, ampliando la rapidez con la que podían escapar y ampliando el radio de sus actividades y contactos²⁶²².

En febrero de 1886 una timadora emplea el tren, recién llegado a A Coruña, para huir de la ciudad tras estafar género por valor de 1.200 reales y otra banda, tras dar un golpe, huye a Betanzos en ferrocarril²⁶²³. En 1884 cae en la ciudad un grupo de delincuentes que se dedicaban a sustraer muestras de comercios, y que “parece que proceden de Madrid” y un ratero que pocos días antes había robado joyas en Baiona²⁶²⁴; al año siguiente, se detiene en Ferrol a un nativo de Viveiro acusado de un homicidio y robo cometido en La Habana²⁶²⁵. Un detenido en Cambre por expender moneda falsificada recibía el género, al parecer, desde Madrid²⁶²⁶. Otros tres sospechosos en 1886 de robo nocturno “son procedentes de varias poblaciones”²⁶²⁷. Tampoco falta la figura del prófugo que intenta embarcarse al extranjero o a Cuba²⁶²⁸.

En cuanto a la fabricación de moneda falsa, en el quinquenio se encontraron aparatos de fabricación en A Coruña²⁶²⁹. En la cárcel de partido de esta ciudad encontramos cuatro reos con falsificación como crimen primario, aunque quizás se deba a simulaciones documentales.

13.4 Matones y sicarios

²⁶¹⁸ *La Voz de Galicia*, 01-12-1885, 04-12-1885.

²⁶¹⁹ *La Voz de Galicia*, 14-02-1886.

²⁶²⁰ *La Voz de Galicia*, 16-04-1886.

²⁶²¹ IGLESIAS ESTEPA, R. (2004), p. 509.

²⁶²² TURRADO VIDAL, M. (2001), p. 84. En 1859-1860, el 92,7% de los penados españoles habían cometido el delito en su provincia de residencia, frente al 4,4 que estaba domiciliado en otra provincia y un 2,8% cuya procedencia es desconocida, según elaboración propia de los datos presentados por Martínez Ruiz y extraídos, a su vez, de los Anuarios Estadísticos de esos años. MARTÍNEZ RUIZ, E. (1982), p. 164.

²⁶²³ *La Voz de Galicia*, 21-02-1886, 28-08-1886.

²⁶²⁴ *La Voz de Galicia*, 01-05-1884, 05-10-1884.

²⁶²⁵ *La Voz de Galicia*, 09-05-1885.

²⁶²⁶ *La Gaceta de Galicia*, 08-07-1882.

²⁶²⁷ *La Voz de Galicia*, 10-04-1886.

²⁶²⁸ *La Voz de Galicia*, 10-11-1885, *La Gaceta de Galicia*, 31-10-1883.

²⁶²⁹ *La Voz de Galicia*, 27-08-1886.

El delincuente que intimida, mata o hiere por encargo parece ausente en las ciudades gallegas del siglo XIX, al menos según nuestras fuentes, y también el que emplea su fama de violento para vender protección. Gil Maestre cuenta entre el hampa barcelonesa a la figura del pincho, un matón callejero con una estética definida y que se caracterizaba por su disposición a participar en duelos regidos (casi siempre) por un código de honor. La figura se asimila al guapo, el valentón o el curro. En la mayoría de los casos, el pincho es un joven que ha adoptado una actitud y una estética en imitación de modelos andaluces y madrileños de virilidad, y no un matón que consiguiese dinero de sus amenazas. Una minoría, sin embargo, extraía ingresos de este modo de vida: seduciendo jóvenes para las casas de prostitución, manteniendo el orden en casas de juego y cafés cantantes, o aprovechando su fama para realizar sablazos y extorsiones²⁶³⁰. También se pueden encontrar coacciones de matones en las cárceles, y, en la Málaga de finales de siglo, en los negocios de la pesca y las embarcaciones²⁶³¹.

En las urbes gallegas del siglo XIX existían cafés cantantes, que no gozaban de muy buena fama²⁶³², y también timbas ilegales, pero estas no parecen ligadas a un submundo criminal²⁶³³, y en todo caso, el número parece demasiado escaso para que este tipo de actividades permitiesen una carrera criminal. En la campaña de prensa de 1906 ya mencionada en el apartado 11.4 los participantes mencionan a veces de matones o pendencieros “de oficio”, o “curros”; pero lo interpretamos como individuos que buscan gresca con frecuencia, no que se dediquen profesionalmente a ellos.

Según dice uno de los colaboradores, el curro es un “mal educado, sin ser criminal”, aunque cometa un delito²⁶³⁴. Quizás refleja los prejuicios que ya hemos descrito en el capítulo 11, o quizás simplemente quisiese remarcar que este tipo de matones no actúa con premeditación. Si hay una moral de los criminales, esta es difícil de evaluar, y lo más probable es que fuese múltiple. El ficticio quincenero de *La corrección*, de Blasco Ibáñez, miraba con más simpatía a los delincuentes violentos que a los presos por robar. Garofalo afirmaba que los delincuentes de sangre despreciaban a los ladrones, aunque también se daba el caso contrario²⁶³⁵.

Pincho, matón, curro, guapo, valentón, flamenco, jaque, en la época que estudiamos; calavera y majo; en tiempos de Larra son términos sin significado unívoco que designaban a perfiles de hombres violentos, a veces delincuentes, a veces no, a veces en serio, a veces con carácter de burla. Se los relacionaba con la cultura andaluza y madrileña con la palabra flamenquismo: después de un homicidio en el municipio rural de Bergondo, el diario *El Noroeste* emplea en 1902 el término “*grelo-flamenquismo*”²⁶³⁶; algunos años después, *La Voz del Obrero* titula *Guerra al flamenquismo* un artículo que criticaba aspectos de la cultura española, en especial los toros, que consideraban que contribuía a la miseria del proletariado²⁶³⁷.

²⁶³⁰ Otros eran directamente delincuentes que combinaban su actividad criminal con la estética del pincho, o se confundían con los atracadores. GIL MAESTRE, M. (1886), pp. 185-187, 189-190, 193, 195, 197-199.

²⁶³¹ SALILLAS, R. (2004), pp. 211-213.

²⁶³² Después de que se autorice a un café coruñés a establecer un cuadro de cante flamenco, la prensa lamenta “los escándalos, puñaladas y demás excesos que origina una diversión que parecía con tendencias a desaparecer” de la ciudad. *La Voz de Galicia*, 31-10-1886.

²⁶³³ Hallamos partidas de juegos ilegales en campos y cuevas, en casas de recreo y en algún café en el que los jugadores, avisados por un centinela apostado en la puerta, fingen jugar al dominó y al billar cuando se acerca una autoridad. *La Voz de Galicia*, 08-05-1886, 10-12-1886, *La Gaceta de Galicia*, 05-01-1886, 05-02-1886, 08-02-1886.

²⁶³⁴ *La Voz de Galicia*, 29-06-1906.

²⁶³⁵ GAROFALO, R. (1891),

²⁶³⁶ *El Noroeste*, 10-02-1902.

²⁶³⁷ Según FERNÁNDEZ IGNACIO, S. (2018), p. 319.

Puede que *curro* se refiera más al matón de aldea, según el uso que hace *La Voz* por una pelea entre niños: “uno de ellos, lo mismo que cualquier “curro” rural, acometió con una navajita a su contrario, infiriéndole una herida en la espalda, leve por fortuna. Verdaderamente ejemplar”²⁶³⁸. En algún momento se emplea *guapo* para referirse al joven matón gallego que ha adoptado una jerga andaluza²⁶³⁹, pero puede usarse también para designar a los valentones rurales. Pero son términos del lenguaje coloquial sujetos a redefinición e imprecisión, no definiciones académicas. El fenómeno no tiene una única imagen, una gama de comportamientos, y no pretendemos cubrir todas sus acepciones. Al igual que con los *gopnik* rusos²⁶⁴⁰, los *chavs* ingleses²⁶⁴¹, el *flaite* chileno²⁶⁴², el *cani español*²⁶⁴³, nos encontramos con productos del lenguaje coloquial juvenil, no con definiciones precisas. Lo relevante es la presencia cultural de modelos juveniles de masculinidad que pasan por la afirmación violenta de la virilidad.

Designa también una estética, una moda asociada. Veamos la de los pinchos de Barcelona en 1886: sombrero redondo y gacho, americana “suficientemente corta para que no sea americana ni sea chaqueta”, pantalones cortos y estrechos, zapatos acabados en punta, peinado a lo “pan y toros”, patillas, corbata brillante y pechera con corsé. Estos son más bien de pose. Otros, más peligrosos, sustituyen la chaqueta por la blusa corta, gorra baja, pantalón estrecho y corbata con anilla, y algunos de estos son semiprofesionales²⁶⁴⁴. En 1906, el *curro* coruñés es: “mozo, barbilampiño, el pantalón estrecho, la chaqueta corta, cimbrea las caderas como la ramera, anuda el cuello con un pañuelo cuyas puntas flotan como el gallardete de su bravura, y bajo la gorrita de seda se enroscan las guedejas de sus persianas”²⁶⁴⁵. El *guapo* valenciano, descrito por Blasco Ibáñez, va con bocas de tacón alto con pespuntos, pantalones estrechos, chaquetas ajustadas, gorrilla ladeada, tufos en las orejas. En la Restauración, al menos en las ciudades, hubo una dispersión de la ropa del *guapo* o del que quería parecer *guapo*.

Un posible campo para la violencia remunerada serían los enfrentamientos políticos. Si bien, en palabras de González Calleja, el entramado político caciquil de la Restauración “buscaba reducir al mínimo la violencia física explícita” para coaccionar a los votantes, esta ocurría a veces, sobre todo en las zonas rurales, protagonizada por partidas de matones o por las propias fuerzas de la autoridad, y la violencia caciquil “se hacía notar donde y cuando fracasaban o resultaban ineficaces los métodos “integracionistas” habituales”²⁶⁴⁶. En la Restauración, sobre todo a partir del siglo XX, también existieron grupos republicanos, radicales, carlistas y mauristas que cometían actos de violencia callejera (en general parece tratarse de miembros de los grupos juveniles de estas corrientes en ámbitos urbanos, pero en algún caso se habla de “matones contratados”)²⁶⁴⁷, a los que hay que sumar la conflictividad asociada a los conflictos laborales. Es posible que en algunos de los últimos se contratasen pistoleros por parte de sindicalistas o patronos, aunque no hemos visto directamente ningún caso en Galicia.

²⁶³⁸ LV, 25-05-1921, p. 3.

²⁶³⁹ *El Eco de Santiago*, 24-10-1899, en PERNAS OROZA, H. (2001), p. 229.

²⁶⁴⁰ GAVRILIUK, V. V. (2011).

²⁶⁴¹ YOUNG, R. (2012).

²⁶⁴² GARCIA, M. y MADRIAZA, P. (2005).

²⁶⁴³ ROJO, T. (2009).

²⁶⁴⁴ GIL MAESTRE, M. (1886), pp. 185-186.

²⁶⁴⁵ *La Voz de Galicia*, 04-07-1906.

²⁶⁴⁶ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), pp. 53-54. Muñoz Jofre afirma que “el uso de la violencia explícita para la manipulación electoral fue poco habitual hasta la entrada del siglo XX”, pero, hasta donde sabemos, no hay un estudio numérico sobre el número de incidentes en los primeros años de la Restauración. MUÑOZ JOFRE (2016), p. 15. Así, sabemos que también ocurría en los procesos electorales británicos en los años 60 del siglo XIX, pero resulta imposible hacer comparaciones. SPIERENBURG, P. (2008), p. 201.

²⁶⁴⁷ GONZÁLEZ CALLEJA, E. (1998), pp. 153, 359, 382-385, 478, 489, 492, 544.

13.5 Contrabandistas, matuteros y traficantes de personas

En la cárcel de partido de A Coruña se conservan una quincena de condenas por contrabando para (el 1,5% de las condenas por crimen lucrativo) y seguramente se corresponden con la introducción de material a través del puerto sin pagar derechos de aduana; una actividad que también sabemos que existía, pero de la que tenemos pocos datos. En Santiago, localidad de interior, no se ha conservado, por el contrario, ninguna.

En ambas ciudades, sin embargo, prosperaba un tipo de estraperlo que apenas deja huellas directas en las estadísticas judiciales: el matute para no pagar el recargo de Consumos, un recargo municipal sobre los productos de primera necesidad, y, sobre todo, los alimentos básicos, cuya impopularidad ya hemos visto en el apartado 8.5. Pero, pese a la hostilidad que generaba, era esencial para los ayuntamientos. Observando las cuentas generales de ingresos y gastos municipales de A Coruña y Santiago en la década de 1880, comprobamos que Consumos supone más de dos tercios de la primera partida²⁶⁴⁸.

En A Coruña y Santiago, como en los demás principales núcleos de población, Consumos se cobraba a través de puestos de control situados en las principales vías de acceso a la ciudad, los fielatos. Es en estos *checkpoints* en los que los dependientes de Consumos (habitualmente personal privado, ya que frecuentemente se arrendaba el cobro a un contratista a cambio de un pago fijo) vigilan y cachean a los que quieren entrar en la ciudad. Pese a no ser un cuerpo policial en el sentido estricto de la palabra, portaban porras y en ocasiones vemos que ayudan a las fuerzas del orden propiamente dichas a perseguir el crimen. Una sentencia de 1884 del Tribunal Supremo les confiere carácter de autoridad²⁶⁴⁹. Para evadir estos fielatos existe una auténtica industria, la de los matuteros, que intentar burlar la vigilancia de los agentes utilizando tretas como la de introducir alcohol en vejigas o atarse piezas de carne por debajo de la ropa²⁶⁵⁰. En Santiago se producen escenas chuscas cuando los matuteros intentan constantemente colarse por el fielato y cuando son perseguidos se refugian en una acera que pertenecía al extinto municipio de Conxo, como en el “juego de las cuatro esquinas”. No encontramos a ningún condenado por matute en las cárceles de partido de Santiago y A Coruña, interpretamos que porque la evasión simple era objeto de sanción administrativa y no penal²⁶⁵¹.

Pero la prensa local da imagen de una gran conflictividad. Estallan peleas cuando los matuteros se niegan a ser registrados, o cuando intentan abrirse paso por la fuerza, bien sea luchando “brazo a brazo” y saliendo vencedores gracias a su superioridad numérica sobre los dependientes o empleando una navaja para herir al encargado²⁶⁵². Un joven de 18 años deja a las puertas de la muerte a un agente de Consumos compostelano en 1884, de una puñalada²⁶⁵³. Los dependientes, por su parte, suman a su impopularidad como agentes de cobro una reputación de brutalidad. En A Coruña y en Santiago vemos cómo mujeres que se niegan a ser registradas acaban en el hospital tras

²⁶⁴⁸ En A Coruña supone el 87,3% de los ingresos del Ayuntamiento en el año económico de 1881-1882, el 79,6% en el de 1882-1883, el 76,8% en 1883-1884, el 79,8% en 1884-1885, el 69,07% en 1885-1886 y en 1886-1887, coincidiendo con el motín de consumos, el 67,4%. Era un hecho generalizado a lo largo de la geografía española. BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2008), p. 65.

²⁶⁴⁹ *La Voz de Galicia*, 01-09-1886.

²⁶⁵⁰ *La Voz de Galicia*, 26-10-1886, *La Gaceta de Galicia*, 19-04-1886.

²⁶⁵¹ En Santiago tenemos a un reo por resistencia al pago de Consumos, y otros cinco por maltratar a un dependiente; estos últimos sufren arrestos menores o entran en la cárcel por impagos. En A Coruña no encontramos alusiones a Consumos en la tipología de delitos de los encarcelados, seguramente porque no se considerase necesario anotar específicamente, o porque la mayoría de enfrentamientos se resolvían en juicios de faltas.

²⁶⁵² *La Voz de Galicia*, 16-11-1886, 17-11-1886.

²⁶⁵³ *La Gaceta de Galicia*, 26-03-1884.

los correspondientes golpes por parte de los agentes²⁶⁵⁴. En la capital, en 1886, “los juicios de faltas en los que figuran como principales actores los dependientes de consumos, menudean que es un primor”, ya que “algo ligera parece que tienen la mano”²⁶⁵⁵. Es de suponer, sin embargo, que la mayor parte de los enfrentamientos quedasen en insultos, amenazas y empujones²⁶⁵⁶.

Los consumidores se enfrentan en A Coruña a algún grupo organizado que emplea armas de fuego, un fenómeno que también se dio en el Madrid contemporáneo²⁶⁵⁷. Reproducimos una noticia del 22 de agosto de 1886 aparecida en *La Voz de Galicia*:

“A consecuencia de una batida que los dependientes de consumos tuvieron en el lugar de Nelle próximo a Vioño, en la noche de anteayer, resultó herido de un tiro uno de los referidos vigilantes. (...) No es esta la única vez que los dependientes de consumo han tenido que sostener reñidas refriegas con una partida de matuteros que de poco tiempo a esta parte se organizó, pues frecuentemente se oyen detonaciones hacia los molinos. La referida partida de contrabandistas no es por ahora muy numerosa, según hemos oído, pues sólo consta de unos veinte individuos.”

No sabemos cuáles eran las actitudes populares hacia los matuteros, pero seguramente no se les considerase ladrones. Cuando los dependientes de consumos persiguen a un matutero que se ha dado a la fuga hasta el centro de A Coruña pocos meses después del motín, “les fue arrebatado enseguida por una veintena de personas que se pusieron de parte del contrabandista”. No cabe duda de que muchos matuteros eran simples obreros o aldeanos cuyos salarios no rentaban lo suficiente como para dar de comer a sus familias, y que querían ahorrar algunas pesetas saltándose una tasa que percibían como injusta, o miembros de las clases populares empobrecidos que lo habían convertido en un modo de subsistencia. Este era, quizás, el caso de *La Galga*, una mujer “que se dedica al matute de carnes” y que se enfrentó a varios dependientes con un cuchillo en 1882²⁶⁵⁸.

Sin embargo, algunos testimonios apuntan a que el fraude en Consumos era un negocio para grupos de delinquentes especializados, políticos y grandes industriales, por lo que no conviene identificar automáticamente el matute con algún tipo de resistencia popular. Según un diario madrileño, en 1890 había 3.000 matuteros en la capital. Algunos trabajaban por su cuenta pero otros se agremiaban “una organización iniciada y desarrollada en Madrid” y, agrupados en sociedades, trabajaban para un grupo de “contados” grandes traficantes con protectores influyentes²⁶⁵⁹. Parte de la información, como los jornales de las 16 categorías de profesionales de matuteros que describe el diario, seguramente sea inventada, pero en esta época encontramos en Madrid a un capo del matute en supuesta connivencia con un concejal, que tuvo que dimitir, y con una serie de funcionarios que finalmente fueron absueltos, además de otros cargos políticos. Otros grandes empresarios evadían el pago de la tasa²⁶⁶⁰.

Hallamos similares acusaciones en A Coruña. En 1886 *La Voz de Galicia* afirma que el matute está dirigido por las clases altas, y que las cuadrillas de matuteros se organizan por parte de algún “caballero con familia y casa puesta que vista bien, que tenga muy buenas relaciones y muy útiles negocios” que “busca a unos cuantos infortunados que (...) no tienen destino, ni dinero, ni comida para sus pequeñuelos”²⁶⁶¹. En la década de 1910 un informe del ayuntamiento coruñés apuntó a

²⁶⁵⁴ *La Voz de Galicia*, 31-12-1886, *La Gaceta de Galicia*, 28-08-1883

²⁶⁵⁵ *La Voz de Galicia*, 01-09-1886.

²⁶⁵⁶ Es lo más habitual en La Mancha durante la Restauración, según BASCUÑÁN AÑOVER, O. (2008), p. 282.

²⁶⁵⁷ MORENO LUZÓN, J. (1998), p. 76.

²⁶⁵⁸ *La Voz de Galicia* 15-07-1882.

²⁶⁵⁹ *La Época*, 28-06-1890.

²⁶⁶⁰ MORENO LUZÓN, J. (1998), p. 77-78, 92, 116.

²⁶⁶¹ *La Voz de Galicia*, 25-12-1886.

que se cometían múltiples corruptelas en el cobro del impuesto (que en esta época había sido municipalizado). En él se señalaba la connivencia de empresarios locales, lo que provocó la protesta de su representante oficioso en el pleno²⁶⁶². Al igual que en el caso de las actuales mafias de tráfico de drogas, si la evasión de Consumos había llegado a convertirse en un negocio rentable, los que extraían sus beneficios del fraude serían los menos interesados en eliminarlo: cuanto más elevada fuese la tasa, y más se reprimiese a la competencia, mayor sería el beneficio.

Al igual que el matute surgió por las condiciones específicas de la fiscalidad y miseria de la época, la pobreza y superpoblación de Galicia y las restricciones a la emigración generaron un tipo delictivo particular, el de la emigración ilegal. Algunos emigrantes intentaban burlar a las autoridades por su cuenta, pero otros recurrían a “enganchadores” que prometían ayudarles con los trámites o que les proporcionaban información falsa; por supuesto, cobrándoles. Los *ganchos* proliferan en A Coruña; algunos timan directamente a los campesinos, vendiéndoles pasajes para barcos que no van a América²⁶⁶³, y otros les proporcionan documentos falsos o sirven de contacto con cómplices en los buques. El 18 de enero de 1886 se detiene a ocho personas poco antes de que se embarquen en el puerto de la ciudad: “tres habían dado 80 pesos cada uno, para el embarque, a persona no designada, uno tenía documentación falsa, otro se hallaba escondido a bordo, dos intentaron embarcarse sin documentos, y uno con cédula de vecindad falsa”²⁶⁶⁴.

Pocos días después el Gobernador Civil ordenó realizar una redada de *ganchos* tras recibir las quejas de una mujer a la que “a pretexto de llenar un requisito de los llamados indispensables, le estafaron una pequeña cantidad; quedándosele además con los documentos”. En la redada fueron detenidos durante unas horas cinco coruñeses y un compostelano que, declarándose inocentes, enviaron un manifiesto a los medios en el que decían que los *enganchadores* “deben ser bastante conocidos por los agentes de la autoridad, por cuanto frecuentan bastante esta población tres y cuatro veces cada mes, para detener indebidamente a otros sujetos”; y señalaron a dos vecinos con nombres y apellidos: “D. Manuel Varela y D. Victoriano Pérez y de fuera de la población otros varios de los que pueden dar razón las casas consignatarias”²⁶⁶⁵. Con los estafadores del puerto conviven otros que actúan en los lugares de origen de los emigrantes; en 1886 la policía de Santiago detiene a un tal Manuel Seleña, “el cual parece que se dedicaba a embarcar gente para la América del Sur”²⁶⁶⁶.

²⁶⁶² *Libro de plenos de A Coruña*, sesión del 21-08-1918.

²⁶⁶³ *La Voz de Galicia*, 12-03-1886.

²⁶⁶⁴ *La Voz de Galicia*, 20-01-1886.

²⁶⁶⁵ *La Voz de Galicia*, 21-01-1886.

²⁶⁶⁶ *La Voz de Galicia*, 10-02-1886.

14. CONCLUSIONES

La Galicia del siglo XIX y el primer tercio del XX vivió enormes cambios en la organización de la justicia y la policía. De una región dividida en múltiples unidades judiciales, con magistrados designados por notables o la Iglesia y un cuerpo heterogéneo de leyes producto de la actividad legislativa de siglos, pasamos a un modelo de justicia absoluto, implantado por el poder central, con criterios estrictamente definidos. En el cuerpo de magistrados, aunque estos procesos no sean perfectos, es perceptible una tendencia hacia la profesionalización e independencia del poder político (capítulo 2).

De un modelo en el que la criminalidad se perseguía por particulares o por el Ejército pasamos a una creciente presencia de cuerpos uniformados profesionalizados. En un principio su dotación era muy escasa y su actividad hacía énfasis en delitos concretos (contra la Hacienda, grandes cuadrillas de bandidos, mantenimiento del orden público). A medida que su implantación se hace mayor también lo hace su presencia en la represión del crimen en general. Aún así, las fuerzas desplegadas en Galicia siempre fueron inferiores al promedio estatal (capítulo 3). El proceso de implantación fue paulatino. En el siglo XIX, el aparato municipal (alcaldes, concejales y pedáneos, así como jueces de paz) era crucial en los procesos de detección, represión temprana e instrucción de los delitos, y siguió siendo muy importante durante todo nuestro periodo de estudio (apartados 4.3 y 5.2).

Las tasas de todos los tipos delictivos, desde las agresiones sexuales a las coacciones, son más bajas en Galicia que en el conjunto de España durante la Restauración; la excepción son los delitos contra el honor, que se sitúan en torno al promedio (apartado 6.6). El delito contra la propiedad tuvo un importante crecimiento en Galicia en la década de 1850, coincidiendo con la crisis de subsistencias y un aumento de los delitos motivados por la pura supervivencia (capítulo 5). Desde el periodo isabelino a la Guerra Civil, en los años en los que tenemos datos, siempre se mantiene por debajo de las tasas españolas, con una tendencia a equipararse ya que a lo largo de la Restauración las tasas en el conjunto del país decayeron y las gallegas permanecieron esencialmente estables. La Segunda República supuso un aumento de las causas en los dos ámbitos.

Esta menor intensidad de los atentados contra la propiedad la achacamos a la estructura social y de la propiedad en el rural gallego. La mayor parte de los delitos contra la propiedad son para adquirir patrimonio, y en otras partes de España eran parte de estrategias de supervivencia de sectores desposeídos del acceso a la tierra, en la medida en que se apropiaban de parte del excedente de terratenientes o intentaban seguir aprovechando antiguas propiedades de las comunidades que habían sido privatizadas. Sin embargo, la propiedad estaba más distribuida en Galicia en relación a otras partes de España y se mantuvieron los montes comunales.

En Galicia había pequeños robos y hurtos por una amplia variedad de causas, e individuos del lumpen que recurrían a él frecuentemente (capítulo 13). Pero la estructura social y de la propiedad en Galicia permitía a las clases más desposeídas de la sociedad rural desarrollar estrategias de supervivencia diferentes del hurto: explotar los terrenos de la comunidad, ejercer pequeños oficios artesanales, trabajar y recibir limosna de los vecinos con más posibilidades económicas. Para desarrollarlas precisaban la complicidad de su comunidad, y atentar contra la propiedad de sus vecinos era una forma de perder esta red, pues los ladrones recibían no solo penas severas de acuerdo con los Códigos Penales sino también el rechazo de la población en general. Por otra parte, tenemos delitos destructivos contra la propiedad, incendios y daños, que pueden expresar tanto modos de presión de una colectividad sobre un individuo como animosidades dentro de la misma comunidad. Hay muy pocas condenas de este tipo de delitos, ya que solían quedar impunes (apartados 6.5, 6.8 y 11.4).

Encontramos un pequeño número de criminales que cometen sus actos en grupo y tienen objetivos más ambiciosos. Son los que protagonizan asaltos a viviendas, comercios y almacenes, cometen atracos, y en ocasiones se constituyen en grandes bandas armadas. Las más fuertes, oscilando entre la lucha ideológica y el bandidismo, fueron las cuadrillas carlistas durante las guerras del siglo XIX (apartados 8.1 y 8.3). También existieron también grupos de bandoleros violentos y muy numerosos, pero limitados a la primera mitad del siglo XIX. En el resto del periodo de estudio no desaparecen los asaltos violentos, que se producen sobre todo en el rural y hacia casas aisladas e individuos que van solos o en pequeño número por los caminos, pero los protagonizan cuadrillas pequeñas. No eran un problema generalizado, y constituyen un porcentaje muy pequeño de las muertes violentas en el siglo XX (apartado 7.8). En las ciudades los grandes delitos eran casi siempre robos con fuerza pero sin violencia (apartado 13.3).

Si bien el contrabando fue siempre muy prevalente en las provincias fronterizas con Portugal, en la primera mitad del siglo XIX los delitos fiscales detectados casi siempre eran tráfico ilícito de sal u otras materias sometidas a derechos. En el ámbito municipal, lo serán los pequeños matuteros que pretendían evadir el pago de Consumos (apartados 12.1 y 13.5).

Los delitos contra el orden público son también más bajos en Galicia que lo que sería esperable para su población. No son solo delitos políticos, sino sobre todo faltas de respeto a figuras de autoridad en circunstancias comunes (apartados 6.6 y 6.8). Otra forma de resistencia contra el Estado, la evasión del servicio militar, casi siempre se expresaba a través de formas de evitación individuales, y solo a inicios del XIX, cuando el sistema era novedoso, y en momentos de crisis del poder coercitivo del Estado, vemos acción colectiva para evitarlo (apartado 12.2).

Los motines por subsistencias, consumos y otras reclamaciones populares estuvieron presentes durante todo nuestro periodo de estudio. Pero no eran la opción mayoritaria de protesta popular: incluso en el Antiguo Régimen, las comunidades y grupos de interés gallegos expresaron sus reclamaciones colectivas a través del recurso legal y la petición mucho más que a través del altercado callejero. Con el tiempo fueron incorporándose otras modalidades al repertorio de acción colectiva, como la huelga o la manifestación. La represión estatal, por otra parte, trajo algunas matanzas de amotinados y otros sucesos menos conocidos en los que morían una o dos personas. Pero estos paroxismos son la excepción más que la regla. Los amotinados no solían responder con armas y la mayoría de las algaradas se resolvían sin violencia grave por parte de las autoridades (apartado 8.5 y capítulos 9 y 10). Las muertes a manos de las fuerzas del orden, ya en acciones colectivas o convencionales, eran escasas (apartado 7.10).

En la primera mitad del siglo XIX la concentración de guerras y golpes generó un clima de inseguridad en el que la población se armó y los grupos políticamente activos recurrieron sistemáticamente a la conspiración y a la insurrección cuando no estaban en el poder. Especialmente en el final del Trienio y la Primera Guerra Carlista, el periodo quedó marcado por bandas guerrilleras muy violentas, así como una represión brutal, aunque las muertes fueron relativamente bajas. También proliferaron bandas criminales (apartados 8.1 y 8.2). Más allá de esto, Galicia se vio relativamente poco afectada por las dos últimas guerras carlistas. Durante el Sexenio, especialmente durante la Primera República, vemos motines en contra de las demandas del Estado en cuanto a recursos económicos y humanos, que probablemente tengan que ver con la percepción, por parte de la población, de que el Gobierno no sería capaz de imponerse de manera efectiva (apartados 8.4 y 12.2).

En la Restauración, pese a los pocos recursos materiales y humanos del Estado, sus instituciones judiciales y policiales funcionaban, no había grandes organizaciones criminales ni un clima general de

inseguridad. Esto se refleja en el comportamiento de la sociedad civil gallega, que no recurría a linchamientos ni vigilantismo para perseguir a los delincuentes (apartados 4.2 y 4.3). Los comicios, aunque la violencia de baja intensidad y la coacción estaban presentes como en el resto de Europa en esta época, no generaban grandes choques. Apenas había heridos y la inmensa mayoría de las citas electorales transcurrían sin muertos. Las élites políticas que intentaban manipular los resultados lo hacían sobre todo empleando otros mecanismos de poder blando, o, en todo caso, el fraude (apartados 8.4.1 y 8.4.2).

Sobre la violencia tenemos gran cantidad de lecturas parciales y muchas veces cualitativas, dado que la naturaleza de las fuentes consultadas no nos permite observar cuantitativamente el conjunto del periodo. La visión general es que, a lo largo del siglo XIX, la violencia era en Galicia menor que en el conjunto del país, en especial las modalidades de violencia grave. España partía de unas tasas de homicidio muy elevadas para Europa y en Galicia no lo eran tanto, si bien eran sustancialmente más altas que las actuales.

A lo largo de la Restauración, las tasas de violencia descienden tanto en España como en Galicia, aunque de manera más acusada en el conjunto del país, de manera que, partiendo de niveles muy inferiores en el principio del periodo, Galicia llega a estar en torno a la media nacional. Conectamos este proceso con el proceso de pacificación a largo plazo detectado en toda Europa en los últimos siglos, que deriva, sobre todo, de la progresiva implantación del Estado y la justicia como alternativa a la conflictividad interpersonal. El proceso habría sido más acusado en España ya que partía de tasas de violencia más elevada (apartados 1.6 a 1.8, 5.1, 6.3 y 6.4). Para la Segunda República, los datos de causas penales indican que la violencia en la comunidad despegó y se sitúa por encima del conjunto del país (apartado 6.8).

Ahora bien, dentro de la violencia englobamos muchos fenómenos diferentes (apartados 1.2 a 1.5). La mayor parte de los muertos en nuestro periodo de estudio provenía de riñas y choques entre hombres no emparentados y que no peleaban por motivaciones económicas ni ideológicas, sino mayoritariamente por cuestiones de estatus y autoestima. Estos comportamientos se daban en tasas mucho mayores a las de las pacificadas sociedades europeas contemporáneas, y las muertes son la punta del iceberg de un gran número de enfrentamientos de este tipo que no llegaban a causar fallecimientos. Este tipo de actos los protagonizaban sobre todo hombres jóvenes de las clases populares, en especial en los casos de violencia más intensa, pero también participaban otros grupos, como niños, mujeres o universitarios, cada uno con sus propias dinámicas. En el apartado social, expresa una cultura del enfado, de la agresión, en la que era frecuente la respuesta física (y normalmente inmediata) ante el desafío, la frustración o el ataque verbal (capítulo 10).

Y también aceptada. Este tipo de violencia impulsiva recibía una comprensión mayor que el delito económico por parte de la legislación (apartados 2.2 y 6.4) y también de la población. Sería quizás exagerado decir que era un factor cohesionador, pero no interrumpía los procesos sociales y no generaba una sensación de inseguridad en la población. Esta aceptación enlazaba con un complejo mosaico de actitudes culturales como la aceptación de la violencia lúdica, la importancia dada a la honra, ciertos modos de sociabilidad propios de la juventud masculina y el uso generalizado de armas. Otras formas de agresiones, como la que ahora conocemos como violencia de género, eran también más elevadas que en la actualidad, pero son menos características del periodo.

La violencia cotidiana de riñas parece en decadencia durante nuestro periodo de estudio. Observaciones parciales apuntan a que los cuchillos se empleaban menos en las peleas, a que hubo ofensivas civilizadoras por parte de agrupaciones civiles y del Estado, a que tanto los movimientos obreros como las clases ilustradas hacían proselitismo de un modelo de masculinidad más pacífico y del fomento del autocontrol. Las generaciones criadas en el rural gallego tras la Guerra Civil parecen

menos propensas a aceptar la violencia impulsiva que sus antecesores (apartados 1.6 a 1.8 y capítulos 7 y 11).

Aunque había otros ámbitos de conflicto, la violencia sociopolítica al final de la Restauración provenía sobre todo de la actividad terrorista sindical y su represión. Causaba pocos muertos. Los modelos más comunes de acción colectiva de las fuerzas obreristas eran manifestaciones y huelgas, que derivaban a veces en choques con las fuerzas policiales. Los obreros también realizaban campañas de intimidación y coacción. Normalmente se basaban en ataques simbólicos y contra objetos (en particular, con la colocación de explosivos en edificios desocupados). En algunas ocasiones implicaban violencia directa contra patronos y sobre todo esquirols, o estos respondían violentamente. Esto generó puntualmente ciclos de violencia que podían concentrar muchos incidentes graves en un corto espacio de tiempo (apartados 9.2, 9.3).

En la Segunda República, a esta violencia de carácter sindical se añaden los choques entre izquierdistas y obreristas, por un lado, y por extremistas de derecha, por otra, tras la fundación de Falange. En 1935 empiezan choques de baja entidad en las calles de villas y ciudades, aunque con solo un muerto. En 1936 se multiplica su letalidad, con choques durante la campaña para los comicios nacionales y un fin de semana electoral muy violento. Tras la victoria electoral de las izquierdas siguió la violencia. Durante este año encontramos un número de muertos desconocidos en el pasado reciente de Galicia, debido a que, además de enfrentamientos callejeros, proliferaron ataques con armas con el objetivo de asesinar a miembros de grupos políticos contrarios, en especial a manos de la extrema derecha (capítulo 10). Al tiempo, se produjeron varias decenas de ataques sin víctimas a objetivos eclesiásticos, un fenómeno también de una intensidad sin precedentes.

No hay que exagerar esta intensidad. Los muertos por violencia sociopolítica nunca sobrepasaron numéricamente a los homicidios cotidianos, incluso en 1936. Los ataques letales por motivos sociopolíticos tenían como objetivo sobre a todo a grupos de hombres jóvenes politizados, con lo que no ponían en peligro a la población general. Este año el orden público no llegó a colapsar en Galicia. Las milicias, tanto de derechas como de izquierdas, no supusieron un peligro para el poder del Estado, y las izquierdas no aplicaron medidas revolucionarias, salvo en casos puntuales. Pero en términos simbólicos, tuvo un impacto desproporcionado en la percepción popular, en gran medida debido al discurso de las derechas que empleaba estos hechos para acusar al Gobierno de no poder controlar el país.

15. BIBLIOGRAFÍA

Obras anteriores a 1936

ARENAL, Concepción (2000, originalmente 1869): *La mujer del porvenir*, Vigo, Ir Indo Edicións.

ARENAL, Concepción (1883): “La mujer de su casa”, en ARENAL, Concepción (2017): *De la mujer. Selección de obras*, Sevilla, Triskel Ediciones, pp. 90-170.

ARENAL, Concepción (1892): “La educación de la mujer”, en ARENAL, Concepción (2017): *De la mujer. Selección de obras*, Sevilla, Triskel Ediciones, pp. 171-188.

BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio (1904): *Alrededor del delito y de la pena*, Madrid, Viuda de Rodríguez Serra.

BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio (1906): *Criminología de los delitos de sangre en España*, Madrid, Editorial Internacional.

BLASCO IBÁÑEZ, Vicente (1978, originalmente, 1893): *Cuentos Valencianos*, Barcelona, Mundo Actual de Ediciones.

BLOCH, Marc (2002, originalmente 1930): “La lucha por el individualismo agrario en la Francia del siglo XVIII”, en BLOCH, Etienne (ed.): *La tierra y el campesino. Agricultura y vida rural en los siglos XVII y XVIII*, Barcelona, Crítica, pp. 241-322.

BRAÑAS, G. (1862): “El Carnaval de la Coruña en 1862”, en *Galicia. Revista universal de este reino*, nº 6, año III, A Coruña, Imprenta del Hospicio Provincial, pp. 81-87.

CASÁS FERNÁNDEZ, Manuel (inédito hasta 1999): *Nuestro diario íntimo: memorias del alcalde Manuel Casás Fernández (al servicio de La Coruña y de Galicia)*, A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña.

Inspección General de la Guardia Civil (2001, originalmente 1846): *Cartilla del Guardia Civil*, aprobada por S. M. en Real orden de 20 de diciembre de 1845, Madrid, Imprenta de D. Victoriano Hernando.

Consultado en: http://www.guardiacivil.es/documentos/ConoceGC/Cartilla_Guardia_Civil_1845.pdf

CERVERA BARAT, R. (1990, originalmente, 1898): “Alcoholismo y civilización”, en REY GONZÁLEZ, Antonio M.: *Estudios médico-sociales sobre marginados en la España del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, pp. 105-128.

COSTA MARTÍNEZ, Tomás (1912): *Formas típicas de Guardería Rural*, Madrid, Establecimiento tipográfico de Jaime Ratés Martín.

DO PORTO, Juan (1846): *Reseña histórica de los últimos acontecimientos en Galicia*.

DURKHEIM, Émile (1976, originalmente, 1897): *El suicidio*, Madrid, Akal.

DURKHEIM, Émile (2003, originalmente 1912): *Lecciones de sociología: física de las costumbres y el derecho y otros escritos sobre el individualismo, los intelectuales y la democracia*, Buenos Aires, Miño y Dávila.

FERRI, Enrico: *Homicidio-suicidio*, Madrid, Reus, 1934. Es la traducción de la quinta edición de la obra.

FUENSANTA DE PALMA, Marqués de la (1906): *La guardería rural*, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús.

GAROFALO, Raffaele (2005, originalmente, 1891): *La criminología: estudio sobre el delito y la teoría de la represión*, Montevideo, B. de F..

GIMENO AGIUS, José (1885-A): "El crimen en España", *Revista de España*, tomo 151, pp. 493-519.

GIMENO AGIUS, José (1885-B): "El crimen en España", *Revista de España*, tomo 152, pp. 334-356.

GIMENO AZCARATE, Manuel (1900): *La criminalidad en Asturias. Estadística (1883-1897)*, Oviedo, Escuela Tipográfica del Hospicio. Consultado en:
https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=4006980

GIL MAESTRE, Manuel (1886): *La criminalidad en Barcelona y en las grandes poblaciones*, Barcelona, tipografía de Leodegario Obradors. Consultado en:
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000129755&page=1>

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Homobono (1920): *Garaboa (el estudiante de Santiago)*, Librería Porto, Santiago.

MARTÍN DE BALSAMEDA (1818): *Decretos del Rey Don Fernando VII: año sexto de su restitución al trono de las Españas: se refieren todas las reales resoluciones generales que se han expedido por los diferentes ministerios y consejos desde el 4 de Mayo de 1814 hasta el fin de diciembre de igual año : tomo primero*, Madrid, Imprenta Real.

Consultado en:
<https://books.google.es/books?id=3gOqBwIXSIMC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

LASSALA Y PALOMARES, Vicente (1864): *Proyecto para la organización de la Guardia Rural*, Valencia, Imprenta de La Opinión.

Consultado en: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ucm.5321955198;view=1up;seq=64>

LÓPEZ DE LA VEGA, José (1862): "La homeopatía es el arte de curar", en *Galicia. Revista universal de este reino*, año III, nº 23, A Coruña, Imprenta del Hospicio Provincial, pp. 359-360.

LLORENS Y GALLARD, Ignacio (1990, originalmente, 1894): "Un vicio fin de siglo: el morfinismo", en REY GONZÁLEZ, Antonio M.: *Estudios médico-sociales sobre marginados en la España del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, pp. 129-154.

MAS Y ABAD, Celestino (1850-A): *Consultor de alcaldes y ayuntamientos. Tomo Primero*, Madrid, Imprenta y Librería de D. José María Marés.

MAS Y ABAD, Celestino (1850-B): *Consultor de alcaldes y ayuntamientos. Tomo Segundo*, Madrid, Imprenta y Librería de D. José María Marés.

MAS Y ABAD, Celestino (1857): *Manual del juez de paz, cuarta edición*, Madrid, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra.

PARDO BAZÁN, Emilia (1945, originalmente, 1888): *Cuentos de la tierra (2ª edición)*, Buenos Aires, Emecé.

PARDO BAZÁN, Emilia (1890): “La mujer española”, en PARDO BAZÁN, Emilia (1976): *La mujer española y otros artículos feministas*, Madrid, Editoria Nacional, D. L, pp. 25-70. Originalmente en *La España Moderna*, año II, nº XVII, pp. 101-113.

PARDO BAZÁN, Emilia (1892-A): “Tristana”, en PARDO BAZÁN, Emilia (1976): *La mujer española y otros artículos feministas*, Madrid, Editoria Nacional, D. L, pp. 135-142. Originalmente en *Nuevo Teatro Crítico*, año II, nº 17, pp. 77-90.

PARDO BAZÁN, Emilia (1892-B): “La educación del hombre y de la mujer. Sus relaciones y diferencias (Memoria leída en el Congreso pedagógico el día 16 de octubre de 1892)”, en PARDO BAZÁN, Emilia (1976): *La mujer española y otros artículos feministas*, Madrid, Editoria Nacional, D. L, pp. 71-97. Originalmente en *Nuevo Teatro Crítico*, año II, nº 22, pp. 14-82.

PARDO BAZÁN, Emilia (1892-C): “Resumen. De las ponencias y memorias de la sección V, leído en el Congreso pedagógico el 19 de octubre de 1892”, en PARDO BAZÁN, Emilia (1976): *La mujer española y otros artículos feministas*, Madrid, Editoria Nacional, D. L, pp. 103-111.

PARDO BAZÁN, Emilia (1893): “Concepción Arenal y sus ideas acerca de la mujer”, en PARDO BAZÁN, Emilia (1976): *La mujer española y otros artículos feministas*, Madrid, Editoria Nacional, D. L, pp. 173-195. Originalmente en *Nuevo Teatro Crítico*, año III, nº 26, pp. 269-304.

PARDO BAZÁN, Emilia (2001, originalmente, diversas fechas): *Cuentos de la Galicia antigua*, Madrid, Bercimuel.

PARDO BAZÁN, Emilia (2002, originalmente, diversas fechas): *Cuentos sangrientos*, Madrid, Bercimuel.

PÉREZ LUGÍN, Alejandro (2009, originalmente 1915): *La casa de la Troya*, Santiago de Compostela, AugA Editoria y Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela.

PÉREZ MARTÍN, Juan Luis (2000): “Distribución territorial del delito en España”, en *Cuadernos de la Guardia Civil. Revista de Seguridad Pública*, nº 22, pp. 51-70.

PERIER, Carlos María (1864): *Observaciones sobre la guardería rural en España*, Madrid, Imprenta a cargo de Julián Peña.

POUND, Roscoe (1910): “Law in Books, Law in Action”, en *American Law Review*, January-February, Vol. XLIV, pp. 12-36.

Recuperado de:
https://archive.org/stream/readingsonrelat01orthgoog/readingsonrelat01orthgoog_djvu.txt

REDONET Y LÓPEZ-DORIGA, Luis (1916): *Policía rural en España, volumen I*, Madrid, Sucesores de M. Minuesa de los Ríos.

RIZO GÓMEZ, Ramón (2002): "Psicología y utilización de las armas de fuego", en *Cuadernos de la Guardia Civil. Revista de Seguridad Pública*, nº 26, pp. 103-113.

ROCCA, Albert Jean Michel (2017, originalmente 1814): *Memorias de un soldado francés en la Guerra de Independencia*, Guadalix de la Sierra, Guadarramistas.

ROSSELL, Agustín (1848): *Tratado de las enfermedades y defectos físicos que se alegan para eximirse del servicio militar*, Madrid, Establecimiento Tipográfico Militar.

RUBIO, Lorenzo (1910): "La guardería rural y forestal", en *Revista técnica de la Guardia Civil*, nº 3, pp. 161-166.

SANCHÍS BANÚS, José (1990, originalmente 1916): "Estudio médico-social del niño golfo", en REY GONZÁLEZ, Antonio M.: *Estudios médico-sociales sobre marginados en la España del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, 1990, pp. 173-196.

SANTIAGO SOMOZA, Antonio (1860): "Jueces de paz. Asunto de suma importancia y trascendencia en Galicia", en *Galicia. Revista universal de este reino*, nº 6, año I, A Coruña, Imprenta del Hospicio Provincial, pp. 88-89.

SALILLAS, Rafael (aut.), MIRANDA, María Jesús (ed.) (2004, originalmente 1896 y 1898): *El delincuente español: hampa y lenguaje*, Madrid, CIS:BOE.

SARABIA PARDO, Jesús (1990, originalmente 1889): "El suicidio como enfermedad social", en REY GONZÁLEZ, Antonio M.: *Estudios médico-sociales sobre marginados en la España del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, pp. 155-171.

SERRANO GÓMEZ, Juan (1902): "Burgos, Soria, Logroño" en *Derecho consuetudinario y economía popular de España, Tomo II*, Barcelona, Imprenta de Heinrich y Cª, pp. 350-398.

TABOADA Y LEAL, Nicolás (1822): *Canto épico al exaltado patriotismo que han manifestado en febrero del presente año los milicianos voluntarios de Santiago*, Santiago, Oficina de D. Manuel Antonio Rey.

Consultado en: <http://hdl.handle.net/10347/8128>

VALLE-INCLÁN, Ramón del (1992, originalmente en 1927): "La corte de los milagros", en VALLE INCLÁN, Ramón del: *La Corte de los Milagros; El Trueno Dorado*, Barcelona, Círculo de Lectores, pp. 51-428.

Obras posteriores a 1936

ACHEBE, Chinua (2010): *Todo se desmorona*, Barcelona, Debolsillo.

AEBI, Marcelo F, LINDE, Antonia (2016): "Long-term trends in crime. Continuity and change", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 57-87.

AGÜERO, Alejandro (2007): "Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional", en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 19-58.

AKANUMA S. (2019): "The Common Ancestor of All Modern Life". en YAMAGISHI A., KAKEGAWA T., USUI T. (eds): *Astrobiology*, Singapur, Springer.

ANTÓN ONECA, José (1970): *El Código Penal de 1870*.

Consultado en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2784872.pdf>

ALLOZA, Ángel (2000): *La Vara quebrada de la justicia : un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre lo siglos XVI y XVIII*, Madrid, Catarata.

ALONSO ÁLVAREZ, Luis (2005): "La crisis de la economía tradicional: continuidad y cambio en la Galicia del siglo XIX", en DE JUANA, Jesús, PRADA, Julio (coords.): *Historia contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, pp. 33-56.

ALONSO RÍOS, A. (2006): *O Señor Afranio. Ou como me rispei das gadoupas da morte*, Vigo, A Nosa Terra.

ALONSO ROMERO, María Paz (2007): "Las reglas de juego: Herencia procesal y constitucionalismo", en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 209-242.

ÁLVAREZ CASTRO, Xosé (2018): "As mortes no Campo da Porta. A represión da revolta de Salcedo" en "*De nós*": *monografías con perspectiva galega*, nº 1, pp. 5-11.

ÁLVAREZ GÓMEZ, Santiago (1985): *Memorias I. Recuerdos de infancia y de juventud (1920-1936)*, Sada, Edicións do Castro.

ÁLVAREZ JUNCO, José (2001): *Mater dolorosa: la idea de España en el siglo XIX*, Madrid, Taurus.

ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel, VILLA GARCÍA, Roberto (2017): *1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular*, Barcelona, Espasa.

ALVAJAR LÓPEZ, Javier (1992): "La Coruña de mi adolescencia. Recuerdos de la Segunda República Española", en *Anuario Brigantino*, nº 15, pp. 149-174.

ALVAJAR LÓPEZ, Teresa (2012): *Teresa Alvarar López. Memorias dunha republicana. Edición, tradución, introdución e notas de Aurora Marco*, Santiago de Compostela, Laiovento.

AMPUDIA DE HARO, Fernando (2007): *Las bridas de la conducta : una aproximación al proceso civilizatorio español*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

ARESTI, Nerea (2010): *Masculinidades en tela de juicio: hombres y género en el primer tercio del siglo XX*, Madrid, Cátedra.

ARESTI, Nerea (2017): "La hombría perdida en el tiempo. Masculinidad y nación española a finales del siglo XIX", en ZABALGOITIA HERRERA, Mauricio (ed): *Hombres en peligro. Género, nación e imperio en la España de cambio de siglo (XIX-XX)*, Madrid, Iberoamericana, pp. 19-38.

ARÓSTEGUI, Julio (1994): "Violencia, sociedad y política: la definición de la violencia", en *Ayer*, nº 13, pp. 17-55.

ARROYO DE LAS HERAS, Alfonso, MUÑOZ CUESTA, Javier (1993): *Delito de lesiones*, Pamplona, Aranzadi.

ART, Jan (2004): "Social Control in Belgium: The Catholic Factor" , en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press, pp. 112-124.

ARAQUE HONTANGAS, Natividad (2010): "Las primeras elecciones celebradas con el Estatuto Real de 1834", en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, vol 32, pp. 95-108.

ARTIAGA REGO, Aurora (2005): "La sociedad gallega (C. 1775-1874)", en DE JUANA, Jesús, PRADA, Julio (coords.): *Historia contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, pp. 57-82.

ARTOLA GALLEGU, Miguel (2008): *La España de Fernando VII*, Madrid, Espasa.

AVILÉS, Juan, HERRERÍN, Ángel (2010): "Propaganda por el hecho y propaganda por la represión: anarquismo y violencia en España a fines del siglo XIX", en *Ayer*, nº 80, pp. 165-192.

AYALA VICENTE, Fernando (2003): *La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931-1936)*, Brenes, Muñoz Moya.

BAHAMONDE MAGRO, Ángel, TORO MÉRIDA, Julián (1980): "Estudio preliminar. El fraude alimentario en el Madrid del siglo XIX", en *Estudios de Historia Social*, nº15, pp. 285-296.

BALBOA LÓPEZ, Xesús (1984): O problema das quintas en Galicia durante o Sexenio Revolucionario 1868-1874, Tesis Doctoral defendida en la Universidade de Santiago de Compostela.

BALBOA LÓPEZ, Xesús (1990): *O monte en Galicia*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia.

BALBOA LÓPEZ, Xesús (1991): "Quintos e prófugos: os galegos e o servizo militar no século XIX", en CASTRO, Xavier, DE JUANA, Jesús (dirs.): *Mentalidades colectivas e ideoloxías / VI Xornadas de Historia de Galicia*, Ourense, Servizo de publicacións da Deputación Provincial, pp. 49-72.

BALDELLOU MONCLÚS, Daniel Santiago, ALFARO PÉREZ, Francisco José (2015): "Yesca y fuego. Condicionantes de la conducta sexual del servicio doméstico español en el siglo XVIII", en *Hispania*, vol. LXXV, nº. 251, septiembre-diciembre, págs. 695-724.

BARBERO, Alessandro (2011): *Lepanto: la batalla de los tres imperios*, Barcelona, Pasado & Presente.

BARBERO, Alessandro (2015): *Waterloo: la última batalla de Napoléon*, Barcelona: Pasado y Presente.

BARCIELA, Carlos: (1989): "La España del "estraperlo", en TUÑÓN DE LARA, Manuel: *El primer franquismo. España durante la Segunda Guerra Mundial*, México, Siglo XXI, 1989, pp. 105-122.

BARÓN FERNÁNDEZ, José (1998): *El movimiento cantonal de 1873 (Primera República)*, Sada, Edicións do Castro.

BARRAL MARTÍNEZ, Margarita (2007): *Montero Ríos y Compostela: un feudo clientelar*, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago.

BARRIO ALONSO, Ángeles (2006): “La oportunidad perdida: 1919, mito y realidad del poder sindical”, en *Ayer*, nº 63, pp. 153-184.

BARTHOLOW, Bruce D. (2018): “The aggressive brain: insights from neuroscience”, en *Current Opinion in Psychology*, nº 19, pp. 60–64.

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (1982): *Liberales y absolutistas en Galicia: (1808-1833)*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia.

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (1985): “A conspiración liberal galega de 1817”, en *Grial*, tomo 23, nº 87, pp. 32-46, Vigo, Galaxia.

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón, con CENDÓN AMADO, María Aurora, SOUTO BLANCO, María Jesús (colab.) (2003): *Historia de la Univesidad de Santiago de Compostela. Volumen II. El siglo XIX*, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de Santiago de Compostela.

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (2008): *O carlismo galego*, A Coruña, Edicións Laiovento.

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (2016): *Los perdedores. La represión política en Galicia en el siglo XIX*, Ourense, Deputación de Ourense.

BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar(2005): “Delincuencia y desorden social en la España agraria. La Mancha, 1900-1936”, en *Historia Social*, nº 51, pp. 111-138.

BASCUÑÁN ANOVER, Óscar (2008): *Protesta y supervivencia: movilización y desorden en una sociedad rural: Castilla la Mancha, 1875-1923*, Alzira, Centro Francisco Tomás y Valiente.

BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2014): “¿Resistencia campesina o delincuencia? Los ilegalismos en los montes de la Sierra de Cuenca”, en *Historia Social*, nº 77, pp. 95-111.

BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar (2016): “La pena de muerte en la Restauración: una historia del cambio social”, en *Historia y Política*, núm. 35, Madrid, enero-junio, pp. 203-230.

BASCUÑÁN AÑOVER, Óscar. (2019): “Justicia popular: el castigo de la comunidad en España, 1895-1923”, en *Hispania*, vol. 79, nº 265, pp. 699-725.

BASS, Hans H.: “The crisis in Prussia”, en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 185-212.

BAUMEISTER, Roy F. (1997): *Evil. Inside human cruelty and violence*, Nueva York, W.H. Freeman.

BAUMEISTER, R.F. GAILLIOT, M. DEWALL, C.N. OATEN M. (2006): “Self-regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior”, *Journal of Personality*, nº 74.

Consultado en <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-6494.2006.00428.x/full>

BAZA DE LA FUENTE, María Lourdes (1997): *El delito fiscal: particular referencia al artículo 305 del Código Penal*. Tesis doctoral defendida en la Universidad Complutense. Consultada en: <https://eprints.ucm.es/2205/1/T21520.pdf>

BELTRÁN VILLALBA, Miguel (2005): "Clases sociales y partidos políticos en la década moderada (1844-1854)" en *Historia y Política*, pp. 49-77.

BERAMENDI, Justo (2007): *Algunos aspectos del nation-building español en la Galicia del siglo XIX*, en MORENO LUZÓN, Javier: *Construir España. Nacionalismo español y procesos de nacionalización*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (1982): *El delito de lesiones*, Salamanca, Universidad de Salamanca.

BERNECKER, Walther L. (2009): *España, entre tradición y modernidad: política, economía, sociedad (siglos XIX y XX)*, Madrid, Siglo XXI.

BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón (2018): "«Proteger al bueno, perseguir al malo»: Federico Olóriz (1855-1912) y la dactiloscopia en España", en *Ayer*, nº 111, pp. 195-223.

BERRAONDO PIUDO, Mikel (2012): *La violencia interpersonal en la Navarra moderna (siglos XVI-XVII)*. Tesis doctoral. Universidad de Navarra. Consultado en:

<https://docplayer.es/66465277-La-violencia-interpersonal-en-la-navarra-moderna-siglos-xvi-xvii.html>

BERRAONDO PIUDO, Mikel (2011): "Distribución de los casos de violencia interpersonal en la Navarra moderna (siglos XVI-XVII)", en *Príncipe de Viana (PV)*, nº 254, pp. 89-98,. Consultado en:

<http://sehn.org.es/wp-content/uploads/2017/08/70305.pdf>

BIRKEL, Cristoph (2009): "Étude comparative de l'évolution des crimes en Allemagne, en Angleterre/Pays de Galles et en Suède (1950-2000)", en MUCCHIELLI, Laurent, SPIERENBURG, Pieter (dir.): *Histoire de l'homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours*, Paris, La Découverte, pp. 197-227.

BLANCO LOURO, Florinda M^a (2001): "Los cambios sociales en A Coruña durante el primer tercio del siglo XX", en ALFEIRÁN, Xosé, GRANDÍO, Emilio, ROMERO, Ana (com.): *El republicanismo coruñés en la historia*, A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña, pp. 39-48.

BLANEY, Gerald, Jr.: "En defensa de la democracia: políticas de orden público en la España republicana, 1931-1936", en *Ayer*, nº 88, pp. 99-123.

BORREGUERO BELTRÁN, Cristina (1989): *El Reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII: orígenes del servicio militar obligatorio*, Valladolid, Universidad de Valladolid.

BOTREL, Jean-François (1993): *Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX*, Madrid, Fundación y Ediciones Pirámide.

BOURKE, Joanna (2008): *Sed de sangre: historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX*, Barcelona, Crítica.

BOULETEL, Bernardette (1962): Etude par sondage de la criminalité dans le bailliage du Pont-de-l'Arche (XVIIe-XVIII siècles). De la violence au vol: en marche vers l'escroquerie, *Annales de Normandie*, 12-4, p. 235-262. Consultado en:

https://www.persee.fr/doc/annor_0003-4134_1962_num_12_4_4517

BOUZADA GIL, María Teresa (2017): "La responsabilidad disciplinaria de los jueces en Galicia según los asientos de los Libros-Registro de la Audiencia de La Coruña: 1868-1900", en SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (investigador principal): *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, pp. 231-319.

BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso (2004): *José Calvo Sotelo*, Barcelona, Ariel.

BURDY, Jean-Paul (2004): "Social Control and Forms of Working-Class Sociability in French Industrial Towns between the Mid-Nineteenth and the Mid-Twentieth Centuries", en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press, pp. 1-24.

BUTRÓN PRIDA, Gonzalo (2020): "Las milicias ciudadanas en las revoluciones liberales europeas: el caso del primer liberalismo español", en *Rúbrica Contemporánea*, vol 9, nº 18, pp. 5-21.

BUXEIRO ALONSO, Xabier: Os verdugos e a sociedade. A violencia sublevada en Ribadeo (1936-1941), en FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): *Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo*, Vigo, Galaxia, pp. 181-226.

CABANA IGLESIA, Ana (2013): "Sobrellevar la vida: memorias de resistencias y resistencias de las memorias al franquismo", en DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel, FUERTES MUÑOZ, Carlos, HERNÁNDEZ BURGOS, Claudio, MARCO, Jorge (eds.): *No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977)*, Granada, Comares, pp. 97-108.

CABANA, Ana, CABO VILLAVERDE, Miguel (2013): "James C. Scott y el estudio de los dominados: su aplicación a la historia contemporánea", en *Historia Social*, nº 77, pp. 73-93.

CABO VILLAVERDE, Miguel (1998): *O agrarismo*, Vigo, Edicións A Nosa Terra.

CABO VILLAVERDE, Miguel (2002): "Traxectoria do agrarismo galego", en Gonzalo CONSTENLA BERGUEIRO, Gonzalo, DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís (eds. y coords.): *Tempos de sermos, Galicia nos séculos contemporáneos*, Vigo, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, pp. 147-172.

CABO VILLAVERDE, Miguel (2006): "Quelle nation dans les campagnes? État et *nation-building* en Espagne, un débat ouvert", en MAYAUD, Jean-Luc, RAPHAEL, Lutz (dir.): *Histoire de l'Europe contemporaine: du village à l'État*, Paris, Armand Colin, pp. 222-248.

CABO VILLAVERDE, Miguel (2006-B): "Solidaridad Gallega y el desafío al sistema de la Restauración, 1907-1911", en *Ayer*, nº 64, pp. 235-259.

CABO VILLAVERDE, Miguel, VÁZQUEZ VARELA, José Manuel (2015): "Las otras guerras de nuestros antepasados: la violencia intercomunitaria en la Galicia rural contemporánea", *Hispania*, número 251, pp. 781-803.

CABO VILLAVERDE, Miguel, RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón (2019): "Matar un ruiseñor. Oseira 1909, análisis de una masacre", en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Vol. 41, pp. 233-253.

CAMPOS MARÍN, Ricardo (1997): *Alcoholismo, medicina y sociedad en España (1876-1923)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

CANAL, Jordi (2004): "Guerra civil y contrarrevolución en la Europa del sur en el siglo XIX: reflexiones a partir del caso español", en *Ayer*, nº 55, pp. 37-60.

CANDEIRA MOSQUERA, Francisco (1990): *Caciquismo e poder local na Galicia da Restauración (distrito de Ponteareas, 1881-1894)*, Ponteareas, Edicións Galicia-Sur.

CANOSA, Ramón (1951): "Estampas vivarienses. Aquellos municipales", en *Fiestas Vivero 1951*, Artes Gráficas A. Santiago.

CANTER, A. (2009): "The Multi-Faceted Nature of Terrorism: An Introduction" en CANTER, A. (ed.): *The faces of terrorism: multidisciplinary perspectives*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, pp. 1-17.

CALDERÓN, Bartolomé: *El matonismo en La Coruña. A la señora Pardo Bazán*, Prácticas Modernas e Industrias Rurales, nº87, pp. 225-227, 01-08-1906.

CAPELÁN REY, Antón (1999): "Contribucións a unha historia da Universidade Popular da Coruña", *Sarmiento*, número 3, pp. 25-64.

Consultado en:

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/7723/SAR_3_art_2.pdf?sequence=1

CAPELÁN REI, Antón (2019): "Memoria intelectual, literaria e artística da represión do campesiñado de 1909 a 1922", en *"De nós": monografías con perspectiva galega*, nº 1, pp. 77-94.

CARBAJO, Judith (2018): "Os outros nomes das mesmas voces. Identificación de verdugos, relatos e lóxicas da persecución golpista franquista", en FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): *Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo*, Vigo, Galaxia, pp. 291-360.

CARBALLO GENDE, Enrique (2017): "Diez mil vecinos, nueve homicidas", *La Voz de Galicia*, 11-10-2017.

Carballo Gende, Enrique (2018): *"Salieron desafiados a navaja": la violencia cotidiana, el crimen y sus interpretaciones en la provincia de A Coruña (1850-1900)*, Trabajo de Fin de Máster presentado en la Universidade de Santiago de Compostela.

CARBALLO GENDE, Enrique (2019): «Dio un golpe a su querida con tan mala suerte que le rompió la cabeza». La violencia hacia las mujeres en la práctica legal y policial en la Restauración, a partir del caso de Galicia", *Semata*, nº 31, 2019, pp. 15-32.

CARBALLO GENDE, Enrique (2020-A): "Menos muertes, pero más preocupantes: una aproximación al homicidio en la España de la Restauración", *Historia Social*, nº 97, pp. 2-23.

CARBALLO GENDE, Enrique (2020-B): "«El hambre le impulsara»: La crisis de subsistencias y el auge de delitos contra la propiedad en Galicia durante la década de 1850", *Hispania*, nº 264, p. 169-199.

CARDESÍN, José María (1992): *Tierra, trabajo y reproducción social en una aldea gallega (s. XVIII-XX): Muerte de unos, vida de otros*, Madrid, Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, Secretaría General Técnica.

CARDESÍN, José María (2008): "Motín y magnicidio en la Guerra de la Independencia: la voz de "arrastrar" como modelo de violencia colectiva", en *Historia Social*, nº 62, pp. 27-48.

CASANOVA, Julián (2000): "Resistencias individuales, acciones colectivas: nuevas miradas a la protesta social agraria en la Historia Contemporánea de España", en GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel (ed.): *Campesinos y jornaleros: una revisión historiográfica*, Barcelona, Anthropos Editorial, pp. 289-301.

CASES SOLA, Adriana (2013): "Mujeres rebeldes. Género, juventud y violencia política en la Segunda República", en *Ayer*, nº 100, pp. 73-96.

CASES SOLA, Adriana: *El género de la violencia. Mujeres y violencias en España (1923-1936)*, Málaga, Universidad de Málaga, 2017.

CASTRO PÉREZ, Felipe (2002): *En torno ó elduayenismo: reflexións sobre a política clientelista na provincia de Pontevedra, 1856-1879*, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. Consultado en:

http://docs.game-idega.com/documentos_de_traballo/historia/historia_13.pdf

CASTRO PÉREZ, Xavier (1994): *Las mujeres gallegas y el alcohol, práctica social de las bebidas alcohólicas en el siglo XIX*, en *Mujeres y ciudadanía: la relación de las mujeres con los ámbitos públicos: preactas del II Coloquio Internacional de la AEIHM*, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago: Consellería de Familia, Muller e Xuventude.

CASTRO PÉREZ, Xavier (2007): *Historia da vida cotiá en Galicia: séculos XIX e XX*, Vigo, Nigratrea.

CATALÁN MARTÍNEZ, Elena, LANZA GARCÍA, Ramón (2015): "Alimentación, carestías y crisis de mortalidad en la España cantábrica (1680-1860)", en *Historia Agraria*, nº 67, pp. 11-42.

CERRO NARGÁEZ, Rafael (2001): "Los alcaldes mayores de Cataluña: una evolución desigual y conflictiva (1717-1808)", en *Hispania. Revista Española de Historia*, vol. LXI/1, núm. 207 (2001) 289-314.

CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (2005): "Introduction", en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire, pp. 9-34.

CHAUVAUD, Frédéric (2006): "Les paysans et la justice pénale en France. Transition judiciaire et construction du social 1830-1930", en MAYAUD, Jean-Luc, RAPHAEL, Lutz (dir.): *Histoire de l'Europe contemporaine: du village à l'État*, Paris, Armand Colin, pp 182-201.

CHESNAIS, Jean-Claude (1981): *Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours*, París, Laffout.

CHEVALIER, Louis (1984): *Classes laborieuses et classes dangereuses a Paris pendant la première motié du XIXe siècle*, Paris, Hachette.

CHURCHILL, David C. (2014): "Rethinking the state monopolization thesis : the historiography of policing and criminal justice in nineteenth century England" en *Crime, histoire & sociétés*, vol 18, nº1, pp. 131-152.

CIDRÁS, Aldara (2018): "A construción da culpabilidade colectiva na cidade de Pontevedra (1936-1939)", en FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): *Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo*, Vigo, Galaxia, pp. 227-290.

CLEMENTS, Jonathan (2008): *El primer emperador de China*, Barcelona, Crítica.

COMESAÑA PAZ, Alfredo (2017): "La Tercera Guerra Carlista en Galicia: un epítome y algunas observaciones de interés", en *Aportes*, nº 93, pp. 31-64.

COMÍN, Francisco (2011): "Política y economía: los factores determinantes de la crisis económica durante la Segunda República (1931-1936)", en *Historia y Política*, núm. 26, Madrid, julio-diciembre, pp. 47-79.

COMÍN, Francisco, MARTORELL, Miguel (2013): *La Hacienda Pública en el franquismo. La guerra y la autarquía (1936-1959)*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

COLINO, Ana, GRANDÍO SEOANE, Emilio (1994): *La Coruña en el siglo XIX*, A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña: Vía Láctea D. L..

CONLEY, Carolyn (1999): "The Agreeable Recreation of Fighting", *Journal of Social History*, número 33-1, pp. 57-72.

COHEN, D., NISBETT, R. E. BOWDLE, B. F., SCHWARZ, N. (1996): "Insult, aggression and the southern Culture of Honor: an "Experimental Ethnography", *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 70, No. 5, pp. 945-960.

Consultado en: <http://mypages.valdosta.edu/mwhatley/7670/activity/honor.htm>

COTTIER, Maurice, RACITI, Silvio (2013): "From honor to subjectivity: interpersonal violence in Basel 1750-1868 and Berne 1861-1944", en *Crime, histoire & sociétés*, vol 17, nº2, pp. 71-100.

CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo (2004): "Violencia cotidiana en Castilla a fines de la Edad Media", en *Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV / XV Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 de agosto al 8 de agosto de 2003*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos.

CRUZ, Rafael (2002): "La sangre de España. Lecturas sobre historia de la violencia política en el siglo XX", en *Ayer*, nº 46, pp. 285-293.

CRUZ, Rafael (2006): *En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936*, Madrid, Siglo XXI de España.

CRUZ, Rafael (2013): *Una revolución elegante: España, 1931*, Madrid, Alianza.

CRUZ, Rafael (2015): *Protestar en España 1900-2013*, Madrid, Alianza Editorial.

CRUZ ARTACHO, Salvador (2000): "De campesino a ladrón y delincuente en Andalucía. Otra mirada a la esfera de los comportamientos sociales del campesinado", en GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel

(ed.): *Campesinos y jornaleros: una revisión historiográfica*, Barcelona, Anthropos Editorial, pp. 159-178.

CUSAC, Anne-Marie (2009): *Cruel and unusual: the culture of punishment in America*, New Haven, Yale University Press.

DALMAU, Pol (2018): "La reputación del notable. Escándalos y capital simbólico en la España liberal", en *Historia y Política*, Madrid, nº 39, pp. 23-51.

DALMAU I RIBALTA, Antonio (2012) : "La oleada de violencia en la Barcelona de 1904-1908", en *Ayer*, nº 85, pp. 157-173.

DALY, Mary E.: "Something old and something new, Recent research on the Great Irish Famine", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 59-78.

DAMIÁN MORENO, Juan (1987): *Los jueces de paz: antecedentes históricos y perspectivas actuales*, Madrid, Uned.

DE BARTHÈLEMY, Rodolfo G. (1995): *El Marquesito Juan Díaz Porlier: "general que fué de los Ejércitos Nacionales--" (1788-1815). Volumen 2*, Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico.

DE BENITO FRAILE, Emilio Javier (2017): "El control y la responsabilidad de los jueces (1923-1931)", en SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (investigador principal): *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, pp. 399-426.

DE FELIPE, Jesús (2011): "La orientación del movimiento obrero hacia el republicanismo en España en el siglo XIX (1840-1860)", en *Historia y Política*, núm. 25, pp. 119-148.

DE JUANA LÓPEZ, Jesús, VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Alejandro: "Población y emigración en Galicia" (2005), en DE JUANA, Jesús, PRADA, Julio (coords.): *Historia contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, pp. 393-440.

DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL, Juan (1955): *Notas de mi vida*, Instituto Editorial Reus, Madrid.

DE LA CUEVA MERINO, Julio (2012): "El asalto de los cielos: una perspectiva comparada para la violencia anticlerical española de 1936", en *Ayer*, nº 88, pp. 51-74.

DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel (2005): *Las alas del Ave Fénix. La política agraria en el primer franquismo (1936-1959)*, Albolote, Comares.

DEL MAR SÁNCHEZ, Dolores (2017): *Delitos y penas en los códigos penales españoles*, en ALVARADO PLANAS, Javier, MARTORELL LINARES, Miguel (coords.): *Historia del delito y el castigo en la Edad Contemporánea*, Madrid, Dykinson, pp. 97-119.

DE LA TORRE, Joseba, LANA BERSAIN, José Miguel (2000): "El asalto a los bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-1936", en *Historia Social*, nº 37, pp. 75-96.

DE OJEDA EISELEY, Alonso (1988): *Índices de precios en España en el periodo 1913-1987*, Madrid, Servicio de Estudios del Banco de España.

DE URTAZA, Manuel M^a: "El Reino de Galicia: crisis y legados", en BERAMENDI, Justo, VEIGA, Xosé Ramón (eds.): *Poder y territorio en la España del siglo XIX. DE las Cortes de Cádiz a la Restauración*, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 33-66.

DENYS, Catherine (2016): "Geography of Crime. Urban and Rural Environments", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 88-108.

DESMARS, Bernard (2005): "La violence et les rôles sociaux. Les acteurs de l'affrontement dans la société rurale de la première moitié du XIX siècle", en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire.

DELGADO CENDAGORTAGALARZA, Ander (2000): "Protesta popular y política (Bermeo, 1912-1932)", en *Ayer*, nº 40, 169-192.

DÍAZ MARÍN, Pedro (2007): "Subsistence crisis and popular protest in Spain. The *motines* of 1847", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 267-292.

DÍAZ NUEVA, José (2011): "El carlismo galaico", en AYUSO, Miguel (ed.): *A los 175 años del carlismo. Una revisión de la tradición política hispánica*. Actas del Congreso Internacional celebrado en Madrid el 27 y 28 de septiembre de 2008, Madrid, Itinerarios, pp. 117-140.

DÍEZ RIPOLLES, José Luis, MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan (dir.), GARRIDO DE LOS SANTOS, María José (coord.) (2002): *Las drogas en la delincuencia. Informe final*, Málaga, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Consultado en: https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKewjR17aXzq_aAhWI6RQKHZUEDeoQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fstfls%2Fcgpi%2FAN%25C3%2581LISIS%2520DE%2520LA%2520ACTIVIDAD%2520JUDICIAL%2FESTUDIOS%2520Y%2520ENCUESTAS%2FESTUDIOS%2FFICHERO%2F869%20INFORME%2520final_1.0.0.pdf&usg=AOvVaw343R43zZQBEagDt4TpJr6g

DOMÍNGUEZ ALMANSA, Andrés (2009): *Historia social do deporte en Galicia . Cultura deportiva e modernidade. 1850-1920*, Vigo, Galaxia.

DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís (2005): "Agrarismo y sociedad campesina en Galicia", en DE JUANA, Jesús, PRADA, Julio (coords.): *Historia contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, pp. 461-492.

DOMÍNGUEZ CASTRO, Luis (2009): "Galicia en la guerra. Paisanos y militares", en MORTARI FERNÁNDEZ, (coord.): *Ciudades en guerra, 1808-1814: Pontevedra en la Guerra de la Independencia. Catálogo de la exposición en el Museo de Pontevedra, Sexto edificio, del 31 de julio al 4 de octubre de 2009*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 191-202.

DOMÍNGUEZ FERRO (2018), Manuel: ""Salvación, unidade e fraternidade": A Milicia Nacional de Pontedeume (1834-1844), en *Cátedra: revista eumesa de estudos*, nº 25, pp. 299-331.

DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael (1996): "La mercantilización de los campesinos en España, 1860-1880): un intento de estimación", en FERNÁNDEZ PRIETO, L., BALBOA LÓPEZ, X. (eds.): *La sociedad rural en la España contemporánea. Mercado y patrimonio*, Sada, Edicións do Castro.

DORES COSTA, Fernando (2010): *Insubmissão : aversão ao serviço militar no Portugal do século XVIII*, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.

DUBERT, Isidro (2016): "La conflictividad social en la Galicia litoral durante el Antiguo Régimen", en *Historia Social*, nº 85, pp. 21-44.

DUNBAR, Robin I. M., SOSIS, Richard (2018): "Optimising human community sizes", en *Evolution and Human Behavior*, volumen 39, nº1, pp. 106-111.

DUÑAITURRIA LAGUARDA, Alicia (2017): *¿Cómo se controló a los jueces en el siglo XIX? Cuatro formas de reproches a la luz de los expedientes personales*, en SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (investigador principal): *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, pp. 347-397.

EIBACH, Joaquim (2016): "Violence and Masculinity", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 229-249.

EIRAS ROEL, Antonio (1989): "El señorío gallego en cifras. Nómina y ranking de los señores jurisdiccionales", *Cuadernos de Estudios Gallegos*, fascículo 103, tomo 38, pp. 113-135.

EISNER, Manuel (2003): "Long-Term Historical Trends in Violent Crime", *Crime and Justice*, número 30, pp. 83-142. Consultado en: <https://www.vrc.crim.cam.ac.uk/vrcresearch/paperdownload/manuel-eisner-historical-trends-in-violence.pdf>

EISNER, Manuel (2008): "Modernity Strikes Back? A Historical Perspective on the Latest Increase in Interpersonal Violence (1960-1990)", en *International Journal of Conflict and Violence*, vol. 2, nº 2, pp. 288-316.

EISNER, Manuel (2014): "From Swords to Words: Does Macro-Level Change in Self-Control Predict Long-Term Variation in Levels of Homicide?", *Crime and Justice*, volumen 43, número 1, pp. 65-134.

ELIAS, Norbert (1989, originalmente, 1939): *El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, Fondo de Cultura Económica.

EMSLEY, Clive (1997): *Crime and society in England 1750-1900*, Londres, Themes in British Social History.

EMSLEY, Clive (2004): "Control and Legitimacy: The Police in Comparative Perspective since circa 1800" en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press, pp. 193-209.

EMSLEY, Clive (2007): *Crime, Police and Penal Policy. European Experiences 1750-1940*, Oxford University Press, Oxford.

EMSLEY, Clive (2014): "Policing the empire / Policing the metropole : Some thoughts on models and types", en *Crime, histoire & sociétés*, vol 18, nº2, pp. 5-25.

ESCOHOTADO, A. (2008): *Historia general de las drogas: completada por el apéndice Fenomenología de las drogas*, Madrid, Espasa Calpe.

FARCY, Jean-Claude (2005): "Société rurale et violence dans un département réputé calme: l'Eure-et-Loir (XIX^e-XX^e siècle)" en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire, pp. 77-95.

FAYA SAAVEDRA, Jorge (1990): *El contrabando entre las provincias gallegas no fronterizas entre 1850 y 1862*, A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, Departamento de Historia Contemporánea.

FERGUSON, Neil, BURGESS, Mark (2009): "From Naïvety to Insurgency: Becoming a Paramilitary in Northern Ireland", en CANTER, A. (ed.): *The faces of terrorism: multidisciplinary perspectives*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, pp. 19-33.

FERGUSON, R. Brian (2013-A): "Pinker's list. Exaggerating prehistoric war mortality", en FRY, Douglas P. (ed.): *War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views*, Oxford, Oxford University Press.

FERGUSON, R. Brian (2013-B): "The Prehistory of War and Peace in Europe and the Near East", en FRY, Douglas P. (ed.): *War, Peace, and Human Nature: The Convergence of Evolutionary and Cultural Views*, Oxford, Oxford University Press, pp. 191-240.

FERNÁNDEZ BARALLOBRE, José Eugenio (2010): *El cuerpo de seguridad en el reinado de Alfonso XIII (1908-1931)*, Madrid, Publicaciones de la Fundación Policía Española.

FERNÁNDEZ CASANOVA, Carmen (2005): "La revolución liberal y su repercusión en Galicia (1833-1874)", en DE JUANA, Jesús, PRADA, Julio (coords.): *Historia contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, pp. 103-140.

FERNÁNDEZ CASANOVA, Carmen, ORO SAEZ, Carlos Pío del (2008): "La población urbana de Galicia en el siglo XIX", en Axeitos, X. L., GRANDÍO SEOANE, Emilio, VILLARES, Ramón (eds.): *A patria enteira. Homenaxe a Xosé Ramón Barreiro Fernández*, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela: Real Academia Galega, pp. 769-790.

FERNÁNDEZ CASTRO, Xoán Andrés (2000): "Acción colectiva e élites locais en Galicia. O motín de xullo de 1870 na Estrada (Pontevedra)", en *A Estrada. Miscelánea histórica e cultural*, nº 3, pp. 57-100, A Estrada, Museo do Pobo Estradense Manuel Reimón Portela.

FERNÁNDEZ DÍEZ, Andoni, SÁEZ MIGUEL, Pablo (2005): *Mujer y sociedad en Logroño durante la Restauración (1875-1923)*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Eliseo (2016): "Um triénio bolchevique na Galiza?", en MOURE, Teresa (coord.): *Bolcheviques*, Vigo, Através Editora, pp. 81-93.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Eliseo (2019): "Os mártires de Nebra. Cans, 1916" en *"De nós": monografías con perspectiva galega*, nº 1, pp. 22-31.

FERNÁNDEZ IGNACIO, Samuel (2018): “La evolución de los escenarios del consumo urbano. El caso de la calle San Andrés en la ciudad de A Coruña”, en *Cuadernos de Estudios Gallegos*, vol. 65, nº 131, pp. 307-338.

FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo (2005): “Las transformaciones económicas”, en DE JUANA, Jesús, PRADA, Julio (coords.): *Historia contemporánea de Galicia*, Barcelona, Ariel, pp. 141-167.

FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MIGUEZ MACHO, Antonio (2018): “Os verdugos no golpe de Estado de 1936. Quen matou a Antonio Azarola?”, en FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): *Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo*, Vigo, Galaxia, pp. 13-87.

FERNÁNDEZ PULPEIRO, Juan Carlos (1981): *Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en Galicia*, Ediciós do Castro, Sada.

FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos (2007): *Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939)*, Sada, Ediciós do Castro.

FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina (2004): *Sangre o dinero: el mito del ejército nacional*, Madrid, Alianza Editorial.

FERNÁNDEZ-VILLAMIL Y ALEGRE, Enrique (1951): “Caudillatos de la Provincia de Tuy”, en *Museo de Pontevedra*, tomo 6, pp. 83-96.

FERRAN TOLEDANO, Lluís (2000): “El caudillaje carlista y la política de las partidas”, en *Ayer*, nº 38, pp 91-114.

FERRÚS ANTÓN, Beatriz (2017: “Modelos de masculinidad en Emilia Serrano de Wilson”, en ZABALGOITIA HERRERA, Mauricio (ed): *Hombres en peligro. Género, nación e imperio en la España de cambio de siglo (XIX-XX)*, Madrid, Iberoamericana, pp. 99-116.

FINNANE, Mark (1997): “A decline in violence in Ireland? Crime, policing and social relations, 1860-1914”, en *Crime, histoire & sociétés*, vol 1, nº 1, pp. 51-70.

FOUCAULT, Michel (1986), *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*, Madrid, Siglo XXI.

FRAILE BALBÍN, Pedro (1987): “Un Espacio para castigar : la cárcel y la ciencia penitenciaria en España : siglos XVIII-XIX”, Barcelona, Serbal.

FRAGA RODRÍGUEZ, Xan (2019): “As mártires de Sofán. Algo máis que atavismo”, en “*De nós*”: *monografías con perspectiva galega*, nº 1, pp. 44-54.

FRANK, Stephen P. (1999): *Crime, cultural conflict, and justice in rural Russia, 1856-1914*, Berkeley, University of California.

FREEMAN, Nicholas, FRIEDMAN, Ronald S., BARTHOLOW, Bruce D., WULFERT, Edelgard (2010): “Effects of Alcohol Priming on Social Disinhibition”, *Experimental and clinical Psychopharmacology*, vol. 18, No. 2, pp. 135-144. Consultado en: <https://pdfs.semanticscholar.org/5f2b/a9da985b7985e5cf7111d2d2304f2c01f19a.pdf>

FRÍAS CORREDOR, Carmen (2000): "Conflictividad, protesta y formas de resistencia en el mundo rural. Huesca, 1880-1914", en *Historia Social*, nº 37, pp. 97-118.

FUHRMANN, Christopher J. (2012): *Policing the Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order*, Oxford, Oxford University Press.

GAVRILIUK, V. V. (2011): "The Gopniks as a Phenomenon in the Youth Community", en *Russian Education & Society*, 53:1, pp. 28-37.

GADD, Carl-Johan: "On the edge of a crisis: Sweden in the 1840s", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 313-342.

GARCÍA, Hugo (2005): "Historia de un mito político: el *peligro comunista* en el discurso de la derechas españolas (1918-1936)", en *Historia Social*, nº 51, pp. 3-20.

GARCÍA BORREGA, Juan Antonio (1982): "Delito y sociedad en Madrid en el reinado de Fernando VI", en *Estudios de Historia Social*. nº 20-21, p. 261.

GARCÍA CABRERA, José (2002): "Tiempo de escasez, tiempo de carestía. La crisis de subsistencia de 1847 en Jerez de la Frontera", en *Historia Social*, nº 42, pp. 21-40.

GARCÍA DELGADO, José Luis (1986): *Estancamiento industrial e intervencionismo económico durante el primer franquismo*, en FONTANA, Josep: *España bajo el franquismo*, Barcelona, Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia y Editorial Crítica, pp. 170-191.

GARCÍA FERREIRA, Rafael (2018): "Violencia golpista en Santiago de Compostela: verdugos, lóxicas e espazos (1936-1946)", en FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): *Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo*, Vigo, Galaxia, pp. 137-180.

GARCÍA GIL, F. Javier, GARCÍA NICOLÁS, Luis Ángel (2000): *Manual práctico del policía local*, Pamplona, Dapp.

GARCÍA HURTADO, Manuel-Reyes (1995): "La muerte en diagonal. El duelo en Francia. Siglos XVI-XVIII", en *Obradoiro de Historia Moderna*, número 5, pp. 137-155.

Consultado en: <http://www.usc.es/revistas/index.php/ohm/issue/view/76>

GARCÍA MAÑA, Luis Manuel (1988): *La frontera hispano-lusa en la provincia de Ourense*, Ourense, Museo Arqueológico Provincial.

GARCÍA LEÓN, Susana (2017): "El control judicial durante la II República Española. La actuación de la Audiencia Territorial de Madrid como mecanismo de inspección de los tribunales inferiores de justicia", en SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (investigador principal): *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, pp. 427-470.

GARCÍA SANTOS, Alfonso (2019): *Antroidos e máscaras na Galiza rural nas fotos de Santos*, Santiago de Compostela, Serms Galiza.

GARCÍA SANZ, Carolina (2018): "«Disciplinando al gitano» en el siglo xx: regulación y parapenalidad en España desde una perspectiva europea", en *Historia y Política*, 40, pp. 115-146.

GARRIDO COUCEIRO, Xoán Carlos (2016): "O cuño comunista na Galiza", en MOURE, Teresa (coord.): *Bolxeviques*, Vigo, Através Editora, pp. 77-86.

GARRIGA, Carlos (2007): "Justicia animada: dispositivos de la justicia en la monarquía católica", en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 59-104.

GASALLA REGUEIRO, Pedro Luis, SAAVEDRA, Pegerto (2000): "Alumnos, bachilleres y catedráticos en el siglo XVIII", en BARREIRO FERNÁNDEZ, Ramón (coord.): *Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Volumen I. De los orígenes al siglo XIX*, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico de la Universidade de Santiago de Compostela, pp. 491-565.

GAY, Peter (1994): *The cultivation of hatred*, Londres, Harper Collins.

GERLACH, Christian (2010): "Las sociedades extremadamente violentas: una alternativa al concepto de genocidio", en *Historia Social*, nº 68, pp. 141-158.

GIADAS ÁLVAREZ, Luis Antonio (1997): *La vida política municipal en La Coruña entre 1900 y 1931*, Sada, Edicios do Castro.

GIL ANDRÉS, Carlos (2013-A), en DEL ARCO BLANCO, Miguel Ángel, FUERTES MUÑOZ, Carlos, HERNÁNDEZ BURGOS, Claudio, MARCO, Jorge (eds.): *No solo miedo. Actitudes políticas y opinión popular bajo la dictadura franquista (1936-1977)*, Granada, Comares, pp. 47-63.

GIL ANDRÉS, Carlos (2013): "Movilización política y conflicto social en el mundo rural republicano (La Rioja, 1930-1936)", en *Ayer*, nº 89, pp. 93-119.

GIL AMBRONA, A. (2009): "La violencia contra las mujeres. Discursos normativos y realidad" en *Historia Social*, nº 61, pp. 3-22.

GILJE, Paul A. (1996): *Rioting in America*, Bloomington, Indiana University Press.

GILMORE, David D. (1994): *Hacerse hombre. Concepciones culturales de la masculinidad*, Barcelona, Paidós.

GODFREY, Barry (2016): "The Crime Historian's *Modi Operandi*", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 38-56.

GOLDSWORTHY, Adrian (2014): *Augusto: de revolucionario a emperador*, Madrid, La Esfera de los Libros.

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2004): *Crimen y castigo: Cárceles, delito y violencia en la España del siglo XIX*, Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Consultado en:

<http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t27481.pdf>

GÓMEZ BRAVO, Gutmaro (2009): "El declive de la violencia y el proceso de modernización en la España de la Restauración (1885-1918)", *Anuario de derecho penal y ciencias penales*, Tomo 62, Fascículo 1, pp. 313-356. Consultado en:

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2009-10031300356 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES El declive de la violencia y el proceso de modernización en la España de la Restauración (1885-1918)

GÓMEZ RIVERO, Ricardo (2006): *Los jueces del Trienio Liberal*, Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.

GOMIS RODRÍGUEZ, Alfonso (2000): *La insurrección de Ferrol de 1872*, Deputación Provincial da Coruña, A Coruña.

GONZÁLEZ ASENJO, Alfonso (1985): "La resistencia al servicio militar en Galicia (1837-1974)", en *Estudios de Historia Social*, nº 34-35, pp. 197-318.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, DEL REY REGUILLO, Fernando (1995): *La defensa armada contra la revolución: una historia de las guardias cívicas en la España del siglo XX*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (1998): *La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2005): *La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 1923-1930*, Madrid, Alianza.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, SOUTO KUSTRÍN, Sandra (2007): "De la Dictadura a la República: Orígenes y auge de los movimientos juveniles en España", en *Hispania. Revista Española de Historia*, vol. LXVII, núm. 225, enero-abril, pp. 73-102.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2009): *Rebelión en las aulas: movilización y protesta estudiantil en la España contemporánea, 1865-2008*, Madrid, Alianza.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2009-B): "Experiencia en combate. Continuidad y cambios en la violencia represiva (1931-1939)", en *Ayer*, nº 76, pp. 37-64.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2014): *En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República española (1931-1936)*, Granada, Comares.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, COBO ROMERO, Francisco, MARTÍNEZ RUS, Ana, SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco (2015): *La Segunda República española*, Barcelona, Pasado&Presente.

GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo (2015): *Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República española (1931-1936)*, Granada, Comares.

GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, ORTEGA SANTOS, Antonio (2000): "Bienes comunes y conflictos por los recursos en las sociedades rurales, siglos XIX y XX", en *Historia Social*, nº 38, pp. 95-116.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (1995): "La justicia local y territorial en la Galicia del Antiguo Régimen", *Obradoiro de Historia Moderna*, número 4, pp. 233-254.

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel (2013): "Los jueces ordinarios de Bouzas, 1722-1833", separata de *Glaucoipis: Boletín do Instituto de Estudos Vigueses*, nº 18, pp. 131-156, Vigo, Instituto de Estudos Vigueses.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio (1980): *Entre el Antiguo y el Nuevo Régimen, absolutistas y liberales: el reinado de Fernando VII en Galicia*, Sada, Ediciós do Castro.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio (1987): *Memorias de un estudiante liberal (1903-1931)*, Sada, Ediciós do Castro.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Emilio (1988): *Memorias de un diputado de las Cortes de la República (1931-1938)*, Sada, Ediciós do Castro.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús (2008): *La selección de los Jueces*, Cizur Menor, Thomson Civitas.

GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, Pablo (1994): *Sargadelos 1798. Un motín en la Galicia de finales del Antiguo Régimen*, Sada, Ediciós do Castro.

GOUDSBLOM, Johan: *The Paradox of Pacification*, nunca publicado en papel.
Consultado en <http://norberteliasfoundation.nl/docs/pdf/Figs/ParadoxofPacification.pdf>

GOWING, Laura (1998): *Domestic Dangers. Women, Words and Sex in Early Modern London*, Oxford, Clarendon Press.

GRANDÍO SEOANE, Emilio (1994): *La Coruña en el siglo XX*, A Coruña, Ayuntamiento de A Coruña: Vía Láctea D. L..

GRANDÍO SEOANE, Emilio (1998): *Los orígenes de la derecha gallega: la C.E.D.A. en Galicia (1931-1936)*, Sada, Ediciós do Castro.

GUEREÑA, Jean-Lois (2003): "El burdel como espacio de sociabilidad", en *Hispania*, LXIII/2, num. 214, pp. 551-569.

GUPTA, Dipak K., HORGAN, John, SCHMID, Alex. P. (2009): "Terrorism and Organized Crime: A Theoretical Perspective", en CANTER, A. (ed.): *The faces of terrorism: multidisciplinary perspectives*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, pp. 123-136.

GURR, Ted Robert (1981): "Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence", en *Crime and Justice*, vol. 3, pp. 295-353.
Consultado en: <https://www.jstor.org/stable/1147382>

HAMMER, Carl I. (1978): "Patterns of Homicide in a Medieval University Town: Fourteenth-Century Oxford", en *Past & Present*, nº 78, pp. 3-23.

HALLER, Jozsef (2018): "The role of central and medial amygdala in normal and abnormal aggression: A review of classical approaches", en *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, volumen 85, pp. 34-43.

HEINSOHN, Gunnar (2008): *Exploding population*, New York Times, 07-01-2008.
Consultado en <http://documents.worldbank.org/curated/en/794881468762939913/pdf/29740.pdf>

HENRIKSEN, Ingrid: "A disaster seen from the periphery. The case of Denmark", en Ó GRÁDA, Cormac, PAGING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 293-312.

HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, José Ramón (2009): "El anticlericalismo y sus consecuencias en las diócesis gallegas durante el período de la II República (1931-1936)", en *Cuadernos de Estudios Gallegos*, nº 122, pp. 283-316.

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Gustavo (2014): "Reyertas estudiantiles y violencia universitaria en la Salamanca del periodo Barroco: 1598-1625", en *Erasmus: Revista de Historia Bajomedieval y Moderna*, nº 1, pp. 121-137.

HERVELLA GARCÍA, Gustavo (1999): "Achegamento á mobilización anticlerical na Galicia da II República a través dos xornais (abril-xuño de 1931)", en *Anuario Brigantino*, nº 22, pp. 207-220.

HERVELLA GARCÍA, Gustavo (2007): "As eleccións da II república nun concello rural. Unha aproximación a través do Arquivo Municipal do concello do Bolo (Ourense)", *IEV*, nº 11, pp. 83-121.

HERVÉS SAYAR, Henrique, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ángel, FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, ARTIAGA REGO, Aurora, BALBOA LÓPEZ, Xesús L. (1997): "Resistencia y organización. La conflictividad rural en Galicia desde la crisis del Antiguo Régimen al franquismo", *Noticiario de Historia Agraria*, nº13, pp. 165-191.

HEPTWORTH, J. T., WEST, S. G. (1988): "Lynchings and the economy: A time-series reanalysis of Hovland and Sears (1940)", en *Journal of Personality and Social Psychology*, nº 55(2), pp. 239-247.

HIJANO PÉREZ, Ángeles (2013), en "El municipio y los servicios municipales en la España del siglo xix", en *Ayer*, nº 90, pp. 141-166.

HOBBSAWN, Eric J. (1976): *Bandidos*, Seix y Barral Hnos., Esplugues de Llobregat.

HORGAN, John (2009): "Disengaging from Terrorism", en CANTER, A. (ed.): *The faces of terrorism: multidisciplinary perspectives*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, pp. 257-276.

IGLESIAS AMORÍN, Alfonso, *La memoria de las guerras de Marruecos en España (1859-1936)*, Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela, 2015.

IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2004): *Las quiebras del orden cotidiano*, Tesis doctoral, Universidade de Santiago de Compostela.

IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2005): "A proximación a la criminalidad gallega de fines del Antiguo Régimen", en *Hispania. Revista Española de Historia*, Vol. 65/2, nº 220.

IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2007): *Crimen, criminales y reos: la delincuencia y su represión en la antigua provincia de Santiago entre 1700 y 1834*, Vigo, NigraTrea.

IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2008): "Moral popular y tribunales de justicia en la Edad Moderna", en MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás A. (ed.): *Bajtín y la historia de la cultura popular: cuarenta años de debate*, Santander, Universidad de Cantabria.

IGLESIAS ESTEPA, Raquel (2012): "Violencia física y verbal en la Galicia de finales del Antiguo Régimen", en *Semata: ciencias sociais e humanidades*, nº 19, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 135-157.

IGLESIAS GARZÓN, Alberto (2012): *Jueces y leyes, entre el absolutismo y la codificación*, Madrid, Dykinson.

IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (2012): "Tensiones y rupturas: conflictividad, violencia y criminalidad en la Edad Moderna", en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José (ed.): *La violencia en la Historia. Análisis del pasado y perspectiva sobre el mundo actual*, Huelva, Universidad de Huelva, pp. 41-91.

IMAI, Hissei, OGAWA, Yusuke, OKUMIYA, Kiyohito, MATSUBAYASHI, Kozo (2018): "Amok: a mirror of time and people. A historical review of literature", en *History of Psychiatry*, vol 30, nº 1, pp. 38-57.

Consultado en: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0957154X18803499>

JACKSON, Gabriel (2008): Juan Negrín: médico, socialista y Jefe de Gobierno de la II República Española, Barcelona, Crítica.

JAR COUSELO, Gonzalo (1994): "La Guardia Civil en la Dictadura de Primo de Rivera y fin del reinado (1923-1931)", en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 105-115.

JIMÉNEZ GUERRERO, José (2001): *El reclutamiento militar en el siglo XIX. Las quintas en Málaga (1837-1868)*, Málaga, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Málaga.

JOHANSEN, Jens C., STEVNSBORG, Henrik (1986): *Hasard ou myopie. Réflexions autour de deux théories de l'histoire du droit*, Annales de Normandie, 41-3, pp. 601-624.

JOHNSON, Eric A., SALVATORE, Ricardo D. SPIERENBURG, Pieter (2012): "Murder and mass murder in pre-modern Latin America: from pre-colonial Aztec sacrifices to the end of colonial rule; an introductory comparison with European societies", en *Historical Social Research*, vol. 37, nº3, pp. 233-253.

JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel (1979): *Guía práctica del policía municipal*, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local.

KASSIMERIS, George (2009): "Case Study – The 17th November Group: Europe's Last Revolutionary Terrorists", en CANTER, A. (ed.): *The faces of terrorism: multidisciplinary perspectives*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, pp. 97-121.

KEELEY, Lawrence H. (1997): *War before civilization. They myth of the peaceful savage*, Nueva York, Oxford University Press.

KELLING, George L., WILSON, James Q. (1982): "Broken Windows. The police and neighborhood safety", *The Atlantic*.

Consultado en https://www.manhattan-institute.org/pdf/atlantic_monthly-broken_windows.pdf

KERNIS, Michael H., GREENIER, Keegan D., HERLOCKER, Caryn E., WHISENHUNT, Connie R., ABEND, Teresa A. (1997): "Self-perceptions of reactions to doing well or poorly: The roles of stability and level of self-esteem", en *Personality and Individual Differences*, nº 22(6), pp. 845-854.

KIKIVUORI, J., SAVOLAINEN, J.; DANIELSSON, P. (2012): "Theory and explanation in contemporary european homicide research", en LIEM, M. C. A., PRIDEMORE, William Alex (Eds.): *Handbook of European Homicide Research*, Nueva York, Springer-Verlag.

KOWALSKI, Sharon A. (2016): "Continuity and Change. Russian and Early Soviet Criminology and the Criminal Woman", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 416-432.

MACKAY, Ruth (2007): *Los límites de la autoridad real : resistencia y obediencia en la Castilla del siglo XVII*, Salamanca, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

MADRID CRUZ, María Dolores (2017): "¿Vigilancia, control o farsa? Las tres caras de la Inspección General de Tribunales", en SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (investigador principal): *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, pp. 471-572.

MAHLERWEIN, Gimbsheim: "The consequences of the potato blight in South Germany", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 213-222.

MALINOWSKI, Bronislaw (1941): *An anthropological analysis of war*, American Journal of Sociology, volumen 46, número 4, pp. 521-550.

Consultado en: https://www.jstor.org/stable/2769922?seq=1#page_scan_tab_contents

MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio (1997): *Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo Régimen*, Santander, Universidad de Cantabria: Fundación Marcelino Botín.

MANTECÓN, Tomás A. (2009): "Homicides et violence dans L'Espagne de l'Ancien Régime", en MUCCHIELLI, Laurent, SPIERENBURG, Pieter (dir.): *Histoire de l'homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours*, Paris, La Découverte, pp. 13-52.

MALUQUER DE MOTES, Jordi (2013): "La inflación en España. Un índice de precios de consumo", *Estudios de Historia Económica*, nº 64.

MARIN, Irina (2018): *Peasant Violence and Antisemitism in Early Twentieth-Century Eastern Europe*, Basingstoke, Palgrave Macmillan.

MARSHALL, Monty G., COLE, Benjamin R. (2014): *Global Report 2014. Conflict, Governance, and State Fragility*, Vienna, Center for Systemic Peace. Consultado en:

<http://www.systemicpeace.org/vlibrary/GlobalReport2014.pdf>

MARTÍ GÓMEZ, José (1995): *La España del estraperlo*, Barcelona, Planeta.

MARTÍN, Gerardo (2018): *Policía local de Vigo. Hombres y mujeres que velan por los ciudadanos*, Vigo, Instituto de Estudios Vigueses.

MARTÍN ACEÑA, Pablo (1984): *La política monetaria en España: 1919-1935*, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.

MARTÍN CORRALES, Eloy (2002): "El nacionalismo catalán y la expansión colonial española en Marruecos: de la guerra de África a la entrada en vigor del Protectorado (1860-1912)", en MARTÍN CORRALES, Eloy (ed.) et al: *Marruecos y el colonialismo español (1859-1912): de la guerra de África a la "penetración pacífica"*, Barcelona, Bellaterra.

MARTÍN SÁNCHEZ, David (2018): "El pueblo gitano vasco en el siglo xix, entre la asimilación y la reafirmación", en *Historia y Política*, 40, pp. 53-81.

MARTÍNEZ CARRETERO, Iván (2016): *Delitos, justicia ordinaria y control social en Zaragoza (1931-1945): de la II República a la Dictadura de Franco*. Universidad de Zaragoza. Tesis doctoral. Consultada en:

<https://core.ac.uk/download/pdf/289981934.pdf>

MARTÍNEZ DEL CAMPO, Luis G. (2013): "La educación del gentleman español. La influencia británica sobre la elite social española (1898-1936)", en *Ayer*, nº 89, pp. 123-144.

MARTÍNEZ LACABE, Eduardo (2004): *Violencia y muerte en Navarra. Guerras, epidemias y escasez de subsistencias en el siglo XIX*, Pamplona, Dirección de Publicaciones de la Universidad Pública de Navarra.

MARTINES, Lauro (2013): *Un tiempo de guerras: una historia alternativa de Europa, 1450-1700*, Barcelona, Crítica.

MARTÍNEZ PÉREZ, Fernando (2007): "LA constitucionalización de la justicia (1810-1823)", en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 169-208.

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (1967): "Desertores y prófugos en la primera mitad del siglo XIX. Sus causas y efectos", en *Hispania. Revista Española de Historia*, vol. XVII, núm. 107, pp. 608-638.

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (1982): *La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina*, Granada, Universidad de Granada.

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (1994): "La Guardia Civil en su época fundacional", en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 29-38.

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (2018): *El ejército del Rey: los soldados de la Ilustración*, Madrid, Actas.

MARTÍNEZ SEGARRA, Rosa María (1980): *El Somatén Nacional en la Dictadura del General Primo de Rivera. Tesis doctoral*, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.

MARTORELL LINARES, Miguel (2011): ""No fue aquello solamente una guerra, fue una revolución": España y la Primera Guerra Mundial", en *Historia Social*, nº 26, pp. 17-45.

MARTORELL LINARES, Miguel (2017): "El duelo en 1900: Un delito "especial"", en ALVARADO PLANAS, Javier, MARTORELL LINARES, Miguel (coords.): *Historia del delito y el castigo en la Edad Contemporánea*, Madrid, Dykinson, pp. 355-378.

MARZAL RODRÍGUEZ, Pascual (2005): *Magistratura y República. El Tribunal Supremo (1931-1939)*, Valencia, Editorial Práctica de Derecho.

MATHIEU, Nicole (2005): "Pourquoi s'interroger aujourd'hui sur les violences rurales au quotidien?" en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire, pp. 359-366.

MATTHEWS, Chistopher R. (2014): "Biology Ideology and Pastiche Hegemony", en *Men and Masculinities*, nº 17 (2), pp. 99-119.

MAYORAL, Marina (2003): "Emilia Pardo Bazán ante la condición femenina", en FREIRE LÓPEZ, Ana María (ed.): *Estudios sobre la obra de Emilia Pardo Bazán: actas de las Jornadas Conmemorativas de los 150 años de su nacimiento*, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, pp. 101-114.

MCGLYNN, Sean (2009): *A hierro y fuego. Las atrocidades de la guerra en la Edad Media*. Barcelona, Crítica D. L.

MCKINNEY, Collin (2017): "Vestidos de negro: la indumentaria masculina del siglo XIX en España", en ZABALGOITIA HERRERA, Mauricio (ed): *Hombres en peligro. Género, nación e imperio en la España de cambio de siglo (XIX-XX)*, Madrid, Iberoamericana, pp. 39-66.

MC MAHON, Richard, EIBACH, Joachim, ROTH, Randolph (2013): "Making sense of violence? REflections on the history of interpersonal violence in Europe", *Crime, histoire & sociétés*, vol 17, nº 2, pp. 5-26.

MC MAHON, Richard (2016): "Histories of Interpersonal Violence in Europe and North America, 1700-Present", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 111-131.

MEIJIDE PARDO, Antonio (1992): "Actuación del general Quiroga en la guerra civil de 1823 y sus años de exilio", en *Anuario Brigantino*, nº 15, pp. 89-112, Betanzos.

MEIJIDE PARDO, Antonio (1992): *La Invasión inglesa de Galicia en 1719*, Santiago de Compostela, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos.

MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel (1989): *Extremadura en el antiguo régimen : economía y sociedad en tierra de Cáceres: 1700-1814*, Editora Regional de Extremadura, Mérida.

MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel (1999): *Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal: (siglos XV-XVIII)*, Cáceres, Cícón, D. L..

MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel (2009): *Los tentáculos de la hidra : contrabando y militarización del orden público en España (1784-1800)*, Cáceres, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones; Madrid, Sílex.

MIDDENDORFF, Wolf (1981): *Estudios de criminología histórica, segunda edición*, Madrid, Espasa-Calpe.

MIDELFORT, G. H. Eric (2019): "The end of witch hunting", en LYONS, John D. (eds.): *The Oxford Handbook of the Baroque*, Nueva York, NY, Oxford University Press.

MÍGUEZ MACHO, Antonio (2008): *La construcción de la ciudadanía a través de los movimientos sociales. El movimiento obrero en Galicia (1890-1936)*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de marzo, S. L.

MÍGUEZ MACHO, Antonio, CABO VILLAVARDE, Miguel (2010): “«Reconquistar Galicia para Cristo». Un balance del catolicismo social en Galicia (1890-1936)”, en *Ayer*, nº 79, pp. 223-245.

MÍGUEZ MACHO, Antonio, CABO VILLAVARDE, Miguel (2013): “Pisando la dudosa luz del día: el proceso de democratización en la Galicia rural de la Restauración”, en *Ayer*, nº 89, pp. 43-65.

MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, Jesús (2000): “Los poderes locales en la sociedad agraria : una propuesta de balance”, en *Historia Agraria*, nº 22, pp. 97-110.

MILLER, A. E. J., MACDONGALL, J. D., TARNOPOLSKY, M. A., SALE, D. G. (1993): “Gender differences in strength and muscle fiber characteristics”, en *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, nº 66/3, pp. 254-262.

MOA, Pío (2005): *1936: El asalto final a la República*, Barcelona, Áltera.

MOHAMED KAMEL AMIN HANZAL, Nour el din (2009): *El artículo 89 del Código Penal*, Tesis Doctoral consultada defendida en 2008 en la Universidad de Valencia, Valencia, Servei de Publicacions de la Universitat de València.

Consultado en: <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9691/hanzal.pdf?sequence=1>Nour

MONKKONEN, Eric (2001): “New Standards for historical homicide research”, *Crime, histoire & sociétés*, vol. 5, nº 2, pp. 5-26.

MONKKONEN, Eric (2006): “Homicide: Explaining America's Exceptionalism”, en *The American Historical Review*, vol. 111, pp. 76-94.

MONTANOS, Emma (2017): “El homicidio y el asesinato”, en ALVARADO PLANAS, Javier, MARTORELL LINARES, Miguel (coords.): *Historia del delito y el castigo en la Edad Contemporánea*, Madrid, Dykinson, pp. 249-272.

MOLAS, P.: “La organización territorial del poder en la monarquía española en vísperas de la Guerra de Independencia”, en BERAMENDI, Justo, VEIGA, Xosé Ramón (eds.): *Poder y territorio en la España del siglo XIX. DE las Cortes de Cádiz a la Restauración*, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 19-31.

MOON, David (1999): *The Russian peasantry 1600-1930: the world the peasants made*, Londres, Longman.

MORALES VILLANUEVA, Antonio (1989): “Evolución de la Administración policial”, en *Revista de administración pública*, Nº 118, 1989, pp. 347-410.

Consultado en:

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/16993.pdf>

MORENO GONZÁLEZ, Xoan M. (1984): “Federalismo y regionalismo en la Galicia de la Restauración”, en *Estudios de Historia Social*, Madrid, Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social, nº 28-29, pp. 455-466.

MORENO GONZÁLEZ, Xan (1990): "A Primeira Internacional en Galicia (1868-1874)", en *O movemento obreiro en Galicia: catro ensaios*, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, pp. 21-114.

MORENO LÁZARO, Javier (2003): "Fiscalidad y revueltas populares en Castilla y León durante el bienio progresista, 1854-1856", en *Historia Agraria*, nº 31, pp. 111-139.

MORENO LUZÓN, Javier (1998): *Romanones. Caciquismo y política liberal*, Madrid, Alianza Editorial.

MOSHER, Clayton J., MIETHE, Terance D., HART, Timothy C. (2011): *The Mismeasure of crime (2ª ed)*, SAGE Publications, Thousand Oaks.

MUCHEMBLED, Robert (2008): *Une histoire de la violence. De la fin du Moyen Âge à nos jours*, Paris, Éditions du Seuil.

MULLEN, Paul E. (2004): "The autogenic (self-generated) massacre", en *Behav Sci Law*, vol. 22, nº 3, pp. 311-323.

MUÑOZ DE BUSTILLO, Carmen (2007): "La fallida recepción en España de la justicia napoleónica (1808-1812)", en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 135-168.

MUÑOZ JOFRE, Jaume (2016): *La España corrupta: breve historia de la corrupción (desde la Restauración a nuestros días, 1875-2016)*, Granada, Comares.

NASH, Mary (1989): "Control social y trayectoria histórica de la mujer en España, pp. 151-173), en BERGALLI, Roberto, MARI, Enrique E. (coords.): *Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos XIX y XX)*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias.

NAVARRO GISBERT, José Antonio (2006): *¿Por qué fracasó la II República? Historia documentada de sus errores*, Barcelona, Altera.

NEGRO, Nuño (2018): *Un monstruo indestructible: policía y orden público en el Estado español (siglos XIX-XX)*, Aranjuez, Cuadernos de Contrahistoria.

NIETO RODRÍGUEZ, Manuel (1990): Las armas de fuego de la Guardia Civil: Su evolución histórica (1844-1936), en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 4, pp. 97-115.

NOVELLE LÓPEZ, Laura (2012): "Aprehensores, denunciadores, delatores: aproximación a la represión del contrabando en las poblaciones rayanas de la provincia de Ourense durante los primeros cuarenta", en SEGURA, Andoni, MAYAYO, Andreu, ABELLÓ I GÜELL, Teresa (dir.): *La dictadura franquista: la institucionalització d' un règim*, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, pp. 285-298.

NÚÑEZ CALVO, Jesús Narciso (2014): "La estructura de la seguridad pública durante la Segunda República (1931-1936)", en *Cuadernos de la Guardia Civil. Revista de Seguridad Pública*, nº 49, pp. 95-121.

NÚÑEZ SEIXAS, Xosé M. (1993): *El fascismo en Galicia. El caso de Ourense (1931-1936)*, Barcelona, Publicacions Universitat de Barcelona.

LACOMBA, Juan Antonio (1970): *La crisis española de 1917*, Madrid, Ciencia Nueva.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel (2005): *La Hermandad en Galicia, 1490-1498*, Cuadernos de estudios gallegos, tomo 54, fascículo 118, pp. 239-287.

LANDI, Antonio, FACCHINI, Maria C., SARACINO, Antonio, CASERTA, Giuseppe (1997): "Historical aspects", en FOUCHER, Guy (ed.): *Reconstructive Surgery in Hand Mutilation*, Londres, Martin Dunitz.

LAWRENCE, Paul (2004): "Policing the Poor in England and France, 1850-1900", en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press, pp. 210-225.

LEE, Hyosang, KIM, Dong-Wook, REMEDIOS, Ryan, ANTHONY, Todd E., CHANG, Angela, MADISEN, Linda, ZENG, Hongkui, ANDERSON, David J. (2014): "Scalable control of mounting and attack by Esr1⁺ neurons in the ventromedial hypothalamus", en *Nature*, nº 509, pp. 627-632.

LEMPÉRIÈRE, Annick (2004): "Revolución, guerra civil, guerra de independencia en el mundo hispánico 1808-1825", en *Ayer*, nº 55, pp. 15-36.

LEVACK, Brian P. (1995): *The Witch-hunt in Early Modern Europe*, London, Longman.

LEWIS, Oscar (1972): *La cultura de la pobreza*, Barcelona, Anagrama.

LINDSTRÖM, Dag (2009): "Les homicides en Scandinavie, analyse à long terme", en MUCCHIELLI, Laurent, SPIERENBURG, Pieter (dir.): *Histoire de l'homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours*, Paris, La Découverte, pp. 249-272.

LISÓN TOLOSANA, Carmelo (1983): *Antropología cultural de Galicia*, segunda edición, Madrid, Akal.

LISÓN TOLOSANA, Carmelo (1987): *Brujería, estructura social y simbolismo en Galicia: (antropología cultural de Galicia 2)*, Madrid, Akal.

LISÓN TOLOSANA, Carmelo (2010): *Qué es ser hombre: (valores cívicos y valores conflictivos en la Galicia profunda)*, Tres Cantos (Madrid), Akal.

LISTER, Enrique (1977): *Memorias de un luchador. I. Los primeros combates*, Madrid, G. del Toro.

LLORCA FREIRE, Guillermo (2008): *Ferrol: Memoria da vida cotiá. Alimentación, oficios, tempo de lecer, tempo de fogar*, Ferrol, Librería del Campus.

LOCKER, John P. (2005): "'Quiet thieves, quiet punishment': private responses to the 'respectable' offender, c. 1850-1900", *Crime, Histoire & Sociétés*, vol 9, nº 1, pp. 9-31.

LÓPEZ CORRAL, Miguel (1994-A): "La Guardia Civil en el Sexenio Revolucionario (1868-1874)", en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 51-66.

LÓPEZ CORRAL, Miguel (1994-B): "La Guardia Civil en la guerra (1936-1939)", en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 143-156.

LÓPEZ CORRAL, Miguel (2009): *La guardia Civil. Claves históricas para entender a la Benemérita y a sus hombres (1844-1975)*, Madrid, La Esfera de los Libros.

LÓPEZ DÍAZ, María (2009): “Crisis de subsistencia y guerra de Sucesión en Galicia: los motines de Coruña de 1709”, en LÓPEZ DÍAZ, María (edit.): *Estudios en homenaje al profesor José M. Pérez García*, Vigo, Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.

LÓPEZ GARRIDO, Diego (1987): *El aparato policial en España*, Barcelona, Ariel.

LÓPEZ GARRIDO, Diego (2004): *La Guardia Civil y los orígenes del estado centralista*, Madrid, Alianza.

LÓPEZ GÓMEZ, Pedro (1994): *La Real Audiencia de Galicia y el Archivo del Reino*, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.

LÓPEZ ÍÑIGUEZ, Julio (2017): *La Unión Patriótica y el Somatén valenciano*, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia.

LÓPEZ MORÁN, Beatriz (1995): *El bandolerismo gallego en la primera mitad del siglo XIX*, Sada, Edicións do Castro.

LÓPEZ-NIETO Y MALLO, Francisco (1986): *La Policía Municipal*, Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, Pilar (1985): *Campesinos propietarios. La redención de foros en la provincia de Lugo durante la I República*, Lugo, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Lugo.

LÓPEZ SÁNCHEZ, Conchi (2018): “Os comportamentos duais dos axentes sociais na dimensión da violencia”, en FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, MÍGUEZ MACHO, Antonio (eds.): *Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo*, Vigo, Galaxia, pp. 89-136.

LÓPEZ TABOADA, Xosé Antonio (aut.), FERNÁNDEZ NICOLÁS, Xénxo, PIS SÁNCHEZ, Eduardo (1986): *Precios do trigo, centeo e millo na segunda metade do século XIX en Galicia*, Santiago de Compostela, Servicio Central de Publicacións da Consellería da Presidencia.

LÓPEZ TABOADA, Xosé Antonio (1996): *La población de Galicia 1860-1991. Crecimiento, movimiento natural y estructura de la población de Galicia*, A Coruña, Fundación Caixa Galicia.

LORBER, Judith (1993): “Believing is seeing: Biology as Ideology”, en *Gender & Society*, nº 7(4), pp. 568-581.

LORENZO JIMÉNEZ, José Vicente (2011): “La jurisdicción de Hacienda y la unificación de fueros (1852-1868)”, en *Boletín del Ministerio de Justicia*, nº 2135, pp. 1-31.

LUCEA AYALA, Víctor (2002): “Amotinadas: las mujeres en la protesta popular de la provincia de Zaragoza a finales del siglo XIX”, en *Ayer*, nº 47, pp. 185-207.

LUCEA AYALA, Víctor (2009): *El pueblo en movimiento. La protesta social en Aragón (1885-1917)*, Zaragoza, Prensas Universitarias.

LUIS, Jean-Philippe (2014): “El absolutismo y la cuestión del territorio durante las restauraciones (1814-1833)”, en BERAMENDI, Justo, VEIGA, Xosé Ramón (eds.): *Poder y territorio en la España del siglo XIX. DE las Cortes de Cádiz a la Restauración*, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 93-116.

Ó GRÁDA, Cormac: "Ireland's Great Famine. An overview", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 43-58.

OESTREICH, Gerhard (1982): *Neostoicism and the early modern state*, Cambridge, Cambridge University Press.

OLIVER OLMO, Pedro (2017): "La pena de muerte en España; cambios y pervivencias desde el Antiguo Régimen", en ALVARADO PLANAS, Javier, MARTORELL LINARES, Miguel (coords.): *Historia del delito y el castigo en la Edad Contemporánea*, Madrid, Dykinson.

OLMEDO, Nuria (2004): *Guardia Civil, ¿policías o soldados?*, Córdoba, Almuzara.

OPPENHEIM, Adolf Leo (1967): *Letters from Mesopotamia. Official, Business and Private Letters on Clay Tablets from Two Millennia*, Chicago, The University of Chicago Press.

ORDUÑA REBOLLO, Enrique (2000): "Estudio preliminar de Enrique Orduña Rebollo", en *Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de la Península e Islas Adyacentes, aprobada por S. M. en el Real Decreto del 21 de abril de 1834* (2000), Madrid, Imprenta Nacional del Boletín del Estado.

ORTEGA-ESCOBAR, Joaquín, ALCÁZAR-CÓRCOLES, Miguel Ángel (2016): "Neurobiología de la agresión y la violencia", *Anuario de Psicología Jurídica*, vol. 26, nº 1, pp. 60-69. Consultado en:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1133074016300022>

ORTEGO GIL, Pedro (2016): *Estadística y control de la actividad judicial durante el siglo XIX*, Madrid, Dykinson.

ORTEGO GIL, Pedro (2017): "Control y descontrol ministerial sobre Jueces y Juzgados de Primera Instancia (1834-1902)", en SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, José (investigador principal): *Control y responsabilidad de los jueces (siglos XVI-XXI)*, Madrid, Dykinson, pp. 159-229.

ORTEGO GIL, Pedro (2018): *Inamovilidad, interinidad e inestabilidad: el control ministerial sobre los jueces en el siglo XIX*, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

OSUNA REY, Juan Manuel (2006): *Los franceses en Galicia : historia militar de la guerra de independencia en Galicia (1809)*, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.

PALAFIX, Jordi (1997): "Las luces y sombras del crecimiento económico. 1900-1920", en *Ayer*, nº 28, pp 61-90.

PALOP RAMOS, J. M. (2000): "Notas sobre la criminalidad en Galicia a finales del siglo XVIII", en *Conflictos y represiones en el Antiguo Régimen*, Valencia, Departamento de Historia Moderna de la Universitat de Valencia.

PAPING, Richard, TASSENAAR, Vincent: "The consequences of the potato disease in the Netherlands 1845-1860: a regional approach", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.):

When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850, Turnhout, Brepols, pp. 149-184.

PARDO DE CELA, Santiago F., ADRÁN GOÁS, Carlos (2013): “La Milicia Honrada de Viveiro (1810)”, en *Rudesindus: miscelánea de arte e cultura*, nº9, pp. 223-238.

PARDO GATO, José Ricardo (2018-A): *Regimientos militares en Galicia. Historia y evolución. Tomo I*, A Coruña, Editorial Deputación Provincial da Coruña.

PARDO GATO, José Ricardo (2018-A): *Regimientos militares en Galicia. Historia y evolución. Tomo II. Apéndice documental*, A Coruña, Editorial Deputación Provincial da Coruña.

PARDOS ALDEA, José (1994): “La Guardia Civil en la Restauración: De Sagunto a la mayoría de edad de Alfonso XIII (1875-1902)”, en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 73-80.

PAREJO BARRANCO, Antonio, SÁNCHEZ PICÓN, Andrés (2007): *La modernización de España (1914-1939). Economía*, Madrid, Síntesis.

PARIS MARTIN, Álvaro (2020): “Armar al pueblo en defensa del rey: las milicias contrarrevolucionarias y realistas en Europa (1789-1830)”, en *Rúbrica Contemporánea*, vol 9, nº 18, pp. 23-51.

PAYNE, Stanley G. (2005): *El colapso de la República: los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936)*, Madrid, La Esfera de los Libros.

PAZOS GÓMEZ, Manuel (2005): “Batalla de Sigüeiro: o pronunciamento progresista do ano 1846”, Oroso, Concello de Oroso.

PEÑA DÍAZ, Manuel (2014): “Tolerar la costumbre: Ferias y romerías en el siglo XVIII”, *Hispania*, vol. LXXIV, nº. 248, septiembre-diciembre, págs. 777-806.

PEREIRA, Dionisio (2012): *José Pasín Romero. Memoria do proletariado militante de Compostela*, Santiago de Compostela, Fundación 10 de marzo.

PÉREZ, Joseph (2010): *Historia de la brujería en España*, Madrid, Espasa.

PÉREZ ÁLVAREZ, Luis (2015): *Memorias. Mi testamento humano y social*, A Coruña, Corsárias.

PÉREZ VIÑUELA, Amador (1994): “La Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII: La etapa parlamentaria (1902-1923)”, en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 89-06.

PERNAS OROZA, Herminia (2001): *Las clases trabajadoras en la sociedad compostelana del siglo XIX*, Vigo, Nígrax Imaxe S. L..

PEYROU, Florencia (2008): “Ciudadanía y revolución en el movimiento demo-republicano del periodo de Isabel II”, en *Ayer*, nº 70, pp. 171-198.

PINKER, Steven (2012): *Los ángeles que llevamos dentro*, Barcelona, Paidós Ibérica.

PLOUX, François (2005): "Violence et reproduction domestique dans les campagnes du Haut-Quercy au XIX^e siècle" en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire, pp. 137-152.

POLDRACK, Russel A., MONAHAN, John, IMREY, Peter B., REYNA, Valerie, RAICHLE, Marcus E., FAIGMAN, David, BUCKHOLTZ, Joshua (2017): "Predicting Violent Behavior: What Can Neuroscience Add?" en *Trends in Cognitive Sciences*, volumen 22, nº 2, pp. 111-123.

PRADA RODRÍGUEZ, Xulio, SOUTELO VÁZQUEZ, Raúl (1998): "Estratexias de supervivencia económica na posguerra: mercado negro, acaparamento e ocultación", en CARRILLO LISTA, M^a del Pilar et al (aut.): *Historia nova V: contribución dos Xoves Historiadores de Galicia*, Santiago de Compostela, Asociación Galega de Historiadores, pp. 177-214.

PRADA RODRÍGUEZ, Xulio (2007): *Violencia política, protesta social e orde pública no Ourense republicano*, Sada, Edicións do Castro.

PRADA RODRÍGUEZ, Julio (2016): "A expansión do PCE no rural galaico a partir de outubro de 1934", en MOURE, Teresa (coord.): *Bolxeviques*, Vigo, Através Editora, pp. 87-97.

PRADA RODRÍGUEZ, Julio (2019): "Líderes agrarios, identidades anticlericales y acción colectiva en la etapa del Frente Popular", en *Historia Agraria*, nº 78, pp. 161-189.

PRESTON, Paul (1994): *Franco, "Caudillo de España"*, Barcelona, Grijalbo.

PRO RUIZ, Juan (2019): *La construcción del Estado en España: una historia del siglo XIX*, Madrid, Alianza Editorial.

PROL, Santiago (2008): *Benigno Álvarez. Un comunista na Galiza dos anos trinta*, Vigo, A Nosa Terra.

PUIG, Jaime J. (1984): *Historia de la Guardia Civil*, Barcelona, Mitre.

PUJADAS, Xabier, SANTACANA, Carles (2003): "El club deportivo como marco de sociabilidad en España. Una visión histórica (1850-1975)", en *Hispania*, Madrid, nº 214, vol. 63, 505-521.

RAMÍREZ RUIZ, Raúl (2006): *La criminalidad como fuente histórica. El caso cordobés 1900-1931*, Dykinson, Madrid.

RAMÓN SOLANS, Francisco Javier (2014): *Milagros, visiones apocalípticas y profecías. Una lectura sobrenatural de la Guerra de la Independencia*, en *Ayer*, nº 96, pp. 83-104

RAMOS RODRÍGUEZ, Perfecto (2015): "Marcelino Gómez Arias: unha vida dedicada á loita pola República e o agrarismo", Vigo, Redelibros.

RAMOS VÁZQUEZ, Isabel (2017): "Historia del régimen penitenciario en España (1834-1936)", en ALVARADO PLANAS, Javier, MARTORELL LINARES, Miguel (coords.): *Historia del delito y el castigo en la Edad Contemporánea*, Madrid, Dykinson, pp. 97-119.

RECASENS I BRUNET, Amadeu (1989): "Aquellas aguas trajeron estos lodos: la burguesía y los orígenes del aparato policial", en BERGALLI, Roberto, MARI, Enrique E. (coords.): *Historia ideológica del control social (España-Argentina, siglos XIX y XX)*, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias, pp. 285-322.

REDONDO CARDEÑOSO, Jesús-Ángel (2010): *Culturas de protesta y violencia de los campesinos de Tierra de Campos (1900-1923)*, Tesis doctoral, Universidad de Valladolid. Consultado en:

<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/780>

REDONDO CARDEÑOSO, Jesús Ángel (2011): *Protesta y violencia de los campesinos castellano-leoneses: la Tierra de Campos (1900-1923)*, Palencia, Diputación de Palencia.

REGO RAMA, Silvia (2000): *Control social y proyectos políticos en una sociedad rural. Carballo, 1880-1936*, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

REY CASTELAO, Ofelia (1996): "Hombres y ejército en la Galicia del siglo XVIII", en *A guerra en Galicia; O rural e o urbano na historia de Galicia*, Santiago de Compostela, Asociación Galega de Historiadores, pp. 153-188.

REY GONZÁLEZ, Antonio M. (1990): *Estudios médico-sociales sobre marginados en la España del siglo XIX*, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo.

RICO SÁNCHEZ, Alberto (2008): "Retribuciones en la Guardia Civil, 1931-1936", en *Ayer*, nº 71, pp. 267-289.

RINGROSE, David R. (1987): *Transportes, mercado interior e industrialización (siglo XIX)*, en RINGROSE, David R.: *Imperio y península: ensayos sobre historia económica de España (siglos XVI-XIX)*, Madrid, Siglo XXI.

RIVOLA JERICÓ, Carlos (2000): "De nuevo sobre el tema de la brujería. El problema de la incredulidad en el siglo XVIII", en *Historia Social*, nº 38, pp. 17-34.

RIZO GÓMEZ, Ramón (2002): "Psicología y utilización de las armas de fuego", en *Cuadernos de la Guardia Civil. Revista de Seguridad Pública*, nº 26, pp. 103-113.

RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar (2013): "Cambalaches": hambre, moralidad popular y mercados negros de guerra y postguerra, en *Historia Social*, número 71, pp. 149-174.

RODRÍGUEZ GALDO, María Xosé, DOPICO, Fausto (1981): *Crisis agrarias y crecimiento económico en Galicia en el siglo XIX*, Sada, Edición do Castro.

RODRÍGUEZ GÓMEZ, José (2014): *El honor es mi divisa (la Guardia Civil en Negreira)*, Vigo, Cardeñoso.

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Antonio José (2007): "De Galicia a Flandes: reclutamiento y servicio de soldados gallegos en el ejército de Flandes (1648-1700)", en *Obradoiro de Historia Moderna*, nº 16, pp. 213-251.

RODRÍGUEZ MARTÍN, Ana María (2008): "El destino de los niños de la inclusa de Pontevedra, 1872-1903", en *Cuadernos de Estudios Gallegos*, nº 121, pp. 353-388.

RODRÍGUEZ MARTÍN, Ana María (2017): "La visión de la mendicidad en la prensa de Pontevedra (1850-1903)", en *Cuadernos de Estudios Gallegos*, nº 130, pp. 399-429.

RODRÍGUEZ LAGO, José Ramón (2012): *La Iglesia Católica en Galicia, 1910-1936 : entre la revolución de Portugal y la cruzada de España*, Santiago de Compostela, Andaviria.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Luis (1997): "Apuntes sobre o carlismo lugués (1872-1876)", en *Boletín do Museo Provincial de Lugo*, nº 8, fascículo 2.

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Francisco (2019): "Revolta popular coas mulleres na vangarda. Trasancos, marzo 1918" en *"De nós": monografías con perspectiva galega*, nº 1, pp. 32-43.

ROCHA GONÇALVES, Gonçalo (2014): "Police reform and the transnational circulation of police models: the portuguese case in the 1860s", en *Crime, histoire & sociétés*, vol 18, nº1, pp. 5-29.

ROCHÉ, Sebastian (2004): "Deviance, Control, and Democracy: France, 1950-2000", en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press, pp. 368-394.

ROJO GIL, Joaquín, MARTÍNEZ ROBLES, Pedro (1974): "Actuación de la policía" en SIERRA MOLINA, Francisco, GARCÍA PÉREZ, José María, ROJO GIL, Joaquín, MARTÍNEZ ROBLES, Pedro, JORDÁ MONTAÑÉS, Manuel, COLLAR SUÁREZ-INCLÁN, Fernando, LÓPEZ FERNÁNDEZ, José María, LÓPEZ DE TORRES, César Alfonso, CABRERA FONTANA, Lorenzo, MAHILLO SANTOS, Juan: *Guía de la policía municipal*, Madrid, Escuela Nacional de Administración Local, pp. 79-192.

ROJO, Teresa (2009): "Violencia juvenil y entornos urbanos", en *Anduli*, nº 9, pp. 9-28.

ROMERO MASIÁ, Ana, PEREIRA MARTÍNEZ, Carlos (2011): *Xaime Quintanilla Martínez. Vida e obra dun socialista e galeguista ao servizo da República*, Santiago de Compostela, Fundación Luis Tilve.

ROSS, Jeffrey Ian (2009): "The Primacy of Grievance as a Structural Cause of Oppositional Political Terrorism: Comparing Al-Fatah, FARC, and PIRA", en CANTER, A. (ed.): *The faces of terrorism: multidisciplinary perspectives*, Chichester, John Wiley & Sons Ltd, pp. 75-95.

ROSSEAUX, Xavier (2013): "La violencia en las sociedades premodernas: Nivelles, una ciudad de Bravante a lo largo de cinco siglos", en FORTEA, José I., GELABERT, Juan E., MANTECÓN, Tomás A. (ed.): *Furor et rabies. Violencia, conflicto y marginación en la Edad Moderna*, Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria.

ROSSEAUX, Xavier, DAUVEN, Bernard, MUSIN, Aude (2009): "Civilisation des mœurs et/ou disciplinarisation sociales? Les sociétés urbaines face à la violence en Europe (1300-1800)", en MUCCHIELLI, Laurent, SPIERENBURG, Pieter (dir.): *Histoire de l'homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours*, Paris, La Découverte, pp. 273-321.

ROTH, Randolph (2009): *American homicide*, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press.

ROTH, Randolph (2011): "Yes we can: working together toward a history of homicide that is empirically, mathematically, and theoretically sound", en *Crime, histoire & sociétés*, vol 15, nº2, pp. 131-145.

RUIZ ASTIZ, Javier (2013): "Cencerradas y matracas en Navarra durante el Antiguo Régimen: funciones y objetivos", en *Hispania*, 2013, vol. LXXIII, nº. 245, septiembre-diciembre, pp. 733-760.

RUZAGA ORTEGA, Rafael (2004): "El impacto de la crisis de subsistencias de la década de 1850 en el País Vasco", en *Ayer*, nº 55, pp. 207-233.

SAAVEDRA FERNÁNDEZ, Pegerto (1992): *A vida cotiá en Galicia de 1550 a 1850*, Santiago de Compostela, Servicio de publicacións da Universidade de Santiago de Compostela.

SAAVEDRA, Pegerto (1994): "Señoríos y comunidades campesinas en la España del Antiguo Régimen", en SARASA SÁNCHEZ, Esteban, SERRANO MARTÍN, Eliseo (eds.): *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica*, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, pp. 427-474.

SABATO, Hilda (2008): "Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una tradición política. Argentina, 1880", en *Ayer*, nº 70, pp. 93-114.

SAINZ GUERRA, Juan (2004): *La evolución del derecho penal en España*, Jaén, Universidad de Jaén.

SANABRIA, Enrique A. (2009): *Republicanism and anticlerical nationalism in Spain*, Nueva York, Palgrave Macmillan.

SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel (2016): "O PCE na Galicia anterior ao alzamento fascista de 1936", en MOURE, Teresa (coord.): *Bolxeviques*, Vigo, Através Editora, pp. 65-76.

SANTOS CASTROVIEJO, Iago, NORES SOLIÑO, Antonio (2005): *Historia de Cangas, 1900-1936. Unha ribeira de pescadores*, Vigo, A Nosa Terra.

SARTI, Raffaella (2003): *Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna*, Barcelona, Crítica.

SCHWERHOFF, Gerd (2002): "Criminalized violence and the process of civilization: a reappraisal", *Crime, histoire & sociétés*, vol 6, nº2, pp. 103-126.

SCHWERHOFF, Gerd (2013): "Early modern violence and the honor code: from social integration to social distinction?", *Crime, histoire & sociétés*, vol 17, nº2, pp. 27-46.

SCOTT, J. C. (1995): *Weapons of the weak: everyday forms of peasant resistance*, New Haven, Yale University Press.

SEMBEL, Patrick (2005): "La figure du nomade et la violence rurale en Poitou, de 1874 à 1912", en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire, pp. 217-229.

SERNA ALONSO, Justo (1988): *Presos y pobres en la España del XIX : la determinación social de la marginación*, Barcelona, PPU.

SERRANO, Juan J. (1971): "Introducción y comentarios a la Ley sobre "Peligrosidad y rehabilitación social"", en *Documentación social*, número 2, pp. 71-84.

Consultado en:

https://books.google.es/books?id=EPPirQ-ZaO8C&pg=PA72&lpg=PA72&dq=codigo+penal+1870+vagancia&source=bl&ots=oZATIA3RIE&sig=-iPxb_OtJqwb1khCBtIL1doE1_4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiQkJ3P_6nYAhXBbVAKHS7JDRkQ6AEISTA F#v=onepage&q=codigo%20penal%201870%20vagancia&f=false

SERRANO ÁLVAREZ, José A. (2005): “La defensa del comunal y de los usos colectivos, León (1800-1936): ¿una «economía moral»?”, en *Historia Agraria*, nº 37, pp. 431-463.

SERRANO GÓMEZ, Alfonso (2007): *Historia de la criminología en España*, Madrid, Dykinson.

SERRANO JIMÉNEZ, Lluís (2016): *Tancar la terra: pràctiques de propietat i dinàmiques socials (Catalunya, 1850-1910)*, Girona, Documenta Universitaria.

SERVÁN, Carmen (2007): “Configuraciones y desfiguraciones de la justicia bajo el constitucionalismo de 1869”, en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 363-395.

SHARPE, James (2009): “Histoire de la violence en Angleterre (XIIIe-XXe siècles)”, en MUCCHIELLI, Laurent, SPIERENBURG, Pieter (dir.): *Histoire de l'homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours*, Paris, La Découverte, pp. 231-248.

SHOEMAKER, Donald J. (2000): *Theories of Delinquency: An Examination of Explanations of Delinquent Behavior*, cuarta edición: New York, Oxford University Press.

SHPAYER-MAKOV, Haia (2004): “Control at the Workplace: Paternalism Reinvented in Victorian Britain”, en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press,, pp. 70-92.

SHUBERT, Adrian (1999): *Historia social de España (1800-1900)*, Madrid, Nerea.

SIERRA, María (2020): *Holocausto gitano. El genocidio romaní bajo el nazismo*, Madrid, Arzalia Ediciones.

SOLE ROMEO, Gloria: *La Instrucción de la mujer en la Restauración: la asociación para la enseñanza de la mujer*, Madrid, Universidad Complutense, Departamento de Historia Contemporánea, 1990.

SOLLA, Carlos (2011): *O ano que chimpamos o cacique. Crónica do agrarismo en Cerdedo (1916-1923)*, Cangas do Morrazo, Morgante.

SOLLA, María Julia (2007): “Justicia bajo Administración (1834-1868)”, en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 289-324.

SOMOZA CAYADO, Antonio, FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo (2011): “Inhibición de la política, violencia y conspiración: actuación de la derecha no republicana en Lugo ante el Frente Popular”, en GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, NAVARRO COMAS, Rocío (eds.): *La España del Frente Popular: política, sociedad, conflicto y cultura en la España de 1936*, Granada, Comares.

SOUTELO VÁZQUEZ, Raúl (2007): *Emigración de retorno e dinámicas sociopolíticas locais na Galicia rural: unha microanálise desde Valga, 1890-1950*, Valga, Departamento de Cultura del Concello de Valga.

SOUTELO VÁZQUEZ, Raúl (2014): *Emigración, negocios e política na Galicia rural: Coles (1887-1940)*, Ourense, Deputación Provincial de Ourense.

SOUTO BLANCO, María Jesús (1999): *La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940)*, Sada, Edición do Castro.

SOUTO BLANCO, María Jesús (2003): “Una «revuelta de hambre» en la Galicia del primer franquismo: O Saviñao” en *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, nº 2, pp. 241-254.

SOUTO KUSTRÍN, Sandra (2020): “Violencia política, organizaciones paramilitares y democracia en el periodo de entreguerras”, en *Rúbrica Contemporánea*, vol 9, nº 18, pp. 75-93.

SOUTO RUMBO, Ismael: “Religión y masculinidad en *Nazarín*”, en ZABALGOITIA HERRERA, Mauricio (ed): *Hombres en peligro. Género, nación e imperio en la España de cambio de siglo (XIX-XX)*, Madrid, Iberoamericana, pp. 155-172.

SPIERENBURG, Pieter (1998): “Knife fighting and popular codes of honor in Early Modern Amsterdam” en *Men and Violence. Gender, honor and ritual in Modern Europe and America*, Columbus, Ohio State University Press, pp. 103-127.

SPIERENBURG, Pieter (2001): “Violence and the civilizing process: does it work?”, en *Crime, histoire & sociétés*, vol 5, nº 2, pp. 87-105.

SPIERENBURG, Pieter (2002): “Theorizing in Jurassic Park: a reply to Gerd Schwerhoff”, en *Crime, histoire & sociétés*, vol 5, nº 2, pp. 127-128.

SPIERENBURG, Pieter (2004): “Social Control and History: An Introduction”, en EMSLEY, Clive, JOHNSON, Eric, SPIERENBURG, Pieter (eds.): *Social Control in Europe Volume 2, 1800-2000*, Columbus, The Ohio University Press, pp. 1-24.

SPIERENBURG, Pieter (2008): *A history of murder: personal violence in Europe from the Middle Ages to the present*, Cambridge, Malden.

SPIERENBURG, Pieter: (2008-B): “Violence: Reflections About a Word”, en BODY-GENDROT, Sophie, SPIERENBURG, Pieter (eds): *Violence in Europe*, New York, Springer.

SPIERENBURG, Pieter (2011-A): “American homicide. What does the evidence mean for theories of violence and society?”, en *Crime, histoire & sociétés*, vol 15, nº 2, pp. 123-129.

SPIERENBURG, Pieter (2011-B): “Questions that remain: Pieter Spierenburg’s reply to Randolph Roth”, *Crime, histoire & sociétés*, vol 15, nº 2, pp. 147-150.

SPIERENBURG, Pieter (2014): “Toward a global history of homicide and organized murder”, en *Crime, histoire & sociétés*, vol 18, nº 2, pp. 99-116.

SPIERENBURG, Pieter (2016): “The Rise of Criminology in its Historical Context”, en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 373-395.

STARR, Sonja B. (2012): *Estimating Gender Disparities in Federal Criminal Cases*, Paper, University of Michigan.

STILLWELL, Arlene M., BAUMEISTER, Roy F. (1997): "The construction of victim and perpetrator memories: Accuracy and distortion in role-based accounts", en *Personality and Social Psychology Bulletin*, número 23 (11), pp. 1157-1172.

TABOADA, Pablo (1978): "Crises de subsistencias e motíns populares na Galicia costeira (1835-1836), en *Grial*, tomo 16, nº 60, pp. 170-180, Vigo, Galaxia.

TABOADA CHIVITE, Jesús (1969): "La cencerrada en Galicia", en *Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares (1º. 1968. Zaragoza). Etnología y tradiciones populares: I Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares / convocado por la Institución "Fernando El Católico" con motivo de su XXV aniversario, Zaragoza, Institución "Fernando el Católico"*, pp. 203-215.

TABOADA GONZÁLEZ, Sabela (2006): *Violencia e conflictividade na Galicia da Restauración ata a Guerra Civil*, Trabajo Académicamente Dirigido presentado en el Departamento de Historia Contemporánea e de América (USC).

TAEHONG, Y., YANG, Cindy F., CHIZARI, M. Delara, MEHESWARANATHAN, Niru, BURKE JR., Kenneth J., BORRUS, Maxim, INOUE, Sayaka, CHIANG, Michael C., BENDER, Kevin J., GANGULI, Surya, SHAH, Nirao M. (2017): "Social Control of Hypothalamus-Mediated Male Aggression", en *Neuron*, vol. 85, nº 4, pp. 955-970.

TARROW, Sidney (1997): *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza.

TAUSIET, María (2004): *Ponzoña en los ojos: brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI*, Madrid, Turner.

TAUSIET, María (2006): "De la ilusión al desencanto: Feijoo y los 'falsos posesos' en la España del siglo XVIII", en *Historia Social*, nº 54, pp. 3-18.

TAUSIET, María (2015): "Emociones individuales, conmociones colectivas. Brujería y revolución en la España del siglo XIX", en *Historia Social*, nº 81, pp. 131-150.

TERRADILLOS BASOCO, Juan María (2020): "Homofobia y ley penal: la homosexualidad como paradigma de peligrosidad social en el Derecho penal español (1933-1995)", en *Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos*, nº 1, Universidad de Cadiz, pp. 63-102,

TILLY, Charles, TILLY, Louise, TILLY, Richard (1997): *El siglo rebelde: 1830-1930*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.

THOMPSON, Edward Palmer (1989-A): *La Formación de la clase obrera en Inglaterra*, tomo I, Barcelona, Crítica.

THOMPSON, Edward Palmer (1989-B): *La Formación de la clase obrera en Inglaterra*, tomo II, Barcelona, Crítica.

THOMPSON, Edward Palmer (1995): *Costumbres en común*, Barcelona, Crítica.

THOMAS, Maria (2013): *The Faith and the Fury: Popular Anticlerical Violence and Iconoclasm in Spain, 1931-1936*, Oregon, Sussex Academic Press.

TORTELLA CASARES, Gabriel (1970): "La evolución del sistema financiero español de 1856 a 1868", en SCHWARTZ, Pedro, (coord.): *Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX: realizados en el servicio de Estudios del Banco de España*, Madrid, Ariel.

TORRES DELGADO, Gemma (2017): "La nación viril. Imágenes masculinas de España en el africanismo reaccionario después de la derrota de Annual (1921-1927)", en *Ayer*, nº 106, pp. 133-158.

TRINIDAD FERNÁNDEZ, Pedro (1991): *La Defensa de la sociedad : cárcel y delincuencia en España : (siglos XVIII-XX)*, Madrid, Alianza.

TURRADO VIDAL, Martín (1991): *Estudios sobre la historia de la policía*, Volumen 1, Madrid, Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica.

TURRADO VIDAL, Martín (2002): *Documentos fundacionales de la policía*, Madrid, Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica.

TURRADO VIDAL, Martín (2001): *Policía y delincuencia a finales del siglo XIX*, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio del Interior, Dykinson.

UNODC (2018): *Global Study on Homicide 2018*, Viena.

Consultado en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf.

URDAL, Henryk (2004): "The Devil in the Demographics: The Effect of Youth Bulges on Domestic Armed Conflict, 1950-2000", *Social development papers. Conflict prevention and reconstruction series*, nº. CPR 14.

Consultado en: <http://documents.worldbank.org/curated/en/794881468762939913/The-devil-in-the-demographics-the-effect-of-youth-bulges-on-domestic-armed-conflict-1950-2000>

ULLA REGA, José Luis (1994): "La Guardia Civil en la Segunda República", en *Cuadernos de la Guardia Civil*, nº 10, pp. 125-136.

URÍA, Jorge (2001-A): "Presentación. El nacimiento del ocio contemporáneo", en *Historia Social*, nº 41, pp. 65-68.

URÍA, Jorge (2001-B): "Lugares para el ocio. Espacio público y espacios recreativos en la Restauración española", en *Historia Social*, nº 41, pp. 89-111.

URÍA, Jorge (2003): "La taberna. Un espacio multifuncional de sociabilidad popular en la Restauración española", en *Hispania*, LXIII/2, num. 214, pp. 571-604.

VALLEJO, Jesús (2007): "Justicia en casos. Garantía, código y prueba en el procedimiento penal decimonónico", en LORENTE SARIÑENA, Marta (coord.): *De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870*, Madrid, Centro de Documentación Judicial del Consejo General de Poder Judicial, pp. 325-360.

VALLEJO POUSSADA, Rafael (2009): "Ciudades ocupadas, Galicia en guerra. ¿Reconquista y libertad?", en MORTARI FERNÁNDEZ, (coord.): *Ciudades en guerra, 1808-1814: Pontevedra en la Guerra de la Independencia. Catálogo de la exposición en el Museo de Pontevedra, Sexto edificio, del 31 de julio al 4 de octubre de 2009*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 129-148.

VALLEJO POUSADA, Rafael, DOMÍNGUEZ CASTRO, Luis (2009): "La Reconquista de Vigo y la Batalla de Ponte Sampaio", en MORTARI FERNÁNDEZ, (coord.): *Ciudades en guerra, 1808-1814: Pontevedra en la Guerra de la Independencia. Catálogo de la exposición en el Museo de Pontevedra, Sexto edificio, del 31 de julio al 4 de octubre de 2009*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 231-248.

VAN DER HEIJDEN, M. (2016): "Women and crime, 1750-2000" , en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 250-267.

VANDAL, Gilles (2000): *Rethinking Southern Violence: Homicides in Post-Civil War Louisiana, 1856-1864*, Columbus Ohio State University Press.

VANHAUTE, Eric (2007): " "So worthy an example to Ireland". The subsistence and industrial crisis of 1845-1850, in Flanders" , en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 123-148.

VANHAUTE, Eric, PAPING, Richard, Ó GRÁDA, Cormac (2007): "The European subsistence crisis of 1845-1850: a comparative perspective", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 15-42.

VAQUINHAS, Irene María (1996): *Violência, justiça e sociedade rural: os campos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Penacova de 1858 a 1918*, Tese Doutoral, Universidade de Porto.

VARELA GONZÁLEZ, Isaura (1989): *La Universidad de Santiago 1900-1936. Reforma universitaria y conflicto estudiantil*, Sada, Edición do Castro.

VARELA GONZÁLEZ, Isaura (1991): "Universidad nueva y nuevos estudiantes. De los universitarios "troyanos" a los de la FUE", en CASTRO, Xavier, DE JUANA, Jesús (dirs.): *Mentalidades colectivas e ideoloxías / VI Xornadas de Historia de Galicia*, Ourense, Servizo de publicacións da Deputación Provincial, pp. 229-242.

VÁZQUEZ ACUÑA, Bernardo (2014): *Memoria dunha parroquia republicana. San Miguel de Oia-Vigo na década dos trinta*, Vigo, Instituto de Estudios Vigueses.

VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco, CLEMINSON, Richard (2011): *"Los invisibles" una historia de la homosexualidad masculina en España, 1850-1939*, Granada, Comares.

VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco (2018): "La campaña contra los sacerdotes pederastas (1880-1912): un ejemplo de "pánico moral" en la España de la Restauración", en *Hispania*, vol. LXXVIII, nº. 260, septiembre-diciembre, págs. 759-786

VÁZQUEZ NEIRA, Cristina, BROZ RODRÍGUEZ, Xurxo (2013): "Memoria histórica da policía municipal de Melide: de gardas municipais a policías locais", en *Boletín do Centro de Estudos Melidenses-Museo Terra de Melide*, nº 26, pp. 70-100.

VEIGA ALONSO, Xosé Ramón (2002): "Estructura e dinámica políticas da Galicia liberal (1833-1923)" en Gonzalo CONSTENLA BERGUEIRO, Gonzalo, DOMÍNGUEZ CASTRO, Luís (eds. y coords.): *Tempos*

de sermos, *Galicia nos séculos contemporáneos*, Vigo, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, pp. 75-102.

VEIGA ALONSO, Xosé Ramón (2016): La Milicia Nacional como espacio de politización liberal en Galicia (1820-1844), conferencia presentada en Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History.

VEIGA ALONSO, Xosé Ramón (2017): *Poder e política na Galiza vilega 1790-1833: provincias de Lugo e Mondoñedo*, Santiago de Compostela, Bolanda.

VELASCO SOUTO, Carlos F. (1995): *Agitacións campesinas na Galiza do século XIX: resistências anti-senhoriais no tránsito do Antigo Regime á sociedade liberal (1808-1820)*, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento.

VELASCO SOUTO, Carlos F. (2014): *Serviços públicos, luita de classes e negociación colectiva na Galiza do século XX. As relacións laborais na Companhia dos Tranvías da Corunha (1903-2005)*, A Coruña, Instituto Galego de Historia.

VELASCO MARTÍNEZ, Luis (2014): "La juventud marcial: el servicio militar en España. Violencia y nacionalización en los primeros años del siglo XX", en VELASCO MARTÍNEZ, Luis: Juventud y violencia en la Historia. Del mundo antiguo al mundo actual, Santiago de Compostela, Valedor do Pobo.

VESENTINI, Frédéric (2007): "Gouverner et punir en temps de crise économique. Les pratiques pénales dans la Belgique du milieu du XIXe siècle" en *Crime, histoire & sociétés*, vol 11, nº 1, pp. 113-132.

VICIANO, Pau (2006): "Violencia y sociedad en una villa medieval: Castellón de la Plana en el siglo XV", *Hispania. Revista Española de Historia*, vol. LXVI, núm. 224, septiembre-diciembre, págs. 851-882.

VIGO FERNÁNDEZ, Ana Patricia (2010): *A ditadura de Primo de Rivera en Lugo (1923-1930): ¿Continuidade ou cambio?*, Lugo, Museo Provincial de Lugo.

VILA PERNAS, Miguel (2004): *O crime de Santa Cruz do Valadouro*, Sada, Edicións do Castro.

VILLENA ESPINOSA, Rafael, LÓPEZ VILLAVARDE, Ángel Luis (2003), *Hispania*, LXIII/2, num. 214, pp. 443-466.

VIOLA, Lynne (2013): "Muzhiks y babas. Confrontaciones con el poder soviético en el torbellino de la colectivización", en *Historia Social*, nº 77, pp. 133-147.

VIVEIRO MOGO, Prudencio (2004): *Política, eleccións e fidalgos: o réxime do Estatuto Real na provincia de Lugo, 1834-1836*, Sada, Edicións do Castro.

VON DAWANS, Bernardette, FISCHBACHER, Urs, KIRSCHBAUM, Clemens, FEHR, Ernst, HEINRICHS, Markus (2012): "The Social Dimension of Stress Reactivity: Acute Stress Increases Prosocial Behavior in Humans", en *Psychological Science*, volumen 23, número 6, pp. 651-660.

Consultado en: <http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797611431576>

VUORELA, Miika (2017): "The historical criminal statistics of Finland 1842–2015 – a systematic comparison to Sweden", en *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, número 0.

Consultado en <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924036.2017.1295395>

YALA, Charles (2002): "Melanesian conflicts", en WEINER, James, MCLEOD, Abby, YALA, Charles: *Aspects of conflict in the contemporary Papua New Guinea Highlands*, discussion paper. Consultado en:

<https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/41836>

YOUNG, Robert (2012): "Can Neds (or Chavs) Be Non-delinquent, Educated or Even Middle Class? Contrasting Empirical Findings with Cultural Stereotypes", en *Sociology*, volumen 46, número 6, pp. 1140-1160.

GARCIA, Mauricio y MADRIAZA, Pablo (2005): La imagen herida y el drama del reconocimiento: estudio cualitativo de los determinantes del cambio en la violencia escolar en Chile, en *Estud. Pedagóg.*, volumen 31, número 2, pp. 27-41.

YVOREL, Jean-Jacques (2005): "Violence et reproduction domestique dans les campagnes du Haut-Quercy au XIX^e siècle", en CHAUVAUD, Frédéric, MAYAUD, Jean-Luc (dir.): *Les violences rurales au quotidien*, Paris, La Boutique de l'histoire, pp. 137-152.

VIVIER, Nadine: "The crisis in France. A memorable crisis but not a potato crisis", en Ó GRÁDA, Cormac, PAPING, Richard, VANHAUTE, Eric (eds.): *When the potato failed: causes and effects of the 'last' European subsistence crisis, 1845-1850*, Turnhout, Brepols, pp. 223-246.

WALKER, Samuel (1980): *Popular justice: a history of American criminal justice*, New York, Oxford University Press.

WALKLATE, Sandra (2007) : *Understanding Criminology: Current Theoretical Debates (3^e ed)*, Open University Press, Maidenhead.

WEBER, Eugen Joseph (1993): *Peasants into Frenchmen : the modernization of rural France 1870-1914*, Stanford, Stanford University.

WENFEI, Han, TELLEZ, Luis A., RANGEL JR., Miguel J., SHAMMAH-LAGNADO, Sara J., VAN DEN POL, Anthony N., E. DE ARAUJO, Ivan (2017): "Integrated Control of Predatory Hunting by the Central Nucleus of the Amygdala", en *Cell*, vol. 168, nº 1-2, pp. 311-324.

WIENER, Martin J. (2006): *Men of blood: violence, manliness and criminal justice in Victorian England*, Cambridge, Cambridge University Press.

WILKINSON, Richard, PICKETT, Kate (2011): *The spirit level: why greater equality makes societies stronger*, New York, Bloomsbury.

WILLOUGHBY-HERARD, Tiffany (2015): *Waste of a white skin: the Carnegie Corporation and the racial logic of white vulnerability*, Oakland, University of California Press.

WOOD, John Carter (2017): "Crime News and the Press", en KNEPPER, Paul, JOHANSEN, Anja: *The Oxford Handbook of the history of crime and criminal justice*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 301-319.

WRANGHAM, R.W., WILSON, M.L., MULLER, M.N. (2006): "Comparative rates of violence in chimpanzees and humans", en *Primates*, volumen 47, número 1, pp. 14-26.

<http://www.repasosayer.com/2009/10/los-matuteros.html>

ZABLUDOVSKY Kuper, Gina (2007): *Norbert Elias y los problemas actuales de la sociología*, México, Fondo de Cultura Económica.

Documentación

Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1928-1931, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57041.

Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1932-1933, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57042.

Actas de conciliación del juzgado municipal de A Coruña 1934-1938, Archivo del Reino de Galicia, signatura 57694.

Anuario estadístico de España, diversos años. Consultado en:

<https://www.ine.es/inebaseweb/25687.do>

Causas, serie documental, Archivo del Reino de Galicia.

Colección de los decretos y órdenes que han expendido las Cortes Generales y Extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810 hasta igual fecha de 1811 (1811), Cádiz, Imprenta Real.

Consultado en: http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/obra-visor/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-su-instalacion-en-24-de-septiembre-de-1810-hasta-igual-fecha-de-1811--0/html/

Colección de los decretos y órdenes que han expendido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de mayo de 1812 hasta 24 de febrero de 1813 (1813), Cádiz, Imprenta Nacional.

Consultado en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/coleccion-de-los-decretos-y-ordenes-que-han-expedido-las-cortes-generales-y-extraordinarias-desde-24-de-mayo-de-1812-hasta-24-de-febrero-de-1813-tomo-iii--0/>

Diario de Entradas y Salidas del Almacén de la renta de la pólvora, administración de Betanzos, provincia de La Coruña. Libros correspondientes a los años 1848, 1855 y 1862-1864. Archivo del Reino de Galicia, documentación de la Aduana de Betanzos, 143, legajo 2505.

Escalafón del Cuerpo de Carabineros, diversos años. Consultado en:

http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/resultados_ocr.do?id=21070&forma=ficha&tipoResultados=BIB&posicion=2

Escalafón de la Guardia Civi, diversos años. Consultado en:

http://www.bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/resultados_ocr.do?id=21070&forma=ficha&tipoResultados=BIB&posicion=1

Estadísticas de Administración de Justicia en lo Criminal.

Estado que manifiesta la fuerza efectiva de los regimientos que se hallan en este rein de Galicia. 22 de agosto de 1810. Museo Provincial de Lugo. Consultado en MORTARI FERNÁNDEZ, (coord.) (2009): *Ciudades en guerra, 1808-1814: Pontevedra en la Guerra de la Independencia. Catálogo de la exposición en el Museo de Pontevedra, Sexto edificio, del 31 de julio al 4 de octubre de 2009*, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.

Evaluación del programa A Flote 2019, dependiente de la Fundación Emalcsa. Consultado en:

https://fundacionemalcsa.org/wp-content/uploads/2020/06/informe_aflote_2019_cast.pdf

Expedientes de guardias jurados. Documentos 6034/38 a 6036/56, Archivo municipal de Pontevedra

Global Study on Homicide. Booklet 2. Homicide trends, patterns and criminal justice response (2019), elaborado por la United Nations Office on Drugs and Crime. Consultado en:

<https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet2.pdf>

Global Study on Homicide. Booklet 3. Understanding homicide (2019), elaborado por la United Nations Office on Drugs and Crime. Consultado en:

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/gsh/Booklet_3.pdf

Índice Cronológico-Topográfico de los Tribunales de Hacienda: contrabando y rentas. Años 1820-1862 (1969). Archivo del Reino de Galicia, L-16, A5.1 ARG ind 6.

Índice Topográfico Cronológico de Causas entre 1.836 y 1.864

Informe presentado a la Sociedad Económica Gaditana de Amigos del País: por una comisión de su seno sobre el servicio militar obligatorio y aprobado en sesión de 14 de junio de 1877, Cádiz, Imprenta de la Revista Médica de D. Federico Joly.

Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 del 15 de septiembre de 1870. Consultada en:

<http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/leyOrganicaPoderJudicial1870.pdf>

Ley del 14 de octubre de 1882, adicional a la Orgánica del Poder Judicial. Consultada en:

<http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/leyOrganicaPoderJudicial1870.pdf>

Libro de matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1912-1916, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155.

Libro de reos de la cárcel pública de A Coruña, Archivo Municipal de A Coruña, Caja 5669.

Libro de reos de la cárcel pública de Santiago, Archivo de la Universidade de Santiago de Compostela, documentos del municipio de Santiago de Compostela, página 33.

Libro registro de penados, Archivo municipal de A Coruña, caja 75 de la sección de Oza.

Manual de Guardería Rural (1925), Madrid, Imprenta El Consultor.

Matrícula criminal Juzgado de Pontedeume 1907-1912, Archivo del Reino de Galicia, nº 44.155.

Presentación de los peligrosos sujetos a medidas de seguridad, formado en el partido de Ribadavia, caja 41 del partido de Ribadavia, Arquivo Xeral Territorial de Ourense.

Reclamación administrativa deducida en primera instancia ante el Ilmo. Sr. Delegado de la Provincia de Málaga el día 6 de octubre de 1894 contra el recargo para gastos de guardería rural incluido en las matrículas de industria y de comercio y en los repartimientos de contribución urbana, rústica y pecuaria de 1894-95. Por la Asociación Gremial de Criadores-Exportadores de Vinos de dicha capital.

Remisión por el Ministerio de la Gobernación de datos relativos a la Guardia Rural, Archivo del Congreso de los Diputados, signatura P-01-000171-0010-0008.

Registro de juicios verbales de faltas 1851-1866, Archivo Municipal de A Coruña, caja 6300.

Registro de juicios verbales de faltas celebrados en las Tenencias de esta Alcaldía constitucional durante los años de 1867 a 18, Archivo Municipal de A Coruña, caja 6300.

Registro de multas impuestas gubernativamente y en juicio de faltas. Tenencias de la alcaldía 2º, 3º y 4º, Archivo Municipal de A Coruña, caja 6300.

Reglamento de la Guardia Municipal de Santiago: aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 30 de noviembre de 1885, Santiago.

Reglamento para los Cuerpos de Voluntarios Realistas, 1824, Madrid.

Consultado en:

<http://bibliotecavirtualdefensa.es/BVMDefensa/i18n/consulta/registro.cmd?id=36310>

Reglamento para la Organización de la ronda municipal que para el servicio diurno y nocturno debe establecerse en Ferrol desde el 1º de enero de mil ochocientos cincuenta (1849).

Reglamento de las Universidades, 1859.

Consultado en:

<https://drive.google.com/file/d/0B27DzfbcyPNBOW5SRHZIWUhyTmM/view>

Residencia de los peligrosos sujetos a medidas de seguridad, formado en el partido de Ribadavia, caja 41 del partido de Ribadavia, Arquivo Xeral Territorial de Ourense.

Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo I, Archivo del Reino de Galicia, Fondo Audiencia Provincial, nº 44.400.

Sentencias de la Sala de lo Criminal, 1900, tomo II y las del jurado, Archivo del Reino de Galicia, Fondo Audiencia Provincial, nº 44.401.

Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de la Península e Islas Adyacentes, aprobada por S. M. en el Real Decreto del 21 de abril de 1834. Originalmente, Madrid, Imprenta Real,

1834. Consultado en *Subdivisión en partidos judiciales de la nueva división territorial de la Península e Islas Adyacentes, aprobada por S. M. en el Real Decreto del 21 de abril de 1834. Estudio preliminar de Enrique Orduña Rebollo* (2000), Madrid, Imprenta Nacional del Boletín del Estado.

Legajos del Archivo Municipal de A Coruña no mencionados en otros apartados

C-2598, C-6304, C-9030, C-6328, 2; C-6332; C-6335; C-6356; C-6340; C-6345-1; C-6350, 1; C-6352, 1; C-6479

Documentos del Archivo Municipal de Santiago no mencionados en otros apartados. Actualmente se encuentran en el Archivo de la Universidade de Santiago de Compostela

AM 608; AM 609; AM 611; AM 616; AM 622; AM 632; AM 641; AM 2099, AM 2101;, AM 243; AM2450

Documentación del Archivo Municipal de Ferrol no mencionados en otros apartados:

Cajas: C-14180.2, C-14181, C-14181, C-14183, C-14185, C-14189, C-14194, C-14198, C-14201, C-14205, C-14207, C-1560, C-804-1.

Libros: L-1071-B

Documentación del Archivo de la Diputación de Pontevedra no mencionado en otros apartados:

Cajas/legajos: 520/1, 520/5, 770/1, 786-1/1, 789/2, 18511/16.